

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Año LXVIII

Núm. 2.165

Abril de 2014



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

ISSN: 1989-4767

NIPO: 051-14-001-0

www.mjusticia.es/bmj

Enlaces

Publicaciones del Ministerio de Justicia

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado. <https://cpage.mpr.gob.es>

Contacto

Contacto Boletín

Edita

Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica

Maquetación

Subdirección General de Documentación y Publicaciones

ISSN

1989-4767

NIPO

051-14-001-0

Depósito Legal

M.883-1958

DIRECTOR
D. Antonio Pau
Registrador de la Propiedad
Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

SECRETARIO
D. Máximo Juan Pérez García
Profesor Titular de Derecho Civil

SUMARIO

AÑO LXVIII • ABRIL 2014 • NÚM. 2.165

SECCIÓN DOCTRINAL

Estudio doctrinal

—El contrato celebrado en el marco de una actividad comercial dirigida al consumidor

Recensión

—Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la convención de naciones unidas

SECCIÓN INFORMATIVA

Escalafon de Secretarios Judiciales

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

—Diciembre 2013

—Enero 2014

EL CONTRATO CELEBRADO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAL DIRIGIDA AL CONSUMIDOR.

Comentario a la STJUE de 17 de octubre de 2013 (asunto C-218/12, *Emrek*)*

RICARDO PAZOS CASTRO

Investigador predoctoral de Derecho Civil. Universidad de Santiago de Compostela

Resumen

El artículo 15.1.c) del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial internacional requiere para su aplicación que el contrato esté comprendido en el marco de actividades comerciales o profesionales ejercidas por el empresario en el Estado miembro del domicilio del consumidor o dirigidas, por cualquier medio, a dicho Estado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea trata la cuestión de si se requiere también una relación causal entre la actividad comercial y la conclusión del contrato.

Abstract

Article 15.1.c) of the Regulation 44/2001 on jurisdiction requires to be applied that the contract falls within the scope of the commercial or professional activities pursued by the business in the member State of the consumer's domicile or directed, by any means, to that State. The European Court of Justice addresses the question whether it is also required a causal link between the commercial activity and the conclusion of the contract.

Palabras clave

Competencia judicial internacional, protección del consumidor, actividad comercial internacional, contratación electrónica, relación causal

Key words

International jurisdiction, consumer protection, international commercial activity, electronic contracting, causal link

Sumario

1. Introducción
2. Planteamiento del caso
3. La respuesta del Tribunal de Justicia
4. Conclusiones
5. Bibliografía

* Fecha de recepción: 14-2-2014 . Fecha de aceptación: 5-3-2014

1. INTRODUCCIÓN

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) de 17 de octubre de 2013 (Lokman Emrek / Vlado Sabranovic, C-218/12, Rec. p. I)¹ se ocupa de una cuestión interesante relativa a la competencia judicial internacional de los contratos de consumo: la protección a los consumidores como partes consideradas débiles en los contratos que éstos celebran con los profesionales no sólo se ha de llevar a cabo en términos de Derecho sustantivo, sino que también es preciso que las normas procesales que les son de aplicación sean satisfactorias y permitan alcanzar el fin perseguido por el Derecho comunitario.

Este planteamiento es una exigencia de la propia Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores², la cual dispone que “los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”³. En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en el mismo sentido, al señalar que el principio de autonomía procesal de los Estados miembros está limitado por el principio de efectividad, es decir, que las normas procesales nacionales no pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el Derecho comunitario⁴.

Si las normas procesales no respetan el principio de efectividad y son adecuadas a los objetivos comunitarios, los avances que se produzcan en la protección del consumidor en cuanto al reconocimiento de sus derechos no tendrán aplicación práctica, permaneciendo en el plano de las buenas intenciones.

Una de las normas procesales por excelencia es aquella que establece cuál es el tribunal competente para conocer de los diferentes litigios que se puedan plantear. En el ámbito comunitario hay que hacer referencia al Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento Bruselas I)⁵. Actualmente, este Reglamento ha sido derogado y reemplazado por el Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (en adelante, Reglamento Bruselas I bis)⁶, el cual será aplicable a partir del 10 de enero de 2015, con la excepción de los artículos 75 y 76, que lo son desde el 10 de enero de 2014⁷.

Con el fin de evitar confusiones, y dado que la sentencia objeto de comentario aplica el Reglamento Bruselas I, vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos de los que se deriva la cuestión prejudicial planteada, en esta exposición se hará referencia a la numeración

¹ No publicada aún en el repertorio oficial del TJUE.

² DO L 95, de 21 de abril de 1993, p. 29.

³ Cfr. artículo 7.1 de la Directiva.

⁴ Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito SA / Joaquín Calderón Camino, C-618/10, Rec. p. I), apartado 46, sentencia del TJUE de 21 de febrero de 2013 (Banif Plus Bank Zrt / Csaba Csipai, Viktória Csipai, C-472/11), apartado 26, y sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013 (Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito / Jahani BV, C-488/11, Rec. p. I), apartado 42.

⁵ DO L 12, de 16 de enero de 2001, p. 1.

⁶ DO L 351, de 20 de diciembre de 2012, p. 1.

⁷ Cfr. artículo 81 del Reglamento Bruselas I bis.

de artículos contenidos en dicho Reglamento.

Dentro del Capítulo II del Reglamento Bruselas I se recoge una Sección 4 que lleva por rúbrica “Competencia en materia de contratos celebrados por los Consumidores”, la cual está compuesta por los artículos 15 a 17⁸, y cuyo fundamento responde a la necesidad de “proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales”⁹. Estos artículos recogen foros de protección del consumidor, siendo el elemento determinante para que la persona reciba esta consideración que contrate para un uso diferente a su actividad profesional¹⁰. En el caso resuelto en la sentencia objeto de este comentario se discute acerca de uno de esos artículos, el 15, y más concretamente la letra c) de su apartado 1. El tenor literal de este precepto dice lo siguiente:

1. En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5:

c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades¹¹.

A continuación, el artículo 16.1 del Reglamento establece que las acciones entabladas por un consumidor contra la otra parte contratante podrán interponerse “ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor”¹².

En el caso resuelto por la sentencia objeto de comentario, el Tribunal de Justicia se pronuncia a propósito de la exigencia de que el contrato celebrado esté comprendido en las actividades comerciales dirigidas al Estado miembro donde el consumidor tiene su domicilio. Más concretamente, se debate si ha de entenderse que este requisito implica que haya una relación causal entre la actividad comercial y el contrato suscrito, esto es, que la decisión de contratar del consumidor haya estado motivada por las informaciones de la página web donde el empresario presenta su negocio. En función de cómo se entienda dicha exigencia, los consumidores tendrán la opción de reclamar en el lugar establecido en el artículo 16.1 del Reglamento o no, lo cual es importante en dos vertientes. Por un lado, determinará el grado

⁸ En el nuevo Reglamento Bruselas I bis, la sección relativa a la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores sigue siendo la sección 4 del Capítulo II, pero ahora ocupa los artículos 17 a 19.

⁹ Cfr. considerando 13 del Reglamento Bruselas I.

¹⁰ Cfr. FERNÁNDEZ ROZAS / SÁNCHEZ LORENZO, *Derecho Internacional Privado*, 6ª edición, Ed. Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011, p. 542; ESPLUGUES MOTA / IGLESIAS BUHIGUES, *Derecho Internacional Privado*, 7ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 117 y 524. Cfr. también GARCIMARTÍN ALFÉREZ (*Derecho Internacional Privado*, Ed. Civitas, Cizur Menor, 2012, p. 114), que comenta además que el consumidor debe ser una persona física, aunque no se diga expresamente en el Reglamento, porque así se desprende de otros textos europeos.

¹¹ En el nuevo Reglamento Bruselas I bis, el artículo 17.1.c) es prácticamente idéntico: “en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades”.

¹² En el nuevo Reglamento Bruselas I bis, el artículo 18.1 dice que “la acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor”. Hay que señalar que en virtud del artículo 6.1 del propio Reglamento Bruselas I bis, este precepto es aplicable también a los casos en los que el empresario en cuestión tenga su domicilio fuera de la Unión Europea. En este sentido, cfr. NUTYS, “La refonte du règlement Bruxelles I”, en *Revue Critique de Droit International Privé*, Vol. 102, nº 1, 2013, p. 5.

de dificultad que tendrá para los consumidores el ejercicio de los derechos que les confiere el Derecho comunitario. Por otro, la decisión influirá en los riesgos que los empresarios han de tener en cuenta a la hora de realizar su actividad profesional, siendo esto último relevante porque según cuál sea el nivel de riesgo a asumir por el empresario éste será más o menos propenso a internacionalizar su empresa.

2. PLANTEAMIENTO DEL CASO

Los sujetos que intervienen en el litigio que da lugar a esta sentencia son por un lado el Sr. Sabranovic, empresario, y por otro el Sr. Emrek, que tiene la condición de consumidor. El Sr. Sabranovic se dedicaba en el momento de los hechos que dieron lugar al litigio principal a la venta de vehículos de ocasión, regentando a tal efecto una empresa situada en la pequeña población de Spicheren, situada en la región de Lorena, Francia, y muy cercana a la frontera de este país con Alemania. El negocio del Sr. Sabranovic contaba con una página web en la que se indicaba la dirección del establecimiento, en Spicheren, así como teléfonos de contacto franceses (tanto fijo como móvil) y un número de teléfono móvil alemán, indicando en cada caso los prefijos internacionales correspondientes.

Por su parte, el Sr. Emrek estaba domiciliado en Saarbrücken, ciudad alemana y capital del *land* de Sarre, también muy próxima a la frontera entre ambos países. El Sr. Emrek deseaba adquirir un vehículo, y unos conocidos suyos le informaron de la existencia del negocio del Sr. Sabranovic, por lo que decidió acudir al establecimiento de Spicheren. En ningún momento el Sr. Emrek tuvo conocimiento de la existencia de la página web citada, pues el único medio por el que conoció la empresa del Sr. Sabranovic fueron las informaciones que le proporcionaron sus conocidos. Una vez el Sr. Emrek acudió a Spicheren celebró con el Sr. Sabranovic un contrato de compraventa de un vehículo de ocasión, contrato que plasmó por escrito, con fecha de 13 de septiembre de 2010.

La controversia parte de una demanda que el consumidor presentó tiempo después contra el empresario, reclamando el cumplimiento de la garantía contemplada en el contrato de compraventa del vehículo, acción entablada en lugar del domicilio del empresario, Saarbrücken. La demanda fue presentada en este lugar teniendo en cuenta el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento Bruselas I, que establece el ámbito de aplicación de la sección dedicada a la competencia judicial internacional en materia de contratos celebrados por los consumidores, es decir, contratos celebrados por una persona para un uso ajeno a su actividad profesional. Dentro de este precepto, la letra c) de su apartado 1 se refiere a los casos en los que la persona con la que contrata el consumidor ejerce “actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor” o, por cualquier medio, dirige tales actividades “a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades”.

Si el caso se engloba en la situación expresada, entra en juego el artículo 16.1 del Reglamento, el cual permite elegir al consumidor dónde presenta la demanda, en el Estado miembro en el que él tiene su domicilio o ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado el empresario.

En el litigio principal, el Sr. Emrek considera que el Sr. Sabranovic dirige su actividad comercial a Alemania, por lo que el citado consumidor tendría la facultad concedida por el artículo 16.1, pudiendo demandar al empresario en el lugar de su domicilio, Saarbrücken, siendo competente el tribunal de este lugar para conocer de la acción. El tribunal de Saarbrücken (*Amtsgericht Saarbrücken*, análogo a un juzgado de primera instancia), sin embargo, declaró la inadmisibilidad de la demanda, considerando que no se había producido una actividad comercial dirigida a

Alemania en el sentido del Reglamento. Contra esta resolución, el consumidor interpuso un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, el *Landgericht Saarbrücken* (el Tribunal de la región o *land* de Sarre, equivalente a una audiencia provincial), alegando que el artículo 15.1.c) del Reglamento no exige para su aplicación “que se acredite la existencia de una relación causal entre la actividad comercial dirigida al Estado miembro del consumidor y la celebración del contrato”, ni que el contrato se celebre a distancia¹³.

El órgano de remisión tiene por acreditado que la actividad comercial de vehículos de ocasión estaba dirigida a Alemania, teniendo en cuenta la indicación del prefijo telefónico internacional de Francia y de la referencia a un teléfono móvil alemán. Es decir, se concluye que el empresario pretende captar clientes fuera de Francia y, sobre todo, dada la cercanía con la frontera con Alemania, parece que el negocio se orienta a los clientes establecidos en la zona fronteriza de este país. También acepta el órgano de remisión que la aplicación del artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I no se supedita a la celebración de un contrato a distancia.

Sin embargo, para el *Landgericht Saarbrücken* sí sería necesario que existiese una relación entre la promoción o la información del negocio que se lleva a cabo a través de la página web del empresario y la celebración efectiva del contrato con el consumidor. De lo contrario, el ámbito de aplicación del artículo 15.1.c) del Reglamento se vería ampliado enormemente. Por ello, el órgano de remisión cree que este precepto no es de aplicación “cuando un consumidor celebra fortuitamente un contrato con un empresario”¹⁴.

Ante la duda, no obstante, el *Landgericht Saarbrücken* suspende el procedimiento y pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el artículo 15.1.c) del Reglamento requiere para su aplicación, en los casos en los que la página web de un comerciante cumpla el criterio de la actividad dirigida al Estado miembro del consumidor, que éste “haya sido inducido por la página web operada por el comerciante a celebrar el contrato, de modo que la página web guarde una relación causal con la celebración del contrato”. En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, el órgano de remisión desea saber si el artículo citado exige también que el contrato se haya celebrado a distancia.

3. LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde en primer lugar a la segunda cuestión prejudicial, ya que no considera que ésta precise de una previa respuesta afirmativa a la exigencia, para la aplicación del artículo 15.1.c) del Reglamento, de la existencia de una relación causal entre la página web del empresario y la celebración del contrato el consumidor. Así, ante la cuestión consistente en determinar si es necesario que el contrato se haya celebrado a distancia para que sea de aplicación el precepto antes indicado, en primer lugar el Tribunal de Justicia hace referencia a su sentencia *Mühlleitner*¹⁵, en la que una mujer que reunía la condición de consumidora y con domicilio en Austria buscó en una página web alemana un vehículo que pretendía adquirir. Tras introducir los parámetros de búsqueda y seleccionar el automóvil que mejor se correspondía con los criterios introducidos, la mujer fue reenviada a una oferta de los demandados en el litigio principal, los cuales explotaban un negocio de venta de automóviles por medio de una sociedad establecida en Alemania. Después de contactar con los vendedores, éstos le presentaron otra oferta, ya que no había ya el automóvil seleccionado originalmente, desplazándose finalmente la mujer a Alemania para firmar el contrato de compraventa en el establecimiento comercial. Con posterioridad,

¹³ Sentencia *Emrek*, apartado 15.

¹⁴ Sentencia *Emrek*, apartado 17.

¹⁵ Sentencia del TJUE de 6 de septiembre de 2012 (Daniela Mühlleitner / Ahmad Yusufi y Wadat Yusufi, C-190/11, Rec. p. I).

la compradora descubrió ciertos defectos o vicios sustanciales en el automóvil adquirido, por lo que reclamó su reparación a los vendedores. Ante su negativa a reparar el vehículo la compradora interpuso una demanda ante los tribunales de su propio domicilio, planteándose entonces la aplicación al caso del artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I.

Este asunto, no obstante, se diferencia del que se afronta en la sentencia objeto de este comentario en que sí hay un contacto directo del consumidor con la página web de los vendedores. A partir de la consulta de esta página la compradora había contactado con ellos por teléfono a través de un número alemán indicado en la web y precedido del prefijo internacional¹⁶. Por el contrario, en la sentencia *Emrek* no hay un contacto entre el consumidor y la página web, sino que la existencia de ésta le es desconocida al comprador, el cual acude al establecimiento comercial por la información que le proporcionan unos conocidos.

En la sentencia *Mühlleitner*, el Tribunal de Justicia declaró que de la literalidad del artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I no se desprende que su aplicación esté condicionada a que los contratos comprendidos en el mismo se hayan celebrado a distancia¹⁷. También hizo alusión a diferentes aspectos como la finalidad del artículo, que es dar una protección adecuada al consumidor como parte débil del contrato¹⁸, o la relajación de las exigencias con respecto al Convenio de Bruselas de 1968¹⁹, y expuso los dos requisitos que se deben cumplir para que el citado precepto sea de aplicación y que se pueden apreciar en el propio texto del artículo 15.1.c): el ejercicio de las actividades empresariales en el Estado miembro del consumidor o una dirección de dichas actividades hacia este Estado, y que el contrato controvertido esté comprendido en el marco de dichas actividades²⁰.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia determinó en la sentencia *Mühlleitner* que el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I no exige que el contrato entre el consumidor y el profesional se haya celebrado a distancia, reiterándose dicha respuesta en la sentencia *Emrek* objeto del presente comentario²¹.

Respondida la segunda cuestión prejudicial, a continuación el Tribunal de Justicia entra a valorar la primera, consistente en si el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I exige que exista una relación causal entre el medio utilizado para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor y la celebración del contrato.

El vendedor en el litigio principal, así como los gobiernos belga y luxemburgués, consideraron que el requisito de la relación causal mencionada es “inherente” al artículo 15.1.c). Esta posición se fundamenta en que, de no considerar incluida en el precepto la citada condición, se impondría una carga desproporcionada sobre los vendedores y prestadores de servicios, puesto que el mero hecho de tener un página web y contratar con un consumidor cuyo domicilio se encuentra en un Estado miembro diferente sería suficiente para poder verse demandado en cualquier Estado de la Unión Europea. Los dos gobiernos a los que se ha hecho alusión manifestaron además su preocupación por el impacto económico de una interpretación excesivamente favorable para el consumidor, ya que este tipo de interpretación “podría afectar la pequeña y mediana empresa de aquellos Estados miembros con una fuerte exposición al comercio transfronterizo”²². La posición del comprador en el litigio principal es lógicamente

¹⁶ Sentencia *Mühlleitner*, apartado 13.

¹⁷ Sentencia *Mühlleitner*, apartado 35.

¹⁸ Sentencia *Mühlleitner*, apartado 42.

¹⁹ Sentencia *Mühlleitner*, apartado 41.

²⁰ Sentencia *Mühlleitner*, apartado 36.

²¹ Sentencia *Emrek*, apartado 19.

²² Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, punto 15.

diferente, al rechazar la exigencia de la constatación del vínculo causal. Coincidieron con el comprador el gobierno francés y la Comisión Europea²³.

La primera consideración que hace el Tribunal de Justicia se refiere al texto del artículo, constatando que la relación causal sobre la que gira la cuestión prejudicial no está recogida en el mismo como un requisito para su aplicación, sino que las dos condiciones exigidas son que el comerciante ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o que, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios de ellos, y que el contrato controvertido esté comprendido en el marco de dichas actividades²⁴. El primer criterio que toma para la interpretación del artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I es el gramatical, criterio que ya se había tenido en cuenta en la ya citada sentencia *Mühlleitner*.

El segundo argumento que da el Tribunal para negar la exigencia de la relación causal entre las actividades comerciales dirigidas al consumidor en el Estado miembro del mismo y el contrato celebrado se basa en la finalidad del Reglamento Bruselas I. Dice el TJUE que añadir esta condición sería contrario al objetivo perseguido, la protección de los consumidores, al ser estos partes débiles en los contratos que celebran con un empresario. Y ello porque “las dificultades que entrañaría la prueba de la existencia de una relación causal entre el medio empleado para dirigir la actividad, a saber, una página web, y la celebración de un contrato, podrían disuadir a los consumidores de acudir a los tribunales nacionales”²⁵.

A continuación, el TJUE se refiere a los indicios que pueden existir de que efectivamente el empresario haya dirigido su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor. En este sentido, la existencia de una relación causal entre el medio de dirección de la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor y el contrato suscrito puede ser un “indicio cualificado”²⁶, recordándose que el Tribunal proporcionó en su sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*²⁷ una lista no exhaustiva de estos indicios, por lo que se remite a dicha sentencia²⁸.

Antes de abordar la cuestión concreta de esta lista, hay que hacer referencia a la sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof* como una importante resolución que puede clarificar la noción de actividades comerciales dirigidas al consumidor dentro de la contratación *online*²⁹. En esta resolución se trataba de determinar fundamentalmente si el hecho de que la página web de un empresario pueda ser consultada por un consumidor de un Estado miembro diferente de aquél donde el empresario tiene su domicilio es suficiente para concluir que hay una actividad comercial que está siendo dirigida a dicho consumidor en el sentido del artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I.

El Tribunal de Justicia mantuvo en su sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof* que la mera accesibilidad a la página web de un empresario desde otros Estados no es suficiente para

²³ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, punto 16.

²⁴ Sentencia *Emrek*, apartados 21 y 22.

²⁵ Sentencia *Emrek*, apartados 24 y 25.

²⁶ Cfr. KROG (“The Brussels I Regulation Article 15.1c) - Where to are Commercial or Professional Activities Directed through the Internet?”, en *Yulex*, 2004, p. 132), que ya se pronunció en su momento diciendo que el mero hecho de concluir un contrato no supone la aplicabilidad del foro de protección de consumidores, pero que constituía un signo de que hay una actividad dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor.

²⁷ Sentencia del TJUE de 7 de diciembre de 2010 (Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG; y Hotel Alpenhof GesmbH / Oliver Heller, C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-12527).

²⁸ Sentencia *Emrek*, apartados 26 y 27.

²⁹ Cfr. PAVELKA, “The Concept of ‘Directed Website’ - A Jurisdictional Phenomenon Clarified? Cross-Border Consumer and Tort Victim Protection in Light of Recent ECJ Jurisprudence”, en *ELSA Malta Law Review*, vol. 1, nº 1, 2011, p. 167.

activar el foro de protección contenido en el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I³⁰. Para que este precepto sea aplicable es necesario que de las circunstancias del caso se desprenda que el vendedor tiene intención de celebrar contratos con consumidores domiciliados en otros Estados miembros, entre ellos el del domicilio del consumidor³¹. Sin embargo, el Tribunal hizo notar que el Parlamento Europeo había descartado dar una redacción al precepto que exigiese al vendedor dirigir “intencionadamente su actividad, de forma sustancial”, a otros Estados miembros³².

Como se ha expuesto por algún autor, la voluntad del empresario que debe apreciarse para concluir que hay una actividad comercial dirigida al consumidor en el sentido del artículo 15.1.c) se encuentra en definitiva a medio camino entre una intención clara y directa de contratar con consumidores en varios Estados miembros (porque tal nivel de exigencia reduciría la protección de la parte débil) y una pura indiferencia hacia dicha contratación, esto es, la existencia de un contrato puntual con un consumidor de otro Estado cuando el resto de los negocios del empresario se desarrollan en el ámbito estrictamente nacional no sería suficiente para que el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I fuese aplicable³³. Sólo una interpretación alejada de los extremos permitiría cumplir tres objetivos fundamentales: promover el comercio electrónico, no desincentivar a los empresarios el uso de internet para promocionar sus productos y servicios, y garantizar una adecuada protección a los consumidores³⁴.

Pasando al elemento de la lista no exhaustiva de indicios que permiten determinar si una actividad está dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor, en la sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof* el Tribunal de Justicia declaró que dichos indicios son “todas las expresiones manifiestas de la voluntad de atraer a los consumidores de dicho Estado miembro”³⁵.

Entre este tipo de expresiones se incluyen la mención expresa por parte del empresario de que ofrece sus bienes y servicios en uno o varios Estados miembros designados de manera específica, la existencia de un “servicio de remisión a páginas web en Internet prestado por una empresa que explota un motor de búsqueda con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor a consumidores domiciliados en diferentes Estados miembros”, el carácter internacional de la actividad en cuestión, la mención de números de teléfono con indicación del prefijo internacional, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor o la utilización de nombres de dominio de primer nivel neutros, la descripción de itinerarios desde otro u otros Estados miembros al lugar de la prestación del servicio, la mención de una clientela internacional o la presentación de testimonios de dichos clientes, y el hecho de que una página web permita a los consumidores utilizar una lengua o divisa distintas a las propias del lugar donde el empresario esté domiciliado³⁶.

Por otra parte, mediante la ya citada sentencia *Mühlleitner*, a tales indicios se añadieron otros como “la toma de contacto a distancia” y “la celebración de un contrato de consumo a distancia”, mientras que en la sentencia *Emrek* el Tribunal de Justicia viene a añadir alguno más. Así, en esta última resolución se dice que la relación causal entre la actividad comercial y la celebración del contrato también debe considerarse un indicio de la existencia de una

³⁰ Sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*, apartados 72 a 74. En la sentencia *Emrek* los gobiernos belga y luxemburgués alegaban justamente que negando la exigencia de la relación causal se llegaría a un resultado contrario a lo establecido en la sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*.

³¹ Sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*, apartados 75 y 76.

³² Sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*, apartado 82.

³³ Cfr. PAVELKA, *op. cit.*, p. 168.

³⁴ Cfr. KROG, *op. cit.*, p. 118.

³⁵ Sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*, apartado 80.

³⁶ Sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*, apartados 81 a 84.

actividad comercial efectivamente dirigida al Estado del domicilio del consumidor, así como el hecho de que el empresario ejerza su actividad de manera física en un lugar cercano a la frontera con otro Estado miembro y que utilice un número de teléfono de este último evitando a los potenciales clientes el coste de una llamada internacional³⁷.

Estos últimos criterios siguen la opinión del Abogado General, que hace especial hincapié en la localización geográfica del establecimiento del empresario en Spicheren. Este municipio francés situado como se ha indicado anteriormente en la región de Lorena, dice el Abogado General, está integrado en un área metropolitana fuertemente ligada al núcleo urbano de la ciudad de Saarbrücken, ya que el espacio en el que conviven los residentes de ambos lugares es prácticamente común. Así, en este tipo de casos donde se produce un fenómeno de conurbación, que un empresario se sitúe en una de las poblaciones puede equivaler a dirigir sus actividades comerciales también al otro Estado miembro. De este modo, existiría una actividad comercial dirigida a clientes internacionales que surge de forma natural y espontánea³⁸.

A continuación, el Tribunal de Justicia deja claro que corresponde al órgano jurisdiccional remitente efectuar una apreciación global de las circunstancias en las que se celebra el contrato de consumo controvertido para decidir si es aplicable el artículo 15.1.c), debiendo tener en cuenta la existencia de los indicios que se han citado en el presente exposición o de otros no mencionados específicamente³⁹.

El desarrollo argumental del Tribunal, más centrado como se puede apreciar en precisar el concepto de actividad “dirigida” que en analizar específicamente la noción de relación causal, conlleva una respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial. De esta manera, el Tribunal declara que el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I es aplicable en aquellos supuestos en los cuales no se puede constatar la existencia de “una relación causal entre el medio utilizado para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, una página web, y la celebración del contrato con dicho consumidor”⁴⁰.

Dicha relación causal, continúa el Tribunal de Justicia, “constituye un indicio de vinculación del contrato a tal actividad”⁴¹, si bien hay que aclarar la confusión que quizás se genere mediante este último inciso. En el apartado 26 de la sentencia *Emrek*, el Tribunal afirma que la relación causal a la que se viene aludiendo es útil “a la hora de determinar si la actividad se dirige efectivamente al Estado miembro en que está domiciliado el consumidor”, y es así como se debe interpretar la conclusión final del Tribunal de Justicia. Es decir, el hecho de que un contrato tenga su causa en la actividad comercial ejercida por un empresario puede servir como indicio de que dicho empresario dirige su actividad comercial al Estado miembro del domicilio del consumidor⁴². Por tanto, el término “vinculación” que utiliza el Tribunal de Justicia no ha de entenderse como “relación causal”, sino como la inclusión del contrato celebrado en el marco de la actividad comercial dirigida por el empresario al Estado del consumidor.

En puridad, cualquier contrato entre un consumidor y un empresario es consecuencia de la actividad comercial del último, porque si no existiera tal actividad el contrato no se celebraría. Por lo tanto, cuando se alude a la relación causal como un “indicio cualificado”, creo que hay

³⁷ Sentencia *Emrek*, apartados 28 a 30.

³⁸ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, puntos 34 y 35.

³⁹ Sentencia *Emrek*, apartado 31.

⁴⁰ Sentencia *Emrek*, apartado 32.

⁴¹ Sentencia *Emrek*, apartado 32.

⁴² Cfr. GARCÍA GALLARDO / BERMÚDEZ CABALLERO, “Jurisprudencia. Contratos de consumo: competencia judicial”, en *Derecho de los negocios*, Año 24, Nº 272, noviembre-diciembre 2013, p. 50.

que entender que la relación causal debe ser inmediata o directa. Es decir, en la sentencia *Emrek* se aprecia una actividad comercial dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor, pero dado que el consumidor no consultó la página web de la empresa, sino que se desplazó al lugar del domicilio del empresario porque unos conocidos le informaron de la existencia de ese negocio, no habría propiamente una vinculación entre dicha actividad comercial y la celebración del contrato. El foro de protección del consumidor es aplicable, pero por la constatación de indicios distintos a la relación causal.

En la sentencia *Mühleitner*, por el contrario, la compradora sí había consultado la página web de la empresa y había contactado telefónicamente con los vendedores a partir de la información obtenida en dicha web. En este caso, considero que sí existiría una relación causal inmediata entre la actividad comercial y el contrato, y ello podría tenerse por un indicio importante de que los vendedores dirigían su actividad de manera efectiva al Estado miembro donde la compradora tenía su domicilio.

La sentencia *Emrek* no valora el impacto económico que una interpretación como la que lleva a cabo puede tener en el mercado comunitario, pues aunque hace referencia a la situación geográfica del empresario, no analiza cuestiones como la previsibilidad para el empresario de verse demandado en otro Estado o la carga económica que esto le puede suponer. En cambio, el Abogado General sí hace un examen de esta cuestión, por lo que conviene exponerlo.

El Abogado General dice que la interpretación más favorable al consumidor no impone una carga desproporcionada al vendedor, a diferencia de lo que alegaban los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo. Sostiene que la localización geográfica del empresario en la sentencia *Emrek*, esto es, el fenómeno de conurbación existente, hace probable que el vendedor pueda comunicarse en la lengua del país vecino, y pone de relieve que en la página web del negocio del Sr. Sabranovic se indicaba un teléfono móvil alemán. En este contexto, al igual que en otras situaciones similares, el riesgo de que el vendedor o prestador de servicios sea demandado ante los tribunales de otro Estado, próximo al suyo, no puede decirse que suponga para dicho vendedor una carga excesiva que desincentive la internacionalización de su actividad comercial. De hecho, el Abogado General mantiene que la aplicación del foro especial para los contratos con consumidores contenido en el Reglamento Bruselas I puede ser un incentivo para que los consumidores de un lugar contraten con empresarios cercanos, pero que se encuentran en otro Estado⁴³.

Concluye el Abogado General diciendo que el empresario que actúa en una situación como la del litigio principal no puede alegar la imprevisibilidad de verse demandado en otro Estado miembro, ya que al operar en un espacio próximo a una frontera debe ser consciente de que una parte de su clientela más o menos importante puede tener su domicilio en el Estado miembro vecino⁴⁴.

Otro aspecto sobre el que no se pronuncia la sentencia *Emrek* es la relación entre el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I y el artículo 13, apartado 1, número 3º, del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Ello tampoco debe evitar que se mencione en este comentario, porque la misma aparece brevemente en las conclusiones del Abogado General a la sentencia, y con más detenimiento en las sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión

⁴³ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, puntos 36 y 37.

⁴⁴ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, punto 38.

Europea *Il Singer*⁴⁵, *Pammer y Hotel Alpenhof*⁴⁶ y *Mühlleitner*⁴⁷, así como en sus respectivas conclusiones del Abogado General.

Si se afirma que el ámbito de aplicación de la sección relativa a los contratos celebrados por los consumidores contenida en el Reglamento Bruselas I es más amplio que la regulación recogida en el Convenio de Bruselas de 1968, ello es en gran medida a causa de la modificación de la regulación hasta entonces contenida en el artículo 13 del Convenio⁴⁸. En la sentencia *Emrek*, el Abogado General destaca que “la única conducta relevante, a los efectos de activar el foro especial en materia de consumo, es la del vendedor o prestador del bien o del servicio”, de modo que la conducta del consumidor es irrelevante, a diferencia de lo que sucedía en el artículo 13 del Convenio de Bruselas⁴⁹.

En el Convenio de Bruselas, para que fuesen aplicables las normas del foro de protección de los consumidores cuando no fuera ni una venta a plazos de mercaderías ni un préstamo a plazos o una operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes, se requería que el contrato en cuestión tuviese por objeto “una prestación de servicios o un suministro de mercaderías” y, además, que concudiesen dos requisitos específicos de carácter cumulativo. Por un lado, que “la celebración del contrato hubiese sido precedida, en el Estado del domicilio del consumidor, de una oferta, especialmente hecha o de publicidad”, y por otro, que “el consumidor hubiere realizado en este Estado los actos necesarios para la celebración de dicho contrato”⁵⁰.

Con el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I, la exigencia de que se trate de “una prestación de servicios o un suministro de mercaderías” se relaja enormemente, puesto que este precepto se refiere a “todos los demás casos”, de manera que no se excluyen los contratos de multipropiedad, por ejemplo, de difícil encaje en el antiguo texto⁵¹.

Pero, además, los dos requisitos cumulativos contenidos en el artículo 13.3 del Convenio suponían que el consumidor sólo estuviese protegido cuando el empresario actuaba en el Estado del domicilio del consumidor de manera muy acentuada, es decir, dichos requisitos pretendían asegurarse de que existía unos vínculos estrechos entre el contrato y el Estado del domicilio del consumidor⁵². Por su parte, el Reglamento Bruselas I es mucho más flexible al requerir, como ya se ha expuesto, que el empresario simplemente ejerza sus actividades en el Estado del domicilio del consumidor o las dirige a él, y que el contrato se comprenda en el marco de esta actividad comercial.

Las modificaciones en la regulación a través de la aparición del Reglamento Bruselas I son especialmente importantes para situaciones como la contratación electrónica a través de páginas web a las que puede acceder el consumidor desde su domicilio. El Convenio no podía prever estos casos en su momento y sus normas no eran satisfactorias para englobar la moderna contratación electrónica, aunque algún autor defendía que la contratación electrónica

⁴⁵ Sentencia del TJUE de 14 de mayo de 2009 (Renate Il Singer / Martin Dreschers, C-180/06, Rec. p. I-3961).

⁴⁶ Sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*, apartados 56 a 61.

⁴⁷ Sentencia *Mühlleitner*, apartados 37 a 41.

⁴⁸ Cfr. FERNÁNDEZ ROZAS / SÁNCHEZ LORENZO, *op. cit.*, pp. 543 y 544.

⁴⁹ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, punto 17.

⁵⁰ Cfr. artículo 13 del Convenio de Bruselas de 1968.

⁵¹ Cfr. FERNÁNDEZ ROZAS / SÁNCHEZ LORENZO, *op. cit.*, p. 544.

⁵² Cfr. GAUDEMET-TALLON, *Les conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, 2ª edición, L.G.D.J., París, 1996, p. 190; TIRADO ROBLES, *La Competencia judicial en la Unión Europea. Comentarios al Convenio de Bruselas*, Ed. Bosch, Barcelona, 1995, pp. 97 y 98; VIRGÓS SORIANO / GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación internacional*, 2ª edición, Ed. Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 170.

tenía encaje perfectamente en el Convenio, reconociendo, eso sí, que tradicionalmente este texto se había interpretado y aplicado a situaciones *offline*⁵³. Por su parte, el Reglamento sí permite claramente incluir en su ámbito de aplicación, como regla general, la comercialización de productos a través de internet⁵⁴. Algún autor ha señalado que la doctrina considera que cuando el Reglamento establece que la actividad dirigida al Estado del domicilio del consumidor puede tener lugar “por cualquier medio”, está introduciendo el comercio electrónico en el ámbito de la sección de contratos con consumidores⁵⁵.

Además, la contratación electrónica lleva a tener que matizar la distinción entre “consumidores activos” y “consumidores pasivos”. Tradicionalmente se encontraba en que, en el primer caso, el consumidor se desplazaba al Estado del empresario para contratar, mientras que en el segundo caso el consumidor actuaba “en su mercado”; por “consumidor pasivo” habría de entenderse tanto el caso en que el empresario está presente en el Estado del consumidor, como el supuesto en que no lo está pero dirige hacia allí su actividad mediante oferta o publicidad⁵⁶. Tras la lectura de sentencias como la *Mühleitner* o la *Emrek*, se puede apreciar que para el Tribunal de Justicia el consumidor también tiene el carácter de consumidor pasivo aunque tome una conducta activa como sería desplazarse al Estado del empresario, si éste previamente ha ejercido o dirigido su actividad profesional al Estado del primero.

4. CONCLUSIONES

Para que fuese aplicable el foro de protección de los consumidores del Convenio de Bruselas a los contratos que tuviesen por objeto una prestación de servicios o un suministro de mercaderías, y que no fuesen ni un contrato de compraventa a plazos de mercaderías ni de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes, el artículo 13.3 del citado Convenio requería la existencia de una “oferta especialmente hecha” o “publicidad” y que el consumidor hubiese realizado en el Estado de su domicilio los actos necesarios para la celebración del contrato. En su momento, algún autor ya negó la necesidad de un tercer requisito consistente en una relación causal entre la publicidad hecha y la conclusión del acuerdo⁵⁷.

En cuanto a la exigencia de la mencionada relación causal en el Reglamento Bruselas I, como señala el Abogado General en sus conclusiones⁵⁸, algunos autores ya se habían pronunciado negándola⁵⁹. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue esta línea y establece de manera clara en la sentencia *Emrek* que la relación de causalidad entre la celebración del contrato y la actividad comercial del empresario dirigida al Estado miembro del consumidor no es una condición para la aplicación del artículo 15.1.c). La sentencia objeto de este comentario declara, no obstante, que dicha relación causal es un indicio de que hay una actividad comercial que está siendo dirigida al Estado del domicilio del consumidor, lo cual llevaría a aplicar el foro de protección de los consumidores previsto en el Reglamento Bruselas I.

El Tribunal de Justicia no considera correctas las posiciones de los gobiernos belga y luxemburgués, los cuales plantean en mi opinión una postura bastante sólida. El Reglamento

⁵³ Cfr. KROG, *op. cit.*, pp. 121, 122 y 127.

⁵⁴ Cfr. FERNÁNDEZ ROZAS / SÁNCHEZ LORENZO, *op. cit.*, p. 545.

⁵⁵ Cfr. ESPLUGUES MOTA / IGLESIAS BUHIGUES, *op. cit.*, p. 526.

⁵⁶ Cfr. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 116; VIRGÓS SORIANO / GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 171.

⁵⁷ Cfr. GAUDEMET-TALLON, *op. cit.*, p. 190.

⁵⁸ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Emrek*, punto 24, nota 16.

⁵⁹ Cfr. VIRGÓS SORIANO / GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 171.

Bruselas I exige que el contrato esté comprendido “en el marco de” las actividades comerciales dirigidas al Estado del domicilio del consumidor y no alude expresamente a una “relación causal”, pero en el fondo no resulta tan fácil explicar cómo un contrato se puede celebrar en el marco de una actividad comercial dirigida al Estado del consumidor y al mismo tiempo decir que entre dicho contrato y la actividad comercial no exista una relación causal.

El elemento de la relación causal conecta íntimamente con la constatación de que el empresario dirige sus actividades al Estado del domicilio del consumidor. En mi opinión, la situación geográfica del establecimiento cerca de una frontera u ofrecer información en lenguas de otros Estados o a través de teléfonos móviles de diferentes países son hoy en día menos relevantes que nunca a la hora de determinar la internacionalización de una actividad comercial. Las facilidades que existen hoy en el mundo, así como la disminución del coste de situar bienes y servicios en el extranjero suponen un aumento del número de empresarios con capacidad para contratar con consumidores de otros países, empresarios que por tanto están abiertos a ello; si bien esa facilidad en el plano económico no tiene su correlato en el plano jurídico. Las barreras lingüísticas o las fronteras siguen jugando un importante papel en un campo tan técnico y tan condicionado por la cultura de cada país como es el Derecho.

Cuando un consumidor de la Unión Europea piensa en adquirir a través de la web un bien que es suministrado, por ejemplo, desde Norteamérica, posiblemente el obstáculo más importante que puede surgir es el del sobrecoste que el paso del producto por la aduana podría generar. La inseguridad, que en otro tiempo podía existir, hoy ha disminuido mucho, ya que hay empresas con una gran reputación en el sector y cuyo servicio se muestra muy profesional día tras día. Sin embargo, si a ese mismo consumidor se le plantea el tener que litigar en el Estado miembro vecino, aunque sea con otro particular, su sensación de inseguridad sería mayor.

Lo mismo sucede con los empresarios. Contratar con consumidores de otros Estados miembros les puede suponer un gran beneficio con un bajo coste, pero afrontar, en cambio, una jurisdicción que les sea ajena aumentaría de manera ostensible sus riesgos, haciéndolos menos competitivos si se decantasen por subir los precios para así mantener el margen de beneficio. La alternativa que se les presentaría a los empresarios sería mantener sus precios y reducir el margen de beneficio que operar en otros países les puede generar, lo cual desincentivaría la internacionalización.

Además, conviene tener presente la novedad que introduce el artículo 6.1 del nuevo Reglamento Bruselas I bis con respecto al artículo 4.1 del Reglamento Bruselas I. Con la norma aplicable a día de hoy, si el empresario demandado no tiene su domicilio en un Estado miembro la competencia judicial se determina en cada Estado miembro con arreglo a su ley propia, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 23 del Reglamento Bruselas I, los cuales tratan las competencias exclusivas y la posibilidad de que las partes elijan el tribunal. Sin embargo, el artículo 6.1 del nuevo Reglamento Bruselas I bis establece la aplicación de las normas contenidas en esta norma también en materia de contratos individuales de trabajo y de contratos de consumo, cuando el demandado sea el empresario⁶⁰.

La extensión de la aplicación del Reglamento Bruselas I bis a demandados domiciliados fuera de la Unión Europea es una cuestión que ha suscitado un enorme debate cuya razón de ser es que la existencia de diferencias entre los Estados miembros suponen una desigualdad en las posibilidades de acceso a la justicia entre los ciudadanos de la Unión Europea, lo cual es especialmente perjudicial en ciertos contratos en los cuales se considera que hay una

⁶⁰ Cfr. DE MIGUEL ASENSIO, “El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones”, en *La Ley*, Año XXXIV, Nº 8013, 31 de enero de 2013.

parte más débil que la otra⁶¹. Por el momento, la extensión en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis se circunscribe a dos de los tres ámbitos en los cuales se recoge un foro de protección en el Reglamento Bruselas I, los contratos individuales de trabajo y los contratos con consumidores, quedando así al margen los contratos de seguro⁶². No obstante, hay que señalar que el artículo 79 del Reglamento Bruselas I bis ordena a la Comisión la presentación de un informe a más tardar el 11 de enero de 2022 sobre la aplicación del nuevo Reglamento, y dicho informe deberá incluir “una evaluación de la posible necesidad de una mayor ampliación de las normas sobre competencia a los demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro, atendiendo al funcionamiento del presente Reglamento y a la posible evolución de la situación en el plano internacional”.

En definitiva, la sentencia objeto del presente comentario, por tanto, tiene más relevancia de la que aparenta. Por un lado, podría hacer que los empresarios domiciliados en terceros Estados que dirigen actualmente su actividad hacia Estados miembros donde las normas internas de competencia judicial internacional no les suponen un gran coste renuncien a continuar presentes en el mercado comunitario. Y por otro, empresarios domiciliados en Estados no pertenecientes a la Unión Europea que podrían plantearse comenzar a dirigir su actividad comercial hacia ciertos Estados miembros teniendo en cuenta la ley nacional de éstos, podrían terminar decantándose por otros lugares.

Por todo ello, considero que el artículo 15.1.c) del Reglamento Bruselas I, al hablar de una actividad comercial dirigida al Estado del consumidor, exige una conexión mayor entre el empresario y este Estado que la que resulta del análisis de indicios ordenado por el Tribunal de Justicia. En mi opinión, para hablar de una actividad dirigida a un Estado debería tenerse en cuenta la intención inequívoca del empresario de aumentar progresivamente los clientes en dicho lugar hasta el punto de que éstos sitúen el negocio extranjero al mismo nivel que el nacional a la hora de decidir con quién contratan. De este modo, no sería suficiente para activar el foro del consumidor que el empresario esté dispuesto a contratar con consumidores domiciliados en otros Estados miembros y que facilite a éstos la contratación mediante el uso de un idioma conocido por el cliente o la disminución del coste de ponerse en contacto con él.

Para aplicar el foro del consumidor pienso que no debería ser suficiente con la existencia de una pluralidad de “contratos accidentales internacionales”, sino que sería preciso que desapareciera de manera absoluta el carácter accidental de dichos contratos internacionales. Con la interpretación propuesta tendría lugar una relación coherente entre la exigencia de que el contrato se encuentre comprendido en el marco de una actividad comercial dirigida al Estado del consumidor y³ la relación causal que necesariamente tiene que haber entre ambos.

⁶¹ Cfr. Evaluación de impacto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: SEC(2010) 1548 final, pp. 19 a 21.

⁶² Cfr. NUTYS, *op. cit.*, pp. 4 a 6.

BIBLIOGRAFÍA

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro, “El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones”, en *La Ley*, Año XXXIV, Nº 8013, 31 de enero de 2013, pp. 1 a 5.

ESPLUGUES MOTA, Carlos / IGLESIAS BUHIGUES, José Luis, *Derecho Internacional Privado*, 7ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto, *Derecho Internacional Privado*, 6ª edición, Ed. Civitas, Cizur Menor, 2011.

GARCÍA GALLARDO, Ramón / BERMÚDEZ CABALLERO, Manuel, “Jurisprudencia. Contratos de consumo: competencia judicial”, en *Derecho de los negocios*, Año 24, Nº 272, noviembre-diciembre 2013, pp. 49 y 50.

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J., *Derecho Internacional Privado*, Ed. Civitas, Cizur Menor Navarra, 2012.

GAUDEMET-TALLON, Hélène, *Les conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, 2ª edición, L.G.D.J., París, 1996.

KROG, Georg Philip, “The Brussels I Regulation Article 15.1c) - Where to are Commercial or Professional Activities Directed through the Internet?”, en *Yulex*, 2004, pp. 117 a 148.

NUTYS, Arnaud, “La refonte du règlement Bruxelles I”, en *Revue Critique de Droit International Privé*, Vol. 102, nº 1, 2013, pp. 1 a 64.

PAVELKA, Tomas, “The Concept of ‘Directed Website’ - A Jurisdictional Phenomenon Clarified? Cross-Border Consumer and Tort Victim Protection in Light of Recent ECJ Jurisprudence”, en *ELSA Malta Law Review*, Vol. 1, Nº 1, 2011, pp. 166 a 176.

TIRADO ROBLES, Carmen, *La Competencia judicial en la Unión Europea. Comentarios al Convenio de Bruselas*, Ed. Bosch, Barcelona, 1995.

VIRGÓS SORIANO, Miguel, / GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación internacional*, 2ª edición, Ed. Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2007.

COORDINADORA: SOFÍA DE SALAS MURILLO. LOS MECANISMOS DE GUARDA LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRAS LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS. DYKINSON, 2013.*

FÁTIMA YÁÑEZ VIVERO

Profesora Titular de Derecho Civil. UNED (España)

Pocas celebraciones de cumpleaños serán tan felices para una ley como aquellas en las que, treinta años después de su entrada en vigor, se sigue hablando y pensando en ella, en sus aciertos y en sus errores. Y es que, con motivo del trigésimo aniversario de la Ley 13/1984, de 24 de octubre, Sofía DE SALAS MURILLO, Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, organiza un Congreso Internacional bajo el título de “La reforma de los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad intelectual tras la Convención de Naciones Unidas”, que tiene lugar en Zaragoza los días 18 y 19 de octubre de 2013.

Como resultado de este Congreso internacional, surge el volumen colectivo que tengo la fortuna de presentar en estas sucintas páginas. El libro, titulado *Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la Convención de Naciones Unidas*, se gesta en el seno del Proyecto de Investigación “La tensión entre la promoción de la autonomía personal y la necesidad de instrumentos de salvaguardia de la persona con discapacidad: a la búsqueda del equilibrio necesario”, cuyo Investigador Principal es el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Carlos MARTÍNEZ DE AGUIRRE.

Son tres las partes que conforman este volumen colectivo. La primera trata lo relativo al impacto de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento, en el francés, en el italiano y en el alemán. El eje de reflexión, en esta primera parte, lo constituye la disyuntiva entre romper con el sistema de tutela de autoridad y de capacidad jurídica y capacidad de obrar, o bien reformarlo sobre la base del sistema ya existente. La segunda parte gira en torno al funcionamiento real de la tutela y de la curatela que puede dejar fuera de protección supuestos como el de las personas con inteligencia límite y que pone en evidencia el trascendente papel que hoy desempeñan las personas jurídicas como guardadoras. Y, finalmente, una tercera parte está dedicada a abordar otras figuras de guarda y protección diferentes de la tutela, curatela o defensor judicial y que constituyen importantes soportes para algunos tipos de discapacidades en la senda trazada por la Convención de Naciones Unidas.

Los autores de los estudios que integran esta obra colectiva son todos ellos consagrados especialistas – españoles y extranjeros – en temas relativos a la protección de las personas con discapacidad. En el pórtico de la obra, dentro de la primera parte titulada “El sistema de guarda legal de las personas con discapacidad: ¿Reforma o ruptura?”, y tras un clarificador prólogo elaborado por la Coordinadora de la misma, nos encontramos con el trabajo del Profesor MARTÍNEZ DE AGUIRRE. Bajo el título de “El tratamiento jurídico de la discapacidad mental o intelectual tras la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, la cuestión principal que se plantea es en qué medida las reglas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la incapacitación y a los mecanismos de guarda y protección de las personas incapacitadas son compatibles con la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad. El autor refleja con una claridad digna de todo elogio las dos respuestas que a tal cuestión se han dado: la que sostiene la incompatibilidad de una buena parte de nuestro sistema con las reglas de la Convención y, en consecuencia, la necesidad de reformar dicho sistema para adaptarlo a la Convención; y la que proclama tal compatibilidad. El autor se alinea en la segunda posición entendiendo que nuestro sistema jurídico-privado está dotado de un alto nivel de ductilidad que permite diseñar “un traje jurídico a medida” de la capacidad real de cada discapacitado intelectual aunque no siempre en la práctica se consiga tal flexibilidad y adaptación a las necesidades concretas de protección.

Ahora bien, que el sistema español sea compatible con las reglas de la Convención no significa, en opinión del Profesor MARTINEZ DE AGUIRRE, que sea el único posible ni que sea el mejor, proponiendo, de cara a posibles reformas, unas reflexiones finales de las que destacamos las siguientes: 1) parece conveniente la sustitución del término “incapacitación” por otros neutrales, como “modificación de la capacidad de obrar para adaptarla a la capacidad natural en beneficio del incapacitado”, porque si bien el lenguaje no es lo más importante, es indudable que de cara al cambio social, las palabras pueden desempeñar un importante papel (permítaseme, aquí, el recuerdo de la célebre frase cortaziana de “sin *verba* no hay *res*”); 2) la intervención judicial en la adopción de cualquier medida que afecte a la capacidad de obrar constituye una garantía fundamental de que tal medida va a responder a las garantías pretendidas con ella, aunque, en ocasiones el acudir a un sistema tan garantista, como puede ser el de intervención del juez, suponga menos rapidez y agilidad de la deseable; 3) es fundamental permitir – e incluso fomentar – que cuando la persona con discapacidad tenía todavía suficiente capacidad natural de entender y querer, pueda organizar sus propios asuntos. Igualmente, deben potenciarse aquellos instrumentos que, en el caso de fallecimiento de los familiares que se venían ocupando de los discapacitados intelectuales, puedan desempeñar importantes tareas de guarda y protección, como las fundaciones tutelares, a cuyo estudio se dedican algunos de los trabajos posteriores de este mismo volumen colectivo.

“Reflexiones sobre la mejor regulación jurídico-privada de la discapacidad” es el sugerente título del trabajo del Profesor GARCÍA CANTERO, maestro de maestros y, también, un consagrado especialista en esta materia. Para el citado Profesor, el art. 12 de la Convención de Naciones Unidas permite “insuflar nuevo espíritu” a la incapacitación, a la tutela, a la curatela y a la guarda de las personas con discapacidad sin que ello implique derogar el Código Civil o la legislación procesal civil. El criterio orientado de la actuación judicial es el del *beneficio del tutelado* (art. 216.1 C.C), que es perfectamente coherente con el *respeto a los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona* (art. 12.4 Convención). Y ello en la práctica obliga al juez a tener en cuenta la voluntad del interesado, no solo en el momento de declarar judicialmente el grado de incapacitación, sino antes (autotutela y poderes preventivos), e incluso después de constituida la tutela o curatela, o durante cualquiera de sus fases. Para lo cual, el Profesor GARCÍA CANTERO propone la introducción en nuestro ordenamiento de un *seguimiento de las instituciones tutorias*, con apoyo en los artículos 232 y 233 CC.

El autor también propone regular de forma más dinámica las relaciones entre el Juez, el Fiscal, el órgano tutelar y el sujeto protegido y, en fin, habrá - según GARCÍA CANTERO - que instruir debidamente al tutor o curador para que ejerzan el cargo lo mejor posible, en atención a la personalidad del pupilo, de forma tal que, en el caso de los actos del tutor que requieren autorización judicial, sería conveniente que tanto el tutor como el juez oigan al pupilo si ello es posible, de modo que una oposición razonable por su parte, suficientemente expresada, debería ser tomada en consideración por el juez para recabar nuevos informes antes de otorgar la solicitud judicial solicitada. Y en relación con la curatela, señala el Profesor GARCÍA CANTERO que encaja adecuadamente en la noción de apoyo y salvaguardia de que habla el artículo 12 del Convenio de Nueva York y ello explicaría la frecuente remisión que a ella realizan los partidarios de la concepción social de la discapacidad. Más todavía que en el caso de los tutores, la actuación de apoyo en que cristaliza la curatela, permite aconsejar – según este autor - la creación de unos curadores profesionales, cuya formación previa el Estado debería estimular y regular.

“La protección jurídica de las personas después de la ratificación por Francia de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad” es el título del trabajo elaborado por Françoise MONÉGER, Profesora y Magistrada de la *Cour de Cassation* francesa. Centrándose en la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, MONÉGER destaca que tal garantía se realiza a través de dos vías: la demanda directa de los particulares ante el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre para que sean respetados los derechos regulados en el tratado europeo; y una segunda vía, a partir de 2010, tras la ratificación de la Convención de Nueva York de 2006, que cristaliza en

una cuestión de constitucionalidad por la que toda persona puede solicitar, a través de una jurisdicción ordinaria o administrativa, la derogación de aquellas disposiciones legales que no respeten los derechos garantizados por los textos constitucionales. A título de ejemplo, la Profesora MONÉGER cita el caso en el que el *Conseil constitutionnel*, en el ámbito de los ingresos hospitalarios de las personas con discapacidad, considera que tal ingreso sin el consentimiento del sujeto afectado por la deficiencia psíquica no podrá ser mantenido en el tiempo más allá de 15 días sin la intervención del correspondiente órgano jurisdiccional. Y respecto a la Convención de Nueva York y su aplicación en el ordenamiento francés, la autora se muestra claramente escéptica sobre su impacto inmediato y su aplicación directa, poniendo de relieve que tal Convención no ha tenido en el país vecino el eco y resonancia que han tenido otras Convenciones como la de los Derechos del Niño.

Representando el panorama jurídico italiano en materia de discapacidad, la Catedrática de Derecho Privado de la Universidad de Salerno, Elvira Gabriella AUTORINO, centra su análisis (“Incapacidad y persona: la solución italiana”) en la figura de la *ammnistrazione di sostegno*, figura de apoyo, alternativa a la tutela, que parte de la protección de la persona sin necesidad de acudir a los procedimientos de *interdizione* o *inabilitazione* (incapacitación judicial). Se abre así, con la ley de 2004, un amplio espectro de figuras de protección, si bien las distinciones no quedan claras y el riesgo de superposición es muy alto. Partiendo de un trabajo previamente publicado (AUTORINO, ZAMBRANO, *Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004*, Milano, 2004), la autora de este trabajo critica la falta de valentía del legislador de 2004 por no haber roto con un pasado marcado por la marginación de las personas con enfermedades mentales. Se critica, de este modo, el mantenimiento de las figuras de la *interdizione* y de la *inabilitazione*. En el segundo de los casos se constata la falta de utilidad de la figura en la medida en que la prodigalidad, por ejemplo, se puede integrar dentro de las nuevas medidas que aporta la *ammnistrazione di sostegno*.

“El tratamiento de las personas con discapacidad intelectual en Alemania” es el título de la aportación a esta obra de Rainer FRANK, Profesor del Instituto de Derecho Privado Extranjero e Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo. Al igual que en Francia, la doctrina y la jurisprudencia alemanas no muestran demasiado interés por la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, que está vigente en Alemania desde el 26 de marzo de 2009. El Profesor FRANK divide su trabajo en dos partes, una destinada a tratar la situación jurídica en Alemania antes de la reforma del año 1992 y una segunda, dedicada a abordar las consecuencias de tal reforma que supone la aparición de un nuevo régimen de protección: la *Betreuung*.

Tras el planteamiento del marco general de la protección de la discapacidad en España y en otros ordenamientos jurídicos, la segunda parte de este volumen colectivo focaliza su atención, como ya hemos anticipado, en los problemas de funcionamiento de la tutela y de la curatela en nuestro ordenamiento.

La Profesora Titular de Derecho Procesal, Regina GARCIMARTÍN MONTERO, examina, bajo el título de “La designación judicial del guardador legal”, la problemática que la designación de tutores y curadores plantea desde el punto de vista procesal. Destaca la autora de este trabajo que una de las características más relevantes de las decisiones judiciales sobre nombramiento de guardadores es su teórica independencia respecto al pronunciamiento de incapacitación. De modo exhaustivo, se abordan los diferentes trámites procesales que conducen a la designación de guardador, desde el proceso de incapacitación, hasta el expediente de jurisdicción voluntaria y finaliza este estudio con la elaboración de unos parámetros para adoptar la decisión judicial en materia de guarda legal.

Continuando con la guarda legal, la Magistrada Marta CHIMENO CANO arroja mucha luz no tanto sobre la designación de los guardadores cuanto sobre el seguimiento de los mismos, analizando las medidas fiscalizadoras del cargo tutelar que, a juicio de la Magistrada, deberían integrar un procedimiento autónomo y único de seguimiento del cargo tutelar para hacer

realmente efectivo el control del cargo. Ya casi en la parte final de este estudio puede leerse un interesante epígrafe destinado a examinar algunas de las lagunas legales que desprotegen a la persona con discapacidad, destacando la autora la relativa a la excusa absolutoria de los parientes. Considera CHIMENO que es urgente una reforma legal que modifique el artículo 268 del Código Penal, de modo que se excepte de esta excusa absolutoria a aquellos delitos cometidos contra menores, discapacitados que carezcan de capacidad para gobernar su persona y bienes, o personas declaradas judicialmente incapaces, porque resulta frustrante la impunidad de delitos en personas tan vulnerables como las personas con discapacidad psíquica, a las que se despoja de un patrimonio necesario para mantener una vida digna. Se propone, también, una más amplia legitimación activa del Ministerio Fiscal en el ejercicio de acciones civiles en materia dispositiva para poder, así, suplir la pasividad de los cargos tutelares si no emprenden acciones de recuperación del patrimonio indebidamente dispuesto por el guardador, cargo tutelar o tercero.

El funcionamiento de la guarda legal ejercida por personas jurídicas es el tema del que se ocupa Antonio LEGERÉN MOLINA, Profesor de Derecho Civil, quien propone unas interesantes líneas de futuro en la tutela encomendada a las personas jurídicas. Apunta LEGERÉN que tras la Convención de Nueva York de 2006 es previsible la reducción del número de tutelas actuales por la necesaria adaptación de algunas de ellas a la nueva regulación basada en el “apoyo” y no en la “sustitución”, si bien seguirán siendo las personas jurídicas las que continúen prestando esos apoyos puntuales o asistenciales. Y de cara a una posible reforma de las instituciones tutelares se pide una solución para algunos de los problemas que en la práctica presenta la tutela por parte de las personas jurídicas. En este sentido, se propone, entre otras medidas, las siguientes: un desarrollo normativo del artículo 239.3 del Código civil, una limitación de la intervención del juez únicamente a las funciones en que su presencia resulte imprescindible propiciando una mayor “desjudicialización” de la tutela; la introducción de la persona jurídica en el listado de los potenciales tutores del artículo 234 del Código Civil; la potenciación de la figura de los delegados tutelares y su regulación; o la introducción expresa de la posibilidad de que la persona jurídica, sea privada o pública, pueda cobrar por el ejercicio de la tutela cuando el patrimonio del tutelado lo permita.

“Las fundaciones tutelares como guardadores” es la cuestión que aborda Jaime SANAÚ VILLARROYA, Profesor Titular de Economía Aplicada y Presidente de la Fundación Tutelar aragonesa Luis de Azúa. En junio de 1995 nace la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, a instancias de la actual Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). Partiendo de esta realidad, el Profesor SANAÚ ofrece una panorámica de las principales fundaciones tutelares existentes en España a través de los servicios que prestan y de los valores o principios que las inspiran, y todo ello se realiza a la luz de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a la luz de esta Convención, las fundaciones tutelares se muestran partidarias de que en el futuro las incapacidades absolutas sean excepcionales y no la regla general, inclinándose por mecanismos como el de la actual curatela y reclamando que la modificación de la capacidad de obrar cumpla siempre los requisitos de proporcionalidad y adecuación al fin que se persigue.

Es patente que en esta nueva realidad social las personas jurídicas están llamadas a desempeñar un papel primordial. En mi opinión, ya no estamos ante una tutela –la encomendada a personas jurídicas – susceptible de ser ejercida en último término o de modo subsidiario, como se venía desarrollando hasta fechas recientes. La idoneidad de una persona jurídica para ser tutora no depende, en mi opinión, de la ausencia o inhabilidad de las personas enunciadas en el artículo 234 del Código Civil, sino del máximo beneficio e interés que debe procurarse a la persona sujeta a tutela. Al juez le gustará contar con un interlocutor fácilmente identificable, siempre localizable y experto en la resolución del problema, que actúe sin el apasionamiento propio de las personas ligadas por vínculos afectivos o a las que puedan mover razones no siempre desinteresadas. Por ello, se echa de menor en nuestro Código Civil una regulación detallada y minuciosa de la tutela atribuida a las personas jurídicas. Nuestro

ordenamiento parece tener solo presente la tutela ejercida por una persona física y se hace necesaria una adaptación de los preceptos que regulan la tutela individual a otra de naturaleza institucional. En algunos casos, se impone, en mi opinión, la necesidad de flexibilizar unas normas que aplicadas a personas jurídicas carecerían de sentido. Así sucedería, por ejemplo, con la prohibición del art. 221 CC que impide al tutor recibir donaciones de cualquier clase mientras no se haya aprobado definitivamente la gestión del tutor. Esta norma carecerá de sentido cuando la tutora sea una fundación que, para el mejor desarrollo de sus funciones, requiera una dotación patrimonial suficiente.

Las personas con inteligencia límite también tienen reservado un espacio en este volumen colectivo. María FRONTERA SANCHO y Carlos GÓMEZ BAHÍLLO, Profesores Titulares de Psicología Evolutiva y de Sociología, respectivamente, realizan un estudio acerca de la necesidad de reconocimiento, protección y apoyo a las personas con inteligencia límite. Tras un minucioso análisis de este grupo de personas, los autores realizan una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y a los legisladores, proponiendo la intervención en diferentes ámbitos como el de la Sanidad, el del Empleo, el de la Enseñanza o el de los Servicios Sociales. Entre estas propuestas, destaca la de la regulación de la protección jurídica que requiere este colectivo de personas en la medida en que existe actualmente un vacío normativo que garantice los derechos de las personas con inteligencia límite, quedando fuera del ámbito objetivo regulado por la Ley 51/2003, de *igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad*. La atención normativa que necesita este colectivo exige considerar no solamente el cociente intelectual de estas personas sino también la carencia o insuficiencia de las habilidades y capacidades necesarias para integrarse en su entorno social y laboral.

La tercera y última parte de la obra está destinada a examinar otras figuras de guarda y protección de las personas con discapacidad.

Inaugura esta última parte el trabajo de María Victoria MAYOR DEL HOYO titulado “Hacia un sistema tuitivo funcional de los incapacitados en el marco de la Convención de Naciones Unidas”. La autora refleja la evolución que experimentan las figuras de guarda, desde una protección institucional hacia una protección funcional o real y realiza un detallado estudio del artículo 239.3 del Código Civil en el que cristaliza la situación de desamparo y la tutela administrativa de las personas incapacitadas. El trabajo de la Profesora MAYOR DEL HOYO revisa, a la luz de la Convención de Nueva York, las figuras de la guarda administrativa y del acogimiento de los judicialmente incapacitados.

La Catedrática de Derecho Civil, M^a Angeles PARRA LUCÁN, se ocupa del tratamiento de la guarda de hecho de las personas con discapacidad efectuando una serie de reflexiones al final de su trabajo de las que necesariamente debemos hacernos eco en esta recensión. En opinión de la Profesora PARRA, “las propuestas que reclaman una nueva regulación de la guarda de hecho están hechas de buenas intenciones”. Pero si, en realidad, se regula la guarda de hecho y se establecen requisitos, formalidades o controles dejará de ser una guarda de hecho y se convertirá, en la práctica, en una guarda de derecho sin previa incapacitación y, por tanto, sin las garantías propias del procedimiento de incapacitación. Los planteamientos favorables al mayor reconocimiento legal de la guarda de hecho están justificados, según la Profesora PARRA, cuando el entorno familiar de las personas que no están en perfectas condiciones de gobernarse por sí mismas es muy favorable y cuando no hay un patrimonio especialmente relevante que mueva a poner en marcha un procedimiento judicial y la guarda se limite a cuestiones de índole personal, pero no están tan justificados en el resto de casos.

Los últimos trabajos que integran esta obra colectiva giran en torno a los tratamientos e internamientos involuntarios de personas que padecen patologías psíquicas. El Doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría Médico Forense, José Carlos FUERTES ROCAÑÍN, centra su análisis en el internamiento psiquiátrico involuntario, señalando que existe cierta confusión psicótica, a veces, por los propios jueces al “ordenar”, y no “autorizar” el ingreso.

La orden de internamiento, en la visión de este especialista, solamente sería adecuada cuando la enfermedad mental sobreviene estando el sujeto en prisión cumpliendo condena. En el resto de los casos, lo que cabe es una autorización de internamiento, siendo siempre una decisión médica el tiempo que debe durar tal medida y la forma en que ha de llevarse a cabo.

El eje giratorio del último trabajo es el tratamiento ambulatorio involuntario y de él se ocupa María Jesús GERMÁN URDIOLA, Doctora en Derecho, quien nos recuerda que en el año 2005 se propuso, en las comparecencias efectuadas ante el Congreso de los Diputados, la adición de un quinto párrafo al actual artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de regular las garantías procesales necesarias para que un juez civil pueda autorizar un tratamiento ambulatorio de carácter obligatorio. A pesar de la polémica que ha suscitado tal propuesta, los partidarios y los contrarios de la misma coinciden en señalar que solamente el desarrollo de un sistema que ofrezca una amplia gama de servicios, accesible y de calidad, adecuados a las diferentes situaciones que puedan presentarse, permitirá el avance en los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La obra está magníficamente orquestada, como ya hemos señalado, por la Profesora DE SALAS MURILLO. La Profesora DE SALAS no es una iniciática en la materia objeto de esta obra colectiva. Todo lo contrario. Entre su abundante patrimonio intelectual en materia de discapacidad destacan las monografías *Responsabilidad Civil e incapacidad* (Tirant lo Blanch, 2003), y *La publicidad de la discapacidad en el Registro Civil* (Aranzadi, 2011). Anteriormente, ya coordinó el volumen colectivo, *Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de protección en materia de discapacidad* (El Justicia de Aragón, 2010) y ha publicado múltiples artículos sobre esta temática, entre los que destacamos: “Hacia un estatuto de la persona con discapacidad intelectual: criterios de valoración” (*Anuario de Derecho Civil*, 2010); “La opción por la nulidad o la anulabilidad en la protección del incapaz natural y los que con él contratan” (*Revista de Derecho Privado*, 2007); “La legitimación del tutor para el ejercicio de la acción de separación matrimonial en representación del pupilo (STC 311/2000, de 18 de diciembre)”, en coautoría con María Victoria Mayor del Hoyo (*Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, 2001); “Capacidad, discapacidad, incapacidad e incapacitación: funciones y disfunciones” (*El Tratamiento Jurídico Civil de la Dependencia: actas del Congreso celebrado en A Coruña: 8-9 de noviembre de 2007 / coord. por Miguel Angel Pérez Alvarez y Marcos Antonio López Suárez*, 2008); o “Repensar la curatela” (*Derecho Privado y Constitución*, 2013).

El libro que se presenta, si bien es una obra más sobre discapacidad destinada a engrosar el número de volúmenes de cualquier biblioteca jurídica, no es cualquier obra, sino un serio trabajo multidisciplinar susceptible de permanecer durante tiempo en la mente de aquellos juristas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, economistas o trabajadores sociales que se ocupan y preocupan de la nueva realidad social de las personas con discapacidad. La tendencia a buscar las *tailored measures*, que impregna esa nueva realidad tras la aparición de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos lleva, a mi juicio, no tanto a buscar el libre desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad cuanto el máximo desarrollo de aquélla y a ello contribuyen, sin duda, obras como la ahora coordinada por la Profesora SALAS.

¹ Fecha de recepción: 14-3-2014. Fecha de aceptación: 20-3-2014

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

ESCALAFÓN DE SECRETARIOS JUDICIALES

(Cerrado a 31 de marzo de 2014)



MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN DE LA
MODERNIZACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, se acuerda hacer público en el Boletín del Ministerio de Justicia el Escalafón del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cerrado a 31 de marzo de 2014, que se acompaña con anexo a esta Resolución

Madrid 15 de abril de 2014

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
PROGRAMACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN

-Firmado electrónicamente-

Alfonso Lozano de Benito

www.mjusticia.es
programacion.modernizacion@mjusticia.es

C/ SAN BERNARDO, 19
28071 – MADRID
TEL: 91 390 45 72
FAX: 91 390 45 56



Código Seguro de Verificación	PF:MGa6-3kOm-DvOY-eVK3	Página	1/1
Firmado electrónicamente por	Alfonso Lozano De Benito (SUBDIRECTOR GENERAL)	Fecha firma	15/04/2014
URL de verificación	https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:MGa6-3kOm-DvOY-eVK3		

ÍNDICE

SECRETARIOS JUDICIALES DE PRIMERA CATEGORÍA	5
SECRETARIOS JUDICIALES DE SEGUNDA CATEGORÍA	9
SECRETARIOS JUDICIALES DE TERCERA CATEGORÍA	98
ÍNDICE ALFABÉTICO PRIMERA CATEGORÍA	140
INDICE ALFABÉTICO SEGUNDA CATEGORÍA	142
ÍNDICE ALFABÉTICO TERCERA CATEGORÍA	194
SECRETARIOS JUDICIALES EXCEDENTES	218

**ESCALAFÓN DE SECRETARIOS JUDICIALES
(Cerrado a 31 de marzo de 2014)**

Secretarios Judiciales con la Primera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1	PALENCIA GUERRA HERMINIA	12189580	24/12/1948	35 4 4	24 9 20	30/11/1978	Juzgados	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
2	FERNANDEZ-VIVANCOS ROMERO GUILLERMO	41895402	01/06/1944	43 2 26	23 6 26	07/01/1971	Juzgados	SALA 4ª DE LO SOCIAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
3	ROMERO JIMENEZ FELIX MARIA	50264043	24/04/1945	40 3 28	23 2 1	05/12/1973	Juzgados	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ALBACETE
4	RICO FERNANDEZ JUAN ANTONIO	1355835	03/02/1947	41 8 13	23 0 27	19/07/1972	Jur.Lab.	SALA 2ª DE LO PENAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
5	OLIVER SANCHEZ MARIA JOSEFA	28378566	10/06/1948	40 3 28	23 0 27	05/12/1973	Juzgados	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
6	GARCIA VEGA ALBERTO CARLOS	12160406	07/11/1944	40 3 28	22 3 14	05/12/1973	Juzgados	SALA 1ª DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
7	LLORENTE GARCIA JOSE MARIA	3070016	03/11/1954	32 5 18	22 1 21	15/10/1981	Distrito	SALA 1ª DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
8	PERA BAJO MARIA JESUS	39634605	11/10/1949	39 3 14	21 6 19	02/05/1975	Tribunales	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
9	CAPO DELGADO MARIA DULCE	42946900	19/11/1953	36 3 19	20 5 1	14/12/1977	Distrito	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
10	BARTOLOME PARDO Mª DE LOS ANGELES	50401925	09/05/1950	40 1 6	19 9 12	27/02/1974	Jur.Lab.	SALA 1ª DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
11	CAO BARREDO MARIA ANTONIA	10011845	17/07/1948	34 3 14	19 9 12	18/12/1979	Distrito	SALA 2ª DE LO PENAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
12	GARCIA-MIGUEL GARCIA-ROSADO MANUEL ANGEL	7769089	26/06/1948	40 1 6	19 8 6	27/02/1974	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOGROÑO (LA RIOJA)
13	SANCHEZ GUIU LUIS IGNACIO ANDRES	17690766	03/06/1955	32 5 17	15 1 17	15/10/1981	Distrito	SECRETARIO GABINETE TECNICO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
14	SANZ HOYOS TOMAS	245212	22/07/1947	42 9 29	14 7 0	04/06/1971	Jur.Lab.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
15	FERNANDEZ-TRIGALES PEREZ Mª MERCEDES ROSARIO	10006718	07/10/1946	38 11 2	12 6 22	02/05/1975	Tribunales	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
16	FERRERO PASTRANA ILDEFONSO	12211511	14/02/1953	34 3 15	12 6 22	18/12/1979	Tribunales	SECRETARIA DE GOBIERNO (2000) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BURGOS
17	AMIGO DE PALAU MARIA ANTONIA	37286418	20/03/1963	26 7 7	4 6 8	25/08/1987	Jur.Lab.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
18	MARTINEZ MAZON RAQUEL	10808891	20/09/1957	27 10 24	4 6 8	08/05/1985	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA OVIEDO (ASTURIAS)
19	SANZ LORENTE SANTIAGO	72961807	23/04/1953	29 10 24	4 6 8	08/05/1985	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ZARAGOZA
20	COLLADO CASTAÑO ISABEL MARIA	6984790	12/12/1960	26 10 18	4 6 8	14/05/1987	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO (2000) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CÁCERES
21	OLARTE MADERO JESUS	4548240	05/07/1957	24 7 4	4 6 8	28/08/1989	C.U.	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
22	PARRA GARCIA JAVIER LUIS	23219723	24/11/1961	24 7 4	4 6 8	28/08/1989	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO (2000) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MURCIA

Secretarios Judiciales con la Primera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
23	VILAR MENDIETA JOSEFA	26198569	15/09/1959	23 5 6	4 6 8	26/10/1990	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO CEUTA
24	BARRIL ROCHE MARIA TERESA	17831377	24/04/1948	36 11 28	3 4 18	06/04/1977	Jur.Lab.	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
25	CALAMITA DOMINGUEZ MARIA EUGENIA	42007704	14/12/1952	34 10 17	3 4 1	16/05/1979	Jur.Lab.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
26	SANCHO MAYO GLORIA	50795322	04/07/1953	34 3 15	3 0 26	18/12/1979	Tribunales	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
27	PENA LOPEZ AGUSTIN IGNACIO	1490245	31/07/1954	30 3 17	2 9 10	16/12/1983	C.U.	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
28	LUNA ALONSO LORENZO SANTIAGO	4138226	25/07/1955	28 4 22	2 9 10	11/11/1985	Paz	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ALBACETE
29	MELGAR SALVAGO TRINIDAD	75297828	18/02/1948	36 11 28	2 8 18	06/04/1977	Jur.Lab.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL MÁLAGA
30	CORTES DEL BLANCO JOSE LUIS	37678299	17/12/1956	28 10 24	2 8 18	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
31	LUQUE NAVARRO ANGEL LUIS	25927481	24/11/1954	28 4 22	2 8 18	11/11/1985	Paz	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL JAÉN
32	GARCIA FERNANDEZ VICENTE	24291453	24/07/1956	26 10 18	2 8 18	14/05/1987	C.U.	SALA 5ª DE LO MILITAR TRIBUNAL SUPREMO MADRID
33	ALFONSO RODRIGUEZ JUANA	75215855	07/08/1960	28 0 29	2 8 18	03/03/1986	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL ALMERÍA
34	ALEJANDREZ PEÑA PEDRO	30413926	14/11/1955	24 2 13	2 8 18	19/01/1990	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL CÓRDOBA
35	RONDA ARAUZO Mª LOURDES	13104174	06/02/1962	23 5 6	2 8 18	26/10/1990	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
36	VIOLET VAZQUEZ ROSA MARIA	15239342	14/02/1958	23 5 6	2 8 18	26/10/1990	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
37	TRONCOSO GIL ROSARIO	31243765	30/11/1962	23 5 6	2 8 18	26/10/1990	C.U.	
38	SORIANO MINGUILLON MANUEL	18398729	12/12/1948	22 9 14	2 8 18	19/06/1991	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL TERUEL
39	HERRAIZ PAGES JAIME	40289000	26/08/1959	22 9 14	2 8 18	19/06/1991	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL GIRONA
40	ROJO VEGA RAQUEL	22546166	20/03/1962	22 2 15	2 8 18	17/01/1992	C.U.	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
41	DOMIQUE GOYA ENRIQUE CARLOS	17217960	05/01/1965	22 2 15	2 8 18	17/01/1992	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL TARRAGONA
42	GONZALEZ JIMENEZ LUIS	9184408	24/11/1968	19 0 18	2 8 18	13/03/1995	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL LLEIDA
43	BRINGAS ZABALETA MARIA TERESA	42764088	28/06/1953	17 9 7	2 8 18	25/06/1996	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
44	RODRIGUEZ SANTOS CESAREO	71008085	11/05/1965	20 2 1	2 8 18	01/02/1994	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
45	JULVEZ LEON MARIA ANGELES	25143404	07/08/1963	20 10 6	2 8 18	25/05/1993	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL ZARAGOZA
46	BASARRATE AGUIRRE MARIA BEGOÑA	14876496	21/03/1950	19 8 18	2 8 18	13/07/1994	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
47	BERENGUEL FERNANDEZ ROSA MARIA	28885482	16/02/1966	20 2 1	2 8 18	01/02/1994	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL HUELVA

Secretarios Judiciales con la Primera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
48	RODRIGUEZ BALBIN JOSE LUIS	10798885	25/04/1955	19 8 18	2 8 18	13/07/1994	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR DE LANZAROTE Y LA PALMA ARRECIFE (LAS PALMAS)
49	ESTRADA RUIZ JAIME	10557717	17/08/1954	32 8 18	2 8 17	15/07/1981	Juzgados	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
50	SANCHEZ RUIZ MARIA NIEVES	5623866	06/11/1958	26 10 18	2 8 17	14/05/1987	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL (2005) MURCIA
51	GARCIA TEZANOS GABRIEL	76848449	29/12/1947	29 8 6	2 6 20	27/07/1984	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL PALENCIA
52	CANCELA RAMIREZ DE ARELLANO PILAR	32426345	28/05/1957	28 10 24	2 6 20	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
53	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	3414371	06/12/1953	28 10 24	2 6 20	08/05/1985	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL ALBACETE
54	CERDAN PARDO MANUEL	19827194	22/05/1955	30 3 17	2 6 20	16/12/1983	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
55	GARCIA TOBIO JOSE ALBERTO	34575348	30/01/1948	28 10 24	2 6 20	08/05/1985	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL LUGO
56	DAVILA OLIVEDA JOSE IGNACIO	13067838	29/12/1954	28 10 24	2 6 20	08/05/1985	C.U.	
57	BELLON MOLINA FRANCISCO ANTONIO	4549967	24/01/1958	28 4 22	2 6 20	11/11/1985	Paz	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL CUENCA
58	GUERRERO EGIDO MARIA DEL ROCIO	5251823	27/02/1962	24 7 4	2 6 20	28/08/1989	C.U.	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
59	CASADO DIAGO MARIA ANGELA	12364797	22/10/1962	24 7 4	2 6 20	28/08/1989	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL LEÓN
60	RIVERA JIMENEZ SANTIAGO	5629076	30/03/1963	24 7 4	2 6 20	28/08/1989	C.U.	SALA 4ª DE LO SOCIAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
61	FERNANDEZ CORREDERA MARIA DEL CARMEN	9265246	09/06/1961	24 7 4	2 6 20	28/08/1989	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL SORIA
62	CASADO RODRIGUEZ ERNESTO PEDRO	7847074	29/06/1963	23 5 6	2 6 20	26/10/1990	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL SALAMANCA
63	GUTIERREZ LUCAS CARLOS ENRIQUE	9284926	05/04/1964	22 2 15	2 6 20	17/01/1992	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL VALLADOLID
64	GOMEZ ARROYO JOSE LUIS	13117527	30/01/1965	22 2 15	2 6 20	17/01/1992	C.U.	
65	GARCIA SANCHEZ EVARISTO JOSE	50813420	19/03/1965	19 0 18	2 6 20	13/03/1995	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
66	LARA HERNANDEZ RAFAEL	50824140	13/11/1966	20 2 1	2 6 20	01/02/1994	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL VALENCIA
67	MORENO BALLESTEROS ANGELES	391040	22/07/1960	28 4 22	2 4 9	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SALAMANCA
68	LORENTE LAMARCA AURELIA	27502716	04/08/1964	24 7 4	2 2 20	28/08/1989	C.U.	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
69	LOBON DEL RIO JOSEFA	12703911	21/10/1953	34 3 15	2 2 15	18/12/1979	Jur.Lab.	SALA 2ª DE LO PENAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
70	CUESTA Y DE QUERO SONSOLES DE LA	2503227	11/09/1956	34 3 15	2 2 15	18/12/1979	Tribunales	SALA 2ª DE LO PENAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
71	SANCHEZ TATO EDUARDO ANTONIO	32377673	12/03/1949	40 3 12	2 0 2	21/12/1973	Distrito	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL PONTEVEDRA
72	GOLDEROS CEBRIAN JOSE	6943190	06/03/1953	28 0 29	2 0 2	03/03/1986	C.U.	SALA 3ª DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
73	RODRIGUEZ VALLS Mª TERESA	11789057	30/09/1963	23 5 6	2 0 2	26/10/1990	C.U.	SALA 1ª DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
74	DIZ BARJA JOSEFINA	36079668	27/02/1967	19 0 18	2 0 2	13/03/1995	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL OURENSE
75	ESCUDERO CINCA MARIA JESUS	16515717	28/06/1957	30 3 17	1 6 27	16/12/1983	C.U.	
76	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN	35038760	13/02/1961	15 8 8	0 11 4	24/07/1998	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Primera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nombr.	Cuerpo procedencia	Destino
77	VITRIAN ARIGITA MARIA MERCEDES	15799747	04/01/1956	34 3 13	0 2 5	18/12/1979	Distrito	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
78	CANTO BAÑOS SUSANA DEL	12373517	05/11/1967	12 11 17	0 2 5	16/04/2001	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL SEGOVIA

**ESCALAFÓN DE SECRETARIOS JUDICIALES
(Cerrado a 31 de marzo de 2014)**

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1	FELICIANO GARCIA FRANCISCO	42140290	04/11/1944	43 2 26	32 3 12	07/01/1971	Juzgados	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTA CRUZ DE LA PALMA (TENERIFE)
2	RODRIGUEZ MUÑOZ ERNESTO	8635023	26/05/1945	42 9 29	32 3 12	04/06/1971	Jur.Lab.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 MELILLA
3	MAS ALIQUE RAFAEL	50650339	07/04/1944	41 10 4	32 3 12	29/05/1972	Juzgados	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 9 VALENCIA
4	RODRIGUEZ-VARO VALVERDE LUIS	39280757	20/09/1945	41 10 4	32 3 12	29/05/1972	Juzgados	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SEVILLA
5	ESCUDERO LUCAS JOSE LUIS	74126619	30/07/1945	41 10 4	32 3 12	29/05/1972	Juzgados	SJ UPAD ORG. COLEG. TSJ (2410) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
6	BENITEZ MARTINEZ ZOILO FRANCISCO	5593969	10/10/1946	41 8 13	32 3 12	19/07/1972	Jur.Lab.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
7	GONZALEZ VELASCO FRANCISCO DE ASIS	12159548	04/10/1944	41 8 13	32 3 12	19/07/1972	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
8	MARIN MADRAZO MANUEL JOSE	7769050	22/08/1948	41 8 13	32 3 12	19/07/1972	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 SALAMANCA
9	ROSA BENEROSO LORENZO	45045293	23/10/1946	40 3 28	32 3 12	05/12/1973	Juzgados	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ
10	LARROSA AMANTE JOSE	22381310	05/04/1946	40 3 28	32 3 12	05/12/1973	Juzgados	JEF. SEC. ORG UNIPERS Y COLEG. CONT ADMVO (2110) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
11	TORRES RUIZ MARGARITA	50533241	17/09/1949	40 3 28	32 3 12	05/12/1973	Juzgados	SALA 4º DE LO SOCIAL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
12	ALVAREZ SASTRE RICARDO	13655245	12/07/1945	40 3 28	32 3 12	05/12/1973	Juzgados	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
13	ELIAS PEREZ ANTONIO	8630172	13/06/1944	40 3 28	32 3 12	05/12/1973	Juzgados	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
14	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA NIEVES	10503353	18/07/1945	40 1 6	32 3 12	24/02/1974	Jur.Lab.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS JDOS.DE LO SOCIAL BARCELONA
15	ANSINO PEÑA REYES	25890413	14/09/1946	38 11 2	32 3 12	02/05/1975	Tribunales	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL JAÉN
16	PEREZ SURIO SANZ LAURA	17841450	15/10/1950	38 11 2	32 3 12	02/05/1975	Tribunales	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL ZARAGOZA
17	SALVADOR MILLA CELIA	31180941	24/08/1949	38 11 2	32 3 12	02/05/1975	Tribunales	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL SEGOVIA
18	BARRIO CALLE M. ASUNCION	3411502	17/08/1952	38 4 29	32 3 12	04/11/1975	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
19	LACHEN IBORT MARIA ISABEL	17987737	24/03/1950	38 4 29	32 3 12	04/11/1975	Jur.Lab.	SALA 1º DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO MADRID
20	ACEDO RODRIGUEZ ANTONIO LUIS	8746917	17/06/1950	36 11 28	32 3 12	06/04/1977	Jur.Lab.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
21	FARIÑAS MATONI LUIS	2692716	16/06/1952	36 11 28	32 3 12	06/04/1977	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
22	RUIZ-RICO RUIZ-MORON NATIVIDAD	25910407	26/02/1951	36 11 28	32 3 12	06/04/1977	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 JAÉN
23	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR	10556950	17/06/1954	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA OVIEDO (ASTURIAS)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
24	MENENDEZ ROBREDO MARIA EUGENIA	10557345	20/04/1954	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
25	ROMERO DE LARRUMBIDE MARIA TERESA	2495333	16/08/1955	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 TARRAGONA
26	MACEIN RODERO JESUS	7795889	05/07/1953	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
27	GONZALEZ ROMO PEDRO MARIA	7778911	15/05/1950	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
28	BAZARRA VARELA MARIA SOCORRO	76324032	12/06/1954	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
29	BRUNET CADENAS MARIA GLORIA	37243142	14/03/1946	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
30	SANJURJO ROMERO JUAN CARLOS	30064208	23/04/1951	34 10 17	32 3 12	16/05/1979	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 CÓRDOBA
31	FERNANDEZ CAMACHO MARIA LUISA	28502716	11/11/1954	34 3 15	32 3 12	18/12/1979	Tribunales	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
32	GARCIA MELON Mª DEL PERPETUO SOCORRO	9697883	18/06/1954	34 3 15	32 3 12	18/12/1979	Tribunales	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SANTANDER (CANTABRIA)
33	PORTERO FRIAS MARIA JOSE	28504784	15/02/1955	34 3 15	32 3 12	18/12/1979	Tribunales	
34	OTERO PIÑEIRO CONCEPCION	33825425	08/12/1955	34 3 15	32 3 12	18/12/1979	Tribunales	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
35	MURILLO GARCIA CARMEN	24115483	09/07/1955	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
36	TORRES GUITIAN ISABEL	50542217	18/12/1955	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
37	MACIAS SANCHEZ JOAQUIN	7782991	05/11/1950	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. VIGO (PONTEVEDRA)
38	SEGOVIANO ASTABURUAGA JULIA	12698327	07/04/1952	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
39	PITA GARRIDO CLEMENTE	28387588	23/11/1950	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALLADOLID
40	SANCHEZ-BRUNETE MURILLO ANA	1497811	11/07/1955	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	LETRADO TR.SUPREMO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
41	SANZ SEPTIEN MIGUEL	12196308	20/05/1950	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA
42	SANZ RUBIALES M. ICIAR JESUS	12233644	13/09/1956	33 11 10	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALLADOLID
43	LEAL SEGURA AURORA	24120755	03/10/1955	33 11 10	32 3 12	07/03/1980	Jur.Lab.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL GRANADA
44	TUÑÓN LAZARO CARMEN PALOMA	25936696	28/02/1956	32 10 19	32 3 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
45	BURGOS DE LA MAZA GARCIA	28379067	28/02/1949	39 3 14	32 0 1	19/12/1974	Juzgados	DECANATO PRIMERA INSTANCIA SEVILLA
46	RODRIGUEZ DIAZ ISAAC	10521625	15/04/1948	39 3 14	32 0 1	19/12/1974	Juzgados	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA OVIEDO (ASTURIAS)
47	REINA FERNANDEZ JOSE LUIS	2484643	25/10/1948	36 9 28	32 0 1	06/06/1977	Juzgados	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 BARCELONA
48	RODA ORUE JUAN LEOPOLDO	29696698	21/01/1949	36 9 28	32 0 1	06/06/1977	Juzgados	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
49	CASTELLANO ARROYO FRANCISCA	25900553	18/05/1949	36 9 28	32 0 1	06/06/1977	Juzgados	DECANATO PRIMERA INSTANCIA MÁLAGA
50	BUENDIA CANOVAS MARIA DEL CARMEN	37264585	30/03/1954	35 4 4	32 0 1	30/11/1978	Juzgados	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MURCIA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
51	SANTOS HEVIA JOSE LUIS	11372793	22/03/1954	35 4 4	32 0 1	30/11/1978	Juzgados	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
52	ELOLA SOMOZA MANUEL	1395668	08/12/1952	34 3 15	32 0 1	18/12/1979	Juzgados	SECCION Nº 24 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
53	AGUILERA RIVERA CONCEPCION	45062674	11/10/1957	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
54	CASTRO DE LA NUEZ RAFAEL	28521440	16/01/1956	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
55	GIL FLORES MARINA	5222508	20/10/1957	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	JDO. CENTRAL DE LO PENAL AUDIENCIA NACIONAL MADRID
56	MEDINA GARCIA DIEGO	24290700	23/05/1956	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA
57	FREIRE CORZO MARIA ISABEL	32415962	05/11/1955	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
58	DORADO PICON ANTONIO	28445941	09/12/1955	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
59	COLOM PERPIÑA JORDI	40282063	23/02/1956	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
60	CORRAL ABASCAL MANUEL	13057270	17/04/1952	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 25 MADRID
61	LENTISCO GARCIA EMILIO JUAN	75206547	18/04/1954	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ALMERÍA
62	PEREZ VALES JOSE LUIS	1367149	28/12/1948	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 25 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
63	CLOPES ALEMANY MARIA JESUS	40280484	05/08/1955	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 11 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
64	ENRIQUE FABIAN JULIA	6957525	11/01/1955	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
65	PELAYO JIMENEZ ELVIRA	263510	06/04/1951	32 8 18	32 0 1	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
66	GÓMEZ PARDO JUAN MANUEL	24054817	18/08/1947	36 9 28	31 6 10	06/06/1977	Juzgados	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA
67	ABRIL MENDEZ JULIO EMILIANO	10520453	08/01/1948	36 9 28	31 6 10	06/06/1977	Juzgados	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 AVILÉS (ASTURIAS)
68	HERRERO RUIZ FRANCISCO JAVIER	12698831	06/07/1952	35 4 4	31 6 10	30/11/1978	Juzgados	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTANDER (CANTABRIA)
69	ARCE MILLA ELENA DE	5221670	27/12/1957	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
70	PRIETO TORANZO MARIA JESUS	11710853	16/03/1955	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL PONTEVEDRA
71	TORIBIO GARCIA LUIS FERNANDO	28526249	11/05/1957	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
72	SAMPEDRO ESCOLAR JOAQUIN	50279949	29/01/1953	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
73	MARCOS ANDRES AMALIA	9708258	14/03/1956	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 11 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
74	PEREZ PUERTO FRANCISCO	27823615	11/11/1944	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 BARCELONA
75	BORGES DARIAS CRESCENCIANA	42017470	08/03/1953	32 8 18	31 6 10	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
76	LOJO ALLER FRANCISCO JOSE	32336836	20/04/1944	40 3 12	31 6 10	21/12/1973	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 PONTEVEDRA
77	RUIZ CARRION JUAN CARLOS	28303132	04/06/1951	36 3 19	31 6 10	14/12/1977	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 SEVILLA
78	RUBIO SAENZ INMACULADA	16505355	05/12/1954	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
79	MOMPARLER CARRASCO MARIA ANGELES	22606235	08/11/1949	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
80	EGIDO TRILLO-FIGUEROA M. ENCARNACION	1387004	07/03/1952	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
81	LOPEZ-MEDEL BASCONES ANA MARIA	5228432	09/09/1957	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
82	OLIET PALA MARIA ASUNCION	45051530	20/08/1949	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
83	COLVEE BENLLOCH M. DESAMPARADOS	13698654	11/03/1954	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SANTANDER (CANTABRIA)
84	SANZ RODERO FRANCISCO JAVIER	32419079	21/12/1955	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL TOLEDO
85	ORTEGA UGENA EUGENIO FELIX	50285354	27/10/1956	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SECCION Nº 18 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
86	NOGALES ROMEO FRANCISCO JAVIER	51338569	14/11/1958	31 2 1	31 2 1	04/02/1983	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
87	GARCIA REDONDO BASILIO	17831519	09/03/1948	31 1 10	31 1 10	28/07/1983	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ZARAGOZA
88	RAMIRO PALACIOS MARIA DEL PILAR	2188625	07/02/1954	31 1 10	31 1 10	28/07/1983	Jur.Lab.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MADRID
89	HERCE VALLEJO VICTORIANO	136161	10/05/1948	36 9 28	30 11 19	06/06/1977	Juzgados	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL ZARAGOZA
90	LOPEZ-LENDINEZ POZAS MANUEL IGNACIO	26425004	31/07/1950	34 3 15	30 11 19	18/12/1979	Juzgados	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL CIUDAD REAL
91	VICENTE JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	7815412	12/06/1957	32 8 18	30 11 19	15/07/1981	Juzgados	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL SALAMANCA
92	MEDRANO SANCHEZ JESUS ANTONIO	18401147	10/06/1950	36 3 19	30 11 19	14/12/1977	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ZARAGOZA
93	SANTOYO ESCRIBANO ELOISA	4544272	06/02/1956	32 8 18	30 3 17	15/07/1981	Juzgados	SECCION Nº 22 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
94	MALAGON FUERTES MANUEL	5067680	03/01/1946	40 3 12	30 3 17	21/12/1973	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ALBACETE
95	FUENTES COLELLA LUIS	7798855	16/03/1954	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL VALLADOLID
96	PEREZ ARROJO MARIA INMACULADA	33803692	05/09/1950	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
97	OCA DE ZAYAS BEATRIZ	2191984	12/12/1954	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	SECCION Nº 10 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
98	BAÑERES SANTOS MARIA DEL CARMEN	46313891	05/09/1952	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 14 BARCELONA
99	RODRIGUEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN	12220059	05/01/1954	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALLADOLID
100	FERRES TORRES JUAN PEDRO	23645496	12/10/1945	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 BARCELONA
101	CRISTOBAL ZURDO NAZARIO	3408789	15/12/1951	36 3 19	30 3 17	14/12/1977	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
102	ESCRIBANO ESTEBANEZ MARIA ASUNCION	13059276	25/01/1953	34 3 14	30 3 17	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
103	SAN EMETERIO PEÑA MARIA REYES	13703445	11/06/1954	34 3 14	30 3 17	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
104	MONLLOR DOMIGUEZ MARIA LIRIOS	22442984	29/03/1955	34 3 14	30 3 17	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL ZARAGOZA
105	MARTINEZ HERNANDEZ GUILLERMINA A.	6943944	11/01/1953	34 3 14	30 3 17	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
106	GONZALEZ-SANJOSE NOGALES MARIA SOLEDAD	12219651	21/04/1954	34 3 14	30 3 17	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALLADOLID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
107	PEÑA ERICE MARIA SOLEDAD	12702108	11/03/1953	34 3 14	30 3 17	18/12/1979	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOGROÑO (LA RIOJA)
108	SANCHEZ EQUIZA SAGRARIO	22433827	18/06/1953	34 1 9	30 3 17	13/12/1978	Distrito	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
109	RENOBALES MARTINEZ MARIA ISABEL	12210010	05/12/1952	34 3 14	29 9 5	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
110	HERNANDEZ ABASCAL MARIA LUISA	12212615	09/06/1953	34 3 14	29 9 5	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
111	BERNAL VIDAL MARIA ARACELI	42966310	18/07/1956	34 3 14	29 9 5	18/12/1979	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
112	RUIZ RUIZ JOSE JUAN	6958532	31/01/1956	34 3 14	29 9 5	18/12/1979	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CÁCERES
113	BALLANO GONZALO JUAN JOSE	1392515	14/09/1953	34 3 14	29 9 5	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
114	JIMENEZ JORQUERA MARIA PILAR	23194471	13/06/1951	36 3 19	29 9 5	14/12/1977	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 MURCIA
115	LOPEZ RIVERA JOSE ANTONIO	22403321	17/03/1948	36 9 28	29 5 28	06/06/1977	Juzgados	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL MURCIA
116	GUARDIA CIRUGEDA Mª BUEN CONSEJO DE LA	22609753	02/10/1951	36 3 19	29 5 28	14/12/1977	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
117	CASTILLA ROMERO ALICIA	73529023	13/12/1951	36 3 19	29 5 28	14/12/1977	Distrito	SECCION Nº 10 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
118	NUÑEZ PEDRAZA INMACULADA	667138	22/11/1956	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
119	HIDALGO HIDALGO AGUSTIN DE SAN ANTONIO	15792685	17/08/1954	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	JDO. DE LO PENAL Nº 1 DON BENITO (BADAJOZ)
120	RODRIGUEZ CASADO MARIA LUZ	71254987	09/05/1955	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MÁLAGA
121	BLANCO ECHEVARRIA MARTA	12695688	13/06/1951	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
122	ROBLES ACERA ANTONIO	8094605	24/03/1951	34 1 9	29 5 28	25/02/1980	Distrito	REGISTRO CIVIL CENTRAL MADRID
123	FUENTES FERNANDEZ MARIA LUISA	75002178	13/03/1953	34 1 9	29 5 28	25/02/1980	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
124	VERGE GRAU MARIA	39309280	11/08/1954	36 3 19	29 5 28	14/12/1977	Distrito	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
125	MARTIN LANUZA MARIA VIRGINIA	17844889	17/06/1952	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 ZARAGOZA
126	LOPEZ MARIN MARIA JESUS	17182631	21/12/1951	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 ZARAGOZA
127	FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL MAR	10544422	21/08/1951	32 5 18	29 5 28	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BARCELONA
128	CASTILLO GARCIA MARIA MERCEDES	17194437	13/08/1953	32 5 18	29 5 28	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 ZARAGOZA
129	AGUILERA ORIHUEL AURORA	51322597	14/01/1955	34 3 14	29 5 28	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 14 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
130	RIBA Y LLORET MARIA ASUNCION	77079667	24/03/1954	32 5 18	29 5 28	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 26 BARCELONA
131	PERNIAS GARCIA CRISTOBAL	21392575	04/10/1955	32 5 18	29 5 28	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SEVILLA
132	ORMAECHE ASTELARRA EDOYA	14898945	05/02/1953	34 3 14	29 2 28	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
133	CAMAZON AREVALO MARIA TERESA	12354260	10/09/1954	35 1 10	29 2 28	25/02/1980	Distrito	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
134	MARTINEZ NAVARRO ANTONIO JUAN	22425502	09/08/1952	34 3 14	29 2 28	18/12/1979	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
135	LOPEZ LINDE DIEGO JOSE	25912859	29/10/1951	34 3 14	29 2 28	18/12/1979	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MÁLAGA
136	GARCIA SANCHEZ MARIA MERCEDES	22437477	06/10/1953	32 5 18	29 2 28	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL MURCIA
137	SALGADO FERNANDEZ JOSE ANDRES	33820044	22/05/1954	32 5 18	29 2 28	15/10/1981	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A CORUÑA
138	GONZALEZ LOPEZ MARIA CRUZ	6524726	14/09/1952	35 1 10	29 0 3	13/12/1978	Distrito	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL VALLADOLID
139	ORTIZ BERENQUER MARIA DE LOS ANGELES	1480234	02/03/1952	34 3 14	29 0 3	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
140	CRESPO MARQUES BEATRIZ	1396712	23/08/1953	34 3 14	28 9 5	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
141	MORALES MIRAT ISABEL	42776263	16/11/1956	32 5 17	28 9 5	15/10/1981	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
142	DELGADO FERNANDEZ AUGUSTO	34714526	26/06/1949	32 5 17	28 9 5	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 OURENSE
143	RUBIA SANCHEZ DANIEL DE LA	45060233	15/11/1957	32 5 17	28 9 5	15/10/1981	Distrito	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL GRANADA
144	VILLANUEVA ESCUDERO AURORA	13706995	17/10/1955	32 5 17	28 9 5	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 SANTANDER (CANTABRIA)
145	BENNASAR JUAN FRANCISCA	42963237	25/01/1956	34 3 14	28 9 5	18/12/1979	Distrito	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO VALLADOLID
146	AZOFRA GARCIA ANGEL	46210249	19/09/1951	32 5 17	28 9 5	15/10/1981	Distrito	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BURGOS
147	CAMPILLO BARNES JOSE LUIS	45414456	23/12/1948	32 5 17	28 9 5	15/10/1981	Distrito	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
148	MOSQUERA LOUREDA MARIA ASUNCION	32401161	03/03/1951	34 3 14	28 9 5	18/12/1979	Distrito	JDO. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 4 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
149	DUBLANG CABRERA MARIA MERCEDES	24403448	24/09/1958	30 3 16	28 9 5	16/12/1983	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA BILBAO (BIZKAIA)
150	REDONDO GONZALEZ CELIA	3425646	07/05/1958	30 3 16	28 9 5	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
151	MOLINA LOPEZ MARIA DEL PILAR	2507679	24/12/1957	30 2 16	28 9 5	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
152	MORON SAEN DE CASAS MARIA MARAVILLAS	42926912	09/03/1955	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
153	MALDONADO PICON ROSARIO	801482	30/07/1961	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 7 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
154	RIFE FERNANDEZ-RAMOS JOSE AGUSTIN	5382867	28/12/1959	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
155	MARTIN GARCIA MARIA LUZ	4142071	04/01/1957	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 BARCELONA
156	DUQUE ORDOÑEZ M. AUXILIADORA	28545103	18/12/1958	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL SEVILLA
157	PEDRO BALLESTEROS ANA MARIA DE	7820029	19/02/1958	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 SALAMANCA
158	MARTIN BAREA MARIA TERESA	18395384	22/10/1946	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL TERUEL
159	BEJARANO MARTINEZ MARIA CRISTINA	51438875	29/11/1949	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 8 MADRID
160	SOLER CHORNET ANA MARIA	21385306	01/05/1954	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
161	PEREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	671394	11/10/1956	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SECCION Nº 12 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
162	AURED PEREZ ESTHER	17131792	23/04/1953	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
163	FERNANDEZ HOYOS FRANCISCO JAVIER	50694871	02/04/1960	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
164	BALLESTEROS GONZALO ISABEL	5251966	04/05/1962	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
165	ALBERT BENEYTO MARIA REMEDIOS	50413146	12/02/1956	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 PONTEVEDRA
166	TORRES MARIN TERESA	25938810	15/10/1955	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA
167	CARRILLO ABOS ROSA LAURA	50797005	30/08/1954	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	SECCION Nº 13 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
168	MANCHA ALVAREZ DEL VAYO ANTONIO CASTOR	9154029	08/09/1958	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 VIGO (PONTEVEDRA)
169	ESTERAS PEREZ MIGUEL ANGEL	16780657	28/01/1952	27 11 12	27 11 12	21/04/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 ZARAGOZA
170	FERNANDEZ-VIVANCOS ROMERO SACRAMENTO	50284739	19/11/1956	29 0 20	27 10 12	15/07/1981	Juzgados	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 MADRID
171	MELENDEZ-VALDES MUÑOZ MARINA	30400486	06/11/1953	27 10 4	27 10 4	28/05/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 CÓRDOBA
172	LLOPIS LUCAS MERCEDES	37254361	29/03/1950	27 10 4	27 10 4	28/05/1986	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 40 MADRID
173	EGEA GRAS ROSA MARIA	37656837	09/06/1953	27 10 4	27 10 4	28/05/1986	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
174	ORTEGA UGENA MARIA DEL CARMEN	3415653	27/07/1954	27 7 11	27 7 11	21/08/1986	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MÁLAGA
175	ROVIRA CORNET ROSA	46029200	15/08/1957	27 7 11	27 7 11	21/08/1986	Jur.Lab.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 30 BARCELONA
176	ADAME BARBETA ROSA MARIA	28353000	01/04/1953	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
177	CARRASCO MANZANARES ELENA	699075	11/01/1962	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
178	JAUREGUIZAR SERRANO MARTA	800738	09/10/1962	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SALA SOCIAL AUDIENCIA NACIONAL MADRID
179	MANGLANO DIE ISABEL	39656113	10/03/1958	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SERVICIOS COMUNES DECANATO VALENCIA
180	INIESTA GARCIA MARIA MERCEDES	36970471	25/10/1961	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
181	ESCOBAR RAMIREZ MARIA LUISA	5377147	17/09/1962	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 ALMERÍA
182	GAYO YDOATE JOSE	51351018	17/03/1961	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL MADRID
183	GARCIA DE LA VEGA LOPEZ Mª ANTONIA	50680569	07/05/1956	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 2 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
184	GONZALEZ SANTAMARIA MARIA DOLORES	36554922	19/10/1953	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 BARCELONA
185	MORENO GONZALEZ ALFREDO	5246772	21/10/1962	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ALMERÍA
186	SOLIS ARAGON JESUS	36946636	20/05/1948	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 18 BARCELONA
187	ADELLAC PASCUAL MARIA DEL CARMEN	45068406	11/04/1962	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 VIGO (PONTEVEDRA)
188	RUIGOMEZ GOMEZ MARIA CRISTINA	50305020	28/11/1960	26 7 7	26 7 7	25/08/1987	Jur.Lab.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTANDER (CANTABRIA)
189	LOPEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	22442526	18/01/1954	34 3 14	26 3 23	18/12/1979	Juzgados	SECCION Nº 9 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) con sede en ELCHE/ELX
190	PERA BAJO MARIA DEL PILAR	39623282	06/10/1945	33 3 14	26 3 23	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 TARRAGONA
191	VALBUENA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	46313660	01/02/1953	33 3 14	26 3 23	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 9 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
192	VILLAHOS RODRIGUEZ JOSE	12231706	02/07/1956	33 3 14	26 3 23	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ con sede en ALGECIRAS

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
193	RAMOS LEON MARIA DEL PILAR	5212118	23/04/1956	34 3 14	26 3 23	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
194	GARCIA-CAMBA HERNANDEZ ASCENSION	1092897	14/11/1955	33 3 14	26 3 23	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
195	REVUELTA VILLALBA MARTA	17849460	24/10/1953	33 3 14	26 3 23	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 14 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
196	BUITRON GERNER NATIVIDAD	17858479	21/11/1956	32 5 18	26 3 23	15/10/1981	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 ZARAGOZA
197	SAMPER IBAÑEZ JUAN MARIANO	17857092	30/07/1956	32 5 18	26 3 23	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 ZARAGOZA
198	CARRASCOSA LOPEZ-OBREGON FERNANDO	26417264	12/02/1947	32 5 18	26 3 23	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 16 BARCELONA
199	RUBIDO DE LA TORRE MANUEL	36002649	05/05/1954	29 0 8	26 3 23	25/06/1982	Distrito	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL PONTEVEDRA
200	MONTOYA MONJA MARIA CRUZ	17998893	15/02/1952	29 5 12	26 3 23	21/10/1983	Paz	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOGROÑO (LA RIOJA)
201	SANCHEZ GARCIA PAULINA	7814196	03/01/1956	29 8 18	26 3 23	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 16 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
202	SANCHO VILLARREAL MARÍA AMELIA DEL PINO	42787633	11/09/1957	29 3 17	26 3 23	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
203	ROCA ROBLES ENRIQUE FCO.	18907600	11/11/1956	30 3 17	26 3 23	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ALBACETE
204	PEDREIRA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	32416552	23/01/1956	30 3 17	26 3 23	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA con sede en SANTIAGO DE COMPOSTELA
205	MARTIN JIMENEZ J.MANUEL ANDRES	7814968	26/06/1956	29 3 17	26 3 23	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SALAMANCA
206	TORRES PUERTAS MARIA TERESA	37726913	18/12/1955	33 3 4	26 3 13	18/12/1979	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 BARCELONA
207	ORTEGA ARRIBAS LUIS MARIA	71253949	27/09/1953	29 11 2	26 2 19	15/10/1981	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL BURGOS
208	ALONSO CRESPO EVELIA	10178858	12/09/1955	30 3 17	26 0 7	16/12/1983	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA OVIEDO (ASTURIAS)
209	ARAGON CORREDOR FERNANDO	4556994	19/02/1959	30 3 17	26 0 7	16/12/1983	C.U.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL CUENCA
210	COBETA MATEO CARLOS	17110706	17/09/1945	29 8 6	26 0 7	27/07/1984	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 ZARAGOZA
211	FERNANDEZ AYESA ANTONIO	15778107	01/07/1952	27 3 22	26 0 7	11/03/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
212	GALIPIENSO CALATAYUD MARIA DEL CARMEN	22108101	18/07/1950	36 3 18	25 9 9	14/12/1977	Distrito	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
213	OCA DE ZAYAS ELENA	16499227	23/06/1953	36 3 19	25 9 9	14/12/1977	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
214	LOPEZ APARICIO MARIA LUZ	50412290	31/07/1955	42 3 16	25 9 9	18/12/1979	Distrito	DECANATO PRIMERA INSTANCIA MADRID
215	MARTINEZ CASIELLES MARIA ROSARIO	50278739	30/03/1952	33 3 14	25 9 9	18/12/1979	Distrito	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MARBELLA (MALAGA)
216	LLORENTE GARCIA HILARIO	3063044	05/01/1951	33 3 14	25 9 9	18/12/1979	Distrito	SJ UPAD CONT ADMVO Y JEFE SEC SE CIV/CA/SOC en SCE (2275) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CUENCA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
217	HERVAS PASTOR JOSE MIGUEL	25900051	06/02/1948	33 1 10	25 9 9	25/02/1980	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 GRANADA
218	DIAZ SANCHEZ MARIA LUISA	32417084	02/10/1955	32 5 18	25 9 9	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 A CORUÑA
219	CASTILLO CAMPOS JUAN MANUEL	50796987	29/08/1954	32 5 18	25 9 9	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL TOLEDO
220	MARTIN LANDETE EUGENIA ROSA M.	20772515	20/12/1956	32 5 18	25 9 9	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
221	ANDRES PARRA CARMEN	7935593	19/09/1949	36 3 19	25 9 9	14/12/1977	Distrito	JDO. DE LO PENAL Nº 2 SALAMANCA
222	PEÑA QUINTANA PEDRO JOSE	13065612	29/07/1953	32 5 18	25 9 9	15/10/1981	Distrito	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 3 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
223	CERRO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR DEL	50536948	15/02/1952	32 5 18	25 9 9	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 17 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
224	MORENO CAMACHO EMILIA	28664079	01/09/1958	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 10 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
225	PIZANO BARON JUAN LUIS	38491321	20/05/1958	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
226	PEÑA BONILLA MARIA FILOMENA	38403095	23/01/1953	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 18 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
227	PAREJA DOMINGUEZ LUIS FERNANDO	24291991	01/06/1958	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
228	GORMAZ ADELL MARIA CONSUELO	17861289	01/10/1957	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 23 BARCELONA
229	GRAU RECH CONCEPCION	74166508	02/02/1956	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL MURCIA
230	SOBRADO PRADO MARIA DEL CARMEN	33801871	10/03/1950	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL PONTEVEDRA con sede en VIGO
231	ORTEGA PINTO LUIS TOMAS	6202730	08/05/1954	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 ZARAGOZA
232	RUIZ GARCIA MARIA ADELA	24128780	17/10/1955	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 8 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
233	RUBIO DE LA CRUZ JAVIER JOSE	22658254	18/12/1954	30 3 17	25 9 9	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 VALENCIA
234	MOLINA CIFUENTES FRANCISCO RAMON	36914222	31/08/1952	29 8 6	25 9 9	27/07/1984	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 21 BARCELONA
235	FERREIRO GONZALEZ MANUEL	33783663	01/07/1946	29 2 1	25 9 9	01/02/1985	Paz	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA
236	BARROS ESTEVEZ M.ROSARIO FATIMA	36044060	10/05/1960	29 2 1	25 9 9	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 VIGO (PONTEVEDRA)
237	DIAZ DE NORIEGA SELLES CONCEPCION	31205994	21/03/1956	28 10 24	25 9 9	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
238	SALGADO DERQUI CONCEPCION	17868002	10/10/1958	28 10 24	25 9 9	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ZARAGOZA
239	CELMA VALLES ISABEL	73151641	15/01/1959	28 10 24	25 9 9	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 ZARAGOZA
240	LABRADOR RODRIGUEZ ALICIA	786515	05/11/1956	28 10 24	25 9 9	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 19 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
241	ALONSO ORTEGA Mª DE LOS ANGELES	12225320	02/06/1955	28 10 24	25 9 9	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL VALLADOLID
242	GIMENO SANTOLARIA ALVARO	18920470	21/04/1959	28 10 24	25 9 9	08/05/1985	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
243	MARTIN ZAMORA MARGARITA	12708769	12/02/1955	32 8 18	25 5 5	15/07/1981	Juzgados	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL PALENCIA
244	GARCIA MONTES BLANCA CLARA	2497154	18/11/1956	34 3 14	25 5 5	18/12/1979	Distrito	JDO. DE MENORES Nº 1 MADRID
245	GUERRERO SALAZAR INMACULADA	24105699	11/12/1953	32 5 18	25 5 5	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 MÁLAGA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
246	EDERRA SANZ Mª ANGELES NATIVIDAD	15807392	16/12/1956	32 5 18	25 5 5	15/10/1981	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
247	SOGO PARDO MARIA CONSUELO	11697042	26/05/1952	31 5 28	25 5 5	06/06/1977	Juzgados	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 SALAMANCA
248	PASTOR HERRERO MARIA JOSE	12700704	16/09/1952	32 5 18	25 5 5	15/10/1981	Distrito	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 10 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
249	LUNA RIVAS RAFAEL	21341773	09/01/1946	31 0 22	25 5 5	11/03/1983	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
250	FUENTE ISABAL MARIA PAZ DE LA	2059894	29/07/1947	31 0 22	25 5 5	11/03/1983	C.U.	SECCION Nº 28 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
251	PEÑA ARANGUREN MARIA LOURDES	24400046	29/12/1956	30 3 17	25 5 5	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
252	CACHO MORENO MARIA EUGENIA	9253241	06/06/1959	30 3 17	25 5 5	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 VALLADOLID
253	TUGORES FRAU MARGARITA	42977540	14/09/1957	30 3 17	25 5 5	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
254	GARCIA MADORELL MARIA DEL CARMEN	35011023	11/03/1959	30 3 17	25 5 5	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
255	CORDON CALDERO IRENE	35005911	25/12/1958	30 3 17	25 5 5	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 15 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
256	MUÑOZ DE LA ESPADA TENDERO VICENTE	5610297	18/03/1953	29 8 5	25 5 5	27/07/1984	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL CIUDAD REAL
257	CHECA BOSQUE MARIA LOURDES	17847924	08/08/1953	28 10 24	25 5 5	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 31 BARCELONA
258	VILCHES FERNANDEZ MIGUEL	24152796	11/07/1959	28 10 24	25 5 5	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
259	AGÜERO SANCHEZ MARIA GADOR	75214336	22/05/1959	28 10 24	25 5 5	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
260	ROSSI NIETO MARIA GLORIA	3433455	09/05/1960	28 10 24	25 5 5	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 MADRID
261	ALDAMA ULIBARRI JUAN ANTONIO	14579226	18/06/1960	28 10 24	25 5 5	08/05/1985	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
262	ALVARO ARAUJO MANUEL	36036370	26/10/1959	28 10 24	25 5 5	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
263	HERNANDEZ-GIL MANCHA MARIA MAGDALENA	406028	21/11/1963	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	
264	CARRERO RODRIGUEZ MARGARITA	5355142	22/09/1957	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BURGOS
265	URIOS JOVER BLANCA	46119949	24/02/1964	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 33 BARCELONA
266	ALVAREZ TRIPERO MARIA DEL CARMEN	28577726	23/10/1963	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
267	CABADAS ARQUERO FERNANDO	4551469	04/06/1958	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JEF. SEC. EJECUCION CA/SO (2040) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES MURCIA
268	MORA RUBIO ESTHER	22545256	09/06/1963	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL LOGROÑO (LA RIOJA)
269	REDONDO VALDEON MARIA DOLORES	50154761	06/07/1963	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 31 MADRID
270	NICOLAS NICOLAS ROSA ELENA	33873748	26/06/1962	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 CARTAGENA (MURCIA)
271	RUIGOMEZ GOMEZ JAIME	50295533	05/03/1959	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
272	ESTEBAN DELGADO MARIA VICTORIA	50705253	01/06/1962	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 MÓSTOLES (MADRID)
273	MORENO HERRERO VIRGINIA	16795893	08/06/1964	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
274	EGURBIDE MARGAÑON MARIA ADELAIDA	46212594	12/02/1954	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 A CORUÑA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
275	TAPIA CEBALLOS LAURA	24217621	27/09/1964	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA
276	REDONDO MIRANDA MARIA DEL PILAR	9172872	22/08/1963	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL BADAJOZ
277	CALATAYUD SEGARRA VICENTE MARIA	24306772	15/01/1958	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
278	ARTEAGA GARCIA MARIA ANGELES	50685208	07/12/1957	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	SJ UPAD ORG. COLEG. TSJ (2410) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
279	SEVILLANO ZAMUDIO ALONSO	27290471	03/09/1962	25 2 16	25 2 16	16/01/1989	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 SEVILLA
280	REVILLA GUZMAN PILAR	5213928	25/04/1956	25 2 12	25 2 12	24/04/1980	Jur.Lab.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
281	BELMONTE MENA ANGEL MIGUEL	22436174	03/04/1954	29 8 18	25 1 20	15/07/1981	Juzgados	SJ ORG UNIPER Y COLEG CONT ADMVO (2400) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
282	GOMEZ PASCUAL MARIA LUISA	28507750	27/06/1955	34 3 14	25 1 20	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 8 SEVILLA
283	VILLALBA SANCHEZ MERCEDES	5345311	26/06/1956	34 3 14	25 1 20	18/12/1979	Distrito	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 1 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
284	ALCAZAR MARTINEZ BLANCA	6191443	26/10/1949	34 3 14	25 1 20	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 12 BARCELONA
285	GAMEZ RODRIGUEZ MARIA FRANCISCA	26437523	22/12/1954	34 3 14	25 1 20	18/12/1979	Distrito	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 11 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
286	MORALES MORENO ANGELES LETICIA	51326556	03/12/1955	34 3 14	25 1 20	18/12/1979	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 29 MADRID
287	OVANDO MURILLO MARIA DOLORES	8689420	06/07/1955	32 5 18	25 1 20	15/10/1981	Distrito	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO BADAJOZ
288	BLANCO LIZANA M.DE LOS ANGELES	10566242	20/10/1955	32 5 18	25 1 20	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
289	LOPEZ MARQUEZ MARIA	22437598	08/03/1952	32 5 18	25 1 20	15/10/1981	Distrito	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL MURCIA
290	VILLALOBOS SANCHEZ LUIS	24146980	20/08/1958	32 5 18	25 1 20	15/10/1981	Distrito	JDO. DE LO SOCIAL Nº 11 MÁLAGA
291	URIARTE DE LOS SANTOS MARIA AURORA	1805246	10/04/1956	34 3 14	25 1 20	18/12/1979	Distrito	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 8 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
292	GARCIA-PUENTE RUIZ MARIA ASIS	2193974	22/12/1955	32 5 18	25 1 20	15/10/1981	Distrito	REGISTRO CIVIL CENTRAL MADRID
293	BRIZUELA GARCIA JOSE LUIS	13030456	18/06/1944	31 0 22	25 1 20	11/03/1983	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL BURGOS
294	RUIZ DE VELASCO Y LINARES MARIA LUISA	1492334	17/10/1954	32 5 18	25 1 20	15/10/1981	Distrito	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ)
295	MATEOS ANTON ARTURO	7768618	15/05/1944	31 0 22	25 1 20	11/03/1983	C.U.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL ÁVILA
296	ROSAL ALONSO MARIA LOURDES DEL	1105919	01/09/1959	30 3 17	25 1 20	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 36 MADRID
297	ESTAL PADILLO ROSA MARIA DEL	50303326	14/06/1960	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 9 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
298	RUIZ QUEROL ROSA MARIA	17151571	16/08/1960	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 TARRAGONA
299	GARCIA GARCIA TEODORO JESUS	24901948	03/12/1960	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
300	OLIVEROS BRAGADO MARIA LUISA	77083835	04/02/1955	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 15 BARCELONA
301	RODRIGUEZ ZULAICA ISABEL	15921821	20/02/1957	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
302	MORA LOMBARTE VICTORIA PILAR	40906584	22/11/1952	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 BARCELONA
303	LOPEZ-HONTANAR FERNANDEZ-ROLDAN CONCEPCION	51969237	08/12/1952	28 10 24	25 1 20	08/05/1985	C.U.	SALA PENAL Nº 2 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
304	CAMPO GUERRI MARIA JESUS	17199630	20/07/1957	28 10 17	25 1 20	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 54 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
305	GONZALEZ TEJERINA AMELIA	2503219	16/09/1956	28 4 22	25 1 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 53 MADRID
306	MONTESINOS GARCIA CONCEPCION	27427484	17/09/1960	28 10 24	24 11 16	08/05/1985	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES MURCIA
307	CORREDOR CANO MARIA DOLORES	30401211	01/10/1953	29 10 24	24 11 16	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 7 MÁLAGA
308	POWER MEJON MARIA PATRICIA	5231328	24/03/1960	28 10 24	24 11 16	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 GRANADA
309	SANCHEZ AGUILAR MANUEL	75370436	13/08/1955	28 8 25	24 11 6	28/06/1985	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL GRANADA
310	BUENO SANCHEZ MARIA DEL PILAR	21408279	10/08/1958	30 3 17	24 10 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 TARRAGONA
311	OLARTUA LASPRA MARIA DEL CARMEN	14925140	04/04/1956	30 3 17	24 10 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
312	SUAREZ DIAZ RAFAEL	50407369	11/11/1953	30 3 17	24 10 1	16/12/1983	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SORIA
313	STAMPA CASTILLO MARIA JESUS	15942430	12/06/1960	28 10 24	24 10 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
314	ASTIGARRAGA LOINAZ MARIA JESUS	15907780	10/08/1954	28 10 24	24 10 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
315	BLANCO PEREZ DOLORES	34925002	24/08/1959	28 10 24	24 10 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 BARCELONA
316	VIVES REQUENA MARIA DEL PILAR	73934989	19/06/1952	28 10 24	24 10 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 32 BARCELONA
317	BENITO GIL ADELA MARIA	17144650	05/03/1958	28 4 22	24 10 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE MENORES Nº 2 ZARAGOZA
318	GOROSTIDI PULGAR MARIA DEL CORO	15939643	20/08/1959	28 4 22	24 10 1	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
319	AGER ICIZ VICENTE	15829838	02/09/1958	28 0 29	24 10 1	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
320	YUSTE GONZALEZ DE RUEDA MARIA DOLORES	17699481	28/04/1958	28 4 22	24 7 4	11/11/1985	C.U.	DECANATO PRIMERA INSTANCIA ZARAGOZA
321	BARDAJI PASCUAL YOLANDA	46318940	23/11/1955	28 4 22	24 7 4	11/11/1985	Paz	LETRADO TR.SUPREMO TRIBUNAL SUPREMO MADRID
322	MARTIN CONTRERAS LUIS	13073168	25/08/1956	28 4 22	24 7 4	11/11/1985	Paz	SECRETARIA DE GOBIERNO AUDIENCIA NACIONAL MADRID
323	TATO Y GONZALEZ-ESPADA MARIA SOLEDAD	21381101	21/12/1953	34 3 14	24 4 20	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
324	FRUTOS VINUESA JOSE MIGUEL DE	3412754	20/02/1953	34 3 14	24 4 20	18/12/1979	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 LOGROÑO (LA RIOJA)
325	SANCHEZ-AREVALO RODRIGUEZ MARIA MONTAÑA	10559404	01/03/1954	34 3 14	24 4 20	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA OVIEDO (ASTURIAS)
326	PEINADO HERREROS CLARA	24106729	19/01/1954	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	SECRETARIA DE GOBIERNO MELILLA
327	MONTERO CARRE MARIA CRISTINA	32411144	30/09/1954	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA
328	SANCHEZ GARCIA MANUEL	7792358	05/11/1952	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BURGOS
329	ROSSI MARTIN MARIA TERESA	30047131	19/05/1949	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 CÓRDOBA
330	PEREZ TORRES EUGENIA	24129982	05/10/1956	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
331	ZUMAQUERO ROMERO MARIA PIEDAD	27907905	19/07/1954	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 SEVILLA
332	DIEZ GARRETAS MARIA MERCEDES	12220070	29/07/1954	30 3 17	24 4 20	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 SANTANDER (CANTABRIA)
333	MENENDEZ URBON MARIA JOSE	10550638	26/02/1953	30 5 12	24 4 20	21/10/1983	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MARBELLA (MALAGA)
334	NARANJO SANGUINO INMACULADA	6968281	21/02/1957	30 3 17	24 4 20	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 BADAJOZ

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
335	CIDONCHA MERINO LUIS ROMAN	13070127	09/08/1955	29 8 6	24 4 20	27/07/1984	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL HUELVA
336	SILVA GOTI MARIA	24404765	16/05/1959	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 6 MADRID
337	ROSPIDE GARCIA MARIA JOSE	5630355	17/12/1959	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
338	RUIZ POLANCO ANA MARIA	9259010	04/07/1959	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALLADOLID
339	HERNANDEZ GALLEGO PEDRO JOSE	5231620	23/10/1958	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MADRID
340	SAEZ DOMENECH PASCUAL	22105305	18/09/1954	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 MURCIA
341	SANCHEZ GIL MARIA ISABEL	5145344	05/08/1958	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ALBACETE
342	GARCIA GONI CAROLINA MARIA	14955667	11/08/1960	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
343	MARIN VALLE AURORA	26738361	03/01/1961	28 2 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA HUELVA
344	GARCIA CUADRADO ISABEL	7773918	28/02/1949	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 VALENCIA
345	NODAR MONTES M.LUZ MERCEDES	36031682	24/09/1958	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 MADRID
346	SAIZ LOPEZ MARIA DOLORES	13902746	08/08/1958	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALLADOLID
347	PITA LOPEZ ANA MARIA	28680137	05/07/1960	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 20 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
348	BORGES ALEJO LUCIANO	22660581	16/10/1955	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	DECANATO PRIMERA INSTANCIA VALENCIA
349	BLANCO ALMENDROS ANTONIO	673426	30/10/1957	28 10 24	24 4 20	08/05/1985	C.U.	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 12 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
350	ESPAÑOL FAUQUIE MARIA ASCENSION	17853417	04/07/1954	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	JDO. DE LO PENAL Nº 4 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
351	LOZANO RODRIGUEZ MARIA JESUS	10569891	28/02/1956	32 5 18	24 4 20	15/10/1981	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 TERRASSA (BARCELONA)
352	PADILLA SANTERVAZ FELIPE	42764862	04/08/1955	28 8 2	24 4 20	30/07/1985	Res.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
353	ARRIETA LOREDO ENRIQUE	15345061	26/08/1951	28 8 2	24 4 20	30/07/1985	Res.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
354	FERNANDEZ PIÑERO MARGARITA MERCEDES	50288863	23/05/1957	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 GETAFE (MADRID)
355	ARIAS DE LA MATA LUZ MARIA DE LOS DOLORES	275357	27/09/1956	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
356	GONZALEZ-CASABON USIETO GENOVEVA	39838683	21/08/1954	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
357	NICOLAS PUMAREGA ALBERTO	36923641	22/06/1955	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 13 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
358	FERNANDEZ PASCUAL MARIA DEL PILAR	275067	17/09/1954	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
359	GIL ESTEBAN MANUEL IGNACIO	22628067	16/09/1956	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
360	LACASA CLAVER MARIA DEL PILAR	17855515	28/12/1955	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ZARAGOZA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
361	LOPEZ CALERA JOAQUIN MARIA	24099334	12/04/1953	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 GRANADA
362	AGUILAR RIBOT JOSE IGNACIO	50413055	25/11/1955	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 BARCELONA
363	AUNOS GOMEZ RAQUEL	41094740	08/06/1960	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL TARRAGONA
364	ESTELLES RODRIGUEZ MARIA DOLORES	1626553	14/09/1952	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 11 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
365	LAVIÑA QUEROL INMACULADA	17857173	09/09/1956	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 ZARAGOZA
366	MARTINEZ GARCIA RAUL	37793705	01/04/1959	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE MENORES Nº 1 HUESCA
367	BACA CASTELLANO MARIA CINTA	24853511	21/08/1957	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 14 MÁLAGA
368	GIMENEZ LOPEZ MARIA DEL MAR	22447099	22/02/1955	28 4 22	24 4 20	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 38 MADRID
369	MARTIN GARCIA JUAN JESUS	9264758	27/12/1960	28 0 29	24 4 20	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 VALLADOLID
370	ALONSO BERRIO-ATEGORTUA ELENA MERCEDES	50701847	22/12/1961	28 0 29	24 4 20	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 23 MADRID
371	ANDRES HERRERO MARIA ASUNCION DE	3433554	15/08/1960	28 0 29	24 4 20	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 9 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
372	MORENO ONORATO MANUEL S.	24156205	24/08/1959	28 0 29	24 4 20	03/03/1986	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
373	LAFUENTE DE BENITO MARIA DEL PILAR	3429430	23/08/1959	28 0 29	24 4 20	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD CIVIL Y DE SEC CIVIL/CA/SO en SCOP (2340) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
374	RAMOS MEDRANO RAFAEL	13104823	02/03/1961	26 10 18	24 4 20	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 16 SEVILLA
375	VARELA PUGA FERNANDO	33818349	05/03/1956	26 10 18	24 4 20	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO VIGO (PONTEVEDRA)
376	JIMENEZ BADA ANA MARIA	75406108	03/04/1961	26 10 18	24 4 20	14/05/1987	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
377	CASTILLO HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	50675495	19/12/1955	32 5 18	24 3 4	15/10/1981	Distrito	JDO. DE MENORES TOLEDO
378	PALAZUELOS MORLANES JOSE	50797750	28/09/1955	31 5 18	24 3 4	15/10/1981	Distrito	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID
379	BARRIOS ESPINOSA DE LOS MONTERO RAFAEL	28405787	15/08/1953	32 5 18	24 3 4	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 9 SEVILLA
380	TELLECHEA LOPEZ DE CALLE MARIA MONTSERRAT	14926008	27/09/1955	31 5 18	24 3 4	15/10/1981	Distrito	JDO. DE MENORES Nº 2 MADRID
381	ALONSO RODENAS ANA	26435085	17/08/1953	32 5 18	24 3 4	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL MURCIA con sede en CARTAGENA
382	HIGUERA ESPIN MARIA JOSE DE LA	24130902	10/11/1956	30 3 17	24 3 4	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL GRANADA
383	ALONSO GRAÑEDA MARIA ISABEL	6528862	16/05/1955	30 3 17	24 3 4	16/12/1983	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 4 MADRID
384	RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA DEL PILAR	7828201	10/10/1959	30 3 17	24 3 4	16/12/1983	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL (2005) BURGOS
385	ANDREU FERNANDEZ-ALBALAT MARIA DEL PILAR	74163627	25/02/1955	34 3 14	24 3 4	18/12/1979	Distrito	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
386	BITRIAN AISA M.MERCEDES LAURA	17998419	17/02/1955	28 10 24	24 3 4	08/05/1985	Distrito	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL LLEIDA
387	CALVO CARRASCO MARIA ISABEL	5243119	29/05/1960	28 10 24	24 3 4	08/05/1985	C.U.	SALA PENAL Nº 1 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
388	JIMENEZ REDONDO AMALIA JOSEFA	50799836	18/03/1957	28 10 24	24 3 4	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 35 MADRID
389	SANCHEZ MARZAL MERCEDES	26435437	08/08/1955	32 5 18	24 3 4	15/10/1981	Distrito	JDO. DE LO PENAL Nº 4 GRANADA
390	SORIGUERA SERRA ALBERTO	39298687	02/07/1951	29 8 6	24 3 4	27/07/1984	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL MANRESA (BARCELONA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
391	RODRIGUEZ MORILLO CESAR CARLOS	51630509	14/06/1959	28 10 24	24 3 4	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
392	ROEL PENAS ENRIQUETA	32409520	18/07/1953	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA
393	SEVILLA SANTIAGO LUIS FERNANDO	13072351	20/12/1955	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
394	LANA Y ARALUCE GLORIA	14901646	04/04/1953	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
395	SANCHEZ MARTIN M. DE LAS PEÑAS ALBAS	7436376	13/01/1956	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ELCHE/ELX (ALICANTE)
396	PALACIO DUÑABEITIA VICTORIA OLGA DEL	9735820	21/11/1960	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
397	GARCIA GONZALEZ MARIA ANTONIA	7818492	12/02/1956	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 VALENCIA
398	RODRIGUEZ DE ALBALADEJO ROMAN	22616357	08/04/1953	28 4 22	24 3 4	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 9 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
399	SIRVENT GUIJARRO FRANCISCO	21423357	17/01/1960	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
400	MARTINEZ SANTAMARIA JUAN CARLOS	22533166	16/03/1959	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 VALENCIA
401	GARRIGOS CASTEJON M.DE LOS ANGELES	5376786	20/08/1960	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 80 MADRID
402	SANTAMARIA YAÑEZ JUAN CARLOS	790247	15/01/1958	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS) con sede en GIJÓN
403	MORETON ALONSO PALMIRA ANA	12238153	26/07/1957	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL TARRAGONA
404	BRAGADO LORENZO MIGUEL ANGEL	11727475	20/09/1960	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 CÁDIZ
405	GONZALEZ RODRIGUEZ-SALINAS MARIA ESPERANZA	31226774	13/05/1960	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 CÁDIZ
406	ARIZAGA CIORDIA MARIA JESUS	15349977	07/06/1955	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD ORG.GOLEG AP Y SJ SEC CI/CO/SO en SCEJ (2366) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
407	GALLO HIDALGO JOSE LUIS	13074429	16/09/1956	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL BURGOS
408	MARTIN AUBERNI Mª CARMEN	78066564	22/02/1959	28 0 29	24 3 4	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 BARCELONA
409	NIETO PEÑA MAITE	40515161	28/12/1960	26 10 18	24 3 4	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
410	ALCALDE SANCHEZ CESAR AUGUSTO	17421363	15/06/1948	36 3 19	24 3 1	14/12/1977	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 ZARAGOZA
411	FRANCO RIVAS M. DEL CARMEN	2837759	21/02/1951	34 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MADRID
412	FERNANDEZ GUTIERREZ M. VISITACION	11047149	14/04/1953	34 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
413	RUBIO DELGADO FRANCISCO JAVIER	27174027	03/12/1945	34 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
414	CIRIA MATILLA MARIA DEL PILAR	1396274	23/03/1954	35 1 10	24 3 1	25/02/1980	Distrito	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MADRID
415	VIVAS ALMENDROS EMILIO I.	28387880	31/07/1950	35 1 10	24 3 1	25/02/1980	Distrito	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MADRID
416	MELLADO RAMOS MARIA LUISA	24084103	04/11/1950	34 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA GRANADA
417	LADERA SAINZ MARIA DOLORES	16784922	16/10/1955	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 ZARAGOZA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
418	TELLEZ ESCOLANO JOSE MARIA	3065080	27/04/1952	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 ZARAGOZA
419	GONZALEZ ESPINOSA CONCEPCION	24106089	25/12/1953	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 CÓRDOBA
420	VILLA-REAL BERRUEZO FRANCISCO JAVIER	24127958	02/05/1956	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 GRANADA
421	BENITO Y BENITEZ DE LUGO JOSE LUIS DE	11709232	26/03/1956	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	CONSJ.GRAL.PODER JUDICIAL MADRID
422	LAFUENTE MORENO INES FRANCISCA	17855000	29/12/1954	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 ZARAGOZA
423	VALVERDE GARCIA JUAN DE DIOS	22440423	23/03/1947	32 5 18	24 3 1	13/12/1978	Distrito	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA MURCIA
424	VALDESPINO GOMEZ MARIA VICTORIA	12206834	04/09/1950	36 3 19	24 3 1	14/12/1977	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 VALLADOLID
425	LOPEZ JADO MARIA DE LA SOLEDAD	2193186	10/09/1954	34 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 MADRID
426	MADORRAN HERGUERA JOSE MARIA	16492270	05/04/1951	34 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
427	GARCIA-DENCHE NAVARRO MARIA TERESA	51444289	15/10/1955	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	C.U.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL TERUEL
428	RAMOS JIMENEZ MANUEL JESUS	25927863	01/06/1954	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ con sede en JEREZ DE LA FRONTERA
429	MONTES CARACUEL ROCIO	50020348	12/03/1952	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 CÓRDOBA
430	COBOS AMO GLORIA	30416727	05/09/1955	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 14 SEVILLA
431	FERNANDEZ AGUADO MARIA JOSE	2507730	19/06/1957	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
432	RODERO LUNA BEGOÑA CLOTILDE	26445037	22/06/1957	32 5 18	24 3 1	25/10/1981	Distrito	DECANATO PRIMERA INSTANCIA SEVILLA
433	MARTINEZ-CONDE RAMIREZ MARIA DEL PILAR	5343507	28/04/1956	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 21 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
434	VALLE PRIETO MONTSERRAT DEL	11356566	09/07/1947	34 8 21	24 3 1	14/12/1977	Distrito	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. A CORUÑA
435	SALDAÑA HERMOSA MARIA MILAGROS	12705548	05/04/1953	34 3 15	24 3 1	18/12/1979	Distrito	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL VALLADOLID
436	MARTINEZ LOPEZ-PUIGSERVER ANDRES	21348444	28/02/1948	34 3 15	24 3 1	18/12/1979	Distrito	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
437	BARONA SANCHIS CESAR MANUEL	22509196	25/02/1951	34 1 10	24 3 1	25/02/1980	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 VALENCIA
438	CASTAÑON ALVAREZ JOSE FERNANDO	7781122	19/05/1950	34 1 10	24 3 1	25/02/1980	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 OVIEDO (ASTURIAS)
439	DOBLADO HERRERA LEONARDO	21932380	27/08/1944	31 0 22	24 3 1	11/03/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 13 SEVILLA
440	TORRANDELL FERRAGUT ANA	42963703	15/01/1956	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	DECANATO PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
441	PORCEL CRUZ ANTONIA	24130460	15/10/1955	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL GRANADA
442	BERNARDEZ JIMENEZ LEONOR	28671044	06/07/1959	30 2 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 13 SEVILLA
443	AGUADO RAMO MARIA SOCORRO	2698200	10/06/1957	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 26 MADRID
444	MARTIN UCEDA MARGARITA	50294380	25/06/1959	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 19 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
445	DELGADO ZAMARREÑO MARIA DOLORES	6974561	01/02/1959	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 SALAMANCA
446	PRIETO BLANCO MARIA PILAR	10172998	24/10/1954	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 GIJÓN (ASTURIAS)
447	FERRERAS MENENDEZ ANGEL	10583331	30/06/1958	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 OVIEDO (ASTURIAS)
448	ORTIZ RODRIGUEZ MARIA JOSE	50295595	05/05/1959	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 36 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
449	MILLAN Y MON MARIA DEL PILAR	35283038	21/10/1959	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 PONTEVEDRA
450	GARRIDO GOMEZ Mª MARGARITA	2498492	04/12/1955	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 92 MADRID
451	GALLEGO OTERO Mª CONCEPCION FRANCA	7821286	01/12/1956	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 SALAMANCA
452	GARCIA JALON DE LA LAMA MARIA MANUELA	16514294	07/07/1957	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
453	SANZ GOMEZ PURIFICACION	1488607	21/10/1953	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	SALA PENAL Nº 4 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
454	CORNEJO PEREZ MARIA ELENA	1392532	08/10/1952	34 3 15	24 3 1	18/12/1979	Distrito	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
455	RODRIGUEZ GARCIA MARIA TERESA	7809951	23/05/1956	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	JDO. DE LO PENAL Nº 21 MADRID
456	ALVAREZ FERNANDEZ MARIA AMELIA	1495731	19/04/1955	32 5 18	24 3 1	15/10/1981	Distrito	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
457	MANZANO PAULE MARIA ANGELES	670887	11/10/1956	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 17 MADRID
458	CABALLERO CORRAL MARIA SOLEDAD	2492751	03/07/1953	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TOLEDO
459	ALONSO VELASCO ISABEL	10791493	26/05/1953	30 3 17	24 3 1	16/12/1983	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
460	PEREZ MODINO MAXIMO	9664215	11/06/1948	29 8 6	24 3 1	27/07/1984	C.U.	SJ UPAD ORG. COLEG. AP (2415) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
461	CODINA CASTRO ESTHER	5341479	27/01/1955	29 8 6	24 3 1	27/07/1984	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 13 MÁLAGA
462	FUENTES MARTIN MARIA BLANCA	51618399	06/12/1956	30 3 16	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MÓSTOLES (MADRID)
463	CONDE DIAZ MARIA DE LA PAZ	33830827	22/11/1958	30 3 16	24 3 1	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 25 MADRID
464	ALVAREZ TURANZAS MIGUEL ANGEL	71688968	15/01/1949	29 2 1	24 3 1	01/02/1985	Paz	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 OVIEDO (ASTURIAS) con sede en GIJÓN
465	YAÑEZ RODRIGUEZ Mª DEL CARMEN	28670543	05/07/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 10 SEVILLA
466	MARTIN MINGORANCE CLARA EUGENIA	24159155	02/09/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 SEVILLA
467	SEGURA MILLAN MARIA ISABEL	51639168	20/02/1961	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 45 MADRID
468	TOMAS TORRENS ISABEL	42980263	01/07/1958	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
469	LAFUENTE DE BENITO ROSA MARIA	3418077	12/07/1955	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 SEGOVIA
470	PEREZ PEREZ AURELIA	28852548	11/11/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 SEVILLA
471	ZURITA TAIN ANGELA MARGARITA	5224107	17/10/1957	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 SEVILLA
472	RASCADO GONZALEZ FRANCISCO	34918250	16/12/1957	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 VIGO (PONTEVEDRA)
473	JUSTO BRUIXOLA MARIA AMPARO	24311606	16/01/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 VALENCIA
474	LLAMAS HERMIDA ESPERANZA	12225685	13/06/1955	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 VALLADOLID
475	HERNANDEZ BURGOS MARIA DOLORES	23769435	07/06/1955	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 GRANADA
476	MARTINEZ COLLAZOS MARIA TERESA	12230211	30/06/1955	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 VALLADOLID
477	SANZ DE SANTOS JOSE ANTONIO	16782915	13/03/1954	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
478	RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO	27279702	12/05/1958	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 14 SEVILLA
479	ZABALA ORTEGA MARIA IDOYA	15942953	23/09/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SJ SEC. CIVIL/CA/SOC (2365) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
480	OLIVERA REYNA MARIA PAZ	25042381	09/06/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 MÁLAGA
481	ORTIZ MARTINEZ MARIA PILAR	690883	31/07/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 18 MADRID
482	NARANJO LEMOS JOSE ANTONIO	28566852	20/01/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 51 MADRID
483	OLALLA DEL OLMO ANA MARIA	13291113	07/04/1957	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 22 MADRID
484	SAENZ PASTOR PEDRO	5215349	05/08/1956	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 46 MADRID
485	GARCIA GAGO PEDRO JESUS ALFONSO	12356285	01/10/1956	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL SORIA
486	LATORRE CUSIDO JOSE MIGUEL	39651326	10/09/1956	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 REUS (TARRAGONA)
487	BEJARANO PUCHE EULALIA	25969057	26/05/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL JAÉN
488	RODRIGUEZ CUESTA MARIA CRISTINA	14955760	11/07/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SJ SEC. EJ CIV/CA/SOC (2370) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES BURGOS
489	RUBIO SABIO CARLOS MANUEL	24134618	10/10/1956	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL CÓRDOBA
490	RUEDA GUIZAN JOSEFA	5147792	26/09/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL ALBACETE
491	NAVARRO MARTIN MARIA DEL ROCIO	29754000	18/02/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 SEVILLA
492	ORTEGA GARRIDO MARIA LUISA	2513341	29/09/1958	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MADRID
493	GONZALEZ GONZALEZ MARIA JESUS	10819837	29/06/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO GIJÓN (ASTURIAS)
494	ZEJALBO MARTIN ELISA	27284015	27/07/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
495	RODRIGUEZ LLORENTE RAMON MARIA	638336	15/09/1947	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 24 MADRID
496	CONDE DIAZ MARIA ELENA	33830826	22/11/1958	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 54 MADRID
497	MARTIN ALCAIDE CARMELO	28665988	06/02/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 SEVILLA
498	CASTRO-VILLACAÑAS Y PEREZ MARIA GRACIA	51346425	09/06/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 52 MADRID
499	LLORIS GUANTER ISABEL	19831279	02/05/1956	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. Nº 1 VALENCIA
500	VARELA PUGA ANA MARIA	33839051	28/01/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 A CORUÑA
501	ROIG VALDIVIESO JOSE LUIS	12225733	18/07/1955	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 OURENSE
502	GONZALEZ LAVERS M. DEL CARMEN	45700647	02/02/1956	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
503	ARIAS MUÑOZ ELVIRA Mª DEL CARMEN	25962160	17/02/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 MÁLAGA
504	RODRIGUEZ-HERMIDA FONTAO FATIMA	32408181	15/12/1952	36 3 14	24 3 1	18/12/1979	Distrito	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 PONTEVEDRA
505	DAZA VELAZQUEZ DE CASTRO ROBERTO	24128493	04/02/1954	32 5 18	24 3 1	05/10/1981	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 GRANADA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
506	BARANDIARAN GARCIA MARIA HELENA	16030391	01/01/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 BILBAO (BIZKAIA)
507	SAEZ ARECHA PRUDENCIO	13052780	18/10/1951	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 41 MADRID
508	ALONSO GONZALEZ-ALEGRE MARIA DEL PILAR	2704673	13/10/1958	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL CIUDAD REAL
509	PAREJA GIL MARIA DEL PILAR	70328275	29/01/1958	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 MADRID
510	LOPEZ LUNA MARIA	27283794	19/05/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEVILLA
511	MONREAL HERNANDEZ MARIA LUISA	1091399	13/07/1955	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 MADRID
512	CUADROS RODRIGUEZ PILAR	24151950	12/03/1959	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 MÁLAGA
513	MARQUEZ DE LA PLATA M. Y LOPEZ MONTENEGRO MARIA DEL PILAR	6941226	20/04/1952	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 33 MADRID
514	POU AMPUERO LAURA	4149403	24/01/1960	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 ZARAGOZA
515	CAMPO URBAY Mª CRISTINA FELISA	24858254	27/10/1957	28 10 24	24 3 1	08/05/1985	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 MÁLAGA
516	SANCHEZ TAPIZ AVELINO	3058850	11/02/1949	28 8 2	24 3 1	30/07/1985	Res.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 GUADALAJARA
517	RODRIGUEZ DIEGUEZ ANTONIO	35979427	23/01/1950	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 VIGO (PONTEVEDRA)
518	ALARCON HERRERA FEDERICO	28560654	10/10/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 SEVILLA
519	FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DEL CARMEN	10569838	25/03/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 19 MADRID
520	CIRIA MATEO DELFINA	16788938	28/03/1958	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
521	OTAZUA MENDIZABAL MARIA TERESA	15351933	25/03/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
522	CAMPOS FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	30187292	10/08/1952	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 LOGROÑO (LA RIOJA)
523	RUBIA MARTINEZ JOSE RAMON	25935696	07/05/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 JAÉN
524	SERRANO BRAVO CARMEN	25956801	23/03/1959	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 CÓRDOBA
525	HERRANZ NARRO MARIA DEL PILAR	36961125	08/10/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 20 VALENCIA
526	SOTORRIO SOTORRIO MIGUEL	13711863	05/10/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 SANTANDER (CANTABRIA)
527	MARTIN MORATO MANUEL	7807307	05/02/1955	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. VALLADOLID
528	BALMORI MARTINEZ BEATRIZ	12231932	21/07/1956	28 4 22	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 PALENCIA
529	CELIS FRAILE ISABEL DE	8099226	02/09/1956	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 5 DE CASTILLA Y LEON SALAMANCA
530	CABRIA GARCIA LUIS GABRIEL	13696541	15/02/1953	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SANTANDER (CANTABRIA)
531	DURAN Y GOMEZ PALOMA ESPERANZA	50411955	17/12/1955	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 25 MADRID
532	GARCIA-PUERTAS MAGARIÑOS CAMILO JOSE	11958255	10/08/1957	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 PONTEVEDRA
533	HERRERO MARIN FIDEL ROGELIO	17136612	22/11/1954	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 GIJÓN (ASTURIAS)
534	ELORZA ARIZMENDI FATIMA	22524230	24/04/1955	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 BILBAO (BIZKAIA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
535	GONZALEZ CASADO CARMEN	22536046	05/03/1959	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 15 VALENCIA
536	HERREROS MIÑAGORRE ANGELES	670693	28/03/1956	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MADRID
537	GUSIÑER MIR ROSER	40287661	03/10/1957	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	SJ UPAD AUDIENCIA PROVINCIAL CIVIL (2361) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
538	FARELO GOMEZ MARIA JOSEFA	5237116	23/03/1959	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 34 MADRID
539	MAS PERELLO JUANA MARIA	78194928	23/01/1956	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
540	LOPEZ ARAUJO RITA	2512773	14/11/1958	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MADRID
541	MATEO MAÑA MARIA DOLORES	16786975	03/04/1957	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 VIGO (PONTEVEDRA)
542	RUIZ GARCIA ALFREDO	39654140	22/10/1957	28 2 12	24 3 1	11/11/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
543	SANTAMARIA MORENO PABLO	17823917	17/11/1946	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 ZARAGOZA
544	MARI RUIZ INMACULADA	21417920	01/06/1959	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 VALENCIA
545	ANAYA DEL OLMO MIGUEL	2484669	18/01/1949	28 4 13	24 3 1	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 36 MADRID
546	ESTEBAN CASTILLO ERNESTO	29984818	09/11/1944	28 2 2	24 3 1	27/07/1984	C.U.	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
547	GARCIA CHOLVI MARIA JOSEFA	73937349	03/01/1953	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 VALENCIA
548	FRUTOS MARTIN FRANCISCO JAVIER DE	3431177	06/03/1960	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 OVIEDO (ASTURIAS)
549	URANGA DIEZ M. DEL CARMEN	15924630	30/03/1957	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
550	BARREDO TOBALINA MARIA JESUS	13292721	25/12/1957	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
551	MAQUEDA PEREZ DE ACEVEDO ANA MARIA	688228	10/11/1959	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
552	SOLANOT GARCIA MARIA DEL PILAR	21422829	24/10/1959	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
553	GARCIA SOLANO ANGELES ROSA	5362545	02/08/1958	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 69 MADRID
554	COLLADO GIMENEZ FRANCISCO RAMON	19835149	18/01/1959	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 VALENCIA
555	LLOR BAÑOS JOAQUINA	42972109	25/11/1956	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
556	JULVE GUERRERO INMACULADA	73150738	24/05/1956	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
557	CORDOBA CAMPOS ROSARIO	24127396	24/07/1955	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 GRANADA
558	ESCUDERO CANTO M. ROSARIO	5159121	02/04/1961	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ALBACETE
559	PEREZ MOLERA ANGELES	5631526	14/07/1960	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 CÓRDOBA
560	ALFEREZ MORAL DONATO GABRIEL	27257750	09/12/1958	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 ALMERÍA
561	MORENO TUDELA MANUEL ALFONSO	73538647	31/01/1960	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 16 VALENCIA
562	MONASTERIO TORRE M. BEGOÑA	14245917	10/12/1957	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
563	MARTIN RUIZ MARTA	388504	09/10/1960	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
564	MORENO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	9252546	06/09/1959	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 VALLADOLID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
565	SANCHEZ GIL PEDRO LUIS	21400537	20/03/1956	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
566	MARTINEZ SUDON ANA ROSA	51337867	02/06/1958	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 42 MADRID
567	MARTIN MONTAÑES Mª PURIFICACION	17693387	21/07/1956	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ZARAGOZA
568	CARBALLO MARTINEZ Mª DE LOS ANGELES	1890013	27/11/1956	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
569	CAMACHO BARBOSA M. DEL ROSARIO	31224080	05/01/1960	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ
570	UTRILLA HERNAN RESURRECCION	72875909	03/04/1958	29 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 MADRID
571	LAGO ALONSO Mª DE LOS ANGELES	10052714	16/09/1960	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
572	NIETO MARTIN Mª DE LOS ANGELES	46221062	27/02/1961	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 22 BARCELONA
573	FERNANDEZ DE GAMBOA Y GARCIA DEL VALLE MARIA DEL CARMEN	26446143	07/03/1958	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 MÁLAGA
574	MORENO CATENA GUADALUPE	28857656	31/10/1959	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 CÁDIZ
575	SANCHEZ VALENTIN MARIA NIEVES	12215439	21/10/1953	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTANDER (CANTABRIA)
576	FERNANDEZ SUAREZ PURIFICACION	36045485	01/02/1961	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 37 MADRID
577	VICENTE GUTIERREZ MARTA DE	33839202	16/12/1959	28 0 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 FERROL (A CORUÑA)
578	ATARES CALAVIA MARIA AMPARO	43600767	16/04/1960	27 2 29	24 3 1	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 SEVILLA
579	CENIZO GARDUÑO SANTIAGO	38399725	16/11/1952	27 10 6	24 3 1	26/05/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 10 BARCELONA
580	GANNAU GALINDO MODESTO	38037758	04/04/1949	27 10 6	24 3 1	26/05/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 BARCELONA
581	GARCIA GUIRAL INMACULADA	31229402	06/06/1962	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 CÁDIZ
582	ALMELA BENDICHO JOSE IGNACIO	17206141	24/06/1959	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ZARAGOZA
583	SARALEGUI PRIETO IGNACIO	14950404	22/06/1960	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
584	ABANCENS IZCUE ANA ISABEL	15916416	25/06/1956	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
585	GONZALEZ DOMINGUEZ ANA MARIA	9252295	31/03/1959	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE MENORES PALENCIA
586	CANTALAPIEDRA CABRERA JAVIER	50287687	26/02/1957	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 2 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
587	IGLESIAS FUNGUEIRO CARMEN	33246572	19/06/1960	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 A CORUÑA
588	SAFORCADA CAMPOS JUAN ARTURO	37278141	06/11/1959	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 28 BARCELONA
589	BURGOS LOPEZ ROSA	74618716	23/03/1958	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 MÁLAGA
590	GONZALEZ SERODIO ROSALINO JULIAN	36039264	29/11/1959	26 10 18	24 3 1	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 VIGO (PONTEVEDRA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
591	MARTIN VELASCO MARIA SOCORRO	3428473	29/04/1959	28 7 16	24 1 11	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 MADRID
592	CABALLERO TREVIÑO MARIA ANTONIA	1497115	14/06/1955	34 3 14	23 11 29	18/12/1979	Distrito	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
593	GARCIA-SAAVEDRA BASTAZO VICENTA	3070346	27/02/1953	30 3 17	23 11 29	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 TOLEDO
594	CRUZ VELASCO Mª PAZ DE LA	3426380	09/08/1958	30 3 17	23 11 29	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 VINARÒS (CASTELLON)
595	SANTOS BORLAN MARIA ISABEL	9714249	20/05/1957	32 5 18	23 11 29	15/10/1981	Distrito	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL ZAMORA
596	IBAÑEZ PRADO MERCEDES	16527785	29/01/1960	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
597	ALBERT ARTERO ISABEL MARIA	17990892	03/01/1952	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 HUESCA
598	RUIZ HUIDOBRO ISIDRO	13089254	09/03/1959	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BURGOS
599	TOME GARCIA ROSA MARIA	676103	11/07/1957	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 28 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
600	RAMOS CEJUDO JOSE LUIS	24120969	13/02/1956	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DÉNIA (ALICANTE)
601	SALCEDO DE MINGO PALOMA	686401	25/07/1959	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 94 MADRID
602	ORTIZ GERVASI ANA MARIA	50409221	15/06/1953	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 MURCIA
603	ALVARO PRIETO MARIA SOCORRO DE	9255721	25/03/1959	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 A CORUÑA
604	VILLAR SEVILLANO MARIA DEL CARMEN	10820605	20/07/1959	30 3 17	23 11 29	16/12/1983	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 GIJÓN (ASTURIAS)
605	BENITEZ ORTIZ MARIA ISABEL	7825013	25/04/1958	30 3 17	23 11 29	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 VALLADOLID
606	VAQUERO ABELA ANA MARIA	26195165	22/07/1960	33 4 13	23 11 29	08/05/1985	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL JAÉN
607	BUELGA AMIEVA ANA	10600482	16/09/1959	33 4 13	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 OVIEDO (ASTURIAS)
608	CARBALLO RAMOS MARIA DEL CARMEN	32434846	20/12/1957	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 A CORUÑA
609	BURGOS FLORES MARIA JOSE	8690049	18/03/1954	28 10 24	23 11 29	08/05/1985	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
610	HERNANDEZ JIMENEZ PALOMA	22474963	09/11/1959	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL MURCIA
611	PEREZ LABAJOS JOSE ANGEL	10570499	12/05/1956	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 OVIEDO (ASTURIAS)
612	LOPEZ VAZQUEZ M. DE LAS NIEVES	1171537	22/03/1952	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 9 MADRID
613	IGNACIO CAMPOS DANIEL ALEJANDRO	50680964	28/03/1957	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 13 MADRID
614	PUYA JIMENEZ MERCEDES	24129393	14/01/1957	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 GRANADA
615	GARCIA GIL MARIA ARANZAZU	16510521	20/05/1953	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 ZARAGOZA
616	PEÑA CANO JUAN CARLOS	9253217	09/05/1959	27 2 21	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 DE CASTILLA Y LEON VALLADOLID
617	ZAPATA CAMACHO MARIA DEL PILAR	15947424	17/10/1960	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 ZARAGOZA
618	MARIN LARRANDIA MARIA DEL CARMEN	15939194	04/09/1960	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
619	PEREZ FERNANDEZ-MAYORALAS GREGORIO	6213028	16/03/1958	28 4 22	23 11 29	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 38 MADRID
620	URANGA MURUZABAL CARMEN	15837991	26/01/1960	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE MENORES PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
621	GARCIA-CONTRERAS MARTINEZ MARIA DOLORES	24166481	15/08/1959	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 GRANADA
622	PECHE RUBIO MARIA DEL CARMEN	28511109	26/11/1955	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 SEVILLA
623	MORAL CARAZO MARIA MERCEDES	25973239	31/01/1961	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
624	MUGICA MATEOS MARIA JOSE	15939600	22/09/1959	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
625	DIAZ AGUIRRE RICARDO	28679588	19/09/1960	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 SEVILLA
626	LUESIA BLASCO MARIA ROSA	17865847	13/09/1959	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 79 MADRID
627	MARTIN ROMERO ROSARIO FE	24290068	14/04/1956	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 GRANADA
628	GOMEZ MOVELLAN MARIA DOLORES	13713065	12/01/1957	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
629	ESCUDEIRO RIAL ELIGIA	35436357	24/04/1959	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 PONTEVEDRA
630	MADROÑERO PEREZ SANTIAGO	17434751	21/04/1960	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
631	ORTEGA ALVAREZ CARLOS	1899221	03/10/1957	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 16 MADRID
632	RUIZ PASCUAL SERGIO	16789767	01/12/1958	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 PONTERRADA (LEON)
633	CRUZ REQUEJO Mª DOLORES EUGENIA	22530774	23/07/1957	28 0 29	23 11 29	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL LUGO
634	SUAREZ DIAZ JESUS	24164600	10/08/1960	27 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 GRANADA
635	FERNANDEZ GOMEZ DE CADIÑANOS VISITACION	13291202	24/03/1957	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
636	GUTIERREZ SERRANO MARIA ELENA	15847680	12/07/1961	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
637	YAGUEZ SANTIAGO COVADONGA	13095409	20/04/1961	26 2 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 VALLADOLID
638	ARRIBALZAGA RUIZ BEGOÑA	14879117	08/10/1950	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
639	LOPEZ TELLO ESTRELLA	5381369	26/11/1961	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 11 MADRID
640	MENDEZ LOPEZ ILDA	9353098	31/07/1961	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 OVIEDO (ASTURIAS)
641	SANTOS GONZALEZ LUIS DE	3429371	23/07/1959	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
642	OROZCO TORRES JESUS ANGEL	51347527	05/05/1960	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SEVILLA
643	CAMACHO PEREZ CELIA	5225305	22/01/1958	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL HUESCA
644	GARCIA IGLESIAS MARIA DE LA LUZ	33250554	11/05/1961	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 FERROL (A CORUÑA)
645	CORTES RODRIGUEZ MANUEL	24153620	20/01/1958	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 GRANADA
646	BIURRUN MURILLO MARIA TERESA	14917396	15/10/1954	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
647	RAMAL CABRERA BERNARDINO	27234752	09/10/1955	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL ALMERÍA
648	MARTINEZ MONTIJANO CARMEN	5248913	14/07/1961	26 10 18	23 11 29	14/05/1987	C.U.	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 7 AUDIENCIA NACIONAL MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
649	LLEVOT CALVET CONCEPCION	78061981	28/10/1956	26 10 18	23 11 23	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 9 BARCELONA
650	SERRANO MASIP ALFONSO	40864900	06/10/1958	26 10 18	23 11 23	14/05/1987	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL LLEIDA
651	MUÑOZ CARRASQUER LUIS MARIANO	73905830	01/01/1958	26 10 18	23 11 23	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 VALENCIA
652	MARTINEZ BLANCO MARIA GRACIA	12734097	03/10/1961	26 10 18	23 11 23	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 TERUEL
653	MENDAÑA PRIETO MARIA ROSARIO	46320299	23/05/1955	26 10 18	23 11 23	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 28 BARCELONA
654	TOJO VAZQUEZ EUGENIO	32372291	30/12/1948	39 11 12	23 11 1	21/12/1973	Distrito	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
655	CORDOBA GARCIA MARIA DEL CARMEN	24092543	23/12/1950	32 5 17	23 10 24	15/10/1981	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 JAÉN
656	MOYA DEL POZO FRANCISCO JAVIER	4545773	13/05/1956	28 10 24	23 10 24	08/05/1985	C.U.	SJ UPAD PENAL Y DIRECTOR DEL SERVICIO COMUN GENERAL (2437) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CUENCA
657	GONZALEZ GARCIA SANTIAGO	7818808	07/10/1957	28 0 29	23 10 4	03/03/1986	C.U.	- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MADRID
658	REVILLA PEREZ LUIS	13088958	26/04/1959	28 0 29	23 10 4	03/03/1986	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL SEVILLA
659	CALVO VELASCO MARIA DEL CARMEN	1103386	09/02/1959	28 0 29	23 10 4	03/03/1986	C.U.	SALA PENAL Nº 3 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
660	CARBALLO MARTINEZ JUAN FRANCISCO	2089533	21/05/1955	27 10 6	23 10 4	26/05/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
661	LARDIES PORCAL MARIA PIA	17855239	08/08/1955	30 3 17	23 10 4	16/12/1983	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ZARAGOZA
662	RUIZ DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER	3796907	04/12/1957	28 0 29	23 10 4	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD 1ªINST.E.INSTR y SJ SEC CIV/CA/SO en SCOP (2180) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
663	BELENGUER VERDUCH JOSE RICARDO	20396132	10/04/1954	28 0 29	23 10 4	03/03/1986	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 4 VALENCIA
664	MOREIRAS MONTALVO LAURA	5242895	26/03/1960	28 10 24	23 10 4	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 SEGOVIA
665	RODRIGUEZ MARTINEZ BEGOÑA	12227662	18/11/1955	28 10 24	23 8 22	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 VALLADOLID
666	BORREGUERO BELTRAN MARIA LUISA	7805962	03/03/1955	28 10 24	23 8 22	08/05/1985	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 SALAMANCA
667	MARISCAL DE GANTE Y MIRON ROSA MARIA	5364966	01/02/1959	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 MADRID
668	GONZALEZ-IRUN VAYAS VICTORIA EUGENIA	10566040	16/07/1954	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 OVIEDO (ASTURIAS)
669	ALVAREZ AVELLO MARIA DEL CARMEN	10800951	06/07/1955	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO PENAL Nº 1 GIJÓN (ASTURIAS)
670	CAMPUZANO TOME M. DEL CAMINO	10568347	17/02/1956	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 OVIEDO (ASTURIAS)
671	RODRIGUEZ ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	51334413	05/11/1957	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 29 MADRID
672	PEREZ MARTINEZ MARGARITA	1096146	25/09/1956	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
673	ALVAREZ LOPEZ MARIA LUISA	75007276	12/03/1958	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO JAÉN
674	CALERO PAREJA MARIA MERCEDES	3796710	04/01/1958	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 TOLEDO
675	SANCHEZ MORALES FERNANDO	25291398	29/12/1951	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 MÁLAGA
676	GARCIA CHULIA CONCEPCION IRENE	274998	08/12/1954	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO PENAL Nº 26 MADRID
677	TORO GONZALEZ JOSE JOAQUIN DEL	29743717	22/07/1958	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 SEVILLA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
678	BOCIO RUEDA JOSE	28560432	17/04/1957	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 18 SEVILLA
679	TUÑÓN LAZARO MARIA FERNANDA	25943855	01/07/1957	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 SEVILLA
680	CASASOLA TOBIA ANTONIO	74776429	07/01/1947	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 GRANADA
681	RUIZ MANTECON MARIA DEL CARMEN	71411783	05/01/1958	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JEF. SEC. EJ. CIV/CA/SOC (2030) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES LEÓN
682	MATAMALA SACRISTAN FELIX	1098630	17/12/1959	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 51 MADRID
683	GORDILLO ALHAMBRA MARIA DOLORES	2510560	15/07/1957	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO PENAL Nº 13 MADRID
684	CALLE DEL POZO AGUSTINA	3420708	25/06/1956	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO PENAL Nº 15 MADRID
685	GARCIA CALDERON MARIA DEL CARMEN	28677553	04/12/1959	28 4 22	23 8 22	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 SEVILLA
686	TARRERO PASCUA DESIDERIA	12724124	23/07/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 11 MADRID
687	BENEDI ANDRES CONCEPCION	18414299	04/12/1957	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 18 VALENCIA
688	CHAO PEREZ RAMON JESUS	33832754	01/03/1956	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 A CORUÑA
689	SANCHEZ GARCIA ANTONIO	5222844	04/09/1957	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 27 MADRID
690	PACHECO VERA JOSE	50694850	05/02/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALCORCÓN (MADRID)
691	OLASO ARRILLAGA FRANCISCO JAVIER	15937056	19/04/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
692	GARCIA TEJEDOR MARIA LUISA	3432853	02/04/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 30 MADRID
693	SUAREZ QUEVEDO MARIA JESUS	8792165	05/06/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD ORG. COLEG. AP (2415) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
694	DIAZ BARRERA MANUEL	28540324	03/12/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 SEVILLA
695	FRANCO DE LA IGLESIA ANA ISABEL	17869250	15/02/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 ZARAGOZA
696	RUIZ RIVAS CONCEPCION	33246493	04/05/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
697	PUIG ECHARRI ELENA	15938005	02/06/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
698	GAY-POBES VITORIA MARIA DEL CARMEN	16258091	06/12/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD SOCIAL Y SEC EJ.CIV/CA/SO en SCE (2240) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
699	MILLAN DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO	25951832	23/09/1957	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SEVILLA
700	PALACIOS SARRASQUETA FELISA EUGENIA	15837224	14/05/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
701	PICAZO TORRIJOS MARIA JOSE	4559764	17/07/1961	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL ALBACETE
702	BENITO MARTINEZ MARIA TERESA DE	13095788	31/12/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL BURGOS
703	SEIJAS RODRIGUEZ MARIA ALFONSO	33250493	29/06/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
704	OLIVA CERON ALFONSO	22470569	07/03/1954	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JEFE SECCION REGISTRO, REPARTO Y ESTADISTICA (2075) SERVICIO COMÚN GENERAL MURCIA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
705	ESCUDERO ORTEGA MANUEL	27250779	06/05/1958	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
706	SOGORB BARAZA JOSEFA	27232742	08/04/1955	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
707	GARCIA GRAU JOSE MANUEL	40866241	06/03/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO LLEIDA
708	CHAMORRO GOMEZ MARIA CRISTINA	2520539	18/09/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 MADRID
709	VEGA GONZALEZ ANA MARIA	9254882	17/07/1959	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
710	CARPINTERO SABINO MARIA TERESA	31232882	28/04/1961	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 CÁDIZ
711	ALCON OMEDES MILAGROS	17145526	06/10/1956	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ZARAGOZA
712	VALVERDE ESPESO MARIA FE	9262539	24/08/1960	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SANTANDER (CANTABRIA)
713	RIOS NIETO JUAN MANUEL	29745047	24/12/1958	28 0 29	23 8 22	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL HUELVA
714	CORDERO ESCALONILLA MARIA JOSE	33508409	05/04/1957	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 OVIEDO (ASTURIAS)
715	SANZ ESCORIHUELA MARIA JOSE	50693993	03/03/1959	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 29 MADRID
716	DIAZ VALENZUELA SONSOLES	24168217	22/10/1960	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
717	NAVARRO LAVARA JUAN ANTONIO FELIPE JOSE	4552357	22/09/1958	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 BARCELONA
718	BENAVENTE JOVER MARIA DEL CARMEN	30450647	09/02/1960	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 CÓRDOBA
719	GARCIA ROJAS MARIA ISABEL	2702595	26/03/1958	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 17 MADRID
720	MORE HERRERO MARTA	13091991	28/09/1959	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 19 MADRID
721	RODRIGUEZ BALADO ELENA	36039880	09/10/1960	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 13 BARCELONA
722	RUBIO PEREZ M. AUXILIADORA	7832572	03/01/1960	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 PALENCIA
723	RIERA PEREZ MARIA DEL PILAR	18013889	26/05/1961	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL HUESCA
724	BARAMBIO GIL MARIA ISABEL	4561177	13/09/1961	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 30 MADRID
725	SANCHEZ MARTIN SARA ISABEL	7816361	08/07/1957	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SALAMANCA
726	GIL TABOADA Mº JOSE	76808624	22/06/1960	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL A CORUÑA
727	SIMANCAS ALONSO LUIS DANIEL	14563195	16/01/1956	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 BILBAO (BIZKAIA)
728	ORTIZ DE SALAZAR RUIZ MARIA VICTORIA	14915419	22/01/1955	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
729	MARTOS CERREJON MARIA DEL CARMEN	28538275	14/12/1958	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
730	GARAVILLA VARGAS MANUEL MARIA	24400819	30/03/1958	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD PENAL y SEC PENAL en el SCE (2330) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
731	CERVERO PINILLA RAQUEL	17866869	04/11/1959	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 ZARAGOZA
732	SANCHEZ URIBELARREA MARIA BELEN	10581757	23/12/1957	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 OVIEDO (ASTURIAS)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
733	GARCIA-PAGAN GARCIA CRISTOBAL	22947965	18/02/1962	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 CARTAGENA (MURCIA)
734	REY PITA JUAN	32406374	21/11/1953	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 A CORUÑA
735	MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	16028695	09/11/1958	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 BILBAO (BIZKAIA)
736	MARTINEZ ROMERO MARIA JOSE	17153243	06/02/1961	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 ZARAGOZA
737	GIBERT TRUEBA DOMINGO ENRIQUE	14931450	01/01/1957	26 10 18	23 8 22	14/05/1987	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
738	MEER Y CERDA MARIA PILAR DE	50799872	18/01/1947	26 8 5	23 8 22	11/11/1985	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
739	ECHEVERRIA ALCORTA MARIA	15950023	21/11/1960	26 10 15	23 8 19	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 BILBAO (BIZKAIA)
740	JUAREZ ARCAS VICTORIA	22476216	01/12/1958	28 10 24	23 8 2	08/05/1985	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
741	LIS DOMINGUEZ MARIA JOSEFA	35274962	26/08/1952	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SALAMANCA
742	FERNANDEZ DIAZ YOLANDA	10571163	04/11/1955	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. DE LO PENAL Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
743	VICENTE GONZALEZ JOSE JAVIER	12693269	12/11/1950	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 4 DE CASTILLA Y LEON PALENCIA
744	BOLUFER MARQUES MARIA JOSE	19457753	10/03/1953	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. DE MENORES Nº 2 VALENCIA
745	ESCANDON LOPEZ M. TERESA JOSE	71692048	07/02/1952	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS) con sede en GIJÓN
746	TORRES BERNAL MARIA NIEVES	17430554	04/08/1955	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 ZARAGOZA
747	MARINO Y GOMEZ DE SANDOVAL ANA ISABEL DE	9261437	31/05/1960	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 VALLADOLID
748	MARTIN PEREZ ASUNCION ESTHER	7827394	15/08/1959	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 SALAMANCA
749	BAQUERO DURO GREGORIO ANTONIO	10176310	29/10/1954	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO OVIEDO (ASTURIAS)
750	VILLALPANDO LUCAS LORENZO	1473248	05/11/1949	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA
751	LAZUEN ALCON EDUARDO	24120737	28/01/1956	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	Paz	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 GRANADA
752	GARCIA GARCIA BEATRIZ	50291881	06/01/1958	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 27 MADRID
753	ALONSO BURGOS MARIA DEL CARMEN	12729344	07/02/1960	28 4 22	23 8 2	11/11/1985	C.U.	JDO. DE MENORES OVIEDO (ASTURIAS)
754	ARRIAZU RODRIGUEZ NIEVES	12729299	05/08/1960	28 4 22	23 8 2	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO PALENCIA
755	MARTINEZ PARRA CONCEPCION PAZ	22478917	03/10/1959	28 4 22	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 MURCIA
756	GARRIDO TERUEL LOURDES	24296055	16/01/1961	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 SEVILLA
757	SALTO CHICANO JOSE MANUEL	25041115	23/09/1959	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 SEVILLA
758	LLORENS GOMEZ DE LAS CORTINAS MARIA CONCEPCION	25973135	05/11/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 SEVILLA
759	COTORRUELO GOMEZ MARIA LUISA	396761	21/12/1960	29 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO MADRID
760	GONGORA MACIAS MARIA JOSE DE	28683717	20/08/1959	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 11 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA SEVILLA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
761	ROSA PRIETO Mª VICENTA DE LA	9256913	27/09/1959	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
762	MONTESINO SANCHEZ MARIA ROSARIO	27249680	14/10/1957	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 50 MADRID
763	PALACIOS CRIADO MYRIAM	30480777	27/05/1961	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 CÓRDOBA
764	ALESANCO RETANA MARIA DEL CARMEN	50802060	27/09/1958	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 98 MADRID
765	HAY ALBA MARINA ISABEL	5252008	14/10/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
766	GONZALEZ REBOLLO M. ANGELES	12359840	10/05/1959	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 20 MADRID
767	BRU MISAS ISABEL	27264357	09/05/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL ALMERÍA
768	SAEZ-BENITO JIMENEZ ESTHER PATROCINIO	5388779	12/12/1959	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 12 MADRID
769	GONZALEZ SANCHEZ JOSE MARIANO	5374704	11/09/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 MÓSTOLES (MADRID)
770	PARA RUIZ MARIA DOLORES	22942082	27/08/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 CARTAGENA (MURCIA)
771	OLALLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	9263909	18/01/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 VALLADOLID
772	ARRIBAS CARRION JOSE LUIS	12241666	27/07/1957	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO BILBAO (BIZKAIA)
773	QUESADA ENCISO MAGDALENA MONTSERRAT	24168182	27/04/1960	28 0 29	23 8 2	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 MÁLAGA
774	RUIZ VILLA MYRIAN	5629452	03/01/1960	28 6 13	23 7 17	08/05/1985	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
775	ANGEL CUBELLS JOSE MIGUEL DE	22458144	05/04/1958	25 7 23	23 6 18	08/05/1985	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIA
776	ANGUERA CEDO MONTSERRAT	39830951	24/01/1951	30 2 1	23 5 21	15/10/1981	Distrito	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 BARCELONA
777	REY VERA MARIA DEL CARMEN	28687338	03/07/1961	28 0 29	23 5 8	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)
778	SANZ ALVARO ESPERANZA ROSA	50031798	15/03/1958	28 0 29	23 5 8	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 LEGANÉS (MADRID)
779	VARONA GARCIA MARIA ASUNCION	6963320	28/04/1957	28 0 29	23 5 8	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 28 MADRID
780	CORERA IZU MARTIN	15363605	05/09/1960	28 0 29	23 5 8	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
781	FREIJO URDANGARIN GLORIA PILAR	15238800	22/04/1957	28 0 29	23 5 8	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
782	ALVARIÑO VEIGA CONCEPCION	2513987	21/11/1958	28 0 29	23 5 8	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MAJADAHONDA (MADRID)
783	LOPEZ NAVARRO MARIA JESUS	27494578	30/09/1961	26 10 18	23 5 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 MARBELLA (MALAGA)
784	MARTINEZ MULERO MIGUEL	75215056	04/02/1960	26 10 18	23 5 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 ALMERÍA
785	HERNANDO ARENAS MARIA JESUS	13064774	06/03/1953	26 10 18	23 5 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 A CORUÑA
786	VALVERDE QUINTANA RAMON IVAN JOSE	17861970	22/02/1958	26 10 18	23 5 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 ZARAGOZA
787	GARCIA AGUADO LUIS MARIA	9250757	10/08/1958	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SEGOVIA
788	DIAZ CRUMOLS MARIA MARTA	39649937	02/03/1956	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
789	FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS	75701656	08/02/1960	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL CÓRDOBA
790	SOLANO BARRETO ANTONIO	22937735	18/09/1961	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 CARTAGENA (MURCIA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
791	ESCUADERO ORTEGA MARIA TERESA	13092206	12/10/1959	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
792	LOZANO DE BENITO ALFONSO	13092874	05/03/1960	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 19 MADRID
793	GROISS BUIZA MARIA MERCEDES	76233635	27/05/1959	28 0 29	23 4 28	03/03/1986	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES MÉRIDA (BADAJOZ)
794	RODRIGUEZ SANTOS ELVIRA	15953004	19/10/1961	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
795	GANUZA JACOISTI Mª RESURRECCION	15851868	02/04/1961	28 0 29	23 4 27	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
796	VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO	24185672	06/09/1960	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MÁLAGA
797	MARTINEZ CARNICER MARIA DEL CARMEN	18161529	17/10/1960	28 0 29	23 4 27	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 ZARAGOZA
798	YUSTE GONZALEZ DE RUEDA CARMEN A.	17702625	01/06/1959	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ZARAGOZA
799	MONGE SABARIEGOS MARIA LOURDES	677498	06/06/1958	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 13 MADRID
800	LOPEZ RODRIGUEZ INMACULADA	1105108	01/12/1958	28 0 29	23 4 27	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL ZARAGOZA
801	ORBE ZALBA MARIA DEL PILAR	50290478	04/09/1956	27 10 6	23 4 27	26/05/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 8 MADRID
802	REUS MARTINEZ NATALIA	5241567	13/05/1960	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	SALA PENAL Nº 3 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
803	MARCOS VALTIERRA CONCEPCION DE	1114743	04/12/1961	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 15 MADRID
804	ALONSO RAMOS JOSE	15844728	21/08/1960	28 0 29	23 4 27	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
805	ALFEREZ DE LA ROSA VICTORIA ALICIA	80121896	03/05/1960	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 CÓRDOBA
806	URBIETA LAVIADA MARIA CONCEPCION	16250510	02/08/1959	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD ORG.COL.AP Y SJ SEC. PENAL en SCE (2175) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
807	SANCHEZ NUÑEZ TERESA	7445812	14/05/1959	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO MADRID
808	CASTILLO GALLEGU ARSENIO	5613338	06/07/1954	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 48 MADRID
809	GONZALEZ ARNAL JOSE CARLOS	51349957	08/05/1962	26 10 18	23 4 27	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 18 MADRID
810	MARTIN SANCHEZ JUAN LUIS	7820548	12/06/1958	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 SEVILLA
811	MORCILLO DELGADO MARIA DEL CARMEN	24169983	04/08/1959	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 GRANADA
812	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN	24156099	17/07/1958	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
813	MONREAL ALVAREZ ANA ISABEL	10589673	08/02/1959	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 SEVILLA
814	DOMINGO GARCIA PEDRO IGNACIO	24832294	12/03/1956	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 MÁLAGA
815	FERNANDEZ GARCIA MARIA DOLORES	24293912	17/04/1959	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 GRANADA
816	LOPEZ CORTES MIGUEL ANGEL	13907276	31/07/1960	28 0 29	23 3 11	03/03/1986	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 SANTANDER (CANTABRIA)
817	SAGARDOY MORENO JUAN IGNACIO	15356163	13/11/1957	27 2 11	23 3 11	26/09/1986	C.U.	SJ UPAD ORG. COLEG. AP (2415) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
818	PAIS VARELA ELISA Mª MANUELA	76347092	07/12/1960	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
819	REBOLLO ALONSO-DELINAJE Mª JESUS LOURDES	16518690	11/07/1958	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
820	RELEA GARCIA MARIA TRINIDAD	12724698	18/06/1959	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 OVIEDO (ASTURIAS)
821	ACOSTA MONTERO GLORIA MARIA	24143332	30/11/1957	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 MÁLAGA
822	GARCIA RIVAS FRANCISCO JOSE	22480779	17/01/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 MURCIA
823	GONZALEZ ARENZANA MARTA TERESA	15930803	28/07/1959	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS AUDIENCIA PROVINCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
824	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	24293685	02/04/1959	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 GRANADA
825	SUAREZ GARCIA MARIA CECILIA	10595802	12/04/1960	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 GIJÓN (ASTURIAS)
826	GARCIA PEREZ MARGARITA	25974194	02/10/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 GRANADA
827	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CARMEN	24174054	02/10/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 24 BARCELONA
828	FORCE SANCHEZ NATIVIDAD BLANCA	51896955	26/12/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 A CORUÑA
829	MARTINEZ DE LA CONCHA ALVAREZ VAYO MARIA CORONADA	8769098	03/04/1955	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 BADAJOZ
830	AMARO DE TENA DAVILA ANTONIA JUANA	8780606	11/07/1957	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 BADAJOZ
831	MARTIN MADRID JUANA	7831942	15/03/1960	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 VIGO (PONTEVEDRA)
832	ORTIZ GARRIDO MARIA DEL CARMEN	4567094	03/08/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JEF. SEC. ORG UNIPER Y COLEG SOCIAL (2120) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
833	VALVERDE FERNANDEZ MARIA SOLEDAD	75676926	02/02/1955	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 CÓRDOBA
834	CAMPO DIAZ Mª DOLORES DEL	26737214	13/05/1960	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 BADAJOZ
835	TORRES TORTOSA DOLORES ENCARNACION	27270577	22/11/1959	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
836	GARZON MELGAREJO CARMEN MARIA	24179970	05/02/1962	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 GRANADA
837	RIVAS CARRASCOSA MIGUEL ANGEL	29742733	20/06/1958	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 JAÉN
838	AGUIRRE ELSO JUANA MARIA	15851837	28/02/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BILBAO (BIZKAIA)
839	NAVARRO LORENTE LORENZO	22642518	19/05/1960	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 12 VALENCIA
840	BENITEZ MARIN MARIA ROSARIO	29758984	14/12/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 HUELVA
841	OBREGON ZAMORANO JUAN MANUEL	24155703	26/05/1959	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 GRANADA
842	SANTAMARIA BLASCO JOSE RAMON	16520480	04/07/1959	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 13 VALENCIA
843	TOMAS LLAVADOR MARIA FRANCISCA	22529996	16/01/1958	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 VALENCIA
844	SAIZ DE MARCO MARIA ASUNCION	26185733	05/04/1957	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 JAÉN
845	GARCIA UBEDA ELISA	9368420	27/06/1961	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA OVIEDO (ASTURIAS)
846	GARCIA-TELLO Y TELLO MARIA DEL CARMEN	24851278	31/07/1956	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 GRANADA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
847	PIÑERO BUSTAMANTE JOSE MARIA	31177025	02/03/1949	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA SEVILLA
848	CEBRIAN SALGADO ESPERANZA Mª MILAGROS	7813612	08/10/1955	26 10 20	23 3 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SALAMANCA
849	GARCIA MACUA FRANCISCO JAVIER	14939249	05/11/1957	26 10 18	23 3 11	08/03/1988	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 BILBAO (BIZKAIA)
850	GALACHE SANCHEZ ASCENSION INMACULADA	7945327	24/06/1960	26 10 18	23 3 11	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO SALAMANCA
851	HARO LOPEZ-VILLALTA MARIA DOLORES DE	26198887	17/07/1960	28 0 29	23 2 11	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 23 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
852	CRISTOBAL ZURDO MANUEL	3419482	12/11/1955	28 0 29	23 2 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 MADRID
853	GOMEZ BLANCO MARIA CARLOTA	29752607	22/02/1960	28 0 29	23 2 11	03/03/1986	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL GRANADA
854	GARCIA ROIG JOSE LUIS	12355345	29/06/1959	28 0 29	23 2 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 VALLADOLID
855	UBEDA SIERRA MARIANO	688785	08/08/1961	28 0 29	23 2 11	03/03/1986	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
856	PEREZ CAMINO ALFONSO	686200	12/05/1960	28 0 29	23 2 11	03/03/1986	C.U.	- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MADRID
857	MARISCAL DE GANTE Y RUZAF MARIA	680919	13/12/1958	27 1 19	23 2 11	29/01/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BENIDORM (ALICANTE)
858	BLANCO DE LA CASA CARMEN DOLORES	801696	09/04/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 MADRID
859	MEANA FERNANDEZ-PALACIOS MARGARITA	28667290	12/11/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 12 SEVILLA
860	SAEZ GALLEGO MARIA DEL PILAR	9269670	11/05/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 VALLADOLID
861	ROMERO MONTES MARIA INES	28689396	06/10/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 SEVILLA
862	SELDAS VALLE MARIA DE LOS ANGELES	50303550	12/04/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 97 MADRID
863	MEANA CUBERO ROCIO	28873004	18/05/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SEVILLA
864	NAVARRO CASTELLANO MARIA TERESA	25966132	16/01/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 JAÉN
865	VALERO LOPEZ MARIA PASTORA	28545444	21/03/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 SEVILLA
866	DOMINGUEZ VELASCO MARIA TERESA	798400	21/08/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 33 MADRID
867	IGLESIAS MARTIN JESUS JAVIER	7831830	18/12/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 SALAMANCA
868	BERMUDEZ MENDEZ MARIA ANGELES	11377986	07/04/1956	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL SEGOVIA
869	GONZALEZ HUERGO MARIA JOSEFA	9354355	17/09/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 41 MADRID
870	MERINO FERNANDEZ MARIA ANGELES	8779464	29/06/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE MENORES BADAJOZ
871	ESCOBAR BERNARDOS Mª JOSE LOURDES	3426983	13/03/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 36 MADRID
872	SANZ BERMEJO VICTORIA BLANCA	70234649	29/10/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 VALLADOLID
873	GONZALEZ ALIO RAFAEL	5215807	24/10/1956	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 LUGO
874	GONZALEZ DUQUE FRANCISCO JAVIER	8099691	12/07/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTANDER (CANTABRIA)
875	GARCIA MARTIN CARLOS ANTONIO	7834233	17/11/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 SALAMANCA
876	HIERRO HERNANDEZ-MORA MARIA ISABEL	51355485	26/12/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO MADRID
877	PANADERO RUZ FELISA	30466473	04/11/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/0987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 SEVILLA
878	MARTINEZ CONDE MARIA CONCEPCION	13067324	06/12/1954	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES BURGOS

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
879	CORDERO DIEZ ELISA MARIA	2508945	09/09/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 27 MADRID
880	AMORENA DONCEL CARLOS	2504223	28/10/1956	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
881	SANCHEZ RIVILLA NIEVES ESTHER	2525265	17/10/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 MURCIA
882	BOTELLA GARCIA-LASTRA MARIA ALMUDENA	2522927	31/01/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 33 MADRID
883	CASTILLO MESEGUER MARIA DOLORES	27435887	13/04/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
884	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA MERCEDES	400162	29/07/1962	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 33 MADRID
885	FREIRE CARDOSO MARIA DOLORES	13075968	17/11/1956	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 20 BARCELONA
886	GUTIERREZ DIEZ MARIA CRUZ	12360360	11/01/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
887	BURDIEL ALVARO MARIA DEL CARMEN	20778352	05/11/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 ÁVILA
888	DIEZ MINGUELA MARIA NIEVES	50307814	05/08/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 MADRID
889	OLAIZ POLO MARIA ICIAR	15837685	08/08/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
890	GARCIA ARNAIZ CESAR CARLOS	13100016	23/07/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 12 MÁLAGA
891	LOPEZ ALONSO CARMEN	1088108	12/07/1953	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 MADRID
892	GONZALEZ ALVARO MARIA INMACULADA	13100968	08/12/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 VALLADOLID
893	AUÑON ABALOS EMILIO	4559536	06/03/1961	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ALBACETE
894	HERRANZ ROMERO JOSE MIGUEL	5236423	06/06/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 20 MADRID
895	SEBASTIAN FERNANDEZ JUAN MANUEL	50692697	01/02/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD PENAL Y JEF SEC EJ PENAL (2320) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
896	THOMAS GOMEZ MARIA CRISTINA	12236422	22/06/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 GIJÓN (ASTURIAS)
897	LEON NORIEGA MISAEL	2523090	26/12/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
898	RIAÑO VALENTIN MARIA CONCEPCION	12349997	19/11/1950	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 26 MADRID
899	GONZALEZ SANCHEZ MARIA BEGOÑA	12717499	03/09/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD CONT ADMVO Y JEFE SEC SE CIV/CA/SOC en SCE (2275) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
900	DIAZ GONZALEZ MARIA JESUS	10826240	28/03/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
901	BLANCO ESLAVA FUENMARIA	70504039	28/06/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 VALENCIA
902	SAENZ CARAZO MANUEL CARLOS	25938605	29/04/1956	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE MENORES JAÉN
903	OTERMIN VARONA CESAR MARIA	5347106	24/09/1956	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 5 MADRID
904	TUREL GARCIA ADORACION	677426	10/05/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 35 MADRID
905	GIRON MAGARIÑO MILAGROSA MARIA	28667221	14/09/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 19 SEVILLA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
906	FEITO GAYO MARIA SOLEDAD	688345	22/04/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 34 MADRID
907	GESTOSO DE LA FUENTE JERONIMO	12317739	29/09/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
908	PECHE RUBIO MARIA DE LOS ANGELES	28664085	01/01/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 SEVILLA
909	FERNANDEZ MORAN MARIA GRACIA	379552	12/07/1959	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 85 MADRID
910	GONZALEZ DE RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	4142500	15/08/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL HUELVA
911	INIESTA PASCUAL MARIA ISABEL	28545379	13/11/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 SEVILLA
912	MULA AZNAR ANTONIO LUIS	75215064	10/01/1960	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
913	BRU MISAS JOSE MARIA	27251363	27/09/1958	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 7 ALMERÍA
914	PEREZ LISBONA MARIA MERCEDES	24863356	15/01/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 MÁLAGA
915	MOURE LORENZO MARIA JOSE	5201282	24/03/1957	26 10 18	23 2 11	14/05/1987	C.U.	JDO. CENTRAL DE MENORES AUDIENCIA NACIONAL MADRID
916	MIGUEL REYES ANGELES DE	50296720	12/05/1959	26 4 21	23 2 11	03/03/1986	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 MÁLAGA
917	TORRES AYALA MARIA PATRICIA	25960284	27/10/1959	26 10 15	23 2 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 JAÉN
918	MESA CORDERO PABLO LUIS	5241923	27/02/1959	26 10 15	23 2 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 SEVILLA
919	REDONDO PASCUAL JOSE MARIA	12354246	02/07/1954	25 2 19	23 0 21	13/01/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 VALLADOLID
920	SANCHEZ NIETO MARIA MARGARITA	238498	19/07/1946	25 2 19	23 0 21	13/01/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 ALMERÍA
921	TARDON SILVESTRE MARIA EVA	50299366	02/06/1961	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 MADRID
922	FEIJOO LOPEZ-BOLAÑO MONICA	14577401	25/04/1959	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 101 MADRID
923	FUENTES MIRANDA JUANA	6974110	19/05/1958	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 BADAJOZ
924	CANO NAVAS ANDRES	28867970	06/09/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 17 SEVILLA
925	MARIN SEGURA MARIA DOLORES	27252219	31/03/1958	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA GRANADA
926	GARCIA LOPEZ CRISTINA MARIA	13104913	02/12/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO BURGOS
927	MEDINA GARCIA MARIA ROSARIO	24179451	05/10/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 MÁLAGA
928	BELLON ZURITA MARIA DEL CARMEN	26452274	24/04/1959	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 HUELVA
929	BALLESTEROS FERNANDEZ PILAR	5381215	07/07/1961	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 MADRID
930	GARCIA SANCHO MARIA INMACULADA	73153747	13/05/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 14 BARCELONA
931	BUIL BORRUEL JOSE ANTONIO	15810686	18/03/1957	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
932	LOPEZ DE SILANES HERNAEZ MARIA CARMEN	13294868	05/05/1961	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 LOGROÑO (LA RIOJA)
933	BUSTOS CRUZ GRACIA	28657560	03/01/1958	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 SEVILLA
934	OZAMIZ BAGENETA BEGOÑA	12357608	23/12/1955	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 VALLADOLID
935	PEREZ-MONEO GARCIA MIGUEL ANGEL	7824895	23/02/1960	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 FERROL (A CORUÑA)
936	CHICA DE DAMAS Mª TERESA DE LA	25972842	11/09/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 GRANADA
937	UGALDE AZCARRETA FRANCISCO	14931078	06/04/1957	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 BILBAO (BIZKAIA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
938	PILES GIMENO MARIA DEL CARMEN	73941838	13/03/1960	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 VALENCIA
939	COVEÑAS PEREZ RAFAEL	75407319	21/04/1961	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 SEVILLA
940	ASENSIO SEVILLANO MARIA RITA	7817745	05/06/1957	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 18 MADRID
941	REY ZAMORA INMACULADA	25975330	08/12/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 GRANADA
942	BRAVO RUIZ MARIA ISABEL	24189523	13/04/1963	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 GRANADA
943	MARTIN LLORENTE MARIA YOLANDA	9266290	31/12/1961	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 VALLADOLID
944	LLORENTE LLORENTE FABIOLA	72778126	04/12/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 LOGROÑO (LA RIOJA)
945	BARBERA BARRIOS MARIA CONSUELO	20785027	14/07/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
946	GALIANA AUHEL MARIA ISABEL	32032820	30/04/1963	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
947	VIGO GARCIA EMILIANO JOSE DEL	9270818	13/12/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 SANTANDER (CANTABRIA)
948	TARDIO PEREZ MARIA NURIA	3814977	24/10/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 91 MADRID
949	GARCIA-MORATO MORENO-MANZANARO ANTONIA MARIA	6220907	14/06/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	SJ SEC. CIVIL/CA/SOC (2365) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO BURGOS
950	PITA MOREDA CARLOS RAFAEL	28857532	09/05/1962	24 7 4	23 0 21	28/08/1989	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO CÁDIZ
951	CALVO SANZO ANA	30553334	30/03/1962	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
952	CASTIÑEIRAS FERNANDEZ FRANCISCO	33238757	09/04/1959	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
953	MARTINEZ RAMIREZ ROCIO	28687932	17/06/1962	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 CÓRDOBA
954	MUÑOZ LEON MARIA FERNANDA	80015477	29/06/1951	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL BADAJOZ
955	ZARAGOZA CAMPOS MARIA FUENSANTA	21446472	13/09/1963	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 19 VALENCIA
956	MINTEGUI SALAZAR SUSANA	24407183	22/02/1962	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
957	RUBIO FERNANDEZ MARIA PIEDAD	19845460	16/02/1962	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 14 VALENCIA
958	COLOMA CONTRERAS MERCEDES	5389274	20/09/1962	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MÁLAGA
959	SIERRA MORENO JESUS	397359	27/01/1962	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 27 MADRID
960	SAEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION	1897497	11/12/1957	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 37 MADRID
961	PEREZ DE LAZARRAGA VILLANUEVA RAQUEL	16259278	16/08/1960	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
962	CIMA SAINZ MARIA DEL CARMEN	399069	11/09/1961	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 34 MADRID
963	ARREGUI URIZAR NATIVIDAD	15359075	23/12/1958	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
964	PLAZA GOLVANO SAGRARIO	5192871	10/06/1964	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 15 VALENCIA
965	LOPEZ-JURADO ROMERO-CRUZ MARIA DOLORES	24157769	26/09/1959	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 27 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
966	AZNAR LOPEZ MARIA ISABEL	28691494	24/09/1963	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO SEVILLA
967	NIEVES SANZ SILVIA	25987864	07/12/1963	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
968	CERON HERNANDEZ LUCIA DEL CARMEN	8789861	29/04/1959	24 7 4	22 11 18	28/08/1989	C.U.	
969	SANCHEZ BARBERAN VIRGINIO	74472703	19/02/1949	33 11 16	22 11 12	21/12/1973	Distrito	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
970	RODRIGUEZ VAZQUEZ MERCEDES	24178092	03/03/1962	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 31 MADRID
971	CASTILLO PICAS ROSA ANNA	39332782	22/02/1964	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 TERRASSA (BARCELONA)
972	SANCHEZ JIMENEZ BEATRIZ	7453143	23/08/1961	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 PONFERRADA (LEON)
973	DIEZ FORONDA BLANCA	16258984	23/07/1962	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
974	CASADO LENDINEZ MARIA TERESA	6975054	17/08/1959	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 21 MADRID
975	ARCO ESTEVEZ MARIA AMELIA DEL	7948007	30/01/1963	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 OURENSE
976	BOQUE GENOVARD MARIA EULALIA	37280229	17/09/1959	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 32 BARCELONA
977	ALVAREZ GALINDO MARIA CAROLINA	24191903	12/09/1963	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MURCIA
978	RUBIO BAYO LUCIANA	24112824	25/03/1955	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 MÁLAGA
979	GALACHE DIEZ Mª BLANCA	3425444	14/10/1957	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 35 MADRID
980	CATIVIELA DIEZ EDUARDO BUENAVENTURA	17704772	14/07/1959	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL ZARAGOZA
981	GOMEZ SAGREDO MONTSERRAT	13104508	27/04/1961	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 BILBAO (BIZKAIA)
982	VISITACION VILLAN ROSA MARIA DE LA	15956852	03/09/1962	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SANTANDER (CANTABRIA)
983	COM BONMATI ELIA	27430688	15/10/1962	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
984	MIGUEL MARCO VISITACION	5347980	01/11/1956	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 MADRID
985	SANCHEZ SOTO FRANCISCA	22950655	04/11/1962	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 CARTAGENA (MURCIA)
986	HINOJAL GIJON FRANCISCO JULIAN	6997683	14/11/1963	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 LUGO
987	TRAVE PACETTI MARIA PAZ	24296177	19/07/1960	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 GRANADA
988	MARTINEZ ALVAREZ SILVIA	50291669	21/03/1958	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 1 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
989	DUARTE DOMINGUEZ SOFIA	28666309	04/10/1958	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 15 SEVILLA
990	MATANZA FERNANDEZ ANA MARIA	51584545	11/08/1948	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS JDOS.DE LO SOCIAL BARCELONA
991	CARRASCO GARCIA ANA MARIA	7844713	14/06/1962	24 7 4	22 10 3	28/08/1989	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO A CORUÑA
992	SOSA LOPEZ MANUEL	42670530	25/04/1944	28 1 9	22 6 13	30/11/1978	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
993	GAVIRA VILLA MARIA DOLORES	75410464	26/10/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SEVILLA
994	MARUGAN CID ENRIQUE	6547610	31/12/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL LEÓN
995	FERNANDEZ AHUJA LOPEZ MARIA NIEVES	11395144	24/05/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO AVILÉS (ASTURIAS)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
996	JIMENEZ AGREDA BEATRIZ	15951246	12/09/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
997	FERRER GARROFE RAFAEL	28447815	12/08/1957	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 SEVILLA
998	MATA CORRETGER MARIA DEL ROSER	77905172	29/04/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
999	FRANCO FRANCO BEATRIZ MARIA	28669938	19/08/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 11 SEVILLA
1000	CALVO ALONSO MARIA DEL CARMEN	11735685	10/05/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	Juzgados	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 A CORUÑA
1001	HERNANDEZ PRADOS PEDRO	24178062	30/09/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 MARBELLA (MALAGA)
1002	FUENTES-LOJO LASTRES MARIA AMPARO	35080511	24/09/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1003	OCARIZ MIGUEL ANA	30560322	21/06/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 BILBAO (BIZKAIA)
1004	MARTINEZ GONZALEZ MARGARITA	16255603	04/01/1951	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 39 MADRID
1005	REDONDO DIAZ PILAR ISABEL	4547370	09/04/1956	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
1006	GARCIA LOPEZ MARIA DEL SOL	24169134	18/06/1959	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 ALMERÍA
1007	MENOYO CALATAYUD GEMMA	5202378	17/07/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 VALENCIA
1008	GRACIA HIDALGO MARIA PAZ	30482550	08/03/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 10 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ)
1009	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	28574428	20/08/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 SEVILLA
1010	CALOTO GOYANES MARGARITA	800740	10/12/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 VIGO (PONTEVEDRA)
1011	CANTALEJO GARCIA ROSARIO	5241564	18/11/1959	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 VIGO (PONTEVEDRA)
1012	RIVERA GARCIA MARIA DOLORES	7840437	16/08/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1013	NEGREDO DEL CERRO MARIA ROSARIO	50307095	05/03/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 96 MADRID
1014	PAYAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER	28850286	05/08/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 37 BARCELONA
1015	BENITEZ BENITEZ FERNANDO	5236345	29/05/1959	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 34 MADRID
1016	MANRIQUE GONZALEZ MARIA CONCEPCION	25955897	14/12/1958	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 MURCIA
1017	GARCIA LEYVA MARIA LUZ	24174890	20/01/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 39 MADRID
1018	GARCIA-TENORIO ENCINAS ALFREDO	8802350	22/06/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 BADAJOZ
1019	ESTRADA RUIZ FERNANDO	10599730	02/05/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1020	JIMENEZ JIMENEZ TRINIDAD	7448001	11/04/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1021	LOPEZ CAMACHO MANUEL	27288323	28/05/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 SEVILLA
1022	SOTORRA CAMPODARVE MARIA JOSE	15937656	09/01/1959	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 35 MADRID
1023	MORENO CARRERO MARIA NIEVES	50687443	05/08/1959	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 48 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1024	RINCON LLORENTE MARIA JESUS	3433926	15/05/1960	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 24 MADRID
1025	CASO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	18202149	12/01/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 BARCELONA
1026	GOMEZ SANTOS ANGEL	71115864	06/12/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 VIGO (PONTEVEDRA)
1027	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA BELEN	393053	04/07/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 5 MADRID
1028	BLAS MESON ISABEL DE	9278529	29/08/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1029	FERNANDEZ FUEYO MARIA JOSE	9354274	08/05/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 OVIEDO (ASTURIAS)
1030	LOPEZ-JACOISTE RICO MARIA EUGENIA	18208122	22/03/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 16 MADRID
1031	MARTIN LLANOS INMACULADA	6977794	26/11/1959	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 28 MADRID
1032	VIRTUS LADRON DE GUEVARA JOSE MANUEL	9269618	28/04/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MURCIA
1033	DELGADO HERNANDO MERCEDES	2856150	24/09/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 7 VALENCIA
1034	GOMEZ CASTELLANO FRANCISCO	6985698	22/04/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA A CORUÑA
1035	NOGUES HIDALGO MARIA VICTORIA	25062478	09/10/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
1036	NUÑEZ GONZALEZ ELENA	28546203	22/09/1961	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 CÓRDOBA
1037	POZO MANZANARES CARLOS DEL	2855006	11/07/1963	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 BARCELONA
1038	LAMAS ALONSO MARTA VICTORIA	36050126	06/08/1962	24 7 4	22 6 13	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 VIGO (PONTEVEDRA)
1039	RAMIREZ DE AGUILERA FERNANDEZ SANTIAGO JOSE	22679391	23/04/1961	24 1 4	22 5 17	28/08/1989	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA
1040	PAZ GOMEZ ROSA MARIA DE	50309113	19/07/1961	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MADRID
1041	LOPEZ SALCEDO SUSANA	27439484	11/08/1962	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	SJ ORG UNIPER Y COLEG CONT ADMVO (2400) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
1042	CASTRO LOZANO MARIA DEL CARMEN	1118264	06/01/1962	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 22 MADRID
1043	MARISCAL RUIZ ROSARIO	31628304	05/03/1961	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1044	CARRILLO FUILLERAT DIONISIO ANTONIO	24172457	21/11/1960	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 MARBELLA (MALAGA)
1045	FREIRE DIEGUEZ MARIA LUISA	50299458	12/06/1961	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 44 MADRID
1046	GARCIA GALLEGO DOMITILA	74627133	12/12/1961	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 MOTRIL (GRANADA)
1047	ALONSO RODRIGUEZ MARIA ANGELES	9275222	22/02/1962	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 87 MADRID
1048	ESTARAN PEIX JUAN MARCOS	668414	12/08/1957	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS JDOS.DE LO SOCIAL BARCELONA
1049	LAGOS SUAREZ-LLANOS MARTA	36068718	16/11/1962	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 VIGO (PONTEVEDRA)
1050	NUIN ITURRI ADELA MARIA	15846422	03/11/1960	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1051	GRAGERA DE TORRES CARMEN	795545	14/11/1961	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 43 MADRID
1052	PEDROSA PRECIADO MARIA LAURA	13105219	24/02/1963	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 68 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1053	AGUILERA DELGADO ANA	25979726	01/10/1963	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MÁLAGA
1054	GOMEZ-VILLABOA PEREZ ANA MARIA	71547299	22/12/1962	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	SJ UPAD ORG. COLEG. AP (2415) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1055	MUÑIZ CARRION MARIA PALOMA	5373674	16/03/1961	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 17 MADRID
1056	DUEÑAS LAITA MARIA AURORA	12246936	29/01/1959	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 16 BARCELONA
1057	GONZALEZ LOPEZ Mª LUISA EUGENIA	23774108	09/10/1958	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 GRANADA
1058	SALGADO SUAREZ CARMEN	10563884	30/07/1955	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 MADRID
1059	JIMENEZ MORERA ROGELIO	24198284	04/07/1963	24 7 4	22 4 12	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 ALMERÍA
1060	GONZALEZ GARCIA ALFONSO	7802686	29/12/1954	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SEGOVIA
1061	LATORRE DIAZ BEATRIZ	33844560	26/02/1961	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 A CORUÑA
1062	GARCIA-TOMASSONI VEGA MARIA DOLORES	14960226	25/06/1961	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
1063	BERNAL ORTEGA MARIA TERESA	7809557	23/03/1956	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 GIRONA
1064	RIPOLLES MARTINEZ INMACULADA C.	19090965	09/06/1959	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 VALENCIA
1065	MARTIN JIMENEZ MARIA ANGELES	24172765	03/05/1958	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1066	BENITEZ ASENSIO SERGIO EMILIO	24867024	19/05/1958	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 MÁLAGA
1067	MARIN RELANZON MARIA DOLORES	3790645	08/01/1965	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 15 MADRID
1068	SIERRA CABEZAS LEONOR	24189206	24/08/1962	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 MÁLAGA
1069	MARTIN ESCALERA CUTILLAS ANA MARIA	45070610	30/08/1962	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 BARCELONA
1070	MARTIN-FORERO BUENDIA MARIA JOSE	389093	15/09/1960	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 LUGO
1071	BRACONS VERDAGUER MARIA TERESA	35011706	19/02/1959	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 BARCELONA
1072	LABELLA RIBES FRANCISCO JAVIER	24116010	20/09/1955	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1073	MARTINEZ SANJURJO MARIA DEL CARMEN	9257598	14/05/1959	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
1074	MORAL ZAFRA AURORA DEL	5371222	10/09/1959	24 7 4	22 2 8	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 MADRID
1075	RODRIGUEZ DIAZ ULPIANO MANUEL	10504364	26/03/1945	24 7 4	22 2 8	21/12/1973	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 OVIEDO (ASTURIAS)
1076	SANCHEZ FONTAL MANUEL	46005591	05/10/1946	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 58 BARCELONA
1077	DUEÑAS SANTOFIMIA JUAN PEDRO	38384672	07/04/1949	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 SEVILLA
1078	IZQUIERDO ALVAREZ-BUYLLA MARIA PALOMA	45410646	27/07/1945	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
1079	ROMERO PEREZ MARIA DOLORES	41994847	01/11/1950	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1080	GASSO PRIU ADRIA MARIA	77265241	27/06/1953	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 27 BARCELONA
1081	BARNUEVO VIGIL DE QUIÑONES JOAQUIN	1380217	10/04/1950	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MADRID
1082	VESGA GOMEZ MARIA BEGOÑA	14683837	30/05/1949	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1083	MARTINEZ COLLADO BALTASAR	38056625	26/09/1956	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
1084	HERNANDEZ DIAZ-NORIEGA FRANCISCO	28374932	03/12/1947	24 2 13	22 2 8	19/01/1990	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
1085	FRANCO LUCAS Mª ISABEL	5223803	27/07/1959	27 1 10	22 0 8	16/12/1983	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 47 MADRID
1086	MARTIN GARCIA VICTOR	7757936	05/02/1947	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 AVILÉS (ASTURIAS)
1087	FERRAN DILLA MARIA PILAR	18402217	27/07/1950	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 VALENCIA
1088	FRUTOS VIRSEDA FRANCISCO JAVIER DE	3412526	07/12/1952	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 19 MADRID
1089	SALVADOR IDRACH VICENTE	73499718	29/12/1955	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 13 VALENCIA
1090	MARTINEZ PARDO VICENTE JOSE	73757066	20/11/1959	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 VALENCIA
1091	MONTEL CHANCHO MARIA ALBA	40853766	15/12/1955	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 LLEIDA
1092	CUENCA SANCHEZ MARIA PILAR	33773951	20/07/1945	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 A CORUÑA
1093	GOÑALONS BENAVENT ROSA MARIA	37267970	16/06/1955	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 17 BARCELONA
1094	CILLA CALLE ENRIQUE	71252272	28/03/1951	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 93 MADRID
1095	UCERO ESTRADES MARIANO R.	42967036	26/06/1956	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1096	FABREGAT VERA FRANCISCO JAVIER	39025360	09/08/1954	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BARCELONA
1097	SERRANO LOPEZ-CASERO MARIA PILAR	75356495	22/11/1952	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 FUENGIROLA (MALAGA)
1098	ARENAS GARCIA LOURDES	14565939	22/09/1957	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 BILBAO (BIZKAIA)
1099	PEREZ LANDAZABAL EXPOSITO MARIA PALOMA	51702629	24/05/1957	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ELCHE/ELX (ALICANTE)
1100	VILLAFANEZ GARCIA DOMINGO URBANO	9722783	05/10/1958	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 A CORUÑA
1101	ROZA GONZALEZ-TORRE CARMEN DE LA	13661739	29/05/1945	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 SANTANDER (CANTABRIA)
1102	MARTINEZ ARIAS JOSE BONIFACIO	10541822	03/12/1948	24 2 13	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 FUENLABRADA (MADRID)
1103	ARRIBAS MARTIN MIGUEL ANGEL	50411498	04/11/1955	23 10 22	22 0 8	19/01/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 MADRID
1104	MARQUEZ PUERTO Mª DEL MAR	5220254	08/01/1957	23 6 9	22 0 8	11/11/1985	Paz	JDO. DE MENORES Nº 3 MADRID
1105	CONTRERAS DEL CURA Mª DEL CARMEN	13110400	13/11/1963	23 5 6	22 0 8	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 BARCELONA
1106	DELGADO SERRANO JOSE	25064313	15/03/1963	23 5 6	22 0 8	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 MÁLAGA
1107	CAMPOS SANCHEZ LUCIA	23218239	13/02/1960	23 5 6	22 0 8	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
1108	RODELLAR BENEDE PEDRO BERNARDINO	38427267	12/05/1961	23 5 6	22 0 8	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 BARCELONA
1109	CAMPO GARCIA Mª PILAR DEL	12739552	31/05/1964	23 5 6	22 0 8	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 OVIEDO (ASTURIAS)
1110	GARCIA-MORENO CARROBLES CELIA	50303097	27/08/1960	25 11 29	21 10 12	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 40 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1111	ROSSELL IBERN ANGELES	37267755	27/01/1956	24 11 28	21 10 0	11/11/1985	Paz	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. BARCELONA
1112	CARBONELL ARROYO ANA ISABEL	22457910	30/12/1957	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
1113	RIO MORO ANUNCIACION DEL	12358816	25/03/1958	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 VALLADOLID
1114	AVILES JEREZ Mª ANGELES	13112024	14/04/1964	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL HUESCA
1115	TORO LOPEZ Mª MONTSERRAT DEL	13753641	02/09/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 13 BARCELONA
1116	GARCIA RODRIGUEZ Mª DE LOS ANGELES	24192075	26/11/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 53 BARCELONA
1117	SANCHEZ-ELIPE VALLE JOSEFA	51325341	12/05/1955	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 30 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1118	MAINER BURGUEÑO JOSE MIGUEL	40874231	29/09/1961	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ZARAGOZA
1119	ROSADO DOMINGUEZ Mª ANGELES	28857680	25/09/1961	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 SEVILLA
1120	SAEZ NAVARRO MARIA JOSE	27495397	24/05/1962	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 ALMERÍA
1121	SANCHEZ-SOLIS DE QUEROL PURIFICACION	27454114	09/12/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 MURCIA
1122	PEREZ MARTIN Mª ENCARNACION	24190359	20/10/1962	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 CÓRDOBA
1123	URIZAR IZA Mª BEGOÑA	14601120	07/12/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 BILBAO (BIZKAIA)
1124	RUBIO PATERNA JOSE PEDRO	74343114	26/10/1961	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ALBACETE
1125	AGUIRREAZCUENAGA INCHAUSTI Mª BEGOÑA	11395316	24/10/1960	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 BILBAO (BIZKAIA)
1126	VELA HERNANDEZ Mª PILAR	18195102	19/05/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1127	RODRIGUEZ MORENO Mª DOLORES	24214136	13/11/1964	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 GRANADA
1128	GARCIA SUAREZ MANUEL MIGUEL	75698851	29/09/1957	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 CÓRDOBA
1129	TELLECHEA JIMENEZ Mª LOURDES	18200449	01/04/1964	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 BILBAO (BIZKAIA)
1130	PUERTO BARBER EMILIA	10843697	18/11/1962	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 28 VALENCIA
1131	SANTOS ORTUÑO VICTORIA EUGENIA	52521367	27/11/1965	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 GRANADA
1132	CARRION CASTILLO Mª TERESA	4567263	23/03/1962	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 59 MADRID
1133	BLAZQUEZ RUFO MANUEL JESUS	7446608	27/01/1960	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
1134	VALENCIA EDERRA ROSA MARIA	18198619	08/07/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1135	GARCIA ALVAREZ AURORA Mª CARMEN	51336528	23/04/1958	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 71 MADRID
1136	CASAS DIAZ Mª BEGOÑA	14587924	18/04/1963	23 5 6	21 10 0	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 BARAKALDO (BIZKAIA)
1137	SERRANO LORCA Mª ROSARIO	24118138	14/12/1955	27 3 22	21 9 23	18/12/1979	Distrito	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 MÁLAGA
1138	CURTO LOPEZ INMACULADA	12356479	07/04/1957	24 9 5	21 6 23	03/03/1986	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO ZAMORA
1139	AZNAR PRIMICIA Mª TERESA	17712466	03/10/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 ZARAGOZA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1140	GONZALEZ ROMERO Mª DEL MAR	22543606	05/07/1963	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 MURCIA
1141	RUANO MAROTO ANGEL TOMAS	3435483	24/02/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 89 MADRID
1142	SANCHEZ VALDIVIESO MARIA	74356197	08/12/1964	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JEF. SEC. PENAL (2060) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
1143	SANZ ESCORIHUELA Mª DEL CARMEN	50693994	13/07/1957	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 5 MADRID
1144	MARTINEZ ANTUÑA NIEVES ADELINA	10831113	07/06/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 GIJÓN (ASTURIAS)
1145	VALOR NEVADO INES	15973773	12/09/1964	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1146	RODRIGUEZ DIEZ LUIS JORGE	5246913	16/11/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 99 MADRID
1147	CARASUSAN ALBIZU MARIA JESUS	15960312	12/12/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 75 MADRID
1148	RUIZ GONZALEZ Mª BELEN	2205473	16/04/1964	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 6 MADRID
1149	TROYA CALATAYUD Mª CARMEN DE	30470095	20/06/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 CÓRDOBA
1150	TORRENTE MUÑOZ MONTSERRAT	51648704	30/10/1963	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 12 MADRID
1151	RODERO MONREAL CARMEN	25132660	18/08/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 21 VALENCIA
1152	ADALID HINAREJOS Mª JOSEFA	19837562	30/09/1958	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 13 VALENCIA
1153	TEJEDOR SALAGRE MARTA ISABEL	13741848	04/05/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO SANTANDER (CANTABRIA)
1154	BRUN PUYRAIMOND ANA MARIA	8803872	21/07/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 BADAJOZ
1155	GONZALEZ DE PEREDA PEDRO FERNANDO	25955766	09/03/1960	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1156	GIRON VIDAL Mª AUXILIADORA	33843117	13/12/1959	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL PONTEVEDRA con sede en VIGO
1157	DELGADO-IRIBARREN PASTOR MARIA JOSE	5389395	24/10/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
1158	GOMEZ SOUTO Mª CARMEN	2205623	21/01/1964	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 PARLA (MADRID)
1159	ESCUDERO MORATALLA JOSE FRANCISCO	5159201	07/09/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD SOCIAL Y JEF SEC EJEC SOCIAL Y CONT (2255) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
1160	ALEJANDRE DURAN MARIA JOSE	80128703	14/09/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MARBELLA (MALAGA)
1161	RUIZ GOMEZ MARIA CRUZ	13069693	27/02/1955	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 16 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1162	TORTELLA CARBONELL FRANCISCA	42992950	15/12/1960	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1163	GONZALEZ FEIJOO Mª LOURDES	32746317	15/09/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 A CORUÑA
1164	SILLERO ARENAS Mª DEL MAR	25969852	14/04/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 JAÉN
1165	GONZALEZ ORDOÑEZ JOSE RAMON	382256	16/05/1959	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 VALENCIA
1166	SANTOS DEL VALLE LUIS FERNANDO	13099529	20/06/1960	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SECRETARIA DE GOBIERNO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOGROÑO (LA RIOJA)
1167	CORREDERA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	7836848	08/10/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 ZAMORA
1168	ESPINO HERNANDEZ LUIS DIEGO	50698310	24/03/1961	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 VIGO (PONTEVEDRA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1169	VALENCIA SANCHEZ JESUS	50295886	13/12/1959	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SECCION AUDIENCIA PROVINCIAL GUADALAJARA
1170	ALLENDE ESCOBES SUSANA	15965562	15/07/1963	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1171	PLAZA PEREZ Mª DEL MAR	27512713	06/11/1964	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO ALMERÍA
1172	RUBIO FAURE CARLOS VICTOR	29752675	18/01/1962	23 5 6	21 6 23	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1173	SANZ HERNANDEZ JOSE LUIS	51348095	09/04/1962	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 COLMENAR VIEJO (MADRID)
1174	GINER FUSTE CARMEN EVEDIA	40878755	15/08/1962	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 44 BARCELONA
1175	GARCES DE CASTRO Mª LOURDES	9269444	19/11/1961	23 6 23	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 VALLADOLID
1176	RODRIGUEZ HERRERO SINFORIANO	7943148	06/04/1958	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. CENTRAL CONT-ADMVO. Nº 4 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
1177	TORRECILLAS VIDAL JOSE LUIS	24178378	21/03/1961	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 ALMERÍA
1178	BARRANTES FERNANDEZ FERNANDO	9155182	17/02/1959	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 BADAJOZ
1179	HERNANDEZ OLLERO Mª EUGENIA	4160580	16/06/1961	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 MÁLAGA
1180	SANCHEZ GALERA ROSA MARIA	74624600	14/06/1963	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 VALENCIA
1181	DIAZ CUEVAS Mª DEL SAGRARIO	388056	27/03/1960	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 MADRID
1182	TOSCANO MARTI Mª MONSERRAT	80127090	25/11/1961	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 CÓRDOBA
1183	HIDALGO ESPERILLA JOSE MARIA	76233533	22/05/1958	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 BADAJOZ
1184	PEÑA GARCIA OLGA	10837668	11/07/1963	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 GIJÓN (ASTURIAS)
1185	ELENA MURILLO VICTORIO DE	802614	07/12/1962	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 46 MADRID
1186	GRIMA GRIMA MIGUEL ANGEL	792486	25/02/1960	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 OVIEDO (ASTURIAS)
1187	VENTURA MOLINA BARTOLOME	50800827	19/11/1957	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 38 MADRID
1188	JUAREZ SANCHEZ-GRANDE Mª GLORIA	9168389	24/04/1962	23 5 6	21 4 1	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MÉRIDA (BADAJOZ)
1189	URETA MAYANS MARGARITA	45070120	16/08/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1190	GONZALEZ PEREZ FERNANDO	2527297	31/08/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1191	CASAS CAPDEVILLA ANTONIO JOSE	35044067	22/07/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 LLEIDA
1192	RODRIGUEZ FANO Mª LUISA	14251850	20/05/1961	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 BILBAO (BIZKAIA)
1193	ALVAREZ GRACIA MARIA ROSA	25143587	16/12/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1194	PELAEZ DIAZ JOSE LUIS	10586793	29/09/1958	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 MADRID
1195	KAIFER BRASERO ALICIA	51646195	10/05/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 30 MADRID
1196	MARQUINEZ BEITIA JOSE ANTONIO	16258029	18/02/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 GIRONA
1197	SANCHEZ LORENZO Mª LUISA	7844954	31/05/1960	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 SALAMANCA
1198	TORRES MATEOS JOSE MANUEL	5642151	30/08/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES CIUDAD REAL
1199	FERNANDEZ DE CASTRO EMILIO BENJAMIN	9722233	14/09/1958	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1200	NAVARRO RUIZ Mª VICTORIA	28858423	06/02/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. Nº 1 SEVILLA
1201	MIRA CABALLOS MARIA JOSE	75411368	14/09/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO HUELVA
1202	LOPEZ DURAN EMILIO	11792069	11/01/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 54 MADRID
1203	AFAN DE RIVERA JIMENEZ Mª NIEVES	5242414	15/08/1960	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1204	GOMEZA LORENZO JUAN TOMAS	24407355	12/01/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 BILBAO (BIZKAIA)
1205	ALVAREZ MORALES Mª NIEVES	71873670	17/03/1964	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 OVIEDO (ASTURIAS)
1206	CASASUS JIMENEZ PEDRO	20409476	10/10/1961	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 5 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA
1207	ASENSIO LOPEZ LUCIO	5623442	31/10/1957	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
1208	IÑURRATEGI ITZA MARIA NEREA	15961279	28/03/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1209	BARRIO PELEGRINI Mª ROSARIO	51348989	26/09/1960	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 MADRID
1210	MANZANO RODRIGO MARIA JOSE	27454610	17/03/1965	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MURCIA
1211	CANO CAMPAÑA Mª ISABEL	25976495	01/03/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 MÓSTOLES (MADRID)
1212	LASTRA LIENDO SEBASTIAN	72023189	29/12/1960	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 43 MADRID
1213	ALVAREZ SERRANO Mª LUISA	50416243	20/05/1958	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 17 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1214	ORTIZ GARROTE JOSE MIGUEL	27287660	20/03/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 15 SEVILLA
1215	FERNANDEZ ONORATO Mª DOLORES	28682626	11/05/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. Nº 2 VALENCIA
1216	BUELGA ALVAREZ Mª PILAR	71625769	08/10/1959	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 GUADALAJARA
1217	CAMPO RIOSEAS JOSE LUIS	12228661	09/12/1955	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 VALLADOLID
1218	RIVERO SIMON Mª GEMMA	7844116	31/12/1962	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 SALAMANCA
1219	RIOS NIETO Mª VICTORIA	29768529	11/10/1963	23 5 6	21 1 25	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 HUELVA
1220	PEREZ PORTERO AURORA FRANCISCA	30491913	14/07/1962	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1221	GARCIA PEREZ Mª DE LAS NIEVES	13749178	12/11/1963	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
1222	VAL LECHON ANGEL LUIS DE	25133773	28/06/1962	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1223	GALLEGOS MEDRANO RAQUEL	7947840	16/10/1962	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 GRANADA
1224	RUFAS TENAS ANTONIO	17868506	07/09/1961	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1225	AGUIRRE LARUMBE RAQUEL MARIA	18194604	23/06/1963	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1226	MARTIN ANTONA Mª TERESA	7212225	02/12/1963	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 66 MADRID
1227	ARROYO MARTIN Mª BEGOÑA	30557746	16/11/1961	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 VALLADOLID
1228	GIMENO CALVO Mª JOSE	17870671	05/05/1961	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 BARCELONA
1229	LOPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA MARIA JOSE	24188526	13/10/1963	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 GRANADA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nombr.	Cuerpo procedencia	Destino
1230	ORELL MARCUS PAULA	78204858	03/12/1963	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1231	CIAURRIZ LABIANO SUSANA	18198681	20/02/1964	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 VALENCIA
1232	GIRALDEZ BLANCO JULIO	50306073	17/10/1962	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 VALENCIA
1233	OCHOA EGUIZABAL SUSANA	18960667	12/05/1965	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 14 VALENCIA
1234	ELENA MURILLO Mª LEONOR DE	803427	02/08/1961	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 42 MADRID
1235	OLALLA GARCIA Mª DOLORES	12233913	04/11/1956	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 15 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1236	TORO VILCHEZ CARMEN YOLANDA	24172225	27/08/1960	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 CÁDIZ
1237	FIDALGO IGLESIAS Mª VICTORIA	11788367	18/05/1964	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 62 MADRID
1238	MARTIN SANCHEZ ANGEL JAVIER	7820547	12/06/1958	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SALAMANCA
1239	SANCHEZ MARTIN MANUEL	652484	23/03/1954	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 23 MADRID
1240	MENARGUEZ SALOMON MARTA MARIA	12751406	24/01/1964	23 5 6	20 11 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 24 MADRID
1241	MENENDEZ MARQUES MARTA	10067478	04/12/1963	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN CIVIL, CONTENCIOSA Y SOCIAL GIRONA
1242	HERNANDEZ MARTIN TOMASA	20784791	20/10/1960	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 ZARAGOZA
1243	ZABALLA MERINO TERESA FRANCISCA	13298161	23/06/1964	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 BARCELONA
1244	VALIÑA REGUERA CARLOS JUAN	8818826	24/08/1963	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 SANTANDER (CANTABRIA)
1245	GUERRA MORAL JOSE ANTONIO	75407314	14/07/1961	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO CÓRDOBA
1246	LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRO	9740643	29/03/1961	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 BARAKALDO (BIZKAIA)
1247	MARTINEZ BERENGUER Mª ISABEL	27459548	29/01/1965	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1248	PIÑERO PIÑERO ANTONIO	28525925	26/11/1957	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 SEVILLA
1249	MENDEZ BAÑOS MARIA JOSE	8808430	07/08/1963	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 BADAJOZ
1250	VILLOSLADA TORQUEMADA Mª ISABEL	15965364	18/08/1963	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1251	GUERRERO RABADAN ANGELA MARIA	2203064	10/01/1962	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 60 MADRID
1252	BRU MISAS Mª DEL CARMEN	27493232	31/07/1962	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 ALMERÍA
1253	VILA MONTES ERNESTO	27493333	27/08/1959	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL ALMERÍA
1254	MARTINEZ SANCHEZ Mª AFRICA	40289278	20/09/1957	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES GIRONA
1255	ALONSO MARCOS Mª DOLORES	7830833	28/09/1958	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 18 MADRID
1256	GARCIA MORILLAS Mª CRISTINA	4564416	31/07/1963	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 10 VALENCIA
1257	BLASCO BELTRAN ISABEL	17711971	05/04/1963	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ZARAGOZA
1258	GONZALEZ-MORO TOLOSANA ANTONIO	21439415	06/08/1962	23 5 6	20 9 3	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1259	OTEO MUÑOZ Mª ISABEL	5377917	08/01/1962	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 36 MADRID
1260	MARTIN ROBLES JOSE ANTONIO	24182514	29/08/1962	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GRANADA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1261	GAMERO SANCHEZ Mª ARACELI	28718901	08/04/1964	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 SEVILLA
1262	COLLADO BUENO ROSARIO	24174705	07/04/1962	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ORIHUELA (ALICANTE)
1263	HERAS ELVIRA FELIPE	28399565	11/04/1953	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1264	MONTES RAMIREZ EMILIA	80130310	27/11/1962	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
1265	SANCHEZ MARTIN AMELIA	28458632	21/09/1958	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 3 CÁDIZ con sede en JEREZ DE LA FRONTERA
1266	TORRES MOHEDAS ANGELA	11803562	24/11/1965	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 COLMENAR VIEJO (MADRID)
1267	PILAR GRACIA MANUEL	8788345	06/03/1959	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
1268	LLORENS LOPEZ Mª JOSE	22648813	14/06/1961	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 11 VALENCIA
1269	MARTIN GARCIA Mª ISABEL	27504497	22/01/1964	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ALMERÍA
1270	BURRIEL MANZANARES GEMA	46219111	20/05/1960	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1271	SALVADOR DE LA CASA Mª DEL MAR	27490533	29/04/1961	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 GRANADA
1272	PICAZO GARCIA Mª CONSUELO	28500967	28/10/1954	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 SEVILLA
1273	CUENCA BURGOS MARIA LUISA	51648307	14/04/1962	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 TOLEDO
1274	ALVARADO FERNANDEZ INES	31628361	19/11/1960	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
1275	BERGUA OTIN Mª JOSE	18161734	14/03/1961	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1276	PLANELLS COSTA JOSEFA	78200197	13/10/1959	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1277	GRANDA SAN MIGUEL Mª PILAR	4160783	21/08/1961	23 5 6	20 6 24	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
1278	MARTINEZ MOLINA ROSA MARIA	5631698	31/07/1961	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 GRANADA
1279	PINO PEREZ Mª DEL MAR	35301607	17/05/1965	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 VIGO (PONTEVEDRA)
1280	CUVILLO SILOS Mª JESUS DEL	31221582	31/03/1959	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CÁCERES
1281	MURIEL BERNAL Mª ANGELES	6987132	29/04/1961	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 VALLADOLID
1282	RIQUELME CORTADO Mª DOLORES	27429657	11/02/1961	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
1283	RUIZ PARDO JOSE ANTONIO	17215974	19/12/1962	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL TARRAGONA
1284	JIMENO DEL VALLE Mª JESUS	22644103	06/10/1960	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TERUEL
1285	CARRASCO GARCIA FRANCISCO ANGEL	13113960	17/09/1964	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 MADRID
1286	ISASI BARBIER FRANCISCO JAVIER	15863656	24/01/1963	23 5 6	20 4 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1287	QUESADA MARTOS MARÍA ANGELES	5228320	15/12/1958	23 10 15	20 3 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 MURCIA
1288	BELSUE MARTIN JOSE LUIS	18162056	10/02/1962	23 10 5	20 3 8	14/05/1987	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 55 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1289	CAÑADAS ALCANTUD EMILIA	77296721	29/07/1961	21 9 17	20 3 4	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 VALLADOLID
1290	QUINTANA GARCIA-SALMONES Mª VICTORIA	13915357	08/05/1964	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
1291	GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS	12726982	19/05/1959	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 PONTEVEDRA
1292	LAGUNA PEREZ Mª DEL MAR	13112675	09/11/1963	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
1293	MOYANO IGLESIAS Mª DESAMPARADOS	25054800	12/06/1963	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 9 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
1294	LEON LEAL Mª TERESA	29746541	30/01/1960	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 SEVILLA
1295	ANDRES SANTOS ARTURO	9263173	06/09/1960	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 27 BARCELONA
1296	RODRIGUEZ MORILLA FRANCISCO JOSE	27292748	03/04/1963	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1297	GOMILA DE SANDE JOSE CARLOS	5342966	26/08/1955	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 MADRID
1298	MARIJUAN GALLO Mª JOSE	14249256	19/03/1961	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 BILBAO (BIZKAIA)
1299	JIMENEZ SANCHO Mª BEGOÑA	16791916	12/06/1960	23 5 6	20 0 28	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 14 MADRID
1300	BONILLA CORREA JESUS ANGEL	4565061	22/12/1962	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 VALENCIA
1301	ARTIME VELARDE AGUSTIN	10187598	31/07/1962	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 3 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA LUGO
1302	PERROTE PERROTE ANTONIA	12723694	05/01/1959	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 SEGOVIA
1303	ABRUÑA PUYOL Mª VICTORIA	50662226	07/05/1950	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 15 MADRID
1304	PICAMILL VELA JOSEFA MARIA	27283378	25/10/1957	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 SEVILLA
1305	BULLON HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	7832210	14/09/1961	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1306	LEIVA GONZALEZ Mª OLIVA	10592077	04/07/1959	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 OVIEDO (ASTURIAS)
1307	ROMERO CARRASCO MONTSERRAT	46318040	28/05/1954	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 TERRASSA (BARCELONA)
1308	PEREZ-MADRIGAL SANZ CARLOS	5231018	08/08/1958	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 TOLEDO
1309	BURILLO ORRICO MILAGROS	27449636	27/11/1964	23 5 6	19 9 25	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 VALENCIA
1310	SOTELO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	36071213	23/10/1963	23 0 24	19 7 1	08/03/1991	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL OURENSE
1311	FERNANDEZ LINARES MARIA ASUNCION	30492976	12/08/1962	23 0 24	19 7 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 8 CÓRDOBA
1312	MARTIN GARCIA IGNACIO	7942640	28/07/1957	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ZAMORA
1313	YEBRA RODRIGUEZ Mª MERCEDES	10049180	16/03/1959	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ARENYS DE MAR (BARCELONA)
1314	PARRILLA NAVARRO PURIFICACION	27288781	04/05/1962	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1315	MIRANDA GOMEZ MARIA ALTAMIRA	13296811	13/09/1963	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD CONT ADMVO Y SEC CIV/CA/SO en SCE (2275) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
1316	PEREZ SANCHEZ REGINA	5226210	26/03/1957	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 70 MADRID
1317	ALVAREZ PERALVAREZ URBANO	43390093	25/05/1960	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 15 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1318	PABLOS VELASCO Mª CARMEN DE	9284371	01/02/1964	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 VALLADOLID
1319	NOVAL ONRAITA JOSE MIGUEL DEL	28680631	21/08/1960	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ
1320	MARTINEZ PAULANO Mª ROSARIO	25984055	01/08/1964	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 BARCELONA
1321	LOPEZ CORRAL EUGENIO	16533079	02/12/1962	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 23 BARCELONA
1322	ATILANO BARREÑADA FRANCISCO	9676102	13/03/1950	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1323	CALLES ROBLES Mª ARANZAZU	16041688	09/01/1964	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 CÓRDOBA
1324	MARTINEZ GUINALIU ANGEL	38496770	31/03/1961	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 BARCELONA
1325	RECIO NUERO JOSE MANUEL	4127809	29/04/1952	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 TOLEDO con sede en TALAVERA DE LA REINA
1326	REGUEIRO PEREZ JOSE MIGUEL	76405758	04/06/1962	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 FERROL (A CORUÑA)
1327	RODRIGUEZ DEL PORTILLO ANDRES	697586	25/08/1961	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 10 MADRID
1328	REPRESA SUEVOS Mª PILAR	10596471	12/10/1959	23 5 6	19 5 21	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 14 MADRID
1329	MARTIN LLORENTE JESUS	3412850	15/01/1953	23 3 11	19 5 21	21/12/1990	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
1330	GUARDIA DIAZ PAULA	5167515	18/12/1961	23 0 24	19 5 21	08/03/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1331	NESTARES PLEGUEZUELO ANA MARIA	24216874	31/05/1965	23 0 24	19 5 21	08/03/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 GRANADA
1332	MARTIN-GIL MARTIN DE LA SIERRA JESUS	5646896	21/12/1965	23 0 24	19 5 21	08/03/1991	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL (2005) CIUDAD REAL
1333	BALLESTEROS PEREZ DE ALBENIZ MARIA ARANZAZU	16544734	20/07/1965	23 0 24	19 5 21	08/03/1991	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1334	MARTIN TABOADA MARIA CRISTINA	27297446	09/05/1965	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 SEVILLA
1335	SERNA BOSCH JOAQUIN DE LA	13756575	26/06/1963	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 SANTANDER (CANTABRIA)
1336	BAÑON GONZALEZ JUAN LUIS	43014250	20/09/1961	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JEF. SEC. SUBASTAS ELECTRONICAS (2140) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES MURCIA
1337	ORDIZ LLANEZA LUIS	9357641	11/10/1962	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 OVIEDO (ASTURIAS)
1338	ARIAS JUNGUITO MARIA	50803314	02/01/1963	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 95 MADRID
1339	REDONDO VERGARA MARIA	2870929	26/12/1964	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 31 MADRID
1340	PALACIOS FERNANDEZ JOAQUIN	9371336	06/09/1963	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL MIERES (ASTURIAS)
1341	RODRIGUEZ LUCAS LUISA MARIA	24187792	02/12/1961	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 LORCA (MURCIA)
1342	LANDALUCE CALLEJA MARIA CRUZ	31834143	23/06/1961	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 ALGECIRAS (CADIZ)
1343	SANCHEZ DE LA MATA ROSA MARIA	27500839	20/04/1963	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1344	CABRERA TRIBALDO MARIA DEL CARMEN	75701697	13/01/1961	23 0 24	19 2 1	08/03/1991	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ
1345	MONTAÑANA ARGENTE JOSE CARLOS	20765873	13/06/1954	22 9 14	19 2 1	19/06/1991	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 VALENCIA
1346	GARRALDA TEUS FRANCISCO JAVIER	663106	10/05/1956	21 1 19	19 0 10	26/10/1990	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 9 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1347	MARTIN-BORREGON GARCIA CHICA IGNACIO	2699745	25/05/1959	22 9 14	18 11 29	19/06/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 45 MADRID
1348	LAITA FLORES MARIA JESUS	39128789	20/06/1952	22 9 14	18 11 29	19/06/1991	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
1349	PRIETO GONZALEZ MARINO	14239508	13/02/1953	22 9 14	18 11 29	19/06/1991	C.U.	DECANATO PRIMERA INSTANCIA BILBAO (BIZKAIA)
1350	GAGO GAGO MARIA ISABEL	10036196	05/10/1955	22 9 14	18 11 29	19/06/1991	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 22 BARCELONA
1351	HERRAEZ MARTIN GLORIA	9289487	18/04/1965	22 2 15	18 11 29	17/01/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 VALENCIA
1352	ESPIN QUIRANTE ISABEL	74626345	04/06/1964	22 2 15	18 11 29	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 GRANADA
1353	GARCIA RUIZ MARIA LOURDES	29137056	31/10/1965	22 2 15	18 11 29	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1354	GOMEZ-CALERO VALDES MARIA DEL ROCIO	28722471	10/07/1965	22 2 15	18 11 29	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1355	SEBASTIAN SANZ MARIA CARMEN E.	73915595	17/06/1963	22 2 15	18 11 29	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 27 VALENCIA
1356	GALLEGO MOLINERO MARIA MONTSERRAT	24186161	27/04/1963	22 2 15	18 11 29	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 GRANADA
1357	HERVAS VERCHER JOSE VICENTE	25375567	20/12/1961	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 VALENCIA
1358	CASTREÑO SAEZ MARIA DEL CARMEN	12360505	16/07/1962	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE MENORES VALLADOLID
1359	CASALS DELGADO MODESTO	36566248	09/02/1965	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 41 BARCELONA
1360	VALLE ZAPICO AMELIA DEL	11067843	16/04/1965	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MADRID
1361	CALLES ROBLES MARIA LOURDES	16041687	09/01/1964	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 CÓRDOBA
1362	GUTIERREZ MELENDEZ MARIA CARMEN	12371581	16/07/1964	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 VALLADOLID
1363	CURIEL ENRIQUE MARIA CLARA	14594873	08/08/1964	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1364	GRANADO MARTIN MIGUEL ANGEL	11938673	03/09/1965	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1365	LEGAZ GARCIA CARLOS	22949876	12/09/1964	22 2 15	18 9 23	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 CARTAGENA (MURCIA)
1366	JIMENEZ DEL OLMO ANGEL RAMON	4571427	20/01/1965	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 MADRID
1367	GONZALEZ GARCIA MARIA JESUS	11737822	27/06/1962	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
1368	CANDELAS BARAJAS CRISTINA	51354770	13/08/1961	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1369	LOPEZ POYATOS ENRIQUE	24204382	15/01/1965	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 MÁLAGA
1370	ATIENZA LOPEZ JOSE IGNACIO	792847	14/07/1961	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 41 MADRID
1371	ALBES BLANCO MARIA CONCEPCION	9362888	11/09/1963	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 VIGO (PONTEVEDRA)
1372	ZAPATA MONGE MARIA BELEN	28579527	11/10/1964	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	SALA SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1373	ILLANAS MERINO CESAR LUIS	3443594	07/02/1965	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 53 MADRID
1374	ALHAMBRA PEÑA ENCARNACION	5251726	09/09/1962	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 VALENCIA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1375	BLAZQUEZ COSMES MARIA ANGELES	70859303	28/05/1963	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE MENORES SALAMANCA
1376	TORRE GARCIA MARIA DOLORES DE	75064594	09/07/1963	22 2 15	18 6 25	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 GRANADA
1377	ALVAREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	14599001	06/10/1964	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 VALLADOLID
1378	HERNANDEZ HOFMANN LUIS MANUEL	7828384	23/08/1959	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ÁVILA
1379	GOMEZ CINTAS MARIA DEL MAR	9169076	09/05/1962	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 83 MADRID
1380	PEÑA BONET MARGARITA	7856821	03/06/1965	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL OURENSE
1381	CARRILLO DE LAS HERAS MARIA TRINIDAD	9173434	17/10/1963	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 MÓSTOLES (MADRID)
1382	MONTANER ZUERAS CARMEN	18018279	29/08/1964	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 ZARAGOZA
1383	LOPEZ LEYVA CARMEN	24215994	24/10/1964	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MÁLAGA
1384	SOTO MARTIN PABLO	3827026	13/07/1964	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 TOLEDO
1385	ALCARAZ GONZALEZ SOLEDAD	25996847	24/10/1964	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 GRANADA
1386	LANGARA GARCIA-ECHAVE MARIA ISABEL	11927530	12/12/1964	22 2 15	18 5 0	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 BILBAO (BIZKAIA)
1387	PARRA LOZANO MARIA JOSE	11727567	25/11/1959	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1388	MORCHON IZQUIERDO MARIA GLORIA	45416640	20/01/1965	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 VALLADOLID
1389	CASANOVA FUENTES MARIA CARMEN	3813168	24/10/1961	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 TOLEDO
1390	PEREZ JODAR RAFAEL JACINTO	25973532	02/08/1962	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 JAÉN
1391	BAREA COBO MARIA INMACULADA	25987745	09/08/1962	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 JAÉN
1392	POMEDA IGLESIAS ANTONIA	11735377	13/07/1963	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL SORIA
1393	HERRERO SANCHEZ MARIA ELENA	13298316	05/07/1965	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 GIJÓN (ASTURIAS)
1394	GONZALEZ GARCIA MARIA ANGELES	7855474	18/01/1965	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 MADRID
1395	ARIAS MUÑOZ FRANCISCA PAULA	25988557	18/01/1961	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	SJ UPAD SOCIAL Y JEF SEC EJ CIV/CA/SO EN EL SCE(2250) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
1396	IÑIGUEZ MARTINEZ ANA DEL MAR	13121281	10/05/1965	22 2 15	18 3 20	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 SANTANDER (CANTABRIA)
1397	CEVALLOS-ZUÑIGA NOGALES ALFONSO	28856305	27/12/1961	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 BADAJOZ
1398	CASADO CALONGE MARIA LUISA	25426913	18/06/1964	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 56 BARCELONA
1399	RUIZ ZAMORA JUAN CARLOS	45275313	22/09/1963	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 MÁLAGA
1400	CABELLO MARTEL FRANCISCO JAVIER	25042103	09/03/1962	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MÁLAGA
1401	GARCIA GARCIA PAULA	28708447	06/10/1964	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 MÓSTOLES (MADRID)
1402	MARTIN ARENAS AGUSTIN	24203102	23/07/1965	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1403	SANCHEZ SINOVAS FRANCISCO JAVIER	9278654	08/08/1963	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 BILBAO (BIZKAIA)
1404	AVILA DE ENCIO JUAN MANUEL	804721	25/07/1962	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 MADRID
1405	HERREROS VENTOSA MAXIMO JAVIER	12725606	13/10/1959	22 2 15	18 1 14	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 28 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1406	CABEZAS MATEOS MARIA JOSE	75425391	15/11/1965	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 17 MADRID
1407	HOYO MORENO BLANCA ESTHER DEL	13117992	20/06/1965	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
1408	ORTEGA DE COSSIO MARIA CARMEN	31833001	12/10/1960	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ALGECIRAS (CADIZ)
1409	VALCARCE ROMANI JOSE ANTONIO	412254	23/02/1964	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 CÁDIZ
1410	PUEYO MATEO MARIA BEATRIZ	9357941	24/02/1962	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 OVIEDO (ASTURIAS)
1411	GARCIA HERNANDEZ JOSE LUIS	7841531	27/04/1961	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1412	MAYO Y ALVAREZ MARIA JOSE	50703108	21/04/1962	22 2 15	18 0 2	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 30 MADRID
1413	CELADA AYLLON DOMINGO	3086099	26/05/1963	22 2 15	17 10 3	17/01/1992	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1414	GARCIA FERNANDEZ MARIA LUISA	23222841	24/12/1959	22 2 15	17 10 3	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 BAZA (GRANADA)
1415	VALERO CANALES ANTONIO LUIS	23223084	26/06/1962	19 10 23	17 10 1	28/08/1989	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 MURCIA
1416	SERRANO CARRASCO JUAN ESTEBAN	12365799	10/05/1963	22 2 15	17 8 19	17/01/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 BARCELONA
1417	GONZALEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION	3831901	29/03/1964	22 2 15	17 8 19	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 44 MADRID
1418	SANCHEZ GIMENEZ MARIA ELENA	52810804	09/03/1965	22 2 15	17 6 26	17/01/1992	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1419	FERNANDEZ ROS JUAN FRANCISCO	22962373	29/08/1965	22 2 15	17 6 26	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 CARTAGENA (MURCIA)
1420	MARINERO RIVERA TERESA MARIA	11918276	20/08/1964	22 2 15	17 6 26	17/01/1992	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 6 DE LA COMUNIDAD DE MADRID MADRID
1421	SOBREVIOLA GARCIA MARIA REGINA	18423652	11/03/1965	22 2 15	17 6 26	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 16 VALENCIA
1422	CORCHON ENCISO MARIA ASUNCION	16782584	07/02/1954	21 2 17	17 5 3	19/06/1991	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ZARAGOZA
1423	GARCIA VILLANUEVA FRANCISCO MANUEL	27488774	06/08/1961	19 11 25	17 3 22	26/10/1990	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALMERÍA
1424	ROS CARREÑO CONCEPCION	22542938	31/03/1963	22 2 15	17 2 3	17/01/1992	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO VALENCIA
1425	RAMOS GARCIA EUGENIA	5395210	24/10/1964	22 2 15	17 2 3	17/01/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 25 MADRID
1426	AMARILLA JIMENEZ JOSEFINA	6984267	04/09/1960	20 4 27	16 9 15	26/10/1990	C.U.	SALA CONTENCIOSO-ADMVO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CÁCERES
1427	MARTIN ALVAREZ JUAN JOSE	76808269	24/10/1962	22 2 14	16 2 12	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
1428	MARTINEZ GUERRERO ALFREDO	24299657	06/05/1964	21 11 4	16 0 15	17/01/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 12 MÁLAGA
1429	MARIN GARCIA ANTONIO	26451209	20/06/1958	21 11 4	16 0 15	28/04/1992	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 GRANADA
1430	PALAT GUBERT VALENTI	39323468	28/11/1960	21 11 4	16 0 15	28/04/1992	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GIRONA
1431	VILA BIOSCA JOSE MARIA	22616154	25/03/1953	21 11 4	16 0 15	28/04/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 VALENCIA
1432	LOPEZ LUQUE MIGUEL ANGEL	28866916	15/10/1964	21 5 8	16 0 15	23/10/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1433	SAN JOSE CORS ALBERTO TOMAS	13122541	05/07/1966	21 5 8	16 0 15	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 9 MÁLAGA
1434	LOPEZ CALVO CLARA	25087890	18/10/1964	21 5 8	16 0 15	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 13 MÁLAGA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1435	PEREZ PERIZ Mª ANGELES	18023609	28/10/1965	21 5 8	16 0 15	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 HUESCA
1436	BAZACO VELASCO Mª DEL CARMEN	50719515	13/10/1967	21 5 8	16 0 15	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 33 MADRID
1437	RIO MONGE JOSE MANUEL DEL	25135143	08/11/1962	21 5 8	16 0 15	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 HUESCA
1438	MARIN ALVAREZ ROSA MARIA	5221716	16/09/1957	21 11 4	16 0 6	28/04/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 43 MADRID
1439	YUBERO MARTINEZ TOMAS	17432819	01/06/1958	21 11 4	16 0 6	28/04/1992	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1440	GUTIERREZ GUIO ENCARNACION	70558693	25/03/1948	21 11 4	16 0 6	28/04/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 11 MADRID
1441	RIUTORT MERCANT ANTONI	78204926	14/08/1964	21 5 8	16 0 6	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1442	GARCIA MARTINEZ Mª VICTORIA	2605377	04/03/1965	21 5 8	16 0 6	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 49 MADRID
1443	CHARRIEL ARDEBOL Mª DE LOS ANGELES	24317886	25/12/1962	21 5 8	16 0 6	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 14 MADRID
1444	VAZQUEZ ARIÑO GUILLERMO	1100932	28/01/1959	21 5 8	16 0 6	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 32 MADRID
1445	ROLLIN GARCIA MARIA ELENA	50823317	30/05/1965	21 5 8	16 0 6	23/10/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 7 MADRID
1446	LOPEZ MARMOL ANGEL	50805400	24/07/1963	21 5 8	16 0 6	23/10/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 15 MADRID
1447	ESCRIBANO GONZALEZ JOSE MIGUEL	25893766	09/05/1947	20 5 11	15 9 12	11/11/1985	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 JAÉN
1448	URREA MARSAL LIDIA	40884288	05/06/1964	21 5 8	15 9 9	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 LLEIDA
1449	GRANEL RODRIGUEZ JORGE	43506276	31/08/1964	20 2 1	15 9 9	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 BARCELONA
1450	DIEZ DE BALDEON VEGAS MARIA LOURDES	9255811	01/11/1959	20 2 1	15 9 9	01/02/1994	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 8 BARCELONA
1451	CALVO VERGARA ENRIQUE	50298658	12/11/1960	20 2 1	15 9 9	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 MADRID
1452	SUÑER DAGA FRANCISCO	73094392	22/05/1945	21 11 4	15 9 4	28/04/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 BARCELONA
1453	GALLEGO SANCHEZ JOSE	37319158	16/04/1959	21 11 4	15 9 4	28/04/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 29 BARCELONA
1454	REDONDO FERNANDEZ Mª ROSARIO	13117261	08/01/1965	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1455	GUTIERREZ ALADREN Mª MERCEDES	17220669	29/09/1964	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. ZARAGOZA
1456	JUAN SALVA MARGARITA DE	43011245	07/11/1963	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1457	JIMENEZ PALOMO RAFAEL	28698155	11/10/1963	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1458	CIDRAQUE ARIAS ANTONIO	46112097	09/11/1958	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 24 BARCELONA
1459	GINER MARTIN RICARDO	18422171	29/01/1964	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO ZARAGOZA
1460	JIMENEZ PADIN CARLOS	7847109	13/08/1963	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1461	RIOLOBOS IZQUIERDO MERCEDES	11769103	27/10/1966	21 5 8	15 9 4	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 LEGANÉS (MADRID)
1462	JIMENEZ MARTINEZ ISABEL	40880456	02/12/1962	20 2 1	15 9 4	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 LLEIDA
1463	ZURITA JIMENEZ JOSE FRANCISCO	24182988	31/10/1962	21 5 8	15 8 16	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 GRANADA
1464	LOPEZ GUERRERO Mª CRISTINA	5258318	14/12/1962	21 5 8	15 8 16	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 MAJADAHONDA (MADRID)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1465	OBLANCA MORAL ESTRELLA CARMEN	9740894	07/01/1963	21 5 8	15 8 16	23/10/1992	C.U.	JEF. SEC. CIVIL/CA/SOC (2020) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO LEÓN
1466	FERNANDEZ MOLINA MARIA TERESA	50938942	08/04/1956	20 10 6	15 8 16	25/05/1993	C.U.	SECCION Nº 26 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1467	PELAEZ RUIZ JOSE FRANCISCO	2691343	02/03/1951	20 10 6	15 8 16	25/05/1993	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 12 MADRID
1468	SIERRA FERNANDEZ DE PRADA MARIA CARMEN	24202275	20/01/1965	20 2 1	15 8 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 GRANADA
1469	ORTIZ GONZALEZ MARIA LUISA	5196918	20/08/1963	20 2 1	15 8 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 2 MADRID
1470	SANZ RUBIO MARIA LUZ	7210309	05/08/1960	20 2 1	15 8 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MADRID
1471	JAEN BAYARTE MARIA	73153538	27/01/1965	20 2 1	15 8 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ZARAGOZA
1472	CARBAJOSA COLMENERO JOSE MIGUEL	7868291	17/02/1967	20 2 1	15 8 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PONFERRADA (LEON)
1473	MUÑOZ FERNANDEZ OSCAR LUIS	9756169	03/05/1965	20 2 1	15 8 16	01/02/1994	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES LEÓN
1474	GUERRERO TERCERO FRANCISCO	8737703	16/05/1948	21 11 4	15 6 29	28/04/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 11 BARCELONA
1475	VIDAL QUIRANTE NIEVES	37689881	21/06/1958	21 11 4	15 6 29	28/04/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 BARCELONA
1476	CONTRERAS GARCIA LUISA ARACELI	13124032	06/11/1966	21 5 8	15 6 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 SANTANDER (CANTABRIA)
1477	GARCIA DE EVAN MARINA PILAR	33859387	14/06/1964	21 5 8	15 6 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 PONTEVEDRA
1478	BENAVENT BENEYTO ANTONIO	73942317	10/08/1961	21 5 8	15 6 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 ALZIRA (VALENCIA)
1479	CONESA EXPOSITO MARIA DEL PILAR	18424270	03/05/1965	21 5 8	15 6 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 TARRAGONA
1480	TEJERO LAORDEN Mª BEGOÑA	16530301	28/08/1962	21 5 8	15 6 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1481	BARRERA LORENTE SANTIAGO	18425231	12/10/1966	21 5 8	15 6 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 GUADALAJARA
1482	SALSE FERRER MARIA ANGELES	43702883	17/09/1967	20 2 1	15 6 29	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 LLEIDA
1483	SANCHEZ GARCIA LUIS ANTONIO	13760771	08/11/1965	20 2 1	15 6 29	01/02/1994	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 7 BARCELONA
1484	GONZALEZ ARAMBURU SUSANA	11929291	10/03/1964	20 2 1	15 6 29	01/02/1994	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO BARAKALDO (BIZKAIA)
1485	GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL	4576574	22/09/1967	20 2 1	15 6 29	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 ZARAGOZA
1486	ALONSO-LECIÑANA SAEZ ALBERTO	13133121	19/10/1968	19 0 18	15 6 29	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 VALENCIA
1487	FERRE IÑIGUEZ ANA ISABEL	18953718	08/01/1966	19 0 18	15 6 29	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 VALENCIA
1488	MARIN RILLO JOSE	35068854	18/11/1962	17 9 7	15 6 29	25/06/1996	C.U.	SECCION Nº 8 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
1489	ALBA VEGA ANGEL DE	27441356	13/08/1962	20 2 1	15 6 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 MURCIA
1490	MARRO GROS LUIS ENRIQUE	18021687	21/10/1967	20 2 1	15 6 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 ZARAGOZA
1491	MARTIN GARCIA PILAR	5391192	19/07/1964	19 8 18	15 6 18	13/07/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 20 MADRID
1492	CASTELLANOS LAIZ Mª TRINIDAD GLORIA	9759604	01/08/1966	19 0 18	15 6 18	13/03/1995	C.U.	SJ SEC. CIVIL/CA/SOC (2365) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO LEÓN
1493	ALBES GONZALEZ JOSE RAMON	9269141	03/09/1962	19 0 18	15 6 18	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1494	MONZON CUESTA MARIA ELMA	12747037	27/05/1966	21 5 8	15 4 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 A CORUÑA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1495	SOLA NAVAS ANA MARIA	34022445	22/02/1964	21 5 8	15 4 29	23/10/1992	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1496	FERNANDEZ DE LIENCRES RUIZ Mª DOLORES	27508750	15/11/1963	21 5 8	15 4 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 MÁLAGA
1497	MENDEZ DIAZ Mª ELSA	34250029	22/02/1959	21 5 8	15 4 29	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 OURENSE
1498	ORTEGA ESCANDELL ANA MARIA	24289637	22/12/1955	20 10 6	15 4 29	25/05/1993	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 MÁLAGA
1499	GARCIA PINO JOSE MARIA	793567	22/05/1960	20 2 1	15 4 29	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 SANTANDER (CANTABRIA)
1500	PUEYO CASTAN MARTA ELENA	25150996	05/01/1965	20 2 1	15 4 29	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 11 ZARAGOZA
1501	NIETO AVELLANED JAIME	29089428	11/08/1966	19 0 18	15 4 29	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ZARAGOZA
1502	NAVAJAS ROJAS LUIS CARLOS	24179586	20/02/1963	19 0 18	15 4 29	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 GUADALAJARA
1503	RODRIGUEZ RIVERA FRANCISCO ENRIQUE	75700109	25/03/1960	17 9 7	15 4 29	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1504	RODRIGUEZ-MOLDES PEIRO ANTONIO SALVADOR	22544153	22/02/1963	21 5 8	15 3 14	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 VALENCIA
1505	SAMPEDRO BLANCO Mª TERESA	32764150	20/09/1964	21 5 8	15 3 14	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 86 MADRID
1506	VALDIVIELSO GUTIERREZ CARMEN	37328763	10/01/1965	21 5 8	15 3 14	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 33 BARCELONA
1507	TIRADO GUTIERREZ Mª ISABEL	1116040	06/02/1963	21 5 8	15 3 14	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 13 MADRID
1508	SERRACARABASA MIÑANA JAVIER	37273478	28/02/1957	20 10 6	15 3 14	25/05/1993	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 13 BARCELONA
1509	GARCIA REVIRIEGO MARIA DEL MAR	43042927	03/11/1966	20 2 1	15 3 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1510	JIMENEZ MORILLAS BIENVENIDO	24099492	27/11/1952	17 9 7	15 3 14	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MÁLAGA
1511	LOZANO SUAREZ DAMIAN	42800385	26/09/1959	20 4 22	15 3 3	28/05/1993	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL GÁLDAR (LAS PALMAS)
1512	ENRILE DE ROJAS MERCEDES	29773010	21/08/1964	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 SEVILLA
1513	LOBILLO EGUIBAR ROSARIO	28712239	26/03/1964	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 27 SEVILLA
1514	BARAJAS ROJAS Mª INMACULADA	25987664	09/05/1964	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 JAÉN
1515	LOPEZ GARCIA-NIETO ISABEL	5397367	26/12/1965	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 6 MADRID
1516	GARCIA RUEDA Mª ANGELES	25992902	15/08/1965	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 JAÉN
1517	ROCA NAVARRO ISABEL MARIA	28877155	16/06/1965	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 SEVILLA
1518	BERNABEU PEREZ ISAAC CARLOS	21453467	24/07/1964	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1519	BENEDICTO VICENTE ESPERANZA	18424747	19/12/1964	21 5 8	15 2 19	23/10/1992	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 VALENCIA
1520	PEREZ RODRIGUEZ ENCARNACION	24070233	24/01/1949	20 10 6	15 2 19	25/05/1993	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 37 MADRID
1521	MARTINEZ-COMIN TRINXET ANA MARIA	46327404	25/07/1959	20 10 6	15 2 19	25/05/1993	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MÁLAGA
1522	PASCUAL BROTONS CRISTINA CAROLINA	21466342	01/07/1966	20 2 1	15 2 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 COLMENAR VIEJO (MADRID)
1523	MARIN MORANTE JOSE GABRIEL	21470657	16/07/1967	20 2 1	15 2 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1524	CASADO SILVESTRE MARIA CONSUELO	32754775	30/05/1964	20 2 1	15 2 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 17 VALENCIA
1525	OLIVER LOPEZ ROSA	27501904	30/09/1963	20 2 1	15 2 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 MÁLAGA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1526	GARCIA MARTINEZ INMACULADA	24326269	31/01/1964	20 2 1	15 2 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 VALENCIA
1527	CARCELLER FABREGAT FERNANDO	19848889	29/04/1964	20 2 1	15 2 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 VALENCIA
1528	CARASA ROCHE SILVIA	11808119	07/03/1968	19 0 18	15 2 19	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 64 MADRID
1529	SANCHEZ LOPEZ ANA DOLORES	78030885	07/11/1965	19 0 18	15 2 19	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 FUENGIROLA (MALAGA)
1530	ESCRIBANO SANCHEZ JULIO	7850691	16/07/1964	21 5 8	15 1 20	23/10/1992	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL ZAMORA
1531	SALVATIERRA DIAZ Mª ANGELES	16270254	22/09/1965	21 5 8	15 1 20	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 SANTANDER (CANTABRIA)
1532	ARTAL FAULO CARLOS JESUS	17220043	27/03/1964	21 5 8	15 1 20	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 ZARAGOZA
1533	FERRANDO MANSANET Mª DEL PILAR	20792270	18/04/1965	21 5 8	15 1 20	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 VALENCIA
1534	FERNANDEZ RUIZ BEATRIZ	11402962	13/05/1964	21 5 8	15 1 20	23/10/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 MÁLAGA
1535	MADRID-DAVILA RICO MARIA DEL CARMEN DE	37690673	19/02/1958	20 10 6	15 1 20	25/05/1993	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 BARCELONA
1536	PIERAS SUREDA CATALINA MARIA	43029523	04/07/1966	20 2 1	15 1 20	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1537	BERNAT ROCA ANTONIO	43023276	20/03/1965	20 2 1	15 1 20	01/02/1994	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1538	ORTUONDO VILAPLANA MARIA DEL CARMEN	30608607	19/09/1965	20 2 1	15 1 20	01/02/1994	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
1539	PEREZ DE LA RIVA VILCHES MARIA DE LA ESTRELLA	31333033	03/02/1966	20 2 1	15 1 20	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1540	SANCHEZ CERRAJERO FRANCISCO JAVIER	6548017	20/04/1963	17 9 7	15 1 20	25/06/1996	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 14 MADRID
1541	UGENA YUSTOS MARIA NIEVES	51387306	25/02/1968	17 1 17	15 1 20	17/02/1997	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 MADRID
1542	AZUAGA JURADO MANUEL	24702391	10/01/1946	20 10 6	15 1 4	25/05/1993	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 MÁLAGA
1543	GARCIA BLAZQUEZ JOSE RAMON	35975297	10/01/1949	17 9 7	15 1 4	25/06/1996	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1544	ALONSO GURREA RICARDO	19821311	21/03/1953	17 9 7	15 1 4	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 VALENCIA
1545	PALACIOS GONZALEZ MARIA ROSARIO	10076704	17/06/1967	17 1 17	15 1 4	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PONFERRADA (LEON)
1546	GARCIA FERNANDEZ RAFAEL	45418588	19/10/1967	17 1 17	15 1 4	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1547	GARCIA MUÑOZ MARY LUZ	9304363	01/11/1967	17 1 17	15 1 4	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 BENIDORM (ALICANTE)
1548	MUÑOZ VALERO MARIA CARMEN	34783138	07/07/1967	17 1 17	15 1 4	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MURCIA
1549	GARCIA RODRIGUEZ MARIA PILAR	7019387	08/02/1969	17 1 17	15 1 4	17/02/1997	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL CÁCERES
1550	ALBA BERNAL MARIA PAZ	52255731	03/01/1969	17 1 17	15 1 4	17/02/1997	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL CÁDIZ
1551	COLMENARES ORDEN MARIA DE LA O	25143582	01/05/1966	21 5 8	14 11 27	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 ZARAGOZA
1552	ANTON GUIJARRO VIRGINIA	16263910	16/07/1963	21 5 8	14 11 27	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 OURENSE
1553	PRADA HORCHE ANDRES	9353612	09/12/1960	21 5 8	14 11 27	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 OVIEDO (ASTURIAS)
1554	ANTOLIN PEREZ Mª GEMA	12366300	13/12/1963	21 5 8	14 11 27	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 PONTEVEDRA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1555	ESTEVE RAMOS Mª TERESA	29017388	12/02/1965	21 5 8	14 11 27	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 VALENCIA
1556	BOBILLO FRESCO CONSUELO-TERESA	36003840	30/05/1954	20 10 3	14 11 27	28/05/1993	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 VIGO (PONTEVEDRA)
1557	CASAJUS PALACIO ANA MARIA	25148170	20/06/1967	20 2 1	14 11 27	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ZARAGOZA
1558	LOPEZ MARTIN MARIA JOSE	17721083	13/08/1967	20 2 1	14 11 27	01/02/1994	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 ZARAGOZA
1559	VALDIVIELSO GARCIA MARIA YOLANDA	13111393	22/02/1964	20 2 1	14 11 27	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SEVILLA
1560	MORRO CANAVES JAIME	78195868	20/10/1955	19 8 18	14 11 27	13/07/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1561	CIFUENTES TORRES FERNANDO	15894579	17/03/1953	19 8 18	14 11 27	13/07/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1562	BENITO SANTOS FRANCISCO JAVIER	5202206	17/11/1963	19 0 18	14 11 27	13/03/1995	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 2 BARCELONA
1563	VALLS PRUNA MERCE	35016770	25/09/1960	19 0 18	14 11 27	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 BADALONA (BARCELONA)
1564	LUENGO PALOMINO MARIA	39689757	15/05/1968	19 0 18	14 11 27	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 REUS (TARRAGONA)
1565	MONSERRATE SABROSO MARIA SOLEDAD	25426813	28/02/1964	19 0 18	14 11 27	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 ZARAGOZA
1566	DE LA CRUZ GUTIERREZ MARIA PILAR	2204673	12/10/1963	19 0 18	14 11 27	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 100 MADRID
1567	TOLEDANO ITURBE JERONIMO	25119373	19/01/1961	17 9 7	14 11 27	25/06/1996	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
1568	GORT ORO JOSE RAMON	43702767	24/07/1968	17 1 17	14 11 27	17/02/1997	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 LLEIDA
1569	NAVALON ROMERO FERNANDO JAVIER	22953802	08/03/1965	21 5 8	14 11 13	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 MADRID
1570	ELVIRA MUÑOZ ANA MARIA	51362741	12/01/1964	21 5 8	14 11 13	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 MADRID
1571	PEREZ ARTECHE MARIA ESTHER	11925854	12/04/1964	21 5 8	14 11 13	23/10/1992	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
1572	MIRANDA SAINZ MARIA JOSE	16535586	08/07/1963	21 5 8	14 11 13	23/10/1992	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO LOGROÑO (LA RIOJA)
1573	ALCORTA BILBAO MARIA JESUS	30557066	13/09/1960	20 10 6	14 11 13	25/05/1993	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 BILBAO (BIZKAIA)
1574	LINAZA VICANDI MARIA LUISA	14934885	28/04/1957	20 10 6	14 11 13	25/05/1993	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 BILBAO (BIZKAIA)
1575	ORTUONDO ROCANDIO JOSE MARIA	30562812	16/03/1964	20 2 1	14 11 13	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 BILBAO (BIZKAIA)
1576	COLMENERO RUIZ JOSE LUIS	3811273	30/11/1962	20 2 1	14 11 13	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 TOLEDO con sede en TALAVERA DE LA REINA
1577	GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS ANTONIO EVARISTO	820046	06/04/1966	20 2 1	14 11 13	01/02/1994	C.U.	JDO. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
1578	GOFINONDO FERNANDEZ DE ARROYABE MIREN ITZIAR	30556951	25/09/1962	20 2 1	14 11 13	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 BILBAO (BIZKAIA)
1579	VALIENTE ESTEBANEZ MARIA PILAR	9294153	10/04/1965	20 2 1	14 11 13	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 PALENCIA
1580	TURNES DE LA INFANTA MARIA ROSA PAZ	4144306	22/09/1957	19 0 18	14 11 13	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
1581	SIGUERO LLORENTE RAQUEL	51661320	08/04/1964	19 0 18	14 11 13	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 61 MADRID
1582	VILLANUEVA VIVAR Mª ANTONIA	13921810	10/06/1966	21 5 8	14 10 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SANTANDER (CANTABRIA)
1583	GARCIA CARMONA OLIVA AGUSTINA	13733959	28/08/1960	21 5 8	14 10 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 SANTANDER (CANTABRIA)
1584	MARCOS SOLA JOSE JAVIER	16535012	27/03/1963	21 5 8	14 10 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 LOGROÑO (LA RIOJA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1585	CABEZUDO RODRIGUEZ AVELINO	12746699	25/11/1966	21 5 8	14 10 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 VALLADOLID
1586	GARCIA HERAS DAVID	13055471	03/04/1952	20 10 6	14 10 5	25/05/1993	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1587	LACASTA MONTES MARIA LUISA	17159225	11/06/1963	20 2 1	14 10 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ZARAGOZA
1588	CARREÑO ARNAL RICARDO	50814010	10/03/1965	20 2 1	14 10 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 MARBELLA (MALAGA)
1589	GARCIA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN	21453281	30/06/1963	20 2 1	14 10 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1590	DE DIEGO MORENO PALOMA	50058107	05/07/1964	19 0 18	14 10 5	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 TARRAGONA
1591	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL	24211891	30/03/1966	19 0 18	14 10 5	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 MÁLAGA
1592	LAGUARDIA HERNANDO JOSE ANTONIO	25444291	12/06/1966	17 1 17	14 10 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 ZARAGOZA
1593	AMOR SANZ JOSE LUIS	25144763	10/07/1965	17 1 17	14 10 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 BARCELONA
1594	GONZALEZ BASCUEÑA SALVADOR	50166809	25/04/1965	15 8 7	14 10 5	24/07/1998	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 MADRID
1595	LOZANO MUÑOZ PEDRO	27435663	02/12/1960	15 8 7	14 9 5	24/07/1998	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MURCIA
1596	GONZALEZ TORRES LUIS	4581870	27/06/1969	17 1 17	14 9 5	17/02/1997	C.U.	JEF. SEC. EJECUCION PENAL (2070) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES CUENCA
1597	VALERO SOLANO MARIA ITZIAR	40888182	14/06/1964	19 0 18	14 9 5	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL LLEIDA
1598	LOPEZ-MELUS MARZO RAFAEL	25138169	25/03/1966	20 2 1	14 9 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 ZARAGOZA
1599	ORDEIG RABADAN ALICIA EMILIA	25399247	25/11/1967	20 2 1	14 9 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 VALENCIA
1600	ALONSO MAGAZ MARIA ELENA	2869589	15/11/1970	17 1 17	14 9 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 65 MADRID
1601	LUCAS MORAL JULIO	13105705	20/03/1961	19 0 18	14 9 5	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD PENAL Y JEF SEC. PENAL en SCE (2310) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
1602	AMBRONA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	50440591	09/06/1968	17 1 17	14 9 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MÓSTOLES (MADRID)
1603	MARTIN OLMOS Mª JESUS ISABEL	72875343	26/04/1956	18 8 24	14 7 23	03/03/1986	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1604	SERRANO MOLERA Mª DEL PILAR	28586576	19/11/1965	21 5 8	14 7 1	23/10/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 ALBACETE
1605	OLIVERA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	9745992	05/08/1963	21 5 8	14 7 1	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 12 VALENCIA
1606	PLATAS CASTELEIRO MARIA	32790479	29/09/1968	20 2 1	14 7 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 A CORUÑA
1607	PORTILLA HIERRO PELAYO	11062584	17/09/1961	20 2 1	14 7 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 4 BARCELONA
1608	COLCHERO QUINTANILLA ANA MARIA	28473946	25/04/1965	20 2 1	14 7 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 19 BARCELONA
1609	FENOY GASION MARIA SOLEDAD	37648355	11/12/1951	19 8 18	14 7 1	13/07/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 19 BARCELONA
1610	FERNANDEZ GARCIA ELENA	2875375	08/07/1967	19 0 18	14 7 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 72 MADRID
1611	PONS CORTES INMACULADA	43045488	30/10/1967	19 0 18	14 7 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1612	GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO PEDRO	8738101	07/11/1948	17 9 7	14 7 1	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
1613	GARCIA LARA JUAN MANUEL	30527109	09/05/1968	17 1 17	14 7 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 18 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1614	AGÜERA PEÑAFIEL MARIA DOLORES	13298246	15/06/1965	17 1 17	14 7 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 BARCELONA
1615	IBAÑEZ ELEJALDE FDEZ ARROYABE IÑIGO	30643476	25/12/1970	17 1 17	14 7 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 25 BARCELONA
1616	MORENO CORREA MANUEL MIGUEL	8811135	30/01/1964	17 1 17	14 7 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 BADAJOZ
1617	HURTADO YELO Mª MICAELA	27472867	16/09/1965	21 5 8	14 6 16	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 77 MADRID
1618	RAIMUNDEZ RODRIGUEZ ANTONIO	10026845	10/10/1952	20 10 6	14 6 16	25/05/1993	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 MADRID
1619	HERRERO MARTIN MARIA INMACULADA	7855559	03/09/1964	20 2 1	14 6 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ARGANDA DEL REY (MADRID)
1620	REBOLLO ALONSO DE LINAJE SUSANA	3097670	26/08/1967	20 2 1	14 6 16	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 76 MADRID
1621	MARTIN GARCIA MARIA BEGOÑA	10177186	22/06/1955	21 0 5	14 5 11	15/10/1981	Distrito	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1622	FERNANDEZ MARTINEZ EFRAIN	4571847	23/07/1963	22 2 14	14 5 3	17/01/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
1623	VALCARCE CODES ISABEL MARIA	50409230	06/01/1954	21 11 4	14 5 3	28/04/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 LOGROÑO (LA RIOJA)
1624	LOPEZ RIBAS MIQUEL	38774803	27/09/1956	21 11 4	14 5 3	28/04/1992	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 19 BARCELONA
1625	INFANTE ORTIZ Mª YOLANDA	9289104	07/08/1965	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO LEÓN
1626	CHOCARRO UCAR Mª ARANZAZU	29139132	25/11/1966	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1627	LOPEZ-DICASTILLO SAINZ-MURIETA Mª FERNANDA	18195685	30/05/1963	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 CÁDIZ
1628	BAZTAN MAISTERRA Mª VICTORIA	29137396	15/11/1965	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1629	MARIN ALVAREZ Mª DEL CARMEN	2613212	04/08/1966	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MURCIA
1630	RUIZ OTEIZA CRISTINA	16036552	10/09/1961	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
1631	MARTIN GUTIERREZ JESUS ANGEL	12321355	06/03/1962	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 VALLADOLID
1632	LOPEZ GOMEZ MARIA JOSE	7550132	05/04/1966	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 ALBACETE
1633	GALLARDO DE PRADO MARIA LUZ	5403566	20/04/1965	21 5 8	14 5 3	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 MADRID
1634	BALBIN LLERA MIGUEL ANGEL	10850202	05/01/1966	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 OVIEDO (ASTURIAS)
1635	CATALAN ESCUDERO ANA PATROCINIO	15969905	12/04/1964	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 24 MADRID
1636	CORDERO LOZANO CARLOS	11940930	09/10/1965	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 BARAKALDO (BIZKAIA)
1637	SANCHEZ GOMEZ MARIA PILAR	32746884	01/05/1960	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 FERROL (A CORUÑA)
1638	ANAUT ARREDONDO SOFIA	15996378	07/12/1965	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
1639	GONZALEZ GARCIA MANUEL	7865270	16/06/1967	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ZAMORA
1640	VARELA REBOLO MARIA DEL CARMEN	33857623	02/02/1964	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 LUGO
1641	MARTIN GARCIA NURIA	6561957	16/01/1966	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 4 MADRID
1642	VIGAL BREY RICARDO	50716879	20/01/1968	20 2 1	14 5 3	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 OVIEDO (ASTURIAS)
1643	ARENAS AVILA RODRIGO	38486864	09/11/1956	19 8 18	14 5 3	13/07/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 BARCELONA
1644	TORRES LORIENTE JOSE LUIS	36906839	19/12/1949	19 8 18	14 5 3	13/07/1994	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1645	GONZALEZ HERAS MARIA DEL CARMEN	46020823	07/10/1955	19 8 18	14 5 3	13/07/1994	C.U.	SECCION Nº 22 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
1646	GABRIEL Y GALAN MORIS MARIA	5269130	22/02/1966	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 VIGO (PONTEVEDRA)
1647	MARCOS MARTIN FRANCISCO	28892583	17/08/1966	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 20 SEVILLA
1648	ESCODA RUIZ LOURDES	46124153	26/02/1966	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 39 BARCELONA
1649	ANADON SANCHO MARIA SOLEDAD	29088117	03/09/1965	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 14 BARCELONA
1650	RODRIGUEZ MARTIN FERNANDO	7857210	16/08/1965	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 ZAMORA
1651	HERNANDEZ ALONSO ANA MARIA	29088951	25/07/1965	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 27 BARCELONA
1652	DEL CASTILLO DE COMAS AMALIA SUSANA	825957	11/08/1966	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 31 MADRID
1653	MENDEZ JIMENEZ FERNANDO EUGENIO	9290236	08/09/1963	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
1654	POLO RENU MARINA	7862737	14/08/1966	19 0 18	14 5 3	13/03/1995	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL PONTEVEDRA
1655	CALERO CEDRES CARLOS EDUARDO	42016071	07/01/1955	17 9 7	14 5 3	25/06/1996	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1656	MARTINEZ POMAR SILVIA	43061768	06/03/1970	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1657	HERRERO UDAONDO COVADONGA	9391227	04/11/1968	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 CÁDIZ
1658	ALTABAS CARDENAS MARIA BELEN	38105919	05/05/1970	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 15 BARCELONA
1659	OLMEDA BUENDIA ANGEL	4584809	07/01/1970	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ALBACETE
1660	LINARES CUESTA JOAQUIN	24207359	07/10/1965	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MÁLAGA
1661	ESCRIBANO VINDEL JAIME OSCAR	43417040	24/10/1966	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 5 BARCELONA
1662	IGLESIAS DE BAYA JORGE VICTOR	17441586	16/12/1967	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 VALENCIA
1663	AVELLA SALOM MARGARITA	43061293	17/03/1970	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1664	GUTIERREZ DEL ALAMO OMS CRISTINA	5410447	16/04/1970	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 84 MADRID
1665	CASALOD LOZANO ANA MARIA	25436638	15/06/1966	17 1 17	14 5 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ZARAGOZA
1666	CONTINENTE PRATS GEMA	36953350	07/04/1952	15 8 8	14 5 3	24/07/1998	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 16 BARCELONA
1667	MONGE ESTEBAN ANTONIO	51603567	29/11/1952	15 8 8	14 5 3	24/07/1998	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ALCORCÓN (MADRID)
1668	MERAS SANTIAGO ANA ISABEL	33507439	07/05/1967	14 10 12	14 5 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1669	SANTAMARIA LOPEZ DOMINGO	4166943	25/09/1966	14 10 12	14 5 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 4 MADRID
1670	ARANDA BOSCH LAUREANO	43014872	23/12/1963	14 10 12	14 5 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1671	BAREA SANCHEZ-IBARGÜEN DAVID	28693098	04/01/1964	14 10 12	14 5 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 SEVILLA
1672	JURIO MACAYA INMACULADA	72671497	09/05/1970	14 10 12	14 5 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1673	VAZQUEZ GARCIA DAVID	50094552	04/08/1971	14 10 12	14 5 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 FUENLABRADA (MADRID)
1674	GONZALEZ IGLESIAS MERCEDES	28470180	28/08/1965	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 SEVILLA
1675	ALBERDI AZUABARRENA FRANCISCO DE JAVIER	15961760	16/01/1963	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 BARAKALDO (BIZKAIA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1676	CORCHERO MARTIN JUSTINO GONZALO	33971951	24/05/1965	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 LUGO
1677	ROMERO CANDAU Mª DEL ROSARIO	28579571	10/07/1965	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 SEVILLA
1678	GOMEZ SUAREZ VERONICA PIA	29077063	08/01/1965	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ALMERÍA
1679	MONSERRAT MOLINA PEDRO EUGENIO	21442152	24/09/1963	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1680	VILLALON CABALLERO CRISTOBAL	11787604	15/10/1963	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 GUADALAJARA
1681	HORMAZABAL VILLACORTA Mª ESTRELLA	10576290	02/04/1957	21 5 8	14 1 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
1682	GAGO BOHORQUEZ ANTONIO	25548444	23/04/1948	20 10 6	14 1 5	25/05/1993	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 7 SEVILLA
1683	ULLOA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	32764039	09/11/1962	20 2 1	14 1 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 A CORUÑA
1684	DOPEREIRO RODRIGUEZ JOSE JAIME	34938356	01/08/1961	20 2 1	14 1 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 OURENSE
1685	GALVEZ GUILLEN MARIA PILAR	23787735	18/01/1965	20 2 1	14 1 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 57 BARCELONA
1686	PEREZ RODRIGUEZ MARIA ROSA	10853205	02/10/1966	20 2 1	14 1 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 AVILÉS (ASTURIAS)
1687	ALONSO-LUZZY CAMPOY RAMON	22952589	19/05/1963	20 2 1	14 1 5	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 CARTAGENA (MURCIA)
1688	VIVANCOS GIL PEDRO-ANTONIO	27463706	17/01/1966	19 0 18	14 1 5	13/03/1995	C.U.	JEF. SEC. EJECUCION PENAL (2070) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES MURCIA
1689	MONESCILLO DIAZ CARLOS MARCIANO	5654140	22/05/1967	19 0 18	14 1 5	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD 1ªINST.E.INSTR Y SJ JEF SEC PENAL en SCOP (2190) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
1690	LUNA MAIRAL EVA MARIA	18025809	16/06/1968	19 0 18	14 1 5	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 28 MADRID
1691	MARQUINA CASTELLS MARGARITA	21478327	28/06/1968	17 1 17	14 1 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 31 BARCELONA
1692	DIEZ DE ULZURRUM CALVO RAMON	50715477	16/06/1967	17 1 17	14 1 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 55 MADRID
1693	GARCIA ARANGÜENA CRISTINA	50091094	03/11/1970	17 1 17	14 1 5	17/02/1997	C.U.	SECCION Nº 4 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
1694	MARTIN MARTIN ROSARIO	2880072	29/06/1968	17 1 17	14 1 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 MADRID
1695	MANUEL MONDEJAR JOAQUIN	27452288	02/04/1964	17 1 17	14 1 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 MURCIA
1696	DOGANOC DE LEON MARIA	52172457	05/02/1967	17 1 17	14 1 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 BARCELONA
1697	OLIVARES SUAREZ MARTA	37369092	21/08/1964	14 10 12	14 1 5	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 BARCELONA
1698	ZOYA CERRUDO Mª CRISTINA	50433812	19/05/1966	14 10 12	14 1 5	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 BARCELONA
1699	ENRECH VERDE JOSEFINA ELENA	2631417	11/11/1970	14 10 12	14 1 5	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 30 MADRID
1700	VALDEGRAMA GONZALEZ Mª ANGELES	9399847	19/04/1970	14 10 12	14 1 5	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 BARCELONA
1701	PEREZ CERVERA JUAN JOSE	21448193	31/07/1964	17 9 4	13 10 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1702	PECES GOMEZ LUCIA	2600687	02/07/1962	21 5 8	13 9 24	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 BADAJOZ
1703	MARTIN SANZ JOSE ENRIQUE	9282352	29/04/1964	21 5 8	13 9 24	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1704	DE LA RUA MORENO DESAMPARADOS	22600227	09/05/1949	20 10 6	13 9 24	25/05/1993	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 17 VALENCIA
1705	VALERO LOPEZ JOSE EUGENIO	5117533	13/10/1953	20 10 6	13 9 24	25/05/1993	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 VALENCIA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1706	FERNANDEZ SORIANO DOMINGO	74429715	10/03/1957	20 10 6	13 9 24	25/05/1993	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 VALENCIA
1707	FORMOSO SOBRADO JOSE MIGUEL	32636285	18/05/1963	20 10 3	13 9 24	28/05/1993	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
1708	CIORDIA PASCUAL MARIA TERESA	18204774	07/02/1964	20 2 1	13 9 24	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 BARAKALDO (BIZKAIA)
1709	GUILLEN FLETA MARIA LUISA	17717411	19/07/1964	20 2 1	13 9 24	01/02/1994	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL ZARAGOZA
1710	MARTINEZ DE SANTOS ALBERTO	51664889	25/11/1966	20 2 1	13 9 24	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 VALENCIA
1711	CASTAÑO PENALVA MARIA ASUNCION	29040610	20/09/1966	19 0 18	13 9 24	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
1712	RODRIGUEZ DIAZ MARIA AMOR	10860925	22/11/1967	17 1 17	13 9 24	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
1713	FLOREZ HERNANDEZ ROCIO	8987884	06/03/1970	14 10 12	13 9 24	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 MADRID
1714	PANTOJO FALERO JOSE ANTONIO	9177668	13/12/1965	21 5 8	13 9 14	23/10/1992	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E. INSTR Y SJ SEC CIV/CA/SO SCE (2220) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MÉRIDA (BADAJOZ)
1715	MILANO NAVARRO MARTINA	50718214	09/07/1966	21 5 8	13 9 14	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ALCORCÓN (MADRID)
1716	FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	72109401	21/04/1946	20 10 6	13 9 14	25/05/1993	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 SANTANDER (CANTABRIA)
1717	LUNA CASTRO MARIA DE LAS VICTORIAS	2223847	09/09/1966	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 GANDIA (VALENCIA)
1718	PARIENTE VELLISCA MARIA LUISA	50824319	17/02/1967	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 11 MADRID
1719	MOHEDAS LOPEZ LUCINDO LUIS	31244410	27/07/1963	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 4 SEVILLA
1720	GUTIERREZ LOPEZ MARIA SOLEDAD	25998906	16/10/1965	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 CÓRDOBA
1721	DOLZ PERIS MANUEL	25389780	13/06/1964	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 VALENCIA
1722	SANCHEZ PERIÑAN ANGEL LUIS	32860589	01/08/1968	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 CÁDIZ
1723	MONTERO MANCHADO JUAN FERNANDO	8805014	14/06/1963	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
1724	CARRO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	7215070	07/08/1964	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 9 MADRID
1725	GALA GONZALEZ EVA MARIA DE LA	34955579	18/02/1964	20 2 1	13 9 14	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 51 MADRID
1726	VAZ-ROMERO MORENO MARIA CARMEN	7008632	31/05/1966	19 0 18	13 9 14	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD 1ªINST.E.INSTR Y SJ JEF SEC PENAL en SCOP (2190) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
1727	BARBERO BLANCO BLANCA ROSA	30570625	10/06/1965	19 0 18	13 9 14	13/03/1995	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL BILBAO (BIZKAIA)
1728	ROSELLO SOBREVELA RAFAEL	52749526	09/10/1968	19 0 18	13 9 14	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 VALENCIA
1729	DE LA GANDARA PORRES LUCRECIA	13761069	03/04/1963	19 0 18	13 9 14	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 SANTANDER (CANTABRIA)
1730	GARRIDO FERRANDO MARIA CARMEN	25396385	01/08/1965	19 0 18	13 9 14	13/03/1995	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 4 VALENCIA
1731	GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO	76000899	26/06/1955	17 9 7	13 9 14	25/06/1996	C.U.	SJ UPAD 1ªINST.E.INSTR Y SJ SEC PENAL en SCE (2210) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1732	MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	24340144	23/07/1968	17 1 17	13 9 14	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 VALENCIA
1733	NAVARRO MELCHOR MARIA JOSE	19102094	22/12/1966	17 1 17	13 9 14	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 VALENCIA
1734	LIVIANOS MARTIN MARIA CRISTINA	7841349	16/10/1961	16 4 23	13 8 22	14/05/1987	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 21 BARCELONA
1735	GALVEZ MUÑOZ JUANA	28705138	03/03/1965	20 11 8	13 7 5	23/10/1992	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 SEVILLA
1736	ARENAZA SARASOLA MAITE	18207744	20/05/1965	21 5 8	13 7 1	23/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1737	GOMEZ PERIS ELENA	19825226	24/01/1955	20 10 6	13 6 28	25/05/1993	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 VALENCIA
1738	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	9717668	28/01/1958	20 10 3	13 6 28	28/05/1993	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 OVIEDO (ASTURIAS)
1739	VILLARRUBIA MARTOS FERMIN JAVIER	24192798	16/09/1965	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 MÁLAGA
1740	YUSTA GONZALEZ EDUARDO	15926026	15/11/1957	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	OFIC.TRAMIT.Y EJECUCIONES DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1741	BONILLA POZO MIGUEL MANUEL	24223193	27/07/1967	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 GRANADA
1742	TAMARA SILVAN JAIME	15948327	13/02/1960	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ZAMORA
1743	GUTIERREZ LOPEZ ANTONIO FELIX	50296479	03/03/1959	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 32 MADRID
1744	NOGUER BARRABES LAURA	40306150	08/09/1964	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 GIRONA
1745	VILCHEZ COBO MARIA CRUZ	28884506	14/09/1966	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 MÁLAGA
1746	SANCHEZ CASTAÑON ANA MARIA	11407844	03/05/1965	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 GIJÓN (ASTURIAS)
1747	SANTIAGO ALEJOS MARIA INES	11734095	23/04/1963	20 2 1	13 6 28	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ZAMORA
1748	GONZALEZ-ELIPE ROSALES MARIA PILAR	418550	28/09/1965	19 0 18	13 6 28	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 78 MADRID
1749	MONTEJO GARCIA MARIA LUISA	3437987	28/03/1962	19 0 18	13 6 28	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 VIGO (PONTEVEDRA)
1750	SABATER SABATE JOSE MARIA	40917215	17/02/1962	17 1 17	13 6 28	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TARRAGONA
1751	GARCIA ALVAREZ ANA MARIA	3100606	13/02/1969	17 1 17	13 6 28	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 11 MADRID
1752	LOROÑO ZULOAGA MARIA PILAR	5651365	28/11/1966	17 1 17	13 6 28	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 ZARAGOZA
1753	MARTINEZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO	50841836	22/12/1968	17 1 17	13 6 28	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 40 MADRID
1754	CAPEL CILLA ASCENSION	37287376	30/05/1962	15 8 9	13 6 28	24/07/1998	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 17 BARCELONA
1755	ALAMEDA LOPEZ Mª ARANZAZU	13788301	17/12/1970	14 10 11	13 6 28	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 BARCELONA
1756	CORRECHEL CALVO ANA	50845408	21/07/1971	14 10 11	13 6 28	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 16 MADRID
1757	GARCIA VILLEGAS AGUEDA	50832898	19/05/1968	14 10 11	13 6 28	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MÓSTOLES (MADRID)
1758	MORALES PICADO YOLANDA MARIA	827709	30/06/1969	14 10 11	13 6 28	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 MADRID
1759	SANCHEZ CALDERON M. GRACIA	29079483	14/09/1966	14 10 11	13 6 28	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 MOTRIL (GRANADA)
1760	MARTINEZ PEÑA EDUARDO	383054	22/07/1959	13 8 25	13 6 28	06/07/2000	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 7 MADRID
1761	ORTEGA CABRERA AGUSTINA	43645314	11/12/1961	13 8 25	13 6 28	06/07/2000	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1762	PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA	46329206	29/03/1960	13 8 25	13 6 28	06/07/2000	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 GRANOLLERS (BARCELONA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1763	MOREIRO CUESTA LUIS	4108751	14/11/1945	20 10 7	13 4 19	25/05/1993	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 SEVILLA
1764	GIL VEGA MARTA	13125175	27/01/1966	20 2 1	13 4 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SANTANDER (CANTABRIA)
1765	SANZ DIAZ MARIA BELEN	9297536	08/08/1966	20 2 1	13 4 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1766	MELIA LLACER MARIA REYES	22549565	27/06/1965	20 2 1	13 4 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 14 VALENCIA
1767	SAGANTA BARRA MARIA YOLANDA	29098691	26/08/1967	20 2 1	13 4 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
1768	LENDINEZ BARRANCO CONSTANZA CLARA	75011277	12/08/1962	20 2 1	13 4 19	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 GRANADA
1769	PEREZ GARCIA MARIA PILAR	7949734	07/12/1965	19 0 18	13 4 19	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 63 MADRID
1770	SORNI PEREZ VICENTE	22557753	05/11/1966	14 10 11	13 4 19	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 VALENCIA
1771	OÑATE CUESTA LIDIA	13143511	13/02/1971	14 10 11	13 4 19	20/05/1999	C.U.	JEF. SEC. PENAL (2060) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO BURGOS
1772	CASTILLA TORRES Mª ANGELES	5415651	17/11/1969	14 10 11	13 4 19	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 COLLADO VILLALBA (MADRID)
1773	RUIZ TEJERO ANA MARIA	40975733	14/07/1965	14 10 11	13 4 19	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 MADRID
1774	RUBIO GOMEZ ESTEFANIA	33369603	17/02/1970	14 10 11	13 4 19	20/05/1999	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 MÁLAGA
1775	AROZAMENA LASO MARIA CRISTINA	2869233	30/05/1963	13 8 26	13 4 19	06/07/2000	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
1776	LOPEZ MARTIN FABIO	7830219	20/09/1960	20 10 6	13 2 15	25/05/1993	C.U.	JEF. SEC. PENAL (2060) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO LEÓN
1777	MARTIN Y CHICO MARIA JESUS	7865161	20/08/1964	20 2 1	13 2 15	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL ÁVILA
1778	ARIZA FERNANDEZ MARIA AUXILIADORA	28883365	20/05/1966	20 2 1	13 2 15	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 SEVILLA
1779	PEREZ AGUILAR JUSTO ANTONIO	13750708	20/02/1964	20 2 1	13 2 15	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 BARAKALDO (BIZKAIA)
1780	RODRIGUEZ MUÑOZ ANTONIO	27906312	23/08/1954	19 8 18	13 2 15	13/07/1994	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 SEVILLA
1781	SOS SEBASTIA JOSE MANUEL	18883879	11/05/1951	19 8 18	13 2 15	13/07/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
1782	JIMENEZ SALAS MARGARITA	72877950	20/07/1963	19 0 18	13 2 15	13/03/1995	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 SORIA
1783	RUBIDO DE LA TORRE CARLOS	16801620	04/02/1969	19 0 18	13 2 15	13/03/1995	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO PONTEVEDRA
1784	DOMINGO MARTINEZ JOSE SALVADOR	20798164	11/01/1967	19 0 18	13 2 15	13/03/1995	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
1785	MOYANO RUIZ DE ALEGRIA VICTORIA EUGENIA	12370625	25/08/1965	19 0 18	13 2 15	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 A CORUÑA
1786	GARRIDO RODRIGUEZ ALVARO	34965379	09/01/1968	17 1 17	13 2 15	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 OURENSE
1787	CALDERON ALARCON FERNANDO	24235353	21/11/1968	17 1 17	13 2 15	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1788	JIMENEZ POZUELO JOSE VICENTE	5078643	17/01/1946	13 8 26	13 2 15	06/07/2000	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 3 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VILLENA (ALICANTE)
1789	OLIVA MAS ELISABET	39173038	28/08/1965	14 10 12	13 2 10	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 47 BARCELONA
1790	OREJUELA PINEDO CARMEN	28595198	28/12/1970	14 10 12	13 2 10	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 9 SEVILLA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1791	GARMON CADIerno ALADINO	10178710	03/05/1956	19 11 3	13 1 18	28/04/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 GIJÓN (ASTURIAS)
1792	GOMEZ CABALLERO ANDRES	75634338	21/09/1948	20 10 6	13 0 13	25/05/1993	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 SEVILLA
1793	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE	24225627	09/05/1967	20 2 1	13 0 13	01/02/1994	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 3 MÁLAGA
1794	SEVILLANO HERNANDEZ JESUS	7794158	04/01/1953	19 8 18	13 0 13	13/07/1994	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
1795	ARAGON DIEZ MARIA ANGELES	10551002	26/03/1953	19 8 18	13 0 13	13/07/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 GIRONA
1796	BLESA MONSALVE MARIA CARMEN	7539956	19/11/1967	19 0 18	13 0 13	13/03/1995	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ALBACETE
1797	MILLAN PADILLA MANUEL	30488199	03/09/1963	19 0 18	13 0 13	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 CÓRDOBA
1798	GARCIA ROJI MARIA JOSE	14597539	28/11/1963	19 0 18	13 0 13	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 BILBAO (BIZKAIA)
1799	MORA ZARAGOZA TOMAS	21377793	12/01/1953	17 9 7	13 0 13	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 BENIDORM (ALICANTE)
1800	ESTEBAN ESTEBAN MARIA CARMEN	18956582	28/05/1966	17 1 17	13 0 13	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
1801	DIAZ BENITEZ Mª DOLORES	30797772	04/12/1972	14 10 11	13 0 13	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 CÓRDOBA
1802	FRANCISCO ALVAREZ ROBERTO	9324514	25/03/1971	14 10 11	13 0 13	20/05/1999	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1803	MENDOZA CASTELLANO FRANCISCO JAVIER	5660970	25/03/1971	14 10 11	13 0 13	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 22 MADRID
1804	MARTINEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES	70160044	06/04/1953	13 8 25	13 0 13	06/07/2000	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALCOBENDAS (MADRID)
1805	MARCOS AYJON MIGUEL	3087894	18/08/1965	15 8 7	12 11 15	24/07/1998	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL GUADALAJARA
1806	MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	22453080	21/01/1957	15 8 7	12 11 15	24/07/1998	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 MURCIA
1807	MARTIN LOPEZ MARIA CRISTINA	45419135	04/11/1968	17 1 17	12 11 15	17/02/1997	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
1808	HERNANDEZ MOGOLLON LUIS FERNANDO	6977429	09/03/1960	20 10 6	12 9 1	25/05/1993	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
1809	GARCIA MARTIN EMILIANO	7947835	06/09/1963	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL ÁVILA
1810	ARAUJO VIDAL ENRIQUE	5640124	11/05/1961	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1811	BARCELO MORENO Mª JOSE	52805495	29/09/1968	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MURCIA
1812	BELTRA CABELLO CARLOS	50161087	01/07/1965	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 FUENLABRADA (MADRID)
1813	ALTOLAGUIRRE ZUAZOLA CRISTINA	15969390	30/11/1963	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1814	RUISOTO RIOJA MARIA DEL CARMEN	13759011	12/07/1965	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
1815	RUIZ MADRAZO ANA	13766762	16/08/1965	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 57 MADRID
1816	CADENAS DE GEA CATALINA	2874798	13/02/1967	20 2 1	12 9 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 MÁLAGA
1817	VICENTE BAZ JOSE LUIS	651973	06/01/1953	19 8 18	12 9 1	13/07/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1818	PECINO ROBLES FERNANDO	29100886	28/05/1968	19 0 18	12 9 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 REUS (TARRAGONA)
1819	GONZALEZ MAÑAS MARIA	52511070	05/09/1965	19 0 18	12 9 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1820	DIAZ HERNANDEZ MANUEL ANGEL	6554717	01/09/1965	19 0 18	12 9 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MÓSTOLES (MADRID)
1821	CARMONA VERGARA MARIA ANGELES	28714179	01/07/1965	19 0 18	12 9 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 SEVILLA
1822	GUNDIN OZORES JUAN MANUEL	36081868	29/03/1967	19 0 18	12 9 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 VIGO (PONTEVEDRA)
1823	ROMAN IVORRA MARIA ENGRACIA	21449599	26/07/1963	19 0 18	12 9 1	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 BENIDORM (ALICANTE)
1824	GARCIA ROLDAN PALOMA	1488792	22/10/1953	17 9 7	12 9 1	25/06/1996	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1825	RODRIGUEZ ALLENDE MARIA	10864728	24/05/1966	17 1 17	12 9 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GIJÓN (ASTURIAS)
1826	PERIS MARTINEZ ALEJANDRINA ARANZAZU	25390061	08/01/1966	17 1 17	12 9 1	17/02/1997	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
1827	MARTINEZ ALONSO PALMIRA	30578954	19/10/1966	17 1 17	12 9 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
1828	SANCHEZ GARRIDO MARIA ELENA	13120763	04/03/1966	17 1 17	12 9 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 PONFERRADA (LEON)
1829	MARTIN PEÑALVER CELIA	23800109	10/05/1971	17 1 17	12 9 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 TORREMOLINOS (MALAGA)
1830	RUBIO GONZALEZ CESAR	8937620	09/10/1969	14 10 11	12 9 1	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 BARCELONA
1831	GUISADO RUIZ ANA ISABEL	79263367	19/09/1970	14 10 11	12 9 1	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 CÁDIZ
1832	GONZALEZ GRANADO VIRGINIA MARTA	51677512	17/12/1970	14 10 11	12 9 1	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LEGANÉS (MADRID)
1833	SALA NAVALON RAQUEL	20425021	15/10/1971	14 10 11	12 9 1	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 VALENCIA
1834	CABRERA DELGADO CARMEN	23780804	19/02/1960	13 8 25	12 9 1	06/07/2000	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 GRANADA
1835	SANCHEZ GARCIA ANA ESTHER	6566345	09/07/1972	12 11 17	12 9 1	16/04/2001	C.U.	JDO. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
1836	SANCHEZ PIRIZ MARIA ANGEL	8941384	24/02/1971	12 11 17	12 9 1	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 MÓSTOLES (MADRID)
1837	RUIZ RUIZ MARIA DEL CARMEN	73384185	03/11/1965	12 11 17	12 9 1	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1838	SALTO DIAZ ANTONIO JOSE	52584103	29/01/1969	12 11 17	12 9 1	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 MÁLAGA
1839	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JOSE	26018597	19/03/1972	12 11 17	12 9 1	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 MÁLAGA
1840	OYOLA REVIRIEGO MARIAN	11811573	21/08/1968	18 0 26	12 9 0	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1841	GARCIA-HIERRO ANDRADE JOSE MARIA	8813564	11/06/1965	20 2 1	12 5 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 BADAJOZ
1842	GARCIA ROLDAN CONCEPCION	802737	20/10/1962	20 2 1	12 5 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 9 MADRID
1843	MENENDEZ VAZQUEZ MARIA ARANZAZU	15985210	01/11/1965	20 2 1	12 5 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
1844	CERDA ANTON MARIA ISABEL	21957898	01/10/1953	20 2 1	12 5 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ELCHE/ELX (ALICANTE)
1845	GONZALEZ PEINADO ANA ISABEL	27469719	24/06/1967	20 2 1	12 5 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 MURCIA
1846	GARCIA MORENO MATILDE	34010973	11/11/1964	20 2 1	12 5 18	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 LEGANÉS (MADRID)
1847	MACIAS SANCHEZ MARIA JOSEFA	22622495	29/05/1955	20 0 17	12 5 18	16/12/1983	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 PATERNA (VALENCIA)
1848	LARA RUBIDO CARMEN	37262053	24/03/1953	19 8 18	12 5 18	13/07/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 52 MADRID
1849	MARTINEZ PALAO MARIA CARMEN	5197245	12/09/1965	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALBACETE

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1850	CAMPOY LOPEZ PEDRO JESUS	32036666	11/04/1968	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL CÁDIZ
1851	ANOCIBAR PEREZ MARIA JOSE	9298927	14/03/1966	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 VALLADOLID
1852	GARCIA DEL CASTILLO ARTURO	3836825	22/12/1966	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA OCAÑA (TOLEDO)
1853	MINGOT CORTES TOMAS	21468976	25/09/1966	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1854	DE ZARANDIETA SOLER ISABEL MARIA	27462159	19/03/1965	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	SJ ORG UNIPER Y COLEG SOCIAL (2405) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO MURCIA
1855	RONCERO LINARES ASCENSION	11928785	15/10/1965	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 BARAKALDO (BIZKAIA)
1856	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE DAVID	28877635	16/12/1965	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 3 SEVILLA
1857	LASO PEREZ MARIA PAZ	7874350	16/04/1968	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 GETAFE (MADRID)
1858	LOPEZ JABALERA REYES GREGORIO	4573694	06/01/1966	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 COSLADA (MADRID)
1859	MAS RONDAN MARIA LUISA	28853182	27/11/1962	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TORREMOLINOS (MALAGA)
1860	GALLEGO MUJICA MARIA PILAR	11803070	31/10/1967	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GETAFE (MADRID)
1861	ORTEGA CORDOBA ELENA	51381359	08/06/1966	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALCOBENDAS (MADRID)
1862	DE LA PEÑA MARTIN AMALIA	822527	15/11/1963	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 29 BARCELONA
1863	RAMOS UBERO LIDIA	5404687	07/02/1967	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 MAJADAHONDA (MADRID)
1864	ORTIZ GARCIA-DONAS MARIA CARMEN	75416719	12/05/1963	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 DOS HERMANAS (SEVILLA)
1865	PEREZ SERRANO ANA	13121294	24/11/1964	19 0 18	12 5 18	13/03/1995	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
1866	ARIAS GARCIA JUAN ANTONIO	10519061	23/09/1947	17 9 7	12 5 18	25/06/1996	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 OVIEDO (ASTURIAS)
1867	CUEVAS GARCIA MIGUEL ANGEL DE LAS	21423668	26/09/1960	17 9 7	12 5 18	25/06/1996	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1868	FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS	75361230	07/12/1953	17 9 7	12 5 18	25/06/1996	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 HUELVA
1869	CAJA GARDEL ANTONIO	3073552	23/06/1956	17 9 7	12 5 18	25/06/1996	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 VALENCIA
1870	MUÑOZ HURTADO MARIA ANGELES	16558425	01/12/1967	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL MÉRIDA (BADAJOZ)
1871	RAMOS FERNANDEZ MARIA CARMEN	24332709	22/01/1966	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 PATERNA (VALENCIA)
1872	MORA GARCIA LAURA	33985463	12/03/1967	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 BADAJOZ
1873	ORDOÑEZ CORREA RAFAELA	24239468	24/04/1968	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 GRANADA
1874	SANCHEZ SANCHEZ ANA ISABEL	8108414	10/03/1970	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 ZARAGOZA
1875	ARIAS LOPEZ DE LACALLE VIRGINIA	30625637	12/10/1966	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 BILBAO (BIZKAIA)
1876	ROJAS CORRALES JUAN ALBERTO	31264667	15/05/1969	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 CÁDIZ
1877	CUBERO TRUYO ISMAEL	28583390	28/11/1965	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1878	SANCHEZ PALACIOS MARIA ENGRACIA	33977940	17/10/1970	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 COLLADO VILLALBA (MADRID)
1879	GOMEZ GALLARDO ROSA MARIA	8937112	14/10/1968	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 FUENLABRADA (MADRID)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1880	TRONCHONI ALBERT JOSE	73764021	01/07/1965	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 PONTEVEDRA
1881	CARRICAJO LOBATO MARIA EUGENIA	30616913	01/10/1969	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JEF. SEC. PENAL (2060) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
1882	VAZQUEZ ORGE FERNANDO	36083320	26/07/1966	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 LUGO
1883	MERINO ARIAS MARIA DEL PILAR	28938258	19/09/1968	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1884	ZUBIA ZUBIMENDI MIREN EDURNE	34096370	05/09/1969	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 VALENCIA
1885	BOLIVAR PEREZ MARIA DEL CARMEN	34044493	07/03/1967	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 SEVILLA
1886	CANCIO FERNANDEZ RAUL CESAR	33507892	05/01/1970	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 23 MADRID
1887	PALENQUE LUS MARIA ROSARIO	72027254	20/09/1969	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
1888	CASTELLANOS ORTEGA MARIA JESUS	22981314	28/05/1970	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 CARTAGENA (MURCIA)
1889	ZAFRA BARRANCO YOLANDA	25998108	12/02/1967	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1890	SANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	36069443	31/08/1965	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 VIGO (PONTEVEDRA)
1891	GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN ENRIQUE	25146585	10/07/1966	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 VALLADOLID
1892	SANCHEZ MARTINEZ SILVIA	11420862	20/11/1969	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 AVILÉS (ASTURIAS)
1893	PEREZ ESTEBAN MARIA ESTRELLA	12381845	18/10/1970	17 1 17	12 5 18	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 VALLADOLID
1894	MARTINEZ ANDREO ALBERTO	21431833	02/08/1961	15 8 7	12 5 18	24/07/1998	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1895	POZO VILLEGAS JOSE LUIS	23773642	19/03/1959	15 8 7	12 5 18	24/07/1998	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 GRANADA
1896	OLMEDO ONSURBE JOSE VENTURA	21643192	19/03/1964	15 8 7	12 5 18	24/07/1998	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1897	BUJALANCE TEJERO DOMINGO	26189967	11/06/1958	15 8 7	12 5 18	24/07/1998	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL BADAJOZ
1898	CARO VIDA Mª ANGUSTIAS	26220478	30/09/1971	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
1899	CRUSELLS CANALES VICENTE	17723078	26/03/1969	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 ZARAGOZA
1900	GOMEZ IGLESIAS ISABEL	10860235	12/05/1968	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 GIJÓN (ASTURIAS)
1901	LUQUE REYES ISABEL	33913633	25/08/1962	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 48 BARCELONA
1902	PERALES SAEZ RAQUEL	45419451	11/10/1967	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 SANTANDER (CANTABRIA)
1903	MILLAN PEREZ Mª DOLORES	23242112	24/12/1970	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1904	REYES DELGADO Mª ARANZAZU DE LOS	33972076	15/02/1974	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL TOLEDO
1905	MASIA CANUTO MARIA JOSE	21471072	08/01/1967	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 VALENCIA
1906	MUÑOZ PEIRO MIRIAM	19898226	27/09/1967	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 VALENCIA
1907	PUENTE ERQUIAGA MARIA ICIAR	30649499	17/01/1971	14 10 11	12 5 18	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 BILBAO (BIZKAIA)
1908	BALLESTEROS FERNANDEZ VICTOR	4587711	03/04/1971	17 1 17	12 3 7	17/02/1997	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES CUENCA
1909	CANO MOLINA JOSE ANTONIO	4582088	06/10/1968	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 BENIDORM (ALICANTE)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1910	MECA GARCIA-GRAJALVA Mª JOSE	23236820	13/07/1968	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. MURCIA
1911	CAÑIZARES CASTELLANOS Mª JOSE	24218810	13/03/1967	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 ALMERÍA
1912	MAGDALENO POZO SUSANA	28955082	10/03/1973	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 BADAJOZ
1913	SANCHEZ JORGE YOLANDA	7954109	08/09/1970	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 GETAFE (MADRID)
1914	PARRA HERAS BELEN	30795304	19/12/1971	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 CÓRDOBA
1915	POLO HERNANDEZ MANUEL	9319469	09/06/1970	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL PONTEVEDRA
1916	CRESPIN JIMENEZ Mª DOLORES	29157905	21/09/1965	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 VALENCIA
1917	MEDINA CAÑADA MARTA Mª	45530500	11/05/1972	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 ARRECIFE (LAS PALMAS)
1918	RODRIGUEZ VOZMEDIANO CARMEN	23797188	15/12/1972	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
1919	ARRATE GARCIA RAQUEL	9304323	03/06/1967	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 VALLADOLID
1920	TRIVIÑO MOSQUERA DAVID	24229213	02/05/1960	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 GRANADA
1921	MARIN LARIOS SILVIA TERESA	8853561	16/02/1970	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 BADAJOZ
1922	MONTEJO LABRADA VIRGINIA	50846541	09/07/1972	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 7 MADRID
1923	GIMENEZ MARTINEZ CRISTINA	34801681	05/12/1971	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 MURCIA
1924	LEYVA MUÑOZ JESUS	24211577	05/01/1966	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 GRANADA
1925	ROMERO CHAMORRO Mª DEL CARMEN	31632158	06/04/1963	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 HUELVA
1926	ALVAREZ DE MORALES.DAV. PONCE DE LEON AGUEDA AFRICA	24266348	02/10/1969	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MOTRIL (GRANADA)
1927	VICENTE CABEZAS Mª ISABEL	7871835	19/07/1967	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
1928	CASCALES HIDALGO ROSA ANA	52809077	25/09/1970	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 MURCIA
1929	CARDENAS ORTIZ ALICIA MARIA	26023610	16/12/1971	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 JAÉN
1930	MARTINEZ PELLICER AMPARO	20015015	19/09/1973	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 ALZIRA (VALENCIA)
1931	FERNANDEZ VILLANUEVA BEGOÑA	33306128	13/05/1969	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 LUGO
1932	LOZANO TERRAZAS RAFAEL	18424598	24/04/1966	14 10 11	12 3 7	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 MADRID
1933	TOMAS PORTER JOSE JUAN	22681835	10/07/1962	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 8 VALENCIA
1934	SANCHEZ PEDRERO ADOLFO	18017159	18/10/1956	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 17 VALENCIA con sede en PATERNA
1935	CABO ORERO FRANCISCO	22671280	27/01/1960	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 16 VALENCIA
1936	REPISO CAPILLA MARIA DE LOS SANTOS	29723648	06/08/1954	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 HUELVA
1937	MANGAS MORALES SIGFRIDO	5634640	06/01/1961	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALBACETE
1938	LOPEZ RUBIO DOLORES CARMEN	24888505	21/12/1964	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 TORREMOLINOS (MALAGA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1939	INCINILLAS FERNANDEZ JESUS MIGUEL	15875584	08/05/1950	13 8 25	12 3 7	06/07/2000	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
1940	REJAS DE FRANCISCO INMACULADA CONCEPCION	8846924	08/01/1971	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 50 MADRID
1941	SEOANE SEPULVEDA JOSE MANUEL	31260380	24/08/1970	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
1942	RICA DE MIGUEL MARIA SONIA	50185890	30/05/1972	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 FUENLABRADA (MADRID)
1943	GARRIDO CAMPOS MARIA JOSE	8821652	02/12/1973	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 SEVILLA
1944	YURREBASO SANTAMARIA AINHOA	30609447	30/03/1968	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 5 BILBAO (BIZKAIA)
1945	SAN PABLO MORENO EVA	50453775	24/01/1973	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 MADRID
1946	LORENZO ESTABLER TERESA EUGENIA	27308947	03/12/1969	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1947	PELLICER VERDU MARIA DEL CARMEN	20001944	14/05/1968	12 11 17	12 3 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GANDIA (VALENCIA)
1948	DIAZ MARTIN FERNANDO R.	23790596	17/10/1968	12 8 7	12 3 7	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TORREMOLINOS (MALAGA)
1949	ALONSO SANTANA MARIA GLORIA	43655332	03/04/1961	12 8 7	12 3 7	26/07/2001	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1950	BLASCO BAUSET PILAR	19820128	11/05/1952	17 9 7	12 2 16	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PATERNA (VALENCIA)
1951	VILLUENDAS RUIZ IGNACIO FRANCISCO	45274943	24/08/1963	17 1 17	12 2 16	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)
1952	VAREZ BREÑAS MARIA CARMEN	11798877	07/05/1966	17 1 17	12 2 16	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 33 MADRID
1953	GOMEZ LOECHES LUIS	3080599	04/03/1960	13 8 25	12 2 16	06/07/2000	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 GUADALAJARA
1954	BERNAL LOPEZ MARIA DEL CARMEN	35004700	14/09/1959	13 8 25	12 2 16	06/07/2000	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 46 BARCELONA
1955	BLANCH DOMEQUE MARIA ROSA	36953777	30/08/1952	13 8 25	12 2 16	06/07/2000	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 30 BARCELONA
1956	VALLE CONTRERAS MARIA DOLORES	29178131	28/12/1973	12 11 17	12 2 16	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 VALENCIA
1957	CARRETERO PEÑA CRISTINA MARIA	833239	16/10/1971	12 11 17	12 2 16	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
1958	TRUJILLO ESCAPA YOLANDA	71339747	16/02/1970	12 11 17	12 2 16	16/04/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 7 MADRID
1959	ARBOS LLOBET RAMON	35044656	18/05/1962	12 8 7	12 2 16	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 33 BARCELONA
1960	SALDES SEGURA CARMEN	41074550	04/12/1953	12 8 7	12 2 16	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
1961	SANZ MINGUEZ EMILIO RAFAEL	30571424	12/05/1965	17 1 17	12 0 7	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 HUELVA
1962	DE LA FUENTE RUBIO EVANGELINA	10178353	10/01/1956	13 8 25	12 0 7	06/07/2000	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 22 MADRID
1963	PLASENCIA MARTIN MARIA	7996289	12/09/1974	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MÉRIDA (BADAJOZ)
1964	REDONDO GUERRA MARIA DEL CARMEN	12757511	13/04/1970	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1965	SANCHEZ HERNANDEZ RAMON	11957479	28/11/1971	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ÁVILA
1966	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA BEGOÑA	10880764	28/04/1972	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1967	ALONSO RAMOS LAURA MARIA	50451814	06/07/1972	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 GANDIA (VALENCIA)
1968	PAVON CALLEJON YOLANDA	23802314	31/03/1971	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MOTRIL (GRANADA)
1969	MARTINEZ ZANDUNDO FRANCISCO JAVIER	18029939	17/11/1970	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 ZARAGOZA
1970	ARTIGOT FABRE MARIA ELENA	46875054	16/05/1974	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MADRID
1971	GARCIA SANCHEZ MARIA	52759705	14/06/1975	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ALBACETE
1972	SANCHEZ YAGO PILAR VICTORIA	28992622	06/07/1969	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MURCIA
1973	ISABEL CABRERA MONTSERRAT	3463800	16/02/1974	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SEGOVIA
1974	MORADILLO ARAUZO CARMEN MARIA	13146522	11/11/1971	12 11 17	12 0 7	16/04/2001	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
1975	CABELLO PERERA JOSE JUAN	42721493	02/07/1951	12 8 7	12 0 7	26/07/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1976	APARICIO URTASUN CARLOS MIGUEL	24339187	11/07/1965	20 2 1	11 9 21	01/02/1994	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 3 VALENCIA
1977	DIEGO ELVIRA ISABEL DE	52863785	16/03/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 MADRID
1978	JUNQUERA GONZALEZ PATRICIA	10895471	02/10/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 GIJÓN (ASTURIAS)
1979	CUESTA PEDRAJAS SUSANA	8039263	17/04/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 MADRID
1980	ANTON ESTEFANIA MARIA ELBA	16564809	01/08/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 LOGROÑO (LA RIOJA)
1981	VELEZ ROLDAN MONICA	10884484	31/05/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 GIJÓN (ASTURIAS)
1982	RIOJA AGUILERA MONICA	30812556	03/08/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)
1983	FERNANDEZ LOPEZ MARIA AMAYA	9326184	01/06/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PALENCIA
1984	RUCIO SANTANA OLGA	18433392	04/01/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 REUS (TARRAGONA)
1985	SANCHEZ RANZ MARIA ELENA	3108905	20/03/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
1986	SANTANA LENA SILVIA	11957710	13/06/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PALENCIA
1987	FUENTE CABEZON OLGA DE LA	12388221	25/11/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 VALLADOLID
1988	ESTEBARANZ TORRIJOS MARTA	4591621	06/12/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LEGANÉS (MADRID)
1989	MARTIN NAJERA MARIA DOLORES	12725002	02/10/1959	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 OURENSE
1990	RODRIGUEZ TROTONDA MARIANO	4584632	29/01/1969	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 MADRID
1991	BARRIOS ROZUA ESTHER	24274432	01/10/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 MOTRIL (GRANADA)
1992	PEREZ VAZQUEZ GONZALO	10867393	14/05/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 AVILÉS (ASTURIAS)
1993	ESTRADA BARRANCO MARIA TERESA	53105769	20/05/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 37 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1994	BECARES RAMOS FERNANDO	12329492	29/03/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 PONFERRADA (LEON)
1995	ORTIZ SANCHEZ-GABRIEL JAVIER	3854012	23/12/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
1996	LUQUE REYES ELENA	52216809	07/10/1969	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 32 BARCELONA
1997	VILLAR PEÑA BEGOÑA	30676596	22/06/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 BILBAO (BIZKAIA)
1998	BAYO MORIONES MARIA NATIVIDAD	33449585	11/08/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
1999	GARCIA GARCIA ANA MARIA	52922865	26/07/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
2000	MARTINEZ GONZALEZ MARTA MARIA	4591711	29/11/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CUENCA
2001	GONZALEZ MORENO MARIA CONCEPCION	7497024	14/05/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 MADRID
2002	IGEA MARTINEZ ANA ROSA	29112132	01/03/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 ZARAGOZA
2003	GIROL GALEA NICOLAS	80045129	24/02/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ALGECIRAS (CADIZ)
2004	OLAYA SORIANO ESTEFANIA	44219931	02/10/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
2005	ANDRES HERRERO MARIA DEL ROSARIO	3466330	07/10/1974	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 GUADALAJARA
2006	TERAN RODRIGUEZ MARTA MARIA	20191540	05/06/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 SANTANDER (CANTABRIA)
2007	BENEYTO TORRES MARIA ASUNCION	21644690	15/08/1965	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 VALENCIA
2008	AYMERICH ROJAS CARLOS	51411528	27/11/1972	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2009	ALVAREZ GORGOJO ADRIANA	10887659	12/01/1973	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 PONTEVEDRA
2010	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION	32663736	07/12/1970	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL FERROL (A CORUÑA)
2011	RUBIO SOLANES MONICA	25417727	27/09/1971	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 VALENCIA
2012	FERNANDEZ ALVAREZ BELEN MARIA	11419898	15/12/1969	12 11 17	11 9 21	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 OVIEDO (ASTURIAS)
2013	MENA OCHOA MARTA	16576131	14/10/1971	12 11 17	11 5 22	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 LOGROÑO (LA RIOJA)
2014	GARCIA HERNANDEZ RUPERTO MANUEL	29788436	02/12/1970	12 11 17	11 5 22	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 HUELVA
2015	CASTELLO BOVEDA MARIA TERESA	7956696	10/07/1969	12 11 17	11 5 22	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ÁVILA
2016	DIAZ MARTINEZ BEATRIZ	9430037	14/06/1973	12 11 17	11 5 22	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 AVILÉS (ASTURIAS)
2017	SERRANO JIMENEZ MARIA REMEDIOS	30791133	08/03/1971	12 11 17	11 5 22	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 SEVILLA
2018	ORGEIRA MACEIRAS CESAR	32608787	29/09/1953	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 A CORUÑA
2019	ORTEGA CIFUENTES JOSE A.	51703084	17/09/1957	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALBACETE
2020	RAMIREZ ROMERO CONSUELO	37695156	03/12/1957	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 4 BARCELONA
2021	JUANES HERNANDEZ MIGUEL LUIS	7759454	18/09/1946	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2022	TORRO ENGUIX JOAQUIN	5167542	23/05/1962	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2023	PORTAL VICENTE CAYETANO	7802221	16/11/1954	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ZAMORA
2024	TABLADILLO LOPEZ MIGUEL ANGEL	51963257	27/11/1951	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2025	MUÑOZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES	5245515	31/12/1960	12 8 7	11 5 22	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 56 MADRID
2026	PINDADO ALVAREZ LUIS	50451345	07/10/1972	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 LUGO
2027	MUIÑO FEJOO EDUARDO	15254969	24/04/1971	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
2028	FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINA	11422979	06/09/1970	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 AVILÉS (ASTURIAS)
2029	LLAMAS PIÑAR DELIA	24276235	30/08/1972	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 SEVILLA
2030	REAL SAINZ-ROZAS MARTA	2535829	16/12/1972	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 MADRID
2031	OCAÑA VILLAMIL YOLANDA	8991851	02/12/1972	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
2032	GIMENEZ PONCE YOLANDA	25421686	05/11/1971	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 VALENCIA
2033	DONET CASAL MARTA	25413053	05/04/1971	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 VALENCIA
2034	MILLAN DE SUS MARTA PILAR	25180385	23/10/1975	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ZARAGOZA
2035	SERAROLS GALLOSTRA MARIA LUISA	77610798	18/12/1972	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2036	MANRUBIA ABELLAN MARIA JOSE	44266797	30/11/1974	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MOTRIL (GRANADA)
2037	VILCHEZ COBO JOSE LUIS	24242494	08/09/1969	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	SECCION Nº 3 AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
2038	COLLADO GRANADINO CARLOS JAVIER	26017097	04/06/1973	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 JAÉN
2039	CHANTRES RIVEIRO EVA MARIA	50091503	03/12/1971	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 28 MADRID
2040	AVILES NAVARRO MARIA	11832883	06/06/1973	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 21 MADRID
2041	SALINAS SERRANO AGUSTIN	26011120	24/10/1970	11 11 24	11 5 22	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 MÁLAGA
2042	MONTON MARQUEZ ALBERTO	46325866	09/02/1960	11 10 6	11 5 22	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 BARCELONA
2043	LABORDETA DE LA CAL ENRIQUE	37684424	24/04/1957	11 0 9	11 0 9	25/08/1987	Jur.Lab.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 12 BARCELONA
2044	FERNANDEZ GALISTEO MILAGROSA	24166280	03/08/1961	12 3 25	10 8 19	26/10/1992	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 JAÉN
2045	GUERRERO RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	24198336	01/05/1959	19 0 18	10 6 11	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2046	MONCADA BUENO JAVIER	410958	27/10/1961	19 0 18	10 6 11	13/03/1995	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 10 MADRID
2047	CORRAL TORRES CARMEN FELISA	9279324	28/11/1961	17 1 17	10 6 11	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 PALENCIA
2048	ROSALES LOMBARDO CANDIDO JESUS	24226140	04/04/1967	14 10 11	10 6 11	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 MÁLAGA
2049	SANCHEZ ABELLA CARLOS	22980610	19/04/1970	14 10 11	10 6 11	20/05/1999	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2050	CASTELLANO NAVARRO FRANCISCO MANUEL	46133313	23/09/1972	12 11 17	10 6 11	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 GIJÓN (ASTURIAS)
2051	NICOLAS SERRANO MARIA TERESA	9670867	15/10/1948	12 8 7	10 6 11	26/07/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MAJADAHONDA (MADRID)
2052	CARLAVILLA NOGUERA MARIA ANGELES	4515520	05/03/1945	12 8 7	10 6 11	26/07/2001	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CUENCA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2053	LOZANO BRUNA MARIA ISABEL	5429860	10/05/1975	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 34 MADRID
2054	FERNANDEZ DE VERA RUIZ GEMA MARIA	32049243	08/05/1973	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 67 MADRID
2055	LACALLE ESPALLARDO ANA MARIA	52817738	02/12/1975	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 MURCIA
2056	GOMEZ-FERRER BOLINCHES ROCIO	29181659	20/01/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2057	BRAVO RUIZ ALBERTO	24267007	09/04/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 MOTRIL (GRANADA)
2058	CRESPO MARTIN FRANCISCO JAVIER	9344414	20/11/1974	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 OURENSE
2059	PEREZ RAMOS JUAN MANUEL	29045413	18/04/1973	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
2060	GARCIA DE HOYOS MARIA ESTHER	9410432	23/11/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 AVILÉS (ASTURIAS)
2061	SANTAMARIA MANSO MARIA ELENA	13154483	11/10/1973	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
2062	ORTIZ MARTIN ALMUDENA	50848732	12/05/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 20 MADRID
2063	ESTALAYO HERNANDEZ BEATRIZ	30681795	11/04/1974	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 BILBAO (BIZKAIA)
2064	GONZALEZ ELIAS MARIA ASUNCION	16569102	23/07/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 LOGROÑO (LA RIOJA)
2065	MOREIRA PELAEZ VERONICA	8849173	03/11/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 COLLADO VILLALBA (MADRID)
2066	BILBAO CONTRERAS OSCAR	13143339	13/03/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 3 BARCELONA
2067	CABALLERO REDONDO MARIA	34016194	19/01/1969	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 MÁLAGA
2068	FERNANDEZ GONZALEZ SUSANA MARIA	10887760	18/05/1975	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 GIJÓN (ASTURIAS)
2069	QUESADA SANZ MARIA EUGENIA	44281474	18/04/1974	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	SJ UPAD SOCIAL Y JEF SEC EJ CIV/CA/SO EN EL SCE(2250) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
2070	VIVAR VALVERDE FRANCISCO JOSE	75124841	09/06/1968	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 49 BARCELONA
2071	YUBERO CHI EVA MARIA	51405150	30/04/1973	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
2072	IBORRA LACAL ANA	34790021	20/08/1971	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
2073	POLVOROSA GOMEZ SOFIA CRISTINA	12762091	20/10/1971	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 25 MADRID
2074	CELADA PEREZ ELENA MONICA DE	831776	19/04/1971	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 29 MADRID
2075	GALARRAGA ZAMORA ARANZAZU	5418505	31/05/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
2076	DÍAZ MARCO EVA MARIA	22571938	29/12/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 VALENCIA
2077	GARCIA SANZ MARIA BELEN	7240171	03/08/1973	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 49 MADRID
2078	PULIDO IGEA ALBERTO	33443257	31/03/1973	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
2079	VAZQUEZ JARO MARIA GLORIA	2906886	27/09/1974	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 GIJÓN (ASTURIAS)
2080	ALVAREZ GARCIA CONCEPCION	11832196	04/07/1974	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 74 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2081	MORALES PAYAN GRACIA AGUEDA	24262739	18/12/1970	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MÁLAGA
2082	GARCIA GARCIA ANA ISABEL	70860279	20/03/1968	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCORCÓN (MADRID)
2083	ESPI MASCARELL ROSA MARIA	24356365	22/03/1972	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ALZIRA (VALENCIA)
2084	SANZ DE MIGUEL MARIA PILAR	25450938	30/12/1971	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 34 BARCELONA
2085	CODOÑER MARTINEZ MARIA JESUS ANTONIA	73768350	13/06/1969	11 11 24	10 6 11	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TORRENT (VALENCIA)
2086	DE LA LLANA VICENTE MARINO	3086236	20/04/1962	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 24 MADRID
2087	BAILACH MINGUELL MARIA TERESA	37737526	20/02/1962	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 BARCELONA
2088	MARTINEZ PINO JUAN MANUEL	26161040	25/05/1946	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	SJ UPAD 1ºINST.E.INSTR Y JEF SEC EJ PENAL en SCE (2230) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
2089	VERDEGUER LOPEZ VICENTE	22659717	31/01/1956	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 PATERNA (VALENCIA)
2090	BLANCO ANES JOSE ANTONIO	50065649	26/11/1965	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 MÓSTOLES (MADRID)
2091	GARCIA LAINEZ JUAN ANTONIO	26436616	13/07/1954	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 BENIDORM (ALICANTE)
2092	ILLA PUJALS JAIME	37662531	21/05/1956	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 35 BARCELONA
2093	PEREZ SANCHEZ FRANCESC	46026264	23/06/1957	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 MATARÓ (BARCELONA)
2094	VEGA ALONSO JOSEFA	6542621	17/05/1960	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	SECCION Nº 27 AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
2095	JUAN MARI JOSEFA	41441773	22/06/1962	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 EIVISSA (BALEARES)
2096	MOLINA PEREZ JUAN ANTONIO	50417252	23/12/1958	11 10 6	10 6 11	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 MURCIA
2097	HERNANDEZ CASTELLO MARIA LUISA	43806875	15/09/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
2098	GARRIDO ESCUDERO IGNACIO	80044356	12/03/1968	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	SJ EJECUCION PENAL (2380) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES MURCIA
2099	PUYUELO MARTINEZ PAULA	25473530	25/02/1976	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 CARTAGENA (MURCIA)
2100	CASTAN MARTINEZ MARTA	25179443	02/04/1975	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 ZARAGOZA
2101	MORATAL RODRIGO LUCIA	20018911	03/09/1975	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 GANDIA (VALENCIA)
2102	TORRES CHICO ANA ISABEL	45452353	04/07/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2103	VILLANUEVA JOVER MARIA DOLORES	34793514	22/09/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA
2104	MUÑOZ VIDAL JOSE MARIA	22997659	12/07/1974	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 CARTAGENA (MURCIA)
2105	SANTOS PEREZ MARIA INMACULADA	5686684	13/04/1977	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
2106	GONZALEZ ARCOS MARIA ISABEL	28490757	28/06/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 DOS HERMANAS (SEVILLA)
2107	GARCERAN DONATE MARIA DEL MAR	34805173	24/02/1973	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 MURCIA
2108	PALMERO SANDIN MARIA JESUS	44913099	14/12/1976	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 6 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2109	MARQUEZ SOLER ANTONIO	24356265	21/01/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SUECA (VALENCIA)
2110	VERGES MARIN MARC	46345476	01/09/1972	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 BARCELONA
2111	HERNANDEZ BLAZQUEZ FRANCISCA	34812109	26/08/1974	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 CARTAGENA (MURCIA)
2112	ATIENZA MARCOS DAVID	51416811	01/06/1975	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 32 MADRID
2113	HERMOSO DE MENA NATALIA	50726774	22/09/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 ALCORCÓN (MADRID)
2114	PEREZ VIVANCOS MARIA ANTONIA	23252980	23/11/1973	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 LORCA (MURCIA)
2115	JUAN LOPEZ ENRIQUE	34001038	27/12/1965	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ARRECIFE (LAS PALMAS)
2116	SANCHON MARTINEZ JUAN LUIS	25472812	01/12/1974	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
2117	GARCIA BONET XAVIER	34736027	25/09/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 4 BARCELONA
2118	RODRIGUEZ PLAZA MARIA GEMA	2241053	27/05/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 MADRID
2119	PEREZ MARTINEZ ISMAEL	46846506	15/02/1977	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 MADRID
2120	FRUCTUOSO HERNANDEZ AURORA	34806887	13/03/1973	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
2121	REVUELTO RUIZ MARIA OLGA ASCENSION	16564457	20/05/1971	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 LOGROÑO (LA RIOJA)
2122	PAZ FERNANDEZ ANTONIO	44076491	20/02/1973	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 2 PONTEVEDRA
2123	GARCIA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	23005969	30/07/1974	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2124	NAVARRO NUEZ MARIA JESUS	43254967	26/10/1957	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2125	BADRA RAVELO ANTONIO ISAAC	43251522	18/03/1958	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2126	SANZ GARCIA CARLOS	50024726	30/08/1955	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 LEGANÉS (MADRID)
2127	LOBO ZAMORA LORENZO	1822264	27/01/1963	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ALCORCÓN (MADRID)
2128	RUBIO LARA JESUS	28537495	17/07/1959	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 13 SEVILLA
2129	MORALES REVUELTO LUIS SIMON	77293878	08/10/1960	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
2130	MONTORO JUDAS PEDRO	77087394	22/11/1955	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN BAEZA (JAEN)
2131	TEJADA HIDALGO CARLOS	80112392	05/08/1957	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 FUENGIROLA (MALAGA)
2132	ORTEGA MARTINEZ MARIA ANGELES	51059938	08/04/1956	11 1 13	10 6 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 MADRID
2133	GOMEZ LASO MARIA	75226989	19/12/1970	12 11 17	10 5 24	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ALMERÍA
2134	GARCIA PEREZ JOSE MIGUEL	29001001	18/11/1970	12 11 17	10 5 24	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 CARTAGENA (MURCIA)
2135	GUILLAMON AYALA MARIA PURIFICACION	77510914	21/12/1968	11 11 24	10 5 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 CARTAGENA (MURCIA)
2136	FERNANDEZ PUGA EVA	2895129	09/09/1972	11 11 24	10 5 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 CARTAGENA (MURCIA)
2137	RUBIO NAVARRO CAROLINA	24253155	07/03/1967	16 6 28	9 11 25	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TORREMOLINOS (MALAGA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2138	LLAMAS DÍAZ ANDRÉS	681287	14/07/1958	13 6 15	8 7 27	03/03/1986	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 BARCELONA
2139	ALCAÑIZ RODRIGUEZ ALFREDO	11792077	12/01/1965	11 11 24	5 2 16	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 FUENLABRADA (MADRID)
2140	GRAU GARCIA-BLANCO MARIA DOLORES	50269718	09/05/1947	11 1 13	5 2 16	20/02/2003	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 5 MADRID
2141	LORCA PUERTA GUSTAVO JAVIER	4566605	03/06/1963	10 0 4	4 11 17	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 8 MADRID
2142	SOLER LOPEZ MIGUEL ANGEL	27512985	18/10/1967	19 0 18	4 8 27	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 CARTAGENA (MURCIA)
2143	CARA DEL ROSAL JOAQUIN	24210283	30/08/1965	14 10 11	4 8 27	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2144	SANCHEZ ALFONSO JOSE CARLOS	27470123	21/07/1967	13 8 25	4 8 27	06/07/2000	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2145	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	32807064	01/03/1972	12 11 17	4 8 27	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
2146	ARAUJO PRIETO MONICA SUSANA	36125144	24/07/1974	11 11 24	4 8 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 PONTEVEDRA
2147	CASTAÑO RAMOS MARIA AUXILIADORA	8106035	31/12/1965	11 11 24	4 8 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 CÁCERES con sede en PLASENCIA
2148	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	22966973	30/07/1965	11 11 24	4 8 27	09/04/2002	C.U.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) con sede en ELCHE/ELX
2149	MURCIANO VICENTE EVA MARIA	25415512	05/05/1972	11 11 24	4 8 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 VALENCIA
2150	LARRINAGA ALVAREZ NEREA	20172810	15/12/1972	11 11 24	4 8 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 BILBAO (BIZKAIA)
2151	FRAILE MARTIN MARIA JESUS	71931987	25/11/1977	11 1 13	4 8 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 47 MADRID
2152	ZAPATA MUÑOZ ANA MARIA	8928024	20/01/1973	11 1 13	4 8 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 FUENLABRADA (MADRID)
2153	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	50204401	30/12/1974	11 1 13	4 8 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 MÁLAGA
2154	MATEOS GONZALEZ SERAFIN	35006409	16/10/1958	11 1 13	4 8 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 28 BARCELONA
2155	IZQUIERDO CARBONERO FRANCISCO JAVIER	25314950	20/05/1963	11 1 13	4 8 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 13 MÁLAGA
2156	CAROLA COSIALLS MARIA ROSA	40873283	20/03/1960	11 1 13	4 8 27	20/02/2003	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. Nº 1 TARRAGONA
2157	PARDO ARCAS MARIA DEL MAR	23214054	04/11/1958	9 8 19	4 3 1	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 LORCA (MURCIA)
2158	MATEO CABREJAS MARIA MERCEDES	16786307	23/09/1956	9 8 19	4 3 1	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 COSLADA (MADRID)
2159	LARROSA ABELLAN JESUS	21994515	13/06/1966	10 0 4	4 1 17	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2160	GONZALEZ TAPIA MARIA DEL PILAR	9286220	25/08/1965	17 1 17	4 0 11	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 BARCELONA
2161	CALLEJA RIOS RICARDO	44678959	10/11/1974	10 0 4	4 0 11	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
2162	ANTONIN ABOS MERITXELL	52400576	11/12/1972	10 0 4	4 0 11	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 9 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
2163	FERNANDEZ HIDALGO MARIA DEL CARMEN	46567142	22/11/1967	10 0 4	4 0 11	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 26 BARCELONA
2164	KALIL RIVERO GIBRAN	53289089	27/04/1978	9 8 19	4 0 11	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 BARCELONA
2165	ALONSO GARCIA NURIA	35112622	24/08/1964	9 8 19	4 0 11	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 36 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2166	PADILLA FORTES SALVADORA	38785039	16/06/1960	9 8 19	3 9 5	14/07/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 BARCELONA
2167	GONZALEZ SARABIA ANTONIO	45088998	09/03/1974	11 11 24	3 9 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 31 BARCELONA
2168	LOPEZ SALINAS FRANCISCA	40960536	19/02/1957	10 0 4	3 9 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 5 BARCELONA
2169	PLAZA CARRERO WENCESLAO	21980472	26/12/1958	10 0 4	3 8 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2170	LOPEZ MONTES ALEJANDRO MANUEL	44379511	15/03/1974	10 0 4	3 8 7	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 ALBACETE
2171	NIETO FRIAS ANA MARIA	12328420	27/10/1973	9 8 19	3 8 7	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 COLLADO VILLALBA (MADRID)
2172	RUIZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	45270803	12/11/1959	9 8 19	3 5 29	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MELILLA
2173	PRIETO DE LA CALLE MARIA ASCENSION	11946791	04/05/1967	19 0 18	3 5 22	13/03/1995	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO CIUDAD REAL
2174	REUS BARCELO FRANCISCA MARIA	42952862	07/08/1954	10 0 4	3 5 8	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
2175	GOMEZ GARCIA MARIA	3115001	11/08/1976	9 8 19	3 4 25	14/07/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 GUADALAJARA
2176	GARRIDO RAMOS JAVIER	25178983	10/03/1976	9 8 19	3 3 6	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 MADRID
2177	SANCHEZ MOLINA JUAN CARLOS	7547838	30/03/1967	17 1 17	3 3 5	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ALBACETE
2178	IRABURU ECHAVARRI PATRICIA	25716282	19/12/1974	9 8 19	3 3 5	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 29 MADRID
2179	ORTEGO BRIONGOS JESUS SANTIAGO	35017839	05/06/1959	9 8 19	3 1 29	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 8 BARCELONA
2180	MALO LARA ALFREDO	28584119	19/01/1966	19 0 18	2 10 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 HUELVA
2181	ROSADO MONTERO DIEGO JESUS	7002582	15/12/1965	19 0 18	2 10 3	13/03/1995	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO CÁCERES
2182	GARCIA BAYO JAVIER	52711790	12/10/1965	19 0 18	2 10 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 TORRENT (VALENCIA)
2183	QUINTILLAN VAZQUEZ MARIA BELEN	76617794	23/12/1963	19 0 18	2 10 3	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
2184	DOMINGO DE LA BLANCA ISABEL MARIA	29081792	04/03/1968	17 1 17	2 10 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TORREMOLINOS (MALAGA)
2185	PALACIOS CHIA ANGELES	34017106	09/08/1966	17 1 17	2 10 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
2186	ROJANO SAURA MONICA	33364941	23/09/1967	17 1 17	2 10 3	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 14 MÁLAGA
2187	VAZQUEZ BOYERO FERNANDO M.	9315874	05/11/1967	14 10 11	2 10 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 FERROL (A CORUÑA)
2188	CRESPO FERNANDEZ INMACULADA	10077309	04/04/1969	14 10 11	2 10 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 PONFERRADA (LEON)
2189	SANCHEZ GARRIDO Mª LUISA	13112562	15/05/1964	14 10 11	2 10 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 PONTEVEDRA con sede en VIGO
2190	FUENTES GUZMAN SILVIA MARIA	21509063	05/12/1972	14 10 11	2 10 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2191	NIETO LEIVA MARIA TERESA	25705475	09/08/1960	14 10 11	2 10 3	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 MÁLAGA
2192	DORADO PICON DOMINGO	75407335	05/11/1961	12 8 7	2 10 3	26/07/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 11 SEVILLA
2193	SERRANO REDDAWAY ESTHER	52777309	02/10/1973	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2194	RAYA GARCIA ALICIA PILAR	24249365	03/01/1970	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MOTRIL (GRANADA)
2195	COBEÑA RONDAN EVA MARIA	52926017	04/03/1975	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 CÁDIZ

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2196	MOURENZA ARRIOLA JAIME	30669362	12/02/1974	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
2197	ARIAS MENESES MARIA DE LOS ANGELES	32878201	29/11/1972	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 PONFERRADA (LEON)
2198	GARCIA VEGAS MARIA ASUNCION	12762294	07/05/1971	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SEGOVIA
2199	ARREBOLA DEL VALLE AURORA MARIA	44576880	26/01/1975	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 MADRID
2200	CALVO DE MORA PEREZ CECILIA	27290112	23/08/1962	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 11 SEVILLA
2201	LABRA CASTAÑOS GLORIA DE	44034596	30/05/1974	11 11 24	2 10 3	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ)
2202	TEJEDOR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	9260450	16/06/1960	11 10 6	2 10 3	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PALENCIA
2203	LOZANO BLANCO ROSA MARIA	10036958	09/11/1955	11 10 6	2 10 3	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 23 MADRID
2204	CUADRA GARCIA ALEJANDRO	8773034	14/04/1956	11 10 6	2 10 3	27/05/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 15 SEVILLA
2205	MARTINEZ LOZANO ANGEL	19452554	31/12/1950	11 10 6	2 10 3	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 VALENCIA
2206	PEREZ CABRERA MARIA DEL ROSARIO	42880533	30/04/1956	11 10 6	2 10 3	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
2207	VALLES LLORENS ENRIQUE	20415360	30/04/1965	11 10 6	2 10 3	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 GANDIA (VALENCIA)
2208	LORENZO MIR MARIA MERCEDES	43734731	08/07/1976	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 LLEIDA
2209	GARCIA PEDREIRA MARIA CARMEN	34891992	02/10/1971	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 A CORUÑA
2210	TOMAS ALMANZA MARIA DEL ROSARIO	9763274	19/10/1963	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	SJ SEC PENAL (2065) SERVICIO COMÚN ORDENAC. PROCEDIMIENTO LEÓN
2211	BERNAL RUIZ MARIA DE LOS SANTOS	52926938	02/12/1974	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
2212	LOPEZ MORENO LUCIA	48390204	30/07/1976	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2213	RODRIGUEZ ALARCON MARIA PILAR	23002661	08/06/1975	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 CARTAGENA (MURCIA)
2214	DELGADO DELGADO MARIA CARMEN	34820562	09/08/1974	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2215	VILORIA ZUDAIRE ESTHER	22746417	18/05/1973	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 BARAKALDO (BIZKAIA)
2216	AMANN SUBINAS BEGOÑA	30637165	19/10/1971	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 BILBAO (BIZKAIA)
2217	PAZOS POUSADA ALEJANDRA	52316871	09/02/1976	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
2218	CAMINA PEREZ MARIA ELENA	13163193	28/02/1973	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
2219	GOIG REVERT GEMMA MARIA	20815631	07/11/1974	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 15 VALENCIA con sede en ALZIRA
2220	SERRANO SAURA ANA BELEN	34815213	02/08/1974	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 CARTAGENA (MURCIA)
2221	VILLEGAS CASTRILLO LOURDES	48316395	10/02/1976	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 A CORUÑA
2222	SABATER COLLADO DOLORES	79266380	18/10/1971	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 GANDIA (VALENCIA)
2223	GOMEZ RODRIGUEZ MARIA BELEN	1934226	06/04/1975	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 MADRID

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2224	ARENAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	6558265	04/01/1966	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ÁVILA
2225	GUTIERREZ LAZARO COVADONGA	11434149	20/10/1971	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 GIJÓN (ASTURIAS)
2226	RAMIREZ EXPOSITO ANA MARIA	25999422	30/12/1967	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 29 BARCELONA
2227	PEREZ LOPEZ MARIA SANDRA	45431745	23/04/1973	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 PONTEVEDRA
2228	MARTINEZ CANTON ANGEL	10181592	20/02/1958	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JEF. SEC. EJECUCION PENAL (2070) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES LEÓN
2229	DAMAS LOPEZ ANTONIO	25907098	26/12/1950	11 1 13	2 10 3	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 BILBAO (BIZKAIA)
2230	BLANCO PEREZ RAQUEL	44451175	21/05/1974	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 OURENSE
2231	BOSCH LOZANO MARGARITA	43076314	31/01/1972	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
2232	CADAVID RODRIGUEZ EDUARDO	34958215	07/06/1968	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 39 MADRID
2233	VISUS SANZ ARTURO	18165894	18/03/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
2234	CATALAN HERNANDO MARIA ARANZAZU	17447790	27/03/1975	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL TERUEL
2235	CALDERON FERNANDEZ PATRICIA MARÍA	30944318	09/12/1977	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2236	ANDRES RAMOS MARIA ELENA	11957634	08/02/1969	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	SJ EJECUCION PENAL (2380) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES LEÓN
2237	ESPINOSA NAVARRO LUIS	25462808	15/04/1973	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 BARCELONA
2238	PEROSANZ SANCHIS MARIA JOSE	52678536	26/10/1970	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LLÍRIA (VALENCIA)
2239	ALVAREZ VEGA SILVIA	9436148	06/09/1976	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 FUENLABRADA (MADRID)
2240	CARMONA ARGUELLES REINALDO CARLOS	28900970	15/12/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 DOS HERMANAS (SEVILLA)
2241	FERNANDEZ GRACIA DANIEL	26020545	26/07/1974	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 CÓRDOBA
2242	VAZQUEZ PRIETO DAVID	28737041	02/07/1974	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 10 SEVILLA
2243	SINOVA GARCIA FRANCISCO	12375112	24/02/1968	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 PARLA (MADRID)
2244	PALOMERA SANCHEZ LETICIA	29120051	18/01/1976	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ZARAGOZA
2245	PEREZ FERNANDEZ ANA BELEN	2548725	23/01/1975	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ALCOBENDAS (MADRID)
2246	ANDRADE GUTIERREZ SONIA	75017153	15/09/1977	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 JAÉN
2247	VILCHES GALISTEO JUAN PEDRO	75008991	29/06/1961	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 TORREMOLINOS (MALAGA)
2248	RUBIRA VARELA SARA	43809512	08/02/1974	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2249	DOMINGUEZ COUGIL MARIA REGINA	36075891	03/05/1967	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 OURENSE
2250	VELAZQUEZ TAVERA MARIA BELEN	7963947	04/06/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 22 BARCELONA
2251	CORTINA ALARCON MARIA DOLORES	46589882	22/07/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 GRANOLLERS (BARCELONA)
2252	ZAMORANO EIRIZ PATRICIA	7231875	05/06/1974	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 COSLADA (MADRID)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2253	PEREZ POLO FERNANDO	7961314	28/05/1972	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2254	BLANCO JUAREZ VICTOR MIGUEL	9800801	11/10/1974	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 ALMERÍA
2255	JIMENEZ VELASCO JOSE PABLO	34018176	14/05/1968	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN GENERAL CEUTA
2256	LORENTE SERRANO RAQUEL	29111741	04/03/1973	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2257	GARCIA MARTIN JULIA	5419941	06/11/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MADRID
2258	FOJON CHAMORRO LAURA	48896944	31/03/1976	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 73 MADRID
2259	MONEDERO GOMEZ MARIA ANGELES	13152211	02/08/1973	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 3 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
2260	VAZQUEZ TRIGUEROS CARMEN	27450575	02/01/1965	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 BARCELONA
2261	GARCIA ESCOBAR MARIA DEL MAR	4587157	23/09/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MÓSTOLES (MADRID)
2262	MUÑOZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	18435247	16/08/1975	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 TOLEDO
2263	FERNANDEZ RUIZ ELENA	50098054	06/03/1973	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TORRENT (VALENCIA)
2264	HUERTAS NAFRIA ROMAN	50090827	15/02/1970	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2265	OLIVER GUERRA MARA TERESA	42873967	31/03/1973	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2266	GONZALEZ GONZALEZ RAUL	7861622	04/01/1970	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 38 BARCELONA
2267	LIZAN RUFILANCHAS RAFAEL	5664962	29/03/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 CIUTADELLA DE MENORCA (BALEARES)
2268	ROSSO PEREZ MANUEL ENRIQUE	31337554	23/04/1968	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 TOLEDO
2269	SANCHEZ GONZALEZ PABLO DAVID	43776132	03/07/1972	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2270	FERNANDEZ BORREGO JOSE ANTONIO	8037662	20/08/1971	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 FUENLABRADA (MADRID)
2271	BALLESTE ORPINELL JOSE	78058437	06/09/1954	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 30 BARCELONA
2272	ANGULO GASCON MARIA PAZ	3805706	03/02/1960	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE MENORES PONTEVEDRA
2273	PRIETO GUTIERREZ JESUS MARIA	7845706	13/08/1962	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
2274	GARBISU CRESPO SONIA	14945317	27/03/1959	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. BILBAO (BIZKAIA)
2275	PARRILLA MARTIN MARIA PILAR	43603559	11/10/1960	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
2276	LEBREDO FERNANDEZ JESUS MARIA	9749574	30/03/1964	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL OVIEDO (ASTURIAS)
2277	MARTIN SANCHEZ LUIS JESUS	50021298	17/06/1954	10 0 4	2 10 3	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MÓSTOLES (MADRID)
2278	GARCIA JULIA ANTONIO	30534698	10/06/1968	17 1 17	2 9 20	17/02/1997	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 CÓRDOBA
2279	CUELLAR OTON JORGE	21513870	23/06/1975	9 8 19	2 9 13	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) con sede en ELCHE/ELX

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2280	FERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA DIANA	26741634	17/12/1972	9 8 19	2 8 29	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 COLMENAR VIEJO (MADRID)
2281	DEL CAMPO BELTRAN MARIA ISABEL	38548245	26/04/1962	9 8 19	2 8 29	14/07/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 6 BARCELONA
2282	PAVON GARCIA JESUS ESTEBAN	5628265	02/09/1959	9 9 19	2 6 10	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 FUENLABRADA (MADRID)
2283	CEPEDA GALICIA MARIA DOLORES	10554552	14/10/1953	20 8 19	2 5 14	18/12/1979	Distrito	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 AVILÉS (ASTURIAS)
2284	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO	5128290	24/07/1954	19 8 18	2 5 14	13/07/1994	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO ALBACETE
2285	PEÑA JIMENEZ YOLANDA	2608609	11/01/1967	17 1 17	2 5 14	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 10 MADRID
2286	MEDINA ACHIRICA JULIA MARIA	31653740	17/09/1966	17 1 17	2 5 14	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 CÁDIZ
2287	GOMEZ ALVAREZ ROSA	10041016	03/04/1957	15 8 7	2 5 14	24/07/1998	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
2288	GARCIA GARCIA BEATRIZ	27309543	09/10/1960	14 10 11	2 5 14	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 10 SEVILLA
2289	GARCIA ORDOÑEZ Mª VICTORIA	52615400	01/12/1968	14 10 11	2 5 14	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 OVIEDO (ASTURIAS)
2290	GOMEZ NOVA FRANCISCO	7558843	07/06/1969	14 10 11	2 5 14	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 ALBACETE
2291	ORTIZ PACHECO MARIA DOLORES	8861967	18/07/1973	12 11 17	2 5 14	16/04/2001	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BADAJOZ
2292	GOMEZ LARA JUAN RAMON	25939171	09/06/1956	12 8 7	2 5 14	26/07/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 JAÉN
2293	PEREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	27487480	08/02/1970	11 11 24	2 5 14	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2294	VALLECILLO ORELLANA MARIA LOURDES	34029297	29/12/1973	11 11 24	2 5 14	09/04/2002	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 MÁLAGA
2295	CUEVAS PEROSANZ LUCIA	45420410	06/04/1969	11 11 24	2 5 14	09/04/2002	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
2296	SANCHEZ CASTILLA OLGA	30652796	06/10/1971	11 11 24	2 5 14	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 BILBAO (BIZKAIA)
2297	RUIZ NAVARRO EDUARDO LUIS	52773259	05/12/1972	11 1 13	2 5 14	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 ELCHE/ELX (ALICANTE)
2298	GODOY HURTADO ANGELA	77327670	09/02/1978	11 1 13	2 5 14	20/02/2003	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 MÁLAGA
2299	TENORIO RIOS MARIA	1183235	07/08/1973	11 1 13	2 5 14	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 GUADALAJARA
2300	VAZQUEZ ZARATE MARIA DEL CARMEN	32619547	06/12/1955	11 1 13	2 5 14	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 PONTEVEDRA
2301	MIGUEL MARTIN PEDRO JOSE DE	16794420	21/08/1962	11 1 13	2 5 14	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SORIA
2302	ANTOLIN MUÑOZ JULIO IVAN	12771246	02/02/1975	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 TORRELAVEGA (CANTABRIA)
2303	GARCIA AMORIN JOSE RAMON	53532515	05/04/1977	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 GIJÓN (ASTURIAS)
2304	NALDA ROMEA SONIA	16588740	25/02/1977	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 LOGROÑO (LA RIOJA)
2305	CASASOLA DIAZ JOSE MARIA	25682744	04/11/1976	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 MÁLAGA
2306	GARCIA RUBIO LUIS MIGUEL	12754272	29/09/1973	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SEGOVIA
2307	PUERTAS FARIÑA AMELIA MARIA	24206412	18/02/1965	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 MÁLAGA
2308	SAN MARTIN CIDRIAIN MARIA MERCEDES	15850400	24/09/1961	10 0 4	2 5 14	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
2309	CORRAL ALONSO MARIA BEGOÑA	50445329	08/04/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
2310	FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL	78698318	09/06/1976	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 16 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2311	VALERO DOMENECH CRISTINA MARIA	29160813	18/12/1970	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 VALENCIA
2312	ASENJO SANZ LUCIA	2546558	13/03/1977	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 A CORUÑA
2313	BENITEZ SORIANO MARIA JOSE	29074474	24/09/1975	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 25 BARCELONA
2314	SANZ MORENO BEATRIZ	12755873	16/03/1969	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SJ SEC PENAL (2065) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
2315	BEIRO MAGAN JOSE MANUEL	34850524	14/11/1970	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 BARCELONA
2316	GUTIERREZ FIDALGO MARTA	9798943	29/06/1974	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 VIGO (PONTEVEDRA)
2317	CAVA GARCIA FERNANDO	50453219	25/05/1975	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 31 MADRID
2318	PEREZ GARCIA JOSE LUIS	34964338	12/10/1966	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
2319	TAMARA VELASCO ADOLFO FERNANDO	25163209	11/08/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 BARCELONA
2320	TENA GRAÑON ANA ISABEL	17748770	25/07/1977	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 ZARAGOZA
2321	RODRIGUEZ DELGADO MARIA LUISA	6581902	12/01/1976	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PLASENCIA (CACERES)
2322	REQUENA NAVARRO ANA BELEN	34821868	26/08/1975	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 MADRID
2323	MUÑOZ SANCHEZ MARIA NIEVES	18432770	14/01/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2324	VICO FERNANDEZ GEMA	50851995	11/10/1973	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 BARCELONA
2325	VARELA AMBOAGE SUSANA	78794111	02/03/1977	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
2326	LURUEÑA RODRIGUEZ FRANCISCO	7985116	25/08/1975	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 BILBAO (BIZKAIA)
2327	NIETO FERNANDEZ ANA BELEN	33972314	30/05/1976	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
2328	RAMIRO ALBALATE IGNACIO	3117856	04/02/1977	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 BARCELONA
2329	MATA MEDINA MARIA SANDRA	30672057	30/08/1973	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD COMPATIBILIZA CON SCPGE CIVIL (2234) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES GETXO (BIZKAIA)
2330	JIMENEZ-VILLAREJO FERNANDEZ PABLO EMILIO	25678734	02/07/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 9 MÁLAGA
2331	CAMPA CAMPOS TERESA SANDRA	18170325	01/10/1977	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 LLEIDA
2332	ALMAGRO GARCIA YOLANDA	34006395	11/10/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2333	HERNANDEZ BURGOS EVA MARIA	43366353	10/08/1973	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SECCION Nº 6 AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2334	LOPEZ DOMENECH JORGE	25422354	06/08/1974	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 VALENCIA
2335	GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ MIGUEL PAULINO	7991976	08/12/1976	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PLASENCIA (CACERES)
2336	MIRAVITLLES MATAMOROS MARIA VANESSA	46139571	18/03/1974	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2337	PEREZ PUERTO SUSANA	43732409	05/05/1974	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD AUDIENCIA PROVINCIAL PENAL (2362) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
2338	ACEVEDO IZQUIERDO SILVIA DE LOS REYES	43360592	06/01/1970	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2339	ISRAEL SALAS ROCIO	26485336	05/05/1973	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CAZORLA (JAEN)
2340	VAZQUEZ QUERO MARIA TERESA	46928247	15/10/1976	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 GETAFE (MADRID)
2341	LILLO OROZCO MARIA TERESA	4586603	27/04/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2342	LAFUENTE SEVILLA RAFAEL	29182874	30/12/1974	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 20 BARCELONA
2343	MOMPIN ALVAREZ ISABEL	12402080	15/03/1977	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2344	ARMESTO BAYON ELENA	9773684	17/08/1967	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
2345	MARTIN CUESTA EUSEBIA	4183205	01/08/1970	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 BARCELONA
2346	VIÑAS ESCOBEDO MARIA ROSA	37745104	11/11/1965	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 BARCELONA
2347	OLAZABAL BARRIOS MARIA ALICIA	14916670	12/11/1955	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 BILBAO (BIZKAIA)
2348	PINEDA GUERRERO MARIA ANGELES	34893936	27/04/1971	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL MELILLA
2349	PRIETO SANCHEZ JOSE MARIA	21989101	11/11/1963	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2350	OLALDE ZANUY ESTER	37316765	14/09/1957	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
2351	JIMENEZ HURTADO ANTONIO JOSE	30482258	05/03/1962	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ALZIRA (VALENCIA)
2352	CAMACHO FRAILE JOSE ELADIO	2201119	16/01/1961	9 8 19	2 5 14	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 81 MADRID
2353	MIRAMUNT VILAMU SARA	46776354	04/06/1973	9 8 17	2 5 12	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 43 BARCELONA
2354	CHECA SANCHEZ MARIA VICTORIA	27522962	10/10/1967	20 2 1	2 3 27	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ALMERÍA
2355	VAZ-ROMERO MORENO MARIA BEATRIZ	7008633	31/05/1966	20 2 1	2 3 27	01/02/1994	C.U.	JEF. SEC. E.J. CIV/CA/SOC (2030) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES CÁCERES
2356	GIL GARCIA MARIA DE LA CONSOLACION	52087453	02/07/1967	20 2 1	2 3 27	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 23 MADRID
2357	RUIZ TORRES MARIA ISABEL	29084000	15/04/1968	17 1 17	2 3 27	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALMERÍA
2358	GARRIDO ARENAS MARIA ANTONIA	52543972	29/01/1966	17 1 17	2 3 27	17/02/1997	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 SEVILLA
2359	GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES	27533769	25/10/1967	17 1 17	2 3 27	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALMERÍA
2360	JIMENEZ TRIGUEROS BEATRIZ	28591028	15/05/1969	14 10 11	2 3 27	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 14 SEVILLA
2361	PEREZ FERNANDEZ MARIA JESUS	33289930	06/12/1970	12 11 17	2 3 27	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2362	LOPEZ MORENO JUANA	5169693	09/03/1961	12 8 7	2 3 27	26/07/2001	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALBACETE
2363	RUEDA CAMPOS MARIA JOSE	31266226	29/12/1971	11 11 24	2 3 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 CÁDIZ
2364	CUBERO FLORES MARIA CAROLINA	50449332	19/01/1972	11 11 24	2 3 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 MADRID
2365	SANCHEZ GOMEZ MARGARITA	31663196	27/12/1969	11 11 24	2 3 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
2366	LACUEVA SUBIRATS SILVIA	52716013	14/08/1971	11 11 24	2 3 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 GANDIA (VALENCIA)
2367	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JESUS	50726251	08/11/1973	11 11 24	2 3 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 4 MADRID
2368	LOPEZ AZCOITIA JAVIER	72550313	16/04/1970	11 11 24	2 3 27	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 CÁDIZ
2369	ORTIZ HERRERA MARIA SILVIA PAULA	5203017	07/11/1963	11 10 6	2 3 27	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 58 MADRID
2370	GIMENO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	44031374	06/01/1974	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 CÁDIZ
2371	ALONSO VILLALBA SONIA MARIA	28617998	11/05/1974	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 HUELVA
2372	MORADILLO ARAUZO MARIA DEL MAR	13137043	13/03/1968	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
2373	SORAVILLA GARCIA MARIA DEL DULCE NOMBRE	7241810	10/05/1975	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 83 MADRID
2374	LOPEZ GAVIÑO RAQUEL MARIA	44045122	13/05/1976	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 4 CÁDIZ
2375	MARTINEZ LLUESMA JOAQUIN	24318574	25/04/1961	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
2376	SANCHEZ ROS IGNACIO JOSE	22947311	29/06/1962	11 1 13	2 3 27	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 CARTAGENA (MURCIA)
2377	CLEMENTE PARDOS CARLOS CARMELO	17439219	07/04/1971	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 9 ZARAGOZA
2378	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA	9009096	09/08/1975	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
2379	LIDON RUBIO OLGA	29015329	25/01/1972	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TORREVIEJA (ALICANTE)
2380	CABAL PARADA SILVIA	9416922	02/10/1973	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 LANGREO (ASTURIAS)
2381	HERVAS GONZALEZ SARA	51943326	01/10/1977	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MÓSTOLES (MADRID)
2382	ECHARRI HERNANDEZ ELENA	33434903	07/05/1972	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
2383	ROJAS ROSADO VICTOR	28926233	01/06/1975	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 12 SEVILLA
2384	MARTIN MARTIN MARIA ANGUSTIAS	24258583	27/03/1971	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ALGECIRAS (CADIZ)
2385	GARCIA BURGUILLOS MOISES	31651242	03/09/1965	10 0 4	2 3 27	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ)
2386	ROS GIL DAVID	22573102	24/05/1976	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 18 VALENCIA con sede en TORRENT
2387	MONTES RAMIREZ MARIA ELENA	28758547	12/09/1975	9 8 19	2 3 27	14/07/2007	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 MÓSTOLES (MADRID)
2388	DIAZ GONZALEZ MARIA OLGA	32876490	22/01/1969	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 MELILLA
2389	SANCHEZ GONZALEZ MARIA LLANOS	47050325	28/11/1978	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALMANSA (ALBACETE)
2390	GONZALEZ ESPINOSA MARIA ELENA	75445603	10/08/1972	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2391	GUTIERREZ RUIZ MARIA CRISTINA	44953024	05/05/1977	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 HUELVA
2392	PRIETO TRELLES ESTHER MARIA	2251815	23/11/1977	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 12 MADRID
2393	BARROS GARCIA FELICIDAD	44250758	22/10/1972	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALGECIRAS (CADIZ)
2394	ANTOLIN PEREZ MARIA JOSE	75240540	13/03/1978	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 MELILLA
2395	UNTIEDT LECUONA MARIA VANESSA	52368099	07/12/1973	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
2396	LOPEZ-FANDO DE MIGUEL RAQUEL CRISTINA	2531308	09/06/1971	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CUENCA
2397	CAJOTO DIAZ ROSENDO	33802453	25/01/1948	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 LUGO
2398	MONTAÑANA CASTELLANO ENRIQUE	19827768	02/01/1956	9 8 19	2 3 27	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 13 VALENCIA
2399	CONTRERAS CHOVA MARIA FELIPA	24212224	29/06/1965	17 1 17	2 3 10	17/02/1997	C.U.	SJ UPAD 1ª INS. E INSTRUC Y SJ SEC CIV/CA/SO SCE (2200) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
2400	MINGUEZ ZAFRA JUAN ENRIQUE	25484429	19/12/1975	8 8 14	2 3 5	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 50 BARCELONA
2401	MARTIN RUEDA MARIA DEL PILAR	25672580	23/07/1973	12 11 17	1 9 24	16/04/2001	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO MÁLAGA
2402	MACHADO HERNANDEZ MARIA ANGUSTIAS	44267605	15/03/1972	12 11 17	1 9 24	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 JAÉN
2403	MOLINA ONTENIENTE RAQUEL	2645026	16/09/1974	11 11 24	1 9 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 MADRID
2404	LUPION SALMERON MARIA DE GADOR	8913341	09/08/1972	11 11 24	1 9 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 ALMERÍA
2405	ALVAREZ GARCIA LORENA	9806365	22/11/1976	11 1 13	1 9 24	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TORRELAVEGA (CANTABRIA)
2406	JIMENEZ AZAUSTRE CESAR	3111735	31/05/1975	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
2407	PALMA GONZALEZ INMACULADA	24254581	17/11/1970	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 MAJADAHONDA (MADRID)
2408	VEGA HERNANDEZ ADELAIDA	44431174	24/01/1976	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 A CORUÑA
2409	SIERRA SANCHEZ ZAYDA MARIA	7979894	21/03/1974	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL ZAMORA
2410	SERRANO BASALDUA ALMUDENA BLANCA	29120707	26/06/1977	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
2411	GARCIA MARTINEZ PEDRO JAVIER	34791024	31/10/1970	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ORIHUELA (ALICANTE)
2412	EHEVARRIA FERNANDEZ MARIA BEGOÑA	30650105	05/05/1972	9 8 19	1 9 24	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 BARCELONA
2413	MOYA DONATE PEDRO	70518240	14/04/1978	9 8 19	1 9 7	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
2414	BLANCO LAFRAGÜETA RAQUEL	25473304	11/01/1977	8 8 14	1 8 2	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 ZARAGOZA
2415	CABEZUELO CAMPOS MARIA	52655651	30/06/1973	9 8 19	1 7 1	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LLÍRIA (VALENCIA)
2416	GARCIA HERRERA MIGUEL ANGEL	45453229	30/11/1973	9 8 19	1 7 1	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 LLÍRIA (VALENCIA)
2417	GUILLOT PALOMAR LETICIA	53050481	25/05/1975	8 8 14	1 7 1	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LLÍRIA (VALENCIA)
2418	DE TEMPLE SALINAS ANA MAGDALENA	46142316	05/04/1976	8 8 14	1 7 1	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2419	SIEIRO BARJA AGUSTIN	46573601	05/04/1978	8 8 14	1 7 1	19/07/2005	C.U.	SECCION Nº 21 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
2420	GARCIA MARTIN RAQUEL	29180264	05/11/1973	9 8 19	1 6 12	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 VALENCIA
2421	GALVEZ RABADAN BENITO DAMIAN	34864224	18/02/1973	8 8 14	1 4 25	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ALMERÍA
2422	MARUGAN CID LUIS	6555861	15/11/1965	20 2 1	1 4 6	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ÁVILA
2423	NAVARRETE RUBIO Mª DE LOS REMEDIOS	23241714	28/04/1968	12 11 17	1 4 6	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LORCA (MURCIA)
2424	MARTIN CARDABA RAQUEL	50451916	17/07/1972	11 11 24	1 4 6	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ALCOBENDAS (MADRID)
2425	GUIRAO LLORENTE PEDRO ANGEL	51413640	24/07/1973	11 11 24	1 4 6	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 88 MADRID
2426	MORENO GARCES MARIA DOLORES	7562557	02/09/1972	11 11 24	1 4 6	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ALBACETE
2427	ACEDO ALBENDEA MARIA JOSE	2906692	08/10/1974	11 11 24	1 4 6	09/04/2002	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MADRID
2428	LOPEZ RAMON LIDIA PALOMA	34855085	22/11/1973	11 11 24	1 4 6	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 ALCORCÓN (MADRID)
2429	AÑIBARRO FERNANDEZ MARIA	52974648	30/09/1974	11 1 13	1 4 6	20/02/2003	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 LOGROÑO (LA RIOJA)
2430	RAUSELL RAUSELL MARIA CARMEN	73541378	25/12/1961	11 1 13	1 4 6	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 9 VALENCIA
2431	MARTIN-ALCALDE GARCIA ROCIO BELEN	75238462	23/08/1977	10 0 4	1 4 6	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 PARLA (MADRID)
2432	CORTES CARBALLO TATIANA MARIA	30207217	20/05/1973	10 0 4	1 4 6	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 CÓRDOBA
2433	LATORRE ARFELLA JOSEFINA	19885002	29/07/1959	10 0 4	1 4 6	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 TORRENT (VALENCIA)
2434	CIVICO MALDONADO MARIA DE LA CRUZ	44262502	24/01/1975	9 8 19	1 4 6	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 MÁLAGA
2435	LANCHAS RODRIGUEZ SUSANA	8997919	11/07/1973	9 8 19	1 4 6	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 BENIDORM (ALICANTE)
2436	MERINO MERIDA ROSA MARIA	30796869	10/02/1972	9 8 19	1 4 6	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 MÁLAGA
2437	REVERT LAZARO ANTONIO	21514480	28/05/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2438	SIRVENT ASENSI VANESA	52769714	12/11/1979	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 45 BARCELONA
2439	CEREZA BUENO ELENA	25484852	01/08/1978	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 TARRAGONA
2440	CAÑADA CATEDRA JOSE MARÍA	26021993	12/07/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 TORREMOLINOS (MALAGA)
2441	GARCIAS PUIGSERVER ESPERANZA	18235637	10/01/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
2442	LOPEZ LUENGO ALBERTO	50728332	23/05/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 PONTEVEDRA
2443	BADIA DEL RIO JOSÉ MARÍA	33292963	18/10/1972	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 A CORUÑA
2444	PEREZ PUENTE LAURA	2651206	02/09/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ALCOBENDAS (MADRID)
2445	RECIO SANCHEZ ELENA	16570906	19/02/1970	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 LOGROÑO (LA RIOJA)
2446	COSTA LAMENCA MARIA JOSE	25179248	21/06/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 51 BARCELONA
2447	CANO SANTANA ANTONIO	52428458	25/07/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 TARRAGONA
2448	CLAVIER CALVO BEATRIZ	39878359	13/02/1971	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 REUS (TARRAGONA)
2449	GARCIA ALONSO MARIA INES	6580619	09/05/1975	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL SEGOVIA
2450	ACERO RINCON MARTA	53001244	09/12/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCOBENDAS (MADRID)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2451	ANTOLIN MARTIN MARIA ISABEL	25181637	13/10/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 TARRAGONA
2452	BUIL TORRALBA ELENA VICTORIA	25471412	22/12/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 LLEIDA
2453	GIL GARCIA MARIA INMACULADA	44251705	17/01/1973	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SABADELL (BARCELONA)
2454	GARCIA LOIZAGA MARIA BELEN	16566761	11/07/1971	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 LOGROÑO (LA RIOJA)
2455	BLANCO AQUINO MARIA	79310065	31/12/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 A CORUÑA
2456	COLLADO PEÑA ADELA MARIA	44005688	14/06/1972	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 BARCELONA
2457	MOREJON VILLANUEVA VANESA	40335080	14/09/1979	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL GIRONA
2458	CASADO ROMAN JAVIER	25172528	13/08/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 GIRONA
2459	MARTINEZ RAMOS JAVIER	52870072	10/07/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 LEGANÉS (MADRID)
2460	CABRERA PEREZ OSCAR	24279769	24/08/1973	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCALÁ LA REAL (JAEN)
2461	SANCHO DE LA TAJADA MARIA PILAR	18040785	10/02/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TARRAGONA
2462	IRLES MARTINEZ PILAR	52658123	27/12/1975	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 TORRENT (VALENCIA)
2463	MATEU ANGULO SILVIA	40330810	28/04/1975	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 GIRONA
2464	JIMENEZ CAMACHO MARIA DEL PILAR	43371600	15/10/1975	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
2465	LACORT GARCIA ANA MARIA	43523658	27/02/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
2466	PEREZ REINA JORGE	5193845	26/08/1967	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 CÓRDOBA
2467	ARRIBAS ATIENZA PATRICIO	21438365	22/08/1962	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SUECA (VALENCIA)
2468	RIBAL SANCHIS NURIA	10084931	05/02/1973	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
2469	AYALA COLL ANA MARIA	45466378	30/04/1971	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 LLEIDA
2470	FERNANDEZ BOAN ESTHER	52776133	14/06/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2471	LOPEZ CARBALLO MARIA DE LOS ANGELES	33329545	31/08/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 LUGO
2472	SEIVANE TERAN CRISTINA	2545129	21/11/1975	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 COLLADO VILLALBA (MADRID)
2473	GONZALEZ PEREDA JAVIER	13779248	04/04/1967	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 SANTANDER (CANTABRIA)
2474	PALACIN FABREGAS BEGOÑA	44003613	04/02/1979	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES CÁCERES
2475	CARRALERO NUÑEZ DAVID	50093729	17/07/1970	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2476	SAVIRON DIEZ GUZMAN ELISEO	17732312	18/03/1978	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
2477	NUÑEZ GOMEZ ALFONSO	1926920	18/12/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MÓSTOLES (MADRID)
2478	PALACIOS GOMEZ DE MEMBRILLERA CRISTINA	3884290	15/03/1979	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 COSLADA (MADRID)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2479	FERNANDEZ AMBROS CARLOTA	32818237	26/08/1976	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 A CORUÑA
2480	MENDEZ CALVO DAVID	9344864	15/11/1973	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	SJ UPAD 1ºINST.E.INSTR Y SJ E.J. CIV/CA/SO en SCE (2220) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CÁCERES
2481	GREGORIO SOLA RAQUEL	29128824	24/06/1978	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 HUESCA
2482	RIVERA FORCEN ALFONSO	29130938	16/01/1979	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 LLEIDA
2483	HOLGADO ESTEBAN JUAN	39721993	17/01/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 TARRAGONA
2484	MOLINA BORRAS RAQUEL	39894442	01/08/1975	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 BARCELONA
2485	RAMOS LAIN NATALIA	1927433	22/07/1974	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 40 BARCELONA
2486	MARTIN SANCHEZ FRANCISCA MARIA	11413953	26/01/1967	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 FUENLABRADA (MADRID)
2487	MORETA TUSQUETS MARIA	36526155	14/04/1977	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 18 BARCELONA
2488	RIVERA FORCEN IGNACIO	29130939	16/01/1979	8 8 14	1 4 6	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 BARCELONA
2489	GOMEZ MORENO ELVIRA	29089191	10/04/1966	20 2 1	1 3 15	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 ZARAGOZA
2490	LOZANO SANZ ELIA	1183964	08/10/1974	9 8 19	1 3 12	14/07/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
2491	ARCOS MORA MARIA CARMEN	30792014	17/09/1971	11 1 13	1 3 11	20/02/2003	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 CÓRDOBA
2492	MARTIN RODRIGUEZ ALMUDENA	51921337	15/06/1973	12 11 17	1 0 1	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 VALDEMORO (MADRID)
2493	PEREZ MARTI ROSA MARIA	20017936	22/09/1974	11 11 24	1 0 1	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 GANDIA (VALENCIA)
2494	RESA CARRETERO RAQUEL	48995572	09/12/1975	10 0 4	1 0 1	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 VALDEMORO (MADRID)
2495	PAJUJUELO AMADO MARIA ELENA	52636651	09/09/1977	10 0 4	1 0 1	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 11 VALENCIA
2496	LOPEZ GUTIERREZ CARMEN MARIA	5674242	22/06/1975	10 0 4	1 0 1	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 FUENLABRADA (MADRID)
2497	VENTURA MONFORT JOAQUIN RICARDO	73375822	03/04/1960	10 0 4	1 0 1	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 VILLARREAL/VILA-REAL (CASTELLON)
2498	GARCIA POVEDA CARMEN	18941137	12/01/1963	9 8 19	1 0 1	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
2499	VEIGA PENEDO MÓNICA	33335265	12/04/1975	8 8 14	1 0 1	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 LUGO
2500	FONT DE MORA RULLAN JAIME	53222408	13/02/1979	8 8 14	1 0 1	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TORRENT (VALENCIA)
2501	JIMENEZ FUEYO MARTA	20160829	02/12/1971	8 8 14	1 0 1	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SUECA (VALENCIA)
2502	CARBAJO DOMINGO CONSUELO	11724342	17/12/1959	19 0 18	0 11 22	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 OVIEDO (ASTURIAS)
2503	FERNANDEZ-MADERA MARTINEZ JESUS	10860583	28/01/1968	17 1 17	0 11 22	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 GIJÓN (ASTURIAS)
2504	CALZADO JULIA JUAN	52540649	20/10/1963	17 1 17	0 11 22	17/02/1997	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 CÓRDOBA
2505	LOPEZ FERNANDEZ MARIA AUXILIADORA	50313018	07/10/1974	11 1 13	0 11 22	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 VALDEMORO (MADRID)
2506	GODES MEDRANO NURIA	7562580	30/05/1972	11 1 13	0 11 22	20/02/2003	C.U.	JDO. DE MENORES ALBACETE
2507	JIMENEZ ALONSO LUIS	42988515	09/02/1960	11 1 13	0 11 22	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
2508	ALARCON FRASQUET MARIA AMPARO	21491209	29/09/1971	9 8 19	0 11 22	14/07/2004	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
2509	PEGENAUTE GRAJAL LORENA	72681953	21/09/1977	9 8 19	0 11 22	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
2510	AGUILAR ZANUY ANA MARIA	43404259	16/04/1965	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 TORTOSA (TARRAGONA)
2511	SALCEDO RUIZ MARIA ELENA	30825328	04/05/1974	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 DOS HERMANAS (SEVILLA)
2512	AZCARATE RODRIGUEZ JOSE MARIA	29046524	02/09/1971	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 HUELVA
2513	AQUILLUE SEBASTIAN SUSANA	25161591	14/06/1971	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE MENORES TERUEL
2514	CRUZADO BARQUIN CRISTINA	72038243	14/01/1978	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 SANTANDER (CANTABRIA)
2515	LARROSA ESPINOSA MARIA LIDIA	45561797	08/02/1974	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ORIHUELA (ALICANTE)
2516	LOZANO GAGO MARIA DE LA LUZ	31680158	15/10/1972	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 CÁDIZ
2517	SUEIRO MORAN CRISTINA	9795116	15/10/1973	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 PONTEVEDRA
2518	GORDILLO PEREZ MARIA DEL PILAR	44957275	14/12/1974	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SAN FERNANDO (CADIZ)
2519	ROSALES ASENSIO JOSE MARIA	44318156	15/09/1977	8 8 14	0 11 22	19/07/2005	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
2520	PAZ GARCIA DE MATEOS RAQUEL AINHOA	53107161	21/06/1976	8 8 14	0 10 23	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 MADRID
2521	HERNAN ALVAREZ MARIA ESMERALDA	3464524	16/06/1974	9 8 19	0 9 2	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 32 MADRID
2522	TAMAYO GOMEZ MARIA ADELA	13115003	27/07/1964	20 2 1	0 4 5	01/02/1994	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 PALENCIA
2523	IZQUIERDO DIEZ JOSE ALBERTO	3450813	28/10/1967	19 0 18	0 4 5	13/03/1995	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 JAÉN
2524	SANCHO LUMBRERAS Mª ELENA	29100867	05/10/1969	14 10 11	0 4 5	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 LOGROÑO (LA RIOJA)
2525	GARCIA ESTEVEZ MIGUEL ANGEL	44032487	03/05/1973	11 1 13	0 4 5	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 CÁDIZ
2526	CIFO GONZALEZ CRISTINA	7542657	17/01/1967	11 1 13	0 4 5	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2527	VILUMBRALES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	8036695	06/05/1971	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 GETAFE (MADRID)
2528	BERNAL MARTIN LUIS FRANCISCO	25454155	23/05/1971	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 HUESCA
2529	SORIANO YAÑEZ-SEDEÑO RAQUEL MARIA	52535241	01/04/1974	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 PARLA (MADRID)
2530	FERNANDEZ CRUZ MARIA ANGELES	52118993	27/04/1974	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
2531	MARTINEZ TAFALLA JOSE BAUTISTA	23234095	14/05/1965	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 LORCA (MURCIA)
2532	POZO BOUZAS PAULA ALTAGRACIA	33451473	28/11/1972	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 VALENCIA
2533	GRANELL GUYATT PALOMA	3461606	08/08/1973	10 0 4	0 4 5	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 COSLADA (MADRID)
2534	RUBIA LOPEZ MONICA	2642011	12/06/1975	9 8 19	0 4 5	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 A CORUÑA
2535	GUTIERREZ CARDENETE ANTONIO	44284531	23/10/1974	9 8 19	0 4 5	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
2536	ORTELLS PASTOR JUAN MANUEL	7541393	02/01/1967	9 8 19	0 4 5	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
2537	MUÑOZ ORTIZ TOMAS	1895971	16/04/1959	9 8 19	0 4 5	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
2538	PEREZ RUIZ JUAN ALFONSO	15850591	19/07/1962	9 8 19	0 4 5	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
2539	NEVADO BRUN INMACULADA	44041190	08/12/1975	8 8 14	0 4 5	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 CÁDIZ

Secretarios Judiciales con la Segunda categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nombr.	Cuerpo procedencia	Destino
2540	VILLALBA BRU RAFAEL	50732555	05/11/1975	8 8 14	0 4 5	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
2541	VIÑAS SENA GEMA	75021274	14/04/1978	8 8 14	0 4 5	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ)
2542	PASTOR GONZALEZ PURIFICACION	29038475	08/06/1965	20 2 1	0 3 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
2543	PEREZ DE OTEYZA ELISA	667238	06/08/1956	17 3 16	0 3 1	11/11/1985	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
2544	CARRILLO HERNANDEZ MARIA DOLORES	7003832	06/09/1967	17 1 17	0 3 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
2545	MELLADO SANCHEZ ANTONIA	52806007	16/11/1967	17 1 17	0 3 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
2546	FENOLL VERDU BEATRIZ	29003994	15/04/1968	17 1 17	0 3 1	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
2547	ROMERO FERNANDEZ JUAN ANTONIO	22472979	21/09/1958	11 10 6	0 3 1	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

**ESCALAFÓN DE SECRETARIOS JUDICIALES
(Cerrado a 31 de marzo de 2014)**

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1	MARAVAR SANCHEZ ANGEL	5238415	01/09/1960	20 11 18	20 11 18	11/11/1985	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CAZORLA (JAEN)
2	VILLALIBRE BERCIANO MARIA BEGOÑA	10184692	07/02/1961	20 2 1	20 2 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 PALENCIA
3	PEREZ IZQUIERDO ENCARNACION	24238903	14/10/1967	20 2 1	20 2 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SANTA FE (GRANADA)
4	PEREZ ARNAL MARIA PILAR	25147083	19/06/1966	20 2 1	20 2 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL HUESCA
5	GONZALEZ TEJEDOR MARIA DEL VALLE	12745990	05/05/1966	20 2 1	20 2 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 PALENCIA
6	MARTINEZ MARTIN MARIA VICTORIA	9293104	16/08/1965	20 2 1	20 2 1	01/02/1994	C.U.	JDO. DE LO PENAL PALENCIA
7	ESCUDERO PUGA MARIA DOLORES	27515610	17/08/1963	19 0 18	19 0 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SANTA FE (GRANADA)
8	ANDRES CARRAMIÑANA GEMMA LIDIA	16804127	04/08/1969	19 0 18	19 0 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SORIA
9	ORTEGA VILLAREJO SANTIAGO JESUS	6228394	06/02/1964	19 0 18	19 0 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
10	JARAMILLO HERNANDEZ ANTONIO	7852210	18/05/1964	19 0 18	19 0 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ZAMORA
11	GONZALEZ VERA INMACULADA	26009520	13/07/1967	19 0 18	19 0 18	13/03/1995	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 JAÉN
12	VIDAL-ARAGON DE LA FUENTE LUIS	8779903	28/08/1958	17 9 7	17 9 7	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ)
13	GIL SANTOS MARIA DEL CARMEN	6963000	14/04/1957	17 9 7	17 9 7	25/06/1996	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)
14	MALDONADO VILLEGAS MARIA DEL CARMEN	8910887	10/10/1969	17 1 17	17 1 17	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 EL EJIDO (ALMERIA)
15	CASTILLO IZQUIERDO JOSE ANTONIO	25991570	17/05/1965	17 1 17	17 1 17	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ÚBEDA (JAEN)
16	ULLAN SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	7954921	29/10/1969	17 1 17	17 1 17	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA)
17	IGLESIAS REFOYO MARIA BELEN	11944197	17/08/1967	17 1 17	17 1 17	17/02/1997	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
18	LARA DEL RIO JESUS	36933906	07/02/1959	17 1 17	17 1 17	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 RONDA (MALAGA)
19	BELLAMY MANZANO LUIS JUAN	52266992	03/10/1969	17 1 17	17 1 17	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)
20	MATEOS MEDIERO MARIA DEL CARMEN	7961002	21/06/1969	17 1 14	17 1 14	17/02/1997	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN PIEDRAHÍTA (AVILA)
21	LOPEZ ROMERA MARIA LORETO	23792327	10/07/1969	14 10 11	14 10 11	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CABRA (CORDOBA)
22	GARCIA GARRIDO Mª IRENE	30537479	26/07/1969	14 10 11	14 10 11	20/05/1999	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 CÓRDOBA
23	MARTINEZ GONZALEZ RAQUEL	32873303	30/05/1969	14 10 11	14 10 11	20/05/1999	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 GIJÓN (ASTURIAS)
24	PALACIOS MUÑOZ FRANCISCO	75668554	26/09/1953	13 8 25	13 8 25	06/07/2000	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 POSADAS (CORDOBA)
25	AZALDEGUI GARMENDIA AITZIBER	15254446	14/09/1971	12 11 17	12 11 17	16/04/2001	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES IRUN (GIPUZKOA)

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
26	RODRIGUEZ GARCIA RAQUEL	11819887	14/06/1971	12 11 17	12 11 17	16/04/2001	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 MÓSTOLES (MADRID)
27	GARCIA-QUIJADA MORAIS IGNACIO	10873188	17/06/1972	12 11 17	12 11 17	16/04/2001	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 GRADO (ASTURIAS)
28	MUÑOZ LOPEZ FERNANDO	6927264	09/05/1948	12 8 6	12 8 6	26/07/2001	C.U.	
29	ALONSO GONZALEZ MARIA JOSE	10887159	28/06/1973	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 AVILÉS (ASTURIAS)
30	LUSA SOBRON NURIA	15258333	28/02/1973	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
31	SANCHEZ MARTIN ISABEL MARIA	8927006	29/03/1973	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ARANJUEZ (MADRID)
32	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	27525506	01/03/1972	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALMERÍA
33	ALONSO FERNANDEZ ANGEL	10892710	04/04/1974	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 GIJÓN (ASTURIAS)
34	SANMARTIN BENITO MARIA LUISA	70980101	16/03/1973	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
35	ROMAN ALCARAZ MARIA JOSE	4589352	09/04/1972	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CUENCA
36	TORBIO LOPEZ MONICA	2889407	19/08/1974	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ELDA (ALICANTE)
37	TORRECILLAS VIDAL ENRIQUETA	24255007	20/01/1969	11 11 24	11 11 24	09/04/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 LINARES (JAEN)
38	NEVADO ROMERO BIENVENIDO	5889161	01/07/1957	11 10 6	11 10 6	27/05/2002	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
39	JIMENEZ DE LA TORRE VICENTE	50182757	13/06/1974	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 CÓRDOBA
40	SAMANIEGO SANCHEZ NATALIA	74641695	30/06/1975	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTA FE (GRANADA)
41	LOPEZ ARIAS RAQUEL	9749142	08/03/1964	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
42	ROBLES GOMEZ MARIA GRACIA	26006860	20/02/1968	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MARTOS (JAEN)
43	SILES MONSERRAT CARMEN MARIA	44350851	08/02/1974	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 CÓRDOBA
44	PADILLA RODRIGUEZ MANUEL	25993404	30/03/1969	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LINARES (JAEN)
45	LOPEZ BAUTISTA MARGARITA	44389029	18/05/1976	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ALBACETE
46	CAPOTE PINO MARIA JOSE	31690924	06/02/1975	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ)
47	PEDRO SANZ MARIA DEL CARMEN DE	77071218	22/07/1950	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 IGUALADA (BARCELONA)
48	MONTERO LAVADO ANDRES MANUEL	28519785	30/11/1956	11 1 13	11 1 13	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 SEVILLA
49	ALBIZU MORENTIN JOAQUIN	8900823	24/07/1958	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	SJ UPAD COMPATIBILIZA CON SCPGE (2237) UPAD G3 ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS TOLOSA (GIPUZKOA)
50	CURADO DANA JUAN DIONISIO	28342245	29/10/1950	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 UTRERA (SEVILLA)
51	PEÑA PEREZ MARINA DE LA	72123228	24/06/1964	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 SANTANDER (CANTABRIA)
52	VEGA MARTIN TOMAS DE	29757790	02/08/1962	11 1 13	11 1 13	20/02/2003	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 HUELVA

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
53	VALENCIA SALINAS MARIA ELENA	31239499	11/07/1961	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
54	SERNA RAMOS ELISA	28928253	16/10/1975	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 SEVILLA
55	IBAÑEZ ORTEGA BEGOÑA	44273632	17/08/1974	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 CÁDIZ
56	BLAS ORTEGA JULIO CESAR DE	9336048	03/01/1973	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA (SEGOVIA)
57	GOMEZ MARTINEZ MARIA DOLORES	45593978	20/01/1976	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ALMERÍA
58	BOSSINI RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	45583432	27/03/1975	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 ALMERÍA
59	PEREZ GONZALEZ ANA ROSA	10837674	14/04/1964	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 GRADO (ASTURIAS)
60	BELMONTE BRAVO YOLANDA	11429455	25/03/1972	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 AVILÉS (ASTURIAS)
61	MALDONADO BALLESTER ANA ISABEL	34805702	14/11/1972	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 ORIHUELA (ALICANTE)
62	DE DOMINGO GRACIA NOEMI	20193766	06/02/1972	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 SANTANDER (CANTABRIA)
63	LOPEZ SANCHEZ SEBASTIAN ANTONIO	29097101	04/10/1967	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ORIHUELA (ALICANTE)
64	DOMINGUEZ GONZALEZ ANGELA	29050508	03/09/1970	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 SEVILLA
65	SANCHEZ CARABIAS MIGUEL ANGEL	7829230	20/08/1959	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PLASENCIA (CACERES)
66	TENA RUBIO MANUEL DE	8668182	06/04/1949	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 DOS HERMANAS (SEVILLA)
67	FERNANDEZ SIMON MILAGROS DEL CARMEN	6960947	17/10/1956	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 SANTANDER (CANTABRIA)
68	BALLABRIGA CASES MARIA PILAR	78147711	19/10/1954	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SOLSONA (LLEIDA)
69	MANRIQUE CABRERO JOSE CARLOS	3427963	17/02/1959	10 0 4	10 0 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 GIJÓN (ASTURIAS)
70	VILLANUEVA RODRIGUEZ MARTA	10880743	29/11/1975	9 11 4	9 11 4	29/03/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SIERO (ASTURIAS)
71	DIAZ CALLEJON MARIA ANGELES	7502003	15/09/1970	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ALCOBENDAS (MADRID)
72	MARTIN ANDRES RAQUEL	9796920	27/09/1974	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 PONFERRADA (LEON)
73	GARCIA GARCIA MARIA JOSE	28781741	21/06/1978	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
74	CUARTERO ORTIZ MARTA	44396939	28/05/1978	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ALBACETE
75	SANZ VALDES SUSANA	7248395	14/11/1975	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 MAJADAHONDA (MADRID)
76	SANCHEZ PEÑA ELENA CARMEN	26465230	29/08/1963	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ÚBEDA (JAEN)
77	BLANCO POLAINO MACARENA	26040634	24/04/1977	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 CÓRDOBA
78	NUÑEZ ABELEDO MARIA JOSE	33306035	03/10/1966	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 LUGO
79	RUIZ HERNANDEZ CINTA	29788291	05/07/1974	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 HUELVA
80	SEBASTIAN MAGDALENO MARIA NOELIA	12386420	23/01/1972	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CUÉLLAR (SEGOVIA)
81	REDONDO VERDIAL MARIA ENCINA	44431152	01/10/1975	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 A CORUÑA
82	MAYANS LOPEZ ROSA MARIA	44281190	21/11/1974	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
83	QUINTAS ALVAREZ JAVIER	32880776	28/07/1975	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LANGREO (ASTURIAS)
84	GARCIA SOTO JUANA	75097192	01/08/1978	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ANDÚJAR (JAEN)
85	CRESPO ARCE PATRICIA	9415293	24/08/1973	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LANGREO (ASTURIAS)
86	PELLITERO BLANCO JOSE ALBERTO	7234480	23/08/1969	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LAVIANA (ASTURIAS)
87	LUDEÑA BENITEZ OSCAR DANIEL	46836744	06/10/1976	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
88	QUINTAS ALVAREZ MARIA ANGELES	32880775	27/06/1973	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO LEÓN
89	JIMENEZ POSTIGO MARIA BELEN	25684561	27/02/1975	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 MÁLAGA
90	RUIZ RUIZ NURIA	52384664	05/08/1975	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MÓSTOLES (MADRID)
91	BRICEÑO GONZALEZ MARIA DEL MAR	831554	03/03/1971	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 MADRID
92	PEREZ SANCHEZ CRISTINA	50098584	08/03/1974	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TOLEDO
93	MARTIN RINCON MARIA NIEVES	50076547	24/06/1972	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
94	NAVAS ARROYO FERNANDO	50440010	02/05/1969	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MAJADAHONDA (MADRID)
95	ARISPON PACO MARIA DOLORES	75432267	29/03/1968	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 HUELVA
96	ROMERO GIL MARIA JESUS	80050454	05/09/1971	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	SJ UPAD ORG.COL.AP Y SJ SEC. PENAL en SCE (2175) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MÉRIDA (BADAJOZ)
97	VIZCARRO CEREZO AMELIA	30837369	19/07/1977	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 POZOBLANCO (CORDOBA)
98	SOLA SEBASTIAN MARIA PENELOPE	52986537	27/01/1974	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 BENIDORM (ALICANTE)
99	PEREZ VERGARA SANTIAGO	29012370	19/09/1973	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TORREVIEJA (ALICANTE)
100	VAAMONDE FERNANDEZ JOSE MANUEL	33250326	12/12/1961	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 NOIA (A CORUÑA)
101	ORZAEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL	24198306	07/09/1964	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ÚBEDA (JAEN)
102	BALDASANO SUPERVIELLE MARIA ESTHER	2194058	26/04/1955	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SAN FERNANDO (CADIZ)
103	VALERO SANCHEZ CARMEN	24767419	16/01/1950	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 10 MÁLAGA
104	ALMEIDA GONZALEZ MARIA ISABEL	6521147	11/11/1952	9 8 19	9 8 19	14/07/2004	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 COLLADO VILLALBA (MADRID)
105	COLMENERO DIAZ ROSA MARIA	26040399	19/04/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VÉLEZ-MÁLAGA (MALAGA)
106	RAMIREZ TOVAR MARÍA ISABEL	45594961	12/07/1977	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ALMERÍA
107	TORRES GARCIA JESUS MARIA	30942999	19/02/1977	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 CÓRDOBA
108	MORENO MORENO RAQUEL	75708090	23/11/1978	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 POZOBLANCO (CORDOBA)
109	COTOBAL MARTIN ESTEFANIA	7980272	26/11/1974	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 OURENSE
110	NEVADO TORRES SOLEDAD	5916930	07/03/1975	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
111	CARANDE CAMENO CECILIA	27318690	02/06/1974	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 SEVILLA
112	LAGO RIVERO MARIA	76997576	06/01/1974	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 VIGO (PONTEVEDRA)

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
113	ALVAREZ MENENDEZ CRISTINA	10899142	02/01/1975	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SIERO (ASTURIAS)
114	CASAÑ ARANDIGA VICENTA MARIA	20153720	31/07/1971	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TORRENT (VALENCIA)
115	SANCHEZ CASTRO MANUEL ALEJANDRO	2541585	17/06/1974	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALCOBENDAS (MADRID)
116	ALVAREZ ARCE MARTA	9432880	25/05/1977	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SIERO (ASTURIAS)
117	TRIJUEQUE SERRANO DAVID	3120069	28/04/1978	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 GUADALAJARA
118	LORENZO ALVAREZ MARIA ANGELES	52614863	25/09/1971	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN LLANES (ASTURIAS)
119	MORALEJA LEON MARIA JOSE	2248682	02/07/1973	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LEGANÉS (MADRID)
120	MARTINEZ HERNANDEZ ELENA	48340417	25/11/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	
121	REPRESA GARAZO MARIA LUISA	36115789	04/09/1972	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 VIGO (PONTEVEDRA)
122	MANSILLA REDONDO ANA BELEN	5680511	20/04/1978	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 ELCHE/ELX (ALICANTE)
123	MORENO MARTIN SUSANA	50828144	23/01/1967	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ILLESCAS (TOLEDO)
124	MARTIN MARTIN VEGA MARIA	28754838	27/08/1977	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 DOS HERMANAS (SEVILLA)
125	POUSA BLASCO CRISTINA REMEDIOS	5417347	08/11/1969	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 MADRID
126	MANUEL SANCHEZ RAQUEL	48480003	12/12/1978	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ORIHUELA (ALICANTE)
127	RUIZ DE LA CUESTA MUÑOZ MARIA ANGELES	33448865	02/03/1974	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
128	RAMOS BLAZQUEZ ALFREDO	12399460	28/12/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 LUGO
129	TORRES SUAREZ LAURA	52779427	25/09/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 BENIDORM (ALICANTE)
130	SANCHEZ MARTINEZ ALBERTO JUAN	48393005	09/05/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ELCHE/ELX (ALICANTE)
131	SAN JOSE BARRANCO JUAN ALBERTO	26011643	03/09/1970	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LINARES (JAEN)
132	DELGADO MARZAN REBECA	32823052	22/01/1973	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 A CORUÑA
133	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	53693052	27/02/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 MÁLAGA
134	GARCIA DE LA MORENA GISELA	50108224	11/03/1977	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ARGANDA DEL REY (MADRID)
135	GARCIA RODRIGUEZ NOELIA	9432724	18/04/1974	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MIERES (ASTURIAS)
136	LOPEZ FERNANDEZ SUSANA	46849362	28/12/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 VALDEMORO (MADRID)
137	JIMENEZ DELGADO ANA	2545555	06/02/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
138	MURILLO EDO MARTA CARMEN	25471932	24/06/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
139	RUBIO DOMINGO CRISTINA	13166780	23/11/1976	8 8 14	8 8 14	19/07/2005	C.U.	SJ SEC. CIVIL/CA/SOC (2365) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
140	DE BENITO GONZALEZ Mª PILAR	36948970	30/08/1949	7 5 1	7 5 1	19/06/1991	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 GRANOLLERS (BARCELONA)
141	OJEDA SÁNCHEZ FRANCISCO CESAR	28900764	25/07/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 SEVILLA
142	JUAN SALVA PAULA CRISTINA	43046167	17/11/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
143	HOMPANERA GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ	33918517	08/07/1966	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 10 BARCELONA
144	NARANJO MILLÁN ANA MARÍA	37287025	05/06/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SECCION Nº 5 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
145	ORTIZ CRUZ FRANCISCA	50068610	08/08/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 MÁLAGA
146	MARTÍN RIVAS MARÍA LUZ	29078888	13/06/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 MÁLAGA
147	BRUNET SANTOS SERGIO	45463577	27/04/1970	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 42 BARCELONA
148	MAESTRE FUENTES CRISTINA	35109600	26/07/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SECCION Nº 9 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
149	GIL PASCUAL JUAN CARLOS	33479163	03/11/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ELCHE/ELX (ALICANTE)
150	MARTÍNEZ ROMERO APOLONIA	46548498	21/10/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 28 BARCELONA
151	ALONSO FRUTOS MARÍA BELÉN	13759145	10/01/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 TORRELAVEGA (CANTABRIA)
152	MARTÍNEZ-BLANCO ALONSO MARÍA DEL PILAR	70163839	02/01/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 COSLADA (MADRID)
153	BASOREDO CUADRA MARÍA BELÉN	71699107	10/11/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 BARCELONA
154	BUSTAMANTE LORENZO MARÍA DEL CARMEN	9775057	17/09/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
155	MOROTE ALBERT VÍCTOR MANUEL	21481954	05/07/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (LAS PALMAS)
156	BOGUÑA PACHECO MARÍA ISABEL	22530103	18/08/1958	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 VALENCIA
157	CANTADOR MORENO JOSÉ MIGUEL	30521008	28/09/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 CÓRDOBA
158	SERRATS PALAU JUAN	36513990	06/08/1961	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MATARÓ (BARCELONA)
159	CANET LORENTE MARÍA INMACULADA	38495408	05/05/1961	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 20 BARCELONA
160	CASAS ARANDA MARÍA BELÉN	24239173	24/06/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 GUADIX (GRANADA)
161	IBÁÑEZ SÁNCHEZ RAQUEL	19848211	21/03/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TORRENT (VALENCIA)
162	SÁNCHEZ SÁNCHEZ SILVIA	5423310	28/03/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALCOBENDAS (MADRID)
163	GONZÁLEZ AMORRICH PABLO	43443147	27/03/1974	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA)
164	ARMARIO PÉREZ JUAN	28689248	07/01/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LEBRIJA (SEVILLA)
165	BAZÁN SÁNCHEZ ILDEFONSO	31649914	29/03/1966	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)
166	MONLLOR GISBERT MARÍA INMACULADA	42080623	28/07/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
167	SUÁREZ MEDINA AMPARO	24194816	12/11/1962	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TORREMOLINOS (MALAGA)
168	ABAD ROLLAND MARÍA ALZIRA	9378299	21/02/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 EIVISSA (BALEARES)
169	MÉNDEZ MONTERO JOSEFINA	32755395	04/05/1961	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 8 A CORUÑA
170	MARTÍNEZ CASADO ALBERTO	37283280	23/09/1960	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 BARCELONA
171	ROLDÁN LÓPEZ ENRIQUE	52311714	06/01/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
172	VALLS SORIANO JOSÉ MARÍA	37733523	12/11/1958	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 BARCELONA

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
173	MARTÍNEZ MARÍN FRANCISCO JAVIER	7538750	12/10/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN LA RODA (ALBACETE)
174	RODRÍGUEZ VÍBORA JUANA ARACELI	25067834	13/02/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 FUENGIROLA (MALAGA)
175	MORENO BERNAL FRANCISCO	31646093	14/02/1966	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN FERNANDO (CADIZ)
176	OBÓN DÍAZ ALBERTO	25172839	28/01/1973	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 LLEIDA
177	GUBERN VIVES ANTONI	33884587	13/11/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 SABADELL (BARCELONA)
178	RUIZ FERRER BELÉN	2548336	04/10/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
179	RUIZ PRADO FRANCISCO JAVIER	25157325	17/07/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 LLEIDA
180	GÓMEZ DÍAZ-PINES OLGA	46342414	04/11/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TORRELAVEGA (CANTABRIA)
181	SANDALINAS ADELANTADO FRANCISCO JAVIER	36975220	17/01/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 6 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA BARCELONA
182	SÁNCHEZ RAMOS Mª SANTÍSIMA TRINIDAD	2221358	09/04/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PARLA (MADRID)
183	RALLO ANDREU JUAN PEDRO	72965431	21/01/1973	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TERRASSA (BARCELONA)
184	MENÉNDEZ BARBES MARÍA INÉS	9364883	16/09/1962	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SIERO (ASTURIAS)
185	DÍEZ ANTOLÍN VÍCTOR	12748959	10/09/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PONFERRADA (LEON)
186	GARCÍA SALAS MARÍA LUISA	51632211	07/05/1959	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
187	PARRA BUENO NURIA	38508891	09/11/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 BADALONA (BARCELONA)
188	ZUBIZARRETA GARCÍA SILVIA	16274768	21/09/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JEF. SEC. CIVIL/CA/SOC (2020) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
189	PEÑACOBIA PÉREZ MARÍA JOSÉ	52401526	02/10/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 27 BARCELONA
190	MORÓN ALIAGA ESPERANZA	25431571	19/12/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 REUS (TARRAGONA)
191	NOGALES PÉREZ FRANCISCA	28672172	09/01/1958	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 DOS HERMANAS (SEVILLA)
192	JORGE MARTÍN MARÍA DE LAS NIEVES	6583378	11/03/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 HUELVA
193	VILLALTA SÁNCHEZ HELENA	50090019	16/07/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 COLLADO VILLALBA (MADRID)
194	MERINO MARCEÑIDO JUANA	28938118	19/12/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 BADAJOZ
195	MIR FRESNEDA DAMIÁN	35091405	03/04/1966	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 TARRAGONA
196	CARASA ANTÓN GUSTAVO ALDOLFO	13149381	12/10/1970	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
197	CEJUDO PODIO MARÍA LLANOS	27462388	18/02/1966	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ORIHUELA (ALICANTE)
198	CASADO FERRO SONIA MARÍA	7250995	02/02/1975	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
199	LÓPEZ GUTIÉRREZ MARÍA LOURDES	33927714	27/07/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 BADALONA (BARCELONA)
200	BALLESTER SÁNCHEZ MÓNICA AMPARO	20165235	14/04/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MONCADA (VALENCIA)
201	BUENDÍA HERRERA BEGOÑA	4579530	27/12/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 GETAFE (MADRID)
202	MACÍAS RODRÍGUEZ CRISTOBAL	43657518	18/12/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TELDE (LAS PALMAS)

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
203	HERRERO SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL	28701592	30/10/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CARMONA (SEVILLA)
204	SANTAMARÍA ABARZUZA EDUARDO	13303595	30/04/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	DIRECTOR (2015) SERVICIO COMÚN PROCESAL GRAL Y DE EJECUCIÓN IRUN (GIPUZKOA)
205	BIEN GARCÍA JORGE DEL	7971493	18/06/1973	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN VILLALPANDO (ZAMORA)
206	DEL RÍO BARRIO ALEJANDRO	3458751	05/07/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)
207	SAEZ FIGUEROA PURIFICACIÓN	5371767	28/02/1961	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 GETAFE (MADRID)
208	CANON FRÍAS MANUEL	24153564	19/04/1958	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 MÁLAGA
209	MAYLLO GARCÍA GLORIA	2527415	01/06/1961	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
210	TORIBIO VIÑUELA ROSA MARÍA	11947159	05/03/1970	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
211	RODRÍGUEZ MELLADO ÓSCAR	50445815	20/03/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LENA (ASTURIAS)
212	MÉNDEZ DE LA VEGA CATALINA RAMONA	45428123	05/01/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 PONFERRADA (LEON)
213	GULLÓN GULLÓN ANA MARÍA	28599756	20/03/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CARMONA (SEVILLA)
214	MARTÍNEZ LÓPEZ LUIS FELIPE	46730518	11/03/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
215	SAENZ ABUJETA SALVADOR	25055148	29/03/1963	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TORREMOLINOS (MALAGA)
216	SALAR ANDREU ANTONIO RAMÓN	33479303	26/08/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ELCHE/ELX (ALICANTE)
217	VELASCO GARCÍA-PLATA FRANCISCO	33923645	21/10/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA
218	CARBALLO VEGA MARÍA LUZ	11428023	14/08/1970	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 BARCELONA
219	CAÑETE CARMONA SILVIA	38102599	23/09/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 BARCELONA
220	EISMAN CURTO ANA MARÍA	29100548	19/06/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 25 BARCELONA
221	TEJERO BLANCO MARÍA TERESA	43434244	01/10/1973	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 MATARÓ (BARCELONA)
222	GUTIÉRREZ AUGUSTO MARÍA PASTORA	27306440	22/11/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 HUELVA
223	GONZÁLEZ PENA MARÍA RITA	10864907	19/08/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LENA (ASTURIAS)
224	ARANA TAMAYO CRISTINA	11916849	27/03/1964	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD SOCIAL (2425) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
225	GALÁN GUTIÉRREZ ANA MARÍA	12758124	09/08/1970	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 COLLADO VILLALBA (MADRID)
226	SARACIBAR FELIP MARÍA ELENA	39693964	14/06/1955	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
227	GARCÍA FIGUERAS MARÍA ESPERANZA	46400648	27/04/1962	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SECCION Nº 7 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
228	JIMENO ÁLVAREZ HERIBERTO	9807963	23/11/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 LOGROÑO (LA RIOJA)
229	GREGORIO SÁNCHEZ MARÍA TERESA	7541175	16/03/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CASAS-IBÁÑEZ (ALBACETE)
230	CASTELLANO VÁZQUEZ CARMEN LUCÍA	50183759	05/04/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 MATARÓ (BARCELONA)

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
231	REDONDO CABANAS MARÍA CRUZ	46699424	11/04/1975	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 BADALONA (BARCELONA)
232	MORALES ESPEJO MARÍA DEL CARMEN	74630248	14/12/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LOJA (GRANADA)
233	ALFARO ROJAS ANA MARÍA	28907618	06/06/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
234	MARTÍN PASCUAL ESTHER	13153919	09/10/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
235	TOFIÑO PADRINO ALEJANDRO	53138381	02/08/1977	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PARLA (MADRID)
236	SAINT-MARC GUTIÉRREZ JAVIER	9762241	06/05/1968	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 VILLARREAL/VILA-REAL (CASTELLON)
237	JIMÉNEZ CRESPO BASILIA	3103234	07/12/1970	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 GUADALAJARA
238	NAVARRO ROBLES ANTONIO	52202076	08/12/1967	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SECCION Nº 20 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
239	LACUEVA BERTOLACCI RODRIGO	38145032	06/08/1974	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)
240	ALCALÁ COIRADA LIDIA	44044281	11/11/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 CÁDIZ
241	PUENTE ARRATE MARÍA LUISA DE LA	42865170	16/11/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
242	LEÓN HERRERA ANTONIO MIGUEL	24176648	22/02/1962	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
243	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ CELIA	696650	31/10/1975	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
244	LEÓN FREIJEIRO CAROLINA	33409094	01/04/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PATERNA (VALENCIA)
245	EZCURRA ATAYDE VERÓNICA	25419396	11/03/1973	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 COLMENAR VIEJO (MADRID)
246	LÓPEZ RIBAGORDA DAVID	8947209	31/08/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PARLA (MADRID)
247	DE LA FUENTE ARRIBAS MÓNICA	13304317	03/03/1973	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
248	GOZALO DELGADO MARÍA SONIA	13152427	03/12/1972	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD CONTEC. ADMVO (2430) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS
249	ZAPATERO GARCÍA JULIA	2546574	27/12/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
250	SANTAMARÍA GUTIÉRREZ MÓNICA	13142661	14/03/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
251	MARTÍNEZ MORENO JOSÉ	26741099	22/03/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 FUENGIROLA (MALAGA)
252	DELTORO BARRERO LAURA	52727243	31/05/1971	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 MONCADA (VALENCIA)
253	ROMERAL GIL JULIO	4159908	06/04/1962	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 MÓSTOLES (MADRID)
254	DURÁN BAÑOS MARÍA ISABEL	50168077	12/09/1966	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 VALDEMORO (MADRID)
255	MARTÍ PÉREZ JUAN FRANCISCO	19894509	30/04/1965	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 PATERNA (VALENCIA)
256	PÉREZ-NAVARRO ROMERO ADELAIDA	2912286	16/05/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 TARRAGONA

Secretarios Judiciales con la Tercera categoría consolidada

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nombr.	Cuerpo procedencia	Destino
257	FRUCTUOSO GONZÁLEZ IVÁN	46701815	09/12/1975	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 SABADELL (BARCELONA)
258	CABAÑAS PULIDO MARÍA REYES	28485926	16/08/1969	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD 1º INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
259	FERNÁNDEZ MÉRIDA RAÚL	13162573	25/07/1975	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD G3 COMPATIBILIZA CON DIRECTOR SCPG (2236) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES BALMASEDA (BIZKAIA)
260	GIL SARRO ANA MARÍA	53133395	06/07/1976	5 8 4	5 8 4	28/07/2008	C.U.	SJ UPAD 1º INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL

**ESCALAFÓN DE SECRETARIOS JUDICIALES
(Cerrado a 31 de marzo de 2014)**

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nombr.	Cuerpo procedencia	Destino
261	VERA LOPEZ MARIA BELEN	26035301	05/06/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 COLLADO VILLALBA (MADRID)
262	FERNANDEZ MERIDA OSCAR	71274009	21/08/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
263	CAO SANCHEZ MARIA CRISTINA	32831202	01/01/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
264	CAMINO PIÑA MARIA MAR	28742095	08/07/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE MENORES HUELVA
265	GOMEZ HERNANDEZ LUIS	7870464	18/08/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
266	ROMERO CASTILLO BEATRIZ	14625132	05/10/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 12 MÁLAGA
267	GIMENEZ PEREZ-CABRERO ANA	33498798	24/12/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 TORREVIEJA (ALICANTE)
268	BELLIDO HERNANDEZ SERGIO	29127205	15/03/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 LLEIDA
269	BLANCA BUENDIA MANUEL GABRIEL	77339741	23/09/1982	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MARTOS (JAEN)
270	ARMENGOT IBORRA JUAN FERNANDO	44861149	15/02/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 38 MADRID
271	HERNANDEZ MARZO LAURA	18441853	31/12/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TERUEL
272	ESCOURIDO PEREZ-SINDIN JUAN MANUEL	12403412	23/06/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 82 MADRID
273	CARRERA RAFAEL MARIA DEL CARMEN	36140382	18/02/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TUI (PONTEVEDRA)
274	MORENO CHICO MARIA ELENA	47710223	26/06/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 9 BARCELONA
275	HERNANDEZ BELTRAN ARTURO	21512538	29/01/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
276	LOZANO GARCIA MARIA JESUS	45659606	29/09/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)
277	VEGA GOMEZ RUTH GEORGINA	74842816	13/01/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ANTEQUERA (MALAGA)
278	VALES IGLESIAS MARIA ROSA	20173652	28/02/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 BARAKALDO (BIZKAIA)
279	MARTIN GARCIA CRISTINA	12389027	24/02/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN TORO (ZAMORA)
280	FUENTES ZAMORA NATALIA	20164243	09/09/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 CATARROJA (VALENCIA)
281	DE CASTRO MEJUTO SAUL JAVIER	46898112	18/05/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MARBELLA (MALAGA)
282	REVILLA RESTEGUI MARIA ANGELES	20198871	02/08/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TORRELAVEGA (CANTABRIA)
283	ESTEBAN HERNANDEZ ALICIA	7505201	15/05/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
284	JARNE CORRAL PAULA	18168204	10/11/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 LLEIDA
285	GRACIA GUERRERO MARIA JESUS	3882458	19/05/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TOLEDO

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
286	ARAGO TUR MARIA AMPARO	20033245	27/09/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SUECA (VALENCIA)
287	GIL MARTINEZ LAURA	23269468	12/03/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 LORCA (MURCIA)
288	PALLARES MARTINEZ LETICIA	34828735	29/11/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ORIHUELA (ALICANTE)
289	VAZQUEZ SOTO ANTONIO	34899936	18/12/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
290	BARNES SANCHEZ MARIA DE LAS HUERTAS	23277398	03/05/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 LORCA (MURCIA)
291	VALENZUELA ESCUDERO GABRIELA PURIFICACION	26969852	29/01/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LUCENA (CORDOBA)
292	MEANA DEL CASTRO SUSANA	10887761	20/09/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 5 BARCELONA
293	GOMEZ MARTIN MARIA	74661655	07/08/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 GUADIX (GRANADA)
294	BUENO SANTANA ELENA	46745169	07/09/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 17 BARCELONA
295	FERNANDEZ TORRUELLA TERESA	46624757	28/05/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
296	CREUS PORTAS NURIA	18170376	05/05/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TUDELA (NAVARRA)
297	GONZALEZ GARCIA SONIA	44909021	27/05/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)
298	LOPEZ CANO FRANCISCA	40346843	30/12/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 GIRONA
299	MARTOS NICIO MARIA ESTIBALIZ	72724795	03/01/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
300	GARCIA MATAS MIRIAM	70935209	16/11/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
301	ZORNOZA ARANA EMILIO JOSE	52535901	30/11/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 GETAFE (MADRID)
302	BUJANDA ABADIA RAQUEL	16585597	25/02/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 LLEIDA
303	SANCHEZ GARCIA BLANCA SOFIA	26037328	15/05/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LINARES (JAEN)
304	SOLETO CURIEL RAQUEL	50205788	14/12/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 6 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
305	MURIEL PLAZA MARIA	28968948	31/05/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
306	LUQUERO DIEZ ARACELI	71125771	23/11/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 BENAVENTE (ZAMORA)
307	VELA PEREZ JOSE	46848305	31/03/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 6 BARCELONA
308	BRU MEDINA DIANA	28788672	26/02/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ÉCIJA (SEVILLA)
309	DE LA CRUZ GONZALEZ ESTHER	71103721	21/08/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
310	GONZALEZ VOCES CELSO	10082667	08/02/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 BADALONA (BARCELONA)
311	FERNANDEZ DAVILA CAROLINA	9026264	09/07/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 ARGANDA DEL REY (MADRID)
312	HARO FERNANDEZ LUCIA	53102080	01/07/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 FUENLABRADA (MADRID)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
313	RIPOLL ROS ALEJANDRA ELENA	46141490	04/11/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 BARCELONA
314	IZQUIERDO LUENGO MIGUEL ANGEL	50100721	29/01/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 NAVALCARNERO (MADRID)
315	NAVAZA RIGUEIRA PATRICIA	76624273	17/12/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN PRAVIA (ASTURIAS)
316	SANCHEZ LUCENA ROBERTO	74661765	03/11/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 GETAFE (MADRID)
317	MARQUEZ DE PRADO MORAGUES LUIS	44632085	05/12/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SECCION Nº 1 AUDIENCIA PROVINCIAL PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
318	SECADES RIESTRA CRISTINA	9432920	09/09/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
319	LACASTA BERGUA FERNANDO	25170340	05/06/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 REUS (TARRAGONA)
320	PALOMER BOU MONTSERRAT	77916210	26/08/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MATARÓ (BARCELONA)
321	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA	23256375	24/11/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LORCA (MURCIA)
322	IBAÑEZ MORENO FRANCISCO JAVIER	46706694	28/12/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	REG.CIVIL UNICO O EXCLUS. BARCELONA
323	VELAZQUEZ TAVERA INES	7862295	07/04/1966	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 11 BARCELONA
324	VARELA GARROTE PAULA	76411619	07/06/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 A CORUÑA
325	FERNANDEZ MATAS MARIA DEL CARMEN	7865608	18/12/1966	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MAHÓN (BALEARES)
326	VILLAR MENDEZ CRISTINA	44472492	19/01/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 OURENSE
327	PIÑAN SUAREZ SERGIO	10897021	27/04/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 BILBAO (BIZKAIA)
328	MARTOS MENDOZA LOURDES	75766398	24/04/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ)
329	SEGOVIA ALBARAÑEZ MARIA JOSE	29184671	15/03/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 SUECA (VALENCIA)
330	FABREGAT GORRO MARIA	44999827	17/03/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TERRASSA (BARCELONA)
331	RODRIGUEZ-SORIA PEREZ CARMEN	53540750	13/08/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCOBENDAS (MADRID)
332	ASENSIO-WANLOSELL GARCIA-CABAÑAS IGNACIO	2529438	31/07/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ARRECIFE (LAS PALMAS)
333	GAGO LOZANO SARA	45686201	21/07/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA)
334	GONZALEZ BLANCO VERONICA	9319394	31/03/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SABADELL (BARCELONA)
335	GUERRERO QUIÑOZ YOLANDA	53081091	04/08/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 MARTORELL (BARCELONA)
336	CASTAÑO CASTAÑO OSCAR	50979623	03/05/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 MATARÓ (BARCELONA)
337	MARRODAN FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	4204576	04/07/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 COSLADA (MADRID)
338	SIOTA PEREZ RAQUEL	46793740	08/12/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
339	DUPUY MATEOS MARIA DE LA PALOMA	52537834	27/07/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 GETAFE (MADRID)
340	CARBONERAS TORNERO JESUS	74512898	14/10/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ARRECIFE (LAS PALMAS)
341	CARRETERO SALAS PEDRO PABLO	48352756	25/09/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
342	LAGUNA COLOMA JOSE ANTONIO	12403062	13/06/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ILLESCAS (TOLEDO)
343	GONZALEZ BARRIALES JUDIT	16568297	14/04/1971	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 LOGROÑO (LA RIOJA)
344	MENENDEZ MEDEL BELEN	10884918	23/09/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
345	SENDRA VERGAZ OLGA	29176480	15/11/1971	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 VILLARREAL/VILA-REAL (CASTELLON)
346	FRAILE MENDOZA RODRIGO	12407605	03/01/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 FERROL (A CORUÑA)
347	LOPEZ PORTILLO MARIA EMMA	9013024	08/12/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 GUADALAJARA
348	TORRAS BOBILLO MARIA DE LOS ANGELES	36160468	07/03/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 VIGO (PONTEVEDRA)
349	COSSIO ARRIBAS IGNACIO	44164953	24/08/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
350	GONZALEZ LUQUE MARIA INMACULADA	44036954	25/03/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ANDÚJAR (JAEN)
351	GARCIA VELASCO ROSA MARIA	46638574	07/10/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 13 BARCELONA
352	HOMAR RIERA JOANA MARIA	37341256	06/12/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MANACOR (BALEARES)
353	RAPOSO FERNANDEZ PATRICIA	9424759	25/10/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 PONTEVEDRA
354	EVANGELIO MORATO VERONICA	47030708	07/06/1982	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 LLÍRIA (VALENCIA)
355	PEREZ GALVEZ MARIA JESUS	48428740	15/10/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ORIHUELA (ALICANTE)
356	RIVAS IGLESIAS MARIA AURORA	48961336	06/08/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ALGECIRAS (CADIZ)
357	BARRIO MADRUGA MARIA LUISA	71262724	30/11/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD G3 ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS BERGARA (GIPUZKOA)
358	JERICO SOBREVELA MARIA BELEN	44875138	05/09/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CATARROJA (VALENCIA)
359	LORENZO ALVAREZ JESUS	76956682	20/07/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DÉNIA (ALICANTE)
360	ALVAREZ LOPEZ NOELIA	44433244	22/05/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 LUGO
361	LOPEZ AMAT ROSA MARIA	38851147	01/07/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MATARÓ (BARCELONA)
362	MARCOS GORDO MARIA DEL CARMEN	70867993	09/04/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CIUDAD REAL
363	LOSHUERTOS PUERTOLAS CARMEN	17750967	16/07/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)
364	GARCIA RODRIGUEZ MARIA ARANZAZU	51067981	20/05/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 7 MADRID
365	LOPEZ FERNANDEZ ANA BELEN	71428461	23/08/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CISTIerna (LEON)
366	FERNANDEZ GARCIA NURIA	71134469	21/11/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 MADRID
367	AYLLON ALONSO JUAN MANUEL	50726808	20/06/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BADALONA (BARCELONA)
368	GALERA GARCIA MARIA JOSE	45737009	16/01/1982	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MARBELLA (MALAGA)
369	ALVAREZ-BUYLLA NAHARRO VIRGINIA	71636871	03/05/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MIERES (ASTURIAS)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
370	GARCIA ARIZA MARIA DE LA LUZ	75241548	04/11/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILLACARRILLO (JAEN)
371	GONZALEZ CARRASCO ROSA MARIA	46681145	18/08/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 BARCELONA
372	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ROSA	10889719	26/06/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
373	MEDEL BERNARDO JORGE	16595333	14/07/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 LOGROÑO (LA RIOJA)
374	FERNANDEZ TORRES MARIA	48397953	23/12/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 UTRERA (SEVILLA)
375	ALCOLEA MADINAGOITIA BEATRIZ	50437108	26/04/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 ARGANDA DEL REY (MADRID)
376	SIERRA BANDRES MARIA EUGENIA	29119999	24/03/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CALATAYUD (ZARAGOZA)
377	MARTIN LOPEZ MARIA DE LAS MERCEDES	50086777	18/09/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCORCÓN (MADRID)
378	QUINTANILLA GARCIA MARIA TERESA	71340383	04/02/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD PENAL (2435) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
379	RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSANA	71504828	18/06/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN BECERREÁ (LUGO)
380	LOSARCOS GUTIERREZ MIGUEL	2642744	16/02/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
381	PEREZ ABAD MARIA TERESA	8946688	07/07/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 MÓSTOLES (MADRID)
382	GONZALEZ ARCE AIDA	72667806	22/01/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TAFALLA (NAVARRA)
383	VICIANA DURO MARIA CARMEN	53425054	12/02/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 26 BARCELONA
384	MEZQUITA RUIZ ISABEL	52644999	07/11/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 SUECA (VALENCIA)
385	SANTISO VAZQUEZ FERNANDO	32838801	09/05/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 A CORUÑA
386	MARTINEZ CANTON RAQUEL	75251271	19/01/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)
387	SEPULVEDA MONTEALEGRE VIRGINIA	3886167	09/10/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ILLESCAS (TOLEDO)
388	SETIEN REDONDO MARIA SONIA	9334707	08/10/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ARANDA DE DUERO (BURGOS)
389	TERRIZA ALONSO MARIA CRUZ	45084525	20/11/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MARBELLA (MALAGA)
390	MARTINEZ CANTALAPIEDRA EVA	9806815	29/01/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 PONTEVEDRA
391	CHAS ARES MARIA DEL MAR	32669307	08/11/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 FERROL (A CORUÑA)
392	CORDON MARQUES BEATRIZ	53044439	11/10/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TORRIJOS (TOLEDO)
393	ARELLANO MARTINEZ LAURO	71118536	15/10/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
394	EZQUERRA ROMERO MARIA PILAR	25667994	29/11/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
395	GARCIA SANCHEZ MARIA DEL PILAR	70880609	01/06/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MÉRIDA (BADAJOZ)
396	VEGA DEL DIEGO MARIA IVANA	12766467	17/10/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN LERMA (BURGOS)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
397	AGUILERA LARA MONTSERRAT	47450122	09/05/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
398	JIMENEZ LARA PATRICIA	44266002	19/10/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 FUENGIROLA (MALAGA)
399	PUIG GOMEZ FERNANDO	25416330	27/09/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MONCADA (VALENCIA)
400	NAVALON SANZ PAULA ROSA	22581459	24/08/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 LLÍRIA (VALENCIA)
401	LARIOS DIAZ VANESA	74675032	13/07/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ÓRGIVA (GRANADA)
402	RIBELLES GONZALEZ GABRIEL	44758241	21/04/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ELCHE/ELX (ALICANTE)
403	CABRERA GALLARDO MARIA DE LOS DOLORES	77320891	21/07/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ANDÚJAR (JAEN)
404	AGUILAR OSUNA FRANCISCO JOSE	79221090	16/09/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 CÓRDOBA
405	GARCIA CAMPO MANUELA	8986357	01/01/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ARGANDA DEL REY (MADRID)
406	CULIAÑEZ RIVES YOLANDA TERESA	45560308	14/08/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DÉNIA (ALICANTE)
407	PASCUAL HERNANDO MARIA BELEN	4195427	17/12/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 UTRERA (SEVILLA)
408	CAMARA DE DOMINGO NATALIA HENAR	3125956	23/12/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 GUADALAJARA
409	CORREAS CASTILLO VICTORIA DE LA ANTIGUA	50981198	24/07/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 COLMENAR VIEJO (MADRID)
410	PELET LAGRABA MIRIAM	25463936	12/06/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TUDELA (NAVARRA)
411	ESPINOLA PULIDO MARIBEL	30949853	17/05/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ÉCIJA (SEVILLA)
412	MORENO MEDINA MARIA DE LOS ANGELES	24261605	25/05/1971	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
413	CREMADES LOPEZ DE TERUEL FERNANDO JAVIER	20805877	30/07/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 DÉNIA (ALICANTE)
414	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO	48536267	06/07/1982	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DÉNIA (ALICANTE)
415	ROJAS ROSELLO IRENE	33464851	25/02/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MASSAGRELL (VALENCIA)
416	FANO DOMINGUEZ OIANA	78889903	11/05/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD 1º INST.E.INSTR GU2 (2420) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES GETXO (BIZKAIA)
417	HINOJAR MACHIN HECTOR	17741405	06/02/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TARRAGONA
418	GARCIA FERREIRA MARIA	50456359	16/12/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
419	NEGUERUELA LEDESMA PAULA	16592133	05/11/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ILLESCAS (TOLEDO)
420	LASO ORDOÑEZ TOMAS ANTONIO	33523541	24/05/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 NAVALCARNERO (MADRID)
421	MIRANDA ORTIZ DE LATIERRO EDURNE	17746519	05/06/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 TUDELA (NAVARRA)
422	ESCUDERO LOPEZ MARIA PILAR	7862733	09/10/1964	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 PLASENCIA (CACERES)
423	OSORIO GUERRERO RODRIGO	44432124	18/07/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 A CORUÑA
424	GARCIA ESTEO CRISTINA MARIA	44271335	08/03/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 10 BARCELONA
425	SOMOZA HERNANDEZ MARIA ESTHER	8031489	19/09/1969	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
426	PEREZ NUÑEZ BEGOÑA	24278493	14/07/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ÓRGIVA (GRANADA)
427	CAÑADA DORADO JOSE MANUEL	26008550	20/03/1970	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
428	PANIAGUA ACERA SARAI	46846689	29/04/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 VIGO (PONTEVEDRA)
429	CAJOTO BERDEAL ANA BELEN	33331814	02/09/1974	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
430	SANCHEZ ENTERO VERONICA	2916323	27/06/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
431	BLANCO SANCHEZ MARIA PILAR	36520099	30/04/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
432	CALVO MORENO VERONICA	72037445	05/12/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 8 MADRID
433	GARCIA MARTINEZ ALICIA	51069795	15/02/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 5 BARCELONA
434	ORERO ALBENIZ ANA BELEN	5424480	19/08/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 PARLA (MADRID)
435	DIAZ SAEZ RAUL	40352247	16/04/1982	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 FIGUERES (GIRONA)
436	RODRIGUEZ CAJAL JULIAN	25477871	23/03/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TARAZONA (ZARAGOZA)
437	COLORADO GAMEZ ELENA	30961791	23/07/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LUCENA (CORDOBA)
438	HENAO SOTO SANDRA	20267486	11/01/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 MÓSTOLES (MADRID)
439	ROMAN GARCIA ELENA	48480088	30/03/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 ORIHUELA (ALICANTE)
440	PERALTA DELGADO SARA MARIA	44586898	23/04/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 FUENGIROLA (MALAGA)
441	GONZALEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	48901182	29/04/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)
442	HUETE DIAZ MARIA DEL MAR	74657284	15/10/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALMUÑÉCAR (GRANADA)
443	DORADO VALLE ALICIA	34076206	10/05/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
444	BLANCO GALLEGU FATIMA	9792288	23/04/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 VIGO (PONTEVEDRA)
445	MAYO SANCHEZ INMACULADA	10203339	08/12/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 VIGO (PONTEVEDRA)
446	SALIDO RODRIGUEZ MARIA ROSARIO	30808257	26/05/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CORDOBA)
447	GARCIA PUIG JULIA	53202419	24/09/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 PATERNA (VALENCIA)
448	BAQUEDANO GARCIA RAQUEL	25180194	27/03/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA LLEIDA
449	VAZQUEZ ABADES MARIA TERESA	34626873	11/04/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
450	JIMENEZ GOMEZ MARIA ESTELA	4202197	08/03/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 SABADELL (BARCELONA)
451	LOPEZ DE CERVANTES VALENCIA DAVID	74649385	25/06/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 BENIDORM (ALICANTE)
452	MATEO PEREZ AMELIA	74861593	13/03/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 FUENGIROLA (MALAGA)
453	PEÑA NUÑEZ DAVID	53047653	07/02/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
454	SUAREZ GARCIA GERARDO	71550659	26/10/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 MARBELLA (MALAGA)
455	CASTRO SAURAS ALFREDO	25471790	05/10/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCAÑIZ (TERUEL)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
456	MORENO BLANCO MARIA ADELA	26219285	03/08/1972	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PATERNA (VALENCIA)
457	DOLS CHAZARRA MARIA	48364913	24/10/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
458	NUÑEZ PUERTA ESTIBALIZ	45483782	19/06/1975	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SORIA
459	SANCHEZ FERRER MARIA JESUS	75747916	31/12/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MARBELLA (MALAGA)
460	JIMENEZ GALVEZ MARIA SOFIA	48866266	30/09/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 OSUNA (SEVILLA)
461	RAMOS RENDO MIRIAM	16286435	04/02/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
462	FERNANDEZ NIETO JOSEFA	8935696	01/11/1969	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MÓSTOLES (MADRID)
463	OROZCO PANIAGUA MIGUEL ANGEL	79307339	23/01/1980	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MANACOR (BALEARES)
464	MBA CARCEDO PENELOPE	10905739	19/02/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES GETXO (BIZKAIA)
465	PAJARES SERNA BEATRIZ	71939271	25/05/1981	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 OURENSE
466	UBIERNA CORTES LUIS ALBERTO	72883064	08/11/1979	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 MATARÓ (BARCELONA)
467	ZURITA RUIZ EVA	45095454	14/11/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD 1ªINST.E.INSTR Y SJ JEF SEC PENAL en SCOP (2190) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
468	MARTINEZ GARCIA CRISTINA	71648513	24/04/1982	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MONDOÑEDO (LUGO)
469	PELAO MARCOS DANIEL	40336503	17/03/1978	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	SJ UPAD AUDIENCIA PROVINCIAL PENAL (2362) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO GIRONA
470	GONZALEZ MARQUEZ SILVIA CARMEN	51066957	18/12/1977	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
471	DE PABLO MARTIN MARIA DAMARIS	3462294	15/05/1973	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TORRELAVEGA (CANTABRIA)
472	FERNANDEZ CUESTA MARIA DEL MAR	44792590	31/07/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 VÉLEZ-MÁLAGA (MALAGA)
473	CAPILLA GALLEGO RAQUEL	44296448	11/11/1976	4 11 12	4 11 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ESTEPONA (MALAGA)
474	PAZO ESTEVEZ MARIA ELISA	36125108	01/12/1974	4 8 12	4 8 12	20/04/2009	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 PONTEVEDRA
475	NAVARRO GÓMEZ ANA MARÍA	35441124	19/10/1961	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
476	FDEZ-GALLARDO FDEZ-GALLARDO JAVIER ANGEL	3850309	23/01/1971	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 31 MADRID
477	ORTIZ MARTÍNEZ MARÍA ALODIA	27464817	05/01/1968	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ORIHUELA (ALICANTE)
478	LLARAS PINTADO MARÍA CRISTINA	37292793	28/02/1966	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 BARCELONA
479	FERNÁNDEZ SOTO CONCEPCIÓN	46590706	24/05/1967	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	DECANATO PRIMERA INSTANCIA BARCELONA
480	BUSTILLO CHOCARRO MARÍA DEL PUY	43501540	25/12/1965	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
481	MENOR PEREZ LUIS	34948720	25/10/1964	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 OURENSE
482	SANZ GORDON JOSE VICTOR	29171372	17/03/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MISLATA (VALENCIA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
483	OYAGÜE HERNÁNDEZ ENRIQUE	12318963	10/02/1960	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL TARRAGONA
484	PELLICERO RAMIRO FRANCISCA	38450508	20/05/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 23 BARCELONA
485	RAFI ROIG FRANCESC XAVIER	38092552	25/10/1971	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 9 BARCELONA
486	SAS MARTÍNEZ VICTOR MANUEL	1822745	30/04/1964	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	DIRECTOR (2015) SERVICIO COMÚN PROCESAL GRAL Y DE EJECUCIÓN GETXO (BIZKAIA)
487	SANCHO SAMA PALOMA	828981	11/02/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
488	CRESPO LÓPEZ CRISTINA	35123611	17/11/1966	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SABADELL (BARCELONA)
489	HERNANDO GARCÍA MARÍA MILAGROS	12370964	11/07/1966	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)
490	HUERTA GARCÍA RAFAEL	44289373	19/06/1976	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 7 BARCELONA
491	TELLEZ GARCÍA VICTORIANO ELEUTERIO	7004010	17/12/1966	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
492	VILLAGRAN MORIANA MARÍA JOSÉ	3440709	03/01/1963	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ARANJUEZ (MADRID)
493	ÁLVAREZ ÁLVAREZ JAIME JUAN	43392545	24/06/1963	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MATARÓ (BARCELONA)
494	GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA MONTSERRAT	50151607	18/09/1962	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
495	BLASCO LICES FERNANDO	16058269	08/05/1974	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ARRECIFE (LAS PALMAS)
496	DIAZ LOPEZ ANDRES	23218957	19/11/1960	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES CEUTA
497	ESPINOSA CARREÑO MARÍA LUZ	18113328	09/11/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 EL EJIDO (ALMERIA)
498	VIÑALS ARGERICH INES	39328169	21/01/1963	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MANRESA (BARCELONA)
499	OSORIO TENORIO ROSALÍA	31338235	30/12/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 21 BARCELONA
500	HENAR MARISCAL MARÍA PILAR	16793631	18/01/1962	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TORRELAGUNA (MADRID)
501	GARCÍA GÓMEZ MARÍA ÁNGELES	6997815	12/01/1964	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TRUJILLO (CACERES)
502	ARIAS GONZÁLEZ MARÍA ESTHER	8108480	16/02/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 GIRONA
503	NIETO AMIANO MARÍA MONTSERRAT	13757053	18/12/1965	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 14 BARCELONA
504	SOTO FERNÁNDEZ AIDA MARÍA	42064687	31/12/1960	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
505	GINES TARAZAGA JUAN ANGEL	52382764	22/08/1974	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)
506	JIMÉNEZ ARAGONES ANTONIA	52202834	07/06/1969	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	OFIC. JURADO, SERV.COM.TR.G AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
507	NAVARRO SIMÓN EVA MARÍA	25437950	29/08/1967	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 ELCHE/ELX (ALICANTE)
508	RINCÓN LABRADOR MARÍA ISABEL	52181806	09/08/1969	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ARANJUEZ (MADRID)
509	LORCA SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL	25402888	12/10/1968	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
510	GARCÍA CARBONELL MARÍA DESAMPARADOS	20805823	22/02/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TORRENT (VALENCIA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
511	BRIZ RECIO JOSÉ ESTEBAN	52636939	12/09/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 QUART DE POBLET (VALENCIA)
512	OJEDA SÁNCHEZ MARÍA JOSÉ	28703298	30/01/1964	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
513	SERRANO RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO	38449546	17/09/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 BARCELONA
514	HUETE CANO MANUEL	24210058	17/12/1965	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 VÉLEZ-MÁLAGA (MALAGA)
515	CARRILLO PANTOJA JUAN DIEGO	28718376	31/07/1967	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 BADALONA (BARCELONA)
516	GÓMEZ-LOR PÉREZ ELISEO MANUEL	35281944	14/07/1960	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 TERRASSA (BARCELONA)
517	GONZÁLEZ GONZÁLEZ ÁNGEL	11922053	11/06/1969	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 OCAÑA (TOLEDO)
518	REQUENA PLEGUEZUELOS MARGARITA	22005896	09/12/1965	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ELCHE/ELX (ALICANTE)
519	GARCÍA PÉREZ MARÍA DEL CARMEN	32868229	16/07/1964	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 BILBAO (BIZKAIA)
520	SANCHO MARCEN MIGUEL ÁNGEL	25443939	30/07/1969	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 OCAÑA (TOLEDO)
521	MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA NIEVES	79141011	24/04/1973	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA)
522	ALCON VALLEJO MANUEL PATRICIO	2220900	01/01/1967	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 NAVALCARNERO (MADRID)
523	NO GARCÍA MÓNICA	34748521	21/06/1972	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 SABADELL (BARCELONA)
524	ALDAZ ALFRANCA OSCAR	29117930	18/08/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
525	ORGE FERNÁNDEZ MARÍA ISABEL	52206679	19/03/1972	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 BADALONA (BARCELONA)
526	BALLESTER PICANYOL CECILIA	39031651	16/12/1954	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 MANRESA (BARCELONA)
527	CALDUCH GARGALLO MANUEL	24335189	26/02/1965	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)
528	ANICETO FERNÁNDEZ CRISTINA	51412828	26/06/1973	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 TOLEDO
529	FRANCISCO GARCÍA JULIA	34723454	25/03/1957	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE MENORES A CORUÑA
530	GONZÁLEZ SÁNCHEZ MARÍA ESMERALDA	33491870	05/08/1974	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ELCHE/ELX (ALICANTE)
531	MIRANDA TAULER MARÍA	73775859	26/07/1972	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA)
532	PALACIOS CALVO FRANCISCO JAVIER	48480468	26/06/1978	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
533	PENA SANCHIÑO MARÍA BELÉN	33281382	25/01/1968	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TORRELAGUNA (MADRID)
534	PRIETO BERROCAL NIEVES	20436212	04/03/1977	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 NAVALCARNERO (MADRID)
535	RUIZ RUIZ LUIS	4589698	07/08/1973	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 EIVISSA (BALEARES)
536	CONDE LÓPEZ JUAN CARLOS	4844614	21/06/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 TOLEDO
537	SUÁREZ IGLESIAS DAMASO	76947630	12/01/1978	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LA BAÑEZA (LEON)
538	PÉREZ AGUILERA FRANCISCA MARÍA	23791181	11/01/1968	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALMUÑÉCAR (GRANADA)
539	CAVERO COLL MIGUEL ÁNGEL	2536317	06/01/1973	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CORIA (CACERES)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
540	RUBIO SAIZ JOSÉ IGNACIO	1930295	30/04/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 XÀTIVA (VALENCIA)
541	RUIZ FERRER MARÍA JOSÉ	2548337	12/09/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
542	CAÑETE LEYVA MARÍA BELÉN	30794356	13/04/1972	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MARBELLA (MALAGA)
543	MATEO ORTEGA MARÍA DEL MAR	5270527	10/10/1966	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TORRIJOS (TOLEDO)
544	OVELLEIRO MEDINA MARTA	25153612	03/12/1973	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
545	SANCHO OLIETE ANA AURELIA	29120975	26/08/1976	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
546	GÓMEZ MEIJOME VERÓNICA	76927124	31/07/1978	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 UTRERA (SEVILLA)
547	PÉREZ MARTÍNEZ BEATRIZ	46404582	05/08/1980	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 TERRASSA (BARCELONA)
548	LLUCH BAREA VERÓNICA	73556419	08/02/1972	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA)
549	GARCÍA RODRÍGUEZ PAULA	9805383	29/08/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 POSADAS (CORDOBA)
550	OLTRA HERNÁNDEZ NOELIA	45564618	14/05/1975	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GAVÀ (BARCELONA)
551	SÁNCHEZ SÁNCHEZ EMMA	51404463	25/09/1971	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL GUADALAJARA
552	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MARÍA MATILDE	72129293	26/11/1978	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 INCA (BALEARES)
553	VAQUERO ORTIZ MARÍA CRISTINA	24252047	10/06/1970	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 COÍN (MALAGA)
554	REIGOSA RIVAS MARÍA PILAR	77595248	03/03/1974	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 PONTEVEDRA
555	POSTIGO GUTIÉRREZ ANA	13936780	21/06/1969	3 10 20	3 10 20	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 GIRONA
556	GONZÁLEZ ÁLVAREZ MARÍA DEL MAR	40990321	13/02/1973	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA)
557	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Mª CRISTINA	10896702	07/06/1973	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CANGAS DE ONÍS (ASTURIAS)
558	GARCÍA VEGAS ANA MARÍA	71939631	15/03/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID)
559	IRIBAS CABRERA ANGELA	25482876	11/10/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 TARRAGONA
560	MARTÍN BOLADO DIANA	72046355	20/03/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 BILBAO (BIZKAIA)
561	SUAÑA GONZÁLEZ REBECA	71012732	18/10/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 FUENGIROLA (MALAGA)
562	SANCHEZ FANLO SORAYA	73261208	23/11/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCAÑIZ (TERUEL)
563	ORTIZ SUAREZ EVA	74688142	01/05/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 BETANZOS (A CORUÑA)
564	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ LAURA	71932148	22/11/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)
565	GONZALEZ MARTIN JESUS TEODOSIO	44908189	21/09/1975	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SJ UPAD PENAL GU (2440) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
566	BONETE SATORRE BERTA	2656421	07/05/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
567	ROLLÁN GALINDO PATRICIA REBECA	7536519	02/05/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA)
568	SALVADOR PECHUAN PATRICIA MARÍA	48312488	07/12/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 GAVÀ (BARCELONA)
569	SAMPER ORGILES JAVIER	48489719	26/12/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SAN JAVIER (MURCIA)
570	MACIAN DE GREEF SERGIO	39722753	23/05/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 TARRAGONA
571	FRANCH ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS ELENA AIDA	74828260	23/03/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MÁLAGA
572	DE LA TORRE DUÑAITURRIA ALICIA PALOMA	40341744	05/06/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	DIRECTOR (2010) SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN PENAL GIRONA
573	CASSINELLO MARCO MARTA	48509802	28/12/1987	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 TORREVIEJA (ALICANTE)
574	ROSA LERIA BEATRIZ	75764327	06/12/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)
575	SÁNCHEZ DEL RIO NOELIA	70869973	25/04/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 BARAKALDO (BIZKAIA)
576	ALBIZUA DE CASTRO NORA	16059411	06/02/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES GETXO (BIZKAIA)
577	BARRIONUEVO LEYRAS MARINA	74849199	11/05/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 FUENGIROLA (MALAGA)
578	VIZCARRO CATALA SILVIA	33459720	27/02/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 CATARROJA (VALENCIA)
579	PONCES LISON CARLOTA	46144620	02/07/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 TERRASSA (BARCELONA)
580	GARCÍA DIEGUEZ MARÍA BÉLÉN	44467186	24/12/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 PONTEVEDRA
581	SALMERÓN MARTÍNEZ ANA	48400540	11/10/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 TORREVIEJA (ALICANTE)
582	JUAN RUIZ SOLEDAD	25424418	20/12/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
583	MARTÍNEZ SERRANO BLANCA DEL CARMEN	47068498	12/08/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
584	SANTOS RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN	12400075	29/07/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 BENAVENTE (ZAMORA)
585	DE ORO-PULIDO MIGUEL CRISTINA CONSUELO	51105883	31/05/1984	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LOJA (GRANADA)
586	ROSELLÓ ALFONSO LAURA	39714570	25/08/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 TARRAGONA
587	BARÓN ESCÁMEZ DOMINGO	29181236	27/07/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
588	GONZÁLEZ MOSQUEIRA LEONOR	2660584	04/03/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 NAVALCARNERO (MADRID)
589	BOLUFER FRANCIA VICENTE MANUEL	29186217	10/06/1975	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 VILLARREAL/VILA-REAL (CASTELLON)
590	WARLETTA TIRADO MANUEL ÁNGEL	48966688	01/11/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 2 CÁDIZ con sede en ALGECIRAS
591	SANTAMARTA VALBUENA VERÓNICA	71632295	22/12/1977	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ASTORGA (LEON)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
592	MARTÍNEZ-MORATALLA SERNA MILAGROS	47069092	23/11/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 HELLÍN (ALBACETE)
593	MIÑANA LLORENS VICENTE	20029137	01/06/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DÉNIA (ALICANTE)
594	MARTÍNEZ LARRAD MARÍA DEL PILAR	28638629	08/10/1984	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)
595	TORMO MOLINA ALFONSO	48487052	15/02/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ORIHUELA (ALICANTE)
596	MÉNDEZ GONZÁLEZ MARÍA AUXILIADORA	75750275	11/08/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 HUELVA
597	RUIZ PADILLA MARÍA DEL MAR	44584595	14/03/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
598	PEREZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	9410733	27/10/1969	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
599	DANIEL DEL VALLE ELENA MARIA	70801914	15/08/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TAFALLA (NAVARRA)
600	RUBIO SEÑORAN FRANCISCO JAVIER	76868929	26/07/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
601	VARAS GARCÍA CAROLINA	70802799	31/01/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)
602	ORTIZ PLAZA IRENE	50874489	06/07/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 NAVALCARNERO (MADRID)
603	NAVAS GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO	23033029	27/10/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 VERA (ALMERIA)
604	GARCÍA MAZA MILAGROS	13938165	24/06/1972	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 INCA (BALEARES)
605	MARTÍNEZ AYALA MARÍA ALEJANDRA	75256831	16/12/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ALMERÍA
606	SÁNCHEZ CASCAJO ROCIO	29490785	29/03/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CARMONA (SEVILLA)
607	GARCÍA SERRANO ROSA MARÍA	45711868	24/09/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 ALMERÍA
608	GALIANA LARA ANA ISABEL	48323275	14/04/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 VILLAJOSAVILA JOIOSA (ALICANTE)
609	MATEO ERROZ PAULA	43153191	17/05/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
610	IGLESIAS SUÁREZ VERÓNICA	71510692	05/02/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
611	DE LA RUBIA ALMUÑA MARTA	36149530	02/05/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 VIGO (PONTEVEDRA)
612	NAVARRO FERNÁNDEZ JORGE	25185526	07/09/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TUDELA (NAVARRA)
613	SÁNCHEZ JUAN FÁTIMA	74223603	04/10/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MARCHENA (SEVILLA)
614	JIMÉNEZ SARMIENTO MARÍA DOLORES	14318321	10/05/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)
615	SANCHEZ BENITO FRANCISCO JAVIER	29109501	20/07/1972	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TARRAGONA
616	CIRIA ARROYO MARÍA ÁNGELES	43682357	15/02/1966	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SECCION Nº 10 AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA
617	DÍAZ FERNÁNDEZ LUIS	34982477	13/08/1969	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TORRIJOS (TOLEDO)
618	MATILLA ORTEGA MARÍA DE LA CRUZ	79021021	31/05/1983	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 MARBELLA (MALAGA)
619	HIGUERAS DURÁN MARIO	77321036	25/07/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LA CAROLINA (JAEN)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
620	VALLE BODEGUERO ANA MARÍA	76120979	19/09/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS DECANATO CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
621	CHOUCIÑO CARRIL LAURA MARIA	44591323	21/12/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CARBALLO (A CORUÑA)
622	DIAZ REVORIO LUIS ENRIQUE	3854690	05/06/1972	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
623	RAMÍREZ MONTALVO IGNACIO	46928292	13/10/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SABADELL (BARCELONA)
624	JANEIRO AMELA BLANCA SUSANA	44450899	20/10/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TUI (PONTEVEDRA)
625	NEGROTTI FERNÁNDEZ IGNACIO ALBERTO	50751718	30/10/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 RUBÍ (BARCELONA)
626	LLOR MADRID PIEDAD	44288316	20/03/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 ALGECIRAS (CADIZ)
627	GONZALEZ GARCIA MARIA	9435177	11/02/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 VIGO (PONTEVEDRA)
628	PÉREZ CONESA MARÍA AMPARO	44796407	18/11/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CARLET (VALENCIA)
629	ORTEGA OLLER FLOR MARÍA	45598207	17/08/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 ALMERÍA
630	VEGA GARCÍA MARÍA JOSÉ	74831019	02/07/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TORROX (MALAGA)
631	SIGÜENZA GONZÁLEZ FERNANDO	6585073	01/09/1977	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 GRANOLLERS (BARCELONA)
632	GÓMEZ MATE MARÍA AMPARO	33390199	26/07/1970	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VÉLEZ-MÁLAGA (MALAGA)
633	ROBLES AREÑOS MARÍA MERCEDES	44905533	25/07/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ARANDA DE DUERO (BURGOS)
634	QUESADA FERNÁNDEZ MARÍA ISABEL	25711044	18/09/1972	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 ALGECIRAS (CADIZ)
635	SANZ BATICÓN MARÍA	29193272	02/08/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CARLET (VALENCIA)
636	CORRAL GARCIA ROSANA	32775188	31/05/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 BETANZOS (A CORUÑA)
637	HITA VERA MARÍA ASCENSIÓN	34810330	10/11/1973	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CIEZA (MURCIA)
638	PIÑÁN DIEZ AMAYA	9797524	14/05/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LA BAÑEZA (LEON)
639	ORTEGA MARTÍNEZ JAVIER	71268136	09/03/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)
640	CARRIÓN GÓMEZ LAURA	2661440	18/07/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 BÉJAR (SALAMANCA)
641	SEVILLA SILVA LOURDES	8868354	01/06/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SJ UPAD 1ªINST.E.INSTR Y SJ EJ. CIV/CA/SO en SCE (2220) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
642	SOLA AGUILAR ANNA	33959982	18/03/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VIC (BARCELONA)
643	MARTINEZ TORRENTE MARIA DOLORES	47055770	31/07/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
644	ALFARO URÍA ISABEL	71644216	11/05/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 TARRAGONA
645	COUSO MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO	9390954	23/10/1969	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)
646	CASAS ÁLVAREZ JOSÉ MARÍA	74659841	18/02/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCALÁ LA REAL (JAEN)
647	GARCÍA GALLEGO MARTA ISABEL	44265291	11/08/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 BAZA (GRANADA)
648	FERNÁNDEZ LÓPEZ-MENCHERO MARÍA TERESA	51429826	12/10/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
649	MERINO GUIJARRO VIRGINIA	71281113	04/05/1983	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SORIA
650	OSETE VILLALBA MIRIAM	48509597	23/12/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TOTANA (MURCIA)
651	GONZALEZ ROZAS MARÍA BEGOÑA	9761884	19/09/1968	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VALDEMORO (MADRID)
652	DE HEREDIA FERNANDEZ MARIANO JESUS	74653969	07/09/1977	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ESTEPONA (MALAGA)
653	PRIETO RASCADO MARÍA DOLORES	76710290	24/03/1969	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
654	HERVÁS HERVÁS JAVIER	50871928	29/10/1983	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 GRANOLLERS (BARCELONA)
655	BRINES FERRANDO NEUS	20827565	26/09/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DÉNIA (ALICANTE)
656	CANO GALLARDO CECILIA	77801263	29/04/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 HUELVA
657	GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARÍA ROSA	44371249	07/12/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MONTILLA (CORDOBA)
658	GARCÍA RAVASSA CARMEN VICTORIA	51089377	27/01/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)
659	MUÑOZ AGUILAR MONTSERRAT	47053489	20/06/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 HELLÍN (ALBACETE)
660	SÁNCHEZ SÁNCHEZ BELÉN	44297375	05/12/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MONTORO (CORDOBA)
661	RUIZ OCTAVIO BIENVENIDO	52388842	26/11/1977	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL)
662	ALOY MALLA JOANA FRANCESCA	43749737	23/07/0978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 MANRESA (BARCELONA)
663	SAN MARTÍN JIMÉNEZ LAURA MARÍA	28954169	02/08/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN VALENCIA DE ALCÁNTARA (CACERES)
664	COSTA ANDRÉS CAROLINA	36139638	19/12/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SECCION Nº 2 AUDIENCIA PROVINCIAL PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
665	VILLOSLADA ANDRÉS MIRIAN	72791141	03/02/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 HUELVA
666	GARCÍA GARCÍA SONSOLES	6586550	01/10/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN VITIGUDINO (SALAMANCA)
667	GONZALEZ ALVAREZ SOFIA	11077042	26/02/1969	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
668	ALVAREZ CASTILLO MARÍA LUISA	71632593	16/02/1977	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	SJ UPAD G3 (2421) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES BALMASEDA (BIZKAIA)
669	GARCIA MORENO JUAN MANUEL	44381856	03/10/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 HELLÍN (ALBACETE)
670	CARRILLO RODRÍGUEZ LETICIA	80079502	01/11/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MONTIJO (BADAJOZ)
671	PARRA RUIZ IVÁN	4604698	15/02/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TERUEL
672	MARTÍNEZ PÉREZ MARÍA ELENA	75786103	22/10/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ROTA (CADIZ)
673	CAMACHO CANO ELENA	80078981	13/04/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALGECIRAS (CADIZ)
674	GONZÁLEZ RUIZ MARÍA JOSÉ	17745974	09/02/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CASPE (ZARAGOZA)
675	MAJOR LÓPEZ MIGUEL	70808001	27/12/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TORRIJOS (TOLEDO)
676	MERINO MOLINA VANESA	46880911	21/12/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 DON BENITO (BADAJOZ)
677	SUBIRATS ALEIXANDRI MARIA CINTA	52600424	11/02/1972	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL TORTOSA (TARRAGONA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
678	BERGES VIDAL BERTA	17760489	31/10/1983	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)
679	HERRERA CUBAS INÉS	78675977	03/07/1975	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
680	CANALS TRULL MONTSERRAT	40344928	04/09/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 GIRONA
681	TOLEDO RAMÍREZ ERIKA	78541282	05/01/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TELDE (LAS PALMAS)
682	HERRERO BARRERO MARÍA	47280086	27/06/1983	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PUERTO REAL (CADIZ)
683	OLMEDILLA GÓMEZ MARÍA ELENA	47054600	09/02/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SAN CLEMENTE (CUENCA)
684	PÉREZ MARTÍN MARÍA TERESA	28628138	11/08/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
685	BIXQUERT SANZ ANGELS	20029611	03/11/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PICASSENT (VALENCIA)
686	MENESES DOMINGUEZ ALFONSO	31702141	05/05/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 1 ALGECIRAS (CADIZ)
687	RODRÍGUEZ SENDON VICTOR	36145852	14/12/1975	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 VIGO (PONTEVEDRA)
688	SÁNCHEZ ÁVILA ANTONIO MARÍA	70867978	27/02/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
689	GARCÍA DELGADO DIEGO	51453041	08/02/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 HARO (LA RIOJA)
690	CALLEJAS HUERTES ANTONIA	44295141	17/08/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 RONDA (MALAGA)
691	LÓPEZ NAVAJAS IRENE MARÍA	74664430	08/11/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN PRIEGO DE CÓRDOBA (CORDOBA)
692	EL-KHATIB VÁZQUEZ MOUSA	29132943	22/06/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TARRAGONA
693	SALEH CONTELL FADUA	29187918	27/04/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PICASSENT (VALENCIA)
694	BAUTISTA SÁNCHEZ MARÍA CARMEN	34781845	04/07/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 COÍN (MALAGA)
695	IRIGOYEN PUEYO JOSÉ RAMÓN	18171316	04/03/1984	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
696	BENDITO GUILARTE CARLOS	44904154	23/09/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 EIVISSA (BALEARES)
697	MOLINA GARCÍA MARÍA	48874860	31/03/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ESTEPA (SEVILLA)
698	GARCIA ALVAREZ ELBA	9805264	09/05/1976	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SAHAGÚN (LEON)
699	VILLEGAS NOVELLA ANA MARGARITA	44353481	05/07/1974	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CORDOBA)
700	NOCEDA BERMEJO RAQUEL	20020582	27/10/1975	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA)
701	MARTÍN PAREJA INMACULADA	74235810	29/11/1982	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 JUMILLA (MURCIA)
702	ROIG SAPIÑA MARÍA JOSÉ	73567007	12/03/1979	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 QUART DE POBLET (VALENCIA)
703	PÉREZ RIVEROL CRISTO JONAY	42186915	30/03/1980	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
704	RODRÍGUEZ SEOANE EMMA	46899688	28/09/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 7 A CORUÑA
705	ROMÁN BERNET MARÍA JESÚS	45101859	12/08/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 REQUENA (VALENCIA)
706	HERNÁNDEZ TEJEDOR ANA MARÍA	70881219	19/05/1981	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CASTUERA (BADAJOZ)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
707	VICENTE SILVA MARÍA TAMARA	78869808	23/07/1978	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
708	ALCÁZAR MONEDERO FUENSANTA	22989618	18/07/1972	3 5 2	3 5 2	30/10/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SAN JAVIER (MURCIA)
709	GÓMEZ CARBALLO MERCEDES	34994790	19/10/1973	3 4 29	3 4 29	30/10/2010	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
710	MARTÍN ORTEGA FRANCISCO	43430903	26/08/1971	3 4 26	3 4 26	12/05/2010	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
711	SÁNCHEZ ARENAS MARÍA MONTSERRAT	12327038	26/03/1970	3 0 25	3 0 25	12/05/2010	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN ARÉVALO (AVILA)
712	BONILLA GÓMEZ MIGUEL ANGEL	11811859	28/09/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 ILLESCAS (TOLEDO)
713	RUESCAS BLANCO MARÍA VIRGINIA OLGA	2194980	04/03/1956	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ARGANDA DEL REY (MADRID)
714	ARGAÑA FERNÁNDEZ MARÍA TERESA	9390174	14/01/1966	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LANGREO (ASTURIAS)
715	RODRÍGUEZ ZAMORA LUIS CARLOS	8796765	08/05/1962	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 BADAJOZ
716	DOMÍNGUEZ AGUDO MARÍA REYES	51382922	13/10/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 GETAFE (MADRID)
717	NAVARRO BAYO ADORACION	43412701	18/05/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 SABADELL (BARCELONA)
718	GARCÍA MESEGUER MARÍA DOLORES	21423204	23/02/1960	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 IBI (ALICANTE)
719	ARCAY IGLESIAS MARÍA DOLORES	32750175	09/03/1963	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 A CORUÑA
720	VILLALBA MOLTO MARÍA CRISTINA	25403874	12/08/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 MISLATA (VALENCIA)
721	MAYO GALERA ALEJANDRO	40975079	08/04/1966	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA)
722	FERNÁNDEZ GALLARDO EMILIO	37740579	26/04/1963	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 SABADELL (BARCELONA)
723	AGÜNDEZ LÓPEZ SANTIAGO MARIO	11817190	27/07/1970	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ARGANDA DEL REY (MADRID)
724	HERNÁNDEZ MÉNDEZ ALBERTO	35028635	11/09/1960	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 9 GAVÀ (BARCELONA)
725	GARCÍA GARRIGUES MARÍA LORETO	20781798	08/08/1959	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA)
726	CARABAL GUAITA NATIVIDAD	25414287	24/11/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MISLATA (VALENCIA)
727	PUCHADES VILA FERRAN	24338045	25/07/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALZIRA (VALENCIA)
728	VALERO MARÍN SONIA	46573813	11/01/1973	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
729	GONZÁLEZ SÁNCHEZ MARÍA MAGDALENA	7948025	12/04/1963	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ARGANDA DEL REY (MADRID)
730	CASADO NAVARRO MARÍA DEL CARMEN	2221354	15/06/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 GUADALAJARA
731	ESTÉVEZ JACOME BENIGNO	34948540	18/04/1963	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 OURENSE
732	FERRI BORRÁS ENRIQUE	18429093	15/10/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 GANDIA (VALENCIA)
733	LABORDA ÁLVAREZ ELVIRA	25160446	08/01/1971	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 EIVISSA (BALEARES)
734	PÉREZ GALLARDO JUAN JOSÉ	33929202	13/06/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MATARÓ (BARCELONA)
735	BOLIVAR TROYA ANTONIO	37286003	24/09/1960	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 SABADELL (BARCELONA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
736	ROSADO HIDALGO INÉS	37329238	04/04/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	DIRECTOR (2015) SERVICIO COMÚN PROCESAL GRAL Y DE EJECUCIÓN TOLOSA (GIPUZKOA)
737	GONZÁLEZ MÁRQUEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	20257501	03/04/1973	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
738	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SANTIAGO	9286193	26/09/1963	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 IBI (ALICANTE)
739	CAMPOS DEL ÁLAMO MARÍA PILAR	25151035	06/05/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN DAROCA (ZARAGOZA)
740	DÍEZ GARCÍA SUSANA	35077797	03/07/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 GAVÀ (BARCELONA)
741	MARCO MARTÍNEZ-ARENAS MARÍA DE LOS DESAMPARADOS	21389082	26/06/1955	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TORREVIEJA (ALICANTE)
742	NUÑEZ-CACHO SOLANS ALFONSO	46234954	06/09/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
743	PÉREZ HERNANDO MARÍA	2908939	20/05/1975	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 BADAJOZ
744	NOGUEIRA GÓMEZ MILAGROS	33916412	11/09/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 GAVÀ (BARCELONA)
745	RODRÍGUEZ NUÑO JOSÉ ALFREDO	51372782	24/07/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
746	ALONSO VELÁZQUEZ FABIOLA	2854214	05/10/1960	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TORREVIEJA (ALICANTE)
747	CERVANTES REQUENA ENCARNACIÓN MARÍA	46042096	15/11/1962	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
748	MICHI CHAVES MARÍA DEL CARMEN	28722470	27/01/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)
749	BRAVO GARCÍA JOSEFA OLGA	46338264	20/03/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 REUS (TARRAGONA)
750	ASENSIO MORUNO MARÍA TERESA	30194743	10/08/1957	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ILLESCAS (TOLEDO)
751	RUIZ MORILLAS AGUSTÍN	38067898	20/12/1961	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
752	GONZÁLEZ ALFARO MARÍA INMACULADA	33897151	08/12/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 GRANOLLERS (BARCELONA)
753	ORTEGA JAEN ANTONIO	30485789	18/12/1961	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MONTILLA (CORDOBA)
754	ORTIZ VILLAMOR CESAR	13119080	24/10/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN BRIVIESCA (BURGOS)
755	CONTE LOZANO MARÍA ESTHER	35085307	11/01/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
756	AMO MORENO MARÍA ROCÍO	45074524	16/05/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)
757	IBÁÑEZ ORTIZ MARÍA ÁNGELES	13113208	11/06/1964	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA (BURGOS)
758	AGUSTI PONS HELENA	52739389	19/11/1976	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CATARROJA (VALENCIA)
759	ESPIN LÓPEZ ISIDORO	27472710	28/07/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ORIHUELA (ALICANTE) con sede en TORREVIEJA
760	HERNÁNDEZ HERNANDO MARÍA JESÚS	18025345	21/01/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANT FELIU DE GUÍXOLS (GIRONA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
761	ABAT GALLEGO JESÚS MARIO	79080586	09/06/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
762	MORENO Povedano MARÍA JOSÉ	44271078	14/02/1974	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MELILLA
763	SOLA ESTÉVEZ INMACULADA	24216024	03/08/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN ARCHIDONA (MALAGA)
764	GÓMEZ POZUETA CARLOS JAIME	13941583	30/01/1974	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 BARAKALDO (BIZKAIA)
765	SÁNCHEZ ORDOVAS JOAQUÍN CARLOS	25428265	27/08/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CALAMOCHA (TERUEL)
766	SEBASTIÁN BARRADO MARÍA TERESA	25156799	31/08/1970	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 EJEJA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)
767	ABIEGA GIL MARÍA FERNANDA	16052689	14/07/1970	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO PENAL Ejecutorias Penales Nº 7 BILBAO (BIZKAIA)
768	GARCÍA LÓPEZ JOSÉ ANTONIO	50731151	14/09/1975	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VALDEMORO (MADRID)
769	ORGE FERNÁNDEZ MONTSERRAT	52206680	27/04/1971	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 GAVÀ (BARCELONA)
770	ROJO MORAGAS MONTSERRAT MARTA	46660707	11/05/1965	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 RUBÍ (BARCELONA)
771	ÁLVAREZ LOZANO MARÍA ISABEL	12382017	20/11/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SORIA
772	GONZALO CAPELLIN LUIS MIGUEL	10884189	24/01/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 BARCELONA
773	CLIMENT ESTEVE MARÍA DE LOS DESAMPARADOS	29187071	20/11/1976	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CATARROJA (VALENCIA)
774	RUIZ MARTÍNEZ DANIEL	52860678	28/06/1973	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES AMURRIO (ARABA/ALAVA)
775	FERNÁNDEZ ESCUDERO ANA MARIA	29001261	09/08/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 NOVELDA (ALICANTE)
776	BARROSO SÁNCHEZ MARÍA DEL MAR	52258383	07/07/1970	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
777	CALVO SOLE GEMA MARGARITA	29101302	11/08/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
778	PASCUAL CALDERÓN JOSÉ ANTONIO	9276265	15/05/1962	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 O PORRIÑO (PONTEVEDRA)
779	MARTÍN GARCÍA MARÍA DEL CARMEN	50170287	20/05/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
780	SANTOS-GARCÍA GARCÍA RAUL	3870440	27/06/1976	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ORGAZ (TOLEDO)
781	CORPAS JIMÉNEZ SUSANA	31686238	04/04/1974	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)
782	ALONSO CASADO FRANCISCO JAVIER	52207644	18/08/1972	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 GRANOLLERS (BARCELONA)
783	GONZÁLEZ MASA ESTELA	13167217	01/06/1976	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
784	SÁNCHEZ MARTÍNEZ ANGEL LUIS	53103693	17/10/1975	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
785	CASTEDO BARTOLOME ROSA MARÍA	50843947	26/05/1970	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TARANCÓN (CUENCA)
786	LÓPEZ RUANO ESTHER	50837028	23/08/1969	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
787	DOMÍNGUEZ CUADRADO HELENA	33363035	19/12/1971	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ANTEQUERA (MALAGA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
788	BLAT RUIZ MARÍA CLARA	20152254	29/11/1967	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VILLARREAL/VILA-REAL (CASTELLON)
789	CALLES GARCÍA GUSTAVO	11962827	15/05/1972	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ASTORGA (LEON)
790	FERNÁNDEZ LOZANO MARÍA DEL CARMEN	23243740	07/10/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TOTANA (MURCIA)
791	GONZÁLEZ JOLY MARCOS	44450165	22/11/1974	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 OURENSE
792	VÁZQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA TERESA	5410507	16/07/1968	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 CAMBADOS (PONTEVEDRA)
793	BELTRÁN LERMA CAROLA	20816675	20/09/1974	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 QUART DE POBLET (VALENCIA)
794	RODRÍGUEZ JACOME JOSÉ LUIS	76813950	06/08/1971	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 O CARBALLIÑO (OURENSE)
795	MARTÍN PAZOS YOANA	70051655	17/11/1979	2 4 15	2 4 15	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TARANCÓN (CUENCA)
796	MARTIN CANO MARIA	77328689	13/03/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LA CAROLINA (JAEN)
797	LAMUÑO CARREÑO NATALIA	32880025	24/01/1972	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MIERES (ASTURIAS)
798	RODRIGUEZ GARCIA MARIA SOLEDAD	7969457	06/03/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 DON BENITO (BADAJOZ)
799	JIMENEZ BIDON PEDRO MARIA	48961551	29/05/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO CEUTA
800	MARTINEZ CABADA MIRIAM	47795123	01/01/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
801	VILLALGORDO CARCELES JOSE ANTONIO	48503905	23/07/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TORREVIEJA (ALICANTE)
802	ROMERO BARRERA NOELIA	31717837	18/09/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)
803	AYALA GARCIA DE LAS BAYONAS MARAVILLAS	23289945	03/07/1985	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 LORCA (MURCIA)
804	PEREZ BECERRA BERTA MARIA	32823029	21/03/1973	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
805	PARAJO MARTINEZ MARIA ISABEL	44837653	29/03/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 NOIA (A CORUÑA)
806	ESCOBAR NAREDO SANDRA	2647323	24/03/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 ELDA (ALICANTE)
807	DIEZ ALONSO MONICA	50866150	13/11/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
808	GUTIERREZ FERNANDEZ PABLO RAMON	12391580	06/12/1973	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL SORIA
809	LOPEZ MOLINA ADELA	47064209	02/02/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)
810	MORENO RODRIGUEZ MARTA	53148106	04/10/1984	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 JUMILLA (MURCIA)
811	BARRACHINA RODRIGUEZ-GUISADO ANDREA	34834563	28/02/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TOTANA (MURCIA)
812	CARDENAS RUIZ-VALDEPEÑAS BEATRIZ	47076222	31/08/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALMANSA (ALBACETE)
813	YÁÑEZ PENA JUAN JOSE	33998899	24/04/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 VIGO (PONTEVEDRA)
814	DELGADO GONZALEZ SANTIAGO	52960428	20/08/1985	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MEDIO CUDEYO (CANTABRIA)
815	VILLAESCUSA GARCIA ALFREDO	12331961	27/05/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 24 BARCELONA

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
816	ZANELLO QUINTANA SUSANA	76958803	15/02/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN VILLAVICIOSA (ASTURIAS)
817	VILLAVERDE GARCIA SUSANA	71437056	14/01/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LAREDO (CANTABRIA)
818	SAGARRIBAY ESTEVE OLAYA	48357435	21/03/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILAJAYOSA/VILA JOIOSA (ALICANTE)
819	CASTRO MORENTE ANA ISABEL	77329355	24/10/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MONTORO (CORDOBA)
820	PEREIRA ALVAREZ BELEN	39453940	14/09/1986	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
821	COZAR GARCIA SANTIAGO	43065159	11/10/1969	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
822	GONZALEZ CARRO YOLANDA	6585949	04/05/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 NAVALMORAL DE LA MATA (CACERES)
823	MARTIN REY ALICIA	44084619	30/03/1976	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 BARAKALDO (BIZKAIA)
824	ESPEJO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	45736270	24/10/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
825	CALDERO CORNEJO Mª DEL CARMEN	50954165	26/07/1968	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 GIRONA
826	GARCIA ONTALBA MARIA VICTORIA	18445393	30/04/1984	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
827	BATISTA ESTEVEZ MARIA VICTORIA	78510569	20/08/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
828	NUÑEZ CELMA ANDRES	72975795	03/03/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 BARBASTRO (HUESCA)
829	BARRIO CALLE LUISA MARINA	3438859	08/11/1963	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 FERROL (A CORUÑA)
830	ALVAREZ DE SOTO INES	72067573	20/08/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LAREDO (CANTABRIA)
831	CAMBERO CRESPO MARIA DEL ROSARIO	50119560	16/02/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
832	PARRA MARTINEZ LUCIA	14614204	26/12/1974	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)
833	SEGOVIA CALVO JUAN RAMON	52687686	16/03/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MISLATA (VALENCIA)
834	MASCAROS GONZALEZ ANA LYLIANA	20430419	22/06/1976	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 REUS (TARRAGONA)
835	JARIEGO RUIZ MARIA ELENA	33977560	24/04/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ZAFRA (BADAJOZ)
836	PATIÑO JUNQUERA MARIA DE LA CONCEPCION	32669089	31/12/1971	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 BETANZOS (A CORUÑA)
837	BRIONES SANTAMARIA BEATRIZ	51086499	11/04/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
838	DIEGO GARCIA PATRICIA	29121163	24/09/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CALATAYUD (ZARAGOZA)
839	AMO MAESO MARIA AROA	43744318	18/03/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 BALAGUER (LLEIDA)
840	GIL FABREGAT CRISTINA	29182486	26/07/1973	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA)
841	RAMOS VERDUGO MARIA ELENA	45683187	16/02/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ESTEPONA (MALAGA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
842	SARDINA CALLEJO CELIA	3106839	21/08/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA)
843	BAJO GONZALEZ DIANA	71439184	09/08/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SANTOÑA (CANTABRIA)
844	CACHEDA VARELA PATRICIA	47351123	20/10/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ORDES (A CORUÑA)
845	PAREDES SIMON EDUARDO	28971352	09/05/1985	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 INCA (BALEARES)
846	PADRON MORALES MARIA JESUS	43772757	15/07/1967	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 8 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
847	BERNARDEZ PEREIRAS EVA	35466413	26/09/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ORDES (A CORUÑA)
848	MARTINEZ LAORDEN CAROLINA	48398846	15/03/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 SAN JAVIER (MURCIA)
849	BOTELLA MARTIN DESAMPARADOS	48305298	23/09/1976	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MASSAGRELL (VALENCIA)
850	LOBATO ANDRES GONZALO	71416160	21/03/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 LUGO
851	SARRIA RODRIGUEZ ELISA DEL CARMEN	78975799	02/02/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ESTEPONA (MALAGA)
852	SARO JAUREGUI FRANCISCO	15366288	06/09/1962	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES IRUN (GIPUZKOA)
853	DUEÑAS FRAILE FERNANDO	13167409	31/07/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 HARO (LA RIOJA)
854	VARGA ANDRES TOMAS	71284115	11/04/1985	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BARAKALDO (BIZKAIA)
855	ALVAREZ ALONSO PAULA	71662133	26/01/1984	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 LAVIANA (ASTURIAS)
856	RODRIGUEZ FERRO MARIA JOSE	34989940	28/12/1969	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 FERROL (A CORUÑA)
857	SOTO PRADOS REMEDIOS	53155732	09/10/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TORROX (MALAGA)
858	VALERO MORANT DUNIA MARIA	73572800	24/02/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 XÀTIVA (VALENCIA)
859	MODESTO CORTÉS CRISTINA	21664097	19/11/1973	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
860	MALDONADO CONCEPCION CRISTINA	78569067	21/11/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
861	GUTIERREZ RODRIGUEZ VANESA MARIA	10898314	29/10/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)
862	RUIZ DE LA HERMOSA GUTIERREZ JOSE ANTONIO	46890432	13/06/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)
863	SAENZ MOREJON ANTONIO	74894392	29/11/1984	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ESTEPONA (MALAGA)
864	TOMASELLI ROJAS ANGEL LUIS	74867747	30/07/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
865	FERNANDEZ MERINO AMALIA	10901320	22/12/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CASTROPOL (ASTURIAS)
866	DIEZ ESCRIBANO ROSA MARIA	9345706	30/01/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SANTOÑA (CANTABRIA)
867	JIMENEZ ESTEVEZ MARIA JOSE	47000378	27/11/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
868	CRESPO PASCUAL ARACELI	1926475	05/02/1976	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 FERROL (A CORUÑA)
869	LASUEN AGUIRRE MAIDER	30677878	13/03/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD G3 ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS DURANGO (BIZKAIA)
870	DOMINGUEZ-RODIÑO ALCALDE MARIA DEL CARMEN	53284219	25/07/1984	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 TELDE (LAS PALMAS)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
871	VELANDO CAINZOS MARIA SOL	32676202	22/01/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILALBA (LUGO)
872	ARECHAGA BRAÑA DIMAS JUAN	32874294	03/09/1968	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN VALDÉS-LUARCA (ASTURIAS)
873	CASTIÑEIRA ALVARIÑO JOSE MANUEL	44078866	29/11/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 INCA (BALEARES)
874	BERLANGA CHARRIEL MIGUEL	44866643	07/08/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 CARLET (VALENCIA)
875	CARAMES BLANCO MARIA JOSE	33287753	30/11/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN NEGREIRA (A CORUÑA)
876	GUARRO BELART JORDINA	47763594	19/04/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 REUS (TARRAGONA)
877	GONZÁLEZ MUÑOZ MARTA	51418519	20/12/1976	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
878	PEÑA FERNANDEZ MARIA GABRIELA	80070921	30/05/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
879	JIMENEZ CHAMIZO DAVINIA DE LOS ANGELES	74863686	02/10/1980	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ARRECIFE (LAS PALMAS)
880	GONZALEZ CABALLERO CONRADO JAVIER	2647157	02/08/1976	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
881	ALEGRIA MARTIN MARIA EUGENIA	7966788	23/03/1972	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 DON BENITO (BADAJOZ)
882	VELASCO PADRONES FRANCISCO JOSE	12336178	04/04/1982	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ARRECIFE (LAS PALMAS)
883	TUERO PIÑEIRO ISABEL	71649078	17/03/1981	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
884	NUÑEZ FERNANDEZ PABLO	76620510	05/04/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)
885	ABAD TELLEZ MERCEDES	25051947	09/01/1963	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)
886	ASENSIO MUÑOZ ALEJANDRO	44421375	06/07/1983	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
887	LOPEZ PRESA ROSA ANA	10870740	04/09/1975	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SAN VICENTE DE LA BARQUERA (CANTABRIA)
888	LABRADOR GIMENO ISABEL	72972177	22/04/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 JACA (HUESCA)
889	PEREZ GONZALEZ SUSANA	48813198	05/06/1979	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)
890	VIDAL VILLAGRASA MARIA DEL MAR	44511146	19/12/1977	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ARRECIFE (LAS PALMAS)
891	SAIZ MARTIN ARANZAZU	52368694	22/02/1972	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA)
892	ANDUJAR RODRIGUEZ ESTHER	28627369	03/05/1978	1 11 16	1 11 16	16/04/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VILLAJOSYA/VILA JOIOSA (ALICANTE)
893	CANAL MEANA FRANCISCO JAVIER	10825814	15/09/1961	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN TINEO (ASTURIAS)
894	LÓPEZ DEL PESO ANA ISABEL	50084339	08/11/1970	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. CONTENCIOSO-ADMVO. Nº 3 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
895	BUSTOS VALENCIA MARÍA PILAR	6214891	14/07/1959	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 GAVÀ (BARCELONA)
896	LÓPEZ JARA MANUEL	34792904	22/07/1971	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
897	ARQUÉS GALIANA FRANCISCO JAVIER	21483587	20/08/1968	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 BENIDORM (ALICANTE)
898	DÍAZ TRUJILLO FELIX MANUEL	6993953	29/01/1962	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 NAVALMORAL DE LA MATA (CACERES)
899	CABALLERO OCHOA GASPAR	77113077	02/01/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
900	RUFO LLORENS CÉSAR	4166237	11/01/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA)
901	SANABRA GAFAROT JUAN	35014232	29/12/1959	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
902	TOMÉ TAMAME JOSÉ CARLOS	11725407	04/02/1960	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ELDA (ALICANTE)
903	BARRANCO SÁNCHEZ ELISA MARINA	24204284	26/06/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ALGECIRAS (CADIZ)
904	AGUILERA JURADO MARÍA ISABEL	44007201	28/10/1970	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 HUELVA
905	FERNÁNDEZ URREA SEBASTIÁN	38790403	16/11/1962	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
906	FERNÁNDEZ REGUERA GUILLERMO	2507813	12/03/1957	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 BENIDORM (ALICANTE)
907	GONZÁLEZ MÉNDEZ AMAYA	47017804	09/12/1975	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 4 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
908	TORRELL MASSÓ MÓNICA	39870510	22/06/1968	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TARRAGONA
909	ALCANTARA ROLDÁN JESÚS LEONARDO	43408613	03/12/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
910	LLOVES FORNEIRO JOSÉ	36139217	14/10/1974	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 O CARBALLIÑO (OURENSE)
911	ORTIZ LEÓN FRANCISCO	42977646	26/03/1959	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CASTUERA (BADAJOZ)
912	CORNET ALONSO AGUSTÍN	39140632	22/06/1955	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TERRASSA (BARCELONA)
913	ISABAL MARCO FRANCISCO JAVIER	73188894	08/09/1959	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 LLEIDA
914	JUAN DIVIU MARÍA CINTA	33877115	22/08/1961	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 SABADELL (BARCELONA)
915	EGUIBURU ARIAS-ARGUELLO MARÍA COVADONGA	10585689	21/08/1958	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN REINOSA (CANTABRIA)
916	PULIDO DOMÍNGUEZ INMACULADA	10587424	12/02/1956	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 RIBEIRA (A CORUÑA)
917	LÓPEZ GARCÍA EMILIO	72530755	01/04/1967	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 BADALONA (BARCELONA)
918	PÉREZ MARTÍNEZ DAVID	74647933	05/03/1977	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)
919	ANGULO VIVARACHO RAFAEL	29092854	23/12/1957	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 5 TARRAGONA
920	SABAS SOLOGUESTOA SERGIO	14603559	04/09/1972	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INSTR GU2 (2420) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES GETXO (BIZKAIA)
921	SERRANO CÁRDENAS MARÍA DEL CARMEN	46641515	08/11/1966	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 BADALONA (BARCELONA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
922	MENDIA RODRÍGUEZ Mª YOLANDA	16293147	18/11/1970	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	SJ UPAD CIVIL (2445) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)
923	RUANO SÁNCHEZ MARÍA GEMA	7450242	28/06/1962	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TRUJILLO (CACERES)
924	COLSA LLOREDA MARÍA PALOMA	13759500	30/06/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CASTRO-URDIALES (CANTABRIA)
925	MILANES VELILLA SUSANA	5415962	05/10/1970	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
926	CAMPAYO SOLER PABLO	25422291	02/12/1973	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILLARREAL/VILA-REAL (CASTELLON)
927	PERALES CERDÁ MARÍA DOLORES	21661404	28/01/1974	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ALZIRA (VALENCIA)
928	SOTO CASANOVA MARÍA MERCEDES	50806908	22/09/1963	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 DAIMIEL (CIUDAD REAL)
929	GARCÍA BUENO MARÍA DOLORES	22960976	06/09/1966	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN JAVIER (MURCIA)
930	GONZÁLEZ LÓPEZ MARÍA ISABEL	22688197	19/06/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
931	DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ FRANCISCO	51411927	08/01/1971	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 COÍN (MALAGA)
932	IBÁÑEZ ÁLVAREZ JOSÉ ANTONIO	11409053	19/11/1963	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
933	FERNÁNDEZ TASA DAVID	52400287	29/07/1971	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 GRANOLLERS (BARCELONA)
934	GIMÉNEZ LEÓN PAZ	36071773	02/09/1964	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
935	ESPI BIBIAN CRISTINA	29170874	02/10/1968	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
936	BETANCOR RODRÍGUEZ MARGARITA	43653931	11/04/1963	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
937	GERMÁN ARMIGO MARÍA	25156307	21/12/1969	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 GIRONA
938	ZAFRA FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO	692207	24/11/1962	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
939	BOTE FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL	7015170	15/01/1968	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
940	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JORGE	36113491	20/04/1969	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
941	VALDEHITA GARCÍA JUAN JOSÉ	3095867	14/10/1967	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DÉNIA (ALICANTE)
942	GARRIDO NIEVAS ELOINA	25381325	08/08/1963	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 GANDIA (VALENCIA)
943	GÓMEZ PARDO MARÍA DEL CARMEN	46570038	28/06/1969	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 MATARÓ (BARCELONA)
944	RICO VILLENA ROSARIO	7564193	11/07/1971	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DÉNIA (ALICANTE)
945	PASCUAL CARRA MARÍA PILAR	52446994	23/09/1976	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CALAHORRA (LA RIOJA)
946	LORENCE MARTÍNEZ MARÍA LOURDES	28622926	19/01/1975	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
947	GARCÍA ROCES MARTA BERTA	32866160	03/01/1963	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VIVEIRO (LUGO)
948	MOYA NOVES SONIA	45634368	24/05/1977	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE MENORES Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
949	MORCILLO AGRAMUNT MARÍA ELENA	19004005	28/04/1975	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
950	MARTÍN GARCÍA JESÚS ÁNGEL	12722223	17/12/1958	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 GRANOLLERS (BARCELONA)
951	COLLAZO FERNÁNDEZ ROCIO	36102166	21/01/1975	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 REDONDELA (PONTEVEDRA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
952	CAMPS ORTIZ FRANCISCO JAVIER	37290814	22/04/1964	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
953	GARCÍA GARCÍA MARTA	6583955	09/06/1975	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MONZÓN (HUESCA)
954	SÁNCHEZ GARCÍA MIGUEL	46818997	21/02/1979	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 GAVÀ (BARCELONA)
955	NOGUERO CORONA ANA BELÉN	73198521	13/01/1976	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
956	PLAZA JUST ALBERTO	35078519	25/07/1964	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 GIRONA
957	LANDEIRA BARBERA MARÍA LUISA	46865876	14/05/1976	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
958	ARANDA PINOS JOSÉ LUIS	29086687	16/03/1964	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 TELDE (LAS PALMAS)
959	MUÑOZ GUTIÉRREZ OLGA MARÍA	50185431	01/12/1972	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)
960	DELGADO RAMÍREZ ALFONSO	30541747	02/02/1970	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 POSADAS (CORDOBA)
961	VEGA DE LAS HERAS DAMIAN	76718888	06/10/1971	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VERÍN (OURENSE)
962	GONZÁLEZ SANZ MARÍA ELENA	410410	11/03/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 REUS (TARRAGONA)
963	ÁLVAREZ GÓMEZ NURIA	51930385	01/06/1973	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
964	GAMONAL LOMBARDEO MARÍA SUSANA	9378294	04/07/1965	1 4 12	1 4 12	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 BETANZOS (A CORUÑA)
965	ORTEGA LÓPEZ-REY ROSA ANA	51630597	30/06/1967	1 1 20	1 1 20	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
966	MURILLO ROSADO RAQUEL	4182130	17/11/1969	1 1 20	1 1 20	20/11/2012	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 BADAJOZ
967	SANTAMARÍA FRAILE ALEJANDRO	51400251	27/05/1973	1 1 18	1 1 18	20/11/2012	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN HERRERA DEL DUQUE (BADAJOZ)
968	GARCÍA LORENZO CRISTINA	33318585	04/11/1970	1 0 25	1 0 25	20/11/2012	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 MATARÓ (BARCELONA)
969	RIOS FERNÁNDEZ LAURA	76637344	11/12/1987	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALGECIRAS (CADIZ)
970	SÁNCHEZ DURÁN GUADALUPE	53260676	16/05/1985	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)
971	POZO ALEMÁN CRISTINA	48612794	11/08/1986	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MANACOR (BALEARES)
972	ALCALÁ PEDRAJAS NICOLÁS	30811510	19/03/1970	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MOGUER (HUELVA)
973	SABATER VENTURA NEUS	20442558	22/07/1980	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ONTINYENT (VALENCIA)
974	SUAREZ DE SOUSA CANDELAS	2647631	02/09/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
975	PERIS LLORIS MARÍA ISABEL	44867629	13/01/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
976	GONZÁLEZ GARCÍA MARTA	71657573	04/11/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
977	RODRIGO GARCÍA MARÍA ELENA	45743316	27/03/1986	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PUENTE GENIL (CORDOBA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
978	FERNÁNDEZ RIENDA ALFREDO	44293934	29/12/1976	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PUERTO REAL (CADIZ)
979	PAZOS GÓMEZ ANA MARÍA	39454197	27/10/1986	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CANGAS (PONTEVEDRA)
980	IGLESIAS RABUÑAL LARA MARÍA	32830079	05/01/1977	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CARBALLO (A CORUÑA)
981	ROMÁN VIDARTE MARÍA IRIA	52452613	05/10/1978	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 PADRÓN (A CORUÑA)
982	GARCÍA GONZÁLEZ LUCÍA	36165071	06/01/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 O PORRIÑO (PONTEVEDRA)
983	GONZÁLEZ NAVARRO LAURA	45664253	20/05/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD G3 ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS DURANGO (BIZKAIA)
984	IGLESIAS TORRES HELENA	50126178	03/01/1986	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
985	BALLESTEROS HERRERO REBECA	70244679	30/06/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 LLEIDA
986	GÓMEZ GÓMEZ ISABEL	75099972	31/05/1978	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 EL EJIDO (ALMERIA)
987	GAVILÁN SANTOS MARÍA PURIFICACIÓN	28909804	14/02/1972	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MAHÓN (BALEARES)
988	DE ZEA BLANCH CONCEPCIÓN	36571026	26/02/1971	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
989	RUIZ MARÍN MARÍA AMPARO	48649564	18/10/1987	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 CIEZA (MURCIA)
990	PÉREZ VALLEJO CRISTINA DEL PINO	48520856	23/08/1985	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
991	GONZÁLEZ ROZAS MARÍA DEL CAMINO	9771831	08/11/1969	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA (BURGOS)
992	ROJANO SEPÚLVEDA MARÍA DE LA CRUZ	44360289	20/05/1980	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALGECIRAS (CADIZ)
993	CABRE CONESA AGUSTÍN	38128648	22/06/1973	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
994	AVE PRIETO ESTEFANÍA	36115604	01/04/1972	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
995	FERRANDO ABALOS JUAN	24357672	11/02/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 REQUENA (VALENCIA)
996	PEDRO ORTEGA SILVIA DE	2537244	06/07/1972	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CANGAS (PONTEVEDRA)
997	CASERO REMON BELÉN	4609403	21/01/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)
998	PÉREZ ORELLANA CATALINA MARÍA	74923567	21/08/1976	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ROTA (CADIZ)
999	GARCÍA HERNÁNDEZ AGUSTÍN CARLOS	44700058	08/09/1974	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 TELDE (LAS PALMAS)
1000	CORRAL RISCO ANA ISABEL	7965319	24/05/1976	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TELDE (LAS PALMAS)
1001	ORTEGA ALMIRÓN MARÍA DEL CARMEN	23044216	17/07/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CIEZA (MURCIA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1002	CASTEL FRIAS ANA	20464987	12/07/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA (SORIA)
1003	GUTIÉRREZ MARTÍN JUAN JOSÉ	3907803	04/03/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1004	GIL CORDOBES MARÍA DEL MAR	30640888	15/09/1971	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD G3 ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS GERNIKA-LUMO (BIZKAIA)
1005	SANJUAN FERRER PALOMA	24391120	24/06/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SEGORBE (CASTELLON)
1006	RUIZ GÓMEZ JOSÉ ALBERTO	9202425	21/06/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CORIA (CACERES)
1007	COLORADO SÁNCHEZ CRISTINA	80072888	31/05/1979	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN OLIVENZA (BADAJOZ)
1008	RAMOS DEVEZA MARÍA	44082322	06/09/1975	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE MENORES LUGO
1009	RODRÍGUEZ LIZANA INMACULADA	14318856	03/07/1980	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)
1010	ZAPATA VÁZQUEZ DE PRADA RAFAEL MIGUEL	72819155	14/06/1986	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA)
1011	FERNÁNDEZ ARBESU RAQUEL	11437219	21/09/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
1012	GOMARA MARTÍNEZ VEGA MARÍA	72885722	06/05/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 BARBASTRO (HUESCA)
1013	TORRES PERIS OLGA	20813527	15/11/1973	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 EIVISSA (BALEARES)
1014	ARANGO CAMPUZANO PAULA ANDREA	44474206	18/02/1975	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN CELANOVA (OURENSE)
1015	MARTÍNEZ GONZÁLEZ RAQUEL	71516242	24/08/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CAMBADOS (PONTEVEDRA)
1016	CASTRO CERQUEIRO AMAGOYA	52496436	16/02/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MARÍN (PONTEVEDRA)
1017	VÁZQUEZ ÁLVAREZ PATRICIA	44479124	21/10/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN RIBADAVIA (OURENSE)
1018	ALBENDIN CEPAS ALMUDENA	30980060	28/07/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 PUENTE GENIL (CORDOBA)
1019	BELTRÁN FERNÁNDEZ LUCÍA	53561404	31/07/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 BADALONA (BARCELONA)
1020	DE LIS FERREIRO OLALLA	77410219	19/05/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1021	GUILLÉN MARZAL SARA	24380344	03/08/1979	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 VINARÒS (CASTELLON)
1022	COLLADO CORDERO MARÍA ISABEL	76027474	20/07/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)
1023	RUIZ BERNAL MARÍA	74365600	05/10/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
1024	PUEBLA SOTO CARMEN ROSA	12777111	30/09/1975	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1025	MARCOS LUCERO ALFONSO	50756099	31/05/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MANACOR (BALEARES)
1026	DÍEZ DÍAZ LIDIA	11851132	08/10/1985	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)
1027	CASTILLO ALIAGA MARÍA CARMEN	73767208	02/01/1971	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ONTINYENT (VALENCIA)
1028	ORDOVAS GARCÍA TAMARA	17451358	03/11/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1029	PÉREZ FRANCO ESTELA MARÍA	25681339	09/07/1975	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
1030	MARTÍNEZ LÓPEZ FRANCISCA	23278788	22/06/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 EIVISSA (BALEARES)
1031	CARBONERO LOZOYA MARÍA CRISTINA	28964544	23/03/1978	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN LOGROSÁN (CACERES)
1032	CIFRIAN GIL GISELA	78900011	17/05/1980	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TELDE (LAS PALMAS)
1033	FERRERUELA HERNÁNDEZ PAOLA	73157106	15/02/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
1034	ESPAÑA SÁNCHEZ ANTONIO	30951915	30/07/1979	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 ALGECIRAS (CADIZ)
1035	PÉREZ MONTAÑO MARÍA CARMEN	47500964	02/09/1980	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MARCHENA (SEVILLA)
1036	OSUNA MANJÓN-CABEZAS MARÍA JOSÉ	26975656	20/09/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN BAENA (CORDOBA)
1037	RIVERA MIÑAN CAROLINA	74656101	22/03/1978	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)
1038	BARNES RODRÍGUEZ DE VERA VIRGINIA	48400839	10/02/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 TOTANA (MURCIA)
1039	CASTIÑEIRA REPULLO MARÍA BLANCA	30801733	07/03/1973	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN ALMAGRO (CIUDAD REAL)
1040	PAREJA SANZ JOSÉ JULIO	70055946	31/08/1985	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 TOMELLOSO (CIUDAD REAL)
1041	OROS MARTÍN MIGUEL	72996589	19/05/1986	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MONZÓN (HUESCA)
1042	MARTÍNEZ LÓPEZ VICTOR MANUEL	27459906	04/11/1964	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1043	PERTUSA GUILLÉN MÁXIMO JOSÉ	33487353	28/07/1973	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 NOVELDA (ALICANTE)
1044	FANDOS LLOPIS JUDIT	47629262	14/03/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 TORTOSA (TARRAGONA)
1045	ALVAREDO ARIAS ANTIA	33541905	22/05/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
1046	MARI RUIZ BEGOÑA	43108608	03/02/1977	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1047	GARCÍA FERNÁNDEZ JAVIER	73001075	02/05/1987	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE MENORES TARRAGONA
1048	ALONSO CHAMORRO RAQUEL	71558859	15/02/1987	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 MELILLA
1049	CARLOS HERREROS SARA	47063669	25/04/1980	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MATARÓ (BARCELONA)
1050	PONTIVEROS GARCÍA EVA MARÍA	78686342	10/01/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)
1051	VEGA GARCÍA FRANCISCA	74831018	02/07/1979	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 2 ALGECIRAS (CADIZ)
1052	SANCHO ALONSO JESÚS	25692804	19/12/1973	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 1 MELILLA
1053	MARTÍN ALMAJANO VERÓNICA	72977366	09/06/1984	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 REUS (TARRAGONA)
1054	GONZÁLEZ SÁNCHEZ CARLOS	52412720	29/06/1978	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)
1055	BURGOS DE LA PRIDA MARTA	50877470	08/01/1979	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 MATARÓ (BARCELONA)
1056	MORENO FERNÁNDEZ LIVIA MARÍA	44051867	05/04/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN UBRIQUE (CADIZ)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1057	HERRERIAS RODRÍGUEZ ISABEL	75248705	21/12/1982	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 EL EJIDO (ALMERIA)
1058	CABRERA GALEANO OSCAR RICARDO	47069941	11/08/1988	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 TERRASSA (BARCELONA)
1059	CASTILLO SERNA BLANCA AIDA	73558449	17/05/1981	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 6 GIRONA
1060	VALDELVIRA GARCÍA MIRIAM	47071604	23/12/1985	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN CLEMENTE (CUENCA)
1061	IGLESIAS ANTOLINEZ REBECA	50857901	27/03/1975	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 MANZANARES (CIUDAD REAL)
1062	ARDANAZ DOMENCH JOSUNE	72704230	09/08/1977	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 AOIZ/AGOITZ (NAVARRA)
1063	ANAYA GONZÁLEZ MARÍA TERESA	7990310	19/08/1983	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)
1064	DE LA TORRE MARTÍNEZ MARÍA ISABEL	23030075	26/12/1977	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SAN JAVIER (MURCIA)
1065	GONZÁLEZ VALLEJO BELÉN	2905900	20/10/1974	0 11 17	0 11 17	15/04/2013	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1066	DE LA RUBIA COMOS LUIS	22699469	10/08/1968	0 11 12	0 11 12	17/11/2011	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MASSAMAGRELL (VALENCIA)
1067	SORIA SAEZ MARÍA LUISA	7223661	11/09/1965	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 RUBÍ (BARCELONA)
1068	CAMPOS VALLEJO FRANCISCO JAVIER	52190842	20/09/1963	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 12 BARCELONA
1069	MONTAÑES SABORIT MARÍA MAGDALENA	18959858	01/07/1965	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLON)
1070	CAURIN CAURIN NURIA	52151148	13/04/1969	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 GRANOLLERS (BARCELONA)
1071	CASASNOVAS RASAL ANA ISABEL	25131522	22/03/1963	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 GIRONA
1072	PUERTO ROVIRA ESTER	24352658	03/09/1971	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TERRASSA (BARCELONA)
1073	AGUILAR GÓMEZ MARÍA CRUZ	7871995	15/11/1966	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (LAS PALMAS)
1074	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE LOS RIOS ARANTXAZU	5372680	21/03/1960	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN SEPÚLVEDA (SEGOVIA)
1075	RODRÍGUEZ DÍAZ SONIA	35102535	07/01/1967	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 TERRASSA (BARCELONA)
1076	VAL ZURITA ALFONSO	71120839	12/11/1980	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)
1077	CALERO NAVARRO ESTHER FRANCISCA	24345927	21/04/1969	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MONCADA (VALENCIA)
1078	GRACIA MOR MONTSERRAT	38446450	27/04/1969	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1079	MEDINA MEDINA PEDRO RAFAEL	33985066	02/06/1967	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 HUELVA
1080	GÓMEZ SANTAMARÍA JESÚS MIGUEL	50041740	29/05/1961	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 4 REUS (TARRAGONA)
1081	TERROBA GAGO JULIAN	33929772	02/10/1969	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 TERRASSA (BARCELONA)
1082	BALLESTEROS GARCÍA DAVID MARCOS	46729439	17/04/1971	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
1083	SÁNCHEZ BRIZUELA MARÍA JOSÉ	50042209	24/10/1960	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MATARÓ (BARCELONA)
1084	GARCÍA MEROÑO GEMMA MARGARITA	39675011	26/02/1964	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 EL VENDRELL (TARRAGONA)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1085	GARCÍA TORRES MARÍA LORENA	44294846	31/05/1975	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CABRA (CORDOBA)
1086	MARTÍNEZ OLIVA ERNESTO	29108004	11/01/1972	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 GRANOLLERS (BARCELONA)
1087	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS	7955956	24/11/1969	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MONTIJO (BADAJOZ)
1088	ASENSIO ECHEGOYEN RAÚL	25183966	30/07/1978	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 TUDELA (NAVARRA)
1089	PASCUAL BOTE MARÍA ÁNGELES	51914824	21/01/1968	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 TORREVIEJA (ALICANTE)
1090	GONZÁLEZ VEGA RITA MARÍA	42861624	10/11/1971	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 3 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1091	GRACIA SOTOS CARMEN	9278189	13/08/1963	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 CASTRO-URDIALES (CANTABRIA)
1092	LUCAS ALMARZA LEIRE DE	78887750	30/04/1978	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD G3 ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS GERNIKA-LUMO (BIZKAIA)
1093	DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ ESTHER	52187207	30/11/1971	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 XÀTIVA (VALENCIA)
1094	PÉREZ GARCÍA EMILIANA	3086139	08/08/1962	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 MANACOR (BALEARES)
1095	ANTÓN DE LA CALLE ELSA MARÍA	9317350	10/08/1966	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CASTRO-URDIALES (CANTABRIA)
1096	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ YOLANDA MIRIAM	76862939	27/12/1974	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 AYAMONTE (HUELVA)
1097	ARAGÓN BRAVO DIEGO JESÚS	79202169	17/02/1976	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 AYAMONTE (HUELVA)
1098	AYATS RIUS ANNA MARÍA	46672818	28/04/1973	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	-	JDO. DE LO PENAL Nº 5 GIRONA
1099	BAUTISTA TORRES MARCO ANTONIO	74220389	16/06/1980	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 CARLET (VALENCIA)
1100	VIÑAS TORMO PALOMA	35101639	28/10/1966	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ARONA (TENERIFE)
1101	ISLA VALDANZO BEGOÑA	47648414	10/01/1980	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MARTORELL (BARCELONA)
1102	GONZÁLEZ COLLADO MARÍA JOSÉ	9199951	09/08/1975	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 AYAMONTE (HUELVA)
1103	NOVO FERNÁNDEZ SINESIO	44455645	27/06/1977	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 REDONDELA (PONTEVEDRA)
1104	FERREIRO PARDO JOSÉ LUIS	37321011	03/04/1960	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 15 BARCELONA
1105	SÁNCHEZ RONCERO SILVIA MARÍA	71129819	30/05/1978	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 MANACOR (BALEARES)
1106	PINEL SAEZ CONCEPCIÓN	53018850	27/06/1977	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 INCA (BALEARES)
1107	LÓPEZ GÓMEZ ANA MARÍA	34978238	12/11/1970	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 CAMBADOS (PONTEVEDRA)
1108	REBOLLO SANZ EDUARDO JOSÉ	7963634	26/05/1970	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
1109	COLLANTES VEGA MERCEDES	12755375	08/06/1969	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 TERRASSA (BARCELONA)
1110	MARTÍNEZ ROVIRA ESTEBAN	46666751	16/03/1977	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
1111	GONZÁLEZ IGLESIAS JESÚS MARÍA	33970285	26/02/1965	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 ZAFRA (BADAJOZ)
1112	VILARDAGA HERMOSILLA QUERALT	77740962	04/02/1979	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 7 MANRESA (BARCELONA)
1113	SENIS FERNÁNDEZ ANTONIO	4594984	19/02/1974	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)

Secretarios Judiciales en proceso de consolidación de la Tercera categoría

Número de orden	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Fecha nacimiento	Total servicios prestados A M D	Servicios prestados Categoría A M D	Fecha primer Nomb.	Cuerpo procedencia	Destino
1114	MESA PEREA LAURA	30225518	20/03/1983	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 4 AYAMONTE (HUELVA)
1115	PUIGPINOS ROVIRA ANNA	47787867	13/09/1980	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 6 MARTORELL (BARCELONA)
1116	CARMONA BORREGO MARTA	52991786	16/10/1979	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 REQUENA (VALENCIA)
1117	TORTOSA SÁNCHEZ LUIS JOSÉ	77603632	03/05/1967	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 8 RUBÍ (BARCELONA)
1118	LÓPEZ SANZ MARÍA ENCARNACIÓN	12374964	24/09/1966	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	SJ UPAD 1ª INST.E.INTR (2421) UPAD ORGANOS UNIPERSONALES IRUN (GIPUZKOA)
1119	PORRAS BRAVO ADOLFO	50204568	19/04/1979	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 MANZANARES (CIUDAD REAL)
1120	CAMPAÑA SALAS SONIA	44044243	06/09/1976	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO SOCIAL ALGECIRAS (CADIZ)
1121	CLIMENT ESTEVE MARÍA VICTORIA	29175183	04/04/1970	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 5 ARENYS DE MAR (BARCELONA)
1122	LINARES CARRERAS INMACULADA CONCEPCIÓN	75756356	18/09/1977	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO PENAL Nº 4 ALGECIRAS (CADIZ)
1123	GONZÁLEZ MARRERO MIRIAM	78497721	20/10/1980	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 TELDE (LAS PALMAS)
1124	MOLINA CASTAÑER ESTHER	48440493	01/04/1980	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA)
1125	HINOJO CERVIÑO MARÍA DEL CARMEN	77805371	31/08/1981	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIM.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 2 ESTEPA (SEVILLA)
1126	GARCÍA MUÑOZ DAVID	2267459	20/02/1978	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ARONA (TENERIFE)
1127	CANTO HIDALGO BELÉN CARIDAD	31856404	07/12/1971	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 2 ARRECIFE (LAS PALMAS)
1128	REYES ALMEIDA AGUEDA JESÚS	44310806	27/06/1975	0 4 7	0 4 7	25/11/2013	C.U.	JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SECRETARIOS JUDICIALES
Primera categoría

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
30413926	ALEJANDREZ PEÑA PEDRO	Primera	34
75215855	ALFONSO RODRIGUEZ JUANA	Primera	33
37286418	AMIGO DE PALAU MARIA ANTONIA	Primera	17
17831377	BARRIL ROCHE MARIA TERESA	Primera	24
50401925	BARTOLOME PARDO Mª DE LOS ANGELES	Primera	10
14876496	BASARRATE AGUIRRE MARIA BEGOÑA	Primera	46
4549967	BELLON MOLINA FRANCISCO ANTONIO	Primera	57
28885482	BERENGUEL FERNANDEZ ROSA MARIA	Primera	47
42764088	BRINGAS ZABALETA MARIA TERESA	Primera	43
42007704	CALAMITA DOMINGUEZ MARIA EUGENIA	Primera	25
32426345	CANCELA RAMIREZ DE ARELLANO PILAR	Primera	52
12373517	CANTO BAÑOS SUSANA DEL	Primera	78
10011845	CAO BARREDO MARIA ANTONIA	Primera	11
42946900	CAPO DELGADO MARIA DULCE	Primera	9
12364797	CASADO DIAGO MARIA ANGELA	Primera	59
7847074	CASADO RODRIGUEZ ERNESTO PEDRO	Primera	62
19827194	CERDAN PARDO MANUEL	Primera	54
6984790	COLLADO CASTAÑO ISABEL MARIA	Primera	20
37678299	CORTES DEL BLANCO JOSE LUIS	Primera	30
2503227	CUESTA Y DE QUERO SONSOLES DE LA	Primera	70
13067838	DAVILA OLIVEDA JOSE IGNACIO	Primera	56
36079668	DIZ BARJA JOSEFINA	Primera	74
17217960	DOMIQUE Goya ENRIQUE CARLOS	Primera	41
16515717	ESCUDERO CINCA MARIA JESUS	Primera	75
10557717	ESTRADA RUIZ JAIME	Primera	49
9265246	FERNANDEZ CORREDERA MARIA DEL CARMEN	Primera	61
10006718	FERNANDEZ-TRIGALES PEREZ Mª MERCEDES ROSARIO	Primera	15
41895402	FERNANDEZ-VIVANCOS ROMERO GUILLERMO	Primera	2
12211511	FERRERO PASTRANA ILDEFONSO	Primera	16
24291453	GARCIA FERNANDEZ VICENTE	Primera	32
3414371	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	Primera	53
50813420	GARCIA SANCHEZ EVARISTO JOSE	Primera	65
76848449	GARCIA TEZANOS GABRIEL	Primera	51
34575348	GARCIA TOBIO JOSE ALBERTO	Primera	55
12160406	GARCIA VEGA ALBERTO CARLOS	Primera	6
7769089	GARCIA-MIGUEL GARCIA-ROSADO MANUEL ANGEL	Primera	12
6943190	GOLDEROS CEBRIAN JOSE	Primera	72
13117527	GOMEZ ARROYO JOSE LUIS	Primera	64
9184408	GONZALEZ JIMENEZ LUIS	Primera	42
5251823	GUERRERO EGIDO MARIA DEL ROCIO	Primera	58
9284926	GUTIERREZ LUCAS CARLOS ENRIQUE	Primera	63
40289000	HERRAIZ PAGES JAIME	Primera	39
25143404	JULVEZ LEON MARIA ANGELES	Primera	45
50824140	LARA HERNANDEZ RAFAEL	Primera	66
3070016	LLORENTE GARCIA JOSE MARIA	Primera	7
12703911	LOBON DEL RIO JOSEFA	Primera	69
27502716	LORENTE LAMARCA AURELIA	Primera	68
4138226	LUNA ALONSO LORENZO SANTIAGO	Primera	28
25927481	LUQUE NAVARRO ANGEL LUIS	Primera	31

Índice alfabético. Primera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
10808891	MARTINEZ MAZON RAQUEL	Primera	18
35038760	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN	Primera	76
75297828	MELGAR SALVAGO TRINIDAD	Primera	29
391040	MORENO BALLESTEROS ANGELES	Primera	67
4548240	OLARTE MADERO JESUS	Primera	21
28378566	OLIVER SANCHEZ MARIA JOSEFA	Primera	5
12189580	PALENCIA GUERRA HERMINIA	Primera	1
23219723	PARRA GARCIA JAVIER LUIS	Primera	22
1490245	PENA LOPEZ AGUSTIN IGNACIO	Primera	27
39634605	PERA BAJO MARIA JESUS	Primera	8
1355835	RICO FERNANDEZ JUAN ANTONIO	Primera	4
5629076	RIVERA JIMENEZ SANTIAGO	Primera	60
10798885	RODRIGUEZ BALBIN JOSE LUIS	Primera	48
71008085	RODRIGUEZ SANTOS CESAREO	Primera	44
11789057	RODRIGUEZ VALLS Mª TERESA	Primera	73
22546166	ROJO VEGA RAQUEL	Primera	40
50264043	ROMERO JIMENEZ FELIX MARIA	Primera	3
13104174	RONDA ARAUZO Mª LOURDES	Primera	35
17690766	SANCHEZ GUIU LUIS IGNACIO ANDRES	Primera	13
5623866	SANCHEZ RUIZ MARIA NIEVES	Primera	50
32377673	SANCHEZ TATO EDUARDO ANTONIO	Primera	71
50795322	SANCHO MAYO GLORIA	Primera	26
245212	SANZ HOYOS TOMAS	Primera	14
72961807	SANZ LORENTE SANTIAGO	Primera	19
18398729	SORIANO MINGUILLON MANUEL	Primera	38
31243765	TRONCOSO GIL ROSARIO	Primera	37
26198569	VILAR MENDIETA JOSEFA	Primera	23
15239342	VIOLET VAZQUEZ ROSA MARIA	Primera	36
15799747	VITRIAN ARIGITA MARIA MERCEDES	Primera	77

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SECRETARIOS JUDICIALES
Segunda categoría

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
15916416	ABANCENS IZCUE ANA ISABEL	Segunda	584
10520453	ABRIL MENDEZ JULIO EMILIANO	Segunda	67
50662226	ABRUÑA PUYOL Mª VICTORIA	Segunda	1303
2906692	ACEDO ALBENDEA MARIA JOSE	Segunda	2427
8746917	ACEDO RODRIGUEZ ANTONIO LUIS	Segunda	20
53001244	ACERO RINCON MARTA	Segunda	2450
43360592	ACEVEDO IZQUIERDO SILVIA DE LOS REYES	Segunda	2338
24143332	ACOSTA MONTERO GLORIA MARIA	Segunda	821
19837562	ADALID HINAREJOS Mª JOSEFA	Segunda	1152
28353000	ADAME BARBETA ROSA MARIA	Segunda	176
45068406	ADELLAC PASCUAL MARIA DEL CARMEN	Segunda	187
5242414	AFAN DE RIVERA JIMENEZ Mª NIEVES	Segunda	1203
15829838	AGER ICIZ VICENTE	Segunda	319
2698200	AGUADO RAMO MARIA SOCORRO	Segunda	443
13298246	AGÜERA PEÑAFIEL MARIA DOLORES	Segunda	1614
75214336	AGÜERO SANCHEZ MARIA GADOR	Segunda	259
50413055	AGUILAR RIBOT JOSE IGNACIO	Segunda	362
43404259	AGUILAR ZANUY ANA MARIA	Segunda	2510
25979726	AGUILERA DELGADO ANA	Segunda	1053
51322597	AGUILERA ORIHUEL AURORA	Segunda	129
45062674	AGUILERA RIVERA CONCEPCION	Segunda	53
15851837	AGUIRRE EL SO JUANA MARIA	Segunda	838
18194604	AGUIRRE LARUMBE RAQUEL MARIA	Segunda	1225
11395316	AGUIRREAZCUEENAGA INCHAUSTI Mª BEGOÑA	Segunda	1125
13788301	ALAMEDA LOPEZ Mª ARANZAZU	Segunda	1755
21491209	ALARCON FRASQUET MARIA AMPARO	Segunda	2508
28560654	ALARCON HERRERA FEDERICO	Segunda	518
52255731	ALBA BERNAL MARIA PAZ	Segunda	1550
27441356	ALBA VEGA ANGEL DE	Segunda	1489
15961760	ALBERDI AZUABARRENA FRANCISCO DE JAVIER	Segunda	1675
17990892	ALBERT ARTERO ISABEL MARIA	Segunda	597
50413146	ALBERT BENEYTO MARIA REMEDIOS	Segunda	165
9362888	ALBES BLANCO MARIA CONCEPCION	Segunda	1371
9269141	ALBES GONZALEZ JOSE RAMON	Segunda	1493
17421363	ALCALDE SANCHEZ CESAR AUGUSTO	Segunda	410
11792077	ALCAÑIZ RODRIGUEZ ALFREDO	Segunda	2139
25996847	ALCARAZ GONZALEZ SOLEDAD	Segunda	1385
6191443	ALCAZAR MARTINEZ BLANCA	Segunda	284
17145526	ALCON OMEDES MILAGROS	Segunda	711
30557066	ALCORTA BILBAO MARIA JESUS	Segunda	1573
14579226	ALDAMA ULIBARRI JUAN ANTONIO	Segunda	261
80128703	ALEJANDRE DURAN MARIA JOSE	Segunda	1160
50802060	ALESANCO RETANA MARIA DEL CARMEN	Segunda	764
27257750	ALFEREZ MORAL DONATO GABRIEL	Segunda	560
80121896	ALFEREZ DE LA ROSA VICTORIA ALICIA	Segunda	805
5251726	ALHAMBRA PEÑA ENCARNACION	Segunda	1374
15965562	ALLENDE ESCOBES SUSANA	Segunda	1170
34006395	ALMAGRO GARCIA YOLANDA	Segunda	2332
17206141	ALMELA BENDICHO JOSE IGNACIO	Segunda	582

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
50701847	ALONSO BERRIO-ATEGORTUA ELENA MERCEDES	Segunda	370
12729344	ALONSO BURGOS MARIA DEL CARMEN	Segunda	753
10178858	ALONSO CRESPO EVELIA	Segunda	208
35112622	ALONSO GARCIA NURIA	Segunda	2165
2704673	ALONSO GONZALEZ-ALEGRE MARIA DEL PILAR	Segunda	508
6528862	ALONSO GRAÑEDA MARIA ISABEL	Segunda	383
19821311	ALONSO GURREA RICARDO	Segunda	1544
2869589	ALONSO MAGAZ MARIA ELENA	Segunda	1600
7830833	ALONSO MARCOS Mª DOLORES	Segunda	1255
12225320	ALONSO ORTEGA Mª DE LOS ANGELES	Segunda	241
15844728	ALONSO RAMOS JOSE	Segunda	804
50451814	ALONSO RAMOS LAURA MARIA	Segunda	1967
26435085	ALONSO RODENAS ANA	Segunda	381
9275222	ALONSO RODRIGUEZ MARIA ANGELES	Segunda	1047
43655332	ALONSO SANTANA MARIA GLORIA	Segunda	1949
10791493	ALONSO VELASCO ISABEL	Segunda	459
28617998	ALONSO VILLALBA SONIA MARIA	Segunda	2371
13133121	ALONSO-LECIÑANA SAEZ ALBERTO	Segunda	1486
22952589	ALONSO-LUZZY CAMPOY RAMON	Segunda	1687
38105919	ALTABAS CARDENAS MARIA BELEN	Segunda	1658
15969390	ALTOLAGUIRRE ZUAZOLA CRISTINA	Segunda	1813
31628361	ALVARADO FERNANDEZ INES	Segunda	1274
10800951	ALVAREZ AVELLO MARIA DEL CARMEN	Segunda	669
1495731	ALVAREZ FERNANDEZ MARIA AMELIA	Segunda	456
24191903	ALVAREZ GALINDO MARIA CAROLINA	Segunda	977
11832196	ALVAREZ GARCIA CONCEPCION	Segunda	2080
9806365	ALVAREZ GARCIA LORENA	Segunda	2405
10887659	ALVAREZ GORGOJO ADRIANA	Segunda	2009
25143587	ALVAREZ GRACIA MARIA ROSA	Segunda	1193
75007276	ALVAREZ LOPEZ MARIA LUISA	Segunda	673
71873670	ALVAREZ MORALES Mª NIEVES	Segunda	1205
43390093	ALVAREZ PERALVAREZ URBANO	Segunda	1317
14599001	ALVAREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	Segunda	1377
9717668	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	Segunda	1738
13655245	ALVAREZ SASTRE RICARDO	Segunda	12
50416243	ALVAREZ SERRANO Mª LUISA	Segunda	1213
28577726	ALVAREZ TRIPERO MARIA DEL CARMEN	Segunda	266
71688968	ALVAREZ TURANZAS MIGUEL ANGEL	Segunda	464
9436148	ALVAREZ VEGA SILVIA	Segunda	2239
24266348	ALVAREZ DE MORALES.DAV. PONCE DE LEON AGUEDA AFRICA	Segunda	1926
2513987	ALVARIÑO VEIGA CONCEPCION	Segunda	782
36036370	ALVARO ARAUJO MANUEL	Segunda	262
9255721	ALVARO PRIETO MARIA SOCORRO DE	Segunda	603
30637165	AMANN SUBINAS BEGOÑA	Segunda	2216
6984267	AMARILLA JIMENEZ JOSEFINA	Segunda	1426
8780606	AMARO DE TENA DAVILA ANTONIA JUANA	Segunda	830
50440591	AMBRONA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	Segunda	1602
25144763	AMOR SANZ JOSE LUIS	Segunda	1593
2504223	AMORENA DONCEL CARLOS	Segunda	880

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
29088117	ANADON SANCHO MARIA SOLEDAD	Segunda	1649
15996378	ANAUT ARREDONDO SOFIA	Segunda	1638
2484669	ANAYA DEL OLMO MIGUEL	Segunda	545
75017153	ANDRADE GUTIERREZ SONIA	Segunda	2246
3433554	ANDRES HERRERO MARIA ASUNCION DE	Segunda	371
3466330	ANDRES HERRERO MARIA DEL ROSARIO	Segunda	2005
7935593	ANDRES PARRA CARMEN	Segunda	221
11957634	ANDRES RAMOS MARIA ELENA	Segunda	2236
9263173	ANDRES SANTOS ARTURO	Segunda	1295
74163627	ANDREU FERNANDEZ-ALBALAT MARIA DEL PILAR	Segunda	385
22458144	ANGEL CUBELLS JOSE MIGUEL DE	Segunda	775
39830951	ANGUERA CEDO MONTSERRAT	Segunda	776
3805706	ANGULO GASCON MARIA PAZ	Segunda	2272
9298927	ANOCIBAR PEREZ MARIA JOSE	Segunda	1851
25890413	ANSINO PEÑA REYES	Segunda	15
25181637	ANTOLIN MARTIN MARIA ISABEL	Segunda	2451
12771246	ANTOLIN MUÑOZ JULIO IVAN	Segunda	2302
75240540	ANTOLIN PEREZ MARIA JOSE	Segunda	2394
12366300	ANTOLIN PEREZ Mª GEMA	Segunda	1554
16564809	ANTON ESTEFANIA MARIA ELBA	Segunda	1980
16263910	ANTON GUJARRO VIRGINIA	Segunda	1552
52400576	ANTONIN ABOS MERITXELL	Segunda	2162
52974648	AÑIBARRO FERNANDEZ MARIA	Segunda	2429
24339187	APARICIO URTASUN CARLOS MIGUEL	Segunda	1976
25161591	AQUILLUE SEBASTIAN SUSANA	Segunda	2513
4556994	ARAGON CORREDOR FERNANDO	Segunda	209
10551002	ARAGON DIEZ MARIA ANGELES	Segunda	1795
43014872	ARANDA BOSCH LAUREANO	Segunda	1670
36125144	ARAUJO PRIETO MONICA SUSANA	Segunda	2146
5640124	ARAUJO VIDAL ENRIQUE	Segunda	1810
35044656	ARBOS LLOBET RAMON	Segunda	1959
5221670	ARCE MILLA ELENA DE	Segunda	69
7948007	ARCO ESTEVEZ MARIA AMELIA DEL	Segunda	975
30792014	ARCOS MORA MARIA CARMEN	Segunda	2491
38486864	ARENAS AVILA RODRIGO	Segunda	1643
14565939	ARENAS GARCIA LOURDES	Segunda	1098
6558265	ARENAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	2224
18207744	ARENAZA SARASOLA MAITE	Segunda	1736
10519061	ARIAS GARCIA JUAN ANTONIO	Segunda	1866
50803314	ARIAS JUNGUITO MARIA	Segunda	1338
30625637	ARIAS LOPEZ DE LACALLE VIRGINIA	Segunda	1875
32878201	ARIAS MENESES MARIA DE LOS ANGELES	Segunda	2197
25962160	ARIAS MUÑOZ ELVIRA Mª DEL CARMEN	Segunda	503
25988557	ARIAS MUÑOZ FRANCISCA PAULA	Segunda	1395
275357	ARIAS DE LA MATA LUZ MARIA DE LOS DOLORES	Segunda	355
28883365	ARIZA FERNANDEZ MARIA AUXILIADORA	Segunda	1778
15349977	ARIZAGA CIORDIA MARIA JESUS	Segunda	406
9773684	ARMESTO BAYON ELENA	Segunda	2344
2869233	AROZAMENA LASO MARIA CRISTINA	Segunda	1775

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
9304323	ARRATE GARCIA RAQUEL	Segunda	1919
44576880	ARREBOLA DEL VALLE AURORA MARIA	Segunda	2199
15359075	ARREGUI URIZAR NATIVIDAD	Segunda	963
12729299	ARRIAZU RODRIGUEZ NIEVES	Segunda	754
14879117	ARRIBALZAGA RUIZ BEGOÑA	Segunda	638
21438365	ARRIBAS ATIENZA PATRICIO	Segunda	2467
12241666	ARRIBAS CARRION JOSE LUIS	Segunda	772
50411498	ARRIBAS MARTIN MIGUEL ANGEL	Segunda	1103
15345061	ARRIETA LOREDO ENRIQUE	Segunda	353
30557746	ARROYO MARTIN Mª BEGOÑA	Segunda	1227
17220043	ARTAL FAULO CARLOS JESUS	Segunda	1532
50685208	ARTEAGA GARCIA MARIA ANGELES	Segunda	278
46875054	ARTIGOT FABRE MARIA ELENA	Segunda	1970
10187598	ARTIME VELARDE AGUSTIN	Segunda	1301
2546558	ASENJO SANZ LUCIA	Segunda	2312
5623442	ASENSIO LOPEZ LUCIO	Segunda	1207
7817745	ASENSIO SEVILLANO MARIA RITA	Segunda	940
15907780	ASTIGARRAGA LOINAZ MARIA JESUS	Segunda	314
43600767	ATARES CALAVIA MARIA AMPARO	Segunda	578
792847	ATIENZA LOPEZ JOSE IGNACIO	Segunda	1370
51416811	ATIENZA MARCOS DAVID	Segunda	2112
9676102	ATILANO BARREÑADA FRANCISCO	Segunda	1322
41094740	AUNOS GOMEZ RAQUEL	Segunda	363
4559536	AUÑON ABALOS EMILIO	Segunda	893
17131792	AURED PEREZ ESTHER	Segunda	162
43061293	AVELLA SALOM MARGARITA	Segunda	1663
804721	AVILA DE ENCIO JUAN MANUEL	Segunda	1404
13112024	AVILES JEREZ Mª ANGELES	Segunda	1114
11832883	AVILES NAVARRO MARIA	Segunda	2040
45466378	AYALA COLL ANA MARIA	Segunda	2469
51411528	AYMERICH ROJAS CARLOS	Segunda	2008
29046524	AZCARATE RODRIGUEZ JOSE MARIA	Segunda	2512
28691494	AZNAR LOPEZ MARIA ISABEL	Segunda	966
17712466	AZNAR PRIMICIA Mª TERESA	Segunda	1139
46210249	AZOFRA GARCIA ANGEL	Segunda	146
24702391	AZUAGA JURADO MANUEL	Segunda	1542
24853511	BACA CASTELLANO MARIA CINTA	Segunda	367
33292963	BADIA DEL RIO JOSÉ MARÍA	Segunda	2443
43251522	BADRA RAVELO ANTONIO ISAAC	Segunda	2125
37737526	BAILACH MINGUELL MARIA TERESA	Segunda	2087
10850202	BALBIN LLERA MIGUEL ANGEL	Segunda	1634
1392515	BALLANO GONZALO JUAN JOSE	Segunda	113
78058437	BALLESTE ORPINELL JOSE	Segunda	2271
5381215	BALLESTEROS FERNANDEZ PILAR	Segunda	929
4587711	BALLESTEROS FERNANDEZ VICTOR	Segunda	1908
5251966	BALLESTEROS GONZALO ISABEL	Segunda	164
16544734	BALLESTEROS PEREZ DE ALBENIZ MARIA ARANZAZU	Segunda	1333
12231932	BALMORI MARTINEZ BEATRIZ	Segunda	528
46313891	BAÑERES SANTOS MARIA DEL CARMEN	Segunda	98

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
43014250	BAÑON GONZALEZ JUAN LUIS	Segunda	1336
10176310	BAQUERO DURO GREGORIO ANTONIO	Segunda	749
25987664	BARAJAS ROJAS Mª INMACULADA	Segunda	1514
4561177	BARAMBIO GIL MARIA ISABEL	Segunda	724
16030391	BARANDIARAN GARCIA MARIA HELENA	Segunda	506
20785027	BARBERA BARRIOS MARIA CONSUELO	Segunda	945
30570625	BARBERO BLANCO BLANCA ROSA	Segunda	1727
52805495	BARCELO MORENO Mª JOSE	Segunda	1811
46318940	BARDAJI PASCUAL YOLANDA	Segunda	321
25987745	BAREA COBO MARIA INMACULADA	Segunda	1391
28693098	BAREA SANCHEZ-IBARGÜEN DAVID	Segunda	1671
1380217	BARNUEVO VIGIL DE QUIÑONES JOAQUIN	Segunda	1081
22509196	BARONA SANCHIS CESAR MANUEL	Segunda	437
9155182	BARRANTES FERNANDEZ FERNANDO	Segunda	1178
13292721	BARREDO TOBALINA MARIA JESUS	Segunda	550
18425231	BARRERA LORENTE SANTIAGO	Segunda	1481
3411502	BARRIO CALLE M. ASUNCION	Segunda	18
51348989	BARRIO PELEGRINI Mª ROSARIO	Segunda	1209
24274432	BARRIOS ROZUA ESTHER	Segunda	1991
28405787	BARRIOS ESPINOSA DE LOS MONTERO RAFAEL	Segunda	379
36044060	BARROS ESTEVEZ M.ROSARIO FATIMA	Segunda	236
44250758	BARROS GARCIA FELICIDAD	Segunda	2393
33449585	BAYO MORIONES MARIA NATIVIDAD	Segunda	1998
50719515	BAZACO VELASCO Mª DEL CARMEN	Segunda	1436
76324032	BAZARRA VARELA MARIA SOCORRO	Segunda	28
29137396	BAZTAN MAISTERRA Mª VICTORIA	Segunda	1628
12329492	BECARES RAMOS FERNANDO	Segunda	1994
34850524	BEIRO MAGAN JOSE MANUEL	Segunda	2315
51438875	BEJARANO MARTINEZ MARIA CRISTINA	Segunda	159
25969057	BEJARANO PUCHE EULALIA	Segunda	487
20396132	BELENGUER VERDUCH JOSE RICARDO	Segunda	663
26452274	BELLON ZURITA MARIA DEL CARMEN	Segunda	928
22436174	BELMONTE MENA ANGEL MIGUEL	Segunda	281
18162056	BELSUE MARTIN JOSE LUIS	Segunda	1288
50161087	BELTRA CABELLO CARLOS	Segunda	1812
73942317	BENAVENT BENEYTO ANTONIO	Segunda	1478
30450647	BENAVENTE JOVER MARIA DEL CARMEN	Segunda	718
18414299	BENEDI ANDRES CONCEPCION	Segunda	687
18424747	BENEDICTO VICENTE ESPERANZA	Segunda	1519
21644690	BENEYTO TORRES MARIA ASUNCION	Segunda	2007
24867024	BENITEZ ASENSIO SERGIO EMILIO	Segunda	1066
5236345	BENITEZ BENITEZ FERNANDO	Segunda	1015
29758984	BENITEZ MARIN MARIA ROSARIO	Segunda	840
5593969	BENITEZ MARTINEZ ZOILO FRANCISCO	Segunda	6
7825013	BENITEZ ORTIZ MARIA ISABEL	Segunda	605
29074474	BENITEZ SORIANO MARIA JOSE	Segunda	2313
17144650	BENITO GIL ADELA MARIA	Segunda	317
13095788	BENITO MARTINEZ MARIA TERESA DE	Segunda	702
5202206	BENITO SANTOS FRANCISCO JAVIER	Segunda	1562

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
11709232	BENITO Y BENITEZ DE LUGO JOSE LUIS DE	Segunda	421
42963237	BENNASAR JUAN FRANCISCA	Segunda	145
18161734	BERGUA OTIN Mª JOSE	Segunda	1275
11377986	BERMUDEZ MENDEZ MARIA ANGELES	Segunda	868
21453467	BERNABEU PEREZ ISAAC CARLOS	Segunda	1518
35004700	BERNAL LOPEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	1954
25454155	BERNAL MARTIN LUIS FRANCISCO	Segunda	2528
7809557	BERNAL ORTEGA MARIA TERESA	Segunda	1063
52926938	BERNAL RUIZ MARIA DE LOS SANTOS	Segunda	2211
42966310	BERNAL VIDAL MARIA ARACELI	Segunda	111
28671044	BERNARDEZ JIMENEZ LEONOR	Segunda	442
43023276	BERNAT ROCA ANTONIO	Segunda	1537
13143339	BILBAO CONTRERAS OSCAR	Segunda	2066
17998419	BITRIAN AISA M.MERCEDES LAURA	Segunda	386
14917396	BIURRUN MURILLO MARIA TERESA	Segunda	646
36953777	BLANCH DOMEQUE MARIA ROSA	Segunda	1955
673426	BLANCO ALMENDROS ANTONIO	Segunda	349
50065649	BLANCO ANES JOSE ANTONIO	Segunda	2090
79310065	BLANCO AQUINO MARIA	Segunda	2455
12695688	BLANCO ECHEVARRIA MARTA	Segunda	121
70504039	BLANCO ESLAVA FUENMARIA	Segunda	901
9800801	BLANCO JUAREZ VICTOR MIGUEL	Segunda	2254
25473304	BLANCO LAFRAGÜETA RAQUEL	Segunda	2414
10566242	BLANCO LIZANA M.DE LOS ANGELES	Segunda	288
34925002	BLANCO PEREZ DOLORES	Segunda	315
44451175	BLANCO PEREZ RAQUEL	Segunda	2230
801696	BLANCO DE LA CASA CARMEN DOLORES	Segunda	858
9278529	BLAS MESON ISABEL DE	Segunda	1028
19820128	BLASCO BAUSET PILAR	Segunda	1950
17711971	BLASCO BELTRAN ISABEL	Segunda	1257
70859303	BLAZQUEZ COSMES MARIA ANGELES	Segunda	1375
7446608	BLAZQUEZ RUFO MANUEL JESUS	Segunda	1133
7539956	BLESA MONSALVE MARIA CARMEN	Segunda	1796
36003840	BOBILLO FRESCO CONSUELO-TERESA	Segunda	1556
28560432	BOCIO RUEDA JOSE	Segunda	678
34044493	BOLIVAR PEREZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	1885
19457753	BOLUFER MARQUES MARIA JOSE	Segunda	744
4565061	BONILLA CORREA JESUS ANGEL	Segunda	1300
24223193	BONILLA POZO MIGUEL MANUEL	Segunda	1741
37280229	BOQUE GENOVARD MARIA EULALIA	Segunda	976
22660581	BORGES ALEJO LUCIANO	Segunda	348
42017470	BORGES DARIAS CRESCENCIANA	Segunda	75
7805962	BORREGUERO BELTRAN MARIA LUISA	Segunda	666
43076314	BOSCH LOZANO MARGARITA	Segunda	2231
2522927	BOTELLA GARCIA-LASTRA MARIA ALMUDENA	Segunda	882
35011706	BRACONS VERDAGUER MARIA TERESA	Segunda	1071
11727475	BRAGADO LORENZO MIGUEL ANGEL	Segunda	404
24267007	BRAVO RUIZ ALBERTO	Segunda	2057
24189523	BRAVO RUIZ MARIA ISABEL	Segunda	942

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
13030456	BRIZUELA GARCIA JOSE LUIS	Segunda	293
27264357	BRU MISAS ISABEL	Segunda	767
27251363	BRU MISAS JOSE MARIA	Segunda	913
27493232	BRU MISAS Mª DEL CARMEN	Segunda	1252
8803872	BRUN PUYRAIMOND ANA MARIA	Segunda	1154
37243142	BRUNET CADENAS MARIA GLORIA	Segunda	29
71625769	BUELGA ALVAREZ Mª PILAR	Segunda	1216
10600482	BUELGA AMIEVA ANA	Segunda	607
37264585	BUENDIA CANOVAS MARIA DEL CARMEN	Segunda	50
21408279	BUENO SANCHEZ MARIA DEL PILAR	Segunda	310
15810686	BUIL BORRUEL JOSE ANTONIO	Segunda	931
25471412	BUIL TORRALBA ELENA VICTORIA	Segunda	2452
17858479	BUITRON GERNER NATIVIDAD	Segunda	196
26189967	BUJALANCE TEJERO DOMINGO	Segunda	1897
7832210	BULLON HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	1305
20778352	BURDIEL ALVARO MARIA DEL CARMEN	Segunda	887
8690049	BURGOS FLORES MARIA JOSE	Segunda	609
74618716	BURGOS LOPEZ ROSA	Segunda	589
28379067	BURGOS DE LA MAZA GARCIA	Segunda	45
27449636	BURILLO ORRICO MILAGROS	Segunda	1309
46219111	BURRIEL MANZANARES GEMA	Segunda	1270
28657560	BUSTOS CRUZ GRACIA	Segunda	933
4551469	CABADAS ARQUERO FERNANDO	Segunda	267
9416922	CABAL PARADA SILVIA	Segunda	2380
2492751	CABALLERO CORRAL MARIA SOLEDAD	Segunda	458
34016194	CABALLERO REDONDO MARIA	Segunda	2067
1497115	CABALLERO TREVIÑO MARIA ANTONIA	Segunda	592
25042103	CABELLO MARTEL FRANCISCO JAVIER	Segunda	1400
42721493	CABELLO PERERA JOSE JUAN	Segunda	1975
75425391	CABEZAS MATEOS MARIA JOSE	Segunda	1406
12746699	CABEZUDO RODRIGUEZ AVELINO	Segunda	1585
52655651	CABEZUELO CAMPOS MARIA	Segunda	2415
22671280	CABO ORERO FRANCISCO	Segunda	1935
23780804	CABRERA DELGADO CARMEN	Segunda	1834
24279769	CABRERA PEREZ OSCAR	Segunda	2460
75701697	CABRERA TRIBALDO MARIA DEL CARMEN	Segunda	1344
13696541	CABRIA GARCIA LUIS GABRIEL	Segunda	530
9253241	CACHO MORENO MARIA EUGENIA	Segunda	252
34958215	CADAVID RODRIGUEZ EDUARDO	Segunda	2232
2874798	CADENAS DE GEA CATALINA	Segunda	1816
3073552	CAJA GARDEL ANTONIO	Segunda	1869
33802453	CAJOTO DIAZ ROSENDO	Segunda	2397
24306772	CALATAYUD SEGARRA VICENTE MARIA	Segunda	277
24235353	CALDERON ALARCON FERNANDO	Segunda	1787
30944318	CALDERON FERNANDEZ PATRICIA MARÍA	Segunda	2235
42016071	CALERO CEDRES CARLOS EDUARDO	Segunda	1655
3796710	CALERO PAREJA MARIA MERCEDES	Segunda	674
3420708	CALLE DEL POZO AGUSTINA	Segunda	684
44678959	CALLEJA RIOS RICARDO	Segunda	2161

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
16041687	CALLES ROBLES MARIA LOURDES	Segunda	1361
16041688	CALLES ROBLES Mª ARANZAZU	Segunda	1323
800740	CALOTO GOYANES MARGARITA	Segunda	1010
11735685	CALVO ALONSO MARIA DEL CARMEN	Segunda	1000
5243119	CALVO CARRASCO MARIA ISABEL	Segunda	387
30553334	CALVO SANZO ANA	Segunda	951
1103386	CALVO VELASCO MARIA DEL CARMEN	Segunda	659
50298658	CALVO VERGARA ENRIQUE	Segunda	1451
27290112	CALVO DE MORA PEREZ CECILIA	Segunda	2200
52540649	CALZADO JULIA JUAN	Segunda	2504
31224080	CAMACHO BARBOSA M. DEL ROSARIO	Segunda	569
2201119	CAMACHO FRAILE JOSE ELADIO	Segunda	2352
5225305	CAMACHO PEREZ CELIA	Segunda	643
12354260	CAMAZON AREVALO MARIA TERESA	Segunda	133
13163193	CAMINA PEREZ MARIA ELENA	Segunda	2218
18170325	CAMPA CAMPOS TERESA SANDRA	Segunda	2331
45414456	CAMPILLO BARNES JOSE LUIS	Segunda	147
26737214	CAMPO DIAZ Mª DOLORES DEL	Segunda	834
12739552	CAMPO GARCIA Mª PILAR DEL	Segunda	1109
17199630	CAMPO GUERRI MARIA JESUS	Segunda	304
12228661	CAMPO RIOSERAS JOSE LUIS	Segunda	1217
24858254	CAMPO URBAY Mª CRISTINA FELISA	Segunda	515
30187292	CAMPOS FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	Segunda	522
23218239	CAMPOS SANCHEZ LUCIA	Segunda	1107
32036666	CAMPOY LOPEZ PEDRO JESUS	Segunda	1850
10568347	CAMPUZANO TOME M. DEL CAMINO	Segunda	670
33507892	CANCIO FERNANDEZ RAUL CESAR	Segunda	1886
51354770	CANDELAS BARAJAS CRISTINA	Segunda	1368
25976495	CANO CAMPAÑA Mª ISABEL	Segunda	1211
4582088	CANO MOLINA JOSE ANTONIO	Segunda	1909
28867970	CANO NAVAS ANDRES	Segunda	924
52428458	CANO SANTANA ANTONIO	Segunda	2447
50287687	CANTALAPIEDRA CABRERA JAVIER	Segunda	586
5241564	CANTALEJO GARCIA ROSARIO	Segunda	1011
26021993	CAÑADA CATEDRA JOSE MARÍA	Segunda	2440
77296721	CAÑADAS ALCANTUD EMILIA	Segunda	1289
24218810	CAÑIZARES CASTELLANOS Mª JOSE	Segunda	1911
37287376	CAPEL CILLA ASCENSION	Segunda	1754
24210283	CARA DEL ROSAL JOAQUIN	Segunda	2143
11808119	CARASA ROCHE SILVIA	Segunda	1528
15960312	CARASUSAN ALBIZU MARIA JESUS	Segunda	1147
11724342	CARBAJO DOMINGO CONSUELO	Segunda	2502
7868291	CARBAJOSA COLMENERO JOSE MIGUEL	Segunda	1472
2089533	CARBALLO MARTINEZ JUAN FRANCISCO	Segunda	660
1890013	CARBALLO MARTINEZ Mª DE LOS ANGELES	Segunda	568
32434846	CARBALLO RAMOS MARIA DEL CARMEN	Segunda	608
22457910	CARBONELL ARROYO ANA ISABEL	Segunda	1112
19848889	CARCELLER FABREGAT FERNANDO	Segunda	1527
26023610	CARDENAS ORTIZ ALICIA MARIA	Segunda	1929

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
4515520	CARLAVILLA NOGUERA MARIA ANGELES	Segunda	2052
28900970	CARMONA ARGUELLES REINALDO CARLOS	Segunda	2240
28714179	CARMONA VERGARA MARIA ANGELES	Segunda	1821
26220478	CARO VIDA Mª ANGUSTIAS	Segunda	1898
40873283	CAROLA COSIALLS MARIA ROSA	Segunda	2156
31232882	CARPINTERO SABINO MARIA TERESA	Segunda	710
50093729	CARRALERO NUÑEZ DAVID	Segunda	2475
7844713	CARRASCO GARCIA ANA MARIA	Segunda	991
13113960	CARRASCO GARCIA FRANCISCO ANGEL	Segunda	1285
699075	CARRASCO MANZANARES ELENA	Segunda	177
26417264	CARRASCOSA LOPEZ-OBREGON FERNANDO	Segunda	198
50814010	CARREÑO ARNAL RICARDO	Segunda	1588
5355142	CARRERO RODRIGUEZ MARGARITA	Segunda	264
833239	CARRETERO PEÑA CRISTINA MARIA	Segunda	1957
30616913	CARRICAJO LOBATO MARIA EUGENIA	Segunda	1881
50797005	CARRILLO ABOS ROSA LAURA	Segunda	167
24172457	CARRILLO FULLERAT DIONISIO ANTONIO	Segunda	1044
7003832	CARRILLO HERNANDEZ MARIA DOLORES	Segunda	2544
9173434	CARRILLO DE LAS HERAS MARIA TRINIDAD	Segunda	1381
4567263	CARRION CASTILLO Mª TERESA	Segunda	1132
7215070	CARRO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	Segunda	1724
25426913	CASADO CALONGE MARIA LUISA	Segunda	1398
6975054	CASADO LENDINEZ MARIA TERESA	Segunda	974
25172528	CASADO ROMAN JAVIER	Segunda	2458
32754775	CASADO SILVESTRE MARIA CONSUELO	Segunda	1524
25148170	CASAJUS PALACIO ANA MARIA	Segunda	1557
25436638	CASALOD LOZANO ANA MARIA	Segunda	1665
36566248	CASALS DELGADO MODESTO	Segunda	1359
3813168	CASANOVA FUENTES MARIA CARMEN	Segunda	1389
35044067	CASAS CAPDEVILLA ANTONIO JOSE	Segunda	1191
14587924	CASAS DIAZ Mª BEGOÑA	Segunda	1136
25682744	CASASOLA DIAZ JOSE MARIA	Segunda	2305
74776429	CASASOLA TOBIA ANTONIO	Segunda	680
20409476	CASASUS JIMENEZ PEDRO	Segunda	1206
52809077	CASCALES HIDALGO ROSA ANA	Segunda	1928
18202149	CASO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	1025
25179443	CASTAN MARTINEZ MARTA	Segunda	2100
29040610	CASTAÑO PENALVA MARIA ASUNCION	Segunda	1711
8106035	CASTAÑO RAMOS MARIA AUXILIADORA	Segunda	2147
7781122	CASTAÑON ALVAREZ JOSE FERNANDO	Segunda	438
25900553	CASTELLANO ARROYO FRANCISCA	Segunda	49
46133313	CASTELLANO NAVARRO FRANCISCO MANUEL	Segunda	2050
9759604	CASTELLANOS LAIZ Mª TRINIDAD GLORIA	Segunda	1492
22981314	CASTELLANOS ORTEGA MARIA JESUS	Segunda	1888
7956696	CASTELLO BOVEDA MARIA TERESA	Segunda	2015
73529023	CASTILLA ROMERO ALICIA	Segunda	117
5415651	CASTILLA TORRES Mª ANGELES	Segunda	1772
50796987	CASTILLO CAMPOS JUAN MANUEL	Segunda	219
5613338	CASTILLO GALLEGO ARSENI0	Segunda	808

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
17194437	CASTILLO GARCIA MARIA MERCEDES	Segunda	128
50675495	CASTILLO HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	Segunda	377
27435887	CASTILLO MESEGUER MARIA DOLORES	Segunda	883
39332782	CASTILLO PICAS ROSA ANNA	Segunda	971
33238757	CASTIÑEIRAS FERNANDEZ FRANCISCO	Segunda	952
12360505	CASTREÑO SAEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	1358
1118264	CASTRO LOZANO MARIA DEL CARMEN	Segunda	1042
28521440	CASTRO DE LA NUEZ RAFAEL	Segunda	54
51346425	CASTRO-VILLACAÑAS Y PEREZ MARIA GRACIA	Segunda	498
15969905	CATALAN ESCUDERO ANA PATROCINIO	Segunda	1635
17447790	CATALAN HERNANDO MARIA ARANZAZU	Segunda	2234
17704772	CATIVIELA DIEZ EDUARDO BUENAVENTURA	Segunda	980
50453219	CAVA GARCIA FERNANDO	Segunda	2317
7813612	CEBRIAN SALGADO ESPERANZA Mª MILAGROS	Segunda	848
3086099	CELADA AYLLON DOMINGO	Segunda	1413
831776	CELADA PEREZ ELENA MONICA DE	Segunda	2074
8099226	CELIS FRAILE ISABEL DE	Segunda	529
73151641	CELMA VALLES ISABEL	Segunda	239
38399725	CENIZO GARDUÑO SANTIAGO	Segunda	579
10554552	CEPEDA GALICIA MARIA DOLORES	Segunda	2283
21957898	CERDA ANTON MARIA ISABEL	Segunda	1844
25484852	CEREZA BUENO ELENA	Segunda	2439
8789861	CERON HERNANDEZ LUCIA DEL CARMEN	Segunda	968
50536948	CERRO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR DEL	Segunda	223
17866869	CERVERO PINILLA RAQUEL	Segunda	731
28856305	CEVALLOS-ZUÑIGA NOGALES ALFONSO	Segunda	1397
2520539	CHAMORRO GOMEZ MARIA CRISTINA	Segunda	708
50091503	CHANTRES RIVEIRO EVA MARIA	Segunda	2039
33832754	CHAO PEREZ RAMON JESUS	Segunda	688
24317886	CHARRIEL ARDEBOL Mª DE LOS ANGELES	Segunda	1443
17847924	CHECA BOSQUE MARIA LOURDES	Segunda	257
27522962	CHECA SANCHEZ MARIA VICTORIA	Segunda	2354
25972842	CHICA DE DAMAS Mª TERESA DE LA	Segunda	936
29139132	CHOCARRO UCAR Mª ARANZAZU	Segunda	1626
18198681	CIAURRIZ LABIANO SUSANA	Segunda	1231
13070127	CIDONCHA MERINO LUIS ROMAN	Segunda	335
46112097	CIDRAQUE ARIAS ANTONIO	Segunda	1458
7542657	CIFO GONZALEZ CRISTINA	Segunda	2526
15894579	CIFUENTES TORRES FERNANDO	Segunda	1561
71252272	CILLA CALLE ENRIQUE	Segunda	1094
399069	CIMA SAINZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	962
18204774	CIORDIA PASCUAL MARIA TERESA	Segunda	1708
16788938	CIRIA MATEO DELFINA	Segunda	520
1396274	CIRIA MATILLA MARIA DEL PILAR	Segunda	414
44262502	CIVICO MALDONADO MARIA DE LA CRUZ	Segunda	2434
39878359	CLAVIER CALVO BEATRIZ	Segunda	2448
17439219	CLEMENTE PARDOS CARLOS CARMELO	Segunda	2377
40280484	CLOPES ALEMANY MARIA JESUS	Segunda	63
52926017	COBEÑA RONDAN EVA MARIA	Segunda	2195

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
17110706	COBETA MATEO CARLOS	Segunda	210
30416727	COBOS AMO GLORIA	Segunda	430
5341479	CODINA CASTRO ESTHER	Segunda	461
73768350	CODOÑER MARTINEZ MARIA JESUS ANTONIA	Segunda	2085
28473946	COLCHERO QUINTANILLA ANA MARIA	Segunda	1608
24174705	COLLADO BUENO ROSARIO	Segunda	1262
19835149	COLLADO GIMENEZ FRANCISCO RAMON	Segunda	554
26017097	COLLADO GRANADINO CARLOS JAVIER	Segunda	2038
44005688	COLLADO PEÑA ADELA MARIA	Segunda	2456
25143582	COLMENARES ORDEN MARIA DE LA O	Segunda	1551
3811273	COLMENERO RUIZ JOSE LUIS	Segunda	1576
40282063	COLOM PERPIÑA JORDI	Segunda	59
5389274	COLOMA CONTRERAS MERCEDES	Segunda	958
13698654	COLVEE BENLLOCH M. DESAMPARADOS	Segunda	83
27430688	COM BONMATI ELIA	Segunda	983
33830827	CONDE DIAZ MARIA DE LA PAZ	Segunda	463
33830826	CONDE DIAZ MARIA ELENA	Segunda	496
18424270	CONESA EXPOSITO MARIA DEL PILAR	Segunda	1479
36953350	CONTINENTE PRATS GEMA	Segunda	1666
24212224	CONTRERAS CHOVA MARIA FELIPA	Segunda	2399
13124032	CONTRERAS GARCIA LUISA ARACELI	Segunda	1476
13110400	CONTRERAS DEL CURA Mª DEL CARMEN	Segunda	1105
33971951	CORCHERO MARTIN JUSTINO GONZALO	Segunda	1676
16782584	CORCHON ENCISO MARIA ASUNCION	Segunda	1422
2508945	CORDERO DIEZ ELISA MARIA	Segunda	879
33508409	CORDERO ESCALONILLA MARIA JOSE	Segunda	714
11940930	CORDERO LOZANO CARLOS	Segunda	1636
24127396	CORDOBA CAMPOS ROSARIO	Segunda	557
24092543	CORDOBA GARCIA MARIA DEL CARMEN	Segunda	655
35005911	CORDON CALDERO IRENE	Segunda	255
15363605	CORERA IZU MARTIN	Segunda	780
1392532	CORNEJO PEREZ MARIA ELENA	Segunda	454
13057270	CORRAL ABASCAL MANUEL	Segunda	60
50445329	CORRAL ALONSO MARIA BEGOÑA	Segunda	2309
9279324	CORRAL TORRES CARMEN FELISA	Segunda	2047
50845408	CORRECHEL CALVO ANA	Segunda	1756
7836848	CORREDERA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	Segunda	1167
30401211	CORREDOR CANO MARIA DOLORES	Segunda	307
30207217	CORTES CARBALLO TATIANA MARIA	Segunda	2432
24153620	CORTES RODRIGUEZ MANUEL	Segunda	645
46589882	CORTINA ALARCON MARIA DOLORES	Segunda	2251
25179248	COSTA LAMENCA MARIA JOSE	Segunda	2446
396761	COTORRUELO GOMEZ MARIA LUISA	Segunda	759
75407319	COVEÑAS PEREZ RAFAEL	Segunda	939
29157905	CRESPIN JIMENEZ Mª DOLORES	Segunda	1916
10077309	CRESPO FERNANDEZ INMACULADA	Segunda	2188
1396712	CRESPO MARQUES BEATRIZ	Segunda	140
9344414	CRESPO MARTIN FRANCISCO JAVIER	Segunda	2058
3419482	CRISTOBAL ZURDO MANUEL	Segunda	852

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
3408789	CRISTOBAL ZURDO NAZARIO	Segunda	101
17723078	CRUSELLS CANALES VICENTE	Segunda	1899
22530774	CRUZ REQUEJO Mª DOLORES EUGENIA	Segunda	633
3426380	CRUZ VELASCO Mª PAZ DE LA	Segunda	594
72038243	CRUZADO BARQUIN CRISTINA	Segunda	2514
8773034	CUADRA GARCIA ALEJANDRO	Segunda	2204
24151950	CUADROS RODRIGUEZ PILAR	Segunda	512
50449332	CUBERO FLORES MARIA CAROLINA	Segunda	2364
28583390	CUBERO TRUYO ISMAEL	Segunda	1877
21513870	CUELLAR OTON JORGE	Segunda	2279
51648307	CUENCA BURGOS MARIA LUISA	Segunda	1273
33773951	CUENCA SANCHEZ MARIA PILAR	Segunda	1092
8039263	CUESTA PEDRAJAS SUSANA	Segunda	1979
21423668	CUEVAS GARCIA MIGUEL ANGEL DE LAS	Segunda	1867
45420410	CUEVAS PEROSANZ LUCIA	Segunda	2295
14594873	CURIEL ENRIQUE MARIA CLARA	Segunda	1363
12356479	CURTO LOPEZ INMACULADA	Segunda	1138
31221582	CUVILLO SILOS Mª JESUS DEL	Segunda	1280
25907098	DAMAS LOPEZ ANTONIO	Segunda	2229
24128493	DAZA VELAZQUEZ DE CASTRO ROBERTO	Segunda	505
50058107	DE DIEGO MORENO PALOMA	Segunda	1590
2204673	DE LA CRUZ GUTIERREZ MARIA PILAR	Segunda	1566
10178353	DE LA FUENTE RUBIO EVANGELINA	Segunda	1962
13761069	DE LA GANDARA PORRES LUCRECIA	Segunda	1729
3086236	DE LA LLANA VICENTE MARINO	Segunda	2086
822527	DE LA PEÑA MARTIN AMALIA	Segunda	1862
22600227	DE LA RUA MORENO DESAMPARADOS	Segunda	1704
46142316	DE TEMPLE SALINAS ANA MAGDALENA	Segunda	2418
27462159	DE ZARANDIETA SOLER ISABEL MARIA	Segunda	1854
38548245	DEL CAMPO BELTRAN MARIA ISABEL	Segunda	2281
825957	DEL CASTILLO DE COMAS AMALIA SUSANA	Segunda	1652
34820562	DELGADO DELGADO MARIA CARMEN	Segunda	2214
34714526	DELGADO FERNANDEZ AUGUSTO	Segunda	142
2856150	DELGADO HERNANDO MERCEDES	Segunda	1033
25064313	DELGADO SERRANO JOSE	Segunda	1106
6974561	DELGADO ZAMARREÑO MARIA DOLORES	Segunda	445
5389395	DELGADO-IRIBARREN PASTOR MARIA JOSE	Segunda	1157
28679588	DIAZ AGUIRRE RICARDO	Segunda	625
28540324	DIAZ BARRERA MANUEL	Segunda	694
30797772	DIAZ BENITEZ Mª DOLORES	Segunda	1801
39649937	DIAZ CRUMOLS MARIA MARTA	Segunda	788
388056	DIAZ CUEVAS Mª DEL SAGRARIO	Segunda	1181
10826240	DIAZ GONZALEZ MARIA JESUS	Segunda	900
32876490	DIAZ GONZALEZ MARIA OLGA	Segunda	2388
6554717	DIAZ HERNANDEZ MANUEL ANGEL	Segunda	1820
22571938	DIAZ MARCO EVA MARIA	Segunda	2076
23790596	DIAZ MARTIN FERNANDO R.	Segunda	1948
9430037	DIAZ MARTINEZ BEATRIZ	Segunda	2016
32417084	DIAZ SANCHEZ MARIA LUISA	Segunda	218

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
24168217	DIAZ VALENZUELA SONSOLES	Segunda	716
31205994	DIAZ DE NORIEGA SELLES CONCEPCION	Segunda	237
52863785	DIEGO ELVIRA ISABEL DE	Segunda	1977
16258984	DIEZ FORONDA BLANCA	Segunda	973
12220070	DIEZ GARRETAS MARIA MERCEDES	Segunda	332
50307814	DIEZ MINGUELA MARIA NIEVES	Segunda	888
9255811	DIEZ DE BALDEON VEGAS MARIA LOURDES	Segunda	1450
50715477	DIEZ DE ULZURRUM CALVO RAMON	Segunda	1692
21932380	DOBLADO HERRERA LEONARDO	Segunda	439
52172457	DOGANOC DE LEON MARIA	Segunda	1696
25389780	DOLZ PERIS MANUEL	Segunda	1721
24832294	DOMINGO GARCIA PEDRO IGNACIO	Segunda	814
20798164	DOMINGO MARTINEZ JOSE SALVADOR	Segunda	1784
29081792	DOMINGO DE LA BLANCA ISABEL MARIA	Segunda	2184
36075891	DOMINGUEZ COUGIL MARIA REGINA	Segunda	2249
798400	DOMINGUEZ VELASCO MARIA TERESA	Segunda	866
25413053	DONET CASAL MARTA	Segunda	2033
34938356	DOPEREIRO RODRIGUEZ JOSE JAIME	Segunda	1684
28445941	DORADO PICON ANTONIO	Segunda	58
75407335	DORADO PICON DOMINGO	Segunda	2192
28666309	DUARTE DOMINGUEZ SOFIA	Segunda	989
24403448	DUBLANG CABRERA MARIA MERCEDES	Segunda	149
12246936	DUEÑAS LAITA MARIA AURORA	Segunda	1056
38384672	DUEÑAS SANTOFIMIA JUAN PEDRO	Segunda	1077
28545103	DUQUE ORDOÑEZ M. AUXILIADORA	Segunda	156
50411955	DURAN Y GOMEZ PALOMA ESPERANZA	Segunda	531
33434903	ECHARRI HERNANDEZ ELENA	Segunda	2382
30650105	ECHEVARRIA FERNANDEZ MARIA BEGOÑA	Segunda	2412
15950023	ECHEVERRIA ALCORTA MARIA	Segunda	739
15807392	EDERRA SANZ Mª ANGELES NATIVIDAD	Segunda	246
37656837	EGEA GRAS ROSA MARIA	Segunda	173
1387004	EGIDO TRILLO-FIGUEROA M. ENCARNACION	Segunda	80
46212594	EGURBIDE MARGAÑON MARIA ADELAIDA	Segunda	274
803427	ELENA MURILLO Mª LEONOR DE	Segunda	1234
802614	ELENA MURILLO VICTORIO DE	Segunda	1185
8630172	ELIAS PEREZ ANTONIO	Segunda	13
1395668	ELOLA SOMOZA MANUEL	Segunda	52
22524230	ELORZA ARIZMENDI FATIMA	Segunda	534
51362741	ELVIRA MUÑOZ ANA MARIA	Segunda	1570
2631417	ENRECH VERDE JOSEFINA ELENA	Segunda	1699
29773010	ENRILE DE ROJAS MERCEDES	Segunda	1512
6957525	ENRIQUE FABIAN JULIA	Segunda	64
71692048	ESCANDON LOPEZ M. TERESA JOSE	Segunda	745
3426983	ESCOBAR BERNARDOS Mª JOSE LOURDES	Segunda	871
5377147	ESCOBAR RAMIREZ MARIA LUISA	Segunda	181
46124153	ESCODA RUIZ LOURDES	Segunda	1648
13059276	ESCRIBANO ESTEBANEZ MARIA ASUNCION	Segunda	102
25893766	ESCRIBANO GONZALEZ JOSE MIGUEL	Segunda	1447
7850691	ESCRIBANO SANCHEZ JULIO	Segunda	1530

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
43417040	ESCRIBANO VINDEL JAIME OSCAR	Segunda	1661
35436357	ESCUDEIRO RIAL ELIGIA	Segunda	629
5159121	ESCUDEIRO CANTO M. ROSARIO	Segunda	558
74126619	ESCUDEIRO LUCAS JOSE LUIS	Segunda	5
5159201	ESCUDEIRO MORATALLA JOSE FRANCISCO	Segunda	1159
27250779	ESCUDEIRO ORTEGA MANUEL	Segunda	705
13092206	ESCUDEIRO ORTEGA MARIA TERESA	Segunda	791
17853417	ESPAÑOL FAUQUIE MARIA ASCENSION	Segunda	350
24356365	ESPI MASCARELL ROSA MARIA	Segunda	2083
74626345	ESPIN QUIRANTE ISABEL	Segunda	1352
50698310	ESPINO HERNANDEZ LUIS DIEGO	Segunda	1168
25462808	ESPINOSA NAVARRO LUIS	Segunda	2237
50303326	ESTAL PADILLO ROSA MARIA DEL	Segunda	297
30681795	ESTALAYO HERNANDEZ BEATRIZ	Segunda	2063
668414	ESTARAN PEIX JUAN MARCOS	Segunda	1048
29984818	ESTEBAN CASTILLO ERNESTO	Segunda	546
50705253	ESTEBAN DELGADO MARIA VICTORIA	Segunda	272
18956582	ESTEBAN ESTEBAN MARIA CARMEN	Segunda	1800
4591621	ESTEBARANZ TORRIJOS MARTA	Segunda	1988
1626553	ESTELLES RODRIGUEZ MARIA DOLORES	Segunda	364
16780657	ESTERAS PEREZ MIGUEL ANGEL	Segunda	169
29017388	ESTEVE RAMOS Mª TERESA	Segunda	1555
53105769	ESTRADA BARRANCO MARIA TERESA	Segunda	1993
10599730	ESTRADA RUIZ FERNANDO	Segunda	1019
39025360	FABREGAT VERA FRANCISCO JAVIER	Segunda	1096
5237116	FARELO GOMEZ MARIA JOSEFA	Segunda	538
2692716	FARIÑAS MATONI LUIS	Segunda	21
14577401	FEIJOO LOPEZ-BOLAÑO MONICA	Segunda	922
688345	FEITO GAYO MARIA SOLEDAD	Segunda	906
42140290	FELICIANO GARCIA FRANCISCO	Segunda	1
29003994	FENOLL VERDU BEATRIZ	Segunda	2546
37648355	FENOY GASION MARIA SOLEDAD	Segunda	1609
2507730	FERNANDEZ AGUADO MARIA JOSE	Segunda	431
11419898	FERNANDEZ ALVAREZ BELEN MARIA	Segunda	2012
32818237	FERNANDEZ AMBROS CARLOTA	Segunda	2479
15778107	FERNANDEZ AYESA ANTONIO	Segunda	211
52776133	FERNANDEZ BOAN ESTHER	Segunda	2470
8037662	FERNANDEZ BORREGO JOSE ANTONIO	Segunda	2270
28502716	FERNANDEZ CAMACHO MARIA LUISA	Segunda	31
52118993	FERNANDEZ CRUZ MARIA ANGELES	Segunda	2530
10571163	FERNANDEZ DIAZ YOLANDA	Segunda	742
11422979	FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINA	Segunda	2028
75361230	FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS	Segunda	1868
75701656	FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS	Segunda	789
10880764	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA BEGOÑA	Segunda	1966
9354274	FERNANDEZ FUEYO MARIA JOSE	Segunda	1029
24166280	FERNANDEZ GALISTEO MILAGROSA	Segunda	2044
2875375	FERNANDEZ GARCIA ELENA	Segunda	1610
10544422	FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL MAR	Segunda	127

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
24293912	FERNANDEZ GARCIA MARIA DOLORES	Segunda	815
13291202	FERNANDEZ GOMEZ DE CADIÑANOS VISITACION	Segunda	635
72109401	FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	1716
78698318	FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL	Segunda	2310
10887760	FERNANDEZ GONZALEZ SUSANA MARIA	Segunda	2068
26020545	FERNANDEZ GRACIA DANIEL	Segunda	2241
11047149	FERNANDEZ GUTIERREZ M. VISITACION	Segunda	412
46567142	FERNANDEZ HIDALGO MARIA DEL CARMEN	Segunda	2163
50694871	FERNANDEZ HOYOS FRANCISCO JAVIER	Segunda	163
30492976	FERNANDEZ LINARES MARIA ASUNCION	Segunda	1311
9326184	FERNANDEZ LOPEZ MARIA AMAYA	Segunda	1983
4571847	FERNANDEZ MARTINEZ EFRAIN	Segunda	1622
50938942	FERNANDEZ MOLINA MARIA TERESA	Segunda	1466
379552	FERNANDEZ MORAN MARIA GRACIA	Segunda	909
28682626	FERNANDEZ ONORATO Mª DOLORES	Segunda	1215
275067	FERNANDEZ PASCUAL MARIA DEL PILAR	Segunda	358
50288863	FERNANDEZ PIÑERO MARGARITA MERCEDES	Segunda	354
2895129	FERNANDEZ PUGA EVA	Segunda	2136
10569838	FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DEL CARMEN	Segunda	519
22962373	FERNANDEZ ROS JUAN FRANCISCO	Segunda	1419
11402962	FERNANDEZ RUIZ BEATRIZ	Segunda	1534
50098054	FERNANDEZ RUIZ ELENA	Segunda	2263
26741634	FERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA DIANA	Segunda	2280
74429715	FERNANDEZ SORIANO DOMINGO	Segunda	1706
36045485	FERNANDEZ SUAREZ PURIFICACION	Segunda	576
33306128	FERNANDEZ VILLANUEVA BEGOÑA	Segunda	1931
11395144	FERNANDEZ AHUJA LOPEZ MARIA NIEVES	Segunda	995
9722233	FERNANDEZ DE CASTRO EMILIO BENJAMIN	Segunda	1199
26446143	FERNANDEZ DE GAMBOA Y GARCIA DEL VALLE MARIA DEL CARMEN	Segunda	573
27508750	FERNANDEZ DE LIENCRES RUIZ Mª DOLORES	Segunda	1496
32049243	FERNANDEZ DE VERA RUIZ GEMA MARIA	Segunda	2054
10860583	FERNANDEZ-MADERA MARTINEZ JESUS	Segunda	2503
50284739	FERNANDEZ-VIVANCOS ROMERO SACRAMENTO	Segunda	170
18402217	FERRAN DILLA MARIA PILAR	Segunda	1087
20792270	FERRANDO MANSANET Mª DEL PILAR	Segunda	1533
18953718	FERRE IÑIGUEZ ANA ISABEL	Segunda	1487
33783663	FERREIRO GONZALEZ MANUEL	Segunda	235
28447815	FERRER GARROFE RAFAEL	Segunda	997
10583331	FERRERAS MENENDEZ ANGEL	Segunda	447
23645496	FERRER TORRES JUAN PEDRO	Segunda	100
11788367	FIDALGO IGLESIAS Mª VICTORIA	Segunda	1237
8987884	FLOREZ HERNANDEZ ROCIO	Segunda	1713
48896944	FOJON CHAMORRO LAURA	Segunda	2258
53222408	FONT DE MORA RULLAN JAIME	Segunda	2500
51896955	FORCE SANCHEZ NATIVIDAD BLANCA	Segunda	828
32636285	FORMOSO SOBRADO JOSE MIGUEL	Segunda	1707
71931987	FRAILE MARTIN MARIA JESUS	Segunda	2151
9324514	FRANCISCO ALVAREZ ROBERTO	Segunda	1802
28669938	FRANCO FRANCO BEATRIZ MARIA	Segunda	999

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
5223803	FRANCO LUCAS Mª ISABEL	Segunda	1085
2837759	FRANCO RIVAS M. DEL CARMEN	Segunda	411
17869250	FRANCO DE LA IGLESIA ANA ISABEL	Segunda	695
15238800	FREIJO URDANGARIN GLORIA PILAR	Segunda	781
13075968	FREIRE CARDOSO MARIA DOLORES	Segunda	885
32415962	FREIRE CORZO MARIA ISABEL	Segunda	57
50299458	FREIRE DIEGUEZ MARIA LUISA	Segunda	1045
34806887	FRUCTUOSO HERNANDEZ AURORA	Segunda	2120
3431177	FRUTOS MARTIN FRANCISCO JAVIER DE	Segunda	548
3412754	FRUTOS VINUESA JOSE MIGUEL DE	Segunda	324
3412526	FRUTOS VIRSEDA FRANCISCO JAVIER DE	Segunda	1088
12388221	FUENTE CABEZON OLGA DE LA	Segunda	1987
2059894	FUENTE ISABAL MARIA PAZ DE LA	Segunda	250
7798855	FUENTES COLELLA LUIS	Segunda	95
75002178	FUENTES FERNANDEZ MARIA LUISA	Segunda	123
21509063	FUENTES GUZMAN SILVIA MARIA	Segunda	2190
51618399	FUENTES MARTIN MARIA BLANCA	Segunda	462
6974110	FUENTES MIRANDA JUANA	Segunda	923
35080511	FUENTES-LOJO LASTRES MARIA AMPARO	Segunda	1002
5269130	GABRIEL Y GALAN MORIS MARIA	Segunda	1646
25548444	GAGO BOHORQUEZ ANTONIO	Segunda	1682
10036196	GAGO GAGO MARIA ISABEL	Segunda	1350
34955579	GALA GONZALEZ EVA MARIA DE LA	Segunda	1725
3425444	GALACHE DIEZ Mª BLANCA	Segunda	979
7945327	GALACHE SANCHEZ ASCENSION INMACULADA	Segunda	850
5418505	GALARRAGA ZAMORA ARANZAZU	Segunda	2075
32032820	GALIANA AUCHEL MARIA ISABEL	Segunda	946
22108101	GALAPIENSO CALATAYUD MARIA DEL CARMEN	Segunda	212
5403566	GALLARDO DE PRADO MARIA LUZ	Segunda	1633
24186161	GALLEGO MOLINERO MARIA MONTSERRAT	Segunda	1356
11803070	GALLEGO MUJICA MARIA PILAR	Segunda	1860
7821286	GALLEGO OTERO Mª CONCEPCION FRANCA	Segunda	451
37319158	GALLEGO SANCHEZ JOSE	Segunda	1453
7947840	GALLEGOS MEDRANO RAQUEL	Segunda	1223
13074429	GALLO HIDALGO JOSE LUIS	Segunda	407
23787735	GALVEZ GUILLEN MARIA PILAR	Segunda	1685
28705138	GALVEZ MUÑOZ JUANA	Segunda	1735
34864224	GALVEZ RABADAN BENITO DAMIAN	Segunda	2421
28718901	GAMERO SANCHEZ Mª ARACELI	Segunda	1261
26437523	GAMEZ RODRIGUEZ MARIA FRANCISCA	Segunda	285
38037758	GANNAU GALINDO MODESTO	Segunda	580
15851868	GANUZA JACOISTI Mª RESURRECCION	Segunda	795
24400819	GARAVILLA VARGAS MANUEL MARIA	Segunda	730
14945317	GARBISU CRESPO SONIA	Segunda	2274
34805173	GARCERAN DONATE MARIA DEL MAR	Segunda	2107
9269444	GARCES DE CASTRO Mª LOURDES	Segunda	1175
9250757	GARCIA AGUADO LUIS MARIA	Segunda	787
6580619	GARCIA ALONSO MARIA INES	Segunda	2449
3100606	GARCIA ALVAREZ ANA MARIA	Segunda	1751

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
51336528	GARCIA ALVAREZ AURORA Mª CARMEN	Segunda	1135
53532515	GARCIA AMORIN JOSE RAMON	Segunda	2303
50091094	GARCIA ARANGÜENA CRISTINA	Segunda	1693
13100016	GARCIA ARNAIZ CESAR CARLOS	Segunda	890
52711790	GARCIA BAYO JAVIER	Segunda	2182
35975297	GARCIA BLAZQUEZ JOSE RAMON	Segunda	1543
34736027	GARCIA BONET XAVIER	Segunda	2117
31651242	GARCIA BURGUILLOS MOISES	Segunda	2385
28677553	GARCIA CALDERON MARIA DEL CARMEN	Segunda	685
13733959	GARCIA CARMONA OLIVA AGUSTINA	Segunda	1583
73937349	GARCIA CHOLVI MARIA JOSEFA	Segunda	547
274998	GARCIA CHULIA CONCEPCION IRENE	Segunda	676
7773918	GARCIA CUADRADO ISABEL	Segunda	344
4587157	GARCIA ESCOBAR MARIA DEL MAR	Segunda	2261
44032487	GARCIA ESTEVEZ MIGUEL ANGEL	Segunda	2525
76000899	GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO	Segunda	1731
23222841	GARCIA FERNANDEZ MARIA LUISA	Segunda	1414
45418588	GARCIA FERNANDEZ RAFAEL	Segunda	1546
12356285	GARCIA GAGO PEDRO JESUS ALFONSO	Segunda	485
74627133	GARCIA GALLEGO DOMITILA	Segunda	1046
70860279	GARCIA GARCIA ANA ISABEL	Segunda	2082
52922865	GARCIA GARCIA ANA MARIA	Segunda	1999
27309543	GARCIA GARCIA BEATRIZ	Segunda	2288
50291881	GARCIA GARCIA BEATRIZ	Segunda	752
50204401	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	Segunda	2153
28708447	GARCIA GARCIA PAULA	Segunda	1401
24901948	GARCIA GARCIA TEODORO JESUS	Segunda	299
16510521	GARCIA GIL MARIA ARANZAZU	Segunda	615
14955667	GARCIA GONI CAROLINA MARIA	Segunda	342
4576574	GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL	Segunda	1485
7818492	GARCIA GONZALEZ MARIA ANTONIA	Segunda	397
31229402	GARCIA GUIRAL INMACULADA	Segunda	581
13055471	GARCIA HERAS DAVID	Segunda	1586
7841531	GARCIA HERNANDEZ JOSE LUIS	Segunda	1411
29788436	GARCIA HERNANDEZ RUPERTO MANUEL	Segunda	2014
45453229	GARCIA HERRERA MIGUEL ANGEL	Segunda	2416
33250554	GARCIA IGLESIAS MARIA DE LA LUZ	Segunda	644
30534698	GARCIA JULIA ANTONIO	Segunda	2278
26436616	GARCIA LAINEZ JUAN ANTONIO	Segunda	2091
30527109	GARCIA LARA JUAN MANUEL	Segunda	1613
24174890	GARCIA LEYVA MARIA LUZ	Segunda	1017
16566761	GARCIA LOIZAGA MARIA BELEN	Segunda	2454
13104913	GARCIA LOPEZ CRISTINA MARIA	Segunda	926
24169134	GARCIA LOPEZ MARIA DEL SOL	Segunda	1006
14939249	GARCIA MACUA FRANCISCO JAVIER	Segunda	849
35011023	GARCIA MADORELL MARIA DEL CARMEN	Segunda	254
7834233	GARCIA MARTIN CARLOS ANTONIO	Segunda	875
7947835	GARCIA MARTIN EMILIANO	Segunda	1809
5419941	GARCIA MARTIN JULIA	Segunda	2257

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
29180264	GARCIA MARTIN RAQUEL	Segunda	2420
24326269	GARCIA MARTINEZ INMACULADA	Segunda	1526
2605377	GARCIA MARTINEZ Mª VICTORIA	Segunda	1442
34791024	GARCIA MARTINEZ PEDRO JAVIER	Segunda	2411
9697883	GARCIA MELON Mª DEL PERPETUO SOCORRO	Segunda	32
2497154	GARCIA MONTES BLANCA CLARA	Segunda	244
34010973	GARCIA MORENO MATILDE	Segunda	1846
4564416	GARCIA MORILLAS Mª CRISTINA	Segunda	1256
9304363	GARCIA MUÑOZ MARY LUZ	Segunda	1547
23005969	GARCIA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	Segunda	2123
52615400	GARCIA ORDOÑEZ Mª VICTORIA	Segunda	2289
34891992	GARCIA PEDREIRA MARIA CARMEN	Segunda	2209
29001001	GARCIA PEREZ JOSE MIGUEL	Segunda	2134
25974194	GARCIA PEREZ MARGARITA	Segunda	826
13749178	GARCIA PEREZ Mª DE LAS NIEVES	Segunda	1221
793567	GARCIA PINO JOSE MARIA	Segunda	1499
18941137	GARCIA POVEDA CARMEN	Segunda	2498
17831519	GARCIA REDONDO BASILIO	Segunda	87
43042927	GARCIA REVIRIEGO MARIA DEL MAR	Segunda	1509
22480779	GARCIA RIVAS FRANCISCO JOSE	Segunda	822
7019387	GARCIA RODRIGUEZ MARIA PILAR	Segunda	1549
24192075	GARCIA RODRIGUEZ Mª DE LOS ANGELES	Segunda	1116
12355345	GARCIA ROIG JOSE LUIS	Segunda	854
2702595	GARCIA ROJAS MARIA ISABEL	Segunda	719
14597539	GARCIA ROJI MARIA JOSE	Segunda	1798
802737	GARCIA ROLDAN CONCEPCION	Segunda	1842
1488792	GARCIA ROLDAN PALOMA	Segunda	1824
12754272	GARCIA RUBIO LUIS MIGUEL	Segunda	2306
25992902	GARCIA RUEDA Mª ANGELES	Segunda	1516
29137056	GARCIA RUIZ MARIA LOURDES	Segunda	1353
52759705	GARCIA SANCHEZ MARIA	Segunda	1971
22437477	GARCIA SANCHEZ MARIA MERCEDES	Segunda	136
73153747	GARCIA SANCHO MARIA INMACULADA	Segunda	930
21453281	GARCIA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN	Segunda	1589
7240171	GARCIA SANZ MARIA BELEN	Segunda	2077
5362545	GARCIA SOLANO ANGELES ROSA	Segunda	553
75698851	GARCIA SUAREZ MANUEL MIGUEL	Segunda	1128
3432853	GARCIA TEJEDOR MARIA LUISA	Segunda	692
9368420	GARCIA UBEDA ELISA	Segunda	845
12762294	GARCIA VEGAS MARIA ASUNCION	Segunda	2198
27488774	GARCIA VILLANUEVA FRANCISCO MANUEL	Segunda	1423
50832898	GARCIA VILLEGAS AGUEDA	Segunda	1757
33859387	GARCIA DE EVAN MARINA PILAR	Segunda	1477
9410432	GARCIA DE HOYOS MARIA ESTHER	Segunda	2060
50680569	GARCIA DE LA VEGA LOPEZ Mª ANTONIA	Segunda	183
3836825	GARCIA DEL CASTILLO ARTURO	Segunda	1852
40866241	GARCIA GRAU JOSE MANUEL	Segunda	707
16514294	GARCIA JALON DE LA LAMA MARIA MANUELA	Segunda	452
1092897	GARCIA-CAMBA HERNANDEZ ASCENSION	Segunda	194

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
24166481	GARCIA-CONTRERAS MARTINEZ MARIA DOLORES	Segunda	621
51444289	GARCIA-DENCHE NAVARRO MARIA TERESA	Segunda	427
8813564	GARCIA-HIERRO ANDRADE JOSE MARIA	Segunda	1841
6220907	GARCIA-MORATO MORENO-MANZANARO ANTONIA MARIA	Segunda	949
50303097	GARCIA-MORENO CARROBLES CELIA	Segunda	1110
22947965	GARCIA-PAGAN GARCIA CRISTOBAL	Segunda	733
2193974	GARCIA-PUENTE RUIZ MARIA ASIS	Segunda	292
11958255	GARCIA-PUERTAS MAGARIÑOS CAMILO JOSE	Segunda	532
3070346	GARCIA-SAAVEDRA BASTAZO VICENTA	Segunda	593
24851278	GARCIA-TELLO Y TELLO MARIA DEL CARMEN	Segunda	846
8802350	GARCIA-TENORIO ENCINAS ALFREDO	Segunda	1018
14960226	GARCIA-TOMASSONI VEGA MARIA DOLORES	Segunda	1062
18235637	GARCIA PUIGSERVER ESPERANZA	Segunda	2441
10178710	GARMON CADIerno ALADINO	Segunda	1791
663106	GARRALDA TEUS FRANCISCO JAVIER	Segunda	1346
52543972	GARRIDO ARENAS MARIA ANTONIA	Segunda	2358
8821652	GARRIDO CAMPOS MARIA JOSE	Segunda	1943
80044356	GARRIDO ESCUDERO IGNACIO	Segunda	2098
25396385	GARRIDO FERRANDO MARIA CARMEN	Segunda	1730
2498492	GARRIDO GOMEZ Mª MARGARITA	Segunda	450
25178983	GARRIDO RAMOS JAVIER	Segunda	2176
34965379	GARRIDO RODRIGUEZ ALVARO	Segunda	1786
24296055	GARRIDO TERUEL LOURDES	Segunda	756
5376786	GARRIGOS CASTEJON M.DE LOS ANGELES	Segunda	401
24179970	GARZON MELGAREJO CARMEN MARIA	Segunda	836
77265241	GASSO PRIU ADRIA MARIA	Segunda	1080
75410464	GAVIRA VILLA MARIA DOLORES	Segunda	993
16258091	GAY-POBES VITORIA MARIA DEL CARMEN	Segunda	698
51351018	GAYO YDOATE JOSE	Segunda	182
12317739	GESTOSO DE LA FUENTE JERONIMO	Segunda	907
14931450	GIBERT TRUEBA DOMINGO ENRIQUE	Segunda	737
22628067	GIL ESTEBAN MANUEL IGNACIO	Segunda	359
5222508	GIL FLORES MARINA	Segunda	55
52087453	GIL GARCIA MARIA DE LA CONSOLACION	Segunda	2356
44251705	GIL GARCIA MARIA INMACULADA	Segunda	2453
76808624	GIL TABOADA Mª JOSE	Segunda	726
13125175	GIL VEGA MARTA	Segunda	1764
22447099	GIMENEZ LOPEZ MARIA DEL MAR	Segunda	368
34801681	GIMENEZ MARTINEZ CRISTINA	Segunda	1923
25421686	GIMENEZ PONCE YOLANDA	Segunda	2032
17870671	GIMENO CALVO Mª JOSE	Segunda	1228
44031374	GIMENO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	2370
18920470	GIMENO SANTOLARIA ALVARO	Segunda	242
40878755	GINER FUSTE CARMEN EVEDIA	Segunda	1174
18422171	GINER MARTIN RICARDO	Segunda	1459
50306073	GIRALDEZ BLANCO JULIO	Segunda	1232
80045129	GIROL GALEA NICOLAS	Segunda	2003
28667221	GIRON MAGARIÑO MILAGROSA MARIA	Segunda	905
33843117	GIRON VIDAL Mª AUXILIADORA	Segunda	1156

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
7562580	GODES MEDRANO NURIA	Segunda	2506
77327670	GODOY HURTADO ANGELA	Segunda	2298
30556951	GOFINONDO FERNANDEZ DE ARROYABE MIREN ITZIAR	Segunda	1578
20815631	GOIG REVERT GEMMA MARIA	Segunda	2219
10041016	GOMEZ ALVAREZ ROSA	Segunda	2287
29752607	GOMEZ BLANCO MARIA CARLOTA	Segunda	853
75634338	GOMEZ CABALLERO ANDRES	Segunda	1792
6985698	GOMEZ CASTELLANO FRANCISCO	Segunda	1034
9169076	GOMEZ CINTAS MARIA DEL MAR	Segunda	1379
8937112	GOMEZ GALLARDO ROSA MARIA	Segunda	1879
3115001	GOMEZ GARCIA MARIA	Segunda	2175
10860235	GOMEZ IGLESIAS ISABEL	Segunda	1900
25939171	GOMEZ LARA JUAN RAMON	Segunda	2292
75226989	GOMEZ LASO MARIA	Segunda	2133
3080599	GOMEZ LOECHES LUIS	Segunda	1953
29089191	GOMEZ MORENO ELVIRA	Segunda	2489
13713065	GOMEZ MOVELLAN MARIA DOLORES	Segunda	628
7558843	GOMEZ NOVA FRANCISCO	Segunda	2290
24054817	GOMEZ PARDO JUAN MANUEL	Segunda	66
28507750	GOMEZ PASCUAL MARIA LUISA	Segunda	282
19825226	GOMEZ PERIS ELENA	Segunda	1737
1934226	GOMEZ RODRIGUEZ MARIA BELEN	Segunda	2223
13104508	GOMEZ SAGREDO MONTSERRAT	Segunda	981
71115864	GOMEZ SANTOS ANGEL	Segunda	1026
2205623	GOMEZ SOUTO Mª CARMEN	Segunda	1158
29077063	GOMEZ SUAREZ VERONICA PIA	Segunda	1678
7991976	GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ MIGUEL PAULINO	Segunda	2335
28722471	GOMEZ-CALERO VALDES MARIA DEL ROCIO	Segunda	1354
29181659	GOMEZ-FERRER BOLINCHES ROCIO	Segunda	2056
71547299	GOMEZ-VILLABOA PEREZ ANA MARIA	Segunda	1054
24407355	GOMEZA LORENZO JUAN TOMAS	Segunda	1204
5342966	GOMILA DE SANDE JOSE CARLOS	Segunda	1297
28683717	GONGORA MACIAS MARIA JOSE DE	Segunda	760
5215807	GONZALEZ ALIO RAFAEL	Segunda	873
13100968	GONZALEZ ALVARO MARIA INMACULADA	Segunda	892
11929291	GONZALEZ ARAMBURU SUSANA	Segunda	1484
28490757	GONZALEZ ARCOS MARIA ISABEL	Segunda	2106
15930803	GONZALEZ ARENZANA MARTA TERESA	Segunda	823
51349957	GONZALEZ ARNAL JOSE CARLOS	Segunda	809
50166809	GONZALEZ BASCUEÑA SALVADOR	Segunda	1594
22536046	GONZALEZ CASADO CARMEN	Segunda	535
9252295	GONZALEZ DOMINGUEZ ANA MARIA	Segunda	585
8099691	GONZALEZ DUQUE FRANCISCO JAVIER	Segunda	874
16569102	GONZALEZ ELIAS MARIA ASUNCION	Segunda	2064
24106089	GONZALEZ ESPINOSA CONCEPCION	Segunda	419
75445603	GONZALEZ ESPINOSA MARIA ELENA	Segunda	2390
32746317	GONZALEZ FEIJOO Mª LOURDES	Segunda	1163
7802686	GONZALEZ GARCIA ALFONSO	Segunda	1060
7865270	GONZALEZ GARCIA MANUEL	Segunda	1639

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
7855474	GONZALEZ GARCIA MARIA ANGELES	Segunda	1394
11737822	GONZALEZ GARCIA MARIA JESUS	Segunda	1367
7818808	GONZALEZ GARCIA SANTIAGO	Segunda	657
24211891	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL	Segunda	1591
10819837	GONZALEZ GONZALEZ MARIA JESUS	Segunda	493
7861622	GONZALEZ GONZALEZ RAUL	Segunda	2266
51677512	GONZALEZ GRANADO VIRGINIA MARTA	Segunda	1832
46020823	GONZALEZ HERAS MARIA DEL CARMEN	Segunda	1645
9354355	GONZALEZ HUERGO MARIA JOSEFA	Segunda	869
28470180	GONZALEZ IGLESIAS MERCEDES	Segunda	1674
45700647	GONZALEZ LAVERS M. DEL CARMEN	Segunda	502
6524726	GONZALEZ LOPEZ MARIA CRUZ	Segunda	138
23774108	GONZALEZ LOPEZ Mª LUISA EUGENIA	Segunda	1057
52511070	GONZALEZ MAÑAS MARIA	Segunda	1819
27533769	GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES	Segunda	2359
3831901	GONZALEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION	Segunda	1417
7497024	GONZALEZ MORENO MARIA CONCEPCION	Segunda	2001
382256	GONZALEZ ORDOÑEZ JOSE RAMON	Segunda	1165
27469719	GONZALEZ PEINADO ANA ISABEL	Segunda	1845
13779248	GONZALEZ PEREDA JAVIER	Segunda	2473
2527297	GONZALEZ PEREZ FERNANDO	Segunda	1190
12359840	GONZALEZ REBOLLO M. ANGELES	Segunda	766
8738101	GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO PEDRO	Segunda	1612
10556950	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR	Segunda	23
31226774	GONZALEZ RODRIGUEZ-SALINAS MARIA ESPERANZA	Segunda	405
22543606	GONZALEZ ROMERO Mª DEL MAR	Segunda	1140
7778911	GONZALEZ ROMO PEDRO MARIA	Segunda	27
5374704	GONZALEZ SANCHEZ JOSE MARIANO	Segunda	769
12717499	GONZALEZ SANCHEZ MARIA BEGOÑA	Segunda	899
24174054	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CARMEN	Segunda	827
36554922	GONZALEZ SANTAMARIA MARIA DOLORES	Segunda	184
45088998	GONZALEZ SARABIA ANTONIO	Segunda	2167
36039264	GONZALEZ SERODIO ROSALINO JULIAN	Segunda	590
9286220	GONZALEZ TAPIA MARIA DEL PILAR	Segunda	2160
2503219	GONZALEZ TEJERINA AMELIA	Segunda	305
4581870	GONZALEZ TORRES LUIS	Segunda	1596
12159548	GONZALEZ VELASCO FRANCISCO DE ASIS	Segunda	7
25955766	GONZALEZ DE PEREDA PEDRO FERNANDO	Segunda	1155
4142500	GONZALEZ DE RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	Segunda	910
39838683	GONZALEZ-CASABON USIETO GENOVEVA	Segunda	356
418550	GONZALEZ-ELIPE ROSALES MARIA PILAR	Segunda	1748
10566040	GONZALEZ-IRUN VAYAS VICTORIA EUGENIA	Segunda	668
21439415	GONZALEZ-MORO TOLOSANA ANTONIO	Segunda	1258
12219651	GONZALEZ-SANJOSE NOGALES MARIA SOLEDAD	Segunda	106
37267970	GOÑALONS BENAVENT ROSA MARIA	Segunda	1093
2510560	GORDILLO ALHAMBRA MARIA DOLORES	Segunda	683
44957275	GORDILLO PEREZ MARIA DEL PILAR	Segunda	2518
17861289	GORMAZ ADELL MARIA CONSUELO	Segunda	228
15939643	GOROSTIDI PULGAR MARIA DEL CORO	Segunda	318

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
43702767	GORT ORO JOSE RAMON	Segunda	1568
30482550	GRACIA HIDALGO MARIA PAZ	Segunda	1008
795545	GRAGERA DE TORRES CARMEN	Segunda	1051
11938673	GRANADO MARTIN MIGUEL ANGEL	Segunda	1364
4160783	GRANDA SAN MIGUEL Mª PILAR	Segunda	1277
43506276	GRANEL RODRIGUEZ JORGE	Segunda	1449
3461606	GRANELL GUYATT PALOMA	Segunda	2533
50269718	GRAU GARCIA-BLANCO MARIA DOLORES	Segunda	2140
74166508	GRAU RECH CONCEPCION	Segunda	229
29128824	GREGORIO SOLA RAQUEL	Segunda	2481
792486	GRIMA GRIMA MIGUEL ANGEL	Segunda	1186
76233635	GROISS BUIZA MARIA MERCEDES	Segunda	793
22609753	GUARDIA CIRUGEDA Mª BUEN CONSEJO DE LA	Segunda	116
5167515	GUARDIA DIAZ PAULA	Segunda	1330
820046	GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS ANTONIO EVARISTO	Segunda	1577
75407314	GUERRA MORAL JOSE ANTONIO	Segunda	1245
2203064	GUERRERO RABADAN ANGELA MARIA	Segunda	1251
24198336	GUERRERO RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	Segunda	2045
24105699	GUERRERO SALAZAR INMACULADA	Segunda	245
8737703	GUERRERO TERCERO FRANCISCO	Segunda	1474
77510914	GUILLAMON AYALA MARIA PURIFICACION	Segunda	2135
17717411	GUILLEN FLETA MARIA LUISA	Segunda	1709
53050481	GUILLOT PALOMAR LETICIA	Segunda	2417
51413640	GUIRAO LLORENTE PEDRO ANGEL	Segunda	2425
79263367	GUISADO RUIZ ANA ISABEL	Segunda	1831
36081868	GUNDIN OZORES JUAN MANUEL	Segunda	1822
40287661	GUSIÑER MIR ROSER	Segunda	537
17220669	GUTIERREZ ALADREN Mª MERCEDES	Segunda	1455
44284531	GUTIERREZ CARDENETE ANTONIO	Segunda	2535
12360360	GUTIERREZ DIEZ MARIA CRUZ	Segunda	886
9798943	GUTIERREZ FIDALGO MARTA	Segunda	2316
70558693	GUTIERREZ GUIO ENCARNACION	Segunda	1440
25146585	GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN ENRIQUE	Segunda	1891
11434149	GUTIERREZ LAZARO COVADONGA	Segunda	2225
50296479	GUTIERREZ LOPEZ ANTONIO FELIX	Segunda	1743
25998906	GUTIERREZ LOPEZ MARIA SOLEDAD	Segunda	1720
12726982	GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS	Segunda	1291
12371581	GUTIERREZ MELENDEZ MARIA CARMEN	Segunda	1362
44953024	GUTIERREZ RUIZ MARIA CRISTINA	Segunda	2391
15847680	GUTIERREZ SERRANO MARIA ELENA	Segunda	636
5410447	GUTIERREZ DEL ALAMO OMS CRISTINA	Segunda	1664
26198887	HARO LOPEZ-VILLALTA MARIA DOLORES DE	Segunda	851
5252008	HAY ALBA MARINA ISABEL	Segunda	765
28399565	HERAS ELVIRA FELIPE	Segunda	1263
136161	HERCE VALLEJO VICTORIANO	Segunda	89
50726774	HERMOSO DE MENA NATALIA	Segunda	2113
3464524	HERNAN ALVAREZ MARIA ESMERALDA	Segunda	2521
12212615	HERNANDEZ ABASCAL MARIA LUISA	Segunda	110
29088951	HERNANDEZ ALONSO ANA MARIA	Segunda	1651

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
34812109	HERNANDEZ BLAZQUEZ FRANCISCA	Segunda	2111
43366353	HERNANDEZ BURGOS EVA MARIA	Segunda	2333
23769435	HERNANDEZ BURGOS MARIA DOLORES	Segunda	475
43806875	HERNANDEZ CASTELLO MARIA LUISA	Segunda	2097
28374932	HERNANDEZ DIAZ-NORIEGA FRANCISCO	Segunda	1084
5231620	HERNANDEZ GALLEGO PEDRO JOSE	Segunda	339
7828384	HERNANDEZ HOFMANN LUIS MANUEL	Segunda	1378
22474963	HERNANDEZ JIMENEZ PALOMA	Segunda	610
20784791	HERNANDEZ MARTIN TOMASA	Segunda	1242
6977429	HERNANDEZ MOGOLLON LUIS FERNANDO	Segunda	1808
4160580	HERNANDEZ OLLERO Mª EUGENIA	Segunda	1179
24178062	HERNANDEZ PRADOS PEDRO	Segunda	1001
406028	HERNANDEZ-GIL MANCHA MARIA MAGDALENA	Segunda	263
13064774	HERNANDO ARENAS MARIA JESUS	Segunda	785
9289487	HERRAEZ MARTIN GLORIA	Segunda	1351
36961125	HERRANZ NARRO MARIA DEL PILAR	Segunda	525
5236423	HERRANZ ROMERO JOSE MIGUEL	Segunda	894
7855559	HERRERO MARTIN MARIA INMACULADA	Segunda	1619
12698831	HERRERO RUIZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	68
13298316	HERRERO SANCHEZ MARIA ELENA	Segunda	1393
9391227	HERRERO UDAONDO COVADONGA	Segunda	1657
17136612	HERRERO MARIN FIDEL ROGELIO	Segunda	533
670693	HERREROS MIÑAGORRE ANGELES	Segunda	536
12725606	HERREROS VENTOSA MAXIMO JAVIER	Segunda	1405
51943326	HERVAS GONZALEZ SARA	Segunda	2381
25900051	HERVAS PASTOR JOSE MIGUEL	Segunda	217
25375567	HERVAS VERCHER JOSE VICENTE	Segunda	1357
76233533	HIDALGO ESPERILLA JOSE MARIA	Segunda	1183
15792685	HIDALGO HIDALGO AGUSTIN DE SAN ANTONIO	Segunda	119
51355485	HIERRO HERNANDEZ-MORA MARIA ISABEL	Segunda	876
24130902	HIGUERA ESPIN MARIA JOSE DE LA	Segunda	382
6997683	HINOJAL GIJON FRANCISCO JULIAN	Segunda	986
39721993	HOLGADO ESTEBAN JUAN	Segunda	2483
10576290	HORMAZABAL VILLACORTA Mª ESTRELLA	Segunda	1681
13117992	HOYO MORENO BLANCA ESTHER DEL	Segunda	1407
50090827	HUERTAS NAFRIA ROMAN	Segunda	2264
27472867	HURTADO YELO Mª MICAELA	Segunda	1617
16527785	IBAÑEZ PRADO MERCEDES	Segunda	596
30643476	IBAÑEZ ELEJALDE FDEZ ARROYABE IÑIGO	Segunda	1615
34790021	IBORRA LACAL ANA	Segunda	2072
29112132	IGEA MARTINEZ ANA ROSA	Segunda	2002
17441586	IGLESIAS DE BAYA JORGE VÍCTOR	Segunda	1662
33246572	IGLESIAS FUNGUEIRO CARMEN	Segunda	587
7831830	IGLESIAS MARTIN JESUS JAVIER	Segunda	867
50680964	IGNACIO CAMPOS DANIEL ALEJANDRO	Segunda	613
37662531	ILLA PUJALS JAIME	Segunda	2092
3443594	ILLANAS MERINO CESAR LUIS	Segunda	1373
15875584	INCINILLAS FERNANDEZ JESUS MIGUEL	Segunda	1939
9289104	INFANTE ORTIZ Mª YOLANDA	Segunda	1625

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
36970471	INIESTA GARCIA MARIA MERCEDES	Segunda	180
28545379	INIESTA PASCUAL MARIA ISABEL	Segunda	911
13121281	IÑIGUEZ MARTINEZ ANA DEL MAR	Segunda	1396
15961279	IÑURRATEGI ITZA MARIA NEREA	Segunda	1208
25716282	IRABURU ECHAVARRI PATRICIA	Segunda	2178
52658123	IRLES MARTINEZ PILAR	Segunda	2462
3463800	ISABEL CABRERA MONTSERRAT	Segunda	1973
15863656	ISASI BARBIER FRANCISCO JAVIER	Segunda	1286
26485336	ISRAEL SALAS ROCIO	Segunda	2339
45410646	IZQUIERDO ALVAREZ-BUYLLA MARIA PALOMA	Segunda	1078
25314950	IZQUIERDO CARBONERO FRANCISCO JAVIER	Segunda	2155
3450813	IZQUIERDO DIEZ JOSE ALBERTO	Segunda	2523
73153538	JAEN BAYARTE MARIA	Segunda	1471
800738	JAUREGUIZAR SERRANO MARTA	Segunda	178
15951246	JIMENEZ AGREDA BEATRIZ	Segunda	996
42988515	JIMENEZ ALONSO LUIS	Segunda	2507
3111735	JIMENEZ AZAUSTRE CESAR	Segunda	2406
75406108	JIMENEZ BADA ANA MARIA	Segunda	376
43371600	JIMENEZ CAMACHO MARIA DEL PILAR	Segunda	2464
20160829	JIMENEZ FUEYO MARTA	Segunda	2501
30482258	JIMENEZ HURTADO ANTONIO JOSE	Segunda	2351
7448001	JIMENEZ JIMENEZ TRINIDAD	Segunda	1020
23194471	JIMENEZ JORQUERA MARIA PILAR	Segunda	114
40880456	JIMENEZ MARTINEZ ISABEL	Segunda	1462
24198284	JIMENEZ MORERA ROGELIO	Segunda	1059
24099492	JIMENEZ MORILLAS BIENVENIDO	Segunda	1510
7847109	JIMENEZ PADIN CARLOS	Segunda	1460
28698155	JIMENEZ PALOMO RAFAEL	Segunda	1457
5078643	JIMENEZ POZUELO JOSE VICENTE	Segunda	1788
50799836	JIMENEZ REDONDO AMALIA JOSEFA	Segunda	388
72877950	JIMENEZ SALAS MARGARITA	Segunda	1782
16791916	JIMENEZ SANCHO Mª BEGOÑA	Segunda	1299
28591028	JIMENEZ TRIGUEROS BEATRIZ	Segunda	2360
34018176	JIMENEZ VELASCO JOSE PABLO	Segunda	2255
4571427	JIMENEZ DEL OLMO ANGEL RAMON	Segunda	1366
25678734	JIMENEZ-VILLAREJO FERNANDEZ PABLO EMILIO	Segunda	2330
22644103	JIMENO DEL VALLE Mª JESUS	Segunda	1284
34001038	JUAN LOPEZ ENRIQUE	Segunda	2115
41441773	JUAN MARI JOSEFA	Segunda	2095
43011245	JUAN SALVA MARGARITA DE	Segunda	1456
7759454	JUANES HERNANDEZ MIGUEL LUIS	Segunda	2021
22476216	JUAREZ ARCAS VICTORIA	Segunda	740
9168389	JUAREZ SANCHEZ-GRANDE Mª GLORIA	Segunda	1188
73150738	JULVE GUERRERO INMACULADA	Segunda	556
10895471	JUNQUERA GONZALEZ PATRICIA	Segunda	1978
72671497	JURIO MACAYA INMACULADA	Segunda	1672
24311606	JUSTO BRUIXOLA MARIA AMPARO	Segunda	473
51646195	KAIFER BRASERO ALICIA	Segunda	1195
53289089	KALIL RIVERO GIBRAN	Segunda	2164

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
24116010	LABELLA RIBES FRANCISCO JAVIER	Segunda	1072
37684424	LABORDETA DE LA CAL ENRIQUE	Segunda	2043
44034596	LABRA CASTAÑOS GLORIA DE	Segunda	2201
786515	LABRADOR RODRIGUEZ ALICIA	Segunda	240
52817738	LACALLE ESPALLARDO ANA MARIA	Segunda	2055
17855515	LACASA CLAVER MARIA DEL PILAR	Segunda	360
17159225	LACASTA MONTES MARIA LUISA	Segunda	1587
17987737	LACHEN IBORT MARIA ISABEL	Segunda	19
43523658	LACORT GARCIA ANA MARIA	Segunda	2465
52716013	LACUEVA SUBIRATS SILVIA	Segunda	2366
16784922	LADERA SAINZ MARIA DOLORES	Segunda	417
17855000	LAFUENTE MORENO INES FRANCISCA	Segunda	422
29182874	LAFUENTE SEVILLA RAFAEL	Segunda	2342
3429430	LAFUENTE DE BENITO MARIA DEL PILAR	Segunda	373
3418077	LAFUENTE DE BENITO ROSA MARIA	Segunda	469
10052714	LAGO ALONSO Mª DE LOS ANGELES	Segunda	571
36068718	LAGOS SUAREZ-LLANOS MARTA	Segunda	1049
25444291	LAGUARDIA HERNANDO JOSE ANTONIO	Segunda	1592
13112675	LAGUNA PEREZ Mª DEL MAR	Segunda	1292
39128789	LAITA FLORES MARIA JESUS	Segunda	1348
36050126	LAMAS ALONSO MARTA VICTORIA	Segunda	1038
14901646	LANA Y ARALUCE GLORIA	Segunda	394
8997919	LANCHAS RODRIGUEZ SUSANA	Segunda	2435
31834143	LANDALUCE CALLEJA MARIA CRUZ	Segunda	1342
11927530	LANGARA GARCIA-ECHAVE MARIA ISABEL	Segunda	1386
37262053	LARA RUBIDO CARMEN	Segunda	1848
17855239	LARDIES PORCAL MARIA PIA	Segunda	661
20172810	LARRINAGA ALVAREZ NEREA	Segunda	2150
21994515	LARROSA ABELLAN JESUS	Segunda	2159
22381310	LARROSA AMANTE JOSE	Segunda	10
45561797	LARROSA ESPINOSA MARIA LIDIA	Segunda	2515
7874350	LASO PEREZ MARIA PAZ	Segunda	1857
72023189	LASTRA LIENDO SEBASTIAN	Segunda	1212
19885002	LATORRE ARFELLA JOSEFINA	Segunda	2433
39651326	LATORRE CUSIDO JOSE MIGUEL	Segunda	486
33844560	LATORRE DIAZ BEATRIZ	Segunda	1061
17857173	LAVIÑA QUEROL INMACULADA	Segunda	365
24120737	LAZUEN ALCON EDUARDO	Segunda	751
24120755	LEAL SEGURA AURORA	Segunda	43
9749574	LEBREDO FERNANDEZ JESUS MARIA	Segunda	2276
22949876	LEGAZ GARCIA CARLOS	Segunda	1365
10592077	LEIVA GONZALEZ Mª OLIVA	Segunda	1306
75011277	LENDINEZ BARRANCO CONSTANZA CLARA	Segunda	1768
75206547	LENTISCO GARCIA EMILIO JUAN	Segunda	61
29746541	LEON LEAL Mª TERESA	Segunda	1294
2523090	LEON NORIEGA MISAEAL	Segunda	897
24211577	LEYVA MUÑOZ JESUS	Segunda	1924
29015329	LIDON RUBIO OLGA	Segunda	2379
4586603	LILLO OROZCO MARIA TERESA	Segunda	2341

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
24207359	LINARES CUESTA JOAQUIN	Segunda	1660
14934885	LINAZA VICANDI MARIA LUISA	Segunda	1574
35274962	LIS DOMINGUEZ MARIA JOSEFA	Segunda	741
7841349	LIVIANOS MARTIN MARIA CRISTINA	Segunda	1734
5664962	LIZAN RUFILANCHAS RAFAEL	Segunda	2267
12225685	LLAMAS HERMIDA ESPERANZA	Segunda	474
24276235	LLAMAS PIÑAR DELIA	Segunda	2029
681287	LLAMAS DÍAZ ANDRÉS	Segunda	2138
78061981	LLEVOT CALVET CONCEPCION	Segunda	649
37254361	LLOPIS LUCAS MERCEDES	Segunda	172
42972109	LLOR BAÑOS JOAQUINA	Segunda	555
22648813	LLORENS LOPEZ Mª JOSE	Segunda	1268
25973135	LLORENS GOMEZ DE LAS CORTINAS MARIA CONCEPCION	Segunda	758
3063044	LLORENTE GARCIA HILARIO	Segunda	216
72778126	LLORENTE LLORENTE FABIOLA	Segunda	944
19831279	LLORIS GUANTER ISABEL	Segunda	499
28712239	LOBILLO EGUIBAR ROSARIO	Segunda	1513
1822264	LOBO ZAMORA LORENZO	Segunda	2127
32336836	LOJO ALLER FRANCISCO JOSE	Segunda	76
1088108	LOPEZ ALONSO CARMEN	Segunda	891
50412290	LOPEZ APARICIO MARIA LUZ	Segunda	214
2512773	LOPEZ ARAUJO RITA	Segunda	540
72550313	LOPEZ AZCOITIA JAVIER	Segunda	2368
24099334	LOPEZ CALERA JOAQUIN MARIA	Segunda	361
25087890	LOPEZ CALVO CLARA	Segunda	1434
27288323	LOPEZ CAMACHO MANUEL	Segunda	1021
33329545	LOPEZ CARBALLO MARIA DE LOS ANGELES	Segunda	2471
16533079	LOPEZ CORRAL EUGENIO	Segunda	1321
13907276	LOPEZ CORTES MIGUEL ANGEL	Segunda	816
25422354	LOPEZ DOMENECH JORGE	Segunda	2334
11792069	LOPEZ DURAN EMILIO	Segunda	1202
50313018	LOPEZ FERNANDEZ MARIA AUXILIADORA	Segunda	2505
5397367	LOPEZ GARCIA-NIETO ISABEL	Segunda	1515
44045122	LOPEZ GAVIÑO RAQUEL MARIA	Segunda	2374
7550132	LOPEZ GOMEZ MARIA JOSE	Segunda	1632
5258318	LOPEZ GUERRERO Mª CRISTINA	Segunda	1464
5674242	LOPEZ GUTIERREZ CARMEN MARIA	Segunda	2496
4573694	LOPEZ JABALERA REYES GREGORIO	Segunda	1858
2193186	LOPEZ JADO MARIA DE LA SOLEDAD	Segunda	425
24215994	LOPEZ LEYVA CARMEN	Segunda	1383
25912859	LOPEZ LINDE DIEGO JOSE	Segunda	135
50728332	LOPEZ LUENGO ALBERTO	Segunda	2442
27283794	LOPEZ LUNA MARIA	Segunda	510
28866916	LOPEZ LUQUE MIGUEL ANGEL	Segunda	1432
17182631	LOPEZ MARIN MARIA JESUS	Segunda	126
50805400	LOPEZ MARMOL ANGEL	Segunda	1446
22437598	LOPEZ MARQUEZ MARIA	Segunda	289
7830219	LOPEZ MARTIN FABIO	Segunda	1776
17721083	LOPEZ MARTIN MARIA JOSE	Segunda	1558

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
9740643	LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRO	Segunda	1246
44379511	LOPEZ MONTES ALEJANDRO MANUEL	Segunda	2170
5169693	LOPEZ MORENO JUANA	Segunda	2362
48390204	LOPEZ MORENO LUCIA	Segunda	2212
27494578	LOPEZ NAVARRO MARIA JESUS	Segunda	783
24204382	LOPEZ POYATOS ENRIQUE	Segunda	1369
34855085	LOPEZ RAMON LIDIA PALOMA	Segunda	2428
38774803	LOPEZ RIBAS MIQUEL	Segunda	1624
22403321	LOPEZ RIVERA JOSE ANTONIO	Segunda	115
24156099	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN	Segunda	812
1105108	LOPEZ RODRIGUEZ INMACULADA	Segunda	800
24888505	LOPEZ RUBIO DOLORES CARMEN	Segunda	1938
27439484	LOPEZ SALCEDO SUSANA	Segunda	1041
40960536	LOPEZ SALINAS FRANCISCA	Segunda	2168
22442526	LOPEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	Segunda	189
5381369	LOPEZ TELLO ESTRELLA	Segunda	639
1171537	LOPEZ VAZQUEZ M. DE LAS NIEVES	Segunda	612
13294868	LOPEZ DE SILANES HERNAEZ MARIA CARMEN	Segunda	932
24188526	LOPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA MARIA JOSE	Segunda	1229
18195685	LOPEZ-DICASTILLO SAINZ-MURIETA Mª FERNANDA	Segunda	1627
2531308	LOPEZ-FANDO DE MIGUEL RAQUEL CRISTINA	Segunda	2396
51969237	LOPEZ-HONTANAR FERNANDEZ-ROLDAN CONCEPCION	Segunda	303
18208122	LOPEZ-JACOISTE RICO MARIA EUGENIA	Segunda	1030
24157769	LOPEZ-JURADO ROMERO-CRUZ MARIA DOLORES	Segunda	965
26425004	LOPEZ-LENDINEZ POZAS MANUEL IGNACIO	Segunda	90
5228432	LOPEZ-MEDEL BASCONES ANA MARIA	Segunda	81
25138169	LOPEZ-MELUS MARZO RAFAEL	Segunda	1598
4566605	LORCA PUERTA GUSTAVO JAVIER	Segunda	2141
29111741	LORENTE SERRANO RAQUEL	Segunda	2256
27308947	LORENZO ESTABLIER TERESA EUGENIA	Segunda	1946
43734731	LORENZO MIR MARIA MERCEDES	Segunda	2208
5651365	LOROÑO ZULOAGA MARIA PILAR	Segunda	1752
10036958	LOZANO BLANCO ROSA MARIA	Segunda	2203
5429860	LOZANO BRUNA MARIA ISABEL	Segunda	2053
13092874	LOZANO DE BENITO ALFONSO	Segunda	792
31680158	LOZANO GAGO MARIA DE LA LUZ	Segunda	2516
27435663	LOZANO MUÑOZ PEDRO	Segunda	1595
10569891	LOZANO RODRIGUEZ MARIA JESUS	Segunda	351
1183964	LOZANO SANZ ELIA	Segunda	2490
42800385	LOZANO SUAREZ DAMIAN	Segunda	1511
18424598	LOZANO TERRAZAS RAFAEL	Segunda	1932
13105705	LUCAS MORAL JULIO	Segunda	1601
39689757	LUENGO PALOMINO MARIA	Segunda	1564
17865847	LUESIA BLASCO MARIA ROSA	Segunda	626
2223847	LUNA CASTRO MARIA DE LAS VICTORIAS	Segunda	1717
18025809	LUNA MAIRAL EVA MARIA	Segunda	1690
21341773	LUNA RIVAS RAFAEL	Segunda	249
8913341	LUPION SALMERON MARIA DE GADOR	Segunda	2404
52216809	LUQUE REYES ELENA	Segunda	1996

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
33913633	LUQUE REYES ISABEL	Segunda	1901
7985116	LURUEÑA RODRIGUEZ FRANCISCO	Segunda	2326
7795889	MACEIN RODERO JESUS	Segunda	26
44267605	MACHADO HERNANDEZ MARIA ANGUSTIAS	Segunda	2402
7782991	MACIAS SANCHEZ JOAQUIN	Segunda	37
22622495	MACIAS SANCHEZ MARIA JOSEFA	Segunda	1847
16492270	MADORRAN HERGUERA JOSE MARIA	Segunda	426
37690673	MADRID-DAVILA RICO MARIA DEL CARMEN DE	Segunda	1535
17434751	MADROÑERO PEREZ SANTIAGO	Segunda	630
28955082	MAGDALENO POZO SUSANA	Segunda	1912
40874231	MAINER BURGUEÑO JOSE MIGUEL	Segunda	1118
5067680	MALAGON FUERTES MANUEL	Segunda	94
801482	MALDONADO PICON ROSARIO	Segunda	153
28584119	MALO LARA ALFREDO	Segunda	2180
9154029	MANCHA ALVAREZ DEL VAYO ANTONIO CASTOR	Segunda	168
5634640	MANGAS MORALES SIGFRIDO	Segunda	1937
39656113	MANGLANO DIE ISABEL	Segunda	179
25955897	MANRIQUE GONZALEZ MARIA CONCEPCION	Segunda	1016
44266797	MANRUBIA ABELLAN MARIA JOSE	Segunda	2036
27452288	MANUEL MONDEJAR JOAQUIN	Segunda	1695
670887	MANZANO PAULE MARIA ANGELES	Segunda	457
27454610	MANZANO RODRIGO MARIA JOSE	Segunda	1210
688228	MAQUEDA PEREZ DE ACEVEDO ANA MARIA	Segunda	551
9708258	MARCOS ANDRES AMALIA	Segunda	73
3087894	MARCOS AYJON MIGUEL	Segunda	1805
28892583	MARCOS MARTIN FRANCISCO	Segunda	1647
16535012	MARCOS SOLA JOSE JAVIER	Segunda	1584
1114743	MARCOS VALTIERRA CONCEPCION DE	Segunda	803
21417920	MARI RUIZ INMACULADA	Segunda	544
14249256	MARIJUAN GALLO Mª JOSE	Segunda	1298
2613212	MARIN ALVAREZ Mª DEL CARMEN	Segunda	1629
5221716	MARIN ALVAREZ ROSA MARIA	Segunda	1438
26451209	MARIN GARCIA ANTONIO	Segunda	1429
8853561	MARIN LARIOS SILVIA TERESA	Segunda	1921
15939194	MARIN LARRANDIA MARIA DEL CARMEN	Segunda	618
7769050	MARIN MADRAZO MANUEL JOSE	Segunda	8
21470657	MARIN MORANTE JOSE GABRIEL	Segunda	1523
3790645	MARIN RELANZON MARIA DOLORES	Segunda	1067
35068854	MARIN RILLO JOSE	Segunda	1488
27252219	MARIN SEGURA MARIA DOLORES	Segunda	925
26738361	MARIN VALLE AURORA	Segunda	343
11918276	MARINERO RIVERA TERESA MARIA	Segunda	1420
9261437	MARINO Y GOMEZ DE SANDOVAL ANA ISABEL DE	Segunda	747
31628304	MARISCAL RUIZ ROSARIO	Segunda	1043
5364966	MARISCAL DE GANTE Y MIRON ROSA MARIA	Segunda	667
680919	MARISCAL DE GANTE Y RUZafa MARIA	Segunda	857
5220254	MARQUEZ PUERTO Mª DEL MAR	Segunda	1104
24356265	MARQUEZ SOLER ANTONIO	Segunda	2109
6941226	MARQUEZ DE LA PLATA M. Y LOPEZ MONTENEGRO MARIA DEL PILAR	Segunda	513

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
21478327	MARQUINA CASTELLS MARGARITA	Segunda	1691
16258029	MARQUINEZ BEITIA JOSE ANTONIO	Segunda	1196
18021687	MARRO GROS LUIS ENRIQUE	Segunda	1490
28665988	MARTIN ALCAIDE CARMELO	Segunda	497
76808269	MARTIN ALVAREZ JUAN JOSE	Segunda	1427
7212225	MARTIN ANTONA Mª TERESA	Segunda	1226
24203102	MARTIN ARENAS AGUSTIN	Segunda	1402
78066564	MARTIN AUBERNI Mª CARMEN	Segunda	408
18395384	MARTIN BAREA MARIA TERESA	Segunda	158
50451916	MARTIN CARDABA RAQUEL	Segunda	2424
13073168	MARTIN CONTRERAS LUIS	Segunda	322
4183205	MARTIN CUESTA EUSEBIA	Segunda	2345
7942640	MARTIN GARCIA IGNACIO	Segunda	1312
9264758	MARTIN GARCIA JUAN JESUS	Segunda	369
10177186	MARTIN GARCIA MARIA BEGOÑA	Segunda	1621
4142071	MARTIN GARCIA MARIA LUZ	Segunda	155
27504497	MARTIN GARCIA Mª ISABEL	Segunda	1269
6561957	MARTIN GARCIA NURIA	Segunda	1641
5391192	MARTIN GARCIA PILAR	Segunda	1491
7757936	MARTIN GARCIA VICTOR	Segunda	1086
12321355	MARTIN GUTIERREZ JESUS ANGEL	Segunda	1631
7814968	MARTIN JIMENEZ J.MANUEL ANDRES	Segunda	205
24172765	MARTIN JIMENEZ MARIA ANGELES	Segunda	1065
20772515	MARTIN LANDETE EUGENIA ROSA M.	Segunda	220
17844889	MARTIN LANUZA MARIA VIRGINIA	Segunda	125
6977794	MARTIN LLANOS INMACULADA	Segunda	1031
3412850	MARTIN LLORENTE JESUS	Segunda	1329
9266290	MARTIN LLORENTE MARIA YOLANDA	Segunda	943
45419135	MARTIN LOPEZ MARIA CRISTINA	Segunda	1807
7831942	MARTIN MADRID JUANA	Segunda	831
24258583	MARTIN MARTIN MARIA ANGUSTIAS	Segunda	2384
2880072	MARTIN MARTIN ROSARIO	Segunda	1694
24159155	MARTIN MINGORANCE CLARA EUGENIA	Segunda	466
17693387	MARTIN MONTAÑES Mª PURIFICACION	Segunda	567
7807307	MARTIN MORATO MANUEL	Segunda	527
12725002	MARTIN NAJERA MARIA DOLORES	Segunda	1989
72875343	MARTIN OLMOS Mª JESUS ISABEL	Segunda	1603
23800109	MARTIN PEÑALVER CELIA	Segunda	1829
7827394	MARTIN PEREZ ASUNCION ESTHER	Segunda	748
24182514	MARTIN ROBLES JOSE ANTONIO	Segunda	1260
51921337	MARTIN RODRIGUEZ ALMUDENA	Segunda	2492
24290068	MARTIN ROMERO ROSARIO FE	Segunda	627
25672580	MARTIN RUEDA MARIA DEL PILAR	Segunda	2401
388504	MARTIN RUIZ MARTA	Segunda	563
7820547	MARTIN SANCHEZ ANGEL JAVIER	Segunda	1238
11413953	MARTIN SANCHEZ FRANCISCA MARIA	Segunda	2486
7820548	MARTIN SANCHEZ JUAN LUIS	Segunda	810
50021298	MARTIN SANCHEZ LUIS JESUS	Segunda	2277
9282352	MARTIN SANZ JOSE ENRIQUE	Segunda	1703

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
27297446	MARTIN TABOADA MARIA CRISTINA	Segunda	1334
50294380	MARTIN UCEDA MARGARITA	Segunda	444
3428473	MARTIN VELASCO MARIA SOCORRO	Segunda	591
7865161	MARTIN Y CHICO MARIA JESUS	Segunda	1777
12708769	MARTIN ZAMORA MARGARITA	Segunda	243
45070610	MARTIN ESCALERA CUTILLAS ANA MARIA	Segunda	1069
75238462	MARTIN-ALCALDE GARCIA ROCIO BELEN	Segunda	2431
2699745	MARTIN-BORREGON GARCIA CHICA IGNACIO	Segunda	1347
389093	MARTIN-FORERO BUENDIA MARIA JOSE	Segunda	1070
5646896	MARTIN-GIL MARTIN DE LA SIERRA JESUS	Segunda	1332
30578954	MARTINEZ ALONSO PALMIRA	Segunda	1827
50291669	MARTINEZ ALVAREZ SILVIA	Segunda	988
21431833	MARTINEZ ANDREO ALBERTO	Segunda	1894
10831113	MARTINEZ ANTUÑA NIEVES ADELINA	Segunda	1144
10541822	MARTINEZ ARIAS JOSE BONIFACIO	Segunda	1102
27459548	MARTINEZ BERENGUER Mª ISABEL	Segunda	1247
12734097	MARTINEZ BLANCO MARIA GRACIA	Segunda	652
10181592	MARTINEZ CANTON ANGEL	Segunda	2228
18161529	MARTINEZ CARNICER MARIA DEL CARMEN	Segunda	797
50278739	MARTINEZ CASIELLES MARIA ROSARIO	Segunda	215
38056625	MARTINEZ COLLADO BALTASAR	Segunda	1083
12230211	MARTINEZ COLLAZOS MARIA TERESA	Segunda	476
13067324	MARTINEZ CONDE MARIA CONCEPCION	Segunda	878
16028695	MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	735
50841836	MARTINEZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO	Segunda	1753
37793705	MARTINEZ GARCIA RAUL	Segunda	366
26018597	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JOSE	Segunda	1839
5128290	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO	Segunda	2284
16255603	MARTINEZ GONZALEZ MARGARITA	Segunda	1004
4591711	MARTINEZ GONZALEZ MARTA MARIA	Segunda	2000
24299657	MARTINEZ GUERRERO ALFREDO	Segunda	1428
38496770	MARTINEZ GUINALIU ANGEL	Segunda	1324
6943944	MARTINEZ HERNANDEZ GUILLERMINA A.	Segunda	105
24318574	MARTINEZ LLUESMA JOAQUIN	Segunda	2375
21348444	MARTINEZ LOPEZ-PUIGCERVER ANDRES	Segunda	436
19452554	MARTINEZ LOZANO ANGEL	Segunda	2205
24340144	MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	Segunda	1732
5631698	MARTINEZ MOLINA ROSA MARIA	Segunda	1278
5248913	MARTINEZ MONTIJANO CARMEN	Segunda	648
75215056	MARTINEZ MULERO MIGUEL	Segunda	784
22425502	MARTINEZ NAVARRO ANTONIO JUAN	Segunda	134
70160044	MARTINEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES	Segunda	1804
5197245	MARTINEZ PALAO MARIA CARMEN	Segunda	1849
73757066	MARTINEZ PARDO VICENTE JOSE	Segunda	1090
22478917	MARTINEZ PARRA CONCEPCION PAZ	Segunda	755
25984055	MARTINEZ PAULANO Mª ROSARIO	Segunda	1320
20015015	MARTINEZ PELLICER AMPARO	Segunda	1930
383054	MARTINEZ PEÑA EDUARDO	Segunda	1760
26161040	MARTINEZ PINO JUAN MANUEL	Segunda	2088

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
43061768	MARTINEZ POMAR SILVIA	Segunda	1656
28687932	MARTINEZ RAMIREZ ROCIO	Segunda	953
52870072	MARTINEZ RAMOS JAVIER	Segunda	2459
17153243	MARTINEZ ROMERO MARIA JOSE	Segunda	736
22453080	MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	Segunda	1806
40289278	MARTINEZ SANCHEZ Mª AFRICA	Segunda	1254
9257598	MARTINEZ SANJURJO MARIA DEL CARMEN	Segunda	1073
22533166	MARTINEZ SANTAMARIA JUAN CARLOS	Segunda	400
51337867	MARTINEZ SUDON ANA ROSA	Segunda	566
23234095	MARTINEZ TAFALLA JOSE BAUTISTA	Segunda	2531
18029939	MARTINEZ ZANDUNDO FRANCISCO JAVIER	Segunda	1969
8769098	MARTINEZ DE LA CONCHA ALVAREZ VAYO MARIA CORONADA	Segunda	829
51664889	MARTINEZ DE SANTOS ALBERTO	Segunda	1710
46327404	MARTINEZ-COMIN TRINXET ANA MARIA	Segunda	1521
5343507	MARTINEZ-CONDE RAMIREZ MARIA DEL PILAR	Segunda	433
28538275	MARTOS CERREJON MARIA DEL CARMEN	Segunda	729
6547610	MARUGAN CID ENRIQUE	Segunda	994
6555861	MARUGAN CID LUIS	Segunda	2422
50650339	MAS ALIQUE RAFAEL	Segunda	3
78194928	MAS PERELLO JUANA MARIA	Segunda	539
28853182	MAS RONDAN MARIA LUISA	Segunda	1859
21471072	MASIA CANUTO MARIA JOSE	Segunda	1905
77905172	MATA CORRETGER MARIA DEL ROSER	Segunda	998
30672057	MATA MEDINA MARIA SANDRA	Segunda	2329
1098630	MATAMALA SACRISTAN FELIX	Segunda	682
51584545	MATANZA FERNANDEZ ANA MARIA	Segunda	990
16786307	MATEO CABREJAS MARIA MERCEDES	Segunda	2158
16786975	MATEO MAÑA MARIA DOLORES	Segunda	541
7768618	MATEOS ANTON ARTURO	Segunda	295
35006409	MATEOS GONZALEZ SERAFIN	Segunda	2154
40330810	MATEU ANGULO SILVIA	Segunda	2463
50703108	MAYO Y ALVAREZ MARIA JOSE	Segunda	1412
28873004	MEANA CUBERO ROCIO	Segunda	863
28667290	MEANA FERNANDEZ-PALACIOS MARGARITA	Segunda	859
23236820	MECA GARCIA-GRAJALVA Mª JOSE	Segunda	1910
31653740	MEDINA ACHIRICA JULIA MARIA	Segunda	2286
45530500	MEDINA CAÑADA MARTA Mª	Segunda	1917
24290700	MEDINA GARCIA DIEGO	Segunda	56
24179451	MEDINA GARCIA MARIA ROSARIO	Segunda	927
18401147	MEDRANO SANCHEZ JESUS ANTONIO	Segunda	92
50799872	MEER Y CERDA MARIA PILAR DE	Segunda	738
30400486	MELENDEZ-VALDES MUÑOZ MARINA	Segunda	171
22549565	MELIA LLACER MARIA REYES	Segunda	1766
24084103	MELLADO RAMOS MARIA LUISA	Segunda	416
52806007	MELLADO SANCHEZ ANTONIA	Segunda	2545
16576131	MENA OCHOA MARTA	Segunda	2013
12751406	MENARGUEZ SALOMON MARTA MARIA	Segunda	1240
46320299	MENDAÑA PRIETO MARIA ROSARIO	Segunda	653
8808430	MENDEZ BAÑOS MARIA JOSE	Segunda	1249

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
9344864	MENDEZ CALVO DAVID	Segunda	2480
34250029	MENDEZ DIAZ Mª ELSA	Segunda	1497
9290236	MENDEZ JIMENEZ FERNANDO EUGENIO	Segunda	1653
9353098	MENDEZ LOPEZ ILDA	Segunda	640
5660970	MENDOZA CASTELLANO FRANCISCO JAVIER	Segunda	1803
10067478	MENENDEZ MARQUES MARTA	Segunda	1241
10557345	MENENDEZ ROBREDO MARIA EUGENIA	Segunda	24
10550638	MENENDEZ URBON MARIA JOSE	Segunda	333
15985210	MENENDEZ VAZQUEZ MARIA ARANZAZU	Segunda	1843
5202378	MENOYO CALATAYUD GEMMA	Segunda	1007
33507439	MERAS SANTIAGO ANA ISABEL	Segunda	1668
28938258	MERINO ARIAS MARIA DEL PILAR	Segunda	1883
8779464	MERINO FERNANDEZ MARIA ANGELES	Segunda	870
30796869	MERINO MERIDA ROSA MARIA	Segunda	2436
5241923	MESA CORDERO PABLO LUIS	Segunda	918
5347980	MIGUEL MARCO VISITACION	Segunda	984
16794420	MIGUEL MARTIN PEDRO JOSE DE	Segunda	2301
50296720	MIGUEL REYES ANGELES DE	Segunda	916
50718214	MILANO NAVARRO MARTINA	Segunda	1715
25951832	MILLAN DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO	Segunda	699
30488199	MILLAN PADILLA MANUEL	Segunda	1797
23242112	MILLAN PEREZ Mª DOLORES	Segunda	1903
25180385	MILLAN DE SUS MARTA PILAR	Segunda	2034
35283038	MILLAN Y MON MARIA DEL PILAR	Segunda	449
21468976	MINGOT CORTES TOMAS	Segunda	1853
25484429	MINGUEZ ZAFRA JUAN ENRIQUE	Segunda	2400
24407183	MINTEGUI SALAZAR SUSANA	Segunda	956
75411368	MIRA CABALLOS MARIA JOSE	Segunda	1201
46776354	MIRAMUNT VILAMU SARA	Segunda	2353
13296811	MIRANDA GOMEZ MARIA ALTAMIRA	Segunda	1315
16535586	MIRANDA SAINZ MARIA JOSE	Segunda	1572
46139571	MIRAVITLLES MATAMOROS MARIA VANESSA	Segunda	2336
31244410	MOHEDAS LOPEZ LUCINDO LUIS	Segunda	1719
39894442	MOLINA BORRAS RAQUEL	Segunda	2484
36914222	MOLINA CIFUENTES FRANCISCO RAMON	Segunda	234
2507679	MOLINA LOPEZ MARIA DEL PILAR	Segunda	151
2645026	MOLINA ONTENIENTE RAQUEL	Segunda	2403
50417252	MOLINA PEREZ JUAN ANTONIO	Segunda	2096
22606235	MOMPARLER CARRASCO MARIA ANGELES	Segunda	79
12402080	MOMPIN ALVAREZ ISABEL	Segunda	2343
14245917	MONASTERIO TORRE M. BEGOÑA	Segunda	562
410958	MONCADA BUENO JAVIER	Segunda	2046
13152211	MONEDERO GOMEZ MARIA ANGELES	Segunda	2259
5654140	MONESCILLO DIAZ CARLOS MARCIANO	Segunda	1689
51603567	MONGE ESTEBAN ANTONIO	Segunda	1667
677498	MONGE SABARIEGOS MARIA LOURDES	Segunda	799
22442984	MONLLOR DOMIGUEZ MARIA LIRIOS	Segunda	104
10589673	MONREAL ALVAREZ ANA ISABEL	Segunda	813
1091399	MONREAL HERNANDEZ MARIA LUISA	Segunda	511

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
21442152	MONSERRAT MOLINA PEDRO EUGENIO	Segunda	1679
25426813	MONSERRATE SABROSO MARIA SOLEDAD	Segunda	1565
18018279	MONTANER ZUERAS CARMEN	Segunda	1382
20765873	MONTAÑANA ARGENTE JOSE CARLOS	Segunda	1345
19827768	MONTAÑANA CASTELLANO ENRIQUE	Segunda	2398
3437987	MONTEJO GARCIA MARIA LUISA	Segunda	1749
50846541	MONTEJO LABRADA VIRGINIA	Segunda	1922
40853766	MONTEL CHANCHO MARIA ALBA	Segunda	1091
32411144	MONTERO CARRE MARIA CRISTINA	Segunda	327
8805014	MONTERO MANCHADO JUAN FERNANDO	Segunda	1723
50020348	MONTES CARACUEL ROCIO	Segunda	429
80130310	MONTES RAMIREZ EMILIA	Segunda	1264
28758547	MONTES RAMIREZ MARIA ELENA	Segunda	2387
27249680	MONTESINO SANCHEZ MARIA ROSARIO	Segunda	762
27427484	MONTESINOS GARCIA CONCEPCION	Segunda	306
46325866	MONTON MARQUEZ ALBERTO	Segunda	2042
77087394	MONTORO JUDAS PEDRO	Segunda	2130
17998893	MONTOYA MONJA MARIA CRUZ	Segunda	200
12747037	MONZON CUESTA MARIA ELMA	Segunda	1494
33985463	MORA GARCIA LAURA	Segunda	1872
40906584	MORA LOMBARTE VICTORIA PILAR	Segunda	302
22545256	MORA RUBIO ESTHER	Segunda	268
21377793	MORA ZARAGOZA TOMAS	Segunda	1799
13146522	MORADILLO ARAUZO CARMEN MARIA	Segunda	1974
13137043	MORADILLO ARAUZO MARIA DEL MAR	Segunda	2372
25973239	MORAL CARAZO MARIA MERCEDES	Segunda	623
5371222	MORAL ZAFRA AURORA DEL	Segunda	1074
42776263	MORALES MIRAT ISABEL	Segunda	141
51326556	MORALES MORENO ANGELES LETICIA	Segunda	286
24262739	MORALES PAYAN GRACIA AGUEDA	Segunda	2081
827709	MORALES PICADO YOLANDA MARIA	Segunda	1758
77293878	MORALES REVUELTO LUIS SIMON	Segunda	2129
20018911	MORATAL RODRIGO LUCIA	Segunda	2101
45416640	MORCHON IZQUIERDO MARIA GLORIA	Segunda	1388
24169983	MORCILLO DELGADO MARIA DEL CARMEN	Segunda	811
13091991	MORE HERRERO MARTA	Segunda	720
8849173	MOREIRA PELAEZ VERONICA	Segunda	2065
5242895	MOREIRAS MONTALVO LAURA	Segunda	664
4108751	MOREIRO CUESTA LUIS	Segunda	1763
40335080	MOREJON VILLANUEVA VANESA	Segunda	2457
28664079	MORENO CAMACHO EMILIA	Segunda	224
50687443	MORENO CARRERO MARIA NIEVES	Segunda	1023
28857656	MORENO CATENA GUADALUPE	Segunda	574
8811135	MORENO CORREA MANUEL MIGUEL	Segunda	1616
7562557	MORENO GARCES MARIA DOLORES	Segunda	2426
5246772	MORENO GONZALEZ ALFREDO	Segunda	185
16795893	MORENO HERRERO VIRGINIA	Segunda	273
9252546	MORENO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	564
24156205	MORENO ONORATO MANUEL S.	Segunda	372

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
73538647	MORENO TUDELA MANUEL ALFONSO	Segunda	561
36526155	MORETA TUSQUETS MARIA	Segunda	2487
12238153	MORETON ALONSO PALMIRA ANA	Segunda	403
42926912	MORON SAEN DE CASAS MARIA MARAVILLAS	Segunda	152
78195868	MORRO CANAVES JAIME	Segunda	1560
32401161	MOSQUERA LOUREDA MARIA ASUNCION	Segunda	148
5201282	MOURE LORENZO MARIA JOSE	Segunda	915
30669362	MOURENZA ARRIOLA JAIME	Segunda	2196
70518240	MOYA DONATE PEDRO	Segunda	2413
4545773	MOYA DEL POZO FRANCISCO JAVIER	Segunda	656
25054800	MOYANO IGLESIAS Mª DESAMPARADOS	Segunda	1293
12370625	MOYANO RUIZ DE ALEGRIA VICTORIA EUGENIA	Segunda	1785
15939600	MUGICA MATEOS MARIA JOSE	Segunda	624
15254969	MUÑO FEIJOO EDUARDO	Segunda	2027
75215064	MULA AZNAR ANTONIO LUIS	Segunda	912
5373674	MUÑIZ CARRION MARIA PALOMA	Segunda	1055
9756169	MUÑIZ FERNANDEZ OSCAR LUIS	Segunda	1473
73905830	MUÑOZ CARRASQUER LUIS MARIANO	Segunda	651
16558425	MUÑOZ HURTADO MARIA ANGELES	Segunda	1870
80015477	MUÑOZ LEON MARIA FERNANDA	Segunda	954
1895971	MUÑOZ ORTIZ TOMAS	Segunda	2537
19898226	MUÑOZ PEIRO MIRIAM	Segunda	1906
5245515	MUÑOZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES	Segunda	2025
18435247	MUÑOZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	Segunda	2262
18432770	MUÑOZ SANCHEZ MARIA NIEVES	Segunda	2323
34783138	MUÑOZ VALERO MARIA CARMEN	Segunda	1548
22997659	MUÑOZ VIDAL JOSE MARIA	Segunda	2104
5610297	MUÑOZ DE LA ESPADA TENDERO VICENTE	Segunda	256
25415512	MURCIANO VICENTE EVA MARIA	Segunda	2149
6987132	MURIEL BERNAL Mª ANGELES	Segunda	1281
24115483	MURILLO GARCIA CARMEN	Segunda	35
16588740	NALDA ROMEA SONIA	Segunda	2304
28566852	NARANJO LEMOS JOSE ANTONIO	Segunda	482
6968281	NARANJO SANGUINO INMACULADA	Segunda	334
24179586	NAVAJAS ROJAS LUIS CARLOS	Segunda	1502
22953802	NAVALON ROMERO FERNANDO JAVIER	Segunda	1569
23241714	NAVARRETE RUBIO Mª DE LOS REMEDIOS	Segunda	2423
25966132	NAVARRO CASTELLANO MARIA TERESA	Segunda	864
4552357	NAVARRO LAVARA JUAN ANTONIO FELIPE JOSE	Segunda	717
22642518	NAVARRO LORENTE LORENZO	Segunda	839
29754000	NAVARRO MARTIN MARIA DEL ROCIO	Segunda	491
19102094	NAVARRO MELCHOR MARIA JOSE	Segunda	1733
43254967	NAVARRO NUEZ MARIA JESUS	Segunda	2124
28858423	NAVARRO RUIZ Mª VICTORIA	Segunda	1200
50307095	NEGREDO DEL CERRO MARIA ROSARIO	Segunda	1013
24216874	NESTARES PLEGUEZUELO ANA MARIA	Segunda	1331
44041190	NEVADO BRUN INMACULADA	Segunda	2539
33873748	NICOLAS NICOLAS ROSA ELENA	Segunda	270
36923641	NICOLAS PUMAREGA ALBERTO	Segunda	357

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
9670867	NICOLAS SERRANO MARIA TERESA	Segunda	2051
29089428	NIETO AVELLANED JAIME	Segunda	1501
33972314	NIETO FERNANDEZ ANA BELEN	Segunda	2327
12328420	NIETO FRIAS ANA MARIA	Segunda	2171
25705475	NIETO LEIVA MARIA TERESA	Segunda	2191
46221062	NIETO MARTIN Mª DE LOS ANGELES	Segunda	572
40515161	NIETO PEÑA MAITE	Segunda	409
25987864	NIEVES SANZ SILVIA	Segunda	967
36031682	NODAR MONTES M.LUZ MERCEDES	Segunda	345
51338569	NOGALES ROMEO FRANCISCO JAVIER	Segunda	86
40306150	NOGUER BARRABES LAURA	Segunda	1744
25062478	NOGUES HIDALGO MARIA VICTORIA	Segunda	1035
28680631	NOVAL ONRAITA JOSE MIGUEL DEL	Segunda	1319
15846422	NUIN ITURRI ADELA MARIA	Segunda	1050
1926920	NUÑEZ GOMEZ ALFONSO	Segunda	2477
28546203	NUÑEZ GONZALEZ ELENA	Segunda	1036
667138	NUÑEZ PEDRAZA INMACULADA	Segunda	118
9740894	OBLANCA MORAL ESTRELLA CARMEN	Segunda	1465
24155703	OBREGON ZAMORANO JUAN MANUEL	Segunda	841
2191984	OCA DE ZAYAS BEATRIZ	Segunda	97
16499227	OCA DE ZAYAS ELENA	Segunda	213
8991851	OCAÑA VILLAMIL YOLANDA	Segunda	2031
30560322	OCARIZ MIGUEL ANA	Segunda	1003
18960667	OCHOA EGUIZABAL SUSANA	Segunda	1233
15837685	OLAIZ POLO MARIA ICIAR	Segunda	889
37316765	OLALDE ZANUY ESTER	Segunda	2350
9263909	OLALLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	Segunda	771
12233913	OLALLA GARCIA Mª DOLORES	Segunda	1235
13291113	OLALLA DEL OLMO ANA MARIA	Segunda	483
14925140	OLARTUA LASPRA MARIA DEL CARMEN	Segunda	311
15937056	OLASO ARRILLAGA FRANCISCO JAVIER	Segunda	691
44219931	OLAYA SORIANO ESTEFANIA	Segunda	2004
14916670	OLAZABAL BARRIOS MARIA ALICIA	Segunda	2347
45051530	OLIET PALA MARIA ASUNCION	Segunda	82
22470569	OLIVA CERON ALFONSO	Segunda	704
39173038	OLIVA MAS ELISABET	Segunda	1789
37369092	OLIVARES SUAREZ MARTA	Segunda	1697
42873967	OLIVER GUERRA MARA TERESA	Segunda	2265
27501904	OLIVER LOPEZ ROSA	Segunda	1525
9745992	OLIVERA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	1605
25042381	OLIVERA REYNA MARIA PAZ	Segunda	480
77083835	OLIVEROS BRAGADO MARIA LUISA	Segunda	300
4584809	OLMEDA BUENDIA ANGEL	Segunda	1659
21643192	OLMEDO ONSURBE JOSE VENTURA	Segunda	1896
13143511	OÑATE CUESTA LIDIA	Segunda	1771
50290478	ORBE ZALBA MARIA DEL PILAR	Segunda	801
25399247	ORDEIG RABADAN ALICIA EMILIA	Segunda	1599
9357641	ORDIZ LLANEZA LUIS	Segunda	1337
24239468	ORDOÑEZ CORREA RAFAELA	Segunda	1873

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
28595198	OREJUELA PINEDO CARMEN	Segunda	1790
78204858	ORELL MARCUS PAULA	Segunda	1230
32608787	ORGEIRA MACEIRAS CESAR	Segunda	2018
14898945	ORMAECHE ASTELARRA EDOYA	Segunda	132
51347527	OROZCO TORRES JESUS ANGEL	Segunda	642
1899221	ORTEGA ALVAREZ CARLOS	Segunda	631
71253949	ORTEGA ARRIBAS LUIS MARIA	Segunda	207
43645314	ORTEGA CABRERA AGUSTINA	Segunda	1761
51703084	ORTEGA CIFUENTES JOSE A.	Segunda	2019
51381359	ORTEGA CORDOBA ELENA	Segunda	1861
24289637	ORTEGA ESCANDELL ANA MARIA	Segunda	1498
2513341	ORTEGA GARRIDO MARIA LUISA	Segunda	492
51059938	ORTEGA MARTINEZ MARIA ANGELES	Segunda	2132
6202730	ORTEGA PINTO LUIS TOMAS	Segunda	231
50285354	ORTEGA UGENA EUGENIO FELIX	Segunda	85
3415653	ORTEGA UGENA MARIA DEL CARMEN	Segunda	174
31833001	ORTEGA DE COSSIO MARIA CARMEN	Segunda	1408
35017839	ORTEGO BRIONGOS JESUS SANTIAGO	Segunda	2179
7541393	ORTELLS PASTOR JUAN MANUEL	Segunda	2536
1480234	ORTIZ BERENGUER MARIA DE LOS ANGELES	Segunda	139
75416719	ORTIZ GARCIA-DONAS MARIA CARMEN	Segunda	1864
4567094	ORTIZ GARRIDO MARIA DEL CARMEN	Segunda	832
27287660	ORTIZ GARROTE JOSE MIGUEL	Segunda	1214
50409221	ORTIZ GERVASI ANA MARIA	Segunda	602
5196918	ORTIZ GONZALEZ MARIA LUISA	Segunda	1469
5203017	ORTIZ HERRERA MARIA SILVIA PAULA	Segunda	2369
50848732	ORTIZ MARTIN ALMUDENA	Segunda	2062
690883	ORTIZ MARTINEZ MARIA PILAR	Segunda	481
8861967	ORTIZ PACHECO MARIA DOLORES	Segunda	2291
50295595	ORTIZ RODRIGUEZ MARIA JOSE	Segunda	448
3854012	ORTIZ SANCHEZ-GABRIEL JAVIER	Segunda	1995
14915419	ORTIZ DE SALAZAR RUIZ MARIA VICTORIA	Segunda	728
30562812	ORTUONDO ROCANDIO JOSE MARIA	Segunda	1575
30608607	ORTUONDO VILAPLANA MARIA DEL CARMEN	Segunda	1538
15351933	OTAZUA MENDIZABAL MARIA TERESA	Segunda	521
5377917	OTEO MUÑOZ Mª ISABEL	Segunda	1259
5347106	OTERMIN VARONA CESAR MARIA	Segunda	903
33825425	OTERO PIÑEIRO CONCEPCION	Segunda	34
8689420	OVANDO MURILLO MARIA DOLORES	Segunda	287
11811573	OYOLA REVIRIEGO MARIAN	Segunda	1840
12357608	OZAMIZ BAGENETA BEGOÑA	Segunda	934
9284371	PABLOS VELASCO Mª CARMEN DE	Segunda	1318
50694850	PACHECO VERA JOSE	Segunda	690
38785039	PADILLA FORTES SALVADORA	Segunda	2166
42764862	PADILLA SANTERVAZ FELIPE	Segunda	352
76347092	PAIS VARELA ELISA Mª MANUELA	Segunda	818
52636651	PAJUELO AMADO MARIA ELENA	Segunda	2495
44003613	PALACIN FABREGAS BEGOÑA	Segunda	2474
9735820	PALACIO DUÑABETIA VICTORIA OLGA DEL	Segunda	396

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
34017106	PALACIOS CHIA ANGELES	Segunda	2185
30480777	PALACIOS CRIADO MYRIAM	Segunda	763
9371336	PALACIOS FERNANDEZ JOAQUIN	Segunda	1340
10076704	PALACIOS GONZALEZ MARIA ROSARIO	Segunda	1545
15837224	PALACIOS SARRASQUETA FELISA EUGENIA	Segunda	700
3884290	PALACIOS GOMEZ DE MEMBRILLERA CRISTINA	Segunda	2478
39323468	PALAT GUBERT VALENTI	Segunda	1430
50797750	PALAZUELOS MORLANES JOSE	Segunda	378
72027254	PALENQUE LUS MARIA ROSARIO	Segunda	1887
24254581	PALMA GONZALEZ INMACULADA	Segunda	2407
44913099	PALMERO SANDIN MARIA JESUS	Segunda	2108
29120051	PALOMERA SANCHEZ LETICIA	Segunda	2244
30466473	PANADERO RUZ FELISA	Segunda	877
9177668	PANTOJO FALERO JOSE ANTONIO	Segunda	1714
22942082	PARA RUIZ MARIA DOLORES	Segunda	770
23214054	PARDO ARCAS MARIA DEL MAR	Segunda	2157
24291991	PAREJA DOMINGUEZ LUIS FERNANDO	Segunda	227
70328275	PAREJA GIL MARIA DEL PILAR	Segunda	509
46329206	PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA	Segunda	1762
50824319	PARIENTE VELLISCA MARIA LUISA	Segunda	1718
30795304	PARRA HERAS BELEN	Segunda	1914
11727567	PARRA LOZANO MARIA JOSE	Segunda	1387
43603559	PARRILLA MARTIN MARIA PILAR	Segunda	2275
27288781	PARRILLA NAVARRO PURIFICACION	Segunda	1314
21466342	PASCUAL BROTONS CRISTINA CAROLINA	Segunda	1522
29038475	PASTOR GONZALEZ PURIFICACION	Segunda	2542
12700704	PASTOR HERRERO MARIA JOSE	Segunda	248
23802314	PAVON CALLEJON YOLANDA	Segunda	1968
5628265	PAVON GARCIA JESUS ESTEBAN	Segunda	2282
28850286	PAYAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	1014
44076491	PAZ FERNANDEZ ANTONIO	Segunda	2122
53107161	PAZ GARCIA DE MATEOS RAQUEL AINHOA	Segunda	2520
50309113	PAZ GOMEZ ROSA MARIA DE	Segunda	1040
52316871	PAZOS POUSADA ALEJANDRA	Segunda	2217
2600687	PECES GOMEZ LUCIA	Segunda	1702
28664085	PECHE RUBIO MARIA DE LOS ANGELES	Segunda	908
28511109	PECHE RUBIO MARIA DEL CARMEN	Segunda	622
29100886	PECINO ROBLES FERNANDO	Segunda	1818
32416552	PEDREIRA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	204
7820029	PEDRO BALLESTEROS ANA MARIA DE	Segunda	157
13105219	PEDROSA PRECIADO MARIA LAURA	Segunda	1052
72681953	PEGENAUTE GRAJAL LORENA	Segunda	2509
24106729	PEINADO HERREROS CLARA	Segunda	326
10586793	PELAEZ DIAZ JOSE LUIS	Segunda	1194
2691343	PELAEZ RUIZ JOSE FRANCISCO	Segunda	1467
263510	PELAYO JIMENEZ ELVIRA	Segunda	65
20001944	PELLICER VERDU MARIA DEL CARMEN	Segunda	1947
24400046	PEÑA ARANGUREN MARIA LOURDES	Segunda	251
7856821	PEÑA BONET MARGARITA	Segunda	1380

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
38403095	PEÑA BONILLA MARIA FILOMENA	Segunda	226
9253217	PEÑA CANO JUAN CARLOS	Segunda	616
12702108	PEÑA ERICE MARIA SOLEDAD	Segunda	107
10837668	PEÑA GARCIA OLGA	Segunda	1184
2608609	PEÑA JIMENEZ YOLANDA	Segunda	2285
13065612	PEÑA QUINTANA PEDRO JOSE	Segunda	222
39623282	PERA BAJO MARIA DEL PILAR	Segunda	190
45419451	PERALES SAEZ RAQUEL	Segunda	1902
13750708	PEREZ AGUILAR JUSTO ANTONIO	Segunda	1779
33803692	PEREZ ARROJO MARIA INMACULADA	Segunda	96
11925854	PEREZ ARTECHE MARIA ESTHER	Segunda	1571
42880533	PEREZ CABRERA MARIA DEL ROSARIO	Segunda	2206
686200	PEREZ CAMINO ALFONSO	Segunda	856
12381845	PEREZ ESTEBAN MARIA ESTRELLA	Segunda	1893
2548725	PEREZ FERNANDEZ ANA BELEN	Segunda	2245
33289930	PEREZ FERNANDEZ MARIA JESUS	Segunda	2361
6213028	PEREZ FERNANDEZ-MAYORALAS GREGORIO	Segunda	619
27487480	PEREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	Segunda	2293
34964338	PEREZ GARCIA JOSE LUIS	Segunda	2318
7949734	PEREZ GARCIA MARIA PILAR	Segunda	1769
25973532	PEREZ JODAR RAFAEL JACINTO	Segunda	1390
10570499	PEREZ LABAJOS JOSE ANGEL	Segunda	611
24863356	PEREZ LISBONA MARIA MERCEDES	Segunda	914
45431745	PEREZ LOPEZ MARIA SANDRA	Segunda	2227
20017936	PEREZ MARTI ROSA MARIA	Segunda	2493
24190359	PEREZ MARTIN Mª ENCARNACION	Segunda	1122
46846506	PEREZ MARTINEZ ISMAEL	Segunda	2119
1096146	PEREZ MARTINEZ MARGARITA	Segunda	672
9664215	PEREZ MODINO MAXIMO	Segunda	460
5631526	PEREZ MOLERA ANGELES	Segunda	559
28852548	PEREZ PEREZ AURELIA	Segunda	470
18023609	PEREZ PERIZ Mª ANGELES	Segunda	1435
7961314	PEREZ POLO FERNANDO	Segunda	2253
30491913	PEREZ PORTERO AURORA FRANCISCA	Segunda	1220
2651206	PEREZ PUENTE LAURA	Segunda	2444
27823615	PEREZ PUERTO FRANCISCO	Segunda	74
43732409	PEREZ PUERTO SUSANA	Segunda	2337
29045413	PEREZ RAMOS JUAN MANUEL	Segunda	2059
5193845	PEREZ REINA JORGE	Segunda	2466
24070233	PEREZ RODRIGUEZ ENCARNACION	Segunda	1520
671394	PEREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	161
10853205	PEREZ RODRIGUEZ MARIA ROSA	Segunda	1686
15850591	PEREZ RUIZ JUAN ALFONSO	Segunda	2538
46026264	PEREZ SANCHEZ FRANCESC	Segunda	2093
5226210	PEREZ SANCHEZ REGINA	Segunda	1316
13121294	PEREZ SERRANO ANA	Segunda	1865
24129982	PEREZ TORRES EUGENIA	Segunda	330
1367149	PEREZ VALES JOSE LUIS	Segunda	62
10867393	PEREZ VAZQUEZ GONZALO	Segunda	1992

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
23252980	PEREZ VIVANCOS MARIA ANTONIA	Segunda	2114
21448193	PEREZ CERVERA JUAN JOSE	Segunda	1701
31333033	PEREZ DE LA RIVA VILCHES MARIA DE LA ESTRELLA	Segunda	1539
16259278	PEREZ DE LAZARRAGA VILLANUEVA RAQUEL	Segunda	961
667238	PEREZ DE OTEYZA ELISA	Segunda	2543
51702629	PEREZ LANDAZABAL EXPOSITO MARIA PALOMA	Segunda	1099
17841450	PEREZ SURIO SANZ LAURA	Segunda	16
5231018	PEREZ-MADRIGAL SANZ CARLOS	Segunda	1308
7824895	PEREZ-MONEO GARCIA MIGUEL ANGEL	Segunda	935
25390061	PERIS MARTINEZ ALEJANDRINA ARANZAZU	Segunda	1826
21392575	PERNIAS GARCIA CRISTOBAL	Segunda	131
52678536	PEROSANZ SANCHIS MARIA JOSE	Segunda	2238
12723694	PERROTE PERROTE ANTONIA	Segunda	1302
27283378	PICAMILL VELA JOSEFA MARIA	Segunda	1304
28500967	PICAZO GARCIA Mª CONSUELO	Segunda	1272
4559764	PICAZO TORRIJOS MARIA JOSE	Segunda	701
43029523	PIERAS SUREDA CATALINA MARIA	Segunda	1536
8788345	PILAR GRACIA MANUEL	Segunda	1267
73941838	PILES GIMENO MARIA DEL CARMEN	Segunda	938
50451345	PINDADO ALVAREZ LUIS	Segunda	2026
34893936	PINEDA GUERRERO MARIA ANGELES	Segunda	2348
35301607	PINO PEREZ Mª DEL MAR	Segunda	1279
31177025	PIÑERO BUSTAMANTE JOSE MARIA	Segunda	847
28525925	PIÑERO PIÑERO ANTONIO	Segunda	1248
28387588	PITA GARRIDO CLEMENTE	Segunda	39
28680137	PITA LOPEZ ANA MARIA	Segunda	347
28857532	PITA MOREDA CARLOS RAFAEL	Segunda	950
38491321	PIZANO BARON JUAN LUIS	Segunda	225
78200197	PLANELLS COSTA JOSEFA	Segunda	1276
7996289	PLASENCIA MARTIN MARIA	Segunda	1963
32790479	PLATAS CASTELEIRO MARIA	Segunda	1606
21980472	PLAZA CARRERO WENCESLAO	Segunda	2169
5192871	PLAZA GOLVANO SAGRARIO	Segunda	964
27512713	PLAZA PEREZ Mª DEL MAR	Segunda	1171
9319469	POLO HERNANDEZ MANUEL	Segunda	1915
7862737	POLO RENU MARINA	Segunda	1654
12762091	POLVOROSA GOMEZ SOFIA CRISTINA	Segunda	2073
11735377	POMEDA IGLESIAS ANTONIA	Segunda	1392
43045488	PONS CORTES INMACULADA	Segunda	1611
24130460	PORCEL CRUZ ANTONIA	Segunda	441
7802221	PORTAL VICENTE CAYETANO	Segunda	2023
28504784	PORTERO FRIAS MARIA JOSE	Segunda	33
11062584	PORTILLA HIERRO PELAYO	Segunda	1607
4149403	POU AMPUERO LAURA	Segunda	514
5231328	POWER MEJON MARIA PATRICIA	Segunda	308
33451473	POZO BOUZAS PAULA ALTAGRACIA	Segunda	2532
2855006	POZO MANZANARES CARLOS DEL	Segunda	1037
23773642	POZO VILLEGAS JOSE LUIS	Segunda	1895
9353612	PRADA HORCHE ANDRES	Segunda	1553

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
10172998	PRIETO BLANCO MARIA PILAR	Segunda	446
14239508	PRIETO GONZALEZ MARINO	Segunda	1349
7845706	PRIETO GUTIERREZ JESUS MARIA	Segunda	2273
21989101	PRIETO SANCHEZ JOSE MARIA	Segunda	2349
11710853	PRIETO TORANZO MARIA JESUS	Segunda	70
2251815	PRIETO TRELLES ESTHER MARIA	Segunda	2392
11946791	PRIETO DE LA CALLE MARIA ASCENSION	Segunda	2173
30649499	PUENTE ERQUIAGA MARIA ICIAR	Segunda	1907
24206412	PUERTAS FARIÑA AMELIA MARIA	Segunda	2307
10843697	PUERTO BARBER EMILIA	Segunda	1130
25150996	PUEYO CASTAN MARTA ELENA	Segunda	1500
9357941	PUEYO MATEO MARIA BEATRIZ	Segunda	1410
15938005	PUIG ECHARRI ELENA	Segunda	697
33443257	PULIDO IGEA ALBERTO	Segunda	2078
24129393	PUYA JIMENEZ MERCEDES	Segunda	614
25473530	PUYUELO MARTINEZ PAULA	Segunda	2099
24168182	QUESADA ENCISO MAGDALENA MONTSERRAT	Segunda	773
5228320	QUESADA MARTOS MARÍA ANGELES	Segunda	1287
44281474	QUESADA SANZ MARIA EUGENIA	Segunda	2069
13915357	QUINTANA GARCIA-SALMONES Mª VICTORIA	Segunda	1290
76617794	QUINTILLAN VAZQUEZ MARIA BELEN	Segunda	2183
10026845	RAIMUNDEZ RODRIGUEZ ANTONIO	Segunda	1618
27234752	RAMAL CABRERA BERNARDINO	Segunda	647
25999422	RAMIREZ EXPOSITO ANA MARIA	Segunda	2226
37695156	RAMIREZ ROMERO CONSUELO	Segunda	2020
22679391	RAMIREZ DE AGUILERA FERNANDEZ SANTIAGO JOSE	Segunda	1039
3117856	RAMIRO ALBALATE IGNACIO	Segunda	2328
2188625	RAMIRO PALACIOS MARIA DEL PILAR	Segunda	88
24120969	RAMOS CEJUDO JOSE LUIS	Segunda	600
24332709	RAMOS FERNANDEZ MARIA CARMEN	Segunda	1871
5395210	RAMOS GARCIA EUGENIA	Segunda	1425
25927863	RAMOS JIMENEZ MANUEL JESUS	Segunda	428
1927433	RAMOS LAIN NATALIA	Segunda	2485
5212118	RAMOS LEON MARIA DEL PILAR	Segunda	193
13104823	RAMOS MEDRANO RAFAEL	Segunda	374
5404687	RAMOS UBERO LIDIA	Segunda	1863
34918250	RASCADO GONZALEZ FRANCISCO	Segunda	472
73541378	RAUSELL RAUSELL MARIA CARMEN	Segunda	2430
24249365	RAYA GARCIA ALICIA PILAR	Segunda	2194
2535829	REAL SAINZ-ROZAS MARTA	Segunda	2030
3097670	REBOLLO ALONSO DE LINAJE SUSANA	Segunda	1620
16518690	REBOLLO ALONSO-DELINAJE Mª JESUS LOURDES	Segunda	819
4127809	RECIO NUERO JOSE MANUEL	Segunda	1325
16570906	RECIO SANCHEZ ELENA	Segunda	2445
4547370	REDONDO DIAZ PILAR ISABEL	Segunda	1005
13117261	REDONDO FERNANDEZ Mª ROSARIO	Segunda	1454
3425646	REDONDO GONZALEZ CELIA	Segunda	150
12757511	REDONDO GUERRA MARIA DEL CARMEN	Segunda	1964
9172872	REDONDO MIRANDA MARIA DEL PILAR	Segunda	276

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
12354246	REDONDO PASCUAL JOSE MARIA	Segunda	919
50154761	REDONDO VALDEON MARIA DOLORES	Segunda	269
2870929	REDONDO VERGARA MARIA	Segunda	1339
76405758	REGUEIRO PEREZ JOSE MIGUEL	Segunda	1326
2484643	REINA FERNANDEZ JOSE LUIS	Segunda	47
8846924	REJAS DE FRANCISCO INMACULADA CONCEPCION	Segunda	1940
12724698	RELEA GARCIA MARIA TRINIDAD	Segunda	820
12210010	RENOBALES MARTINEZ MARIA ISABEL	Segunda	109
29723648	REPISO CAPILLA MARIA DE LOS SANTOS	Segunda	1936
10596471	REPRESA SUEVOS Mª PILAR	Segunda	1328
34821868	REQUENA NAVARRO ANA BELEN	Segunda	2322
48995572	RESA CARRETERO RAQUEL	Segunda	2494
42952862	REUS BARCELO FRANCISCA MARIA	Segunda	2174
5241567	REUS MARTINEZ NATALIA	Segunda	802
21514480	REVERT LAZARO ANTONIO	Segunda	2437
5213928	REVILLA GUZMAN PILAR	Segunda	280
13088958	REVILLA PEREZ LUIS	Segunda	658
17849460	REVUELTA VILLALBA MARTA	Segunda	195
16564457	REVUELTO RUIZ MARIA OLGA ASCENSION	Segunda	2121
32406374	REY PITA JUAN	Segunda	734
28687338	REY VERA MARIA DEL CARMEN	Segunda	777
25975330	REY ZAMORA INMACULADA	Segunda	941
33972076	REYES DELGADO Mª ARANAZU DE LOS	Segunda	1904
12349997	RIAÑO VALENTIN MARIA CONCEPCION	Segunda	898
77079667	RIBA Y LLORET MARIA ASUNCION	Segunda	130
10084931	RIBAL SANCHIS NURIA	Segunda	2468
50185890	RICA DE MIGUEL MARIA SONIA	Segunda	1942
18013889	RIERA PEREZ MARIA DEL PILAR	Segunda	723
5382867	RIFE FERNANDEZ-RAMOS JOSE AGUSTIN	Segunda	154
3433926	RINCON LLORENTE MARIA JESUS	Segunda	1024
25135143	RIO MONGE JOSE MANUEL DEL	Segunda	1437
12358816	RIO MORO ANUNCIACION DEL	Segunda	1113
30812556	RIOJA AGUILERA MONICA	Segunda	1982
11769103	RIOLOBOS IZQUIERDO MERCEDES	Segunda	1461
29745047	RIOS NIETO JUAN MANUEL	Segunda	713
29768529	RIOS NIETO Mª VICTORIA	Segunda	1219
19090965	RIPOLLES MARTINEZ INMACULADA C.	Segunda	1064
27429657	RIQUELME CORTADO Mª DOLORES	Segunda	1282
78204926	RIUTORT MERCANT ANTONI	Segunda	1441
29742733	RIVAS CARRASCOSA MIGUEL ANGEL	Segunda	837
29130938	RIVERA FORCEN ALFONSO	Segunda	2482
29130939	RIVERA FORCEN IGNACIO	Segunda	2488
7840437	RIVERA GARCIA MARIA DOLORES	Segunda	1012
7844116	RIVERO SIMON Mª GEMMA	Segunda	1218
8094605	ROBLES ACERA ANTONIO	Segunda	122
28877155	ROCA NAVARRO ISABEL MARIA	Segunda	1517
18907600	ROCA ROBLES ENRIQUE FCO.	Segunda	203
29696698	RODA ORUE JUAN LEOPOLDO	Segunda	48
38427267	RODELLAR BENEDE PEDRO BERNARDINO	Segunda	1108

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
26445037	RODERO LUNA BEGOÑA CLOTILDE	Segunda	432
25132660	RODERO MONREAL CARMEN	Segunda	1151
23002661	RODRIGUEZ ALARCON MARIA PILAR	Segunda	2213
10864728	RODRIGUEZ ALLENDE MARIA	Segunda	1825
12220059	RODRIGUEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN	Segunda	99
36039880	RODRIGUEZ BALADO ELENA	Segunda	721
71254987	RODRIGUEZ CASADO MARIA LUZ	Segunda	120
14955760	RODRIGUEZ CUESTA MARIA CRISTINA	Segunda	488
6581902	RODRIGUEZ DELGADO MARIA LUISA	Segunda	2321
10521625	RODRIGUEZ DIAZ ISAAC	Segunda	46
10860925	RODRIGUEZ DIAZ MARIA AMOR	Segunda	1712
10504364	RODRIGUEZ DIAZ ULPIANO MANUEL	Segunda	1075
35979427	RODRIGUEZ DIEGUEZ ANTONIO	Segunda	517
5246913	RODRIGUEZ DIEZ LUIS JORGE	Segunda	1146
51334413	RODRIGUEZ ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	Segunda	671
14251850	RODRIGUEZ FANO Mª LUISA	Segunda	1192
22966973	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	Segunda	2148
50726251	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JESUS	Segunda	2367
7809951	RODRIGUEZ GARCIA MARIA TERESA	Segunda	455
24225627	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE	Segunda	1793
28877635	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE DAVID	Segunda	1856
7943148	RODRIGUEZ HERRERO SINFORIANO	Segunda	1176
638336	RODRIGUEZ LLORENTE RAMON MARIA	Segunda	495
10503353	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA NIEVES	Segunda	14
24187792	RODRIGUEZ LUCAS LUISA MARIA	Segunda	1341
7857210	RODRIGUEZ MARTIN FERNANDO	Segunda	1650
12227662	RODRIGUEZ MARTINEZ BEGOÑA	Segunda	665
24214136	RODRIGUEZ MORENO Mª DOLORES	Segunda	1127
27292748	RODRIGUEZ MORILLA FRANCISCO JOSE	Segunda	1296
51630509	RODRIGUEZ MORILLO CESAR CARLOS	Segunda	391
27906312	RODRIGUEZ MUÑOZ ANTONIO	Segunda	1780
8635023	RODRIGUEZ MUÑOZ ERNESTO	Segunda	2
2241053	RODRIGUEZ PLAZA MARIA GEMA	Segunda	2118
75700109	RODRIGUEZ RIVERA FRANCISCO ENRIQUE	Segunda	1503
28574428	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	Segunda	1009
9009096	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA	Segunda	2378
27279702	RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO	Segunda	478
24293685	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	824
400162	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA MERCEDES	Segunda	884
15953004	RODRIGUEZ SANTOS ELVIRA	Segunda	794
4584632	RODRIGUEZ TROTONDA MARIANO	Segunda	1990
7828201	RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA DEL PILAR	Segunda	384
24178092	RODRIGUEZ VAZQUEZ MERCEDES	Segunda	970
23797188	RODRIGUEZ VOZMEDIANO CARMEN	Segunda	1918
15921821	RODRIGUEZ ZULAICA ISABEL	Segunda	301
22616357	RODRIGUEZ DE ALBALADEJO ROMAN	Segunda	398
697586	RODRIGUEZ DEL PORTILLO ANDRES	Segunda	1327
32408181	RODRIGUEZ-HERMIDA FONTAO FATIMA	Segunda	504
22544153	RODRIGUEZ-MOLDES PEIRO ANTONIO SALVADOR	Segunda	1504

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
39280757	RODRIGUEZ-VARO VALVERDE LUIS	Segunda	4
32409520	ROEL PENAS ENRIQUETA	Segunda	392
12225733	ROIG VALDIVIESO JOSE LUIS	Segunda	501
33364941	ROJANO SAURA MONICA	Segunda	2186
31264667	ROJAS CORRALES JUAN ALBERTO	Segunda	1876
28926233	ROJAS ROSADO VICTOR	Segunda	2383
50823317	ROLLIN GARCIA MARIA ELENA	Segunda	1445
21449599	ROMAN IVORRA MARIA ENGRACIA	Segunda	1823
28579571	ROMERO CANDAU Mª DEL ROSARIO	Segunda	1677
46318040	ROMERO CARRASCO MONTSERRAT	Segunda	1307
31632158	ROMERO CHAMORRO Mª DEL CARMEN	Segunda	1925
22472979	ROMERO FERNANDEZ JUAN ANTONIO	Segunda	2547
28689396	ROMERO MONTES MARIA INES	Segunda	861
41994847	ROMERO PEREZ MARIA DOLORES	Segunda	1079
2495333	ROMERO DE LARRUMBIDE MARIA TERESA	Segunda	25
11928785	RONCERO LINARES ASCENSION	Segunda	1855
22542938	ROS CARREÑO CONCEPCION	Segunda	1424
22573102	ROS GIL DAVID	Segunda	2386
45045293	ROSA BENEROSO LORENZO	Segunda	9
9256913	ROSA PRIETO Mª VICENTA DE LA	Segunda	761
28857680	ROSADO DOMINGUEZ Mª ANGELES	Segunda	1119
7002582	ROSADO MONTERO DIEGO JESUS	Segunda	2181
1105919	ROSAL ALONSO MARIA LOURDES DEL	Segunda	296
44318156	ROSALES ASENSIO JOSE MARIA	Segunda	2519
24226140	ROSALES LOMBARDO CANDIDO JESUS	Segunda	2048
52749526	ROSELLO SOBREVELA RAFAEL	Segunda	1728
5630355	ROSPIDE GARCIA MARIA JOSE	Segunda	337
37267755	ROSSELL IBERN ANGELES	Segunda	1111
30047131	ROSSI MARTIN MARIA TERESA	Segunda	329
3433455	ROSSI NIETO MARIA GLORIA	Segunda	260
31337554	ROSSO PEREZ MANUEL ENRIQUE	Segunda	2268
46029200	ROVIRA CORNET ROSA	Segunda	175
13661739	ROZA GONZALEZ-TORRE CARMEN DE LA	Segunda	1101
3435483	RUANO MAROTO ANGEL TOMAS	Segunda	1141
2642011	RUBIA LOPEZ MONICA	Segunda	2534
25935696	RUBIA MARTINEZ JOSE RAMON	Segunda	523
45060233	RUBIA SANCHEZ DANIEL DE LA	Segunda	143
16801620	RUBIDO DE LA TORRE CARLOS	Segunda	1783
36002649	RUBIDO DE LA TORRE MANUEL	Segunda	199
24112824	RUBIO BAYO LUCIANA	Segunda	978
27174027	RUBIO DELGADO FRANCISCO JAVIER	Segunda	413
29752675	RUBIO FAURE CARLOS VICTOR	Segunda	1172
19845460	RUBIO FERNANDEZ MARIA PIEDAD	Segunda	957
33369603	RUBIO GOMEZ ESTEFANIA	Segunda	1774
8937620	RUBIO GONZALEZ CESAR	Segunda	1830
28537495	RUBIO LARA JESUS	Segunda	2128
74343114	RUBIO PATERNA JOSE PEDRO	Segunda	1124
7832572	RUBIO PEREZ M. AUXILIADORA	Segunda	722
24134618	RUBIO SABIO CARLOS MANUEL	Segunda	489

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
16505355	RUBIO SAENZ INMACULADA	Segunda	78
25417727	RUBIO SOLANES MONICA	Segunda	2011
22658254	RUBIO DE LA CRUZ JAVIER JOSE	Segunda	233
24253155	RUBIO NAVARRO CAROLINA	Segunda	2137
43809512	RUBIRA VARELA SARA	Segunda	2248
18433392	RUCIO SANTANA OLGA	Segunda	1984
31266226	RUEDA CAMPOS MARIA JOSE	Segunda	2363
5147792	RUEDA GUIZAN JOSEFA	Segunda	490
17868506	RUFAS TENAS ANTONIO	Segunda	1224
50295533	RUIGOMEZ GOMEZ JAIME	Segunda	271
50305020	RUIGOMEZ GOMEZ MARIA CRISTINA	Segunda	188
13759011	RUISOTO RIOJA MARIA DEL CARMEN	Segunda	1814
28303132	RUIZ CARRION JUAN CARLOS	Segunda	77
39654140	RUIZ GARCIA ALFREDO	Segunda	542
24128780	RUIZ GARCIA MARIA ADELA	Segunda	232
13069693	RUIZ GOMEZ MARIA CRUZ	Segunda	1161
2205473	RUIZ GONZALEZ Mª BELEN	Segunda	1148
13089254	RUIZ HUIDOBRO ISIDRO	Segunda	598
13766762	RUIZ MADRAZO ANA	Segunda	1815
71411783	RUIZ MANTECON MARIA DEL CARMEN	Segunda	681
45270803	RUIZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	Segunda	2172
52773259	RUIZ NAVARRO EDUARDO LUIS	Segunda	2297
16036552	RUIZ OTEIZA CRISTINA	Segunda	1630
17215974	RUIZ PARDO JOSE ANTONIO	Segunda	1283
16789767	RUIZ PASCUAL SERGIO	Segunda	632
9259010	RUIZ POLANCO ANA MARIA	Segunda	338
17151571	RUIZ QUEROL ROSA MARIA	Segunda	298
33246493	RUIZ RIVAS CONCEPCION	Segunda	696
6958532	RUIZ RUIZ JOSE JUAN	Segunda	112
73384185	RUIZ RUIZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	1837
40975733	RUIZ TEJERO ANA MARIA	Segunda	1773
29084000	RUIZ TORRES MARIA ISABEL	Segunda	2357
5629452	RUIZ VILLA MYRIAN	Segunda	774
45275313	RUIZ ZAMORA JUAN CARLOS	Segunda	1399
3796907	RUIZ DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER	Segunda	662
1492334	RUIZ DE VELASCO Y LINARES MARIA LUISA	Segunda	294
25910407	RUIZ-RICO RUIZ-MORON NATIVIDAD	Segunda	22
79266380	SABATER COLLADO DOLORES	Segunda	2222
40917215	SABATER SABATE JOSE MARIA	Segunda	1750
25938605	SAENZ CARAZO MANUEL CARLOS	Segunda	902
5215349	SAENZ PASTOR PEDRO	Segunda	484
13052780	SAEZ ARECHA PRUDENCIO	Segunda	507
22105305	SAEZ DOMENECH PASCUAL	Segunda	340
9269670	SAEZ GALLEGO MARIA DEL PILAR	Segunda	860
27495397	SAEZ NAVARRO MARIA JOSE	Segunda	1120
1897497	SAEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION	Segunda	960
5388779	SAEZ-BENITO JIMENEZ ESTHER PATROCINIO	Segunda	768
37278141	SAFORCADA CAMPOS JUAN ARTURO	Segunda	588
29098691	SAGANTA BARRA MARIA YOLANDA	Segunda	1767

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
15356163	SAGARDOY MORENO JUAN IGNACIO	Segunda	817
13902746	SAIZ LOPEZ MARIA DOLORES	Segunda	346
26185733	SAIZ DE MARCO MARIA ASUNCION	Segunda	844
20425021	SALA NAVALON RAQUEL	Segunda	1833
30825328	SALCEDO RUIZ MARIA ELENA	Segunda	2511
686401	SALCEDO DE MINGO PALOMA	Segunda	601
12705548	SALDAÑA HERMOSA MARIA MILAGROS	Segunda	435
41074550	SALDES SEGURA CARMEN	Segunda	1960
17868002	SALGADO DERQUI CONCEPCION	Segunda	238
33820044	SALGADO FERNANDEZ JOSE ANDRES	Segunda	137
10563884	SALGADO SUAREZ CARMEN	Segunda	1058
26011120	SALINAS SERRANO AGUSTIN	Segunda	2041
43702883	SALSE FERRER MARIA ANGELES	Segunda	1482
25041115	SALTO CHICANO JOSE MANUEL	Segunda	757
52584103	SALTO DIAZ ANTONIO JOSE	Segunda	1838
73499718	SALVADOR IDRACH VICENTE	Segunda	1089
31180941	SALVADOR MILLA CELIA	Segunda	17
27490533	SALVADOR DE LA CASA Mª DEL MAR	Segunda	1271
16270254	SALVATIERRA DIAZ Mª ANGELES	Segunda	1531
32764150	SAMPEDRO BLANCO Mª TERESA	Segunda	1505
50279949	SAMPEDRO ESCOLAR JOAQUIN	Segunda	72
17857092	SAMPER IBAÑEZ JUAN MARIANO	Segunda	197
13703445	SAN EMETERIO PEÑA MARIA REYES	Segunda	103
13122541	SAN JOSE CORS ALBERTO TOMAS	Segunda	1433
15850400	SAN MARTIN CIDRIAIN MARIA MERCEDES	Segunda	2308
50453775	SAN PABLO MORENO EVA	Segunda	1945
22980610	SANCHEZ ABELLA CARLOS	Segunda	2049
75370436	SANCHEZ AGUILAR MANUEL	Segunda	309
27470123	SANCHEZ ALFONSO JOSE CARLOS	Segunda	2144
74472703	SANCHEZ BARBERAN VIRGINIO	Segunda	969
29079483	SANCHEZ CALDERON M. GRACIA	Segunda	1759
11407844	SANCHEZ CASTAÑON ANA MARIA	Segunda	1746
30652796	SANCHEZ CASTILLA OLGA	Segunda	2296
6548017	SANCHEZ CERRAJERO FRANCISCO JAVIER	Segunda	1540
22433827	SANCHEZ EQUIZA SAGRARIO	Segunda	108
46005591	SANCHEZ FONTAL MANUEL	Segunda	1076
74624600	SANCHEZ GALERA ROSA MARIA	Segunda	1180
6566345	SANCHEZ GARCIA ANA ESTHER	Segunda	1835
5222844	SANCHEZ GARCIA ANTONIO	Segunda	689
13760771	SANCHEZ GARCIA LUIS ANTONIO	Segunda	1483
7792358	SANCHEZ GARCIA MANUEL	Segunda	328
7814196	SANCHEZ GARCIA PAULINA	Segunda	201
13120763	SANCHEZ GARRIDO MARIA ELENA	Segunda	1828
13112562	SANCHEZ GARRIDO Mª LUISA	Segunda	2189
5145344	SANCHEZ GIL MARIA ISABEL	Segunda	341
21400537	SANCHEZ GIL PEDRO LUIS	Segunda	565
52810804	SANCHEZ GIMENEZ MARIA ELENA	Segunda	1418
31663196	SANCHEZ GOMEZ MARGARITA	Segunda	2365
32746884	SANCHEZ GOMEZ MARIA PILAR	Segunda	1637

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
47050325	SANCHEZ GONZALEZ MARIA LLANOS	Segunda	2389
43776132	SANCHEZ GONZALEZ PABLO DAVID	Segunda	2269
393053	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA BELEN	Segunda	1027
11957479	SANCHEZ HERNANDEZ RAMON	Segunda	1965
7453143	SANCHEZ JIMENEZ BEATRIZ	Segunda	972
7954109	SANCHEZ JORGE YOLANDA	Segunda	1913
78030885	SANCHEZ LOPEZ ANA DOLORES	Segunda	1529
7844954	SANCHEZ LORENZO Mª LUISA	Segunda	1197
28458632	SANCHEZ MARTIN AMELIA	Segunda	1265
7436376	SANCHEZ MARTIN M. DE LAS PEÑAS ALBAS	Segunda	395
652484	SANCHEZ MARTIN MANUEL	Segunda	1239
7816361	SANCHEZ MARTIN SARA ISABEL	Segunda	725
11420862	SANCHEZ MARTINEZ SILVIA	Segunda	1892
26435437	SANCHEZ MARZAL MERCEDES	Segunda	389
7547838	SANCHEZ MOLINA JUAN CARLOS	Segunda	2177
25291398	SANCHEZ MORALES FERNANDO	Segunda	675
238498	SANCHEZ NIETO MARIA MARGARITA	Segunda	920
7445812	SANCHEZ NUÑEZ TERESA	Segunda	807
33977940	SANCHEZ PALACIOS MARIA ENGRACIA	Segunda	1878
18017159	SANCHEZ PEDRERO ADOLFO	Segunda	1934
32860589	SANCHEZ PERIÑAN ANGEL LUIS	Segunda	1722
8941384	SANCHEZ PIRIZ MARIA ANGEL	Segunda	1836
3108905	SANCHEZ RANZ MARIA ELENA	Segunda	1985
2525265	SANCHEZ RIVILLA NIEVES ESTHER	Segunda	881
22947311	SANCHEZ ROS IGNACIO JOSE	Segunda	2376
8108414	SANCHEZ SANCHEZ ANA ISABEL	Segunda	1874
9278654	SANCHEZ SINOVAS FRANCISCO JAVIER	Segunda	1403
22950655	SANCHEZ SOTO FRANCISCA	Segunda	985
3058850	SANCHEZ TAPIZ AVELINO	Segunda	516
10581757	SANCHEZ URIBELARREA MARIA BELEN	Segunda	732
74356197	SANCHEZ VALDIVIESO MARIA	Segunda	1142
12215439	SANCHEZ VALENTIN MARIA NIEVES	Segunda	575
28992622	SANCHEZ YAGO PILAR VICTORIA	Segunda	1972
27500839	SANCHEZ DE LA MATA ROSA MARIA	Segunda	1343
10559404	SANCHEZ-AREVALO RODRIGUEZ MARIA MONTAÑA	Segunda	325
1497811	SANCHEZ-BRUNETE MURILLO ANA	Segunda	40
51325341	SANCHEZ-ELIPE VALLE JOSEFA	Segunda	1117
27454114	SANCHEZ-SOLIS DE QUEROL PURIFICACION	Segunda	1121
29100867	SANCHO LUMBRERAS Mª ELENA	Segunda	2524
18040785	SANCHO DE LA TAJADA MARIA PILAR	Segunda	2461
42787633	SANCHO VILLARREAL MARÍA AMELIA DEL PINO	Segunda	202
25472812	SANCHON MARTINEZ JUAN LUIS	Segunda	2116
36069443	SANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	Segunda	1890
30064208	SANJURJO ROMERO JUAN CARLOS	Segunda	30
16520480	SANTAMARIA BLASCO JOSE RAMON	Segunda	842
4166943	SANTAMARIA LOPEZ DOMINGO	Segunda	1669
13154483	SANTAMARIA MANSO MARIA ELENA	Segunda	2061
17823917	SANTAMARIA MORENO PABLO	Segunda	543
790247	SANTAMARIA YAÑEZ JUAN CARLOS	Segunda	402

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
11957710	SANTANA LENA SILVIA	Segunda	1986
11734095	SANTIAGO ALEJOS MARIA INES	Segunda	1747
9714249	SANTOS BORLAN MARIA ISABEL	Segunda	595
3429371	SANTOS GONZALEZ LUIS DE	Segunda	641
11372793	SANTOS HEVIA JOSE LUIS	Segunda	51
52521367	SANTOS ORTUÑO VICTORIA EUGENIA	Segunda	1131
5686684	SANTOS PEREZ MARIA INMACULADA	Segunda	2105
13099529	SANTOS DEL VALLE LUIS FERNANDO	Segunda	1166
4544272	SANTOYO ESCRIBANO ELOISA	Segunda	93
50031798	SANZ ALVARO ESPERANZA ROSA	Segunda	778
70234649	SANZ BERMEJO VICTORIA BLANCA	Segunda	872
9297536	SANZ DIAZ MARIA BELEN	Segunda	1765
50693993	SANZ ESCORIHUELA MARIA JOSE	Segunda	715
50693994	SANZ ESCORIHUELA Mª DEL CARMEN	Segunda	1143
50024726	SANZ GARCIA CARLOS	Segunda	2126
1488607	SANZ GOMEZ PURIFICACION	Segunda	453
51348095	SANZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Segunda	1173
30571424	SANZ MINGUEZ EMILIO RAFAEL	Segunda	1961
12755873	SANZ MORENO BEATRIZ	Segunda	2314
32419079	SANZ RODERO FRANCISCO JAVIER	Segunda	84
12233644	SANZ RUBIALES M. ICIAR JESUS	Segunda	42
7210309	SANZ RUBIO MARIA LUZ	Segunda	1470
12196308	SANZ SEPTIEN MIGUEL	Segunda	41
25450938	SANZ DE MIGUEL MARIA PILAR	Segunda	2084
16782915	SANZ DE SANTOS JOSE ANTONIO	Segunda	477
14950404	SARALEGUI PRIETO IGNACIO	Segunda	583
17732312	SAVIRON DIEZ GUZMAN ELISEO	Segunda	2476
50692697	SEBASTIAN FERNANDEZ JUAN MANUEL	Segunda	895
73915595	SEBASTIAN SANZ MARIA CARMEN E.	Segunda	1355
12698327	SEGOVIANO ASTABURUAGA JULIA	Segunda	38
51639168	SEGURA MILLAN MARIA ISABEL	Segunda	467
33250493	SEIJAS RODRIGUEZ MARIA ALFONSO	Segunda	703
2545129	SEIVANE TERAN CRISTINA	Segunda	2472
50303550	SELDAS VALLE MARIA DE LOS ANGELES	Segunda	862
31260380	SEOANE SEPULVEDA JOSE MANUEL	Segunda	1941
77610798	SERAROLS GALLOSTRA MARIA LUISA	Segunda	2035
13756575	SERNA BOSCH JOAQUIN DE LA	Segunda	1335
37273478	SERRACARABASA MIÑANA JAVIER	Segunda	1508
29120707	SERRANO BASALDUA ALMUDENA BLANCA	Segunda	2410
25956801	SERRANO BRAVO CARMEN	Segunda	524
12365799	SERRANO CARRASCO JUAN ESTEBAN	Segunda	1416
30791133	SERRANO JIMENEZ MARIA REMEDIOS	Segunda	2017
75356495	SERRANO LOPEZ-CASERO MARIA PILAR	Segunda	1097
24118138	SERRANO LORCA Mª ROSARIO	Segunda	1137
40864900	SERRANO MASIP ALFONSO	Segunda	650
28586576	SERRANO MOLERA Mª DEL PILAR	Segunda	1604
52777309	SERRANO REDDAWAY ESTHER	Segunda	2193
34815213	SERRANO SAURA ANA BELEN	Segunda	2220
13072351	SEVILLA SANTIAGO LUIS FERNANDO	Segunda	393

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
7794158	SEVILLANO HERNANDEZ JESUS	Segunda	1794
27290471	SEVILLANO ZAMUDIO ALONSO	Segunda	279
46573601	SIEIRO BARJA AGUSTIN	Segunda	2419
24189206	SIERRA CABEZAS LEONOR	Segunda	1068
397359	SIERRA MORENO JESUS	Segunda	959
7979894	SIERRA SANCHEZ ZAYDA MARIA	Segunda	2409
24202275	SIERRA FERNANDEZ DE PRADA MARIA CARMEN	Segunda	1468
51661320	SIGUERO LLORENTE RAQUEL	Segunda	1581
25969852	SILLERO ARENAS Mª DEL MAR	Segunda	1164
24404765	SILVA GOTI MARIA	Segunda	336
14563195	SIMANCAS ALONSO LUIS DANIEL	Segunda	727
12375112	SINOVA GARCIA FRANCISCO	Segunda	2243
52769714	SIRVENT ASENSI VANESA	Segunda	2438
21423357	SIRVENT GUIJARRO FRANCISCO	Segunda	399
33801871	SOBRADO PRADO MARIA DEL CARMEN	Segunda	230
18423652	SOBREVELA GARCIA MARIA REGINA	Segunda	1421
11697042	SOGO PARDO MARIA CONSUELO	Segunda	247
27232742	SOGORB BARAZA JOSEFA	Segunda	706
34022445	SOLA NAVAS ANA MARIA	Segunda	1495
22937735	SOLANO BARRETO ANTONIO	Segunda	790
21422829	SOLANOT GARCIA MARIA DEL PILAR	Segunda	552
21385306	SOLER CHORNET ANA MARIA	Segunda	160
27512985	SOLER LOPEZ MIGUEL ANGEL	Segunda	2142
36946636	SOLIS ARAGON JESUS	Segunda	186
7241810	SORAVILLA GARCIA MARIA DEL DULCE NOMBRE	Segunda	2373
52535241	SORIANO YAÑEZ-SEDEÑO RAQUEL MARIA	Segunda	2529
39298687	SORIGUERA SERRA ALBERTO	Segunda	390
22557753	SORNI PEREZ VICENTE	Segunda	1770
18883879	SOS SEBASTIA JOSE MANUEL	Segunda	1781
42670530	SOSA LOPEZ MANUEL	Segunda	992
36071213	SOTELO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	1310
3827026	SOTO MARTIN PABLO	Segunda	1384
15937656	SOTORRA CAMPODARVE MARIA JOSE	Segunda	1022
13711863	SOTORRIO SOTORRIO MIGUEL	Segunda	526
15942430	STAMPA CASTILLO MARIA JESUS	Segunda	313
24164600	SUAREZ DIAZ JESUS	Segunda	634
50407369	SUAREZ DIAZ RAFAEL	Segunda	312
10595802	SUAREZ GARCIA MARIA CECILIA	Segunda	825
8792165	SUAREZ QUEVEDO MARIA JESUS	Segunda	693
9795116	SUEIRO MORAN CRISTINA	Segunda	2517
73094392	SUÑER DAGA FRANCISCO	Segunda	1452
51963257	TABLADILLO LOPEZ MIGUEL ANGEL	Segunda	2024
15948327	TAMARA SILVAN JAIME	Segunda	1742
25163209	TAMARA VELASCO ADOLFO FERNANDO	Segunda	2319
13115003	TAMAYO GOMEZ MARIA ADELA	Segunda	2522
24217621	TAPIA CEBALLOS LAURA	Segunda	275
3814977	TARDIO PEREZ MARIA NURIA	Segunda	948
50299366	TARDON SILVESTRE MARIA EVA	Segunda	921
12724124	TARRERO PASCUA DESIDERIA	Segunda	686

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
21381101	TATO Y GONZALEZ-ESPADA MARIA SOLEDAD	Segunda	323
80112392	TEJADA HIDALGO CARLOS	Segunda	2131
9260450	TEJEDOR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	Segunda	2202
13741848	TEJEDOR SALAGRE MARTA ISABEL	Segunda	1153
16530301	TEJERO LAORDEN Mª BEGOÑA	Segunda	1480
18200449	TELLECHEA JIMENEZ Mª LOURDES	Segunda	1129
14926008	TELLECHEA LOPEZ DE CALLE MARIA MONTSERRAT	Segunda	380
3065080	TELLEZ ESCOLANO JOSE MARIA	Segunda	418
17748770	TENA GRAÑON ANA ISABEL	Segunda	2320
1183235	TENORIO RIOS MARIA	Segunda	2299
20191540	TERAN RODRIGUEZ MARTA MARIA	Segunda	2006
12236422	THOMAS GOMEZ MARIA CRISTINA	Segunda	896
1116040	TIRADO GUTIERREZ Mª ISABEL	Segunda	1507
32372291	TOJO VAZQUEZ EUGENIO	Segunda	654
25119373	TOLEDANO ITURBE JERONIMO	Segunda	1567
9763274	TOMAS ALMANZA MARIA DEL ROSARIO	Segunda	2210
22529996	TOMAS LLAVADOR MARIA FRANCISCA	Segunda	843
22681835	TOMAS PORTER JOSE JUAN	Segunda	1933
42980263	TOMAS TORRENS ISABEL	Segunda	468
676103	TOME GARCIA ROSA MARIA	Segunda	599
28526249	TORIBIO GARCIA LUIS FERNANDO	Segunda	71
29743717	TORO GONZALEZ JOSE JOAQUIN DEL	Segunda	677
13753641	TORO LOPEZ Mª MONTSERRAT DEL	Segunda	1115
24172225	TORO VILCHEZ CARMEN YOLANDA	Segunda	1236
42963703	TORRANDELL FERRAGUT ANA	Segunda	440
75064594	TORRE GARCIA MARIA DOLORES DE	Segunda	1376
24178378	TORRECILLAS VIDAL JOSE LUIS	Segunda	1177
51648704	TORRENTE MUÑOZ MONTSERRAT	Segunda	1150
25960284	TORRES AYALA MARIA PATRICIA	Segunda	917
17430554	TORRES BERNAL MARIA NIEVES	Segunda	746
45452353	TORRES CHICO ANA ISABEL	Segunda	2102
50542217	TORRES GUITIAN ISABEL	Segunda	36
36906839	TORRES LORIENTE JOSE LUIS	Segunda	1644
25938810	TORRES MARIN TERESA	Segunda	166
5642151	TORRES MATEOS JOSE MANUEL	Segunda	1198
11803562	TORRES MOHEDAS ANGELA	Segunda	1266
37726913	TORRES PUERTAS MARIA TERESA	Segunda	206
50533241	TORRES RUIZ MARGARITA	Segunda	11
27270577	TORRES TORTOSA DOLORES ENCARNACION	Segunda	835
5167542	TORRO ENGUIX JOAQUIN	Segunda	2022
42992950	TORTELLA CARBONELL FRANCISCA	Segunda	1162
80127090	TOSCANO MARTI Mª MONSERRAT	Segunda	1182
24296177	TRAVE PACETTI MARIA PAZ	Segunda	987
24229213	TRIVIÑO MOSQUERA DAVID	Segunda	1920
73764021	TRONCHONI ALBERT JOSE	Segunda	1880
30470095	TROYA CALATAYUD Mª CARMEN DE	Segunda	1149
71339747	TRUJILLO ESCAPA YOLANDA	Segunda	1958
42977540	TUGORES FRAU MARGARITA	Segunda	253
25936696	TUÑON LAZARO CARMEN PALOMA	Segunda	44

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
25943855	TUÑON LAZARO MARIA FERNANDA	Segunda	679
677426	TUREL GARCIA ADORACION	Segunda	904
4144306	TURNES DE LA INFANTA MARIA ROSA PAZ	Segunda	1580
688785	UBEDA SIERRA MARIANO	Segunda	855
42967036	UCERO ESTRADES MARIANO R.	Segunda	1095
14931078	UGALDE AZCARRETA FRANCISCO	Segunda	937
51387306	UGENA YUSTOS MARIA NIEVES	Segunda	1541
32764039	ULLOA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	Segunda	1683
52368099	UNTIEDT LECUONA MARIA VANESSA	Segunda	2395
15924630	URANGA DIEZ M. DEL CARMEN	Segunda	549
15837991	URANGA MURUZABAL CARMEN	Segunda	620
16250510	URBIETA LAVIADA MARIA CONCEPCION	Segunda	806
45070120	URETA MAYANS MARGARITA	Segunda	1189
1805246	URIARTE DE LOS SANTOS MARIA AURORA	Segunda	291
46119949	URIOS JOVER BLANCA	Segunda	265
14601120	URIZAR IZA Mª BEGOÑA	Segunda	1123
40884288	URREA MARSAL LIDIA	Segunda	1448
72875909	UTRILLA HERNAN RESURRECCION	Segunda	570
25133773	VAL LECHON ANGEL LUIS DE	Segunda	1222
46313660	VALBUENA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	191
50409230	VALCARCE CODES ISABEL MARIA	Segunda	1623
412254	VALCARCE ROMANI JOSE ANTONIO	Segunda	1409
9399847	VALDEGRAMA GONZALEZ Mª ANGELES	Segunda	1700
12206834	VALDESPINO GOMEZ MARIA VICTORIA	Segunda	424
13111393	VALDIVIELSO GARCIA MARIA YOLANDA	Segunda	1559
37328763	VALDIVIELSO GUTIERREZ CARMEN	Segunda	1506
18198619	VALENCIA EDERRA ROSA MARIA	Segunda	1134
50295886	VALENCIA SANCHEZ JESUS	Segunda	1169
23223084	VALERO CANALES ANTONIO LUIS	Segunda	1415
29160813	VALERO DOMENECH CRISTINA MARIA	Segunda	2311
5117533	VALERO LOPEZ JOSE EUGENIO	Segunda	1705
28545444	VALERO LOPEZ MARIA PASTORA	Segunda	865
40888182	VALERO SOLANO MARIA ITZIAR	Segunda	1597
9294153	VALIENTE ESTEBANEZ MARIA PILAR	Segunda	1579
8818826	VALIÑA REGUERA CARLOS JUAN	Segunda	1244
29178131	VALLE CONTRERAS MARIA DOLORES	Segunda	1956
11356566	VALLE PRIETO MONTSERRAT DEL	Segunda	434
11067843	VALLE ZAPICO AMELIA DEL	Segunda	1360
34029297	VALLECILLO ORELLANA MARIA LOURDES	Segunda	2294
20415360	VALLES LLORENS ENRIQUE	Segunda	2207
35016770	VALLS PRUNA MERCE	Segunda	1563
15973773	VALOR NEVADO INES	Segunda	1145
9262539	VALVERDE ESPESO MARIA FE	Segunda	712
75676926	VALVERDE FERNANDEZ MARIA SOLEDAD	Segunda	833
22440423	VALVERDE GARCIA JUAN DE DIOS	Segunda	423
17861970	VALVERDE QUINTANA RAMON IVAN JOSE	Segunda	786
26195165	VAQUERO ABELA ANA MARIA	Segunda	606
78794111	VARELA AMBOAGE SUSANA	Segunda	2325
33839051	VARELA PUGA ANA MARIA	Segunda	500

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
33818349	VARELA PUGA FERNANDO	Segunda	375
33857623	VARELA REBOLO MARIA DEL CARMEN	Segunda	1640
11798877	VAREZ BREÑAS MARIA CARMEN	Segunda	1952
6963320	VARONA GARCIA MARIA ASUNCION	Segunda	779
7008633	VAZ-ROMERO MORENO MARIA BEATRIZ	Segunda	2355
7008632	VAZ-ROMERO MORENO MARIA CARMEN	Segunda	1726
1100932	VAZQUEZ ARIÑO GUILLERMO	Segunda	1444
9315874	VAZQUEZ BOYERO FERNANDO M.	Segunda	2187
50094552	VAZQUEZ GARCIA DAVID	Segunda	1673
24185672	VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO	Segunda	796
2906886	VAZQUEZ JARO MARIA GLORIA	Segunda	2079
36083320	VAZQUEZ ORGE FERNANDO	Segunda	1882
28737041	VAZQUEZ PRIETO DAVID	Segunda	2242
46928247	VAZQUEZ QUERO MARIA TERESA	Segunda	2340
32663736	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION	Segunda	2010
32807064	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	2145
27450575	VAZQUEZ TRIGUEROS CARMEN	Segunda	2260
32619547	VAZQUEZ ZARATE MARIA DEL CARMEN	Segunda	2300
6542621	VEGA ALONSO JOSEFA	Segunda	2094
9254882	VEGA GONZALEZ ANA MARIA	Segunda	709
44431174	VEGA HERNANDEZ ADELAIDA	Segunda	2408
33335265	VEIGA PENEDO MÓNICA	Segunda	2499
18195102	VELA HERNANDEZ Mª PILAR	Segunda	1126
7963947	VELAZQUEZ TAVERA MARIA BELEN	Segunda	2250
10884484	VELEZ ROLDAN MONICA	Segunda	1981
50800827	VENTURA MOLINA BARTOLOME	Segunda	1187
73375822	VENTURA MONFORT JOAQUIN RICARDO	Segunda	2497
22659717	VERDEGUER LOPEZ VICENTE	Segunda	2089
39309280	VERGE GRAU MARIA	Segunda	124
46345476	VERGES MARIN MARC	Segunda	2110
14683837	VESGA GOMEZ MARIA BEGOÑA	Segunda	1082
651973	VICENTE BAZ JOSE LUIS	Segunda	1817
7871835	VICENTE CABEZAS Mª ISABEL	Segunda	1927
12693269	VICENTE GONZALEZ JOSE JAVIER	Segunda	743
33839202	VICENTE GUTIERREZ MARTA DE	Segunda	577
7815412	VICENTE JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	91
50851995	VICO FERNANDEZ GEMA	Segunda	2324
37689881	VIDAL QUIRANTE NIEVES	Segunda	1475
50716879	VIGAL BREY RICARDO	Segunda	1642
9270818	VIGO GARCIA EMILIANO JOSE DEL	Segunda	947
22616154	VILA BIOSCA JOSE MARIA	Segunda	1431
27493333	VILA MONTES ERNESTO	Segunda	1253
24152796	VILCHES FERNANDEZ MIGUEL	Segunda	258
75008991	VILCHES GALISTEO JUAN PEDRO	Segunda	2247
24242494	VILCHEZ COBO JOSE LUIS	Segunda	2037
28884506	VILCHEZ COBO MARIA CRUZ	Segunda	1745
24127958	VILLA-REAL BERRUEZO FRANCISCO JAVIER	Segunda	420
9722783	VILLAFANEZ GARCIA DOMINGO URBANO	Segunda	1100
12231706	VILLAHOZ RODRIGUEZ JOSE	Segunda	192

Índice alfabético. Segunda categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
50732555	VILLALBA BRU RAFAEL	Segunda	2540
5345311	VILLALBA SANCHEZ MERCEDES	Segunda	283
24146980	VILLALOBOS SANCHEZ LUIS	Segunda	290
11787604	VILLALON CABALLERO CRISTOBAL	Segunda	1680
1473248	VILLALPANDO LUCAS LORENZO	Segunda	750
13706995	VILLANUEVA ESCUDERO AURORA	Segunda	144
34793514	VILLANUEVA JOVER MARIA DOLORES	Segunda	2103
13921810	VILLANUEVA VIVAR Mª ANTONIA	Segunda	1582
30676596	VILLAR PEÑA BEGOÑA	Segunda	1997
10820605	VILLAR SEVILLANO MARIA DEL CARMEN	Segunda	604
24192798	VILLARRUBIA MARTOS FERMIN JAVIER	Segunda	1739
48316395	VILLEGAS CASTRILLO LOURDES	Segunda	2221
15965364	VILLOSLADA TORQUEMADA Mª ISABEL	Segunda	1250
45274943	VILLUENDAS RUIZ IGNACIO FRANCISCO	Segunda	1951
22746417	VILORIA ZUDAIRE ESTHER	Segunda	2215
8036695	VILUMBRALES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	Segunda	2527
37745104	VIÑAS ESCOBEDO MARIA ROSA	Segunda	2346
75021274	VIÑAS SENA GEMA	Segunda	2541
9269618	VIRTUS LADRON DE GUEVARA JOSE MANUEL	Segunda	1032
15956852	VISITACION VILLAN ROSA MARIA DE LA	Segunda	982
18165894	VISUS SANZ ARTURO	Segunda	2233
27463706	VIVANCOS GIL PEDRO-ANTONIO	Segunda	1688
75124841	VIVAR VALVERDE FRANCISCO JOSE	Segunda	2070
28387880	VIVAS ALMENDROS EMILIO I.	Segunda	415
73934989	VIVES REQUENA MARIA DEL PILAR	Segunda	316
13095409	YAGUEZ SANTIAGO COVADONGA	Segunda	637
28670543	YAÑEZ RODRIGUEZ Mª DEL CARMEN	Segunda	465
10049180	YEBRA RODRIGUEZ Mª MERCEDES	Segunda	1313
51405150	YUBERO CHI EVA MARIA	Segunda	2071
17432819	YUBERO MARTINEZ TOMAS	Segunda	1439
30609447	YURREBASO SANTAMARIA AINHOA	Segunda	1944
15926026	YUSTA GONZALEZ EDUARDO	Segunda	1740
17702625	YUSTE GONZALEZ DE RUEDA CARMEN A.	Segunda	798
17699481	YUSTE GONZALEZ DE RUEDA MARIA DOLORES	Segunda	320
15942953	ZABALA ORTEGA MARIA IDOYA	Segunda	479
13298161	ZABALLA MERINO TERESA FRANCISCA	Segunda	1243
25998108	ZAFRA BARRANCO YOLANDA	Segunda	1889
7231875	ZAMORANO EIRIZ PATRICIA	Segunda	2252
15947424	ZAPATA CAMACHO MARIA DEL PILAR	Segunda	617
28579527	ZAPATA MONGE MARIA BELEN	Segunda	1372
8928024	ZAPATA MUÑOZ ANA MARIA	Segunda	2152
21446472	ZARAGOZA CAMPOS MARIA FUENSANTA	Segunda	955
27284015	ZEJALBO MARTIN ELISA	Segunda	494
50433812	ZOYA CERRUDO Mª CRISTINA	Segunda	1698
34096370	ZUBIA ZUBIMENDI MIREN EDURNE	Segunda	1884
27907905	ZUMAQUERO ROMERO MARIA PIEDAD	Segunda	331
24182988	ZURITA JIMENEZ JOSE FRANCISCO	Segunda	1463
5224107	ZURITA TAIN ANGELA MARGARITA	Segunda	471

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SECRETARIOS JUDICIALES
Tercera categoría

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
25051947	ABAD TELLEZ MERCEDES	Tercera	885
9378299	ABAD ROLLAND MARÍA ALZIRA	Tercera	168
79080586	ABAT GALLEGUO JESÚS MARIO	Tercera	761
16052689	ABIEGA GIL MARÍA FERNANDA	Tercera	767
7871995	AGUILAR GÓMEZ MARÍA CRUZ	Tercera	1073
79221090	AGUILAR OSUNA FRANCISCO JOSE	Tercera	404
44007201	AGUILERA JURADO MARÍA ISABEL	Tercera	904
47450122	AGUILERA LARA MONTSERRAT	Tercera	397
11817190	AGÜNDEZ LÓPEZ SANTIAGO MARIO	Tercera	723
52739389	AGUSTI PONS HELENA	Tercera	758
30980060	ALBENDIN CEPAS ALMUDENA	Tercera	1018
8900823	ALBIZU MORENTIN JOAQUIN	Tercera	49
16059411	ALBIZUA DE CASTRO NORA	Tercera	576
30811510	ALCALÁ PEDRAJAS NICOLÁS	Tercera	972
44044281	ALCALÁ COIRADA LIDIA	Tercera	240
43408613	ALCANTARA ROLDÁN JESÚS LEONARDO	Tercera	909
22989618	ALCÁZAR MONEDERO FUENSANTA	Tercera	708
50437108	ALCOLEA MADINAGOITIA BEATRIZ	Tercera	375
2220900	ALCON VALLEJO MANUEL PATRICIO	Tercera	522
29117930	ALDAZ ALFRANCA OSCAR	Tercera	524
7966788	ALEGRIA MARTIN MARIA EUGENIA	Tercera	881
28907618	ALFARO ROJAS ANA MARÍA	Tercera	233
71644216	ALFARO URÍA ISABEL	Tercera	644
6521147	ALMEIDA GONZALEZ MARIA ISABEL	Tercera	104
10892710	ALONSO FERNANDEZ ANGEL	Tercera	33
10887159	ALONSO GONZALEZ MARIA JOSE	Tercera	29
52207644	ALONSO CASADO FRANCISCO JAVIER	Tercera	782
71558859	ALONSO CHAMORRO RAQUEL	Tercera	1048
13759145	ALONSO FRUTOS MARÍA BELÉN	Tercera	151
2854214	ALONSO VELÁZQUEZ FABIOLA	Tercera	746
43749737	ALOY MALLA JOANA FRANCESCA	Tercera	662
33541905	ALVAREDO ARIAS ANTIA	Tercera	1045
9432880	ALVAREZ ARCE MARTA	Tercera	116
10899142	ALVAREZ MENENDEZ CRISTINA	Tercera	113
71662133	ALVAREZ ALONSO PAULA	Tercera	855
43392545	ÁLVAREZ ÁLVAREZ JAIME JUAN	Tercera	493
71632593	ALVAREZ CASTILLO MARÍA LUISA	Tercera	668
72067573	ALVAREZ DE SOTO INES	Tercera	830
51930385	ÁLVAREZ GÓMEZ NURIA	Tercera	963
44433244	ALVAREZ LOPEZ NOELIA	Tercera	360
12382017	ÁLVAREZ LOZANO MARÍA ISABEL	Tercera	771
71636871	ALVAREZ-BUYLLA NAHARRO VIRGINIA	Tercera	369
43744318	AMO MAESO MARIA AROA	Tercera	839
45074524	AMO MORENO MARÍA ROCÍO	Tercera	756
7990310	ANAYA GONZÁLEZ MARÍA TERESA	Tercera	1063
16804127	ANDRES CARRAMIÑANA GEMMA LIDIA	Tercera	8
28627369	ANDUJAR RODRIGUEZ ESTHER	Tercera	892
29092854	ANGULO VIVARACHO RAFAEL	Tercera	919
51412828	ANICETO FERNÁNDEZ CRISTINA	Tercera	528

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
9317350	ANTÓN DE LA CALLE ELSA MARÍA	Tercera	1095
20033245	ARAGO TUR MARIA AMPARO	Tercera	286
79202169	ARAGÓN BRAVO DIEGO JESÚS	Tercera	1097
11916849	ARANA TAMAYO CRISTINA	Tercera	224
29086687	ARANDA PINOS JOSÉ LUIS	Tercera	958
44474206	ARANGO CAMPUZANO PAULA ANDREA	Tercera	1014
32750175	ARCAY IGLESIAS MARÍA DOLORES	Tercera	719
72704230	ARDANAZ DOMENCH JOSUNE	Tercera	1062
32874294	ARECHAGA BRAÑA DIMAS JUAN	Tercera	872
71118536	ARELLANO MARTINEZ LAURO	Tercera	393
9390174	ARGAÑA FERNÁNDEZ MARÍA TERESA	Tercera	714
8108480	ARIAS GONZÁLEZ MARÍA ESTHER	Tercera	502
75432267	ARISPON PACO MARIA DOLORES	Tercera	95
28689248	ARMARIO PÉREZ JUAN	Tercera	164
44861149	ARMENGOT IBORRA JUAN FERNANDO	Tercera	270
21483587	ARQUÉS GALIANA FRANCISCO JAVIER	Tercera	897
25183966	ASENSIO ECHEGOYEN RAÚL	Tercera	1088
30194743	ASENSIO MORUNO MARÍA TERESA	Tercera	750
44421375	ASENSIO MUÑOZ ALEJANDRO	Tercera	886
2529438	ASENSIO-WANDOSELL GARCIA-CABAÑAS IGNACIO	Tercera	332
36115604	AVE PRIETO ESTEFANÍA	Tercera	994
23289945	AYALA GARCIA DE LAS BAYONAS MARAVILLAS	Tercera	803
46672818	AYATS RIUS ANNA MARÍA	Tercera	1098
50726808	AYLLON ALONSO JUAN MANUEL	Tercera	367
15254446	AZALDEGUI GARMENDIA AITZIBER	Tercera	25
71439184	BAJO GONZALEZ DIANA	Tercera	843
2194058	BALDASANO SUPERVIELLE MARIA ESTHER	Tercera	102
78147711	BALLABRIGA CASES MARÍA PILAR	Tercera	68
39031651	BALLESTER PICANYOL CECILIA	Tercera	526
20165235	BALLESTER SÁNCHEZ MÓNICA AMPARO	Tercera	200
46729439	BALLESTEROS GARCÍA DAVID MARCOS	Tercera	1082
70244679	BALLESTEROS HERRERO REBECA	Tercera	985
25180194	BAQUEDANO GARCIA RAQUEL	Tercera	448
48400839	BARNES RODRÍGUEZ DE VERA VIRGINIA	Tercera	1038
23277398	BARNES SANCHEZ MARIA DE LAS HUERTAS	Tercera	290
29181236	BARÓN ESCÁMEZ DOMINGO	Tercera	587
34834563	BARRACHINA RODRIGUEZ-GUISADO ANDREA	Tercera	811
24204284	BARRANCO SÁNCHEZ ELISA MARINA	Tercera	903
3438859	BARRIO CALLE LUISA MARINA	Tercera	829
71262724	BARRIO MADRUGA MARIA LUISA	Tercera	357
74849199	BARRIONUEVO LEYRAS MARINA	Tercera	577
52258383	BARROSO SÁNCHEZ MARÍA DEL MAR	Tercera	776
71699107	BASOREDO CUADRA MARÍA BELÉN	Tercera	153
78510569	BATISTA ESTEVEZ MARIA VICTORIA	Tercera	827
34781845	BAUTISTA SÁNCHEZ MARÍA CARMEN	Tercera	694
74220389	BAUTISTA TORRES MARCO ANTONIO	Tercera	1099
31649914	BAZÁN SÁNCHEZ ILDEFONSO	Tercera	165
52266992	BELLAMY MANZANO LUIS JUAN	Tercera	19
29127205	BELLIDO HERNANDEZ SERGIO	Tercera	268

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
11429455	BELMONTE BRAVO YOLANDA	Tercera	60
53561404	BELTRÁN FERNÁNDEZ LUCÍA	Tercera	1019
20816675	BELTRÁN LERMA CAROLA	Tercera	793
44904154	BENDITO GUILARTE CARLOS	Tercera	696
17760489	BERGES VIDAL BERTA	Tercera	678
44866643	BERLANGA CHARRIEL MIGUEL	Tercera	874
35466413	BERNARDEZ PEREIRAS EVA	Tercera	847
43653931	BETANCOR RODRÍGUEZ MARGARITA	Tercera	936
7971493	BIEN GARCÍA JORGE DEL	Tercera	205
20029611	BIXQUERT SANZ ANGELS	Tercera	685
77339741	BLANCA BUENDIA MANUEL GABRIEL	Tercera	269
26040634	BLANCO POLAINO MACARENA	Tercera	77
9792288	BLANCO GALLEGO FATIMA	Tercera	444
36520099	BLANCO SANCHEZ MARIA PILAR	Tercera	431
9336048	BLAS ORTEGA JULIO CESAR DE	Tercera	56
16058269	BLASCO LICES FERNANDO	Tercera	495
20152254	BLAT RUIZ MARÍA CLARA	Tercera	788
22530103	BOGUÑA PACHECO MARÍA ISABEL	Tercera	156
37286003	BOLIVAR TROYA ANTONIO	Tercera	735
29186217	BOLUFER FRANCIA VICENTE MANUEL	Tercera	589
2656421	BONETE SATORRE BERTA	Tercera	566
11811859	BONILLA GÓMEZ MIGUEL ANGEL	Tercera	712
45583432	BOSSINI RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	Tercera	58
7015170	BOTE FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL	Tercera	939
48305298	BOTELLA MARTIN DESAMPARADOS	Tercera	849
46338264	BRAVO GARCÍA JOSEFA OLGA	Tercera	749
831554	BRICEÑO GONZALEZ MARIA DEL MAR	Tercera	91
20827565	BRINES FERRANDO NEUS	Tercera	655
51086499	BRIONES SANTAMARIA BEATRIZ	Tercera	837
52636939	BRIZ RECIO JOSÉ ESTEBAN	Tercera	511
28788672	BRU MEDINA DIANA	Tercera	308
45463577	BRUNET SANTOS SERGIO	Tercera	147
4579530	BUENDÍA HERRERA BEGOÑA	Tercera	201
46745169	BUENO SANTANA ELENA	Tercera	294
16585597	BUJANDA ABADIA RAQUEL	Tercera	302
50877470	BURGOS DE LA PRIDA MARTA	Tercera	1055
9775057	BUSTAMANTE LORENZO MARÍA DEL CARMEN	Tercera	154
43501540	BUSTILLO CHOCARRO MARÍA DEL PUY	Tercera	480
6214891	BUSTOS VALENCIA MARÍA PILAR	Tercera	895
77113077	CABALLERO OCHOA GASPAR	Tercera	899
28485926	CABAÑAS PULIDO MARÍA REYES	Tercera	258
38128648	CABRE CONESA AGUSTÍN	Tercera	993
47069941	CABRERA GALEANO OSCAR RICARDO	Tercera	1058
77320891	CABRERA GALLARDO MARIA DE LOS DOLORES	Tercera	403
47351123	CACHEDA VARELA PATRICIA	Tercera	844
33331814	CAJOTO BERDEAL ANA BELEN	Tercera	429
50954165	CALDERO CORNEJO Mª DEL CARMEN	Tercera	825
24335189	CALDUCH GARGALLO MANUEL	Tercera	527
24345927	CALERO NAVARRO ESTHER FRANCISCA	Tercera	1077

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
44295141	CALLEJAS HUERTES ANTONIA	Tercera	690
11962827	CALLES GARCÍA GUSTAVO	Tercera	789
72037445	CALVO MORENO VERONICA	Tercera	432
29101302	CALVO SOLE GEMA MARGARITA	Tercera	777
80078981	CAMACHO CANO ELENA	Tercera	673
3125956	CAMARA DE DOMINGO NATALIA HENAR	Tercera	408
50119560	CAMBERO CRESPO MARIA DEL ROSARIO	Tercera	831
28742095	CAMINO PIÑA MARIA MAR	Tercera	264
44044243	CAMPAÑA SALAS SONIA	Tercera	1120
25422291	CAMPAYO SOLER PABLO	Tercera	926
25151035	CAMPOS DEL ÁLAMO MARÍA PILAR	Tercera	739
52190842	CAMPOS VALLEJO FRANCISCO JAVIER	Tercera	1068
37290814	CAMPS ORTIZ FRANCISCO JAVIER	Tercera	952
10825814	CANAL MEANA FRANCISCO JAVIER	Tercera	893
40344928	CANALS TRULL MONTSERRAT	Tercera	680
38495408	CANET LORENTE MARÍA INMACULADA	Tercera	159
77801263	CANO GALLARDO CECILIA	Tercera	656
24153564	CANON FRÍAS MANUEL	Tercera	208
30521008	CANTADOR MORENO JOSÉ MIGUEL	Tercera	157
31856404	CANTO HIDALGO BELÉN CARIDAD	Tercera	1127
26008550	CAÑADA DORADO JOSE MANUEL	Tercera	427
38102599	CAÑETE CARMONA SILVIA	Tercera	219
30794356	CAÑETE LEYVA MARÍA BELÉN	Tercera	542
32831202	CAO SANCHEZ MARIA CRISTINA	Tercera	263
44296448	CAPILLA GALLEGO RAQUEL	Tercera	473
31690924	CAPOTE PINO MARIA JOSE	Tercera	46
25414287	CARABAL GUAITA NATIVIDAD	Tercera	726
33287753	CARAMES BLANCO MARIA JOSE	Tercera	875
27318690	CARANDE CAMENO CECILIA	Tercera	111
13149381	CARASA ANTÓN GUSTAVO ALDOLFO	Tercera	196
11428023	CARBALLO VEGA MARÍA LUZ	Tercera	218
74512898	CARBONERAS TORNERO JESUS	Tercera	340
28964544	CARBONERO LOZOYA MARÍA CRISTINA	Tercera	1031
47076222	CARDENAS RUIZ-VALDEPEÑAS BEATRIZ	Tercera	812
47063669	CARLOS HERREROS SARA	Tercera	1049
52991786	CARMONA BORREGO MARTA	Tercera	1116
36140382	CARRERA RAFAEL MARIA DEL CARMEN	Tercera	273
48352756	CARRETERO SALAS PEDRO PABLO	Tercera	341
28718376	CARRILLO PANTOJA JUAN DIEGO	Tercera	515
80079502	CARRILLO RODRÍGUEZ LETICIA	Tercera	670
2661440	CARRIÓN GÓMEZ LAURA	Tercera	640
7250995	CASADO FERRO SONIA MARÍA	Tercera	198
2221354	CASADO NAVARRO MARÍA DEL CARMEN	Tercera	730
20153720	CASAÑ ARANDIGA VICENTA MARIA	Tercera	114
24239173	CASAS ARANDA MARÍA BELÉN	Tercera	160
74659841	CASAS ÁLVAREZ JOSÉ MARÍA	Tercera	646
25131522	CASASNOVAS RASAL ANA ISABEL	Tercera	1071
4609403	CASERO REMON BELÉN	Tercera	997
48509802	CASSINELLO MARCO MARTA	Tercera	573

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
50979623	CASTAÑO CASTAÑO OSCAR	Tercera	336
50843947	CASTEDO BARTOLOME ROSA MARÍA	Tercera	785
20464987	CASTEL FRIAS ANA	Tercera	1002
50183759	CASTELLANO VÁZQUEZ CARMEN LUCÍA	Tercera	230
25991570	CASTILLO IZQUIERDO JOSE ANTONIO	Tercera	15
73767208	CASTILLO ALIAGA MARÍA CARMEN	Tercera	1027
73558449	CASTILLO SERNA BLANCA AIDA	Tercera	1059
44078866	CASTIÑEIRA ALVARIÑO JOSE MANUEL	Tercera	873
30801733	CASTIÑEIRA REPULLO MARÍA BLANCA	Tercera	1039
52496436	CASTRO CERQUEIRO AMAGOYA	Tercera	1016
77329355	CASTRO MORENTE ANA ISABEL	Tercera	819
25471790	CASTRO SAURAS ALFREDO	Tercera	455
52151148	CAURIN CAURIN NURIA	Tercera	1070
2536317	CAVERO COLL MIGUEL ÁNGEL	Tercera	539
27462388	CEJUDO PODIO MARÍA LLANOS	Tercera	197
46042096	CERVANTES REQUENA ENCARNACIÓN MARÍA	Tercera	747
32669307	CHAS ARES MARIA DEL MAR	Tercera	391
44591323	CHOUCIÑO CARRIL LAURA MARIA	Tercera	621
78900011	CIFRIAN GIL GISELA	Tercera	1032
43682357	CIRIA ARROYO MARÍA ÁNGELES	Tercera	616
29187071	CLIMENT ESTEVE MARÍA DE LOS DESAMPARADOS	Tercera	773
29175183	CLIMENT ESTEVE MARÍA VICTORIA	Tercera	1121
76027474	COLLADO CORDERO MARÍA ISABEL	Tercera	1022
12755375	COLLANTES VEGA MERCEDES	Tercera	1109
36102166	COLLAZO FERNÁNDEZ ROCIO	Tercera	951
26040399	COLMENERO DIAZ ROSA MARIA	Tercera	105
30961791	COLORADO GAMEZ ELENA	Tercera	437
80072888	COLORADO SÁNCHEZ CRISTINA	Tercera	1007
13759500	COLSA LLOREDA MARÍA PALOMA	Tercera	924
4844614	CONDE LÓPEZ JUAN CARLOS	Tercera	536
35085307	CONTE LOZANO MARÍA ESTHER	Tercera	755
53044439	CORDON MARQUES BEATRIZ	Tercera	392
39140632	CORNET ALONSO AGUSTÍN	Tercera	912
31686238	CORPAS JIMÉNEZ SUSANA	Tercera	781
32775188	CORRAL GARCIA ROSANA	Tercera	636
7965319	CORRAL RISCO ANA ISABEL	Tercera	1000
50981198	CORREAS CASTILLO VICTORIA DE LA ANTIGUA	Tercera	409
44164953	COSSIO ARRIBAS IGNACIO	Tercera	349
36139638	COSTA ANDRÉS CAROLINA	Tercera	664
7980272	COTOBAL MARTIN ESTEFANIA	Tercera	109
9390954	COUSO MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO	Tercera	645
43065159	COZAR GARCIA SANTIAGO	Tercera	821
20805877	CREMADES LOPEZ DE TERUEL FERNANDO JAVIER	Tercera	413
9415293	CRESPO ARCE PATRICIA	Tercera	85
35123611	CRESPO LÓPEZ CRISTINA	Tercera	488
1926475	CRESPO PASCUAL ARACELI	Tercera	868
18170376	CREUS PORTAS NURIA	Tercera	296
44396939	CUARTERO ORTIZ MARTA	Tercera	74
45560308	CULIAÑEZ RIVES YOLANDA TERESA	Tercera	406

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
28342245	CURADO DANA JUAN DIONISIO	Tercera	50
70801914	DANIEL DEL VALLE ELENA MARIA	Tercera	599
36948970	DE BENITO GONZALEZ Mª PILAR	Tercera	140
46898112	DE CASTRO MEJUTO SAUL JAVIER	Tercera	281
20193766	DE DOMINGO GRACIA NOEMI	Tercera	62
74653969	DE HEREDIA FERNANDEZ MARIANO JESUS	Tercera	652
71103721	DE LA CRUZ GONZALEZ ESTHER	Tercera	309
13304317	DE LA FUENTE ARRIBAS MÓNICA	Tercera	247
36149530	DE LA RUBIA ALMUIÑA MARTA	Tercera	611
22699469	DE LA RUBIA COMOS LUIS	Tercera	1066
40341744	DE LA TORRE DUÑAITURRIA ALICIA PALOMA	Tercera	572
23030075	DE LA TORRE MARTÍNEZ MARÍA ISABEL	Tercera	1064
77410219	DE LIS FERREIRO OLALLA	Tercera	1020
51105883	DE ORO-PULIDO MIGUEL CRISTINA CONSUELO	Tercera	585
3462294	DE PABLO MARTIN MARIA DAMARIS	Tercera	471
36571026	DE ZEA BLANCH CONCEPCIÓN	Tercera	988
3458751	DEL RÍO BARRIO ALEJANDRO	Tercera	206
32823052	DELGADO MARZAN REBECA	Tercera	132
52960428	DELGADO GONZALEZ SANTIAGO	Tercera	814
30541747	DELGADO RAMÍREZ ALFONSO	Tercera	960
52727243	DELTORO BARRERO LAURA	Tercera	252
7502003	DIAZ CALLEJON MARIA ANGELES	Tercera	71
23218957	DIAZ LOPEZ ANDRES	Tercera	496
34982477	DÍAZ FERNÁNDEZ LUIS	Tercera	617
3854690	DIAZ REVORIO LUIS ENRIQUE	Tercera	622
40352247	DIAZ SAEZ RAUL	Tercera	435
6993953	DÍAZ TRUJILLO FELIX MANUEL	Tercera	898
29121163	DIEGO GARCIA PATRICIA	Tercera	838
50866150	DIEZ ALONSO MONICA	Tercera	807
12748959	DÍEZ ANTOLÍN VÍCTOR	Tercera	185
11851132	DÍEZ DÍAZ LIDIA	Tercera	1026
9345706	DIEZ ESCRIBANO ROSA MARIA	Tercera	866
35077797	DÍEZ GARCÍA SUSANA	Tercera	740
48364913	DOLS CHAZARRA MARIA	Tercera	457
29050508	DOMINGUEZ GONZALEZ ANGELA	Tercera	64
51382922	DOMÍNGUEZ AGUDO MARÍA REYES	Tercera	716
33363035	DOMÍNGUEZ CUADRADO HELENA	Tercera	787
52187207	DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ ESTHER	Tercera	1093
51411927	DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ FRANCISCO	Tercera	931
53284219	DOMINGUEZ-RODIÑO ALCALDE MARIA DEL CARMEN	Tercera	870
34076206	DORADO VALLE ALICIA	Tercera	443
13167409	DUEÑAS FRAILE FERNANDO	Tercera	853
52537834	DUPUY MATEOS MARIA DE LA PALOMA	Tercera	339
50168077	DURÁN BAÑOS MARÍA ISABEL	Tercera	254
10585689	EGUIBURU ARIAS-ARGUELLO MARÍA COVADONGA	Tercera	915
29100548	EISMAN CURTO ANA MARÍA	Tercera	220
29132943	EL-KHATIB VÁZQUEZ MOUSA	Tercera	692
2647323	ESCOBAR NAREDO SANDRA	Tercera	806
12403412	ESCOURIDO PEREZ-SINDIN JUAN MANUEL	Tercera	272

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
27515610	ESCUDERO PUGA MARIA DOLORES	Tercera	7
7862733	ESCUDERO LOPEZ MARIA PILAR	Tercera	422
30951915	ESPAÑA SÁNCHEZ ANTONIO	Tercera	1034
45736270	ESPEJO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	Tercera	824
29170874	ESPI BIBIAN CRISTINA	Tercera	935
27472710	ESPIN LÓPEZ ISIDORO	Tercera	759
30949853	ESPINOLA PULIDO MARIBEL	Tercera	411
18113328	ESPINOSA CARREÑO MARÍA LUZ	Tercera	497
7505201	ESTEBAN HERNANDEZ ALICIA	Tercera	283
34948540	ESTÉVEZ JACOME BENIGNO	Tercera	731
47030708	EVANGELIO MORATO VERONICA	Tercera	354
25419396	EZCURRA ATAYDE VERÓNICA	Tercera	245
25667994	EZQUERRA ROMERO MARIA PILAR	Tercera	394
44999827	FABREGAT GORRO MARIA	Tercera	330
47629262	FANDOS LLOPIS JUDIT	Tercera	1044
78889903	FANO DOMINGUEZ OIANA	Tercera	416
3850309	FDEZ-GALLARDO FDEZ-GALLARDO JAVIER ANGEL	Tercera	476
29001261	FERNÁNDEZ ESCUDERO ANA MARIA	Tercera	775
51429826	FERNÁNDEZ LÓPEZ-MENCHERO MARÍA TERESA	Tercera	648
2507813	FERNÁNDEZ REGUERA GUILLERMO	Tercera	906
6960947	FERNANDEZ SIMON MILAGROS DEL CARMEN	Tercera	67
46590706	FERNÁNDEZ SOTO CONCEPCIÓN	Tercera	479
11437219	FERNÁNDEZ ARBESU RAQUEL	Tercera	1011
44792590	FERNANDEZ CUESTA MARIA DEL MAR	Tercera	472
9026264	FERNANDEZ DAVILA CAROLINA	Tercera	311
5372680	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE LOS RIOS ARANTXAZU	Tercera	1074
10896702	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Mª CRISTINA	Tercera	557
76862939	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ YOLANDA MIRIAM	Tercera	1096
37740579	FERNÁNDEZ GALLARDO EMILIO	Tercera	722
71134469	FERNANDEZ GARCIA NURIA	Tercera	366
23243740	FERNÁNDEZ LOZANO MARÍA DEL CARMEN	Tercera	790
7865608	FERNANDEZ MATAS MARIA DEL CARMEN	Tercera	325
71274009	FERNANDEZ MERIDA OSCAR	Tercera	262
13162573	FERNÁNDEZ MÉRIDA RAÚL	Tercera	259
10901320	FERNANDEZ MERINO AMALIA	Tercera	865
8935696	FERNANDEZ NIETO JOSEFA	Tercera	462
44293934	FERNÁNDEZ RIENDA ALFREDO	Tercera	978
52400287	FERNÁNDEZ TASA DAVID	Tercera	933
48397953	FERNANDEZ TORRES MARIA	Tercera	374
46624757	FERNANDEZ TORRUELLA TERESA	Tercera	295
38790403	FERNÁNDEZ URREA SEBASTIÁN	Tercera	905
24357672	FERRANDO ABALOS JUAN	Tercera	995
37321011	FERREIRO PARDO JOSÉ LUIS	Tercera	1104
73157106	FERRERUELA HERNÁNDEZ PAOLA	Tercera	1033
18429093	FERRI BORRÁS ENRIQUE	Tercera	732
12407605	FRAILE MENDOZA RODRIGO	Tercera	346
74828260	FRANCH ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS ELENA AIDA	Tercera	571
34723454	FRANCISCO GARCÍA JULIA	Tercera	529
46701815	FRUCTUOSO GONZÁLEZ IVÁN	Tercera	257

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
20164243	FUENTES ZAMORA NATALIA	Tercera	280
45686201	GAGO LOZANO SARA	Tercera	333
12758124	GALÁN GUTIÉRREZ ANA MARÍA	Tercera	225
45737009	GALERA GARCIA MARIA JOSE	Tercera	368
48323275	GALIANA LARA ANA ISABEL	Tercera	608
9378294	GAMONAL LOMBARDEO MARÍA SUSANA	Tercera	964
46400648	GARCÍA FIGUERAS MARÍA ESPERANZA	Tercera	227
28781741	GARCIA GARCIA MARIA JOSE	Tercera	73
30537479	GARCIA GARRIDO Mª IRENE	Tercera	22
20781798	GARCÍA GARRIGUES MARÍA LORETO	Tercera	725
9432724	GARCÍA RODRIGUEZ NOELIA	Tercera	135
75097192	GARCIA SOTO JUANA	Tercera	84
9805264	GARCIA ALVAREZ ELBA	Tercera	698
75241548	GARCIA ARIZA MARIA DE LA LUZ	Tercera	370
22960976	GARCÍA BUENO MARÍA DOLORES	Tercera	929
8986357	GARCIA CAMPO MANUELA	Tercera	405
20805823	GARCÍA CARBONELL MARÍA DESAMPARADOS	Tercera	510
50108224	GARCIA DE LA MORENA GISELA	Tercera	134
51453041	GARCÍA DELGADO DIEGO	Tercera	689
44467186	GARCÍA DIEGUEZ MARÍA BÉLÉN	Tercera	580
44271335	GARCIA ESTEO CRISTINA MARIA	Tercera	424
73001075	GARCÍA FERNÁNDEZ JAVIER	Tercera	1047
50456359	GARCIA FERREIRA MARIA	Tercera	418
44265291	GARCÍA GALLEGO MARTA ISABEL	Tercera	647
6583955	GARCÍA GARCÍA MARTA	Tercera	953
6586550	GARCÍA GARCÍA SONSOLES	Tercera	666
6997815	GARCÍA GÓMEZ MARÍA ÁNGELES	Tercera	501
36165071	GARCÍA GONZÁLEZ LUCÍA	Tercera	982
44700058	GARCÍA HERNÁNDEZ AGUSTÍN CARLOS	Tercera	999
50731151	GARCÍA LÓPEZ JOSÉ ANTONIO	Tercera	768
33318585	GARCÍA LORENZO CRISTINA	Tercera	968
51069795	GARCIA MARTINEZ ALICIA	Tercera	433
70935209	GARCIA MATAS MIRIAM	Tercera	300
13938165	GARCÍA MAZA MILAGROS	Tercera	604
39675011	GARCÍA MEROÑO GEMMA MARGARITA	Tercera	1084
21423204	GARCÍA MESEGUER MARÍA DOLORES	Tercera	718
44381856	GARCIA MORENO JUAN MANUEL	Tercera	669
2267459	GARCÍA MUÑOZ DAVID	Tercera	1126
18445393	GARCIA ONTALBA MARIA VICTORIA	Tercera	826
32868229	GARCÍA PÉREZ MARÍA DEL CARMEN	Tercera	519
53202419	GARCIA PUIG JULIA	Tercera	447
51089377	GARCÍA RAVASSA CARMEN VICTORIA	Tercera	658
32866160	GARCÍA ROCES MARTA BERTA	Tercera	947
51067981	GARCIA RODRIGUEZ MARIA ARANZAZU	Tercera	364
9805383	GARCÍA RODRÍGUEZ PAULA	Tercera	549
51632211	GARCÍA SALAS MARÍA LUISA	Tercera	186
70880609	GARCIA SANCHEZ MARIA DEL PILAR	Tercera	395
45711868	GARCÍA SERRANO ROSA MARÍA	Tercera	607
44294846	GARCÍA TORRES MARÍA LORENA	Tercera	1085

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
71939631	GARCÍA VEGAS ANA MARÍA	Tercera	558
46638574	GARCIA VELASCO ROSA MARIA	Tercera	351
10873188	GARCIA-QUIJADA MORAIS IGNACIO	Tercera	27
25381325	GARRIDO NIEVAS ELOINA	Tercera	942
28909804	GAVILÁN SANTOS MARÍA PURIFICACIÓN	Tercera	987
25156307	GERMÁN ARMIJO MARÍA	Tercera	937
6963000	GIL SANTOS MARIA DEL CARMEN	Tercera	13
30640888	GIL CORDOBES MARÍA DEL MAR	Tercera	1004
29182486	GIL FABREGAT CRISTINA	Tercera	840
23269468	GIL MARTINEZ LAURA	Tercera	287
33479163	GIL PASCUAL JUAN CARLOS	Tercera	149
53133395	GIL SARRO ANA MARÍA	Tercera	260
36071773	GIMÉNEZ LEÓN PAZ	Tercera	934
33498798	GIMENEZ PEREZ-CABRERO ANA	Tercera	267
52382764	GINES TARAZAGA JUAN ANGEL	Tercera	505
72885722	GOMARA MARTÍNEZ VEGA MARÍA	Tercera	1012
45593978	GOMEZ MARTINEZ MARIA DOLORES	Tercera	57
13941583	GÓMEZ POZUETA CARLOS JAIME	Tercera	764
34994790	GÓMEZ CARBALLO MERCEDES	Tercera	709
46342414	GÓMEZ DÍAZ-PINES OLGA	Tercera	180
75099972	GÓMEZ GÓMEZ ISABEL	Tercera	986
7870464	GOMEZ HERNANDEZ LUIS	Tercera	265
74661655	GOMEZ MARTIN MARIA	Tercera	293
33390199	GÓMEZ MATE MARÍA AMPARO	Tercera	632
76927124	GÓMEZ MEIJOME VERÓNICA	Tercera	546
46570038	GÓMEZ PARDO MARÍA DEL CARMEN	Tercera	943
50041740	GÓMEZ SANTAMARÍA JESÚS MIGUEL	Tercera	1080
35281944	GÓMEZ-LOR PÉREZ ELISEO MANUEL	Tercera	516
43443147	GONZÁLEZ AMORRICH PABLO	Tercera	163
50151607	GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARÍA MONTSERRAT	Tercera	494
53693052	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	Tercera	133
9761884	GONZALEZ ROZAS MARÍA BEGOÑA	Tercera	651
9771831	GONZÁLEZ ROZAS MARÍA DEL CAMINO	Tercera	991
17745974	GONZÁLEZ RUIZ MARÍA JOSÉ	Tercera	674
12745990	GONZALEZ TEJEDOR MARIA DEL VALLE	Tercera	5
42861624	GONZÁLEZ VEGA RITA MARÍA	Tercera	1090
26009520	GONZALEZ VERA INMACULADA	Tercera	11
33897151	GONZÁLEZ ALFARO MARÍA INMACULADA	Tercera	752
40990321	GONZÁLEZ ÁLVAREZ MARÍA DEL MAR	Tercera	556
11077042	GONZALEZ ALVAREZ SOFIA	Tercera	667
72667806	GONZALEZ ARCE AIDA	Tercera	382
16568297	GONZALEZ BARRIALES JUDIT	Tercera	343
9319394	GONZALEZ BLANCO VERONICA	Tercera	334
2647157	GONZALEZ CABALLERO CONRADO JAVIER	Tercera	880
46681145	GONZALEZ CARRASCO ROSA MARIA	Tercera	371
6585949	GONZALEZ CARRO YOLANDA	Tercera	822
9199951	GONZÁLEZ COLLADO MARÍA JOSÉ	Tercera	1102
9435177	GONZALEZ GARCIA MARIA	Tercera	627
71657573	GONZÁLEZ GARCÍA MARTA	Tercera	976

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
44909021	GONZALEZ GARCIA SONIA	Tercera	297
11922053	GONZÁLEZ GONZÁLEZ ÁNGEL	Tercera	517
696650	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ CELIA	Tercera	243
71932148	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ LAURA	Tercera	564
9286193	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SANTIAGO	Tercera	738
33970285	GONZÁLEZ IGLESIAS JESÚS MARÍA	Tercera	1111
44450165	GONZÁLEZ JOLY MARCOS	Tercera	791
48901182	GONZALEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	Tercera	441
22688197	GONZÁLEZ LÓPEZ MARÍA ISABEL	Tercera	930
44036954	GONZALEZ LUQUE MARIA INMACULADA	Tercera	350
20257501	GONZÁLEZ MÁRQUEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	Tercera	737
51066957	GONZALEZ MARQUEZ SILVIA CARMEN	Tercera	470
78497721	GONZÁLEZ MARRERO MIRIAM	Tercera	1123
44908189	GONZALEZ MARTIN JESUS TEODOSIO	Tercera	565
13167217	GONZÁLEZ MASA ESTELA	Tercera	783
47017804	GONZÁLEZ MÉNDEZ AMAYA	Tercera	907
2660584	GONZÁLEZ MOSQUEIRA LEONOR	Tercera	588
51418519	GONZÁLEZ MUÑOZ MARTA	Tercera	877
45664253	GONZÁLEZ NAVARRO LAURA	Tercera	983
10864907	GONZÁLEZ PENA MARÍA RITA	Tercera	223
36113491	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JORGE	Tercera	940
52412720	GONZÁLEZ SÁNCHEZ CARLOS	Tercera	1054
33491870	GONZÁLEZ SÁNCHEZ MARÍA ESMERALDA	Tercera	530
7948025	GONZÁLEZ SÁNCHEZ MARÍA MAGDALENA	Tercera	729
410410	GONZÁLEZ SANZ MARÍA ELENA	Tercera	962
2905900	GONZÁLEZ VALLEJO BELÉN	Tercera	1065
10082667	GONZALEZ VOCES CELSO	Tercera	310
10884189	GONZALO CAPELLIN LUIS MIGUEL	Tercera	772
13152427	GOZALO DELGADO MARÍA SONIA	Tercera	248
3882458	GRACIA GUERRERO MARIA JESUS	Tercera	285
38446450	GRACIA MOR MONTSERRAT	Tercera	1078
9278189	GRACIA SOTOS CARMEN	Tercera	1091
7541175	GREGORIO SÁNCHEZ MARÍA TERESA	Tercera	229
47763594	GUARRO BELART JORDINA	Tercera	876
33884587	GUBERN VIVES ANTONI	Tercera	177
53081091	GUERRERO QUIÑOZ YOLANDA	Tercera	335
24380344	GUILLÉN MARZAL SARA	Tercera	1021
28599756	GULLÓN GULLÓN ANA MARÍA	Tercera	213
12391580	GUTIERREZ FERNANDEZ PABLO RAMON	Tercera	808
27306440	GUTIÉRREZ AUGUSTO MARÍA PASTORA	Tercera	222
3907803	GUTIÉRREZ MARTÍN JUAN JOSÉ	Tercera	1003
10898314	GUTIERREZ RODRIGUEZ VANESA MARIA	Tercera	861
44371249	GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARÍA ROSA	Tercera	657
53102080	HARO FERNANDEZ LUCIA	Tercera	312
20267486	HENAO SOTO SANDRA	Tercera	438
16793631	HENAR MARISCAL MARÍA PILAR	Tercera	500
35028635	HERNÁNDEZ MÉNDEZ ALBERTO	Tercera	724
7955956	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS	Tercera	1087
21512538	HERNANDEZ BELTRAN ARTURO	Tercera	275

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
18025345	HERNÁNDEZ HERNANDO MARÍA JESÚS	Tercera	760
18441853	HERNANDEZ MARZO LAURA	Tercera	271
70881219	HERNÁNDEZ TEJEDOR ANA MARÍA	Tercera	706
12370964	HERNANDO GARCÍA MARÍA MILAGROS	Tercera	489
78675977	HERRERA CUBAS INÉS	Tercera	679
75248705	HERRERIAS RODRÍGUEZ ISABEL	Tercera	1057
47280086	HERRERO BARRERO MARÍA	Tercera	682
28701592	HERRERO SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL	Tercera	203
50871928	HERVÁS HERVÁS JAVIER	Tercera	654
77321036	HIGUERAS DURÁN MARIO	Tercera	619
17741405	HINOJAR MACHIN HECTOR	Tercera	417
77805371	HINOJO CERVIÑO MARÍA DEL CARMEN	Tercera	1125
34810330	HITA VERA MARÍA ASCENSIÓN	Tercera	637
37341256	HOMAR RIERA JOANA MARIA	Tercera	352
33918517	HOMPANERA GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ	Tercera	143
44289373	HUERTA GARCÍA RAFAEL	Tercera	490
24210058	HUETE CANO MANUEL	Tercera	514
74657284	HUETE DIAZ MARIA DEL MAR	Tercera	442
44273632	IBAÑEZ ORTEGA BEGOÑA	Tercera	55
11409053	IBÁÑEZ ÁLVAREZ JOSÉ ANTONIO	Tercera	932
46706694	IBAÑEZ MORENO FRANCISCO JAVIER	Tercera	322
13113208	IBÁÑEZ ORTIZ MARÍA ÁNGELES	Tercera	757
19848211	IBÁÑEZ SÁNCHEZ RAQUEL	Tercera	161
11944197	IGLESIAS REFOYO MARIA BELEN	Tercera	17
71510692	IGLESIAS SUÁREZ VERÓNICA	Tercera	610
50857901	IGLESIAS ANTOLINEZ REBECA	Tercera	1061
32830079	IGLESIAS RABUÑAL LARA MARÍA	Tercera	980
50126178	IGLESIAS TORRES HELENA	Tercera	984
25482876	IRIBAS CABRERA ANGELA	Tercera	559
18171316	IRIGOYEN PUEYO JOSÉ RAMÓN	Tercera	695
73188894	ISABAL MARCO FRANCISCO JAVIER	Tercera	913
47648414	ISLA VALDANZO BEGOÑA	Tercera	1101
50100721	IZQUIERDO LUENGO MIGUEL ANGEL	Tercera	314
44450899	JANEIRO AMELA BLANCA SUSANA	Tercera	624
7852210	JARAMILLO HERNANDEZ ANTONIO	Tercera	10
33977560	JARIEGO RUIZ MARIA ELENA	Tercera	835
18168204	JARNE CORRAL PAULA	Tercera	284
44875138	JERICO SOBREVELA MARIA BELEN	Tercera	358
52202834	JIMÉNEZ ARAGONES ANTONIA	Tercera	506
2545555	JIMENEZ DELGADO ANA	Tercera	137
25684561	JIMENEZ POSTIGO MARIA BELEN	Tercera	89
48961551	JIMENEZ BIDON PEDRO MARIA	Tercera	799
74863686	JIMENEZ CHAMIZO DAVINIA DE LOS ANGELES	Tercera	879
3103234	JIMÉNEZ CRESPO BASILIA	Tercera	237
50182757	JIMENEZ DE LA TORRE VICENTE	Tercera	39
47000378	JIMENEZ ESTEVEZ MARIA JOSE	Tercera	867
48866266	JIMENEZ GALVEZ MARIA SOFIA	Tercera	460
4202197	JIMENEZ GOMEZ MARIA ESTELA	Tercera	450
44266002	JIMENEZ LARA PATRICIA	Tercera	398

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
14318321	JIMÉNEZ SARMIENTO MARÍA DOLORES	Tercera	614
9807963	JIMENO ÁLVAREZ HERIBERTO	Tercera	228
6583378	JORGE MARTÍN MARÍA DE LAS NIEVES	Tercera	192
33877115	JUAN DIVIU MARÍA CINTA	Tercera	914
25424418	JUAN RUIZ SOLEDAD	Tercera	582
43046167	JUAN SALVA PAULA CRISTINA	Tercera	142
25160446	LABORDA ÁLVAREZ ELVIRA	Tercera	733
72972177	LABRADOR GIMENO ISABEL	Tercera	888
25170340	LACASTA BERGUA FERNANDO	Tercera	319
38145032	LACUEVA BERTOLACCI RODRIGO	Tercera	239
76997576	LAGO RIVERO MARIA	Tercera	112
12403062	LAGUNA COLOMA JOSE ANTONIO	Tercera	342
32880025	LAMUÑO CARREÑO NATALIA	Tercera	797
46865876	LANDEIRA BARBERA MARÍA LUISA	Tercera	957
36933906	LARA DEL RIO JESUS	Tercera	18
74675032	LARIOS DIAZ VANESA	Tercera	401
33523541	LASO ORDOÑEZ TOMAS ANTONIO	Tercera	420
30677878	LASUEN AGUIRRE MAIDER	Tercera	869
33409094	LEÓN FREIJEIRO CAROLINA	Tercera	244
24176648	LEÓN HERRERA ANTONIO MIGUEL	Tercera	242
75756356	LINARES CARRERAS INMACULADA CONCEPCIÓN	Tercera	1122
37292793	LLARAS PINTADO MARÍA CRISTINA	Tercera	478
44288316	LLOR MADRID PIEDAD	Tercera	626
36139217	LLOVES FORNEIRO JOSÉ	Tercera	910
73556419	LLUCH BAREA VERÓNICA	Tercera	548
71416160	LOBATO ANDRES GONZALO	Tercera	850
9749142	LOPEZ ARIAS RAQUEL	Tercera	41
44389029	LOPEZ BAUTISTA MARGARITA	Tercera	45
46849362	LOPEZ FERNANDEZ SUSANA	Tercera	136
72530755	LÓPEZ GARCÍA EMILIO	Tercera	917
23792327	LOPEZ ROMERA MARIA LORETO	Tercera	21
29097101	LOPEZ SANCHEZ SEBASTIAN ANTONIO	Tercera	63
38851147	LOPEZ AMAT ROSA MARIA	Tercera	361
40346843	LOPEZ CANO FRANCISCA	Tercera	298
74649385	LOPEZ DE CERVANTES VALENCIA DAVID	Tercera	451
50084339	LÓPEZ DEL PESO ANA ISABEL	Tercera	894
71428461	LOPEZ FERNANDEZ ANA BELEN	Tercera	365
34978238	LÓPEZ GÓMEZ ANA MARÍA	Tercera	1107
33927714	LÓPEZ GUTIÉRREZ MARÍA LOURDES	Tercera	199
34792904	LÓPEZ JARA MANUEL	Tercera	896
47064209	LOPEZ MOLINA ADELA	Tercera	809
74664430	LÓPEZ NAVAJAS IRENE MARÍA	Tercera	691
9013024	LOPEZ PORTILLO MARIA EMMA	Tercera	347
10870740	LOPEZ PRESA ROSA ANA	Tercera	887
8947209	LÓPEZ RIBAGORDA DAVID	Tercera	246
50837028	LÓPEZ RUANO ESTHER	Tercera	786
12374964	LÓPEZ SANZ MARÍA ENCARNACIÓN	Tercera	1118
25402888	LORCA SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL	Tercera	509
28622926	LORENCE MARTÍNEZ MARÍA LOURDES	Tercera	946

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
52614863	LORENZO ALVAREZ MARIA ANGELES	Tercera	118
76956682	LORENZO ALVAREZ JESUS	Tercera	359
2642744	LOSARCOS GUTIERREZ MIGUEL	Tercera	380
17750967	LOSHUERTOS PUERTOLAS CARMEN	Tercera	363
45659606	LOZANO GARCIA MARIA JESUS	Tercera	276
78887750	LUCAS ALMARZA LEIRE DE	Tercera	1092
46836744	LUDEÑA BENITEZ OSCAR DANIEL	Tercera	87
71125771	LUQUERO DIEZ ARACELI	Tercera	306
15258333	LUSA SOBRON NURIA	Tercera	30
39722753	MACIAN DE GREEF SERGIO	Tercera	570
43657518	MACÍAS RODRÍGUEZ CRISTOBAL	Tercera	202
35109600	MAESTRE FUENTES CRISTINA	Tercera	148
70808001	MAJOR LÓPEZ MIGUEL	Tercera	675
34805702	MALDONADO BALLESTER ANA ISABEL	Tercera	61
8910887	MALDONADO VILLEGAS MARIA DEL CARMEN	Tercera	14
78569067	MALDONADO CONCEPCION CRISTINA	Tercera	860
3427963	MANRIQUE CABRERO JOSE CARLOS	Tercera	69
5680511	MANSILLA REDONDO ANA BELEN	Tercera	122
48480003	MANUEL SANCHEZ RAQUEL	Tercera	126
5238415	MARAVAR SANCHEZ ANGEL	Tercera	1
21389082	MARCO MARTÍNEZ-ARENAS MARÍA DE LOS DESAMPARADOS	Tercera	741
70867993	MARCOS GORDO MARIA DEL CARMEN	Tercera	362
50756099	MARCOS LUCERO ALFONSO	Tercera	1025
43108608	MARI RUIZ BEGOÑA	Tercera	1046
44632085	MARQUEZ DE PRADO MORAGUES LUIS	Tercera	317
4204576	MARRODAN FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	Tercera	337
19894509	MARTÍ PÉREZ JUAN FRANCISCO	Tercera	255
9796920	MARTIN ANDRES RAQUEL	Tercera	72
77328689	MARTIN CANO MARIA	Tercera	796
28754838	MARTIN MARTIN VEGA MARIA	Tercera	124
13153919	MARTÍN PASCUAL ESTHER	Tercera	234
50076547	MARTIN RINCON MARIA NIEVES	Tercera	93
29078888	MARTÍN RIVAS MARÍA LUZ	Tercera	146
72977366	MARTÍN ALMAJANO VERÓNICA	Tercera	1053
72046355	MARTÍN BOLADO DIANA	Tercera	560
12389027	MARTIN GARCIA CRISTINA	Tercera	279
12722223	MARTÍN GARCÍA JESÚS ÁNGEL	Tercera	950
50170287	MARTÍN GARCÍA MARÍA DEL CARMEN	Tercera	779
50086777	MARTIN LOPEZ MARIA DE LAS MERCEDES	Tercera	377
43430903	MARTÍN ORTEGA FRANCISCO	Tercera	710
74235810	MARTÍN PAREJA INMACULADA	Tercera	701
70051655	MARTÍN PAZOS YOANA	Tercera	795
44084619	MARTIN REY ALICIA	Tercera	823
32873303	MARTINEZ GONZALEZ RAQUEL	Tercera	23
48340417	MARTINEZ HERNANDEZ ELENA	Tercera	120
9293104	MARTINEZ MARTIN MARIA VICTORIA	Tercera	6
46548498	MARTÍNEZ ROMERO APOLONIA	Tercera	150
75256831	MARTÍNEZ AYALA MARÍA ALEJANDRA	Tercera	605
47795123	MARTINEZ CABADA MIRIAM	Tercera	800

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
9806815	MARTINEZ CANTALAPIEDRA EVA	Tercera	390
75251271	MARTINEZ CANTON RAQUEL	Tercera	386
37283280	MARTÍNEZ CASADO ALBERTO	Tercera	170
48536267	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO	Tercera	414
71648513	MARTINEZ GARCIA CRISTINA	Tercera	468
71516242	MARTÍNEZ GONZÁLEZ RAQUEL	Tercera	1015
48398846	MARTINEZ LAORDEN CAROLINA	Tercera	848
28638629	MARTÍNEZ LARRAD MARÍA DEL PILAR	Tercera	594
23278788	MARTÍNEZ LÓPEZ FRANCISCA	Tercera	1030
46730518	MARTÍNEZ LÓPEZ LUIS FELIPE	Tercera	214
79141011	MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA NIEVES	Tercera	521
27459906	MARTÍNEZ LÓPEZ VICTOR MANUEL	Tercera	1042
7538750	MARTÍNEZ MARÍN FRANCISCO JAVIER	Tercera	173
26741099	MARTÍNEZ MORENO JOSÉ	Tercera	251
29108004	MARTÍNEZ OLIVA ERNESTO	Tercera	1086
75786103	MARTÍNEZ PÉREZ MARÍA ELENA	Tercera	672
46666751	MARTÍNEZ ROVIRA ESTEBAN	Tercera	1110
47068498	MARTÍNEZ SERRANO BLANCA DEL CARMEN	Tercera	583
47055770	MARTINEZ TORRENTE MARIA DOLORES	Tercera	643
70163839	MARTÍNEZ-BLANCO ALONSO MARÍA DEL PILAR	Tercera	152
47069092	MARTÍNEZ-MORATALLA SERNA MILAGROS	Tercera	592
75766398	MARTOS MENDOZA LOURDES	Tercera	328
72724795	MARTOS NICIO MARIA ESTIBALIZ	Tercera	299
20430419	MASCAROS GONZALEZ ANA LYLIANA	Tercera	834
43153191	MATEO ERROZ PAULA	Tercera	609
5270527	MATEO ORTEGA MARÍA DEL MAR	Tercera	543
74861593	MATEO PEREZ AMELIA	Tercera	452
7961002	MATEOS MEDIERO MARIA DEL CARMEN	Tercera	20
79021021	MATILLA ORTEGA MARÍA DE LA CRUZ	Tercera	618
44281190	MAYANS LOPEZ ROSA MARIA	Tercera	82
2527415	MAYLLO GARCÍA GLORIA	Tercera	209
40975079	MAYO GALERA ALEJANDRO	Tercera	721
10203339	MAYO SANCHEZ INMACULADA	Tercera	445
10905739	MBA CARCEDO PENELOPE	Tercera	464
10887761	MEANA DEL CASTRO SUSANA	Tercera	292
16595333	MEDEL BERNARDO JORGE	Tercera	373
33985066	MEDINA MEDINA PEDRO RAFAEL	Tercera	1079
45428123	MÉNDEZ DE LA VEGA CATALINA RAMONA	Tercera	212
75750275	MÉNDEZ GONZÁLEZ MARÍA AUXILIADORA	Tercera	596
32755395	MÉNDEZ MONTERO JOSEFINA	Tercera	169
16293147	MENDIA RODRÍGUEZ Mª YOLANDA	Tercera	922
9364883	MENÉNDEZ BARBES MARÍA INÉS	Tercera	184
10884918	MENENDEZ MEDEL BELEN	Tercera	344
31702141	MENESES DOMINGUEZ ALFONSO	Tercera	686
34948720	MENOR PEREZ LUIS	Tercera	481
71281113	MERINO GUIJARRO VIRGINIA	Tercera	649
28938118	MERINO MARCEÑIDO JUANA	Tercera	194
46880911	MERINO MOLINA VANESA	Tercera	676
30225518	MESA PEREA LAURA	Tercera	1114

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
52644999	MEZQUITA RUIZ ISABEL	Tercera	384
28722470	MICHI CHAVES MARÍA DEL CARMEN	Tercera	748
5415962	MILANES VELLILLA SUSANA	Tercera	925
20029137	MIÑANA LLORENS VICENTE	Tercera	593
35091405	MIR FRESNEDA DAMIÁN	Tercera	195
17746519	MIRANDA ORTIZ DE LATIERRO EDURNE	Tercera	421
73775859	MIRANDA TAULER MARÍA	Tercera	531
21664097	MODESTO CORTÉS CRISTINA	Tercera	859
48440493	MOLINA CASTAÑER ESTHER	Tercera	1124
48874860	MOLINA GARCÍA MARÍA	Tercera	697
42080623	MONLLOR GISBERT MARÍA INMACULADA	Tercera	166
18959858	MONTAÑES SABORIT MARÍA MAGDALENA	Tercera	1069
28519785	MONTERO LAVADO ANDRES MANUEL	Tercera	48
2248682	MORALEJA LEON MARIA JOSE	Tercera	119
74630248	MORALES ESPEJO MARÍA DEL CARMEN	Tercera	232
19004005	MORCILLO AGRAMUNT MARÍA ELENA	Tercera	949
50828144	MORENO MARTIN SUSANA	Tercera	123
75708090	MORENO MORENO RAQUEL	Tercera	108
31646093	MORENO BERNAL FRANCISCO	Tercera	175
26219285	MORENO BLANCO MARIA ADELA	Tercera	456
47710223	MORENO CHICO MARIA ELENA	Tercera	274
44051867	MORENO FERNÁNDEZ LIVIA MARÍA	Tercera	1056
24261605	MORENO MEDINA MARIA DE LOS ANGELES	Tercera	412
44271078	MORENO POVEDANO MARÍA JOSÉ	Tercera	762
53148106	MORENO RODRIGUEZ MARTA	Tercera	810
25431571	MORÓN ALIAGA ESPERANZA	Tercera	190
21481954	MOROTE ALBERT VÍCTOR MANUEL	Tercera	155
45634368	MOYA NOVES SONIA	Tercera	948
47053489	MUÑOZ AGUILAR MONTSERRAT	Tercera	659
50185431	MUÑOZ GUTIÉRREZ OLGA MARÍA	Tercera	959
6927264	MUÑOZ LOPEZ FERNANDO	Tercera	28
28968948	MURIEL PLAZA MARIA	Tercera	305
25471932	MURILLO EDO MARTA CARMEN	Tercera	138
4182130	MURILLO ROSADO RAQUEL	Tercera	966
37287025	NARANJO MILLÁN ANA MARÍA	Tercera	144
22581459	NAVALON SANZ PAULA ROSA	Tercera	400
43412701	NAVARRO BAYO ADORACION	Tercera	717
25185526	NAVARRO FERNÁNDEZ JORGE	Tercera	612
35441124	NAVARRO GÓMEZ ANA MARÍA	Tercera	475
52202076	NAVARRO ROBLES ANTONIO	Tercera	238
25437950	NAVARRO SIMÓN EVA MARÍA	Tercera	507
50440010	NAVAS ARROYO FERNANDO	Tercera	94
23033029	NAVAS GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO	Tercera	603
76624273	NAVAZA RIGUEIRA PATRICIA	Tercera	315
50751718	NEGROTTI FERNÁNDEZ IGNACIO ALBERTO	Tercera	625
16592133	NEGUERUELA LEDESMA PAULA	Tercera	419
5889161	NEVADO ROMERO BIENVENIDO	Tercera	38
5916930	NEVADO TORRES SOLEDAD	Tercera	110
13757053	NIETO AMIANO MARÍA MONTSERRAT	Tercera	503

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
34748521	NO GARCÍA MÓNICA	Tercera	523
20020582	NOCEDA BERMEJO RAQUEL	Tercera	700
28672172	NOGALES PÉREZ FRANCISCA	Tercera	191
33916412	NOGUEIRA GÓMEZ MILAGROS	Tercera	744
73198521	NOGUERO CORONA ANA BELÉN	Tercera	955
44455645	NOVO FERNÁNDEZ SINESIO	Tercera	1103
33306035	NUÑEZ ABELEDO MARIA JOSE	Tercera	78
72975795	NUÑEZ CELMA ANDRES	Tercera	828
76620510	NUÑEZ FERNANDEZ PABLO	Tercera	884
45483782	NUÑEZ PUERTA ESTIBALIZ	Tercera	458
46234954	NUÑEZ-CACHO SOLANS ALFONSO	Tercera	742
25172839	OBÓN DÍAZ ALBERTO	Tercera	176
28703298	OJEDA SÁNCHEZ MARÍA JOSÉ	Tercera	512
28900764	OJEDA SÁNCHEZ FRANCISCO CESAR	Tercera	141
47054600	OLMEDILLA GÓMEZ MARÍA ELENA	Tercera	683
45564618	OLTRA HERNÁNDEZ NOELIA	Tercera	550
17451358	ORDOVAS GARCÍA TAMARA	Tercera	1028
5424480	ORERO ALBENIZ ANA BELEN	Tercera	434
52206679	ORGE FERNÁNDEZ MARÍA ISABEL	Tercera	525
52206680	ORGE FERNÁNDEZ MONTSERRAT	Tercera	769
72996589	OROS MARTÍN MIGUEL	Tercera	1041
79307339	OROZCO PANIAGUA MIGUEL ANGEL	Tercera	463
6228394	ORTEGA VILLAREJO SANTIAGO JESUS	Tercera	9
23044216	ORTEGA ALMIRÓN MARÍA DEL CARMEN	Tercera	1001
30485789	ORTEGA JAEN ANTONIO	Tercera	753
51630597	ORTEGA LÓPEZ-REY ROSA ANA	Tercera	965
71268136	ORTEGA MARTÍNEZ JAVIER	Tercera	639
45598207	ORTEGA OLLER FLOR MARÍA	Tercera	629
27464817	ORTIZ MARTÍNEZ MARÍA ALODIA	Tercera	477
50068610	ORTIZ CRUZ FRANCISCA	Tercera	145
42977646	ORTIZ LEÓN FRANCISCO	Tercera	911
50874489	ORTIZ PLAZA IRENE	Tercera	602
74688142	ORTIZ SUAREZ EVA	Tercera	563
13119080	ORTIZ VILLAMOR CESAR	Tercera	754
24198306	ORZAEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL	Tercera	101
48509597	OSETE VILLALBA MIRIAM	Tercera	650
44432124	OSORIO GUERRERO RODRIGO	Tercera	423
31338235	OSORIO TENORIO ROSALÍA	Tercera	499
26975656	OSUNA MANJÓN-CABEZAS MARÍA JOSÉ	Tercera	1036
25153612	OVELLEIRO MEDINA MARTA	Tercera	544
12318963	OYAGÜE HERNÁNDEZ ENRIQUE	Tercera	483
25993404	PADILLA RODRIGUEZ MANUEL	Tercera	44
43772757	PADRON MORALES MARIA JESUS	Tercera	846
71939271	PAJARES SERNA BEATRIZ	Tercera	465
75668554	PALACIOS MUÑOZ FRANCISCO	Tercera	24
48480468	PALACIOS CALVO FRANCISCO JAVIER	Tercera	532
34828735	PALLARES MARTINEZ LETICIA	Tercera	288
77916210	PALOMER BOU MONTSERRAT	Tercera	320
46846689	PANIAGUA ACERA SARAI	Tercera	428

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
44837653	PARAJO MARTINEZ MARIA ISABEL	Tercera	805
28971352	PAREDES SIMON EDUARDO	Tercera	845
70055946	PAREJA SANZ JOSÉ JULIO	Tercera	1040
38508891	PARRA BUENO NURIA	Tercera	187
14614204	PARRA MARTINEZ LUCIA	Tercera	832
4604698	PARRA RUIZ IVÁN	Tercera	671
51914824	PASCUAL BOTE MARÍA ÁNGELES	Tercera	1089
9276265	PASCUAL CALDERÓN JOSÉ ANTONIO	Tercera	778
52446994	PASCUAL CARRA MARÍA PILAR	Tercera	945
4195427	PASCUAL HERNANDO MARIA BELEN	Tercera	407
32669089	PATIÑO JUNQUERA MARIA DE LA CONCEPCION	Tercera	836
36125108	PAZO ESTEVEZ MARIA ELISA	Tercera	474
39454197	PAZOS GÓMEZ ANA MARÍA	Tercera	979
77071218	PEDRO SANZ MARIA DEL CARMEN DE	Tercera	47
2537244	PEDRO ORTEGA SILVIA DE	Tercera	996
40336503	PELAO MARCOS DANIEL	Tercera	469
25463936	PELET LAGRABA MIRIAM	Tercera	410
38450508	PELLICERO RAMIRO FRANCISCA	Tercera	484
7234480	PELLITERO BLANCO JOSE ALBERTO	Tercera	86
33281382	PENA SANCHIÑO MARÍA BELÉN	Tercera	533
72123228	PEÑA PEREZ MARINA DE LA	Tercera	51
80070921	PEÑA FERNANDEZ MARIA GABRIELA	Tercera	878
53047653	PEÑA NUÑEZ DAVID	Tercera	453
52401526	PEÑACOBIA PÉREZ MARÍA JOSÉ	Tercera	189
21661404	PERALES CERDÁ MARÍA DOLORES	Tercera	927
44586898	PERALTA DELGADO SARA MARIA	Tercera	440
39453940	PEREIRA ALVAREZ BELEN	Tercera	820
25147083	PÉREZ ARNAL MARIA PILAR	Tercera	4
10837674	PÉREZ GONZALEZ ANA ROSA	Tercera	59
24238903	PÉREZ IZQUIERDO ENCARNACION	Tercera	3
42186915	PÉREZ RIVEROL CRISTO JONAY	Tercera	703
27525506	PÉREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	Tercera	32
50098584	PÉREZ SANCHEZ CRISTINA	Tercera	92
29012370	PÉREZ VERGARA SANTIAGO	Tercera	99
8946688	PÉREZ ABAD MARIA TERESA	Tercera	381
23791181	PÉREZ AGUILERA FRANCISCA MARÍA	Tercera	538
32823029	PÉREZ BECERRA BERTA MARIA	Tercera	804
44796407	PÉREZ CONESA MARÍA AMPARO	Tercera	628
25681339	PÉREZ FRANCO ESTELA MARÍA	Tercera	1029
33929202	PÉREZ GALLARDO JUAN JOSÉ	Tercera	734
48428740	PÉREZ GALVEZ MARIA JESUS	Tercera	355
3086139	PÉREZ GARCÍA EMILIANA	Tercera	1094
48813198	PÉREZ GONZALEZ SUSANA	Tercera	889
2908939	PÉREZ HERNANDO MARÍA	Tercera	743
28628138	PÉREZ MARTÍN MARÍA TERESA	Tercera	684
46404582	PÉREZ MARTÍNEZ BEATRIZ	Tercera	547
74647933	PÉREZ MARTÍNEZ DAVID	Tercera	918
47500964	PÉREZ MONTAÑO MARÍA CARMEN	Tercera	1035
24278493	PÉREZ NUÑEZ BEGOÑA	Tercera	426

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
74923567	PÉREZ ORELLANA CATALINA MARÍA	Tercera	998
9410733	PÉREZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	Tercera	598
48520856	PÉREZ VALLEJO CRISTINA DEL PINO	Tercera	990
2912286	PÉREZ-NAVARRO ROMERO ADELAIDA	Tercera	256
44867629	PERIS LLORIS MARÍA ISABEL	Tercera	975
33487353	PERTUSA GUILLÉN MÁXIMO JOSÉ	Tercera	1043
53018850	PINEL SAEZ CONCEPCIÓN	Tercera	1106
9797524	PIÑÁN DIEZ AMAYA	Tercera	638
10897021	PIÑÁN SUAREZ SERGIO	Tercera	327
35078519	PLAZA JUST ALBERTO	Tercera	956
46144620	PONCES LISON CARLOTA	Tercera	579
78686342	PONTIVEROS GARCÍA EVA MARÍA	Tercera	1050
50204568	PORRAS BRAVO ADOLFO	Tercera	1119
13936780	POSTIGO GUTIÉRREZ ANA	Tercera	555
5417347	POUSA BLASCO CRISTINA REMEDIOS	Tercera	125
48612794	POZO ALEMÁN CRISTINA	Tercera	971
20436212	PRIETO BERROCAL NIEVES	Tercera	534
76710290	PRIETO RASCADO MARÍA DOLORES	Tercera	653
24338045	PUCHADES VILA FERRAN	Tercera	727
12777111	PUEBLA SOTO CARMEN ROSA	Tercera	1024
42865170	PUENTE ARRATE MARÍA LUISA DE LA	Tercera	241
24352658	PUERTO ROVIRA ESTER	Tercera	1072
25416330	PUIG GOMEZ FERNANDO	Tercera	399
47787867	PUIGPINOS ROVIRA ANNA	Tercera	1115
10587424	PULIDO DOMÍNGUEZ INMACULADA	Tercera	916
25711044	QUESADA FERNÁNDEZ MARÍA ISABEL	Tercera	634
71340383	QUINTANILLA GARCIA MARIA TERESA	Tercera	378
32880776	QUINTAS ALVAREZ JAVIER	Tercera	83
32880775	QUINTAS ALVAREZ MARIA ANGELES	Tercera	88
38092552	RAFI ROIG FRANCESC XAVIER	Tercera	485
72965431	RALLO ANDREU JUAN PEDRO	Tercera	183
45594961	RAMIREZ TOVAR MARÍA ISABEL	Tercera	106
46928292	RAMÍREZ MONTALVO IGNACIO	Tercera	623
12399460	RAMOS BLAZQUEZ ALFREDO	Tercera	128
44082322	RAMOS DEVESA MARÍA	Tercera	1008
16286435	RAMOS RENDO MIRIAM	Tercera	461
45683187	RAMOS VERDUGO MARIA ELENA	Tercera	841
9424759	RAPOSO FERNANDEZ PATRICIA	Tercera	353
7963634	REBOLLO SANZ EDUARDO JOSÉ	Tercera	1108
44431152	REDONDO VERDIAL MARIA ENCINA	Tercera	81
46699424	REDONDO CABANAS MARÍA CRUZ	Tercera	231
77595248	REIGOSA RIVAS MARÍA PILAR	Tercera	554
36115789	REPRESA GARAZO MARIA LUISA	Tercera	121
22005896	REQUENA PLEGUEZUELOS MARGARITA	Tercera	518
20198871	REVILLA RESTEGUI MARIA ANGELES	Tercera	282
44310806	REYES ALMEIDA AGUEDA JESÚS	Tercera	1128
44758241	RIBELLES GONZALEZ GABRIEL	Tercera	402
7564193	RICO VILLENA ROSARIO	Tercera	944
52181806	RINCÓN LABRADOR MARÍA ISABEL	Tercera	508

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
76637344	RIOS FERNÁNDEZ LAURA	Tercera	969
46141490	RIPOLL ROS ALEJANDRA ELENA	Tercera	313
48961336	RIVAS IGLESIAS MARIA AURORA	Tercera	356
74656101	RIVERA MIÑAN CAROLINA	Tercera	1037
26006860	ROBLES GOMEZ MARIA GRACIA	Tercera	42
44905533	ROBLES AREÑOS MARÍA MERCEDES	Tercera	633
45743316	RODRIGO GARCÍA MARÍA ELENA	Tercera	977
7969457	RODRIGUEZ GARCIA MARIA SOLEDAD	Tercera	798
11819887	RODRIGUEZ GARCIA RAQUEL	Tercera	26
25477871	RODRIGUEZ CAJAL JULIAN	Tercera	436
35102535	RODRÍGUEZ DÍAZ SONIA	Tercera	1075
10889719	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ROSA	Tercera	372
71504828	RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSANA	Tercera	379
34989940	RODRIGUEZ FERRO MARIA JOSE	Tercera	856
76813950	RODRÍGUEZ JACOME JOSÉ LUIS	Tercera	794
14318856	RODRÍGUEZ LIZANA INMACULADA	Tercera	1009
50445815	RODRÍGUEZ MELLADO ÓSCAR	Tercera	211
51372782	RODRÍGUEZ NUÑO JOSÉ ALFREDO	Tercera	745
36145852	RODRÍGUEZ SENDON VICTOR	Tercera	687
46899688	RODRÍGUEZ SEOANE EMMA	Tercera	704
25067834	RODRÍGUEZ VÍBORA JUANA ARACELI	Tercera	174
8796765	RODRÍGUEZ ZAMORA LUIS CARLOS	Tercera	715
53540750	RODRIGUEZ-SORIA PEREZ CARMEN	Tercera	331
73567007	ROIG SAPIÑA MARÍA JOSÉ	Tercera	702
44360289	ROJANO SEPÚLVEDA MARÍA DE LA CRUZ	Tercera	992
33464851	ROJAS ROSELLO IRENE	Tercera	415
46660707	ROJO MORAGAS MONTSERRAT MARTA	Tercera	770
52311714	ROLDÁN LÓPEZ ENRIQUE	Tercera	171
7536519	ROLLÁN GALINDO PATRICIA REBECA	Tercera	567
4589352	ROMAN ALCARAZ MARIA JOSE	Tercera	35
45101859	ROMÁN BERNET MARÍA JESÚS	Tercera	705
48480088	ROMAN GARCIA ELENA	Tercera	439
52452613	ROMÁN VIDARTE MARÍA IRIA	Tercera	981
4159908	ROMERAL GIL JULIO	Tercera	253
80050454	ROMERO GIL MARIA JESUS	Tercera	96
31717837	ROMERO BARRERA NOELIA	Tercera	802
14625132	ROMERO CASTILLO BEATRIZ	Tercera	266
75764327	ROSA LERIA BEATRIZ	Tercera	574
37329238	ROSADO HIDALGO INÉS	Tercera	736
39714570	ROSELLÓ ALFONSO LAURA	Tercera	586
7450242	RUANO SÁNCHEZ MARÍA GEMA	Tercera	923
13166780	RUBIO DOMINGO CRISTINA	Tercera	139
1930295	RUBIO SAIZ JOSÉ IGNACIO	Tercera	540
76868929	RUBIO SEÑORAN FRANCISCO JAVIER	Tercera	600
2194980	RUESCAS BLANCO MARÍA VIRGINIA OLGA	Tercera	713
4166237	RUFO LLORENS CÉSAR	Tercera	900
29788291	RUIZ HERNANDEZ CINTA	Tercera	79
52384664	RUIZ RUIZ NURIA	Tercera	90
74365600	RUIZ BERNAL MARÍA	Tercera	1023

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
33448865	RUIZ DE LA CUESTA MUÑOZ MARIA ANGELES	Tercera	127
46890432	RUIZ DE LA HERMOSA GUTIERREZ JOSE ANTONIO	Tercera	862
2548336	RUIZ FERRER BELÉN	Tercera	178
2548337	RUIZ FERRER MARÍA JOSÉ	Tercera	541
9202425	RUIZ GÓMEZ JOSÉ ALBERTO	Tercera	1006
48649564	RUIZ MARÍN MARÍA AMPARO	Tercera	989
52860678	RUIZ MARTÍNEZ DANIEL	Tercera	774
38067898	RUIZ MORILLAS AGUSTÍN	Tercera	751
52388842	RUIZ OCTAVIO BIENVENIDO	Tercera	661
44584595	RUIZ PADILLA MARÍA DEL MAR	Tercera	597
25157325	RUIZ PRADO FRANCISCO JAVIER	Tercera	179
4589698	RUIZ RUIZ LUIS	Tercera	535
14603559	SABAS SOLOGUESTOA SERGIO	Tercera	920
20442558	SABATER VENTURA NEUS	Tercera	973
25055148	SAENZ ABUJETA SALVADOR	Tercera	215
74894392	SAENZ MOREJON ANTONIO	Tercera	863
5371767	SAEZ FIGUEROA PURIFICACIÓN	Tercera	207
48357435	SAGARRIBAY ESTEVE OLAYA	Tercera	818
9762241	SAINT-MARC GUTIÉRREZ JAVIER	Tercera	236
52368694	SAIZ MARTIN ARANZAZU	Tercera	891
33479303	SALAR ANDREU ANTONIO RAMÓN	Tercera	216
29187918	SALEH CONTELL FADUA	Tercera	693
30808257	SALIDO RODRIGUEZ MARIA ROSARIO	Tercera	446
48400540	SALMERÓN MARTÍNEZ ANA	Tercera	581
48312488	SALVADOR PECHUAN PATRICIA MARÍA	Tercera	568
74641695	SAMANIEGO SANCHEZ NATALIA	Tercera	40
48489719	SAMPER ORGILES JAVIER	Tercera	569
26011643	SAN JOSE BARRANCO JUAN ALBERTO	Tercera	131
28954169	SAN MARTÍN JIMÉNEZ LAURA MARÍA	Tercera	663
35014232	SANABRA GAFAROT JUAN	Tercera	901
29109501	SANCHEZ BENITO FRANCISCO JAVIER	Tercera	615
7829230	SANCHEZ CARABIAS MIGUEL ANGEL	Tercera	65
2541585	SANCHEZ CASTRO MANUEL ALEJANDRO	Tercera	115
70869973	SÁNCHEZ DEL RIO NOELIA	Tercera	575
8927006	SANCHEZ MARTIN ISABEL MARIA	Tercera	31
48393005	SANCHEZ MARTINEZ ALBERTO JUAN	Tercera	130
26465230	SANCHEZ PEÑA ELENA CARMEN	Tercera	76
12327038	SÁNCHEZ ARENAS MARÍA MONTSERRAT	Tercera	711
70867978	SÁNCHEZ ÁVILA ANTONIO MARÍA	Tercera	688
50042209	SÁNCHEZ BRIZUELA MARÍA JOSÉ	Tercera	1083
29490785	SÁNCHEZ CASCAJO ROCIO	Tercera	606
53260676	SÁNCHEZ DURÁN GUADALUPE	Tercera	970
2916323	SANCHEZ ENTERO VERONICA	Tercera	430
73261208	SANCHEZ FANLO SORAYA	Tercera	562
75747916	SANCHEZ FERRER MARIA JESUS	Tercera	459
26037328	SANCHEZ GARCIA BLANCA SOFIA	Tercera	303
46818997	SÁNCHEZ GARCÍA MIGUEL	Tercera	954
23256375	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA	Tercera	321
74223603	SÁNCHEZ JUAN FÁTIMA	Tercera	613

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
74661765	SANCHEZ LUCENA ROBERTO	Tercera	316
53103693	SÁNCHEZ MARTÍNEZ ANGEL LUIS	Tercera	784
25428265	SÁNCHEZ ORDOVAS JOAQUÍN CARLOS	Tercera	765
2221358	SÁNCHEZ RAMOS Mª SANTÍSIMA TRINIDAD	Tercera	182
72129293	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MARÍA MATILDE	Tercera	552
71129819	SÁNCHEZ RONCERO SILVIA MARÍA	Tercera	1105
44297375	SÁNCHEZ SÁNCHEZ BELÉN	Tercera	660
51404463	SÁNCHEZ SÁNCHEZ EMMA	Tercera	551
5423310	SÁNCHEZ SÁNCHEZ SILVIA	Tercera	162
828981	SANCHO SAMA PALOMA	Tercera	487
25692804	SANCHO ALONSO JESÚS	Tercera	1052
25443939	SANCHO MARCEN MIGUEL ÁNGEL	Tercera	520
29120975	SANCHO OLIETE ANA AURELIA	Tercera	545
36975220	SANDALINAS ADELANTADO FRANCISCO JAVIER	Tercera	181
24391120	SANJUAN FERRER PALOMA	Tercera	1005
70980101	SANMARTIN BENITO MARIA LUISA	Tercera	34
13303595	SANTAMARÍA ABARZUZA EDUARDO	Tercera	204
51400251	SANTAMARÍA FRAILE ALEJANDRO	Tercera	967
13142661	SANTAMARÍA GUTIÉRREZ MÓNICA	Tercera	250
71632295	SANTAMARTA VALBUENA VERÓNICA	Tercera	591
32838801	SANTISO VAZQUEZ FERNANDO	Tercera	385
12400075	SANTOS RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN	Tercera	584
3870440	SANTOS-GARCÍA GARCÍA RAUL	Tercera	780
29171372	SANZ GORDON JOSE VICTOR	Tercera	482
7248395	SANZ VALDES SUSANA	Tercera	75
29193272	SANZ BATICÓN MARÍA	Tercera	635
39693964	SARACIBAR FELIP MARÍA ELENA	Tercera	226
3106839	SARDINA CALLEJO CELIA	Tercera	842
15366288	SARO JAUREGUI FRANCISCO	Tercera	852
78975799	SARRIA RODRIGUEZ ELISA DEL CARMEN	Tercera	851
1822745	SAS MARTÍNEZ VICTOR MANUEL	Tercera	486
12386420	SEBASTIAN MAGDALENO MARIA NOELIA	Tercera	80
25156799	SEBASTIÁN BARRADO MARÍA TERESA	Tercera	766
9432920	SECADES RIESTRA CRISTINA	Tercera	318
29184671	SEGOVIA ALBARAÑEZ MARIA JOSE	Tercera	329
52687686	SEGOVIA CALVO JUAN RAMON	Tercera	833
29176480	SENDRA VERGAZ OLGA	Tercera	345
4594984	SENIS FERNÁNDEZ ANTONIO	Tercera	1113
3886167	SEPULVEDA MONTEALEGRE VIRGINIA	Tercera	387
28928253	SERNA RAMOS ELISA	Tercera	54
46641515	SERRANO CÁRDENAS MARÍA DEL CARMEN	Tercera	921
38449546	SERRANO RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO	Tercera	513
36513990	SERRATS PALAU JUAN	Tercera	158
9334707	SETIEN REDONDO MARIA SONIA	Tercera	388
8868354	SEVILLA SILVA LOURDES	Tercera	641
29119999	SIERRA BANDRES MARIA EUGENIA	Tercera	376
6585073	SIGÜENZA GONZÁLEZ FERNANDO	Tercera	631
44350851	SILES MONSERRAT CARMEN MARIA	Tercera	43
46793740	SIOTA PEREZ RAQUEL	Tercera	338

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
52986537	SOLA SEBASTIAN MARIA PENELOPE	Tercera	98
33959982	SOLA AGUILAR ANNA	Tercera	642
24216024	SOLA ESTÉVEZ INMACULADA	Tercera	763
50205788	SOLETO CURIEL RAQUEL	Tercera	304
8031489	SOMOZA HERNANDEZ MARIA ESTHER	Tercera	425
7223661	SORIA SAEZ MARÍA LUISA	Tercera	1067
50806908	SOTO CASANOVA MARÍA MERCEDES	Tercera	928
42064687	SOTO FERNÁNDEZ AIDA MARÍA	Tercera	504
53155732	SOTO PRADOS REMEDIOS	Tercera	857
71012732	SUAÑA GONZÁLEZ REBECA	Tercera	561
2647631	SUAREZ DE SOUSA CANDELAS	Tercera	974
71550659	SUAREZ GARCIA GERARDO	Tercera	454
76947630	SUÁREZ IGLESIAS DAMASO	Tercera	537
24194816	SUÁREZ MEDINA AMPARO	Tercera	167
52600424	SUBIRATS ALEIXANDRI MARIA CINTA	Tercera	677
43434244	TEJERO BLANCO MARÍA TERESA	Tercera	221
7004010	TELLEZ GARCÍA VICTORIANO ELEUTERIO	Tercera	491
8668182	TENA RUBIO MANUEL DE	Tercera	66
45084525	TERRIZA ALONSO MARIA CRUZ	Tercera	389
33929772	TERROBA GAGO JULIAN	Tercera	1081
53138381	TOFIÑO PADRINO ALEJANDRO	Tercera	235
78541282	TOLEDO RAMÍREZ ERIKA	Tercera	681
74867747	TOMASELLI ROJAS ANGEL LUIS	Tercera	864
11725407	TOMÉ TAMAME JOSÉ CARLOS	Tercera	902
2889407	TORIBIO LOPEZ MONICA	Tercera	36
11947159	TORIBIO VIÑUELA ROSA MARÍA	Tercera	210
48487052	TORMO MOLINA ALFONSO	Tercera	595
36160468	TORRAS BOBILLO MARIA DE LOS ANGELES	Tercera	348
24255007	TORRECILLAS VIDAL ENRIQUETA	Tercera	37
39870510	TORRELL MASSÓ MÓNICA	Tercera	908
30942999	TORRES GARCIA JESUS MARIA	Tercera	107
20813527	TORRES PERIS OLGA	Tercera	1013
52779427	TORRES SUAREZ LAURA	Tercera	129
77603632	TORTOSA SÁNCHEZ LUIS JOSÉ	Tercera	1117
3120069	TRIJUEQUE SERRANO DAVID	Tercera	117
71649078	TUERO PIÑEIRO ISABEL	Tercera	883
72883064	UBIERNA CORTES LUIS ALBERTO	Tercera	466
7954921	ULLAN SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	Tercera	16
33250326	VAAMONDE FERNANDEZ JOSE MANUEL	Tercera	100
71120839	VAL ZURITA ALFONSO	Tercera	1076
3095867	VALDEHITA GARCÍA JUAN JOSÉ	Tercera	941
47071604	VALDELVIRA GARCÍA MIRIAM	Tercera	1060
31239499	VALENCIA SALINAS MARIA ELENA	Tercera	53
26969852	VALENZUELA ESCUDERO GABRIELA PURIFICACION	Tercera	291
24767419	VALERO SANCHEZ CARMEN	Tercera	103
46573813	VALERO MARÍN SONIA	Tercera	728
73572800	VALERO MORANT DUNIA MARIA	Tercera	858
20173652	VALES IGLESIAS MARIA ROSA	Tercera	278
76120979	VALLE BODEGUERO ANA MARÍA	Tercera	620

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
37733523	VALLS SORIANO JOSÉ MARÍA	Tercera	172
24252047	VAQUERO ORTIZ MARÍA CRISTINA	Tercera	553
70802799	VARAS GARCÍA CAROLINA	Tercera	601
76411619	VARELA GARROTE PAULA	Tercera	324
71284115	VARGA ANDRES TOMAS	Tercera	854
34626873	VAZQUEZ ABADES MARIA TERESA	Tercera	449
44479124	VÁZQUEZ ÁLVAREZ PATRICIA	Tercera	1017
5410507	VÁZQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA TERESA	Tercera	792
34899936	VAZQUEZ SOTO ANTONIO	Tercera	289
29757790	VEGA MARTIN TOMAS DE	Tercera	52
76718888	VEGA DE LAS HERAS DAMIAN	Tercera	961
12766467	VEGA DEL DIEGO MARIA IVANA	Tercera	396
74831018	VEGA GARCÍA FRANCISCA	Tercera	1051
74831019	VEGA GARCÍA MARÍA JOSÉ	Tercera	630
74842816	VEGA GOMEZ RUTH GEORGINA	Tercera	277
46848305	VELA PEREZ JOSE	Tercera	307
32676202	VELANDO CAINZOS MARIA SOL	Tercera	871
33923645	VELASCO GARCÍA-PLATA FRANCISCO	Tercera	217
12336178	VELASCO PADRONES FRANCISCO JOSE	Tercera	882
7862295	VELAZQUEZ TAVERA INES	Tercera	323
26035301	VERA LOPEZ MARIA BELEN	Tercera	261
78869808	VICENTE SILVA MARÍA TAMARA	Tercera	707
53425054	VICIANA DURO MARIA CARMEN	Tercera	383
44511146	VIDAL VILLAGRASA MARIA DEL MAR	Tercera	890
8779903	VIDAL-ARAGON DE LA FUENTE LUIS	Tercera	12
77740962	VILARDAGA HERMOSILLA QUERALT	Tercera	1112
12331961	VILLAESCUSA GARCIA ALFREDO	Tercera	815
3440709	VILLAGRAN MORIANA MARÍA JOSÉ	Tercera	492
25403874	VILLALBA MOLTO MARÍA CRISTINA	Tercera	720
48503905	VILLALGORDO CARCELES JOSE ANTONIO	Tercera	801
10184692	VILLALIBRE BERCIANO MARIA BEGOÑA	Tercera	2
50090019	VILLALTA SÁNCHEZ HELENA	Tercera	193
10880743	VILLANUEVA RODRIGUEZ MARTA	Tercera	70
44472492	VILLAR MENDEZ CRISTINA	Tercera	326
71437056	VILLAVERDE GARCIA SUSANA	Tercera	817
44353481	VILLEGAS NOVELLA ANA MARGARITA	Tercera	699
72791141	VILLOSLADA ANDRÉS MIRIAN	Tercera	665
39328169	VIÑALS ARGERICH INES	Tercera	498
35101639	VIÑAS TORMO PALOMA	Tercera	1100
30837369	VIZCARRO CEREZO AMELIA	Tercera	97
33459720	VIZCARRO CATALA SILVIA	Tercera	578
48966688	WARLETTA TIRADO MANUEL ÁNGEL	Tercera	590
33998899	YAÑEZ PENA JUAN JOSE	Tercera	813
692207	ZAFRA FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO	Tercera	938
76958803	ZANELLO QUINTANA SUSANA	Tercera	816

Índice alfabético. Tercera categoría.

DNI	Secretario	Categoría	Escalafón
72819155	ZAPATA VÁZQUEZ DE PRADA RAFAEL MIGUEL	Tercera	1010
2546574	ZAPATERO GARCÍA JULIA	Tercera	249
52535901	ZORNOZA ARANA EMILIO JOSE	Tercera	301
16274768	ZUBIZARRETA GARCÍA SILVIA	Tercera	188
45095454	ZURITA RUIZ EVA	Tercera	467

SECRETARIOS JUDICIALES EXCEDENTES

APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE	F. Nacimiento
ABAD	ORTIZ	PABLO PEDRO	22-02-67
ABADIA	PACHECO	TRINITARIO	13-12-49
ABADIA	VICENTE	MANUEL	13-09-45
AGRELA	ROMERO	LETICIA SILVIA	16-04-64
AGUILO	MONJO	MIGUEL ANGEL	09-02-56
AGUIRRE	COLONGUES	FRANCISCO JAVIER	23-11-52
AGUIRRE	ZUAZO	MARIA JOSE	18-03-62
ALBA	MENINILLAS	LUIS	20-01-58
ALBA	VEGA	MARCOS DE	11-12-44
ALBACAR	LOPEZ	PEDRO	08-08-46
ALBARRAN	MACHIN	CARLOS JAVIER	02-06-79
ALCAZAR	SANZ	ANGEL	26-04-46
ALEJANDRO	ARANZAMENDI	MARIA TERESA	08-03-64
ALESANCO	DEL POZO	ESTHER MARÍA	08-08-66
ALIAGA	CASANOVA	ALFONSO CARLOS	10-05-66
ALONSO	GARCÍA	PABLO JESÚS	28-10-78
ALVAREZ	SANCHEZ	JOSE IGNACIO	15-04-51
ÁLVAREZ	SÁNCHEZ	EVA	22-02-79
ÁLVAREZ	TORO	ANA VERÓNICA	01-04-82
ALVAZ	MENJIBAR	ISABEL MARÍA	23-06-57
AMO	SANCHEZ	JOSE MANUEL DEL	29-10-61
ANDINO	AXPE	LUIS FERNANDO	27-01-61
ANGOSTO	AGUDO	ROSA MARÍA	11-09-60
ANGUITA	JUEGA	LUIS	02-07-61
ANTON	ABAJO	ANTONIO	20-12-62
ARAGONES	GUARRO	MARIA DEL CARMEN	09-08-63
ARIAS-SALGADO	ROBSY	MARIA ELENA	12-03-56
ARMESTO	GONZALEZ	EVA	03-05-74
ARRANZ	FREIJO	MARIA LOURDES	22-07-55
ARTAZA	BILBAO	MARIA JOSEFA	07-11-51
ASTUDILLO	ALVARO	Mª FUENCISLA	17-05-63
BADAS	CEREZO	RICARDO	03-07-57
BAEZA	TRUJILLO	MARÍA DOLORES	26-09-63
BAHAMONDE	BLANCO	MIRIAM	18-05-79
BALIBREA	PEREZ	MARIA DOLORES	22-12-48
BARANGUA	VELAZ	JOSE IGNACIO	08-02-61
BARCONES	AGUSTIN	NURIA	10-09-67
BARRERA	COGOLLOS	JOSE	03-08-48

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
BARRUTIA	SOLIBERDI	MARIA BEGOÑA	12-11-64
BAULUZ	SABRAS	MARIA LUISA	10-06-58
BELA	RODRIGUEZ DE ZABALETA	MARIA PALOMA	06-09-62
BELLES	CENTELLES	MARIA DOLORES	14-08-65
BELLIDO	ASPAS	MANUEL	22-08-62
BELLIDO	SORIA	FRANCISCO	22-04-59
BENITEZ	BENITEZ	ANDRES	12-07-53
BENITO	ALONSO	FRANCISCO	21-03-54
BERMEJO	MONJE	FERNANDO	22-01-66
BERMUDEZ	AVILA	MARCOS FRANCISCO	07-02-67
BERNUES	MATEOS	EDUARDO JOSE	02-12-77
BLANCO	CAMPAÑA	JESUS	17-11-45
BLANCO	LEIRA	MARCOS ANTONIO	10-12-53
BLANCO	PAÑOS	ENRIQUE MARCIANO	22-11-58
BLANCO	PEÑALVER	AURELIO	07-02-54
BODEGA	DEL VAL	ANDRES	10-11-67
BORNACHEA	MORLANS	ELENA	08-05-52
BORREGO	BORREGO	FRANCISCO JAVIER	21-09-49
BORREL	MESTRE	JOAQUIN	21-09-45
BOSCH	SALAS	FRANCISCO	29-03-50
BOTA	CRESPI	MIGUEL	10-03-55
BRAÑAS	SANTAMARIA	DAMASO MANUEL	13-03-45
BREÑOSA	ALVAREZ DE MIRANDA	FERNANDO	09-08-53
BRU	AZUAR	FRANCISCA	03-07-65
BUENO	CABANILLAS	VALENTIN	22-01-57
BURGOS	HERRERA	ELENA	01-06-63
CABO	CABELLO	MARIA JESÚS	02-01-60
CACERES	MENENDEZ	GONZALO	02-10-44
CALCERRADA	RINCÓN	AGUSTÍN	12-09-75
CALVE	MORTES	LUZ	23-10-79
CALVET	BOTELLA	JULIO	04-01-46
CALVO	IBARLUCEA	MILAGROS	15-08-47
CALVO	CALVO	MARÍA JOSÉ	22-12-75
CANO	MAILLO	PEDRO V.	01-02-49
CANTON	MARTIN	MARIA CONCEPCIÓN	17-09-56
CAÑADA	CLE	JOSE MARÍA	09-06-44
CAPILLA	BOLAÑOS	JOSE	26-07-51
CAPILLA	RUIZ-COELLO	JOSE MARÍA	07-12-46
CARABIAS	RACIA	ANGEL SALVADOR	16-05-48
CARBONA	ROSALEN	RAFAEL	28-11-53
CARDENAS	RUIZ-VALDEPEÑAS	ELENA	08-08-78

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
CÁRDENAS	LÓPEZ	JOSÉ MARÍA	20-12-75
CARIDE	IRANZO	JOSE LUIS	18-03-68
CARMONA	RUANO	MIGUEL	09-05-46
CARRANZA	CANTERA	FRANCISCO JAVIER	29-10-61
CARRASCO	ROMERO	JUAN PEDRO	27-11-59
CARRASCO	SAINZ	CECILIA	24-04-59
CARRETERO	SANCHEZ	AGUSTIN	03-06-64
CARRILLO	ALVAREZ	ARTURO ENRIQUE	02-02-57
CARRION	MATAMOROS	EDUARDO	15-07-59
CARROCCIA	MUÑOZ	ANA ISABEL	22-04-73
CASAJUANA	PALET	MARIA PIA	27-10-60
CASERO	LINARES	LUIS	26-11-59
CASSINELLO	GOMEZ-PARDO	INDALECIO	15-05-50
CASTELL	VALLDOSERA	LIDIA	21-04-46
CASTILLO	ÁVILA	ASCENSIÓN	17-10-77
CASTRO	ARAGON	JOSE	20-12-45
CASTRO	MOYA	ROSA	13-08-44
CEA	AYALA	BENEDICTO	25-04-48
CELEMIN	PORREO	JOSE MARÍA	10-09-53
CHAMORRO	GONZALEZ	MIGUEL ÁNGEL	22-01-67
CHAMORRO	RODRIGUEZ	JOSE LUIS	09-09-56
CHAMORRO	VALDES	JOSE ÁNGEL	11-04-57
CHASCO	PEREZ DE ARENAZA	ANGEL LUIS	15-03-47
CHAVARRI	IZU	MARIA JOSE	04-09-70
CHECA	LOPEZ	JOSEFA	22-03-54
CHULVI	MONTANER	JOSE RAMÓN	14-05-57
CIBEIRA	YEBRE-PIMENTEL	JULIO CESAR	06-08-47
CID	JIMENEZ	EUGENIO DEL	16-01-54
CIRAJAS	GONZÁLEZ	FERNANDO	10-06-68
CLEMENTE	LAZARO	FRANCISCO JAVIER	31-07-64
COBO	MEDINA	FRANCISCO	24-10-44
COLLADO	LUGO	ROSA DEL CARMEN	24-10-44
CONDE	GONZALEZ	INDALECIO	30-11-45
CORDOBA	GARCIA	JOSE ANTONIO	21-07-49
CRIADO	FERNANDEZ	JOSE ALEJANDRO	07-02-47
CRIADO DEL REY	TREMP	GONZALO	11-03-57
CRUZ	GOMEZ	SANTIAGO	26-02-48
CRUZ	MERA	FATIMA BLANCA DE LA	15-06-69
CRUZ	TORRES	EDUARDO	13-10-56
CUBERO	ROMERO	RICARDO J.	14-03-46
CUEVA	ALEU	MARIA AURORA DE LA	11-02-59

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
DE LA RUBIA	COMOS	LUIS	10-08-68
DE PEDRO	TOMÁS	ANGEL MANUEL	04-03-72
DEGAYON	ROJO	FELIX	25-10-59
DEL RIO	DE DIOS	LOURDES	20-11-60
DELGADO	CRUCES	JESUS SANTIAGO	25-07-52
DELGADO	HERNANDEZ	EDUARDO	15-11-45
DELGADO	RODRIGUEZ	FERNANDO	24-02-56
DIAZ	ALONSO	MARIA ELENA	13-04-56
DIAZ	ROLDAN	JOSE LUIS	01-11-56
DIEGO	DIAGO	MANUEL DANIEL	28-01-61
DIEZ	LIRIO	LUIS CARLOS	16-10-60
DOLADO	PEREZ	ANGEL	11-05-62
DOMINGO	HERRERO	FELIPE	28-01-51
DOMINGO	LOREN	VICTORIANO	27-06-45
DOMINGUEZ	BLASCO	MARIA YOLANDA	17-03-66
DOMINGUEZ	LEON	DIEGO	17-03-66
DOMINGUEZ	MORALES	PEDRO ANTONIO	13-05-47
DOMINGUEZ	SILVA	GREGORIO	11-04-72
DOMINGUEZ-BERRUETA	DE JUAN	JUAN DE LA CRUZ MIGUEL	16-06-47
DURAN	LEGUINA	ISABEL JOSEFA	16-02-61
ECHARRI	CASI	FERMIN JAVIER	20-06-59
EGUIA	BALTELLAS	JOSE MARIA	21-12-58
ELVIRA	ELVIRA	MARIA CRISTINA	30-01-66
EMBID	MARCO	VICTOR JOSE	05-12-53
ENRECH	LARREA	EDUARDO MARIA	19-07-61
ESAIN	MANRESA	JAIME	13-09-56
ESCOLANO	ENGUITA	MARIA SOLEDAD	29-02-56
ESCRIBANO	SILVA	MARIA LUISA	27-04-53
ESCUDERO	RUBIO	VICTOR MANUEL	17-03-68
ESPINOSA	LOZANO	JOSE	23-12-48
ESPINOSA	MERELO	ANTONIO JOSE	29-12-55
EXTREMEÑO	PLACER	CARMEN	03-09-59
EZPELETA	IRAIZOZ	MARIA BELATE	11-08-66
FARINOS	LACOMBA	MARIA JESUS	29-12-45
FELIZ	MARTINEZ	MIGUEL ANGEL	18-01-47
FERNANDEZ	ALVAREZ	FRANCISCO JAVIER	21-09-53
FERNANDEZ	CARAZO	JOSE MARIA	09-10-61
FERNANDEZ	CAVA	PAULINO	06-12-63
FERNANDEZ	CONDE	BLANCA	24-09-51
FERNANDEZ	DE LA VEGA SANZ	Mª TERESA	15-06-49
FERNANDEZ	ENTRALGO	JESUS	10-12-45

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
FERNANDEZ	FERNANDEZ	JUAN ALBERTO	30-01-59
FERNANDEZ	MONTALVO	RAFAEL	27-05-45
FERNANDEZ	NUÑEZ	ROSA MARIA	11-04-56
FERNANDEZ	PEREZ	MARTA MARIA	04-02-56
FERNANDEZ	PEREZ	NURIA	13-08-64
FERNÁNDEZ	GONZÁLEZ	TERESA DE JESUS	14-07-79
FERNÁNDEZ	IRIZAR	CARLOS JAVIER	12-11-81
FERNÁNDEZ	PAIZ	RAFAEL JOAQUIN	13-03-82
FERNANDEZ DE MARCOS	MORALES	MIGUEL ANGEL	22-01-60
FERNANDEZ DEL TORCO	ALONSO	JUAN MANUEL	17-07-50
FERNANDEZ-AMIGO	DE LA TORRE	JUAN IGNACIO	21-05-49
FERNANDEZ-LLEBREZ	CASTAÑO	SANTIAGO JUAN	11-11-63
FONCILLAS	SOPENA	RAMON	05-03-45
FONTAN	SILVA	JOSE IGNACIO	12-10-63
FONTSARE	GIL	ADELTO	14-09-55
FRUTOS	GOMEZ	MARIA DEL CARMEN	23-06-60
FRUTOS	PEREZ-SURIO	LAURA	15-08-79
FUENTES	CANDELAS	ANA MARIA	29-09-62
FUERTES	BERTOLIN	JESUS	26-03-56
GAITE	GONZALEZ	MARIA	07-07-80
GALÁN	PÉREZ	AMAYA	13-03-79
GALINDO	AYUDA	JOSE LUIS	17-02-54
GALLARDO	SANCHEZ	RAMON ANGEL	05-05-57
GALLEGO	CORCOLES	RICARDO	17-06-73
GALLEGO	OTERO	JULIO LUIS	02-05-54
GALVEZ	ACOSTA	BENITO	04-02-47
GAMAZO	CARRASCO	MARIA BELEN	25-12-64
GAMIZ	VALENCIA	MARIA CARMEN	25-03-60
GARCIA	BORO	BEGOÑA	03-09-63
GARCIA	DEL POZO	ILDEFONSO	05-11-47
GARCIA	GARCIA	JESUS	26-01-47
GARCIA	GARCIA	LUIS ARAN	15-05-65
GARCIA	LARRAGAN	MAGDALENA	23-08-55
GARCIA	LOPEZ	JUAN CARLOS	20-01-68
GARCIA	MEDINA	MARIA ANGELES	30-11-58
GARCIA	MENDAZA	JAUME	12-11-69
GARCIA	PEREZ	JUAN JACINTO	15-05-58
GARCIA	RODRIGUEZ	MANUEL HORACIO	07-10-56
GARCIA	SANTA	CECILIA SUSANA	27-10-60
GARCIA	TARIFA	JOSE	14-02-49
GARCÍA	SÁNCHEZ	MARÍA SANDRA	18-12-80

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
GARCÍA-GALBIS	SEVILLA	ANA ISABEL	01-10-80
GARGALLO	GINER	JESUS	02-12-53
GARNICA	MARTIN	JUAN FRANCISCO	22-08-56
GARRIDO	GONZALEZ	FAUSTO	22-06-47
GARRIDO	SANCHO	PEDRO LUIS	10-08-46
GAVIÑO	JIMENEZ	JULIO	14-06-77
GERICO	SOBREVELA	DAVID	09-02-68
GIL	MARTINEZ	ANTONIO	13-03-45
GIL	MEANA	LUISA	27-06-53
GINEL	PRETEL	ROSA MARIA	16-06-59
GOMEZ	ARIAS	JOSE ANTONIO	09-09-52
GOMEZ	DE TORRES	MARÍA JOSEFA	20-12-67
GOMEZ	DIAZ	MARIA GABRIELA	11-12-74
GOMEZ	FERRERA	JULIANA MERCEDES	17-11-53
GOMEZ	LOPEZ	EDUARDO	16-06-66
GOMEZ	LUCAS	MIGUEL ANGEL	10-12-44
GOMEZ	SANCHEZ	JESUS	06-08-69
GOMEZ	SANCHEZ	PEDRO MARÍA	27-05-56
GOMEZ	SANTOS	NICOLAS	10-12-61
GÓMEZ	SANTAMARÍA	ELENA	22-06-77
GOMEZ DE LIAÑO	BOTELLA	FRANCISCO JAVIER	02-08-48
GOMEZ DE LIAÑO	BOTELLA	MARIANO FERNANDO	28-02-47
GOMIS	MASQUE	MARIA DELS ANGELS	09-06-60
GONZALEZ	ARMENGOL	JOSE LUIS	28-02-61
GONZALEZ	BAYON	ELENA RAQUEL	14-05-54
GONZALEZ	CERRON	RICARDO FRANCISCO	15-05-56
GONZALEZ	DEL POZO	JUAN PABLO	08-12-54
GONZALEZ	ESTECHA	MARIA ESTIBALIZ	01-05-62
GONZALEZ	GONZALEZ	ALFONSO	23-03-60
GONZALEZ	MARTIN	JUAN JOSE	10-10-46
GONZALEZ	PASTOR	CARMEN PALOMA	21-03-54
GONZÁLEZ	ARÉVALO	ELENA MARIA	16-05-77
GRION	DOMINGUEZ	GERMAN	04-02-54
GUDÍN	RODRIGUEZ-MAGARIÑOS	FAUSTINO	08-06-68
GUERRA	GIMENO	ANTONIO	26-05-53
GUIARD	ABASCAL	MARIA DOLORES	15-10-62
GUILLEN	SORIA	JOSE MIGUEL	27-01-63
GULLON	RODRIGUEZ	JESUS	25-06-48
GUTIERREZ	HERNANDEZ	FRANCISCO JAVIER	18-06-65
GUTIERREZ	LUNA	MANUEL	01-04-49
HARO	MOYA	ANA ISABEL DE	11-07-78

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
HEDO	IDOIPE	JOSE LUIS	04-06-55
HERAS	CANTALAPIEDRA	SANTIAGO DE LAS	12-06-66
HERNANDEZ	CERDEIRA	BLANCA IRIS	09-05-74
HERNANDEZ	HERNANDEZ	JUANA MARÍA	26-06-60
HERNANDEZ	LAFUENTE	ELOY	11-02-54
HERNANDEZ	MORENO	JESUS MARÍA	16-02-58
HERNANDEZ	SANCHEZ	MARIA TERESA	26-01-65
HERNANDEZ	VERGARA	ANTONIO	16-02-62
HERRANDO	MILLAN	FRANCISCO	17-11-45
HERRANZ	SAURI	TOMAS	11-01-61
HERRERA	PUENTES	PEDRO JOAQUIN	18-11-64
HERRERO	DE	PADURA MIGUEL	14-11-47
HERRERO	MENDEZ	MARIANO	09-01-52
HERRERO	MONTES	GERARDO AMANDO	07-04-50
HIDALGO	BILBAO	MARGARITA	30-11-58
HIGUERA	GUIMERA	JUAN FELIPE	14-02-49
HOZ	DE LA ESCALERA	JAVIER DE LA	01-01-56
HUERTA	MANZANO	MARIA DEL CARMEN	24-06-59
HURTADO	YELO	JUAN JOSE	30-11-66
IGUACEL	PEREZ	ANA MARIA	02-08-65
ILUNDAIN	MINONDO	MARIA DEL MAR	12-12-60
INSUA	AYUSO	GABRIELA MARÍA	19-06-75
IRIARTE	MIGUEL	ROBERTO	15-02-56
IZQUIERDO	SALVATIERRA	JOSÉ MANUEL	16-04-71
IZUEL	GASTÓN	ALEJANDRO	05-05-78
JIMENEZ	ALARCON	MANUEL	29-07-60
JIMENEZ	JIMENEZ	ANA VICTORIA	23-05-54
JIMENEZ	JIMENEZ	MARIA MAGDALENA	20-04-63
JIMENEZ	LEON	RAMON	21-03-60
JIMENEZ	MARQUEZ	MARIA LUCIA	30-03-58
JIMÉNEZ	RODRÍGUEZ	NATALIA	19-06-78
JOU	MIRABENT	JAVIER	14-02-58
JOYA	GONZALEZ	PEDRO ANDRES	20-01-57
JUAN	VEIGAS	MARIA DE LOS ANGELES	01-05-64
JUANES	GARCIA	DAMIAN	03-02-57
JUANES	PECES	ANGEL	22-10-47
JURADO	LÓPEZ	JOSÉ RAMÓN	17-06-74
JUSTE	RIBES	RUTH	10-11-76
LA CHICA	JIMENEZ	MARÍA LETICIA	06-03-55
LABADO	SANTIAGO	VIRGILIO JOSE MARÍA	30-11-54
LABORDETA	DE LA CAL	ENRIQUE	24-04-57

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
LACAMBRA	MORARA	LUIS	20-01-49
LADRON	RODA	TEODORO	15-10-61
LAITA	GARCÍA-LUZÓN	ANA	19-02-80
LAMO	RUBIO	JAIME	30-01-60
LAVADO	ASENSIO	SOLEDAD	29-09-80
LAVADO	MOLINA	MANUEL	20-03-45
LAZARO	LAHUERTA	MARIA PILAR	23-09-63
LAZOS	ROBLES	ANTONIO	09-11-51
LEDESMA	GARCIA	MANUEL JESUS	01-01-45
LEON	FAJARDO	JUSTA MARÍA	21-10-48
LEON	SOLA	EMILIO	21-10-48
LEON	VELLOSILLO	MILAGROS	18-08-67
LERMA	DOMINGO	ENCARNACION	14-09-48
LEYVA	MUÑOZ	JOSE LUIS	05-01-68
LEZCANO	DEVESA	MARIA DEL CARMEN	04-10-48
LIAÑO	PEDREIRA	MARIA SAGRARIO	01-03-49
LIS	ESTEVEZ	RAFAEL IGNACIO FELIPE	26-05-47
LISBONA	LAGUNA	FERNANDO	23-07-61
LIVIAÑOS	MARTIN	MARIA CRISTINA	16-10-61
LLAMAS	DIAZ	MANUEL	14-07-68
LOPEZ	ASENSIO	MARIA DEL PILAR	02-07-45
LOPEZ	CAÑAS	ANA DOLORES	13-07-63
LOPEZ	FERNANDEZ	NOEMI	23-07-74
LOPEZ	GARCIA	JESUS	25-12-44
LOPEZ	GOMEZ	MARIA YOLANDA	05-04-66
LOPEZ	JIMENEZ	PEDRO JOSE	08-08-52
LOPEZ	MILLAN	ANTONIO	19-04-45
LOPEZ	SERRA	VICENTE	24-06-48
LOPEZ	TEBAR	ENRIQUE	02-08-66
LOPEZ DEL AMO	GONZALEZ	FERNANDO	02-12-53
LOPEZ NIETO	DE CASTRO	ANTONIO	05-08-60
LOPEZ-MATEOS	ORANTOS	ANA MARÍA	01-10-59
LORANCA	RUILOPEZ	ASUNCION	15-08-59
LORENTE	ALMINAÑA	JUAN LUIS	01-02-47
LORENTE	MARTINEZ	RAIMUNDA DE PEÑAFORT	25-07-52
LOSANDA	ALONSO	NAZARIO JOSE MARÍA	15-09-38
LOZANO	ALVAREZ	MARIA ANTONIA	24-11-46
LUELMO	MILLAN	MIGUEL ANGEL	23-05-47
MADRIGAL	GARCIA	CARMELO	29-07-55
MAESO	VENTUREIRA	AUGUSTO	31-08-58
MAGRANER	GIL	JESUS	01-01-62

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
MAJO	LLOPART	JOSE	24-07-45
MAMAN	BENCHIMOL	DAVIL YEHIEL	04-06-64
MANCHON	LLOPIS	ENRIQUE	08-01-84
MANZANO	MORENO	ERNESTO CARLOS	10-09-53
MARES	ROGER	FRANCISCO	06-05-57
MARINO	BENITO	MARIA CRISTINA	17-10-65
MARTEL	RIVERO	JUAN FRANCISCO	03-04-59
MARTI	VILACHE	ELISA	02-09-64
MARTIN	ALVAREZ	MARIA JOSE INES	21-04-55
MARTIN	DELGADO	ALEJANDRO	08-09-48
MARTIN	GARCIA	MARIA DEL PRADO	13-01-55
MARTIN	GIL	TOMAS	03-04-59
MARTIN	NAJERA	MARIA TERESA	08-11-56
MARTIN	SANCHEZ	ASCENSION	17-04-52
MARTIN	TAPIA	JOSE LUIS	10-11-44
MARTIN-BORREGON	GARCIA DE LA CHICA	JAVIER	29-07-61
MARTINEZ	ALMAZAN	JESUS	15-11-57
MARTINEZ	AYALA	MARIA LUISA	27-07-47
MARTINEZ	GOMEZ	JOSE PABLO	06-06-53
MARTINEZ	MORENO	JORGE	22-05-80
MARTINEZ	OCHOA	CELIA	13-05-51
MARTINEZ	PURAS	JESUS	09-09-66
MAURANDI	GUILLEN	NICOLAS ANTONIO	16-04-50
MEDINA	MARTÍN	NURIA MARIA DEL PRADO	20-05-74
MEJIA	RIVERA	ANTONIO CIRILO	18-03-63
MENAC	COMAS	JUAN RAMOS	11-09-61
MENDEZ	BURGUILLO	JOSE MARIA	28-05-52
MENDEZ	CANSECO	JOSE FELIX	27-08-54
MENÉNDEZ	VALDES	ELENA	13-11-72
MERCADO	ESPINOSA	MARIA ELENA	19-08-66
MERINO	REBOLLO	ALFONSO	15-01-79
MESA	GUTIERREZ	JOSE LUIS DE	17-12-45
MIGUEZ	POZA	FRANCISCO JAVIER	22-02-60
MIÑARRO	GARCI	JOSE	10-02-54
MIRANDA	CASTAÑON	ASCENSION	26-11-59
MIRANDA	FERNÁNDEZ	MARÍA	27-08-76
MOLINA	VILLALBA	ENRIQUE	14-07-49
MOLINA	VILLALBA	LUISA	02-11-50
MONCADA	ARIZA	JESUS IGNACIO	21-12-53
MONGE	BORDEJE	AMPARO BIENVENIDA	22-08-66
MONTABES	CORDOBA	ANTONIO	14-01-48

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
MONTALVAN	AVILES	ANDRES	16-10-46
MONTERO	FERNANDEZ	JOSE ANTONIO	01-04-58
MONTESINOS	PIDAL	MARIA INMACULADA	11-09-61
MONTIJANO	TORCAL	MARIA ANGELES	24-09-51
MORA	ALARCON	JOSE ANTONIO	10-09-57
MORA	MATEO	JOSE ENRIQUE	23-05-54
MORA	PULIDO	ELVIRA	17-10-77
MORAN	GONZALEZ	MANUEL	11-12-47
MORENO	CARDOSO	ALFONSO	12-08-47
MORENO	DIAZ	MARIA JOSE	14-08-65
MORENO	GÓMEZ	VIRGINIA	10-05-71
MORENO	LOPEZ	FRANCISCO	23-09-50
MORENO	ROMANCE	Mª DEL CARMEN CONCEPCION	23-10-58
MORILLAS	ALVA	MARIA LUZ	28-02-66
MOYANO	GARCIA	RICARDO	03-04-57
MULET	FERRAGUT	FRANCISCO JAVIER	13-03-51
MUÑIZ	TEJERINA	FERNANDO JAVIER	14-10-61
MUÑOZ	LOPEZ	FERNANDO	09-05-48
MURILLO	ROSADO	RAQUEL	17-11-69
NAVAJAS	ROJAS	CRISTOBAL	10-10-52
NAVARRETE	PASCUAL	FRANCISCO RAMON	10-10-52
NAVARRO	GARCIA	MONTSERRAT	03-12-57
NAVARRO	GUILLEN	JOSE AURELIO	18-04-57
NAVARRO	MORALES	JESUS	17-05-55
NAVARRO	ZULOAGA	MARIA FERNANDA	28-01-57
NEGRE	MOR	Mª ANGELES	01-10-62
NIETO	DOCIO	RAQUEL	23-02-76
NOGUERA	GUASTAVINO	ADELA	15-09-62
NUBO	CLAVEIRA	JOSEP	18-11-52
NUÑEZ	CORRAL	JOSE LUIS	17-08-62
NUÑO DE LA ROSA	AMORES	ANTONIO PASCUAL	10-02-47
OGANDO	DELGADO	MIGUEL ANGEL	04-07-56
OLARTE	MADERO	FRANCISCO	17-07-54
OLEA	GODOY	WENCESLAO	02-03-55
OLIVA	VAZQUEZ	ANTONIO MANUEL	19-08-56
OLMO	TORRES	ANGEL LUIS	03-05-54
ORTEGA	LEIVA	DIEGO	25-06-48
ORTEGA	LÓPEZ-REY	ROSA ANA	30-06-67
ORTEGA	UGENA	MARIA SOLEDAD	22-05-63
OTAMENDI	ZOZAYA	FERMIN	14-04-67
OTEROS	FERNANDEZ	MANUEL	17-07-59

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
PAINCEIRA	VAZQUEZ	MARIA CONSOLACIÓN	08-07-52
PALLARES	RODRIGUEZ	MIGUEL	25-01-64
PALLICER	MERCADAL	JOSE FRANCISCO	19-09-52
PALOMAR	LINARES	CARMEN	21-07-47
PALOMER	BOU	JORGE	22-06-65
PANADERO	CALZADA	MIRYAM LUDMILA	16-09-80
PANIAGUA	CUEVAS	IRENEO	06-12-45
PARADA	VAZQUEZ	JOSE IGNACIO	25-11-44
PARDILLO	HERNANDEZ	AGUSTIN	10-06-65
PARRAMON	BREGOLAT	MIGUEL ANGEL	16-01-60
PARRON	CAMBERO	MARIA JESUS	08-01-74
PASTOR	SANCHEZ	ANTONIO	01-12-66
PAVESIO	FERNANDEZ	JULIAN	12-06-49
PAZOS	PITA	MARGARITA ENCARNACION	15-01-67
PEDRO	TOMAS	ANGEL MANUEL DE	04-03-72
PELAEZ	RIUS	MARIA FATIMA	09-11-67
PELEGRIN	MARTINEZ DE PISO	MARIA PALOMA	09-11-63
PERAL	RODRIGUEZ	FERNANDO	19-09-53
PERAMATO	MARTIN	TERESA	12-11-62
PERELLO	DOMENECH	MARIA ISABEL	18-03-58
PERELLO	RIPOLL	MARIA DOLORES	07-07-50
PEREZ	ALVAREZ	MARIA LUISA	17-06-55
PEREZ	BARRIOS	MERCEDES	04-11-55
PEREZ	BARROSO	MANUEL	19-06-65
PEREZ	GARCIA	PEDRO ANTONIO	21-02-46
PEREZ	GIL DE LA SERNA	FERNANDO	05-09-69
PEREZ	GUIJO	MARIA DEL CARMEN	18-04-65
PEREZ	MARTIN	ANTONIO JAVIER	21-02-59
PEREZ	PENA	MARIA JOSE	20-01-50
PEREZ	SANCHEZ	MARIA DEL CARMEN	03-05-55
PEREZ	SERRA	VISITACION	23-11-51
PEREZ	TORMO	MARIA JOSE	26-10-53
PEREZ	FRUTOS	FULGENCIO	01-05-71
PICO	LORENZO	CELSA	13-02-52
PIELTAIN	CEGARRA	MARÍA	16-01-79
PIQUERAS	VALLS	JUAN	26-09-48
PIRFANO	LAGUNA	MARIA CRISTINA	27-09-67
PLAZA	GUTIERREZ	FAUSTO DE LA	20-12-56
PONCE	MARTINEZ	PABLO ANGEL	02-07-65
PORTALES	ALBEROLA	MARIA	28-12-78
POVES	ROJAS	MANUEL	01-07-46

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
POZO	LUENGOS	CESAR CARLOS DEL	27-05-48
PRIETO	BELLAS	ELADIO	07-01-69
PRIETO	FERNANDEZ	MARIA DEL CARMEN	17-07-56
PUYA	JIMENEZ	RAFAEL	24-03-47
QUECEDO	ARACIL	PABLO	09-11-48
QUINTANS	GARCIA	JACOBO	17-08-47
RABADAN	BUJALANCE	JOSE	27-04-45
RABADAN	TORRECILLA	MARTA BELEN	06-08-67
RAMIS	ALARIO	Mª CARMEN	17-09-68
RAMOS	LEAL	EDUARDO JESUS	08-04-60
RAMOS	MENDOZA	JUAN LUIS	10-02-64
RAMOS	SANTIAGO	SARA	10-10-78
RAMOS	VALVERDE	ANA MARÍA	15-03-76
RAZOLA	GARCIA	RICARDO	07-01-45
REDONDO	GRANADO	INES	21-01-65
REDONDO	HERMIDA	ALVARO GABRIEL	01-01-56
REINOSO	REINO	ANTONIO	14-12-45
REYES	MARTINEZ	RAQUEL HERMELA	05-06-65
RICO	RECONDO	MARIA LUZ	22-01-57
RIVERA	FERNANDEZ	JESUS	12-04-57
ROBLEDO	VILLAR	ANTONIO	26-03-64
RODRIGUEZ	ACHUTEGUI	EDMUNDO	02-05-63
RODRIGUEZ	ANDREU	MARTA	04-07-74
RODRIGUEZ	CABEZAS	CONCEPCION	04-10-65
RODRIGUEZ	CASTRO	JUSTO	01-11-55
RODRIGUEZ	FERNANDEZ	RICARDO	08-05-60
RODRIGUEZ	MARTIN	ALFONSO	15-04-45
RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	MARIA EUGENIA	22-11-69
RODRIGUEZ	SANZ	MARIA LUISA	12-08-64
RODRIGUEZ	VELASCO	BLANCA MARÍA	09-04-56
RODRÍGUEZ	CEPEDANO	MARÍA CRISTINA	15-07-71
RODRÍGUEZ	JURADO	FRANCISCA MARÍA	02-10-78
ROIG	BELLO	JAVIER	13-05-51
ROMAGUERA	GARCÍA	MACARENA	27-06-80
ROMERO	ACACIO	MARIA	21-10-47
ROMERO	HERRERO	HONORIO	30-10-49
ROYO	GARCIA	JOSE GUILLERMO	24-04-69
RUBIO	LLERGO	PILAR	08-11-78
RUBIO	MAYO	LINO	21-09-56
RUBIO	NAVARRO	CAROLINA	07-03-67
RUBIO	PEREZ	ANTONIO	12-09-46

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
RUEDA	DIAZ DE RABAGO	PABLO	26-07-65
RUIZ	GARCIA	CONCEPCION	21-09-65
RUIZ	GARCIA	CONCEPCION	21-09-65
RUIZ	LIDÓN	LARA REYES	02-01-79
RUIZ	PESINI	GUADALUPE	08-10-58
RUIZ	PONTONES	MANUEL	24-04-51
RUIZ	PONTONES	MARIA OFELIA	14-01-53
RUIZ DE VELASCO	LINARES	JOSE CARLOS	26-03-51
RUIZ-JARABO	QUEMADA	EMILIA	31-03-50
SAAVEDRA	RODRIGUEZ	PABLO	02-04-46
SAINZ DE CUETO	TORRES	VICTORIA	16-10-61
SALAS	DARROCHA	JOSEP TOMAS	19-08-61
SALVADOR	PALACIOS	TOMAS	05-04-59
SANCHEZ	CALDERON	MARIA NIEVES	07-10-64
SANCHEZ	GALANTE	JESUS	24-12-48
SANCHEZ	MARTIN	CARLOS	25-04-72
SANCHEZ	MELGAR	JULIAN ARTEMIO	19-09-55
SANCHEZ	MELGAR	MARIA BEGOÑA	29-09-58
SANCHEZ	PARELLADA	JORGE	07-12-64
SANCHEZ	PEREZ	Mª ELENA	08-12-65
SANCHEZ	PEREZ	RAFAEL	04-04-45
SANCHEZ	PEREZ-LUCAS	MIGUEL RAMÓN	09-12-66
SANCHEZ	SANCHEZ	ALICIA BALTASARA	06-01-54
SANCHEZ	SANCHEZ	FRANCISCO DE ASIS	28-01-52
SANCHEZ	UGENA	ISIDORO	17-05-50
SANCHEZ	UGENA	JOAQUIN	01-08-46
SANCHEZ RUBIO	GARCIA	ALFREDO	11-09-45
SANCHO	MAYO	PALOMA	18-09-59
SANCHO	SEGURA	FRANCISCO	03-08-62
SANCHO	VILLANOVA	MARIA NIEVES	10-01-56
SANJUAN	VALENZUELA	PEDRO	23-09-44
SANTAMARIA	MATESANZ	JULIA PATRICIA	12-12-64
SANTAMARÍA	FRAILE	ALEJANDRO	27-05-73
SANTANA	RODRIGUEZ	MARIA MERCEDES	20-02-66
SANZ	LLORENTE	FERNANDO JAVIER	11-06-56
SANZ	PEREZ	FRANCISCO JAVIER	22-08-50
SARO	SANCHEZ DE RIVERA	Mª DEL PILAR	14-07-62
SEBASTIAN	OTONES	MILAGROS	27-11-62
SEGOVIANO	ASTABURUAGA	MARIA LUISA	10-10-50
SEGURA	RODRIGUEZ	MARIA LUISA	21-06-51
SENDRA	DOMÉNECH	MARÍA	11-03-81

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
SEOANE	PRADO	JAVIER	07-05-55
SERRA	ABARCA	TERESA	10-10-59
SERRANO	BARRENAS	JOSE	17-01-47
SERRATE	DE PORRAS	MIGUEL	07-08-46
SEVILLA	GARCIA	JOSE DAVIL	16-04-59
SIERRA	BANDRÉS	PATRICIA CARMEN	28-09-80
SIERRA	FERNANDEZ-VITORIO	MARIA ANGELES	25-01-58
SOBRINO	MARTINEZ	ANA ISABEL	13-03-67
SOCAS	PEREZ	JONAY	20-10-84
SOLA	FAYET	JOSE	14-11-65
SOLANA	COBO	MARTA	22-02-67
SOLANA	SAENZ	MARIA AMPARO	18-12-58
SORANDO	PINILLA	ANGEL	31-07-58
SORIA	FERNANDEZ-MAYORALAS	MATIAS MANUEL	14-09-52
SORIANO	VELA	MARIA FRANCISCA	05-05-47
SOUTO	HERREROS	JESUS	18-07-64
SUALDEA	BARRIO	CRISTINA	19-11-66
TABARES	CABEZON	MIGUEL ANGEL	31-08-64
TAMARGO	SAN PEDRO	MARIA ELENA	26-01-61
TEJADA	DEL CASTILLO	MANRIQUE	08-12-49
TEJEDOR	FREIJO	CESAR	09-12-54
TEJEDOR	FREIJO	VICENTE	17-10-53
TEJEDOR	MUÑOZ	LUIS CARLOS	06-12-64
TORE	APARICIO	MIGUEL ANGEL DE LA	28-09-60
TORO	PEÑA	JUAN ANTONIO	03-08-56
TORRECILLA	COLLADA	JUAN ANTONIO	30-11-53
TORREGROSA	QUESADA	MARIA CECILIA	12-07-65
TORRES	GONZÁLEZ	ANA	12-06-81
TORRES	LOPEZ	JOSE MARÍA	03-02-59
TORRES	MERCADER	JULIA	03-11-79
TORRES	MOURULLO	Mª CONSUELO	14-06-73
TRILLO	ALONSO	JUAN CARLOS	08-12-48
TUÑI	VANCELLS	Mª DOLORES	18-09-55
VALDIVIA	PIZCUETA	CARLOS JOSE DE	16-03-45
VALLE	GARCIA	Mª ISABEL DE	10-05-55
VALLEJO	GONZALEZ	RUBÉN	18-05-82
VARELA	AGRELO	JOSE ANTONIO	07-05-57
VAZQUEZ	RODRIGUEZ	JOSE PEDRO	02-08-62
VAZQUEZ	RUIZ	MANUEL NICOLAS	18-09-48
VÁZQUEZ	GÓMEZ	MARÍA	16-09-80
VAZQUEZ DE PRADA	DE LA HOZ	JUAN IGNACIO	30-12-75

Secretarios Judiciales excedentes

APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	F. Nacimiento
VAZQUEZ DE PRADA	VARALES	CANDIDO	09-08-52
VEGA	CUEVAS	ESTEBAN	09-08-50
VELA	MORALES	AURORA MARÍA	27-07-77
VELASCO	GARCIA	Mª ANGELES	26-09-57
VIAÑA	RANILLA	ANA ISABEL	09-07-69
VICENTE	CASILLAS	CRISTINA DE	28-10-66
VICENTE	DIAZ	MATILDE	27-11-56
VICENTE	LUNA	JUAN DE	14-12-44
VICENTE	ORTIZ	JOSE LUIS	27-08-45
VICIOSO	RODRÍGUEZ	MARÍA DE LOS ANGELES	03-09-66
VIDAL	MARTINEZ	CARLOS	12-10-49
VIDERAS	NOGUERA	ANTONIO	16-09-63
VIEIRA	MORANTE	ANTONIO	01-03-52
VIGURI	ARRIBAS	MARIA EUGENIA	21-05-60
VILLACAMPA	ABADIAS	ALFONSO CARLOS	29-07-66
VILLAGOMEZ	MUÑOZ	ANA ISABEL	27-01-61
VILLANUEVA	GALLEGO	FELIX IGNACIO	18-07-45
VILLAR	CASTILLA	MARÍA TERESA	23-02-71
VIÑAS	BELLO	YURBIN MAGDALENA	13-01-77
YAGÜE	EGAÑA	MIREN NEKANE	21-06-66
YUSTE	GONZÁLEZ	MAXIMO ZACARÍAS	31-03-63
YUSTI	BASTERRECHE	JOSE	09-12-53
ZAMBUDIO	MOLINA	JOSE LUIS	13-10-45
ZAPATA	CAMACHO	INMACULADA	14-06-59
ZARAGOZA	AGUADO	JAVIER ALBERTO	20-11-53
ZARAGOZA	CAMPOS	JOSE MARÍA	17-01-66
ZARCO	OLIVO	JOSE LUIS	31-10-54
ZAZURCA	GONZALEZ	FELIPE	23-11-58



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

**RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
(De 1 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013)**

SUMARIO

I. NACIMIENTO, FILIACIÓN, ADOPCION

I.1.- Nacimiento

I.1.1.- Inscripción de nacimiento fuera de plazo..... 5

I.1.2.- Rectificación registral del sexo-ley 3/2007..... 19

I.2.- Filiación

I.2.1.- Inscripción de filiación 21

I.3.- Adopción

I.3.2.- Inscripción adopción internacional 36

II. NOMBRES Y APELLIDOS

II.1.- Imposición nombre propio

II.1.1.- Imposición nombre propio-prohibiciones 44

II.2.- Cambio de nombre

II.2.2.- Cambio nombre-justa causa 45

II.2.3.- Cambio nombre-prohibiciones art 54 lrc 57

II.3.- Atribución apellidos

II.3.2.- Régimen de apellidos de los españoles..... 62

II.4.- Cambio de apellidos

II.4.1.- Modificación de apellidos 65

II.5.- Competencia

II.5.1.- Competencia cambio nombre propio 69

II.5.2.- Competencia cambio apellidos 77

III. NACIONALIDAD

III.1.- Adquisición originaria de la nacionalidad española

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen iure soli 79

III.1.2.- Adquisición nacionalidad de origen iure sanguinis..... 152

III.1.3.- Adquisición nacionalidad de origen por Ley 52/2007 de memoria historica

III.1.3.1.- Adquisición nacionalidad española de origen- anexo I Ley 52/2007 154

III.1.3.2.- Adquisición nacionalidad española de origen-anexo II ley 52/2007 323

III.3.- Adquisición nacionalidad española por Opción

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad-art 20-1a cc..... 891

III.3.2.- Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen-art 20-1b cc	907
III.5.- Conservación/perdida/renuncia a la nacionalidad	
III.5.1.-Conservación/perdida/renuncia a la nacionalidad española.....	909
III.8.- Competencia en exp nacionalidad	
III.8.2.- Competencia en exp. de nacionalidad por motivos distintos de la residencia	912
III.8.3.- Exp. De nacionalidad-alcance de la calificación-art 27 lrc	920
III.9.- Otras cuestiones en expedientes nacionalidad	
III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad española	922
IV. MATRIMONIO	
IV.1.- Inscripción matrimonio religioso	
IV.1.1.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.....	926
IV.1.2.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero	936
IV.2.- Expediente previo para la celebración del matrimonio civil	
IV.2.1.- Autorización del matrimonio. Falta de capacidad. Recursos	941
IV.2.2.- Expedición de certificado de capacidad matrimonial	1118
IV.3.- Impedimento de ligamen	
IV.3.1.- Impedimento de ligamen en expediente previo a la celebración del matrimonio.....	1136
IV.3.2.- Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.....	1138
IV.4.- Matrimonio celebrado en el extranjero	
IV.4.1.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado	
<i>IV.4.1.1.- Se deniega inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial.....</i>	<i>1148</i>
<i>IV.4.1.2.- Se inscribe-no puede deducirse ausencia de consentimiento matrimonial.....</i>	<i>1341</i>
<i>IV.4.1.3.- Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad.....</i>	<i>1347</i>
IV.4.2.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros.....	1353
IV.7.- Competencia	
IV.7.1.- Competencia en expedientes de matrimonio.....	1367

V. DEFUNCIÓN

V.1.- Inscripción de la defunción

V.1.1.- Inscripción de la defunción fuera de plazo.....	1369
---------------------------------------------------------	------

VII. RECTIFICACION, CANCELACION Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES

VII.1.- Rectificación de errores

VII.1.1.- Rectificación de errores art 93 y 94 LRC.....	1372
---------------------------------------------------------	------

VII.2.- Cancelación

VII.2.1.- Cancelación de inscripción de nacimiento.....	1399
---------------------------------------------------------	------

VIII. PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

VIII.4.- Otras cuestiones

VIII.4.2.- Recursos en los que ha decaído el objeto.....	1453
----------------------------------------------------------	------

VIII.4.4.- Otras cuestiones.....	1456
----------------------------------	------

IX. PUBLICIDAD

IX.1.- Publicidad formal-acceso de los interesados al contenido del RC

IX.1.1.- Publicidad formal-expedición de certificaciones y consulta libros del registro	1482
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------

X. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

X.1.- Organización y funcionamiento

X.1.1.- Organización y funcionamiento en el registro civil.....	1487
-----------------------------------------------------------------	------

I. NACIMIENTO, FILIACIÓN, ADOPCION

I.1.- Nacimiento

I.1.1- Inscripción de nacimiento fuera de plazo

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (77ª)

I.1.1.-Inscripción fuera de plazo de nacimiento

Ni consta la legitimación del promotor para instar la inscripción ni se acredita el nacimiento, al parecer acaecido antes de la creación de los Registro Civiles.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Alzira (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Palma de Mallorca (Illes Balears) en fecha 15 de enero de 2008 Don J-E. mayor de edad y domiciliado en dicha población, solicita que se tramite expediente registral para la inscripción de nacimiento fuera de plazo de B. manifestando que es su tatarabuelo, que nació en A. (V) el 15 de julio de 1836 y que él tiene un interés legítimo particular en probar sus orígenes rusos y recuperar la uve final de su apellido con vistas a su nombramiento como cónsul de la Federación Rusa. Acompaña impreso de declaración de datos para la inscripción, croquis genealógico, certificado de defunción del no inscrito; partida de bautismo, inscrito en P de M. el 25 de abril de 2007, de J. nacido en Rusia el 28 de octubre de 1918 y bautizado ese mismo día; certificado de nacimiento de J. nieto del no inscrito, certificación del cementerio de A. sobre inhumaciones de determinados miembros de la familia y certificado de la Vicaría General para España y Portugal de la Iglesia Ortodoxa Rusa para dar constancia de que el promotor es sin la menor duda descendiente legal del conde I-I- M, apellido que en caracteres latinos se escribe M o M.

2.- En el mismo día, 15 de enero de 2008, el promotor ratificó la solicitud, el Ministerio Fiscal informó que, visto el expediente y considerando ajustada a derecho la pretensión, no se opone a la misma y el Juez Encargado del Registro Civil de Palma de Mallorca informó que en la fase de instrucción ha quedado debidamente acreditado el nacimiento cuya inscripción se solicita y dispuso la remisión de lo actuado al Registro Civil Central, en el que tuvo entrada el 25 de abril de 2008.

3.- El 26 de febrero de 2009 se recibió en el Registro Civil Central escrito del promotor solicitando información sobre el estado de tramitación de este expediente y de otro relativo a J. quien en la hoja de declaración de datos figura como padre del no inscrito; seguidamente el Encargado acordó notificar al Ministerio Fiscal que, a la vista de que se pretende la inscripción de un español nacido en España, informó que considera que el Registro Civil Central no es competente para resolver el expediente, que fue remitido al municipal de A.

4.- Recibidas las actuaciones en el Registro Civil de Alzira, el Ministerio Fiscal informó que nada opone a lo solicitado y el 4 de mayo de 2010 la Juez Encargada dictó auto disponiendo que no ha lugar a practicar la inscripción de nacimiento instada porque el hecho acaeció en fecha en la que aún no se habían implantado los Registros Civiles en España y la vigente Ley del Registro Civil no prevé la inscripción de hechos anteriores.

5.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la Ley del Registro Civil, tal como prevé su disposición transitoria, rige respecto a los hechos acaecidos antes de su vigencia sujetos a inscripción y aun no inscritos y que él necesita prueba legal del nacimiento de B. de su filiación respecto a J. nacido en Rusia hijo de una española y un militar ruso, y de la "hispanización" del apellido paterno; y aportando como prueba documentación ya presentada con el escrito inicial.

6.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso al recurso solicitando la confirmación de la resolución apelada no tanto por razones de forma como de fondo, ya que la documental aportada por el recurrente no acredita datos como lugar y fecha de nacimiento, nombre y filiación exigidos para la inscripción fuera de plazo; y seguidamente la Juez Encargada del Registro Civil de Alzira dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16, 24, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68, 311 a 316 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1980 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) sobre el expediente de inscripción fuera de plazo de nacimiento, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las Resoluciones de 12 de junio de 1991, 30 de abril y 24 de junio de 1999, 11-3ª de enero de 2007; y 11-4ª de marzo, 9-5ª de junio y 18-12ª de noviembre de 2008 y 28-35ª de junio de 2013.

II.- Pretende el promotor que se inscriba fuera de plazo el nacimiento de B. que, según manifiesta, es tatarabuelo suyo y nació en A (V) el 15 de julio de 1836.

III.- La obligación, que podría alcanzar incluso al Ministerio Fiscal, de promover la inscripción e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse referida a aquellos supuestos en los que persiste el interés público primordial de lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que subsanaría eventuales defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC).

IV.- Sin embargo, cuando la inscripción de nacimiento solicitada es de una persona fallecida la cuestión tiene exclusivamente interés privado y por ello es forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, un interés legítimo en la incoación del expediente (cfr. arts. 97 LRC y 346 RRC). En este caso el promotor manifiesta que es de su interés obtener del Registro Civil español constancia de su ascendencia rusa para hacerla valer ante las autoridades de ese país pero, no aportadas inscripciones de nacimiento propia, de su padre y de su bisabuelo paterno, no queda acreditado el parentesco invocado ni, en consecuencia, su legitimación para promover el expediente.

V.- Por lo demás, sobre no aportarse prueba alguna del lugar y fecha de nacimiento, nombre y filiación del no inscrito y demás datos exigidos para la inscripción, esta no procede respecto a un nacimiento acaecido en 1836 habida cuenta de que la Ley Provisional del Registro Civil de 17 de junio de 1870 que, entre otras cosas, creó los Registros Civiles, preveía que los actos concernientes al estado civil que hubieran tenido lugar en fecha anterior se acreditaran por los medios [partidas del Registro eclesiástico] establecidos en la legislación anterior, los declaraba no sujetos a inscripción conforme a la nueva normativa y, en consecuencia, no les es aplicación la disposición transitoria de la vigente Ley del Registro Civil en la que el promotor intenta fundamentar su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alzira (Valencia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (78ª)

I.1.1.- Inscripción de nacimiento

1º) No es inscribible, por exigencias del principio de veracidad biológica, un nacimiento acaecido en 1998 en Venezuela con filiación respecto de un ciudadano español cuando hay datos suficientes para deducir que la pretendida filiación del menor no se ajusta a la realidad.

2º) La inscripción de una adopción requiere un procedimiento específico.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Caracas.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 13 de abril de 2009 en el Registro Civil del Consulado General de España en Caracas (Venezuela), Don A. de nacionalidad española y residente en Venezuela, solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hijo C-E. nacido en 1998 en Venezuela. Aportaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; inscripción venezolana de nacimiento el... de... de 1998 de C-E. hijo de K-D. de nacionalidad venezolana, con marginal de reconocimiento del inscrito el 27 de marzo de 2008 por parte de A.; acta de comparecencia ante el Registro Civil venezolano suscrita por el promotor el 27 de marzo de 2008 en la que reconoce como hijo suyo a C-E. hijo de K-D. pasaporte e inscripción de nacimiento en el Registro Civil español del promotor con marginal de opción a la nacionalidad española el 27 de junio de 2007 e inscripción de nacimiento venezolana de la madre del menor.

2.- El encargado del registro consular dictó auto el 13 de noviembre de 2009 denegando la inscripción solicitada porque la madre del menor había declarado en el curso de una entrevista con el encargado que C-E. no es hijo biológico del Sr. Á, aunque ambos conviven desde que el menor tenía un año de edad y que por eso decidió reconocerlo como hijo suyo.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que C-E. es el mayor de los dos hijos de la pareja, constando el hijo más pequeño ya inscrito en el Registro Civil español. Con el escrito de recurso se aportaron las declaraciones de varios testigos y la inscripción de nacimiento de A. nacido el... de... de 2006, hijo de K-D. de nacionalidad venezolana, con marginal de reconocimiento del inscrito en 2009 por parte de A.

4.- La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Caracas se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 18-1ª de abril, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de noviembre de 2005; 24-4ª de enero de 2006; 3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de 2007 y 20-4ª de abril de 2009.

II.- Los promotores solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hijo, nacido en Venezuela en 1998. La inscripción de nacimiento local se practicó inicialmente solo con la filiación materna, si bien consta anotación de reconocimiento paterno realizado en

2008. No obstante, el encargado del registro denegó la inscripción solicitada porque, según su resolución, los promotores habrían reconocido en el curso de una entrevista, de la que no consta testimonio documental, que el ciudadano español no es el padre biológico del menor. Esta resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC) pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, segundo párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85, párrafo primero, RRC).

IV.- La regulación de la filiación en el Código Civil se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que un reconocimiento de paternidad es nulo de pleno derecho y no podrá ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad porque la persona que reconoce no es progenitor del reconocido. Así ocurre en este caso, pues, a pesar de que no consta en el expediente el acta con la declaración de los promotores en la que se basa el encargado para denegar la inscripción, el propio interesado no desmiente en su escrito de recurso que no es el padre biológico del menor, limitándose a apelar a la unidad familiar y a la situación de hecho de la convivencia de la pareja con sus dos hijos menores. Por otra parte, sí consta una declaración del ahora recurrente realizada ante notario en abril de 2010 en la que manifiesta que inició su relación con la Sra. Vi. once años atrás, es decir, en 1999, un año después, por tanto, del nacimiento del menor interesado, a pesar de que en su inscripción figure el reconocimiento efectuado en Venezuela en 2008. En estas circunstancias, la certificación de nacimiento extranjera aportada cuya transcripción se pretende plantea fundadas dudas sobre la realidad del hecho inscrito (art. 23.II LRC) y no reúne, por tanto, las condiciones exigidas (art. 23 LRC y 85 RRC) para dar fe de la verdadera filiación del inscrito, por lo que no puede darse por acreditada la filiación biológica respecto del supuesto progenitor, sin perjuicio de que pueda acudir a la vía de la adopción, que sería la tramitación adecuada para el acceso al Registro Civil español de la inscripción de nacimiento interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (83ª)

I.1.1.- Inscripción de nacimiento

1º) No es inscribible, por exigencias del principio de veracidad biológica, un nacimiento acaecido en 1992 en Colombia con filiación española cuando hay datos suficientes para deducir que la pretendida filiación no se ajusta a la realidad.

2º) La inscripción de una adopción requiere un procedimiento específico.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 23 de diciembre de 2008 en el Registro Civil de Torremolinos (Málaga), Don A-F. y la Sra. M-L. de nacionalidad española y colombiana, respectivamente, ambos con domicilio en T. solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español con filiación paterna respecto del ciudadano español, de K. nacida en Colombia e inscrita en el Registro Civil colombiano únicamente con filiación materna respecto de la Sra. Z. Aportaban la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento del promotor, tarjeta de residencia en España e inscripción de nacimiento colombiana de la promotora, volante familiar de empadronamiento, inscripción del matrimonio celebrado por los solicitantes en España el 13 de mayo de 2005, libro de familia, tarjeta de residencia e inscripción de nacimiento colombiana de K. nacida el ... de ... de 1992.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para su resolución, se requirió a los promotores para ser entrevistados de forma separada. En sus respectivas comparecencias ante el encargado del registro, ambos declararon que se conocieron en 2004 y que el promotor del expediente no es el padre biológico de la no inscrita.

3.- El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo el 17 de agosto de 2010 denegando la inscripción solicitada porque, a la vista de las declaraciones de los promotores, no resulta acreditada la filiación española de la interesada, sin perjuicio de que pueda iniciarse el correspondiente expediente encaminado a obtener su adopción.

4.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el reconocimiento se ha efectuado cumpliendo los requisitos legales y que el ciudadano español ejerce de hecho como padre de la hija de su esposa.

5.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 18-1ª de abril, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de noviembre de 2005; 24-4ª de enero de 2006; 3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de 2007 y 20-4ª de abril de 2009.

II.- Los promotores solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hija, nacida en Colombia en 1992 e inscrita en el registro local únicamente con filiación materna. No obstante, ambos declararon en sus respectivas comparecencias que el ciudadano español no es el padre biológico de la no inscrita, razón por la cual el encargado del registro dictó acuerdo denegando la inscripción solicitada. Esta resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC) pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, segundo párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85, párrafo primero, RRC).

IV.- Por otra parte, la regulación de la filiación en el Código civil se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que la declarada no podrá ser inscrita cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal filiación no se ajusta a la realidad. Así ocurre en este caso a la vista de las declaraciones realizadas por los promotores, pues ambos reconocieron expresamente que la hija de la Sra. Z. no es hija biológica del ciudadano español y que se conocieron años después de su nacimiento. En estas circunstancias, no cabe practicar la inscripción pretendida porque no afecta a ningún español, sin perjuicio de que pudiera acudir a la vía de la adopción, que sería la tramitación adecuada para el acceso al Registro Civil español de la inscripción de nacimiento interesada, si bien en este caso deben tener en cuenta los recurrentes que el artículo 175.2 del Código civil solo permite la adopción de un mayor de edad cuando, inmediatamente antes del cumplimiento de la mayoría de edad o, en su caso, de la emancipación, hubiera existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia iniciada antes de que el adoptando hubiera cumplido catorce años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (84ª)

I.1.1.- Inscripción de nacimiento

No procede realizar la inscripción solicitada por no resultar acreditados los datos necesarios para practicarla.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Santander.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba), los Sres. C-J. y O. de nacionalidad cubana y con domicilio en Cuba, solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su abuelo, J. nacido, según los promotores, en R de C. (C) en 1888. Aportaban la siguiente documentación: certificación negativa de partida de bautismo del no inscrito expedida por el Archivo Diocesano de Santander; carné de identidad y certificación de nacimiento cubana de E-B. hijo de J. certificación negativa de inscripción de nacimiento expedida por el Registro Civil de Camargo; certificación cubana de matrimonio celebrado en 1921 entre J. natural de S. (España) y Mª-D. certificado de inscripción en el Registro de Extranjeros de Cuba y certificado de defunción en 1943 de J. diploma y certificado de finalización de estudios de ingeniero mecánico de la Institución de Enseñanza Técnica Superior de Valencia expedidos en 1916.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil de Santander, competente para su resolución, y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada dictó auto el 18 de junio de 2010 denegando la inscripción solicitada por falta de datos esenciales para practicar la inscripción.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los nietos del no inscrito habían iniciado los trámites para la obtención de la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y que al solicitar la inscripción de nacimiento y la partida de bautismo de su abuelo con el fin de justificar su descendencia de españoles, tanto el Registro Civil de Camargo como el Archivo Diocesano de Santander les comunicaron que sus archivos se quemaron durante la Guerra Civil, razón por la cual solicitan ahora la inscripción de nacimiento de su ascendiente en el Registro Civil. Con el escrito de recurso aportaban además varias fotos y cartas familiares dirigidas a su abuelo desde España y fechadas entre 1919 y 1962.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que informó favorablemente a su estimación. La encargada del Registro Civil de Santander se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1.980, la Instrucción de 7 de octubre de 1.988, y las resoluciones, entre otras, 19-1ª de febrero de 1999, 30-2ª de mayo y 20-1ª de julio de y 3-2a de enero de 2008.

II.- Se pretende mediante el presente expediente la inscripción de nacimiento fuera de plazo del abuelo de los promotores, nacido, según ellos, en España en 1888.

III.- Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el registro civil español competente (art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que alude el artículo 95.5º LRC, desarrollado en los artículos 311 a 316 RRC.

IV.- La obligación, que podría alcanzar incluso al ministerio fiscal, de promover la inscripción omitida e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente limitada a aquellos supuestos en que persista el interés público primordial de lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que permitiría también subsanar defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC).

V. Por el contrario cuando, como ocurre en este caso, lo que se pretende es lograr la inscripción de nacimiento de una persona nacida en el siglo XIX y hoy fallecida, la cuestión afecta únicamente al interés privado y es entonces forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, tal interés legítimo particular para la incoación del expediente (arts. 97 LRC y 346 RRC).

VI.- Ese principio de prueba del interés legítimo particular consta en este caso porque los recurrentes son cubanos y es de su interés, a efectos de la posible adquisición de la nacionalidad española, acreditar el hecho del nacimiento en España y la nacionalidad española de su abuelo, por lo que es pertinente entrar a examinar el fondo de la pretensión.

VII.- Los interesados, sin embargo, no han logrado obtener constancia, en defecto de la inscripción en el registro civil, del bautismo del no inscrito, no siendo posible investigar tampoco, dado el tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho inscribible, las circunstancias que deben constar en la inscripción de nacimiento. Sí se aportan pruebas de la existencia e identidad del no inscrito, como las inscripciones de matrimonio y de defunción en Cuba, pero este solo da fe de esos hechos concretos y del momento y lugar en que se produjeron. No es posible pues, como se ha dicho, determinar de forma cierta las circunstancias que deben constar en la inscripción de nacimiento, singularmente, menciones tan esenciales como son el lugar y la fecha en que ocurrió el hecho, datos de los cuales la inscripción de nacimiento

hace fe, ya que no se aporta prueba alguna que corrobore que el nacimiento se produjo, como aseguran los promotores, en la localidad de C. en 1888. En consecuencia, no es posible proceder a la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la denegación de inscripción.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (69ª)

I.1.1.-Inscripción fuera de plazo de nacimiento.

No procede la inscripción del nacido en la República Dominicana en 1921, ya fallecido, porque no está acreditada su filiación española.

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra acuerdo dictado por el Juez Encargado Registro Civil Central.

HECHOS

1.- El 16 de noviembre de 2009 la Sra. M^a-I. de nacionalidad dominicana, nacida en B. (República Dominicana) el 13 de enero de 1977 y domiciliada en San A de G. (M). presentó en el Registro Civil Central, en calidad de hija, impreso de declaración de datos para la inscripción fuera de plazo del nacimiento de M. nacido en San P de M.(República Dominicana) el 22 de junio de 1921 y fallecido en C. (EE UU) el 14 de octubre de 1997, consignando en la declaración que también la madre era de nacionalidad española al nacer el hijo. Acompaña actas inextensas de nacimiento y de defunción del no inscrito, certificación literal de nacimiento de M. nacido en P de M. (I- B) el 1 de octubre de 1894, y copia de pasaporte dominicano y volante de empadronamiento en San A de G. propios.

2.- El 2 de agosto de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil Central, considerando que la certificación del Registro extranjero aportada no ofrece las garantías exigidas por la legislación española para acreditar de manera indubitada ni el hecho del nacimiento ni la filiación de padre español que se alega, dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción de nacimiento interesada.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora del expediente, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el no inscrito, con una hermana viva y un hermano difunto españoles por hijos de españoles, también tiene derecho a la nacionalidad española y aportando, como prueba documental, cédula de identidad y electoral y fe de bautismo dominicanas del no inscrito, actas inextensas de nacimiento de L. y C. copia simple de pasaporte español de esta última y certificados expedidos en 1920 por el Consulado General de España en Nueva York y en 1937 por el de C-. (República Dominicana) sobre inscripción en los respectivos libros de matrícula de M. nacida en C.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución apelada, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 15, 16, 23, 24, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68, 85, 311 a 316 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 12 de junio de 1991, 30 de abril y 24 de junio de 1999, 15-1ª de junio de 2005 y 11-4ª de marzo y 9-5ª de junio de 2008.

II.- Pretende la promotora que se inscriba fuera de plazo el nacimiento de su padre, acaecido al parecer en 1921 en la República Dominicana, fundamentando su petición en la nacionalidad española de ambos progenitores -abuelos paternos de la interesada-, al nacer el hijo.

III.- La obligación, que podría alcanzar incluso al Ministerio Fiscal, de promover la inscripción omitida e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente referida a aquellos supuestos en los que persiste el interés público primordial de lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que subsanaría eventuales defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC).

IV.- Por el contrario, cuando la inscripción de nacimiento solicitada es de una persona ya fallecida la cuestión tiene exclusivamente interés privado y por ello es forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, un interés legítimo en la incoación del expediente (cfr. arts. 97 LRC y 346 RRC).

V.- La existencia de un interés legítimo particular consta en este caso porque la recurrente es dominicana y solicita que se inscriba la nacionalidad española originaria de su padre a fin de optar ella misma por la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Procede en consecuencia examinar la pretensión deducida tomando en consideración la nacionalidad española originaria del padre del no inscrito ya que, aunque se predica también la de la madre, no se acredita con documentación registral alguna (cfr. art 2 LRC).

VI.- Para que pudiera ser atendida la petición de la interesada de que se inscriba el nacimiento de su padre en el Registro Civil español debería haberse acreditado su filiación respecto a Don M. nacido en P de M. (I-B) el 1 de octubre de 1894 y que este era español en la fecha de nacimiento del hijo, padre de la promotora, y le transmitió *iure sanguinis* la nacionalidad española. Los documentos presentados no dan fe de ninguno de estos dos hechos. El nacimiento, acaecido al parecer en 1921, fue inscrito en el Registro local "de reconstrucción" en 2005, ocho años después de la defunción del nacido, las menciones de identidad del padre, como las de la madre, se limitan a nombre, primer apellido, estado civil e indicación de que es "natural de España", datos a todas luces insuficientes para acreditar de manera indubitada, no ya su filiación paterna respecto al inscrito en P de M. con las demás menciones de identidad que constan sino ni siquiera la realidad del hecho mismo del nacimiento y de su legalidad conforme a la Ley española (cfr. art. 23.2 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (73ª)

I.1.1.- Inscripción de nacimiento

No es inscribible un nacimiento que tuvo lugar en Venezuela en 1966 por no resultar acreditada la filiación de la interesada respecto de un ciudadano español.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el consulado español en París el 21 de septiembre de 2010, la Sra. Mª-A. mayor de edad, de nacionalidad venezolana y con domicilio en Francia, solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español en virtud de la disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por ser hija de un ciudadano español. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; cédula de identidad venezolana e inscripción del nacimiento de la promotora ocurrido el 9 de noviembre de 1966, hija de D. y con marginal de reconocimiento en 2003 por parte de su hermano paterno, C. hijo de F. documento fechado el 13 de noviembre de 2002 de reconocimiento de la interesada como hermana paterna de C. de nacionalidad española, hijo de F. también de nacionalidad española; inscripción de nacimiento en G, La P. (C) el 8 de octubre de 1914 de F. documento del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería de Venezuela expedido en 1990 donde figura, entre otros datos personales, que F. nacido el 8 de octubre de 1914 en B-A. (T. España) y fallecido en 1986, era ciudadano extranjero y entró en Venezuela el 16 de agosto de 1953; cédula de identidad venezolana y pasaporte español de F. y auto de 30 de julio de 2008 del encargado del Consulado General de España en Caracas denegatorio de una solicitud anterior de la interesada con el mismo objeto que la presente.

2.- Remitido el expediente al Consulado General de España en Caracas (Venezuela), competente para su resolución, el encargado del registro dictó auto el 26 de octubre de 2010 denegando la inscripción por no considerar acreditada, a la vista de los documentos presentados, la filiación de la solicitante con respecto a un ciudadano español.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su padre, español de origen, emigró a Venezuela y convivió, en unión extramatrimonial, con su madre y que fue él quien presentó a su hija en el registro, si bien no pudo declarar entonces su paternidad porque permanecía casado con una ciudadana española y la legislación del momento no lo permitía. No obstante, añade la recurrente que su padre siempre la trató como tal, hasta el punto de que trasladó a uno de los hijos nacido de su unión matrimonial en España a vivir con su familia en Venezuela, siendo ese hermano, actualmente residente en España, el que declaró en 2002 que la promotora también es hija de su padre, si bien el propio interesado no pudo realizar el reconocimiento pertinente porque la legislación venezolana que lo autorizaba no se promulgó hasta 1982 y en ese momento Don F. se encontraba ya muy enfermo, falleciendo pocos años después, en 1986.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Caracas remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 120 del Código civil (CC.); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66 y 68 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 13-2ª de octubre y 7-6ª de noviembre de 2008, 27-4ª de marzo de 2009 y 13-2ª de abril de 2010.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento en España, por ser hija de español de origen, de una ciudadana venezolana nacida en 1966 que no fue reconocida oficialmente por quien asegura que fue su padre, si bien aporta la declaración de quien dice ser su hermano paterno reconociéndola como tal. La inscripción fue denegada por el encargado del registro consular basándose en la ausencia de acreditación de la relación de filiación respecto de un ciudadano español.

III.- Independientemente del procedimiento a través del cual se pretenda el acceso al Registro Civil español (la solicitud parece estar basada en la disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, a pesar de que el supuesto padre nació en España y en los documentos venezolanos presentados figura como extranjero, de modo que si se demostrara la relación de filiación podrían invocarse otros supuestos legales), lo cierto es que solo son inscribibles los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC) y en este caso no se acredita ninguna de esas circunstancias, ya que no consta que el ciudadano español reconociera legalmente en algún momento a la interesada como su hija. En la inscripción de nacimiento de la recurrente aquel solo figura identificado como la persona que declaró el nacimiento, sin que conste de ninguna manera su relación con la inscrita o con su madre. La simple declaración de un presunto hermano asegurando que ambos son hijos del mismo padre no puede ser tenida en cuenta a los efectos pretendidos y las alegaciones de la interesada sobre la posesión de estado como hija del Sr. F. aparte de no resultar tampoco probadas, no constituirían más que una situación de hecho que no puede servir de base para practicar la inscripción. En consecuencia, no es posible proceder a la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente probados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela):

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (69ª)

I.1.1.-Inscripción fuera de plazo de nacimiento

No constando la legitimación del promotor para instar la inscripción de nacimiento de una persona ya fallecida, cuya filiación respecto a un español no queda suficientemente acreditada con las pruebas presentadas, no procede practicar la inscripción de nacimiento solicitada.

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra acuerdo dictado por el Juez Encargado Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Alicante en fecha 16 de febrero de 2009 el Sr. M-A. de nacionalidad chilena, nacido en S. (Chile) el 29 de octubre de 1964 y domiciliado

en A. solicita, en calidad de hijo, la inscripción del nacimiento de F-O. nacido el 12 de junio de 1920 en S de C. y fallecido en esa población el 16 de enero de 2001. Acompaña hoja de declaración de datos para la inscripción, constancia de empadronamiento en A. fotocopia compulsada de inscripción de nacimiento de M. nacido en V. (T) el 21 de junio de 1895, e inscripción de nacimiento y certificado de defunción chilenos del no inscrito. El Juez Encargado levantó acta por duplicado de la comparecencia y dispuso la remisión de uno de los ejemplares, junto con los documentos aportados, al Registro Civil Central, en el que tuvo entrada el 13 de mayo de 2009.

2.- El 15 de octubre de 2009 el Juez Encargado del Registro Civil Central, visto que de la documentación aportada aparece que el no inscrito perdió la nacionalidad española y que el hecho no afecta a un español, dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción de nacimiento solicitada.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y el 30 de marzo de 2010, en el Registro Civil Consular de Santiago de Chile, al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, aunque omitida en su momento, procede la inscripción del nacimiento de su padre porque, de acuerdo con la legislación vigente, nació español de origen; que, promulgada la Ley de Memoria Histórica, las personas en su situación se ven forzadas a promover este tipo de expedientes por un interés particular que la resolución recurrida no toma en consideración y que la denegación le afecta de diversas maneras pero muy especialmente en que ha dejado fuera de opción a su hija mayor, que alcanzó la mayoría de edad el 4 de mayo de 2009; solicitando que se tome como fecha de obtención de la nacionalidad la de la opción que hizo el 30 de abril de 2009 en el Registro Civil de Alicante y fue archivada y aportando, como prueba documental, fotocopia de certificación negativa de inscripción de nacimiento, de certificación de partida de bautismo y de carta de nacionalización chilena, dada en S de C. el 10 de octubre de 1953, de M. y fotocopia de escrito con idéntica solicitud presentado por el promotor el 28 de abril de 2008 en el Decanato de los Juzgados de Elche y de comparecencia suya en el Registro Civil de Alicante en fecha 17 de octubre de 2008 a fin de presentar documentos originales que le habían sido requeridos.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo impugnado, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución apelada, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 15, 16, 23, 24, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68, 85, 311 a 316 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 12 de junio de 1991, 30 de abril y 24 de junio de 1999, 15-1ª de junio de 2005 y 11-4ª de marzo y 9-5ª de junio de 2008.

II.- Pretende el promotor que se inscriba fuera de plazo el nacimiento, acaecido en 1920 en Chile, de quien manifiesta que es su padre fundamentando su petición en la nacionalidad española del padre -abuelo paterno del solicitante- al nacer el hijo.

III.- La obligación, que podría alcanzar incluso al Ministerio Fiscal, de promover la inscripción omitida e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente referida a aquellos supuestos en los que persiste el interés público primordial de lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que subsanaría eventuales defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC).

IV.- Por el contrario, cuando la inscripción de nacimiento solicitada es de una persona ya fallecida la cuestión tiene exclusivamente interés privado y por ello es forzoso justificar, presentando al menos un principio de prueba, un interés legítimo en la incoación del expediente (cfr. arts. 97 LRC y 346 RRC) que, en este caso, no se acredita suficientemente puesto que, si bien el recurrente alega que la inscripción del nacimiento de su padre es requisito previo a la opción por la nacionalidad española de origen que él mismo se propone ejercitar, no aporta al expediente documentación registral que justifique la filiación invocada.

V.- Sobre la cuestión de fondo suscitada, dado que en el Registro han de constar los hechos inscribibles que afectan a los españoles (cfr. art. 15 LRC), para la aprobación del expediente habría tenido que acreditarse la filiación del padre del promotor respecto a M. nacido en España el 21 de junio de 1895, y la inscripción de nacimiento del Registro local presentada no da fe de tal filiación ya que las menciones de identidad del padre -también las de la madre- de F-O. nacido en S de C. el 12 de junio de 1920, se limitan a nombre, primer apellido y nacionalidad, datos a todas luces insuficientes para acreditar de manera indubitada su filiación paterna respecto al inscrito en V. (T) con las demás menciones que constan en la inscripción (cfr. art. 23.2 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (71ª)

I.1.1.- Inscripción de nacimiento.

No procede la inscripción de un nacimiento ocurrido en Guinea Ecuatorial en 2009 alegando la nacionalidad española del presunto padre porque la certificación guineana aportada, por falta de garantías, no da fe de la filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Bata (Guinea Ecuatorial).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en Bata, la Sra. S. N. M. mayor de edad y de nacionalidad guineana, solicitaba la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hija menor de edad M.-L. A. N. nacida en Guinea Ecuatorial, por ser hija de un ciudadano español. Consta en el expediente la siguiente documentación: partida de bautismo e inscripción de nacimiento local, practicada el 14 de octubre de 2009, de F-M.-L. A. N., nacida el ... de ... de 2009 e hija de L. A. y de S. n.; inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de S. A. N. nacido en B. el ... de ... de 2004 e hijo no matrimonial de J-L. A. R. y de S. N. M. y acta notarial de manifestaciones otorgada por Mª-L. M. y J. A. R. en la que estos declaran que la menor interesada es hija no matrimonial de su difunto hermano J-L. A. R. y de S. N. N., quienes convivieron durante los cinco años anteriores al fallecimiento del primero y de cuya unión nació también el ... de ... de 2004 otro hijo llamado S.

2.- Ratificada la promotora y previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del registro consular dictó resolución el 4 de noviembre de 2010 denegando la inscripción solicitada porque, a la vista de la documentación aportada, no resulta acreditada la filiación española de la menor puesto que no consta el reconocimiento paterno realizado por el ciudadano español, quien falleció antes de que se produjera el nacimiento. Además, considera el encargado que la secuencia de fechas entre el fallecimiento del Sr. A. y el nacimiento de la menor, si bien no excluye totalmente la paternidad pretendida, sí plantea serias dudas sobre su veracidad.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, si bien no existe un escrito indubitado de reconocimiento de la paternidad, sí concurre la posesión de estado de hija a la que se refiere el artículo 49 de la Ley del Registro Civil, que la familia del Sr. A. ha reconocido a la menor como hija de este, al igual que sucede con su otro hijo, S. quien ya consta inscrito en el Registro Civil español, que la pareja convivió durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y que, aunque la fecha del nacimiento en relación con la de la defunción pudiera generar dudas sobre la paternidad, es un hecho médicamente demostrado que un parto puede tener lugar tras diez meses de gestación.

4.- La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Bata se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113, 120 y 124 del Código civil (CC.); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 186 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 11-3ª de marzo de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de noviembre de 2005; 24-4ª de enero de 2006; 3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de 2007; 13-3ª de octubre de 2008; 20-4ª de abril de 2009 y 27-2ª de enero de 2010.

II.- Se pretende la inscripción en el Registro Civil español del nacimiento en 2009 de una menor en Guinea Ecuatorial cuya inscripción de nacimiento, según la certificación aportada del registro civil local, se practicó siete meses después con filiación paterna respecto de un ciudadano supuestamente español fallecido antes de que se produjera el nacimiento. El encargado del registro civil consular, a la vista de los documentos aportados y de las declaraciones de la promotora, dictó resolución denegando la inscripción solicitada por no quedar acreditada la filiación de la nacida respecto de un español. La resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23.2 LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85.1 RRC).

IV.- En el presente caso la certificación de nacimiento guineana aportada, practicada después del fallecimiento del supuesto padre, carece de elementos suficientes para probar la filiación pretendida. En primer lugar, las únicas menciones de identidad relativas al padre de la inscrita que figuran en el documento son un nombre simple y el primer apellido, datos claramente insuficientes para dar por acreditado que se trata del ciudadano español al que se refiere la

promotora en su solicitud. No constan tampoco ni las certificaciones de nacimiento de ambos progenitores ni la de fallecimiento del supuesto padre, lo que ni siquiera permite comprobar, contrastando fechas, la posibilidad de la paternidad biológica pretendida, sin que, por otra parte, se haya aportado ningún documento que demuestre que se efectuó un reconocimiento legal en algún momento. Todo ello plantea fundadas dudas sobre la realidad del hecho inscrito en Guinea y sobre su legalidad conforme a la legislación española (art. 23.2 LRC), sin que la mencionada certificación de nacimiento reúna, por tanto, las condiciones exigidas para dar fe de la filiación de la inscrita, no pudiendo darse por acreditada su filiación biológica respecto de un ciudadano español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bata (Guinea Ecuatorial).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (48ª)

I.1.2.- Rectificación registral del sexo. Ley 3/2007.

No prospera el expediente por no resultar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

En las actuaciones sobre rectificación registral de la mención relativa al sexo y cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 4 de junio de 2010 en el Registro Civil de Torrelavega, Don Santiago, mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la rectificación de la mención relativa al sexo que figura en su inscripción de nacimiento para hacer constar "mujer" en lugar de "varón" así como el cambio de nombre del inscrito por "María" al haberle sido diagnosticada disforia de género. Aportaba la siguiente documentación: DNI, inscripción de nacimiento del interesado, volante de empadronamiento y certificado médico.

2.- Ratificado el promotor, la encargada del registro, considerando insuficiente el contenido del certificado médico presentado, solicitó la aportación de un informe de facultativo competente que acreditara la ausencia de trastorno de la personalidad y que la persona interesada ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado o, en su caso, certificación que acredite la imposibilidad de seguir dicho tratamiento por razones de salud o de edad.

3.- Una vez aportado informe psicológico en el que consta juicio clínico de transexualismo y según el cual el interesado no padece ningún trastorno mental ni de la personalidad y no ha sido sometido desde hace años a seguimiento médico o endocrino, el ministerio fiscal emitió informe desfavorable y la encargada del registro dictó auto el 22 de octubre de 2010 denegando la rectificación solicitada y el consiguiente cambio de nombre por no cumplirse

los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención registral relativa al sexo de las personas, ya que no se ha acreditado el tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas de la persona a las correspondientes al sexo reclamado.

4.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado adjuntando un nuevo informe médico según el cual el paciente presenta una clara disforia de género con características físicas femeninas desde hace años, si bien, según refiere la propia interesada, el tratamiento hormonal se realizó en los años sesenta, cuando no estaba permitido en España, y no conserva informes al respecto.

5.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Torrelavega se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; 26, 93 y 94 de la Ley del Registro Civil; 21, 294 y 307 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 13-1ª de marzo y 23-2ª de mayo de 2008 y 29-2ª de mayo de 2013.

II.- Pretende el interesado la rectificación registral de la mención relativa a su sexo masculino y el cambio de nombre de Santiago por el de María alegando la concurrencia de una disforia de género. La encargada del registro denegó la petición por no resultar acreditados los requisitos establecidos por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, para poder llevar a cabo la rectificación de la mención relativa al sexo del inscrito.

III.- La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil en el extremo relativo al sexo de una persona cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. La filosofía a la que responde la citada ley, según explica su Exposición de Motivos, es la de que la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre se dirigen a constatar como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de género. Para ello, el cambio de identidad habrá de acreditarse debidamente, y la rectificación registral se llevará a cabo de acuerdo con la regulación de los expedientes gubernativos del Registro Civil.

IV.- Para que pueda practicarse la rectificación registral del sexo, la ley exige la acreditación de los siguientes extremos: a) que exista un diagnóstico de disforia de género y b) que el solicitante haya sido tratado médicamente durante dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. En ambos casos el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, especifica la forma concreta en que la acreditación respectiva ha de tener lugar. Así, respecto del diagnóstico de disforia de género, la acreditación se realizará “mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiado en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España” (art. 4.1a Ley 3/2007). Y por lo que se refiere al tratamiento médico seguido, la prueba requerida consiste en un “informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado” (art. 4.1b). Este régimen general está sujeto a las excepciones previstas en el art. 4.2 y en la disposición transitoria única.

V.- Pues bien, aunque consta un informe psicológico de donde resulta la existencia de disforia de género, lo cierto es que el informe médico aportado es insuficiente para considerar acreditados los requisitos que exige la ley en estos casos, pues se basa exclusivamente en las propias manifestaciones del paciente, sin que la profesional que lo firma se pronuncie

sobre la existencia efectiva y, en su caso, duración y pormenores del tratamiento hormonal que dice haber seguido la persona examinada.

Para reputar acreditada la concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley 3/2007 sería necesaria la incorporación de un informe médico completo del especialista competente que, además del diagnóstico pertinente de disforia de género, acreditara que se ha seguido en efecto el tratamiento hormonal alegado o que no procede realizarlo en la actualidad por razones de salud o de edad. Cabe recordar también que, a la vista de la regulación legal, la intervención de un médico forense en estos casos es subsidiaria de la del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento, de modo que, por el momento, no puede autorizarse la rectificación pretendida, sin perjuicio de que, previa demostración de la concurrencia de los requisitos mencionados, pueda incoarse con éxito un nuevo expediente en el futuro dirigido al mismo fin que el actual.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

I.2.- Filiación

I.2.1.- Inscripción de filiación

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (79ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto al cónyuge, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el registro civil del consulado de España en La Habana el 2 de octubre de 2009, la Sra. Mª-E. (según su certificación de nacimiento cubana), mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española por opción en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, carné de identidad y certificación literal de nacimiento cubana de Mª-E. nacida en Cuba el 30 de septiembre de 1948, hija de H. y de C-E. certificación de nacimiento de esta última con marginal de matrimonio celebrado el 13 de noviembre de 1942 con P. y divorcio por sentencia de 12 de febrero de 1952 y certificación de defunción de la madre de la interesada.

2.- La encargada del registro consular dictó auto el 2 de junio de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente

con los apellidos maternos, S.G. por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su padre es el que consta como tal en la certificación cubana de nacimiento.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de la filiación paterna respecto de quien figura como progenitor en su inscripción de nacimiento cubana, un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento, según consta marginalmente en la certificación local de nacimiento de esta incorporada al expediente. La encargada del registro ordenó practicar la inscripción únicamente con los apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna que se pretende en tanto que, como se ha dicho, en la fecha de nacimiento subsistía el matrimonio de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de la promotora practicada en el Registro Civil español cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio varios años después del nacimiento de la inscrita, se declara que el padre de esta no es el exmarido sino el cónyuge actual, que es quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (arts. 113 CC. y 2 LRC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de la madre y de su cónyuge antes de la sentencia de divorcio, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la interesada no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por

la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla la recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (80ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento local del interesado por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial, que no ha sido destruida, respecto al exmarido de la madre.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el registro civil del consulado de España en La Habana el 23 de enero de 2008, Doña M. mayor de edad y con nacionalidad cubana y española, suscribió acta de opción a la nacionalidad española en nombre de su hijo menor de edad, R-P. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, certificación literal de nacimiento cubana de R-P. nacido en Cuba el ... de de 1995, hijo de R. y de M. inscripción de nacimiento española de esta última con marginal de opción a la nacionalidad española fechada el 17 de abril de 2007; certificación cubana de nacimiento con marginal de matrimonio celebrado el 19 de agosto de 1993 con O-M. y divorcio por escritura notarial de 8 de febrero de 1995; certificación literal de nacimiento de R. y tarjeta de identidad cubana del menor interesado.

2.- La encargada del registro consular dictó auto el 22 de septiembre de 2008 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento del menor y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos, V.M. por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el padre reconoció a su hijo en el momento del nacimiento, por lo que debe hacerse constar el apellido de aquel y no solo los apellidos maternos.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de la filiación paterna de su hijo menor de edad -nacido en noviembre de 1995- respecto de quien consta como progenitor en la correspondiente certificación cubana de nacimiento. La solicitante estuvo casada con otro ciudadano cubano desde 1993 hasta el 8 de febrero de 1995, según se acredita en la certificación cubana aportada. La encargada del registro ordenó la inscripción del menor únicamente con los apellidos maternos por no considerar suficientemente probada la filiación paterna que se pretende dado que en la fecha del nacimiento aún no habían transcurrido 300 días desde la disolución del matrimonio de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna que debe figurar en la inscripción de nacimiento del hijo de la promotora cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio unos meses antes del nacimiento del inscrito, se declara que el padre de este no es el exmarido sino otro ciudadano que figura como progenitor en la certificación cubana de nacimiento del menor. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (arts. 113 CC. y 2 LRC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que entre la fecha de divorcio y la del nacimiento no habían transcurrido los trescientos días que establece la normativa española y no se aporta prueba alguna que permita acreditar la existencia de separación de hecho anterior, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la recurrente negando tal filiación no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía de un expediente gubernativo y tendrán que intentarla los interesados en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente gubernativo siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento del inscrito.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (81ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto al cónyuge, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el registro civil del consulado de España en La Habana el 2 de septiembre de 2009, la Sra. R-M. (según su certificación de nacimiento cubana), mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española por opción en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, carné de identidad y certificación literal de nacimiento cubana de R-M. nacida en Cuba el 24 de octubre de 1966, hija de L. y de E. certificación de nacimiento de esta última con marginal de matrimonio celebrado el 16 de enero de 1947 con D. y certificación de matrimonio de la madre de la interesada con L. celebrado el 12 de octubre de 1992, con marginal del matrimonio anterior de la contrayente y de divorcio por sentencia de 24 de noviembre de 1988.

2.- El encargado del registro consular dictó auto el 23 de agosto de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos, L. C. por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su padre es el que consta como tal en su certificación de nacimiento, si bien su madre todavía estaba casada con otro ciudadano cubano cuando ella nació.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de la filiación paterna respecto de quien figura como progenitor en su inscripción de nacimiento cubana, un ciudadano cubano

distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento y con quien esta contrajo matrimonio posteriormente, según consta en las certificaciones locales incorporadas al expediente. El encargado del registro ordenó practicar la inscripción únicamente con los apellidos de la madre por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna que se pretende en tanto que, como se ha dicho, en la fecha de nacimiento subsistía el matrimonio anterior de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de la promotora practicada en el Registro Civil español cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio varios años después del nacimiento de la inscrita, se declara que el padre de esta no es el exmarido sino el cónyuge actual, que es quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (arts. 113 CC. y 2 LRC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de la madre y de su cónyuge antes de la sentencia de divorcio, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la interesada no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla la recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (82ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto al cónyuge, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el registro civil del consulado de España en La Habana el 6 de julio de 2009, la Sra. Y. (según su certificación de nacimiento cubana), mayor de edad y de nacionalidad cubana, suscribió acta de opción a la nacionalidad española por haber permanecido bajo la patria potestad de una española. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, cédula de identidad y certificación literal de nacimiento cubana de Y. nacida en Cuba el... de... de 1991, hija de R-L. y de A-P. pasaporte e inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de esta última con marginal de opción a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 practicada el 17 de marzo de 2009; certificación cubana literal de nacimiento de R-L. y certificación de matrimonio de la madre de la interesada con J-C. celebrado en H. el 25 de septiembre de 1987, con marginal de divorcio por sentencia de 30 de septiembre de 1993.

2.- La encargada del registro consular dictó auto el 2 de junio de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos, G. H. por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de la filiación paterna respecto de quien figura como progenitor en su inscripción de nacimiento cubana, un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento, según consta en la certificación local de matrimonio incorporada al expediente. La encargada del registro ordenó practicar la inscripción únicamente con los apellidos de la madre por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna que se pretende en tanto que, como se ha dicho, en la fecha de nacimiento subsistía el matrimonio de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de la promotora practicada en España cuando, existiendo un matrimonio de la madre disuelto por divorcio después del nacimiento de la interesada, se declara que el padre de la inscrita no es el exmarido sino otro ciudadano cubano que figura como tal en la inscripción de nacimiento cubana de la solicitante. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (arts. 113 CC. y 2 LRC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de la madre y de su cónyuge antes de la sentencia de divorcio, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la interesada no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla la recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (70ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto al cónyuge, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el registro civil del consulado de España en La Habana el 3 de junio de 2009, Don T. (según su certificación de nacimiento cubana), mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española por opción en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, carné de identidad y certificación literal de nacimiento cubana del promotor, nacido en Cuba el 11 de agosto de 1967, hijo de P-T. y de C. inscripción de esta última en el Registro Civil español con marginal

de recuperación de la nacionalidad española el 11 de marzo de 2002; inscripción de matrimonio de P-T. con M-D. celebrado el 27 de julio de 1960 y certificación de matrimonio de G. con C. celebrado el 12 de febrero de 1961 con marginal de divorcio por sentencia de 28 de abril de 1983.

2.- La encargada del registro consular dictó auto el 30 de marzo de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento del solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su padre es el que consta como tal en la certificación cubana de nacimiento.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende el promotor la inscripción en el Registro Civil español de la filiación paterna respecto de quien figura como progenitor en su inscripción de nacimiento cubana, un ciudadano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento, según se desprende de la certificación local de matrimonio de esta incorporada al expediente. La encargada del registro ordenó practicar la inscripción únicamente con los apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna que se pretende en tanto que, como se ha dicho, en la fecha de nacimiento subsistía el matrimonio de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento del promotor practicada en el Registro Civil español cuando, habiendo existido un matrimonio de la madre disuelto por divorcio varios años después del nacimiento del inscrito, se declara que el padre de este no es el exmarido sino otro ciudadano cubano que figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (arts. 113 CC. y 2 LRC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana del interesado, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de la madre y de su cónyuge antes

de la sentencia de divorcio, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración del interesado no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla el recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento del inscrito.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (72ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto al cónyuge, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 7 de septiembre de 2009 en el registro civil del consulado de España en La Habana, Doña I. mayor de edad y con nacionalidad cubana y española, suscribió acta de opción a la nacionalidad española en nombre de su hija menor de edad L. Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; certificación de nacimiento de L. nacida en Cuba el... de... de 1996, hija de J-J. y de I. inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de I. con marginal de opción a la nacionalidad española el 18 de marzo de 2009 en virtud de la disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; certificación de nacimiento de J-J. certificación de matrimonio de este último con la promotora celebrado el 6 de mayo de 2001; sentencia de divorcio de 1 de octubre de 1998 del matrimonio anterior de la Sra. C. celebrado el 20 de septiembre de 1985, y autorización otorgada ante el consulado español en Ámsterdam (Países Bajos) por el Sr. J-J. residente en R. a favor de la promotora para realizar los trámites necesarios para la obtención de la nacionalidad española de la hija de ambos, L.

2.- La encargada del registro consular dictó auto el 14 de junio de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la menor y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el padre de su hija es el que consta como tal en la certificación de nacimiento cubana, aunque la madre todavía estuviera casada con su anterior cónyuge cuando la menor nació.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de su hija menor de edad con filiación paterna respecto de quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento local, un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento y con quien esta contrajo matrimonio posteriormente, según consta en las certificaciones incorporadas al expediente. La encargada del registro ordenó practicar la inscripción únicamente con los apellidos de la madre por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna que se pretende en tanto que, como se ha dicho, en la fecha de nacimiento subsistía el matrimonio anterior de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de una menor practicada en el Registro Civil español cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio dos años después del nacimiento de la inscrita, se declara que el padre de esta no es el exmarido sino el cónyuge actual, que es quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de la madre y de su cónyuge antes de la sentencia de divorcio, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la promotora no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla la recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (75ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna.

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento local de la interesada por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial, que no ha sido destruida, respecto al exmarido de la madre.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el registro civil del consulado de España en La Habana el 13 de enero de 2010, A. menor de edad y de nacionalidad cubana, acompañada de su madre, M. suscribió acta de opción a la nacionalidad española por ser hija de madre española. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, certificación literal de nacimiento cubana de A. nacida en Cuba el ... de ... de 1995, hija de E. y de M. inscripción de nacimiento española de esta última con marginal de opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, fechada el 21 de agosto de 2009; certificación cubana de nacimiento de M. y certificación de matrimonio con R-A. celebrado el 3 de mayo de 1989 y disuelto por sentencia de 24 de agosto de 1994; sentencia de divorcio; carné de identidad cubano de E. y acta de consentimiento de este para que su hija A. opte por la nacionalidad española.

2.- La encargada del registro consular dictó auto el 14 de junio de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la menor y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos, F.C. por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la menor es hija de una unión no matrimonial de la madre con quien figura como padre en la inscripción de nacimiento, por lo que debe hacerse constar su apellido y no solo los apellidos maternos.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de la filiación paterna de su hija, nacida en... de 1995 y menor de edad en el momento en que se ejerció la opción, respecto del progenitor que consta en su certificación cubana de nacimiento. La solicitante

estuvo casada con otro ciudadano cubano desde 1989 hasta el 24 de agosto de 1994, según se acredita en la sentencia aportada. La encargada del registro ordenó la inscripción de la menor únicamente con los apellidos de la madre por no considerar suficientemente probada la filiación paterna que se pretende dado que en la fecha del nacimiento aún no habían transcurrido 300 días desde la disolución del matrimonio de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna que debe figurar en la inscripción de nacimiento de la hija de la recurrente cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio unos meses antes del nacimiento de la inscrita, se declara que el padre de esta no es el exmarido sino otro ciudadano que figura como tal progenitor en la certificación cubana de nacimiento de la optante. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que entre la fecha de divorcio y la del nacimiento no habían transcurrido los trescientos días que establece la normativa española y no se aporta prueba alguna que permita acreditar la existencia de separación de hecho anterior, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la recurrente negando tal filiación no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía de un expediente gubernativo y tendrán que intentarla los interesados en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente gubernativo siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (70ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación.

1º) *Es inscribible el reconocimiento paterno efectuado en testamento, sin que deba tenerse en cuenta la mera sospecha o duda de que no se ajusta a la veracidad biológica.*

2º) *Se autoriza la conservación por el hijo de los apellidos que venía usando.*

En las actuaciones sobre inscripción de filiación paterna remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2009 en el Registro Civil de Melilla, Don S. M. E.-H.-E. mayor de edad y de nacionalidad española, solicitó la inscripción de su filiación paterna respecto de M. L. P. quien lo reconoció como hijo suyo mediante testamento otorgado en 1984. Solicitaba asimismo la conservación de sus apellidos actuales y, si ello no fuera posible, la atribución del apellido materno en primer lugar. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central del promotor, nacido en Marruecos el 17 de enero de 1979 e hijo de N. M. E.-H.-E., con marginal de opción a la nacionalidad española ejercida el 27 de septiembre de 1995 y de adquisición de la nacionalidad española por parte de su madre en 1988; inscripción de defunción de M. L. P. el 10 de julio de 2005; inscripción de matrimonio, celebrado el 26 de julio de 1984, en el Registro Civil de Melilla de M. L. P. con N. E. M.; testamento otorgado ante notario el 29 de octubre de 1984 por el Sr. L. en el que reconoce como hijo suyo al hijo de quien era su esposa en ese momento, nacido en T.(Marruecos) en 1979 y certificado de la Delegación del Gobierno en Melilla acreditando que N. M. E.-H.-E. es la misma persona que N. E.

2.- Ratificado el interesado, el expediente se remitió con informes favorables del ministerio fiscal y de la encargada del Registro Civil de Melilla al Registro Civil Central, competente para su resolución, cuya encargada dictó acuerdo el 29 de junio de 2010 denegando la inscripción solicitada porque, a su juicio, el reconocimiento realizado no se ajusta a la veracidad biológica de la filiación pretendida.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el reconocimiento se otorgó en forma, según lo previsto en el artículo 120 del Código civil, que la interpretación literal de la encargada del registro es errónea y que de la lectura del testamento, cuya redacción es atribuible a la notaría autorizante, se desprende claramente la voluntad inequívoca del testador de reconocer como hijo suyo al interesado.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 120 y 123 del Código civil (CC.); 15, 16, 23, 27, 28 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 209 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones de 24-1ª de enero, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre y 28 de diciembre de 2002; 15-3ª de enero y 12-2ª de noviembre de 2004; 24-1ª y 2ª de noviembre de 2005 y 9-2ª de marzo de 2009.

II.- Se pretende la inscripción del reconocimiento paterno, efectuado en testamento, del promotor, quien fue inscrito en el Registro Civil Central sólo con filiación materna tras haber adquirido la nacionalidad española por opción en 1995. La inscripción de la filiación paterna fue denegada mediante auto de la encargada del Registro Civil Central por considerar que el reconocimiento efectuado no responde a la realidad biológica, constituyendo dicha resolución el objeto del presente recurso.

III.- La filiación paterna no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento efectuado ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público, de quien afirme ser padre del reconocido (art. 120.1º CC. y 49 LRC) y, cuando el hijo es mayor de edad, el reconocimiento no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito (art. 123 CC.).

IV.- Todas estas condiciones concurren en caso presente y, si bien es cierto que, aun así, el reconocimiento no sería inscribible si hay datos objetivos que permitan estimarlo como un reconocimiento de complacencia que no se ajusta a la realidad teniendo en cuenta que el principio de veracidad biológica es el inspirador de la regulación del Código civil en materia de filiación, también es cierto que las simples dudas o sospechas de que el reconocimiento no responde a la verdad escapan a la calificación del encargado, que sólo puede denegar la inscripción cuando de las manifestaciones solemnes de los interesados se deduce, sin lugar a dudas, la falta de veracidad del reconocimiento. En este caso, la posible ambigüedad de alguna expresión literal del testamento no puede tomarse como determinante para excluir de manera absoluta tales dudas. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el testamento se otorgó en 1984 y no fue modificado, que el testador falleció en 2005 y que el interesado había adquirido la nacionalidad española por opción en 1995 derivada de la de su madre.

V.- En lo que se refiere a la solicitud de conservación de los apellidos, aunque la encargada del registro, una vez denegada la pretensión principal, no se pronuncia sobre esta cuestión, el Ministerio de Justicia puede autorizar, directamente y sin limitación de plazo (art. 209.3º y último párrafo) la conservación por el hijo de los apellidos que viniera usando con anterioridad a la inscripción de la filiación. Tales circunstancias concurren en este caso y, por lo demás, se aprecia justa causa y no existe perjuicio de tercero.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º.- Ordenar que se inscriba marginalmente el reconocimiento de la filiación paterna pretendida y la conservación de los apellidos actualmente inscritos.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

I.3.- Adopción.

I.3.2.- Inscripción adopción internacional

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (156ª)

I.3.2- Adopción internacional.

No es posible modificar el lugar real de nacimiento de la adoptada cuando, por haberse acogido los adoptantes a la posibilidad autorizada por la Instrucción de 15 de febrero de 1999, ya se ha extendido, además de la inscripción de nacimiento inicial y la marginal de adopción, otra posterior en la que se han reflejado, además de los datos del nacimiento y de la nacida, los de la filiación adoptiva constituida, y se ha trasladado ya previamente el historial registral de la adoptada al Registro Civil del domicilio al amparo de la nueva redacción dada en 2005 al artículo 20 nº 1 de la Ley del Registro Civil.

En las actuaciones sobre cambio de lugar de nacimiento en inscripción de adopción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto del Encargado del Registro Civil de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de La Laguna el 2 de octubre de 2009, Don J-M. y Doña Mª-T. manifestaron que son padres en virtud de adopción de la menor M. nacida en Rumanía el ... de ... de 1998, y que solicitaban se extendiese nueva inscripción de nacimiento en la que constasen exclusivamente los datos del nacimiento y las circunstancias de los padres adoptivos, y que como lugar de nacimiento constase el domicilio de los adoptantes. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor, inscrito en el Registro Civil del domicilio de los adoptantes y en la que consta la identidad de los padres adoptivos y su matrimonio; certificado de empadronamiento; fotocopias del libro de familia y de los DNI de los padres.

2.- El Encargado del Registro Civil dictó auto el 11 de enero de 2010 denegando la solicitud, al entender que conforme a la Instrucción de 1 de julio de 2004, la posibilidad de solicitar el cambio del lugar real de nacimiento por el del domicilio de los padres adoptantes tiene su momento, cual es, el de la nueva inscripción. Si ésta ya se ha practicado, como es el caso, ya no cabría solicitar dicho cambio porque su autorización provocaría la cancelación de la inscripción anterior y la extensión de otra nueva, lo que no está previsto en las Instrucciones de 15 de febrero de 1999 ni en la de 1 de julio de 2004, además ya había quedado consolidada una situación jurídico-registral.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal, señala que no procede la emisión de informe puesto que se le ha dado traslado del expediente con posterioridad a la resolución del expediente.

4.- Notificados los promotores, presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud, alegando que desconocían la posibilidad de solicitar el cambio del lugar de nacimiento cuando pidieron el traslado del asiento e indicando que no habían podido tener acceso al informe emitido por el Ministerio Fiscal.

5.- Se procede a la notificación del recurso al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

6.- Por resolución de esta Dirección General de fecha 27 de enero de 2011, se acuerda retrotraer las actuaciones al trámite de audiencia al Ministerio Fiscal, por entenderse incumplida una de las reglas a las que han de sujetarse los expedientes gubernativos según el artículo 97 de la Ley del Registro Civil.

7.- De acuerdo con lo resuelto, el Encargado del Registro Civil traslada el expediente al Ministerio Fiscal para que emita informe, oponiéndose el mismo a lo solicitado por los promotores, toda vez que la inscripción de la adopción ya se había efectuado conforme a la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 16 de febrero de 1999.

8.- El 1 de septiembre de 2011, el Encargado del Registro Civil dicta auto basado en los mismos fundamentos jurídicos que el de fecha 11 de enero de 2010. Una vez notificado a los promotores, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del auto recurrido.

9.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil remite el expediente a este Centro Directivo para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16, 18, 23 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); Disposición final segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código civil; los artículos 68 y 76 a 78, y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); el Real Decreto 820/2005, de 8 de julio por el que modifica los artículos 77 y 307 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1999, de 1 de julio de 2004 y de 28 de febrero de 2006, la Resolución-Circular de 31 de octubre de 2005 y la Resoluciones de 27-6ª y 29-3ª de octubre de 2005; 2-2ª de marzo, 22-1ª de mayo de 2006; 20-4ª de marzo, 15-4ª y 16-2ª de noviembre de 2007; 1 de marzo, 14-5ª y 6ª de julio, 20-6ª Noviembre de 2008; 12-2ª y 20-5ª de Enero de 2009.

II.- Se pretende por los interesados un cambio del lugar del nacimiento de su hija adoptiva con el fin de que en la inscripción de nacimiento de esta se haga constar, no el lugar real en que aquel acaeció, sino el correspondiente al del domicilio de los padres. La inscripción de nacimiento y de adopción se practicó en el Registro Civil Central, extendiéndose el asiento principal con la filiación biológica y el marginal con la filiación adoptiva. Igualmente, por traslado, se practicó la nueva inscripción en el Registro Civil de La Laguna (domicilio de los interesados) en la que constan solo los datos de la filiación adoptiva. El Encargado del Registro Civil de La Laguna acordó mediante Auto de 1 de septiembre de 2011 denegar la solicitud de cambio del lugar de nacimiento de la menor. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- La adopción da lugar en el Registro Civil español a una inscripción marginal en el asiento de nacimiento del adoptado (cfr. artículo 46 de la Ley del Registro Civil). Ello supone que en el mismo folio registral aparece reflejada la filiación anterior, o la ausencia de filiación, del adoptado, carente ya de relevancia jurídica, y la nueva filiación adoptiva dotada legalmente de plenitud de efectos jurídicos. Ciertamente esta superposición de filiaciones, como puso de manifiesto la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1999, puede dar origen a molestas confusiones y a que irregularmente se dé publicidad a través de una certificación literal a datos que afectan a la intimidad familiar. Con la finalidad de eliminar estos inconvenientes la citada Instrucción, en aplicación del mecanismo previsto por el artículo 307 del Reglamento del Registro Civil, autorizó con carácter general que la filiación adoptiva fuera objeto de una inscripción principal de nacimiento que reflejara sólo los datos sobrevenidos por la adopción, con referencia a la inscripción previa de nacimiento y adopción en la que se comprende todo el historial jurídico del adoptado.

Una de las circunstancias reveladora de una filiación adoptiva puede ser la relativa al lugar del nacimiento, especialmente cuando éste ha acaecido en un país remoto. Por ello, es conveniente que la publicidad de este dato quede limitada y sujeta a la autorización especial que el citado artículo 21 del Reglamento establece. A tal fin, y complementariamente a lo anterior, la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de julio de 2004, guiada de la misma finalidad de evitar la posibilidad de la publicidad irregular de las adopciones, y especialmente respecto de las adopciones internacionales que tan notable incremento han experimentado en los últimos años, autorizó que en la nueva inscripción de nacimiento y adopción que, a solicitud de los adoptantes, se practique -con inclusión exclusivamente de los datos del nacimiento y del nacido y de las circunstancias de los padres adoptivos- conste como lugar de nacimiento del adoptado el del domicilio de los adoptantes, y no el lugar real de su nacimiento, reconociendo así en tales casos una facultad similar a la que el artículo 16 párrafo segundo de la Ley del Registro Civil otorga a los padres biológicos. Con ello se hace efectivo, también en este ámbito, el principio constitucional de equiparación entre los hijos con independencia del origen de su filiación (cfr. arts. 14 y 39 de la Constitución).

IV.- Ahora bien, la necesidad de dotar a esta materia de la mayor seguridad jurídica posible y de reforzar los citados principios constitucionales de protección de la intimidad personal y familiar y de igualdad jurídica y equiparación entre los hijos con independencia de su filiación, dotando a la regulación de la materia del adecuado rango normativo legal, así como la conveniencia de extender las finalidades antes expresadas a otros supuestos anteriormente no cubiertos por las Instrucciones citadas, han determinado la reciente reforma del artículo 20 nº1 de la Ley del Registro Civil, introducida por la Disposición final segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

La reforma ha consistido en añadir un nuevo párrafo al número 1º del artículo 20, relativo al traslado de las inscripciones principales de nacimiento al Registro del domicilio del nacido o sus representantes legales, adición del siguiente tenor literal: “En caso de adopción internacional, el adoptante o adoptantes de común acuerdo podrán solicitar que en la nueva inscripción conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del adoptado. A las inscripciones así practicadas les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16”.

V.- La introducción de esta modificación en la Ley del Registro Civil tiende sin duda a satisfacer la finalidad a que responde el párrafo segundo de la regla 1ª añadido a la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de enero de 1999 por la más reciente de 1 de julio de 2004, dotando a la materia, como antes se dijo, de una adecuada cobertura legal en atención a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las situaciones y asientos registrales practicados al amparo de aquellas Instrucciones. La citada reforma legal fue objeto de rápido desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, que, entre otros extremos, da nueva redacción a los artículos 77 y 307 del citado Reglamento. En cuanto al primero se añade un nuevo párrafo que permite omitir los datos de la filiación originaria en la nueva inscripción de nacimiento practicada como consecuencia del traslado en los casos de adopción. En concreto se establece que “En caso de adopción, si los solicitantes del traslado así lo piden, en la nueva inscripción de nacimiento constarán solamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos y, en su caso, la oportuna referencia al matrimonio de estos”. Se trata de una norma complementaria del artículo 20 nº1 de la Ley del Registro Civil que, de forma conjunta con éste, vienen a sustituir en su finalidad a la Instrucción de 15 de febrero de 1999, en su redacción modificada por la de 1 de julio de 2004. En consecuencia, estas últimas Instrucciones se han de entender derogadas a partir de la entrada en vigor de la citada reforma legal y reglamentaria. La posibilidad de modificar el lugar del nacimiento del nacido queda circunscrita, como ya lo estaba, a las adopciones internacionales y en todo caso a través del mecanismo registral del traslado del folio al Registro Civil del domicilio de los promotores.

Pero la regulación hubiese quedado incompleta si no se hubiese atendido también, a efectos de evitar la acumulación en un único folio registral de la doble filiación originaria o biológica y adoptiva, a los supuestos de las adopciones nacionales, en cuyo caso no siempre será posible ni deseable el traslado del folio registral en que conste inscrito el nacimiento, pues éste puede coincidir con el propio Registro Civil del domicilio de los padres adoptivos. Para atender a tal supuesto se procedió a dar nueva redacción al primer párrafo del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil. Este precepto viene a cubrir, como se ha dicho, los supuestos de traslado sin alteración del Registro Civil competente (esto es, las nuevas inscripciones se practicarían en el folio registral que corresponda en el momento de extenderse en el propio Registro Civil en que constaban las iniciales que están llamadas a cancelarse). Por su parte, la reforma del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil prevé la misma finalidad pero para los casos en que, además de responder el traslado a la evitación de la superposición de filiaciones en un único folio registral, responda igualmente al deseo de contar con la

proximidad del Registro Civil en que consta el historial jurídico del estado civil de la persona respecto del domicilio de la misma o de sus representantes legales. De esta forma se aplican criterios de economía procedimental, ya que para lograr esta última finalidad, posible en términos legales antes de la reciente reforma, resultaba preciso acudir a un doble traslado del folio registral, primero en ejercicio de las facultades reconocidas por la Instrucción de 9 de enero de 1999 y, después, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 nº 1 de la Ley del Registro Civil, por este orden o en orden inverso.

VI.- Explicado el alcance de las reformas legal y reglamentaria operadas en este campo, puede pasarse a analizar la pretensión planteada en el presente caso, que es la de obtener el cambio del lugar de nacimiento tras haber obtenido ya el traslado del folio registral al Registro Civil de su domicilio, con supresión de los datos de la filiación biológica. Pues bien, conforme a la reseñada reforma legal de 2005 la posibilidad de solicitar el cambio del lugar real de nacimiento por el del domicilio de los padres adoptantes tiene su momento, cual es, el de la nueva inscripción que se practica por traslado al Registro Civil del domicilio de los adoptantes. Este criterio también se desprende de la nueva redacción que el Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, ha dado al artículo 77 del Reglamento del Registro Civil. Es decir, según esta norma, el posible cambio del lugar de nacimiento, si se solicita, deberá efectuarse “en la nueva inscripción”, entendiéndose por tal la que se practica después de la principal de nacimiento y marginal de adopción, para hacer constar sólo la filiación adoptiva, con ocasión de su traslado, pero no en otras posteriores.

Ahora bien, todo lo anterior se ha de entender sin perjuicio de la aplicación de la nueva norma contenida en el artículo 20 nº 1 de la Ley registral civil, reformado por la Ley 15/2005, cuando habiéndose acogido los interesados a la Instrucción de 15 de febrero de 1999, y extendida una nueva inscripción de nacimiento con inclusión exclusiva de los datos de la filiación adoptiva pero sin cambio de lugar de nacimiento, se solicite el traslado de tal inscripción al Registro Civil del domicilio de los padres adoptivos. Es decir, aunque la reforma legal de 8 de julio de 2005 presupone, en conexión con la reforma reglamentaria de la misma fecha, que una sola operación registral, la inscripción de traslado, cumplirá la triple finalidad de desagregar los datos de la filiación natural u originaria del adoptado de su nueva inscripción de nacimiento, modificar el lugar de nacimiento del adoptado y, tercero, trasladar el historial registral civil de la persona al Registro Civil del domicilio, nada impide que para los supuestos en que la primera de estas tres operaciones ya esté consumada de forma autónoma a través de la aplicación de la Instrucción de 15 de febrero de 1999, las otras dos operaciones, esto es, el traslado y la modificación del lugar de nacimiento, puedan ejecutarse conjuntamente en un momento subsiguiente, bajo la vigencia de las nuevas normas legales, normas que, no cabe cuestión sobre ello, son aplicables también a los casos de adopciones constituidas con anterioridad a su entrada en vigor, y ello no sólo porque la llamada “retroactividad tácita” se ha predicado por la doctrina civilística moderna respecto de las normas organizativas, en las que cabe encuadrar las de mecánica u organización registral, sino también por el valor que, ante el silencio de la Ley, se debe reconocer en la labor interpretativa a las orientaciones que se desprenden de las Disposiciones transitorias del Código civil, añadidas a su segunda edición para regular la transición entre éste y el Derecho anterior. Y en este sentido debe hacerse en esta materia aplicación analógica de la Disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, ya que siendo así que el derecho al traslado de la inscripción de nacimiento y marginal de adopción, con simultánea modificación del lugar de nacimiento del adoptado, se introduce «ex novo» en nuestro Ordenamiento jurídico, con norma de rango legal, por la Ley 15/2005, por referencia a la situación legislativa inmediatamente anterior, ello supone que, aplicando analógicamente la citada Disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, tal derecho «tendrá efecto desde luego», aunque el hecho –en este caso el nacimiento y la adopción– que lo origine se verificara bajo la legislación anterior, aplicación analógica que ya había sostenido este Centro Directivo en otras materias vinculadas al estado civil de las personas, en concreto con ocasión de la interpretación del alcance retroactivo de la reforma del Código civil en materia de nacionalidad operada por Ley

36/2002, de 8 de octubre (cfr. Resolución de 25-2.^a de abril de 2005) y de la más reciente reforma en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo introducida por la Ley 13/2005, de 1 de julio (cfr. Resolución-Circular de 29 de julio de 2005). Sin embargo, tampoco esta opción cabe en el presente caso en el que los interesados ya habían obtenido el traslado del historial registral civil de su hija al Registro Civil de su domicilio, consolidando con ello una situación jurídico-registral cuya modificación queda ya fuera del alcance de las previsiones del reformado artículo 20 nº 1 de la Ley del Registro Civil.

VII.- Finalmente, en cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de los recurrentes y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la denegación, de modo que los recurrentes han podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (9ª)

I.3.2.- Inscripción de adopción internacional.

Requiere, si los adoptantes ya entonces estaban domiciliados en España, que se acompañe la declaración de idoneidad otorgada previamente por la entidad pública española competente.

En las actuaciones sobre inscripción de adopción internacional remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Valencia el 5 de septiembre de 2011, Don J-L. de nacionalidad española y Don. S del P. que ostenta la doble nacionalidad española

y nicaragüense, manifiestan que adoptaron a P-V. nacida en N. el ... de ... de 2011, y solicitan la inscripción de nacimiento de su hija en el Registro Civil de Valencia donde tienen su residencia, además, solicitan una nueva inscripción de nacimiento en la que se contemple además de los datos del nacimiento, las circunstancias personales de los padres adoptivos y la oportuna referencia al matrimonio de éstos. Aportan, entre otra, la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la menor interesada, en la que consta la filiación adoptiva; sentencia de adopción del Juzgado del Distrito de familia de Jinotepe (Nicaragua) de fecha 4 de julio de 2011, en la que aparecen los adoptantes con domicilio en V; certificado de matrimonio de los promotores; y fotocopia del DNI de los padres.

2.- El Encargado del Registro Civil solicita informe a la Consejería de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana acerca de si, en el caso de referencia, procede o no expedir certificado de idoneidad, habida cuenta que el mismo no consta en el expediente. Con fecha 7 de octubre de 2011 se emite informe por el órgano consultado, en el que se indica que Nicaragua no es parte del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1995, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, ni existe convenio bilateral con España en materia de adopción. Asimismo, se señala que el artículo 26.3 de la Ley 54/2007 de adopción internacional establece que “cuando el adoptante sea español y residente en España, la entidad pública española competente deberá declarar su idoneidad previamente a la constitución de la adopción por el órgano competente extranjero”. Por otra parte, el artículo 4.2 de la Ley de adopción nicaragüense dispone que la “adopción puede ser solicitada por ciudadanos de otros países [...] quienes, además de los requisitos exigidos para los nacionales en el artículo 3 de la misma Ley, deben reunir las condiciones personales y legales para adoptar exigidas por la Ley de su país de origen, domicilio o residencia”. Concluyendo que no resulta posible la emisión de un certificado de idoneidad para una inscripción de una adopción constituida con anterioridad.

3.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Valencia mediante auto de fecha 27 de diciembre de 2011, deniega la inscripción de nacimiento solicitada ya que los promotores no han presentado el certificado de idoneidad exigido, de acuerdo con los artículos 9.5 del Código Civil; 26.3 de la Ley de Adopción internacional; el apartado II.5 de la Resolución-Circular de 15 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento e inscripción en el Registro Civil española de adopciones internacionales; y la legislación nicaragüense en la materia, habida cuenta que aunque en la sentencia de adopción se dice que la promotora es de nacionalidad nicaragüense, también se recoge que el promotor es de nacionalidad española y ambos tienen su residencia en V. por lo que resulta preceptivo el certificado de idoneidad extendido por la Generalidad Valenciana.

4.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso reiterando su solicitud y alegando que para la adopción de la menor se han seguido todos los trámites legales requeridos por el Gobierno del Nicaragua y que ambos adoptantes tenían su residencia en ese país en el momento de la adopción. Aportan, entre otra documentación, certificado de idoneidad de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana de fecha 30 de mayo de 2006, para la tramitación de adopción internacional en Ucrania. En el mismo, se advierte expresamente que el plazo de validez de la declaración es de dos años.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso presentado. El Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 del Código civil; 25 y disposiciones adicional 2ª y final 22ª de la Ley Orgánica del Menor 1/1996, de 15 de enero; 26.3 de la Ley de Adopción Internacional; 15, 16

y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil; apartado II.5 de la Resolución-Circular de 15 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento e inscripción en el Registro Civil española de adopciones internacionales; y las Resoluciones de 19-2ª de noviembre de 1998; 21-1ª de diciembre de 2001; 17-6ª de septiembre de 2007; y 15-3ª de junio de 2009.

II.- Se pretende por los interesados la inscripción de la adopción de una menor nacida en 2011 en Nicaragua, constituida en dicho país por sentencia dictada el 4 de julio de 2011 por el Juzgado de Distrito de familia de Jinotepe. Los adoptantes, unidos en matrimonio ostentan, el marido, la nacionalidad española y, la mujer, la doble nacionalidad española y nicaragüense. De otro lado, según resulta de las certificaciones de empadronamiento incorporadas al expediente, la residencia habitual del matrimonio se halla en V. constando como residencia de ambos adoptantes en la sentencia de adopción también la ciudad de V. Acreditado su domicilio en España, por la entidad pública competente –Consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalidad Valenciana- se emitió informe manifestando que no era posible formular declaración de idoneidad a posteriori de una adopción ya constituida, ya que Nicaragua no es parte del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1995 ni existe convenio bilateral con España en materia de adopción; se ha incumplido el artículo 26.3 de la Ley de Adopción Internacional que establece la necesidad de que sea declarada la idoneidad de los adoptantes, cuando sean españoles y residentes en España, previamente a la constitución de la adopción por el órgano competente extranjero; y que, asimismo, no se ha cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 4.2 de la Ley de Adopción nicaragüense. Por el Encargado del Registro Civil de Valencia se dictó auto de 27 de diciembre de 2011 denegando la inscripción de la adopción por ser el adoptante español y estar domiciliado en España al tiempo de la adopción y no haber aportado el certificado de declaración de idoneidad a que estaba obligado por no hallarse incurso en ninguna de las excepciones que eximen de dicha aportación. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- Tratándose de adopción constituida en el extranjero, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, en su disposición adicional 2ª dispone que “para la inscripción en el Registro español de las adopciones constituidas en el extranjero, el encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 9.5 del Código Civil” y, según este artículo, modificado por la Disposición Final primera de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, redacción vigente en el caso de referencia, “la adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional”. Pues bien, el artículo 26 de la mencionada Ley, relativo a los requisitos para la validez en España de adopciones constituidas por autoridades extranjeras en defecto de normas internacionales, en su apartado 3º dispone que “cuando el adoptante sea español y residente en España, la Entidad Pública española competente deberá declarar su idoneidad previamente a la constitución de la adopción por el órgano competente extranjero”. En este caso, como se ha indicado anteriormente, la entidad pública competente (la de la residencia habitual de los adoptantes) no ha emitido la declaración de idoneidad de los adoptantes españoles previamente a que se constituyese la adopción.

En cuanto a la alegación que realizan los promotores en el escrito del recurso, sobre que tenían su residencia en Nicaragua en el momento de la constitución de la adopción; como señala el Encargado del Registro en el auto recurrido, se observa que en la Sentencia de adopción consta que ambos adoptantes tienen su residencia en V. y además, no se ha aportado prueba alguna en sentido contrario. Por otra parte, en cuanto al certificado de idoneidad de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana de fecha 30 de mayo de 2006 que aportan en trámite de recurso, el mismo se refiere a la tramitación de una adopción internacional en Ucrania y en él se advierte expresamente que el plazo de validez de la declaración es de dos años.

IV.- Por tanto, dado que, según resulta acreditado en las actuaciones, cuando se constituyó la adopción en Nicaragua los adoptantes estaban domiciliados en España, no puede prescindirse para la inscripción de la adopción solicitada, de la declaración española de idoneidad. El certificado de idoneidad debe acreditar la capacidad jurídica del solicitante, siempre con arreglo a la Ley material española (art. 9 nº 1 y nº 5-I C.C.). El objetivo y finalidad de este requisito es el de evitar que personas no idóneas para ser adoptantes acudan a países que no controlan con rigor la idoneidad de los adoptantes e insten en tales países una adopción que, posteriormente, intentan que sea reconocida en España.

En ausencia de este requisito se debe denegar el reconocimiento y, en consecuencia, la inscripción en el Registro Civil español (Resoluciones de 16-2ª de febrero de 1998 y 16-3ª de febrero de 1998). En la exigencia de este requisito esta Dirección General ha sido rigurosa, aplicándolo incluso respecto de adopciones constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que lo introdujo, pero cuya inscripción se solicitaba después de su vigencia (vid. Resoluciones de 25-3ª de junio de 1999 y 21-1ª de diciembre de 2001).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Valencia.

II. NOMBRES Y APELLIDOS

II.1.- Imposición nombre propio

II.1.1.- Imposición nombre propio-prohibiciones

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (68ª)

II.1.1.-Imposición de nombre.

Aunque la forma ortográficamente correcta y académicamente admitida del nombre elegido es "Hodei", no cabe rechazar la variante "Odei" porque, sobre no incurrir en ninguna de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, queda acreditado que no es infrecuente entre quienes ostentan dicho nombre.

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil de Getxo (Bizkaia).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Getxo en fecha 26 de marzo de 2010 el Sr. J-L. y Doña P. mayores de edad y domiciliados en dicha población, exponen que inscribieron a su hijo N-Hodei, nacido en G. el ... de ... de 2010, con el nombre que consta porque no les fue permitido el elegido, "N-Odei", que inmediatamente se dieron cuenta de que el inscrito es inadecuado e inadmisibles, puesto que llaman al bebé "Odei" desde que nació, va a tener doble nacionalidad y doble lengua y su familia holandesa lo llamará "Jodei", lo que objetivamente perjudica y resulta contrario al decoro, y que con la grafía que ellos pretenden consta inscrito el nombre en los Registros Civiles del País Vasco y solicitan la rectificación urgente de la inscripción realizada. Acompañan copia simple de la hoja del libro de familia correspondiente al menor, de un informe neonatológico en el que es identificado con un solo nombre, "Odei", y de certificado expedido por el Consulado de los Países Bajos en Bilbao para constancia de que el nombre "N-Odei" es aceptado en los Registros Civiles de ese país como nombre de varón; y listado del Instituto Vasco de Estadística con los cien nombres de varón más frecuentes entre 2004 y 2006.

2.- Ratificado por los promotores el escrito presentado, el ministerio fiscal informó que no se opone al cambio de nombre solicitado y el 14 de mayo de 2010 la Juez Encargada, razonando que, según las normas de Euskaltzaindia, la grafía correcta del segundo nombre del inscrito es Hodei y que se notificó a los recurrentes que el momento de presentar documentación a fin de que se pueda autorizar el nombre elegido es antes de la inscripción, dictó auto disponiendo desestimar el recurso.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, los dos representantes legales del menor interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando las alegaciones ya formuladas, adjuntando la documental ya aportada y solicitando nuevamente la rectificación del nombre inscrito.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando que la resolución impugnada es conforme a derecho, se opuso al recurso y la Juez Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192 y 193 del Reglamento de Registro Civil (RRC), la Circular de 2 de julio de 1980 y las resoluciones, entre otras, de 5-4ª de noviembre de 2003, 14-1ª de febrero y 22-3ª de abril de 2004, 2 de febrero de 2008 y 3-2ª de diciembre de 2009.

II.- Los ahora recurrentes solicitan inscribir a su hijo, nacido en ... de 2010, con los nombres de "N-Odei" que la Encargada no admite porque, según las normas de la Real Academia de la Lengua Vasca, la grafía correcta del segundo de los propuestos es "Hodei".

III.- Los padres tienen amplia libertad para escoger los nombres propios que estimen más convenientes para sus hijos, no pudiendo ser rechazado el elegido más que cuando claramente incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley del Registro Civil y 192 de su Reglamento, que han de ser restrictivamente interpretadas.

IV.- Aun cuando consta que la forma ortográficamente correcta y académicamente aceptada del nombre propuesto es "Hodei", no cabe rechazar la variante "Odei" porque no incurre en ninguno de los supuestos de prohibición contemplados en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil y, a mayor abundamiento, los recurrentes acreditan que no es infrecuente entre quienes ostentan dicho nombre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Disponer que se inscriba al menor con el nombre de "N- Odei".

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Getxo (Bizkaia).

II.2.- Cambio de nombre

II.2.2.- Cambio nombre-justa causa

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (105ª)

II.2.2.-Cambio de nombre

Hay justa causa para cambiar "Azaara-Mª" por "Azahara-Mª" grafía castellana correcta del primero de los nombres inscritos.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Salamanca en fecha 21 de septiembre de 2010 Doña Azaara-Mª. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del

nombre inscrito por "Azahara-Mª. exponiendo que este último es el que siempre ha venido usando y por el que es conocida en su entorno familiar y social. Acompaña certificación literal de nacimiento y copia de DNI con el nombre inscrito y constancia de empadronamiento en S. y documentos de todo tipo con el nombre en la forma interesada. En el mismo día, 21 de septiembre de 2010, la promotora ratificó la solicitud, comparecieron como testigos su madre y una hermana, que manifestaron que siempre escribe su nombre con hache y que con hache consta en toda la documentación que recibe, y se dispuso la publicación de edictos.

2.- El ministerio fiscal informó que no tiene inconveniente alguno en que se acceda a lo solicitado y el 25 de octubre de 2010 el Juez Encargado, razonando que el servicio público que debe prestar el Registro Civil se vería seriamente perturbado si hubieran de satisfacerse todas las peticiones de introducción o retirada de haches, dictó auto disponiendo no acceder al cambio de grafía del nombre.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en su día presentó documental de todo tipo que prueba que en su relación tanto con las Administraciones Públicas como con entidades privadas es identificada con el nombre que solicita.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que entiende que, por mínimo que sea el cambio, existe justa causa, ya que para el interesado no es intrascendente y, en este caso, hay incluso razón gramatical, y la Juez Encargada informó que estima que debe mantenerse el auto apelado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil) y las resoluciones, entre otras, de 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 22-3ª de abril, 26-2ª de octubre y 2-5ª de noviembre de 2004; 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005, 7-4ª de marzo, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006; 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008, 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009, 15-7ª de marzo de 2010, 21-10ª de febrero y 10-6ª de junio de 2011 y 17-59ª de abril de 2012.

II.- Se pretende por la promotora cambiar el nombre "Azaara-Mª." que consta en su inscripción de nacimiento por "Azahara-Mª", exponiendo que este último es el que siempre ha venido usando y por el que es conocida en su entorno familiar y social. El Juez Encargado, razonando que el servicio público que debe prestar el Registro Civil se vería seriamente perturbado si hubieran de satisfacerse todas las peticiones de introducción o retirada de haches, dictó auto disponiendo no acceder al cambio de grafía solicitado mediante auto de 25 de octubre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el uso habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV.- Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar "Azaara-Mª." por "Azahara-Mª". Siendo, en efecto, doctrina reiterada de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima o intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación

de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que llegue a ser conocida familiar y socialmente con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación gráfica de su nombre oficial, también lo es que la mencionada doctrina viene siendo exceptuada en casos, como el presente, en los que, lejos de pretenderse una de varias grafías posibles y admitidas, es ostensible y notorio que el nombre está incorrectamente escrito.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, "Azaara-Mª", por "Azahara-Mª", no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado Reglamento.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (110ª)

II.2.2.-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar "Moneiba" por "Moneyba".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria en fecha 20 de abril de 2010 Doña L-V. y Don A-E. mayores de edad y domiciliados en S-B. (P), solicitan el cambio del nombre inscrito a su hija Moneiba. nacida en L. el ... de ... de 1999, por "Moneyba", exponiendo que este último es el usado por la menor en todos los actos de su vida social y privada. Acompañan copia del DNI de ambos y, de la menor, certificación literal de nacimiento y copia de DNI con el nombre inscrito y documental acreditativa del uso del nombre propuesto. En el mismo día, 20 de abril de 2010, los promotores ratificaron la solicitud y comparecieron dos testigos que manifestaron que conocen a la niña desde que tenía cuatro años el primero y desde que nació la segunda y que siempre la han visto firmar y escribir su nombre con i griega.

2.- El Ministerio Fiscal informó que no tiene nada que oponer a lo solicitado, que reúne los requisitos legalmente exigidos, y el 25 de mayo de 2010 la Juez Encargada, considerando que no ha quedado probado que medie justa causa, dictó auto disponiendo no autorizar el cambio de nombre interesado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, los dos representantes legales de la menor interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el propósito de ajustar la regulación registral a la realidad social es por sí solo justa causa, que "Moneyba" tiene unas raíces históricas de las que "Moneiba" carece y que la correcta elección del nombre influye en el desarrollo del individuo.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, reiterando su anterior informe, interesó la estimación del recurso y la Juez Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero de 1996, 1-1ª y 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo de 1997; 2-3ª y 29-5ª de marzo de 1999; 6-2ª de abril, 18-3ª de julio y 4-6ª de octubre de 2000, 18-7ª de mayo y 7-2ª de diciembre de 2001; 22-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina consolidada de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la consistente en sustituir, a efectos meramente gráficos, una "i" latina por una "y" griega, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Moneiba por "Moneyba", y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que la propia documental aportada al expediente acredita que las dos grafías son indistintas.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (146ª)

II.2.2.-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar "Elisabet" por "Elizabeth".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Gijón (Asturias).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Gijón en fecha 25 de febrero de 2010 Doña Elisabet C.C. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por "Elizabeth", que es el usado habitualmente. Acompaña certificación literal de nacimiento y copia de DNI con el nombre inscrito y volante de empadronamiento en G. y alguna otra documental con el nombre propuesto. En el mismo día, 25 de febrero de 2010, comparecieron dos testigos que manifestaron que conocen a la promotora desde hace cinco años la primera y desde hace dos el segundo y que siempre la han visto escribir su nombre en la forma pretendida.

2.- El Ministerio Fiscal se opuso a lo solicitado, por no reunir los requisitos exigidos legalmente, y el 4 de marzo de 2010 el Juez Encargado, apreciando que no existe justa causa para tan mínima modificación, dictó auto disponiendo denegarla.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso mediante representante ante la Dirección General de los Registros alegando que el nombre equivalente a "Elizabeth" es Isabel, que "Elisabet" no existe como tal y es una mera transcripción fonética del nombre inglés, que desde que tiene uso de razón escribe su nombre conforme a la gramática de la lengua inglesa y que el nombre, en cuanto atributo de la personalidad, debe satisfacer plenamente a quien lo lleva y no causarle problemas de tipo psicológico.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso al recurso e interesó la confirmación de la resolución impugnada y la Juez Encargada acordó, con informe desfavorable, la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero de 1996, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo de 1997; 18-3ª de julio y 4-6ª de octubre de 2000, 18-7ª de mayo y 7-2ª de diciembre de 2001; 22-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la consistente en sustituir, a efectos meramente gráficos, una ese por una zeta y adicionar una hache final, que ni siquiera implica alteración fonética, a un nombre que ha alcanzado sustantividad y que está correctamente escrito conforme a las reglas ortográficas de las lenguas españolas, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Elisabet por "Elizabeth", tal como

expresan respecto a dicho nombre las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gijón (Asturias).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (149ª)

II.2.2.-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar "Cintia" por "Cynthia".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Araba).

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Vitoria-Gasteiz en fecha 4 de marzo de 2010 Doña Cintia M.C. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por "Cynthia", exponiendo que en su día se lo pusieron mal por un error, que toda la gente que conoce la considera "Cynthia" y que también figura así en diversos documentos. Acompaña copia compulsada de DNI y certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito y alguna documental a fin de acreditar el uso del nombre propuesto. En el mismo día, 4 de marzo de 2010, la promotora ratificó la solicitud y se tuvo por incoado expediente sobre autorización de cambio de nombre por el usado habitualmente.

2.- El Ministerio Fiscal se opuso a modificación tan mínima y el 9 de marzo de 2010 la Juez Encargada, no apreciando justa causa para el cambio instado, dictó auto disponiendo denegarlo.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que en la pulsera identificativa que le pusieron nada más nacer ya constaba como "Cynthia", que como su DNI no se corresponde con la realidad puede tener graves problemas en trámites importantes, que el nombre que solicita, que se pronuncia con ese, supone un cambio fonético respecto al inscrito y que en su vida diaria no hay nadie que la identifique como "Cintia".

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, considerando que en el expediente no se acredita la existencia de justa causa, impugnó el recurso e interesó la confirmación de la resolución apelada y la Juez Encargada informó que considera que no se dan los requisitos legalmente establecidos para proceder al cambio de nombre solicitado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo

de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 26-5ª de octubre de 1998; 1-2ª de julio y 4-6ª de octubre de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 30-2ª de julio, 6-3ª de septiembre, 28-2ª de octubre y 27-1ª de noviembre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 17-1ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009, 14-17ª de diciembre de 2010, 20-3ª de enero de 2011 y 18-2ª de febrero de 2013.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la intercalación gráfica de una hache, muda en las lenguas españolas, y la sustitución, también a efectos exclusivamente gráficos, de la vocal “i” por la consonante de igual fonética, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar “Cintia” por “Cynthia”, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que “Cintia” es grafía correcta castellana, como acredita alguna de la documental aportada por la promotora al expediente y expresan respecto a dicho nombre las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Araba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (152ª)

II.2.2.-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar “Sara” por “Sarah”.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Orío (Gipuzkoa) en fecha 11 de junio de 2009 Doña Sara Z.E. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por “Sarah”, exponiendo que este último es el que viene usando desde la infancia y con el que se identifica en todos los órdenes de la vida. Acompaña copia de DNI, certificación

literal de nacimiento y certificado de empadronamiento en O. con el nombre inscrito y alguna documental a fin de acreditar el uso del nombre propuesto. En el mismo día, 11 de junio de 2009, comparecen como testigos su novio y un hermano, que manifiestan que a todos los efectos la conocen con el nombre de "Sarah".

2.- Recibido el expediente en el Registro Civil de Donostia-San Sebastián, el Ministerio Fiscal lo informó favorablemente y el 5 de octubre de 2009 la Juez Encargada, apreciando que no concurre justa causa para un cambio que ni siquiera altera fonéticamente el nombre, dictó auto disponiendo denegarlo.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que, aunque la hache no altere fonéticamente el nombre ni propicie errores en la identificación de la persona, el motivo de su solicitud es la costumbre, ya que quiere legalizar la forma en que desde pequeña escribe su nombre.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, entendiendo que no procede autorizar tan ligera variación en la forma de escribir el nombre inscrito, interesó la desestimación del recurso presentado y la Juez Encargada informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución impugnada, estima que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo de 1997; 18-3ª de julio de 2000; 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la consistente en adicionar una hache final, que ni siquiera implica alteración fonética, a un nombre correctamente escrito, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Sara por "Sarah", tal como expresan respecto a dicho nombre las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (42ª)

II.2.2.-Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar “María-Ester” por “María-Esther”, variante gráfica de un nombre correctamente inscrito.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gijón (Asturias).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Pola de Siero (Asturias) en fecha 6 de octubre de 2010 Doña María-Ester. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita que se rectifique su nombre en la inscripción de su nacimiento, exponiendo que aparece sin hache y que, como ha estado viviendo fuera de España, en todos sus documentos figura con hache. Acompaña copia compulsada de su DNI, certificación literal de nacimiento y certificado de empadronamiento en P de S. (A) con el nombre inscrito y copia compulsada de libro de familia, de pasaporte y de algunos documentos brasileños en los que el nombre aparece en la forma que solicita.

2.- El Ministerio Fiscal se opuso a la rectificación pretendida, por no existir justa causa para modificación de tan escasa entidad, y el Encargado del Registro Civil de Pola de Siero informó que en lo actuado ha quedado evidenciada la realidad de lo instado y dispuso la remisión del expediente al Registro Civil de Gijón, cuya Encargada dictó el 18 de noviembre de 2010 auto disponiendo desestimar la solicitud de cambio de nombre por el usado habitualmente.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre aparece en la forma “Esther” en toda su documentación personal brasileña, en documentos españoles como los DNI de sus hijas, su pasaporte o la inscripción de su matrimonio en el consulado de España en Brasil y hasta en su firma personal y aportando como prueba diversa documental, mayoritariamente brasileña pero también española.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que presentó escrito de oposición al recurso, y la Juez Encargada del Registro Civil de Gijón acordó, con informe desfavorable, la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 10-2ª de abril, 17-3ª de mayo y 8-2ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009, 14-17ª de diciembre de 2010 y 21-22ª de junio de 2013.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de

Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina consolidada de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III-. Siendo evidentemente una modificación mínima la intercalación gráfica de una hache, muda en las lenguas españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar “María-Ester” por “María-Esther”, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que “Ester” es grafía correcta castellana, tal como expresan respecto a este nombre algunas de las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gijón (Asturias).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (43ª)

II.2.2.-Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar “María-Ester” por “María-Esther”, variante gráfica de un nombre correctamente inscrito.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Cartagena en fecha 27 de enero de 2010 Doña F-A-M. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito a su hija menor de edad Mª-Ester. nacida en C. el ... de ... de 1993, por “María Esther”, exponiendo, de un lado, que su marido no puede comparecer, toda vez que sufre una minusvalía incapacitante que le impide desplazarse, y de otro, que su hija ha sido siempre conocida en la familia, en el colegio y entre los amigos por el nombre que para ella pide. Acompaña copia de DNI propio, de su cónyuge y de su hija y, de esta, certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito y volante individual de empadronamiento en C. y algunos otros documentos en los que el nombre de la menor aparece en la forma pretendida. En el mismo día, 27 de enero de 2010, comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la promotora y que les consta que son ciertos los hechos expresados en el escrito de iniciación del expediente.

2.- El ministerio fiscal no se opuso a la modificación del nombre y el 23 de febrero de 2010 la Juez Encargada, entendiéndolo que se trata de una alteración mínima que en realidad no implica cambio de nombre, dictó auto disponiendo no autorizar lo solicitado.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado recurso que firma con ella la menor interesada alegando que el cambio de nombre está plenamente justificado y encaja en lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley del Registro Civil y aportando como prueba certificados recién

expedidos por una policlínica sobre el nombre que la interesada usa y por una parroquia sobre nombre que aparece en la inscripción bautismal.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, habida cuenta de que no existe justa causa para una modificación tan mínima que ni siquiera afecta a la pronunciación del nombre, se opuso al recurso presentado interesando, en consecuencia, la confirmación del auto apelado y el Juez Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 10-2ª de abril, 17-3ª de mayo y 8-2ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009, 14-17ª de diciembre de 2010 y 21-22ª y 28-7ª de junio de 2013.

II.- En el ejercicio de la patria potestad solicita la promotora el cambio del nombre con el que está inscrita su hija menor de edad “Mª-Ester” por “Mª-Esther” sin que conste que el padre le haya conferido la representación necesaria para actuar en su nombre ni que la interesada, ampliamente superada la edad de doce años asociada al concepto legal de suficiencia de juicio, haya sido oída, conforme dispone el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en un procedimiento administrativo que indudablemente afecta a su esfera personal, familiar y social. La Juez Encargada dispuso no autorizar el cambio de nombre solicitado mediante auto de 23 de febrero de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la promotora pero, suscrito y sucesivamente ratificado por la interesada, a punto de alcanzar la mayoría de edad, han de estimarse subsanados posibles defectos de legitimación de la promotora.

III.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina consolidada de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

IV.- Siendo evidentemente una modificación mínima la intercalación gráfica de una hache, muda en las lenguas españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar “Mª-Ester” por “Mª-Esther”, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que “Ester” es grafía correcta castellana, tal como expresan respecto a este nombre algunas de las resoluciones de la Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (65ª)

II.2.2.-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar "Silvia" por "Sylvia".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Donostia-San Sebastián en fecha 8 de abril de 2010 Doña Silvia. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por "Sylvia", exponiendo que este último es el que usa habitualmente y con el que se identifica en todos los órdenes de la vida. Acompaña fotocopia de DNI, certificado de empadronamiento en D. y certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito y alguna documental a fin de acreditar el uso del propuesto. El 30 de abril de 2010, la promotora ratificó la solicitud y se tuvo por incoado expediente sobre autorización de cambio de nombre por el usado habitualmente y el 7 de mayo de 2010 comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la promotora hace más de diez años y que les consta que utiliza habitualmente el nombre pretendido.

2.- El ministerio fiscal informó favorablemente y el 25 de octubre de 2010 la Juez Encargada, no apreciando justa causa para cambio de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo denegarlo.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que uno y otro nombre tienen origen etimológico distinto, ya que "Silvia" proviene del gentilicio atribuido a la legendaria madre de Rómulo y Remo y "Sylvia" de la raíz griega xylos y que el uso del nombre habitual en lugar del que consta en la documentación oficial le acarrea diversos problemas e incomodidades en la vida diaria.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso por la propia argumentación del auto apelado, cuya íntegra confirmación interesó, y la Juez Encargada informó que no han quedado desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución dictada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 26-1ª de octubre de 1998; 1-2ª de julio y 4-6ª de octubre de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 30-2ª de julio, 6-3ª de septiembre, 28-2ª de octubre y 27-1ª de noviembre de 2003; 3 de enero, 2-2ª de marzo, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 24-4ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 17-1ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo, 11-5ª de junio y 4-6ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª

de febrero de 2009, 25-2ª de junio y 14-17ª de diciembre de 2010, 20-3ª de enero de 2011 y 18-2ª de febrero de 2013.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la sustitución a efectos meramente gráficos, de la vocal "i" por la consonante de igual fonética, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar "Silvia" por "Sylvia", y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que "Silvia" es grafía correcta en las lenguas españolas, como expresan respecto a este nombre las resoluciones de la Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Donostia-San Sebastián.

II.2.3.- Cambio nombre-prohibiciones art 54 lrc

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (109ª)

II.2.3.-Cambio de nombre.

No siendo admisible cambiar un nombre por otro que haga confusa la identificación de la persona e induzca a error en cuanto al sexo, menos aún ha de serlo la sustitución de un nombre por una letra.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Talavera de la Reina en fecha 25 de junio de 2009 Don Guzmán mayor de edad y domiciliado en E., solicita el cambio del nombre inscrito por "G", exponiendo que Guzmán es más usual como apellido que como nombre e incompatible con los sistemas operativos de su empresa y que todo ello le genera problemas que le están afectando psicológicamente. Acompaña certificaciones literales de nacimiento propia y de un hijo llamado Guzmán, certificación de inscripción en el padrón de A. y abundante documental que acredita que su dirección corporativa de correo electrónico es "g- - - - -@".

2.- En el mismo día, 25 de junio de 2009, el promotor ratificó la solicitud y por el Juez Encargado se dispuso expedir exhorto al de E. a fin de que se dé conocimiento de la

incoación del expediente a las partes con interés legítimo, padre y dos hermanas. El padre, el único de los tres con residencia en el municipio, compareció el 7 de octubre de 2009 y se dio por conforme, librado nuevo exhorto a fin de que el promotor indique el domicilio de sus hermanas, señaló las localidades toledanas de B. y O. el 11 de diciembre de 2009 compareció en el Juzgado de Paz de la primera una de las hermanas, que manifestó que nada tiene que oponer a la pretensión de su hermano y, desconocida la otra hermana en O. y librado un tercer exhorto al Registro Civil de E. para que el promotor facilite su domicilio, da otra dirección de O. en cuyo Registro Civil fue notificada el 10 de mayo de 2010. Seguidamente por el Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina se dispuso la publicación de edictos.

3.- El Ministerio Fiscal se opuso al cambio de nombre interesado, por no concurrir la justa causa exigida, y reprodujo al final de su informe el tenor literal del artículo 54 de la Ley del Registro Civil y el 16 de septiembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina, razonando que el nombre propuesto infringe las normas que regulan su imposición, dictó auto disponiendo denegar el cambio solicitado.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, como consta en los documentos ya aportados, desde hace aproximadamente diez años es conocido como "G" en su ámbito personal y laboral y que "G" no da lugar a confusión, ya que existen nombres como "Reyes", "Rosario" o "Patrocinio" que identifican tanto a mujer como a hombre.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que, remitiéndose al informe anteriormente emitido, insistió en la falta de justa causa y en que G hace confusa la identificación de la persona, y el Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192, 195, 206, 209, 210, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 6-1ª y 24-2ª de febrero de 2003, 8-4ª de junio, 20-2ª de septiembre y 8-3ª de octubre de 2004; 16-2ª de junio de 2005, 11-3ª de mayo de 2007, 19-8ª de noviembre de 2008, 19-1ª de enero, 6 de junio de 2009, 10-21ª de diciembre de 2010 y 18 de abril de 2011.

II.- Pretende el promotor cambiar su nombre, Guzmán, por la letra ge mayúscula, exponiendo que Guzmán le ocasiona problemas porque es más usual como apellido que como nombre. El Juez Encargado, razonando que el nombre propuesto infringe las normas que regulan su imposición, dispuso denegar el cambio solicitado mediante auto de 16 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre inscrito por el uso habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC), siempre que exista justa causa y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. art. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que inicialmente debe ser rechazado.

IV.- En este caso, sobre no aportarse, más allá de la dirección corporativa de correo electrónico, elementos de prueba, ni testifical ni documental, que acrediten el uso habitual de G como nombre, no es admisible como tal una letra porque al extender los asientos no pueden usarse otras abreviaturas que las reglamentariamente admitidas (cfr. arts. 34 LRC y 298.6º RRC), la reducción a inicial no es supuesto contemplado en la enumeración que hace el artículo 206,I RRC de las modalidades que pueden adoptar los cambios de nombre

y apellidos y, sobre todo y fundamental, una letra en funciones de nombre incurre en dos de las escasísimas causas de prohibición subsistentes en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, habida cuenta de que puede tomarse por inicial de apellidos usuales o de un nombre, de varón o de mujer y, en consecuencia, hace confusa la identificación de la persona e induce a error en cuanto al sexo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (150ª)

II.2.3.-Cambio de nombre

Es admisible "Arnau-Asrat" porque el nombre extranjero "Asrat" no es socialmente percibido como apellido y, en consecuencia, no incurre en causa de prohibición por hacer confusa la identificación de la persona.

En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Balaguer (Lleida).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Balaguer en fecha 5 de julio de 2010 Don J. y Doña Mª-R. mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan el cambio del nombre de su hijo menor de edad Asrat por "Arnau-Asrat", exponiendo que este último es el que usa habitualmente. Acompañan copia compulsada de sus respectivos DNI, certificado de empadronamiento en B. e inscripción de nacimiento de Asrat. nacido en W. (Etiopía) el ... de ... de 2005, practicada el 17 de marzo de 2010 con marginal de adopción por los promotores en virtud de sentencia de 2 de noviembre de 2008 dictada por tribunal federal de primera instancia de la República Democrática de Etiopía; y alguna documental sanitaria y escolar a fin de acreditar el uso del nombre solicitado.

2.- El Ministerio Fiscal emitió informe favorable y el 5 de agosto de 2010 la Juez Encargada, considerando acreditado el uso y que "Asrat" podría hacer confusa la identificación, porque cabría interpretar que forma parte o es primer apellido, dictó auto disponiendo autorizar el cambio del nombre inscrito por "Arnau".

3.-. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no se resuelve sobre la petición formulada sino que se dictamina para el menor un cambio de nombre no solicitado y que desean mantener el nombre que el menor ostentaba, para que no pierda sus raíces, y anteponerle el que ha venido usando desde su llegada a nuestro país, a fin de facilitar su adaptación.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se adhirió al recurso, y la Juez Encargada informó que considera que deberían darse por buenos los razonamientos

jurídicos de la resolución dictada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192, 195, 206, 209, 210, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 20-2ª de abril de 1995, 23-2ª de julio de 2004, 19-3ª de diciembre de 2007, 11-1ª de febrero de 2009 y 21-80ª de junio de 2013.

II.- Se pretende por los promotores el cambio del nombre, "Asrat", que consta en la inscripción de nacimiento, practicada en marzo de 2010, de un menor nacido en el extranjero en ... de 2005 y adoptado por ellos, por "Arnau-Asrat" exponiendo que este último es el que ha venido usando desde su llegada a nuestro país. La Juez Encargada, considerando acreditado el uso y que "Asrat" podría hacer confusa la identificación, porque cabría interpretar que forma parte o es primer apellido, dispuso autorizar el cambio del nombre inscrito por "Arnau" mediante auto de 5 de agosto de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por los promotores y al que se adhiere el Ministerio Fiscal.

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que el solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV.- Se discute en estas actuaciones si es admisible "Arnau-Asrat" como nombre propio. Partiendo del principio general de que todas las prohibiciones han de ser interpretadas de manera restrictiva, solo cabe rechazar un nombre cuando claramente aparezca que incurre en alguna de las genéricamente contenidas en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil que, en la práctica, han de fijarse teniendo en cuenta la realidad política, cultural y social de cada momento. El nombre extranjero, "Asrat", que le fue impuesto al menor en su país natal, aunque por extrañeza a nuestra cultura pudiera ser tomado por apellido, por la misma razón no es inequívocamente percibido como tal; el nombre, "Arnau", que la Encargada autoriza y el primer apellido del menor, "Vidal", tienen en común su doble condición de nombre y de apellido; este hecho objetivo impide apreciar que el segundo nombre solicitado para el menor y único que ha ostentado hasta ahora fuera causante único de las dudas que pudieran suscitarse acerca de las menciones de identidad que son nombres y las que son apellidos y, por tanto, ha de considerarse no afectado por las limitaciones que establece el artículo 54 LRC.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre) el cambio del nombre del inscrito, "Asrat", por "Arnau-Asrat", no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento del interesado y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar, en su caso, las comunicaciones previstas en el artículo 217 de dicho Reglamento.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Balaguer (Lleida).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (66ª)

II.2.3.-Cambio de nombre.

Es admisible el cambio de “Eva-María” por el nombre extranjero “Ewa”.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid en fecha 1 de octubre de 2010 Doña Eva-María mayor de edad y domiciliada en M., solicita el cambio del nombre inscrito por “Ewa”, exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en el entorno familiar, social y profesional. Acompaña certificación literal de nacimiento y copia de volante de empadronamiento y de DNI con el nombre inscrito y copia de diversa documental en la que se identifica como “Ewa”.

2.- Ratificada la solicitud por la promotora, el ministerio fiscal se opuso a la petición, por cuanto Eva se escribe con “v” no solo en español sino en cualquier lengua, y el 5 de noviembre de 2010 el Juez Encargado, razonando que el nombre no es admisible con la grafía pretendida y, por tanto, infringe las normas que regulan su imposición, dictó auto acordando desestimar la petición formulada.

3.-. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre existe y la grafía que pretende es correcta y, aportando, como prueba documental, dos páginas de la Wikipedia.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, mostrando conformidad con la fundamentación jurídica de la resolución impugnada, se opuso a la estimación del recurso y el Juez Encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 210 y 218 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 20-2ª de abril de 1995, 23-2ª de julio de 2004, 19-3ª de diciembre de 2007 y 11-1ª de febrero de 2009.

II.- Se pretende por la promotora el cambio del nombre, “Eva-María”, que consta en su inscripción de nacimiento por “Ewa”, alegando que este último es el que usa habitualmente. El Juez Encargado, considerando que el nombre interesado se escribe con uve y, por tanto, no es admisible con la grafía solicitada, dispuso denegar el cambio mediante auto de 5 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que el solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV.- Se discute en estas actuaciones si es admisible la grafía “Ewa” para el nombre que se solicita. Partiendo del principio general de que todas las prohibiciones han de ser interpretadas de manera restrictiva, solo cabe rechazar un nombre cuando claramente aparezca que incurre en alguna de las genéricamente contenidas en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil que, en la práctica, han de fijarse teniendo en cuenta la realidad política, cultural y social de cada momento. “Ewa” no es susceptible de ser tomado por apellido, tiene claramente apariencia de nombre, la recurrente acredita que lo es en algunos países de nuestro entorno europeo y como tal nombre extranjero no incurre en ninguna de las causas de prohibición subsistentes en el artículo 54 LRC.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Autorizar el cambio del nombre inscrito, “Eva-María”, por “Ewa”, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 de dicho Reglamento.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Único de Madrid.

II.3.- Atribución apellidos

II.3.2.- Régimen de apellidos de los españoles

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (147ª)

II.3.2.- Atribución de apellidos. Menor hispano-portugués.

1º.- En supuestos de doble nacionalidad, la ley personal distinta de la española de uno de los progenitores no puede condicionar la aplicación del artículo 194 del Reglamento del Registro Civil, sin perjuicio, en caso de ciudadanos comunitarios, de la posibilidad de instar un expediente de cambio de apellidos para adaptarlos a la ley aplicable en el país de la nacionalidad del otro progenitor.

2º.- Se examina, por economía procesal y por delegación, el cambio de apellidos y se autoriza por concurrir los requisitos exigidos.

En el expediente de atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra la inscripción realizada en el Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de La Coruña el 26 de enero de 2007, Mª-G.T.F. de nacionalidad española y G-N. P. G. C. de nacionalidad portuguesa, ambos mayores de edad y con domicilio en C. solicitaron la inscripción de nacimiento de su hijo X. nacido el... de... de 2005 en B. con los apellidos consignados en el Registro Civil belga,

T. G. por ser el padre de nacionalidad portuguesa y G. el apellido paterno del progenitor según su ley personal. Aportaban la siguiente documentación: acta de nacimiento belga del menor, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de la madre y volante de empadronamiento familiar en C.

2.- Informados los promotores por parte de la encargada del Registro Civil Central de que el nacido debía ser inscrito con sus apellidos conforme a la legislación española, solicitaron nuevamente su inscripción tal como figura en el registro belga, aportando diversos documentos que acreditan el uso desde el nacimiento de los apellidos T. G.

3.- Una vez realizada la inscripción siguiendo los criterios de atribución de la legislación española, se interpuso recurso alegando los inconvenientes que supondría para el menor la imposición de unos apellidos distintos de los que ha venido utilizando desde que nació.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que consideró ajustada a derecho la inscripción realizada. La encargada del Registro Civil Central se ratificó en la calificación realizada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 109 del Código civil (CC.); 57 y 59 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 195, 205, 209 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), las instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007 y de 24 de febrero de 2010 y las resoluciones de 31 de marzo de 1995, 30-6ª de mayo y 23-5ª de octubre de 2006 y 13-2ª de abril de 2009.

II.- Pretenden los promotores con el recurso planteado el cambio de los apellidos de su hijo en la inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil español, de manera que resulten T. G. (primer apellido de la madre y segundo del padre, respectivamente), tal como fue inscrito en el Registro Civil de Bruselas, lugar de su nacimiento. Justifican la petición en la nacionalidad portuguesa del padre, según cuyo sistema de atribución el apellido paterno es el que consta en segundo lugar, y en el uso de los apellidos solicitados desde que el menor nació, dado que así fue inscrito en el Registro belga. No obstante, el criterio aplicado por el Registro Civil Central se ha basado en la interpretación literal del artículo 194 del Reglamento del Registro Civil, según la cual la expresión “primero” se refiere al que aparezca como tal en los apellidos del padre, de modo que el menor quedó inscrito finalmente con los apellidos T. P.

III.- El artículo 194 RRC dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC. -a la que precisamente se han acogido los progenitores al solicitar que el apellido materno figure en primer lugar-, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. Ello es aplicable tanto a los extranjeros que adquieren la nacionalidad española como a los ciudadanos con doble nacionalidad que solicitan su inscripción en el Registro Civil español. En este caso el primer apellido del padre es el que se hizo constar en la inscripción española, por lo que no se advierte la existencia de irregularidad alguna por parte de la encargada del registro. No es admisible la alegación de los promotores apelando a una interpretación finalista del artículo 194 RRC según la cual, conforme al sistema de atribución portugués, debía hacerse constar como apellido paterno el segundo del progenitor porque no se estima conforme con la evolución y modificaciones habidas en materia de atribución de apellidos. Basta pensar en la facultad que tienen los progenitores de invertir el orden de los apellidos de los hijos (opción efectivamente ejercitada en este caso) para poner en duda que el artículo reglamentario citado deba interpretarse actualmente en el sentido de que son los paternos los que han de transmitirse y que así ha de actuarse cuando se trate de

extranjeros que adquieren la nacionalidad española o de ciudadanos con doble nacionalidad que solicitan su inscripción en el Registro Civil español.

IV.- Es cierto que este criterio presenta el inconveniente de que el menor inscrito, que ostenta la doble nacionalidad hispano-portuguesa, puede verse abocado a una situación en la que sea identificado con apellidos distintos en los países con los que está vinculado (España y Portugal, de los cuales ostenta la nacionalidad, y Bélgica, donde nació). Se ha afirmado que los inconvenientes derivados de tal situación dificultan la libertad de circulación de los individuos que poseen la ciudadanía de la Unión Europea. Esta situación ha sido abordada tanto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de octubre de 2003, en el asunto García-Avello, como en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 octubre 2008, en el asunto Grunkin-Paul.

V.- En la primera de las sentencias aludidas el tribunal falló en el sentido de estimar contraria al derecho comunitario la normativa del Estado belga que establecía que en caso de doble nacionalidad de un belga debía prevalecer, siempre, la nacionalidad belga a efectos de imposición de los apellidos (coincidente pues, en este punto, con la ley española). Sin embargo, la legislación española, cuando el interesado está inscrito en otro Registro Civil extranjero con otros apellidos, admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, pueda ser objeto de anotación registral conforme al artículo 38.3 de la Ley del Registro Civil. Esta anotación sirve para poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y para disipar dudas en cuanto a la identidad del interesado, máxime si como resultado de tal anotación se expide el certificado plurilingüe de diversidad de apellidos previsto en el Convenio nº 21 de la Comisión Internacional de Estado Civil (CIEC) hecho en La Haya en 1982. Pero, sobre todo, la normativa española admite la posibilidad de que el interesado promueva un expediente de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia que le permitirá por esta vía obtener los apellidos en la forma deseada, habida cuenta de que, llegado el caso, deben interpretarse las normas que rigen los expedientes registrales de cambio de apellidos en España (arts. 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil) en forma tal que en ningún supuesto cabrá denegar el cambio pretendido cuando ello se oponga a la doctrina sentada por la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

VI.- La libertad de elección para los padres en el caso examinado se ha de canalizar, por tanto, a través del expediente registral regulado por los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil, expediente que se instruye en el Registro Civil del domicilio del promotor y cuya competencia resolutoria corresponde al Ministerio de Justicia y hoy, por delegación (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado. De esta manera se salvan los inconvenientes antes apuntados derivados de la aplicación de diferentes criterios a ciudadanos comunitarios que ostentan doble nacionalidad. De hecho, ésta es la interpretación oficial de la Dirección General de los Registros y del Notariado, expuesta en la Instrucción de este centro directivo de 23 de mayo de 2007, y que ha generado una práctica administrativa por la que se viene concediendo sin dificultad alguna la autorización para la modificación de los apellidos en casos de binacionalidad (siempre que se trate de personas con ciudadanía de la Unión Europea), habiéndose resuelto a fecha de hoy diversos expedientes de cambios de apellidos de niños que ostentan la doble nacionalidad española y portuguesa.

VII.- Es esta posibilidad de cambio la que debe ser examinada en el presente caso, pues razones de economía procesal así lo aconsejan en tanto que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente que conduciría al mismo fin práctico. El resultado de tal examen, a la vista de la documentación aportada y, especialmente, de la certificación portuguesa de nacimiento del menor incorporada al expediente a requerimiento de este centro, es que concurren en el presente caso todos los requisitos necesarios para autorizar el cambio pretendido de acuerdo con los criterios establecidos por la instrucción antes mencionada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar el recurso y confirmar la inscripción realizada.

2º. Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de octubre) el cambio de apellidos del menor X. T. P. por T. G. no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento del interesado y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que establece el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el art. 217 RRC.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

II.4.- Cambio de apellidos

II.4.1.- Modificación de apellidos

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (107ª)

II.4.1.-Inversión de apellidos

La inversión de apellidos del mayor de edad es una facultad que se concede por una sola vez y no cabe que el interesado, por simple solicitud, obtenga una segunda inversión.

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Langreo (Asturias).

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Langreo en fecha 27 de mayo de 2010 Don P. A. M. mayor de edad y domiciliado en dicha población, solicita la inversión de apellidos, exponiendo que circunstancias sobrevenidas y de extrema importancia le llevan a pedir de forma extraordinaria que se restablezca el orden inicial, que alteró en un acto inconsciente por su parte, y acompañando inscripción de nacimiento con marginal, practicada el 23 de octubre de 2007, de inversión de los apellidos inscritos. El 31 de mayo de 2010 el interesado ratificó el escrito presentado y fue requerido a fin de que aporte fotocopias de su DNI y del libro de familia de sus padres y certificado de empadronamiento, documentación que presentó el 28 de junio de 2010.

2.- El Ministerio Fiscal se opuso a la nueva inversión, ya que legalmente solo es posible realizarla una vez, y el 9 de julio de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo denegar la solicitud formulada.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el artículo 55, párrafo 4, de la Ley del Registro Civil en momento alguno se refiere al número de veces que se puede solicitar la inversión.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada, y el Juez Encargado informó desfavorablemente la estimación del recurso y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC.); 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 19-2ª de mayo de 1999, 5-1ª de julio y 3-4ª de septiembre de 2001, 13-1ª y 25-5ª de junio de 2002, 22-2ª de noviembre de 2004, 8-3ª de junio de 2006, 9-1ª de marzo de 2007, 9-5ª de mayo y 28-9ª de noviembre de 2008, 10-3ª de marzo de 2009, 12-2ª y 3ª de mayo de 2010 y 30-7ª de enero de 2013.

II.- Se pretende por el interesado la inversión del orden de los apellidos que, según resulta de la marginal practicada en su inscripción de nacimiento, instó y obtuvo en octubre de 2007. La solicitud ahora formulada para restablecer el orden inicial de aquellos es denegada por el Juez Encargado mediante auto de 9 de julio de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- Es consolidada doctrina de la Dirección General que la facultad de invertir los apellidos, que concede el artículo 109 del Código Civil a los mayores de edad, es por una sola vez de modo que, una vez ejercitada, no cabe dejar sin efecto la inversión, en contra de los propios actos, por simple declaración de voluntad.

IV.- Esta conclusión viene avalada por la estabilidad de que han de gozar el nombre y los apellidos, signos de individualización e identificación de la persona, cuyo cambio queda sustraído de la autonomía de la voluntad de los particulares, a salvo los casos taxativos establecidos en la Ley. Ello se entiende sin perjuicio del derecho que pueda asistir al recurrente de obtener el mismo resultado a través de un expediente de cambio de apellidos, regulado en los artículos 57 LRC y 205 RRC, siempre y cuando concurren los requisitos establecidos en dichos preceptos, señaladamente la existencia de una situación de hecho consolidada en el tiempo en el uso por el interesado de los apellidos en orden inverso al inscrito.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Langreo (Asturias):

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (41ª)

II.4.1.-Inversión de apellidos.

La inversión de los apellidos del inscrito dentro de plazo requiere que la opción sea ejercitada por los padres, de común acuerdo, “antes de la inscripción”.

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra providencia dictada por la Juez Encargada del Registro Civil de Torreveija (Alicante).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Guardamar del Segura (Alicante) en fecha 2 de febrero de 2010 Don M. S. C. y Doña I. A. B. mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan la inversión de los apellidos de su hijo M. nacido en G del S. el... de... de 2010, exponiendo que fue inscrito con los apellidos S. A. pero que ellos deseaban que figurase primero el apellido de la madre. Acompañan certificación literal de nacimiento del menor y sendos certificados de inscripción en el padrón de G del S. El Encargado levantó acta de la comparecencia y dispuso la remisión de lo actuado al Registro Civil de Torrevieja.

2.- El 18 de febrero de 2010 la Juez Encargada del Registro Civil de Torrevieja dictó providencia disponiendo que no ha lugar a admitir la inversión, dado que esta opción ha de ejercitarse antes de la inscripción.

3.- Notificada la providencia a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que habían decidido que el apellido materno precediera al paterno antes del nacimiento, que en ese orden los han consignado en todos los documentos e impresos que han cumplimentado después y que en ningún momento han expresado su voluntad de que el orden fuera otro y aportando como prueba documentación sanitaria del bebé.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la inversión de apellidos solicitada, por cuanto no se cumple el requisito legal de que esta opción sea ejercitada por los padres de común acuerdo antes de la inscripción, y la Juez Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos los artículos 109 del Código Civil (CC.), 55, 57 y 58 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 198, 205, 208 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las disposiciones transitorias únicas de la Ley 40/1999 de 5 de noviembre y del Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero, y las resoluciones, entre otras, de 1-1ª de abril y 17-3ª de octubre de 2003; 20-4ª de enero, 10-1ª de febrero, 6-2ª de abril y 21-3ª de mayo de 2004; 8-3ª de julio y 19-5ª de diciembre de 2005, 4-4ª de septiembre de 2006; 31-2ª de enero, 11-2ª de abril y 14-10ª de septiembre de 2007; 17-6ª de noviembre de 2008 y 22-9ª de febrero de 2010.

II.- La opción de los padres de atribuir al mayor de sus hijos como primer apellido el materno y como segundo el paterno ha de ejercitarse, de común acuerdo, "antes de la inscripción" (cfr. art. 109 CC. redactado por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre). No ejercitada la opción en ese momento y, por tanto, no manifestada expresa y conjuntamente por ambos progenitores la voluntad de invertir el orden, ha de inscribirse al nacido con el primer apellido paterno como primero y con el primero materno como segundo (cfr. art. 109 CC., 53 y 55 LRC y 194 RRC).

III.- En el presente caso la inversión del orden de los apellidos del hijo, nacido el... de... de 2010, ha sido instada por los padres después de practicada la inscripción y, por tanto, ha de ser desestimada. Tendrá que ser el propio interesado quien, alcanzada la mayoría de edad, pueda obtener la inversión, extemporáneamente pretendida por sus progenitores, mediante simple declaración ante el Encargado del Registro Civil de su domicilio. Si antes de ese momento concurrían los requisitos exigibles (cfr. art. 57 LRC y 205 RRC), podrían los padres obtener el mismo resultado a través de un expediente de cambio de apellidos, que se tramita e instruye en el Registro Civil del domicilio y se resuelve por el Ministro de Justicia y, por delegación, (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), por esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrevieja (Alicante).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (67ª)

II.4.1.-Cambio de apellidos.

En principio requiere expediente y, cuando se pretende prescindir del apellido paterno alegando no pertenencia legítima sobrevenida, instar el correspondiente juicio declarativo de impugnación de la filiación ya que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 113 del Código Civil y 50 y 92 de la Ley del Registro Civil, no puede extenderse asiento alguno contradictorio con el estado de filiación que prueba el Registro mientras no se disponga otra cosa por sentencia firme recaída en juicio ordinario.

En las actuaciones sobre cambio de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra providencia dictada por la Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Barcelona en fecha 14 de julio de 2010, Doña J. C. S. mayor de edad y domiciliada en V-M (M), solicita que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Barcelona, se sustituya el primer apellido por G. exponiendo que este último es el primero del actual marido de su madre y que la relación biológica padre-hijo ha quedado descartada por pruebas de ADN. Acompaña escrito de asentimiento del titular del apellido que pretende, informe de prueba de paternidad y autorización del padre para que la inscrita prescinda de su apellido.

2.- En el mismo día, 14 de julio de 2010, la Juez Encargada dispuso librar exhorto al Registro Civil de Vélez-Málaga, a fin de que la interesada se ratifique en su solicitud en presencia judicial y, una vez cumplimentado este trámite, en fecha 1 de diciembre de 2010 dictó providencia disponiendo, a la vista de lo solicitado y de la documentación aportada, que no ha lugar a acordar el cambio de apellidos interesado.

3.- Notificada la resolución a la promotora en el Registro Civil de su domicilio, manifestó su voluntad de presentar recurso a través de ese órgano registral y por la Encargada se dictó providencia teniéndolo por interpuesto.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la estimación del recurso solicitando la confirmación de la providencia dictada por sus propios fundamentos, y el Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona informó que no puede accederse al cambio de apellidos interesado por la simple manifestación de la promotora, ya que su filiación es la que consta en el Registro Civil, y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 109, 113 y 137, del Código Civil; 2, 41, 50, 55 y 92 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194 y 365 de su Reglamento (RRC).

II.- Pretende la promotora prescindir del apellido determinado por la filiación paterna exponiendo que esta ha quedado descartada por pruebas de ADN. La Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona, a la vista de lo solicitado y de la documentación aportada, dispuso que no ha lugar a acordar el cambio de apellidos por la simple manifestación de la promotora mediante providencia de 14 de julio de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La supresión del apellido paterno por las causas invocadas requiere la previa impugnación de la filiación que, como toda rectificación del estado civil que prueba el Registro, ha de instarse en la vía judicial ordinaria, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 113 del Código Civil y 50 y 92 de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio del derecho que pudiera asistir a la interesada, si concurrieran los requisitos exigibles (cfr. arts. 57 LRC y 205 y 207 RRC) de solicitar el apellido G. que dice perteneciente al cónyuge de su madre, a través de un expediente de cambio de apellidos que se tramita e instruye en el Registro Civil del domicilio y se resuelve por el Ministro de Justicia y, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), por la Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

II.5.- Competencia

II.5.1.- Competencia cambio nombre propio

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (104ª)

II.5.1-Competencia en expediente de cambio de nombre

El Encargado no puede autorizar el cambio de nombre si, como en este caso, no consta el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la Dirección General examina la pretensión y no la concede, por no concurrir la justa causa requerida.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Araba).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Vitoria-Gasteiz en fecha 27 de enero de 2010 Doña A. y Don J-M. mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan el cambio de la escritura del nombre de su hijo menor de edad Joritz. nacido en V-G. el ... de ... de 2009, por "loritz", exponiendo que en el momento de la inscripción no se les permitió utilizar el nombre elegido y les obligaron a realizar alguna modificación. Acompañan copia simple de una hoja de un libro de familia a fin de acreditar que existe la grafía que pretenden, inscripción de nacimiento del menor y copia del DNI de ambos progenitores. El 5 de marzo de 2010 la solicitud fue ratificada por los representantes legales del menor y por la Juez Encargada se acordó incoar expediente sobre autorización de cambio de nombre propio por el uso habitualmente.

2.- El Ministerio Fiscal se opuso a la modificación interesada, por cuanto "loritz" no es antropónimo reconocido en el nomenclátor onomástico de la Academia de la Lengua Vasca, y el 31 de marzo de 2010 la Juez Encargada, considerando que no concurren los requisitos legalmente exigidos, dictó auto disponiendo no autorizar el cambio de nombre solicitado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que han aportado pruebas fehacientes de que en fecha anterior a la de inscripción de su hijo se había permitido el nombre supuestamente agramatical solicitado para su hijo y con el cual ha sido identificado desde el momento de la gestación.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, considerando que no se acredita una justa causa para el cambio, interesó que se desestime el recurso y se proceda a la confirmación de la resolución apelada y la Juez Encargada emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero de 1996, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo y 15-3ª de septiembre de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 20-5ª de octubre de 1998, 18-2ª de febrero de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 26-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª de septiembre, 7-1ª, 15-3ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Se pretende por los promotores cambiar el nombre "Joritz", que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, de dos meses de edad, por "loritz", exponiendo que esta es la grafía que ellos eligieron y que no se admitió, pese a que consta que en ese mismo Registro hay personas así llamadas. La Juez Encargada, considerando que no concurren los requisitos legalmente exigidos, dispuso no autorizar el cambio de nombre solicitado mediante auto de 31 de marzo de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Juez Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC).

IV.- En este caso, impedida la acreditación del uso habitual por la corta edad del menor, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al Encargado sino al Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V.- Conviene, por tanto, entrar a examinar si la pretensión deducida puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el Registro Civil del domicilio y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI.- A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre, corresponda la competencia al Encargado del Registro Civil del domicilio o al Ministerio de Justicia, es que exista justa causa (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente

mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

VII.- Siendo evidentemente una modificación mínima la sustitución a efectos meramente gráficos de la consonante inicial de un nombre correctamente escrito conforme a las reglas ortográficas de la lengua española correspondiente por vocal de fonética análoga, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Joritz por "loritz", tal como expresan respecto a variaciones similares algunas de las resoluciones de esta Dirección General que se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Desestimar el recurso.

2º.- Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), no autorizar el cambio del nombre inscrito, Joritz, por "loritz".

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Araba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (106ª)

II.5.1.-Competencia para el cambio de nombre.

El Encargado no puede autorizar el cambio de nombre si, como en este caso, en el expediente no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la Dirección General examina la pretensión y la concede, por concurrir la justa causa requerida.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Blanes (Girona).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Blanes en fecha 10 de noviembre de 2009 Doña Mª de los Hitos. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por "Eva", exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida. Acompaña certificación literal de nacimiento, copia de DNI y comprobante de empadronamiento en B. con el nombre inscrito y alguna documental a fin de acreditar el uso del propuesto. En el mismo día, 10 de noviembre de 2009, la promotora ratificó la solicitud y comparecieron dos testigos, que manifestaron que les consta que son ciertos todos y cada uno de los extremos y circunstancias contenidos en el escrito inicial.

2.- El ministerio fiscal, entendiendo que no ha quedado debidamente acreditado el uso continuado y habitual del nombre pretendido ni, por tanto, la concurrencia de justa causa, se opuso a la aprobación del expediente y el 16 de marzo de 2010 la Juez Encargada dictó auto disponiendo que no ha lugar al cambio de nombre solicitado.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que aporta documental con la que intenta subsanar la falta de acreditación del uso continuado y habitual del nombre propuesto y solicitando que, en razón de que el documento más antiguo es de 1995 y el más moderno de 2010, se revise su petición.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, entendiendo que con la documentación presentada sí que ha quedado debidamente acreditada la solicitud, se adhirió al recurso y la Juez Encargada ratificó la resolución dictada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354, 355 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012 y las resoluciones, entre otras, de 23-1ª de mayo de 1998, 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 26-2ª de octubre de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005; 28-5º de junio, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008, 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009, 15-7ª de marzo de 2010 y 18-9ª de marzo de 2011.

II.- Se pretende por la promotora el cambio del nombre, "Mª de los Hitos", que consta en su inscripción de nacimiento por "Eva", exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida. La Juez Encargada, entendiendo que en el expediente no ha quedado debidamente acreditado el uso continuado y habitual del nombre pretendido, dispuso que no ha lugar al cambio solicitado mediante auto de 16 de marzo de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la interesada y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV.- En este caso, no probada en el expediente la habitualidad en el uso del nombre solicitado, la competencia para autorizar el cambio no pertenece al Encargado sino al Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V.- Conviene, por tanto, entrar a examinar si la pretensión de la promotora puede ser acogida por esta vía, habida cuenta de que en el Registro Civil del domicilio se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio (cfr. art 365 RRC) y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI.- A la cuestión planteada hay que darle una respuesta afirmativa. El uso habitual del nombre solicitado ha quedado debidamente acreditado con la prueba documental aportada en vía de recurso, ello permite apreciar la concurrencia de justa causa para el cambio, este no perjudica a tercero y, en definitiva, pueden estimarse cumplidos los requisitos específicos necesarios para la modificación (cfr. art. 206. III, RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre) el cambio del nombre inscrito, "M^a de los Hitos", por "Eva", no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado Reglamento.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Blanes (Girona).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (145^a)

II.5.1.-Competencia. Cambio de nombre propio.

No puede autorizarlo el encargado del registro civil del domicilio si no hay habitualidad en el uso del nombre solicitado, pero lo concede la Dirección General de los Registros y del Notariado por economía procesal y por delegación.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Elda (Alicante).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 18 de diciembre de 2009 en el Registro Civil de Elda (Alicante), Doña Inmaculada V.T. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de nombre en su inscripción de nacimiento por Inmaculada-Macarena. Acompañaban a la solicitud los siguientes documentos: DNI, inscripción de nacimiento de la interesada en Alicante el 3 de julio de 1986 y certificado de empadronamiento.

2.- Ratificada la solicitante y previo informe del ministerio fiscal interesando la acreditación del uso habitual del nombre pretendido –diligencia acerca de la cual no consta que se realizara ninguna actuación posterior, incluida la comunicación a la interesada, por lo que se desconoce si esta finalmente fue requerida en algún momento- el encargado del registro dictó auto el 8 de febrero de 2010 denegando el cambio solicitado por no adecuarse a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 59 de la Ley del Registro Civil.

3.- Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso alegando que su solicitud de cambio de nombre está motivada por cuestiones religiosas y por el estrecho vínculo que mantiene con la ciudad de S. y, más concretamente, con la H de la M. de dicha ciudad, de la que forma parte.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó la confirmación del auto recurrido. La encargada del Registro Civil de Elda remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 2008 y las resoluciones, entre otras, de 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 26-2ª de octubre de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008 y 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009.

II.- El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC).

III.- En el caso actual, no probada la habitualidad en el uso del nombre solicitado, la competencia excede de la atribuida al juez encargado y corresponde al ámbito general del Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por lo que el encargado debió limitarse a instruir el expediente y remitirlo a este centro para su resolución (art. 365, párrafo segundo, RRC).

IV.- Una vez expuesto lo anterior, conviene en todo caso entrar a examinar si la pretensión de la promotora pudiera ser acogida en este momento por esa vía, dado que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio ante el registro civil del domicilio (art 365 RRC). Poderosas razones de economía procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. 354 del RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V.- Pues bien, aun cuando no consta ninguna prueba del uso habitual del nombre solicitado, ello no impide a esta unidad, en uso de sus competencias, apreciar justa causa para el cambio propuesto que, por otra parte, no perjudica a tercero, por lo que, en definitiva, pueden estimarse cumplidos los requisitos específicos exigidos para la modificación (art. 206.3º RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de octubre) el cambio de nombre de Doña Inmaculada por Inmaculada-Macarena, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que dispone el art. 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el art. 217 del mismo reglamento.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Elda (Alicante).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (45ª)

II.5.1.-Competencia en expediente de cambio de nombre.

El Encargado no puede autorizar el cambio de nombre si, como en este caso, no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la Dirección General examina la pretensión y no la concede, por no concurrir la justa causa requerida.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Salamanca en fecha 22 de septiembre de 2010 Doña María del Rosario. mayor de edad y domiciliada en V. (S), solicita el cambio del nombre inscrito por "Aroa", exponiendo que este último es el que siempre ha venido usando y por el que es conocida en su entorno familiar y social. Acompaña certificación literal de nacimiento, copia de DNI, certificación de inscripción en el padrón de V. y alguna documental a fin de acreditar el uso del nombre propuesto. En el mismo día, 22 de septiembre de 2010, la promotora ratificó la solicitud, se dispuso la publicación de edictos y comparecieron como testigos su madre y su pareja, que manifestaron la primera que siempre ha sido conocida por "Aroa", que nadie la llama María del Rosario y que no todo el mundo sabe que ese es su nombre y el segundo que la conoció como "Aroa" y que posteriormente se enteró de que en realidad se llama María del Rosario.

2.- El ministerio fiscal informó que no tiene inconveniente alguno en que se acceda a lo solicitado y el 28 de octubre de 2010 el Juez Encargado, considerando que de los documentos aportados resulta que la situación de hecho ha sido creada por la interesada, dictó auto disponiendo no acceder al cambio de nombre propio.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que aportó distintos carnés y un diploma en los que consta el nombre de "Aroa", que no dispone de ninguna otra prueba documental pero que en su entorno utilizan "Aroa" para dirigirse a ella y ella solo responde si la llaman así y no usa el nombre inscrito.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que, entendiendo que se dan los requisitos señalados en el artículo 210 del Reglamento del Registro Civil, interesó que se acceda al cambio solicitado, dejando sin efecto la resolución dictada, y la Juez Encargada, dando por reproducidos los razonamientos jurídicos del auto apelado, informó que estima que debe mantenerse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012 y las resoluciones, entre otras, de 9-4ª de octubre de 1994, 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 27-3ª de marzo, 8-4ª de mayo y 14-7ª de septiembre de 2000; 17-2ª de febrero, 6-2ª y 21-2ª de abril, 7-2ª de julio de 2001; 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 y 21-3ª de enero,

13-1ª de abril, 20-3ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 16-3ª de abril, 3-7ª de julio, 3-3ª, 8-1ª y 17-1ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 11-3ª de febrero y 6-4ª de abril de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Solicita la interesada autorización para cambiar el nombre, María del Rosario, que consta en su inscripción de nacimiento por "Aroa", exponiendo que este último es el que siempre ha venido usando y por el que es conocida en su entorno familiar y social. El Juez Encargado, considerando que de los documentos aportados resulta que la situación de hecho ha sido creada por la interesada, dispuso no acceder al cambio de nombre mediante auto de 28 de octubre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Juez Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC).

IV.- En este caso, no justificada habitualidad en el uso del nombre propuesto, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al Encargado sino al Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V.- Conviene, por tanto, examinar si la pretensión de la promotora puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el Registro Civil del domicilio y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI.- A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa porque, en el presente caso, no está acreditada la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 60 LRC y su correlativo reglamentario (206 RRC, último apartado). La interesada, no obstante fundamentar su solicitud de cambio de nombre en el hecho de que siempre ha usado el propuesto y nunca el inscrito, no acredita dicho uso con la escasa documental aportada, en el escrito de recurso alega que en su momento presentó toda la prueba de la que dispone y, no formulada ninguna otra alegación, no cabe apreciar la existencia de justa causa para el cambio solicitado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Desestimar el recurso.

2º.- Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), no autorizar el cambio del nombre inscrito, María del Rosario, por "Aroa".

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

II.5.2.- Competencia cambio apellidos

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (148ª)

II.5.2.-Competencia en expediente de cambio de apellidos

1º.- *Por incompetencia del Registro Civil se declara la nulidad del auto dictado.*

2º.- *Por economía procesal y por delegación del ministro de Justicia, la Dirección General de los Registros y del Notariado examina el expediente y deniega el cambio de apellidos solicitado.*

En el expediente sobre cambio de apellidos en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de E.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de C. en fecha 17 de marzo de 2010 Doña L. S. G. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio de apellidos de su hija menor de edad V. C. S. nacida en E. el... de... de 2007, a fin de que ostente solo los maternos, exponiendo que durante la relación de año y medio que mantuvo con el padre sufrió malos tratos incluso delante de la niña recién nacida. Acompaña copia compulsada de su DNI y de sentencia de 12 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 y de Violencia sobre la Mujer de T. por la que se condena al progenitor a la pena de un mes de prisión con prohibición de comunicarse con la promotora y acercarse a ella o a su domicilio durante once meses, volante de empadronamiento en C. y certificaciones literales de nacimiento propia, de la menor y de los abuelos maternos de esta.

2.- Recibido el expediente en el Registro Civil de Elche, el Ministerio Fiscal se opuso a lo interesado, toda vez que el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, modificado por la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, autoriza el cambio de apellidos únicamente respecto al solicitante objeto de violencia, y el 20 de septiembre de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo no autorizar el cambio de los apellidos inscritos a la menor por los maternos.

3.- Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que teme que la menor sufra agresiones físicas y que con el cambio de apellidos trata de protegerla de su padre que, por otra parte, ha abandonado sus obligaciones respecto a la hija común: jamás ha abonado pensión alimenticia, ha ido a verla o se ha preocupado de su educación.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, sobre la base de lo expuesto en su informe anterior, se opuso al recurso y el Juez Encargado del Registro Civil de Elche dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 48 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ); 108 y 109 del Código civil (CC.); 53, 57, 58 y 59 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 194, 205, 208, 209, 210, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012 y las resoluciones, entre otras, de 16 de enero de 1996; 3-1ª, 23 y 25 de febrero, 3-1ª

de marzo y 11-1ª de mayo de 1998, 27-1ª de enero de 2001, 30-3ª de noviembre de 2002, 28-7ª de mayo y 13-1ª de octubre de 2003, 30-5ª de noviembre de 2004, 31-3ª de enero de 2005, 3-3ª de octubre de 2006, 19-2ª y 20-3ª de abril de 2007, 27-5ª de marzo y 20-10ª de noviembre de 2008 y 3-26ª de enero de 2011.

II.- Pretende la promotora el cambio de los apellidos determinados por la filiación de su hija menor de edad por los dos maternos, exponiendo que sufrió malos tratos en el curso de su relación con el padre. El Juez Encargado considerando que no concurren los requisitos legales necesarios para acordar el cambio solicitado, dispuso no autorizarlo mediante auto de 20 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para decidir en primera instancia un expediente de cambio de apellidos en los supuestos taxativos fijados en los artículos 59 de la Ley del Registro Civil y 209 de su reglamento. Dado que este caso no es ninguno de los contemplados en dichos preceptos, el expediente instruido por el Registro Civil del domicilio ha de elevarse al Ministerio de Justicia (cfr. art. 365 RRC) a fin de que, conforme a la competencia general que en materia de cambio de apellidos le atribuye el artículo 57 de la Ley del Registro Civil, dicte la resolución que proceda.

IV.- En consecuencia, ha de declararse la nulidad por incompetencia del auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Elche (cfr. arts. 48 y 62 LEC y 238 y 240 LOPJ, en relación con la remisión contenida en el art. 16 RRC) al mismo tiempo que razones de economía procesal aconsejan entrar a examinar si el cambio solicitado puede ser autorizado por este Centro Directivo, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente por el registro civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y que resultaría superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. art. 354 RRC.) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V.- La respuesta debe ser negativa porque, si bien consta que el padre de la menor fue condenado en febrero de 2009 por un delito de malos tratos a la promotora, con prohibición de comunicar y acercarse a ella o a su domicilio durante once meses, no solicitando una identidad distinta para sí misma y, en su caso, para su hija, su petición no se encuentra amparada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, no siendo de aplicación los artículos 58 de la Ley del Registro Civil y 208 del Reglamento, la solicitud ha de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 57 LRC y 205 RRC, señaladamente que los dos apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea, y tratándose de una menor, es necesaria además la representación conjunta de los dos progenitores, cotitulares de la patria potestad.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Declarar la nulidad por incompetencia del auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de E. en fecha 20 de septiembre de 2010.

2º.- Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre) denegar el cambio de apellidos solicitado para la menor por su madre.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de E.

III. NACIONALIDAD

III.1.- Adquisición originaria de la nacionalidad española

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*

Resolución de 05 de Diciembre de 2013 (1ª)

III.1.1.- Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España hija de padres uruguayos nacidos en Uruguay.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Alicante.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Alicante el 4 de julio de 2011, los ciudadanos uruguayos Don M. y Doña K. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad D., nacida en A. el.. de de 2011. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados del Consulado General de Uruguay en Valencia acerca de la normativa sobre nacionalidad y la imposibilidad de registrar en los pasaportes cuyos titulares sean ciudadanos uruguayos a sus hijos, si estos han nacido en el exterior, siempre que no se haya procedido previamente a la inscripción del nacimiento en territorio uruguayo; fotocopias de los pasaportes de los padres y NIE del padre.

2.- El mismo día se ratifican los interesados en su solicitud. Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Alicante dictó auto el 7 de septiembre de 2011 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la Ley Uruguaya 16.021, de 13 de abril de 1989 dice en su artículo 1º que “tienen la calidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República” y en el 2º que “tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior”. De tal modo que, en el presente supuesto, el Encargado deduce que la menor nacida en España, hija de padres uruguayos, es de nacionalidad uruguaya, no concurriendo la situación de apatridia que fundamentaría la atribución de la nacionalidad española *iure soli*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado se ratifica en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y

demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y la resolución, 13-32ª de septiembre de 2013.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el.. de de 2011, hija de padres uruguayos nacidos en Uruguay. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- En relación con la legislación uruguaya, según el más reciente conocimiento que este Centro Directivo ha tenido del Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 13.021, de 13 de abril de 1989). Igualmente son ciudadanos naturales de la República Oriental de Uruguay los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico (vid. Artículo 74 de la Constitución uruguaya).

Por lo que, al ser los padres de la menor uruguayos nacidos en Uruguay le correspondería a la misma *iure sanguinis* la nacionalidad uruguaya de los padres, según el artículo 2 de la Ley 13.021 antes señalada.

IV.- Consiguientemente, no se da, pues, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española conforme al citado artículo 17.1.c) del Código civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no tenga otra nacionalidad *iure sanguinis*, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 05 de Diciembre de 2013

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Alicante.

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (17ª)

III.1.1.-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de padre boliviano y madre argentina nacidos respectivamente en Bolivia y Argentina.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 9 de Enero de 2009 el ciudadano boliviano R-E. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor

de simple presunción para su hijo menor de edad, B-M. nacido en M. el ... de ... de 2007. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia y el Consulado General de Argentina en Madrid sobre no inscripción y negativo de nacionalidad del menor; pasaportes del padre y de la madre, la ciudadana argentina M^a del M. fotocopia del Libro de Familia y certificado de nacionalidad boliviana del progenitor.

2.- Ratificada la madre, que aportó poder notarial otorgado por el progenitor para la tramitación del expediente, oídos dos testigos y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se mostró conforme con la tramitación, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 17 de Septiembre de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción habida cuenta de las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, de la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y del artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009, sin que para ello fuera óbice suficiente el hecho de estar el nacido inscrito o no inscrito en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la irretroactividad de las leyes, puesto que el menor había nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana por lo que sus efectos no eran aplicables al menor, y que siendo la madre argentina debía aplicarse la ley más favorable y la ley argentina no reclama la nacionalidad del nacido en el extranjero.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las Resoluciones de 3-1^a de junio, 23-1^a de septiembre y 19-1^a de diciembre de 2002; 1-3^a de febrero, 26-4^a de marzo y 3-2^a, 11-3^a y 28-2^a de junio de 2003; 13-2^a de febrero, 5-2^a de marzo y 25 de septiembre de 2004; 16-3^a de septiembre de 2005; 27-4^a de diciembre de 2006; 3-5^a de enero de 2007; 29-2^a de febrero y 5-7^a de Noviembre de 2008; 9-5^a y 12-4^a de Enero, 1-2^a de Febrero y 6-4^a y 9-1^a de Julio de 2010; 6-12^a y 28-17^a de Septiembre de 2011.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en ... de 2007 hijo de padre boliviano y madre argentina. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil), lo que exige examinar dichas legislaciones, en este caso la boliviana y la argentina.

III.- No se ha planteado en el auto impugnado la cuestión de la atribución al nacido de la nacionalidad argentina, respecto a la cual debe señalarse en todo caso que, de acuerdo con la información de que dispone esta Dirección General, los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de sus padres, sino que para

ello es preciso un acto posterior. Por ello, no queda acreditado que el menor ostente la nacionalidad argentina de la madre.

IV.- Respecto a la atribución *iure sanguinis* de la nacionalidad boliviana, verdadera causa de denegación de la solicitud y objeto de la controversia, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación boliviana, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no recibían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se dio, pues, una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de cualquiera de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento. Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la nueva Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (18ª)

III.1.1.-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Requena (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Juzgado de Paz de Godolleta (Valencia) el 13 de Febrero de 2009 los ciudadanos bolivianos J. y L. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, B-S. nacido en G. el ... de ... de

2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificaciones de nacimiento del menor y de sus progenitores; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre no inscripción y de carencia de la nacionalidad del menor y de inscripción de los progenitores; pasaportes de los progenitores; Libro de Familia.

2.- Ratificados los promotores, se remitieron las actuaciones al Registro Civil Requena. El Juez Encargado de este, tras recibir informe previo emitido por el Ministerio Fiscal, que se opuso a la declaración dado que el artículo 141 de la Constitución boliviana reconoce como bolivianos a los nacidos en el extranjero de padres, o al menos uno de ellos, bolivianos, dictó auto el 1 de Febrero de 2010 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que no procedía aplicar el artículo 17.1 c) del Código Civil a la vista del artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009 y que los representantes del menor solicitaron la nacionalidad española con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada en la Constitución boliviana.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los padres del interesado interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el momento determinante en la atribución de la nacionalidad española era el nacimiento, no la incoación del expediente, y la irretroactividad de las leyes, puesto que el menor había nacido antes de la entrada en vigor de la Nueva Constitución Política del Estado, durante la vigencia del artículo 36 de la derogada Constitución boliviana de 1967. Acompañaban una resolución dictada por el Registro Civil Único de Valencia estimando la solicitud planteada respecto de otra menor.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en Septiembre de 2008 hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Requena (Valencia).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (19ª)

III.1.1-Declaración sobre nacionalidad española.

Es español iure soli el nacido en España hijo de padres argentinos nacidos en Argentina.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Carlet (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Juzgado de Paz de Almussafes el 31 de Marzo de 2009 los ciudadanos argentinos M-Á. y M-C. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, M-Á. nacido en A. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación de nacimiento del menor, certificado emitido por el Consulado General de la República Argentina en Barcelona en el sentido de que el menor no ostenta la nacionalidad argentina; permisos de residencia, certificados de nacimiento y de matrimonio de los progenitores; certificados de empadronamiento.

2.- Una vez remitidas las actuaciones al Registro Civil de Carlet, y previo informe desfavorable emitido por el Ministerio Fiscal, que consideró que la legislación argentina posibilita a los padres a optar por dicha nacionalidad, el Encargado del Registro Civil dictó auto el 11 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar, a la vista del certificado emitido por el Consulado General de la República Argentina que aportaron los padres, que la Constitución de los padres atribuía al nacido la nacionalidad de estos.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la declaración de la nacionalidad española.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, este interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del Auto recurrido en todos sus extremos. El Encargado del Registro Civil propuso la estimación del recurso al considerar que los menores nacidos en España de padres argentinos, independientemente de la actitud de estos, se encuentran en una situación de apatridia que lleva a la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, tras lo cual remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 3-1ª de junio, 23-1ª de septiembre y 19-1ª de diciembre de 2002 y 1-3ª de febrero, 26-4ª de marzo y 3-2ª, 11-3ª y 28-2ª de junio de 2003 y 13-2ª de febrero de 2004, 5-7ª de Noviembre de 2008; 6-4ª y 9-1ª de Julio de 2010; 6-12ª y 28-17ª de Septiembre de 2011.

II.- La petición de los promotores de que se reconozca la nacionalidad española a su hijo, nacido en España en 2008, tiene como vía registral el expediente para declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2º L.R.C. y 338 R.R.C.) que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 R.R.C.).

III.- Conforme al artículo 17-1-c del Código civil son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. De acuerdo con el conocimiento adquirido de la ley argentina, no hay duda de que esa norma beneficia al nacido en España, hijo de padres argentinos nacidos en Argentina, porque los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de sus padres, sino que para ello es preciso un acto posterior. Se da, pues, una situación de apatridia originaria en la que la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C.).

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Carlet (Valencia).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (20ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el

Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 11 de febrero de 2009, los ciudadanos bolivianos Don R. y Doña F. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, J-R. nacido en G. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción del menor.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución

de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, aplicable para los nacidos con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurría en los supuestos antes señalados ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. juez encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (23ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 3 de febrero de 2009, los ciudadanos bolivianos Don A. y Doña M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, V-A. nacido en G. el ... de ...de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; y certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción del menor.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de

2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que alegan que su hijo nació antes de la entrada en vigor de la reforma de la Constitución Boliviana; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el...de...de 2009, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda

ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, y para los nacidos después de la entrada en vigor de la reforma señalada, que no es el caso del interesado, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (26ª)

III.1.1.- Declaración sobre nacionalidad española.

No es española iure soli la nacida en España hija de madre marroquí y padre desconocido.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el 28 de julio de 2009, Doña N. nacida en C. el 21 de enero de 1965, solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil, por haber nacido en España de padres desconocidos. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento, en la que consta únicamente la filiación biológica materna; y certificado de empadronamiento.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, la Encargada del Registro Civil dictó auto el 22 de septiembre de 2009 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al considerar que la interesada no podía acogerse a tal supuesto, por cuanto la declaración de nacionalidad del artículo 17.1.c) del Código civil está prevista para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad y, en este caso, según resulta del conocimiento de la legislación marroquí, la normativa marroquí atribuye la condición de marroquí a los hijos de una nacional marroquí y de padre desconocido.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que le correspondía la nacionalidad española por haber nacido en España.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se ratifica en el informe que emitió. La Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 10-1.^a de Septiembre de 1994, 7 de Diciembre de 1995, 24 de Enero de 1996, 18-3.^a de enero, 30 de abril y 9 de septiembre de 1997 y 11-2.^a de mayo y 27 de octubre de 1998, 1-1.^a y 15-5.^a de febrero de 1999, 11-2.^a de febrero, 24-1.^a de abril, 31-4.^a de mayo, 12-1.^a, 15-1.^a y 22-2.^a de septiembre, 17-3.^a y 28 de octubre, 18-1.^a y 27 de diciembre de 2000 y 27-2.^a de marzo y 5-1.^a y 11 de abril y 5-1.^a de mayo de 2001, 5-4.^a de febrero de 2002, 10-2.^a de mayo y 23-2.^a de octubre de 2003, 26-1.^a y 26-4.^a de enero de 2004 y 26-3.^a de enero de 2005; 17-1.^a de Enero, 22-5.^a Mayo 7-1.^a de Diciembre de 2006; 22-2.^a de Septiembre y 24-2.^a de Noviembre de 2008; 26-3.^a de Enero de 2009.

II.- Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2º L.R.C.) que tiene la nacionalidad española de origen la interesada, nacida en España en 1965, inscrita en el Registro Civil español como hija no matrimonial de madre marroquí y padre desconocido.

III.- Esta pretensión se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida en el artículo 17-1-c del Código civil para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. El artículo 17.4º del Código Civil, según la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, vigente en el momento del nacimiento de la promotora, establecía que eran españoles “los nacidos en España de padres desconocidos: sin perjuicio de que, conocida su verdadera filiación, ésta surta los efectos que procedan”. Pues bien, de la certificación literal de nacimiento de la interesada que obra en el expediente se observa que, por un lado, nació en España, sin embargo, aparece como hija de madre marroquí y padre desconocido. Es necesario, pues, determinar el contenido y alcance de la legislación marroquí en orden a la atribución de esta nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padres marroquíes (cfr. art. 12 nº 6 C.c.), lo que presupone la siempre compleja tarea previa de valorar la prueba del Derecho extranjero aplicable y de interpretar sus mandatos.

IV.- Este Centro Directivo había mantenido hasta su Resolución de 27 de octubre de 1998 que el artículo 17-1-c del Código civil no era aplicable a los hijos de padre marroquí, porque por aplicación de la ley marroquí, los hijos de padre marroquí ostentaban *de iure* la nacionalidad marroquí por nacimiento, siendo indiferente el dato del carácter matrimonial o no de tal filiación a la hora de valorar la adquisición, o falta de adquisición, de la nacionalidad española *iure soli*. Esta doctrina estaba basada en el conocimiento entonces adquirido de la legislación marroquí en la materia, y en concreto en el artículo 6 del Dahir n.º 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de nacionalidad marroquí, el cual establece que tiene la nacionalidad marroquí de origen por filiación: «1.º el niño nacido de un padre marroquí; y 2.º el niño nacido de una madre marroquí y de un padre desconocido», y ello sin exigencias adicionales relativas al lugar de nacimiento y, por tanto, también en el caso de que el mismo tenga lugar en el extranjero. Tampoco condiciona el precepto mencionado la atribución de la nacionalidad marroquí originaria a que el nacimiento del niño haya tenido lugar dentro de un matrimonio, lo que había permitido a esta Dirección General extraer la consecuencia de que dicha nacionalidad se transmitía al hijo con independencia del tipo de filiación y del estado civil del padre.

V.- La doctrina anterior sufre una primera inflexión con la Resolución de 15-5.ª de febrero de 1999, en la que el Centro Directivo a la vista de la prueba del Derecho extranjero aportada por los promotores junto a su escrito de recurso, alcanza una conclusión distinta de la hasta entonces mantenida. Con arreglo a la citada prueba de la legislación marroquí, el hijo nacido en el extranjero de ciudadanos marroquíes, únicamente puede ser considerado de esta nacionalidad si ha nacido dentro de un matrimonio que sea válido conforme a la legislación marroquí. Por lo tanto, el matrimonio contraído en el extranjero debe hacerse con arreglo a las normas que correspondan según el estatuto personal del contrayente marroquí. En

consecuencia los hijos nacidos de una relación no matrimonial o ilegítima no pueden ser considerados marroquíes, conclusión que se extendía al matrimonio civil celebrado en España, matrimonio que, se afirmaba, carece de validez según la legislación personal del padre y por tanto, y de acuerdo con la misma, los hijos habidos de tal matrimonio no pueden ser considerados como marroquíes, dando con ello lugar a la estimación del recurso. La tesis paralela a la anterior de que es necesario para la atribución de la nacionalidad marroquí por filiación paterna no matrimonial que esta determinación de la filiación no matrimonial sea válida para el Ordenamiento marroquí, en combinación con la no aplicación por el Derecho marroquí en esta materia de la regla *locus regit actum*, dando lugar a que la determinación de la filiación paterna de acuerdo con las leyes españolas carece de eficacia en Marruecos, fue acogida por esta Dirección General, en línea con la Resolución anterior, como causa impeditiva de la adquisición por nacimiento *iure sanguinis* de la nacionalidad marroquí del padre a pesar de mediar un reconocimiento formalizado conforme al Derecho español (cfr. Resolución de 16-1.^a de enero de 2002). Además, el hecho de que el padre fuese conocido, a pesar de no entenderse establecido legalmente para el Derecho marroquí el vínculo de la filiación, suponía excluir la nacionalidad marroquí del nacido por vía de filiación materna, la cual está condicionada a la circunstancia de ser desconocido el padre. Con ello se venía a aplicar una misma y única solución a los casos de filiación paterna no matrimonial, cuando el reconocimiento por parte del padre no fuese considerado válido por el Derecho marroquí, y a los supuestos de filiación matrimonial, cuando fuese el propio vínculo matrimonial el no reconocido por tal Derecho.

VI.- Sin embargo, este Centro Directivo en su más reciente Resolución de 5-4.^a de febrero de 2002 vuelve sobre sus pasos y, para los supuestos de filiación matrimonial, recupera de nuevo su doctrina anterior a 1999, afirmando que no obstante la conclusión contraria a la que llegó la mencionada Resolución, «se impone ahora, de acuerdo con el conocimiento más exacto adquirido de la legislación marroquí, confirmar la doctrina anterior de la Dirección General, en el sentido de que el nacido fuera de Marruecos de padre marroquí, siendo su filiación matrimonial, tiene *de iure* desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre, con independencia de las dificultades «*de facto*» con que se encuentre (el interesado) en el Consulado marroquí para documentarse como nacional de este país y para que sea reconocido el matrimonio de su padre. No hay, por otra parte, dificultades insuperables en este caso para que sea reconocida en Marruecos la validez de un matrimonio civil celebrado en España entre un marroquí musulmán y una cristiana». Pero nuevamente esta conclusión es matizada respecto de los casos en que el matrimonio civil se haya celebrado entre dos marroquíes en España, al admitir la falta de eficacia del mismo para Marruecos (cfr. Resolución de 16-8.^a de septiembre de 2002). Alineándose con la citada Resolución de 5-4.^a de febrero de 2002, y extendiendo sus conclusiones al ámbito de la filiación paterna no matrimonial, la más reciente de 26-1.^a de enero de 2004, niega la condición de español *iure soli* al nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana. Esta misma doctrina debe ser ahora confirmada para el caso presente relativo a la promotora, nacida en España hija no matrimonial de madre marroquí y de padre desconocido, doctrina que se reafirma a la vista de las modificaciones que ha introducido en el Código de Familia marroquí (Mudawana) en materia de filiación el Dahir n.º 1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley n.º 70.03, norma que necesariamente se ha de tomar en cuenta por razón de lo dispuesto por el artículo 9 n.º 1 y 4 del Código civil que remiten la regulación de la determinación y contenido de la filiación al estatuto personal del hijo.

Ahora bien, dado que, a su vez, al tratar de aplicar el artículo 17-1-c del Código civil se parte de una situación de potencial intervención subsidiaria de la nacionalidad española a fin de evitar la, en su defecto, apatridia del interesado, surge una situación paradójica caracterizada por un efecto de «doble espejo» entre los artículos 17-1-c y 9 n.º 1 y 4 del Código civil, en la que la nacionalidad y la filiación del interesado son respectivamente cuestiones previas la una respecto de la otra, sin que ninguna de las dos se pueda definir sin determinar antes la otra: el hijo es nacional marroquí si se establece su filiación respecto de un padre marroquí, pero para determinar esta filiación ha de hacerse aplicación del estatuto personal del hijo que, a su vez, se determina por la nacionalidad del mismo, nacionalidad que no puede afirmarse sin el «*prius*» de la filiación.

VII.- En una primera aproximación al tema, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, se observa que el artículo 9 n.º 4 del Código civil adolece de una laguna legal por referirse sólo al carácter y contenido de la filiación pero no a su «determinación». Para subvenir a tal laguna, descartada la tesis de la «lex fori» por falta de soporte legal, la mayoría de la doctrina científica y la oficial de este Centro Directivo ha abogado por una aplicación analógica del propio artículo 9 n.º 4 citado (cfr. Resoluciones de 29 de abril de 1992 y 18 de septiembre de 1993, entre otras), tesis a la que más recientemente se ha sumado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de marzo de 2000, lo cual supone acudir a la ley nacional del hijo, sometiendo a la misma los títulos de determinación y acreditación de la filiación, la regulación de los medios de prueba y de las acciones de impugnación y reclamación de la filiación.

VIII.- Ciertamente es que estando en cuestión la determinación sobre el efecto de transmisión de la nacionalidad en función del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación, en atención a las diferencias sustantivas entre ambos tipos que al respecto se desprenden de la legislación marroquí (conforme al art. 148 de la Mudawana la filiación ilegítima no produce ninguno de los efectos de la filiación legítima respecto al padre), y a la vista del principio de igualdad jurídica y proscripción de toda discriminación por razón de filiación que establecen los artículos 14 y 39 de nuestra Constitución, principios desarrollados legalmente en nuestro Ordenamiento desde la Ley 11/1981, de 13 de mayo, el reenvío que el artículo 9 n.º 4 del Código hace a aquella legislación puede ser excepcionado aplicando el filtro constitucional a través de la cláusula del orden público internacional español, en línea con la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29 de mayo, en la que se afirma que «el estatuto jurídico del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos» (Fundamento jurídico 5.º). El mismo Tribunal Constitucional ha hecho aplicación práctica de esta idea para rechazar la intervención de la ley extranjera que prohíbe las acciones de filiación del hijo, aplicando en su lugar sustitutivamente la Ley española, activando así la previsión del artículo 12 n.º 3 del Código civil (vid. Sentencia 7/1994, de 17 de enero). Igualmente actúa en tal dirección la existencia de normas materiales imperativas en el Derecho español que limitan el alcance de las normas de conflicto antes vistas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 1 declara aplicable la Ley a todo menor de dieciocho años que se encuentre en España, sean estos nacionales o extranjeros.

La Ley española como Ley del foro es también la que resulta aplicable si se parte de la idea de que, por ser la filiación una cuestión previa y condicionante de la de la nacionalidad del interesado, la cuestión del establecimiento del vínculo filial se ha de resolver partiendo como premisa previa del carácter indeterminado de la nacionalidad del hijo, lo que supone aplicar como punto de conexión la residencia habitual de éste (cfr. arts. 9 n.º 4 y n.º 10 C.c.), lo cual remite en el presente caso, como se ha dicho, a la ley española, que es la más estrechamente vinculada al supuesto de hecho (ley del foro, ley del nacimiento y de la residencia habitual de padres e hijo). Finalmente en este complejo proceso interpretativo, abundando en la solución apuntada, se ha de ponderar de forma decisiva el principio del «favor filiationis», que igualmente aconseja aplicar la ley que reconoce el vínculo de filiación como vínculo jurídico resultante del hecho biológico de la procreación (ley española), descartando la ley que niega tal vínculo (ley marroquí).

IX.- Las conclusiones anteriores no quedarían desvirtuadas incluso si se considerase que la anterior aproximación metodológica al tema puede no ser la correcta cuando de lo que se trata es de examinar la cuestión de la determinación de la filiación como cuestión previa a la aplicación del artículo 17-1-c del Código civil, pues si el resultado de la exclusión de la legislación extranjera fuera la de admitir el nexo filial a los efectos del Derecho español, arrastrando con ello la consecuencia, lógica desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento, de la afirmación de la nacionalidad marroquí del hijo, el resultado final sería el del incumplimiento de la finalidad de aquel precepto, esta es, la evitación de la apatridia, si paralelamente la misma conclusión sobre la nacionalidad del interesado no fuese alcanzada,

como obviamente no lo será por partir de la premisa de su inaplicación, por la legislación marroquí. Con ello se daría precisamente la situación de apatridia que se trataba de evitar. Desde esta perspectiva, para lograr la finalidad a que propende la norma se impondría admitir la excepción de la excepción, esto es, la inaplicación al caso de la cláusula del orden público, razón por la que procede el análisis del tema de la filiación del interesado desde la exclusiva perspectiva del Derecho marroquí.

Pues bien, resulta incuestionable que el Derecho marroquí asume el criterio de la transmisión de la nacionalidad *iure sanguinis* como regla preferente (vid. artículo 6 del Dahir n.º 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958), si bien ello lo hace asumiendo el principio básico propio del Derecho de familia islámico de que el parentesco se transmite por línea masculina, razón por la cual la transmisión de la nacionalidad por vía materna se condiciona a que el padre sea desconocido, circunstancia concurrente en el presente caso.

X.- En cuanto a estos efectos probatorios de la filiación no matrimonial, no puede obviarse el hecho de que la propia inscripción del nacimiento en el Registro Civil español constituye prueba de la filiación (cfr. arts. 113 C.c., y 2 y 41 L.R.C.). La invocación en este punto de los citados preceptos del Ordenamiento español se hacen no en calidad de reguladores del fondo del reconocimiento (al no haber cuestión en este caso sobre la necesidad de consentimientos complementarios o de otros posibles obstáculos legales), aspecto en el que hay algunos antecedentes en la jurisprudencia registral no pacíficos desde el punto de vista de su aceptación por parte de la doctrina científica, sino en tanto que relativos a la «forma» del reconocimiento, y por tanto amparados en su pertinencia *in casu* por las reglas del artículo 11 del Código civil (cfr. Resolución de 25 de marzo de 1985). Finalmente ha de destacarse en esta materia la asunción del principio del «favor filiationis» por el Derecho marroquí, que sienta la presunción de que «la filiación es legítima respecto del padre y de la madre salvo prueba en contrario» (vid. art. 143). Admitida, pues, la existencia de un vínculo filial entre la madre marroquí y su hija, ésta adquiere *de iure* por filiación desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su madre.

XI.- Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que la promotora ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (118ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España de padre ecuatoriano y madre boliviana antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana el 20 de octubre de 2008 y de la nueva Constitución boliviana de 7 de Febrero de 2009.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Gandía el 3 de diciembre de 2008, el ciudadano ecuatoriano Don M-U. y la ciudadana boliviana Doña D. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad D-D. nacido en G. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados emitidos por el Consulado General de Ecuador en Valencia sobre nacionalidad ecuatoriana del progenitor y no inscripción del menor; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de la madre y la no inscripción del menor en los libros de nacimientos de esa Oficina Consular y, por consiguiente, en ningún Registro Civil de la República de Bolivia; y volante de empadronamiento de los padres.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 7 de la Constitución de la República de Ecuador, en vigor desde el 20 de octubre de 2008 y el artículo 141 de la Constitución de Bolivia, ambos con efectos retroactivos, no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que no formulan ninguna alegación; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, y las resoluciones, entre otras, 4-4ª y 13-4ª de febrero, 13-1ª de mayo, 28-1ª y 3ª de junio y 5-2ª de diciembre de 2003; 14-4ª de enero y 5-3ª de noviembre de 2004; 30-1ª de mayo, 30-3ª de junio y 16-3ª de septiembre de 2005; 15-4ª de noviembre y 27-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 3-5ª de enero, 3-8ª de abril, 21-5ª de junio de 2007; 29-2ª de febrero, 3-2ª de septiembre y 19-3ª de diciembre de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero y 18-7ª de Mayo de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010; 15-18ª de septiembre de 2011.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padre ecuatoriano y madre boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- Respecto a la nacionalidad ecuatoriana, de acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la reciente publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirirían automáticamente

la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o “transitoriamente ausentes del país por cualquier causa”; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiriría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero. El caso actual está comprendido en estas últimas hipótesis. El nacido no tenía cuando nació, el 7 de enero de 2008, por tanto todavía bajo la vigencia de la Constitución ecuatoriana de 1998, la nacionalidad ecuatoriana de su padre porque este no estaba al servicio de Ecuador o de un organismo internacional y porque su estancia fuera de Ecuador no puede calificarse de transitoria, a la vista de que su domicilio en España está acreditado por lo que se desprende del padrón municipal.

IV.- En lo tocante a la madre, de acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior.

V.- Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria de la nacida en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que el interesado pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad ecuatoriana o boliviana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

VI.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (119ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 1 de julio de 2009, los ciudadanos bolivianos Don A. y Doña M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, E. nacido en G. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción del menor.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que formulan su oposición al mismo y alegan que su hijo nació antes de la reforma de la Constitución de Bolivia; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. Por tanto, en los supuestos de niños nacidos en España de padres bolivianos con posterioridad a la mencionada reforma, que no es el presente caso, no concurriría ya la situación de apatridia que vino fundamentando la atribución de la nacionalidad española *iure soli* para aquellos que nacieron antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución de Bolivia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (1ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Murcia el 13 de mayo de 2009, los ciudadanos bolivianos Don R-D. y Doña E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, J-R. nacido en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; volante colectivo de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción del menor; y fotocopias de los pasaportes de los padres y del libro de familia.

2.- Una vez ratificados los promotores, comparecen el 22 de septiembre de 2009 dos testigos. El Ministerio Fiscal emite informe desfavorable y el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 27 de enero de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción en base al artículo 141 de la Constitución de Bolivia, según el cual “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano”.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, la Sra. C. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal informa que procede acuerdo denegatorio y el Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el 6 de febrero de 2008, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importarse que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (3ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de madre boliviana nacida en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 3 de febrero de 2009, la ciudadana boliviana Doña T-I. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, S. nacido en G. el ... de ... de 2008. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; y certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de la madre y la no inscripción del menor.

2.- Una vez ratificada la promotora y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a la interesada y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a la interesada, que manifiesta su oposición al recurso interpuesto; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de

madre boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importarse que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (6ª)

III.1.1.- Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España hijo de padres uruguayos nacidos en Uruguay.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Valencia el 20 de abril de 2010, los ciudadanos uruguayos Don F. y Doña A-E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad N. nacido en V. el ...

de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado de empadronamiento; certificados del Consulado General de Uruguay en Valencia acerca de la normativa sobre nacionalidad y sobre la inscripción consular de los promotores; y fotocopias de los pasaportes de los padres.

2.- El mismo día se ratifican los interesados en su solicitud. Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Valencia dictó auto el 20 de mayo de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la Ley Uruguaya 16.021, de 13 de abril de 1989 dice en su artículo 1º que “tienen la calidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República” y en el 2º que “tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior”. De tal modo que, en el presente supuesto, el Encargado deduce que el menor nacido en España, hijo de padres uruguayos, es de nacionalidad uruguaya, no concurriendo la situación de apatridia que fundamentaría la atribución de la nacionalidad española *iure soli*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del recurso, el Encargado se ratifica en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y la resolución, 13-32ª de septiembre de 2013.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el ... de ... de 2009, hijo de padres uruguayos nacidos en Uruguay. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- En relación con la legislación uruguaya, según el más reciente conocimiento que este Centro Directivo ha tenido del Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 13.021, de 13 de abril de 1989). Igualmente son ciudadanos naturales de la República Oriental de Uruguay los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico (vid. Artículo 74 de la Constitución uruguaya). Por lo que, al ser los padres del menor uruguayos nacidos en Uruguay le correspondería al mismo *iure sanguinis* la nacionalidad uruguaya de los padres, según el artículo 2 de la Ley 13.021 antes señalada.

IV.- Consiguientemente, no se da, pues, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española conforme al citado artículo 17.1.c) del Código

civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no tenga otra nacionalidad *iure sanguinis*, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Valencia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (7ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España de padre ecuatoriano y madre boliviana antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana el 20 de octubre de 2008 y de la nueva Constitución boliviana de 7 de Febrero de 2009.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Gandía el 3 de febrero de 2009, el ciudadano ecuatoriano D. W-E. y la ciudadana boliviana Doña J-M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad B-S. nacido en G. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados emitidos por el Consulado General de Ecuador en Valencia sobre nacionalidad ecuatoriana del progenitor y no inscripción del menor; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de la madre y la no inscripción del menor en los libros de nacimientos de esa Oficina Consular y, por consiguiente, en ningún Registro Civil de la República de Bolivia; y certificados de empadronamiento de los padres.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 7 de la Constitución de la República de Ecuador, en vigor desde el 20 de octubre de 2008 y el artículo 141 de la Constitución de Bolivia, ambos con efectos retroactivos, no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que alegan que su hijo nació antes de la entrada en vigor de las reformas realizadas en las Constituciones ecuatoriana y boliviana; interesó la estimación del recurso

y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, y las resoluciones, entre otras, 4-4ª y 13-4ª de febrero, 13-1ª de mayo, 28-1ª y 3ª de junio y 5-2ª de diciembre de 2003; 14-4ª de enero y 5-3ª de noviembre de 2004; 30-1ª de mayo, 30-3ª de junio y 16-3ª de septiembre de 2005; 15-4ª de noviembre y 27-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 3-5ª de enero, 3-8ª de abril, 21-5ª de junio de 2007; 29-2ª de febrero, 3-2ª de septiembre y 19-3ª de diciembre de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero y 18-7ª de Mayo de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010; 15-18ª de septiembre de 2011.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padre ecuatoriano y madre boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- Respecto a la nacionalidad ecuatoriana, de acuerdo con el conocimiento adquirido por este Centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la reciente publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o "transitoriamente ausentes del país por cualquier causa"; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiriría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero. El caso actual está comprendido en estas últimas hipótesis. El nacido no tenía cuando nació, el... de... de 2008, por tanto todavía bajo la vigencia de la Constitución ecuatoriana de 1998, la nacionalidad ecuatoriana de su padre porque este no estaba al servicio de Ecuador o de un organismo internacional y porque su estancia fuera de Ecuador no puede calificarse de transitoria, a la vista de que su domicilio en España está acreditado por lo que se desprende del padrón municipal.

IV.- En lo tocante a la madre, de acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior.

V.- Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria de la nacida en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que el interesado pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad ecuatoriana o boliviana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

VI.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (8ª)

III.1.1.- Adquisición de la nacionalidad de origen *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España hija no matrimonial de padre y madre marroquíes.

En las actuaciones sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana el 3 de junio de 2009, los ciudadanos marroquíes, Don B. y Doña B. solicitaban la declaración de la nacionalidad española, con valor de simple presunción, de su hija S. nacida en Las P de G-C. el ... de ... de 2009, por la imposibilidad de obtener la documentación marroquí al considerarla las autoridades marroquíes como hija no matrimonial. Adjuntaban los siguientes documentos: certificación literal de nacimiento de la interesada; certificado del Consulado General de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria sobre la no inscripción de la menor en sus registros; certificados de empadronamiento; fotocopias del NIE y pasaportes de los promotores.

2.- Ratificados los interesados, el Ministerio Fiscal informó desfavorablemente la solicitud realizada. El Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, el 15 de abril de 2010, dictó auto denegando la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la declaración de la nacionalidad prevista en el artículo 17.1.c) del Código civil está prevista para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos les atribuya al hijo la nacionalidad y, en este caso, de acuerdo con la legislación marroquí y la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de marzo de 2007, no serían españoles de origen, por corresponderles *iure sanguinis* la nacionalidad de uno de los progenitores, los nacidos en España hijos no matrimoniales de padre y madre marroquíes, si existe reconocimiento paterno o se acredita la cohabitación durante el periodo probable de la concepción.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la falta de inscripción de su hija en el Consulado de Marruecos, por ser hija no matrimonial de padres marroquíes.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste muestra su conformidad con el auto emitido. El Encargado del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de la DGRN de 28 de marzo de 2007; y las Resoluciones, entre otras, de 12-1ª, 15-1ª y 22-2ª de septiembre, 17-3ª y 28 de octubre, 18-1ª y 27 de diciembre de 2000; 27-2ª de marzo, 5-1ª y 11 de abril y 5-1ª de mayo de 2001; 10-2ª de mayo y 23-2ª de octubre de 2003; 26-1ª de enero de 2004; 7-2ª de noviembre de 2005; 17-1ª de enero, 25 y 27-1ª de marzo y 7 de diciembre de 2006; 10-6ª de Diciembre de 2008.

II.- Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2 L.R.C.) que tiene la nacionalidad española de origen la nacida en España en el año 2009, hija no matrimonial de padres marroquíes.

III.- Esta pretensión se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida en el artículo 17.1.c) del Código civil para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

IV.- Es necesario, pues, determinar el contenido y alcance de la legislación marroquí en orden a la atribución de esta nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padres marroquíes (cfr. art. 12 nº6 C.c.), lo que presupone la siempre compleja tarea previa de valorar la prueba del Derecho extranjero aplicable y de interpretar sus mandatos. Es esta complejidad, que explica alguno de los matices y variaciones que la doctrina de este Centro Directivo ha experimentado en la materia, junto con la conveniencia de reexaminar el tema a la luz de las modificaciones introducidas en el Código de Familia de Marruecos (Mudawana) en virtud del Dahir nº1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley nº 70.03, y que entró en vigor el 5 de febrero de 2004, dada la trascendencia que para el régimen de transmisión de la nacionalidad marroquí por vía de *ius sanguinis* presenta la cuestión previa de la determinación de la filiación paterna del hijo, lo que aconseja su revisión sistemática y general.

V.- Este Centro Directivo había mantenido hasta su Resolución de 27 de octubre de 1998 que el artículo 17-1-c del Código civil no era aplicable a los hijos de padre marroquí, porque por aplicación de la ley marroquí, los hijos de padre marroquí ostentaban *de iure* la nacionalidad marroquí por nacimiento, siendo indiferente el dato del carácter matrimonial o no de tal filiación a la hora de valorar la adquisición, o falta de adquisición, de la nacionalidad española *iure soli*. Esta doctrina estaba basada en el conocimiento entonces adquirido de la legislación marroquí en la materia, y en concreto en el artículo 6 del Dahir nº 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de nacionalidad marroquí, el cual establece que tiene la nacionalidad marroquí de origen por filiación: “1º el niño nacido de un padre marroquí; y 2º el niño nacido de una madre marroquí y de un padre desconocido”, y ello sin exigencias adicionales relativas al lugar de nacimiento y, por tanto, también en el caso de que el mismo tenga lugar en el extranjero. Tampoco condiciona el precepto mencionado la atribución de la nacionalidad marroquí originaria a que el nacimiento del niño haya tenido lugar dentro de un matrimonio, lo que había permitido a esta Dirección General extraer la consecuencia de que dicha nacionalidad se transmitía al hijo con independencia del tipo de filiación y del estado civil del padre.

VI.- La doctrina anterior sufre una primera inflexión con la Resolución de 15-5ª de febrero de 1999, en la que el Centro Directivo a la vista de la prueba del Derecho extranjero aportada por los promotores junto a su escrito de recurso, alcanza una conclusión distinta de la hasta entonces mantenida. Con arreglo a la citada prueba de la legislación marroquí, el hijo nacido en el extranjero de ciudadanos marroquíes, únicamente puede ser considerado de esta nacionalidad si ha nacido dentro de un matrimonio que sea válido conforme a la legislación marroquí. Por lo tanto, el matrimonio contraído en el extranjero debe hacerse con arreglo a las normas que correspondan según el estatuto personal del contrayente marroquí. En consecuencia los hijos nacidos de una relación no matrimonial o ilegítima no pueden ser considerados marroquíes, conclusión que se extendía al matrimonio civil celebrado en España, matrimonio que, se afirmaba, carece de validez según la legislación personal del padre y por tanto, y de acuerdo con la misma, los hijos habidos de tal matrimonio no pueden ser considerados como marroquíes, dando con ello lugar a la estimación del recurso. La tesis, paralela a la anterior, de que es necesario para la atribución de la nacionalidad marroquí por filiación paterna no matrimonial que esta determinación de la filiación no matrimonial sea válida para el Ordenamiento marroquí, en combinación con la no aplicación por el Derecho marroquí en esta materia de la regla *locus regit actum*, dando lugar a que la determinación de la filiación paterna de acuerdo con las leyes españolas carece de eficacia en Marruecos, fue acogida por esta Dirección General, en línea con la Resolución anterior, como causa impeditiva de la adquisición por nacimiento *iure sanguinis* de la nacionalidad marroquí del padre a pesar de mediar un reconocimiento formalizado conforme al Derecho español (cfr. Resolución de 16-1ª de enero de 2002). Además, el hecho de que el padre fuese conocido, a pesar de no entenderse establecido legalmente para el Derecho marroquí el vínculo de la filiación, suponía excluir la nacionalidad marroquí del nacido por vía de filiación materna, la cual está condicionada a la circunstancia de ser desconocido el padre. Con ello se venía a aplicar una misma y única solución a los casos de filiación paterna no matrimonial, cuando el reconocimiento por parte del padre no fuese considerado válido por el Derecho marroquí, y a los supuestos de filiación matrimonial, cuando fuese el propio vínculo matrimonial el no reconocido por tal Derecho.

VII.- Sin embargo, este Centro Directivo en su Resolución de 5-4ª de febrero de 2002 vuelve sobre sus pasos y, para los supuestos de filiación matrimonial, recupera de nuevo su doctrina anterior a 1999, afirmando que no obstante la conclusión contraria a la que llegó la mencionada Resolución, “se impone ahora, de acuerdo con el conocimiento más exacto adquirido de la legislación marroquí, confirmar la doctrina anterior de la Dirección General, en el sentido de que el nacido fuera de Marruecos de padre marroquí, siendo su filiación matrimonial, tiene *de iure* desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre, con independencia de las dificultades *de facto* con que se encuentre (el interesado) en el Consulado marroquí para documentarse como nacional de este país y para que sea reconocido el matrimonio de su padre. No hay, por otra parte, dificultades insuperables en este caso para que sea reconocida en Marruecos la validez de un matrimonio civil celebrado en España entre un marroquí musulmán y una cristiana”. Pero nuevamente esta conclusión es matizada respecto de los casos en que el matrimonio civil se haya celebrado entre dos marroquíes en España, al admitir la falta de eficacia del mismo para Marruecos (cfr. Resolución de 16-8ª de septiembre de 2002). Alineándose con la citada Resolución de 5-4ª de febrero de 2002, y extendiendo sus conclusiones al ámbito de la filiación paterna no matrimonial, la más próxima de 26-1ª de enero de 2004, niega la condición de español *iure soli* al nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana. Esta misma doctrina debe ser ahora confirmada para el caso presente relativo a una niña nacida en España hija no matrimonial de padres marroquíes, doctrina que se reafirma a la vista de las modificaciones que ha introducido en el Código de Familia marroquí (Mudawana) en materia de filiación el Dahir nº1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley nº 70.03, norma que necesariamente se ha de tomar en cuenta por razón de lo dispuesto por el artículo 9 nº1 y 4 del Código civil que remiten la regulación de la determinación y contenido de la filiación al estatuto personal del hijo.

Ahora bien, dado que, a su vez, al tratar de aplicar el artículo 17-1-c del Código civil se parte de una situación de potencial intervención subsidiaria de la nacionalidad española a fin de evitar la, en su defecto, apatridia del menor, surge una situación paradójica caracterizada por un efecto de “doble espejo” entre los artículos 17-1-c y 9 nº1 y 4 del Código civil, en la que la nacionalidad y la filiación del menor son respectivamente cuestiones previas la una respecto de la otra, sin que ninguna de la dos se pueda definir sin determinar antes la otra: el hijo es nacional marroquí si se establece su filiación respecto de un padre marroquí, pero para determinar esta filiación ha de hacerse aplicación del estatuto personal del hijo que, a su vez, se determina por la nacionalidad del mismo, nacionalidad que no puede afirmarse sin el “prius” de la filiación.

VIII.- En una primera aproximación al tema, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, se observa que el artículo 9 nº 4 del Código civil adolece de una laguna legal por referirse sólo al carácter y contenido de la filiación pero no a su “determinación”. Para subvenir a tal laguna, descartada la tesis de la “lex fori” por falta de soporte legal, la mayoría de la doctrina científica y la oficial de este Centro Directivo ha abogado por una aplicación analógica del propio artículo 9 nº 4 citado (cfr. Resoluciones de 29 de abril de 1992 y 18 de septiembre de 1993, entre otras), tesis a la que más recientemente se ha sumado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de marzo de 2000, lo cual supone acudir a la ley nacional del hijo, sometiendo a la misma los títulos de determinación y acreditación de la filiación, la regulación de los medios de prueba y de las acciones de impugnación y reclamación de la filiación.

IX.- Ciertamente es que estando en cuestión la determinación sobre el efecto de transmisión de la nacionalidad en función del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación, en atención a las diferencias sustantivas entre ambos tipos que al respecto se desprenden de la legislación marroquí (conforme al art. 148 de la Mudawana la filiación ilegítima no produce ninguno de los efectos de la filiación legítima respecto al padre), y a la vista del principio de igualdad jurídica y proscripción de toda discriminación por razón de filiación que establecen los artículos 14 y 39 de nuestra Constitución, principios desarrollados legalmente en nuestro Ordenamiento desde la Ley 11/1981, de 13 de mayo, el reenvío que el artículo 9 nº 4 del Código hace a aquella legislación puede ser excepcionado aplicando el filtro constitucional a través de la cláusula del orden público internacional español, en línea con la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29 de mayo, en la que se afirma que “el estatuto jurídico del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos” (Fundamento jurídico 5º). El mismo Tribunal Constitucional ha hecho aplicación práctica de esta idea para rechazar la intervención de la ley extranjera que prohíbe las acciones de filiación del hijo, aplicando en su lugar sustitutivamente la ley española, activando así la previsión del artículo 12 nº 3 del Código civil (vid. Sentencia 7/1994, de 17 de enero). Igualmente actúa en tal dirección la existencia de normas materiales imperativas en el Derecho español que limitan el alcance de las normas de conflicto antes vistas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 1 declara aplicable la Ley a todo menor de dieciocho años que se encuentre en España, sea nacional o extranjero.

La ley española, como ley del foro, es también la que resulta aplicable si se parte de la idea de que, por ser la filiación una cuestión previa y condicionante de la de la nacionalidad del menor, la cuestión del establecimiento del vínculo filial se ha de resolver partiendo como premisa previa del carácter indeterminado de la nacionalidad del hijo, lo que supone aplicar como punto de conexión la residencia habitual de éste (cfr. arts. 9 nº 4 y nº 10 C.c.), lo cual remite en el presente caso, como se ha dicho, a la ley española, que es la más estrechamente vinculada al supuesto de hecho (ley del foro, ley del nacimiento y de la residencia habitual de padres e hijo). Finalmente en este complejo proceso interpretativo, abundando en la solución apuntada, se ha de ponderar de forma decisiva el principio del “favor filiationis”, que igualmente aconseja aplicar la ley que reconoce el vínculo de filiación como vínculo jurídico

resultante del hecho biológico de la procreación (ley española), descartando la ley que niega tal vínculo (ley marroquí).

X.- Las conclusiones anteriores no quedarían desvirtuadas incluso si se considerase que la anterior aproximación metodológica al tema puede no ser la correcta cuando de lo que se trata es de examinar la cuestión de la determinación de la filiación como cuestión previa a la aplicación del artículo 17-1-c del Código civil, pues si el resultado de la exclusión de la legislación extranjera fuera la de admitir el nexo filial a los efectos del Derecho español, arrastrando con ello la consecuencia lógica desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento de la afirmación de la nacionalidad marroquí del hijo, el resultado final sería el del incumplimiento de la finalidad de aquel precepto, esta es, la evitación de la apatridia, si paralelamente la misma conclusión sobre la nacionalidad del menor no fuese alcanzada, como obviamente no lo será por partir de la premisa de su inaplicación, por la legislación marroquí. Con ello se daría precisamente la situación de apatridia que se trataba de evitar. Desde esta perspectiva, para lograr la finalidad a que propende la norma se impondría admitir la excepción de la excepción, esto es, la inaplicación al caso de la cláusula del orden público, razón por la que procede el análisis del tema de la filiación del menor desde la exclusiva perspectiva del Derecho marroquí.

Pues bien, resulta incuestionable que el Derecho marroquí asume el criterio de la transmisión de la nacionalidad *iure sanguinis* como regla preferente (vid. artículo 6 del Dahir nº250-58-1 de 6 de septiembre de 1958), si bien ello lo hace asumiendo el principio básico propio del Derecho de familia islámico de que el parentesco se transmite por línea masculina, razón por la cual la transmisión de la nacionalidad por vía materna se condiciona a que el padre sea desconocido. La legitimidad de la filiación presupone, en consecuencia, la prueba de la consanguinidad del padre respecto del hijo. La filiación se presume "iuris tantum" por la ley cuando el hijo nace durante el matrimonio o en un determinado periodo de tiempo posterior a su disolución compatible con la presunción de que la concepción fue matrimonial (cfr. arts. 152 a 154 de la Mudawana). Esto viene a coincidir con el contenido de la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos en nota verbal del año 1994, que vincula la prueba de la paternidad a la existencia de un matrimonio válido conforme a la legislación marroquí.

Pero tal afirmación, aislada de su contexto jurídico, supone a fecha actual incurrir en una suerte de "sinécdoque jurídica", tomando la parte por el todo, pues son medios legales para la determinación de la filiación paterna no sólo la presunción legal que se deriva del matrimonio, sino también el reconocimiento y la cohabitación (cfr. art. 152 de la Mudawana reformada), produciendo ésta los mismos efectos de prueba que el matrimonio, y ostentando el hijo reconocido los mismos derechos y deberes que los hijos matrimoniales (cfr. arts. 157 de la Mudawana reformada). Esta nueva situación legal obliga a extender la solución dada al caso de la filiación paterna matrimonial a los casos de matrimonios civiles contraídos en el extranjero (matrimonio que en España presupone la cohabitación: art. 68 C.c.), y a los supuestos de filiación no matrimonial cuando quede acreditado el reconocimiento válido para Marruecos o la cohabitación. Hay que subrayar, en cuanto a los matrimonios contraídos por ciudadanos marroquíes fuera de Marruecos, que el nuevo Código de Familia marroquí admite su celebración en la forma local propia del país de la residencia habitual de aquellos, admitiendo, pues, el Derecho marroquí en la actualidad en esta materia la regla *locus regit actum*, sin perjuicio de la obligación de depositar una copia del acta matrimonial en el Consulado de Marruecos correspondiente al lugar de celebración (cfr. arts. 14 y 15). Además, el artículo 157 del nuevo Código admite el establecimiento de la filiación también en los casos de matrimonios viciados o impugnables o incluso en el supuestos de las denominadas "relaciones por error" (vid. art. 152 nº3).

XI.- En cuanto a estos efectos probatorios de la filiación no matrimonial, no puede obviarse el hecho de que la propia inscripción del nacimiento en el Registro Civil español constituye prueba de la filiación (cfr. arts. 113 C.c., y 2 y 41 L.R.C.), de especial importancia cuando la

inscripción ha sido promovida por el padre conjuntamente con la madre, como sucede en el presente caso, y practicada dentro del plazo legal (cfr. arts. 120 nº1 y 124 C.c.), siempre que no se aprecie imposibilidad biológica para la paternidad y que no haya otra distinta acreditada (cfr. art. 113 “in fine” C.c.), y siempre que no pueda dudarse de la autenticidad del reconocimiento. La invocación en este punto de los citados preceptos del Ordenamiento español se hacen no en calidad de reguladores del fondo del reconocimiento (al no haber cuestión en este caso sobre la necesidad de consentimientos complementarios o de otros posibles obstáculos legales), aspecto en el que hay algunos antecedentes en la jurisprudencia registral no pacíficos desde el punto de vista de su aceptación por parte de la doctrina científica, sino en tanto que relativos a la “forma” del reconocimiento, y por tanto amparados en su pertinencia *in casu* por las reglas del artículo 11 del Código civil (cfr. Resolución de 25 de marzo de 1985). Finalmente ha de destacarse en esta materia la asunción del principio del “favor filiationis” por el Derecho marroquí, que sienta la presunción de que “la filiación es legítima respecto del padre y de la madre salvo prueba en contrario” (vid. art. 143). Admitida, pues, la existencia de un vínculo filial entre el padre marroquí y su hijo, éste adquiere *de iure* por filiación desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre.

XII.- Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17-1-c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se produce, no es posible declarar que la nacida ostenta la nacionalidad española, al estar basada la pretensión y el posterior recurso en un certificado consular que en modo alguno puede servir para fundamentarla ya que tan sólo recoge que la misma no se encuentra registrada en el Consulado, al no producirse en este caso situación alguna de apatridia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (112ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Alorcón (Madrid).

HECHOS

1.- Mediante solicitud dirigida al Registro Civil de Alorcón el 17 de marzo de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don J-E. y Doña J-S. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, J-F. nacido en A. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado de empadronamiento; certificados del Consulado de Bolivia en Madrid

sobre la legislación de nacionalidad, la no inscripción del menor en los Libros de Nacimiento de esa Oficina Consular ni en ningún Registro Civil de la República de Bolivia; fotocopias de los NIE de los promotores y del libro de familia.

2.- Una vez ratificados los interesados en su solicitud el 4 de diciembre de 2009 y previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Alcorcón dictó auto el 2 de febrero de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable al hijo de los solicitantes por nacer éste cuando ya estaba en vigor la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso presentado y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el ... de ... de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen,

por nacer el interesado el mismo día en el que entró en vigor la mencionada reforma, no es posible declarar que el nacido en España ostente la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcorcón (Madrid).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (113ª)

III.1.1.- Adquisición de nacionalidad *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España de padres paraguayos nacidos en Paraguay.

En las actuaciones sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra acuerdo de la encargada del Registro Civil de Elche.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Elche el 11 de marzo de 2008, Don G. y Doña V. ambos de nacionalidad paraguaya, domiciliados en E. solicitaban la declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española de origen de su hijo L-C. nacido en E. el ... de ... de 2007. Adjuntaban los siguientes documentos: pasaportes de los padres, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español del menor y certificados de la embajada de Paraguay acreditativos de la nacionalidad de los padres y de la no inscripción del menor en el registro civil consular.

2.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Elche dictó acuerdo el 2 de mayo de 2008 denegando la solicitud realizada porque, según consta en el pasaporte del padre, éste debería haber retornado a Paraguay en octubre de 2007 y de acuerdo con la legislación paraguaya, el hijo de paraguayos nacido en el extranjero adquiere la nacionalidad paraguaya por el solo hecho de tener los progenitores su residencia en Paraguay.

3.- Notificada la resolución a los promotores, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los padres tienen su residencia efectiva en España desde noviembre de 2006, si bien no tienen regularizada su situación en este país.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Elche remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, 1-2ª de noviembre de 2003; 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004; 16-3ª de septiembre de 2005; 27-4ª de diciembre de

2006; 3-5ª de enero y 11-2ª de junio de 2007; 29-2ª de febrero de 2008; 27-4ª de enero de 2009; 9-1ª de julio y 16-4ª de septiembre de 2010; 6-12ª de Septiembre de 2011; 7-46ª de junio de 2012 y 28-13ª de mayo de 2013.

II.- Se pretende por medio de este expediente la declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española de origen de un menor nacido en España en... de 2007 hijo de padres paraguayos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro directivo de la legislación paraguaya, esta tan solo atribuye dicha nacionalidad a los hijos de padre o madre paraguayos nacidos en el extranjero cuando aquellos se radiquen en la República en forma permanente. No cabe duda, por tanto, de que los hijos de paraguayos nacidos fuera de Paraguay no adquieren al nacer *iure sanguinis* automáticamente la nacionalidad de sus progenitores sino que se requiere un acto posterior, en concreto la formalización de la declaración de la nacionalidad natural efectuada cuando se radiquen en la Paraguay en forma permanente (Ley nº 582/1995). El hecho de que sobre el progenitor pesara una orden de salida, como máximo, en octubre de 2007 no altera esta solución, dado que la obligación de establecimiento o radicación en Paraguay se refiere al hijo de padre o madre paraguayos nacido en el extranjero, no a los padres.

IV.- Se da pues una situación de apatridia originaria en la que la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone, sin que importe que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

V.- Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño en cuanto establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el menor interesado es español de origen. La declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Elche.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (114ª)

III.1.1.-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 15 de Octubre de 2008 los ciudadanos bolivianos Don Y-R. y Doña W. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación de nacimiento de la menor; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción y negativo de nacionalidad de la menor y de inscripción de los progenitores; pasaportes y documentación de los progenitores.

2.- Ratificados los promotores, oídos dos testigos y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se declaró conforme con la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 19 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción habida cuenta de las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, de la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo con el artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009, sin que para ello fuera óbice suficiente el hecho de estar la nacida inscrita o no inscrita en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los padres de la menor interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la menor nació antes de la entrada en vigor el artículo 141 de la Nueva Constitución Política del Estado y por tanto durante la vigencia del artículo 36 de la Constitución boliviana de 1967, que exigía el cumplimiento de determinadas formalidades para que los nacidos en el extranjero de padres bolivianos adquirieran esta nacionalidad. Alegaban también que de adoptarse una solución negativa se llegaría a soluciones injustas en la medida en que la respuesta a la petición dependería del Registro Civil donde se hubiera incoado el expediente.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en... de 2008 hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues

una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.-Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (115ª)

III.1.1.-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 22 de Septiembre de 2008 los ciudadanos bolivianos Don A-E. y Doña S-G. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, G. nacido en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción y negativo de nacionalidad del menor y de inscripción de los progenitores; pasaportes y documentación de los progenitores.

2.- Ratificados los promotores, oídos dos testigos y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se declaró conforme, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 19 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad

española con valor de simple presunción habida cuenta de las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, de la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo con el artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009, sin que para ello fuera óbice suficiente el hecho de estar el nacido inscrito o no inscrito en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los padres del interesado interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando por un lado la insuficiente motivación del auto dictado, debido a que se había empleado un modelo normalizado que no ninguna circunstancia relativa al menor, de forma que los promotores no podían conocer qué razones habían llevado a alcanzar la decisión denegatoria; por otro lado, alegando la irretroactividad de las leyes, puesto que el menor había nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana y de las Circulares adoptadas por esta Dirección General; y en fin, se amparaban en la Nota explicativa emitida por el Consulado de Bolivia en Murcia que adjuntaban donde se afirma que tanto la vigente Constitución boliviana como la anterior no sólo reconocen la doble nacionalidad sino que las dos permiten la discrecionalidad de los padres para su ejercicio a través de la inscripción de los hijos.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en... de 2008 hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.-Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (116ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 14 de abril de 2009, los ciudadanos bolivianos Don R-A. y Doña C. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, G. nacido en G. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; y certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción del menor.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que manifiestan su oposición al recurso interpuesto; interesó la estimación

del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, en el supuesto que de que el interesado hubiera nacido con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (137ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Orihuela (Alicante).

HECHOS

1.- Mediante solicitud dirigida al Registro Civil de Orihuela el 14 octubre de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don R-R. y Doña E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A-C. nacida en O. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado del Consulado de Bolivia en Murcia sobre la legislación boliviana relativa a la nacionalidad y la no inscripción de la menor en los libros de nacimiento de esa Oficina Consular; certificados de empadronamiento; y fotocopias de los pasaportes de los promotores.

2.- Una vez ratificados los interesados en su solicitud y previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Orihuela dictó auto de fecha 11 de marzo de 2010, por el que deniega la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable a la hija de los solicitantes por nacer ésta en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de

la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que la nacida en España ostente la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Orihuela (Alicante).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (138ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante solicitud dirigida al Registro Civil de Murcia el 21 de mayo de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don J-C. y Doña M-E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, A. nacido en M. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados del Consulado de Bolivia en Murcia sobre la legislación boliviana relativa a la nacionalidad, la no inscripción del menor en los libros de nacimiento de esa Oficina Consular y sobre inscripción consular de los padres; fotocopias de los pasaportes de los promotores y del libro de familia.

2.- Una vez ratificados los interesados en su solicitud el 24 de noviembre de 2009 y previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto de fecha 3 de mayo de 2010, por el que deniega la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable al hijo de los solicitantes por nacer éste en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del auto.

4.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo emitido y dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido en España ostente la nacionalidad española.

IV.-Finalmente, en cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000).

En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de los recurrentes y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la denegación de la inscripción, de modo que los recurrentes han podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (140ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Almagro (Ciudad Real).

HECHOS

1.- Mediante solicitud dirigida al Registro Civil de Almagro el 29 de junio de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don S. y Doña V. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A-M. nacida en C-R. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; fotocopias de los pasaportes de los promotores y del libro de familia.

2.- Una vez ratificados los interesados en su solicitud el 16 de julio de 2009 y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Almagro dictó providencia el 14 de agosto de 2009, por el que declara que, de acuerdo con la Circular de 21 de mayo de 2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado y la reforma operada en la legislación boliviana con relación a la nacionalidad, no concurriría ya la condición de apatridia que fundamenta la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España, por lo que da nuevamente traslado al Ministerio Fiscal al objeto de que emita el correspondiente informe.

3.- El Ministerio Fiscal, en nuevo informe se opone a la pretensión de los promotores y el Encargado del Registro Civil, por auto de fecha 2 de diciembre de 2009 deniega la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable a la hija de los solicitantes por nacer ésta en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

4.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

5.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos

a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que la nacida en España ostente la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Almagro (Ciudad Real).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (141ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de madre boliviana nacida en Bolivia y padre desconocido.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 3 de febrero de 2009, la ciudadana boliviana Doña C-M. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, H-D. nacido en V. el ... de ... de 2008. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; y certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de la madre y la no inscripción del menor.

2.- Una vez ratificada la promotora y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil.

3.- Notificada la resolución a la interesada y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a la interesada, que manifiesta su oposición al recurso interpuesto, alegando que no opera la retroactividad del artículo 141 de la Nueva Constitución de Bolivia en el caso de su hijo, fundamento del recurso interpuesto; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de madre boliviana y padre desconocido. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, en el caso de que el interesado hubiera nacido con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (147ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España hijo de padre boliviano y madre uruguaya nacida en Uruguay.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Gandía el 17 de febrero de 2009, el ciudadano boliviano Don O-N. y la ciudadana uruguaya Doña A-P. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad L. nacido en G. el ... de ... de 2007. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad del padre y la no inscripción del menor en los libros de nacimientos de esa Oficina Consular y, por consiguiente, en ningún Registro Civil de la República de Bolivia; certificados emitidos por el Consulado de Uruguay en Valencia sobre la nacionalidad de la madre y la no inscripción del menor; y volante de empadronamiento de los padres.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que alegan que no sería de aplicación lo dispuesto en la Nueva Constitución de Bolivia al haber nacido su hijo con anterioridad a su entrada en vigor; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004; 16-3ª de septiembre de 2005; 27-4ª de diciembre de

2006; 3-5ª de enero y 28-3ª de diciembre de 2007; 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010; y 13-32ª de septiembre de 2013.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2007, hijo de padre boliviano y madre uruguaya nacida en Uruguay. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- Respecto a la nacionalidad uruguaya, según el más reciente conocimiento que este Centro Directivo ha tenido del Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 13.021, de 13 de abril de 1989). Igualmente son ciudadanos naturales de la República Oriental de Uruguay los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico (vid. Artículo 74 de la Constitución uruguaya). Por lo que, al ser la madre del menor uruguaya nacida en Uruguay le correspondería al mismo *iure sanguinis* la nacionalidad uruguaya de la madre, según el artículo 2 de la Ley 13.021 antes señalada.

IV.- Consiguientemente, no se da, pues, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española conforme al citado artículo 17.1.c) del Código civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no tenga otra nacionalidad *iure sanguinis*, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (148ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gandía el 4 de febrero de 2009, los ciudadanos bolivianos Don S. y Doña M-V. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, D- A. nacida en

G. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; y certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción de la menor.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía dictó auto el 28 de septiembre de 2009 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados y al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, se atribuye la nacionalidad boliviana a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, precepto con efectos retroactivos de acuerdo a la cláusula abrogativa de dicha Constitución, por lo que no procedería la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor.

4.- Recibido el escrito, la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía notificó el recurso a los interesados, que alegan estar de acuerdo con el auto emitido; interesó la estimación del recurso y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a

adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (15ª)

III.1.1.- Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Murcia el 9 de febrero de 2009 los ciudadanos bolivianos Don J-C. y Doña D. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad C-M. nacido en M. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre la no inscripción consular del menor e inscripción de los promotores; y certificados de empadronamiento.

2.- Una vez ratificados los padres, que aportaron fotocopias de los pasaportes, oídos los testigos y previo informe del Ministerio Fiscal que se mostró conforme con la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 15 de octubre de 2009 denegando la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que, teniendo en cuenta las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño, que al menor le correspondía la nacionalidad boliviana tras la reforma efectuada por la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, sin que para ese pronunciamiento fuere obstáculo el hecho de estar el nacido inscrito o no en el correspondiente Consulado de Bolivia.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la irretroactividad de las normas, puesto que el menor había nacido antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana y las Circulares adoptadas por esta Dirección General, en un momento en que se interpretaba que los nacidos en España de padres bolivianos no adquirirían la nacionalidad de éstos. Alegaban también insuficiente motivación del auto dictado.

4.- Recibido el escrito, el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia remitió el recurso al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación del Auto recurrido en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2009, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, en los nacidos con posterioridad a la mencionada reforma, no concurriría la situación de apatridia que fundamentó, hasta la misma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España, como es el caso del interesado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (16ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España de padre macedonio y madre boliviana antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana de Febrero de 2009.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Vilanova i La Geltrú (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al el Registro Civil de Vilanova i La Geltrú el 26 de enero de 2009, el ciudadano macedonio Don Z. y la ciudadana boliviana Doña M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad A. nacido en S. el ... de ... de 2008. Adjuntaban, entre otra, la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor interesado; certificado emitido por el Consulado de Bolivia en Barcelona sobre la no inscripción consular del menor; certificado emitido por la Embajada de la República de Macedonia en Madrid sobre la no inscripción del menor y negativo de la nacionalidad macedonia de éste; certificado de empadronamiento; fotocopias del pasaporte del promotor y del NIE de la madre.

2.- Una vez recibido el escrito y notificado el Ministerio Fiscal, este interesó que se oficiase a la Embajada de Macedonia en Madrid a los efectos de que certificase las normas con respecto a la adquisición de la nacionalidad de los nacidos fuera del territorio nacional cuando el padre o la madre son nacionales de Macedonia. Antes de recibir respuesta, los promotores enviaron escrito al Registro Civil informando de que la reforma del régimen de la nacionalidad efectuada en Bolivia mediante la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado no afectaba al menor interesado debido a que había nacido antes de su entrada en vigor, con apoyo en numerosas resoluciones de esta Dirección General; respecto a la legislación macedonia alegaban que el artículo 4.3 de la Ley de ciudadanía de Macedonia indica los nacidos en el extranjero de un progenitor macedonio y otro extranjero pueden adquirir la ciudadanía macedonia si, antes de alcanzar los 18 años de edad, procede a la inscripción en el Registro o al traslado de la residencia a Macedonia junto con el progenitor macedonio, u opta a dicha nacionalidad antes de cumplir los 23 años; que por todo lo anterior el menor no había recibido ninguna nacionalidad en el momento del nacimiento y correspondía aplicar el artículo 17.1 c) del Código Civil. Adjuntaban una traducción particular de la Ley de ciudadanía de la República de Macedonia.

3.- El 3 de Septiembre de 2009 los promotores presentan escrito al considerar su solicitud desestimada por silencio negativo, reproduciendo los planteamientos del escrito previamente presentado de denuncia de la mora.

4.- Con fecha de 5 de Octubre de 2009 la Embajada de la República de Macedonia en Madrid remitió contestación a la petición de 5 de Mayo de 2009 e informó que el nacido, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de nacionalidad de la República de Macedonia, podía acceder a la nacionalidad macedonia por origen del padre, siempre que la madre firmase una declaración aceptándolo; para poder hacer la solicitud de nacionalidad macedonia para el nacido en cuestión los dos padres tendrían que presentarse en la Embajada de la República de Macedonia en Madrid personalmente.

5.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Vilanova i La Geltrú dictó auto de fecha 26 de octubre de 2009, denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que al nacido le correspondían las nacionalidades de sus progenitores, dado que los países de origen de los padres no negaban al menor la nacionalidad; por lo que el menor interesado no cumple los requisitos establecidos por el artículo 17.1.c) del Código Civil.

6.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, a través de representante estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

7.- El Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

8.- Recibidas las actuaciones por esta Dirección General se solicitó para mejor proveer (artículo 358 IV del RRC) la Ley macedonia sobre atribución de la nacionalidad a la Dirección General de españoles en el exterior y asuntos consulares y migratorios. Una vez recibida la documentación se procedió a resolver el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de Mayo de 2009, y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 19-1ª de Octubre y 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero, 28-4ª de Noviembre y 12-2ª de Diciembre de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero y 20-6ª de julio de 2010; 27-4ª de Mayo y 5-20ª de Septiembre de 2011.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padre macedonio y madre boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil). Para determinar si al menor le corresponde la nacionalidad española es necesario, por tanto, examinar el régimen de atribución de la nacionalidad previsto por la legislación nacional de cada uno de los padres.

III.- Respecto a la ley del padre, de acuerdo con el conocimiento adquirido por esta Dirección General de la legislación macedonia -facilitada por la Embajada de España en Skopie-, según la Ley sobre la nacionalidad de la República de Macedonia, N° 10-2356/2, de 25 de Junio de 2004, la atribución de la nacionalidad a los hijos nacidos fuera de Macedonia de un progenitor macedonio y otro extranjero no se produce automáticamente en el momento del nacimiento,

sino que es necesario un acto posterior, ya sea el establecimiento de la residencia en Macedonia junto con el progenitor natural de ese país, ya la declaración y registro, ya la declaración por el propio interesado después de los 18 años (artículo 5). De ello se desprende que el menor interesado no obtuvo la nacionalidad boliviana en el momento del nacimiento.

IV.- En lo tocante a la madre, partiendo también de la legislación boliviana tal y como es conocida por esta Dirección General, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior.

V.- Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria del nacido en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que el interesado pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad macedonia o boliviana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

VI.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (17ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Totana (Murcia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Totana el 23 de abril de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don C. y Doña E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, B. nacido en L. (M) el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: fotocopias de los pasaportes bolivianos de los

padres; certificados de empadronamiento correspondientes a los promotores; certificado del Consulado de Bolivia en Murcia, en el que se indica que los padres se encuentran debidamente inscritos y registrados en ese Consulado desde el 20 de abril de 2009; certificado del mismo Consulado por el que se declara que el menor no se encuentra inscrito en los Libros de Nacimiento de esa Oficina Consular ni en ningún Registro Civil de la República de Bolivia; fotocopia del libro de familia y certificado literal de nacimiento del menor.

2.- La Encargada del Registro Civil de Totana dictó auto el 25 de enero de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable al hijo de los solicitantes, por nacer este en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la declaración y alegando que la reforma del artículo 141 de la Constitución de Bolivia vigente es posterior a la fecha de nacimiento de su hijo, por lo que no procedería su aplicación.

4.- El Ministerio Fiscal, se adhiere al recurso interpuesto e interesa que se dicte resolución por la que se acceda a lo solicitado por los promotores, y la Encargada del Registro Civil se ratifica en el auto emitido y dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el ... de ... de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara

e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido en España ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Totana (Murcia).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (18ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España de padre portugués y madre brasileña nacidos respectivamente en Portugal y Brasil.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Corcubión (La Coruña).

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Corcubión el 26 de enero de 2009 el ciudadano portugués A. y la ciudadana brasileña R-A. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad Á-D. nacida en La C. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la mero; inscripción del promotor en el Registro de Ciudadanos de la Unión Europea; certificado emitido por el Vice-Consulado de Portugal en Vigo sobre la no inscripción consular de la menor y la legislación portuguesa relativa a la nacionalidad; certificado emitido por el Consulado General de Brasil en Madrid negativo de la nacionalidad brasileña de la menor; certificado de empadronamiento; fotocopias de los pasaportes de los promotores y del libro de familia.

2.- Notificado el Ministerio Fiscal, que emitió informe oponiéndose a la declaración instada por no resultar acreditado el supuesto que contempla el artículo 17.1 c) del Código Civil, el Encargado del Registro Civil de Corcubión dictó auto el 22 de febrero de 2010 accediendo a la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción sobre la base de la resolución de esta Dirección General de 28-2ª de Abril de 2000, que en síntesis afirma que el hijo de brasileños nacido fuera de Brasil no adquiere automáticamente la nacionalidad brasileña, de manera que es español de origen por aplicación del artículo 17 del Código Civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, si bien la menor no había recibido la nacionalidad brasileña, el Encargado había omitido que la niña había nacido de padre portugués y que la legislación de ese país atribuye la nacionalidad portuguesa incluso a los nietos de naturales

de Portugal, tras la reforma de 2006, y que, por lo tanto, debía denegarse la solicitud ya que la menor no tenía ningún impedimento para adquirir la nacionalidad portuguesa.

4.- Recibido el escrito, el Encargado del Registro Civil de Corcubión remitió el recurso a los progenitores, que se dieron por notificados. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 28 de Marzo de 2007; la Circular de 16 de Diciembre de 2008 y las Resoluciones de 28-2ª de Abril de 2000; 5-3ª de marzo de 2004; 11-2ª de Junio de 2007; 7-3ª y 28-4ª de Noviembre de 2008.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padre portugués y madre brasileña. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- Pues bien, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la ley brasileña no hay duda de que esa norma beneficia al nacido en España, hijo de padres brasileños, porque los hijos de brasileños nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de sus padres, sino que para ello es preciso un acto posterior. Respecto a la nacionalidad portuguesa, objeto de la controversia en el presente expediente, según el conocimiento adquirido de la legislación de ese país los hijos de portugueses nacidos en el extranjero precisan para la adquisición de la nacionalidad portuguesa que los representantes legales del nacido declaren en el Registro Civil local su voluntad de que el hijo sea portugués o que inscriban su nacimiento en el Registro Consular portugués que corresponda (art. 1 de la ley 37/81, de 3 de octubre y art. 6 del Decreto-Ley 322/82 de 12 de agosto), sin que haya quedado acreditado que tales requisitos se hayan cumplido de acuerdo con el certificado consular aportado.

III.- Se da, pues, una situación de apatridia originaria de la nacida en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que la interesada pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad portuguesa o brasileña de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Corcubión (A Coruña).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (19ª)

III.1.1.- Declaración sobre nacionalidad española.

No es español iure soli el nacido en España hijo de padres argelinos.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Ciudad Real.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ciudad Real el 14 de abril de 2008, Don J. y Doña N. solicitaron la declaración de la nacionalidad española, con valor de simple presunción para su hijo A. nacido en C. el ... de ... de 2006, en base a lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil. Aportaban, entre otros, los siguientes documentos: certificación literal de nacimiento del menor, en el que aparece que la nacionalidad de los padres es la argelina; certificado de empadronamiento familiar; fotocopias de los pasaportes argelinos de los mismos, expedidos en el año 2008 y libro de familia.

2.- Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal informó en sentido desfavorable, entendiéndose que no se ha acreditado que los progenitores no ostentasen la nacionalidad argelina, nacionalidad que se transmite *iure sanguinis*. El Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 7 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado al considerar que al menor interesado le correspondería *iure sanguinis* la nacionalidad que su progenitora ostentaba en el momento de su nacimiento.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que no ostentan la nacionalidad argelina.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la DGRN, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción; y las Resoluciones, entre otras, de 27-2ª de marzo y 5-2ª de mayo de 2001; 10-2ª de mayo y 23-2ª de octubre de 2003; 26-1ª de enero de 2004; 10-3ª de enero y 3-4ª de junio de 2005 y 6-1ª de junio de 2006.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen el nacido en España en 2006, hijo de padres argelinos. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17-1-c del Código civil).

III.- La pretensión de los recurrentes podría tener su apoyo en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida en el artículo 17-1-c del Código civil para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo

una nacionalidad. En el presente supuesto, de la documentación aportada se observa que los padres del interesado están en poder de pasaportes argelinos y en la certificación literal de nacimiento del interesado, consta la nacionalidad argelina de sus padres.

IV.- En cuanto a la alegación realizada por los promotores en el escrito de interposición del recurso, relativa a que los mismos no ostentaban ni habían ostentado nunca la nacionalidad argelina, se observa, que a fecha de la presente resolución, no obra en el expediente documento alguno que certifique lo alegado por los padres del menor, sino todo lo contrario, ya que se aportaron los correspondientes pasaportes argelinos. Por lo tanto, no ha resultado acreditado que en el momento del nacimiento del interesado, sus progenitores no ostentaran la nacionalidad argelina, lo que supone que el artículo 17.1.c) del Código Civil no beneficiaría al menor porque, por aplicación de la ley argelina de los padres, según resulta del conocimiento adquirido por este Centro Directivo, los hijos de un nacional argelino son de nacionalidad argelina incluso si han nacido en el extranjero.

V.- Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código Civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ciudad Real.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (20ª)

III.1.1.- Declaración sobre nacionalidad española.

No es español iure soli el nacido en España hijo de padres argelinos.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Ciudad Real.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ciudad Real el 1 de febrero de 2010, Don J. y Doña N. solicitaron la declaración de la nacionalidad española, con valor de simple presunción para su hijo H. nacido en C-R. el ... de ... de 2010, en base a lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil. Aportaban, entre otros, los siguientes documentos: certificación literal de nacimiento del menor, en el que aparece que la nacionalidad de los padres es la argelina; certificado de empadronamiento familiar; acta de matrimonio de los promotores; fotocopias de los NIE de los promotores, en los que constan con nacionalidad argelina; pasaportes argelinos de los mismos, expedidos en el año 2008; pasaporte español del Sr. M. y libro de familia.

2.- Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal informó en sentido desfavorable, entendiendo que no se ha acreditado que los progenitores no ostentasen la nacionalidad argelina, nacionalidad que se transmite *iure sanguinis*. El Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 8 de julio de 2010, denegando lo solicitado al considerar que al menor

interesado le correspondería *iure sanguinis* la nacionalidad que su progenitora ostentaba en el momento de su nacimiento.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que a otro de sus hijos se le ha resuelto favorablemente la adquisición de la nacionalidad española.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la DGRN, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción; y las Resoluciones, entre otras, de 27-2ª de marzo y 5-2ª de mayo de 2001; 10-2ª de mayo y 23-2ª de octubre de 2003; 26-1ª de enero de 2004; 10-3ª de enero y 3-4ª de junio de 2005 y 6-1ª de junio de 2006.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen el nacido en España en 2010, hijo de padres argelinos. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17-1-c del Código civil).

III.- La pretensión de los recurrentes podría tener su apoyo en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida en el artículo 17-1-c- del Código civil para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En el presente supuesto, de la documentación aportada se observa que los padres del interesado están en poder de pasaportes argelinos expedidos en el año 2008 (con anterioridad al nacimiento del menor), así como, tanto en la certificación literal de nacimiento del interesado, como en los NIE que obran en el expediente, consta la nacionalidad argelina de sus padres. Por lo tanto, no ha resultado acreditado que en el momento del nacimiento del interesado, sus progenitores no ostentaran la nacionalidad argelina, lo que supone que el artículo 17.1.c) del Código Civil no beneficiaría al menor porque, por aplicación de la ley argelina de los padres, según resulta del conocimiento adquirido por este Centro Directivo, los hijos de un nacional argelino son de nacionalidad argelina incluso si han nacido en el extranjero.

IV.- En cuanto a la alegación realizada por el Sr. M. con ocasión de la interposición del recurso, relativa a que otro de sus hijos había adquirido la nacionalidad española, este Centro Directivo ha podido verificar que dicho menor adquirió la nacionalidad española en virtud del artículo 20 del Código Civil, habida cuenta de la recuperación de la nacionalidad española por parte del Sr. M. en el año 2011, vía que podría ejercitarse también en el caso del interesado en el presente expediente. Consiguientemente, y de acuerdo con lo expuesto, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código Civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ciudad Real.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (22ª)

III.1.1.- Declaración sobre nacionalidad española.

Es español iure soli el nacido en España hijo de padres argentinos nacidos en Argentina.

En el expediente sobre adquisición de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Vilanova i La Geltrú (Barcelona)

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Vilanova i La Geltrú el 12 de mayo de 2010, los ciudadanos argentinos Don R-A. y Doña N. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, T-V. nacido en S-B de L. (B) el ... de ... de 2010. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del interesado; certificado de empadronamiento; certificado del Consulado General de la República de Argentina en Barcelona sobre la legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad argentina de los hijos de ciudadanos argentinos, nacidos en el extranjero; fotocopias de los NIE de los promotores y del libro de familia.

2.- Previo informe desfavorable emitido por el Ministerio Fiscal, que consideró que la legislación argentina posibilita a los padres a optar por dicha nacionalidad, el Encargado del Registro Civil dictó auto el 27 de mayo de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la legislación argentina no niega la nacionalidad al menor, sino que los padres no han realizado los trámites mínimos para obtener dicho reconocimiento.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, este interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del Auto recurrido en todos sus extremos. El Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción; y las Resoluciones de 3-1ª de junio, 23-1ª de septiembre y 19-1ª de diciembre de 2002 y 1-3ª de febrero, 26-4ª de marzo y 3-2ª, 11-3ª y 28-2ª de junio de 2003 y 13-2ª de febrero de 2004, 5-7ª de Noviembre de 2008; 6-4ª y 9-1ª de Julio de 2010; 6-12ª y 28-17ª de Septiembre de 2011.

II.- La petición de los promotores de que se reconozca la nacionalidad española a su hijo, nacido en España en 2010, tiene como vía registral el expediente para declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2º L.R.C. y 338 R.R.C.) que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 R.R.C).

III.- Conforme al artículo 17-1-c del Código civil son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. De acuerdo con el conocimiento adquirido de la ley argentina, no hay duda de que esa norma beneficia al nacido en España, hijo de padres argentinos nacidos en Argentina, porque los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la

nacionalidad de sus padres, sino que para ello es preciso un acto posterior. Se da, pues, una situación de apatridia originaria en la que la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (23ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Murcia el 9 de enero de 2009, los ciudadanos bolivianos Don J-W. y Doña M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, Y. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; volantes de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción de la menor; y fotocopias de los pasaportes de los padres.

2.- Una vez ratificados los promotores, comparecen el 4 de mayo de 2009 tres testigos. Notificado el expediente al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 2 de octubre de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción en base al artículo 141 de la Constitución de Bolivia, según el cual “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano”.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, la Sra. L. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija, alegando la irretroactividad del artículo 141 de la Constitución de Bolivia, ya que en ese caso sería una aplicación restrictiva de derechos individuales.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal informa que procede acuerdo denegatorio y el Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2008, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. En esos supuestos, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encarado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (24ª)

III.1.1.-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 18 de Julio de 2008 los ciudadanos bolivianos H. y C-A. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, Á-A. nacido en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción y negativo de nacionalidad del menor y de inscripción de los progenitores; pasaportes y permisos de residencia de los progenitores.

2.- Ratificados los promotores, oídos dos testigos y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se declaró conforme, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 19 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción habida cuenta de las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, de la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo con el artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009, sin que para ello fuera óbice suficiente el hecho de estar el nacido inscrito o no inscrito en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los padres del interesado interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el auto recurrido había denegado indebidamente la declaración solicitada por basarse en las Circulares citadas, de rango inferior al de la Constitución boliviana. Alegaban igualmente la irretroactividad de las normas, la seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad y la responsabilidad. Adjuntaban, en fin, la nota explicativa emitida por la Embajada de Bolivia en España interpretando el artículo 141 de la Nueva Constitución Política del Estado.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de

septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en ... de 2008 hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.-Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (25ª)

III.1.1.-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de madre boliviana nacida en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 22 de Septiembre de 2008 la ciudadana boliviana P. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, A. nacido en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción y negativo de nacionalidad del menor y de inscripción de la progenitora; pasaporte de la madre y Libro de Familia.

2.- Ratificada la promotora, asistida por sus progenitores al ser menor de edad, oídos dos testigos y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se declaró conforme, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 17 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción habida cuenta de las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, de la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo con el artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009, sin que para ello fuera óbice suficiente el hecho de estar el nacido inscrito o no inscrito en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que había presentado los documentos y comparecido con los testigos como se había indicado.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en... de 2008 hijo de una mujer de nacionalidad boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.-Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (26ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 29 de enero de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don G. y Doña L. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, S. nacido en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: fotocopias de los pasaportes bolivianos de los padres; volante colectivo de empadronamiento; certificado del Consulado de Bolivia en Murcia, en el que se indica que los padres se encuentran debidamente inscritos y registrados en ese Consulado desde el 20 de enero de 2009; certificado del mismo Consulado por el que se declara que el menor no se encuentra inscrito en los Libros de Nacimiento de esa Oficina Consular ni en ningún Registro Civil de la República de Bolivia y certificado literal de nacimiento del menor.

2.- Ratificados los promotores, oído un testigo y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se declaró conforme con la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 18 de septiembre de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar

que conforme a las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y de 21 de mayo de 2009, la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo con el artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia de 7 de febrero de 2009, debe rechazarse la pretensión de los promotores, sin que para ello sea óbice suficiente el hecho de estar el nacido inscrito o no en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la declaración y alegando que según el certificado del Consulado de Bolivia en Murcia aportado, no se reconoce que el menor tenga nacionalidad boliviana.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación y el Encargado del Registro Civil dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción; las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007, 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009 y 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2008, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida actualmente en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.-Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (27ª)

III.1.1- Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Civil de Murcia el 9 de Enero de 2009 los ciudadanos bolivianos G-G. y E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, D-R. nacida en S el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación de nacimiento de la menor; certificados de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción y negativo de nacionalidad de la menor y de inscripción de los progenitores.

2.- Ratificados los promotores, que aportaron fotocopias de los pasaportes y nuevo certificado de empadronamiento donde además de los progenitores constaba también el menor, oídos dos testigos y emitido el informe previo del Ministerio Fiscal, que se declaró conforme con la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 4 de Septiembre de 2008 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción habida cuenta de las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, de la doctrina de esta Dirección General sobre el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo con el artículo 141 de la Nueva Constitución política de Bolivia de 7 de Febrero de 2009, sin que para ello fuera óbice suficiente el hecho de estar la nacida inscrita o no inscrita en el correspondiente Consulado de Bolivia en España.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los padres de la menor interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el auto dictado reconocía que la Circular en que se fundó el auto es objeto de debate y conversaciones entre España y Bolivia, y que no podía considerarse que tuviera pleno reconocimiento por lo que en la medida en que supusiera una aplicación injusta debería dejarse de aplicar hasta el momento en que fuera reconocida por los dos países. Se remitían también a la Nota explicativa emitida por la Embajada de Bolivia en España interpretando

el artículo 141 de la Nueva Constitución Política del Estado, indicando que el derecho a la nacionalidad boliviana para los menores nacidos en el extranjero es un derecho que debe ser ejercido a través de la inscripción, y que puede ser rechazado o pospuesto ejerciendo únicamente “el derecho que la ley de extranjería española otorga de inscribirlos como nacionales por territorio” con lo que la atribución de la nacionalidad boliviana quedaría a la discrecionalidad de los padres para su ejercicio.

4.- Recibido el recurso, el Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución recurrida en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en ... de 2008 hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.-Estimar el recurso.

2º.-Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (93ª)

III.1.1.- Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España hijo de padres uruguayos nacidos en Uruguay.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Valencia el 3 de septiembre de 2010, los ciudadanos uruguayos Don A. y Doña B. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad M. nacido en V. el ... de ... de 2010. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado de empadronamiento; certificados del Consulado General de Uruguay en Valencia acerca de la normativa sobre nacionalidad y sobre la inscripción consular de los promotores; y fotocopias de los NIE de los padres.

2.- El mismo día se ratifican los interesados en su solicitud. Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Valencia dictó auto el 8 de octubre de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la Ley Uruguaya 16.021, de 13 de abril de 1989 dice en su artículo 1º que "tienen la calidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República" y en el 2º que "tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior". De tal modo que, en el presente supuesto, el Encargado deduce que el menor nacido en España, hijo de padres uruguayos, es de nacionalidad uruguaya, no concurriendo la situación de apatridia que fundamentaría la atribución de la nacionalidad española *iure soli*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del recurso, el Encargado se ratifica en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General

de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y la resolución, 13-32ª de septiembre de 2013.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2010, hijo de padres uruguayos nacidos en Uruguay. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- En relación con la legislación uruguaya, según el más reciente conocimiento que este Centro Directivo ha tenido del Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 13.021, de 13 de abril de 1989). Igualmente son ciudadanos naturales de la República Oriental de Uruguay los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico (vid. Artículo 74 de la Constitución uruguaya). Por lo que, al ser los padres del menor uruguayos nacidos en Uruguay le correspondería al mismo *iure sanguinis* la nacionalidad uruguaya de los padres, según el artículo 2 de la Ley 13.021 antes señalada.

IV.- Consiguientemente, no se da, pues, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española conforme al citado artículo 17.1.c) del Código civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no tenga otra nacionalidad *iure sanguinis*, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Valencia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (94ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

HECHOS

1.- Mediante solicitud dirigida al Registro Civil de Cartagena el 30 de diciembre de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don R-R. y Doña C-L. solicitaban la declaración de la nacionalidad

española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A-I. nacida en C. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado del Consulado de Bolivia en Murcia sobre la legislación boliviana relativa a la nacionalidad y la no inscripción de la menor en los libros de nacimiento de esa Oficina Consular; certificados de empadronamiento; y fotocopias de los pasaportes de los promotores.

2.- Una vez ratificados los interesados en su solicitud y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Cartagena dictó auto de fecha 23 de febrero de 2010, por el que deniega la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable a la hija de los solicitantes por nacer ésta en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través

de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que la nacida en España ostente la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

III.1.2.- Adquisición nacionalidad de origen *iure sanguinis*

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (5ª)

III.1.2- Declaración sobre nacionalidad española.

No nació española la nacida en Colombia en el año 2000 hija de padres colombianos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española de origen remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Bogotá el 9 de junio de 2009, la ciudadana colombiana Doña C-H. solicitaba la declaración de la nacionalidad española de origen para su hija, S. nacida en Colombia el ... de ... de 2000, sobre la base de que su madre había nacido en España. Adjuntaba la siguiente documentación: registro civil de nacimiento de la menor interesada; certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta que nació en el año 1979 en España, hija de padres colombianos nacidos en Colombia; y fotocopia del pasaporte español de la promotora.

2.- Tras obtener el informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto el 9 de abril de 2010 denegando la solicitud de la declaración de la nacionalidad española de origen de la menor, ya que de la certificación literal de nacimiento aportada por la madre se deduce que, aunque ésta nació en España en 1979 siendo hija de padres colombianos, y al tiempo de su nacimiento estaba vigente el artículo 17 del Código Civil en su redacción de la Ley de 15 de julio de 1954 que no varió la Ley 14/1975, de 2 de mayo, a cuyo tenor los extranjeros nacidos en España de padres extranjeros solo adquirirían la nacionalidad española si sus padres también hubieran nacido en España o si declaraban su voluntad de optar dentro del año siguiente a su mayoría de edad o emancipación, no constando dicha opción por lo que no pudo transmitir a su hija *iure sanguinis* la nacionalidad española.

3.- Notificada la resolución, la solicitante interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando nuevamente la nacionalidad española y alegando que se encuentra documentada como española.

4.- Una vez trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 18 y 20 del Código civil (CC.), en su redacción originaria, 22 y 23 en la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 226 a 229, 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 3-4ª y 5ª de febrero, 1-1ª de marzo, 19-2ª de abril, 3-4ª y 23-1ª y 2ª de junio de 2003, 4-2ª de julio de 2003, 22-1ª de julio de 2004 y 19-5ª de junio de 2006; 14-2ª de Marzo de 2007; 7-1ª de Mayo, 10-6ª de Septiembre y 21-4ª de Octubre de 2008.

II.- Se pretende por la promotora la inscripción del nacimiento de su hija en el Registro Civil español previa declaración de su nacionalidad española de origen. Se basa para ello en que su madre nació en España en 1979 y le habría transmitido la nacionalidad española a la menor. El Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá denegó dicha solicitud por auto de 9 de abril de 2010. Este acuerdo denegatorio es el que constituye el objeto del recurso.

III.- En primer lugar, en cuanto a la madre de la interesada, la redacción del artículo 17 del Código Civil vigente en el momento de su nacimiento, es decir, la dada por la Ley de 15 de julio de 1954, establecía que eran españoles “3º Los nacidos en España de padres extranjeros, si éstos hubieren nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento. Exceptuándose los hijos de los extranjeros adscritos al servicio diplomático” no habiéndose acreditado por la promotora que se encontrara en la mencionada situación, al aparecer sus padres como ciudadanos colombianos nacidos en Colombia. Por otra parte, el artículo 18 del Código Civil establecía que podían adquirir la nacionalidad española por opción los nacidos en España hijos de padre extranjeros que no se encontraran en el supuesto anteriormente expuesto del artículo 17.3º CC. Sin embargo, en la certificación literal de nacimiento de la promotora que obra en el expediente no consta anotación alguna de nacionalidad, por lo que no resulta acreditado que adquiriera la nacionalidad española desde el momento de su nacimiento por el sólo hecho de haber nacido en España, ni en ningún otro momento posterior. Por el contrario, aparece en el registro civil de nacimiento de su hija con nacionalidad colombiana.

IV.- Finalmente, en cuanto a la alegación relativa a la tenencia de pasaporte por parte de la promotora, hay que recordar que el hecho de estar incluido en el Registro de Matrícula o de estar en posesión de pasaporte y de Documento Nacional de Identidad son errores de la Administración que podrán surtir otros efectos, pero no bastan para probar legalmente la nacionalidad española. Es cierto que el DNI sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del titular (cfr. art. 1 nº 2 del R.D. 1553/2005, de 23 de diciembre), pero, como viene reiterando este Centro Directivo a partir de la Resolución de 18 de mayo de 1990 (vid. v.gr. Resolución de 6-1ª de noviembre de 2002), esa presunción no es absoluta pues su ámbito se ciñe exclusivamente al de los expedientes administrativos e, incluso en éstos, puede ser desvirtuada por otros documentos o datos que consten en el mismo expediente (cfr. art. 2 L.R.C. e Instrucción D.G.R.N. de 7 de febrero de 2007 sobre los requisitos registrales para expedir la certificación literal de la inscripción de nacimiento para la obtención del D.N.I.) y, en cualquier caso, no rige en el ámbito del Registro Civil por afectar a materias de Derecho Privado en cuya tramitación se aplican supletoriamente las leyes procesales (cfr. arts. 16 y 349 R.R.C.).

V.- Por todo lo anterior, no resulta acreditado que la menor interesada haya adquirido la nacionalidad española de origen y no procede acceder a lo solicitado, toda vez que de acuerdo con lo señalado, no queda probado que la promotora, ostentase en el momento del nacimiento de la interesada la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

III.1.3.- Adquisición nacionalidad de origen por Ley 52/2007 de memoria historica

III.1.3.1.- Adquisición nacionalidad española de origen- anexo I Ley 52/2007

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (53ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española

Tiene derecho a recuperar la nacionalidad española de origen mediante la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima aquel que acredita, además de haber ostentado la nacionalidad española de origen que posteriormente perdió, ser hijo de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte interesada contra la Resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Doña A. F. presenta escrito en el Consulado de España en Lima (Perú) a fin de recuperar la nacionalidad española a través de la opción prevista en la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de junio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, habida cuenta de que la Sra. F. adquirió de origen la nacionalidad española, y de que, posteriormente, incurrió en causa de pérdida, entendiéndose el acto atacado que, en todo caso, procedería recuperar la nacionalidad española por la vía del artículo 26 del Código Civil.

3.- Notificada la parte actora, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, los artículos 20 y 26 del Código civil, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 13 de noviembre de 1990 y de 7 de mayo de 1993.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida el 9 de febrero de 1956 en S. (Perú), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". La solicitante presentó escrito, al mismo tiempo que la solicitud de la opción mencionada, afirmando que su intención era recuperar la nacionalidad española a través de dicha opción.

La solicitud de opción fue formalizada el 13 de enero de 2009, en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 17 de junio de 2010, denegando lo solicitado por la interesada.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que habiendo quedado acreditado que ostentó la nacionalidad española de origen, e incurrió posteriormente en causa de pérdida de la misma, le correspondía recuperarla de acuerdo con el artículo 26 del Código Civil, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria, requisitos cuya concurrencia ha quedado acreditada en las actuaciones.

V.- La cuestión que se suscita en el presente expediente es otra, a saber la de si la recuperación de la nacionalidad española por parte de quien fue español y perdió esta nacionalidad ha de ajustarse necesariamente a los requisitos generales exigidos para la recuperación por el artículo 26 del Código civil o si esta recuperación podrá hacerse efectiva a través del mecanismo de la opción a la nacionalidad española por la vía de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en caso de que concurren los requisitos legales a que se subordina la viabilidad y el ejercicio de dicha opción. Como resulta de las Resoluciones de este Centro Directivo de 13 de noviembre de 1990 y de 7 de mayo de 1993, no hay razones para excluir que la recuperación pueda ejercitarse por este último camino si se cumplen, como se ha indicado, todos los requisitos exigidos para la opción. La Instrucción de 20 de marzo de 1991 no excluye esta posibilidad, ya que el párrafo primero de su apartado VII, se cuida de incluir la expresión "en principio" cuando señala que la recuperación ha de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 26 del Código civil.

Cualquier otra solución implicaría un trato discriminatorio para los nacidos españoles respecto de los nacidos extranjeros que entrasen en alguno de los supuestos previstos por el ordenamiento jurídico español como habilitantes a optar a la nacionalidad, sea por quedar sujetos a la patria potestad del que ha adquirido de modo sobrevenido la nacionalidad española, sea por ser hijos de progenitor originariamente español, sea en fin a resultas de una adopción o a la determinación de la filiación respecto de español una vez alcanzada la mayoría de edad. No pueden ser de peor condición los primeros que los segundos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Lima (Perú)

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (20ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don J-A. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (en 1912), certificado español de nacimiento de su abuela (en 1878), y certificado de matrimonio de sus abuelos (en 1901).

2.- La Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. H. (Cuba) el 21 de diciembre de 1947, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Auto el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado apelada basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado cumplimiento de requisitos previstos por la referida norma; en este caso, que su madre fuese española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la

nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007". La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que el progenitor del solicitante, Don P. - nacido en Cuba, hijo de ciudadano cubano - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, hay que decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la pretensión del recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (21ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Mendoza (Argentina).

HECHOS

1.- Don R-A. presenta escrito en el Consulado de España en Mendoza (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (en 1944), certificado español de nacimiento de su abuela (en 1906), y certificado de matrimonio de sus abuelos (en 1940).

2.- El Encargado del Registro Civil Consular de Mendoza (Argentina), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante Resolución de fecha 4 de febrero de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Argentina) el 12 de mayo de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 4 de febrero de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado cumplimiento de requisitos previstos por la referida norma; en este caso, que su madre fuese española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del

nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que la progenitora del solicitante, Doña M del C. - nacida en Argentina, hija de ciudadano argentino - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, hay que decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la

pretensión del recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado Del Registro Civil Consular en Mendoza (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (22ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad español.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don I-D. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (en 1921), y partida de bautismo de su abuela, nacida en España en 1899, de padres naturales de España.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante auto de fecha 18 de febrero de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S-S. (Cuba) el 24 de septiembre de 1950, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Auto el 18 de febrero de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para

los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que el progenitor del solicitante, Don I-F. - nacido en Cuba, hijo de ciudadano natural de ese país - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, hay que decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio - el propio nacimiento del padre del solicitante en Cuba en 1921 prueba que su abuela ya se encontraba en ese país mucho antes de la Guerra Civil, sin que existan evidencias de su retorno a España antes de 1936 -, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la pretensión del recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (23ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Don P-E. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (en 1912), y partida de bautismo de su abuela, nacida en España en 1883, de padres naturales de España.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante auto de fecha 26 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en H. (Cuba) el 18 de enero de 1949, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Auto el 26 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo

dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que la progenitora del solicitante, Doña M^a-E. - nacida en Cuba, hija de ciudadano natural de ese país - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de la abuela del solicitante, hay que decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio - el propio nacimiento de la madre del solicitante en Cuba en 1912 prueba que su abuela ya se encontraba en ese país mucho antes de la Guerra Civil, sin que existan evidencias de su retorno a España antes de 1936 -, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la pretensión del recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (30ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (en 1915), y certificado de concesión a su abuelo de la ciudadanía cubana por naturalización.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante auto de fecha 16 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S de B. (Cuba) el 26 de enero de 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Auto el 16 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así

como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que el progenitor del solicitante, Don G. ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, hay que decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la pretensión del recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (31ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Doña R-R. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (en 1915), y certificado de concesión a su abuelo de la ciudadanía cubana por naturalización.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante auto de fecha 5 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en S de B. (Cuba) el 23 de agosto de 1954, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Auto el 5 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es

extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que el progenitor de la solicitante, Don G. ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, hay que decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la pretensión de la recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (35ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña Mª-I. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre expedido por el Registro Civil de Barcelona y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), competente para conocer del fondo de este asunto, mediante Resolución de fecha 28 de octubre de 2010

deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte actora, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. M. (Venezuela) el 4 de febrero de 1949, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a los cuales podrán optar a la nacionalidad española de origen los hijos de españoles de origen y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Comprobado el expediente se verifica que la solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en los modelos normalizados de los Anexos I y II, respectivamente en fechas 13 de julio de 2010 y 4 de mayo de 2010 - a pesar de que la interesada aduzca en su escrito de recurso que sólo formuló su solicitud conforme al Anexo I - de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 28 de octubre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción de los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado cumplimiento de requisitos previstos por la referida norma; en este caso, que su padre fuese español de origen, o que su abuela fuese exilada que perdiese su nacionalidad española de origen con carácter subsiguiente a dicho exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del

nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que el progenitor de la solicitante, Don R. - nacido en España, hijo de ciudadano nacido a su vez en Venezuela - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. A este respecto, procede indicar que la alegación realizada por la interesada en su escrito de recurso, acerca de que la mera inscripción del nacimiento de un ciudadano en el registro civil español prueba la nacionalidad de origen española de éste, constituye una interpretación claramente inexacta y desubicada de la normativa rectora de dicha inscripción, y que el hecho de que la abuela paterna fuese natural de España, tampoco es, por sí mismo, determinante de que el padre de la solicitante ostentase necesariamente la nacionalidad española en su modalidad originaria.

IV.- En lo que se refiere al apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, no procede realizar nuevo pronunciamiento en esta

Resolución, habida cuenta de que la interesada ha renunciado expresamente a formular en su escrito de recurso oposición alguna a los argumentos utilizados por el Registro actuante para denegar la opción en base a tal vía, declarando incluso que jamás pretendió la opción acogiéndose a tal vía. Y tan sólo se estima preciso reiterar y subrayar, al respecto, que la solicitud de la interesada sí abarcó este procedimiento (hecho del que queda constancia en la documentación obrante en el expediente, con Anexo II firmado por la interesada el 4 de mayo de 2010, bajo la rúbrica M^a-I. su nombre de casada que ha venido utilizando en varias ocasiones durante el procedimiento, incluyendo su solicitud formulada en Anexo I) y que, por lo tanto, la actuación del Registro actuante no constituye una tramitación errónea de la solicitud, como taxativamente afirma la parte interesada en su recurso.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (38^a)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela, certificado de matrimonio de sus abuelos, y pasaporte venezolano con el que sus abuelos abandonaron España.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 29 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en, San C. T. (Venezuela) el 17 de junio de 1954, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los hijos de españoles de origen y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Auto el 29 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción de los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ni que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1895, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,

como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto

no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela. Ello así, puesto que existe constancia de que la abuela del interesado contrajo matrimonio en el año 1917 con un ciudadano nacido en Venezuela, sin que quede acreditado, por el contrario, qué nacionalidad ostentaba en ese momento el abuelo paterno del solicitante. Entendiendo que, de haber tenido el abuelo nacionalidad venezolana, la abuela habría perdido tras su matrimonio su nacionalidad española de origen (posibilidad sobre la que aporta además mayor incertidumbre la existencia en las actuaciones del pasaporte venezolano con el que la referida abuela dejaría posteriormente España en el año 1945).

En consecuencia, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición de exilado con pérdida subsiguiente de nacionalidad española, conforme a lo anteriormente reseñado, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por razones directamente vinculadas con lo expuesto en el fundamento precedente. En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que el progenitor del solicitante, Don M. - nacido en España, hijo de ciudadano a su vez nacido en Venezuela - ostentase la nacionalidad española de origen (al no poder constatar a ciencia cierta la nacionalidad que los abuelos paternos del interesado disfrutaban cuando nació su hijo y padre del solicitante), por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (65ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. Nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en París (Francia).

HECHOS

1.- Doña V-I. presenta escrito en el Consulado de España en París a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, tiene la condición de español de origen por haberla adquirido, posteriormente, en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 15 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 6 de febrero de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 4 de agosto de 2009, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 15 de enero de 2009 inscrita con fecha 6 de febrero de 2009, la ahora optante, nacida el 30 de agosto de 1971, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,

nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria

– artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por

ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña V-I. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Paris (Francia):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (66ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña B-L. presenta escrito en el Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 6 de agosto de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª) 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª). 10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª) 6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como española de origen a la nacida en Uruguay el 26 de septiembre de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su

declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 10 de septiembre de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Montevideo el 10 de octubre de 2007, fecha en que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 6 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.n.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.n.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.n.º2 y 19.n.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar

el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña B-L. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (77ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don F. presenta escrito en el Registro Civil de Torreveja, para el registro Civil Central, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 2 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª) 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª). 10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª) 6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Brasil el 27 de agosto de 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 19 de agosto de 2004 e inscrita en el Registro Civil Central el 7 de abril de 2005, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 2 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre no fue español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo

dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del

abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don F. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (78ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don P-R. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 22 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la

Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo de 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero de 2012 (42ª), 17 de febrero de 2012 (30ª), 22 de febrero de 2012 (53ª), 6 de julio de 2012 (5º), 6 de julio de 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero de 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina el 9 de abril de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 21 de junio de 2006 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Córdoba el 11 de septiembre de 2006, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 22 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre no fue español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con

España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don P-R. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (79ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don N-I. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 17 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba el 30 de enero de 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 1 de marzo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 26 de abril de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 17 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también

se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don N-I. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (80ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Don J-E. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 19 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba el 6 de noviembre de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 4 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 7 de agosto de 2008, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 19 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-E. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (88ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay)

HECHOS

1.- Doña E. presenta escrito en el Consulado de España en Montevideo a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 25 de mayo de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Uruguay el 9 de mayo de 1952, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 22 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Montevideo el 4 de marzo de 2008, fecha en que la recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 25 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre no fue español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la

nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea

(cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, constando en el expediente como fecha de entrada de la abuela en Uruguay el 21 de junio de 1910, estando circunscrito el exilio a las fechas comprendidas entre julio de 1936 y diciembre de 1955, y no simplemente la residencia fuera de España en ese periodo de tiempo, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña E. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (100ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay)

HECHOS

1.- Don N. presenta escrito en el Registro Civil Consular de Montevideo a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante auto de fecha 4 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 7 de enero de 2009 e inscrita el 20 de febrero de 2009 en el Registro Civil Consular de España en Montevideo, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada 31 de agosto de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 4 de febrero de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 7 de enero de 2009 inscrita el 20 de febrero de 2009, el ahora optante, nacido el 7 de octubre de 1977, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año

previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente.

Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo

que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España".

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª "beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles": beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas

“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- Por lo que se refiere a la alegación del recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor

o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión del recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

XV.- Finalmente, en cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1 a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don N. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (102ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don H-J. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 18 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba el 20 de octubre de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su

declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 4 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 16 de julio de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 18 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil. Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.n.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.n.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.n.º2 y 19.n.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a

que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española al madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don H-J. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (119ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

1.- Don L-E. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 5 de agosto de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, tiene la condición de española de origen por haberla adquirido, posteriormente, en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 16 de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 11 de mayo de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de abril de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 5 de agosto de 2011, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en

función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 27 de agosto de 2009 inscrita con fecha 31 de agosto de 2009, el ahora optante, nacido el 23 de febrero de 1968, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la

Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y

1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente.

Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o

requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española de la abuela del solicitante, nacida el 20 de noviembre de 1882, sin que a tales efectos sea suficiente la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del Registro civil en España (cfr. art. 35 L.R.C. de 1870, y Resolución de 20 de octubre de 2003-2ª); así como tampoco, en su caso, la pérdida o renuncia de dicha nacionalidad como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L-E. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (120ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

1.- Doña I. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 23 de enero de 2013 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 8 de julio de 2009 e inscrita el 6 de mayo de 2010 en el Registro Civil Consular de España en La Habana, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad (16 años en Cuba, 18 en España).

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada 14 de julio de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 23 de enero de 2013, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 8 de julio de 2009 inscrita el 6 de mayo de 2010, la ahora optante, nacida el 6 de mayo de 1989, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no

desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias

avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles". El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España". Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª "beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles": beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña I. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (121ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña Y. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2011, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba el 20 de octubre de 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición

adicional". En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 19 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 28 de mayo de 2008, fecha en que la recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de junio de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 2 de diciembre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil. Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.n.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.n.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles "de origen") de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.n.º2 y 19.n.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de "nacionalidad española de origen" pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que "este derecho también

se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- A continuación se transcribe el contenido de los artículos 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil en contestación a la pregunta formulada por la interesada en su escrito de recurso. Artículo 226: Las declaraciones de voluntad relativa a la nacionalidad o a la vecindad y la renuncia y el juramento o promesa exigidos serán admitidos por el Encargado del Registro aunque no se presente documento alguno, siempre que resulte de la declaración la concurrencia de los requisitos exigidos, pero sólo podrá practicarse la inscripción si se justifican previamente los requisitos para la adquisición, modificación o conservación.

Artículo 227: Si al prestarse las declaraciones a que se refiere el artículo anterior no apareciesen acreditados los requisitos exigidos, el declarante, sin perjuicio de los recursos oportunos, estará obligado a completar la prueba en el plazo prudencial que le señale el Encargado. Este se limitará por el momento a levantar acta de la declaración y en su día, cuando por acreditarse los requisitos se practique la inscripción, se considerará hora y fecha de ésta, a partir de la cual surtirá efecto la declaración, las del acta, que se harán constar en el asiento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Y. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (122ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía de la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Doña M-C. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 12 de agosto de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la Interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba el 31 de agosto de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haber optado con fecha 19 de enero de 2000 a la nacionalidad española al amparo de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, conforme a la cual "Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y nacido en España podrán optar por la nacionalidad española, si formalizan su declaración antes del día 7 de enero de 1997". Dicha opción fue inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 2 de mayo de 2000, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 12 de agosto de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no

ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción

dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma y por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente.

V.- En el presente expediente, la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.-Valorada en su conjunto la documentación aportada al expediente, en relación con los abuelos maternos, se observa que estos nacieron en España de padres españoles y que se exiliaron en Cuba el 18 de mayo de 1937, haciendo su entrada en el país a través de Santiago de Cuba en el vapor "F", pero nunca perdieron la nacionalidad española, razón por la que no le es de aplicación a la recurrente la Disposición Adicional séptima, apartado 2 de la Ley 52/2007

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (123ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española-

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

1.- Doña E. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 5 de mayo de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 14 de mayo de 2010 e inscrita el 5 de julio de 2010 en el Registro Civil Consular de España en La Habana, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada 14 de junio de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 5 de mayo de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008. Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición

Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 14 de mayo de 2010 inscrita el 5 de julio de 2010, la ahora optante, nacida el 21 de marzo de 1968, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”.

Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no

desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus

hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”. Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de

la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad

española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña E. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (124ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. Nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Don Á-G. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 7 de septiembre de 2012 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el

artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, se ha acreditado, de oficio, en el expediente que tiene la condición de española de origen por haberla adquirido, posteriormente, en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 2 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 21 de abril de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 7 de septiembre de 2012, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 2 de marzo de 2009 inscrita con fecha 21 de abril de 2009, el ahora optante, nacido el 21 de noviembre de 1960, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba

la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de

este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España".

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª "beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles": beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

XV.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don Á-G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (125ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don L-E. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 1 de octubre de 2012 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo de 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba el 30 de mayo de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 6 de marzo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 21 de marzo de 2007, fecha en que el recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de septiembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 1 de octubre de 2012, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los

supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante y, en todo caso para la acreditación de su recuperación, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L-E. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (126ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña I-M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 23 de octubre de 2012 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba el 19 de febrero de 1956, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición

adicional". En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 7 de noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 22 de enero de 2004, fecha en que la recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de agosto de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 23 de octubre de 2012, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.n.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.n.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles "de origen") de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.n.º2 y 19.n.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de "nacionalidad española de origen" pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que "este derecho también

se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña I-M. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (127ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. Nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don M-G. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de julio de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, tiene la condición de española de origen por haberla adquirido, posteriormente, en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 27 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Córdoba el 31 de agosto de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de marzo de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 19 de julio de 2010, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 27 de agosto de 2009 inscrita con fecha 31 de agosto de 2009, el ahora optante, nacido el 23 de febrero de 1968, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien

esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español". Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a "aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)", supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, "queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles". El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España".

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la

Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª.

En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición.

Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

XV.- Finalmente, por lo que se refiere a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de

recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M-G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (128ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña A-T. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 20 de marzo de 2013 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba el 15 de octubre de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 17 de enero de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 19 de enero de 2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de octubre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 20 de marzo de 2013, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter*

jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento, o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil. Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos

previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-T. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (129ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don J-S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de agosto de 2013 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de

julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita e inscrita el 11 de noviembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de agosto de 2013, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 11 de noviembre de 2011 inscrita con la misma fecha, el ahora optante, nacido el 15 de abril de 1979, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante

no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente

hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo:

“Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto

del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-S. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (130ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don E. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de agosto de 2013 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª) 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª). 10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª) 6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª)

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita e

inscrita el 11 de noviembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de agosto de 2013, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 11 de noviembre de 2011 inscrita con la misma fecha, el ahora optante, nacido el 14 de octubre de 1982, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y

finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...

que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o

madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a

las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos –, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don E. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (131ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Panamá

HECHOS

1.- Don R. presenta escrito en el Consulado de España en Panamá a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 12 de abril de 2013 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Panamá, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 12 de junio de 2009 e inscrita el 6 de septiembre de 2010 en el Registro Civil Consular de España en Panamá, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada 30 de junio de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 18 de junio de 2012, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en

función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de marzo de 2009 inscrita el 7 de mayo de 2009, el ahora optante, nacido el 22 de agosto de 1970, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez

en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición

entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste

no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos –, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme

al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.-Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo del optante, y en todo caso para la acreditación de su recuperación, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don R. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Panama.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (132ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ni los nietos de abuelos que no acrediten la pérdida o renuncia a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don L. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 22 de octubre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen al nacido en Cuba, en virtud del ejercicio de las opciones previstas por el apartado 1 y 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las cuales fueron formalizadas el 22 de septiembre de 2010, en los modelos normalizados del Anexo I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su solicitud, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

III.- Por lo que se refiere a la opción del apartado 1, la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 22 de septiembre de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 2 de marzo de 2011, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la

progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta suscrita el 22 de septiembre de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 2 de marzo de 2011, cuando el ahora optante, nacido el 24 de marzo de 1976, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un

paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la

transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos –, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija

las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1901, de padres españoles. Así mismo, se acompaña al expediente la certificación expedida por el Registro de la Dirección de Inmigración y Extranjería cubano, en la que consta que se expidió Carta de Ciudadanía a favor del abuelo el 22 de junio de 1938. Es decir que en el momento del nacimiento de la madre del recurrente -en 1947- su abuelo, ya no era español, por lo que no pudo transmitir la ciudadanía española a su hija.

XV.- Respecto al requisitos de que el abuelo de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española, ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

XVI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

XVII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27,

29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana en el año 1938, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante ocurrido en el año 1947, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (133ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña A-F. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 12 de septiembre de 2012 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en los arts. 226 y 227 del reglamento de la Ley del Registro Civil.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba el 5 de marzo de 1949, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso, el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 3 de noviembre de 2004 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 30 de noviembre de 2004, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 12 de septiembre de 2012, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por no haber probado los hechos a los que se refiere su petición, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El presente recurso se ha de solventar a la luz del apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español". Se exige, en este caso, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin

intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-F. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (134ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central

HECHOS

1.- Don A. presenta escrito en el Registro Civil de Alicante para el Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 5 de marzo de 2013 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición

adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 17 de junio de 2010 e inscrita el 3 de agosto de 2010 en el Registro Civil Consular de España en La Habana, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada 30 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 5 de marzo de 2013, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 17 de junio de 2010 inscrita el 3 de agosto de 2010, el ahora optante, nacido el 7 de octubre de 1971, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que los nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien

al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre

o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”. Por tanto, a pesar de que

desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un

régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.-Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.).

Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española del abuelo del solicitante, nacido el 11 de enero de 1897, sin que a tales efectos sea suficiente la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del Registro civil en España (cfr. art. 35 L.R.C. de 1870, y Resolución de 20 de octubre de 2003-2ª); así como tampoco, en su caso, la pérdida o renuncia de dicha nacionalidad como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (135ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ni los nietos de abuelos que no acrediten la pérdida o renuncia a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña K-S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 13 de julio de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina, en virtud del ejercicio de las opciones previstas por el apartado 1 y 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las cuales fueron formalizadas el 31 de marzo de 2011, según consta en el sello de registro de entrada en el Consulado General de España en Buenos Aires, en los modelos normalizados

del Anexo I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 13 de julio de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a la nacionalidad española de origen por haber alcanzado la mayoría de edad cuando su padre optó a la nacionalidad española, circunstancia explícitamente excluida por la Ley 52/2007, y por no haber acreditado que su abuelo perdió la nacionalidad española como consecuencia del exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

III.- Por lo que se refiere a la opción del apartado 1, el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 7 de octubre de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta suscrita e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 7 de octubre de 2010, cuando la ahora optante, nacida el 28 de septiembre de 1985, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultados de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: "En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español". Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a "aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)", supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, "queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles". El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España". Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008,

conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre

español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1909, de padres españoles. Así mismo, se acompaña al expediente la certificación expedida por el Registro General de Cartas de Ciudadanía en la que consta que el abuelo se naturalizó argentino el 25 de enero de 1935. Es decir que en el momento del nacimiento del padre de la recurrente -en 1955- su abuelo, ya no era español, por lo que no pudo transmitir la ciudadanía española a su hijo.

XV.- Respecto al requisitos de que el abuelo de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española, ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

XVI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o

cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

XVII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1935, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1955, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada, en su escrito de recurso manifiesta que su abuelo emigró de España con anterioridad a 1935 por razones económicas y no políticas.

XVIII.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña K-S. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (136ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ni los nietos de abuelos que no acrediten la pérdida o renuncia a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña V-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 6 de julio de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina, en virtud del ejercicio de las opciones previstas por el apartado 1 y 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las cuales fueron formalizadas el 2 de marzo de 2011, según consta en el sello de registro de entrada en el Consulado General de España en Buenos Aires, en los modelos

normalizados del Anexo I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda.

Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 6 de julio de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a la nacionalidad española de origen por haber alcanzado la mayoría de edad cuando su padre optó a la nacionalidad española, circunstancia explícitamente excluida por la Ley 52/2007, y por no haber acreditado que su abuelo perdió la nacionalidad española como consecuencia del exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

III.- Por lo que se refiere a la opción del apartado 1, el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 7 de octubre de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta suscrita e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 7 de octubre de 2010, cuando la ahora optante, nacida el 11 de octubre de 1989, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española "de origen" pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su "padre o madre hubiese sido originariamente español". Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen "desde su nacimiento" (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: "En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español". Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a "aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)", supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, "queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles". El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España".

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción.

Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1909, de padres españoles. Así mismo, se acompaña al expediente la certificación expedida por el Registro General de Cartas de Ciudadanía en la que consta que el abuelo se naturalizó argentino el 25 de enero de 1935. Es decir que en el momento del nacimiento del padre de la recurrente -en 1955- su abuelo, ya no era español, por lo que no pudo transmitir la ciudadanía española a su hijo.

XV.- Respecto al requisitos de que el abuelo de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española, ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

XVI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.;

b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

XVII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1935, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1955, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada, en su escrito de recurso manifiesta que su abuelo emigró de España con anterioridad a 1935 por razones económicas y no políticas.

XVIII.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña V-A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (9ª)

III.1.3.1.- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición Adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña I. N. presenta escrito ante el Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado de nacimiento de su abuelo, nacido en España en 1917, de padres naturales de España.

2.- La Encargada del Registro Civil Central, competente para conocer del fondo de este asunto, mediante Acuerdo de fecha 21 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como española de origen a la nacida en M. (Uruguay) el 18 de octubre de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Central se dictó Acuerdo el 21 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es

extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma.

V.- En el presente expediente, no ha sido posible comprobar que la progenitora de la solicitante, D^a. M. - nacida en Uruguay en 1953 - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición del abuelo de la solicitante, hay que decir que al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y no en el Anexo I, como hizo la parte actora), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, no se ha acreditado la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco podría haber prosperado la pretensión de la recurrente por esta vía, aunque la solicitud se hubiese cumplimentado en la forma y plazo oportunos. Se estima oportuno indicar a la parte actora, a la vista de las alegaciones realizadas en el escrito de recurso, que obra en el expediente solicitud realizada en el modelo correspondiente al referido anexo I, firmada por la Sra. N. el 29 de enero de 2009.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (48^a)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero y segundo de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002; así como los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular La Habana (Cuba)

HECHOS

1.- Don J-J. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo. La solicitud de opción fue formalizada el 4 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I, al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 11 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia. Posteriormente, con fecha 29 de enero de 2010 se cursó solicitud conforme a lo previsto en el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2.- Notificado el citado auto, el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud.

3.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Atendiendo a la primera de las opciones solicitadas, se ha pretendido inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba en 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 18 de junio de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular en La Habana el 25 de junio de 2003, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.-Se exige pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria y, dado que la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.n.º1.b) del Código civil, no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Circunstancia que no es rebatida en el escrito de recurso.

V.- Por lo que se refiere a la solicitud de nacionalidad, formulada a través del apartado 2 de la citada Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, hay que recordar que establece un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1902, de padres españoles. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VI.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumple, entre otros supuestos, cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad, como en el presente caso, ya que consta en el expediente una certificación de Carta de Ciudadanía expedida por la Dirección de Inmigración y Extranjería a su favor, de fecha 12 de marzo de 1942. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquier circunstancia será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VII.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado

respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español; que el abuelo hubiera podido perder su nacionalidad española por haber optado a la cubana con fecha 17 de marzo de 1942, y por tanto con anterioridad al nacimiento de la hija en 1955, madre del interesado, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliado del abuelo, toda vez que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y no se aporta ninguna documentación en este sentido.

A mayor abundamiento, consta en el expediente un certificado expedido por el Secretario del Juzgado Municipal de la Villa de L. (Santander), el 19 de septiembre de 1916, en el que el bisabuelo del interesado autoriza a su hijo L. (abuelo del recurrente) a viajar a Cuba, lo cual es un indicio de la fecha de emigración del citado abuelo. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J.-J. y confirmar la resolución apelada, dictada conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (49ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.º1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

1.- Doña Mª-C. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 27 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Argentina) en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 6 de junio de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Mendoza el 1 de julio de 2003, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 27 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante

no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley

52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M^a-C. y confirmar la resolución apelada, dictada conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (50^a)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero y segundo de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002; así como los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña R del C. presenta escrito en el Registro Civil de Castellón para el Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo.

La solicitud de opción fue formalizada en escrito de 21 de diciembre de 2011 al amparo de lo previsto en la citada Disposición Adicional Séptima, sin especificar si se acogía al apartado 1 o 2 de la misma. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 9 de mayo de 2013, denegando lo solicitado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

2.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

3.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Atendiendo a la primera de las opciones solicitadas, se ha pretendido inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en México en 1958, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n.º1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 14 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en México el 1 de octubre de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.-Se exige pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.n.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.n.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad

originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

IV.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

V.- Por lo que se refiere a la solicitud de nacionalidad formulada a través del apartado 2 de la citada Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 hay que recordar que establece un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1891, de padres españoles. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VI.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VII.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VIII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

IX.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les

haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor de la recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en ella concurren y a los preceptos jurídicos por ella invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña R del C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (51ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña L-V. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 27 de abril de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el

artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso la madre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 30 de abril de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 5 de mayo de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de septiembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 27 de abril de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 30 de abril de 2010 inscrita con fecha 5 de mayo de 2010, la ahora optante, nacida el 5 de noviembre de 1981, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba

la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por

ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L-V. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (52ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña R de la C. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 30 de octubre de 2012 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba 8 de septiembre de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 10 de agosto de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular

de España en La Habana el 9 de noviembre de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de junio de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 30 de octubre de 2012, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de agosto de 2010 inscrita con fecha 9 de noviembre de 2010, la ahora optante, nacida el 8 de septiembre de 1966, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española "de origen" pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su "padre o madre hubiese sido originariamente español". Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen "desde su nacimiento" (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”. Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad

española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma

Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación que pudiera resultar del escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.).

Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña R de la C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.1.3.2.- Adquisición nacionalidad española de origen-anexo II ley 52/2007

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (27ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don M-A. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Don M-A. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado emitido por el Registro Civil cubano, certificado cubano nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuelo, y del otorgamiento de carta de ciudadanía a su abuelo en el año 1943.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 20 de mayo de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada. Junto a su recurso incorpora certificado del Archivo Nacional cubano que prueba la entrada de su abuelo en Cuba en un buque de bandera española procedente de A. con fecha 28 de julio de 1936.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.
- II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en La H. (Cuba) el 13 de febrero de 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba) se dictó Auto el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.
- III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.
- IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1902, de padres naturales de España; Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se verifica que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadano español de origen, sino también que su abuelo, Sr. O. fue exilado, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar, el certificado expedido por el Archivo Nacional Cubano por el que se hace constar que el abuelo del interesado llegó a Cuba el 28 de julio de 1936 en buque procedente de España, y el certificado de otorgamiento de la ciudadanía cubana al Sr. O. en el año 1943, fecha en la que se produce por tanto la pérdida de su nacionalidad española de origen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. O. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (28ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don J-L. contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Con fecha 22 de mayo de 2009, Don J-L. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado de nacimiento cubano del interesado, certificado literal español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado literal español de nacimiento de su abuela, fotocopia del pasaporte cubano de su abuelo, expedido en 1937, donde se acredita que viaja con

su esposa (la abuela del solicitante y sus hijos), y fotocopia de certificado expedida por el Consulado de la República de Cuba en Madrid en diciembre de 1936, en el que su abuela aparece ya como ciudadana cubana.

2.- Completada la tramitación del expediente, la Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), mediante su Auto de 24 de julio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en La H. (Cuba) el 2 de febrero de 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), se dictó Auto el 9 de noviembre de 2010 de octubre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme

a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27,

29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de española de origen, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, se produjo su salida de España con su esposo y sus hijos. Por otra parte, su hija y madre de la parte solicitante, nació en el año 1938, ya después de que la abuela del Sr. S. perdiese su nacionalidad española de origen, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquella siguió ya, de origen, la nacionalidad extranjera de su propio progenitor.

Al no resultar acreditado que la abuela de la solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la legislación vigente entonces determinaba que la referida abuela hubiese perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España, como consecuencia de su matrimonio con ciudadano extranjero, y con independencia de que hubiese manifestado su vocación de conservar la de origen), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (29ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don G-H. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don G-H. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil) y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 30 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 15 de diciembre de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 30 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1910, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la

condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De

esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de española de origen, se colige que la referida abuela no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil, sino que llegó a Argentina mucho antes, en el año 1925 (como reconoce su propio nieto y solicitante en el escrito de recurso), y que se casó allí con súbdito argentino en 1943, perdiendo por tanto en tal fecha su nacionalidad española de origen, tal y como queda acreditado mediante la documentación obrante en el expediente administrativo. Se constata también, por tanto, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida después de esa fecha, en 1948, siguió ya de origen la nacionalidad

argentina de su propio progenitor - razón por la cual tampoco sería posible para el Sr. B. el acceso a la opción pretendida mediante el apartado primero de la norma varias veces invocada que exige como requisito que los padres de los solicitantes hubieran sido españoles de origen -. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ,por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad como consecuencia de otras razones distintas a las vinculadas a la Guerra Civil y las circunstancias político-sociales de la inmediata Postguerra, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (30ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don J-H. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don J-H. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en el año 2009), del que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en el año 1903.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 1 de junio de 1954, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 21 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud

: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, resultando de esta última, además, el nacimiento de su abuela en España en el año 1903. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad

española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil, hecho éste que ni siquiera discute la parte interesada en su recurso, limitándose a afirmar sus derechos por unas vías diferentes a las contenidas en su solicitud. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto a la abuela del interesado es que ya se encontraba en Argentina en el año 1933, fecha del nacimiento de su hija y madre del solicitante, y que contrajo matrimonio con súbdito argentino en el año 1932, fecha en la que se habría producido la pérdida de su nacionalidad española de origen; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Y, por último, y respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita acerca del acceso a la nacionalidad española por otra vía distinta a la prevista por el Apartado 2ª de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 – aunque el acto impugnado contenga referencias al respecto - no procede realizar pronunciamiento alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (31ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña Mª-Á. contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Con fecha 3 de abril de 2009, Doña Mª-Á. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley

52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado de nacimiento cubano de la interesada, certificado español de nacimiento de su madre (en el que consta su filiación respecto a Don J. nacido en Cuba, de nacionalidad no determinada), certificado de matrimonio de los abuelos (en el que tampoco aparece determinada la nacionalidad del abuelo), certificado español de nacimiento de su abuela, fotocopia del pasaporte español de su abuela, con visado de entrada en Cuba en 1951), y certificado de inscripción de su abuela en el registro de extranjeros en la República de Cuba, en el que sigue figurando como ciudadana española.

2.- Completada la tramitación del expediente, la Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), mediante su Auto de 22 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en La H. (Cuba) el 4 de septiembre de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), se dictó Auto el 22 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1922, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española de origen, y que dicha abuela abandonó España acompañada de sus hijos en el año 1951, no ha quedado verificado si dicha abuela (Doña L), mantenía o no su nacionalidad española cuándo se produjo dicha salida. En efecto, consta que el abuelo materno de la interesada nació en La H. pero no está acreditado si, en el momento en que caso con la abuela de la solicitante en el año 1946 (antes, por tanto, de la salida de la Sra. G. de España), el referido abuelo tenía nacionalidad española o cubana. De haber tenido nacionalidad cubana, habría que entender que la Sra. G. salió de España siendo ya ciudadana cubana como consecuencia de su matrimonio con ciudadano extranjero, y con independencia de que hubiese manifestado su vocación de conservar la de origen (no se cumplirían por tanto requisitos de la norma invocada para fundamentar el derecho).

De entender, por el contrario, que en el momento en que se casaron los abuelos de la Sra. G. el abuelo tenía nacionalidad española, habría sido necesario probar a continuación que los abuelos perdieron dicha nacionalidad en Cuba, en algún momento posterior a su salida de territorio español (dato que tampoco queda probado con la documentación aportada al expediente). En cualquier caso, no existe constancia fehaciente del cumplimiento de los requisitos exigidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (1ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña M. G. A. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado

español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), y del que se deduce matrimonio de los abuelos de la interesada en Cuba en el año 1934, y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Auto de 29 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L. H. (Cuba) el 11 de enero de 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Auto el 29 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal

de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1911, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme

a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela de la Sra. G. A. ya se encontraba en Cuba antes de la Guerra Civil, en el año 1934, fecha en la que contrajo matrimonio con ciudadano cubano, con la consiguiente pérdida de la nacionalidad española de origen, y con independencia de cuándo se produjera su acceso a la ciudadanía cubana de acuerdo con la normativa local. En consecuencia, su hija y madre de la solicitante, nacida en Cuba en el año 1939, siguió ya, de origen, la nacionalidad cubana de su propio progenitor. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo indicado respecto a la pérdida de la nacionalidad española de origen, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Por último, procede indicar que la solicitud de la interesada, por haber sido formulada al amparo de lo dispuesto por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, no puede ser valorada de acuerdo con lo dispuesto por el apartado primero de la misma disposición, por no ser la vía de recurso el momento procedimental oportuno para ampliar o modificar el objeto de la instancia original. No obstante, se estima procedente indicar, a mero título informativo, que aunque la solicitud de la interesada hubiera sido valorada de acuerdo con los requerimientos del referido apartado primero, no habría podido ser nunca concedida la opción pretendida por la parte interesada, puesto que su madre ostenta la nacionalidad española a título derivativo (por la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), y no originario, como exige la disposición invocada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (2ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

- 1.- Don J. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien opta a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la disposición transitoria primera Ley 29/1995) y literal de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 20 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela), el 23 de noviembre de 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó la Resolución de 20 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como literal expedida por el Registro municipal español que da fe del nacimiento de su abuela en España en el año 1936, hija de madre natural de Cuba, y de nacionalidad desconocida, y de filiación paterna biológica no determinada. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que

ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia del exilio. En primer lugar, no se conoce a ciencia cierta qué nacionalidad de origen tuvo la abuela del solicitante (su certificado de nacimiento sólo hace referencia a su nacimiento en España, hija de ciudadana natural de Cuba y de nacionalidad desconocida, sin que quede determinada la filiación biológica paterna). Y en este sentido, no puede otorgarse valor a la información deducida de la fotocopia no legalizada de un pasaporte español, aparentemente expedido en 1967 - varios años después del matrimonio de la abuela del solicitante con ciudadano venezolano, y por lo tanto de la pérdida de una potencial nacionalidad española de la misma-, en el que figura un visado venezolano que hace referencia a la entrada de la abuela del solicitante en Venezuela en 1953. Tampoco a un certificado (también sin legalizar) de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central de la República de Venezuela, que menciona la llegada de la referida abuela a Venezuela sin hacer referencia alguna a su nacionalidad. En consecuencia, y puesto que no está probado que la abuela de los interesados perdiese la nacionalidad española de origen con carácter posterior a su salida de España, y la prueba de la fecha de salida es por demás deficiente, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En relación con la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso y a otros similares, de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

IX.-Y por último, si bien la solicitud del interesado no fue formalizada al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, puesto que el acto impugnado realiza referencia al respecto, y la parte actora formula consecuente alegación en su escrito de recurso, es oportuno indicar, a mero título informativo, que jamás habría procedido la opción solicitada conforme a dicha norma, puesto que su padre

optó a la nacionalidad española en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, que regula una adquisición derivativa – por tanto no originaria- de la nacionalidad española; circunstancia que da lugar a que no se cumplan tampoco los requerimientos exigidos por la norma invocada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (3ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don C. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien opta a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la disposición transitoria primera Ley 29/1995) y literal de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 20 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela), el 23 de noviembre de 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó la Resolución de 20 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como literal expedida por el Registro municipal español que da fe del nacimiento de su abuela en España en el año 1936, hija de madre natural de Cuba, y de nacionalidad desconocida, y de filiación paterna biológica no determinada. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo

hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia del exilio. En primer lugar, no se conoce a ciencia cierta qué nacionalidad de origen tuvo la abuela del solicitante (su certificado de nacimiento sólo hace referencia a su nacimiento en España, hija de ciudadana natural de Cuba y de nacionalidad desconocida, sin que quede determinada la filiación biológica paterna). Y en este sentido, no puede otorgarse valor a la información deducida de la fotocopia no legalizada de un pasaporte español, aparentemente expedido en 1967 - varios años después del matrimonio de la abuela del solicitante con ciudadano venezolano, y por lo tanto de la pérdida de una potencial nacionalidad española de la misma-, en el que figura un visado venezolano que hace referencia a la entrada de la abuela del solicitante en Venezuela en 1953. Tampoco a un certificado (también sin legalizar) de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central de la República de Venezuela, que menciona la llegada de la referida abuela a Venezuela sin hacer referencia alguna a su nacionalidad. En consecuencia, y puesto que no está probado que la abuela de los interesados perdiese la nacionalidad española de origen con carácter posterior a su salida de España, y la prueba de la fecha de salida es por demás deficiente, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En relación con la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso y a otros similares, de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

IX.-Y por último, si bien la solicitud del interesado no fue formalizada al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, puesto que el acto impugnado realiza referencia al respecto, y la parte actora formula consecuente alegación en su escrito de recurso, es oportuno indicar, a mero título informativo, que jamás habría procedido la opción solicitada conforme a dicha norma, puesto que su padre optó a la nacionalidad española en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, que regula una adquisición derivativa - por tanto no originaria- de la nacionalidad española; circunstancia que da lugar a que no se cumplan tampoco los requerimientos exigidos por la norma invocada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (4ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don H. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificados de nacimiento de sus padres y certificado español de nacimiento de una de sus abuelas.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 25 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 12 de marzo de 1950, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 25 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de

aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y las de sus padres, así como la de una de sus abuelas (La materna), de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1893, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los

nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de la misma, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni ésta puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir que la elección del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, a efectos del acceso a la opción a la nacionalidad española, fue equivocada, y que, en realidad, se deseó acceder a tal pretensión en virtud de lo previsto por la vía del apartado 1º de la misma Disposición, no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

Con independencia de lo anterior, y a título meramente informativo, se pone en conocimiento del interesado que de la documentación aportada al expediente no habría podido deducirse tampoco su derecho a la opción pretendida por la vía del apartado primero de la disposición varias veces mencionada, habida cuenta de que no queda probada cuál era la nacionalidad de origen de los padres del interesado, por no resultar acreditada ni la nacionalidad de los abuelos varones (ni tampoco de la abuela paterna) en el momento del nacimiento de sus respectivos hijos (padres del solicitante), ni que la única abuela cuya nacionalidad de origen está probada (la materna) NO hubiese perdido ya dicha nacionalidad en el momento del nacimiento de su hija y madre del solicitante.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (5ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don C. presenta escrito ante el Consulado de España en Stuttgart (Alemania) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, literal de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código civil), y acta de nacimiento de su abuela, Doña M.

Se estima preciso indicar que, del examen conjunto de la documentación obrante en el expediente administrativo se deducen importantes discrepancias en lo que se refiere a la identidad de la abuela paterna del interesado.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia), actuante de acuerdo con lo dispuesto por la normativa rectora del procedimiento, mediante su Acuerdo de 27 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Colombia), el 23 de octubre de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 27 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, que prueba su nacimiento en España en el año 1912, de padres naturales de España. No obstante, como antes se indicara existen importantes discrepancias entre los diferentes documentos incorporados al expediente respecto a la identidad de esta abuela, reflejada con diferentes apellidos y fechas de nacimiento en los diversos documentos que la parte actora presenta como referidos a la misma persona. Esta circunstancia convierte en particularmente difícil el examen de la concurrencia de los requisitos exigidos por la normativa rectora del procedimiento para que su nieto pueda acceder a la opción pretendida, a saber, que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese

implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan

en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española - Doña M., nacida en U., (Navarra), el 13 de agosto de 1912 según su partida de nacimiento y la literal de nacimiento de su hijo y padre del solicitante - no puede comprobarse que esta abuela sea la misma persona a la que, bajo el nombre de Ma., nacida en la misma localidad navarra el 13 de agosto de 1925 le expidió pasaporte el Consulado General de España en París en el año 1940. De la documentación integrante del expediente se deduce un descuadre más en la identidad, al aparecer la pretendida abuela reflejada con otro nombre diferente (Ma. C., nacida el 16 de septiembre de 1922), en un pasaporte venezolano que el interesado alega también que corresponde a la misma persona. Esta situación impide tener constancia fehaciente de la fecha exacta en la que la abuela del interesado abandonó España, y de si lo hizo en el período en que opera la presunción de exilio de acuerdo con lo expresado por la instrucción rectora del procedimiento. Por otro lado, tampoco es posible saber cuándo perdió la abuela del interesado la nacionalidad española de origen, si es que esto llegó realmente a suceder. En consecuencia, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (6ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don M. Muracciole contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, libro de familia de sus padres y acta de nacimiento de su abuela, D^a. A. Se ha incorporado también al expediente literal de nacimiento de la madre del solicitante (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil).

Se estima preciso indicar que, del examen conjunto de la documentación obrante en el expediente administrativo se deducen discrepancias en lo que se refiere a los apellidos y la fecha de nacimiento de la abuela materna del Sr. M., discrepancias que permiten concebir dudas sobre su verdadera identidad a partir de la documentación que integra las presentes actuaciones.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Acuerdo de 14 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina), el 12 de abril de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 14 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar

a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como documentación indicativa de que el nacimiento de su abuela se produjo en España, como hija de padres españoles, aunque como antes se ha indicado existen discrepancias entre los diferentes documentos respecto a la identidad de esta abuela (reflejada con diferentes apellidos y fechas de nacimiento en los diversos documentos que en el expediente hacen referencia a ella). En cualquier caso, y salvando esta precisión, aunque no se cuestionase en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido)

o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola

el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que la abuela del interesado abandonó España, y sólo resulta probado - a la luz de lo expresado en la inscripción de nacimiento de la madre del solicitante - que, en 1949, cuando nació su hija y madre del interesado en Argentina, la abuela del Sr. M. ya estaba casada con súbdito argentino (y por tanto había perdido la nacionalidad española). Se colige por tanto que la madre del Sr. M. siguió de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En todo caso, se insiste en que no queda acreditada la condición de exilada de la referida abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (7ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por D^a. M^a. A. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- D^a. M^a. A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, literal de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código civil), y de la que se deduce la naturalización argentina de su padre (abuelo de la interesada) en el año 1928, y certificados de nacimiento de sus abuelos.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 9 de noviembre de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina), el 26 de septiembre de 1949, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 9 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como las certificaciones de nacimiento de sus abuelos, expedidas por los respectivos registros municipales españoles, que dan fe de sus nacimientos en España en 1895 y 1902, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que los abuelos hubiesen perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ellos no hayan podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellos abuelos que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio

en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, se colige que los referidos abuelos no perdieron la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que el abuelo materno de la interesada estaba ya en Argentina antes de la Guerra Civil, y que allí obtuvo la ciudadanía argentina, por naturalización, en el año 1928. Se verifica igualmente que, también en Argentina y antes de la Guerra, contrajo matrimonio en 1932 con la que fue su esposa, y abuela de la interesada, que a partir de ese momento perdió también su nacionalidad española de origen. Se comprueba por último, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida en Argentina en 1937, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En todo caso, nunca resultaría acreditada la condición de exiliados de los abuelos en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (8ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por D^a. L. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- D^a. L. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,

y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código civil), certificados de nacimiento de sus abuelos, y certificado de naturalización argentina de su abuelo, que data del año 1934.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 20 de agosto de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina), el 6 de marzo de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 20 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal

de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como las certificaciones de nacimiento de sus abuelos, expedidas por los respectivos registros municipales españoles, que dan fe de sus nacimientos en España en 1908 y 1915, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que los abuelos hubiesen perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ellos no hayan podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellos abuelos que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, se colige que los referidos abuelos no perdieron la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que el abuelo materno de la interesada estaba ya en Argentina antes de la Guerra Civil, y que allí obtuvo la ciudadanía argentina, por naturalización, en el año 1934. Se verifica igualmente que, también en Argentina y antes de la Guerra, contrajo matrimonio en 1935 con la que fue su esposa, y abuela de la interesada, que a partir de ese momento perdió también su nacionalidad española de origen. Se comprueba por último, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida en Argentina en 1948, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En todo caso, nunca resultaría acreditada la condición de exiliados de los abuelos en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (9ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don C., contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Don C. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién

optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en julio de 2009), y del que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1918.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 23 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 6 de septiembre de 1974, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Resolución el 23 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, ni tampoco la opción prevista por el apartado primero de la misma norma.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, de la que se deduce igualmente el nacimiento de su abuela en España en el año 1918. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley

52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda

acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela. Ello así, puesto que no existe constancia de cuándo dejó España la abuela del Sr. Reyes Hutton. Tampoco puede saberse a ciencia cierta cuándo perdió exactamente la abuela del interesado su nacionalidad española de origen, puesto que el matrimonio con ciudadano uruguayo de la referida abuela, aparentemente celebrado en 1946, sólo está constatado por mera declaración personal de la madre del solicitante, sin que haya sido aportado certificado administrativo que permita obtener constancia fehaciente sobre su celebración. Por lo demás, lo único que se deduce de la documentación aportada al expediente es que la madre del interesado, nacida en territorio uruguayo en 1942, habría adquirido de origen la nacionalidad uruguaya de su propio progenitor. Sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición. Se ha comprobado, al respecto, que la madre del actor accedió a la nacionalidad española con fecha 9 de julio de 2009, mediante la utilización de esta misma vía. Sin embargo, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la madre del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, el ahora optante, nacido en 1978 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

Y en el presente caso la madre del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente

que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

IX.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

X.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XI.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el

proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIII.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del

padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XIV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XV.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,

durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVI.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (10ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don F.R. contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Don F.R. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en julio de 2009), y del que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1918.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 23 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 23 de octubre de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Resolución el 23 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, ni tampoco la opción prevista por el apartado primero de la misma norma.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V

de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, de la que se deduce igualmente el nacimiento de su abuela en España en el año 1918. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela. Ello así, puesto que no existe constancia de cuándo dejó España la abuela del Sr. R.. Tampoco puede saberse a ciencia cierta cuándo perdió exactamente la abuela del interesado su nacionalidad española de origen, puesto que el matrimonio con ciudadano uruguayo de la referida abuela, aparentemente celebrado en 1946, sólo está constatado por mera declaración personal de la madre del solicitante, sin que haya sido aportado certificado administrativo que permita obtener constancia fehaciente sobre su celebración. Por lo demás, lo único que se deduce de la documentación aportada al expediente es que la madre del interesado, nacida en territorio uruguayo en 1942, habría adquirido de origen la nacionalidad uruguaya de su propio progenitor. Sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición. Se ha comprobado, al respecto, que la madre del actor accedió a la nacionalidad española con fecha 9 de julio de 2009, mediante la utilización de esta misma vía. Sin embargo, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la madre del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, el ahora optante, nacido en 1978 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

Y en el presente caso la madre del recurrente ostenta la nacionalidad española "de origen" pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición

Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

IX.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

X.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XI.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,

el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIII.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la

Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XIV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XV.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,

durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVI.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Montevideo

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (11ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don A., contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

- 1.- Don A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en julio de 2009), y del que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1918.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 23 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 30 de julio de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Resolución el 23 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, ni tampoco la opción prevista por el apartado primero de la misma norma.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V

de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, de la que se deduce igualmente el nacimiento de su abuela en España en el año 1918. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela. Ello así, puesto que no existe constancia de cuándo dejó España la abuela del Sr. Reyes Hutton. Tampoco puede saberse a ciencia cierta cuándo perdió exactamente la abuela del interesado su nacionalidad española de origen, puesto que el matrimonio con ciudadano uruguayo de la referida abuela, aparentemente celebrado en 1946, sólo está constatado por mera declaración personal de la madre del solicitante, sin que haya sido aportado certificado administrativo que permita obtener constancia fehaciente sobre su celebración. Por lo demás, lo único que se deduce de la documentación aportada al expediente es que la madre del interesado, nacida en territorio uruguayo en 1942, habría adquirido de origen la nacionalidad uruguaya de su propio progenitor. Sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición. Se ha comprobado, al respecto, que la madre del actor accedió a la nacionalidad española con fecha 9 de julio de 2009, mediante la utilización de esta misma vía. Sin embargo, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la madre del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, el ahora optante, nacido en 1978 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

Y en el presente caso la madre del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma

Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

IX.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

X.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XI.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,

el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIII.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de

española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XIV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XV.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVI.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (12ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don C. Gómez contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

- 1.- Don C. Gómez presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, certificado de matrimonio de sus abuelos expedido por la autoridad canónica, y pasaporte con el que sus abuelos abandonaron España en el año 1938.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 19 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen a la nacida en B. (Colombia), el 8 de diciembre de 1960, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como documentación indicativa de que el nacimiento de su abuela se produjo en España, como hija de padres españoles, aunque existen discrepancias entre los diferentes documentos respecto a la fecha concreta en que tal nacimiento se produjo. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que

ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, se colige que la referida abuela no perdió la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela del interesado contrajo matrimonio en España con súbdito colombiano en el año 1916 (fecha en la que, por tanto, habría perdido su nacionalidad española de origen). En consecuencia, se constata que cuando la abuela del Sr. Gómez abandonó España definitivamente en el año 1938, lo hizo ya sin dicha nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple la premisa de que perdiera la misma con carácter posterior al exilio y en su consecuencia. Se constata igualmente, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida en Colombia en 1925, después del matrimonio de su madre siguió ya de origen la nacionalidad colombiana de su propio progenitor. En todo caso, no resultando acreditado que la abuela del interesado perdiese su nacionalidad española como consecuencia del exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso y a otros similares - nietos de españoles de origen que dejaron España antes de la Guerra Civil, y que ya en ese momento no tenían nacionalidad española - de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (13ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña M. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, certificado de matrimonio de sus abuelos expedido por la autoridad canónica, y pasaporte con el que sus abuelos abandonaron España en el año 1938.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 19 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Colombia), el 17 de abril de 1953, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como documentación indicativa de que el nacimiento de su abuela se produjo en España, como hija de padres españoles, aunque existen discrepancias entre los diferentes documentos respecto a la fecha concreta en que tal nacimiento se produjo. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente

en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras

entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, se colige que la referida abuela no perdió la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la interesada contrajo matrimonio en España con súbdito colombiano en el año 1916 (fecha en la que, por tanto, habría perdido su nacionalidad española de origen). En consecuencia, se constata que cuando la abuela de la Sra. Gómez abandonó España definitivamente en el año 1938, lo hizo ya sin dicha nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple la premisa de que perdiera la misma con carácter posterior al exilio y en su consecuencia. Se constata igualmente, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida en Colombia en 1925, después del matrimonio de su madre siguió ya de origen la nacionalidad colombiana de su propio progenitor. En todo caso, no resultando acreditado que la abuela de la interesada perdiese su nacionalidad española como consecuencia del exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso y a otros similares - nietos de españoles de origen que dejaron España antes de la Guerra Civil, y que ya en ese momento no tenían nacionalidad española - de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho

cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (14ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña O. Ch. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña O. Ch. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Auto de 4 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L. H. (Cuba) el 1 de enero de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 4 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España en el año 1910, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la

citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia

del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela de la Sra. Ch. ya se encontraba en Cuba en el año 1935, fecha en la que se produjo su registro civil en C., correspondiente al municipio cubano de E., V. (Cuba). Este dato es coherente, además, con el proporcionado por el Archivo Nacional de la República de Cuba, según el cual la abuela de la solicitante entró en ese país el día 2 de julio de 1914, sin que exista constancia alguna de su regreso a territorio español antes del inicio de la Guerra. La mencionada abuela contrajo matrimonio con ciudadano cubano en el año 1937, fecha en la que se produjo la pérdida de su nacionalidad española de origen, y dio a luz al menos a una hija, la madre de la solicitante, en 1938, quien siguió ya de origen la nacionalidad cubana de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio

de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (15ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don P. C. contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Don P.C. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), y del que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1915.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 23 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del

Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 30 de diciembre de 1987, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 23 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España en el año 1915. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya

concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido

transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. C. abandonó España en el año 1934, y que contrajo matrimonio en Uruguay con ciudadano italiano en 1946. En consecuencia, la abuela había perdido ya su nacionalidad española cuando nació su hijo y padre del interesado en 1954, quien siguió ya de origen la nacionalidad extranjera de su propio progenitor. Pero, en cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (16ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña N. E. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.-,Doña N. E. presentó escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud del ejercicio de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuelo, certificado de la naturalización cubana de su abuelo en el año 1934, y del matrimonio de sus abuelos en 1933.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de fecha 30 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L. H. (Cuba) el 15 de octubre de 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Auto el 30 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1893, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de español de origen, se colige que el referido abuelo no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil. Así, existe constancia de que el abuelo de la solicitante estaba ya en Cuba antes de la Guerra Civil, que contrajo matrimonio allí en 1933 con ciudadana española (no se verifica tampoco por tanto el exilio de la abuela de la Sra. E.), y que perdió su nacionalidad española mediante naturalización cubana en el año 1934. Se constata también, por tanto, que el padre de la interesada (nacido ya después de esa fecha, en 1935) siguió ya de origen la nacionalidad cubana de su propio progenitor. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (17ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña R. S. contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Con fecha 22 de mayo de 2009, Doña R. S. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado de nacimiento cubano de la interesada, certificado literal español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado literal español de nacimiento de su abuela, fotocopia del pasaporte cubano de su abuelo, expedido en 1937, donde se acredita que viaja con su esposa (la abuela del solicitante y sus hijos), y fotocopia de certificado expedida por el Consulado de la República de Cuba en Madrid en diciembre de 1936, en el que su abuela aparece ya como ciudadana cubana.

2.- Completada la tramitación del expediente, la Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), mediante su Auto de 24 de julio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L. H. (Cuba) el 9 de mayo de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley

52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba), se dictó Auto el 24 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios

de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.;" d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española de origen, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, se produjo su salida de España con su esposo y sus hijos. Por otra parte, su hija y madre de la interesada, nació en el año 1938, ya después de que la abuela de la Sra. S. perdiese su nacionalidad española de origen, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquella siguió ya, de origen, la nacionalidad extranjera de su propio progenitor. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la legislación vigente entonces determinaba que la referida abuela hubiese perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España, como consecuencia de su matrimonio con ciudadano extranjero, y con independencia de que hubiese manifestado su vocación de conservar la de origen), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (18ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña J. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Monterrey (México).

HECHOS

1.- Doña J. presenta escrito ante el Consulado de España en Monterrey (México), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de fecha 19 de enero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en H., S. (México) el 21 de julio de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 19 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no sólo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española, sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país

de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, se entiende acreditada la condición de la solicitante como nieta de español de origen, y también su abuelo perdiera la nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad mexicana, según prueba el documento oficial de 15 de enero de 1932, incorporado al expediente. Se colige también, por tanto, que su hijo, y padre de la solicitante, nacido después de esa fecha, en 1946, siguió ya de origen la nacionalidad mexicana de su propio progenitor. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ,por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente (en concreto el hecho de que el abuelo de la interesada adquiriese nacionalidad mexicana por naturalización en 1932, cuatro años de que resultase operativa la presunción de exilio prevista por la normativa rectora del procedimiento, lo cual da lugar a que no se pueda entender acreditada la condición de dicho abuelo como exiliado), por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Monterrey

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (19ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña I., contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña I. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad y certificado de nacimiento propio. Se ha incorporado también al expediente literal de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la Disposición transitoria segunda de la Ley 18/1999, de 17 de diciembre), del que se deduce además nacimiento de su abuela en España en 1905.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 23 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L. P. (Argentina) el 7 de abril de 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 23 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1905. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad

familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y

protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (20ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña L., contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.-, Doña L. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 del Código civil), y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 3 de agosto de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 1 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1908, de padres naturales de España Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia

directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,

bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Central en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (21ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don J. F. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don J. F. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 del Código civil), del que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en el año 1904.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 13 de enero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen al nacido en B. (Argentina) el 7 de noviembre de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 13 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, de la que se deduce igualmente el nacimiento de su abuela en España en el año 1904. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V-. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación

de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil; en efecto, sólo existe constancia de que la abuela del interesado ya se encontraba en América en 1933, fecha de su matrimonio, en territorio uruguayo, con el abuelo paterno del Sr. F. En cualquier caso, ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (22ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña M. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.-, Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 del Código civil) y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 22 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Argentina) el 3 de diciembre de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 22 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por

el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1925, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad

al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de española de origen, no puede considerarse

probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (23ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don H. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don H. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado local de nacimiento del interesado, certificado literal español de nacimiento de su padre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado literal español de nacimiento de su abuelo y documentación justificativa de la salida de España y entrada en Venezuela de su abuelo en el año 1950.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), mediante su Auto de 17 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela) el 26 de octubre de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), se dictó Auto el 17 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1932, de padre natural de Venezuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo nacido en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si

bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuelo nacido en España, no ha quedado verificado el hecho de que el referido abuelo hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que el abuelo del interesado salió de España en el año 1950 con pasaporte venezolano, hecho que prueba que ostentaba la nacionalidad venezolana y no la española, cuando dejó España. Por otra parte, su hijo y padre del interesado, nació en el año 1963, siguiendo también, de origen, la nacionalidad venezolana de su propio progenitor, y abuelo del solicitante. Al no resultar acreditado que el abuelo de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos

que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (24ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don M., contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 del Código civil), y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 21 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del

Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 20 de diciembre de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 21 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1909, de madre natural de España y filiación biológica paterna indeterminada. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo

caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido

transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (25ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña N. C. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Doña N. C. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela, y pasaporte de su abuela que prueba ingreso en territorio uruguayo en el año 1961.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 18 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Uruguay) el 9 de noviembre de 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución de 18 de mayo de 2009 Auto el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1939 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente

en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras

entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española de origen, se colige que la referida abuela no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil, sino que llegó a en el año 1961, y que se casó allí con súbdito uruguayo en 1963, perdiendo por tanto en tal fecha su nacionalidad española de origen, tal y como queda acreditado mediante la documentación obrante en el expediente administrativo. Se constata también, por tanto, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida después de esa fecha, en 1965, siguió ya de origen la nacionalidad extranjera de su propio progenitor - razón por la cual tampoco sería posible para la Sra. C. el acceso a la opción pretendida mediante el apartado primero de la norma varias veces invocada que exige como requisito que los padres de los solicitantes hubieran sido españoles de origen -. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ,por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso (nieta de ciudadana española que abandonó España por razones diferentes al exilio provocado por la Guerra) de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada iría claramente en contra del tenor literal de la norma, que exige la acreditación de la condición de exilado de Guerra (con subsiguiente pérdida de la nacionalidad española de origen), debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción

de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Montevideo

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (26ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don Á. G. contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Don Á. G. presenta escrito ante el Consulado de España en Cartagena de Indias (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado literal de nacimiento del interesado, certificado local de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela y certificado de matrimonio de sus abuelos expedido por el Juez Municipal y Encargado del Registro Civil de Manresa (Barcelona).

2.- Completada la tramitación del expediente, la Encargada del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia), mediante su Acuerdo de 3 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen al nacido en C. (Colombia) el 20 de marzo de 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Cartagena de Indias (Colombia), se dictó Acuerdo el 3 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1918, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su

nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su

nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de española, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela del solicitante contrajo matrimonio en España con ciudadano panameño el día 26 de septiembre de 1936, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, se produjo su salida de España, con llegada a Colombia, vía C. (Venezuela), el siguiente día 30 de octubre. Por otra parte, su hijo y padre del solicitante, nació en el año 1943, ya después de que la abuela del Sr. G. adquiriese la nacionalidad panameña por matrimonio, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquel siguió ya la nacionalidad extranjera de su padre. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la referida abuela había perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (27ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña A. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña A. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código civil), certificado de nacimiento de su abuela, y pasaporte venezolano con el que su abuela abandonó España en el año 1937.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), mediante su Auto de 27 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Venezuela) el 13 de abril de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), se dictó Auto de 27 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1921, de padre natural de Venezuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente

en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras

entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en territorio español, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela de la solicitante, al abandonar España en el año 1937, lo hizo bajo pasaporte venezolano, en el que se especificaba expresamente que era hija de nacionales venezolanos, y que se hallaba inscrita como súbdita venezolana en el Consulado venezolano de L. La abuela de la solicitante contrajo posterior matrimonio en Venezuela (1949), con ciudadano venezolano, y su hijo y padre de la interesada, nacido en el año 1950 siguió ya, de origen, la nacionalidad extranjera de su propio progenitor. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII. - Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso - nieta de persona que salió de territorio español con nacionalidad distinta a la española - de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada iría claramente en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado (quedando entendido que esta condición sólo puede reconocerse a ciudadanos españoles que tuvieron que abandonar España, y no a súbditos extranjeros que residían en territorio español cuando empezó la Guerra) - debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede

ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (28ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don M. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por la Disposición transitoria segunda de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre), partida de bautismo de su abuela, de la que resulta su nacimiento en España en 1910, y libro de familia de los abuelos del interesado, del que resulta su matrimonio en el año 1937.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 23 de junio de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 25 de junio de 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 23 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la partida de bautismo de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1910, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer

de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado

segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de la referida abuela. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto a la abuela de la parte interesada es que contrajo matrimonio con súbdito argentino en 1937, según consta en la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre del solicitante la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir que la elección del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, a efectos del acceso a la opción a la nacionalidad española, fue equivocada, y que, en realidad, se deseó acceder a tal pretensión en virtud de lo previsto por la vía del apartado 1º de la misma Disposición, no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida. A este respecto, no puede

considerarse como prueba de la vocación de acceso del interesado a tal vía (apartado primero de la norma varias veces invocada), un documento firmado por el interesado y fechado el día 26 de mayo de 2009, en el que se hacía referencia a tal hecho, y en el que no existe ningún sello de presentación, ni constatación fehaciente de recepción por parte del Consulado actuante.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (29ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña S-X. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña S-X. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, certificado española de nacimiento de su abuela (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código civil), y certificación colombiana de entrada de su bisabuela en Colombia con pasaporte colectivo en el año 1940.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 28 de agosto de 2011 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Colombia) el 21 de noviembre de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 28 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1937, de madre española y de filiación biológica paterna desconocida, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo

hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil, y con pérdida de nacionalidad española de origen en un momento posterior a su salida de España. Ello así porque la partida de nacimiento de la abuela en cuestión no permite dilucidar datos concretos respecto a la nacionalidad de su propio progenitor, y tampoco es posible colegir de manera inequívoca que la interesada siguiera la nacionalidad española de origen de su madre (bisabuela de la solicitante), puesto que en la referida partida obra constancia de un cambio de apellidos, que, analizado junto con la documentación colombiana aportada, en la que existe referencia a una persona llamada "A" o "J-A" como padre de la referida abuela, permitiría deducir al menos la posibilidad de que en algún momento existió un reconocimiento de su paternidad por parte de una persona cuya nacionalidad no tenía por qué ser española. Esta posibilidad queda reforzada por el hecho de que la abuela de la solicitante accediera a la nacionalidad española, no por recuperación (como habría procedido en un caso en el que se acreditara que alguna vez se ostentó nacionalidad española de origen), sino por la opción prevista en el artículo 20.1 b) del Código civil, que constituye un título de adquisición derivativo previsto para supuestos de no concurrencia de nacionalidad española de origen. En conclusión, debe entenderse, como adecuadamente observa el Encargado del Registro Civil Consular actuante, que no está probado que cuando la abuela de la interesada abandonó

España en 1940, lo hiciera con nacionalidad española. Considerando este fundamento, debe concluirse en que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción, que incluye exilio de ciudadano español, y pérdida de nacionalidad posterior al exilio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (30ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña A-G. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Santiago de Chile (Chile).

HECHOS

1.-, Doña A-G. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.3 del Código Civil) y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 4 de mayo de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del

Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en P. (Chile) el 18 de octubre de 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 4 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1919, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del

exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocerse no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito

del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de española de origen, no puede verificarse con carácter cierto que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, dado que resulta imposible saber si en el momento en que aquélla contrajo matrimonio con el abuelo de la solicitante (diciembre de 1936), en territorio español, éste tenía ya nacionalidad chilena o si mantenía nacionalidad española. La disquisición es importante, puesto que, en el primero de los casos, la abuela habría perdido ya la nacionalidad española de origen antes de salir de territorio español, en cuyo caso, no podría apreciarse la concurrencia del exilio en las condiciones exigidas por la normativa rectora del procedimiento.

Y a este respecto, el hecho de que se sepa a ciencia cierta que la abuela de la interesada dejó España en el plazo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, puesto que algunos de sus hijos, entre ellos el propio padre de la solicitante, nacieron ya en territorio chileno, en ese lapso de tiempo, no presupone la concurrencia de un supuesto de exilio si, como se indicaba, no se conoce si la abuela de la Sra. M. tenía o no nacionalidad española cuando abandonó España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santiago de Chile.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (31ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña D-E. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.-, Doña D-E. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado local de nacimiento de su madre y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 24 de septiembre de 2010, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 20 de noviembre de 1940, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 24 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1889, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo

contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan

en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de española de origen, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. Así, existe constancia de que la abuela de la interesada estaba ya en Argentina muchos años antes, concretamente en el año 1917, fecha de nacimiento de su hija, y madre de la solicitante. Pero se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (38ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña S. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña S. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en septiembre de 2009), y certificado español de nacimiento de su abuela, en España, en 1903.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 8 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 22 de noviembre de 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por los modelos normalizados de los Anexos I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 8 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, ni tampoco la opción prevista por el apartado primero de la misma norma.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España en el año 1903, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente

en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,

bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela. Ello así, puesto que existe constancia de que la abuela de la solicitante llegó a Argentina muchos años antes de la Guerra Civil, en concreto en 1918. Por lo demás, se constata igualmente el matrimonio de la abuela de la Sra. G. con súbdito italiano, naturalizado argentino, y que dio a luz al menos a un hijo (el padre de la solicitante), en Argentina, en 1932 - según consta en la documentación integrante del expediente - quien habría adquirido de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España - entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la solicitud formulada por la interesada por la vía del apartado 1º de la misma Disposición. Se ha comprobado, al respecto, que su padre accedió a la nacionalidad española con fecha 11 de septiembre de 2009, mediante la utilización de esta misma vía. Sin embargo, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el

progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, el ahora optante, nacido en 1976 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

IX.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

X.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de

español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XI.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIII.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la

nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”. Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XIV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo

de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XV.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVI.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (39ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña C. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña C. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, certificado española de nacimiento de su abuela (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código civil), y certificación colombiana de entrada de su bisabuela en Colombia con pasaporte colectivo en el año 1940.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 28 de agosto de 2011 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Colombia) el 21 de noviembre de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de

noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 28 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1937, de madre española y de filiación biológica paterna desconocida, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia

directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,

bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil, y con pérdida de nacionalidad española de origen en un momento posterior a su salida de España. Ello así porque la partida de nacimiento de la abuela en cuestión no permite dilucidar datos concretos respecto a la nacionalidad de su propio progenitor, y tampoco es posible colegir de manera inequívoca que la interesada siguiera la nacionalidad española de origen de su madre (bisabuela de la solicitante), puesto que en la referida partida obra constancia de un cambio de apellidos, que, analizado junto con la documentación colombiana aportada, en la que existe referencia a una persona llamada "A" o "J-A." como padre de la referida abuela, permitiría deducir al menos la posibilidad de que en algún momento existió un reconocimiento de su paternidad por parte de una persona cuya nacionalidad no tenía por qué ser española. Esta posibilidad queda reforzada por el hecho de que la abuela de la solicitante accediera a la nacionalidad española, no por recuperación (como habría procedido en un caso en el que se acreditara que alguna vez se ostentó nacionalidad española de origen), sino por la opción prevista en el artículo 20.1 b) del Código civil, que constituye un título de adquisición derivativo previsto para supuestos de no concurrencia de nacionalidad española de origen.

En conclusión, debe entenderse, como adecuadamente observa el Encargado del Registro Civil Consular actuante, que no está probado que cuando la abuela de la interesada abandonó España en 1940, lo hiciera con nacionalidad española. Considerando este fundamento, debe concluirse en que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción, que incluye exilio de ciudadano español, y pérdida de nacionalidad posterior al exilio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (63ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia)

HECHOS

- 1.- Don A-L. presenta escrito en el Registro Civil Consular de Bogotá, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 10 de febrero de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular, como español de origen, al nacido en Colombia en 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de abril de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 10 de febrero de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha

acreditado que su abuelo, hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1916 de padres naturales de España. Igualmente se ha aportado al expediente la documentación justificativa de la entrada del abuelo en Venezuela el 23 de octubre de 1947. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuelo española, ni su condición de exiliado únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto de dicho requisito, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia

constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocer a los nietos de aquellos abuelos que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose acreditada la condición del solicitante de nieto de español, queda así mismo acreditada la condición de exiliado del abuelo por su entrada en Venezuela el 23 de octubre de 1947, según consta en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela del día 30 de julio de 1951, páginas 52 y 53, teniendo que adoptar la nacionalidad venezolana en esa misma fecha, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante, por lo que no pudo transmitirle la nacionalidad española en el momento de su nacimiento en 1953. Por todo cuanto antecede deben entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el Acuerdo dictado con fecha 11 de agosto de 2010, por el encargado del Registro Civil Central, y reconociendo a Don A-L. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (64ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

- 1.- Don N-O. presenta escrito en el Consulado de España en La Paz (Bolivia) para La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 9 de septiembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba en 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 9 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;

b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1908, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente una certificación de reinscripción de nacimiento el 2 de junio de 1933 a nombre del abuelo como nacido en Cuba. Es decir que en el momento del nacimiento del padre del recurrente –en 1943- su abuelo, ya no era español, por lo que no pudo transmitir la ciudadanía española a su hijo. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27,

29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana en el año 1933, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1943, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, el propio recurrente en su escrito de recurso manifiesta "mi abuelo se naturalizó cubano en 1933 por una ley de trabajo..." lo cual viene a ratificar que en el año 1933 ya estaba asentado en Cuba. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don N-O. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (65ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña P-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 30 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1913 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya

producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1944 con argentino, según consta en el libro de familia, y que el padre de la interesada nacido en 1946, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente un certificado expedido por la Dirección Nacional de Migraciones que acredita la entrada de la abuela en Argentina el día 19 de junio de 1936, en el vapor "G."

VIII.- En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige

una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

IX.- Finalmente por lo que se refiere a la alegación formulada sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1 a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña P-M. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (66ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña Mª-C. presenta escrito en el Registro Civil de Badajoz para el Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 10 de junio de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1962, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 10 de junio de 2011, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1903 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art. 18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela haya perdido su nacionalidad española por haber renunciado a la misma el 20 de julio de 1938, con posterioridad al nacimiento del hijo acaecido en 1923, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre a pesar de haber nacido de madre española soltera que pudo transmitirle su nacionalidad española, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración de su matrimonio el 18 de febrero de 1938, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo cuanto antecede no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M^a-C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (67^a)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

1.- Don F-J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires para Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional

séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 21 de diciembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de octubre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 21 de diciembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1902 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significaría hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de

agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en con español nacionalizado argentino, según consta en la carta de ciudadanía expedida el 2 de mayo de 1932, y por tanto con anterioridad al nacimiento de la hija en 1936, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no

únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don F-J. y confirmar la resolución apelada, dictada conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (68ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito en el Consulado de España en San José a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 24 de octubre de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del

Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Costa Rica en 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de noviembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 24 de octubre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- EL auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil Consular de España en París, resultando de esta última su nacimiento en París en el año 1928 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer

de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de

la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1956 con costarricense, según consta en el libro de familia, y que el padre del interesado nacido en 1950, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, del conjunto de la documentación incorporada al expediente se puede deducir que la abuela del recurrente nunca residió en España, ingresó en Venezuela procedente de París el 13 de septiembre de 1947 y en Costa Rica el 4 de septiembre de 1952 procedente de Venezuela, siempre con pasaporte español, pudiendo haber transmitido a su hijo, padre del interesado, la nacionalidad española ya que éste nació en el año 1950 de madre española soltera. Por lo que no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (69ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

HECHOS

1.- Doña C. presenta escrito en el Consulado de España en San José a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 25 de noviembre de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Costa Rica en 1974, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 25 de noviembre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- EL auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil Consular de España en París, resultando de esta última su nacimiento en París en el año 1928 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art. 18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro

Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1956 con costarricense, según consta en el libro de familia, y que el padre de la interesada nacido en 1950, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, del conjunto de la documentación incorporada al expediente se puede deducir que la abuela de la recurrente nunca residió en España, ingresó en Venezuela procedente de París el 13 de septiembre de 1947 y en Costa Rica el 4 de septiembre de 1952 procedente de Venezuela, siempre con pasaporte español, pudiendo haber transmitido a su hijo, padre de la interesada, la nacionalidad española ya que éste nació en el año 1950 de madre española soltera. Por lo que no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (70ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

HECHOS

- 1.- Doña L. presenta escrito en el Consulado de España en San José a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 25 de noviembre de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Costa Rica en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 25 de noviembre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- EL auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles-

del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil Consular de España en París, resultando de esta última su nacimiento en París en el año 1928 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26

de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1956 con costarricense, según consta en el libro de familia, y que el padre de la interesada nacido en 1950, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada

de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, del conjunto de la documentación incorporada al expediente se puede deducir que la abuela de la recurrente nunca residió en España, ingresó en Venezuela procedente de París el 13 de septiembre de 1947 y en Costa Rica el 4 de septiembre de 1952 procedente de Venezuela, siempre con pasaporte español, pudiendo haber transmitido a su hijo, padre de la interesada, la nacionalidad española ya que éste nació en el año 1950 de madre española soltera. Por lo que no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (71ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don G-L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 28 de julio de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de abril de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 28 de julio de 2011, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1911 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla

a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1933 con argentino, según consta en el libro de familia, y que el padre del interesado nacido en 1936, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

VIII.- En cuanto a la alegación del recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos,

“lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión del recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

IX.- Finalmente por lo que se refiere a la alegación formulada sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don G-L. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (72ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en México.

HECHOS

1.- Doña J-C. presenta escrito en el Consulado de España en México a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en México en 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de diciembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 24 de noviembre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1900 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de

nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1926 con mexicano, según consta en acta de matrimonio, y que la madre de la interesada nacida en 1927, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

VIII.- Finalmente, en cuanto a la alegación del escrito de recurso relativa a la discriminación de los nietos de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que históricamente hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española *iure sanguinis* en función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede acogerse como motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el Tribunal Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley, puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico [STC 119/1987].

La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña J-P. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en México.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (85ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don D. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don D. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado local de nacimiento del interesado, certificado literal español de nacimiento de su padre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado literal español de nacimiento de su abuelo y documentación justificativa de la salida de España y entrada en Venezuela de su abuelo en el año 1950.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), mediante su Auto de 17 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela) el 2 de septiembre de 1987, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008

al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), se dictó Auto el 17 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1932, de padre natural de Venezuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo nacido en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades

españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuelo nacido en España, no ha quedado verificado el hecho de que el referido abuelo hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que el abuelo del interesado salió de España en el año 1950 con pasaporte venezolano, hecho que prueba que ostentaba la nacionalidad venezolana y no la española, cuando dejó España. Por otra parte, su hijo y padre del interesado, nació en el año 1963, siguiendo también, de origen, la nacionalidad venezolana de su propio progenitor, y abuelo del solicitante. Al no resultar acreditado que el abuelo de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (86ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña D. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

- 1.- Doña D. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado local de nacimiento de la interesada, certificado literal español de nacimiento de su padre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado literal español de nacimiento de su abuelo y documentación justificativa de la salida de España y entrada en Venezuela de su abuelo en el año 1950.
- 2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), mediante su Auto de 17 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.
- II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Venezuela) el 16 de marzo de 1989, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela), se dictó Auto el 17 de junio de 2009, denegando lo solicitado.
- III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.
- IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1932, de padre natural de Venezuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelo nacido en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuelo nacido en España, no ha quedado verificado el hecho de que el referido abuelo hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que el abuelo de la solicitante salió de España en el año 1950 con pasaporte venezolano, hecho que prueba que ostentaba la nacionalidad venezolana y no la española, cuando dejó España. Por otra parte, su hijo y padre de la interesada, nació en el año 1963, siguiendo también, de origen, la nacionalidad venezolana de su propio progenitor, y abuelo de la solicitante. Al no resultar acreditado que el abuelo de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (87ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña. C-D. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña C-D. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b)

del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela (en el cual se da cuenta de la recuperación de su nacionalidad española de origen en 2002), y cédula de entrada de su abuela en Venezuela en 1956.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Venezuela) el 3 de julio de 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1935 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27,

29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española de origen, se colige que la referida abuela no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil, sino que llegó a Venezuela en el año 1956, y que se casó allí con súbdito venezolano en 1959, perdiendo por tanto en tal fecha su nacionalidad española de origen, tal y como queda acreditado mediante la documentación obrante en el expediente administrativo. Se constata también, por tanto, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida después de esa fecha, en 1959, siguió ya de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor - razón por la cual tampoco sería posible para la Sra. P. el acceso a la opción pretendida mediante el apartado primero de la norma varias veces invocada que exige como requisito que los padres de los solicitantes hubieran sido españoles de origen -. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela)

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (88ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña C-G. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.-Doña C-G. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela (en el cual se da cuenta de la recuperación de su nacionalidad española de origen en 2002), y cédula de entrada de su abuela en Venezuela en 1956.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Venezuela) el 22 de noviembre de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el

año 1935 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre

que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española de origen, se colige que la referida abuela no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil, sino que llegó a Venezuela en el año 1956, y que se casó allí con súbdito venezolano en 1959, perdiendo por tanto en tal fecha su

nacionalidad española de origen, tal y como queda acreditado mediante la documentación obrante en el expediente administrativo.

Se constata también, por tanto, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida después de esa fecha, en 1959, siguió ya de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor - razón por la cual tampoco sería posible para la Sra. P. el acceso a la opción pretendida mediante el apartado primero de la norma varias veces invocada que exige como requisito que los padres de los solicitantes hubieran sido españoles de origen -. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (89ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don C-J. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don C-J. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela (en el cual se da cuenta de la recuperación de su nacionalidad española de origen en 2002), y cédula de entrada de su abuela en Venezuela en 1956.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen al nacido en B. (Venezuela) el 25 de julio de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1935 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la

abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y

por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de española de origen, se colige que la referida abuela no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil, sino que llegó a Venezuela en el año 1956, y que se casó allí con súbdito venezolano en 1959, perdiendo por tanto en tal fecha su nacionalidad española de origen, tal y como queda acreditado mediante la documentación obrante en el expediente administrativo.

Se constata también, por tanto, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida después de esa fecha, en 1959, siguió ya de origen la nacionalidad venezolana de su propio

progenitor - razón por la cual tampoco sería posible para el Sr. P. el acceso a la opción pretendida mediante el apartado primero de la norma varias veces invocada que exige como requisito que los padres de los solicitantes hubieran sido españoles de origen -. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ,por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (90ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña. N-B. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.-Doña N-B. presentó escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien recuperó su nacionalidad española de origen en el año 2000) y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de fecha 30 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Cuba) el 14 de junio de 1948, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Auto el 30 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1898, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la

citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de español de origen, se colige que el referido abuelo no sufrió exilio como consecuencia de la Guerra Civil. Así, existe constancia de que el abuelo de la solicitante, que vivió en Cuba durante algunos años, siempre anteriores a la Guerra Civil Española, destinado allí en su condición de militar del Ejército español, y donde contrajo matrimonio, regresó posteriormente a España, fijando residencia en Sabadell, como se desprende de la documentación obrante en el expediente, sin que existan ya más pruebas de que dejase posteriormente España, ni, por ende, tampoco de que llegase a perder en algún momento su nacionalidad española de origen. La propia solicitante aclara esta circunstancia en su escrito de recurso, declarando que su abuelo falleció en el año 1938 en territorio español, y que, por tanto, nunca acompañó al resto de su familia cuando abandonaron España para regresar a Cuba unos años después. No quedando acreditada, por lo tanto la condición del abuelo de la interesada como exiliado, ni tampoco, por tanto, que perdiese la nacionalidad española como consecuencia del exilio, no pueden entenderse cumplidos en su

totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (91ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don F. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1.- Don F. presentó escrito ante el Consulado de España en São Paulo (Brasil) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (que accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código civil), certificado español de nacimiento de su abuelo, y certificado de adquisición de la naturalización brasileña de su abuelo en 1947.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de fecha 20 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del

Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S. (Brasil) el 11 de octubre de 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1920, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo

caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de español de origen, no puede considerarse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, sino, tan sólo, que adquirió nacionalidad brasileña por naturalización en el año 1947. Se colige, en consecuencia, que su hijo, y padre del solicitante, nacido en 1952, siguió ya de origen la nacionalidad brasileña de su propio progenitor. Se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (92ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don S-O. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don S-O. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela, y certificado de matrimonio de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de abril de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en V-M. (Argentina) el 30 de noviembre de 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 1 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1911, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido)

o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado

español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de española de origen, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. Así, existe constancia de que la abuela del interesado estaba ya en Argentina en el año 1938, fecha en la que contrajo matrimonio con ciudadano argentino y perdió, en consecuencia, su nacionalidad española de origen. Se constata también, por tanto, que la madre del interesado (nacida en 1941) siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Pero se insiste, sin embargo, en que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (93ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña L-I. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña L-I. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil) del que se deducen además el nacimiento de su abuela en España en 1903, y el matrimonio de ésta con ciudadano argentino en 1926, así como certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 17 de junio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 28 de diciembre de 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 17 de junio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1903, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de

su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la

Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela de la Sra. M. se encontraba ya en Argentina mucho antes de la Guerra, en el año 1926, fecha en la que contrajo matrimonio en B-A. con ciudadano argentino, perdiendo así su nacionalidad española de origen. Por otra parte, su hija y madre de la solicitante (Doña Á-A) nació en 1928, ya después de que su madre hubiese perdido la nacionalidad española, por lo que ha de entenderse que aquella siguió ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (94ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña L-C. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña L-C. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil) del que se deducen además el nacimiento de su abuela en España en 1903, y el matrimonio de ésta con ciudadano argentino en 1926, así como certificado español de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 17 de junio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 28 de diciembre de 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 17 de junio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V

de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1903, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio

en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela de la Sra. M. se encontraba ya en Argentina mucho antes de la Guerra, en el año 1926, fecha en la que contrajo matrimonio en B-A. con ciudadano argentino, perdiendo así su nacionalidad española de origen.

Por otra parte, su hija y madre de la solicitante (Doña Á-A) nació en 1928, ya después de que su madre hubiese perdido la nacionalidad española, por lo que ha de entenderse que aquella siguió ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (95ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña C-I. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña C-I. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional

séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), y del que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1907.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 6 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 12 de mayo de 1960, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 6 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la

condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España en el año 1907. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre

que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda probado es que la abuela de la Sra. F. se encontraba ya

en Argentina en el año 1935, fecha en la que nació su hija y madre de la solicitante (Doña C-M^a.) en la ciudad de B-A. No puede saberse en qué fecha exacta contrajeron matrimonio los abuelos de la solicitante (se conoce que en algún momento lo hicieron porque es un hecho que aparece constatado también en la inscripción de nacimiento de la madre de la interesada), ni se tienen datos de pérdida de nacionalidad por parte de la abuela, pero, en cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (96^a)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña M^a-A. contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M^a-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código civil), certificado español de nacimiento de su abuela, certificado de matrimonio de sus abuelos, y pasaporte argentino expedido por la Oficina Consular Argentina en Málaga, con visado de la Dirección General de Inmigración de la República Argentina, que prueba entrada de sus abuelos en aquel país en mayo de 1940.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina), mediante su Acuerdo de 14 de junio de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en, B-A. (Argentina) el 27 de abril de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina), se dictó Acuerdo el 14 de junio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1910, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la

abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la

nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española de origen, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela de la solicitante contrajo matrimonio en España con ciudadano argentino el día 19 de noviembre de 1936, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, en 1940, se produjo su salida de España con su esposo y sus hijos. Por otra parte, su hijo y padre de la interesada, nació en el año 1940, ya después de que la abuela de la Sra. M. perdiese su nacionalidad española de origen, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquel siguió ya, de origen, la

nacionalidad extranjera de su propio progenitor. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la legislación vigente entonces determinaba que la referida abuela hubiese perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España, como consecuencia de su matrimonio con ciudadano extranjero, y con independencia de que hubiese manifestado su vocación de conservar la de origen), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso y a otros similares de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (97ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero y segundo de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002; así como los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular Miami (EEUU).

HECHOS

1.- Don Y de J. presenta escrito en el Consulado de España en Miami a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo.

La solicitud de opción fue formalizada el 3 de marzo de 2009 en los modelos normalizados del Anexo I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 10 de abril de 2009, denegando lo solicitado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

2.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

3.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Atendiendo a la primera de las opciones solicitadas, se ha pretendido inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba en 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 14 de mayo de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 23 de mayo de 2003, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.-Se exige pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de

origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil. Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

IV.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

V.- Por lo que se refiere a la solicitud de nacionalidad formulada a través del apartado 2 de la citada Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (Anexo II) hay que recordar que establece un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1898, de padres españoles. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VI.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VII.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VIII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada

la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana el 28 de febrero de 1936, en expediente iniciado en 1935, según consta en certificado expedido por la Dirección de Inmigración y Extranjería, es decir, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1943, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, el propio recurrente en su escrito de recurso manifiesta “el mismo emigró a Cuba en el año 1914, en el 1936 optó por la ciudadanía cubana”.

Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don Y de J. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami (EE.UU):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (98ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela)

HECHOS

1.- Don A-A., presenta escrito en el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 24 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Venezuela en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 24 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, ni que su padre fuese español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1895, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente una copia de la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela en la que se publica la manifestación de voluntad del abuelo del interesado de adoptar la nacionalidad venezolana el 14 de diciembre de 1941. Es decir que en el momento del nacimiento del padre del recurrente -en 1945- su abuelo, ya no era español, por lo que no pudo transmitir la ciudadanía española de origen a su hijo. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición

Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad venezolana en el año 1942, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1945, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, en la anteriormente citada publicación de la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, en la que el abuelo del interesado manifiesta su voluntad de adoptar la nacionalidad venezolana, consta por declaración del mismo que reside en Venezuela desde hace 18 años,

es decir, desde 1924. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don A-A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (99ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Mendoza (Argentina)

HECHOS

1.- Don D-F. presenta escrito en el Consulado de España en Mendoza a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 31 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del

Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 de enero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 31 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y su padre y la del Registro español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1889, de padres españoles. Así mismo consta una certificación de Carta de Ciudadanía, expedida a nombre del abuelo de fecha 28 de febrero de 1925, que acredita su pérdida de la nacionalidad española, razón por la que no pudo transmitírsela a su hijo, padre del recurrente , nacido en 1936. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia

del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1925, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1936, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En cuanto a la alegación del recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-

Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión del recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita], por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

IX.- Finalmente, en cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad, ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1 a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don D-F. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular de Mendoza (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (100ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Mendoza (Argentina)

HECHOS

1.- M-A. presenta escrito en el Consulado de España en Mendoza a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 31 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1962, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 31 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1900, de padres españoles. Así mismo consta una certificación del Registro General de Cartas de Ciudadanía de Argentina, a nombre del abuelo de fecha 28 de febrero de 1928, que acredita su pérdida de la nacionalidad española, razón por la que no pudo transmitírsela a su hijo, padre de la recurrente , nacido en 1930. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se

presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1928, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1930, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, el propio recurrente en su escrito de recurso manifiesta “mi abuelo no vino a la Argentina a causa de Guerra Civil, sino mucho antes durante la Primera Guerra... Mi abuelo esperó lo más que pudo para naturalizarse (14 años) pero nunca dejó de sentirse español de cuna y de antepasados” Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Mendoza (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (101ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Puerto Rico (EEUU).

HECHOS

- 1.- Doña N-M. presenta escrito en el Consulado de España en Puerto Rico a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 17 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Puerto Rico en 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 17 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;

b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1917, de padres españoles. Así mismo consta documentación acreditativa de su pérdida de la nacionalidad española el 20 de junio de 1949, razón por la que no pudo transmitírsela a su hijo, padre de la recurrente, nacido el 9 de diciembre de 1949. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la

condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad estadounidense en el año 1949, con seis meses de anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña N-M. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Puerto Rico (EE.UU).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (102ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud de los entablados por los interesados contra acuerdos del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Los hermanos Don J-I. y Doña F. presentan escritos en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjuntan, especialmente, en apoyo de sus solicitudes como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdos de fecha 15 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por los interesados según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificados los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra las resoluciones denegatorias de sus solicitudes antes citadas.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, [“Boletín Oficial del Estado” (BOE) nº 285 de 27 de noviembre de 1992] se ha procedido a la acumulación de ambos expedientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como españoles de origen a los nacidos en Argentina en 1980 y 1981 respectivamente, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. Las solicitudes de opción cuya inscripción ahora se pretenden fueron formalizadas el 5 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictaron acuerdos el 15 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- Las resoluciones apeladas basan, en esencia, su denegación en que los solicitantes no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no han acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nietos de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de los solicitante y las del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1906, de padres españoles. Así mismo consta en el certificado de nacimiento de la madre de los interesados que el abuelo se naturalizó argentino con fecha 18 de julio de 1952, lo

cual acredita su pérdida de la nacionalidad española, razón por la que no pudo transmitírsela a su hija, madre de los recurrentes, nacida en 1953. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de los solicitantes hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de los solicitantes de nietos de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1952, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de los solicitantes ocurrido en el año 1953, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en

el expediente numerosa documentación que acredita que el abuelo de los interesados residió, ininterrumpidamente, en distintos países de Sudamérica desde 1924. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar los recursos interpuestos por los hermanos Don J-I. y Doña F. y confirmar los acuerdos apelados, dictados conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (103ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

HECHOS

- 1.- Don J-H. presenta escrito en el Consulado de España en Sao Paulo a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Brasil en 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de diciembre de 2008 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 20 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y su padre y la del Registro español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1920, de padres españoles. Así mismo se ha acreditado la naturalización del abuelo como brasileño el 2 de mayo de 1947, que acredita su pérdida de la nacionalidad española, razón por la que no pudo transmitírsela a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1952. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a

la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad brasileña en el año 1947, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1952, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Es más, requerido el interesado para que presente certificado acreditativo del ingreso de su abuelo en Brasil, documento fácilmente obtenible en el "Memorial do Imigrante", no lo aporta, insistiendo en que por el hecho de haberse naturalizado brasileño en el año 1947 ya se prueba el exilio. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-H. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (24ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña L-E. presentó escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y certificado español de nacimiento de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de fecha 29 de abril de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L de Z. (Argentina) el 20 de diciembre de 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo de 29 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1913, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,

bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. De hecho, lo único de lo que queda constancia es de que el citado abuelo contrajo matrimonio en Argentina, y que, en el año 1936 obtuvo la ciudadanía argentina por naturalización, lo que a la vez determina que cuando nació su hija y madre de la solicitante (en 1951), ésta siguiera ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (25ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don J-E. presentó escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuelo, y certificado de adquisición de la carta de ciudadanía argentina por parte de su abuelo en 1936.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 8 de septiembre de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo de 21 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud

: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1910, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. De hecho, lo único de lo que queda constancia es de que el citado abuelo contrajo matrimonio en Argentina, y que, en el año 1936 obtuvo la ciudadanía argentina por naturalización, lo que a la vez determina que cuando nació su hija y madre de la solicitante (en 1939), ésta siguiera ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (26ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.-Doña M. presentó escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo

20.1 b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuelo, y certificado de adquisición de la carta de ciudadanía argentina por parte de su abuelo en 1938.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de fecha 15 de abril de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 10 de marzo de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo de 15 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedido por el

Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1911, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de español de origen, no puede entenderse probado que el referido

abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. De hecho, lo único de lo que queda constancia es de que el citado abuelo contrajo matrimonio en Argentina, y que, en el año 1938 obtuvo la ciudadanía argentina por naturalización, lo que a la vez determina que cuando nació su hija y madre de la solicitante (en 1948), ésta siguiera ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad como consecuencia de otras razones distintas a las vinculadas a la Guerra Civil y las circunstancias político-sociales de la inmediata Postguerra, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (27ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña V-S. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela..
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Acuerdo de 29 de junio de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.
- II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M del P. (Argentina), el 15 de enero de 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 29 de junio de 2009, denegando lo solicitado.
- III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.
- IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud

: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España, en el año 1903, hija de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. El único documento obrante en el expediente acerca de la fecha de salida de España de la abuela de la interesada, y su llegada a Argentina, es un certificado expedido por el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos que fija esa llegada, mucho antes de la Guerra Civil, en el año 1913. Por lo demás, se conoce que contrajo matrimonio en Argentina con ciudadano argentino, aunque no queda precisada la fecha de dicho enlace. Por ello, puede colegirse que cuando nació el padre de la interesada en el año 1939, éste siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Pero, en todo caso, se insiste en que no queda acreditada la condición de exilada de la referida abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Los hechos puestos de manifiesto no son discutidos ni siquiera por la propia solicitante, que reconoce expresamente en su recurso que su abuela no fue exilada de Guerra, limitándose a reiterar su pretensión por una vía diferente a la que formalizó en su solicitud original. En concreto afirma la solicitante que formuló su pretensión al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, lo cual no coincide con la realidad, pues la única solicitud obrante en el expediente no queda referido al referido apartado primero, sino al segundo de la misma disposición. En cualquier caso, y a meros efectos informativos, se estima oportuno indicar a la interesada que aunque su solicitud se hubiera formalizado al amparo del apartado primero ya mencionado, nunca habría podido serle reconocido el derecho pretendido, habida cuenta de que su padre no ostenta ni ha ostentado la condición de español de origen, como exige tal norma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (28ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

- 1.- Don H-R. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado emitido por el Registro Civil uruguayo, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el apartado 20.1 b) del Código Civil) - y del que se deduce, además, el nacimiento de su abuela en España en el año 1928, así como el matrimonio de ésta con ciudadano uruguayo en el año 1956 - y pasaporte español con el que su abuela abandonó España en el año 1950, en buque con origen en el puerto de B.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 17 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.
- II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 20 de febrero de 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular citado se dictó Resolución el 17 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.
- III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.
- IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V

de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, de la que resulta, además, el nacimiento de su abuela en España en el año 1928; Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se verifica que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. M. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar, el pasaporte español con visado uruguayo, en el que constan tanto la salida de la abuela del solicitante de territorio español, como su entrada en Uruguay en el año 1950, así como la constancia de su matrimonio con ciudadano uruguayo en el año 1956, que habría determinado la necesidad de que su hijo y padre del interesado, siguiese de origen la nacionalidad uruguayo de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. G. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (29ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don J-C. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 8 de enero de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en V. R-N. (Argentina) el 27 de marzo de 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 8 de enero de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del

Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1904, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la

nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra

Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. A. ya se encontraba en Argentina mucho antes de la Guerra Civil, quedando acreditada su llegada a ese país en el año 1920. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (32ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Don M-Á. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y del que se deduce nacimiento de su abuelo en España en 1891, sin más datos sobre la filiación de éste.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante su Resolución de 24 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay), el 13 de febrero de 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 24 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, de la que se deduce nacimiento de su abuelo en España en el año 1891. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo nacido en España, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la

citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011). Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español, no puede entenderse acreditado que el referido abuelo perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que el abuelo del interesado abandonó España, y sólo resulta probado que en 1944 ya estaba físicamente en Uruguay, puesto que allí contrajo matrimonio con la abuela del solicitante. No se conoce tampoco en qué fecha exacta perdió el referido abuelo la nacionalidad española de origen.

Pero con independencia de ello, se subraya que, incluso entendiendo perdida la nacionalidad española del abuelo con posterioridad a su llegada a Uruguay, nunca podría considerarse acreditada la condición de exilado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (33ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Doña V. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y del que se deduce nacimiento de su abuelo en España en 1891, sin más datos sobre la filiación de éste.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante su Resolución de 24 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Uruguay), el 26 de noviembre de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 24 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, de la que se deduce nacimiento de su abuelo en España en el año 1891. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo nacido en España, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que

la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011). Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español, no puede entenderse acreditado que el referido abuelo perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que el abuelo de la interesada abandonó España, y sólo resulta probado que en 1944 ya estaba físicamente en Uruguay, puesto que allí contrajo matrimonio con la abuela de la interesada. No se conoce tampoco en qué fecha exacta perdió el referido abuelo la nacionalidad española de origen.

Pero con independencia de ello, se subraya que, incluso entendiendo perdida la nacionalidad española del abuelo con posterioridad a su llegada a Uruguay, nunca podría considerarse acreditada la condición de exilado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (34ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don C-J. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Auto de 18 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela), el 27 de diciembre de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 18 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de su abuelo en España, en el año 1910, hijo de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o

paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español, no puede entenderse acreditado que el referido abuelo perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que el abuelo del interesado abandonó España, y sólo resulta probado que en 1942 ya estaba físicamente en Venezuela, resultando

este dato de su matrícula en el registro de ciudadanos españoles del Consulado de España en Venezuela, pero sin que de ello se pueda deducir, como así pretende el solicitante, que la salida de España se produjera precisamente en ese año, y no en otro anterior. Incorpora mayor incertidumbre sobre este particular, el hecho de que obre en el expediente una declaración personal realizada por el abuelo del interesado a efectos de su naturalización venezolana, y publicada en la Gaceta Oficial de los EE.UU. de Venezuela, por la que se reconoce la entrada en ese país el día 26 de septiembre de 1934.

En consecuencia, se concluye en que no queda acreditada la condición de exilado del referido abuelo, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (39ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los que no acrediten ser nietos de abuelos de nacionalidad española que perdieran o tuvieran que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña C-F. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificados españoles de nacimiento de sus abuelos, certificado de naturalización argentina de su abuelo, y libro de familia con fecha del matrimonio de sus abuelos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 14 de diciembre de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 1 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de sus abuelos, de las que se deduce el nacimiento de éstos en España, respectivamente en los años 1912 y 1913, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de

15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliados de dichos abuelos. Ello así, puesto que existe constancia (confirmada por la declaración expresa de la interesada en su escrito de recurso) de que los abuelos de la solicitante llegaron a Argentina muchos años antes de la Guerra Civil, en concreto en 1928 y 1929. Por lo demás, se constata igualmente la naturalización argentina del abuelo de la interesada en el año 1938 y su matrimonio con su esposa (y abuela de la interesada) en 1940, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que puede colegirse que, al nacer la madre de la recurrente en el año 1941, ésta habría adquirido ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio

de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (40ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don P-H. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud, como documentación: declaración de datos para la inscripción, documentos de identidad, certificado local de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2002), certificado español de nacimiento de su abuelo (que recuperó su nacionalidad española de origen en el año 1988), certificado español de nacimiento de su abuela, pasaporte argentino con el que su abuelo abandonó España en el año 1941, certificado canónico de matrimonio por poderes de sus abuelos (él se encontraba en Argentina y ella en España), y documentación que prueba llegada de su abuela a Argentina en el año 1944.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina), mediante su Acuerdo de 4 de septiembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 18 de julio de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina), se dictó Acuerdo el 4 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1916, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si

bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocerse no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada

Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de española de origen, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio. A este respecto, se ha comprobado que el abuelo del solicitante, abandonó España con pasaporte argentino en el año 1941, por lo que, a pesar de que este abuelo (nacido en Argentina hijo de españoles), hubiese podido ostentar la nacionalidad española durante algún período de tiempo en los años anteriores a su salida de España, existen ya indicios muy claros de que, antes de dejar el país, había obtenido naturalización argentina, con la consiguiente pérdida de la nacionalidad española. Consecuentemente, podría colegirse también que el matrimonio de los abuelos, celebrado por poderes en el año 1943 cuando la abuela aún se encontraba físicamente en territorio español, hizo perder a ésta su nacionalidad española

antes de que abandonara España, por lo que no se cumpliría tampoco la premisa de la normativa rectora, referida a personas que perdieron la nacionalidad española con carácter posterior a su exilio debido a la Guerra Civil. Por ello, al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la legislación vigente entonces determinaba que la referida abuela hubiese perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España, como consecuencia de su matrimonio con ciudadano extranjero, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (41ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don C-L. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela..

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Acuerdo de 27 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en La P. (Argentina), el 31 de octubre de 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 27 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España, en el año 1924, hija de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si

bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada

Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que la abuela del interesado abandonó España, y sólo resulta probado que contrajo matrimonio en Argentina, con ciudadano argentino, en el año 1946, fecha en la cual se habría producido la pérdida de su nacionalidad española de origen. Se colige por tanto que el padre de la parte actora, nacido en 1955, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

En todo caso, se insiste en que no queda acreditada la condición de exilada de la referida abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18

de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (45ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en San Salvador (El Salvador)

HECHOS

1.- Doña A. presenta escrito en el Registro Civil Consular de San Salvador, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 30 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de

noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular, como española de origen, a la nacida en El Salvador en 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 30 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo, hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior". En el expediente

que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en T. en el año 1927 de padres naturales de España. Igualmente se han aportado al expediente publicaciones históricas que acreditan el exilio del bisabuelo de la interesada y su familia, primero a Francia y su salida a Cuba en el vapor "F" y posteriormente a México, país que les otorgó a él y a su familia la nacionalidad mexicana. En concreto a su abuelo, que salió de España siendo menor de edad, el 18 de agosto de 1949. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuelo español ni su condición de exiliado únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto de dicho requisito, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocer a los nietos de aquellos abuelos que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose acreditada la condición de la solicitante de nieta de español, queda así mismo acreditada la condición de exiliado del abuelo por su salida de España en el año 1939, teniendo que adoptar la nacionalidad mexicana en 1949, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante, por lo que no pudo transmitirle la nacionalidad española en el momento de su nacimiento en 1950. Por todo cuanto antecede deben entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el Acuerdo dictado con fecha 11 de agosto de 2010, por el encargado del Registro Civil Central, y reconociendo a Doña A. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San Salvador.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (46ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en San Salvador (El Salvador)

HECHOS

1.- Doña F-M. presenta escrito en el Registro Civil Consular de San Salvador, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 30 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular, como española de origen, a la nacida en El Salvador en 1989, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 30 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha

acreditado que su abuelo, hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en T. en el año 1927 de padres naturales de España. Igualmente se han aportado al expediente publicaciones históricas que acreditan el exilio del bisabuelo de la interesada y su familia, primero a Francia y su salida a Cuba en el vapor "F" y posteriormente a México, país que les otorgó a él y a su familia la nacionalidad mexicana. En concreto a su abuelo, que salió de España siendo menor de edad, el 18 de agosto de 1949. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuelo español ni su condición de exiliado únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto de dicho requisito, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocer a los nietos de aquellos abuelos que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose acreditada la condición de la solicitante de nieta de español, queda así mismo acreditada la condición de exiliado del abuelo por su salida de España en el año 1939, teniendo que adoptar la nacionalidad mexicana en 1949, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante, por lo que no pudo transmitirle la nacionalidad española en el momento de su nacimiento en 1950. Por todo cuanto antecede deben entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el Acuerdo dictado con fecha 11 de agosto de 2010, por el encargado del Registro Civil Central, y reconociendo a Doña F-M. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San Salvador.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (54ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña M^a-J. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela..
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Acuerdo de 13 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en La P. (Argentina), el 14 de mayo de 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 13 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España, en el año 1924, hija de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación

de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que la abuela de la interesada abandonó España, y sólo resulta probado que contrajo matrimonio en Argentina, con ciudadano argentino, en el año 1946, fecha en la cual se habría producido la pérdida de su nacionalidad española de origen. Se colige por tanto que el padre de la parte actora, nacido en 1955, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

En todo caso, se insiste en que no queda acreditada la condición de exilada de la referida abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (55ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don R-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos

de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela..

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Acuerdo de 20 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en La P. (Argentina), el 25 de enero de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 20 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España, en el año 1924, hija de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad

española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que la abuela del interesado abandonó España, y sólo resulta probado que contrajo matrimonio en Argentina, con ciudadano argentino, en el año 1946, fecha en la cual se habría producido la pérdida de su nacionalidad española de origen. Se colige por tanto que el padre de la parte actora, nacido en 1955, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

En todo caso, se insiste en que no queda acreditada la condición de exilada de la referida abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (56ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don M-F. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 29 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1922, de padres españoles. Así mismo, consta en la certificación expedida por el Consulado español de Buenos Aires a nombre del padre del interesado que el abuelo se naturalizó argentino el 15 de mayo de

1950. Es decir que en el momento del nacimiento del padre del recurrente -en 1957- su abuelo, ya no era español, por lo que no pudo transmitir la ciudadanía española a su hijo. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1950, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1957, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente

la documentación expedida en 1932 a nombre de la bisabuela del interesado, en la que se la autoriza a viajar a Argentina en compañía de sus hijos (uno de ellos el abuelo del recurrente) a fin de que se reúnan, en dicho país, con el esposo y padre, ya afincado en el mismo. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M-F. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (62ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela)

HECHOS

- 1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 18 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Venezuela en 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 18 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la de su madre y la del Registro español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1902, de padres españoles. Así mismo consta en el expediente copia de la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela de 23 de noviembre de 1942 en la que se publica la manifestación de voluntad del abuelo de la interesada de ser venezolano, por llevar residiendo en el país quince años, es decir, desde 1927, sin que exista en todo el expediente documentación alguna que pueda desvirtuar el carácter oficial de esta manifestación de voluntad oficializada a través de su publicación. Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la recurrente, nacida en 1954. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que

correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad venezolana en el año 1942, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (63ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Miami (EEUU).

HECHOS

1.- Doña G-Mª. presenta escrito en el Consulado de España en Miami a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 29 de junio de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1957, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 29 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y su padre y la del Registro español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1883, de padres españoles. Así mismo se ha acreditado la naturalización del abuelo como cubano el 26 de septiembre de 1911, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido en 1919. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país

de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana en el año 1911, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1919, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada en su escrito de recurso manifiesta “... discriminación hacia los españoles que salieron de España por causas económicas y sociales, a saber la pobreza y desempleo existentes en España, anteriores a 1936 y específicamente en la primera década del 1900, que fue cuando mi abuelo emigró a Cuba”. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000).

En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña G-M^a. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Miami (EE.UU).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (64ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña C. presenta escrito en el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 14 de mayo de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Venezuela en 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 14 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1911, de padres españoles. Así mismo consta en el expediente copia de la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela de 25 de enero de 1947 en la que se publica la manifestación de voluntad del abuelo de la interesada de ser venezolano, por llevar residiendo en el país desde 1929. A mayor abundamiento, la propia interesada en su escrito de recurso manifiesta que su abuelo “llegó a Venezuela en el año 1929...”

Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido en 1948. Conforme a lo anteriormente expuesto, queda claro que en este caso no concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de los nietos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio, y no únicamente la residencia fuera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

V.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (76ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don. J. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad y certificado de nacimiento propio. Se ha incorporado también al expediente literal de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la Disposición transitoria segunda de la Ley 18/1999, de 17 de diciembre), del que se deduce además nacimiento de su abuela en España en 1905.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 23 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en R. (Argentina) el 12 de marzo de 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 23 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1905. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia

directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y

protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (81ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don H-D. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 27 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1932 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 16 de abril de 1951 con ciudadano extranjero, según consta en la correspondiente certificación del registro Civil español y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1952, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela del interesado perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don H-D. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (82ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña M-L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 27 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1932 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad

española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 16 de abril de 1951 con ciudadano extranjero, según consta en la correspondiente certificación del registro Civil español y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1952, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la

abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-L. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (83ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero y segundo de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002; así como los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular Miami (EEUU).

HECHOS

1.- Doña E. presenta escrito en el Consulado de España en Miami a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su padre y de su abuela.

La solicitud de opción fue formalizada el 20 de mayo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I, al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 1 de julio de 2009, denegando lo solicitado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

2.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, e incorpora al mismo una nueva solicitud en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

3.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Atendiendo a la primera de las opciones solicitadas, se ha pretendido inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en México en 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 27 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Civil en Madrid el 7 de marzo de 2005, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.-Se exige pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria y, dado que el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Circunstancia que no es rebatida en el escrito de recurso.

V.- Por lo que se refiere a la solicitud de nacionalidad formulada a través del apartado 2 de la citada Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (Anexo II) hay que recordar que establece un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las del Registro español de su padre y de su abuela, constando en esta última que era nacida en España en 1909, de padres españoles. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VI.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando la abuela hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VII.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en con mexicano, según consta en la inscripción de matrimonio, que tuvo lugar en M. el 15 de noviembre de 1933, y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo en M. en 1939, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliada

de la abuela, toda vez que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña E. y confirmar la resolución apelada, dictada conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami (EE.UU).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (84ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay)

HECHOS

1.- Don D-J. presenta escrito en el Registro Civil Consular de Montevideo, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 23 de abril de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de

la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Uruguay en 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 23 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela, hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de

nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1941 de padres naturales de España. Igualmente se ha aportado al expediente la documentación justificativa de la salida de España y entrada en Uruguay en 1953 de la abuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, ni su condición de exiliada, únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto de dicho requisito, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España hasta la entrada en vigor de la Constitución por la derogación del artículo 17.2 del Código Civil como consecuencia de

la eficacia inmediata de la misma _ cfr. arts. 14, 39, disposiciones derogatoria y final de la Constitución, según Resolución de 13 de Octubre de 2001 (3ª)). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar que tal circunstancia se habrá producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose acreditado en el expediente la condición del solicitante de nieto de española, así como la condición de exiliada de la abuela por su salida de España y entrada en Uruguay en 1953, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante y que la abuela, aunque no hubiera perdido ni renunciado a su nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en el momento del nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1963, no pudo transmitírsela por seguir éste, en virtud del principio jurídico de unidad familiar, la nacionalidad extranjera del padre, no puede sino entenderse conforme a lo expresado en el fundamento de derecho anterior cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el Acuerdo dictado con fecha 11 de agosto de 2010, por el encargado del Registro Civil Central, y reconociendo a Don D-J. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (85ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don G-A. presenta escrito en el Registro Civil Consular de Buenos Aires, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 13 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos sean exiliados que hubieran perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1918 de padres naturales de España. Igualmente consta en el expediente certificado de la entrada, de esta última, en Argentina el 11 de septiembre de 1936. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, ni su condición de exiliada únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto de dicho requisito, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España hasta la entrada en vigor de la Constitución por la derogación del artículo 17.2 del Código Civil como consecuencia de la eficacia inmediata de la misma _ cfr. arts. 14, 39, disposiciones derogatoria y final de la Constitución, según Resolución de 13 de Octubre de 2001 (3ª)). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su

nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar que tal circunstancia se habrá producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose acreditado en el expediente la condición del solicitante de nieto de española, así como la condición de exiliada de la abuela por su salida de España y entrada en Argentina en septiembre de 1939, y que la abuela, aunque no hubiera perdido ni renunciado a su nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en el momento del nacimiento de la hija, madre del solicitante, ocurrido en el año 1951, no pudo transmitírsela por seguir ésta en virtud del principio jurídico de unidad familiar la nacionalidad extranjera del padre, no puede sino entenderse conforme a lo expresado en el fundamento de derecho anterior cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el Acuerdo dictado con fecha 7 de julio de 2010, por el encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires, y reconociendo a Don G-A. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (86ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don J-D. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 8 de enero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 8 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y de su padre y la del Registro Civil español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1903, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente certificación del Registro General de Cartas de Ciudadanía

en la que se expresa que el abuelo del interesado adquirió la ciudadanía argentina el 8 de enero de 1930, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1938. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1930, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de

1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, el propio recurrente en el escrito de recurso manifiesta "... mi abuelo no emigró a partir del 18 de julio de 1936 como consecuencia de la Guerra Civil Española, si lo hizo en las postrimerías de la Primera Guerra..." Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-D. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (87ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

HECHOS

1.- Don L-F. presenta escrito en el Consulado de España en Santa Cruz a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 23 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Bolivia en 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 23 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los requisitos exigidos por la legislación española para optar a dicha nacionalidad.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la de su padre así como la del Registro Civil español de su presunto abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1904, de padres españoles. Respecto de la inscripción de nacimiento del padre del recurrente hay que destacar que se realizó 45 años después de su nacimiento y 11 años después del fallecimiento de su padre, circunstancia que no permite establecer, de manera indubitada, la relación paterno-filial entre el padre y el presunto abuelo. Además existen contradicciones importantes entre la partida de defunción del abuelo, en la que se le consigna como boliviano, y los documentos obrantes en el expediente en los que se reseña que nunca adquirió la nacionalidad boliviana.

V.- Sin prejuzgar el contenido del Derecho boliviano sobre las formas o títulos de determinación de la filiación, lo cierto es que la opción a la nacionalidad española que el interesado pretende ejercitar y la consiguiente inscripción de nacimiento en el Registro Civil español están condicionadas a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación de nacimiento en el Registro local, la cual, en cuanto a su eficacia registral en España está condicionada al principio de equivalencia de garantías de su autenticidad y veracidad conforme a lo que establecen los artículos 23 LRC y 85 RRC, lo que exige valorar dicha certificación en virtud

del canon normativo que resulta del derecho español. Resulta por ello pertinente y necesario que nos refiramos al contenido de este último.

VI.- El reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil puede llevarse a cabo en el momento mismo de la inscripción del nacimiento dentro del plazo previsto por los artículos 42 de la Ley del Registro Civil y 166 de su Reglamento, pero también puede tener lugar “mediante declaración del padre o de la madre, en cualquier tiempo, ante el Encargado del Registro Civil” (cfr. art. 49 L.R.C.). Ahora bien, como puso de manifiesto la Resolución de este Centro Directivo, de 8 de septiembre de 1992, no basta la declaración voluntaria y solemne por sí sola para provocar la inscripción, sino que, por el contrario, la inscripción del reconocimiento de paternidad deberá ser denegada cuando este reconocimiento resulte ambiguo o cuando por cualquier otro motivo puede deducirse fundadamente (cfr. art. 28 L.R.C.) que el autor del reconocimiento no es el padre biológico del menor. Hay que insistir en la idea de que la regulación de la filiación en el Código civil español se inspira en el principio de la veracidad biológica (principio reforzado por las Sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo y por la más reciente de 27 de octubre de 2005 que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 136.1 y 133.1 del C.c., respectivamente), de modo que un reconocimiento de complacencia de la paternidad es nulo de pleno derecho y no podrá ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad.

A este respecto se ha de recordar que la Instrucción de 20 de marzo de 2006 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado sobre prevención del fraude documental en materia de estado civil acordó hacer público el texto de la Recomendación nº9 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea General el 17 de marzo de 2005 y comunicar a todos los Encargados de los Registros Civiles españoles, Municipales, Consulares y Central, que los criterios y orientaciones prácticas que en orden a la prevención del fraude documental en materia de estado civil se contienen en la citada Recomendación de la Comisión Internacional del Estado Civil deberán ser valorados y, en su caso, invocados conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento, en la calificación de las certificaciones de las actas de los Registros Civiles extranjeros que se presenten en un Registro Civil español bien como título directamente inscribible, bien como documento complementario en cualquier tipo de expediente o actuación registral, que por identidad de causa y razón deben ser aplicados analógicamente al caso ahora examinado, y entre cuyas recomendaciones se incluye la de que “Cuando existan indicios que hagan dudar de la exactitud de los datos que figuran en el documento presentado o de la autenticidad de las firmas, el sello o el documento en sí mismo, la autoridad competente en el asunto realizará todas las comprobaciones necesarias, en particular con el interesado” y la de que “Cuando de los elementos verificados se desprenda el carácter fraudulento del documento presentado, la autoridad competente se negará a otorgarle efecto alguno”, dudas que en el presente caso vienen avaladas por el hecho de que el reconocimiento se produce a los 45 años del nacimiento del inscrito y cuando el supuesto padre hacía 11 años que había fallecido. Al margen de estas irregularidades, corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VII.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española, ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso,

se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VIII.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

IX.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad boliviana, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Es más consta en el expediente copia de pasaporte, expedido a favor de Don Salvador Vargas en 1927, con destino Chile, sin que se acredite su regreso a España y su posterior salida entre 1936 y 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

X.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L-F. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (89ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don G-G. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, y de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de

marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de agosto de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 9 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos paternos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su padre, constando en esta última que el abuelo era nacido en España en 1899, y que se naturalizó argentino el 11 de marzo de 1927, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1939. Así mismo consta en dicha certificación que la abuela también nació en España, sin reseñarse fecha de su matrimonio. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo o la abuela hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando estos hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española, por parte de los abuelos, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia

del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de españoles y que, estos, hubieran podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento del hijo en 1939, padre del solicitante, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliados de los abuelos al no aportar documentación alguna al respecto y toda vez que, en 1927 ya residían en Argentina y que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don G-G. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (90ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Doña A-G. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, y de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 9 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos paternos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su padre, constando en esta última que el abuelo era nacido en España en 1899, y que se naturalizó argentino el 11 de marzo de 1927, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1939. Así mismo consta en dicha certificación que la abuela también nació en España, sin reseñarse fecha de su matrimonio. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo o la abuela hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos de la solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando estos hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española, por parte de los abuelos, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3.

Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de españoles y que, estos, hubieran podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento del hijo en 1939, padre del solicitante, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliados de los abuelos al no aportar documentación alguna al respecto y toda vez que, en 1927 ya residían en Argentina y que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-D. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (91ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don F-C. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 9 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1900, de padres españoles. Así mismo, consta en

el expediente copia de la cartilla militar a nombre del abuelo, en el que aparece como fecha de enrolamiento el 13 de abril de 1927, fecha a partir de la cual adquiere la nacionalidad argentina. Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del recurrente, nacida en 1945. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su

totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don F-C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (92ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don G-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del

Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 29 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1900, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente copia de la cartilla militar a nombre del abuelo, en el que aparece como fecha de enrolamiento el 13 de abril de 1927, fecha a partir de la cual adquiere la nacionalidad argentina. Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del recurrente, nacida en 1945. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia

del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don G-A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (99ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero y segundo de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002; así como los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular Miami (EEUU).

HECHOS

1.- Don A. presenta escrito en el Consulado de España en Miami a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo.

La solicitud de opción fue formalizada el 18 de febrero de 2009 en los modelos normalizados del Anexo I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 11 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

2.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

3.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Atendiendo a la primera de las opciones solicitadas, se ha pretendido inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba en 1963, en virtud del ejercicio de la

opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 7 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 17 de marzo de 2005, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.-Se exige pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado

en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

IV.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

V.- Por lo que se refiere a la solicitud de nacionalidad formulada a través del apartado 2 de la citada Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (Anexo II) hay que recordar que establece un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y las del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1913, de padres españoles. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VI.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VII.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se

presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VIII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haberse inscrito como cubano, nacido en Cuba, con fecha 27 de febrero de 1938, según consta en certificado expedido por el Registro del Estado Civil de Cuba, es decir, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante ocurrido en el año 1942, razón por la que no pudo transmitirle la nacionalidad española, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami (EE.UU).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (101ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Boston (EEUU).

HECHOS

- 1.- Don J-A. presenta escrito en el Consulado de España en México D.F. para Boston a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 3 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Estados Unidos en 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 3 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1917 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada

la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en España el 3 de enero de 1951 con ciudadano extranjero, según consta en la correspondiente certificación del registro Civil, y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo en 1952, padre del interesado, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela del interesado perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuela, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Boston (EE.UU).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (103ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud de los entablados por las interesadas contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña G-R. y Doña L-C. presentan escritos en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional

séptima, y adjuntan, especialmente, en apoyo de sus solicitudes como documentación: certificados literales de nacimiento propios, de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdos de fecha 16 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por las interesadas según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificadas las interesadas, interponen recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra los acuerdos denegatorios de sus solicitudes antes citadas.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Se ha procedido a la acumulación de ambos recursos en virtud de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (BOE de 27 de noviembre de 1992)

II.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

III. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como españolas de origen a las nacidas en Argentina en 1966 y 1969 respectivamente, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". Las solicitudes de opción cuya inscripción ahora se pretenden fueron formalizadas el 6 de agosto de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 16 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

IV.- Los acuerdos apelados basan, en esencia, su denegación en que las solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no han acreditado que sus abuelos paternos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

V.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del

padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nietas de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de las solicitante y la del Registro Civil español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que el abuelo era nacido en España en 1906, y que se naturalizó argentino el 23 de enero de 1930, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1934. Respecto de la abuela no se aporta ningún tipo de documentación, por lo que no se puede entra a valorar sus circunstancias personales respecto a su nacionalidad y posible exilio. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo o la abuela hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VI.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de las solicitantes hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando este hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española, sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española, por parte del abuelo, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VII.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VIII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de las solicitante de nietas de español y que, el abuelo hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1930, con anterioridad al nacimiento del hijo en 1934, padre de las solicitantes, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliado del abuelo al no aportar documentación alguna al respecto y toda vez que, en 1930 ya residía en Argentina y que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, las propias recurrentes en su escrito de recurso manifiestan “mis abuelos no emigraron a partir del 18 de Julio de 1936 como consecuencia de la Guerra Civil Española, sino como consecuencia de la Primera Guerra Mundial...”

Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña G-R. y Doña L-C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (104ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 13 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos paternos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que el abuelo era nacido en España en 1906, y que se naturalizó argentino el 23 de enero de 1930, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1934. Respecto de la abuela no se aporta ningún tipo de documentación, por lo que no se puede entra a valorar sus circunstancias personales respecto a su nacionalidad y posible exilio.

Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo o la abuela hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando este hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española, sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española, por parte del abuelo, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1930, con anterioridad al nacimiento del hijo en 1934, padre del solicitante, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliado del abuelo al no aportar documentación alguna al respecto y toda vez que, en 1930 ya residía en Argentina y que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Por lo que se refiere a la alegación formulada en el escrito de recurso en relación con la nacionalidad española del padre del interesado cabe informar que, éste, tiene la condición de español por haber optado con fecha 6 de agosto de 1996 a dicha nacionalidad, al amparo de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, conforme a la cual “Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y nacido en España podrán optar por la nacionalidad española, si formalizan su declaración antes del día 7 de enero de 1997”. Esta opción fue inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 6 de agosto de 1996, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007”. La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, es extensible también a la opción de la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2

de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma y por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente.

Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. En este caso el progenitor del optante, como ya se ha dicho, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Transitoria primera de la Ley 29/1995, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don R. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (105ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don L-R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 3 de junio de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de mayo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 3 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1915, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente certificado en el que se expresa que se le concedió Carta de Ciudadanía el día 30 de julio de 1937, fecha a partir de la cual adquiere la nacionalidad argentina. Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del

recurrente, nacida en 1950. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1937, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su

totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L-R. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado de Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (106ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña N-V. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro

Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 10 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro Civil español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1923, de padres españoles. Así mismo, consta en la certificación de nacimiento española del padre, que el abuelo se naturalizó argentino el día 25 de abril de 1947, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido en 1951. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas

circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1947, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña N-V. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (107ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 11 de junio de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1986, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de abril de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al

amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 11 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1905, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente certificación del Registro General de Cartas de Ciudadanía en la que se expresa que el abuelo del interesado adquirió la ciudadanía argentina el 7 de mayo de 1927, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del recurrente, nacida en 1947. A mayor abundamiento, el propio recurrente en el escrito de recurso manifiesta "Mi abuelo Luciano, llegado al país con 7 años... tuvo que nacionalizarse argentino en 1927..."Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente

reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, por lo que se refiere a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (108ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña S-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 2 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1958, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 2 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1878, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente copia del certificado expedido por el Registro General de Cartas de Ciudadanía argentino, a nombre del abuelo en el que aparece como fecha de naturalización el 25 de octubre de 1933. A mayor abundamiento, la propia interesada, en el escrito de recurso manifiesta que “mi abuelo materno tuvo que dejar España en el año 1932...” “yo no puedo justificar el exilio de mi abuelo en Argentina...” Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la recurrente, nacida en 1939. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil

y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1933, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña S-M. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (109ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don O-R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 2 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 2 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del

padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1878, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente copia del certificado expedido por el Registro General de Cartas de Ciudadanía argentino, a nombre del abuelo, en el que aparece como fecha de naturalización el 25 de octubre de 1933. A mayor abundamiento, la propia interesada, en el escrito de recurso manifiesta que “mi abuelo materno tuvo que dejar España en el año 1932...” “yo no puedo justificar el exilio de mi abuelo en Argentina...” Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del recurrente, nacida en 1939. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1933, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don O-R. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (110ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don L-G. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 2 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 2 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1878, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente copia del certificado expedido por el Registro General de Cartas de Ciudadanía argentino, a nombre del abuelo, en el que aparece como fecha

de naturalización el 25 de octubre de 1933. A mayor abundamiento, la propia interesada, en el escrito de recurso manifiesta que “mi abuelo materno tuvo que dejar España en el año 1932...” “yo no puedo justificar el exilio de mi abuelo en Argentina...” Por todo ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del recurrente, nacida en 1939. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1933, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española,

dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L-G. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (82ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don J-F. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), y de la que se deduce además la naturalización argentina de su abuelo en 1930, y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 27 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 26 de noviembre de 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 27 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1893, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o

paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización, varios años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1930. Puede colegirse, en consecuencia, que el padre del interesado, nacido en Argentina en el año 1931, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede

presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma. El mismo fundamento puede aplicarse a las discriminaciones que el solicitante cree apreciar entre su propio caso y el de otros miembros de su familia, que accedieron a la nacionalidad española en condiciones y bajo circunstancias diversas a las que él mismo pretende hacer valer por medio de su solicitud.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (83ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

- 1.- En virtud de patria potestad respecto a su hijo Don G-E. Doña E-Y. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento del menor interesado, certificado de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela, y certificado de naturalización venezolana de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 1 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en P S-J. D-C. (Venezuela) el... de... de 2003, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los hijos de españoles de origen y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Auto el 1 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción de los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ni que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud

: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1932, de padre natural de Portugal, y madre natural de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela. En primer lugar, no existe en el expediente prueba alguna de la fecha concreta de salida de España de la abuela del interesado. Únicamente queda constatado que la referida abuela adquirió nacionalidad venezolana, por naturalización, en el año 1961, de lo que se colige que cuando nació su hijo y padre del solicitante (Don R-J.) en 1963, éste siguió ya de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor. En consecuencia, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición de exilada con pérdida subsiguiente de nacionalidad española, conforme a lo anteriormente reseñado, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por razones directamente vinculadas con lo expuesto en el fundamento precedente. En el presente expediente, no ha sido posible verificar que el progenitor del solicitante, Don R-J. - nacido en Venezuela, hijo de ciudadanos venezolanos - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (84ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- En virtud de patria potestad respecto a su hijo Don Á-R. Doña E-Y. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento del

menor interesado, certificado de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela, y certificado de naturalización venezolana de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 1 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en P. El R. L. D-F. (Venezuela) el... de... de 1995, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los hijos de españoles de origen y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Auto el 1 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción de los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ni que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1932, de padre natural de Portugal, y madre natural de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela española, no puede entenderse probada la

condición de exilada de la referida abuela. En primer lugar, no existe en el expediente prueba alguna de la fecha concreta de salida de España de la abuela del interesado. Únicamente queda constatado que la referida abuela adquirió nacionalidad venezolana, por naturalización, en el año 1961, de lo que se colige que cuando nació su hijo y padre del solicitante (Don R-J.) en 1963, éste siguió ya de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor. En consecuencia, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición de exilada con pérdida subsiguiente de nacionalidad española, conforme a lo anteriormente reseñado, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por razones directamente vinculadas con lo expuesto en el fundamento precedente. En el presente expediente, no ha sido posible verificar que el progenitor del solicitante, Don R-J.- nacido en Venezuela, hijo de ciudadanos venezolanos - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (85ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (Rca. Dominicana).

HECHOS

1.- Don D-E. presenta escrito ante el Consulado de España en Santo Domingo (Rca. Dominicana) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado emitido por el Registro Civil dominicano, certificado dominicano de nacimiento de su madre (nacida dominicana, y que optó posteriormente a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), certificado español de nacimiento de su abuelo materno, y pasaporte español con el que dicho abuelo materno dejó España en el año 1938.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 8 de mayo de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S-D. (Rca. Dominicana) el 10 de marzo de 1990, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular citado se dictó Auto de 8 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, de la que resulta, además, el nacimiento de su abuelo en S-D. hijo de ciudadano español, y por tanto español de origen, en el año 1922. Por

lo que no cuestionándose en el presente expediente la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se verifica que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadano español de origen, sino también que su

abuelo, Sr. B. fue exilado, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar, el pasaporte español con visado de salida vía paso fronterizo de T. (P) el 20 de marzo de 1938, y posterior visado de embarque en puerto portugués, así como posterior certificado de registro en matrícula consular de ciudadanos españoles en la República Dominicana en agosto de 1943. No obra constancia de la fecha exacta de la pérdida de la nacionalidad española de origen del abuelo del solicitante, pero puede deducirse este hecho de forma fidedigna, al considerar que la madre del interesado, Sra. B. nacida en S-D. en el año 1962, lo hizo con nacionalidad dominicana, no fue inscrita a su nacimiento en el registro civil español, y sí en el dominicano, y no optó a su nacionalidad española de origen hasta el año 2009, en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007; en el caso de que el abuelo del interesado no hubiese perdido en algún momento su nacionalidad española de origen, y adquirido la dominicana - el convenio de doble nacionalidad entre España y la Rca. Dominicana no fue operativo hasta 1969 -, su hija, y madre del solicitante, habría seguido de origen la nacionalidad española de su propio progenitor, y jamás habría procedido, en consecuencia, la opción referenciada, sino, antes bien, la recuperación de la nacionalidad española de acuerdo con la normativa de aplicación a dicho supuesto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. M. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (86ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en México D.F. (México).

HECHOS

1.- Don J-S. presenta escrito ante el Consulado de España en México D.F. (México) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre adoptivo (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por la disposición transitoria 3ª de la Ley 18/1990), certificado español de nacimiento de su abuelo, certificado de naturalización mexicana de su abuelo, y sentencia mexicana de constitución de su adopción.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante su Resolución de 30 de julio de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en México D.F. (México), el 21 de julio de 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 30 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre adoptivo, así como la de su abuelo (padre de su padre adoptivo), nacido en España en el año 1907, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera

perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

IV.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011). Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

V.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VI. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de

la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditado que el referido abuelo perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que el abuelo del interesado abandonó España, y sólo resulta probado que en 1941 adquirió la nacionalidad mexicana por carta de naturalización, con renuncia de su nacionalidad española de origen. Se colige, por tanto, que al nacer el padre adoptivo del interesado en el año 1942, éste siguió ya de origen la nacionalidad mexicana de su propio progenitor. Pero con independencia de ello, se subraya que nunca podría considerarse acreditada la condición de exilado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Mexico.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (87ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don A-I. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Acuerdo de 30 de marzo de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina), el 24 de junio de 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 30 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en el año 1893, hijo de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español, correspondería en todo caso analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque no se cuestione la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español, no puede entenderse acreditado que el referido abuelo perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En primer lugar no consta la fecha en la que el abuelo del interesado abandonó España, y sólo resulta probado que adquirió ciudadanía argentina, por carta de naturalización, en el año 1927, fecha en la cual se habría producido la pérdida de su nacionalidad española de origen. Se colige por tanto que el padre de la parte actora, nacido en Argentina en 1945, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En todo caso, se insiste en que no queda acreditada la condición de exilado del referido abuelo, dado que ni se han

presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (88ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Doña E. presenta escrito ante el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado cubano de nacimiento de su padre, y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Auto de 24 de julio de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en La C. San J y M. (Cuba) el 8 de noviembre de 1946, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Auto el 24 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la partida de bautismo de su abuelo, de la que se deduce su nacimiento en España en 1868, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer

de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que el abuelo de la Sra. G. ya se encontraba en Cuba en el año 1913, fecha en la que se produjo el nacimiento de su hijo y padre de la solicitante en ese país, sin que se conozca tampoco si el referido abuelo llegó a perder alguna vez su nacionalidad española de origen. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (89ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

HECHOS

1.- Doña L. presenta escrito ante el Consulado de España en Tetuán (Marruecos) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1932.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 10 de agosto de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen a la nacido en T. (Marruecos) el 21 de noviembre de 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de

2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 10 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, de la que se deduce nacimiento de su abuela en España en 1932, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del

Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la

Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de la referida abuela. No existe tampoco prueba alguna de cuándo se produjo exactamente la pérdida de la nacionalidad española de origen de la abuela de la solicitante, y existen descuadres importantes en la documentación que identifica a la referida abuela, respecto a la que llegan a figurar hasta tres fechas de nacimiento diferentes (1932, en la literal española de nacimiento de su hijo y padre de la interesada; 1929, en el certificado marroquí de nacimiento del padre de la interesada; y 1926, en el certificado que aporta la interesada para probar el domicilio y el número de tarjeta de identidad marroquí que tuvo su abuela en vida). Con independencia de que estas circunstancias hacen concebir dudas fundamentadas sobre la identidad y circunstancias personales de la abuela de la interesada, se reitera que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de dicha abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir que el expediente se tramitó indebidamente por el Consulado actuante, y que la interesada solicitó acceso a la nacionalidad española por una vía diferente a la prevista por el apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez el padre del interesado a la nacionalidad española) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución. Ello habida cuenta, de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora, a pesar de las manifestaciones que la interesada realiza en tal sentido en su escrito de recurso, no quedaba referida a tal vía, sino al apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como correctamente constató el Consulado General de Tetuán - y queda probado en actuaciones - sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, y a meros efectos informativos, se estima oportuno hacer notar a la interesada que, aunque su expediente hubiera sido tramitado al amparo de lo dispuesto por el pretendido apartado primero de la norma invocada, jamás hubiera podido ser estimada

su solicitud y reconocida la opción pretendida, habida cuenta de que su padre accedió a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil (es decir, a título derivativo), sin que, por lo tanto reuniera el requisito de ser español de origen, como exige la norma invocada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (90ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña. Á-A. presenta escrito ante el Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien recuperó la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el artículo 26.1 del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo, y certificado de la llegada de su abuela a Brasil, en navío con origen en el puerto de Málaga en 1903.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante Acuerdo de 13 de julio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Brasil), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo de 13 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce nacimiento en España en 1897 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido

transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil. El único documento que en el expediente hace referencia a la salida de España del indicado abuelo deja constancia de que éste llegó a Brasil siendo niño, y mucho antes de la Guerra Civil, concretamente en el año 1906, en navío procedente de España. Así pues, con independencia de que perdiera o no más tarde su nacionalidad española de origen, hecho del que por cierto tampoco existe constancia, nunca podría accederse a la opción pretendida. Dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición de exilado conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita de la interesada a la opción pretendida

por una vía diferente a la prevista por el apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto, la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por ostentar a su vez la madre de la interesada la nacionalidad española de origen) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución.

Ello habida cuenta, de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sino al mencionado apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como correctamente constató el Registro Civil actuante - y queda probado en actuaciones - sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (91ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don E. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), y de la que se deduce además la naturalización argentina de su abuelo en 1930, y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 27 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 9 de octubre de 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 27 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1893, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que

la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización, varios años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1930. Puede colegirse, en consecuencia, que el padre del interesado, nacido en Argentina en el año 1931, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de

España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma. El mismo fundamento puede aplicarse a las discriminaciones que el solicitante cree apreciar entre su propio caso y el de otros miembros de su familia, que accedieran a la nacionalidad española en condiciones y bajo circunstancias diversas a las que él mismo pretende hacer valer por medio de su solicitud.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (107ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los que no acrediten ser nietos de abuelos de nacionalidad española que perdieran o tuvieran que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña S-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificados españoles de nacimiento de sus abuelos, certificado de naturalización argentina de su abuelo, y libro de familia con fecha del matrimonio de sus abuelos.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de abril de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 14 de diciembre de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 1 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de sus abuelos, de las que se deduce el nacimiento de éstos en España, respectivamente en los años 1912 y 1913, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación

de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la

condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliados de dichos abuelos. Ello así, puesto que existe constancia (confirmada por la declaración expresa de la interesada en su escrito de recurso) de que los abuelos de la solicitante llegaron a Argentina muchos años antes de la Guerra Civil, en concreto en 1928 y 1929.

Por lo demás, se constata igualmente la naturalización argentina del abuelo de la interesada en el año 1938 y su matrimonio con su esposa (y abuela de la interesada) en 1940, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que puede colegirse que, al nacer la madre de la recurrente en el año 1941, ésta habría adquirido ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (1ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Don E. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación:

documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado colombiano de nacimiento de su madre, certificado de nacimiento de su abuelo, y pasaporte con el que su abuelo, hijo de padres naturales de España, abandonó España en el año 1938.

2.- El Encargado del Registro Civil de Barcelona, lugar de nacimiento del interesado, mediante su Auto de 21 de junio de 2011, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en B. el 6 de agosto de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil de Barcelona se dictó Auto el 21 de junio de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal

de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por la legación española en Bo., de la que se deduce su nacimiento en Bo. (Colombia), en el año 1917, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la parte solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede considerarse probado que se produjera una pérdida de dicha nacionalidad de origen con carácter consecuente a un exilio de Guerra. En efecto, se verifica que el abuelo del interesado abandonó España, siendo menor de edad, entre el 31 de julio de 1936 (fecha de expedición del pasaporte aportado como prueba), y el 31 de agosto del mismo año (fecha en la que el mismo pasaporte es visado en el Consulado colombiano de Génova, Italia, con miras a un inmediato embarque para Colombia). Aunque ello pudiera constituir prueba de exilio, la realidad es que no se aporta prueba suplementaria alguna que permita confirmar a ciencia cierta si después de su llegada a Colombia, el abuelo del interesado llegó en alguna ocasión a perder su nacionalidad española de origen. Obra en el expediente un pasaporte español a nombre del mismo abuelo expedido en el año 2000, pero no ha sido hallada prueba alguna de que el mismo titular hubiese recuperado la nacionalidad española, por lo que, en principio, y salvo prueba en contrario, habría que presumir que el abuelo jamás perdió su condición de español y que, por lo tanto, y como correctamente ha estimado el Encargado del Registro Civil actuante, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Barcelona

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (2ª)

III.1.3.2 -Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña A., contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado español de nacimiento de su padre

(quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 del Código civil), y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 15 de abril de 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 1 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1908, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27,

29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (3ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en enero de 2010), de la que se deduce nacimiento de su abuelo en España en 1910, y naturalización argentina del mismo abuelo en 1936.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 30 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 23 de mayo de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 30 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España en el año 1910. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España del mismo. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto al abuelo de la parte interesada es que adquirió la ciudadanía argentina por naturalización en agosto de 1936, según consta en la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen el padre del solicitante (nacido en 1942) la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión,

dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez el padre del interesado a la nacionalidad española de origen en virtud de tal vía) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque el interesado hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, el ahora optante, nacido en 1976 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española "de origen" pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su "padre o madre hubiese sido originariamente español". Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen "desde su nacimiento" (del padre o madre), o bien si es suficiente

que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con

ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de

la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”. Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios

de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (4ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio, del que se deduce la opción de su padre por la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto por artículo 20 del código Civil). Ha sido incorporada igualmente al expediente literal de nacimiento del padre de la interesada, de la que se deduce su filiación, que, por lo que aquí interesa confirma el nacimiento de la abuela de la solicitante en España en 1894, así como su matrimonio en Argentina con ciudadano argentino en 1921.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 25 de febrero de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 21 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española

como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1894. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio

hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.

5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. De hecho, de la documentación obrante en el expediente se deduce que la abuela de la interesada ya se encontraba en Argentina muchos años antes de la Guerra Civil, en 1921, fecha en la que se produjo su matrimonio con ciudadano argentino, y por tanto también la pérdida de su nacionalidad española de origen. Se colige también, por tanto, que cuando nació el padre de la ahora solicitante, en 1931, éste siguió ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (5ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio, del que se deduce la opción de su padre por la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto por artículo 20 del código Civil). Ha sido incorporada igualmente al expediente literal de nacimiento del padre de la interesada, de la que se deduce su filiación, que, por lo que aquí interesa confirma el nacimiento de la abuela de la solicitante en España en 1894, así como su matrimonio en Argentina con ciudadano argentino en 1921.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 12 de mayo de 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 21 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1894. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido)

o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello

de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española, no puede considerarse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. De hecho, de la documentación obrante en el expediente se deduce que la abuela de la interesada ya se encontraba en Argentina muchos años antes de la Guerra Civil, en 1921, fecha en la que se produjo su matrimonio con ciudadano argentino, y por tanto también la pérdida de su nacionalidad española de origen. Se colige también, por tanto, que cuando nació el padre de la ahora solicitante, en 1931, éste siguió ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (6ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don A. S. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo, y certificado por el que se deja constancia de la llegada de su abuelo a Argentina en 1931.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 19 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 21 de marzo de 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1915, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola

el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. A este respecto, obra en el expediente certificado de la Dirección de Inmigración argentina, por el cual se deja constancia de la llegada del abuelo del abuelo del solicitante a ese país varios años antes del inicio de la Guerra Civil española, concretamente en 1931. Por lo demás, está igualmente constatado que el abuelo del Sr. S. adquirió la nacionalidad argentina, por naturalización en el año 1938, por lo que su hijo (y padre del solicitante), nacido en el año 1941, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría probada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (7ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don P. S. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo, y certificado por el que se deja constancia de la llegada de su abuelo a Argentina en 1931.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 19 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 9 de marzo de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1915, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. A este respecto, obra en el expediente certificado de la Dirección de Inmigración argentina, por el cual se deja constancia de la llegada del abuelo del abuelo del solicitante a ese país varios años antes del inicio de la Guerra Civil española, concretamente en 1931. Por lo demás, está igualmente constatado que el abuelo del Sr. S. adquirió la nacionalidad argentina, por naturalización en el año 1938, por lo que su hijo (y padre del solicitante), nacido en el año 1941, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría probada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España - entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (8ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don D. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,

apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en enero de 2010), de la que se deduce nacimiento de su abuelo en España en 1910, y naturalización argentina del mismo abuelo en 1936.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 30 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 23 de enero de 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 30 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;

b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España en el año 1910. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que

salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España del mismo. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto al abuelo de la parte interesada es que adquirió la ciudadanía argentina por naturalización en agosto de 1936, según consta en la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen el padre del solicitante (nacido en 1942) la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez el padre del interesado a la nacionalidad española de origen en virtud de tal vía) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque el interesado hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, el ahora optante, nacido en 1976 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad

española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si

bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiendo al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la

adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles". El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: "Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre" (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia "a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España".

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo

de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (10ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don D. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo, y certificado de naturalización argentina de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 2 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en A., B. (Argentina) el 9 de diciembre de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 2 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1909, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados

de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. A este respecto, no existe constancia documental alguna de la fecha concreta en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante. Lo único que queda acreditado es que, en julio de 1939, el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización. Puede colegirse, en consecuencia, que el padre del interesado, nacido en Argentina en el año 1948, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría probada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,

debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (11ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo, y certificado de naturalización argentina de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 28 de mayo de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 3 de septiembre de 1986, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 28 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1915, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo

hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. A este respecto, no existe constancia documental alguna de la fecha concreta en la que se produjo la salida de España del abuelo de la solicitante, si bien la interesada segura en su recurso que tal salida se produjo después del 18 de julio de 1936. Lo único que queda acreditado es que, en agosto de 1936, el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización. Puede colegirse, en consecuencia, que la madre del interesado, nacida en Argentina en el año 1944, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría probada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (12ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don J. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo, y certificado de naturalización argentina de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 28 de mayo de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 27 de abril de 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 28 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1915, de padres naturales de

España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. A este respecto, no existe constancia

documental alguna de la fecha concreta en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante, si bien el interesado asegura en su recurso que tal salida se produjo después del 18 de julio de 1936. Lo único que queda acreditado es que, en agosto de 1936, el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización. Puede colegirse, en consecuencia, que la madre del interesado, nacida en Argentina en el año 1944, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría probada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (27ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en enero de 2009), y certificado español de nacimiento de su abuela, en España.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 16 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en S., M., B. (Argentina) el 25 de noviembre de 1957, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 16 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce el nacimiento de ésta en España en el año 1907, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación

de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española, no puede entenderse acreditada la condición de exiliada de dicha abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de la referida abuela. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto a la abuela de la parte interesada es que contrajo matrimonio con súbdito argentino en 1930, y que dio a luz al menos a una hija (la madre de la solicitante) en Argentina, en 1935, según consta en la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre de la solicitante la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesada a la nacionalidad española de origen en virtud de tal vía) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque la interesada hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el

progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2000, la ahora optante, nacida en 1957 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las

dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad

originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (28ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña C. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en enero de 2009), y certificado español de nacimiento de su abuela, en España.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 16 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en R., M., B. (Argentina) el 7 de diciembre de 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 16 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce el nacimiento de ésta en España en el año 1907, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente

en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,

bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española, no puede entenderse acreditada la condición de exiliada de dicha abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de la referida abuela. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto a la abuela de la parte interesada es que contrajo matrimonio con súbdito argentino en 1930, y que dio a luz al menos a una hija (la madre de la solicitante) en Argentina, en 1935, según consta en la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre de la solicitante la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesada a la nacionalidad española de origen en virtud de tal vía) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque la interesada hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la

nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, la ahora optante, nacida en 1969 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno

de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de

origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos –, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (29ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en enero de 2009), y certificado español de nacimiento de su abuela, en España.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 5 de marzo de 1954, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 1 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, de la que se deduce el nacimiento de ésta en España en el año 1907, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que

la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto

no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de dicha abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de la referida abuela. Por lo demás, lo único que queda constatado respecto a la abuela de la parte interesada es que contrajo matrimonio con súbdito argentino en 1930, y que dio a luz al menos a una hija (la madre de la solicitante) en Argentina, en 1935, según consta en la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre de la solicitante la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesada a la nacionalidad española de origen en virtud de tal vía) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque la interesada hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, la ahora optante, nacida en 1954 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que este último, nieto de la abuela española, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española "de origen" pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su "padre o madre hubiese sido originariamente español". Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen "desde su nacimiento" (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales

cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de

la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la

nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (30ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Don L. G. presenta escrito ante el Consulado de España en Cartagena de Indias (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición

adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado literal de nacimiento del interesado, certificado de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela y certificado de matrimonio de sus abuelos expedido por el Juez Municipal y Encargado del Registro Civil de Manresa (Barcelona).

2.- Completada la tramitación del expediente, la Encargada del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia), mediante su Acuerdo de 3 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen al nacido en C. (Colombia) el 15 de agosto de 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Cartagena de Indias (Colombia), se dictó Acuerdo el 3 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud

: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1918, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de española, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela del solicitante contrajo matrimonio en España con ciudadano panameño el día 26 de septiembre de 1936, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, se produjo su salida de España, con llegada a Colombia, vía Ca. (Venezuela), el siguiente día 30 de octubre. Por otra parte, su hijo y padre del solicitante, nació en el año 1943, ya después de que la abuela del Sr. G. adquiriese la nacionalidad panameña por matrimonio, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquel siguió ya la nacionalidad extranjera de su padre. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la referida abuela había perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (32ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

HECHOS

1.-, Doña C. presenta escrito ante el Consulado de España en Tetuán (Marruecos) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 22 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en T. (Marruecos) el 6 de septiembre de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 22 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

V.- En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se infiere el nacimiento de éste en Ceuta, en 1918, sin quedar determinada su filiación. En consecuencia, no dudándose de la condición

de la interesada como nieta de abuelo español, correspondería analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija (y madre de la solicitante), siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español, no podría considerarse probado que el referido abuelo hubiese sufrido exilio como consecuencia de la Guerra Civil,

ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Tetuán

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (33ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelos de nacionalidad española que perdieran o tuvieran que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don S. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, y certificado español de nacimiento de sus abuelos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 5 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 20 de noviembre de 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 5 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como las de sus abuelos, de las que se deduce su nacimiento en España en el año 1887, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelos nacidos en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que los abuelos hubiesen

perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ellos no hayan podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir, y respecto a las abuelas, el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad

familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuelos españoles, no puede entenderse acreditada la condición de exiliados de los referidos abuelos, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportado documento alguno que constituya prueba de la salida de España de los mismos, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni ésta puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Por otra parte, y teniendo en cuenta que el abuelo paterno del interesado aparece como naturalizado argentino en algunos de los documentos integrantes del expediente, tampoco es posible determinar cuándo perdió exactamente dicho abuelo su nacionalidad española de origen, dato absolutamente esencial para verificar si esta pérdida se produjo antes o después de su salida de España y su subsiguiente llegada a Argentina.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (34ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), y del que se deduce además la naturalización argentina de su abuelo en 1929.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 18 de enero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 29 de octubre de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 18 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España en 1908. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo nacido en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)

Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo nacido en España, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha en la que se produjo la salida de España del abuelo de la solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización, varios años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1929. Puede colegirse, en consecuencia, que la madre de la interesada, nacida en Argentina en el año 1939, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud por vía diferente a la prevista por el apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesado a la nacionalidad española) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución. Ello habida cuenta, de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sino al apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, y a meros efectos informativos, se estima oportuno hacer notar a la interesada que, aunque su expediente hubiera sido tramitado al amparo de lo dispuesto por el pretendido apartado primero de la norma invocada, jamás hubiera podido ser estimada su solicitud y reconocida la opción pretendida, habida cuenta de que su madre accedió a la

nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1 b) del Código Civil (es decir, a título derivativo), sin que, por lo tanto reuniera el requisito de ser española de origen, como exige la norma invocada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (35ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don Ó. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuelo, y certificado de naturalización argentina de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del

Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Argentina) el 10 de julio de 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 20 de enero de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1886, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo

transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización, varios años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1927. Puede colegirse, en consecuencia, que el padre del interesado, nacido en Argentina en el año 1937, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (36ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre, del que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España, en 1896, y su posterior naturalización argentina en 1927.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 15 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 29 de agosto de 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 15 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España en el año 1896. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)

Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no obra en el expediente documento alguno que constituya prueba de la salida de España del referido abuelo. Y, a más abundamiento, se constata además, respecto al abuelo de la parte interesada, que éste se encontraba ya en Argentina muchos años antes de la Guerra, y que adquirió la nacionalidad argentina, por naturalización, en el año 1927, según la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre del solicitante (nacida en 1946) la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesada a la nacionalidad española de origen en virtud de la misma Ley 52/2007) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque la interesada hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de los dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª

de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, la ahora optante, nacida en 1971 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que esta última, nieta del abuelo español, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía

para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los

interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la

Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en

el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (37ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña V. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre, del que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España, en 1896, y su posterior naturalización argentina en 1927.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 15 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 29 de octubre de 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 15 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España en el año 1896. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que

la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no obra en el expediente documento alguno que constituya prueba de la salida de España del referido abuelo. Y, a más abundamiento, se constata además, respecto al abuelo de la parte interesada, que éste se encontraba ya en Argentina muchos años antes de la Guerra, y que adquirió la nacionalidad argentina, por naturalización, en el año 1927, según la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre del solicitante (nacida en 1946) la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio

de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesada a la nacionalidad española de origen en virtud de la misma Ley 52/2007) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque la interesada hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, la ahora optante, nacida en 1971 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que esta última, nieta del abuelo español, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de

coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo

privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera

perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española". En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que "La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España". Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre "que originariamente hubiera sido español", conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª "beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles": beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas "cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a "b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles", frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (38ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña L. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional

séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), y de la que se deduce además la naturalización argentina de su abuelo en 1929, y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 29 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en L. (Argentina) el 21 de agosto de 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 29 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1906, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización, varios años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1929. Puede colegirse, en consecuencia, que el padre de la interesada, nacido en Argentina en el año 1957, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (39ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don R. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b)

del Código Civil), y de la que se deduce además la naturalización argentina de su abuelo en 1929, y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 29 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en L. (Argentina) el 24 de diciembre de 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 29 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1906, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha en la que se produjo la salida de España del abuelo del solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización, varios años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1929. Puede colegirse, en consecuencia, que el padre del interesado, nacido en Argentina en el año 1957, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (40ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

HECHOS

1.-Don O. E. presenta escrito ante el Consulado de España en Tetuán (Marruecos) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio y otros documentos, mediante los que considera probada su descendencia directa de Doña J. H. (quien sería, a su entender, causante del derecho pretendido).

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 23 de marzo de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en T. (Marruecos) el 24 de abril de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 23 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y el certificado de defunción de su padre, así como la literal de nacimiento de Doña J. H., nacida en 1929, quien adquirió la nacionalidad española durante su minoría de edad al serle concedida a su propio padre Don H. H. en 1947. De esta

documentación es imposible comprobar a ciencia cierta la filiación que pretende hacer valer la parte actora, a efectos de verificar su parentesco con Doña J. H. En efecto, en el certificado de defunción del presunto padre del solicitante (no ha sido aportado el de nacimiento), el referido padre (Don E. E.), es reflejado, por lo que aquí interesa, como hijo de Doña J. M. (y no de J. H., nombre de la presunta causante del derecho al que aspira el recurrente). Por otro lado, el certificado de nacimiento del interesado indica su filiación paterna respecto a Don E. M. (quien eligió como apellido E. y nació en 1955 en B., Marruecos), mientras que el certificado de defunción del supuesto padre al que antes se aludía, menciona a una persona nacida en 1953). No queda, por tanto, correctamente acreditada la filiación que pretende hacer valer el solicitante.

V.- En cualquier caso, y aunque esta filiación estuviese debidamente definida, correspondería analizar también si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española al hijo del que nazca el solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de

exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española (ya se ha adelantado que no existe tal acreditación), no podría considerarse probado que la referida abuela hubiese sufrido exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por otro lado, de la documentación obrante en el expediente no se colige una pérdida de nacionalidad posterior al exilio, sino que, antes bien, se deduce que la persona en la que se pretende basar el derecho nació en T. (Marruecos), y adquirió nacionalidad española en 1947, por opción de su propio progenitor, sin que obren en el expediente otras pruebas fidedignas de pérdida posterior de dicha nacionalidad. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Tetuán

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (41ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Don J. O. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado venezolano de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuelo, carta de naturalización cubana de su abuelo, cartilla militar y cartera de identidad de emigrante de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 7 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela) el 4 de julio de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 7 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, de la que se deduce su nacimiento en España en 1898, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español,

únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que el abuelo del Sr. O. ya se encontraba

en Cuba - no en Venezuela, como por error recogió el acto impugnado - en el año 1925, hecho del que dan constancia su cartilla militar y, sobre todo, su cartera de identidad de emigrante, y que la propia parte actora confirma de manera expresa en las alegaciones realizadas en su escrito de recurso. Del mismo modo, queda constatado que el abuelo del interesado adquirió la nacionalidad cubana, por carta de naturalización, en el año 1937, hecho del que se deduce que el padre del ahora solicitante, nacido en Venezuela en 1946, adquirió ya de origen la nacionalidad extranjera de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Sentado lo anterior, se entiende que el error cometido al referenciar el primer destino del abuelo del interesado tras su salida de España (Venezuela en lugar de Cuba), no enerva la virtualidad legal del acto impugnado, habida cuenta de que el fundamento objetivo de la denegación lo constituye el hecho de que el referido abuelo dejara España muchos años antes de la Guerra Civil (por lo que no puede apreciarse la existencia de exilio debido al conflicto bélico), sin que, a estos efectos, el hecho de que el destino de su emigración fuera uno u otro país adquiera más trascendencia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (42ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña F. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre, del que se deduce además el nacimiento de su abuelo en España, en 1896, y su posterior naturalización argentina en 1927.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 15 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Argentina) el 30 de enero de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Resolución el 15 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento

de su abuelo en España en el año 1896. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede

entenderse acreditada la condición de exilado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no obra en el expediente documento alguno que constituya prueba de la salida de España del referido abuelo. Y, a más abundamiento, se constata además, respecto al abuelo de la parte interesada, que éste se encontraba ya en Argentina muchos años antes de la Guerra, y que adquirió la nacionalidad argentina, por naturalización, en el año 1927, según la documentación integrante del expediente, adquiriendo de origen la madre del solicitante (nacida en 1946) la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud tácita acerca del acceso a la nacionalidad española por la vía prevista por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por haber accedido a su vez la madre de la interesada a la nacionalidad española de origen en virtud de la misma Ley 52/2007) no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

IX.- No obstante lo anterior, habida cuenta del hecho de que el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 está ya finalizado, y a mero título informativo, procede indicar que, aunque la interesada hubiera presentado solicitud en plazo al amparo de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, nunca habría podido ser resuelta en sentido positivo tal solicitud, puesto que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española en 2009, por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/200, la ahora optante, nacida en 1971 había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que esta última, nieta del abuelo español, pueda acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima. A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que se habrá de formalizar en el plazo

perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. Y en el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

XI.- El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año

previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

XIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIV.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta,

en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

XV.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XVI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XVII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XVIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta, como antes se avanzara, que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (43ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

HECHOS

1.- Doña A. R. presenta escrito ante el Consulado de España en Tetuán (Marruecos) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 22 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la Sra. R., en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 22 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

V.- En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se infiere el nacimiento de éste en Ceuta, en 1918, sin quedar determinada su filiación. En consecuencia, no dudándose de la condición de la interesada como nieta de abuelo español, correspondería analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija (y madre de la solicitante), siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras

entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español, no podría considerarse probado que el referido abuelo hubiese sufrido exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Tetuán.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (44ª)

III.1.3.2.- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

HECHOS

- 1.- Doña presenta escrito ante el Consulado de España en Tetuán (Marruecos) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 22 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en T. (Marruecos) el 22 de junio de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 22 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

V.- En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se infiere el nacimiento de éste en C., en 1918, sin quedar determinada su filiación. En consecuencia, no dudándose de la condición de la interesada como nieta de abuelo español, correspondería analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija (y madre de la solicitante), siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de

opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español, no podría considerarse probado que el referido abuelo hubiese sufrido exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Tetuán

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (47ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña V-S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 22 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 22 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1924 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución)

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya

producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada en su escrito de recurso manifiesta "...mi abuela no es considerada como exiliada en los términos previstos por la instrucción de la D.G.R.N. de 04/11/2008, junto a sus padres tuvieron que abandonar su tierra natal (España) por no tener trabajo..." sin precisar en qué fecha la familia de su abuela emigró de España, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- Finalmente en cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español" sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el

recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña V-S. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

III.3.- Adquisición nacionalidad española por Opción

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad-art 20-1a cc

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (2ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que el padre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2007, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Granollers (Barcelona) el 25 de mayo de 2010, Don A., nacido en Gambia el 10 de abril de 1991, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sometido a la patria potestad de un español. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento del interesado, registrado en el año 2009; certificación literal de nacimiento del padre, Don M., en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 17 de septiembre de 2007; certificado de empadronamiento; fotocopias del NIE del interesado y DNI del padre.

2.- Una vez levantada el acta de opción ante el Encargado del Registro Civil de Granollers el mismo día, se trasladaron las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención al solicitante en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 13 de julio de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado el padre al interesado en modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, este era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por el interesado, nacido en Gambia el 10 de abril de 1991, su inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre, que éste adquirió por residencia en el año 2007. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 13 de julio de 2012 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación paterna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de

modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de español, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna del interesado. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Don M., no aparece que éste declarase al ahora interesado, pese a que era menor de edad, señalando en la solicitud dirigida al Registro Civil de Blanes (Girona) de fecha 6 de julio de 2004, tener cuatro hijos sujetos a su patria potestad, no apareciendo el ahora optante entre los nombres indicados por el Sr. M., constando dicho documento unido al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada, constando que el nacimiento se registró 18 años después de haberse producido y no encontrándose la certificación aportada debidamente legalizada. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (3ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que el padre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2007, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Arrecife el 12 de julio de 2010, Don M., nacido en Guinea Bissau el 5 de octubre de 1990, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sometido a la patria potestad de un español. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento local del interesado, registrado 18 años después de haberse producido el nacimiento; certificación literal de nacimiento del padre, Don D. G., en la que consta la adquisición de la nacionalidad española

por residencia el 26 de octubre de 2007; certificado de matrimonio de los padres; certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI del padre, NIE y pasaporte del interesado.

2.- Una vez trasladadas las actuaciones al Registro Civil Central, el Encargado, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención al solicitante en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 30 de junio de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado el padre al interesado en modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, este era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción y alegando que su padre no le mencionó debido a un error.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por el interesado, nacido en Guinea Bissau el 5 de octubre de 1990, su inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre, que éste adquirió por residencia en el año 2007. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 30 de junio de 2012 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación paterna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de español, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central,

cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna del interesado. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Don D. G., no aparece que éste declarase al ahora interesado, pese a que era menor de edad, señalando en la solicitud dirigida al Registro Civil de Arrecife de fecha 4 de mayo de 2005, tener cuatro hijos sujetos a su patria potestad, no apareciendo el ahora optante entre los nombres indicados por el Sr. G., constando dicho documento unido al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada, constando que el nacimiento se registró 18 años después de haberse producido. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (73ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que el padre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2005, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Carlet (Valencia) el 25 de febrero de 2011, Don M. nacido en Senegal el 10 de marzo de 1992, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sometido a la patria potestad de un español. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado en extracto de la inscripción de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento del padre, Don G. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 15 de julio de 2005; certificado de empadronamiento; y fotocopia del pasaporte del interesado.

2.- Con fecha 5 de abril de 2011 se levantó acta de opción a la nacionalidad española y se trasladaron las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro Civil Central, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención al solicitante en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 25 de septiembre de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado el padre al interesado en

modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, este era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción y alegando que su padre no le mencionó debido a un error.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por el interesado, nacido en Senegal el 10 de marzo de 1992, su inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre, que éste adquirió por residencia en el año 2005. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 25 de septiembre de 2012 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación paterna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" (art. 85, I, RRC).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de español, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna del interesado. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Don G. no aparece que éste declarase al ahora interesado, pese a que era menor de edad, señalando en la solicitud dirigida al Registro Civil de Carlet de fecha 2 de agosto de 2002, tener dos hijos sujetos a su patria potestad, no apareciendo el ahora optante entre los nombres indicados por el Sr. S. constando dicho documento unido al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada, por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado de Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (117ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que el padre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2003, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Alcobendas (Madrid) el 16 de septiembre de 2010, Don E. nacido en la República Dominicana el 15 de Octubre de 1990 solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción, por haber estado sometido a la patria potestad de un español. Adjuntaba la siguiente documentación: acta de nacimiento inextenso, registrado en 1993; y certificación literal de nacimiento de su padre, Don V. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española el 24 de octubre de 2003.

2.- El Encargado del Registro Civil de Alcobendas levantó acta de opción a la nacionalidad española el mismo día y remitió las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro Civil Central, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención al solicitante en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 12 de julio de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado el padre al interesado en modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, este era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por el promotor, nacido en la República Dominicana en 1990, que se proceda a su inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre, que adquirió por residencia en el año 2003. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 12 de julio de 2012 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación paterna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" (art. 85, I, RRC).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de español, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna del interesado. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Don V. no aparece que éste declarase al ahora interesado, pese a que era menor de edad, señalando en la solicitud dirigida al Registro Civil de Alcobendas de fecha 10 de julio de 2001, no tener hijos sujetos a su patria potestad, constando dicho documento unido al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada, constando que el nacimiento se registró 3 años después de haberse producido. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (146ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que el padre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2002, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque las certificaciones acompañadas, por falta de garantías, no dan fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud de los entablados por el promotor contra autos dictados por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escritos presentados ante el Registro Civil de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) el 30 de junio de 2009, Don S. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para sus hijos A. y A. nacidos ambos en Guinea el... de... de 1997, por ser hijos de ciudadano español y haber estado sometidos a su patria potestad. Adjuntaba la siguiente documentación: sentencias números 1445 y 1446 de fecha 16 de marzo de 2009, haciendo las veces de las actas de nacimiento de los interesados; certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 21 de mayo de 2002; sentencia número 2738 de 27 de abril de 2009, supletoria del acta de nacimiento de la madre de los interesados, Doña H. poder especial de la madre, para la adquisición de la nacionalidad española de los interesados; certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI del promotor, de los NIE y pasaportes de los interesados.

2.- Por auto de fecha 5 de agosto de 2009, el Encargado del Registro Civil de La Laguna dispone la autorización al promotor para solicitar la opción a la nacionalidad española de los menores interesados. El 15 de octubre del mismo año se levantan actas de opción a la nacionalidad española y, posteriormente, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado, tras obtener una copia del expediente de inscripción de matrimonio del padre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención a los interesados, dictó autos el 22 de junio de 2012 denegando las solicitudes de inscripción de nacimiento y los asientos registrales de opción a la nacionalidad española por considerar que los certificados locales de nacimiento aportados no reunían las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley de Registro Civil y 85 de su Reglamento, a la vista de que, el que decía ser su padre no hizo mención de los interesados durante la tramitación del expediente de inscripción de matrimonio civil, lo que supondría una contradicción. Todo ello sin perjuicio de lo que pueda derivarse del correspondiente procedimiento declarativo sobre filiación y de que se pueda solicitar la nacionalidad española por vía de residencia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

3.- Notificadas las resoluciones, el promotor presentó recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando sus solicitudes y alegando que no mencionó a sus hijos porque habían nacido fuera de España.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, este interesa la desestimación de los recursos, y el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en las decisiones adoptadas y remitió los expedientes a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución de los recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por el promotor, la inscripción del nacimiento previa opción a la nacionalidad española de sus hijos A. y A. nacidos ambos en Guinea el... de... de 1997, alegando la nacionalidad española de su padre que adquirió por residencia en el año 2002. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdos de 22 de junio 2012 denegando las solicitudes por entender que no estaba acreditada la filiación paterna. Dichos acuerdos constituyen el objeto del presente recurso. Dada la identidad de objeto y las relaciones entre los interesados, procede la acumulación y la resolución conjunta (art. 347 del Reglamento del Registro Civil).

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" (art. 85, I, RRC).

IV.- Antes de que pudiesen ser estimadas las solicitudes de inscripción de nacimiento de los hijos del recurrente, habría sido necesario que hubiesen prosperado las opciones ejercitadas basadas en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que les habría atribuido la condición de españoles, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna de los interesados. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de inscripción de matrimonio incoado por D. S. no aparece que éste declarase a los interesados, pese a que eran menores de edad, constanding en la audiencia reservada que se le práctica, que manifiesta que de su matrimonio con otra persona distinta de la madre los menores interesados ha tenido dos hijos y que tiene una hija de otra relación, sin hacer ninguna referencia a los interesados, obrando dicho documento en el expediente.

V.- En esta situación no puede prosperar el recurso, como se ha dicho, por la falta de garantías de las certificaciones locales de nacimiento, que se inscribieron 12 años después de haberse producido los mismos, que generan dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que los optantes a la nacionalidad española hayan estado sujetos a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (28ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española. Art. 20.1a) CC.

Procede la inscripción en el Registro Civil español de la nacida en Bolivia en 1991 que ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1a) CC porque está suficientemente acreditada su filiación española.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2009 Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia), Don J-A. de nacionalidad española y con domicilio en C. (Bolivia), solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, previo ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española, de su hija, todavía menor de edad, M. en virtud del artículo 20.1a) del Código civil. Aportaba la siguiente documentación: inscripción local de nacimiento de M. nacida el... de... de 1991 e inscrita inicialmente solo con filiación materna con marginal de reconocimiento paterno realizada el 20 de agosto de 1995.

2.- El 24 de febrero de 2010 la propia interesada, ya mayor de edad, suscribió el acta de opción correspondiente. Al expediente se incorporó su cédula de identidad boliviana y el pasaporte español, libro de familia e inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de J-A. con marginal de opción a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y marginal de matrimonio celebrado el 25 de agosto de 1995 con M-C.

3.- La encargada del registro dictó auto el 19 de agosto de 2010 denegando la pretensión por no considerar acreditada la relación de filiación de la optante respecto del ciudadano español.

4.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se cumplen todos los requisitos para el ejercicio del derecho de opción y que el reconocimiento paterno se realizó conforme a la legislación boliviana.

5.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo, 28-7ª de noviembre y 4-6ª de diciembre de 2008; 25-10ª de febrero y 9-2ª de marzo de 2009.

II.- Se ha intentado la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, de la hija nacida en Bolivia el... de... de 1991 de un ciudadano español a quien le fue declarada dicha nacionalidad el 5 de marzo

de 2009 en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. La encargada del registro denegó la pretensión por no considerar acreditada la relación de filiación respecto del ciudadano español basándose en que el reconocimiento paterno se realizó cinco años después del nacimiento.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23 LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85 RRC).

IV.- La denegación se ha basado en este caso en la sospecha, por parte de la encargada del registro, de que el ciudadano español no es el padre biológico de la interesada pero del examen del contenido del expediente no se desprenden evidencias que permitan dudar de la legalidad y autenticidad de la documentación boliviana acompañada, de la que resulta que la inscripción de nacimiento se extendió el 6 de junio de 1992 solo con filiación materna y que en 1995 se produjo el reconocimiento paterno, de acuerdo con los requerimientos legales de las instituciones bolivianas, por parte del ciudadano a quien en 2009 le ha sido reconocida la nacionalidad española, completándose en aquel momento la inscripción de nacimiento inicial con los datos adicionales necesarios. La existencia de simples dudas o sospechas de que el reconocimiento realizado en 1995 no responde a la verdad es cuestión que escapa a la calificación del encargado, que solo puede denegar la inscripción cuando de las manifestaciones solemnes de los interesados se deduce, sin lugar a dudas, la falta de veracidad del reconocimiento, lo que no consta que haya sucedido en este caso, de modo que debe considerarse acreditada la filiación de la interesada respecto del ciudadano español.

V.- Por otro lado, han quedado acreditadas las condiciones necesarias para optar a la nacionalidad española al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Código civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.
- 2.- Proceder a la práctica de la inscripción de nacimiento de la interesada con marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia):

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (92ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando la madre adquiere la nacionalidad española por opción, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Tetuán.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Tetuán el 30 de septiembre de 2008, el ciudadano marroquí Don Y. nacido en Marruecos el 5 de abril de 1989, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo de española y haber estado bajo su patria potestad, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba, entre otra, la siguiente documentación: certificaciones literales de nacimiento del interesado y de su madre, Doña N. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por opción el 16 de marzo de 2008.

2.- El 23 de julio de 2009 el Encargado del Registro Civil Consular dictó auto denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que el interesado nunca estuvo bajo la patria potestad de un español, pues en la fecha de adquisición de la nacionalidad española de su madre, él contaba con 18 años de edad cumplidos, no concurriendo los requisitos que establece el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y solicitando subsidiariamente la adquisición de la nacionalidad española por residencia en virtud del artículo 22.2.f) del Código Civil.

4.- Una vez notificado el Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso por entender que la resolución impugnada era conforme a Derecho, el Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el auto y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- El interesado, nacido en Marruecos el 5 de abril de 1989, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su madre, que adquirió por opción, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 16 de marzo de 2008. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por considerar que el interesado no había estado sujeto en ningún momento a la patria potestad de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.

III.- En primer lugar, en cuanto a la alegación que hace el interesado en su escrito de recurso, en la que solicita acogerse al artículo 22.2.f) del Código Civil, se observa que el promotor modifica en el recurso la causa petendi respecto de la inicial y la resolución de la cuestión basada en el artículo 22 del Código Civil requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Por tanto, dado que el acuerdo emitido se refiere a la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española por opción propuesta en la solicitud inicial del interesado, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la opción a la nacionalidad en base al artículo 20 del Código Civil.

IV.- Entrando en el fondo del asunto, no hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina, que la inscripción en el Registro Civil es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española, conforme resulta espacialmente de lo dispuesto en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo. Este precepto, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito *sine qua non* de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el artículo 23 del Código civil, que subordina “la validez de la adquisición de la nacionalidad española” por opción, carta de naturaleza y residencia, entre otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español. En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.

V.- Siendo el caso de la madre del interesado una adquisición por opción, sólo se podría entender que la eficacia de la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la voluntad de optar o a la de formalización del juramento o promesa, por ser éste el momento en el que el adquirente ha agotado la actividad fundamental a él exigida, como ha sostenido parte de nuestra doctrina científica y también algunos antecedentes de la doctrina oficial de este Centro Directivo (retroactividad que este mismo Centro ha negado que pueda operar *in peius*, esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado: cfr. resolución de 14-2ª de junio de 2005), y criterio incontrovertido para los supuestos de opción y recuperación.

VI.- Ciertamente, el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, para los supuestos de declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de quién es el funcionario competente para recibir y documentar en acta tales declaraciones, añade que “se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento”. Pero este precepto no puede entenderse aplicable de forma universal para todos los supuestos de adquisiciones sobrevenidas o derivativas de la nacionalidad española, sino en relación con aquellas en que no medie una “concesión” por parte de la autoridad, esto es, en que la voluntad del interesado “declarada” en la forma solemne prevista por la legislación del Registro Civil constituye la verdadera causa jurídica de la adquisición del *status* de nacional español. Este planteamiento nos lleva a considerar como incluido en el ámbito del párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, sin esfuerzo interpretativo alguno, los supuestos de las declaraciones de opción, recuperación y conservación, como es el supuesto de referencia.

VII.- Dado que el interesado cumple los 18 años el 5 de abril de 2007, y que, por tanto, en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el 16 de marzo de 2008, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, hay que concluir que el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto, con independencia de las razones técnicas u organizativas que hayan podido llevar al retraso en la tramitación del expediente de su progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (95ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que el padre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Zaragoza el 5 de septiembre de 2011, Don B-A. y Doña H. solicitaban la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hija menor de edad, A. nacida en Gambia el ... de ... de 1998, por haber estado sometida a la patria potestad de un español. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la interesada, registrado en 2010; certificación literal de nacimiento del padre, Don B-A. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 9 de junio de 2009; certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI del promotor y NIE de la promotora.

2.- Con fecha 19 de septiembre de 2011, el Encargado del Registro Civil de Zaragoza dicta auto por el que concede autorización judicial a los promotores para que puedan solicitar la nacionalidad española por opción para su hija. El 29 de septiembre de 2011 se levantó el acta de opción a la nacionalidad española ante el Encargado del Registro Civil de Zaragoza y se trasladaron las actuaciones al Registro Civil de Central. El Encargado, tras obtener una copia del expediente de inscripción de matrimonio de los promotores, para comprobar si durante la tramitación hizo mención a la solicitante en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 19 de diciembre de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado a la interesada en modo alguno durante su expediente de inscripción de matrimonio, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, esta era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando que no mencionó a la interesada en su expediente de inscripción de matrimonio por error.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las

Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por los promotores, la inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española de su hija, nacida en Gambia el... de... de 1998, alegando la nacionalidad española de su padre, que éste adquirió por residencia en el año 2009. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 19 de diciembre de 2012 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación paterna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de española, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna de la interesada. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de inscripción de matrimonio incoado por Don B-A. no aparece que éste declarase a la ahora interesada, pese a que era menor de edad, mencionando tener seis hijos sometidos a su patria potestad en las comparecencias de los promotores ante el Encargado del Registro Civil de Zaragoza de fecha 13 de abril de 2012, no correspondiendo los nombres dados con el de la ahora optante. Ambos documentos constan unidos al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada, ya que se procedió al registro del nacimiento 12 años después de haberse producido el mismo. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

III.3.2.- Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen-art 20-1b cc

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (21ª)

III.3.2.- Opción a la nacionalidad española. Art.20.1b) CC.

No es posible inscribir a la nacida en Cuba en 1962 que ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1.b) del Código civil, redacción dada por Ley 36/2002, porque no está acreditada suficientemente la filiación española de la solicitante.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido por el Registro Civil de Arona (Santa Cruz de Tenerife) el 13 de mayo de 2010, la ciudadana cubana, Doña J-M. nacida en Cuba el 14 de octubre de 1962, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hija de español de origen nacido en España. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación de nacimiento de la interesada, en la que aparece su padre como J-C. nacido en S-S. (Cuba); acta de nacimiento española de Don J. en la que consta como nacido en España en 1923 y asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 6 de mayo de 1998; certificado de correspondencia de nombres expedido por el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces; certificado de matrimonio de los padres de la interesada, en el que aparece el padre como J. nacido en S-S. certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI de Don J. y NIE de la promotora.

2.- El mismo día, se levanta el acta de opción a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.2.b) del Código Civil. Posteriormente, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central para la resolución del expediente. El Encargado del Registro Civil Central, a la vista de las discrepancias observadas en la documentación aportada, relativas al segundo apellido del padre de la interesada y su lugar de nacimiento, requiere a la promotora para que aporte su certificación literal de nacimiento subsanada, aportándose dicha documentación el 26 de marzo de 2012.

3.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, en el que indica que existen indicios de la comisión de un delito de falsedad documental en relación con la certificación literal de nacimiento aportada en trámite de recurso por la promotora, interesa testimonio de las actuaciones para su remisión a la Fiscalía Provincial de Madrid, y el Encargado del Registro Civil Central, dictó auto el 19 de octubre de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por entender que existen dudas racionales de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española, por aplicación del artículo 23 de la Ley del Registro Civil, ya que se aporta como título unos certificados de nacimiento expedidos por Registro extranjero, en los que existen indicios de haber sido falsificados, al menos en lo que se refiere a la legalización de los mismos, procediendo, en consecuencia, denegar la inscripción de nacimiento solicitada.

4.- Notificada la resolución, la solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando de nuevo su solicitud.

5.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 del Código civil; 15, 16y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 4-1ª y 21-3ª de enero y 8-2ª de febrero y 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 15-1ª de noviembre de 2005; 17-4ª de enero, 30-5ª de junio de 2006; y 21-5ª de mayo y 29-1ª de junio de 2007; 11-3ª de abril, 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre y 10-4ª de Diciembre de 2008; 19-6ª de febrero y 3-10ª de Marzo de 2009; 16-2ª de Febrero de 2010, 6-2ª de Abril de 2010.

II.- Pueden optar por la nacionalidad española según el artículo 20.1, b) CC., aquellos cuyo padre o madre hubiere sido originariamente español y nacido en España. En el presente caso, la interesada alega que su padre nació en C. en 1923. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 19 de octubre de 2012 denegando la opción ejercitada. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, L.R.C.) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, R.R.C.).

IV.- La ahora recurrente pretende inscribir en el Registro Civil español por medio de una certificación cubana, previa opción a la nacionalidad, su nacimiento ocurrido en Cuba en 1962. Sin embargo, de la documentación obrante en el expediente, se observa, por un lado, que el padre de la interesada aparece en su certificación literal de nacimiento inicialmente aportada y en el certificado de matrimonio de los padres, como J. nacido en S-S. (Cuba) y en su certificación de nacimiento española como J. y nacido en C. Además, en cuanto a la certificación literal de nacimiento subsanada que aporta la promotora en base al requerimiento del Registro Civil Central, por las anomalías observadas en el certificado cubano aportado inicialmente, se libró comunicación a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de que certificaran la autenticidad de las firmas de los funcionarios que constan, remitiendo Oficio, donde se indica que en la copia de los documentos aportados se aprecian indicios suficientes de haber sido falsificados, al menos en lo que se refiere a la legalización, que aconsejan el envío de los originales a la Brigada Provincial de la Policía Científica de Madrid, y a su vez, el Ministerio Fiscal, como se ha señalado anteriormente, interesa testimonio de las actuaciones para su remisión a la Fiscalía Provincial de Madrid, al existir dudas razonables de la posible comisión de un delito de falsedad documental. Por lo que no ha quedado suficientemente acreditado la filiación española de la solicitante.

V.- En esta situación, y sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en un expediente de inscripción fuera de plazo a la vista de las pruebas que en él se puedan presentar, hay que concluir que las certificaciones cubanas acompañadas no reúnen las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento para dar fe de la filiación paterna alegada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

III.5.- Conservación/perdida/renuncia a la nacionalidad

III.5.1.-Conservación/perdida/renuncia a la nacionalidad española

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (139ª)

III.5.1.- Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Río de Janeiro (Brasil).

HECHOS

1.- Mediante escrito del Ministerio Fiscal de fecha 19 de junio de 2012, se pone en conocimiento del Encargado del Registro Civil Consular de Río de Janeiro que se ha advertido que no consta anotación marginal de conservación de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la interesada, Doña M. nacida el 19 de agosto de 1990 en Brasil, por lo que conforme al artículo 24.3 del Código Civil, según redacción de la Ley 36/2002, se habría producido la pérdida de la nacionalidad española.

2.- El mismo día, el Encargado del Registro Civil Consular dicta providencia de inicio del expediente para declarar la pérdida de la nacionalidad española de la interesada, produciéndose la notificación a la promotora el 5 de septiembre de 2012. En la comparecencia de la Sra. B. alega que desconocía el contenido del artículo 24.3 del Código Civil, por lo que no realizó declaración de conservación alguna.

3.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo el 5 de septiembre de 2012 por el que se autoriza la inscripción de la pérdida de la nacionalidad española en el acta de nacimiento de la interesada, en virtud del artículo 24.3 del Código Civil.

4.- Notificado el acuerdo a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando mantener la nacionalidad española.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (CC.); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II.- Se pretende por la interesada, nacida en Brasil el 19 de agosto de 1990, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su

madre, española nacida también en Brasil. El Encargado del Registro Consular dirigió escrito a la interesada el 5 de septiembre de 2012 comunicándole dicha pérdida. Esta comunicación constituye el objeto del presente recurso.

III.- Dispone el apartado III del artículo 24 CC., que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”. Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Brasil) y su madre también nació en Brasil. Alcanzó la mayoría de edad el 19 de agosto de 2008, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Rio de Janeiro (Brasil).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (96ª)

III.5.1- Inscripción de nacimiento fuera de plazo y pérdida de la nacionalidad española.

Es inscribible el nacimiento del nacido en Cuba en 1990, hijo de española respecto del cual no consta la pérdida de la nacionalidad española.

En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo previa declaración de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido por el Registro Civil Consular en La Habana el 20 de julio de 2011, el ciudadano cubano Don R. nacido en Cuba el 17 de agosto de 1990, solicitaba la concesión de la nacionalidad española por ser hijo de española nacida en Cuba. Adjuntaba la documentación siguiente: certificado de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento de la madre, Doña G. nacida en Cuba de padre español; certificado de nacimiento del padre; y fotocopia del documento de identidad del interesado.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 1 de junio de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento al considerar que el interesado incurrió en pérdida de la nacionalidad española por no realizar declaración de conservación entre los 18 y 21 años, no concurriendo en el presente caso los requisitos establecidos por el artículo 26 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la residencia legal en España.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de Ministerio Fiscal, éste consideró el Auto conforme a derecho por sus propios fundamentos. El Encargado del Registro Civil Consular se reiteró en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17 en la redacción de la Ley 51/1982, de 13 de julio y 24 del Código civil (CC.); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 21-4ª de octubre y 4-5ª y 9-1ª de diciembre de 2002; 18-3ª de enero de 2003; 24-1ª de enero de 2004; 8-6ª de noviembre de 2006; 8-3ª y 12 de Enero de 2008.

II.- Se pretende por el interesado, nacido en Cuba el 17 de agosto de 1990, que le sea declarada la nacionalidad española por ser hijo de madre española nacida en Cuba. El Encargado del Registro Civil Consular denegó la petición argumentando que como no realizó declaración de conservación entre los 18 y 21 años, según el artículo 24.3 del Código Civil habría perdido la nacionalidad española, por lo que no es posible inscribir su nacimiento por haber perdido dicha nacionalidad.

III.- La petición concreta del interesado es la de que le sea declarada la nacionalidad española por ser hijo de española. En el presente caso, cuando nace el promotor en 1990 la nacionalidad de la madre era la española y, en consecuencia, el hijo adquirió de origen, *iure sanguinis* dicha nacionalidad (cfr. art. 17 CC., en la redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio), ya que, en la certificación literal de nacimiento de la madre que obra en el expediente no consta pérdida alguna de la nacionalidad española.

IV.- El artículo 15 LRC dispone que en el Registro Civil constaran los hechos inscribibles que afectan a los españoles y el artículo 66 RRC establece que la duda sobre la nacionalidad del sujeto no es obstáculo para la inscripción de hecho. Para comprobar si, en este caso, el interesado ha incurrido en causa de pérdida de la nacionalidad española procede examinar el precepto aplicable a su caso, cual es, el artículo 24 CC, apartado 3, que establece que “los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”. Pues bien, el interesado alcanzó la mayoría de edad el 17 de agosto de 2008; al no constar en el expediente una emancipación anterior al cumplimiento de la mayoría de edad, ha de tomarse como referencia el citado año 2008 para el cómputo de los tres años que establece el precepto transcrito, por lo que ha de concluirse que el interesado no ha incurrido en pérdida de la nacionalidad española, puesto que hasta el 17 de agosto de 2011 podía declarar su voluntad de conservarla, haciendo esto por el escrito inicial de 20 de julio de ese mismo año, escrito que constituye una declaración expresa ante el Encargado del Registro Civil Consular.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso interpuesto y revocar el acuerdo apelado.

2º.- Instar a que se inscriba en el Registro Civil Consular el nacimiento como español del interesado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.8.- Competencia en exp nacionalidad

III.8.2.- Competencia en exp. de nacionalidad por motivos distintos de la residencia

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (19ª)

III.8.2-Opción a la nacionalidad española

Se declara la incompetencia del Registro municipal correspondiente al lugar de domicilio del interesado, que ha resuelto sobre la solicitud formulada al amparo de lo Dispuesto en el apartado I de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y se retrotraen las actuaciones al Registro consular correspondiente al lugar de nacimiento del interesado, que es el verdaderamente competente para resolver.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución de la Encargada del Registro Civil de Collado Villalba (Madrid).

HECHOS

- 1.- Doña A-M. presenta escrito ante el Registro Civil de Collado Villalba (Madrid) (correspondiente a su lugar de domicilio) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Municipal deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Municipal como española de origen a la nacida en D. (Uruguay) el 18 de agosto de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Municipal se dictó Resolución denegando lo solicitado.

III.- En el presente expediente no procede entrar a conocer sobre el fondo de la cuestión controvertida (procedencia de la denegación de la opción solicitada por la parte actora), habida cuenta de que, examinado el conjunto de las actuaciones, ha podido verificarse que el Órgano que ha resuelto la solicitud de la Sra. R. (Registro Civil de Collado Villalba, Madrid), era manifiestamente incompetente para pronunciarse al respecto. Se trata de una conclusión indubitada del examen conjunto del criterio IV de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado con los artículos 16 y 46 del Reglamento del Registro Civil. De acuerdo con el criterio puesto de manifiesto, "es Registro competente para practicar la inscripción de la opción el que corresponda al lugar de nacimiento del optante; cuando esté en otro término municipal o demarcación consular el registro competente para practicar la inscripción – como en el supuesto presente -, el Encargado ante el que se formule debidamente declaración de opción levantará acta por duplicado con las circunstancias de la opción y las de identidad del sujeto; uno de los ejemplares, con los documentos acreditativos de los supuestos legales, se remitirá al Registro competente para, en su virtud, practicar la inscripción".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: proponer declarar la nulidad de la Resolución de la Encargada del Registro Civil de Collado Villalba (Madrid) que deniega la opción a la nacionalidad española solicitada por Doña A-M. al amparo de lo dispuesto por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por manifiesta incompetencia para resolver, declarando la retroacción de las actuaciones al momento en que el Registro Civil indicado debió practicar la remisión de las actuaciones al Registro Civil competente, esto es, el consular correspondiente al lugar de nacimiento de la interesada (D. República Oriental del Uruguay), para que sea efectuada tal remisión y se instruya el resto del procedimiento de acuerdo con los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Procediendo la Resolución impugnada de un Órgano incompetente para resolver, desde esta Dirección General no es posible realizar, en consecuencia, apreciación alguna sobre el resto de las alegaciones formuladas por la interesada en su escrito de recurso, debiendo la Sra. R. esperar a que se produzca el pronunciamiento del Registro consular correspondiente a su lugar de nacimiento, que le será notificado por el cauce ordinario.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil de Collado Villalba (Madrid):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (36ª)

III.8.2.-Opción a la nacionalidad española.

Se declara la incompetencia del Registro municipal correspondiente al lugar de domicilio del interesado, que ha resuelto sobre la solicitud formulada al amparo de lo Dispuesto en los apartados I y II de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y se retrotraen las actuaciones al Registro consular correspondiente al lugar de nacimiento del interesado, que es el verdaderamente competente para resolver.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte

actora, contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular de Miami, Florida (EE.UU.).

HECHOS

- 1.- Doña G-M^a. presenta escrito ante el Registro Civil Consular de Miami. EE.UU. (correspondiente a su lugar de domicilio) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Consular deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Municipal como española de origen a la nacida en San J. O. (Cuba) el 28 de febrero de 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, o los nietos de abuelos que hubiesen perdido su nacionalidad española como consecuencia del exilio debido a la Guerra Civil.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en los modelos normalizados de los Anexos I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular de Miami se dictó Auto denegando lo solicitado.

III.- En el presente expediente no procede entrar a conocer sobre el fondo de la cuestión controvertida (procedencia de la denegación de la opción solicitada por la parte actora), habida cuenta de que, examinado el conjunto de las actuaciones, ha podido verificarse que el Órgano que ha resuelto la solicitud de la Sra. V. (Registro Civil Consular de Miami) era manifiestamente incompetente para pronunciarse al respecto. Se trata de una conclusión indubitada del examen conjunto del criterio IV de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado con los artículos 16 y 46 del Reglamento del Registro Civil. De acuerdo con el criterio puesto de manifiesto, "es Registro competente para practicar la inscripción de la opción el que corresponda al lugar de nacimiento del optante; cuando esté en otro término municipal o demarcación consular el registro competente para practicar la inscripción – como en el supuesto presente -, el Encargado ante el que se formule

debidamente declaración de opción levantará acta por duplicado con las circunstancias de la opción y las de identidad del sujeto; uno de los ejemplares, con los documentos acreditativos de los supuestos legales, se remitirá al Registro competente para, en su virtud, practicar la inscripción”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: declarar la nulidad del Auto de la Encargada del Registro Civil Consular de Miami (EE.UU), que deniega la opción a la nacionalidad española solicitada por Doña G-Mª. al amparo de lo dispuesto por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por manifiesta incompetencia para resolver, declarando la retroacción de las actuaciones al momento en que el Registro Civil indicado debió practicar la remisión de las actuaciones al Registro Civil competente, esto es, el consular correspondiente al lugar de nacimiento de la interesada (San Jerónimo, Oriente, Cuba), para que sea efectuada tal remisión y se instruya el resto del procedimiento de acuerdo con los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Procediendo la Resolución impugnada de un Órgano incompetente para resolver, desde esta Dirección General no es posible realizar, en consecuencia, apreciación alguna sobre el resto de las alegaciones formuladas por la interesada en su escrito de recurso, debiendo la parte interesada esperar a que se produzca el pronunciamiento del Registro consular correspondiente a su lugar de nacimiento, que le será notificado por el cauce ordinario.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami-Florida (EE.UU).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (37ª)

III.8.2.-Opción a la nacionalidad española.

Se declara la incompetencia del Registro municipal correspondiente al lugar de domicilio del interesado, que ha resuelto sobre la solicitud formulada al amparo de lo Dispuesto en los apartados I y II de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y se retrotraen las actuaciones al Registro consular correspondiente al lugar de nacimiento del interesado, que es el verdaderamente competente para resolver.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular de Miami, Florida (EE.UU.).

HECHOS

- 1.- Doña R-Mª. presenta escrito ante el Registro Civil Consular de Miami. EE.UU. (correspondiente a su lugar de domicilio) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Consular deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Municipal como española de origen a la nacida en G. La H. (Cuba) el 5 de enero de 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, o los nietos de abuelos que hubiesen perdido su nacionalidad española como consecuencia del exilio debido a la Guerra Civil.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en los modelos normalizados de los Anexos I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular de Miami se dictó Auto denegando lo solicitado.

III.- En el presente expediente no procede entrar a conocer sobre el fondo de la cuestión controvertida (procedencia de la denegación de la opción solicitada por la parte actora), habida cuenta de que, examinado el conjunto de las actuaciones, ha podido verificarse que el Órgano que ha resuelto la solicitud de la Sra. B. (Registro Civil Consular de Miami) era manifiestamente incompetente para pronunciarse al respecto. Se trata de una conclusión indubitada del examen conjunto del criterio IV de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado con los artículos 16 y 46 del Reglamento del Registro Civil. De acuerdo con el criterio puesto de manifiesto, "es Registro competente para practicar la inscripción de la opción el que corresponda al lugar de nacimiento del optante; cuando esté en otro término municipal o demarcación consular el registro competente para practicar la inscripción – como en el supuesto presente -, el Encargado ante el que se formule debidamente declaración de opción levantará acta por duplicado con las circunstancias de la opción y las de identidad del sujeto; uno de los ejemplares, con los documentos acreditativos de los supuestos legales, se remitirá al Registro competente para, en su virtud, practicar la inscripción".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: propone declarar la nulidad del Auto de la Encargada del Registro Civil Consular de Miami (EE.UU), que deniega la opción a la nacionalidad española solicitada por Doña R-Mª. al amparo de lo dispuesto por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por manifiesta incompetencia para resolver, declarando la retroacción de las actuaciones al momento en que el Registro Civil indicado debió practicar la remisión de las actuaciones al Registro Civil competente, esto es, el consular correspondiente al lugar de nacimiento de la interesada (La Habana, Cuba), para que sea efectuada tal remisión y se instruya el resto del procedimiento de acuerdo con los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Procediendo la Resolución impugnada de un Órgano incompetente para resolver, desde esta Dirección General no es posible realizar, en consecuencia, apreciación alguna sobre el resto de las alegaciones formuladas por la interesada en su escrito de recurso, debiendo la parte interesada esperar a que se produzca el pronunciamiento del Registro consular correspondiente a su lugar de nacimiento, que le será notificado por el cauce ordinario.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami-Florida (EE.UU).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (77ª)

III.8.2- Competencia en expedientes de nacionalidad por motivos diferentes a la residencia.

Habiendo transcurrido el periodo de 180 días desde la notificación de la concesión de la nacionalidad española por residencia del padre del interesado, en virtud de los artículos 64 de la Ley del Registro Civil y 229 del Reglamento del Registro Civil, el Encargado del Registro Civil del domicilio deberá remitir el acta de opción y el resto de las actuaciones al Registro Civil Central, competente en el presente supuesto, para que califique el expediente y, en su caso, practique la inscripción correspondiente.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Collado Villalba (Madrid).

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Collado Villalba el 7 de octubre de 2009, los ciudadanos colombianos, Don J-A. y Doña M-Mª. iniciaron expediente de opción a la nacionalidad española en nombre de su hijo menor de edad, J-P. nacido en Colombia el ... de ... de 2000. Aportaban, entre otra, la siguiente documentación: registro civil de nacimiento del interesado, inscrito en el año 2004; certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 19 de mayo de 2009; certificado del Consulado de Colombia en Madrid sobre inscripción consular del menor interesado; fotocopias del pasaporte del interesado, DNI del padre, NIE de la madre y del interesado.

2.- El mismo día, se ratificaron los promotores en su solicitud. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Collado Villalba dictó auto de fecha 2 de febrero de 2010, por el que autoriza a los promotores para formular la declaración de opción para la nacionalidad española del menor interesado ante el Registro Civil competente. El 15 de abril de 2010 se levanta acta de opción a la nacionalidad española de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil.

3.- El Encargado del Registro Civil de Collado Villalba emite auto el 2 de junio de 2010, por el que deniega la solicitud de los promotores, ya que entiende que de conformidad con lo establecido en la Directriz 4ª de la Instrucción de 28 de febrero de 2006, de la DGRN, sobre la competencia de los Registros Civiles Municipales en materia de adquisición de la nacionalidad española y adopciones internacionales, las anotaciones de opción vinculadas con el previo expediente de nacionalización del padre o madre del menor y su inscripción en el Registro Civil municipal competente, se condiciona a que se formule la correspondiente

declaración de opción, prevista en el artículo 20.2 del Código Civil durante el periodo de los 180 días siguientes a la notificación de la concesión de la nacionalidad española al titular de la patria potestad; habiéndose acreditado, en el presente caso, que la declaración de opción del menor interesado se ha formulado fuera del término de los 180 días referidos, no procediendo acordar la extensión de la inscripción solicitada.

4.- Notificada la resolución a los promotores, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso presentado y el Encargado del Registro Civil de Collado Villalba se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Visto los artículos 20 del Código Civil; 16.4, 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 68, 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de febrero de 2006 sobre competencia de los registros civiles municipales en materia de adquisición de nacionalidad española y adopciones internacionales.

II.- Se plantea en el presente expediente la cuestión de cuál sea el registro competente para la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de un menor de edad nacido en el extranjero y residente en M. que opta a dicha nacionalidad como consecuencia de la adquisición de la misma por parte de su padre a través de un expediente previo de nacionalidad por residencia tramitado en el Registro Civil de Collado Villalba.

III.- El párrafo cuarto del artículo 16 de la Ley de Registro Civil permite que el extranjero que adquiere la nacionalidad española, incluso habiendo nacido en el extranjero, pueda solicitar en el momento de levantarse el acta de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, que se extienda la inscripción de nacimiento en el registro civil municipal correspondiente al domicilio en el que se haya instruido el oportuno expediente registral. Como señala la directriz cuarta de la Instrucción arriba citada de la DGRN de 28 de febrero de 2006, este apartado es aplicable, básicamente, a los supuestos de adquisición de nacionalidad española por residencia y es lo que sucedió en el caso del promotor, cuya inscripción de nacimiento se practicó en el Registro Civil de Collado Villalba. Pero quedarían, en principio, fuera del ámbito del artículo 16.4 LRC los supuestos de recuperación y conservación de la nacionalidad española, así como los de adquisición de la misma por carta de naturaleza y por opción. No obstante, la propia Instrucción precisa que se entienden incluidas en la ampliación competencial de los registros municipales llevada a cabo por la Ley 24/2005 aquellas opciones de menores nacidos en el extranjero que trajeran causa directa de expedientes de nacionalidad resueltos favorablemente, en tanto que la concesión de la nacionalidad española por residencia a un ciudadano hasta ese momento extranjero abre directamente la posibilidad de que el mismo formule la opción a la nacionalidad española en nombre de sus hijos menores de 14 años o incapacitados, como en el caso que nos ocupa. Ahora bien, esta ampliación de la competencia a favor del Registro Civil municipal que haya tramitado el previo expediente registral de adquisición de la nacionalidad española por residencia respecto de la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad debe mantenerse mientras subsista la propia competencia del Registro Civil en que se ha instruido el expediente de nacionalidad por residencia, esto es, hasta la inscripción definitiva del nacimiento y de la adquisición de la nacionalidad española del extranjero naturalizado, por lo que la competencia del registro civil municipal, en cuanto a inscripción de la opción, se condiciona a que se formule la correspondiente declaración de opción (cfr. art. 20 nº2 C.c.) durante el periodo de los 180 días siguientes a la notificación de la concesión de la

nacionalidad española en que se ha de formalizar la renuncia a la nacionalidad anterior, en su caso, y la promesa o juramento exigidos por la ley (cfr. art. 23 C.c. y 224 R.R.C.). Pues bien, en este caso la comparecencia del padre ante el Registro Civil de Collado Villalba para cumplir con los requisitos del artículo 23 CC. se produjo el 19 de mayo de 2009, practicándose la inscripción definitiva de nacimiento y adquisición de nacionalidad el 11 de agosto de 2009, mientras que la declaración de opción por patria potestad referente al menor interesado está fechada el 15 de abril de 2010, por lo que la competencia para la inscripción de nacimiento solicitada y la opción a la nacionalidad española no correspondería al Registro Civil de Collado Villalba.

IV.- Pues bien, el nacimiento ha de ser inscrito en el Registro municipal o Consular del lugar en el que acaece, si bien en el caso de que sea competente un Registro Consular, si el promotor estuviera domiciliado en España deberá practicar antes la inscripción en el Registro Central (artículos 16 del Código Civil y 68 del Reglamento del Registro Civil). Si se presentase una declaración de conservación o modificación de nacionalidad ante un Registro no competente, el Encargado levantará acta por duplicado con las circunstancias de la inscripción y las de identidad del sujeto; uno de los ejemplares, con los títulos en su caso, se remitirá al Registro competente para, en su virtud, practicarla (artículo 229 del Reglamento del Registro Civil). No se ha hecho así en este caso, en el que el interesado presentó la declaración ante el Registro Civil de su domicilio, que denegó la opción, incluso teniendo en cuenta que al haber tenido lugar el nacimiento fuera de España y estar los interesados domiciliados en ella, la competencia para la inscripción correspondía al Registro Civil Central. Por tanto procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por incompetencia de aquel. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil.

V.- Las modificaciones de nacionalidad (adquisición, pérdida o recuperación), basadas en una declaración de voluntad, así como las manifestaciones sobre conservación de la nacionalidad española, han de inscribirse al margen del asiento de nacimiento del interesado, conforme al artículo 46 de la Ley del Registro Civil. Por esto, cuando la declaración de opción se presenta ante otro Registro Civil -normalmente el del domicilio, sea éste un Registro Civil municipal o consular español-, como se ha dicho anteriormente, lo procedente es que el Encargado de este último levante acta por duplicado y remita uno de sus ejemplares al Registro competente para practicar la inscripción marginal, procedimiento que se desprende de lo dispuesto en los artículos 64, conforme al cual, "A falta de disposición especial, es funcionario competente para recibir las declaraciones de conservación o modificación de nacionalidad o vecindad, el mismo que determinan las reglas sobre opción de nacionalidad. Cuando dicho funcionario no sea el Encargado del mismo Registro donde conste inscrito el nacimiento, levantará acta con las circunstancias exigidas para la inscripción y la remitirá al Registro competente para la práctica de la inscripción marginal correspondiente". Este precepto está desarrollado por los artículos 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil, de los que, en una interpretación de conjunto, resulta que la declaración de opción a la nacionalidad española y la renuncia, en su caso, y el juramento o promesa exigidos, serán formuladas ante el Encargado del Registro del domicilio.

En tales casos, como ha tenido ocasión de declarar reiterada doctrina de este Centro Directivo, existe una primera calificación provisional a cargo de quien recibe la declaración, pero la calificación primordial corresponde, como es obvio, al Encargado que ha de inscribir. Aunque esta doctrina ha sido matizada en el sentido de que el primer Encargado está facultado para rechazar de plano la pretensión del declarante (cfr. art. 355 R.R.C.) y no extender el acta, también se ha indicado que ésta es una posibilidad extrema, circunscrita a los casos en que sea evidente la ilegalidad o nulidad de la declaración (cfr. art. 6-3 C.c.) y no debe ampliarse a cualesquiera supuestos más o menos dudosos, porque esa actuación implicaría sustraer el ejercicio personal de la función calificadora al Encargado competente (vid. Resoluciones de 24 de septiembre de 1991, 8-3ª de octubre de 1998 y 12-2ª de septiembre de 2001).

En el ejercicio de esta función calificadora, que ha de ser favorable para permitir la práctica de la inscripción correspondiente, es requisito indispensable, como señala el artículo 226 del Reglamento del Registro Civil que se verifique previamente la concurrencia en el caso de los requisitos legales para la adquisición, modificación o conservación de la nacionalidad española. Con objeto de llevar a cabo tal verificación el Encargado podrá recabar del interesado las correspondientes justificaciones y documentación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Declarar la nulidad por incompetencia del auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Collado Villalba el 2 de junio de 2010.

2º.- Retrotraer las actuaciones e instar a que se devuelva el expediente a dicho Registro Civil para que se complete la tramitación de la instrucción del expediente.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Collado Villalba (Madrid).

III.8.3.- Exp. De nacionalidad-alcance de la calificación-art 27 lrc

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (21ª)

III.8.3.- Calificación.

El Encargado del Registro Civil Consular no puede volver a enjuiciar el fondo del asunto relativo a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado, para denegar la inscripción del matrimonio solicitada.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular en Rabat (Marruecos).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular en Rabat el 16 de Noviembre de 2009, Don M. originariamente marroquí y que ostenta en la actualidad la nacionalidad española, solicitó la inscripción de su matrimonio celebrado en Marruecos en el año 1991 con Doña K. Adjuntaba diversa documentación en apoyo de su solicitud, en particular certificación literal de nacimiento propia, inscrito en el Registro Civil Central el 24 de Septiembre de 2009 y en el que consta una anotación marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en virtud del auto dictado al efecto por el Registro Civil de Villena el 1 de Febrero de 2008.

2.- Previo informe desfavorable del Canciller, actuando en funciones de Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 22 de Abril de 2010 denegando a trámite la solicitud de inscripción del matrimonio por considerar que el solicitante obtuvo la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción en el Registro Civil de Villena sin ser esta localidad su lugar de residencia, por tanto de la instrucción del expediente y del informe del Ministerio Fiscal se deducía que no procedería la inscripción al ser nulo el acto de consolidación de la nacionalidad española por haberse declarado por Registro incompetente.

3.- Notificada la resolución al interesado, éste interpuso recurso alegando que en el momento en que se dictó el auto que declaró su nacionalidad española con valor de simple presunción tenía su domicilio en V. no incurriendo por consiguiente en nulidad el auto controvertido dictado por el Registro Civil de Villena. Solicitaba de nuevo la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español y aportaba, entre otros documentos, en apoyo de su argumentación testimonio del auto dictado por el Registro Civil de Villena el 1 de Febrero de 2008, en el que consta que aportó en su día volante de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento de Villena, y certificado de empadronamiento en esta localidad desde el 5 de Noviembre de 2007 hasta el 26 de Mayo de 2008.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Registro Civil Consular en Rabat. El órgano en funciones de Ministerio Fiscal emitió informe alegando que de la documentación que obra en el expediente remitido con ocasión del recurso por esta Dirección General se desprendía que no había lugar a dudas de que el certificado de empadronamiento presentado constituye un elemento probatorio de su residencia habitual en V. sin embargo, interesaba la desestimación del recurso por entender que el acuerdo que declaró su nacionalidad española fue dictado por órgano registral incompetente. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el acuerdo dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones de 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 20-3ª y 23-5ª de marzo de 2006; 23-3ª de Septiembre y 21-4ª de Octubre de 2008; 14-5ª y 18-4ª de Abril, 22-5ª de Mayo, 17-10ª y 22-3ª de Junio, 1-8ª de Septiembre de 2009; 24-7ª de Febrero de 2011.

II.- El interesado, ciudadano español con origen marroquí, mediante escrito presentado ante el Registro Civil Consular de Rabat solicitó la inscripción de su matrimonio en el Registro Civil español con base en la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción efectuada por el Registro Civil de Villena el 1 de Febrero de 2008 e inscrita en el Registro Civil Central. Por auto de 22 de Abril de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular denegó a trámite la solicitud de inscripción de matrimonio por no reunir los requisitos exigidos, al apreciar que el auto dictado por el Registro Civil de Villena era nulo por incompetencia territorial. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III.- En relación con la resolución recurrida de 22 de Abril de 2010, la calificación en las resoluciones firmes está limitada a la competencia y clase del procedimiento seguido, formalidades extrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio Registro (cfr. art.27, II, L.R.C.). Por esto, la declaración firme en expediente del artículo 96-2º de la Ley, adoptada por el Registro Civil competente del domicilio (cfr. art. 335 RRC), no puede ser calificada volviendo a enjuiciar el fondo del asunto por el Encargado del Registro Civil del nacimiento al inscribir los hechos que afecten al estado civil del interesado o al anotar al margen de la inscripción de nacimiento los mismos (artículos 15 y 39 de la Ley del Registro Civil). Por otra parte, no consta en el expediente documentación alguna que acredite que el interesado no tuviera su domicilio en V. en el momento de la solicitud y posterior tramitación del expediente para la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción.

IV.- Cuestión completamente distinta es que, si el Encargado del Registro Civil Consular estima improcedente la anotación, pueda poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en aras de la debida concordancia entre el Registro Civil y la realidad,

pueda el mismo promover un expediente declarativo con valor de simple presunción en sentido contrario. En efecto, en desarrollo de la obligatoria concordancia del Registro con la realidad se ha indicado repetidamente por la doctrina de este Centro Directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del Registro Civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida si las nuevas actuaciones tienen su fundamento en hechos descubiertos posteriormente. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa de las autoridades o de cualquier interesado, y con intervención en todo caso del Ministerio Público, se inicie de nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los nacidos les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española. La declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, habrá de tener acceso al Registro Civil para cancelar en su virtud la anotación sobre la nacionalidad ya practicada.

V.- Sin perjuicio de lo anterior, en tanto no se haya tramitado un expediente de declaración negativo de la nacionalidad del interesado y haya recaído resolución en ese sentido, deberá considerarse que el sujeto del cual se declaró la nacionalidad ostenta esta efectivamente, pues ya se ha dicho en numerosas resoluciones que la tan citada declaración tendrá plenos efectos probatorios en tanto no sea destruida. A consecuencia de ello y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos, debería inscribirse el matrimonio en el Registro Civil por tratarse de un hecho de los recogidos en el artículo 1 de la Ley y afectar a un español (artículo 15 de la Ley del Registro Civil), sin perjuicio de la posibilidad de practicar la anotación prevista en el artículo 38. 1º de la Ley.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso interpuesto, anular la resolución apelada y retrotraer las actuaciones para que, previa instrucción del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular dicte nuevo auto pronunciándose sobre el fondo del asunto.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Rabat (Marruecos).

III.9.- Otras cuestiones en expedientes nacionalidad

III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad española

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (54ª)

III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad. Art. 224 RRC.

Dictada la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el plazo, de caducidad, para cumplir los requisitos del artículo 23 del Código civil es de seis meses contados desde la notificación de dicha resolución.

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil de Ibiza.

HECHOS

1.- Por medio de escrito presentado el 21 de septiembre de 2005 en el Registro Civil de Ibiza, la Sra. M. mayor de edad y de nacionalidad portuguesa, solicitó la concesión de la nacionalidad

española por residencia. Cumplidos los trámites reglamentarios, el expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución, desde donde se remitió oficio comunicando la concesión de la nacionalidad española a la promotora por medio de resolución de 10 de diciembre de 2007.

2.- Tras reiterados intentos infructuosos de comunicación de la concesión por parte del Registro Civil de Ibiza, se iniciaron actuaciones para declarar la caducidad del expediente que, tras el informe favorable del ministerio fiscal, fue ordenada finalmente mediante auto de 2 de marzo de 2011.

3.- Mediante escrito fechado el 14 de octubre de 2011, la interesada se dirigió al Registro Civil de Ibiza solicitando el traslado de su expediente a H. ciudad en la que reside desde 2006, tal como acredita mediante certificado de empadronamiento. Notificado entonces el auto de declaración de caducidad, se presentó recurso alegando que el cambio de domicilio se había puesto en conocimiento del Registro Civil de Ibiza en 2006 y que, de hecho, la entrevista preceptiva con la policía se realizó en las dependencias de la Comisaría de H. lo que implica que la interesada había comunicado al registro el cambio de domicilio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil de Melilla remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 21 y 23 del Código Civil (CC.); 224 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 9-2ª de enero, 17-4ª de octubre y 27-6ª de noviembre de 2007 y 14-1ª de enero de 2011.

II.- La promotora solicitó la nacionalidad española por residencia en 2005. Concluida la tramitación del expediente, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dictó resolución de concesión el 10 de diciembre de 2007 que fue remitida al Registro Civil de Ibiza, con el expediente completo, para su comunicación a la interesada. Tras varios intentos infructuosos, por vía telefónica y postal, de comunicación de la resolución de concesión y previa conformidad del ministerio fiscal, la encargada del registro declaró la caducidad del expediente por paralización del procedimiento durante más de tres meses por causa imputable a la promotora al no haber sido posible su localización en el domicilio por ella facilitado. Contra el auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III.- Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que “las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23”. De otro lado, el artículo 349 RRC establece la forma en que deben practicarse las notificaciones y, cuando estas no sean posibles porque no conste el paradero del interesado, dispone que se hagan mediante edictos fijados en el tablón de anuncios del registro. Pues bien, en el presente caso no consta que la interesada fuera correctamente notificada de la concesión, ya que en ningún momento compareció ante el registro antes de ser declarada la caducidad ni se siguieron las garantías previstas en el artículo 349 RRC, y aunque tampoco son admisibles las alegaciones de la recurrente en el sentido de que había facilitado los datos de su nuevo domicilio en las dependencias policiales de H. (que el Ministerio del Interior conociera esta circunstancia no implica obligatoriamente el traslado de tal información al registro civil), pues es obligación de los interesados comunicar al registro los cambios de domicilio producidos durante la tramitación del expediente, lo cierto, en cualquier caso, es que cuando se declaró la caducidad por medio de auto de 2 de marzo de 2011 aún no habían

transcurrido los seis meses establecidos en el artículo 21.4 CC desde el último intento fallido de notificación que consta en el expediente el 27 de diciembre de 2010.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida.

2º. Retrotraer las actuaciones para que sea notificada la promotora de la resolución de concesión de nacionalidad española abriéndose el plazo que establece el apartado 4 del artículo 21 CC.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ibiza (Islas Baleares).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (55ª)

III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad. Art. 224 RRC.

Dictada la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el plazo, de caducidad, para cumplir los requisitos del artículo 23 del Código civil es de seis meses contados desde la notificación de dicha resolución.

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil de Leganés (Madrid).

HECHOS

1.- Por medio de escrito presentado en el Registro Civil de Leganés, la Sra. D. mayor de edad y de nacionalidad colombiana, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. Cumplidos los trámites reglamentarios, el expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución, desde donde se remitió oficio comunicando la concesión de la nacionalidad española a la promotora por medio de resolución de 19 de julio de 2011.

2.- Tras dos intentos infructuosos de comunicación de la concesión por parte del Registro Civil de Leganés, se iniciaron actuaciones para declarar la caducidad del expediente que, tras el informe favorable del ministerio fiscal, fue ordenada finalmente mediante auto de 12 de abril de 2012.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que había cambiado de domicilio en enero de 2010 y que dicho cambio se había puesto en conocimiento de la comisaría de Policía adjuntando un volante de empadronamiento con la nueva dirección y que, en cualquier caso, la Administración puede obtener ese tipo de datos a través del servicio de estadística municipal.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que no se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Leganés se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 21 y 23 del Código Civil (CC.); 224 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 9-2ª de enero, 17-4ª de octubre y 27-6ª de noviembre de 2007 y 14-1ª de enero de 2011.

II.- La promotora solicitó la nacionalidad española por residencia en 2009. Concluida la tramitación del expediente, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dictó resolución de concesión el 19 de julio de 2011 que fue remitida al Registro Civil de Leganés, con el expediente completo, para su comunicación a la interesada. Intentada infructuosamente en dos ocasiones, una por vía telegráfica y otra por vía postal, la notificación de la resolución de concesión y previa conformidad del ministerio fiscal, la encargada del registro declaró la caducidad del expediente por paralización del procedimiento durante más de tres meses por causa imputable a la promotora al no haber sido posible su localización. Contra el auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III.- Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que “las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23”. De otro lado, el artículo 349 RRC establece la forma en que deben practicarse las notificaciones y, cuando estas no sean posibles porque no conste el paradero del interesado, dispone que se hagan mediante edictos fijados en el tablón de anuncios del registro. Pues bien, en el presente caso no consta que la interesada fuera correctamente notificada de la concesión, ya que en ningún momento compareció ante el registro ni se siguieron las garantías previstas en el artículo 349 RRC, y aunque tampoco son admisibles las alegaciones de la recurrente en el sentido de que había facilitado los datos de su nuevo domicilio en las dependencias policiales de L. (que el Ministerio del Interior conociera esta circunstancia no implica obligatoriamente el traslado de tal información al registro civil), pues es obligación de los interesados comunicar al registro los cambios de domicilio producidos durante la tramitación del expediente, lo cierto, en cualquier caso, es que cuando se declaró la caducidad por medio de auto de 12 de abril de 2012 aún no habían transcurrido los seis meses establecidos en el artículo 21.4 CC desde el último intento fallido de notificación el 7 de diciembre de 2011.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida.

2º. Retrotraer las actuaciones para que sea notificada la promotora de la resolución de 19 de julio de 2011 abriéndose el plazo que establece el apartado 4 del artículo 21 CC

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Leganés (Madrid).

IV. MATRIMONIO

IV.1.- Inscripción matrimonio religioso

IV.1.1.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en España

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (47ª)

IV.1.1.-Matrimonio islámico celebrado en España.

No es inscribible porque no queda acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, sobre Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, contra auto de la Encargada del Registro Civil de Fuengirola.

HECHOS

1.- Mediante escrito de fecha 06 de septiembre de 2010 Doña S. nacida en Marruecos el 16 de noviembre de 1965 y de nacionalidad marroquí, y Don E. nacido en Egipto el 22 de marzo de 1968 y de nacionalidad egipcia, solicitaron en el Registro Civil de Fuengirola la inscripción del matrimonio que habían contraído en 2009 en el Centro Islámico de la Comunidad Suhail de la localidad de Marbella. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado del matrimonio islámico; certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la audiencia reservada. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. La Encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 06 de septiembre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificadas la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España; la Instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 24-2ª, 25-4ª de enero, 3-3ª, 9-1ª de febrero, 2-1ª, 3-4ª, 17-1ª, 23-4ª de marzo, 19-1ª y

20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio y 19-2ª de julio y 9-3ª de septiembre de 2005 y 24-5ª de mayo de 2006.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho, por falta de verdadero consentimiento (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su día la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio que permite apreciar obstáculos o impedimentos para el enlace (cfr. arts. 56, I, C. c. y 245 y 247 R.R.C.) y, fundamentalmente, la ausencia de consentimiento matrimonial. Análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado Español, considerada suficiente por la legislación española (art. 256-2º R. R. C.). El Encargado debe comprobar que concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C. c.) y esta comprobación requiere que por medio de la calificación de la certificación expedida y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la normativa española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. El citado artículo 256 remite al 63 C. c. que, con respecto a los matrimonios celebrados en España en forma religiosa, dispone en su párrafo II que “se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”, uno de los cuales, esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (cfr. art. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de Mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L. E. C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En el presente caso se trata de inscribir un matrimonio islámico celebrado en 2009 en España entre una marroquí y un egipcio, solicitud que es denegada por la Encargada del Registro Civil. Si los contrayentes pretendían que su matrimonio tuviera efectos civiles, deberían haber acreditado previamente su capacidad matrimonial, mediante certificación expedida por el Registro (cfr. art. 7.2 del Acuerdo). No consta que, en su momento, se solicitase, de modo que la Encargada del Registro ha realizado a posteriori los trámites tendentes a comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos por el Código Civil. De las audiencias reservadas que se realizaron a los interesados se aprecian determinados desconocimientos de datos básicos personales y familiares como que el interesado desconoce la fecha y edad de su pareja declara que la conoce un mes antes de contraer matrimonio, ignora los ingresos que cobra, manifiesta que se casaron hace dos años mientras que la interesada dice tres sin precisar la fecha exacta. La Sra. B. ignora la ciudad donde nació su pareja, la edad, el nombre de los padres, el número de hermanos. Declara que conoció a su esposo por teléfono hace un año y que se vieron por primera vez 15 días antes del matrimonio y que ya estaba fijada la fecha de celebración.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (75ª)

IV.1.1.-Matrimonio Canónico celebrado en España.

Se procede a la inscripción del matrimonio canónico celebrado en España porque hay datos objetivos bastantes para deducir la identidad de los contrayentes y que la celebración del matrimonio fue conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio canónico remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Doña M-A. de nacionalidad española presentó en el Registro Civil de Salamanca, expediente para la inscripción de matrimonio canónico celebrado en S. el 23 de Mayo de 1981. Adjuntan como documentación: certificado eclesiástico de matrimonio, certificado de nacimiento y defunción del Sr. V. certificado de nacimiento de la interesada y certificado de defunción esposo Sra. L. Don P-J. certificado de defunción Sra. S. esposa de Sr. T.

2.- Con fecha 10 de agosto de 2011 la encargada del registro civil dicta providencia para tomar declaración a los contrayentes y aclaren las causas por que no está inscrito el matrimonio canónico celebrado en S. el 23 de mayo de 1981, dando traslado al ministerio fiscal.

3.- Con fecha 01 de septiembre de 2011 comparece Doña M-A. ante la encargada del registro civil de Salamanca.

4.- Con fecha 30 de septiembre de 2011 el fiscal solicita se aporte testimonio de la inscripción literal de nacimiento de V. y testimonio literal de defunción de Don P-J. Con fecha 18 de octubre de 2010 solicita el fiscal se aporte certificado de defunción de Doña Á.

5.- Con fecha 04 de noviembre de 2011 el fiscal se opone a la inscripción del matrimonio.

6.- La encargada del registro civil dicta auto de 10 de noviembre de 2011, denegando la inscripción del matrimonio eclesiástico celebrado el 23 de mayo de 1981.

7.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

8- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II- En este caso se trata de inscribir un matrimonio canónico celebrado en S. el 23 de mayo de 1981, pero del examen de la documentación aportada y la audiencia reservada realizada a Doña M-A. tanto el informe del fiscal como el auto de la encargada del registro civil de Salamanca se oponen a su inscripción por el motivo siguiente. La contradicción de los datos del nombre y año de nacimiento entre el certificado de matrimonio eclesiástico emitido el 14 de julio de 2011 donde figura como nombre "A" y como año de nacimiento "1936" y la certificación literal de nacimiento emitida por el registro civil donde aparece como nombre M. " y como año de nacimiento "1935". Por otra parte se acompaña la documentación del expediente que se resolvió a solicitud de Don J. de rectificación del certificado de defunción Don V. por considerar que Doña M-A. no debe constar como esposa sino como pareja de hecho, pues esta es viuda y no está casada con el difunto, dicha solicitud es presentada en el registro civil de Barcelona y remitida al registro civil de Toro donde se tramita el oportuno expediente. Con el informe favorable del fiscal dicta la encargada del registro civil de Toro auto de 01 de febrero de 2010, en el sentido de proceder a rectificar el certificado de defunción del Sr. T. sustituyendo la condición de casado por viudo y considerar a Sra. L. pareja de hecho.

III- En base a lo anterior y ciñéndonos al objeto de recurso debemos considerar, primero que existe una certificación eclesiástica donde figura claramente que Don V. contrajo el citado matrimonio el 23 de mayo de 1981 en la Iglesia de San P de S. con todas las formalidades legales y que como consta en el expediente se emitió certificado de celebración para su remisión al Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca. Sin que aporte nada a la resolución del expediente las razones por las cuales hasta ahora no se ha producido la inscripción del matrimonio eclesiástico. Segundo, dado que los dos contrayentes han estado casados con anterioridad debe comprobarse que a la fecha de 23 de mayo de 1981 ninguno de los dos pueda tener un impedimento de ligamen por estar casados, y por lo tanto sería nulo el citado matrimonio para el que se solicita la inscripción. Hecho que ha sido verificado en el momento de la resolución del presente recurso.

IV.- Teniendo en consideración el punto anterior lo que se debe considerar para la resolución del recurso es si Doña M. y Doña A. son la misma persona, que es el fundamento de la denegación de la inscripción y objeto del recurso. Para lo cual debemos considerar las

alegaciones y pruebas aportadas al expediente que nos puedan justificar razonadamente que estamos ante dos personas diferentes o no. A juicio de la encargada del registro civil y del fiscal consideran que existe una duda razonable en base a que la certificación eclesiástica incurre en dos datos diferentes el nombre de A en vez de M y en que la fecha de nacimiento figura el 29 de julio de 1936 y no el 29 de julio de 1935 como aparece en la certificación literal de matrimonio. Se ha podido comprobar en el citado registro civil de Salamanca nos consta el matrimonio Don V. ni con A. contrayente que figura literalmente en la certificación eclesiástica, ni lógicamente M. promotora del expediente para la inscripción del citado matrimonio.

Como prueba del matrimonio se ha aportado testamento otorgado por Sr. T. donde figura como heredera y esposa del difunto Doña M. asimismo es público y notorio que Doña M. ha convivido con Don V. sin que exista la más mínima duda sobre estos hechos siendo que la interesada constaba inicialmente en el certificado de defunción como esposa, sin perjuicio del expediente rectificación que se realizó en el registro civil de Toro y sin que la interesada fuera parte en la tramitación del mismo. Que si fueran dos personas tanto M. como A. tendrían los mismos nombres de padres habrían nacido en la misma localidad y por tanto debería existir dos certificaciones literales de nacimiento diferentes, y tener documentos nacionales de identidad diferentes, existiría alguna constancia de que el Sr. T. se casó con A. y vivió más tarde con M. circunstancia que ningún momento ha sido alegada por los hijos o yerno del difunto. Que consta como documentación que Doña M-A. percibe la pensión de viudedad reconocida legalmente.

Finalmente no se aporta prueba testifical por parte de la interesada por considerarse suficiente el certificado aportado por Don G. alcalde –Presidente del Ayuntamiento de F. (Zamora) donde informa que la interesada es conocida indistintamente por M ,A. o M –A. correspondiendo a la misma persona , siendo ello público y notorio.

Por lo que debemos considerar que existen numerosas pruebas que constan en el expediente, para llegar a la conclusión que Doña A. y Doña M. son la misma persona y que por tanto, esta contrajo matrimonio eclesiástico el 23 de mayo de 1981 con Don V.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y proceder a la inscripción del matrimonio canónico de Don V. y Doña M. y en consecuencia proceder igualmente a la rectificación del asiento registral de defunción de Sr. T. en el registro Civil de F. donde debe figurar la interesada como esposa del fallecido.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (61ª)

IV.1.1.-Matrimonio islámico celebrado en España.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- El 4 de marzo de 2011 Don J-G. de nacionalidad española, nacido en C. el 5 de junio de 1965, presentó en el Registro Civil de dicha ciudad impreso de declaración de datos para la transcripción de matrimonio islámico celebrado el día 24 de diciembre de 2010, en la sede de la Comunidad Islámica de Estudios Árabes e Islámicos de Ceuta, con el Doña F. de nacionalidad marroquí, nacida en T.(Marruecos) el 27 de septiembre de 1975. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio islámico; del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero y certificado de empadronamiento en C. y, de la interesada; pasaporte marroquí, acta de nacimiento, certificado de estado civil divorciada, certificado de residencia, acta de matrimonio anterior, de fecha 7 de marzo de 1998 y acta de divorcio irrevocable de fecha 12 de octubre de 2009.

2.- Posteriormente comparecieron dos testigos que manifestaron que les constaba la celebración del matrimonio se celebró en el lugar y en la fecha arriba indicados. A continuación se unió a lo actuado copia testimoniada de expediente de autorización de matrimonio civil, iniciado por los promotores en ese mismo Registro el 20 de octubre de 2009, una semana después del divorcio de la interesada, y concluido con auto de fecha 24 de mayo de 2010, por el que se acuerda denegar la autorización solicitada y que no fue recurrido, y con entrega al promotor en fecha 7 de junio siguiente de los documentos aportados, cuyo desglose se solicita. En el expediente actual el Encargado del Registro solicitó informe de la autoridad municipal sobre la convivencia de los interesados tras el matrimonio islámico, el resultado del informe es que efectivamente conviven en el domicilio que el interesado facilitó como propio en la hoja de declaración de datos. Con fecha 7 de septiembre de 2011 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada, a la interesada con asistencia de intérprete de árabe.

3.- El Ministerio Fiscal no se opone a la concesión de la autorización y el 13 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil de Ceuta, considerando que el matrimonio no reúne los requisitos de fondo que para su validez exige el Código Civil, dictó auto acordando denegar la pretensión deducida.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los promotores en ese mismo momento hicieron constar su desacuerdo con la resolución y por tanto que se tuviera por interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación de la resolución apelada y el Encargado se ratificó en su decisión y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España; la Instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 24-2ª, 25-4ª de enero, 3-3ª, 9-1ª de febrero, 2-1ª, 3-4ª, 17-1ª, 23-4ª de marzo, 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de

mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio y 19-2ª de julio y 9-3ª de septiembre de 2005; 24-5ª de mayo de 2006, 4-4ª de marzo y 11-9ª y 24-6ª de noviembre de 2008 y 9-1ª de agosto de 2010.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I CC. y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado Español legalmente prevista como suficiente por la ley española (art. 256-2º RRC). El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC.) y esta comprobación requiere que por medio de la calificación de la certificación expedida y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su Reglamento. El citado artículo 256 remite al 63 CC. que, con referencia a los matrimonios celebrados en España en forma religiosa, dispone en su párrafo II que “Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título” y uno de esos requisitos, esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (cfr. art. 45 y 73.1º CC.).

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se pretende inscribir un matrimonio islámico celebrado en España el día 24 de diciembre de 2010 entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, inscripción que es denegada por el Encargado del Registro Civil, por estimar que el matrimonio no se ha celebrado con los fines propios de la institución matrimonial. El auto no suscita cuestión acerca de determinadas formalidades y requisitos que derivan del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, como la acreditación de la pertenencia del Imam autorizante a una de las Comunidades Islámicas enunciadas en el artículo 1.1 del Acuerdo de Cooperación (cfr. art. 7.1, en relación con el art. 3.1). Respecto al fondo del asunto, si los contrayentes deseaban inscribir el matrimonio en el Registro Civil español para obtener el pleno reconocimiento de sus efectos civiles, deberían haber acreditado previamente su capacidad matrimonial mediante certificación expedida por el Registro Civil correspondiente (cfr. art. 7.2 del Acuerdo). No constando la obtención en su momento del mencionado documento, por el Encargado se ha procedido a comprobar a posteriori la concurrencia de los requisitos exigidos por el Código Civil mediante la incorporación a las actuaciones del expediente previo de autorización de matrimonio civil promovido por los mismos interesados y concluido de forma negativa para lo pretendido en fecha próxima a la de celebración del

matrimonio islámico, sin que fuera recurrido por los interesados y, fundamentalmente, a través de los hechos deducidos del trámite de audiencia. Así en las realizadas en el expediente que ahora se examina a los mismos temas se contesta por ambos promotores con datos básicos absolutamente diferentes a las realizadas un año antes, así varía el tiempo que hace que se conocen, de hace 11 años a el año 2009, de manifestar la interesada que tenía 4 hijos del promotor y que estaba en trámite la inscripción de su nacimiento en el Registro, a declarar ambos que ella tiene 6 hijos de relaciones anteriores y que ninguno es común a los promotores, sino 2 de un primer matrimonio de la Sra. B. y 4 de su segundo matrimonio, estos últimos viven con ellos y preguntado el promotor acerca de lo declarado en el expediente anterior este manifiesta que alguien, a quien identifica con nombre y primer apellido, les engañó respecto a lo que tenían que decir, por último la interesada menciona una edad propia que no es la auténtica según los documentos aportados.

Debiendo tenerse en cuenta además las actuaciones anteriores de los promotores ante el mismo Registro y que constan en sus archivos, a tenor de una interpretación extensiva de la locución “asientos del Registro” que aparece en el artículo 63, II del Código Civil que dispone que “Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”.

VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta que, por su inmediatez a los hechos, es quien más fácilmente ha podido apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (83ª)

IV.1.1.-Matrimonio islámico celebrado en España entre extranjeros.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola.

HECHOS

1.- Don S. nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní y Doña F. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaron en el Registro Civil de Mijas la inscripción del matrimonio

que habían contraído el 20 de septiembre del año 2010 en la Comunidad Islámica Suhail de F. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado del matrimonio islámico; permiso de residencia, copia de registro de nacimiento, certificado de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, copia de extracto de acta de nacimiento, copia del acta de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.-Recibida la documentación en el Registro Civil de Fuengirola, por ser el competente, se celebra la audiencia reservada con la interesada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. La Encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 24 de marzo de 2011 no autoriza la inscripción del matrimonio por no reunir los requisitos legales.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso. La Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España; la Instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 24-2ª, 25-4ª de enero, 3-3ª, 9-1ª de febrero, 2-1ª, 3-4ª, 17-1ª, 23-4ª de marzo, 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio y 19-2ª de julio y 9-3ª de septiembre de 2005 y 24-5ª de mayo de 2006.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho, por falta de verdadero consentimiento (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su día la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio que permite apreciar obstáculos o impedimentos para el enlace (cfr. arts. 56, I, C. c. y 245 y 247 R.R.C.) y, fundamentalmente, la ausencia de consentimiento matrimonial. Análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado Español, considerada suficiente por la legislación española (art. 256-2º R. R. C.). El Encargado debe comprobar que concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C. c.) y esta comprobación requiere que por medio de la calificación de la certificación expedida y “de las declaraciones complementarias

oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la normativa española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. El citado artículo 256 remite al 63 C. c. que, con respecto a los matrimonios celebrados en España en forma religiosa, dispone en su párrafo II que “se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”, uno de los cuales, esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (cfr. art. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de Mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L. E. C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En el presente caso se trata de un matrimonio islámico celebrado el 20 de septiembre de 2010 en España por dos extranjeros, él paquistaní y ella marroquí, los cuales solicitan su inscripción en el Registro Civil, que es denegada por la Juez Encargada por estimar que el matrimonio celebrado no se ha contraído con las finalidades propias de éste. No suscita el auto cuestión acerca de determinadas formalidades y requisitos que no resultan acreditados en el expediente y que derivan del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Nos referimos al hecho de que si los contrayentes deseaban inscribir el matrimonio en el Registro español para que fuesen plenamente reconocidos sus efectos civiles, deberían previamente haber acreditado su capacidad matrimonial mediante la correspondiente certificación expedida por el Registro (cfr. art. 7.2 del Acuerdo), trámite que no consta que se realizase en su momento, bien que con posterioridad se cumpliesen por la Juez Encargada del Registro los trámites tendentes a comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos por el Código Civil.

Tampoco consta acreditada la pertenencia del Imán, ante el que los contrayentes expresaron su consentimiento, a alguna Comunidad Islámica de las señaladas en el artículo 1.1 del referido Acuerdo de Cooperación (cfr. art. 7.1, en relación con el art. 3.1 del Acuerdo). A estos aspectos formales hay que añadir aquellos hechos en los que la Juez Encargada ha basado su denegación deducidos del trámite de audiencia reservada ya que las respuestas dadas por la interesada son incongruentes como son la fecha en la que se conocen y las circunstancias de ese primer encuentro. Todo ello lleva a la convicción de que se ha utilizado el matrimonio como instrumento para conseguir fines migratorios.

VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Juez Encargada del Registro Civil que, por su inmediatez a los hechos, es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado; desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

IV.1.2.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (130ª)

IV.1.2.-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 30 de marzo de 2009 en Marruecos, según la ley local, con Doña M. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificación de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado y extracto de acta de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, la Juez Encargada del Registro Civil Central mediante auto de fecha 16 de junio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que el interesado, súbdito español, desde el 27 de octubre de 2008, contrae matrimonio sin embargo como súbdito marroquí, al ser considerado como tal por las autoridades marroquíes y no reconocer la validez y eficacia de la renuncia a la nacionalidad marroquí que realizó en su día el interesado. El interesado no ha aportado el certificado de capacidad matrimonial que en estos casos se exige.

3.- Notificada la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. La Juez Encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de

capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 30 de marzo de 2009 entre una marroquí y un ciudadano español de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española en el año 2008, renunciando a su anterior nacionalidad marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (136ª)

IV.1.2.-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- *Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.*

2º.- *Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, marroquí de origen.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, adquirida por residencia el 21 de diciembre de 2005, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 19 de enero de 2006 en Marruecos, según la ley local, con Doña I. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El encargado del Registro Civil Central mediante acuerdo de fecha 13 de junio de 2011, deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que el matrimonio se contrajo en Marruecos sin haber obtenido previamente la interesada el certificado de capacidad matrimonial en el Registro Civil español, pese a que el mismo había prestado juramento de adquisición de nacionalidad española y haber sido inscrita como español en el Registro Civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el recurso e interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.),

comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) En las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 19 de enero de 2006 entre un ciudadano español de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española por residencia con fecha 21 de diciembre de 2005 y una ciudadana de nacionalidad marroquí, por lo que ha sucedido que el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (100ª)

IV.1.2.- Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don H. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, adquirida por residencia el 15 de septiembre de 2004, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 14 de junio de 2006 en Marruecos, según la ley local, con Doña L. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y divorcio Sra. T. y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. La encargada del Registro Civil Central mediante acuerdo de fecha 06 de octubre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que el matrimonio se contrajo en Marruecos sin haber obtenido previamente el interesado el certificado de capacidad matrimonial en el Registro Civil español, pese a que el mismo había prestado juramento de adquisición de nacionalidad española y haber sido inscrita como español en el Registro Civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el recurso e interesa la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) En las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 14 de junio de 2006 entre un ciudadano español de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española por residencia con fecha 15 de septiembre de 2004 y una ciudadana de nacionalidad marroquí, por lo que ha sucedido que el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado

en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

IV.2.- Expediente previo para la celebración del matrimonio civil

IV.2.1.- Autorización del matrimonio. Falta de capacidad. Recursos

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (7ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Redondela (Pontevedra).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Redondela el día 20 de julio de 2011 Don M. de nacionalidad senegalesa, nacido en D. (Senegal) el 1 de octubre de 1982, y Doña Mª-R. de nacionalidad española, nacida en F de M. (P) el 31 de julio de 1969, iniciaba expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte, certificado de soltería, certificación de nacimiento, volante de empadronamiento en O. desde el 12 de enero a 8 de junio y certificado de convivencia de los promotores desde el 8 de junio de 2011, expedido por el Concello de R. y, de la promotora, documento nacional de identidad, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio anterior, de fecha 11 de marzo de 1995, disuelto por sentencia de divorcio de fecha 18 de julio de 2008.

2.- Con fecha 4 de agosto de 2011 fueron oídos los dos testigos presentados, amigos de los promotores y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de la audiencia reservada se extrae prueba suficiente de que no existe verdadero consentimiento matrimonial se opuso a la concesión de lo solicitado y el 5 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manteniendo que su relación es auténtica y reiterando que se autorice el matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se reiteró en su oposición a la concesión de la autorización solicitada y la Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende

contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Sus declaraciones muestran un desconocimiento mutuo de datos personales y familiares. Así coinciden en dónde y cuándo se conocieron, sin embargo en la entrevista realizada ante la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional con motivo del informe que le fue solicitado a ésta por el Registro Civil, discreparon en la forma de conocerse, en dicho informe además e hace constar, aunque no es determinante, que el promotor entró en España de forma clandestina en el año 2006, esté en situación irregular y tenía incoado un expediente por infracción a la legislación de extranjería por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Respecto a los datos personales y familiares, la promotora no sabe mencionar los apellidos de su pareja, ni su año de nacimiento, ni conoce los nombres ni edades de los padres de él, ni de sus hermanos, por su parte el promotor desconoce los apellidos de su pareja, no sabe el lugar ni la fecha de nacimiento, aunque sabe la edad que tiene, no sabe qué color de ojos tiene, desconoce el nombre, edades y a qué se dedicaron los padres de ella. Respecto a su relación, ambos mencionan que no conviven porque la religión de él no se lo permite hasta que estén casados, sin embargo ella ante la Policía manifestó que no sabía la religión que el profesaba y, en cambio, han aportado un certificado municipal de convivencia desde un mes y medio antes de la solicitud y, de otro lado, desde que se conocieron en enero de 2010 no sabemos cómo han seguido su relación puesto que el promotor estuvo empadronado en O. desde enero de 2011, asimismo la promotora manifiesta que en las últimas navidades no pudieron estar juntos por el motivo religioso ya expuesto, sin embargo el promotor dice que estuvieron juntos.

Por último también existe desconocimiento mutuo en relación con los estudios realizados por ambos, sus aficiones, la promotora desconoce cuál es el idioma materno de su pareja y dice que habla un poco de español. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Redondela (Pontevedra).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (8ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Canovelles (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Canovelles el día 19 de mayo de 2011, Don C. de nacionalidad marroquí, nacido en T. (Marruecos) el 30 de marzo de 1980, y Doña R. de nacionalidad española, nacida en El P. (L) el 22 de diciembre de 1978, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban

la siguiente documentación: del promotor; pasaporte, copia literal de acta de nacimiento, traducción de certificado de soltería y volante de empadronamiento en C. desde el 14 de noviembre de 2006, y, de la promotora; documento nacional de identidad, fe de vida y estado, soltera, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento en C. desde el 17 de mayo de 2000.

2.- Con fecha 25 de mayo siguiente los interesados ratificaron la solicitud y el día 7 de junio de 2011 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 8 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias apreciadas en los problemas con el idioma del promotor extranjero y añadiendo que viven juntos desde hace 2 años, aportando declaraciones testificales al respecto.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado se ratifica en la resolución apelada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. De principio no tienen una lengua común, ya que la promotora manifiesta que él habla poco castellano y de hecho en el recurso justifica de este modo las discrepancias apreciadas y aunque el promotor dice que ella habla un poco de árabe la interesada dice que no, y este hecho es un factor determinante, según la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia, pero además sus declaraciones evidencian un desconocimiento mutuo que no se justifica fácilmente entre quienes, según su recurso llevan 2 años conviviendo, debiendo significarse al respecto que durante las audiencias dicen que no han convivido, cada uno dice que vive con su familia y declaran domicilios diferentes, que a su vez también son diferentes a los que constan en sus volantes de empadronamiento.

Además respecto a otros datos personales y familiares, la promotora equivoca el nombre del padre de él, quien por su parte confunde el año de nacimiento de ella, no conoce a sus padres, pero no menciona la circunstancia de haber fallecido, él sabe que ella tiene 4 hijos de relaciones anteriores pero difiere en asignar los nombres y edades, no sabe en cambio cuántos hermanos tiene ni sus nombres ni tampoco los conoce. La promotora por su parte no está segura de si él está en situación irregular en España, que lo está, dice que él no practica ninguna religión sin embargo el interesado manifiesta que es musulmán, no sabe su número de teléfono, sabe que él toma pastillas pero no menciona para qué enfermedad y el promotor por su parte dice que ella no padece ninguna enfermedad ni sigue ningún tratamiento, sin embargo la promotora dice que sufre ansiedad y tiene un tratamiento.

Respecto a otras circunstancias, el promotor desconoce los ingresos de ella y ésta por su parte declara que él no le dice los ingresos que tiene, por último al ser preguntados por su futuro domicilio conyugal, el promotor dice que la casa de su madre y la promotora que la suya, y respecto a si van a convivir con algún familiar él dice que con la familia y ella que no. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Canovelles (Barcelona).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (9ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio civil remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

HECHOS

1.- En fecha 18 de mayo de 2011, Don M. nacido en A. (S) el 20 de marzo de 1959 y de nacionalidad española, y Doña C-A. nacida el 4 de octubre de 1972 en Los H. (La República Dominicana) y de nacionalidad dominicana, solicitaban mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ciudad Rodrigo autorización para contraer matrimonio civil. Aportando como documentación acreditativa: del promotor; certificado de nacimiento, volante de empadronamiento en A. declaración jurada de estado civil, soltero, y documento nacional de identidad, y de la promotora; acta inextensa de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltera, certificado de capacidad matrimonial expedido por el Consulado General de La República Dominicana en Madrid, volante de empadronamiento en el V de S-J. (T) desde 9 de diciembre de 2009 a 26 de marzo de 2011 y pasaporte dominicano con visado expedido en S-D por un mes de junio a julio de 2009 y otro posterior expedido en Holanda hasta agosto de 2009.

2.- Con la misma fecha se ratifican los interesados y declaran dos testigos, que manifiestan que no conocen circunstancia alguna que impida el matrimonio. Con fecha 27 de mayo de 2011 se celebra trámite de audiencia reservada por separado con ambos promotores. Se publican edictos tanto en el Registro Civil como en el Consulado General de La República Dominicana en Madrid. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización del matrimonio al considerar que no existe un verdadero consentimiento matrimonial. El Encargado del Registro Civil deniega, mediante auto de fecha 22 de septiembre de 2011, la autorización para contraer matrimonio por considerar, tras las audiencias reservadas, que el desconocimiento de datos esenciales muestra una ausencia de consentimiento matrimonial válido por parte de los solicitantes.

3.- Notificada la resolución a los promotores, el interesado solicitó testimonio del expediente que le fue entregado y se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando restar importancia a las discrepancias y desconocimientos mostrados en las audiencias y solicitando de nuevo la autorización del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del mismo. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido, se reafirma en el contenido de la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar

el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.-La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuando que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C.c.).

IV.-Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

V.-En el caso actual, en el que se pretende contraer un matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana, de los respectivos trámites de audiencia practicados a los interesados, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que la finalidad perseguida con el matrimonio proyectado no es la propia de esta institución y que, por esa causa, no puede ser autorizado: se aprecia un desconocimiento de datos personales importantes, así el promotor no sabe el país de nacimiento ni la nacionalidad de su pareja, desconoce el tiempo que lleva en España, sabe que antes ha estado en otro país pero no sabe dónde, cree que antes ha estado bastante tiempo en otros lugares, según la interesada sólo estuvo un mes y medio en Holanda. Cree que ella no tiene permiso de residencia, lo que es cierto, y manifiesta que ambos “saben que casándose ella adquirirá la nacionalidad, el permiso de residencia y todo lo demás” aunque señala que “ella no le ha dicho que se case por eso”. Respecto a la relación mantenida, ambos coinciden en que se conocieron en la estación de autobuses de C-R. aunque el promotor dice que no sabe qué hacía ella allí, mientras la Sra. S. declara que había ido a visitar a una amiga que vivía allí y con la que había compartido piso en M. Según el promotor llevan conviviendo 1 o dos años, según la respuesta, en A. y según su pareja son 3 meses, según los datos de empadronamiento son casi 2 meses antes del inicio del expediente.

También muestran desconocimiento respecto de otros datos familiares y laborales, el promotor sabe que su pareja tiene dos hermanas fuera de España pero no sabe dónde, residen en Holanda, la promotora por su parte desconoce los ingresos económicos de él y su horario de trabajo, ya que manifiesta que por la mañana vuelve a las 11h y después de comer se vuelve a marchar hasta las 11h de la noche, sin embargo el SR. D. manifiesta que sale de casa a las 7h y vuelve a las 4 de la tarde y ya se queda en casa y, por último la interesada manifiesta que nunca han viajado juntos y que su pareja va a C-R. y a otro pueblo que no sabe dónde, sin embargo el promotor dice que no han viajado salvo las veces que han ido juntos a C-R.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (13ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ateca (Zaragoza).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña S. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento y fe de vida y estado Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 10 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existe un desconocimiento respecto de datos básicos personales y familiares como que desconocen la profesiones o actividades que tiene cada uno ella dice que él es camarero y él declara que su profesión habitual es la construcción, él dice que ella es peluquera y ella declara camarera, asimismo ambos ignoran la fecha de nacimiento y el nombre completo de su pareja. Finalmente y sin que sea determinante la interesada se encuentra en situación irregular en España por carecer de permiso de residencia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ateca (Zaragoza).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (14ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Osuna.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña R. nacida en España y de nacionalidad española y Don B. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento y fe de vida y estado Sra. F.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 03 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existe una serie de desconocimientos y contradicciones como el momento en que se conocen ella

dice dos años y él un año, el tiempo que llevan de relación el interesado declara seis meses y ella cinco, el tiempo que el Sr. B. lleva en España ella dice siete años y él manifiesta cinco o seis, declara él estar en situación irregular y ella dice que no, manifiesta la Sra. F. que no puede tener hijos y él dice que quiere uno o dos, desconocen ambos el número de hermanos de la pareja así como los estudios o aficiones que tienen. Finalmente la Sra. F. declara que llevan cinco meses de relación y convivencia con el Sr. B. sin embargo en otra declaración en sede judicial no menciona que convive con él y si con sus hijos y un amigo de ella.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Osuna (Sevilla).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (16ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Burgos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don C-A. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana y Doña Mª-S. nacida en España y de nacionalidad española iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 28 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano colombiano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la Sra. C. declara que se conocieron en una cafetería hace un año y que decidieron casarse hace siete meses pero que no han tramitado el expediente con anterioridad por que él estaba en prisión según él mismo manifiesta durante seis meses. Declara la interesada que el Sr. R. va a solicitar la nacionalidad española una vez contraiga matrimonio circunstancia también manifestada por el interesado. Por otra parte la Sra. C. desconoce el teléfono de su pareja y declara que viven en el mismo domicilio pero ignora el número de hermanos del Sr. R. y demás datos personales y familiares básicos. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 12 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Burgos.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (36ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Santander.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en España y de nacionalidad española y Doña P. nacida en B. y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la autorización del matrimonio. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de junio de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo interesando su desestimación. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Llama la atención que conociéndose desde hace un año y dos meses y conviviendo desde hace seis meses, el interesado desconozca que ella esté incurso en un procedimiento de la ley de extranjería, y tenga un expediente de expulsión por la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza de 14 de febrero de 2008, y que está pendiente de ejecución. La interesada después de llevar en España seis años, no ha regularizado su situación. No aportan pruebas de su relación concluyentes de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (41ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en España y de nacionalidad española y Don L., nacido en Nigeria y de nacionalidad nigeriana, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y declaración de edad, declaración de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen tres testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe favorable. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 4 de julio de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso interpuesto. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano nigeriano, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, a pesar de indicar la interesada que él sabe algo de español, la entrevista que se

le practicó al interesado se hizo a través de intérprete, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan un idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado indicando además que nació en Nigeria sin especificar más, él por su parte desconoce donde viven los padres de ella ya que dice que viven en M. cuando ella dice que viven en A. La interesada desconoce los nombres de los hermanos de él ya que dice que se llaman Fz y Ac. cuando sus nombres son Au. y Fx. Desconocen estudios de cada uno, ella declara que ayuda económicamente a su pareja cuando él afirma que cuando necesita dinero se lo pide a sus hermanos. Discrepan en las comidas favoritas de cada uno, en donde decidieron contraer matrimonio ya que ella dice que “hablándolo” y él dice que en casa de ella. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Consular de Murcia

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (49ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Torremolinos (Málaga).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Benalmádena (Málaga), el día 22 de junio de 2011, Don M. C., de nacionalidad española, nacido en M. el 30 de julio de 1942, y Doña A. V., nacida en S. (Paraguay) el 9 de febrero de 1977 y de nacionalidad paraguaya, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, certificación literal de nacimiento, informe de empadronamiento en B. desde 10 de enero de 2006, fe de vida y estado, divorciado, certificado de matrimonio anterior de fecha 24 de diciembre de 1997 con una ciudadana dominicana posteriormente nacionalizada española, con anotación de divorcio por sentencia de 20 de enero de 2011, y documento nacional de identidad; y, de la promotora, certificado de inscripción de nacimiento, informe de empadronamiento en B. desde el 11 de diciembre de 2009, pasaporte expedido en Paraguay el 15 de julio de 2009 y declaración testifical de soltería.

2.- Los promotores se ratifican en su solicitud, presentan un testigo que manifiestan conocer a los interesados y que no hay impedimento para el matrimonio y se celebran las audiencias reservadas.

3.- El Ministerio Fiscal se manifestó en el sentido de oponerse al matrimonio solicitado al considerar que no existe verdadero consentimiento matrimonial. La Encargada del Registro

Civil en el mismo sentido entiende que de lo actuado se infiere ausencia de consentimiento matrimonial, y con fecha 2 de septiembre de 2011 dictó auto acordando denegar la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reafirmando su relación y aportando como documentación adicional informe de convivencia actual del Ayuntamiento de Benalmádena, expedido el 29 de octubre de 2011 y varias declaraciones testificales, en las que los testigos difieren en el tiempo que llevan conviviendo.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación del auto y la Encargada del Registro dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana paraguaya resultan, del trámite de audiencia y demás actuaciones practicadas, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. En sus declaraciones se advierten divergencia respecto a hechos tan

fundamentales como el momento en que se conocieron y el desarrollo de su relación, según el promotor hace 2 años, junio de 2009, según la interesada hace 1 año y 8 meses, noviembre 2009, esta fecha concuerda con su empadronamiento en B., según el Sr. C. iniciaron su relación en noviembre de 2009, según la interesada tres meses después de conocerse, enero de 2010 y, por último el promotor manifiesta que decidieron casarse en la última navidad, diciembre de 2010 en cambio la Sra. V. dice que fue tres meses antes de la solicitud, marzo de 2011, asimismo el promotor dice que han convivido desde noviembre de 2009 en cambio la interesada dice que durante 1 año, es decir junio de 2010 y según su documentación de empadronamiento obtenida una semana antes de las entrevistas tienen domicilios diferentes ambos y diferente al que mencionan como en común.

Respecto a otros datos familiares el promotor menciona que el padre de la interesada ha fallecido cuando la propia Sra. V. al ser preguntada por la residencia de sus padres no dice nada, también menciona el promotor que ella ha tenido 2 hijas, una fallecida, circunstancia que la interesada no menciona, dice que tiene 1 hija que vive con la hermana de ella, en singular, mientras el promotor dice que la hija vive con sus tías que según él son 4. Difieren respecto a los estudios de la interesada, ella menciona que no tiene ninguno y el promotor dice que tiene los estudios básicos, también discrepan respecto a las aficiones del Sr. C. y a los gustos culinarios de ambos y, por último aunque no sea determinante el promotor, al igual que en su matrimonio anterior con una ciudadana dominicana, es 30 años mayor que la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Torremolinos

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (50ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Fuengirola, el día 12 de abril de 2011, Don J., de nacionalidad española, nacido en M. el 8 de noviembre de 1989, y Doña J. S., nacida en S. (Brasil) el 23 de julio de 1986 y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, certificación literal de nacimiento, volante de empadronamiento en M., fe de vida y estado, soltero, y Documento Nacional de Identidad; y, de la promotora, certificado de nacimiento, volante de empadronamiento en F. desde el 18 de enero de 2010, pasaporte brasileño y certificado negativo de matrimonio anterior.

2.- Los promotores se ratifican en su solicitud, presentan dos testigos que manifiestan conocer a los interesados y que no hay impedimento para el matrimonio y se celebran las audiencias reservadas.

3.- El Ministerio Fiscal se manifestó en el sentido de oponerse al matrimonio solicitado al considerar que no existe verdadero consentimiento matrimonial. La Encargada del Registro Civil en el mismo sentido entiende que de lo actuado se infiere ausencia de consentimiento matrimonial, y con fecha 30 de mayo de 2011 dictó auto acordando denegar la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado negando la existencia de las contradicciones en las que se ha basado el auto impugnado.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación del auto y el Encargado del Registro dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña resultan, del trámite de audiencia

y demás actuaciones practicadas, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. En sus declaraciones se advierten contradicciones respecto a hechos tan fundamentales como el momento en que se conocieron, según el promotor la Sra. S. llegó a F. directamente desde su país en marzo de 2008, se conocieron por internet en junio de 2009, personalmente se vieron en noviembre de 2009 y empezaron su relación en diciembre de 2009, según la propia interesada llegó a España a través de B. de vacaciones, actualmente está en situación irregular, en octubre de 2008, de ahí fue a G. y posteriormente a F. en Diciembre de 2009, lo que corrobora su volante de empadronamiento de enero de 2010, es en esas fechas cuando según ella se conocen por internet y se ven e inician su relación en marzo de 2010.

Respecto a otros datos personales, el promotor manifiesta que ella conoce a sus padres de una vez que estuvo en casa, ella menciona que estuvo un par de veces pero no recuerda como era el padre de él, también manifiesta que conoce a una hermana de él y no a su hermano que vive en Md., según el promotor sus dos hermanos viven con sus padres y él en M. Por su parte el promotor equivoca el nombre de la única hermana de ella. En relación con otros datos, el promotor confunde el lugar del domicilio de la interesada, difieren en lo que paga de alquiler y en su distribución según el promotor tiene dos dormitorios según ella tiene 3. También difieren en cuanto a datos laborales, él dice que ella estudió alta cocina en Brasil y que trabajó como chef, sin embargo la propia interesada dice que trabajó de secretaria en una autoescuela, el promotor menciona que ella trabaja como limpiadora en una casa, ella manifiesta que son más de una, desconoce la dirección, y equivoca el sueldo, y ella desconoce los ingresos de él como asesor financiero. Por último discrepan en las mascotas que tiene el promotor, según él son 3 perros y según ella 2 perros y 1 gato, no coincidiendo en ninguno de los nombres y en sus aficiones el promotor manifiesta que han ido juntos a la playa y que ambos nadan, según la interesada no han ido juntos, a él no le gusta mucho y no sabe nadar.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Fuengirola

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (51ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Barcelona, el día 7 de junio de 2011, Don J., de nacionalidad española, nacido en O. (B.) el 6 de julio de 1924, y Doña N., nacida

en S. (Chile) el 28 de mayo de 1959 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 11 de mayo de 2006, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, certificación literal de nacimiento, volante de empadronamiento en B. desde 1986, declaración jurada de estado civil, viudo, certificado de matrimonio anterior, de fecha 7 de junio de 1954, y certificado de defunción del cónyuge anterior de fecha 27 de febrero de 2011 y documento nacional de identidad; y, de la promotora, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, volante de empadronamiento en B. desde 1991, documento nacional de identidad español y declaración jurada de estado civil, soltera.

2.- Los promotores se ratifican en su solicitud, presentan un testigo que manifiesta conocer a los interesados y que no hay impedimento para el matrimonio y se celebran las audiencias reservadas.

3.- El Ministerio Fiscal se manifestó en el sentido de oponerse al matrimonio solicitado al considerar que no existe verdadero consentimiento matrimonial. La Encargada del Registro Civil en el mismo sentido entiende que de lo actuado se infiere ausencia de consentimiento matrimonial, y con fecha 24 de agosto de 2011 dictó auto acordando denegar la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado afirmando que no es cierto que no tengan intención de contraer un verdadero matrimonio y que ya son pareja de hecho.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación del auto y la Encargada del Registro en el mismo sentido dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a

la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre dos ciudadanos españoles, uno de ellos de origen chileno, resultan, del trámite de audiencia y demás actuaciones practicadas, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. En sus declaraciones el promotor deja clara la motivación del matrimonio proyectado, que desde luego no es la propia de la institución sino otra, fundamentalmente de beneficios de contenido económico para la interesada, así manifiesta en varias de las respuestas dadas que se conocían de coincidir en la zona en la que viven y que como ella era enfermera y tanto él como su entonces esposa necesitaban cuidados, ella se ocupó de ellos y, posteriormente cuando falleció su anterior esposa, febrero de 2011, la propuso que se fuera a vivir con él hasta que falleciese, manifestando textualmente “que no hacen vida marital”. Al respecto la interesada coincide en cómo se conocieron aunque manifiesta que viven juntos desde noviembre de 2010, posteriormente en el recurso menciona que se conocieron un año más tarde del que menciona en la entrevista.

Por su parte el promotor menciona que ya antes de que falleciera su esposa anterior modificó su testamento para dejarle su herencia a la interesada, pero posteriormente ante la posibilidad de que unos familiares de él, un hermanastro y una sobrina, pudieran perjudicar a la interesada cuando él hubiera fallecido decidieron casarse para asegurarse de que sus familiares no recibieran nada de su herencia. Todo lo anterior manifestado libremente por el promotor, al que la propia recurrente le reconoce plena capacidad legal y que está en plenas condiciones físicas y psíquicas, ante el Encargado del Registro Civil hace que la conclusión a la que llegaron tanto el Ministerio Fiscal como el propio Encargado se estime ajustada a derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Barcelona

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (113ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Salt (Girona).

HECHOS

1.-Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Salt el día 12 de noviembre de 2010, Don M. de nacionalidad española, nacido en P (G) el día 5 de septiembre de 1990 y Doña S. de nacionalidad marroquí, nacida en, N. (Marruecos) el 1 de marzo de 1993, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, volante de empadronamiento en S. desde el 1 de octubre de 1998, y de la promotora; pasaporte, certificado en extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería, certificado de residencia y poder otorgado a favor de persona para que la represente en el matrimonio, en fecha en que la promotora era menor de edad.

2.-El promotor ratificó su solicitud con fecha 4 de febrero de 2011 y la interesada lo hizo en el Consulado General de España en Nador, el día 6 de abril siguiente, fecha en que ya era mayor de edad, con esta misma fecha fue oída en audiencia reservada, el promotor llevó a cabo ese trámite en el Registro Civil de Salt, con fecha 14 de junio de 2011. Posteriormente presentaron dos testigos que manifiestan que estos no incurren en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución y se opone a la autorización, y el 6 de octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil apreciando que no existe un verdadero consentimiento matrimonial dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la motivación de la denegación no es suficiente y que su matrimonio pretende una unión estable.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y la Encargada se ratifica en la resolución impugnada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede

proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, por poder, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. La interesada era menor de 18 años cuando se formuló la solicitud, otorgó en Marruecos el poder para ser representada en el matrimonio, aunque se ratificó posteriormente una vez cumplida la edad. Aunque las entrevistas no son lo suficientemente extensas ya de principio la interesada manifiesta que su pareja y ella son primos hermanos, las madres de ambos son hermanas, y que no hubo una relación previa entre ellos antes de formalizarse el compromiso, 2 años antes, 2009, de lo que se deduce que este fue acordado por las familias, cuando la interesada tenía 16 años, y a partir de ahí comenzaron su relación, fundamentalmente cuando el promotor iba en vacaciones, según manifiesta el mismo, añadiendo que él fue el que pidió contraer matrimonio pero no recuerda cuando, ambos no contestan cuando se les plantea porque optan por el matrimonio civil en España y no el matrimonio coránico cuando ambos son de confesión musulmana.

Por último difieren en otros temas, como por ejemplo las aficiones de la interesada, ella dice que la lectura y el promotor dice que ver la televisión y la música marroquí, también en los regalos que se han intercambiado, según la interesada ella le regaló un perfume, aunque no se acuerda de la marca y él a ella no le suele hacer regalos sino que le da dinero, según el promotor la regaló un anillo y dinero cuando ella se lo pide y ella a él le regaló también un anillo y perfume, este intercambio de anillos en una relación previa la matrimonio no parece un regalo cualquiera que las partes pudieran olvidar. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución. No obstante lo anterior, no rigiendo en el ámbito del Registro Civil el principio de autoridad de cosa juzgada, es posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salt (Girona).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (114ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Cullera (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Cullera el día 10 de mayo de 2011 Don S. de nacionalidad beninesa, nacido en D. (República de Benín) en 1981, y Doña M. de nacionalidad española, nacida en S. (Alemania) el 22 de julio de 1972, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte, certificado de soltería y certificación de nacimiento, ambos sin legalizar, certificado de empadronamiento en C. y declaración jurada de estado civil, soltero, y, de la promotora, documento nacional de identidad, declaración jurada de estado civil, divorciada, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio anterior, de fecha 8 de agosto de 1993, disuelto por sentencia de divorcio de fecha 28 de julio de 2006.

2.- Con la misma fecha fue oído el testigo presentado y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. El Ministerio Fiscal, considerando que no existe ningún impedimento no se opone a la concesión de lo solicitado y el 6 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manteniendo que su relación es auténtica, que las discrepancias estuvieron motivadas porque el interesado no entiende el español por lo que debía haberse utilizado a un intérprete, solicitando que se retrotraiga el expediente y se reiteren las entrevistas con la participación de un intérprete y que se autorice el matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se reiteró su no oposición a la concesión de la autorización solicitada y el Encargado por su parte se reafirma en la denegación impugnada, disponiendo la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no

desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano de la República de Benín, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Así coinciden en dónde y en el mes en que se conocieron porque el promotor no menciona el año, la interesada menciona que llevan conviviendo un año y de hecho menciona un domicilio que resulta diferente de los dos que constan en las certificaciones de empadronamiento respectivas, respecto al matrimonio el promotor manifiesta que no han pensado en casarse en el Consulado de su país sin embargo su pareja dice que sí, asimismo el Sr. M. dice que no vendrán familiares de su pareja a la boda mientras ella dice que sí y amigos que vendrán de G. preguntados expresamente sobre si la intención del matrimonio es conseguir la residencia o nacionalidad en España, el promotor dice que sí y que la solicitara a continuación mientras que la interesada dice que no y no responde respecto a la solicitud. Respecto a datos personales y familiares, la promotora parece desconocer cómo llegó su pareja a España, según ella desde Francia con su pasaporte, según él en Patera, encontrándose en situación irregular, aunque según la promotora él tiene número de identificación de extranjero, y sin haber realizado trámite alguno para obtener la residencia según el promotor y preparando la residencia por arraigo según la interesada. Por otra parte el interesado a las preguntas sobre algunos datos familiares responde con incongruencias, por ejemplo respecto a los datos de sus propios padres, no mencionando ni siquiera que están fallecidos, según dice la interesada. Según el promotor habla español, inglés, francés y árabe y su pareja solo habla castellano, según ella además habla gallego y portugués, en este sentido las alegaciones de la recurrente sobre las dificultades del promotor para entender las preguntas y la necesidad de un intérprete, no parecen sostenerse cuando dicen que se entienden en español, y si no es así, la falta de un idioma común sería uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia.

Por último también discrepan en otros temas como la tenencia o no de vehículo, ambos dicen que sí, el mismo modelo, y que el otro no tiene, si ella ha viajado o no al extranjero, la promotora no sabe el nombre de la localidad de nacimiento de él y dice que es un pequeño pueblo sin embargo él menciona que es una localidad grande. Todo ello, que ya fue reflejado en el auto impugnado, se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cullera (Valencia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (115ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Reinosa (Santander).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Reinosa el 5 de agosto de 2011, Don D. de nacionalidad española, nacido el 4 de marzo de 1981 en R. y Doña B. de nacionalidad china, nacida el 24 de mayo de 1984 en H. (China), iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; certificación de nacimiento, volante de empadronamiento en R. desde el 11 de enero de 2011, declaración jurada de estado civil, soltero, documento nacional de identidad y certificado de baja en el Registro de Matrícula del Consulado General de España en Pekín, y de la interesada; declaración ante notario de estado civil, soltera, certificado de nacimiento y pasaporte.

2.- Con fecha 17 de agosto de 2011 los promotores fueron oídos en audiencia reservada y comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocían a los promotores y les constaba su deseo de contraer matrimonio y la no existencia de impedimentos. Posteriormente el Ministerio Fiscal al ser requerido para su informe previo propone que se solicite información a las autoridades de extranjería sobre la situación de la ciudadana china en España, al respecto consta por informe que la Sra. L. llegó a España en el mes de julio de 2011, mediante visado de 90 días obtenido por carta de invitación y que, en ese momento, 13 de octubre, había transcurrido el plazo de autorización para estar en España.

3.-En vista de lo anterior el Ministerio Fiscal se opone a la autorización del matrimonio y, con fecha 27 de octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil de Reinosa estimando, que a la vista de las audiencias y de la información obtenida, se podía considerar que se trataba de un matrimonio de complacencia, sin que hubiera un verdadero consentimiento matrimonial, dictó auto denegando la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución a los promotores y al Ministerio Fiscal, aquellos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la relación se inició en China cuando el promotor se encontraba trabajando, que la interesada ya había viajado a España en otras ocasiones con visados temporales motivo por el que no se había empadronado aunque convivían en su domicilio, adjunta documentación como fotografías, informes de llamadas telefónicas, comunicaciones con la empresa para la que trabaja y fundamentalmente copia de los pasaportes con visados otorgados por las autoridades chinas al promotor desde junio del año 2006, y por las autoridades españolas en China a la interesada, en los años 2009, 2010 y 2011, y comunicaciones con el Consulado de España en Pekín, durante su estancia en China, noviembre de 2010, para tramitar los visados y obtener información sobre la documentación necesaria de la ciudadana china para contraer matrimonio.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que, con fecha 10 de noviembre de 2011, se adhiere al mismo entiendo que la relación ha quedado acreditada y que procede la estimación del recurso y la autorización del matrimonio. Seguidamente la

Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 16-1ª de octubre, 3-1ª de noviembre, 21-2ª y 3ª y 28-2ª de diciembre de 2006; 6-3ª y 14-3ª de febrero, 30-4ª de abril, 10-2ª, 28-5ª de mayo, 9-4ª de julio, 28-6ª de septiembre, 1-3ª de octubre y 18-1ª de diciembre de 2007; y 31-3ª de enero de 2008.

II.- Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos - especialmente en los matrimonios entre español y extranjero - en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. e. c.).

V.- En este proyectado matrimonio entre un nacional español y una ciudadana argentina los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores como para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de simulación. Las entrevistas realizadas a los promotores se pueden estimar suficientes, sus respuestas resultaron conformes con las preguntas que se les formularon, el examen conjunto y global de ambas audiencias no revela contradicciones significativas ni desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia para alcanzar la plena convicción de que existe una utilización fraudulenta de la institución matrimonial y con el escrito de recurso se ha aportado documental que avala la relación alegada, debiendo significarse respecto a la situación de irregularidad de la residencia de la interesada que, además de no ser determinante, fue apreciada cuando solo habían transcurrido unos días desde que había finalizado el tiempo del último visado concedido, y así lo ha apreciado también el Ministerio Fiscal que se adhiere al recurso presentado entendiendo que se han disipado las dudas sobre la realidad del consentimiento matrimonial manifestado.

VI.- Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de Octubre de 1993, “ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

2º.- Declarar que no hay obstáculos para la celebración del matrimonio.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Reinosa (Santander).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (116ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

No procede la autorización porque, no habiendo comparecido uno de los interesados para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Burgos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Burgos, el día 5 de enero de 2011, Doña Mª-L. nacida en M. (Ecuador) el 28 de marzo de 1975 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 29 de julio de 2010 y Doña Mª-P. nacida en T. (Perú) el 27 de junio de 1967 y de nacionalidad peruana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer, por poder, matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: de la promotora, certificación de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, documento nacional de identidad, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento en B. desde el 28 de enero de 2004, y de la interesada; certificación de nacimiento, certificado de domicilio en Lima, declaración jurada de estado civil, certificado negativo de matrimonios anteriores y poder notarial otorgado el 3 de noviembre de 2010 a un ciudadano español para que la represente en la celebración del matrimonio.

2.- La promotora comparece con fecha 12 de enero en el Registro Civil y se le práctica la audiencia reservada, al día siguiente comparecen dos testigos que manifiestan conocer a los interesados y que no hay impedimento para el matrimonio y se solicita del Consulado General de España en Lima que se convoque a la Sra. Á. para practicar la audiencia correspondiente. El Consulado remite por 2 veces oficio a la interesada para que se ponga en contacto con el Consulado para realizar una diligencia solicitada por el Registro Civil de Burgos, al no haber

comparecido el Consulado comunica a dicho Registro, con fecha 6 de abril de 2011, dicha circunstancia, requerida la promotora esta manifiesta ante el Registro que había un error en el domicilio que facilitó y facilita el correcto. El Consulado de España en Lima se dirige, en otras 2 ocasiones, a la interesada para que se ponga en contacto a fin de llevar a cabo lo solicitado por el Registro de Burgos, sin que dicha comparecencia se produzca, lo que se comunica al Registro Civil instructor con fecha 16 de agosto de 2011.

3.- El Ministerio Fiscal se manifestó en el sentido de oponerse a lo solicitado y propone el archivo de las actuaciones. La Encargada del Registro Civil entiende que la falta de comparecencia de una de las solicitantes, pese a haber sido requerida, supone la falta de un trámite esencial de los que conforman el expediente matrimonial y dictó auto acordando denegar la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, con fecha 10 de octubre de 2011, la promotora, Sra. Y. interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar la no comparecencia en que la interesada no había recibido ninguna comunicación porque es muy difícil llevar a cabo las notificaciones en esa zona de la ciudad de L. solicitando una nueva citación a través de medios telefónicos y telemáticos.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación del auto, al igual que la Encargada del Registro que dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil, por poder, en España entre una ciudadana española de origen dominicano y una ciudadana peruana resulta que la primera fue oída en el Registro Civil de Burgos con fecha 12 de enero de 2011, pero la segunda no ha podido ser entrevistada, a través del Consulado de España en Lima, ciudad en la que está domiciliada, porque no ha comparecido tras 4 intentos de notificación para que contactara con dicho Consulado, esos intentos se produjeron desde febrero a agosto de 2011, con requerimiento intermedio a la promotora española que corrigió el domicilio facilitado, sin que a juicio de este Centro quede justificada la no presencia de la Sra. Á. por las dificultades de notificación en su lugar de residencia, puesto que si eso es así y debía ser conocido por ella, pudo ante la falta de notificación oficial contactar con el propio Consulado, sobre todo tras el requerimiento efectuado a su pareja por el Registro Civil en España.

Visto lo anterior y teniendo en cuenta que la audiencia reservada solo puede cumplir su finalidad primordial de formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo comparecido una de las interesadas, queda imposibilita la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su inscripción. Lo anterior no ha de impedir que, no rigiendo en el ámbito del Registro Civil el principio de cosa juzgada, sea posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Burgos.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (131ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Cartagena.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña Mª-G. nacida en Paraguay y de nacionalidad paraguaya, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, certificado de acta

de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal no se opone a la autorización del matrimonio. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de julio de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana paraguaya y de las audiencias

reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que fue hace año y medio mientras que él dice que hace un año y dos meses. Desconocen las fechas y lugares de nacimiento del otro. El interesado dice que ella tiene cuatro o cinco hermanos cuando ella declara tener siete hermanos. El interesado declara que cuando se casen vivirán en C. mientras que ella dice que vivirán en T-P. Discrepan en gustos, aficiones, así por ejemplo ella dice que tanto a ella como a él les gusta la fiesta y la playa, mientras que él afirma que le gusta el póker y la música y a ella la música y chatear, tampoco coinciden en los artistas favoritos de cada uno y en los regalos que se han hecho. Ella declara que tiene el pasaporte retirado, y él sabe que ella no es encuentra en una situación legal en España. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (162ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Reus.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña C. nacida en España y de nacionalidad española y Don M. nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento, certificado de soltería Sr. S. y fe de vida y estado Sra. F.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 09 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones como que el interesado afirma en un momento al igual que la Sra. F. que se conocieron hace un año y diez meses y por otro lado dice que fue el 05 de octubre de 2010 lo que su pondría que se conocen hace 9 meses. Declara él que decidieron contraer matrimonio en diciembre de 2010 en un bar y ella declara hace 8 meses en casa.

Por otra parte declaran convivir sin embargo él manifiesta que ella fuma mientras que la interesada dice que no, asimismo dice ella que el ultimo regalo fue en San Valentín y él dice que 10 ó 15 días antes de la audiencia reservada.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 15 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Reus.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (163ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don C-F. nacido en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana y Doña N. nacida en Marruecos y de nacionalidad, marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declarativa de datos, certificados de nacimientos, volantes de empadronamiento de los interesados y certificados de soltería de la Sra. El H.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que no conocen ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 28 de Octubre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes,

que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del "consentimiento matrimonial", no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al "estado civil" y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes.

Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de

denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano ecuatoriano y una ciudadana marroquí residentes en España, de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así la Sra. El H. declara que se conocieron en una discoteca el 11 de mayo de 2010 que han convivido un año y un mes, que decidieron casarse en Marruecos mientras que el Sr. M. declara que se conocieron por un amigo el 09 de junio de 2010 que han convivido un año y seis meses y que decidieron contraer matrimonio en D.

Por otra parte ignoran ambos el número de hermanos de la pareja él dice que tiene cuatro y ella también cuatro mientras que ella dice que él tiene tres hermanos y ella también tres. Declara el interesado que es carpintero y que actualmente no trabaja mientras que ella declara que actualmente es repartidor de la empresa M. el Sr. M. ignora lo estudios de su pareja y declara que se ayudan mutuamente económicamente mientras que ella dice que le ayuda él con 300 euros mensuales. Respecto de las aficiones declara el interesado natación y atletismo y su pareja atletismo y bailar mientras que ella manifiesta que él fútbol y ella la playa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (166ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña F. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Don J. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento y certificado de divorcio Sra. B.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 08 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones como que dice haberse conocido hace seis meses en un bar y que decidieron casarse hace dos meses según el interesado mientras que ella declara tres meses, dice él que le presentó un amigo que era antiguo vecino de él mientras que ella declara que le presentó un primo suyo. Carecen de un idioma común fluido de comunicación y declara la interesada que conviven juntos en casa de él, describiendo la vivienda mientras que él manifiesta que vive solo con su madre y que no convive con ella indicando la dirección donde reside la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (168ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante legal, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don E. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa y Doña C-T. nacida en Brasil y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, extracto del registro de nacimientos y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 6 de mayo de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos, mediante representante legal, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que en mayo de 2010 y él dice que en enero de 2010. También difieren en la frecuencia de la comunicación ya que ella dice que físicamente porque conviven, mientras que él declara que se veían los fines de semana. La interesada dice que decidieron contraer matrimonio hace poco tiempo y él dice que el 15 de mayo que era el cumpleaños de ella. La interesada desconoce alguno de los nombres de los hermanos de él, la hermana mayor de él falleció y ella parece que desconoce este dato. También desconoce la profesión del interesado declarando que es músico cuando él manifiesta que trabajaba en la construcción en su país y en España era vendedor ambulante aunque ahora está en paro, también desconoce que él habla italiano. Por otro lado y aunque no es determinante, la interesada es diez años mayor que el interesado. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (169ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Bilbao.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña Mª-S. de nacionalidad española y Don W. de nacionalidad argelina iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declarativa de datos, certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. W. certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. M. y volantes de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 25 de Mayo de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano argelino, de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la Sra. M. declara que se conocieron en una cafetería hace 2 años y cuatro meses que tiene tres hijos de dos relaciones anteriores mientras que él manifiesta que son de tres relaciones diferentes, que estos están en un centro de la diputación sin que convivan con ella por no tener condiciones y carecer de ingresos. Manifiesta que vive en un piso de su tía con su pareja desde hace solo dos meses y no les cobra nada viviendo de la renta básica del Sr W. que aunque reside con ella él está empadronado en otro domicilio donde tiene una habitación alquilada por 200 euros aunque ahora no la utiliza, y que decidieron casarse hace año y medio antes de que fuera detenido. Por otra parte y según informe del Policía Municipal cada uno reside en domicilios diferentes sin que exista una convivencia real y efectiva en el domicilio declarado por los interesados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Bilbao.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (44ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en España y de nacionalidad española y Don M-A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados y certificado de soltería Sr. M.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 05 de Septiembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la estimación del recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, mientras el informe del fiscal no se opone a la autorización para la celebración del matrimonio proyectado, el auto del

encargado deniega la citada autorización en base a que se considera que de las audiencias reservadas se pudiera estar intentando utilizar la institución del matrimonio para fines distintos a los previstos para la misma, es decir la regularización de la situación irregular del Sr. A. Sin embargo de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas y las alegaciones de los interesados, pruebas documentales y declaraciones de testigos tienen entidad suficiente como para deducir que concurre un verdadero interés en la celebración del matrimonio a los fines previstos por la legislación vigente. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierten contradicciones sino coincidencia de respuestas dadas a las preguntas que se formularon, lo que proporciona elementos de juicio necesarios para deducir la legalidad de su pretensión. Así coinciden datos personales, familiares gustos personales y el mantenimiento de una convivencia efectiva y continuada en el tiempo como queda acreditado documentalmente.

Sin que pueda ser determinante como único elemento para la denegación la situación irregular del interesado, ya que el interesado mantiene una situación integrada en la localidad y en el domicilio donde reside la pareja.

VI.- Por lo que teniendo en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”.

Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y ordenar que se autorice la celebración del matrimonio entre Don M-A. y Doña M.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (49ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil de Águilas (Murcia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Águilas el día 20 de julio de 2011, Don El H. de nacionalidad marroquí, nacido en O-Z, K. (Marruecos) el 26 de noviembre de

1985, y Doña A. de nacionalidad española, nacida en L. (M) el 25 de mayo de 1989, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; pasaporte, copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería, certificado de inscripción en el Consulado General de Marruecos en Almería, declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento en Á. desde el 7 de julio de 2011, anteriormente estuvo empadronado en V. (A), y, de la promotora; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento en A. desde el 7 de julio de 2011.

2.- Con la misma fecha los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos que manifiestan ser amigos de los contrayentes, y declaran que estos no incurrir en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el mismo día los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 18 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar y restar importancia a las discrepancias apreciadas, alegando que conviven en Á. aportando volante de empadronamiento conjunto en el que son los últimos inscritos de 10 personas.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado se ratifica en la resolución apelada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Discrepan en relación con el tiempo que hace que se conocen, así la interesada dice genéricamente que “desde hace tiempo” y el interesado no contesta, también respecto al tiempo que llevan de relación sentimental, según la promotora un año y medio, según su pareja un año, en ese tiempo según ella han tenido relación vía teléfono móvil de vez en cuando y que se ven casi todos los días, sin embargo ambos no coinciden al dar los números de teléfono del otro, y él interesado por su parte responde de forma que parece no entender las preguntas, respecto a cuando decidieron casarse según la Sra. M. fue poco tiempo antes de la solicitud, según su pareja fue hace mucho tiempo, preguntados sobre si han convivido antes del matrimonio la interesada dice que no y el Sr. E. al ser preguntado sobre con quien vive su pareja dice “conmigo”, a la misma pregunta ella responde que si convive con alguien pero no dice que sea él, por último al ser preguntados donde van a fijar su residencia tras el matrimonio ella no responde y él dice que en Á.

En cuanto a datos familiares y personales, ninguno da el nombre completo del otro ni de los padres de su pareja y contestan de forma ininteligible a las preguntas sobre sus propios datos familiares y los de su pareja. La interesada no responde respecto a la profesión de su pareja, ni sobre los estudios que ha realizado, dice genéricamente que trabaja en el campo y que gana unos 300 euros, el interesado manifiesta que es agricultor, la empresa para la que trabaja, que tiene estudios de bachiller y que gana unos 800 euros, él por su parte tampoco sabe los estudios que ha realizado ella sí dice que habla un poco de árabe, a este respecto ella no contesta y a la pregunta sobre si él habla otros idiomas dice que sí, sin especificar, él sin embargo dice que habla árabe, un poco de francés y un poco de español. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Águilas (Murcia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (50ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Berga (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Berga el día 17 de diciembre de 2010 Don A. de nacionalidad georgiana, nacido en T. el 7 de septiembre de 1980, y Doña E-M^a. de nacionalidad española, nacida en B. el 2 de agosto de 1987, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, declaración jurada de estado civil, soltero, certificación de nacimiento, certificado de estado civil, soltero, pasaporte y volante de empadronamiento en B. desde el 15 de mayo de 2010, y, de la promotora; documento nacional de identidad, declaración jurada de estado civil, soltera, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento en L´E. (B) desde el 28 de septiembre de 2004.

2.- En el mismo día los interesados ratificaron la solicitud, fue oído el testigo presentado, y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. Posteriormente el Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización solicitada, considerando que la intencionalidad del matrimonio no es la propia de la institución y el 18 de agosto de 2011 la Encargada del Registro Civil, en el mismo sentido estima que concurre la falta de un verdadero consentimiento matrimonial, y dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar el resultado de las audiencias en las dificultades con el idioma español del promotor extranjero y alegando la que tienen una verdadera relación e incluso que conviven desde hace tiempo, aportando volante de empadronamiento en el mismo domicilio desde febrero de 2011, documentación acreditativa de las visitas de la promotora al interesado cuando estuvo en prisión, 3 veces en el año 2006 y 5 en 2007, no consta el año 2008 y 1 en el año 2009. La Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1^a y 20-3^a de julio, 1-4^a, 7-3^a y 9-2^a de septiembre, 9-1^a, 3^a y 5^a de octubre, 14-2^a, 5^a y 6^a de noviembre y 13-4^a y 5^a de diciembre de 2006; y 25-1^a, 3^a y 4^a de enero, 2-1^a, 22-2^a, 27-3^a y 28-4^a de febrero, 30-5^a de abril, 28-6^a, 30-4^a de mayo, 11-3^a y 4^a y 12-3^a de septiembre, 29-4^a y 6^a de noviembre, 14-1^a y 4^a y 26-5^a de diciembre de 2007; 24-4^a de abril y 19-2^a de diciembre de 2008 y 23-6^a y 7^a de abril y 12-2^a de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a

la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano georgiano resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Aunque las entrevistas de las que existe constancia en el expediente no son amplias y por tanto no llegan a mostrar el verdadero conocimiento mutuo que tienen los solicitantes de las circunstancias personales, familiares y laborales que comporta toda relación sobre todo si se extiende desde el año 2004 como alegan en su recurso, si es claro que el Sr. N. pese a estar empadronado en España desde el año 2000 permanece en situación irregular, y declara ante el Registro Civil que “en primer lugar quiere casarse para obtener los papeles, que si no se casarían ahora”, añadiendo la Sra. S. que sabe que “casándose con ella tendrá más facilidad para adquirir la nacionalidad española, pero que no lo hace con ese fin”, sin que del resto de las respuestas se deduzca que tiene problemas de comprensión del idioma, como alegan en su recurso, cosa poco probable teniendo en cuenta además que el interesado lleva 10 años en España y, en todo caso debe significarse que esas dificultades supondrían la falta de un idioma común, circunstancia esta que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia.

Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe al menos en uno de los promotores, por propia declaración, voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución sino para lograr una situación legal en España que, salvo prueba en contrario, hasta el momento de solicitar el matrimonio no ha sido conseguido. No obstante, no rigiendo en el ámbito del Registro Civil el principio de autoridad de cosa juzgada, es factible reiterar un expediente o unas actuaciones ya decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Berga (Barcelona).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (51ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Baza (Granada).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Baza el día 9 de septiembre de 2011, Don J-M. de nacionalidad española, nacido en P del D.(V) el día 27 de octubre de 1973,) y Doña L., de nacionalidad marroquí, nacida en N. (Marruecos) el 22 de octubre de 1966, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificación de matrimonio anterior, de fecha 4 de mayo de 1994, con anotación de sentencia de divorcio de fecha 13 de septiembre de 2006, declaración jurada de estado civil, divorciado, y certificado de empadronamiento en B. desde el 1 de junio de 2011, y de la promotora; pasaporte, certificado en extracto de acta de nacimiento, declaración jurada de estado civil, divorciada, certificación de sentencia, de fecha 21 de mayo de 2008, del Tribunal de Primera Instancia de Nador, declarando el divorcio definitivo del anterior matrimonio del año 1988, y volante de empadronamiento en B. desde el 30 de mayo de 2011.

2.- Con la misma fecha los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos que manifiestan que estos no incurrir en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 23 de septiembre de 2011 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 6 de octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ambos llevan tiempo conviviendo antes en dos localidades de Valencia, en una de las cuales ya se les denegó la autorización de matrimonio y ahora en B. aportando volantes de empadronamiento de ambos sitios. Consta en el expediente por información facilitada por el Registro Civil de Alfauir (Valencia), que los interesados promovieron allí expediente de autorización de matrimonio con fecha 20 de diciembre de 2010, y que tras la correspondiente tramitación les fue denegada su petición con fecha 23 de marzo de 2011, sin que el auto correspondiente fuera impugnado mediante recurso.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y la Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Consta que los interesados ya solicitaron autorización para contraer matrimonio en el Registro Civil de Alfauir (Valencia) 9 meses antes de la que ahora se examina, siéndole denegado mediante auto de 23 de marzo que no fue recurrido, sino que los interesados decidieron cambiar de Registro empadronándose en Baza, 2 meses después. Según la interesada iniciaron su relación sentimental hace 2 años y desde entonces ha sido continuada, según el promotor al principio se veían esporádicamente y más continuamente desde hace 1 año y medio, añade que decidieron mutuamente casarse hace medio año, marzo de 2011, en casa de ella, en esa fecha les denegaron la autorización solicitada anteriormente, según la interesada ella le dijo que quería casarse desde el principio de su relación, después se lo propuso él aunque no recuerda donde. Asimismo discrepan en el tiempo que llevan viviendo juntos, según el Sr. M. 1 año y medio, según ella 2, a este respecto cabe significar que los volantes de empadronamiento correspondientes a los domicilios anteriores en V. no resultan muy clarificadores respecto a las fechas y movimientos y, además, según el auto del Encargado del Registro de Alfauir que les denegó la autorización anterior, uno de los motivos fue que según el informe de la Guardia Civil en el domicilio facilitado como común en realidad solo vivía esporádicamente la Sra. E. no el interesado.

En cuanto a datos familiares y personales, el promotor dice que no sabe el segundo apellido de su pareja, cuando la realidad es que no tiene, y tampoco conoce los apellidos de los padres de ella, ésta por su parte confunde el segundo apellido de él con el del padre de su pareja. La interesada sabe que él estuvo casado pero no sabe cuánto tiempo, ni tampoco sabe los años que lleva divorciado, el promotor tampoco sabe el tiempo que ella estuvo casada ni tampoco el tiempo que lleva separada y divorciada, por otro lado sabe que ella son 12 hermanos pero no sabe cuál es el mayor ni el menor, y dice conocer solamente el nombre de uno, que no coincide con los que la propia interesada facilita. El promotor sabe que ella tiene un hijo ya casado y que el independiente aunque no menciona que vive en Alemania, asimismo al ser preguntado si su pareja tiene nietos dice que no, lo que legalmente es cierto pero la Sra. E. dice que va a tener uno porque su nuera está embarazada.

Respecto a otros datos, según el promotor su pareja entró en España con visado y no tiene residencia legal, sin embargo la interesada dice lo contrario, que entró sin visado y que si tiene permiso de residencia, en el expediente no ha quedado acreditado dicho extremo y tampoco en el expediente anterior, según informó en su momento la Guardia Civil. En relación con los

datos laborales, según el promotor la profesión de ella ha sido trabajar en una gasolinera y en una fábrica de dulces, según la interesada su profesión es “ninguna”, desconoce los estudios de su pareja y discrepan respecto a sus horarios de comida. Por último preguntado sobre que harán si les es denegada su petición, el promotor dice que volverán a insistir, según su pareja seguirán como hasta ahora. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Baza (Granada).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (61ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Sarria (Lugo).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M-Y. nacida en Honduras y de nacionalidad hondureña y Don J. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados y fe de vida y estado Sr. V.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de

1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana hondureña y un ciudadano español y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contracciones e imprecisiones respecto del momento y lugar donde se conocieron los interesados declaran ante la Brigada de Extranjería según el Sr. V. en S. en un Pub llamado "Á." el 09 de noviembre de 2009 y ella manifiesta que fue en un bar llamado "El r." en la P de S-J. en noviembre de 2009, estos datos incluso no coinciden con los declarados por ellos en la audiencias reservadas donde dicen haberse conocido según el Sr. V. en octubre de 2010 mientras que ella dice diciembre de 2009. Tampoco coinciden respecto del momento que inician la convivencia ya que el interesado declara desde febrero de 2011 y ella dice abril de 2010, estos datos ni siquiera coinciden con el declarado a la Brigada de Extranjería donde declararon vivir juntos desde enero de 2010. Finalmente el Sr. V. desconoce datos básicos personales y familiares de los hermanos de su pareja.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sarria (Lugo).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (93ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Oropesa del Mar.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña M. del C. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, copia literal de partida de nacimiento, fe de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 29 de septiembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto, e interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo se conocieron ya que mientras que ella declara que fue en la playa paseando, él iba con su familia a la que ella conoce y quedaron para cenar al día siguiente que fue cuando comenzaron la relación sentimental, sin embargo él dice que se conocieron en la playa ella estaba sentada fumando, y la relación sentimental comenzó tres días después. El interesado declara que ella fue la que le propuso matrimonio en casa de ella, sin embargo ella dice que surgió hablando y no recuerda si estaban en su casa o en la de él. La interesada desconoce el lugar de nacimiento del interesado así como su fecha de nacimiento, tampoco sabe los apellidos de sus padres. Desconoce su dirección y él desconoce el teléfono de ella. Ella declara que vivirán en casa de la hermana de él porque la casa es muy grande, y él dice que vivirán en casa de ella porque vive sola con su hermana y tiene dos habitaciones; el interesado dice que el régimen económico será “todo será de los dos” y ella dice que le ha comentado lo de la separación de bienes. El interesado declara que han hablado sobre como atenderán los gastos familiares y ella dice que no lo han hablado. Discrepan en gustos culinarios, si han tenido o no operaciones, etc. Por otro lado, aunque no es determinante, la interesada es 22 años mayor que el interesado. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Oropesa de Mar (Castellón).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (97ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez encargada del Registro Civil de Guillena.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña E-M. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, copia literal de acta de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 24 de octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto, e interesa la confirmación de la resolución recurrida. La Juez encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados no tienen idioma común ya que él dice que se comunican en italiano porque ella habla ese idioma, pero ella dice que no lo habla mucho, y que se comunican en español, porque si a él le habla despacio en español, lo entiende, en este sentido, uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan un idioma común, y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Desconocen los lugares de nacimiento del otro, nombres de los padres, hermanos, el interesado desconoce el nombre de uno de los hijos de ella, así como el nombre del padre de los niños. Desconocen estudios de cada uno, idiomas que hablan, gustos, aficiones, comidas favoritas, ingresos mensuales que tienen, trabajos que ha realizado el interesado, etc. Discrepan en cuando y como decidieron contraer matrimonio ya que ella dice que hace dos o tres meses en la cama, mientras que él dice que hace un mes en diferentes lugares. Según la testigo, que es hermana de ella, los interesados sólo han convivido durante una semana No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Guillena (Sevilla).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (150ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Premiá de Mar.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don O-G. nacido en República Dominicana y de nacionalidad dominicana y Doña D. nacida en República Dominicana y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del

Registro Civil mediante auto de fecha 15 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la interesada desconoce datos básicos personales y familiares como la edad de su pareja dice 36 Años y son 33 años y los nombres, edades y demás datos de sus cuatro hijos, también ignora gustos y costumbres como la comida que le gusta y su color favorito. El Sr. J. desconoce el lugar donde trabajó su pareja, dice el interesado que sabe bricolaje y ella

dice que no, manifiesta que tiene carnet de conducir de su país y ella dice que él no tiene carnet. Por otra parte declara la interesada que se conocen hace un año, que no viven juntos y que decidieron casarse hace tres meses en su casa. Finalmente declara la Sra. S. que casándose pretenden regularizar la situación del Sr. J. y la policía local de P de M. informa que el interesado se ha empadronado de forma fraudulenta ya que nunca ha residido en la citada localidad.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Premio de Mar (Barcelona).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (151ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto de la encargada del Registro Civil de Torremolinos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en Nigeria y de nacionalidad nigeriana y Doña N. nacida en Alemania y de nacionalidad alemana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declarativa de datos, certificados de nacimientos, volantes de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que no conocen ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El encargado del Registro Civil de Torremolinos mediante auto de fecha 13 de Junio de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Con fecha 21 de junio de 2011 el fiscal solicita la nulidad del auto de 13 de junio de 2011 por no habersele dado traslado del expediente para la emisión del informe.

4.- Con fecha 05 de julio de 2011 la encargada del registro civil de Torremolinos dicta auto anulando el de fecha 13 de junio de 2011 por haberse omitido el preceptivo informe del fiscal.

5.- con fecha 29 de julio de 2011 el fiscal informa desfavorablemente la autorización del matrimonio proyectado. La Encargada del registro civil dicta auto de 09 de septiembre de 2011 autorizando el matrimonio proyectado.

6.-Notificados los interesados y el Ministerio Fiscal, éste se opone a la autorización de la celebración del matrimonio y presenta el correspondiente recurso con fecha 17 de septiembre de 2011. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento

matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes.

Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano nigeriano y una ciudadana alemana residentes en España, de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así en el examen del expediente el encargado del registro Civil de Torremolinos emitió un primer auto donde denegaba la autorización en base a la audiencia reservada celebrada el 12 de abril de 2011, posteriormente emite un nuevo auto de fecha 09 de septiembre de 2011 donde autoriza la celebración sin que conste en el expediente que se celebraran nuevas audiencias y por lo tanto en base a la misma que celebraron el 12 de abril de 2011.

El informe del fiscal considera en base a las audiencias reservadas celebradas que existe una serie de desconocimiento y contradicciones de la pareja como que dice que trabaja como camarera de hotel y ella dice que no trabaja, desconocen los estudios realizados, no coinciden en el momento que iniciaron su relación ella dice hace tres años y que decidieron casarse hace dos años mientras que él señala dos años y un año. Respecto del tiempo que llevan viviendo juntos él dice que hace año y medio y ella que tres años. Por otra parte a la vista de la audiencia reservada declaran tener un hijo en común de año y dos meses, manifiesta el interesado que convive solo hace año y medio. Declara el Sr. A. que la niña nació en Alemania y que no ha sido inscrita su paternidad por no tener papeles y no poderse desplazar, dicha situación irregular la tiene el interesado igualmente en España sin que le impida el desplazamiento, declara que los tres viven en el mismo domicilio aunque actualmente su pareja esta en Alemania visitando a su madre enferma

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto por la fiscalía y denegar la autorización del matrimonio proyectado de Don J. y Doña N.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Benalmadena.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (154ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Burgos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don R. nacido en España y de nacionalidad española y Doña I. nacida en Ucrania y de nacionalidad ucraniana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de divorcio Sra. I. volante de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. P.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 16 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana ucraniana y un ciudadano español y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara la interesada que se conocen desde noviembre de 2010, que regreso a su país y volvió en abril de 2011, desde entonces viven juntos en casa del interesado que ella no trabaja y que su novio solo los fines de semana pero es él quien corre con todos los gastos. Que su pareja no le habla nada de su familia solo sabe que sus padres han fallecido y que hace dos o tres meses han decidido casarse mientras que él manifiesta cuatro meses, que por ahora ella no va solicitar la nacionalidad española ya que tiene actualmente un visado por tres meses mientras que él dice que no lo sabe que si imagina que si la solicitara. Por otra parte ambos ignoran la fecha de nacimiento de su pareja, declara el interesado que han realizado un viaje a C. en agosto y ella dice que no han viajado juntos, manifiesta ella que hacen deporte con aparatos en casa y su pareja suele ir al gimnasio y él dice que ella no y

él va al gimnasio y corre, declara ella que la ocupación en su país era estudiar Económicas mientras que él declara que ella trabajaba en un banco.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Burgos.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (157ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Adeje.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña E. nacida en España y de nacionalidad española y Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados, certificado de soltería Sr. B. y fe de vida y estado civil Sra. U.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 29 de Septiembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, tanto el auto del encargado como el informe del fiscal deniegan la citada autorización en base a que se considera que se pudiera estar intentando utilizar la institución del matrimonio para fines distintos a los previstos legalmente, es decir la regularización de la situación irregular del Sr. B. Sin embargo de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas y las alegaciones de los interesados, pruebas documentales y declaraciones de testigos y familiares tienen entidad suficiente como para deducir que concurre un verdadero interés en la celebración del matrimonio a los fines previstos por la legislación vigente. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierten contradicciones sino coincidencia de respuestas dadas a las preguntas que se formularon, lo que proporciona elementos de juicio necesarios para deducir la legalidad de su pretensión. Así coinciden datos personales, familiares gustos personales y el mantenimiento de una convivencia efectiva y continuada en el tiempo como queda acreditado documentalmente. Sin que pueda ser determinante como único elemento para la denegación la situación irregular del interesado, ya que el interesado mantiene una situación integrada en la localidad y en el domicilio donde reside la pareja al menos desde el 18 de febrero de 2005 como consta en el padrón municipal.

VI.- Por lo que teniendo en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el

Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y ordenar que se autorice la celebración del matrimonio entre Don A. y Doña E.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (158ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Sonseca.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M-T. nacida en España y de nacionalidad española y Don Z. nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento de los interesados y certificación de divorcio Sra. C.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 16 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra

los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la Sra. C. declara que se conocen desde octubre de 2010 y que fue en un bar en S. que iniciaron su relación sentimental al mes de conocerse y que decidieron contraer matrimonio al mes y medio de iniciar su relación afectiva mientras que él declara que fue a los cuatro o cinco meses de vivir juntos, según la interesada solo han convivido desde febrero 2011 en S. mientras que él declara que han vivido juntos en T. y en S. y que conviven desde hace un año. Manifiesta la interesada que se ha realizado una operación para no tener más hijos, circunstancia no mencionada por el interesado. Por otra parte no coinciden respecto de los últimos regalos él dice que le compro ropa y zapatillas por su cumpleaños y ella a él un chándal después del Ramadán hace dos meses y medio, mientras que ella dice que a él le regaló un perfume hace dos o tres semana y a ella también un perfume sin motivo alguno.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sonseca (Toledo).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (159ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Amposta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña F. nacida en España y de nacionalidad española y Don M-E. nacido en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de estado civil de divorciado Sr. M. y volantes de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 21 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano ecuatoriano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la Sra. C. declara que se conocieron en una discoteca en la playa de San C. hace seis meses mientras que él declara hace un año y que fue en la playa, que llevan conviviendo cinco meses él dice cuatro y que decidieron casarse a los dos meses de conocerse en casa de su madre que es donde conviven mientras que él dice que hace unos dos o tres meses. Declara la interesada que su cónyuge le ha dicho que no ha estado anteriormente casado mientras que él dice que sí y aporta documentación en el expediente de su estado civil de divorciado, que trabaja en el campo pero que ahora está de baja mientras que él declara que ella trabaja en una lavandería y que comienza a trabajar a las doce de la mañana. Ignora la Sra. C. el número de teléfono de su pareja, así como si escucha o no la radio ella dice que ambos "radio tele-taxi" y él dice que no que solo escucha música grabada y que ella "cadena dial", desconoce las aficiones de su pareja y dice que le gustan los espaguetis y él dice la paella y a él las carnes y pescados y él dice la paella y las mazorcas.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Amposta (Tarragona).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (161ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Igualada.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M-D. nacida en España y de nacionalidad española y Don F. nacido en Cuba y de nacionalidad cubana, iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de la interesada, certificado matrimonio con inscripción de divorcio de la Sra. G.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de Septiembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano cubano y de las audiencias reservadas

se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara el interesado que se conocieron el 02 de mayo de 2009, en el Hotel donde él trabaja en Cuba, que iniciaron su relación al día siguiente y que permaneció la Sra. G. 10 días conviviendo en ese viaje un día, que han mantenido su relación a través de correos electrónicos todos los días no mencionado por la interesada, por teléfono fijo declarando que se llamaban una vez por semana y ahora los fines de semana mientras que ella declara una vez al mes. Manifiesta la interesada que volvió a los tres meses permaneciendo 15 días y que compartieron en esos días habitación, que vino acompañada de su hija y el esposo de esta para que le conocieran y que desde entonces no ha regresado, ignora el Sr. E. los datos básicos personales y familiares de los hijos de su pareja como nombres, apellidos edades y fecha de nacimiento. Respecto de los gustos declara él que a ambos la comida criolla mientras quien ella dice la paella y a él prácticamente todo. Finalmente la interesada ha manifestado que su intención es casarse por poderes en la localidad de Igualada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Igualada (Barcelona).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (170ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez encargada del Registro Civil de Benavente.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña S. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, certificado administrativo de nacimiento, certificado de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 10 de octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. La Juez encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Aunque en general coinciden en la mayoría de las respuestas dadas, sin embargo existen algunas discrepancias, por ejemplo el interesado declara que lleva viviendo en España desde el año 2002, es decir nueve años(la entrevista se hizo el 12 de mayo de 2011), sin embargo ella dice que el interesado lleva viviendo en España ocho años. Declaran que se conocieron por internet, sin embargo discrepan en el día que se conocieron físicamente ya que ella dice que fue el 4 de febrero de 2010, mientras que él dice que fue el 5 de febrero. Manifiestan que el interesado se fue a vivir a B. en el mes de junio de 2010, sin embargo el certificado de empadronamiento aportado revela que está empadronado en el domicilio de la interesada en B. desde el 12 de enero de 2011, y el 4 de marzo de 2011, solicitan la autorización para contraer matrimonio. Si bien es cierto que el interesado tenía permiso de residencia en

España, éste caducó en diciembre de 2008, por lo que el interesado se encuentra en una situación irregular en España. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Benavente (Zaragoza).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (1ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Reus.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don F-J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña A-P. nacida en Brasil y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados y fe de vida y estado de ambos interesados y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 07 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la

Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones y desconocimientos de datos básicos personales y familiares como que declaran vivir juntos pero cada uno sitúa el domicilio común en una localidad distinta él en A. ella en V. asimismo discrepan donde vivirán después de la boda, no coinciden en el momento que decidieron contraer matrimonio él dice finales de año mientras que ella dice "hace tres meses" lo que situaría ese momento entorno al mes de mayo de 2011. Manifiesta la interesada que la hija de su pareja vive con la abuela paterna cuando vive con su madre, declara la interesada que a su boda solo acudirá su futura suegra mientras que él dice que sus padres y su hija, ignora la interesada los ingresos de su pareja y declara que ambos practican regularmente el tenis mientras que él dice que ella no. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 24 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Reus.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (8ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos para considerar la falta de un verdadero consentimiento matrimonial a los fines previstos por la legislación para la institución del matrimonio.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Lleida

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña S. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Don J-A. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados y certificado de soltería Sra. B.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español. Durante la audiencia reservada no solo se aprecian una serie de imprecisiones y desconocimientos entre sí de los interesados, si no que como consta en el expediente tanto en la diligencia de 16 de mayo de 2011 y en el propio informe del fiscal en el transcurso de la celebración de la citada audiencia se observó que Don J-A. portaba de manera escondida folio escrito con contestaciones preparadas a las preguntas que se le van a realizar respecto de los datos de su futura esposa, como nombre, lugar de nacimiento, ingresos económicos, gustos, aficiones, datos familiares.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Lleida.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (12ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña J. nacida en España y de nacionalidad española y Don I-C. nacido en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. H. y certificado de matrimonio y divorcio Sr. T.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano ecuatoriano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara la interesada que se conocieron en junio de 2005 en un bar de su propiedad y él era cliente, que inician su relación sentimental aproximadamente hace tres años y que decidieron contraer matrimonio en casa proponiéndolo los dos mientras que él dice que fue en San J. y

que lo propuso él. Dice la interesada que su profesión es la hostelería pero que ahora está de baja y que percibe unos 400 euros y que su pareja normalmente la ayuda económicamente mientras que el interesado dice que ahora no trabaja sin mencionar su situación, declara la interesada que su pareja son nueve hermanos y él dice ocho, manifiesta el interesado que han convivido hace dos veranos en San J. (M). Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 18 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (13ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña S. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. D. volante de empadronamiento de la interesada, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. S. y fe de vida y estado de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de Septiembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil;

386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la interesada declara que su profesión es estudiante en ese momento tiene 34 años y su estado civil es de divorciada mientras él dice que ella no trabaja y no menciona su condición de estudiante, manifiesta que carece de ingresos y que vive con su padres y un hermano, él dice que convive además de con los padres con dos hermanos. Manifiesta que conoce a su pareja en el verano de 2010 ya que es taxista e hizo amistad en un viaje que realizo, iniciando su relación unas semanas después de conocerse y que mantienen su relación telefónicamente y personalmente. Declara que decidieron contraer matrimonio hace unos meses y que no han convivido antes del matrimonio mientras que él dice que sí, que vivirán provisionalmente en casa de sus padres, debiendo recordar que él trabaja en T. y ella carece de medios económicos y vive de sus padres. Ignora la interesada el número de hermanos de su pareja dice una hermana y él declara dos. Por otra parte la Sra. S. celebró matrimonio coránico el día 13 de junio de 2000 en T. con un ciudadano de nacionalidad marroquí habiendo sido inscrito en el Registro Civil Central el 19 de septiembre de 2000, inscribiéndose posteriormente la separación legal en virtud de la sentencia a de 05 de marzo de 2002 y el divorcio en abril de 2003.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 09 años y la Sra. S. tiene reconocida judicialmente una incapacitación parcial debido a su enfermedad y está sometida al régimen de curatela.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (31ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña C-D. nacida en Francia y de nacionalidad española y Don P. nacido en México y de nacionalidad mexicana iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declarativa de datos, certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de la interesada, certificado de divorcio Sr. V. y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. Á.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 07 de Julio de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano mexicano, de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así se conocen a través de Internet en enero de 2011 y en abril de 2011 inician expediente de autorización de matrimonio cuando todavía no se conocen personalmente y el interesado reside en México. El deja el puesto de trabajo en su país y viaja a España con una Visa de turismo por tres meses, declara además que la interesada carece de trabajo según él mientras que ella dice que trabaja de limpiadora. Por otra parte existe un desconocimiento sobre los gustos, costumbres y aficiones como a puesto de manifiesto el encargado del registro civil, respecto de los desayunos, programas televisivos o de los perfumes utilizados y sobre los amigos de uno y de otro.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (33ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Burjassot.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña A. nacida en Ucrania y de nacionalidad ucraniana y Don Y. nacido en Ucrania y de nacionalidad ucraniana iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la

siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la estimación del recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio

(cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretende atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de

la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano ucraniano y una ciudadana ucraniana residentes en España, de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado persigue los fines propios de esta institución. Los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas y las alegaciones de los interesados, pruebas documentales y declaraciones de testigos tienen entidad suficiente como para considerar que concurre un verdadero interés en la celebración del matrimonio a los fines previstos por la legislación vigente. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierten contradicciones sino coincidencia de respuestas dadas a las preguntas que se formularon, lo que proporciona elementos de juicio necesarios para deducir la legalidad de su pretensión. Así coinciden datos personales, familiares gustos personales y el mantenimiento de una convivencia efectiva y continuada en el tiempo como queda acreditado documentalmente. Aportan documentos gráficos donde queda justificada la existencia de una relación continuada desde el año 2005, finalizando con la celebración de matrimonio religioso por el rito Ortodoxo. Sin que pueda ser determinante como único elemento para la denegación la situación irregular de uno de los interesados, ya que Sr. Y. mantiene una situación integrada en la localidad y en el domicilio donde reside con su pareja.

VIII.- Por lo que teniendo en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y ordenar que se autorice la celebración del matrimonio entre Don Y. y Doña A.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Burjassot (Valencia):

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (34ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Vitoria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don I. nacido en España y de nacionalidad española y Doña E. nacida en Nigeria y de nacionalidad nigeriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados y certificado de soltería Sra. E.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 07 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana nigeriana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así el interesado dice que se conocieron en agosto del año pasado en la consulta del médico y que desconoce si su pareja tiene orden de expulsión ni por que motivo, que viven juntos desde la Semana Santa con planes de boda desde entonces, que actualmente tiene una minusvalía y no sabe si volverá al trabajo mientras que ella dice que está de baja , que su pareja no conoce a su familia ni está integrada en ella mientras que ella dice que conoce a los padres, las hermanas y una tía , que sabe que ella asiste a la Iglesia y que son cristianos pero no sabe cómo se llama la religión que profesa, declara la interesada que pertenece a la Iglesia Evangelista. Manifiesta el Sr. L. que es católico no practicante mientras que ella dice que él asiste a la iglesia.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 13 años y la interesada tiene decretada orden de expulsión de fecha 30 de octubre de 2009 por un periodo de tres años por la Delegación de Gobierno en Madrid.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vitoria.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (38ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de al encargada del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en España y de nacionalidad española y Doña Y-C. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y de defunción de la esposa del Sr. L. certificado de matrimonio y divorcio Sra. V. y certificados de empadronamiento.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de Febrero de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así ignora la interesada la fecha de nacimiento de su pareja, desconoce el Sr. L. el tiempo que la interesada lleva en España y discrepan en el domicilio del lugar de residencia él dice en la V. y ella la calle San F. sin que se hayan aportado pruebas concluyentes que acreditan una relación afectiva real y continuada en el tiempo.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 23 años y la interesada se encuentra en situación irregular.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia)

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (39ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de la Jonquera.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-A. nacido en España y de nacionalidad española y Doña J. nacida en Brasil y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declarativa de datos, certificados de nacimiento y certificado de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 05 de Julio de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara la interesada que se conocieron el 20 de mayo de 2009 en una discoteca de la J. que les presentó un amigo de él y que llevan dos años viviendo juntos que los han cumplido el 20 de mayo de 2011, lo que indicaría que el día que se conocen se van a vivir juntos, mientras que él dice que se conocieron en carnaval en el año 2009, que como aficiones declara la Sra. S. a su pareja le gusta mucho mirar los deportes y las carreras de coches y motos mientras que él dice que a ella ver la tele y a él un poco de todo, dice la interesada que a él le regalo una blusa para su cumpleaños mientras que él dice que el último regalo fue un chándal, ignora el interesado cuando vino su pareja a residir a España y se contradicen en el lado de la cama que duermen ella dice en el lado de la pared, mientras que él dice que van cambiando.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de La Jonquera (Valencia).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (58ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Soria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don O. nacido en Mauritania y de nacionalidad mauritana y Doña A. nacida en Mali y de nacionalidad maliense, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba

la siguiente documentación: permiso de residencia, extracto del registro de los actos de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado y extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que no conocen ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 24 de octubre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro

Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del "consentimiento matrimonial", no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al "estado civil" y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretende atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia

reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano mauritano y una ciudadana maliense, residentes en España, y de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo y cuándo se conocieron ya que ella dice que fue hace dos años y un mes a través de un primo de ella, mientras que él declara que fue hace casi dos años y los presentó un compañero de trabajo. El interesado desconoce el lugar y fecha de nacimiento de ella, ésta por su parte sólo da el año de nacimiento de él declarando que no ponen días ni mes, así mismo él desconoce los nombres de los padres de ella, no sabe si tiene o no hermanos, estudios que tiene, etc. Ella desconoce el número de teléfono de él, dice que cree que tiene nueve hermanos cuando son cinco, etc. Desconocen gustos culinarios. El interesado dice que ella tiene pasaporte pero no residencia, mientras que ella dice que tiene permiso de residencia pero le caduca el mes que viene.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Soria.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (59ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante legal, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Soria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don U. nacido en Brasil y de nacionalidad brasileña y Doña M. nacida en Brasil y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1999, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, certificado de nacimiento, declaración de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa

desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos, mediante representante legal, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española, de origen brasileño y un ciudadano brasileño y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada se casó con un ciudadano español en el año 1995, en el año 1999 obtuvo la nacionalidad española, y en el año 2010, obtuvo el divorcio. Discrepan en el tiempo que hace que viven juntos ya que ella dice que desde hace dos años y él dice que desde

hace dos meses. Desconocen los teléfonos del otro, la interesada declara que es traductora, aunque ahora está en el paro y que cuando la llaman trabaja de camarera, sin embargo él declara que es presidenta de una asociación de brasileños, desconocen los salarios del otro, ya que ella dice que gana 1500 euros, desconociendo el interesado lo que gana, éste declara ganar 650 euros mientras que ella dice que él gana 2000 euros. El interesado desconoce el número de hermanos que tiene la interesada declarando que tiene "muchos". Desconocen gustos, aficiones del otro. Por otro lado la interesada es 15 años mayor que el interesado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Soria.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (63ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto de la encargada del Registro Civil de Santander.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña J. nacida en España y de nacionalidad española y Don Y. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, copia literal de acta de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de diciembre de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso e interesa su desestimación. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando y como se conocieron ya que él indica que fue hace un año y tres meses en S. durante un fin de semana en la discoteca El S. sin embargo ella declara que fue hace un año en un bar de G. tampoco coinciden en el tiempo que hace que conviven ya que él dice que hace tres meses y ella dice que hace un año. El interesado declara que viven en un piso alquilado a nombre de ella por el que paga un alquiler de 550 euros, sin embargo ella dice que paga un alquiler de 600 euros. Discrepan acerca de los trabajos realizados por él y estudios que tiene, así como el lugar donde cursó los estudios de peluquería la interesada, en gustos, aficiones, deportes practicados, motivos de los regalos que se han hecho, etc. Por otro lado el interesado se encuentra en una situación irregular en España. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (66ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque de conformidad con la legislación vigente de la República Dominicana artículo 55 de la Ley 659 sobre actos de Estado Civil, de 17 de julio de 1944 no es válido el poder otorgado ante notario de ese país para celebrar un matrimonio por un ciudadano nacionalidad dominicana y que reside en dicho país.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Villajoyosa.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña Y-J. nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana y Don P-J. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poderes. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento, certificado de matrimonio y divorcio Sr. R. y poder notarial especial ante notario público dominicano para la celebración del matrimonio en España otorgado por la Sra. M.

2.- Con fecha 31 de mayo de 2011 comparecen el interesado y Doña Mª-L. en virtud del poder especial otorgado ante notario público dominicano ante la encargada del registro civil para la ratificación de la solicitud de autorización de matrimonio Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.

3.-Con esa misma fecha se dicta providencia de la encargada del registro civil solicitando la colaboración del Consulado General de Santo Domingo en relación con Sra. Y-J. residente en República Dominicana para que se ratifique en la solicitud de autorización de matrimonio y se practique en su caso la audiencia reservada a la que se refiere el artículo 246 del Reglamento de Registro Civil.

4. Con fecha 24 de junio de 2011, el Cónsul General de España en Santo Domingo República Dominicana informa que en virtud de la legislación vigente en República Dominicana sobre actos de Estado Civil. No contempla el matrimonio civil por poderes. Notificado el Ministerio Fiscal, se opone a la autorización de la celebración del matrimonio. El encargado del Registro Civil dicta auto de 14 de octubre de 2011 denegando la autorización para el matrimonio proyectado.

5.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para la celebración del matrimonio.

6.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana dominicana y un ciudadano español, la cual ha otorgado un poder especial ante notario de su país para contraer matrimonio en España. Así la cuestión previa a la celebración de la audiencia reservada es si es válido el poder otorgado para dicho fin, siendo que según consta en el expediente la Directora Nacional del Registro de Estado Civil en República Dominicana el 30 de septiembre de 2009, ha informado en el sentido de que un nacional dominicano no puede otorgar poder notarial de representación para la celebración de un matrimonio civil por poderes fuera del territorio dominicano, ni un notario dominicano puede elaborar un poder con dicho fin, en virtud de la legislación vigente, de manera que no puede dársele validez a un acto jurídico que carecía de esta en el lugar donde ha sido emitido y que está sujeto al ordenamiento jurídico del país donde se dictó. Finalmente además debe considerarse el artículo 5 del Convenio de Viena de 24 de abril de 1963, sobre Relaciones Consulares, que obliga a respetar el ordenamiento jurídico del país de acogida, evitando la realización de cualquier actuación que implique su vulneración.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Villajoyosa (Valencia).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (67ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Oleiros.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-M. nacido en Argentina y de nacionalidad argentina y Doña P. nacida en España y de nacionalidad española iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de Agosto de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos

demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano argentino y una ciudadana española y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la interesada declara conocerle a finales de enero de 2010 mientras que él declara finales del año 2009, que desde esa fecha comienzan a compartir un piso en V., que deciden irse a vivir a G. compartiendo los gastos de la vivienda, y que no conoce personalmente a la familia de su novio. Ignora la interesada si su pareja tiene algún problema con extranjería o incoado procedimiento de expulsión, circunstancia lógicamente conocida por el interesado, y que difícilmente puede ser ignorada por la persona con la que declara convivencia real y efectiva. Manifiesta el Sr. O. que tiene intención de solicitar la nacionalidad española una vez realizado el trámite matrimonial, circunstancia también conocida por la interesada.

Finalmente y como queda reflejado en el expediente el Sr. O. tiene decretada orden de expulsión por la Subdelegación Delegación de Gobierno de Valencia de fecha 15 de junio de 2007 con prohibición de entrada en el país de tres años, figurándole además denuncias por varios delitos entre los que se encuentra alguna actuación relacionada con malos tratos físicos en el ámbito familiar en el periodo en el que dicen los interesados mantener la relación afectiva.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Oleiros (A Coruña).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (68ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don D-F. nacido en Francia y de nacionalidad francesa y Doña O. nacida en Rusia y de nacionalidad rusa, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación; certificados de nacimientos, volantes de empadronamiento y certificados de soltería de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que no conocen ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente.

El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 08 de Julio de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo

es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes.

Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano francés y una ciudadana rusa residentes en España, de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así declaran conocerse en el año 2003 y que inician su relación sentimental en el año 2007 viviendo juntos desde hace cuatro años, declarando el interesado que el matrimonio proyectado entre otras finalidades incluye la de regularizar la situación de la Sra. Y. y poder obtener la residencia legal en España. Como documentación presentada se incluye el pasaporte de la Sra. Y. expedido el día 09 de julio de 2008, constando la entrada como turista en territorio Schengen el día 03 de abril de 2009 y con una validez de un mes, mientras que los interesados han manifestado que viven juntos desde el año 2007 y que el Sr. D. que nunca ha viajado a Rusia. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 21 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (69ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Cambre (A Coruña).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Cambre, el día 29 de septiembre de 2011, Don J. de nacionalidad española, nacido en La C. el 6 de agosto de 1947, y Doña C. nacida en S, P. (Brasil) el 25 de junio de 1963 y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, certificación literal de nacimiento, certificado de empadronamiento en C. desde el 1 de mayo de 1996, declaración jurada de estado civil, divorciado, certificado de matrimonio anterior, de fecha 29 de noviembre de 1975, con anotación de divorcio por sentencia de 14 de febrero de 2007, y Documento Nacional de Identidad; y, de la promotora, pasaporte como C. certificado de nacimiento como C. certificado de matrimonio anterior, con fecha 2 de abril de 1980, por el que cambió sus apellidos, con anotación de divorcio de 31 de mayo de 2006, consignándose expresamente que su nombre volvía a ser el anterior, lo que no se ha cumplido, volante de empadronamiento en C. en el mismo domicilio del promotor desde el 5 de junio de 2009 y declaración jurada de estado civil, divorciada.

2.- Los promotores se ratifican en su solicitud y, con fecha 13 de octubre de 2011 son oídos en audiencia reservada. Posteriormente el día 28 del mismo mes comparecen dos testigos,

ciudadanos brasileños, que manifiestan conocer cada uno a uno los interesados y que no hay impedimento para el matrimonio.

3.- El Ministerio Fiscal solicitó que se requiriera informe de la autoridad policial competente sobre la situación de la ciudadana brasileña en España y sobre la veracidad de la convivencia, la Sra. De O. compareció ante las autoridades policiales que le tomaron declaración y emitieron su informe. A la vista de lo anterior el Ministerio Fiscal informa negativamente respecto a la autorización pretendida y la Encargada del Registro Civil en el mismo sentido entiende que de lo actuado se infiere ausencia de consentimiento matrimonial, y con fecha 26 de enero de 2012 dictó auto acordando denegar la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el auto no se recogen las contradicciones en las que se ha basado.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación del auto y la Encargada del Registro informó en el mismo sentido y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña resultan, del trámite de audiencia y demás actuaciones practicadas, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. En sus declaraciones se advierten contradicciones respecto a hechos tan fundamentales como el momento en que se conocieron, según la interesada el 13 de julio de 2008 e iniciaron en ese momento su relación sentimental y según el promotor en la misma fecha del año 2009 y no recuerda cuando iniciaron su relación. También discrepan en el momento que decidieron casarse, según ella hace 2 meses y según el promotor hace 6 o 7 meses.

Según ambos llevan conviviendo 3 años y 3 meses, según los datos de empadronamiento, junio de 2009, es bastante menos. Respecto a datos personales y familiares, la interesada menciona que su pareja nació en C. cuando fue en La C. el promotor por su parte solo sabe que ella nació en Brasil pero desconoce su fecha de nacimiento, los datos de sus padres y manifiesta que cree que fallecieron.

También muestran desconocimiento respecto de los familiares próximos respectivos, el promotor sabe que ella tiene hijos de su matrimonio anterior pero no sabe los nombres ni edades, tampoco sabe los hermanos que tiene la Sra. De O. cree que tiene 4 cuando son 5 y no sabe sus nombres, la interesada si conoce los nombres de los hijos de su pareja pero no las edades. En relación con otros datos, ambos desconocen los estudios del otro, la interesada desconoce los ingresos de su pareja, difieren en relación con las comidas preferidas de cada uno y, el interesado desconoce su propio número de teléfono y si declara el de su pareja, cuyo número esta lo declara como del promotor.

Por último cabe mencionar que, aunque no es determinante, la Sra. De O. se encuentra en España en situación irregular, según declaración ante las autoridades policiales, a donde llegó desde Portugal con un sobrino, que resulta ser uno de los testigos, el cual en su comparecencia dijo conocer al Sr. S. no a la interesada que era su tía, nunca ha tramitado la autorización de residencia y al ser preguntada sobre si tenía intención de solicitar la nacionalidad española dice que sí, una vez realizado el trámite matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cambre (A Coruña).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (70ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Granada.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Granada el día 17 de octubre de 2011 Don L. de nacionalidad española, nacido en G. el 8 de agosto de 1964, y Doña S. de nacionalidad nigeriana, nacida en B-C. (Nigeria) el 30 de agosto de 1983, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, certificación de nacimiento, documento nacional de identidad y volante de empadronamiento en G. y, de la promotora; pasaporte nigeriano expedido en M. certificado de nacimiento que suscita dudas sobre la fecha, diferente en el original y en la traducción, declaración jurada de soltería, certificado de la Embajada de Nigeria en España de que la interesada tiene dicha nacionalidad, prestada ante funcionario de la Embajada de Nigeria en Madrid y volante de empadronamiento en T. en el mismo domicilio del promotor.

2.- En el mismo día los interesados ratificaron la solicitud y fue oído el testigo presentado. Posteriormente, con fecha 10 de enero de 2012, se llevaron a cabo las audiencias reservadas.

3.- El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de la audiencia reservada se extrae prueba suficiente de que no existe verdadero consentimiento matrimonial e interesó la desestimación de la solicitud y el 26 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado basando fundamentalmente la realidad de su relación en su convivencia acreditada por los documentos de empadronamiento, aportando nuevo certificado de empadronamiento de ambos en el domicilio de los padres del promotor a fecha 31 de enero de 2012.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación en todos sus términos del auto impugnado y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana nigeriana resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Sus declaraciones muestran un desconocimiento mutuo de datos personales pese a la convivencia en G. en el que efectivamente están ambos empadronados ella desde el 22 de enero de 2010, haciendo el número 22 de los inscritos en ese domicilio y él el número 27, además el promotor en su documento nacional de identidad expedido en el año 2010 tiene otro domicilio. Así el promotor no sabe desde cuando vive su pareja en España ni si ha vivido en otros lugares además de G. según la interesada llegó a España en el año 2007 y ha vivido 3 meses en M. Coinciden en que se conocieron en un bar, pero el promotor no recuerda el barrio en que estaba situado, que además es en el que vive ella y en el que se supone que también está empadronado el propio Sr. M.y, según el cual conviven desde hace 6 o 7 meses, según la interesada desde que se conocieron, 1 año, no obstante el promotor no recuerda siquiera la calle donde vive, dice que es un 5º piso, cuando es un 4º, también difieren en las personas que viven con ellos, o con ella, como en alguna ocasión manifiesta el promotor, entre otros un hermano de la interesada del que tampoco sabe su nombre. Respecto a otros datos, el promotor desconoce cuánto pagan de alquiler, dice que trabaja en el campo los fines de semana, aunque la interesada dice que es casi todos los días, según manifiestan ambos la interesada ve a los padres de su pareja a menudo, concretamente dice que el día 5 de enero fue la última vez, según la Sra. O. fue el 15 de diciembre fecha en que la madre del promotor estaba en el hospital, respecto a la familia de la interesada el promotor dice que está en Nigeria, desconociendo que tiene una hermana que viven en M.

Debiendo significarse respecto a la convivencia invocada en el recurso en base a los diferentes documentos de empadronamiento aportados, que además no son claros respecto de las fechas de alta por cambio de domicilio en la misma localidad, que ha de tenerse en cuenta que la prueba del domicilio es como regla general libre, sin que el valor que se le reconoce al padrón municipal a tales efectos sea absoluto ya que la inscripción por los interesados está especialmente facilitada por el hecho de tiene lugar por simple declaración del interesado, sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (cfr. Art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local), y que el artículo 40 del Código Civil identifica domicilio con residencia habitual, lo que implica vivir en un lugar con cierto grado de permanencia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Granada.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (71ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Soria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Soria el día 1 de diciembre de 2011 Don R. de nacionalidad española, nacido en V. el 18 de septiembre de 1955, y Doña Y. de nacionalidad china, nacida en S. (China) el 2 de septiembre de 1965, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, declaración jurada de estado civil, divorciado, certificación de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, de fecha 5 de enero de 1985, con anotación de divorcio por sentencia de 16 de septiembre de 2008, certificado de empadronamiento en S. desde el 30 de septiembre de 2009 y documento nacional de identidad y, de la promotora; pasaporte con visado de turismo válido durante 8 días, 27 de noviembre a 4 de diciembre de 2010, para los países del espacio Schengen, declaración jurada de estado civil, divorciada, certificado de nacimiento, certificado de divorcio de fecha 8 de junio de 2000, certificado negativo de inscripción de otro matrimonio al menos desde enero de 2002 a septiembre de 2011 en su municipio, certificado de inscripción en el registro de la Embajada de La República Popular China en España con fecha 17 de noviembre de 2011, volante de empadronamiento en M. desde el 9 de diciembre de 2010 a 23 de agosto de 2011 y certificado de empadronamiento en S. desde esta última fecha.

2.- Los interesados ratificaron la solicitud, con fecha 13 de enero de 2012 fueron oídos los testigos presentados, y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. Posteriormente el Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización solicitada, considerando que la intencionalidad del matrimonio no es la propia de la institución y el 26 de enero de 2012 la Encargada del Registro Civil, en el mismo sentido estima que concurre la falta de un verdadero consentimiento matrimonial, y dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos tras obtener copia del expediente interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando aclarar el resultado de las audiencias en una mala interpretación por parte de la autoridad que ha decidido, poniendo de manifiesto un error en el informe del Ministerio Fiscal y en el auto, y alegando la que tienen una verdadera relación. Del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que corrige el error padecido en algún dato del informe anterior. La Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4

de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana china resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Así difieren en cómo se conocieron, según el promotor fue una relación concertada a través de una tercera persona, concretamente una que también actuó como testigo, que tenía una página en la que colocó un anuncio de él solicitando una esposa, con ese intermediario viajó a M. para conocer a la interesada en abril de 2011 y en mayo ella viajó a S. conviviendo desde junio siguiente, ella por su parte dice que se conocieron por internet en mayo de 2010, que se vieron en M. sin mencionar fecha, y que él iba con un amigo. Respecto a los datos personales y familiares, el promotor al ser preguntado por el nombre de los padres de ella, difiere algo en el del padre y dice que la madre falleció sin embargo la propia interesada no menciona tal circunstancia al ser preguntada por los mismos datos, manifiesta no saber el nombre de los padres de él, lo que el promotor justifica en su recurso en que están fallecidos, esto avalaría que no los conociera pero no que no supiera sus nombres, tampoco sabe cuántos hermanos tiene el promotor, dice conocer a una hermana, no da nombre, y que tiene alguno más, el Sr. J. por su parte cree haber “entendido algo de que ella tiene un hermano”. Al mencionar si tienen hijos de sus anteriores matrimonios, el promotor manifiesta que tiene una hija de 21 años y ella un hijo de 17, y la interesada dice lo mismo que ella tiene una hija de 21 años y él un hijo de 17.

En cuanto a datos laborales, el promotor manifiesta que ella trabaja, en presente, cuidando niños y a mujeres que están embarazadas, según es costumbre en China, sin embargo la interesada dice que en ese momento no trabaja, discrepancia poco justificable en dos personas que conviven, también difieren en los ingresos de él y el promotor por su parte dice que cuando ella gana más no se lo dice porque es muy

reservada por cuestiones culturales, por su parte la interesada manifiesta desconocer tanto el teléfono de su pareja como el suyo propio. Por último y aunque no es determinante la interesada está en España en situación irregular. Debiendo significarse respecto a los errores del expediente puestos de manifiesto por el recurrente, nombre de la interesada en el informe del Ministerio Fiscal y la referencia a la discrepancia en la fecha de nacimiento de la Sra. M., que el primero de ellos ya fue corregido, como error material, en el informe del Ministerio Fiscal posterior a la presentación del recurso y el segundo pudo ser motivado porque en la hoja de declaración de datos de los solicitantes se hizo constar como fecha de nacimiento de la promotora la de 2.12.1965 y no la de 2.09.1965. Todo ello se considera base suficiente para entender que voluntad de contraer matrimonio no lo es con los fines propios de la institución, lo que supone la inexistencia de un verdadero consentimiento matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Soria.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (72ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de San José del Valle.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña N. nacida en España y de nacionalidad española y Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados y certificado de soltería Sr. A.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 12 de Noviembre de 2010 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano de marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así el interesado desconoce la fecha de nacimiento de su pareja, datos básicos personales como es el nombre de los padres de ella, asimismo la interesada ignora la localidad de nacimiento de su pareja y los datos básicos personales referidos a los hermanos de su novio.

Finalmente y sin que sea determinante debe tenerse en consideración la situación irregular del interesado que según la Brigada de Extranjería de Jerez de la Frontera el Sr. A. tiene decretada orden de expulsión de fecha 28 de mayo de 2008 con prohibición de entrada de siete años, y asimismo tiene igualmente por incumplimiento de la resolución anterior otra orden de expulsión de fecha 12 de enero de 2009 con prohibición de entrada en territorio nacional hasta 12 de enero de 2016.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de San José del Valle (Cádiz).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (73ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Granada.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña I. nacida en Rumania y de nacionalidad rumana y Don N. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimientos, certificado de empadronamiento y capacidad matrimonial de ambos interesados

2.- Ratificados los interesados, comparece dos testigos que manifiestan que no conocen ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 11 de Enero de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes,

que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del "consentimiento matrimonial", no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al "estado civil" y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes.

Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de

denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano senegalés y una ciudadana rumana, de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así existe una falta de idioma común para el mantenimiento de una relación directa y continuada.

Por otra parte el interesado ignora el sexo de los hijos de su pareja él dice que son dos hijas que una vive en Francia y otra en Rumania y ella manifiesta que tiene dos hijos de otra relación que viven ambos en Rumania, no existe claridad en las respuesta sobre de la actividad laboral del interesado manifestando la interesada finalmente que se dedica a la construcción, actividad no declarada por el interesado que dice que trabaja en la recogida de la aceituna asimismo la Sra. C. no pudo aclarar que hacia cuando conoció a su pareja en M. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 12 años y el encargado ha manifestado que en general la interesada quedaba callada y dudaba de las respuestas ante muchas de las preguntas.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Granada.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (98ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Medina Sidonia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en España y de nacionalidad española y Doña Y-F. nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio y divorcio Sra. P.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Septiembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos

demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimientos y contradicciones respecto de datos básicos personales y familiares como cuando se conocieron y empezaron a convivir el Sr. C. dice que fue hace dos años en G. y que inician la relación sentimental en enero o febrero de 2009 conviviendo juntos dos o tres meses después de esa fecha mientras que ella dice que llegó a España en junio o julio de 2009 circunstancia desconocida por el interesado, que conoció a su pareja en agosto iniciando la relación y convivencia en ese momento. Declara la interesada que ha trabajado en España cuidando a personas mayores y que actualmente no trabaja, mientras que él dice que ella ha trabajado como limpiadora, ignora el interesado la fecha de nacimiento y los nombres y apellidos de los padres, así como con quien vive la hija de su pareja en República Dominicana él dice la bisabuela y ella dice con su madre.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 18 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Medina Sidonia (Cádiz).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (99ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Calatayud.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña S. nacida en España y de nacionalidad española y Don Z. nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento de los interesados, certificado de soltería Sr. Z.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimientos de datos básicos personales y familiares como que la interesada ignora la fecha y lugar de nacimiento de su pareja, nombre de los padres y hermanos, sabe que trabaja en un Kebab pero desconoce la dirección, no recuerda el número de teléfono móvil.

Por otra parte se aprecia una serie de contradicciones como que la Sra. El A. declara que no conoce la dirección de la calle con la que vive con el interesado en C. manifestando que es que ella va muchos a L. y se confunde, habiendo declarado que su madre vive en dicha ciudad junto con la hija menor de ella producto de otra relación, pero declara que es en el 3ª B mientras que el interesado manifiesta 4ª, 2ª. Dice el Sr. I. que conoce a la interesada hace un año mientras que ella dice año y medio pero que mantiene relación afectiva desde hace 8 o 9 meses y que conviven desde hace seis o siete meses, pero declara que ella ha estado trabajando en B. durante tres meses y que ha regresado hace mes y medio, que le propuso contraer matrimonio hace tres meses en C. Manifiesta la interesada que le ha regalado un collar hace seis meses por motivo de su aniversario de un año cuando declara el interesado una relación afectiva inferior ha dicho periodo.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 9 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil De Calatayud.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (104ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Córdoba.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña S. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio y defunción de la esposa del Sr O.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 04 de Mayo de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español, de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Existe una serie de desconocimiento de datos básicos personales y familiares como que la Sra. S. declara que su pareja tiene cinco hermanos y que solo conoce a uno de ellos mientras que el interesado manifiesta que tiene cuatro hermanos, que tiene dos hijos pero desconoce donde viven siendo que estos residen en el mismo municipio que ellos la C, que no tiene estudios y él manifiesta que tiene estudios básicos, declara que su pareja con la convive tiene un coche azul y desconoce la marca mientras que el Sr. O. dice que tiene un coche un S. gris, que sabe que ha sufrido una operación pero no de que tipo él declara de clavícula. Por otra parte él declara que se conocen hace mucho tiempo mientras que ella dice que hace dos años y que viven juntos en el domicilio del Sr O. desde hace tres meses.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 40 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Córdoba.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (106ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don Á. nacido en España y de nacionalidad española y Doña M-C. nacida en Colombia y de nacionalidad española iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento ambos interesados, certificado de matrimonio y certificado de defunción de la esposa Sr. M.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Mayo de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano español, de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento de datos básicos personales y familiares como que la Sra. R. desconoce la fecha de nacimiento de su pareja, manifiesta que el Sr M. tiene 4 hijos y dos hijas y que solo conoce a un hijo, que lleva nueve años en España mientras que él dice que ella vino a España hace más de 10 años, y que se conocieron en el año 2008 porque les presentó una amiga ecuatoriana. Por otra parte en el examen del expediente consta como antecedente un primer auto de fecha 23 de noviembre de 2009 donde se le autorizo la celebración del matrimonio, sin embargo con fecha 15 de enero de 2010 el Sr M. manifiesta que no tiene intención de contraer matrimonio y solicita el archivo del expediente, con fecha 19 de enero de 2010 el Sr M. vuelve a comparecer en el Registro Civil y manifiesta que quiere continuar el expediente y solicita se señale día y hora de celebración del matrimonio. Nuevamente con fecha 15 de marzo de 2015 vuelve a solicitar el archivo del expediente y con fecha 04 de abril de 2011 vuelve a solicitar reapertura, en base a esta circunstancia el encargado y con el informe desfavorable del fiscal a la autorización del matrimonio dicta auto denegando la celebración.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad es aproximadamente 21 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (13ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto de la encargada del Registro Civil de Barcelona

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña L. nacida en Colombia que recuperó la nacionalidad española en el año 1984 y Don J. nacido y domiciliado en Marruecos, y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, extracto de acta de nacimiento, certificado de celibato y certificado de residencia del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 26 de octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio, por no existir consentimiento matrimonial.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste emite un informe desfavorable. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos

demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, la audiencia reservada que se le practicó al interesado en el Consulado de España en Rabat, se hizo con mediación de intérprete, aunque la interesada manifiesta que se comunican en español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso, la interesada precisó también de un intérprete de signos al tener una minusvalía auditiva. Discrepan en cómo se conocieron ya que él declara que fue a través del chat, sin embargo ella dice que fue a través de un amigo compañero suyo de trabajo, del que no recuerda el nombre, ya que ambos trabajaban en una empresa distribuidora de productos, la relación primero fue profesional y luego personal; también difieren sobre cuando comenzaron la relación sentimental ya que ella dice que a los seis meses y él dice que a los tres meses de conocerse cuando ella fue a Marruecos. La interesada declara que él tiene diez hermanos, cuando son nueve. El interesado dice que cree que ella fue a la Universidad cuando estudió hasta el bachillerato; ella declara que prefiere casarse en España pero él dice que se casarán por el "adul", que vivirán en Marruecos pero que si ella quiere vivir en España lo harán y él trabajará en España, ella dice que hace años le operaron de cáncer y él dice que fue de una pierna. El interesado declara que ella trabajaba como limpiadora, sin embargo ella dice que trabajaba como distribuidora de productos. Por otro lado la interesada es 29 años mayor que el interesado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Barcelona

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (15ª)

IV.2.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

No procede la inscripción porque, no habiendo comparecido los contrayentes para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Don M., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña C., nacida en M. y de nacionalidad española, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil en España.

Acompañaban como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, extracto de partida de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Mediante cédula de citación se cita a los interesados a fin de practicarles la audiencia reservada el día 23 de noviembre de 2011.

3.- Mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2011 el encargado del Registro Civil acuerda el archivo del expediente al no haber comparecido los interesados para practicarle la audiencia reservada.

4.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso, solicitando se les vuelva a notificar la citación a fin de poder realizar las entrevistas.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el mismo e interesó la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 9, 45, 49, 65 y 73 del Código civil (Cc); 15, 23, 26, 29, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 256, 257, 354 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 4-2ª de junio de 2001, 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002, 13-3ª de octubre de 2003, 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005, 7-1ª de febrero y 13-1ª de noviembre de 2006, 30-2ª de enero de 2007, 24-3ª de abril de 2008 y 3-8ª de octubre de 2011.

II.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I CC. y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.- Mediante este expediente se solicita la autorización para contraer matrimonio en España, entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí. La solicitud es denegada por el Registro Civil de Melilla el 14 de diciembre de 2011 con el razonamiento

jurídico de que, no oídos los promotores, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

IV.- Como ha quedado dicho en el fundamento II, el título para practicar la inscripción del matrimonio ha de ser en este caso la certificación expedida por la autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. art. 256.3º RRC) y las declaraciones complementarias oportunas (cfr. art. 256, II RRC). El Registro Civil de Melilla citó a los interesados, mediante una cédula de citación, a fin de comparecieran el día 23 de noviembre de 2011 para practicarles la preceptiva audiencia reservada, los interesados no han comparecido, ni siquiera fueron a retirar la cédula de citación a correos, puesto que el día en que el funcionario de correos fue a entregarles la documentación con acuse de recibo, los interesados estaban ausentes de su domicilio. La audiencia reservada solo puede cumplir su finalidad primordial de formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo comparecido los promotores ni en primera instancia ni en fase de recurso, queda imposibilita la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su inscripción. Lo anterior no ha de impedir que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), sea factible reiterar el expediente y obtener una resolución sobre el fondo del asunto, siempre que se haya completado la tramitación legalmente prevista.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Melilla

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (17ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Murcia el día 4 de noviembre de 2010, Don M. B., de nacionalidad marroquí, nacido en L., T. (Marruecos) el día 6 de febrero de 1977 y Doña L., de nacionalidad española, nacida en T. (A.) el 13 de abril de 1977, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poder. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; pasaporte, acta literal de nacimiento, certificado de residencia, certificado de soltería y poder otorgado en Marruecos a favor de un ciudadano español por imposibilidad de su presencia personal en el matrimonio y de la promotora; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento en M. desde el 13 de octubre de 2009 y declaración jurada de estado civil, soltera.

2.- Con fecha 5 de abril de 2011 comparecen 2 testigos que manifiestan no conocer que exista obstáculo alguno a la celebración del matrimonio, el día 4 de julio de 2011 el promotor fue oído en audiencia reservada en el Consulado General de España en Tetuán y la interesada lo fue en el Registro Civil de Murcia con fecha 27 de septiembre siguiente. El Ministerio Fiscal no se opone a la autorización solicitada y el 18 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la promotora tras solicitar la vista y copia del expediente, presentó sendos escritos, uno dirigido al propio Registro Civil de Murcia, poniendo de manifiesto la incongruencia a su juicio existente en el auto denegatorio al basarse en informe del Ministerio Fiscal cuando este era favorable a la autorización, y otro dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado añadiendo a lo anterior un cuadro comparativo entre lo manifestado por ambos promotores para demostrar la no existencia de discrepancias, adjuntando copia de su pasaporte para acreditar sus viajes, documentación de llamadas telefónicas y fotografías.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que se adhiere al recurso en consonancia con su informe previo y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 69, 70, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil por poder en España, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Así el promotor no conoce el lugar de nacimiento de la interesada, sólo la provincia, ni la dirección de ella en M., ni los estudios que su pareja ha realizado, manifestando además que ella no habla ningún idioma además del propio, y que él habla un poco de español, francés y un poco de inglés, según la interesada se entienden en español aunque según informa el Consulado la entrevista se ha realizado en parte en español en parte en árabe para que entendiera mejor las preguntas, lo cual supondría que tienen muy limitado su idioma común, siendo este uno de los factores que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Respecto a la relación que mantienen el promotor manifiesta que conviven en los viajes que su pareja realiza a Marruecos, desde 3 días a 1 mes, según el relato de viajes que la promotora hace en su entrevista sus viajes van de 1 semana a 15 días, salvo el último del año 2011 que dura un mes y medio, al respecto el interesado cita los lugares en los que han tenido lugar esas estancias conjuntas, entre ellos menciona F. y S., que no aparecen entre los que su pareja menciona que en cambio incluye C. y el Sr. B. no.

Por otro lado resulta significativo que cuando el promotor es preguntado sobre la relación posterior al futuro matrimonio y donde piensan residir dice que él en Ch. (Marruecos) donde reside, que no piensa residir en España, sólo irá a visitar a su esposa cuando haya temporada baja en su trabajo y volverá, insistiendo en otra respuesta en que no piensa residir ni trabajar en España, en relación con este tema el Cónsul de España en Tetuán al informar sobre la audiencia manifiesta que el interesado dice que van a contraer matrimonio en M. porque es más sencillo y cuando se le advierte sobre la posible no validez de este matrimonio en Marruecos dice que no le importa, que seguirán como hasta ahora cuando ella está en Marruecos reservando dos habitaciones en los hoteles y luego conviven. A este respecto debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico español, artículos 68 y siguientes del Código Civil, establece entre los deberes de los cónyuges la obligación de vivir juntos y que se presume que esto es así salvo prueba en contrario, añadiéndose que si los cónyuges no fijan de común acuerdo el domicilio conyugal por existir discrepancia resolverá el juez. Todo ello se considera base suficiente para entender que al menos en uno de los promotores, al prestar su consentimiento, no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución. Debiendo significarse respecto a las dudas suscitadas en la promotora por el auto denegatorio y su referencia al informe del Ministerio Fiscal, que en este no se opone a la autorización, que no es la única base para el Encargado que debe resolver, de hecho el auto dice textualmente “a la vista de la prueba practicada, teniendo en cuenta el informe del Ministerio Fiscal.....”

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Murcia

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (18ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio civil.

1.- Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2.- En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Torremolinos (Málaga).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Benalmádena (Málaga) el día 9 de mayo de 2011 Doña S., de nacionalidad española, nacida en S. el 29 de agosto de 1976, y Don J. H., de nacionalidad holandesa, nacido en Hn. (Holanda) el 17 de noviembre de 1959, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte expedido en la Embajada de su país en Madrid el 10 de noviembre de 2006 y vencimiento en la misma fecha de 2011, certificación plurilingüe en extracto de nacimiento, informe municipal plurilingüe de datos personales en el que se hace constar su estado civil de divorciado y declaración de que ha residido desde el año 2006 en T. sin empadronarse, residiendo actualmente en B. y, de la promotora; documento nacional de identidad, fe de vida y estado, soltera, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento en B. desde el 21 de septiembre de 1998.

2.- En el mismo día los interesados ratificaron la solicitud, fue oído el testigo presentado, que manifiesta que conoce a la promotora desde pequeñas y al promotor desde hace 9 meses y que el matrimonio que proyectan no incurre en ninguna prohibición. Con fecha 18 de mayo tiene entrada el expediente en el Registro Civil de Torremolinos para su resolución. Los promotores son oídos en audiencia reservada el día 8 de julio de 2011. Posteriormente el Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización solicitada, considerando que la intencionalidad del matrimonio no es la propia de la institución y el 5 de octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil, en el mismo sentido estima que concurre la falta de un verdadero consentimiento matrimonial, y dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando respecto del promotor extranjero su dificultad con el idioma para entender el alcance de las preguntas que se le formularon en la entrevista, afirmando que las cuestiones recogidas en el auto no corresponden en algunos temas con las preguntas que se les hicieron, por ej. que nunca se les preguntó por su conocimiento de anteriores matrimonios, documentos laborales que vinculan al Sr. H. con el hijo de la interesada y con la pareja de su hija, escrituras de constitución de la sociedad mercantil del promotor, algunas de sus declaraciones del impuesto sobre la renta, fotocopia de pasaporte diferente al que presentó con la solicitud del expediente, nota de empadronamiento en B. y fotografías.

4.- El recurso fue notificado al Ministerio Fiscal que se reafirma en su oposición a la concesión de la autorización de matrimonio y la Encargada emite informe en el sentido de estimar el

recurso a la vista de la documentación aportada, posteriormente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener otros fines o ventajas para alguno de los contrayentes que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano holandés resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Pese a las dudas manifestadas por los recurrentes sobre las actas de las entrevistas, éstas constan firmadas en todas sus hojas por cada declarante, tras ser leídas ante el Juez de Paz y la Secretaria Judicial de Benalmádena, y en ellas se aprecian importantes divergencias no justificables en quienes manifiestan que se conocen desde hace 10 años, según la promotora y 6 años según el interesado, aunque ninguno contesta a la pregunta sobre cuándo iniciaron su relación sentimental y difieren en fijar el momento en que decidieron casarse y sobre todo desde cuando conviven, según el interesado desde febrero de 2011, según la promotora desde 2 meses antes de la entrevista, mayo de 2011, debiendo significarse al respecto que el documento de empadronamiento aportado con el recurso es de 7 de noviembre de 2011 y no hace constar otra fecha anterior de alta en el padrón y en, la documentación fiscal aportada correspondiente al año 2010 y presentada telemáticamente el 9 de junio de 2011, se hace constar un domicilio de T.

Respecto a otros datos personales y familiares, el promotor desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, los datos personales y domicilio de los padres, el nombre del de la misma, que a su vez desconoce el lugar de nacimiento de su pareja, contesta genéricamente Holanda, los datos de los padres de su pareja y donde residen. Pese a lo alegado en el recurso consta en la entrevista que el promotor contesta "no" cuando se le pregunta si su pareja tiene hijos de anteriores relaciones, y no contesta cuando se le pregunta por sus edades y con quien conviven, debiendo significarse respecto a la relación laboral del promotor con el hijo de la interesada y la pareja de su hija que el documento de alta en seguridad social aportado es de 3 de agosto de 2011, posterior a las entrevistas realizadas. Precisamente en relación con los datos laborales, ambos promotores contestan muy vagamente respecto a su profesión, la interesada dice que es limpiadora y camarera, su pareja dice que ella es limpiadora, ninguno contesta respecto a la actividad en que trabajan en ese momento, ni para qué empresa, sin que el interesado manifieste nada sobre la sociedad mercantil que es dueña de su negocio y de la que es único socio, según documentación notarial del año 2004 aportada en recurso, en la que se hace constar que el Sr. H. es soltero, igual que en sus declaraciones de la renta, cuando según los datos de la solicitud y de documento holandés es divorciado y en la misma documentación "declara el compareciente conocer y entender suficientemente el idioma español" conocimiento que no habrá sufrido merma 7 años después como para no entender el alcance de las preguntas de la entrevista reservada.

Por último también difieren en asuntos en principio de menos entidad pero significativos entre dos personas unidas por una relación de tiempo y un cierto tiempo de convivencia, así por ejemplo si uno de los miembros de la pareja fuma o no, hace regularmente deporte o no, las aficiones que tiene y las comidas preferidas por cada uno. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución. No obstante, no rigiendo en el ámbito del Registro Civil el principio de autoridad de cosa juzgada, es factible reiterar un expediente o unas actuaciones ya decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Torremolinos

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (19ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el día 4 de octubre de 2011, Don C. G., de nacionalidad española, nacido en Ca. (C.) el día 2 de junio de 1937 y Doña

L., de nacionalidad marroquí, nacida en T. (Marruecos) el 8 de marzo de 1974, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificación de matrimonio anterior, de fecha 3 de septiembre de 1970, con anotación de sentencia firme de divorcio de fecha 3 de marzo de 2009, declaración jurada de estado civil, divorciado, y volante de empadronamiento en M. desde el 1 de marzo de 1981, y de la promotora; permiso de residencia en España, certificado en extracto de acta de nacimiento, certificado de estado civil, divorciado, declaración jurada de estado civil, divorciada y acta de matrimonio anterior, de 19 de agosto de 2007, acta de divorcio, de fecha 7 de enero de 2011, del Tribunal de Primera Instancia de Tánger, declarando el divorcio de mutuo acuerdo y volante de empadronamiento en M. desde el 21 de julio de 2009.

2.- Con la misma fecha los interesados ratificaron la solicitud, presentaron una testigo, prima de la promotora, que manifiestan que estos no incurrir en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 25 de octubre de 2011 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 8 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ambos llevan tiempo conviviendo, aportando volante de empadronamiento conjunto en el domicilio del promotor, y que las discrepancias no son motivo para denegar la autorización.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado ratificándose en el auto apelado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia

matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. La promotora manifiesta que se conocen desde hace tres años y llevan conviviendo 6 meses, sin embargo desconoce el segundo apellido y la fecha de nacimiento de su pareja, sólo conoce el año, añadiendo que el Sr. G. es divorciado y tiene una hija, por su parte el promotor desconoce el apellido de su pareja, manifestando en su recurso que como es extranjero lo ha olvidado, no obstante también olvida la fecha de nacimiento solo sabe que fue en T. en marzo, respecto a él dice que es divorciado y tiene un hijo, aunque en su recurso rectifica y dice que es una hija como dijo su pareja, no existe constancia de la realidad, añadiendo que ella trabaja asistiéndole a él.

Debiendo significarse respecto a la convivencia alegada en su recurso, que el documento de empadronamiento aportado, que por sí solo no la acreditaría, establece que la promotora está domiciliada en el domicilio del Sr. G. desde el 14 de octubre de 2011, es decir tras iniciarse el expediente de matrimonio. Por último, aunque no es determinante, el promotor es 37 años mayor que la interesada. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (21ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Sant Cugat del Vallés el día 30 de septiembre de 2011 Don Á. V., de nacionalidad española, nacido en L. (B.) el 22 de febrero

de 1951, y Doña R. C., de nacionalidad paraguaya, nacida en A. (Paraguay) el 2 de octubre de 1971, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; declaración jurada de estado civil, divorciado, certificación de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, celebrado el 27 de julio de 1974, con anotación de divorcio de fecha 18 de febrero de 2010, documento nacional de identidad y volante de empadronamiento en S. desde 1996 y de la promotora; pasaporte, declaración testifical de 2 personas, en sede judicial en Paraguay, de su estado civil de soltería, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltera y volante de empadronamiento en S. desde 25 de marzo de 2009.

2.- En el mismo día los interesados ratificaron la solicitud, fue oído el testigo presentado, y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. Posteriormente el Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización solicitada, considerando que la intencionalidad del matrimonio no es la propia de la institución y el 16 de noviembre de 2011 la Encargada del Registro Civil, en el mismo sentido estima que concurre la falta de un verdadero consentimiento matrimonial, y dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, restando importancia a las posibles discrepancias en las audiencias y alegando la que tienen una verdadera relación e incluso que conviven desde hace tiempo, aportando volante de empadronamiento en el mismo domicilio junto a otras 4 personas, fotografías y una relación de testigos posibles. A la vista del recurso el Ministerio Fiscal se reafirma en su oposición a la autorización solicitada y la Encargada, vista la documentación aportada y el mantenimiento de la relación en el tiempo transcurrido informa en sentido favorable a la petición y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana paraguaya resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Aunque las entrevistas de las que existe constancia en el expediente no son amplias si permiten apreciar ciertas discrepancias no justificables en quienes manifiestan conocerse desde hace casi tres años la promotora y desde el año 2009 el promotor, y convivir desde hace 2 años en dos domicilios diferentes, del primero la promotora no recuerda el nombre de la calle pese a residir 4 o 5 meses, y en el actual en el que llevan casi un año o más de un año según el interesado. Respecto a los datos personales y familiares, preguntados mutuamente sobre la familia respectiva y la de su pareja, según el promotor la Sra. C. tiene 4 hijos y varios hermanos en Paraguay, a los que conoce por fotos y cuando se han conectado con ella por internet, sin embargo la interesada no menciona hijo alguno y sí a sus padres y 6 hermanos y una prima que vive con ellos a los que, según ella, su pareja no conoce, salvo a su prima, también difieren respecto a la familia del Sr. V., él dice que tiene 3 hermanos y que otro falleció recientemente, su pareja dice que tiene 4 hermanos, no menciona la circunstancia del fallecimiento y dice que los conoce a todos, en presente.

También muestran desconocimiento respecto a los estudios de cada uno, la interesada dice que acabó bachiller y no sabe los del promotor, y este dice que tiene pocos y su pareja igual. Discrepan de forma ostensible en el horario de trabajo de la promotora, pese a vivir juntos, ella dice que trabaja de asistente de 8 de la mañana a 6 de la tarde sin embargo su pareja dice que, efectivamente, es asistenta en tres domicilios, trabajando en el último de 6 a 9 de la noche, por último difieren en las aficiones mutuas, ambos desconocen el color favorito del otro, y a la pregunta de si han realizado algún viaje juntos la promotora dice que no y el interesado que en agosto, un mes antes de la entrevista, fueron a Extremadura y, aunque no es determinante, el promotor es 20 años mayor que la interesada y esta, según el informe del Ministerio Fiscal, no tiene regularizada su estancia en España. Cabe significar respecto a los documentos de empadronamiento aportados por los recurrentes que, según las fechas de altas y cambios de domicilio, salvo error la convivencia en el mismo domicilio es posterior a la resolución impugnada, 24 de noviembre de 2011, desde abril del mismo año vivían en la misma dirección pero en diferente piso, de hecho la primera notificación de la resolución fue devuelta por desconocidos al no constar en los buzones, y de la testifical solicitada, la Encargada citó a 3 de las personas propuestas, de los que 2 excusaron su asistencia y 1 compareció, manifestando que cree que conviven en el mismo domicilio y que no sabía que querían contraer matrimonio hasta que el promotor le comentó que le habían denegado la autorización.

No obstante lo anterior, en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Sant Cugat de Vallés

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (53ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla el día 16 de septiembre de 2011, Don M. nacido en M. el día 6 de febrero de 1962, y de nacionalidad española adquirida por opción en 1980 y Doña S. de nacionalidad marroquí, nacida en T. (Marruecos) el 30 de junio de 1972, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, volante de empadronamiento en Melilla, fe de vida y estado, divorciado y certificado de matrimonio anterior, de fecha 21 de noviembre de 1988, con anotación de divorcio por sentencia de 16 de abril de 2008, y de la promotora; pasaporte, extracto de acta de nacimiento, certificado de inscripción en el Registro Civil español de un hijo de los interesados, nacido en M. el día ... de ... de 2011, certificado de soltería y certificado de residencia expedido en su localidad de origen con fecha 13 de julio de 2011, que acredita que la interesada reside en ese lugar desde hace más de 6 meses.

2.- Con la fecha 19 de septiembre los interesados ratificaron la solicitud y fueron oídos los testigos presentados y el día 20 de diciembre de 2011 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 30 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los promotores interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no hay contradicciones sino diferencias insignificantes, mencionando que ya se les denegó en otra ocasión y que ahora tienen un hijo en común, español, motivo por el que la interesada ya puede obtener la residencia en España sin necesidad de matrimonio.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68,

73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español por opción desde 1980 y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Consta que la promotora fue asistida de intérprete de árabe para realizar la entrevista. La promotora confunde la fecha de nacimiento de su pareja y al principio de la entrevista menciona que su éste vive sólo para luego mencionar que viven juntos, primero dice que desde que nació su hijo, hace un mes y medio y después que desde febrero de 2011, su pareja dice que desde hace un año, lo que no corresponde con el documento de residencia expedido por las autoridades marroquíes. Discrepan en algunos temas que, pese a lo alegado en el recurso, no son insignificantes, así la promotora dice que cuando nació su hijo no recuerda si su pareja la acompañó al hospital, según él fue a la mañana siguiente, sí que la acompañó la hermana de su pareja que se llama R. en cambio según el Sr. M. al hospital la acompañó una amiga que se llama R. La interesada desconoce que el hijo mayor de su pareja, de los 4 de su matrimonio anterior, vive en la península, desconoce que el promotor tiene antecedentes penales, menciona que él está de baja pero discrepa en el tiempo que lleva en esa situación respecto a lo manifestado por el interesado. Difieren en si la promotora le ha hecho regalos o no a su pareja, en si han salido o no a pasear desde que ha nacido su hijo.

También muestran diferencias en el lugar donde se van a casar, según el promotor en el propio Registro Civil, según la interesada ella no lo sabe, y en donde van a residir después, según la Sra. L. será en M. pero buscarán otra casa pero según su pareja seguirán en el mismo domicilio. Consta en el expediente que los promotores ya habían solicitado con

anterioridad autorización para celebrar su matrimonio que también le fue denegada. Ambos manifiestan textualmente que “ella solicitará la nacionalidad española”, lo que contradice sus alegaciones en vía de recurso respecto a que con el nacimiento de su hijo, español, la interesada ya tendría permiso de residencia y no tiene motivos para utilizar el matrimonio con fines distintos a los que le son propios.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (54ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Sevilla el día 31 de enero de 2012, Don A. de nacionalidad marroquí, nacido en T. (Marruecos) el día 1 de enero de 1960, y Doña C. de nacionalidad española, nacida en S. el 14 de agosto de 1964, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; pasaporte, acta literal de nacimiento y certificado de empadronamiento en S. desde el 22 de noviembre de 2010, y de la promotora; documento nacional de identidad y certificado de nacimiento.

2.- Con la misma fecha los interesados ratificaron la solicitud y el día 31 de enero y 1 de febrero de 2012 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 6 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias advertidas, entre otros temas en relación con la convivencia y con los conocimientos del interesado.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y la Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, resultan del trámite de audiencia, pese a que no es muy exhaustivo, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Consta que el promotor fue asistido de un intérprete de árabe para realizar la entrevista por su escaso conocimiento del español, reconocido por el propio interesado que manifiesta que con su pareja hablan como pueden, porque él habla mucho con sus compatriotas y no domina el español, lo que se contradice con lo expresado por la interesada que dice que entre ellos hablan en español, siendo esta falta de idioma común uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Aunque ambos manifiestan que se conocieron en marzo de 2010, no coinciden claramente en el relato de cómo fue, así la Sra. B. dice que a través de su yerno y el promotor dice que fue en una fiesta en la que había amigos comunes de él y de la hija de su pareja, un mes después iniciaron su relación sentimental y viven juntos en su casa de la localidad de D-H. desde hace dos años, sin embargo la interesada dice que en ese momento no viven juntos, ella vive con su hija y él solo, aunque han alquilado juntos una casa en la localidad precitada.

Respecto a algunos datos familiares y personales, la interesada desconoce los nombres de los hermanos de él porque dice son complicados, y su pareja no conoce a los hermanos de ella porque dice que no tiene relación con ellos salvo con una hermana, R. que vive en otra zona de la ciudad de S. al respecto el promotor dice que si conoce a esta hermana aunque dice que vive en un pueblo del que no recuerda el nombre.

Por otra parte la interesada se contradice al manifestar por un lado que su pareja no sabe leer ni escribir en su propio idioma, y de otro declarar que a él le gusta mucho leer el Corán, siendo que el propio promotor al respecto dice que “el declarante es muy religioso y no lee el Corán porque no sabe leer, pero lo reza de oídas”, lo que desvirtúa la alegación formulada en su recurso, respecto a que fue un malentendido pensando que se refería a leer y escribir en castellano y que por supuesto que el promotor lee y escribe el árabe sin dificultad. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (55ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en A. (Marruecos) el 2 de agosto de 1974, de nacionalidad marroquí y residente en C. y Doña S. nacida el 14 de agosto de 1986 en M. T. (Marruecos) y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: del promotor; permiso de residencia en España con validez hasta el mes de junio de 2011, expedido por su condición de refugiado, fe de vida y estado civil, soltero, resolución del Ministerio del Interior español, del año 2007, concediendo la condición de refugiado y su derecho de asilo y certificado de empadronamiento en C. desde el 30 de septiembre de 2008, y de la promotora; pasaporte, extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de vecindad en M. (Marruecos).

2.- Ratificados los interesados, se celebra las entrevistas en audiencia reservada, con la interesada el día 21 de julio de 2011 en el Consulado General de España en Tetuán (Marruecos) y, con el promotor el día 29 de septiembre siguiente en el Registro Civil de Ceuta. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 12 de enero de 2012 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no se han detallado las discrepancias, que la relación existe y que el motivo del matrimonio es que es la única posibilidad de estar juntos, habida cuenta que otra posibilidad no se contempla por motivos religiosos, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación del auto apelado. El Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero y entre dos ciudadanos extranjeros, uno de los cuales es titular de autorización de residencia en España, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio pueden resultar para el ciudadano que extranjero que no dispone de autorización de residencia. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre dos ciudadanos marroquíes, uno de los cuales es residente legal en España, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Pese a que el promotor manifiesta que se conocen desde que ella era pequeña, hace unos 17 años, porque él trabajaba para su padre y era amigo de su hermano, desconoce el lugar y la fecha de nacimiento de ella, cree que fue en N. y en

agosto, tampoco sabe el apellido de la madre. La interesada por su parte tampoco sabe la fecha de nacimiento de él, sólo la edad, ni los datos del padre ni el apellido de la madre aunque residen en el mismo lugar que ella. Según el promotor la relación sentimental se inició hace tres años a través de un hermano de ella que va a verle a C. aunque no recuerda bien la fecha, posteriormente habló con la madre de ella y la familia fue a verle e iniciaron su relación sentimental, aunque la familia le manifestó que deberían esperar hasta que ella concluyera sus estudios, según la interesada iniciaron su relación hace un año y se han comunicado por teléfono casi diariamente y visitas 1 vez por semana, según el Sr. El M. la comunicación telefónica era cada semana o 15 días y mensajes una vez al mes. Difieren en cuando decidieron casarse, según el promotor 1 año y medio después de iniciar su relación, es decir hace año y medio, según ella cuando la iniciaron hace un año. Respecto a otros datos personales y familiares, según el promotor su pareja conoce a sus padres aunque ella dice que sólo conoce a la madre, y que él tiene 4 hermanos de los que conoce el nombre de 3, cuando tiene 5 hermanos.

La interesada desconoce los estudios que tiene su pareja, los ingresos mensuales que gana con su trabajo, la dirección del promotor en Ceuta, el deporte que practica, cuál es su comida preferida, a este respecto el promotor desconoce la dirección de ella y dice que vive con su madre y un hermano porque los padres están separados, según la interesada vive con sus padres y un hermano, también desconoce el deporte que practica, sus aficiones y gustos porque según manifiesta hace 5 o 6 años que no puede ir a Marruecos, por su condición de refugiado, y casi solo hablan por teléfono, pese a lo cual ambos tienen que consultar su móvil para decir el número de teléfono del otro.

Por último manifiestan que residirán en C. y la interesada dice que entonces buscará un trabajo relacionado con lo que ha estudiado, mientras el promotor al ser preguntado sobre como atenderán los gastos familiares dice que cuando ella encuentre un trabajo de maestra en Marruecos colaborará con los gastos. Todos estos hechos llevan a la conclusión de que el matrimonio proyectado no persigue los fines propios de esta institución, debiendo significarse respecto a lo alegado por el promotor sobre las circunstancias religiosas que motivan su matrimonio, al no estar bien visto que se vean solos sin estar casados, que según informe del Consulado español en Tetuán el matrimonio civil que pretenden no tendría efectos legales en Marruecos para ninguno de los dos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (56ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Torrelavega el 18 de julio de 2011 Don M-Á. de nacionalidad española, nacido el 4 de diciembre de 1955 en T. y Doña I-C. de nacionalidad brasileña nacida el 30 de octubre de 1970 en I. (Brasil), iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior de fecha 21 de octubre de 2005, con anotación de divorcio por sentencia de 3 de marzo de 2011, y volante de empadronamiento en T. desde el año 1991 y conjunto con la promotora desde el 10 de febrero de 2010; y, del promotor, pasaporte, certificación de nacimiento y certificado de matrimonio anterior de fecha 22 de mayo de 1993, con anotación de sentencia de divorcio de fecha 3 de octubre de 2008.

2.- En el mismo día los promotores fueron oídos en audiencia reservada, comparecieron un hermano y una cuñada del interesado, que manifestaron que les consta que los solicitantes no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio.

3.- El Ministerio Fiscal, considerando que las circunstancias personales de la promotora y el resultado de la audiencia hacen dudar que mantengan una relación real y que el matrimonio no persiga fines fraudulentos, se opuso a la autorización y el 24 de enero de 2012 el Juez Encargado del Registro Civil de Torrelavega en el mismo sentido dictó auto disponiendo no autorizar el matrimonio.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos previa solicitud de copia del expediente interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que el auto tiene motivación suficiente que justifique la denegación, aportando diversa documentación justificativa de su relación, fotografías, documentos escolares del hijo menor de la promotora en la que el interesado aparece como persona autorizada igual que su madre a recoger al menor, billetes de viaje a Brasil de los promotores en el año 2009, pasaporte del interesado con entradas y salidas de Brasil en los años 2006, 2007 y 2009 y declaraciones testificales de sus vecinos.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó que se desestime el recurso presentado y se mantenga la resolución apelada. Seguidamente el Juez Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Con posterioridad se ha aportado por el promotor nueva documentación en apoyo de su pretensión, certificado de empadronamiento conjunto, documentación de la Seguridad Social reconociendo a la promotora como beneficiaria del Sr. G. que es el asegurado, inscripción en el Registro de Parejas de Hecho del Gobierno de Cantabria desde el 22 de junio de 2012 y en consecuencia la concesión a la Sra. C. de permiso de residencia en España como familiar de ciudadano de la Unión Europea con fecha 28 de agosto de 2012 con validez de 5 años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 16-1ª de octubre, 3-1ª de noviembre, 21-2ª y 3ª y 28-2ª de diciembre de 2006; 6-3ª y 14-3ª de febrero, 30-4ª de abril, 10-2ª, 28-5ª de mayo, 9-4ª de

julio, 28-6ª de septiembre, 1-3ª de octubre y 18-1ª de diciembre de 2007; y 31-3ª de enero de 2008.

II.- Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos especialmente en los matrimonios entre español y extranjero - en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En este proyectado matrimonio entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña, los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores como para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de simulación. Las entrevistas realizadas a los promotores fueron muy breves por lo que no permiten apreciar suficientemente el grado de conocimiento respectivo, y las sus respuestas resultaron conformes con las preguntas que se les formularon y no revelan contradicciones significativas ni desconocimiento de datos que pudieran llevar a la plena convicción de que existe una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. Y la documentación aportada tanto en fase de recurso, como sobre todo durante la tramitación y examen del mismo, permite considerar que la relación existía y existe, que se ha formalizado como pareja de hecho inscrita en el Registro correspondiente y que ha variado la situación de irregularidad en España de la interesada, situación ésta que además no sería determinante por sí misma para denegar lo solicitado.

VI.- Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de Octubre de 1993, "ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubij*, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º.- Declarar que no hay obstáculos para autorizar la celebración del matrimonio.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (58ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio civil remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Ribeira (A Coruña).

HECHOS

1.- En fecha 20 de septiembre de 2011, Don J. nacido en A. el 4 de abril de 1956 y de nacionalidad española, y Doña M. nacida el 8 de abril de 1972 en Las M de F. (República Dominicana) y de nacionalidad dominicana, solicitaban mediante escrito presentado en el Registro Civil de A Pobra do Caramiñal autorización para contraer matrimonio civil. Aportando como documentación acreditativa: del promotor; certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento en A. desde más de dos años antes, fe de vida y estado, soltero y documento nacional de identidad, y del promotor dominicano; pasaporte, cédula de identidad, extracto de acta de nacimiento, declaración jurada realizada el día 26 de agosto de 2011, ante Notario de su país, de estado civil, soltera, certificado de empadronamiento en el mismo domicilio que su pareja, sin que conste desde cuándo, declaración jurada de domicilio realizada por testigos ante Notario dominicano y certificado de nacimiento en extracto de su hijo nacido en 1995.

2.- Con la misma fecha se ratifican los interesados y son oídos los testigos presentados, posteriormente el Encargado remite el expediente al Registro Civil de Ribeira para su resolución, la Encargada del mismo solicita informe a las autoridades de extranjería sobre las circunstancias de la estancia de la promotora en España. Con fecha 30 de noviembre se llevan a cabo las audiencias reservadas a los promotores. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización del matrimonio al considerar que no existe un verdadero consentimiento matrimonial. La Encargada del Registro Civil deniega, mediante auto de fecha 11 de enero de 2012, la autorización para contraer matrimonio por considerar, tras las audiencias reservadas, que el desconocimiento de datos esenciales muestra una ausencia de consentimiento matrimonial válido por parte de los solicitantes.

3.- Notificada la resolución a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado basado exclusivamente en el hecho de que los interesados han inscrito en el Registro Civil un hijo común nacido el... de... de 2011, aportando documento de inscripción y copia de Libro de Familia. Posteriormente la Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del

Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007.

II.-En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.-La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuando que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C.c.).

IV.-Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

V.-En el caso actual, en el que se pretende contraer un matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana, de los respectivos trámites de audiencia practicados a los interesados, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que la finalidad perseguida con el matrimonio proyectado no es la propia de esta institución y que, por esa causa, no puede ser autorizado: se aprecia un desconocimiento de datos personales importantes, casi absoluto en el caso del promotor, pese a que manifiestan que llevan varios meses conviviendo. Según ambos se conocieron a través de un amigo del promotor que tenía relación con una amiga de la interesada, pero difieren en si esas personas estaban o no casadas entre sí, sin embargo en la entrevista realizada en la Comisaria de la Policía de R., casi un mes después de las entrevistas, la promotora dice que entró en el espacio Schengen por B. sin que le sellaran el pasaporte, en mayo de 2011, y que vino para conocer al promotor, las fechas no cuadran con lo declarado en las entrevistas, realizadas el 30 de noviembre, sobre que decidieron casarse hace 8 meses o más, 4 meses según el interesado, y el embarazo de 8 meses de la promotora. En relación con el matrimonio discrepan en cuándo lo llevarán a cabo ya que según el promotor esperarán a que nazca el niño sin embargo la interesada quiere hacerlo lo más rápido posible, tampoco coinciden en dónde se casarán, según el promotor en el Ayuntamiento de su domicilio, según ella no lo saben, y, por último también difieren en si han hablado o no de cómo atenderán los gastos familiares. Respecto a datos personales y familiares, el Sr. A. no sabe el lugar de nacimiento de su pareja, ni siquiera el país, ni la nacionalidad que tiene, ni la fecha, cree que tiene 37 años cuando tiene 39. Tampoco sabe nada de la familia de su pareja, ni los datos de sus padres, ni de sus hermanos, ni donde viven, ni sabe nada del hijo de su pareja, salvo que existe y vive en el país del que ella es originaria y la promotora por su parte desconoce el segundo apellido de su pareja.

Respecto a otros datos, ambos desconocen el nivel de estudios del otro y la promotora también desconoce el trabajo a que se dedicaba su pareja y los ingresos que tiene, el Sr. A. desconoce si su pareja habla algún idioma además del propio, si tiene aficiones, las comidas o bebidas favoritas, si le gusta viajar, dice que le fue practicada una intervención jurídica que

la interesada no menciona, ni sabe la religión que ella práctica. La promotora por su parte dice que su pareja no tiene comidas favoritas, él si menciona una, y difieren en la bebida que le gusta al interesado, también dice que no hay comida que no le guste especialmente sin embargo él si menciona alguna.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ribeira (A Coruña).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (59ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Salamanca, el día 10 de noviembre de 2011, Don J-J. de nacionalidad venezolana, nacido en C. el 27 de noviembre de 1980, y Doña M. nacida en C. el 24 de octubre de 1984 y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte, certificación literal de nacimiento, certificado de empadronamiento en S. desde el 9 de marzo de 2009, certificado de matrimonio anterior de fecha 15 de junio de 2002 con una ciudadana con anotación de divorcio por sentencia de 18 de octubre de 2010 y, de la promotora, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento en S. desde el 1 de marzo de 2011, declaración jurada de estado civil, soltera y documento nacional de identidad.

2.- Con fecha 5 de diciembre de 2011 los promotores se ratifican en su solicitud, el día 20 del mismo mes se oye al testigo presentado que manifiesta conocer a los interesados y que no hay impedimento para el matrimonio y, posteriormente con fecha 20 de enero de 2012 se celebran las audiencias reservadas.

3.- El Ministerio Fiscal se manifestó en el sentido de oponerse al matrimonio solicitado al considerar que no existe verdadero consentimiento matrimonial. La Encargada del Registro Civil en el mismo sentido entiende que de lo actuado se infiere ausencia de consentimiento matrimonial, y con fecha 2 de febrero de 2012 dictó auto acordando denegar la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias, aportando como documentación adicional, facturas telefónicas y contrato de arrendamiento conjunto de una vivienda, que no coincide con la que aparece en los certificados de empadronamiento, el día 1 de noviembre de 2010 con duración de un año.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación del auto, la Encargada del Registro informa en el mismo sentido y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano venezolano resultan, del trámite de audiencia y demás actuaciones practicadas, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. No recuerdan muy bien alguna circunstancia de cuando se conocieron, si era por la tarde, si era invierno, si la promotora estaba estudiando oposiciones, etc. El promotor había llegado según declara 8 o 9 meses antes para la boda de una hermana y se quedó, su situación es de irregularidad en España. Difieren respecto al tiempo y circunstancias de su convivencia, según la promotora llevan viviendo solos 2 años y anteriormente vivían con otros compañeros, según el interesado, llevan viviendo juntos 2 años y pico y 1 año y pico con otros compañeros, según los certificados de empadronamientos la promotora vive en el mismo domicilio de su pareja desde 8 meses antes de iniciar el expediente. Respecto a datos personales y familiares, la promotora no recuerda el nombre de la hermana y cuñado de su pareja ni a que se dedican, pese a que, según el interesado, hace dos meses que han estado con ellos en su casa, según el promotor desde que está en España siempre ha vivido

en S. sin embargo su pareja dice que durante 2 semanas vivió en un pueblo de T. También difieren en como pasaron las últimas navidades pese a haber transcurrido escasamente un mes cuando se produjo la entrevista, según el promotor ella fue a pasar la Navidad en C. con su madre y volvió el día 26 o 27, sin embargo la propia interesada dice que volvió el día 30 para pasar la Nochevieja, ese día cenaron solos en su casa y luego tomaron las uvas en casa de una amiga, sin embargo el promotor dice que cenaron en casa de su amiga L. y tomaron las uvas con más invitados. También discrepan en cómo se desarrolla su jornada ordinaria, según el promotor ella está preparando unas oposiciones y va a una academia, según la interesada actualmente no va a la academia, ambos coinciden en la hora a la que se levanta ella pero no en la que se levanta el promotor, según su pareja se levanta antes que ella a las 9 o 9 y media, según él siempre un poco después a las 11 o 11 y media. Difieren absolutamente en lo que hace el promotor durante su jornada y, como ejemplo según ambos la noche anterior a las entrevistas cenaron juntos, aunque el promotor no recuerda el qué y la interesada cree que no cenaron nada. Debiendo significarse respecto a la documentación aportada en el recurso que, como se recoge en el antecedente de esta resolución, el contrato de arrendamiento no corresponde al domicilio en que se supone que están empadronados actualmente los promotores.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (60ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil de Peralta (Navarra).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Peralta el día 20 de diciembre de 2011 Don K. de nacionalidad senegalesa, nacido en G. (Senegal) el 29 de julio de 1984, y Doña L-D. de nacionalidad española, nacida en A. (La R) el 18 de abril de 1985, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte, certificado de soltería, certificación de nacimiento en extracto, certificado de empadronamiento en P. desde el 21 de noviembre de 2011 y certificado de capacidad expedido por el Consulado General de Senegal en Madrid y, de la promotora, documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento en C. (La R) desde el 13 de agosto de 2004 y fe de vida y estado, soltera.

2.- Con la misma fecha se ratificaron los solicitantes, fueron oídos los dos testigos presentados y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de la audiencia reservada se extrae prueba suficiente de que no existe verdadero

consentimiento matrimonial se opuso a la concesión de lo solicitado y el 13 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manteniendo que su relación es auténtica, aportando como documentación correos electrónicos, informe médico relativo a un embarazo de la Sra. M. que no llegó a término y reiterando que se autorice el matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se reiteró en su oposición a la concesión de la autorización solicitada y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Sus declaraciones

muestran un desconocimiento mutuo de datos personales y familiares. Así coinciden en dónde y cuándo se conocieron, sin embargo la promotora dice que fue en un Bar y su pareja que fue en la discoteca, y admiten que conviven de forma esporádica. La Sra. M. no sabe la localidad en la que él nació, dice que tiene 2 hermanas y un hermano cuando según el interesado tiene muchos hermanos, unos 8, él tampoco sabe las edades de los hermanos ni de su hija mayor, manifiesta el interesado que conoce a la hija pequeña sin embargo la promotora dice que sus hijas no le conocen personalmente. También difieren en otros datos, así la promotora dice que él vive con dos amigos y el interesado dice que con uno, éste a su vez dice que ella trabajó de camarera y bailarina cuando según la promotora trabajó en fábricas y ella por su parte dice que no sabe en qué ha trabajado él, ninguno conoce los ingresos del otro ya que ella piensa que él no tiene ingresos, no cobra ninguna ayuda y sólo lo que le dejan sus amigos, según el interesado cobra una ayuda del Gobierno de Navarra. Ninguno sabe los estudios del otro, ella conoce que él es musulmán pero dice que no le ve practicar sin embargo el interesado dice que es musulmán practicante y que reza todos los días, también difieren en los regalos que se han hecho.

La promotora no sabe cómo llegó el Sr. S. a España, cree que fue en el año 1996 a S. en realidad llegó en patera en el año 2006 a T. y está en situación irregular, circunstancia que si es conocida por la promotora, manifestando textualmente "que el hecho de que se quiere casar es para que él tenga los papeles y tenga posibilidad de trabajar" y que "ella aunque se case va a vivir en C". en donde ahora vive. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Peralta (Navarra).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (64ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña K. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento del interesado, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y fe de vida y estado Sr. H. certificado de residencia y soltería Sra. H.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas

en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

5.- Con fecha 30 de julio de 2012 inician nuevamente solicitud de autorización del matrimonio aportando la misma documentación que en la solicitud anterior salvo que incorporan certificado literal de nacimiento de un hijo de la pareja nacida ... de ... de 2012, el informe del fiscal es ahora inicialmente favorable a la autorización. El encargado del registro civil nuevamente mediante auto de 18 de febrero de 2013 no autoriza la celebración del matrimonio.

6.-Notificados los interesados, estos interponen nuevamente recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

7.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así debemos tener en consideración que para la tramitación de ambos expedientes se han celebrado las correspondientes audiencias reservadas y en todas ellas se ha considerado finalmente tanto por el fiscal como por el encargado que existen indicios claros para su denegación a pesar que han aportado certificado literal de nacimiento inscrito en el Registro Civil de Melilla de una hija de la pareja nacida el... de... de 2012 y en la que los interesados constan como padres.

En lo que se refiere a la primera audiencia reservada de fecha 11 de octubre de 2011 la Sra. H. declara que tendrán un niño en Abril y que será niño, mientras que él declara desconocer si será niño o niña, que los testigos son madre e hijo y que son amigos de su pareja, que su novio tiene un coche de color marrón mientras que él dice que es de color berenjena y que cuando se case solicitara la nacionalidad española, que el Sr H. vive solo mientras que él dice que lleva un año viviendo con ella y declara que efectivamente los testigos son amigos suyos pero desconoce sus nombres. En relación a la audiencia reservada realizada el 27 de noviembre de 2012 la Sra. H. declara que ahora no pedirá ni la residencia ni la nacionalidad española y reconoce haber denunciado a su pareja por malos tratos hecho también reconocido por el interesado y en este segundo expediente declara que los testigos son amigos suyos pero desconoce sus datos personales.

En ambos expedientes han incurrido en lo mismo que es la presentación de testigos que desconocen la verdadera relación de los interesados ya que como señala el propio encargado del registro civil ignoran los datos básicos personales de la pareja y los interesados asimismo desconocen los datos básicos personales de los testigos, por lo que la presentación de estas personas fundamenta aún más la denegación de la autorización Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 33 años y consta además denuncia formulada por la interesada el 30 de mayo de 2011 por malos tratos en el ámbito familiar.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil; ha acordado desestimar ambos recursos interpuestos y confirmar las resoluciones apeladas.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (75ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Motril (Granada).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Motril el día 15 de noviembre de 2011, Don R. de nacionalidad española, nacido en S. el 17 de noviembre de 1922, y Doña H. de nacionalidad ucraniana, nacida en L. (Ucrania) el 2 de junio de 1960, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, declaración jurada de estado civil, viudo, certificación de nacimiento, certificado de matrimonio anterior de fecha 30 de enero de 1951, certificado de defunción de su anterior cónyuge, con fecha 6 de noviembre de 2008, documento nacional de identidad y certificado de empadronamiento en M: y, de la promotora; permiso de residencia de larga duración en España, declaración jurada de estado civil, divorciada, certificado de nacimiento como H. certificado de divorcio de fecha 13 de agosto de 2010, conservando su apellido de casada H. declaración ante notario de que no hay impedimentos para el matrimonio y certificado de empadronamiento en el mismo domicilio del otro promotor desde el 12 de agosto de 2009.

2.- En el mismo día los interesados ratificaron la solicitud, fueron oídos los testigos presentados, un hijo de la promotora y dos amigos de ambos y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. Posteriormente el Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización solicitada, considerando que la intencionalidad del matrimonio no es la propia de la institución y el 19 de diciembre de 2011 la Encargada del Registro Civil, en el mismo sentido dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando la falta de concreción en el auto de los motivos de denegación y el hecho de que la interesada se encuentra en situación regular en España, manteniendo que tienen una verdadera relación personal ya que conviven desde hace tiempo.

4.- Del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se reafirma en su informe y la Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana ucraniana resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Aunque las entrevistas de las que existe constancia en el expediente no son amplias y por tanto no llegan a mostrar el verdadero conocimiento mutuo que tienen los solicitantes de las circunstancias personales, familiares y laborales que comporta toda si es claro que el Sr. P. busca con el matrimonio asegurar los medios de vida de la promotora ya que manifiesta textualmente “como ella lo ha cuidado muy bien y él decidió compensarle de alguna manera y cree que esa es la mejor manera”. Del contenido de las entrevistas se extrae que se conocieron cuando la promotora empezó a trabajar en casa del promotor para el cuidado y la atención al mismo, discrepan en el tiempo que llevan como pareja, según la promotora medio año y según el promotor año y medio, también en cuando decidieron casarse según la Sra. B. hace un año y según el promotor hace año y pico. En relación con otros temas también discrepan en lo que desayuna cada uno, en los medicamentos que utilizan, así el Sr. P. dice que su pareja utiliza medicación cuando está nerviosa sin embargo esta sólo menciona que toma medicación para la artrosis cuando le duele. Por último y aunque no es determinante el promotor es 38 años mayor que la interesada.

Debiendo significarse respecto a lo alegado en el recurso, que el hecho de que conste acreditado el empadronamiento en el mismo domicilio no acredita la convivencia ni la relación personal, sino que es algo lógico si tenemos en cuenta que la interesada trabaja para el promotor encargándose de su atención. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe al menos en uno de los promotores, por propia declaración, voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución. No obstante, no rigiendo en el ámbito del Registro Civil el principio de autoridad de cosa juzgada, es factible reiterar un expediente o unas actuaciones ya decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Motril (Granada).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (76ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla el día 16 de septiembre de 2011, Don S. nacido en F. (Marruecos) el día 4 de mayo de 1982 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 8 de mayo de 2009 y Doña S. de nacionalidad marroquí, nacida en N. (Marruecos) el 12 de enero de 1992, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, fe de vida y estado, soltero, y certificado de empadronamiento en M. desde 10 de julio de 1997 y de la promotora; pasaporte, certificado en extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería, certificado de residencia durante los últimos 6 meses en N. y expedido allí con fecha 29 de junio de 2011 y certificado de nacimiento de una hija inscrita por ambos promotores, nacida en M. con fecha ... de ... de 2011.

2.- Con fecha 19 de septiembre de 2011 los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos que manifiestan que estos no incurren en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 15 de noviembre siguiente los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 21 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su relación es auténtica como lo prueba la existencia de una hija en común. Consta en el expediente que los interesados promovieron en el mismo Registro expediente de autorización de matrimonio con fecha en el año 2010, y que tras la correspondiente tramitación les fue denegada su petición, sin que el auto correspondiente fuera impugnado mediante recurso.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento

del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Consta que los interesados ya solicitaron autorización para contraer matrimonio en el mismo Registro en el año anterior al del que ahora se examina, siéndole denegado mediante resolución que no fue recurrida, sino que los interesados decidieron presentar nueva solicitud. Pese a lo anterior y a que, según declaran, viven juntos siguen existiendo discrepancias que no resultan lógicas. Según ambos son familia lejana aunque no queda claro quién es el nexa común. El promotor dice que vive con sus padres, su pareja y su hija, por su parte la promotora primero manifiesta que su novio vive con sus padres y sus hermanos para luego añadir que ella vive también con ellos y su hija. Respecto al domicilio el promotor dice que vive allí desde hace un año y según ella su pareja lleva viviendo allí dos años, en relación con este tema debe significarse que según la documentación aportada por la ciudadana marroquí, certificado de residencia, esta tenía su domicilio en el primer semestre de 2011 en Marruecos, aunque al mismo tiempo estaba naciendo su hija en M.

En relación con otros temas, la promotora sabe que su pareja estudió en M. pero no sabe dónde, también manifiesta que tras el matrimonio buscarán una casa para alquilar, sin embargo el promotor dice que tras el matrimonio seguirán en M. en la misma casa que ahora y que más adelante comprarán una casa. Según la promotora su pareja viaja mucho, ambos coinciden en que el último viaje fue a M. aunque discrepan en las fechas y en el tiempo de duración y, por último ambos manifiestan que cuando se casen la ciudadana marroquí solicitará la nacionalidad española. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (77ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio civil remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Alcantarilla (Murcia).

HECHOS

1.- En fecha 23 de noviembre de 2011, Don M-A., nacido en M. el 24 de mayo de 1970 y de nacionalidad española, y Don L-D. nacido el 14 de junio de 1993 en S. (La República Dominicana) y de nacionalidad dominicana, solicitaban mediante escrito presentado en el Registro Civil de Alcantarilla autorización para contraer matrimonio civil. Aportando como documentación acreditativa: del promotor español; certificado de nacimiento, volante de empadronamiento en A. desde el 6 de junio de 2008, declaración jurada de estado civil, soltero, y documento nacional de identidad, y del promotor dominicano; pasaporte, extracto de acta de nacimiento, sin legalizar, declaración jurada en el Consulado de su país de estado civil, soltero, certificado de inscripción consular, volante de empadronamiento en el mismo domicilio que su pareja desde el 23 de agosto de 2011, hasta el 15 de agosto de 2011, según documento consular, residía en Alemania.

2.- Con la misma fecha se ratifican los interesados y el día 2 de diciembre de 2011 se celebra trámite de audiencia reservada por separado con ambos promotores y son oídos los testigos presentados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización del matrimonio al considerar que no existe un verdadero consentimiento matrimonial. El Encargado del Registro Civil deniega, mediante auto de fecha 19 de enero de 2012, la autorización para contraer matrimonio por considerar, tras las audiencias reservadas, que el desconocimiento de datos esenciales muestra una ausencia de consentimiento matrimonial válido por parte de los solicitantes.

3.- Notificada la resolución a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, haciendo un nuevo relato de la relación que poco tiene que ver con lo manifestado en las entrevistas y solicitando de nuevo la autorización del matrimonio, aportando pasaporte con visados extendidos por las autoridades alemanas y documentación alemana de sus estudios de formación profesional.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del mismo y el Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento

del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007.

II.-En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.-La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuando que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C.c.).

IV.-Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

V.-En el caso actual, en el que se pretende contraer un matrimonio civil entre un ciudadano español y un ciudadano dominicana, de los respectivos trámites de audiencia practicados a los interesados, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que la finalidad perseguida con el matrimonio proyectado no es la propia de esta institución y que, por esa causa, no puede ser autorizado: se aprecia un desconocimiento de datos personales importantes, así el promotor dominicano declara que no tiene residencia legal en España, cuando se pregunta por los datos de su pareja da los nombres de sus padres, cuando se le cuestiona por el lugar y fecha de nacimiento de su pareja, dice que no se acuerda del año y da el domicilio de su pareja en lugar de la localidad de nacimiento. El promotor español conoce que su pareja tiene un hermano de 19 años aunque difiere en el nombre y también menciona otros 2 hermanos de padre que él no conoce, a estos el Sr. B. no los menciona.

En cuanto a la relación que mantienen, ambos coinciden en que se conocieron por internet, el promotor dominicano dice que fue hace un año y que desde hace tres meses viven juntos en casa de su pareja, no dice cuándo decidieron casarse aunque si el lugar, por su parte el promotor español da unas fechas que hacen imposible el relato, así manifiesta que se conocen de 1 a 3 meses, que llevan 3 meses viviendo juntos y que hace un mes que decidieron casarse aunque no dice dónde lo decidieron. Por otra parte difieren en otros temas, por ejemplo laborales, el promotor español dice que su profesión es peón de la madera y que trabaja en una empresa, según su pareja está en el paro y tampoco conoce la cifra de los ingresos del Sr. M. según el cual ninguno se ayuda económicamente cuando según el Sr. B. se ayudan los dos, también discrepan en los estudios realizados y el promotor dominicano contesta de forma ininteligible a alguna de las preguntas sobre las aficiones de su pareja. Por último y, aunque no sea determinante el promotor español es 23 años mayor que su pareja.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcantarilla (Murcia).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (78ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el día 9 de diciembre de 2011 Don M. nacional de Bangla Desh, nacido en C. (Bangla Desh) en 1984, y Doña L-T. nacida en G. (Ecuador) el 21 de agosto de 1961 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 4 de julio de 2007, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, permiso de residencia, certificado de nacionalidad, estado civil y buena conducta, certificación de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltero y certificado de empadronamiento en M. desde 9 de septiembre de 2004 y, de la promotora, documento nacional de identidad, declaración jurada de estado civil, soltera, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y certificado de empadronamiento en M. desde el 17 de marzo de 2000.

2.- Con la misma fecha fue oído el testigo presentado y el día 10 de enero de 2012 se llevaron a cabo las audiencias reservadas. El Ministerio Fiscal, considerando que se opone a la concesión de lo solicitado y el 20 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manteniendo que las discrepancias estuvieron motivadas por la diferencia idiomática que supone una barrera, añadiendo que su relación es auténtica, que conviven y han iniciado los cursos previos a celebrar el matrimonio de forma canónica, adjuntando documento de la parroquia en el que se hace constar que empezarán a asistir a los cursos el n enero de 2012.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se reiteró su no oposición a la concesión de la autorización solicitada y el Encargado por su parte se reafirma en la denegación impugnada, disponiendo la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del

Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española de origen ecuatoriano y un ciudadano de Bangla Desh, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Así coinciden en que se conocen desde hace 3 años y que conviven desde hace 2, según la promotora en el que era su domicilio, según consta por la documentación de empadronamiento el promotor reside en el mismo domicilio de su pareja desde el 26 de octubre de 2011, es decir un mes y medio antes de iniciar el expediente que se examina.

Pese a esa supuesta convivencia el promotor declara que su pareja ha nacido en G. cuando es en otra localidad de Ecuador, y desconoce los nombres de los padres de ella porque, según él, no se lo ha preguntado, por su parte la promotora tampoco sabe dónde ha nacido su pareja, ya que dice que fue en una ciudad cercana a Bangla Desh, desconociendo quizá que este último es el país de nacimiento, debiendo significarse respecto a la barrera que supone los diferentes idiomas de los solicitantes, argumentado en su recurso que, precisamente la falta de un idioma común es uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Por último aunque no es determinante la promotora es 23 años mayor que el promotor. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (80ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Sant Feliu de Guixols (Girona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Sant Feliu de Guixols el día 21 de febrero de 2011 Don A. nacional de Mali, nacido en B. (Mali) el 27 de diciembre de 1983, y Doña D-C. nacida en T. (Honduras) el 8 de diciembre de 1968 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 18 de diciembre de 2010, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, extracto de certificación de nacimiento, certificado de soltería, pasaporte y certificado de empadronamiento en Sant F de G. desde el 15 de septiembre de 2006 y, de la promotora, documento nacional de identidad, certificado de estado civil, soltera, expedido por las autoridades de su país de origen y certificado de empadronamiento en San F de G. desde el 29 de junio de 2004.

2.- Con fecha 31 de mayo de 2011 los interesados ratificaron la solicitud y declararon su estado civil, solteros. Posteriormente, con fecha 19 de septiembre de 2011, se llevaron a cabo las audiencias reservadas.

3.-El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de la audiencia reservada se extrae prueba suficiente de que no existe verdadero consentimiento matrimonial, interesó la desestimación de la solicitud y el 3 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manifestando que su relación es auténtica y aportan certificado de empadronamiento en el mismo domicilio, con una tercera persona, el testimonio varias personas que les conocen y que firman el mismo texto y fotografías.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación en todos sus términos del auto impugnado y el Encargado informó en el mismo sentido y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68,

73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española de origen hondureño y un ciudadano de Mali, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Sus declaraciones muestran discrepancias sobre cómo se conocieron, coinciden que se fue en febrero de 2009 pero, según la promotora los había presentado un amigo de su pareja y luego ella le alquiló un piso a él, en cambio según el promotor nadie les presentó sino que se conocieron porque ella le alquiló una habitación a él, también difieren en cuando iniciaron su relación sentimental, según la promotora desde que empezaron a vivir en la misma casa, según su pareja en febrero de 2009 fue a vivir a la casa pero no recuerda cuando se hicieron novios. Según los datos históricos de empadronamiento de ambos, antes del domicilio actual coincidieron en otro de abril a octubre de 2010, en ese mes con dos días de diferencia cambiaron de domicilio y, siguen las discrepancias respecto a cuando decidieron casarse, según la Sra. R. hace un año y según su pareja hace uno o dos años. Pese a esa convivencia también muestran desconocimiento de datos personales y, sobre todo, familiares, mutuos, así él no conoce los apellidos correctos de su pareja, y fecha su nacimiento 10 años después de la fecha real, el promotor por su parte no sabe cuál es el estado civil de su pareja pero sí que tiene 2 hijos, aunque difiere en la edad de la hija menor, no sabe cuántos hermanos tiene la promotora, dice que son 2 y son 4 y parece desconocer que en el mes de diciembre de 2010 ella había adquirido la nacionalidad española. Por su parte la promotora declara que él tenía 2 hermanos, uno que falleció y otro más joven pero desconoce los nombres sin embargo según el interesado tiene 3 hermanos y no menciona la circunstancia del fallecimiento. También difieren al declarar sobre las aficiones mutuas, según el interesado la de la Sra. R. es ver novelas, según ella bailar, y según el interesado las suyas son ir al gimnasio y al fútbol cuando tiene tiempo sin embargo su pareja dice que va al gimnasio y a una escuela de salsa. También discrepan respecto a si la interesada tiene o no algún tratamiento médico y en los ingresos económicos mensuales de la promotora. Todo ello

se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución, sin que las alegaciones y documentación aportada al recurso desvirtúen esa convicción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sant Feliu de Guixols (Girona).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (82ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Alcira.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M^a-Á. nacida en España y de nacionalidad española y Don R. nacido en Bolivia y de nacionalidad boliviana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de no matrimonio y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la autorización del matrimonio. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 21 de junio de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste se opone al mismo. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra

los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano boliviano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado se contradice él mismo, ya que primero dice que cuando se conocieron porque vivía en el mismo bloque que su hermana para luego decir que no era en el mismo bloque pero sí en la misma finca, luego dice que ella tiene tres hijos de los cuales dos viven con ellos para luego decir que ahora no viven con ellos pero que lo harán cuando se casen y que en este momento viven con su padre. Ambos declaran que viven juntos desde hace seis meses pero en el recurso alegan que viven juntos hace nueve meses. Ella desconoce el nombre de los hijos de él declarando que la pequeña de cinco años se la quiere traer a España aunque dice que los conoce por webcam; ambos desconocen los nombres de los padres del otro. El interesado declara que él la llama G. y ella le llama M. sin embargo ella no declara nada de esto. El interesado manifiesta que ella trabaja limpiando casas, pero desconoce donde lo hace. Discrepan en lo último que comieron y cenaron, lo que desayunan, lo que hacen en su tiempo libre, etc. El interesado se contradice constantemente en sus declaraciones. No presentan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alzira (Valencia).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (85ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Ferrol.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en Bangladesh y de nacionalidad bangladeshí y Doña R-D. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen tres testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a la estimación del recurso interpuesto. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar

el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano de Bangladesh y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados viven en ciudades diferentes ya que ella vive en F. y él en M. según dicen los interesados se conocieron en M., según él hace dos años, según ella año y pico, donde ella tiene una hermana viviendo cerca de donde él trabaja. La interesada desconoce los apellidos del interesado, ignorando donde está el país donde nació. El interesado dice que ella se llama "R." y que la llama S. familiarmente. El interesado declara que se hicieron novios tres o cuatro meses después de conocerse y ella dice que hace cinco o seis meses, después de un viaje que hizo a la República Dominicana donde permaneció tres o cuatro meses, regresando en mayo, al respecto el interesado declara que ella estuvo en su país dos meses y regresó en junio. El interesado dice que ella no trabaja sin embargo, ella dice que trabaja por horas en una casa. Ella dice que una vez que contraigan matrimonio pondrán un negocio de kebab, aunque no sabe dónde residirán ya que ella tiene un hijo 14 años en F. que vive con sus abuelos paternos; el interesado declara que se casa para regularizar su situación y conseguir permiso de trabajo. No aportan prueba alguna de su relación. Por otro lado, la interesada es 17 años mayor que el interesado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ferrol (A Coruña).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (86ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Cullera.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don S. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa y Doña N. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, certificado en extracto de inscripción de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 18 de octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste emite un informe favorable. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados, sobre todo el interesado, da unas preguntas muy escuetas. Según el auto emitido por el encargado, los interesados habían promovido expediente matrimonial en el año 2010, que les fue denegado. El interesado reconoce que quiere casarse para solicitar la residencia, desconoce el nombre de la hermana de ella aunque, según él la conoce personalmente. Los interesados tienen una hija en común nacida en... de 2010, pero según el informe del encargado ella no quiso que él la reconociera hasta marzo de 2011. El interesado viajó a España con un visado de turista en 2008, está en España en una situación irregular, aunque ella dice que ésta arreglando los papeles de residencia, sin embargo él dice que no. Discrepan en lo referente a los preparativos de la boda contestando con evasivas o monosílabos. Él dice que no trabaja sin embargo ella declara que él la ayuda los fines de semana en un trabajo que tiene de limpieza. La interesada desconoce el nombre del testigo del expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cullera (Valencia).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (87ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Badalona.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña J. nacida en China y de nacionalidad china y Don J-M. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y permiso de residencia, y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana china y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron e iniciaron su relación sentimental ya que ella dice que se conocieron en el año 2004 y comenzaron su relación en el año 2008, mientras que él declara que se conocieron hace cuatro o cinco años (si la entrevista se realizó en 2011, entonces sería 2007),y comenzaron la relación hace cuatro o cinco años. El interesado da unas respuestas incoherentes, desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, los nombres de los padres y hermano de ella ya que dice que se llaman "mamá J. papá J. y

hermano J.” desconocen donde trabaja cada uno, salario, idiomas hablados además del propio, gustos, aficiones, deportes practicados, teléfonos, regalos que se han hecho y motivo, etc. Se contradicen en lo referente a la convivencia ya que la interesada declara que no viven juntos y su domicilio es “cuba” de su propiedad y que vive con su tía, mientras que él declara que viven juntos. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 29 años mayor que la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil de Badalona.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (92ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña M-E. nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción de la primera esposa del interesado y permiso de residencia, inscripción de nacimiento y sentencia de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana ecuatoriana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que él dice que hace un año y ella dice que hace dos años. El interesado desconoce fecha y lugar de nacimiento de la interesada. Se conocieron en la residencia donde trabaja la interesada y donde estaba el promotor con su esposa. Según la interesada la esposa del promotor antes de morir, le pidió que cuidara de él, declara que ella vive con el testigo del expediente el señor H-M. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 34 años mayor que la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (93ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante legal, contra auto de la encargada del Registro Civil de Córdoba.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don R. nacido en España y de nacionalidad española y Doña S. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y permiso de residencia, certificado de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal se opone a la celebración del matrimonio. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 21 de julio de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos, mediante representante legal, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar

el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Ambos desconocen la fecha de nacimiento del otro, el interesado desconoce los nombres de los padres de ella y de sus hermanos declara que sólo conoce a N. porque vive en España, sin embargo ella dice que él conoce a dos de sus hermanas que viven en España N. y F.; ella desconoce algunos de los nombres de los hermanos del interesado, declara que él tiene dos hijos cuando son tres, dice que él no ha estado casado cuando es divorciado, tampoco sabe la dirección donde se supone que convive con el interesado. Discrepan en gustos, aficiones, como por ejemplo, el interesado dice que tuvo una operación de un dedo, sin embargo ella dice que él no ha tenido ninguna operación, el interesado dice utilizar la colonia de marca P, sin embargo ella dice que es A. el interesado afirma que a ella le gusta todo tipo de comida, pero ella dice que le gusta el cuscús. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 24 años mayor que la interesada. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Córdoba.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (94ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Logrosán.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-M. nacido en España y de nacionalidad española y Doña S. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento, acta de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal no se opone a la autorización del matrimonio. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de octubre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste se adhiere al recurso interpuesto. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, en la entrevista que se le hizo a la interesada, se vieron las dificultades que tenía con el español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Desconocen los nombres de los hermanos del otro, nivel de estudios, los teléfonos respectivos, etc. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella, dice que viven en A. pero no sabe la calle donde viven ya que dice que cree que es la calle Z. cuando ella declara que viven en la calle T. La interesada declara que la primera vez que estuvo en España permaneció un mes, después se fue a Marruecos y tres meses después regresó a España, al poco de divorciarse, dice que va y viene de Marruecos por medio del interesado, sin embargo el interesado declara que la primera vez que ella vino a España estuvo tres o cuatro meses, después se fue a Marruecos y desde que vino viven juntos. El interesado desconoce el trabajo que ejerce ella porque dice que es limpiadora y que se ocupa de la casa, sin embargo ella declara que es modista, que trabaja en su casa y que la gente del pueblo le lleva la ropa para arreglos, dice que habla tres idiomas cosa que el interesado desconoce declarando que habla marroquí y francés. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo, lado de la cama donde duerme cada uno, si ella bebe o no, programas de televisión que ven, lo que cenaron en Navidades, etc. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 15 años mayor que la interesada. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Logrosán (Cáceres).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (95ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Vitoria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en Nigeria y de nacionalidad nigeriana y Doña S. nacida en Jamaica y de nacionalidad estadounidense, iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, declaración de edad, declaración de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, inscripción de nacimiento, sentencia de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que no conoce ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de mayo de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del "consentimiento matrimonial", no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al "estado civil" y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretenda atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud

civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano nigeriano y una ciudadana estadounidense, residentes en España, y de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada declara que el interesado vive en la calle A. donde tiene una habitación compartida, sin embargo el interesado dice que vive en la calle J y que en la calle A. es donde se queda la interesada cuando viene a verle. El interesado declara recibir una ayuda de 900 euros, mientras que ella declara que la ayuda que recibe él es de 500 euros. El interesado declara que ella trabaja en TNT, desconociendo el salario que tiene, sin embargo ella declara trabajar en el aeropuerto JFK. Por otro lado el interesado está en una situación irregular en nuestro país, y no ha solicitado permiso para residir de forma legal.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vitoria.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (96ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña E. nacida en Guinea Ecuatorial y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2003 y Don A. nacido en Nigeria y de nacionalidad nigeriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y declaración de edad, declaración de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone

a la autorización del matrimonio. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 17 de marzo de 2010 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste solicita la confirmación del auto recurrido. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española, de origen ecuatoguineano, y un ciudadano nigeriano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, el interesado necesitó un intérprete de inglés porque no habla español y la interesada no habla inglés, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los

contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Aunque coinciden en señalar que se conocieron en 2009, sin embargo ella no se acuerda de la fecha y él dice que fue en octubre, declara ella que viven juntos desde 2009, sin recordar fecha y que a finales de 2009 iniciaron la relación sentimental, mientras que él declara que comenzaron la relación sentimental en 2010, desde que ella estuvo enferma. La interesada declara que él conoció a su madre en casa, en el año 2009, sin embargo él dice que la conoció en el hospital en el 2010. Desconocen los horarios laborales, lo que desayunan, aficiones, gustos personales, por ejemplo, él dice que ella no es golosa cuando ella admite que le gusta el chocolate, él dice que salen juntos con amigos y ella dice que no salen con ellos, etc. No presentan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

IV.2.2.- Expedición de certificado de capacidad matrimonial

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (46ª)

IV.2.2.- Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de La Roda.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don P. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña F. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y certificado de empadronamiento del interesado y pasaporte, partida literal de nacimiento y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 14 de julio de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la confirmación de la resolución apelada. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, la interesada necesitó de un traductor porque desconoce el español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron cuando el interesado viajó a Marruecos con un amigo llamado J. que vive en España. La interesada no recuerda cuando se conocieron, declara que trabaja con vehículos pesados cerca de M. y que vive con sus padres en un pueblo cerca de M., cuando en realidad el interesado vive en A., declara que él tiene una hija de la que desconoce el paradero, sin embargo el interesado no menciona este hecho. El interesado desconoce el nombre de la madre de ella, dice que se comunican por teléfono e internet, pero no presentan pruebas de ello, declara que ha ido una vez a Marruecos a ver a la interesada, sin embargo ella declara

que él ha viajado cuatro veces, siendo la última en abril de 2011. No presentan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de La Roda (Albacete)

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (111ª)

IV.2.2.-Certificado de capacidad matrimonial.

Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Pontevedra.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Pontevedra el día 12 de enero de 2011, Don R. de nacionalidad española, nacido en P. el 25 de abril de 1966, solicitaba certificado de capacidad para contraer matrimonio en Marruecos con Doña S. de nacionalidad marroquí, nacida en D-O. El H. (Marruecos) el 13 de mayo de 1984. Acompañaba la siguiente documentación: propia, documento nacional de identidad, certificación literal de nacimiento, volante de empadronamiento en P. y declaración jurada de estado civil, divorciado y certificado de matrimonio anterior, de fecha 13 de agosto de 1993, disuelto por divorcio de 1 de febrero de 2008, y de la interesada; certificado de nacimiento, certificado de residencia y certificado de soltería.

2.- El mismo día el promotor ratificó la solicitud y fue oído en audiencia reservada en el Registro Civil de Pontevedra. La interesada, por su parte, se ratificó y fue oída reservadamente en el Registro Civil Consular de Casablanca (Marruecos) el 2 de junio de 2011.

3.- El Ministerio Fiscal, informó que no procedía conceder lo solicitado y el 18 de julio de 2011 la Encargada del Registro Civil, a la vista de la audiencia practicada, dictó auto acordando denegar el certificado de capacidad solicitado.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias, alegando que había una persona que ayudaba a los solicitantes en sus

comunicaciones y que convivieron durante 2 meses en su último viaje de enero a marzo de 2011, así como que ella no puede venir porque en Marruecos no le dan visado.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó que se proceda a la desestimación del recurso y a la confirmación de la resolución apelada vistas las discrepancias apreciadas, y la Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª, 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio, 21-8ª de septiembre, 13-5ª, 22 y 29 de diciembre de 2007 y 7-5ª de julio de 2010.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, VII. b), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar -ni contribuir, como en este caso, a la autorización- un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En este proyectado matrimonio entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe razonablemente deducir que la finalidad perseguida no es la propia de la institución matrimonial, de principio uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia es la inexistencia de una lengua común que posibilite la comunicación y, en este caso, parece que no la hay, aunque en la entrevista el promotor dice que ella habla un poquito de español, que lo está estudiando y él de árabe, lo cierto es que la interesada realizó su entrevista en el Consulado en árabe y que en el recurso el Sr. C. reconoce que una tercera persona amiga

les ayudaba en las comunicaciones. Difieren en el momento en que se conocieron, así el promotor dice que fue hace 5 meses, lo que supone agosto de 2010, en Marruecos cuando los presentó un amigo marroquí y entablaron amistad, en cambio la interesada dice que se conocieron hace 2 meses, en noviembre de 2010, porque los presentó un familiar de ella que es amigo del promotor y este se lo pidió porque quería casarse con una marroquí. Desde entonces ella manifiesta que él ha vuelto a verla en otra ocasión en 2011, no recordando la fecha, lo que no guarda relación con que él en el recurso diga que volvió de enero a marzo de 2011 y vivieron juntos. Difieren respecto al lugar en el que residirán tras el matrimonio, él dice que en Marruecos y ella dice que no lo saben.

Respecto a datos personales y familiares, la interesada desconoce la edad de su pareja y parece que la suya propia, dice que él tiene 58 años y ella 43, la dirección de su pareja en España, el nombre de los padres de él, que por otro lado él sabe que su pareja tiene 26 años, 18 menos que él, pero no sabe su fecha ni lugar de nacimiento, ni el nombre de los padres de ella, ni si viven y dónde, en cambio dice que ella conoce personalmente a los suyos, tampoco recuerda el nombre de una hermana de su pareja a la que dice conocer. Por otro lado ella sabe que él es conductor de vehículos pero no sabe para qué empresa ni los estudios que tiene, el promotor por su parte manifiesta que ni él ni su pareja tienen ninguna afición. Por último el interesado menciona que su pareja no puede venir a España porque no le conceden visado en Marruecos sin embargo la Sra. El B. dice que nunca ha solicitado visado.

VI.- A la vista de cuanto antecede es razonable deducir que el matrimonio que se pretende contraer es nulo por simulación. Así lo estimó el Encargado del Registro Civil competente, y a la misma conclusión había llegado previamente el Encargado del Registro Civil Consular en el que se practicó la audiencia a la interesada, ambos, por su intermediación a los hechos, en mejor situación de apreciarlos y de formar su convicción sobre ellos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Pontevedra.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (128ª)

IV.2.2-Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña I. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Don N. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento y certificado

de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y pasaporte, certificación literal de nacimiento, fe de soltería y certificado de residencia del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 15 de septiembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste se opone al mismo interesando se confirme el auto. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, el interesado necesitó de un traductor porque desconoce el español, y aunque declara que se comunican en inglés, se pudo comprobar que no era cierto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que el primer contacto fue en mayo de 2009 y físicamente se conocieron en junio del mismo año, mientras que él declara que se conocieron en junio de 2008 por internet y personalmente en agosto de 2008. Declara el interesado que ella ha ido unas veinte veces a Marruecos aunque no recuerda fechas, desconoce el nombre de la madre de ella declarando que se llama "N" cuando es C, tampoco sabe el nombre del padre, así mismo desconoce el domicilio. No presentan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (94ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña R. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2007, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Don M. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y certificación literal de nacimiento, inscripción de sentencia de divorcio y certificado de residencia del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 27 de septiembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste se opone al mismo. La Juez Encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre una ciudadana

española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que fue en los meses de julio y agosto del año 2009, mientras que él declara que fue en el verano de 2010; también discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que fue un mes después de que se conocieran, mientras que él dice que fue en julio de 2010. Difieren en el número de viajes que ha realizado la interesada a Marruecos, ya que ella dice que ha hecho dos viajes uno en 2009 y otro en 2010, que fue cuando decidieron casarse, sin embargo a tenor de lo declarado por él la interesada no ha vuelto desde el año 2010, que según él fue cuando se conocieron. Existen discordancias sobre la frecuencia de las comunicaciones, ya que ella dice que se comunican cada tres días y él dice que cada dos días; en el motivo de los regalos que se han hecho, etc. La interesada desconoce donde nació el interesado, desconoce el apellido de su madre y el lugar donde viven sus padres; por su parte el interesado desconoce el lugar de nacimiento de ella, donde viven sus padres ya que dice que viven en España cuando viven en Francia y la nacionalidad de los mismos. Discrepan en los idiomas que habla cada uno, salario que perciben y con quien vive el interesado ya que ella dice que vive en un piso alquilado con su madre mientras que él dice que vive en un piso propiedad de su tía con ésta y su familia. No presentan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediatez, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (149ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña N. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio ante la Comisión Islámica con Don A. nacido y domiciliado en Marruecos con nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de

nacimiento, volante de empadronamiento de la interesada, fe de vida y estado Sra. N. y certificado de residencia y soltería de Sr. A.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 28 de Noviembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y solicita la confirmación de la resolución recurrida. El encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio religioso ante la Comisión Islámica en España, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento de datos básicos personales y familiares como que ella ignora si su futuro esposo va a pedir la nacionalidad española cuando se casen a pesar que él afirma que la pedirá, el interesado ignora si su pareja ha viajado o no a la Península mientras han estado juntos y equivoca la dirección donde vive la interesada. No coinciden en diversas cuestiones tan importantes como la celebración de la boda, el lugar donde residirán después del matrimonio. Por otra parte han dejado patente que no conocen a los testigos, pues al afirmar que son amigos de ambos, ella no sabe ni en que trabajan, sus domicilios, por lo que claramente se evidencia una actitud fraudulenta en la tramitación de la solicitud de capacidad matrimonial para la celebración del matrimonio proyectado de los interesados. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 13 años.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (160ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la encargada del Registro Civil de Tortosa.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don S. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña N. nacida y domiciliado en Marruecos con nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio Sr. F. volante de empadronamiento del interesado y certificado de residencia y soltería de Sra. N.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 28 de Octubre de 2010 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y solicita la confirmación de la resolución recurrida. La encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español

y un ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así de la declaración realizada por la Sra. N. queda constatado que carecen de un idioma común de comunicación para mantener una relación continuada y fluida más si tenemos en consideración que él reside en R. y ella en Marruecos sin que se haya probado el mantenimiento de su relación por algún medio, manifiesta que se conocieron a través de una tía de la interesada que tiene un bar y el interesado es cliente y le solicitó a la tía de la interesada una mujer marroquí para contraer matrimonio, viajando en noviembre de 2010, única vez que ha realizado el viaje el interesado a Marruecos para conocerla físicamente y preparar la boda. Ignoran los interesados los datos básicos personales y familiares de su pareja respecto de sus hijos, padres y hermanos, los estudios que tienen, las aficiones, ella dice que él el fútbol y él declara la caza. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 22 años.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediatez, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Tortosa (Tarragona).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (169ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Esparraguera.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña Mª del P. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Don A. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería y fe de residencia del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La

Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 8 de julio de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, como constata en su

informe el Encargado del Registro del Consulado de España en Rabat y ellos mismos en las audiencias reservadas, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Ambos desconocen los apellidos del otro, ella además no sabe el lugar y fecha de nacimiento de él, el interesado desconoce donde viven los padres de la interesada, declara que no se acuerda cuando comunicaron por primera vez en internet. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues él dice que en junio de 2009 y ella dice que en enero. Declaran que ella estuvo viviendo en Marruecos durante seis meses, pero él dice que hubo una interrupción de 15 días, pero ella no hace alusión a este hecho; sin embargo es curioso que a pesar de haber convivido durante este tiempo, la interesada desconozca el domicilio del interesado, por su parte él tampoco sabe el domicilio de ella; también discrepan en cuanto tiempo han convivido ya que él dice que seis meses y ella dice que cuatro meses; existen discordancias en lo referente a los regalos que se han hecho, aficiones, gustos culinarios, etc. Desconocen con quien vive cada uno ya que el interesado dice que ella vive sola cuando ella declara que vive con una amiga y su marido, ella, por su parte desconoce que la casa donde vive él es del estado, y que vive con sus padres y tres hermanos afirmando que la casa donde vive es propiedad del padre del interesado y que vive con sus padres y una hermana. No aportan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Esparraguera (Barcelona).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (35ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la encargada del Registro Civil de Vitoria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en Marruecos y de nacionalidad española obtenida en septiembre de 2006, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña L.

nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería y residencia de Sra. H. volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 07 de Noviembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y solicita la confirmación de la resolución recurrida. La encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos

demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la Sra. H. declara que son vecinos y se conocen de siempre pero que se comprometieron hace dos años mientras que el interesado declara que se conocen hace un año en el verano que fue de vacaciones, manifiesta la interesada que su pareja está en España y que viene una vez al año a visitarla y que se comunican diariamente por teléfono aunque no recuerda el número y que la decisión de casarse fue de su pareja. La Sra. H. ignora los estudios de su pareja, cuando adquirió la nacionalidad española y las aficiones, manifiesta que solo sabe que su pareja es funcionario mientras que él dice que trabaja en una empresa de limpieza.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y La Juez Encargada del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vitoria.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (61ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de San Feliu de Guixols.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña N. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio por poderes en Marruecos con Don A. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 2 de diciembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio por poder, en Marruecos, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden

determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, la entrevista en audiencia reservada que se le practicó al interesado en el Consulado de España en Rabat, se hizo en idioma árabe porque él no habla español y ella no habla árabe, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cómo y cuándo se conocieron ya que ella declara que fue en N. hace nueve años estando de vacaciones, tuvieron una relación y regresó a España, luego hace dos años reemprendieron la relación cuando se encontró con la hermana de él y empezaron a llamarse por teléfono, sin embargo el interesado declara que se conocieron hace dos años porque ella trabajaba con su hermana y él hablaba con ella por internet (el interesado declara en otra pregunta que no tiene correo electrónico porque no tiene internet), después ella viajó con sus padres a N. y la conoció en casa de un primo que vive con ella, en ese momento ella le pidió que se casara con él. El interesado declara que ella ha viajado tan sólo una vez a Marruecos no recordando la fecha, según él hablan por internet cada mes o dos meses; no recuerda cuando ni donde decidieron contraer matrimonio, mientras que ella dice que fue hace un año y algo por teléfono. Por otro lado la interesada desconoce el lugar y la fecha exacta de nacimiento del interesado; desconocen el número y los nombres de los hermanos del otro, aficiones, deportes practicados, etc. No aportan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil de San Feliu de Guixols.

IV.3.- Impedimento de ligamen

IV.3.1.- Impedimento de ligamen en expediente previo a la celebración del matrimonio

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (152ª)

IV.3.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos para considerar la existencia de un vínculo matrimonial vigente por parte de uno de los interesados.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Alcaraz (Albacete).

HECHOS

- 1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña E-M. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana y Don R. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio y defunción de Don E-R. esposo de la Sra. B.
- 2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 24 de Mayo de 2011 autoriza la celebración del matrimonio proyectado.
- 3.- Con fecha 30 de junio de 2011 comparece Don N-J. ante la encargada del Registro Civil de Alcaraz aporta la siguiente documentación certificado eclesiástico de matrimonio y certificado literal de matrimonio colombiano, donde consta que la interesada contrajo matrimonio con él hermano del Sr. N. declarando que ese matrimonio continua vigente.
- 4.- Con fecha 01 de Julio de 2011 la encargada del Registro civil dicta providencia suspendiendo la celebración del matrimonio autorizado por auto de 24 de Mayo de 2011
- 5.- Con fecha 19 de julio de 2011 con el informe desfavorable del fiscal a la celebración del matrimonio la encargada del registro civil dicta auto no autorizándolo al no constar la disolución del matrimonio anterior de Sra. Barreto.
- 6.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.
- 7.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español. En atención a los hechos, declaraciones y documentación del expediente no ha quedado acreditado por los interesados la capacidad para contraer matrimonio por parte de la Sra. E-M. ya que de los documentos aportados por Don N-J. la interesada estaría casada todavía impidiendo por lo tanto la celebración de nuevo matrimonio en tanto no quede debidamente acreditada la disolución del vínculo matrimonial con J-L.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcaraz (Albacete).

IV.3.2.- Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (127ª)

IV.3.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Mali, por una ciudadana maliense que luego adquirió la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don F. nacido en Mali y de nacionalidad maliense, presentó en el Registro Civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Mali el 26 de mayo de 1981 con Doña T. nacida en Mali y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: copia del extracto del acta de matrimonio local; certificado de nacimiento de la interesada y permiso de residencia del interesado.

2.- El encargado de este Registro Civil dictó acuerdo con fecha 9 de mayo de 2011, denegando la práctica de la inscripción, ya que el matrimonio se celebró el 26 de mayo de 1981 en Mali y en el certificado de matrimonio consta como opción matrimonial la poligamia; si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12-3 del Código Civil, por cuando se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad entre el hombre y la mujer.

3.- Notificada la resolución a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto apelado. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC.); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. R. C.), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III.- En el presente caso, la promotora, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2008, solicita que se inscriba en el Registro Civil español el matrimonio que celebró en Mali el 26 de mayo de 1981, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68, II, R. R. C.), porque en el acta de matrimonio cuya transcripción se pretende se opta por la poligamia.

IV.- Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento maliense, y, en principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 C. c.) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V.- No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el Registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes era casado cuando se celebró. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 L. R. C. y 12 y 258 R. R. C.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (135ª)

IV.3.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés que luego adquirió la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado, mediante representante legal, contra acuerdo de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, presentó en el Registro Civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 15 de diciembre de 1984 con Doña N-A. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y certificado de empadronamiento del interesado.

2.- La encargada de este Registro Civil dictó acuerdo con fecha 22 de junio de 2011, denegando la práctica de la inscripción, ya que el matrimonio se celebró el 15 de diciembre de 1984 en Senegal y el interesado opta por el régimen de poligamia; si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12-3 del Código Civil, por cuando se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad entre el hombre y la mujer.

3.- Notificada la resolución al interesado, éste, mediante representante legal, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. La encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC.); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. R. C.), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III.- En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2008, solicita que se inscriba en el Registro Civil español el matrimonio que celebró en Senegal el 15 de diciembre de 1984 inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España

(cfr. art. 68,II, R. R. C.), por existir impedimento de ligamen en el contrayente, ya que en el acta de matrimonio cuya transcripción se pretende el interesado opta por la poligamia.

IV.-Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, y, en principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 C. c.) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (167ª)

IV.3.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés que luego adquirió la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado, mediante representante legal, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2009 presentó en el Registro Civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 26 septiembre 1991 con Doña F. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local y certificado de nacimiento del interesado.

2.- El encargado de este Registro Civil dictó acuerdo con fecha 26 de septiembre de 2011, denegando la práctica de la inscripción, ya que el matrimonio se celebró el 26 de septiembre de 1991 en Senegal y el interesado opta por el régimen de poligamia; si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12-3 del Código Civil, por cuando se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad entre el hombre y la mujer.

3.- Notificada la resolución al interesado, éste, mediante representante legal, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. El encargado del Registro Civil Central ordenó

la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC.); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. R. C.), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III.- En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2009, solicita que se inscriba en el Registro Civil español el matrimonio que celebró en Senegal el 26 de septiembre de 1991 inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, R. R. C.), por existir impedimento de ligamen en el contrayente, ya que en el acta de matrimonio cuya transcripción se pretende el interesado opta por la poligamia.

IV.- Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, y, en principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 C. c.) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (48ª)

IV.3.2. -Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de celebración subsiste el anterior matrimonio de la interesada, cuyo divorcio en Bolivia es posterior a la fecha del matrimonio en Perú.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil del Consulado General de España en Lima, en fecha 21 de febrero de 2011, Don P. nacido en C. el 30 de septiembre de 1952, de

nacionalidad española, solicita la inscripción por el Registro Civil de su matrimonio civil con Doña M-E. de nacionalidad peruana, nacida en L. el 12 de febrero de 1973, celebrado el día 27 de enero de 2011, según la ley local, en L. (Perú). Acompañan como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local e impreso de declaración de datos en el que se hace constar que el promotor es divorciado y la interesada, soltera; del promotor; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior de fecha 17 de septiembre de 1972 con anotación de divorcio por sentencia de 13 de noviembre de 2007, fe de vida y estado, pasaporte y documento nacional de identidad, y de la interesada; certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltera, certificado negativo de matrimonio inscrito expedido por las autoridades peruanas, documento nacional de identidad peruano y pasaporte peruano, con visado válido desde el 28 de febrero al 9 de abril de 2008.

2.- Según informa el Consulado español en Lima, al verificar el sistema de visados se detectó que la Sra. A. había solicitado uno en mayo del año 2007 declarando que estaba casada con un ciudadano boliviano, asunto sobre el que fue preguntada en su comparecencia en el Consulado en marzo del año 2011, manifestando que ese matrimonio fue de conveniencia, informándola de que para continuar el procedimiento de inscripción debía aportar certificación de su matrimonio anterior, celebrado en Bolivia en el año 2005, con la acreditación de haberse disuelto por divorcio. Posteriormente en mayo de 2011 compareció de nuevo en el Consulado manifestando que creía que no estaba divorciada.

3.-El requerimiento de la documentación necesaria también fue puesto en conocimiento reiteradamente del Sr. P. que conocía la existencia de ese matrimonio anterior, mediante el intercambio de varios escritos por correo electrónico, que constan en el expediente. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente la solicitud pretendida, ya que uno de los promotores está vinculado por un matrimonio anterior, lo que de acuerdo con el derecho civil español genera un impedimento de ligamen, en el mismo sentido se pronuncia el Encargado del Registro Civil Consular en su auto dictado con fecha 17 de mayo de 2011, disponiendo denegar la inscripción del matrimonio entre los interesados.

4.- Notificada la resolución a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterándose en lo solicitado, alegando que el matrimonio anterior en Bolivia de la interesada fue de conveniencia, que no hubo convivencia entre los cónyuges y que no se inscribió en plazo en el Registro Civil peruano, por lo que para este país la Sra. A. es soltera, añadiendo que no obstante en el año 2008 inició la tramitación del divorcio en Bolivia y que aportarán el documento acreditativo en cuanto lo tengan, aportando copia de documento obtenido del registro informático del Servicio Nacional de Registro Civil de Bolivia en el que constan los datos del matrimonio anterior, de fecha 25 de junio de 2005 y una fecha de disolución claramente errónea o ficticia, 1 de enero de 1990. Asimismo se aporta documentación sobre la situación de embarazo de la interesada.

5.-Del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en su informe anterior, lo mismo sucede con el Encargado del Registro Civil que añade en su informe que existe constancia en el Consulado de otra solicitud de inscripción, formulada por el Sr. P. en el año 2007, de su matrimonio con otra ciudadana peruana, en dicho expediente se dio una circunstancia de impedimento igual pero en ese caso el afectado era el promotor español.

6.- Con posterioridad el Sr. P. ha alegado en diferentes ocasiones que desde el año 2008 que la Sra. A. inició el proceso de divorcio en Bolivia creían que ya estaba concedido porque fueron objeto de engaño por parte de las personas que se hicieron cargo de las gestiones, hasta que se cercioraron de que no había tal divorcio, aportando en el año 2013 documentación relativa al hijo de los interesados, de nacionalidad española e inscrito como tal en el Registro Civil español, y de la denuncia formulada a través del Consulado

General de Bolivia contra las personas que supuestamente les engañaron. Consta, finalmente, sentencia de fecha 27 de mayo de 2011, de divorcio del matrimonio anterior de la interesada, celebrado en Bolivia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y 31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002; 20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de 2007, 8-2ª de enero de 2009, 12-1ª de mayo de 2010 y 30-13ª de noviembre de 2012.

II.- Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho.” Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el Registro Civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV.- El matrimonio que se pretende inscribir en el Registro Civil del Consulado General de España en Lima entre un ciudadano español y una ciudadana peruana no puede ser inscrito, por concurrir impedimento de ligamen.

A la fecha del matrimonio, 27 de enero de 2011, la interesada estaba ligada por el vínculo matrimonial contraído en Bolivia el 25 de junio de 2005 y que no fue disuelto por las autoridades bolivianas mediante resolución judicial hasta el 27 de mayo de 2011, con posterioridad al matrimonio que se pretende inscribir, que por tanto no puede tener acceso al Registro Civil español, competente para ello por afectar a un nacional español, al cual no le debía ser desconocida esta imposibilidad, por cuanto él había protagonizado otra situación similar en el año 2007 al pretender inscribir otro matrimonio en el mismo Consulado, todo ello con independencia de que, como alega el promotor, el matrimonio boliviano de la Sra. A. no existiera para las autoridades peruanas y, por ello se declarara soltera. En consecuencia debe mantenerse la decisión del Encargado de denegar la inscripción de matrimonio solicitada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (11ª)

IV.3.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de celebración subsistía el anterior matrimonio del interesado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don L-A. nacido en República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en 2007, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio civil celebrado el 06 de mayo de 2008 en República Dominicana con Doña G-A. nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. C. y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Remitida la documentación al Registro Civil Central, el encargado de este Registro Civil mediante acuerdo de fecha 14 de junio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio ya que en el momento de dicho matrimonio el interesado estaba casado con Doña A.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y 31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002; 20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de 2007 y 8-2ª de enero de 2009.

II.- Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. R. C.), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual "los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...". Si no puede

celebrarse, tampoco puede inscribirse en el Registro Civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV.- El matrimonio celebrado en República Dominicana entre un español de origen dominicana y una ciudadana dominicana el 06 de mayo de 2008, es nulo por impedimento de ligamen porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con Doña A. a continuación contrajo matrimonio con la promotora del expediente Doña G-A. con fecha 06 de mayo de 2008 a continuación se divorció de la primera esposa el 15 de abril de 2009. Por lo que el interesado estaba casado cuando contrajo matrimonio con la segunda esposa ya que todavía no se había divorciado de la primera esposa. El estado civil de los contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (cfr. arts. 35 L. R. C. y 12 y 258 R. R. C) y en el Registro Civil español no puede practicarse una inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este caso el español, está casado cuando se celebra el acto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (26ª)

IV.3.2.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de celebración subsiste el anterior matrimonio del promotor, cuyo divorcio en Colombia no obtuvo el exequátur hasta un momento posterior.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá, en fecha 10 de agosto de 2011, Don F. Y., nacido en C., V. (Colombia) el 23 de abril de 1958 y de nacionalidad española, solicita la inscripción por el Registro Civil de su matrimonio civil con Doña E., de nacionalidad colombiana, nacida en B., V. (Colombia) el 30 de julio de 1979, celebrado el día 17 de abril de 2009, según la ley local, en C., V. (Colombia). Acompañan como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local e impreso de declaración de datos; del promotor; pasaporte español, declaración ante notario de que su estado civil es divorciado, realizada en Colombia con posterioridad al matrimonio que se pretende inscribir, auto del Juzgado de Primera Instancia nº 93 de Madrid, de fecha 5 de marzo de 2010, aclarada por otro de fecha 23 de julio siguiente, que reconoce eficacia jurídica en España a la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado Sexto de la Familia de Cali (Colombia) con fecha 22 de septiembre de 2005 y escritura de liquidación de la sociedad de gananciales formada por los contrayentes y, de la interesada, exclusivamente el pasaporte.

2.- Previo informe del Ministerio Fiscal, el 19 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dictó acuerdo disponiendo denegar lo solicitado habida cuenta que el promotor, ciudadano español, había contraído matrimonio anterior en Colombia con una ciudadana colombiana con fecha 28 de junio de 1996, y que fue inscrito en el Registro Civil Consular español en Bogotá con fecha 8 de mayo de 2002, y no había procedido a inscribir el correspondiente divorcio, obtenido en Colombia en el año 2005 y que tampoco había sido reconocido en España.

3.- Notificada la resolución, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que en el momento del matrimonio que quiere inscribir ya no se encontraba vigente el vínculo matrimonial anterior en base al Convenio bilateral España-Colombia de 1808 ratificado en 1809.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, y el Encargado del Registro Civil Consular informó que procede confirmar el auto impugnado y dispuso remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y 31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002; 20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de 2007, 8-2ª de enero de 2009, 12-1ª de mayo de 2010 y 30-13ª de noviembre de 2012.

II.- Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...”. Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el Registro Civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV.- El matrimonio celebrado en Colombia el día 17 de abril de 2009, entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana es nulo, por concurrir impedimento de ligamen. A esa fecha, el promotor ciudadano español, continuaba ligado para el ordenamiento jurídico español por el vínculo matrimonial contraído en Colombia el 28 de junio de 1996, inscrito en el Registro Civil español el año 2002. Aunque dicho matrimonio fue disuelto judicialmente, conforme a la legislación local, con fecha 22 de septiembre de 2005, para que dicho divorcio sea reconocido y surta efectos en España como requisito previo a su inscripción en el Registro Civil español, competente por afectar el hecho a un español (cfr. art. 15 LRC), ha de obtener reconocimiento ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente por razón de domicilio, mediante el oportuno exequátur (cfr. arts. 955 LEC, 46-2º CC. y 83 y 265, II RRC).

V.- Habiendo obtenido el exequátur para el divorcio extranjero con fecha 5 de marzo de 2010, el matrimonio subsistía en la fecha de celebración del matrimonio posterior y momento

en que ha de ser valorada la capacidad de los contrayentes. Debiendo significarse que efectivamente el Convenio bilateral celebrado entre el Reino de España y la República de Colombia establece en su artículo 1º, que las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las partes contratantes serán ejecutadas en la otra siempre que sean definitivas y que estén ejecutadas como en derecho proceda en el país en que se hayan dictado, circunstancia esta que no queda acreditada en el expediente puesto que no consta certificación del matrimonio anterior con la anotación de divorcio, y añade en el artículo 3º que antes de ejecutarse la sentencia deberá oírse al Ministerio Fiscal, lo que se hizo en el proceso de reconocimiento en España y contra el auto o sentencia que dictare el Tribunal requerido no cabe interponerse apelación, auto que se produjo con fecha 5 de marzo de 2010, ya que hasta este proceso el Sr. Y. no había instado la ejecución de la sentencia colombiana ante el ordenamiento español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.

IV.4.- Matrimonio celebrado en el extranjero

IV.4.1.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero natularizado

IV.4.1.1.- Se deniega inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (6ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (República de Cuba).

HECHOS

1.- Don H. de nacionalidad española y Doña I. de nacionalidad cubana presentó en el Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Cuba el 07 de Diciembre de 2009. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sr. G. y certificado de soltería Sra. S.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 15 de junio de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en La Habana (República de Cuba), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así el interesado declara que inician su relación en el año 2005, habiendo viajado a Cuba solo dos veces por periodo de un mes la primera en el año 2005 para conocerse personalmente y la segunda en el año 2009 para casarse, declarando que mantiene el contacto telefónicamente pero no recuerda el número fijo de teléfono de su esposa y el móvil que aporta es incorrecto. Por otra parte el interesado declara tener una hija de cuatro años mientras mantenía relaciones afectivas con la Sra. I. mientras esta manifiesta que su esposo no tiene hijos

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (10ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña T-S. nacida en B. (Colombia) el día 2 de mayo de 1975 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso, celebrado en Colombia el 12 de marzo de 2011, e inscrito en el Registro Civil colombiano con fecha 14 del mismo mes, con Don A. nacido en B., el día 8 de diciembre de 1969 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de

nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios con registros de entradas y salidas a España desde agosto del año 2007, y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios cuyo primer registro es de 11 de enero de 2011. Consta asimismo, aunque no por aportación de la promotora que en la hoja de datos se declara soltera, que esta estuvo casada anteriormente, con fecha 7 de mayo de 2003, con otro ciudadano español, matrimonio que fue disuelto por divorcio de fecha 17 de octubre de 2006.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 29 de marzo de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el interesado el 20 de mayo siguiente en el Juzgado de Paz de Palleja (Barcelona). El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 19 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el Sr. C. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias en su estado de salud y tratamiento médico que sigue y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando como documentación volante de empadronamiento, a fecha 27 de abril de 2011, de la promotora y su hija en el mismo domicilio del interesado.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse

cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según el interesado iniciaron su relación sentimental a la semana de conocerse, según la promotora la iniciaron en noviembre de 2007, posteriormente a lo largo de la entrevista se deduce que se conocieron cuando ella empezó a trabajar en casa de él como limpiadora, desde entonces según los movimientos migratorios constatados la promotora estuvo fuera de Colombia desde el 11 de abril de 2008 a 23 de enero de 2010, probablemente en España, puesto que había estado casada con otro ciudadano español, y el interesado viajó por primera vez a Colombia, un año después el 11 de enero de 2011, dos meses antes del matrimonio, en ese tiempo salió de Colombia en dos ocasiones una hacia Venezuela y otra de vuelta a España. La interesada respecto a los viajes responde con algo que no tiene nada que ver, tampoco contesta sobre cuando decidieron casarse él interesado manifiesta que al año y medio de conocerse.

Respecto a datos personales y familiares, el interesado no recuerda el lugar y fecha de nacimiento de la promotora, ni sus apellidos, ni el nombre de los padres y hermanos de ella, como tampoco recuerda la fecha de la boda, de hecho dice que es el día 14 al mirarlo en un documento, esa es la fecha de inscripción en el registro civil colombiano, según informa la Encargada del Registro consulta varias veces un documento donde lleva anotados los datos. Por su parte la promotora no responde respecto a si él tiene alguna alergia, si utiliza algún apodo, ni a qué hora empieza a trabajar, ni el nombre del mejor amigo de él, ni si sabe o no montar en bicicleta, ni que películas le gustan, ni si sabe o no conducir, ni los países que le gustaría visitar, a esto último responde que a ella ninguno sin embargo el interesado dice que a ella le gustaría visitar P. para ver E. El interesado por su parte no recuerda los estudios que tiene su pareja y manifiesta que ella habla un poco de catalán y portugués, sin embargo la promotora dice que habla un poco de italiano. Discrepan en los ingresos que tiene él y, por último respecto al documento de empadronamiento de la promotora en el domicilio del interesado presentado con el recurso, cabe significar que en la entrevista posterior al documento, 20 de mayo de 2011, el propio Sr. C. manifiesta que desde el matrimonio ella no ha vuelto a venir a España.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente

más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (11ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña A. nacida en A. (República Dominicana) el día 5 de septiembre de 1964 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 3 de noviembre de 2006, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en La República Dominicana el 20 de abril de 2007, con Don D. nacido en A. (República Dominicana) el día 27 de junio de 1965 y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja de datos y acta inextensa de matrimonio local, y de la promotora; pasaporte español, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, volante de empadronamiento en M. desde el año 2000 y documento nacional de identidad español, y del interesado; certificado de nacimiento y cédula de identidad dominicana.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 22 de diciembre de 2009 en el Registro Civil Central y con el interesado en mayo del año 2011 en el Consulado de España en Santo Domingo. Con fecha 21 de julio de 2011 el Encargado del Registro Civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio por entender que no hay verdadero consentimiento matrimonial.

3.-Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informa en el sentido de que procede su desestimación. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española de origen dominicano, que obtuvo la nacionalidad con fecha 3 de noviembre de 2006 y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución.

Los interesados declaran que se conocen desde antes de que ella fuera a España, según el interesado en el año 1999, pero discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental, según la promotora fue en el año 2000 antes de su viaje a España y según el interesado fue después de que ella volviera de España. Respecto a algunos datos personales y familiares, la promotora equivoca el lugar de nacimiento del interesado, pese a ser el mismo de ella y el lugar en que se casaron, también menciona que el Sr. G. tiene un hermano, que además dice que fue uno de los testigos de la boda, sin embargo el interesado solo menciona a dos hermanas que residen en M. El interesado por su parte no sabe cuándo obtuvo su pareja la nacionalidad española, cree que en 2005, no tiene muy claro el estado civil de la Sra. B. antes del matrimonio actual, primero dice que divorciada, soltera, etc. y ambos se equivocan al mencionar las edades de sus hijos respectivos de relaciones anteriores. En relación con la situación laboral, el interesado desconoce los estudios que ella tiene, manifiesta que él es policía retirado y agricultor, a este respecto la promotora dice que su pareja es teniente de policía pero no menciona la situación de jubilación. Por último según se informa por el Consulado Español el interesado duda al responder si la razón del matrimonio es emigrar legalmente a España.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (12ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña L-B. nacida en V-N. (República Dominicana) el día 24 de junio de 1985 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 3 de julio de 2009, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en La República Dominicana el 9 de enero de 2008, con Don K. nacido en S-T. (República Dominicana) el día 27 de noviembre de 1979 y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja de datos y acta inextensa de matrimonio local en la que existe discrepancia respecto al

lugar de nacimiento de la contrayente, y de la promotora; pasaporte español, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y volante de empadronamiento en M. desde el año 2005, y del interesado; pasaporte y cédula de identidad dominicanos.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 22 de marzo de 2011 en el Registro Civil Central y con el interesado en junio siguiente en el Consulado de España en Santo Domingo. Con fecha 15 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio por entender que no hay verdadero consentimiento matrimonial.

3.-Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informa en el sentido de que procede confirmar el auto apelado. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la

calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española de origen dominicano, que obtuvo la nacionalidad por residencia mediante resolución dictada a finales de 2008, tras el correspondiente expediente, y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocen desde muy jóvenes cuando ella tenía 9 años y el 16, sin embargo el Sr. R. hace una relación de fechas y edades que no tienen concordancia, ya que correspondería al momento en que ella se trasladó a vivir a España en enero de 2005, desde entonces según la promotora ella ha viajado todos los años sin embargo el interesado no menciona por ejemplo el del año 2007. Durante este tiempo según el interesado se comunicaban por teléfono, ella llamaba, una vez a la semana, sin embargo la promotora menciona la dirección de correo electrónico de él. En cuanto a la celebración del matrimonio la promotora, al ser preguntada por la fecha, dice que fue el 28 de enero de 2008, cuando fue el día 9 y el interesado dice que no asistieron familiares de ninguno de los contrayentes, sino R. como amigo, y N. como vecina, sin embargo ambos nombres coinciden con un hermano y la madre de la promotora, Sra. P.

Respecto a algunos datos familiares, el interesado equivoca el primer nombre de su pareja, dice que ella tiene 6 hermanos cuando son 7 y solo menciona el nombre de 2. Por su parte la promotora dice que él tiene 5 hermanos cuando son 6 y que tiene una tía en España, mientras que el propio Sr. R. dice que tiene 2 hermanos y un amigo. También difieren en relación a la situación laboral de la promotora, que según manifiesta no trabaja desde unos meses atrás y no cobra desempleo, según el interesado ella es camarera aunque no sabe el nombre del restaurante, no sabe lo que gana pero sí que trabaja de 8 a 16 horas. Por último debe significarse que del Sr. R. no consta certificación de nacimiento expedida por las autoridades dominicanas.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (15ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Lima (Republica de Perú).

HECHOS

1.- Don P. de nacionalidad española y Doña S-M. de nacionalidad peruana presentó en el Registro Consular de España en Lima (Republica de Perú) , expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la Republica de Perú el 25 de Junio de 2011. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y defunción esposa Sr. C. y fe de vida y estado del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Lima (Republica de Perú) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Lima (Republica de Perú), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así de las audiencias reservadas existen contradicciones e imprecisiones entre las declaraciones de las partes tales como que el Sr. C. desconoce la fecha y lugar de nacimiento de su pareja, el nombre de los padres y hermanos de su esposa y las edades de los hijos de ella, declarando que ella había estado anteriormente casada mientras que ella declara que no, no siendo capaz de fijar la fecha exacta del matrimonio. Asimismo la Sra. V. igualmente desconoce la fecha de nacimiento de su pareja y los nombres de los hermanos. Por otra parte ambos declaran que mantiene contacto telefónico sin embargo no pudieron facilitar los números de teléfono de su pareja, se contradicen respecto del momento en que decidieron contraer matrimonio él dice que a los seis meses de haber iniciado las conversaciones telefónicas mientras que ella dice al mes. Finalmente a la pregunta de si han convivido antes o después del matrimonio la Sra. V. dice que si después de casarse y él declara que no.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Lima (Republica de Perú), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Peru).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (34ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don J-J. nacido en S de Q. C. (Colombia) el día 29 de mayo de 1985 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 30 de agosto de 2010, con Doña J-V. nacida en E. (Ecuador) el día 6 de septiembre de 1982 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 1 de octubre de 2008. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano, y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, sin registro alguno y de la interesada; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración notarial de estado civil, soltera, realizada con posterioridad al matrimonio, pasaporte español y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un único registro de entrada en el país el 10 de febrero de 2011, posterior al matrimonio.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con el promotor el 31 de mayo de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y con la interesada el 12 de agosto siguiente en el Registro Civil de Santander. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 22 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana española, de origen ecuatoriano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según manifiestan se conocieron en enero de 2006 en E. (Ecuador) y empezaron su relación en marzo siguiente, según el promotor él estuvo allí 50 días de enero a marzo y en otra ocasión dice que trabajó allí de enero a mayo de 2006, ninguna de las dos circunstancias está acreditada ya que según las autoridades colombianas el Sr. A. no tiene ningún movimiento migratorio. En todo caso, desde entonces, casi 5 años, no han vuelto a verse ya que la Sra. P. sólo ha viajado a Colombia el 10 de febrero de 2011, durante 8 días, según propia manifestación, es decir bastante después del matrimonio y, según el promotor, fue para la luna de miel, este hecho además permite dudar de la presencia de la contrayente en la celebración del matrimonio, el 30 de agosto de 2010, lo que haría necesario que hubiera otorgado poder a persona que la representara, lo que tampoco consta acreditado. Respecto a algunos datos personales, la interesada no responde a varias preguntas relacionadas con su cónyuge, por ejemplo si es supersticioso, si escucha o no la radio, si tiene alguna alergia, también difieren completamente al mencionar respectivamente a los mejores amigos de ambos, al mencionar lo que les gusta comprar cuando salen. Igualmente cuando la interesada es preguntada por como toma el café no menciona que no le guste, sin embargo su pareja dice que a ella no le gusta el café, tampoco menciona la interesada sus aficiones dice que

no tiene y que la de él son los coches, según el promotor su afición son las motos y la de ella salir a cenar a restaurantes.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (35ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don R-A. nacido en F, T. (Colombia) el día 21 de febrero de 1970 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 20 de julio de 2010, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 18 de febrero de 2011, con Doña D-L. nacida en M. C. (Colombia) el día 1 de septiembre de 1982 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración de estado civil, soltero, realizada ante notario con posterioridad al matrimonio, pasaporte español y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, con registros desde el año 2005 excepto 2009, y de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros anotados.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada el 30 de agosto de 2011 en el Consulado de España en Bogotá. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 19 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, estos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la relación existe, aportando diversa documentación relativa a envíos de dinero, todos ellos posteriores al matrimonio y correos electrónicos dirigidos por la interesada al promotor.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. Posteriormente, con fecha 14 de agosto de 2013, se aporta nueva documentación sobre envíos de dinero y acreditación de viajes realizados a Colombia, que se han incrementado desde la denegación de la resolución denegatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Desde que se conocieron, 18 de octubre de 2008, en un viaje del promotor que terminó el 4 de noviembre, no volvieron a encontrarse hasta dos años después en diciembre de 2010 hasta el 1 de marzo de 2011, que incluyó la celebración del matrimonio, desde la tramitación del expediente de inscripción el número de viajes se ha incrementado, según documentación posterior. Tras la celebración del matrimonio difieren en si fueron o no de viaje, según el promotor si por la región de P. pero por motivos laborales de ella, sin embargo la interesada dice que no, que pasearon por varios lugares.

En relación a otros datos personales y familiares el promotor al ser preguntado por la dedicación laboral de sus padres y los de su cónyuge manifiesta que su padre falleció, sin embargo ella a la misma pregunta dice que trabaja en fincas sin referencia alguna a que haya fallecido. Ambos tienen hijos de otras relaciones anteriores, según el Sr. G. los suyos viven con su madre, según la interesada el hijo mayor vive con él. Ninguno de los promotores responden respecto a si el otro utiliza o no gafas, si son o alérgicos a algún medicamento, si son o no puntuales, y, ella tampoco contesta sobre si él es o no supersticioso. También hay discrepancias respecto a datos laborales, según el promotor él trabaja para la empresa Ferrovial y su pareja en un hospital, en cambio según la interesada ella no trabaja y él lo hace "donde le contratan". Debiendo significarse respecto a lo alegado en su escrito reciente, posterior al recurso, que debe tenerse en cuenta que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (40ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña Ma. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 14 de marzo de 2011, con Don Mi. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento con inscripción de matrimonio y divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 9 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando el certificado de nacimiento del hijo que tienen en común.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones; los interesados presentan el certificado de nacimiento del hijo que han tenido en común nacido en fecha 19 de octubre de 2008. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, "ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa". Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso.

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 14 de marzo de 2011 entre Mi. y Ma.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (42ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don P. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 29 de noviembre de 2010, con Doña M. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 8 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas de que su relación se ha mantenido en el tiempo.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones; los interesados presentan un disco compacto en el que se puede comprobar que su relación se ha mantenido en el tiempo. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso.

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 29 de noviembre de 2010 entre P. y M.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (43ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don F. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia 22 de septiembre de 2008, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 9 de enero de 2008 con Doña B. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 19 de agosto de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del acuerdo. La Encargada del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 9 de enero de 2008 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad español por residencia el 22 de septiembre de 2008.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según declara el interesado se vino a España porque su anterior esposa Doña M. lo reagrupó, sin embargo el interesado no aporta ningún certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y en la hoja declaratoria de datos el interesado declara que su estado civil es el de soltero. Manifiestan que se conocen desde siempre, el interesado volvió en 2004 y, en ese momento, comenzó la relación y en 2007 volvió para contraer matrimonio y no ha vuelto. Ambos mientras mantenían relaciones han tenido hijos con otras parejas y el hijo pequeño del interesado de tres años nació cuando estaba casado con la promotora. Por otro lado desconoce el estado civil de la promotora ya que dice que al momento del matrimonio era soltera cuando es divorciada. El interesado desconoce el número y los nombres de los hermanos de la interesada, también desconoce los padrinos de la boda declarando que fueron una prima de ella de la que desconoce el nombre, dice que por parte de él fueron dos hermanos cuando no fue nadie, declara que se ayudan económicamente y ella dice que no. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (44ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don J., nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 20 de abril de 2011 con Doña D. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 15 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues mientras que ella dice que fue en junio de 2007, él dice que en febrero. Existen discordancias en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo viajes realizados por el interesado a Colombia, parejas que ha tenido el interesado, actores favoritos, marca de colonia utilizada, lado de la cama en el que duermen, si son o no puntuales, países visitados, obligaciones que conlleva el matrimonio, horarios de trabajo, etc. No presentan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (45ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1995, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 18 de enero de 2006 en La República Dominicana, según la ley local, con Doña E., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta inextensa de matrimonio local; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado, su dirección y teléfono. Se conocieron, según sus declaraciones, en el año 2003, y en ese mismo año comenzaron la relación sentimental, sin embargo, al mismo tiempo el interesado tuvo una relación paralela, según sus declaraciones con M., desde el año 2004 al año 2005, luego se encontraron y estuvieron juntos, durante un año de esta relación nació una hija en el año 2007. Al preguntarle a la promotora sobre este hecho contestó “bueno al parecer”. Los promotores tienen una hija en común nacida en el año 2006. Existen discordancias en lo referente al trabajo del interesado, etc., la interesada declara que él es divorciado de una española que fue quien se lo trajo a España sin embargo en el certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio aportado por el interesado, consta que su anterior esposa era de nacionalidad dominicana. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 20 años mayor que la interesada. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (48ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Don E. C., nacido en E., T. (Perú) el día 7 de noviembre de 1974 y de nacionalidad española obtenida por residencia con fecha 26 de junio de 2008, presentó en el Consulado español en Lima impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil celebrado en Perú, según la ley local, el 16 de octubre de 2010 con Doña F. G., nacida en C., J. (Perú) el día 14 de agosto de 1962 y de nacionalidad peruana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, acta de matrimonio local; y del promotor, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, fe de vida y estado, soltero, documento nacional de identidad, documento de identidad peruano anterior y posterior al matrimonio y certificado negativo de matrimonio anterior en el Registro de su Municipio de origen, y de la interesada, inscripción de nacimiento, certificado negativo de matrimonio anterior según el Registro de su Municipio y documento de identidad peruano anterior al matrimonio y posterior con su nuevo estado civil.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados con fecha 18 de enero de 2011. Con fecha 13 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.-Notificados los interesados, estos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio e intentando justificar las discrepancias mostradas en las audiencias reservadas.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa que considera que no existe un verdadero consentimiento matrimonial, en el mismo sentido informa el Encargado del Registro Civil Consular y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre un ciudadano español, de origen peruano, y una ciudadana peruana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron en el año 2005 y según el promotor iniciaron una relación como amigos, según la interesada iniciaron su relación sentimental en julio del año 2009, en ese tiempo él manifiesta que viajó a verla en mayo de 2009 y según la interesada él viajó unas cuantas veces pero no recuerda las fechas. Ambos coinciden en la fecha en que el promotor propuso a su pareja casarse, el 14 de agosto, cumpleaños de la interesada, aunque difieren en el año ella habla de 2009 y el de 2010 y que luego el 16 de octubre se casaron. Difieren en los familiares que asistieron a la boda, el promotor dice que sus padres y una hermana de ella con su esposo, según la interesada de la familia de su pareja no fue nadie y, lo que es más significativo es que según el promotor no han convivido antes del matrimonio y según su pareja si un año en T.

Por otra parte difieren o desconocen otro tipo de datos personales, profesionales y económicos, así el promotor no recuerda los apellidos de los padres de su pareja, dice que ella tiene 12 o 13 hermanos y desconoce los nombres y edades, sin embargo la interesada dice que tiene 9 hermanos y no recuerda tampoco los nombres y edades de los hermanos del Sr. C. Respecto al domicilio ambos dan el mismo pero cada uno dice que es propiedad de

sus padres y que viven con ellos y, por su parte, aportan cada uno documento de identidad peruano sustitutivo de los anteriores en el que consta su nuevo estado civil, casados, sin embargo el domicilio de la interesada sigue siendo el mismo y diferente al de su pareja. Por otra parte la interesada no contesta cuando se le pregunta por el trabajo actual de su pareja o la empresa donde trabaja y el promotor reconoce que desconoce los ingresos de la Sra. G., ésta por otro lado desconoce si el promotor practica con regularidad algún deporte ni las aficiones que tiene, y él por su parte tampoco conoce las de ella, menciona que a veces ella fuma mientras que la propia interesada lo niega y esta desconoce el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del promotor. Por último al ser preguntados por el lugar en que van a residir dicen que en España aunque el promotor no da ninguna razón para ello y la interesada dice que porque él tiene una oferta de trabajo.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Lima

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (54ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña M., nacida en A., H. (Colombia) el día 1 de mayo de 1964 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado por poder en Colombia el 21 de mayo de 2010, con Don J. R., nacido en B., V. (Colombia) el día 6 de febrero de 1977 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 3 de noviembre de 2009. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y de la promotora; certificado de nacimiento con anotación de matrimonio canónico anterior, inscrito el 25 de abril de 1986, y anotación del cese de los efectos civiles de dicho matrimonio con fecha 3 de mayo de 2010, pasaporte colombiano y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, sin registros, y del interesado; certificado de

inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, pasaporte español, fe de vida y estado, soltero, documento nacional de identidad, escritura de poder otorgada para la celebración del matrimonio y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con registros de octubre de 2002, dos del año 2006 y dos del año 2009.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 10 de agosto de 2010 en el Consulado de España en Bogotá y con el interesado el 4 de marzo de 2001 en el Registro Civil de Blanes (Gerona). El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 14 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la relación existe desde hace bastante tiempo y que se conocieron a través de su hijo, lo que difiere de lo manifestado en su momento en la audiencia practicada, adjuntando diversa documentación.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. Con fecha 16 de abril de 2013 el Sr. R. aporta documentación para acreditar los envíos de dinero realizados, de los que solo 4 son anteriores al matrimonio y 3 de ellos muy próximos a dicha fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65

C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según manifiestan se conocen desde mayo de 2002, según la promotora en casa de un primo, aunque en el recurso dice que a través de su hijo, e iniciaron en ese momento su relación sentimental, según el interesado la relación comenzó en octubre de ese año. Desde entonces según el interesado ha viajado 3 veces, en 2005, 2007 y 2009, estando un mes y medio cada vez y según la promotora ha estado varias veces, sin precisar, consultado el certificado de movimientos migratorios, los viajes fueron en 2002, 2006, es decir 4 años después de empezar la relación y en 2009, en ningún caso la estancia supera el mes y 3 días, en esas estancias según el interesado convivió con la promotora pero según esta no han convivido antes del matrimonio.

Respecto a otros datos personales y familiares sorprende que después de tanto tiempo de relación el interesado no conozca el nombre de los padres de su pareja, ni el día de su nacimiento ya que dice que fue el día 24 de mayo cuando es el 1 del mismo mes, y por su parte la promotora desconoce que él ha tenido tres parejas anteriores con las que ha convivido aunque no se ha casado. Difieren en otros datos, así el interesado no contesta sobre si su pareja tiene mascota, que sí la tiene, también en los bancos con los que trabajan, en los trabajos que han tenido, en lo que les gusta desayunar, en las aficiones que tienen, en los programas de televisión favoritos y, por último la promotora no recuerda la dirección de correo electrónico del interesado, desconoce si es supersticioso y si tiene o no coche.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (57ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Don J.-J. nacido en El I. (Perú) el día 19 de marzo de 1973 y de nacionalidad peruana y Doña S.-E. nacida en B.-A.(Argentina) el día 15 de marzo de 1992 y de nacionalidad española, presentaron en el Consulado español en Lima, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil celebrado en Perú, según la ley local, el 20 de enero de 2011. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, certificado de matrimonio local; y del promotor, certificado de nacimiento, certificado de soltería y documento de identidad peruano, y de la interesada, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, fe de vida y estado, soltera, y documento nacional de identidad español.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con fecha 27 de junio de 2011 a la interesada en el Registro Civil de Alcorcón y con fecha 24 de agosto siguiente al promotor en el Consulado de España en Lima. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción y con fecha 31 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.-Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, justificando la falta de coordinación en las respuestas en el nerviosismo de las entrevistas.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa que considera improcedente la inscripción y en el mismo sentido informa el Encargado del Registro Civil Consular y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre un ciudadano peruano y una ciudadana española, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron por internet y que iniciaron su relación sentimental prácticamente desde que se conocieron, según la interesada, y unos 4 meses después según el promotor que manifiesta que desde entonces se comunican por teléfono una vez a la semana o cada 10 días, debiendo significarse que la primera vez que se conocen personalmente es en el único viaje de la interesada a Perú, 5 días antes de la boda, durante un mes, esta circunstancia de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio, es uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia, siendo en este momento también cuando según el promotor conoce la edad de su pareja, difiriendo también en los asistentes a la boda, según la interesada fueron los padres de él, su hermano y su cuñado, según el promotor fueron sus hermanos.

Por otra parte difieren o desconocen otro tipo de datos personales, profesionales y económicos, así ella cambia el orden de los nombres propios del promotor y equivoca su año de nacimiento, dice 1997 cuando es 1973, también desconoce la mitad de los nombres de los 8 hermanos del Sr. Á. que a su vez no sabe en qué lugar de Argentina nació su pareja, pese a ser un lugar tan conocido como su capital, B-A. El promotor también desconoce la dirección del domicilio de la interesada en A. dice que es de sus padres con los que vive, sin embargo la interesada dice que la casa es alquilada y que vive con sus padres y hermana, ambos desconocen sus direcciones de correo electrónico y el promotor tampoco conoce el número de teléfono de su pareja. Difieren en

si practican o no deporte, el promotor no contesta respecto de sus aficiones y de las de su pareja y, aunque no es determinante el promotor es 19 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular Lima (Peru).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (61ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don F. nacido en B. el día 16 de mayo de 1975 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso, celebrado en Colombia el 19 de febrero de 2011 e inscrito en el Registro Civil colombiano con fecha 24 de febrero, con Doña E. nacida en M. (Colombia) el día 28 de diciembre de 1977 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, del promotor; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un solo registro, el 15 de enero de 2011 y, de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios sin registro alguno.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la interesada el 29 de marzo de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el promotor el 24 de mayo siguiente en el Registro Civil de Sant Adriá de Besós. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 14 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, porque a su entender no hay datos para la negativa recibida adjuntando documentación testifical por parte de ambos contrayentes.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado manifiesta que se conocieron por internet y no personalmente hasta su viaje a Colombia para el matrimonio, esta circunstancia, que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio es uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia. Respecto a cuando iniciaron su relación sentimental, la interesada dice que en la misma fecha en que se conocieron por internet, 24 de febrero de 2010, sin embargo el promotor dice que fue en junio siguiente y según él la decisión de casarse fue conjunta pero para la interesada la petición fue de él.

Respecto a datos familiares cabe mencionar que el promotor confunde el año de nacimiento de su pareja, ésta por su parte equivoca el nombre del padre del Sr. N. y no menciona que ha fallecido, además el promotor dice que los padres de su pareja son un matrimonio separado y en paradero desconocido, sin embargo de acuerdo con los datos de la inscripción de nacimiento de la Sra. F. no hay filiación paterna y se recoge que lleva los apellidos de su madre. Ambos equivocan las edades respectivas, discrepan en si utilizan o no algún apodo o apelativo y respecto a su relación futura difieren en el número de hijos en común que quieren tener y los nombres que tienen pensados para ellos. También existen discrepancias en otros temas como datos laborales, así la interesada no sabe a la hora que comienza a trabajar su pareja ni los ingresos mensuales que tiene, discrepan respecto a si saben o no nadar, a los datos de los mejores amigos de cada uno, al país que al promotor le gustaría visitar y si el promotor escucha o no la radio.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (62ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don J-J. nacido en C. (Colombia) el día 19 de enero de 1986 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 13 de septiembre de 2010, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 19 de diciembre de 2008, con Doña P-A. nacida en C. el día 10 de noviembre de 1987 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, en la que no hacen constar el día del matrimonio, solo mes y año y certificado de matrimonio local el día 19 de diciembre de 2010; y del promotor; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, pasaporte español, declaración notarial de estado civil, soltero, realizada con posterioridad al matrimonio y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, y de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades españolas colombianas.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados con fecha 12 de julio de 2011. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 10 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, manteniendo que su relación ha existido, que ante la imposibilidad de la interesada para residir en España él ha vuelto a Colombia y aportando documentación relativa a envíos de dinero y a las actividades laborales del interesado en Colombia.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. El Consulado informa que el Sr. García se inscribió en el Registro de Matrícula Consular con fecha 9 de marzo de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. En cuanto a algunos datos familiares y personales, la interesada dice que la vivienda de la que disponen es alquilada cuando el promotor dice que es de sus suegros, difieren respecto a los libros que han leído y su gusto por la lectura, al ser preguntados sobre si tienen una canción que les guste a ambos el promotor dice tajantemente que no, mientras que la interesada dice que muchas por a su pareja le gusta mucho la música y le dedica muchas canciones, también difieren respecto a su gusto o no por escuchar la radio.

Preguntados respecto las entidades bancarias con las que trabajan, la interesada menciona que tiene una cuenta en B. y que ambos tienen una determinada tarjeta de crédito, sin embargo el promotor dice que ninguno trabaja con ninguna entidad, también discrepan respecto al último viaje de vacaciones, según ella fue un fin de semana a la finca del esposo de su prima, según el promotor él fue a Colombia y su cónyuge a ningún sitio. Por último hay unas respuestas que resultan bastante determinantes respecto a considerar la intención del acto que se pretende inscribir, según la interesada es conocedora de las consecuencias legales de la inscripción del matrimonio respecto al estado español, permiso de residencia en España, obtención de la nacionalidad española con menor tiempo de residencia y, preguntada sobre si contrajo matrimonio con esos fines dice "claro que sí".

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente

más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (112ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia).

HECHOS

1.- Don J. nacido en B. el día 28 de noviembre de 1943 y de nacionalidad española y Doña Y. nacida en S-C de la S. (Bolivia) el día 18 de febrero de 1980 y de nacionalidad boliviana, presentaron en el Consulado español en La Paz, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil, por poder, celebrado en Bolivia, según la ley local, el 17 de junio de 2011. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, certificado de matrimonio local y copia literal de la inscripción en la que se hace constar que el contrayente español fue representado por apoderado; y del promotor, certificado de nacimiento, fe de vida y estado y pasaporte, y de la interesada, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltera, cédula de identidad y certificado negativo de matrimonio anterior.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con fecha 20 de julio de 2011 al promotor en el Registro Civil de Barcelona y con fecha 7 de septiembre siguiente a la interesada en el Consulado de España en La Paz. Con fecha 3 de octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.-Notificados los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando falta de motivación en la resolución recibida, reiterando que su relación es real y conocida por los compañeros de ambos en la Fundación en que se conocieron y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando el promotor declaraciones testificales de diferentes personas.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa que considera improcedente la inscripción y en el mismo sentido informa la Encargada del Registro Civil Consular se ratifica en la denegación notificada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Bolivia entre un ciudadano español y una ciudadana boliviana, llevado a cabo por poder sin que este conste documentalmente, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron en el año

2006 en la fundación privada en la que él trabaja, dedicada según manifiesta la interesada, a buscar empleo a inmigrantes, e iniciaron su relación sentimental, según el promotor convivieron durante 3 años, en el recurso menciona 2, sin embargo la interesada dice que vivían separados, que ella a veces pasaba los fines de semana en casa del Sr. C. y viajaban juntos, añadiendo que ella tuvo que volver a su país por problemas familiares, caducando su permiso de residencia en España por lo que no pudo volver y “por eso decidimos casarnos”, matrimonio respecto al cual el promotor confunde la fecha de celebración y no menciona que fue por poder. Respecto a otros datos personales y familiares, el promotor equivoca el lugar de nacimiento de la interesada, su domicilio, el de sus padres, no responde a las preguntas sobre si vive con alguien y menciona un número de teléfono diferente al manifestado por la Sra. G. tampoco contesta el promotor a las preguntas relativas a si su pareja ha estado casada anteriormente, si tiene o no hijos de anteriores relaciones, etc. La interesada por su parte menciona que los padres de su pareja han fallecido, circunstancia que no menciona el promotor cuando se le preguntan sus nombres y domicilio, ella menciona que él tiene dos hijos de un matrimonio anterior mientras que el promotor dice que tiene uno.

En relación con las circunstancias laborales de ambos, el interesado menciona que trabaja de administrativo en una fundación y que ella trabaja en el servicio doméstico, según la interesada él es reinsertor social en una fundación que ayuda a los inmigrantes y ella trabaja en un comercio de ropa, él menciona que ella no trabaja y no tiene ingresos sin embargo ella manifiesta los ingresos que tiene y ambos discrepan en los que tiene él. Por último el promotor no responde a la mayoría de las preguntas sobre hábitos, enfermedades, etc., ni sobre él ni sobre su pareja y además, aunque no es determinante, el promotor es 37 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (129ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

- 1.- Doña A. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 16 de abril de 2009 en La República Dominicana, según la ley local, con Don J-C. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: extracto de acta de matrimonio local; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada y acta inextensa de nacimiento del interesado.
- 2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. La juez encargada del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 21 de junio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.
- 3.- Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio
- 4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. La encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
- 5.- Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2013, la interesada desiste del recurso interpuesto. Mediante oficio de fecha 6 de junio de 2013, la Dirección General de los Registros y del Notariado informa a la interesada que no puede ser admitido el desistimiento por evidentes razones del principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral, según disponen los artículos 15 y 26 de la Ley del Registro Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.
- II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
- III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse

cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Posiblemente no se conocían físicamente antes del matrimonio, ya que el interesado declara que decidieron contraer matrimonio en abril de 2009 cuando ella viajó a su país, ese mismo mes, porque querían conocerse primero, sin embargo contrajeron matrimonio el día 16 de dicho mes, en este sentido, uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso.

El interesado desconoce la fecha del matrimonio ya que dice que fue el 17 de abril cuando fue el 16 de abril, desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, dirección y teléfono. Se conocieron a través de un primo del interesado que reside en España donde el interesado tiene varios familiares, ella dice que hace tres años y él dice que hace tres o cuatro. La interesada declara que él no trabaja sin embargo él dice que sí; ella desconoce número y nombres de los hermanos de él. El interesado declara que han tenido discusiones acerca del lugar donde vivirán porque ella quiere España y él quiere en su país, para luego decir que le gustaría dedicarse en España a la mecánica industrial o barbería. La interesada declara en la audiencia que viaja a La República Dominicana para quedarse embarazada y estará cuatro meses. Por otro lado y aunque no es determinante, la interesada es 21 años mayor que el interesado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (133ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña C. nacida en Q. Q. (Colombia) el día 11 de junio de 1986 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 5 de marzo de 2011, con Don J. nacido en B. el día... de... de 1981 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un registro del año 2006, y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios con 3 registros de fechas 27 de diciembre de 2010, 20 de enero de 2011 y 25 de febrero de 2011.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 12 de abril de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el interesado el 3 de junio siguiente en el Registro Civil de su domicilio, P. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 12 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando documentación justificativa de envíos de dinero y correos electrónicos.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron por internet en mayo del año 2010, no obstante discrepan respecto otros datos personales, la promotora confunde el segundo apellido del interesado y manifiesta que el padre de éste tiene 83 años cuando según el Sr. E. su padre tiene 71, por su parte la promotora afirma que su cónyuge ha tenido tres parejas antes que ella mientras que el interesado dice que una, igualmente la promotora desconoce el nombre del mejor amigo de su pareja.

En relación a otros datos muestran desconocimiento al manifestarse sobre los gustos respectivos, según la promotora a ambos les gustan las plantas pero según el interesado a ninguno de los dos les gustan mucho, según él si les gusta el cine aunque no suelen ir y él no recuerda la última película que ha visto, según la promotora a ninguno de los dos les gusta el cine, también difieren en las bebidas no alcohólicas que les gustan, en el motivo de los últimos que se han hecho, según el interesado fueron con motivo de la boda, según la promotora no había motivo alguno y manifiesta que en la boda les regalaron dinero cuando el interesado dice que no recibieron regalos de terceros y, por último ella desconoce que él ha visitado Portugal manifestando que el único país que conoce es Colombia.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (137^a)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Guayaquil (Ecuador).

HECHOS

1.- Don H-E. de nacionalidad ecuatoriana y Doña F-M de nacionalidad española presentaron en el Registro Civil Consular de España en Guayaquil (Ecuador), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Ecuador el 11 de Enero de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sra. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de Noviembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Consular de España en Guayaquil (Ecuador), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, ya que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así el Sr. M. desconoce datos básicos personales y familiares de su pareja como la fecha de nacimiento, el nombre de los padres y el número de hermanos que tiene su esposa, manifiesta que no conoce a sus suegros mientras que la Sra. C. dice que sí, la interesada ignora los ingresos y el número de teléfono del Sr. M. asimismo el interesado desconoce el número de teléfono del domicilio como del móvil de la Sra. C. y si tiene o no vivienda en España. Por otra parte mientras el interesado declara que su esposa es alérgica y sigue un

tratamiento de garganta ella manifiesta no tener ninguna enfermedad, no coinciden respecto del número de viajes que ha realizado la Sra. C. a Ecuador ella dice tres o más y él señala dos. Finalmente no coinciden en el momento que acordaron contraer matrimonio ella declara el 07 de enero de 2011 y él julio de 2010.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (139ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Pekín (República Popular de China).

HECHOS

1.- Don D-L. de nacionalidad española y Doña X. de nacionalidad china presentan en el Registro Consular de España en Pekín (República Popular de China), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República Popular de China el 07 de Mayo de 2010. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de divorcio Sra. L. y fe de vida y estado Sr. R.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 08 de noviembre de 2010 el Encargado del Registro Consular de España en Pekín (República Popular de China) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Pekín (República Popular de China), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen determinadas contradicciones como que la Sra. L. dice que conoció

a su esposo en Octubre de 2005 mientras que él declara en el año 2004, no recuerda el Sr. R. la fecha exacta en la que contrajo matrimonio. Por otra parte la interesada desconoce los datos básicos personales y familiares de su pareja como son los apellidos, el lugar en España donde vive, los ingresos económicos que obtiene o sus propiedades, asimismo no coinciden sobre la actividad profesional del Sr. R., ella declara que es masajista terapéutico chino y él manifiesta que no tiene ningún conocimiento sobre esa materia y que se dedica a la intermediación entre pacientes y profesionales masajistas chinos. Carecen de un idioma común de comunicación necesitando según ellos manifiestan la intermediación de una tía de la Sra. L. que fue según declaró el Sr. R. la que le propuso el matrimonio con su sobrina y a la que según él le une una gran amistad pero fue incapaz de decir el lugar donde vive en España o cualquier otro dato de contacto, finalmente en sus declaraciones informan que se conocieron en el año 2004 ó 2005 con un contacto personal de una semana y que no mantuvieron relación alguna hasta mayo de 2010 donde residió el Sr. R. otra semana en China y contrajeron matrimonio.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Pekín (República Popular de China), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Pekín (China).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (140ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Don R-P. de nacionalidad española y Doña Y. de nacionalidad colombiana presentaron en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 18 de enero de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio Sr P.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 07 de junio de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la Sra. C. en su declaración pone de manifiesto el desconocimiento sobre los gustos y costumbres de su esposo no pudiendo contestar a las preguntas que se le hicieron como que si sabe si su pareja tiene alguna alergia, que tipo de música le gusta, si tiene alguna mascota, en que ciudades ha residido, si ha trabajado o residido en el extranjero, cual es el nombre de su mejor amigo.

Por otra parte declaran conocerse en agosto de 2009 por una página de Internet e iniciar su relación en diciembre de ese mismo año. El interesado declara haber viajado dos veces a Colombia la primera en octubre de 2010 con una estancia de 18 días y un segundo viaje en enero de 2011 para casarse con una estancia de 12 días.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (141ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

- 1.- Doña L-M. de nacionalidad española y Don J-H. de nacionalidad colombiana presentaron en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 13 de septiembre de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción del esposo de la Sra. F.
- 2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de febrero de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
- 3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
- 4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad

o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Declaran conocerse en el bar de la interesada en diciembre del 2008 iniciando su relación sentimental en febrero de 2009, viviendo juntos desde esa fecha hasta 19 de agosto de 2010 que el Sr P. fue deportado a su país, manifiesta Sra. F. que su esposo ha residido en España unos dos años mientras que él declara que ha estado en España 13 años. Se casan el 13 de septiembre de 2010 en el único viaje que ha realizado la interesada y que en el que estuvo doce días. Dice la interesada que su esposo trabajo en España descargando camiones por las mañanas, no recordando el nombre de la empresa siendo que la interesada además del bar tiene como refleja en su declaración una empresa de transportes y su esposo no menciona dicha actividad en su declaración.

Existen contradicciones como que ella dice que no se hacen regalos, únicamente las alianzas de la boda mientras que él declara que ella le regalo ropa y él a ella unos tenis, manifiesta ella que no sabe nadar y él dice que los dos saben nadar, declara él que decidieron contraer matrimonio en junio en el bar de ella y ella declara que lo decidieron en su casa. Por otra parte ella dice que su pareja es del B. y él declara ser del M. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 10 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (157ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña Y-M. nacida en S-D. (República Dominicana) el 29 de septiembre de 1973 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 20 de abril de 1999, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado P, P. (Ecuador) el 10 de enero de 2009, con Don F-C. nacido en G. (Ecuador) el 19 de julio de 1982 y de nacionalidad ecuatoriana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local, y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificado de matrimonio anterior inscrito en el Registro Civil español de fecha 20 de mayo de 1999, disuelto por sentencia reconocida por los tribunales españoles con fecha 4 de julio de 2005, volante de empadronamiento en M. desde el 31 de marzo de 1999 y documento nacional de identidad español.

2.- Con fecha 30 de diciembre de 2010 se celebra la entrevista en audiencia reservada con la promotora en el Registro Civil Central, y en el mes de marzo siguiente se lleva a cabo la audiencia al interesado en el Consulado General de España en Guayaquil. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de junio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio habida cuenta las contradicciones advertidas.

3.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando aclarar algunas de las discrepancias producidas y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opone a la inscripción. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución informando en el sentido de que debe confirmarse el auto impugnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31

de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ecuador entre una ciudadana española de origen dominicano, que obtuvo la nacionalidad española por residencia el 20 de abril de 1999 y un ciudadano ecuatoriano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La promotora equivoca la fecha del matrimonio y no recuerda el nombre del lugar donde se celebró, el interesado por su parte solo dice el mes y año de la boda, no el día, y dice que tuvo lugar en P. P. porque ambos contrayentes lo quisieron. Igualmente respecto a otros datos familiares existen discrepancias, así la promotora equivoca el día de nacimiento de su pareja, y esta por su parte no recuerda el número de teléfono de la promotora y lo que es más importante el interesado desconoce que su pareja ha estado casada anteriormente, aunque si sabe que tiene dos hijas.

Respecto a la relación que han mantenido, el interesado dice que ella ha viajado para verse en 2 ocasiones, una en diciembre de 2008, la boda fue en enero de 2009, y otra en abril de 2010, sin embargo además de estos viajes la interesada reconoce que ha ido a su país en 6 o 7 ocasiones, ella procede de la República Dominicana, por último cuando el Sr. Q.

es preguntado sobre los efectos legales que puede tener en España la inscripción de su matrimonio, posibilidad de salir de Ecuador y residir en España, menor tiempo de residencia para obtener la nacionalidad española, dice conocerlos y también manifiesta que sí a la pregunta de si desea contraer matrimonio con esos fines.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (158ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña M^a-L. nacida en La V, R. (Colombia) el día 15 de agosto de 1980 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 12 de mayo de 2010, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 25 de marzo de 2011, con Don H. nacido en B, S. (Colombia) el día 11 de agosto de 1978 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, fe de vida y estado, soltero, pasaporte español y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, con registros desde el año 2003, y del interesado; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros anotados.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada el 2 de agosto de 2011 en el Consulado de España en Bogotá. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 23 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, estos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la relación existe, que de hecho la interesada ha vuelto a Colombia y están esperando un hijo en común, aportando diversa documentación al respecto e informes de las autoridades locales, sin legalizar, respecto a que durante el último año han convivido en el mismo domicilio en Colombia.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana española, de origen colombiano, y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Desde que se conocieron la promotora viajó en sucesivas ocasiones aunque el interesado responde de forma imprecisa respecto a dichos viajes. Respecto a la celebración del matrimonio el interesado manifiesta que no fueron familiares suyos a la boda y no contesta respecto a los de su pareja, según ésta si fueron familiares suyos, también dice el interesado que como regalos de boda recibieron los anillos, según la Sra. G. no hubo regalos solo fue una celebración familiar.

En relación a otros datos personales y familiares el interesado atribuye erróneamente los apellidos a sus suegros, también dice que él ha tenido una pareja anterior y su cónyuge dos, sin embargo la promotora dice que los dos han tenido una pareja anterior, respecto a los hijos que tiene cada uno de relaciones anteriores el interesado dice que ambos han tenido problemas de salud, circunstancia que niega la promotora al igual que la intervención quirúrgica que manifiesta el Sr. L. que han sufrido los dos por accidente, ella solo menciona que él está operado del pie izquierdo. También difieren en otros temas, como la profesión del interesado, las comidas preferidas, si son trasnochadores o madrugadores, sobre los vehículos que tiene el interesado y, por ejemplo la promotora no responde respecto a las aficiones propias ni de su pareja. Debiendo significarse respecto a lo alegado en su recurso que, pese a que el nacimiento del hijo en común ya debió producirse en el año 2012, no se ha aportado documentación alguna al respecto hasta el momento en que se dicta esta resolución, no obstante debe tenerse en cuenta que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (159ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don A-J. nacido en C. el día 14 de noviembre de 1977 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 26 de marzo de 2011, con Doña. C-L. nacida en B, C. (Colombia) el día 10 de marzo de 1981 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, del promotor; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un único registro, 7 de marzo de 2011, y de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios sin anotación de registros.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 3 de mayo de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el interesado el 31 de mayo siguiente en el Registro Civil de su domicilio, La Coruña. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 30 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando como documentación una relación de llamadas telefónicas, sin membrete de compañía alguna, siendo la más antigua de septiembre de 2011 cuando se estaba tramitando el expediente.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron por internet el 27 de junio de 2010, pero mientras ella dice que iniciaron en ese momento su relación sentimental, el promotor dice que fue unos meses después cuando iniciaron su relación a distancia. Se conocieron personalmente en el único viaje del promotor con ocasión de la boda, según él desde febrero hasta abril aunque no recuerda con exactitud, según el certificado de movimientos migratorios llegó a Colombia el 7 de marzo de 2011, 19 días antes de la boda, esta circunstancia es uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia.

Respecto a otros datos personales, ella contesta que no tiene ni idea de donde viven sus suegros pese a que al ser preguntada sobre a qué se va a dedicar en España dice que su suegra va a poner un negocio y que ella trabajará con ella. Difieren en relación con la situación laboral de ambos, así él dice que ella se dedica a la venta de algunos productos y él está estudiando y trabaja en promociones comerciales, sin embargo la interesada dice que no trabaja y que él no tiene trabajo estable, y respecto a trabajos anteriores realizados, el promotor menciona que ella es auxiliar de odontología y que trabajó en ello hace años, en cambio la interesada

menciona que tiene esos estudios pero no que haya trabajado como tal dice que antes era camarera, y respecto a él conoce sus estudios pero no los ingresos económicos que tiene. Por último difieren respecto a los regalos de boda recibidos, según él fueron las tartas nupciales y una plancha, según la interesada además de la plancha recibió dinero.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (160ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña M^a-B. nacida en A, C. (Colombia) el día 27 de junio de 1965 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 11 de abril de 2011, con Don J-M. nacido en A. el día 20 de junio de 1950 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento con anotación de cesación de efectos civiles de matrimonio canónico anterior, por sentencia de 18 de marzo de 2011, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros, y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, divorciado, certificado de matrimonio anterior con otra ciudadana colombiana, con fecha 15 de abril de 2005, y disuelto con fecha 31 de julio de 2009, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios con varios registros de un mes en el año 2006, 1 mes y medio en abril de 2009 y un último de 15 de marzo de 2011.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 5 de julio de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el interesado el 16 de agosto siguiente en el Registro Civil de su domicilio, Alicante. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 4 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, ambos por separado interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando documentación justificativa de envíos de dinero fundamentalmente.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron por internet en abril del año 2009 en casa de una tía de la promotora que a su vez es suegra de un sobrino del interesado, iniciando su relación sentimental una semana después hasta la vuelta del interesado a España, según él el 1 de mayo, según el certificado de movimientos migratorios el 23 de mayo de 2009, desde entonces solo han vuelto a verse con motivo de la boda, para la que él viajó el 15 de marzo de 2011, según la promotora en ese tiempo han tenido comunicación por internet y teléfono frecuentemente, según el interesado han hablado cada 2 o 3 semanas y, preguntados ninguno recuerda las direcciones de correo electrónico, asimismo en relación con la celebración del matrimonio el interesado no recuerda los nombres de los padrinos y, manifiesta que después fueron de viaje 2 o 3 semanas a B. y luego a la casa que él tiene en P. según la promotora no viajaron tras la boda.

Respecto a otros datos personales, ella no contesta respecto a la profesión de sus padres, ni sobre si su pareja sigue algún tratamiento médico, si es o no alérgico a algún medicamento, si le gustan o no las plantas, si es diestro o zurdo, si sabe o no montar en bicicleta, tampoco contesta sobre si el interesado ha trabajado alguna vez en el extranjero. Por su parte el interesado dice que ninguno tiene fobias o miedo a algo sin embargo la promotora dice que le tiene miedo a las alturas, tampoco sabe seguro si ella es diestra o zurda, dice que a ella le gusta pescar igual que a él sin embargo la Sra. C. dice que la afición de ambos es el cine, y que a ella le gustan las películas de acción sin embargo su pareja dice que le gustan las comedias.

El interesado menciona que era divorciado y que tiene 2 hijos de su anterior matrimonio, ya mayores, pero no menciona que tras ese matrimonio estuvo casado desde el año 2005 hasta julio de 2009 con otra ciudadana colombiana, circunstancia que menciona en su recurso, y de otro lado la promotora estuvo casada anteriormente por matrimonio canónico cuyos efectos civiles no cesaron mediante sentencia hasta un mes antes del matrimonio que se pretende inscribir, 18 de marzo de 2011. Debiendo significarse que la promotora al ser preguntada por los efectos legales en España de la inscripción del matrimonio, posibilidad de residencia y nacionalidad española con menor tiempo de estancia, manifiesta que los conoce y responde que si a la pregunta sobre si ese fue el motivo del matrimonio. Por último y, aunque no es determinante, el interesado es 15 años mayor que la promotora.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (164ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña A-X. de nacionalidad colombiana y Don R. de nacionalidad española presentaron en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) , expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 17 de julio de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sr. R.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 05 de octubre de 2010 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así los interesados declaran conocerse por teléfono en marzo de 2010 iniciando su relación sentimental desde ese momento y no conociéndose físicamente hasta el 04 de julio 2010 en el primer viaje que realiza el Sr. R. a Colombia para casarse, residiendo durante 14 días y contrayendo matrimonio el 17 de julio de 2010.

Por otra parte existen una serie de desconocimientos y contradicciones como que la Sra. N. ignora la talla de ropa que utiliza su pareja, manifiesta que ella se levanta temprano los fines de semana y él tarde mientras que el interesado declara que los dos madrugan. Manifiesta la interesada que nunca ha trabajado y que su pareja siempre ha sido mozo de almacén eléctrico mientras que él declara que con anterioridad ha trabajado en limpieza, camarero y en un parque acuático, manifiesta el interesado que vive solo y ella dice que vive con su madre y hermana.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia):

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (165ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

1.- T-E. de nacionalidad española y Doña E. de nacionalidad dominicana presentaron en el Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República Dominicana el 22 de diciembre de 2008. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento Sr. De P.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de Julio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana), en el trámite de audiencia reservada se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declaran los interesados que se conocen en el año 2003 durante unas vacaciones de 10 días del Sr. De P. en República Dominicana, regresando una única vez en el año 2008 permaneciendo unos 25 días y contrayendo matrimonio, sin que haya viajado nuevamente y manifestando ambos que no convivieron antes del matrimonio, aportando únicamente como elemento probatorio de la relación unas fotos del día de la boda tras 9 años de relación.

Por otra parte existe una serie de desconocimiento de datos básicos personales y familiares como que él declara que sabe inglés y catalán y ella dice que no sabe ningún idioma, la interesada declara que su pareja vive de alquiler mientras que él declara que es de su propiedad.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana) quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (168ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don R. de nacionalidad dominicana y Doña Á-Mª. de nacionalidad española presentó en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 28 de Enero de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de Noviembre de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen contradicciones como cuando inician su relación ella declara 2002 y él en el 2001, la Sra. M. manifiesta que viajó para ver a su esposo en el año 2005 mientras que él declara que en ese año ella se fue a vivir a España y no regresa a República Dominicana hasta el año 2009 para casarse y que deciden contraer matrimonio en el año 2008 por Internet. Manifiesta ella que su pareja estudia informática mientras que él declara que estudia arquitectura y que no han convivido con anterioridad al matrimonio, finalmente declaran que no asistieron familiares de ninguno de los dos a la boda.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (42ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (República de Cuba).

HECHOS

1.- Don J-A. de nacionalidad cubana y Doña C. de nacionalidad española presentaron en el Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba) , expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Cuba el 19 de Febrero de 2009. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de divorcio Sra. P.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en La Habana (República de Cuba), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara el interesado que se conocieron en el año 2008 en la calle pero que iniciaron su relación sentimental a principios de 2009 mientras que ella declara julio de 2009, circunstancia difícilmente coincidente con el mantenimiento de una relación afectiva continuada previa y posterior a la boda dado que han contraído matrimonio el 19 de febrero de 2009 y que su esposa se marchó de Cuba el 27 de julio de 2010. Manifiestan que mantienen la relación a través de las comunicaciones electrónicas, telefónicas y por correo y declara el interesado que le ha regalado unos zapatos y él le obsequio con una salida mientras que ella manifiesta un perfume.

Respecto de los gustos, costumbres o aficiones no coinciden en las preferencias declarada respecto de las comidas y bebidas él dice los fritos, ensaladas y batidos y a ella las sopas, huevos y carne de res mientras que ella declara que a él arroz, jamón y tomate y a ella la comida en general, manifiesta él que su pareja está en un estado depresivo muy grande y ella no lo menciona, y que le ayuda económicamente en ocasiones mientras que ella declara que ahora no puede.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal

(cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (43ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción por no quedar debidamente acreditada la celebración del matrimonio al carecer del oportuno certificado matrimonio expedido por el Registro Civil local

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don O. de nacionalidad española y Doña T. de nacionalidad marroquí presentaron en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio celebrado en Marruecos el 24 de Diciembre de 1985. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, volante de empadronamiento, certificados de nacimiento, acta de confirmación de matrimonio y acta de continuidad de matrimonio

2.- El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de Junio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La competencia para resolver el presente expediente, ordenando la inscripción de matrimonio solicitada, corresponde al Registro Civil Central, en virtud de lo establecido en el art. 16 de la L.R.C y arts. 68, 342 y 343 del R.R.C, al darse la circunstancia de que la parte promotora se halla domiciliada en España y la inscripción pretendida se encuentra dentro de los supuestos previstos en los arts. 1 y 15 de la L.R.C y art. 66 de su Reglamento, en relación con los arts. 17 y ss. del CC.

II.- En el presente supuesto al no existir el oportuno certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil local del lugar de celebración, que hubiera permitido su transcripción en el Registro español, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la L.R.C. Procede conforme a lo dispuesto en los arts. 73 y 95.5º de la L.R.C y arts. 256 y 257 del R.R.C y con los trámites establecidos en el art. 238 y ss. R.R.C. tramitar expediente gubernativo como medio legal establecido para la práctica de la inscripción.

III.- En el presente caso de matrimonio celebrado en Marruecos el 24 de diciembre de 1985, no ha quedado suficientemente acreditado la celebración del matrimonio, la localidad y la fecha en que tuvo lugar el mismo, ni la Autoridad competente ante la cual se celebró el matrimonio, así como que se haya celebrado en la forma conforme lo prevenido en el art. 49 CC. y 257 del R.R.C. Al no haberse aportado la certificación literal de matrimonio

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (52ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña A del P. de nacionalidad colombiana y Don P.-J. de nacionalidad española presentó en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 12 de febrero de 2011 por poderes. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sr. B.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 10 de junio de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara la interesada que se conocen en marzo de 2009 e inician su relación

en octubre de 2010 donde su pareja pasa ocho días en Colombia, que el segundo viaje lo realiza en febrero de 2010 donde pretenden casarse pero debido a problemas burocráticos con la notaría su pareja tiene que regresar a España y da autorización para que se realice el matrimonio mediante poderes su estancia fue de una semana, el tercer viaje lo ha realizado en junio para celebrar la audiencia reservada en el consulado habiendo permanecido en Colombia 15 días. Ambos declaran que no han convivido con anterioridad al matrimonio.

Por otra parte existen una serie de desconocimientos y contradicciones como cuáles fueron las personas que acudieron a la boda ella dice que de su cónyuge un amigo de la familia y él declara que nadie, de ella según él fueron madre, hermanos y una tía mientras que ella declara padres y amigos, ignora la interesada si su pareja ha contraído anteriormente matrimonio mientras que él dice que sí, declara ella que su pareja le ayuda económicamente con 500 euros mensuales aunque manifiesta que trabaja, no coinciden en el mejor amigo ella dice que es " L. " mientras que él declara para ambos "J-L". Declara el interesado que decidieron casarse después del 31 de Diciembre del 2010 mientras que ella dice que lo decidieron antes de navidades. Finalmente en relación a los gustos, costumbres y aficiones ella dice que su pareja no madruga los fines de semana y él dice que sí, no coinciden respecto a la canción favorita de ambos ella dice que su grupo favorito es "E." y les gusta todas sus canciones y él dice que es una canción de la " Q-E. " asimismo respecto de los gustos musicales él dice a ambos les gusta todo tipo de música mientras que ella dice que a él baladas americanas y españolas, ignora la Sr. F. si su cónyuge escucha la radio y que emisora él declara " 40 principales ".

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (53ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña L-J. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2005, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 14 de mayo de 2010 con Don C-A. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 2 de marzo de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe

comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en el número de veces que la interesada ha viajado a Colombia ya que ella dice que en 2007 se encontraba en Colombia y él no fue a verla por motivos de trabajo, mientras que él declara que han vivido siempre juntos, que en noviembre del año pasado estaba en Chile y llegó en diciembre para verla porque ella estaba en España visitando a sus padres. Discrepan en cuando y donde decidieron contraer matrimonio ya que él dice que en el C-M. del bar inglés y ella dice que lo decidieron cuando se fueron a vivir juntos. Existen discordancias en lo referente a actores favoritos, lo último que hacen al acostarse y lo primero que hacen al levantarse, lo que más les irrita a cada uno, gustos que tienen en común, mejores amigos de cada uno, música preferida, deportes practicados, tiempo de convivencia, últimos viajes hechos juntos, emisora de radio que escuchan, etc. El interesado declara que contrae matrimonio para viajar a España y obtener la nacionalidad española en menos tiempo.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (57ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña H-N. nacida en C, V. (Colombia) el día 6 de julio de 1974 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado por poder en Colombia el 25 de marzo de 2011, con Don J-L. nacido en P. V. (Colombia) el día 15 de diciembre de 1961 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 25 de septiembre de 2007. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedida por las autoridades colombianas sin registros, y del interesado; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración de estado civil, soltero, realizada ante notario con posterioridad al matrimonio, pasaporte español, fe de vida y estado y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, con registros desde el año 2001 a 2010 excepto los años 2002 y 2007.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada el 6 de septiembre de 2011 en el Consulado de España en Bogotá. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 23 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la relación existe aunque relatando su inicio en fechas y forma completamente diferente a las audiencias y aportando diversa documentación en apoyo de su pretensión.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de

mayo, 1-4^a de junio, 10-4^a, 5^a y 6^a y 11-1^a de septiembre; 30-6^a de noviembre y 27-1^a y 2^a de diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado por poder, que no consta en el expediente, en Colombia, entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según manifiestan se conocieron unos 4 años antes, es decir 2007, aunque el interesado lo sitúa en el año 2008 y la promotora en recurso habla de noviembre de 2009, en casa de una hija del Sr. P. que vivía enfrente de la promotora, según manifiesta él o, según su pareja, en casa de él a través de su hija, en cambio en el recurso la Sra. V. dice que fue a través de un hermano de él que era amigo de ella y por el que empezó a trabajar con una prima del interesado a la que este visitaba. La relación sentimental se inició en noviembre de 2009 según el interesado o en marzo de 2010 según la promotora y desde que se conocieron según la promotora él sólo viajó para verla en noviembre de 2009, cuando según los registros del certificado de movimientos migratorios del Sr. P. estuvo en Colombia de marzo a mayo del año 2009 pero no en noviembre, y al ser preguntado por el mismo tema el interesado sólo menciona su viaje del año 2011 para las entrevistas en el Consulado español ya que fue representado en la ceremonia matrimonial por su hermano, según la promotora ya que no consta documentación al respecto, pese a ello el interesado menciona los nombres de los padrinos de boda mientras que la promotora dice que no les exigieron padrinos.

En relación a otros datos personales y familiares el interesado no responde respecto a las relaciones anteriores de su pareja, ésta menciona que tuvo una con el padre de sus hijas y que su cónyuge tuvo otra con la madre de sus hijas, sin embargo éste dice que tuvo dos, ambos no contestan respecto del otro a varias de las preguntas sobre gustos y aficiones. Difieren respecto a con quien conviven, según el interesado su pareja vive con su madre y según ella vive con su madre y su hermana, ella parece desconocer las ciudades españolas en las que ha vivido su pareja ya que menciona R. cuando según el interesado vivió en S. y en C. Por último también difieren en los últimos regalos que se han hecho y en los idiomas que hablan, ya que según la promotora su pareja además del suyo propio habla inglés, según él no.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (58ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña V. nacida en T. el día 7 de mayo de 1983 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 17 de mayo de 2011, con Don O-V. nacido en B, V del C. (Colombia) el día 12 de noviembre de 1981 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltera, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un único registro, 9 de mayo de 2011, y del interesado; certificado de nacimiento, declaración ante notario de estado civil, soltero, realizada con posterioridad al matrimonio, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios sin anotación de registros.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados el 16 de agosto de 2011 en el Consulado español en Bogotá. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 14 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando como documentación una serie de fotografías y la autorización de la Sra. F. para que la represente.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana española y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron por internet a través de un primo del interesado que vive en España y según ambos se conocían físicamente antes del matrimonio, no obstante se conocieron personalmente en el único viaje de la promotora con ocasión de la boda, según el certificado de movimientos migratorios llegó a Colombia el 9 de mayo de 2011, 8 días antes de la boda, esta circunstancia es uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Discrepan en quien propuso el matrimonio, según el interesado fue su pareja, según ella fueron ambos.

Respecto a otros datos personales difieren en la edad de la hija de la promotora, en el color de ojos de ambos, en los ingresos mensuales de él, en la profesión de ella y en el horario de su actividad, en la bebida preferida de ambos, él dice que Coca-Cola y ella que café, en los idiomas que hablan además del propio el interesado respecto de si mismo dice que ninguno y la promotora dice que él habla inglés. La promotora por su parte no contesta respecto a la actividad en que trabajan o han trabajado sus padres y respecto del padre de su pareja dice que comercial, según él es pensionista.

Por último preguntada la promotora sobre si conoce las obligaciones que contrae con su pareja al casarse dice escueta y textualmente “no”, por lo que no parece el consentimiento prestado pueda entenderse hecho para cumplir los fines de la institución matrimonial, y, por parte del interesado contesta afirmativamente cuando se le pregunta sobre su conocimiento sobre los efectos legales de la inscripción del matrimonio respecto a residir en España y obtener la nacionalidad en menos tiempo.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (59ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña F-N. nacida en C, C. (Colombia) el día 27 de septiembre de 1979 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado por poder en Colombia el 17 de noviembre de 2010, con Don J-M. nacido en H de L. (B) el día 22 de marzo de 1965 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento, declaración notarial de estado civil, soltera, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros, y del interesado; certificado de nacimiento, pasaporte, fe de vida y estado, soltero y certificado de movimientos migratorios con 2 registros de 16 de agosto a 5 de septiembre de 2010.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 11 de enero de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el interesado el 12 de mayo siguiente en el Registro Civil de su domicilio, S-B de L. (B). El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 5 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando documentación relativa a llamadas telefónicas, correos electrónicos, fotografías, que reitera posteriormente con fecha 26 de septiembre de 2013.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado por poder en Colombia, sin que conste documentalmente la representación otorgada, entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron por internet en diciembre del año 2009, pero mientras ella dice que iniciaron su relación sentimental dos semanas después, el 27 del mismo mes, el promotor dice que fue en enero o febrero de 2010. Se conocieron personalmente en el único viaje del promotor en agosto de 2010 durante 3 semanas. Respecto a la celebración de la boda, según la interesada a su cónyuge lo representó su cuñado y los padrinos fueron su hermana y un compañero de trabajo, cuya existencia desconoce el interesado que no lo menciona como padrino ni como asistente a la ceremonia. También discrepan sobre si recibieron o no regalos de boda, según el interesado no, según la promotora un ramo de rosas y una comida por parte de sus hermanos. Respecto a otros datos personales, él no contesta cuando se le pregunta si su pareja tiene alguna fobia o miedo, ella dice que a los gusanos y a los aviones, tampoco contesta sobre el último libro que ha leído su pareja, ni sobre si ambos son madrugadores o trasnochadores, ninguno de los dos sabe si el otro habla algún idioma además del propio, sobre si usan o no apodos o apelativos el interesado dice que no y su pareja que sí. En relación con otros datos, difieren respecto a si hay algún lugar que hayan frecuentado juntos, según el interesado no y según la promotora si, un centro comercial

al que acudían a comer frecuentemente, sobre las últimas vacaciones realizadas según el interesado estuvo en Croacia sin embargo su pareja dice que él viajó a Egipto y, por último también difieren en la actividad laboral de los hermanos de la promotora.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia):

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (60ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña C-Y. de nacionalidad colombiana y Don J-M. de nacionalidad española presentaron en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 29 de octubre de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr S.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 02 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara el interesado que se conocen hace año y medio en un viaje que hizo

a Colombia en Junio de 2009 con una estancia de un mes mientras que ella declara 20 días, que inician su relación en agosto de 2009 mientras que ella dice junio de 2009, y que vuelve para casarse en octubre de 2010 con un mes de estancia y contrayendo matrimonio el día 29 de octubre de 2010 sin que acudieran familiares a la boda de ninguno de los dos y siendo testigos personal de la notaria. Que ella no trabaja y dispone de las ayudas que le envía de 300 ó 400 euros mensuales, que la interesada es enfermera aunque no trabaja.

Por otra parte declara Sra. A. que sus suegros están muertos pero él manifiesta que su madre vive en S., asimismo cuando se le pregunta por la edad de estos, contesta que “no lo sabe” cuando luego declara que están fallecidos. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 21 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (95ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

HECHOS

1.- Don L-F. nacido en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, presentó en el Consulado español en Guayaquil, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Ecuador, el 16 de diciembre de 2010, con Doña M-I. nacida en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de matrimonio del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 19 de septiembre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud

de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ecuador entre un ciudadana española, de origen ecuatoriano y un ciudadano ecuatoriano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. A tenor de la documentación aportada la interesada estuvo casada con un hermano del interesado llamado F-E. desde el 21 de octubre de 2008 hasta el 3 de septiembre de 2010, en que se divorciaron; el interesado estuvo casado con una hermana de la interesada llamada M-C. desde el 5 de noviembre de 2008 hasta el 6 de noviembre de 2010. El interesado desconoce o no recuerda la fecha del matrimonio. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que en 2007 y él dice que hace siete u ocho años, también difieren en cuando decidieron contraer matrimonio ya que ella dice que fue en Ecuador en 2010 y él dice que lo decidieron en B. Difieren en el motivo por el cual decidieron contraer matrimonio en R. ya que ella dice que el lugar le pareció bonito, y él declara que por la familia, de hecho los anteriores matrimonios de ambos se celebraron en ese lugar. La interesada desconoce la fecha de nacimiento de él ya que dice que nació en 1960 cuando fue en 1980, declara la interesada que no tienen hijos en común, sin embargo él dice que tienen un hijo en común llamado L-O. La interesada desconoce el trabajo del interesado ya que dice que se dedica a la compra y venta de pescado cuando él afirma que es pintor automotriz. Desconocen el salario y se contradicen en si se ayudan económicamente o no. Discrepan en gustos culinarios, aficiones, si tienen o no mascotas, así por ejemplo la interesada dice que no tienen mascotas mientras que él declara que él tiene dos perros y ella tiene un perro. El interesado desconoce el domicilio de la interesada y no sabe si tiene o no mejores amigos así como su nombre. No presentan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (96ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Lima.

HECHOS

1.- Don J-A. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Lima, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Perú, el 7 de abril de 2011, con Doña K-G. nacida en Perú y de nacionalidad peruana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y acta de nacimiento, fe de soltería de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de septiembre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre un ciudadano español y una ciudadana peruana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían físicamente antes del matrimonio, el interesado viajó por primera vez a Perú en marzo de 2011 y contrajo matrimonio en abril, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella declara que fue en febrero de 2007, mientras que él dice que fue en marzo de 2008. Existen discordancias en lo referente a los viajes realizados por el interesado ya que ella dice que el interesado estuvo entre abril y mayo de 2011, cuando él declara haber ido por primera vez a Perú en marzo de 2011, y a los pocos días contrajeron matrimonio. Discrepan en cuando decidieron contraer matrimonio ya que él declara que fue en verano del "año pasado" mientras que ella dice que lo decidieron antes de que él viajara a Perú.

El interesado desconoce que ella tiene dos hermanos viviendo en España, también desconoce el lugar de nacimiento de ella, dice que no han convivido cuando ella manifiesta que han convivido después del matrimonio. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 26 años mayor que la interesada. No presentan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente

más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (98ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1.- Doña A-D. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado español en La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 15 de septiembre de 2009 con Don R. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado literal de nacimiento y certificación de soltería de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de

1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre una ciudadana cubana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían físicamente antes del matrimonio ya que el interesado viajó por primera vez a Cuba en septiembre de 2009 unos días antes de contraer matrimonio (él dice que el 14 de septiembre de 2009 y ella dice que el día 8 de septiembre) no constando que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. El interesado desconoce exactamente cuándo

se conocieron ya que dice que “en 2008 ó 2007”, ella dice que en 2007, tampoco sabe exactamente cuando comenzaron su relación sentimental ya que dice que “en 2008 ó 2009”, ella dice que en 2008, desconoce el día que contrajo matrimonio ya que dice que fue el 14 de septiembre cuando fue el día 15. Discrepan en cuando decidieron contraer matrimonio ya que él dice que seis meses antes y ella dice que en junio. Existen discordancias sobre las personas que fueron a la boda ya que ella dice que no fue nadie ni de su familia ni la de él, sin embargo él declara que fueron la hermana mayor y el padrino. Ella dice que los gastos serán a medias y él declara que la mantendrá él hasta que ella pueda ayudar. Desconocen los lugares de nacimiento del otro, él además desconoce la fecha de nacimiento de ella y el nombre de su padre y ella desconoce lo referente a los padres de él. La interesada desconoce los nombres y edades de los hijos de él y el número y nombres de sus hermanos, así mismo desconoce el teléfono del interesado, dice que vive con alguien y él dice que no. El interesado desconoce el domicilio de la interesada, con quien vive, etc. Discrepan en gustos, aficiones, si han tenido o no operaciones quirúrgicas, trabajos de cada uno, salarios, frecuencia y cantidad de la ayuda que él le presta a ella, etc. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (155ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

No procede la inscripción porque, no habiendo comparecido la contrayente para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don L. nacido en España y de nacionalidad española, presentó escrito en el registro Civil Central a fin de inscribir su matrimonio celebrado en Colombia el 23 de agosto de 2007

con Doña L-D. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Acompañaban como documentación acreditativa de su solicitud: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado y sentencia de divorcio Sr. A.

2.- Recibida toda la documentación el Registro Civil Central, por ser el competente, con fecha 23 de agosto de 2008, se dictó providencia a fin de que se oyera a la interesada en audiencia reservada conforme a lo previsto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil.

3.- El 06 de agosto de 2009 la Encargada del Registro Civil Central dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción del matrimonio con el razonamiento jurídico de que, no practicada a la Sra. R. la audiencia a que se refiere el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos.

4.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo recurrido. La encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 9, 45, 49, 65 y 73 del Código civil (Cc); 15, 23, 26, 29, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 256, 257, 354 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 4-2ª de junio de 2001, 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002, 13-3ª de octubre de 2003, 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005, 7-1ª de febrero y 13-1ª de noviembre de 2006, 30-2ª de enero de 2007, 24-3ª de abril de 2008 y 3-8ª de octubre de 2011.

II.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I CC. y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.- Mediante este expediente se pretende la inscripción de un matrimonio celebrado en Colombia el día 23 de agosto de 2007 entre un ciudadano español y una ciudadana

colombiana La solicitud es denegada por el Registro Civil Central el 06 de agosto de 2009 con el razonamiento jurídico de que, no oído a los dos promotores, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

IV.- Como ha quedado dicho en el fundamento II, el título para practicar la inscripción del matrimonio ha de ser en este caso la certificación expedida por la autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. art. 256.3º RRC) y las declaraciones complementarias oportunas (cfr. art. 256, II RRC). El Registro Civil Central exhorto a fin de que comparecieran los interesados para oírlos en audiencia reservada, Citada la esposa informa el Consulado General de España en Bogotá, esta no compareció por haber sido devuelta la citación por el servicio de correo y además no atiende al número de teléfono que facilitaron los promotores. La audiencia reservada solo puede cumplir su finalidad primordial de formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo comparecido la promotora ni en primera instancia ni en fase de recurso, queda imposibilitada la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su inscripción. Lo anterior no ha de impedir que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), sea factible reiterar el expediente y obtener una resolución sobre el fondo del asunto, siempre que se haya completado la tramitación legalmente prevista.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (156ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Caracas (República de Venezuela).

HECHOS

1.- Don J-J. de nacionalidad venezolana y Doña G. de nacionalidad española presentaron en el Registro Consular de España en Caracas (República de Venezuela), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la Republica Venezuela el 05 de marzo de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del

Registro Civil Consular mediante auto de fecha 27 de Abril de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo

denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Caracas (República de Venezuela), en el trámite de audiencia reservada se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen una serie de desconocimientos de datos básicos personales y familiares de la pareja que en el transcurso de la audiencia reservada puso de manifiesto la Sra. C. donde contestó a numerosas preguntas con un “no lo sé” como cual son los nombres y apellidos de los padres y hermanos de su pareja, en que empresa trabaja, que estudios ha realizado, que ingresos mensuales tiene. Por otra parte y a las preguntas de si fuma y tiene hermanos su pareja contesta con un “creo que sí”, no recuerda la fecha en que comenzaron su relación aunque declara conocerse hace dos años, ni cuál fue el último regalo que hizo a su cónyuge. Finalmente y sin que sea determinante la interesada remite escrito desistiendo del recurso y renunciando a la inscripción del matrimonio.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Caracas (República de Venezuela) quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (162ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (República de Cuba).

HECHOS

1.- Don G-R. de nacionalidad española y Doña M. de nacionalidad española presentaron en el Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), expediente para

la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Cuba el 01 de Noviembre de 2010. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio y defunción del esposo Sra. H.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias

oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en La Habana (República de Cuba), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así ella declara que conoció a su esposo porque eran vecinos, que se quedó viuda hace tres años y él cuidaba a su hijo cuando iba al trabajo, que le hacía los mandados y se quedaba a dormir. Declara la Sra. H. que le conoció hace cuatro años mientras que él dice que fue en la calle en los años 70 y que ese día le invito a cenar en una cafetería y que se fueron a vivir juntos a los 15 días de eso. Mientras ella dice que se hicieron novios hace dos años y que nunca han salido juntos a ningún sitio, ni a cenar, ni a una cafetería, ni pasean, siempre están en casa. Declara que su esposo son 8 hermanos y solo viven dos mientras que él declara que tiene 11 hermanos y que viven 5, la interesada manifiesta que su pareja tiene tres hijos de una relación anterior pero que desconoce las edades y demás datos ya que tiene poca relación con ellos, que ella tiene cuatro hermanos y una hermana mientras que él declara que tiene una hermana. Manifiesta el interesado que su esposa nunca ha estado casada cuando en el propio expediente se aporta la documentación de un certificado de matrimonio anterior, ignora también la empresa donde trabaja su mujer. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 27 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (163ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1.- Doña A. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana y Don E. nacido en Cuba y de nacionalidad española, obtenida en el año 2008, presentaron en el Consulado español en La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 3 de agosto de 2010. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de soltería del interesado y certificado de nacimiento y certificación de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 22 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre una ciudadana cubana y un ciudadano español, de origen cubano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando comenzaron la convivencia ya que ella dice que conviven desde hace cuatro años cuando iniciaron su relación sentimental, mientras que él declara que fue hace ocho meses. La interesada declara que ella estuvo casada antes y que su anterior esposo falleció el 7 de junio de 2011, declarando que cuando se separaron su exmarido se fue a vivir a casa de su hermana, sin embargo el interesado manifiesta que el exmarido de la interesada del que desconoce cualquier dato incluso cuando falleció, se fue a vivir a casa de su hermana cuando se puso enfermo y permaneció allí hasta que falleció. La interesada declara que tiene un hijo que convive con ellos que hizo el servicio militar en el año 2009, mientras que él dice que el servicio militar lo hizo antes de conocerse los interesados. El matrimonio se celebró a instancias de una tía de ella que vive en España, que le informó, cuando se enteró que tenía relaciones con un español, que para viajar a España era mejor que se casara con él, declara la interesada que si viajan a España sólo estarán un mes y luego regresarán a Cuba; el interesado declara que el matrimonio se celebró a solicitud de la interesada a través de una tía de ella que vive en España de la que no sabe el nombre, que si van a España estarán once meses porque es el máximo que permite el gobierno cubano, y que si el gobierno español le da una ayuda económica pues viviría de eso. No aportan pruebas de su relación, ellos mismos dicen que no las tienen. El interesado es 28 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente

más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (164ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don H-E. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 11 de marzo de 2011, con Doña A. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y declaración de soltería del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de

1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español, de origen colombiano y una ciudadana colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado se equivoca o desconoce la fecha del matrimonio ya que dice que el matrimonio se celebró el 11 de marzo de 2007, cuando fue en el año 2011, ella por su parte se limita a decir que el matrimonio se celebró el 11 de marzo, sin especificar año. Discrepan en el número de viajes que ha realizado el interesado a Colombia ya que él dice que ha ido cuatro veces, sin embargo ella dice que ha ido tres veces. Existen discordancias en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo, países que les gustaría conocer, donde trabaja la madre de él, operaciones quirúrgicas sufridas, nombres de los

mejores amigos de cada uno, banco con el que operan, si tocan o no algún instrumento musical, ingresos mensuales de cada uno, si son o no supersticiosos, lugares donde han ido juntos, regalos que se han hecho y motivos, como toman el café, etc. Por otro lado la interesada muestra su deseo de contraer matrimonio para salir de su país y obtener la nacionalidad española en menos tiempo.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (165ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá.

HECHOS

1.- Don D-P. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado de España en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 25 de junio de 1999 con Doña M-I. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y declaración jurada de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento y declaración jurada de estado civil del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. Con fecha 9 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Colombia el 25 de junio de 1999 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2010.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a

través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como

agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos colombianos celebrado en Colombia y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo y cuándo se conocieron ya que ella dice que fue en mayo de 1997 en un autobús y él dice que fue en marzo de 1997 en una fiesta en un sitio llanero de Colombia, también difieren en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que en mayo de 1977 y él dice que en marzo de 1997.

El interesado, según declaraciones de ambos, estuvo viviendo en España, según la interesada durante nueve años y regresó a Colombia porque le denegaron la tarjeta de residencia cuando fue a renovarla, al respecto el interesado dice que vivió en España diez años y volvió a Colombia por papeles. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo último viaje que hicieron juntos, donde trabaja cada uno y horarios laborales, quien propuso el matrimonio ya que ella dice que fue mutuo mientras que él dice que fue ella quien lo propuso; regalos que se han hecho y motivo, apodos que tienen, lo último que hacen al acostarse, canciones favoritas de ambos, que les gusta hacer juntos, aficiones de cada uno, nombre de los mejores amigos, si padecen alergias, número y nombres de los hermanos de cada uno, si son o no supersticiosos, etc. Por otro lado el interesado muestra su deseo de inscribir el matrimonio a fin de salir de su país y conseguir la nacionalidad española en menos tiempo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (166ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña N. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 9 de septiembre de 2010, con Don A. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 2 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4^a de diciembre de 2005; 16-1^a de marzo, 7-2^a y 3^a y 11-4^a de abril, 31-1^a y 5^a de mayo, 23-2^a de junio, 20-5^a, 22 y 25-1^a de julio, 5-2^a de septiembre, 30-2^a de octubre, 10-5^a y 11 de noviembre y 28-5^a de diciembre de 2006; 5-3^a y 29-3^a y 4^a de enero, 28-1^a y 2^a de febrero, 25-7^a de abril, 31-2^a de mayo, 1-2^a y 3^a de junio, 11-2^a, 5^a y 6^a de septiembre, 26-5^a de noviembre y 28-5^a de diciembre de 2007; 11-1^a y 31-1^a y 4^a de enero, 4-3^a y 5-1^a de marzo, 13-1^a, 2^a, 3^a y 5^a de mayo, 8-6^a de septiembre y 22-1^a de diciembre de 2008; 29-8^a y 10^a de enero y 6-1^a de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas

contradicciones. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 9 de septiembre de 2010 entre A. y N.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (167ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña L-R. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 7 de enero de 2011 con Don N. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 19 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español, de origen colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Existen discordancias en lo referente a los padrinos de la boda ya que ella dice que no hubo padrinos mientras que él declara que fueron sus dos hijos y los padres de ella; discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo donde pasaron las últimas navidades, operaciones quirúrgicas sufridas por ambos, lugares donde han estado juntos, si fueron de luna de miel y lugar donde fueron, si les gusta el cine y última película que han visto, si saben o no conducir, etc. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (171ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña Z. de nacionalidad marroquí y Don B. de nacionalidad española presentó en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en N. (Marruecos) el 04 de Noviembre de 2008. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificada de empadronamiento Sr. B.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 24 de Marzo de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, ya que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la Sra. Z. no recuerda la fecha en que contrajo matrimonio, ignora el domicilio de su esposo solo dice que vive en F. declara que fue su esposo el que le pidió matrimonio en N. mientras que el marido en su declaración manifiesta que fue ella y que fue por teléfono, la interesada declara que su esposo es pintor mientras que él dice que trabaja en la construcción. El Sr. D. manifiesta que su esposa desde que se conocen viaja a Marruecos una vez al trimestre y ella dice que ha estado cuatro veces la última en mayo de 2009 él declara que la última ha sido junio de 2009. El Sr. D. dice que el ultimo regalo a su esposa ha sido un pantalón y una camisa ella dice una camisa y unos zapatos el interesado desconoce el lugar donde reside su pareja solo sabe que es en M Por otra parte ella manifiesta que es soltera y el esposo que viuda existiendo contradicción en cómo se conocieron el Sr. D. declara que ella es amiga de su madre mientras que ella declara que les presentó la hermana que es su amiga. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 19 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (2ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

- 1.- Doña R. de nacionalidad española y Don S. de nacionalidad colombiana presenta en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 08 de agosto de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. R.
- 2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 26 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
- 3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
- 4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad

o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara la interesada que se conocen desde el día 03 de julio de 2009 y que inician su relación desde ese momento, que ha visitado a su pareja en dos ocasiones la primera en junio de 2011 en la que estuvo según el interesado dos meses contrayendo matrimonio el 08 de agosto de 2011 y la segunda en noviembre de ese mismo año y en la que permaneció un mes. Que vive en España desde hace 10 años, que ha tenido tres relaciones anteriores al igual que su pareja mientras que él dice que ella ha tenido dos. Respecto de los gustos costumbres y aficiones no le gusta según declara la interesada los dulces y a él el pollo mientras que él dice que a ambos el pollo, que no sabe nadar según ella mientras que él dice que ambos saben, manifiesta ella que a ambos le gusta beber Ron mientras que él dice que a ella vino y aguardiente, declara ella que ambos se levantan tarde los fines de semana y él dice que ella siempre madruga.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 10 años y el interesado declara expresamente que desea contraer matrimonio a los fines de permitirle obtener la nacionalidad española y poder salir de su país.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (3ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don T. de nacionalidad dominicana y Doña K. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 02 de Marzo de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. P. y certificada de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio. Con fecha 29 de Julio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la interesada declara que conoció a su pareja en las navidades de 2004 y que contrajo matrimonio el 02 de abril de 2009, que reside en España desde 1994 mientras que él dice que la conoció hace 8 años en una cancha de baloncesto y que después ella se fue a España, que se comunican por teléfono según ella casi todos los días. Dice la interesada que su pareja tiene un dolor muy fuerte en la pierna desde hace dos años pero que no sabe lo que tiene, circunstancia no manifestada por el interesado, ignora el Sr. G. la dirección de su pareja en España. Declara el interesado tener un hijo de otra relación estando ya casada con la Sra. P. y que su pareja fue operada del brazo derecho circunstancia no manifestada por ella, expresa el Sr. G. que no va a trabajar en España pues ya trabaja ella.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (4ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don S. de nacionalidad española y Doña A. de nacionalidad dominicana presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 09 de Febrero de 2007. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, volante empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de Mayo de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la interesada declara que sabe que su pareja vive en M. pero no ignora la dirección, que es diabético circunstancia no declara por el interesado que si manifiesta que tiene problemas de infarto de corazón, que se conocen hace 20 años y que mantiene una relación afectiva desde hace 19 años habiendo convivido durante cinco años antes de irse a España y luego las veces que viene, mientras que Sr. M. dice que son 15 años y reconoce que esta relación afectiva la ha compaginado con otras relaciones paralelas, que tienen una hija en común de 15 años él dice que tiene 13 años y que no tiene hijos por separado mientras que él declara tener 8 hijos reconocidos de 8 relaciones diferentes y otro hijo menor no declarado. Manifiesta la interesada que la última vez que vino a República Dominicana fue el año 2007 para la boda y que permaneció cinco meses, que mantiene la comunicación por teléfono con una frecuencia de una llamada al mes. El Sr. M. ignora la fecha de la boda y declara vivir en España desde 1995 y que ha viajado a República Dominicana dos veces en el año 2000 permaneciendo un mes y en el año 2004 que permaneció hasta el 2007. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 11 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por

razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (5ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña Z-P. de nacionalidad colombiana y Don V. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia) , expediente para la inscripción de matrimonio civil por poderes celebrado en Colombia el 05 de Diciembre de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado y certificado de matrimonio y defunción de la esposa del Sr. S.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56,

65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Cartagena de Indias (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen determinadas contradicciones e imprecisiones como que el interesado dice que su pareja nace en 1966 y ella declara el 08 de septiembre de 1961, que su relación sentimental comienza a los seis meses de conocerse mientras que ella dice dos meses, asimismo existe un desconocimiento respecto de datos básicos personales y familiares como que el interesado declara desconocer los nombres de los padres de su pareja y manifiesta que el padre ya no vive y la madre está en un asilo, mientras que ella no responde en relación a la edad de los padres de su pareja. Confunde la Sra. S. los países que ha visitado el Sr. S. él dice Argentina, Uruguay y Canadá y ella dice que él ha visitado Irlanda y Francia, declara el interesado que una de las hijas de la Sra. S. está enferma cree que de cáncer y ella dice que no. Por otra parte en relación con los gustos, costumbres y

aficiones dice el interesado que le gusta las plantas y se imagina que a ella también mientras que ella declara que muy poco y a él sí, que comparten los gustos por las plantas como bonsáis, manifiesta el interesado que le gusta de vez en cuando ir al cine y ella dice que no, desconocen ambos si su pareja sabe o no montar en bicicleta, declara él que no tiene ninguno de los dos una afición especial mientras que ella dice que ella hacer gimnasia y a él la jardinería. Finalmente y en relación a la pregunta cómo han preparado la audiencia reservada el Sr. S. dice que no han preparado nada mientras que ella dice que han hablado al respecto y se han preguntado todo, y en relación a la posible denegación él dice que no han hablado y ella que es una posibilidad que han hablado, además debe tenerse en consideración que se conocen por Internet hace 4 años que nunca se han visitado y que contrajeron matrimonio por poderes.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias (Colombia):

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (6ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Nuakchot (República Islámica de Mauritania).

HECHOS

1.- Doña F. de nacionalidad española y Don C. de nacionalidad mauritana presentan en el Registro Consular de España en N. (República Islámica de Mauritania), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República Islámica de Mauritania el 20 de Octubre de 2010. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de divorcio Sra. F. y certificado soltería Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 28 de diciembre de 2011 la Encargada del Registro Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Nuakchot (República Islámica de Mauritania), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así los interesados han incurrido en contradicción respecto de sus fechas de nacimiento, declaran que no han convivido con anterioridad al matrimonio circunstancia que justifican dada su condición de musulmanes pero esta ausencia de convivencia real y efectiva se produce también después de la celebración del matrimonio que pretenden inscribir ya que han coincidido físicamente según se deduce de sus propias declaraciones ocasionalmente y según sus las propias razones por la cual justifican esta ocasionalidad "cuidado de familiares de la interesada" no convivirán próximamente. La falta de convivencia da lugar a una serie de desconocimiento de datos como que él interesado declara que su pareja trabajaba en España en un Laboratorio y cree que ahora no trabaja mientras que ella dice que trabajo en la limpieza en España y que ahora cuida a su madre y abuela. Declara la interesada que quiere tener hijos y vivir en España en la localidad de V. circunstancia no manifestada por el interesado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Nouakchott (Mauritania).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (7ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña A. nacida el 16 de junio de 1986 en San S. (G) y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil de esa ciudad impreso de declaración de datos para la inscripción de

su matrimonio con Don J. nacido en S-D. (República Dominicana) con fecha 16 de julio de 1984 y de nacionalidad dominicana, celebrado en S-D. el 8 de enero de 2008. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos y acta inextensa de matrimonio local y de la promotora; certificado de nacimiento con anotación de matrimonio anterior, certificación de empadronamiento en San S. desde el 9 de diciembre de 2003 y documento nacional de identidad, y del interesado; acta inextensa de nacimiento y declaración notarial de estado civil, soltero, posterior a la celebración del matrimonio.

2.- Con fecha 1 de junio de 2009 se ratifica la promotora en su solicitud y el Registro Civil de San Sebastián remite la documentación al Registro Civil Central como competente para resolver la petición. El 11 de marzo de 2010 el Registro Civil Central solicita al Registro de San Sebastián que requiera a la promotora certificación de su matrimonio anterior con la correspondiente anotación de divorcio, y que se proceda a llevar a cabo la audiencia reservada a la misma. Al mismo tiempo se solicita la intervención del Consulado General de España en Santo Domingo para que entreviste en audiencia reservada al interesado residente en esa circunscripción. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados, en diferentes fechas y lugar, primero a la Sra. P. con fecha 12 de agosto de 2010, tras dos requerimientos por cambio de domicilio, que además aporta el documento acreditativo de su situación de divorciada en el año 2006 de un matrimonio anterior, celebrado en el año 2004 con un ciudadano ecuatoriano, y después al interesado en el Consulado con fecha 10 de mayo de 2011.

3.- En ese tiempo consta, por un lado que el Sr. H. se dirige al Consulado en Santo Domingo para iniciar el procedimiento de inscripción del matrimonio y, por otro que la promotora se dirige al Registro Civil Central mediante escrito, de fecha 16 de noviembre de 2010, solicitando la paralización del expediente de inscripción, manifestando que el interesado la está engañando y solo tiene como finalidad llegar a España, por lo que agradecería que el matrimonio no fuera inscrito. Con fecha 2 de septiembre de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio habida cuenta lo manifestado por la promotora y demás circunstancias apreciadas en las audiencias que hacen dudar de su relación.

4.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, justificando las discrepancias en el nerviosismo por la situación de la entrevista, alegando que tiene 2 hijos de esa relación, aportando copias de la inscripción de nacimiento de los mismos en el Registro Civil español sin filiación paterna, copia de acta de inscripción de nacimiento, con fecha 29 de enero de 2009, del mayor de ellos en el Registro Civil dominicano y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita su desestimación y el Encargado del Registro Civil Central informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y

5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según la promotora conoció a su pareja en S-D. en febrero de 2007 y según el Sr. H. se conocieron en el año 2006 por vía telefónica porque su primo estaba casado con la madre de la promotora, efectivamente la madre de la Sra. P. se casó con un ciudadano dominicano, el 31 de octubre de 2005, en La República Dominicana siendo su matrimonio inscrito en el Registro Civil español con fecha 3 de noviembre de 2009 por sentencia judicial, constando la disolución de ese matrimonio con fecha 12 de marzo de 2010, volviendo a contraer matrimonio religioso con un ciudadano chileno con fecha 13 de agosto de 2011. Según el interesado el padrino y la madrina de la boda fueron dos empleados del Registro donde se casaron, consta en el acta de matrimonio que los dos testigos eran de sexo masculino, durante su relación la interesada viajó en cuatro ocasiones a La República Dominicana, la primera en febrero de 2007 y la última en julio de 2009, desde entonces no ha vuelto, según manifiestan ambos de su relación han nacido 2 hijos, el primero en noviembre del año 2007 y el segundo en octubre de 2008, al que el interesado no conoce, ambos están

inscritos en el Registro español sólo con filiación materna, el mayor de ellos ha sido inscrito en el año 2009 en el Registro Civil dominicano como hijo del Sr. H. no así el segundo pese a que ya había nacido en ese momento, y según informa el Consulado de España en Santo Domingo, se ha instado el reconocimiento de la filiación paterna del primero de los hijos, no de ambos, sin que conste que se haya culminado el proceso.

Respecto a otros datos personales y familiares, el interesado desconoce el domicilio de la promotora en España y su número de teléfono, igualmente esta facilita un número de teléfono del interesado que no coincide con ninguno de los dos que él facilita como propios. La promotora dice que su pareja tiene 6 hermanos, mencionando un nombre que no está entre los que menciona él, que dice que son 5, el interesado por su parte dice que no recuerda los estudios que tiene su pareja y que trabajaba independiente aunque ahora está en el paro, según ella trabajó como dependienta. Por último cabe significar, como se recoge en los antecedentes de esta resolución, que la propia interesada pensó que las razones de su pareja para el matrimonio no eran las propias de esta institución, lo que motivó que se dirigiera al Registro que estaba tramitando la inscripción para que dejara sin efecto el proceso y que el matrimonio no fuera inscrito y no fue hasta 8 meses después cuando volvió a dirigirse al mismo órgano para solicitar información sobre el proceso.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (9ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña M. de nacionalidad colombiana y Don A. de nacionalidad española presentó en el Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 12 de Mayo de 2011. Adjuntan

como documentación: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y fe de vida y estado Sr. S.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,

para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Cartagena de Indias (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declaran que no se conocían físicamente hasta 15 días antes de la celebración del matrimonio, que se conocen desde octubre de 2010 por Internet y según el interesado inician su relación afectiva al mes de conocerse mientras que ella dice desde el primer momento, que se comunican todos los días, y que ha viajado el interesado solo una vez para contraer matrimonio el 12 de mayo de 2011. Por otra parte la interesada desconoce los gustos, aficiones y costumbre de su pareja como que no sabe si escucha o no la radio y él declara que si especialmente por la noche, si hizo el servicio militar, él señala que si, las comidas que prefiere, los países que ha visitado el interesado ella dice Colombia y él Portugal, Colombia y Francia, la música que le gusta ella dice toda clase y él lenta.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias (Colombia).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (32ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Lima (República de Perú).

HECHOS

1.- Don J-G. de nacionalidad española y Doña M-E. de nacionalidad peruana presentaron en el Registro Consular de España en Lima (Republica de Perú), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la Republica de Perú el 15 de Marzo de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. P y certificado de soltería Sra. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 01 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Lima (Republica de Perú) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65

C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Lima (Republica de Perú), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen una serie de desconocimientos de datos básicos personales y familiares como que el Sr. P. desconoce el nombre, fecha y lugar de nacimiento de su pareja, los nombres de los padres, los nombres completos de los hermanos y de la hija de su esposa asimismo la Sra. C. ignora los nombres de los padres, hermanos e hijos de su esposo. Por otra parte declaran mantener la relación mediante comunicación telefónica e Internet pero el Sr. P. no fue capaz de facilitar el número de teléfono de su pareja, ni la dirección de correo electrónico mientras que la interesada facilito el número de teléfono pero manifestó que no recordaba la dirección de correo electrónico habiendo declarado el interesado que no contaba con dirección de correo electrónico. Respecto de cómo se conocieron no coinciden en la fecha y forma, ella dice que en enero del año 2008 en una fiesta y él declara en septiembre de 2006 en un concierto, ni tampoco de cuando decidieron contraer matrimonio, ni coinciden en relación a los hábitos, costumbres o aficiones de la pareja el interesado declara que fuma y ella no y la interesada declara que él no fuma y ella sí, ella dice que hace deporte y él declara que no lo hace.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 23 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Lima (Republica de Perú), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Peru):

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (36ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña G-E. de nacionalidad colombiana y Don J-M. de nacionalidad española presentó en el Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia) , expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 31 de Marzo de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Cartagena de Indias (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declaran conocerse por Internet desde hace cuatro años, que inician su relación hace tres años y que nunca se han visitado, que el matrimonio lo han realizado por poderes el 31 de marzo de 2011 ya que el esposo no ha viajado nunca a Colombia ni ella a España, luego no se conocen físicamente y por lo tanto no han convivido nunca. Por otra parte existe una serie de desconocimientos y contradicciones de datos básicos personales y familiares y sobre los gustos costumbres y aficiones así la interesada no puede responder a las preguntas que se le formulan como cuáles son los trabajos que ha desempeñado su pareja a lo largo de su vida profesional , cuáles son sus ingresos , confunde la marca de cigarrillos que consume , la talla de ropa que utiliza , declara que él no sabe nadar y él dice que sí, ignora el color de los ojos dice negros y él marrones. Asimismo el interesado ignora el color de los ojos de su pareja dice marrones y ella negros, desconoce la trayectoria profesional y la talla de ropa que utiliza.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Cartagena de Indias (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (40ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña S-M. nacida en La V, R. (Colombia) el día 14 de noviembre de 1979 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado, por poder, en Colombia el 15 de octubre de 2010, con Don R-I. nacido en I, A. (Colombia) el día 29 de octubre de 1958 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 14 de julio de 2008. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano, y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, sin registro alguno y del interesado; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración notarial de estado civil, soltero, realizada con posterioridad al matrimonio, pasaporte español y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con registros de los años 2003, 2004 y 2007.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 12 de abril de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y con el interesado el 31 de mayo siguiente en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 20 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, manteniendo que su relación ha existido, que quiere viajar a España para residir en España y cree que reúne los requisitos para la reagrupación comunitaria, aportando documentación relativa a envíos de dinero inmediatamente anteriores a la boda y posteriores a ella.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y

5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, por poder y sin que conste documentalmente el poder otorgado, entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocieron en el año 2007, última estancia del interesado en Colombia, sin que hayan vuelto a encontrarse. En cuanto a algunos datos familiares y personales, el interesado no menciona el lugar de nacimiento de su pareja, sólo la provincia, tampoco los nombres de sus propios padres, ni su edad, y facilita los nombres de los abuelos de la promotora en lugar de los de sus padres, ninguno menciona los nombres de los padrinos de boda, discrepan respecto al regalo recibido con tal motivo, él dice que los anillos y ella dice que ninguno porque quieren casarse por el rito católico. Difieren también en la edad del interesado aunque, por los datos de su inscripción de nacimiento, el equivocado es el mismo, que tampoco responde respecto a si ha tenido otras parejas y si las ha tenido su cónyuge en cambio la promotora dice que ambos han tenido otras parejas pero que no se han casado. Por último respecto a otro tipo de datos, el interesado no responde a si ella es alérgica a algún alimento, ni si ha sufrido alguna operación grave, ni si tiene mascota, no coinciden en lo último que hacen al acostarse

y discrepan sobre si ella sabe o no conducir un vehículo. Preguntados ambos sobre los efectos legales de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español, los dos afirman que saben que así pueden salir del país y residir en España, el interesado además dice que sabe que así puede obtener la nacionalidad española con menos tiempo de residencia, ella dice que no lo sabe, y el interesado dice que sí cuando se le pregunta si ese es su deseo al contraer matrimonio y, además aunque no es determinante el interesado es 21 años mayor que la promotora.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (62ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don R. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2005, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 20 de agosto de 2009 en La República Dominicana según la ley local, con Doña Y. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: extracto de acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan sobre la edad que tenía el interesado cuando se conocieron ya que él dice que tenía trece o catorce años, mientras que ella dice que él tenía 16 años, el interesado declara que se fueron a vivir juntos cuando él tenía 16 ó 17 años, sin embargo el interesado estaba ya en España, según se desprende de la marginal de opción a la nacionalidad, de su certificado de nacimiento (2005). Existen discordancias en lo referente al último viaje que realizó el interesado a su país ya que él dice que fue en agosto de 2009, mientras que ella dice que fue en 2011. El interesado tiene una hija nacida en 2010, él no está seguro de la fecha de nacimiento de la niña, declarando que tiene ocho meses, cuando estaba casado ya con la promotora, ella sabe de la existencia de esa hija manifestando que tiene un año. El interesado declara que decidieron casarse por teléfono, sin embargo ella dice fue en La V. hace dos años. El interesado declara tener tres hermanos, mientras que ella dice que tiene dos.

La interesada desconoce salario, días libres del interesado manifestando que no sabe lo que hace en M. No aportan pruebas de su relación. Por otro lado y aunque no es determinante, la interesada es 11 años mayor que el interesado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (64ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Doña Y-M. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2009, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración

de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 1 de abril de 2011 con Don H-F. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 12 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la

ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano colombiano y una ciudadana española, de origen colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano español en el año 2004, obtuvo la nacionalidad española en el año 2009 y se divorció en el año 2010, contrajo matrimonio con el promotor en el año 2011. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que fue en octubre de 2006, mientras que él declara que fue en septiembre de 2006. El interesado no contesta a la pregunta acerca de la fecha del matrimonio. Existen discordancias en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo nombre de sus mejores amigos, si han hablado de lo que harían en el caso de serles denegada la inscripción del matrimonio, parejas que ha tenido cada uno, alergias padecidas, comidas que no coman por motivos de salud, obligaciones que conlleva el matrimonio, si han hablado como pactarán los gastos familiares, etc. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (65ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Amman.

HECHOS

- 1.- Don H. nacido en Jordania y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1989, presentó en el Consulado español en Amman, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Jordania el 15 de octubre de 2010 con Doña L. nacida en Jordania y de nacionalidad jordana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, contrato de matrimonio y certificado de nacimiento del interesado.
- 2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 2 de junio de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
- 3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
- 4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue

a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Jordania entre una ciudadana jordana y un ciudadano español, de origen jordano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada desconoce todo sobre la vida de su marido como se pudo comprobar en la audiencia reservada que se le practicó, así por ejemplo desconoce su fecha de nacimiento, dice que el interesado es doctor pero no dice que especialidad, desconoce sus estudios, los ingresos mensuales que tiene, domicilio (dice que convive solo), número de teléfono, aficiones ya que dice que le gusta leer cuando él dice que le gusta el fútbol, enfermedades que padece o tratamientos médicos (el interesado dice que padece hipertensión). Discrepan sobre cuando se conocieron ya que él dice que hace un año y ella dice que se conocieron hace un año, también difieren en cuando iniciaron su relación sentimental pues él dice que en abril y ella dice que en septiembre de 2010, dice la interesada que se comunicaban cada dos días por teléfono y él dice que cada cuatro meses, declara ella que se han visto una vez para casarse y él dice que ha viajado dos veces, la interesada desconoce la fecha exacta de matrimonio. Por otro lado el interesado declara que es divorciado, sin embargo en el expediente no consta ningún documento en este sentido por lo que no se puede saber en qué fecha se divorció. El interesado declara que su madre le había encontrado una candidata adecuada para contraer matrimonio, es 35 años mayor que la interesada. El interesado alega en el recurso que se debe respetar los elementos de tradición y cultura jordanas, sin embargo, según la respuesta dada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, a una consulta formulada por el Cónsul General de España en Orán, hay que tener en cuenta que los matrimonios contraídos por españoles conforme al rito islámico, “cuando se celebren por voluntad decisoria del padre o tutor sin consentimiento o contra la voluntad del hijo o hija”, como parece ser este caso, aun cuando sean conformes a la ley del país de celebración, no podrán ser reconocidos en España, y en consecuencia deberá denegarse su inscripción en los Registros Civiles españoles, por aplicación de la cláusula de orden público prevista en el artículo 112.3 del Código Civil.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Amman (Jordania).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (97ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M-E. de nacionalidad dominicana y Doña L. de nacionalidad española presentó en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 16 de Marzo de 2007. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, volante empadronamiento de la interesada y certificado de divorcio Sr. A.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 08 de Septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la interesada desconoce cuándo y dónde nació su marido, cuando se casó y se divorció y declara que decidieron casarse para ayudarse mutuamente debido a la crisis. El Sr. A. no recuerda las veces que su pareja ha venido a visitarle y el tiempo que estuvo, manifestando que desea vivir en España para obtener la nacionalidad española y que por eso quiere residir en nuestro país, desconoce los ingresos de su pareja y declara que se comunican solo los fines de semana a través de Internet, finalmente él manifiesta que no han convivido juntos mientras que ella declara que sí, unos seis meses antes de casarse.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (101ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña J-A. de nacionalidad española y Don J-T. de nacionalidad colombiana presentaron en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 29 de mayo de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sra. M.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 08 de junio de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así los interesados declaran conocerse por Internet el 01 de mayo de 2009 iniciando su relación sentimental desde ese momento y no conociéndose físicamente hasta el 14 de marzo de 2010 en el primer viaje que realiza la Sra. M. a Colombia, residiendo durante tres meses según ella mientras que él declara cuatro meses y contrayendo matrimonio el 29 de mayo de 2010. Existen contradicciones respecto de las personas que acuden a la boda la Sra. M. manifiesta que acude una prima de su pareja y él no la menciona y declara él que acude su hermano no declarado por su esposa. Manifiesta ella que ambos son supersticiosos mientras que él declara que no. Existen desconocimientos sobre los gustos costumbres y aficiones de la pareja como que el Sr T. declara que a su esposa le gusta el café sin leche y ella dice que le gusta con leche y sin leche, manifiesta la interesada que tiene cuatro tatuajes mientras que él declara que tiene tres, dice él que su esposa vive con sus padres y ella declara que vive independiente. Dice el Sr T. que los fines de semana son madrugadores y ella que se levantan tarde. Declara él que le gusta comprar ropa y ella dice que a su pareja le gusta muy poco comprar ropa, manifiesta el interesado que es estudiante y ella no lo menciona, finalmente no coinciden sobre los gustos y preferencias de las colonias o perfumes él declara que a ambos les gustan los europeos y ella dice que ninguno en especial.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal

(cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (102ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

1.- Don J-L. de nacionalidad dominicana y Doña T. de nacionalidad española presentaron en el Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la Republica Dominicana el 09 de Mayo de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado y volante empadronamiento Sra. T.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 15 de Julio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los

matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana), en el trámite de audiencia reservada se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la Sra. T. declaró que se conocen el 30 de agosto de 2007 pero según los datos del pasaporte ese mismo día sale ella de la República Dominicana mientras que él declara que inician su relación sentimental el 08 de agosto de 2007, manifiesta la interesada que han convivido antes de casarse dos años en casa de los padres de él mientras que él dice que un mes en casa de la madre. El Sr P. no recuerda las veces que su esposa ha venido avistarle ni el tiempo que ha estado solo recuerda el viaje que realizó en diciembre de 2009 y que estuvo ocho meses, siendo este el último viaje que ha realizado la Sra. T. a República Dominicana. Existe un desconocimiento sobre datos personales y familiares básicos de la pareja no contestando en la audiencia reservada el Sr. P. muchas de las preguntas que se

les formula así desconoce los estudios de su pareja, los empleos que ha tenido o el trabajo que realiza actualmente, ni sus aficiones y si tiene o no familiares en España, por otra parte no coinciden respecto de la enfermedades que padece ella dice las cervicales y él declara que ella padece de la cadera. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 20 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana) quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (103ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A-R. de nacionalidad dominicana y Doña L-E. de nacionalidad española presentaron en el Registro Civil Central , expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 15 de Agosto de 2006. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 19 de Abril de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, ya que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la interesada declara que vive en España desde el año 1996 que inicio su relación afectiva en el año 2003 y que desde dicha fecha ha viajado seis veces a República Dominicana, que tiene cuatro hijos de relaciones anteriores y que su cónyuge tiene un hijo de otra relación. Mientras que él dice que iniciaron su relación hace diez años lo que implicaría que esta se inició en el año 2001 y que su esposa ha viajado solo tres veces a República Dominicana asimismo ignora la fecha de nacimiento de su pareja.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (105ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña Mª del M. de nacionalidad española y Don J-C. de nacionalidad colombiana presentaron en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 17 de agosto de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sra. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 20 de mayo de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así los interesados declaran que se conocieron en junio de 2009 por Internet y que en ese mismo mes inician su relación sentimental que contraen matrimonio por poderes el 17 de agosto de 2010 y que nunca han estado juntos. Por otra parte existe una serie de desconocimientos de gustos, costumbres y aficiones como que él declara que su esposa sabe algo de alemán y ella declara que ninguno de los dos conoce otro idioma, manifiesta el interesado que los gustos musicales de su pareja son la bachata y regeton mientras que ella dice que la salsa les gusta a los dos, declara él que su esposa no le gusta o puede tomar la leche mientras que ella no lo menciona.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (14ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Lima.

HECHOS

1.- Don J. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Lima, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Perú, el 16 de febrero de 2011, con Doña E., nacida en Perú y de nacionalidad peruana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y

fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento y certificado de no inscripción de matrimonio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de noviembre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009. Artículos 15 y 26 de la Ley del Registro Civil.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la

ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre un ciudadano español y una ciudadana peruana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada se contradice en las fechas de nacimiento del interesado ya que primero dice que nació el 22 de septiembre y luego que el 22 de noviembre, desconoce la dirección del interesado, la empresa para la que trabaja el interesado de camarero así como el horario, por su parte el interesado tampoco sabe el nombre de la farmacia donde trabaja ella. Discrepan en los medios que utilizan para comunicarse, así el interesado declara que se comunican básicamente por internet y que el teléfono sólo lo utilizan una vez al mes, sin embargo ella declara que el principal medio de comunicación es el teléfono, más que internet. La interesada manifiesta que tiene un hermano viviendo en España al cual no conoce personalmente el promotor, sin embargo el interesado declara que sí conoce personalmente al hermano de la interesada ya que vive en M. y ha ido a visitarle en dos ocasiones una de ellas para pedirle la mano de su hermana. Discrepan en dónde decidieron casarse porque mientras que ella dice que fue en su casa, él declara que fue el 14 de febrero de 2011 en el parque del amor. Existen discordancias sobre lo que hicieron el fin de semana previo a la entrevista ya que mientras que él dice fueron a pasear y tomar unas cervezas, ella declara que vieron una película, y el domingo el interesado dice que estuvieron descansando mientras que ella dice que fueron a comer en casa de su hermana y luego fueron a ver un partido de fútbol. La interesada declara que tiene sólo un amigo en España llamado Ca., sin embargo él dice que ella tiene dos amigos Je. y Cr. que fueron los que los pusieron en contacto. No aportan prueba alguna de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Lima

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (16ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Consular de España en Nueva Delhi.

HECHOS

1.- Don V. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Nepal el 13 de enero de 2012, con Doña P. nacida en Nepal y de nacionalidad nepalí. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento y certificado de no casamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 8 de febrero de 2012, deniega la inscripción de matrimonio por falta de consentimiento.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Nepal entre un ciudadano español y una ciudadana nepalí y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Las respuestas dadas por los interesados son muy escuetas. Dan respuestas contradictorias sobre la fecha de celebración del matrimonio, ya que él declara que llegó a Nepal el 17 de enero y ella dice que llegó el 11 de enero para casarse el 13 de enero. Tampoco se ponen de acuerdo sobre cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que fue en mayo de 2011 y él dice que en enero de 2012. El interesado declara que han convivido dos semanas en enero y ella dice que quince días en mayo. El interesado manifiesta que decidieron contraer matrimonio en agosto de 2011 y fue él quien lo propuso, sin embargo la respuesta de ella fue "no lo saben, hablaron de pedir un visado de estudios". Discrepan en las personas que fueron a la boda ya que ella dice que fueron el padre, dos tías y una hermana, mientras que él declara que fueron su padre, su madre, dos tías y el abogado. La interesada desconoce el lugar y la fecha de nacimiento del interesado y él no dice el año de nacimiento de ella. No coinciden en las edades de los padres de cada uno, y tampoco el número y nombres de los hermanos de ella. La interesada declara que él es diseñador industrial, no mencionando el salario que tiene, sin embargo él dice que es ilustrador y que gana tres mil euros al mes. Desconocen direcciones y teléfonos del otro, gustos y aficiones. Las pruebas aportadas no son concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría

desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Nueva Delhi

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (22ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don D., nacido en P., R. (Colombia) el día 12 de diciembre de 1988 y de nacionalidad colombiana, y Doña S. A., nacida en S., R. (Colombia) el día 7 de diciembre de 1972 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 12 de mayo de 2010, presentaron en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso, celebrado en Colombia el 12 de marzo de 2011 e inscrito en el Registro Civil local con fecha 22 del mismo mes. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor; certificado de nacimiento, declaración notarial de estado civil, soltero, realizada con posterioridad al matrimonio, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, fe de vida y estado, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con registros desde el año 2005 al 2011, salvo en el año 2007.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, al promotor el 26 de abril de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y a la promotora el 21 de junio siguiente en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 5 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado haciendo un resumen de la relación existente entre ambos y, entre otras cosas, menciona que fijaron la fecha para la boda el 11 de marzo de 2011 y que su pareja llegó a Colombia el 11 de febrero de 2011, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana española, de origen colombiano, y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron en diciembre del año 2008, aunque la promotora no dice la localidad ni como fue, por su parte el promotor dice que fue en la localidad de nacimiento de ella en una finca de su hijo, e iniciaron su relación sentimental unos días después, no han convivido antes del matrimonio ya que según el promotor él vivía y vive con sus padres y hermano y ella sola, lo que es reafirmado por la promotora aunque no menciona que su pareja vive también con su hermano.

En relación a otros datos personales y familiares también existen discrepancias, así el promotor al ser preguntado por si su pareja ha contraído matrimonio anteriormente no contesta, tampoco sobre si practica con regularidad algún deporte, en cambio difieren al responder a otras preguntas, por ejemplo a si los fines de semana madrugan o no, en el apodo que él utiliza para ella, en la profesión de ambos, en si ella sabe o no conducir, según el promotor no y según ella conducen los dos, en el trabajo que realizaba el promotor antes del actual. Por último respecto a lo manifestado por el recurrente sobre su relación con la Sra. A., cabe apreciar que da una fecha errónea del matrimonio, salvo que el certificado del registro civil colombiano esté equivocado, también de la fecha en que la promotora llegó a Colombia para el matrimonio, que fue 15 días después de lo relatado según el certificado de movimientos migratorios y también se equivoca en la fecha de la audiencia practicada a la promotora en M., no fue en julio sino en junio del año 2011.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (23ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don A. L., nacido en M. (C.) el día 12 de diciembre de 1947 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil celebrado en Colombia el 28 de febrero de 2011 con Doña M. F., nacida en B., S. (Colombia) el día 4 de septiembre de 1964 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, del promotor; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, de fecha 27 de junio de 1992, con anotación de divorcio por sentencia de fecha 30 de marzo de 2006, pasaporte, visado temporal otorgado por las autoridades colombianas válido por un año de 7 de marzo de 2011 y certificado de movimientos migratorios con un sólo registro de entrada a Colombia el 27 de septiembre de 2010, y de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios sin registros.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados el 13 de septiembre de 2011 en el Consulado español en Bogotá. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 4 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, estos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que lo deducido de las entrevistas no puede ser suficiente motivo para la denegación, haciendo un breve relato de la relación con su pareja, manifestando textualmente “una vez casados y ante la imposibilidad de que Doña M. F. pueda residir en España, el Sr. A. L. realizó su desplazamiento de España a Colombia....”

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocieron por internet, según el promotor 3 años antes, no da una fecha concreta, e iniciaron su relación sentimental el 27 de septiembre de 2010 cuando viajó a Colombia para conocer a su pareja, según la interesada se conocieron en septiembre de 2009 e iniciaron su relación hace 3 años, evidentemente no hay una correlación de fechas, además respondiendo a la pregunta de si conocía físicamente a su cónyuge antes del matrimonio dice que "no" y respecto a la celebración del matrimonio él no responde a la pregunta sobre los familiares de su pareja que asistieron, Respecto a datos personales y familiares, la interesada no menciona el lugar de nacimiento del promotor, sólo la provincia, desconoce las edades de los hijos del promotor y éste la del hijo de la Sra. F. del que sólo menciona el nombre. Por su parte el promotor no responde respecto a si su pareja sabe conducir, si ha sufrido alguna intervención quirúrgica, si tiene alguna cicatriz o tatuaje, si es alérgica a algún medicamento, si es supersticiosa ni si toca algún instrumento musical y ambos no responden respecto de los países que le gustaría visitar al otro. Discrepan en los nombres de los mejores amigos de ambos, en el nivel de estudios de la interesada, en la comida preferida del promotor, en si tienen o no una canción favorita de los dos y en la actividad a que se dedica la hija del Sr. L.

Por último a las preguntas relativas a los efectos legales de la inscripción del matrimonio, respecto a residir en España, la interesada menciona que no van a residir en España sino en Colombia, que sólo irán a España de vacaciones, sin embargo en su recurso el promotor justifica su ida a Colombia, ya casados, ante la imposibilidad de que su pareja viaje a España no porque ese sea el lugar decidido para vivir, añadiendo que han convivido desde su viaje a ese país, sin embargo según el certificado de movimientos migratorios su viaje a Colombia es anterior al matrimonio, lo que sí es posterior es su autorización de estancia temporal, y cuando se les pregunta con quien han vivido hasta contraer matrimonio ambos responden que la interesada con su familia y que el promotor solo.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (24ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña L. A., nacida en P., R. (Colombia) el día 19 de febrero de 1993 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 5 de febrero de 2009, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 4 de marzo de 2011, con Don J., nacido en P., R. (Colombia) el día 18 de mayo de 1988 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración de estado civil, soltero, realizada ante notario con posterioridad al matrimonio, certificado de inscripción en el registro civil español de una hija común de los interesados, inscrita por mera declaración de la madre y promotora, pasaporte español y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas, con registros desde el año 2001 a 2009, y del interesado; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros anotados.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, el 3 de mayo de 2011 al interesado en el Consulado de España en Bogotá y un mes después a la promotora en el Registro Civil de Puerto del Rosario. Con fecha 9 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, estos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la relación existe, aportando diversa documentación, fundamentalmente la relativa a la documentación española de su hija y fotografías.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana española, de origen colombiano, y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. En relación con el momento en que se conocieron, año 2006, ambos contestan a medias, así el interesado dice como pero no donde y la promotora dice en qué lugar pero no como, desde entonces ella dice que ha viajado una vez para verse, en noviembre de 2007 y que estuvo 3 años, según los datos migratorios la estancia duró hasta el 13 de enero de 2009, 1 año y 2 meses, volviendo a España 2 meses después del nacimiento de su hija, según el interesado la Sra. A. viajó en 3 ocasiones. Respecto a la celebración del matrimonio difieren en las personas que asistieron, fundamentalmente la promotora menciona que asistió la hija de ambos y el interesado no, variando también el número de tías del interesado que asistieron y también discrepan en los regalos que recibieron, según el interesado dinero, según la promotora una cena.

En relación a otros datos personales y familiares el promotor al ser preguntado por los datos de su pareja no menciona la nacionalidad que tiene, cuando mencionan a su hija el interesado dice que la menor vive con ellos dos, sin embargo la promotora en la misma pregunta dice que la niña vive "conmigo", respecto al asunto de la convivencia también discrepan de forma evidente cuando se les preguntan por con quien convivían antes del matrimonio, según el interesado él vivía con sus padres y su pareja con su tía y su abuela, según la promotora vivían juntos. Difieren absolutamente al mencionar las cosas que más les irritan, al mencionar si tienen o no alergias, el interesado dice que no, ninguno y la promotora menciona en 2 ocasiones que es alérgica a un medicamento. Por último también discrepan respecto a si han hablado de cómo atenderán los gastos familiares, según el interesado si y han acordado que lo harán a medias, según la promotora no han hablado de ello. El interesado al ser cuestionado sobre los efectos legales que para él como ciudadano extranjero tiene la inscripción del matrimonio en el registro español, poder residir en España y obtener, en su caso, la nacionalidad en menos tiempo, dice que si lo ha pensado y es consciente de ello, aunque no es el motivo de su matrimonio pese a reconocer que para ello supone un mejor futuro.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Debiendo significarse, también, que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (31ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se retrotraen las actuaciones para que se practique audiencia reservada a la promotora.

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Caracas

HECHOS

1.- Don F., nacido en España y de nacionalidad española, presentó hoja declaratoria de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Venezuela el 15 de abril de 2011 con Doña M., nacida en Venezuela y de nacionalidad venezolana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con el interesado. El encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 5 de enero de 2012 deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificada la resolución, los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, el Juez Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC.); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Habida cuenta de que en este expediente de inscripción de un matrimonio civil celebrado en Venezuela entre una ciudadana venezolana y un ciudadano español, no se encontró la audiencia reservada referida a la promotora, ésta fue reclamada por la Dirección General de los Registros y del Notariado mediante correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2012; por esta misma vía ese Consulado contestó que la entrevista de la interesada se practicó de forma oral por lo que no se puede remitir el acta. Se reiteró por medio de correo electrónico el 19 de noviembre de 2013, volviendo a contestar ese Consulado lo mismo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que sean oídos en audiencia reservada a la interesada, sea remitida por escrito y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (63ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don P-F. nacido el 21 de abril de 1935 en Z de Z. (C) y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio con Doña Á de J. nacida en B. (República Dominicana) con fecha 5 de febrero de 1987 y de nacionalidad dominicana, celebrado en La República Dominicana el 20 de marzo de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos y acta inextensa de matrimonio local y del promotor; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, de fecha 30 de mayo de 1992, con anotación de divorcio el 10 de abril de 2007, documento nacional de identidad y certificado de empadronamiento en M de T. (T), no constando documentación alguna de la interesada, ni de nacimiento, identificación personal ni declaración jurada de estado civil.

2.- El 3 de marzo de 2010 el Registro Civil Central solicita al Registro de Talavera de la Reina que entreviste al promotor, lo que se lleva a cabo el día 20 de abril siguiente. Posteriormente se solicita la intervención del Consulado General de España en Santo Domingo para que entreviste a la interesada residente en esa circunscripción, llevándose a cabo el 31 de julio de 2010. Con fecha 3 de junio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio habida cuenta lo manifestado en las audiencias que hacen dudar de su relación.

3.- Notificados los interesados, el promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado relatando como se desarrolló la relación y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita su desestimación y el Encargado del Registro Civil Central informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según ambos se conocieron en septiembre de 2008, aunque difieren en cómo, el promotor manifiesta que contactó a través de un conocido con una mujer dominicana de otro pueblo, de la que no sabe su verdadero nombre porque utiliza uno ficticio y se dedica a poner en contacto a ciudadanos de ese país con españoles y él quería contraer matrimonio, según la interesada esa mujer era una hermana de crianza suya y que se conocieron porque ella tenía una foto suya, lo que se contradice con el hecho que, según añade, a él le habían ofrecido antes otras mujeres para casarse pero dijeron que no. Posteriormente él viajó a la República Dominicana para conocerla, según ella en el mismo mes de septiembre, según él "cree que fue en octubre", luego según el promotor volvió en el 2009 para la boda y en marzo de 2010, en cambio según la interesada el viaje para la boda fue el último que hizo. En todo caso a la pregunta de si han convivido antes del matrimonio él dice que los 8 días del primer viaje, los 8 del día de la boda y 12 en el último, según su pareja convivieron 15 días tras el matrimonio. Respecto a otros datos personales y familiares, ambos dan erróneamente la edad del otro el promotor también la fecha de nacimiento de su pareja, ésta por su parte desconoce el lugar de nacimiento del promotor, sólo sabe que en España, los datos de las dos hijas del mismo y el número de teléfono de él pese a que responde en otra pregunta que se comunican por esa vía dos veces a la semana, el promotor por su parte también desconoce el número y el nombre de dos de los hermanos de la interesada. Por último cabe significar que no ha sido aportada al expediente documentación alguna de la Sra. G. los únicos datos que constan sobre su nacimiento, estado civil, etc. son los de la hoja de declaración de datos y los mínimos del acta inextensa de matrimonio local, además y aunque no es determinante el promotor el 22 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, y de las alegaciones expresadas en el propio recurso es una deducción razonable y en modo alguno arbitrario entender que el matrimonio no buscaba los fines propios de la institución. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (79ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don J-F. nacido en V del C.(Colombia) el día 19 de octubre de 1984 y de nacionalidad colombiana, y Doña K-V. nacida en V del C. (Colombia) el día 8 de abril de 1985 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 14 de junio de 2011, previo expediente iniciado en el año 2007, presentaron en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 26 de enero de 2009. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración ante notario posterior al matrimonio de que su estado civil en el momento del mismo era soltera, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 3 registros una entrada y salida en enero de 2009, con un mes de estancia y una entrada en junio de 2011.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, al promotor el 23 de agosto de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y a la promotora el 18 de octubre siguiente en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 27 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la promotora mediante representante interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias apreciadas en las entrevistas y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana colombiana que estaba tramitando la nacionalidad española, adquirida con fecha 14 de junio de 2011, y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron en el año 1999 porque "fuimos novios" según la promotora, teniendo desde entonces una relación continuada que según ella implicaba que contactaban una vez cada ocho días por teléfono o internet, desde entonces hasta el momento actual, la promotora, residente en España, solo viajó a Colombia en enero de 2009 para la boda, volviendo una semana después de la misma y en junio del año 2011. Difieren en cuando y donde decidieron casarse, según la Sra. V. fue estando ella en Colombia, lo que debió ser unos días antes de la misma, sin embargo su pareja dice que lo decidieron por teléfono en diciembre del año 2008. Respecto a la boda el promotor deja en blanco la pregunta relativa a la fecha. En relación a otros también existen discrepancias, así el promotor al ser preguntado por los ingresos de su pareja dice que esta no trabaja porque acaba de terminar la enseñanza secundaria, sin embargo ella dice que tiene unos ingresos de 1400 euros, aunque según la recurrente el motivo es la diferente fecha en que se realizaron las entrevistas, cerca de dos meses, también difieren en aquello que más les irrita, en si saben o no nadar, en si son o no supersticiosos, en si el promotor tiene coche ya que él solo menciona una moto y su pareja añade un coche marca C. también discrepan en si tienen o no miedo a viajar en avión, ella admite que un poco, su pareja dice que no ninguno de los dos, por último respecto a los últimos regalos que se han intercambiado coinciden en que ella le regaló a él una placa con la foto de sus padres, según él con motivo el fallecimiento de su padre, este hecho se había producido 5 años antes del expediente de matrimonio.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente

posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (81ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña N-M. nacida en R. (Colombia) el día 12 de mayo de 1975 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado por poder en Colombia el 16 de julio de 2011, con Don R. nacido en B. el día 13 de diciembre de 1977 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, de fecha 16 de diciembre de 2000, con anotación de cesación notarial de sus efectos civiles con fecha 30 de mayo de 2011, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con anterioridad al matrimonio con dos registros, salida el 10 de julio de 2004 y entrada el 24 de febrero de 2011, y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte y certificado de movimientos migratorios sin anotación de registros.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la interesada el 23 de agosto de 2011 en el Consulado español en Bogotá y al interesado en el Registro Civil de Badalona con fecha 29 de septiembre siguiente. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 15 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, se interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias en errores de transcripción e interpretación de los funcionarios que hicieron las entrevistas, estando dispuesto el interesado a aclarar las respuestas ante el Consulado y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando entre otra documentación el poder notarial otorgado por el interesado en España, un mes antes del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado por poder, sin que en su momento se aportara documento legal al respecto, en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron en B. en el año 2006 y que iniciaron su relación sentimental en diciembre de 2009, ambos manifiestan que no han convivido antes del matrimonio, y tampoco después, porque el interesado no ha viajado nunca a Colombia y ella no consta que haya vuelto desde febrero de 2011 que volvió a su país, según documento de movimientos migratorios expedido nueve días antes del matrimonio, respecto a la celebración el interesado confunde la fecha, según él fue el 10 de junio cuando fue el 16 de julio, sin que sea admisible la justificación formulada en el recurso y también manifiesta que el padrino fue un sobrino de la promotora, aunque esta dice que no hubo padrinos, la persona mencionada, por su filiación, puede ser la persona apoderada por el Sr. D. para representarle en la ceremonia. Respecto a los datos personales la promotora confunde el segundo nombre del padre del interesado y no contesta sobre lo que les gusta desayunar, sobre si él sigue algún tratamiento médico, si ha sido sometido a alguna intervención jurídica, ni sobre la edad de sus propios padres y de la de los padres de su pareja, ni sobre si él utiliza algún apodo o apelativo o si tiene o no miedo a viajar en avión. También difieren en las bebidas preferidas por ambos, en los últimos regalos que se han hecho, en lo que les irrita a cada uno, en si tienen o no una canción o música que se signifique algo especial para ellos. Por último la promotora al ser preguntada sobre los motivos del matrimonio dice que porque quieren estar juntos ya que hace 3 años que son novios, según la relación de fechas declaradas, no llega a 2 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (84ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña M^a-V. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 20 de junio de 1998 con Don S. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio inextensa, certificado de nacimiento de la interesada y acta de nacimiento inextensa del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. El Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2^a de diciembre de 2004; 19-1^a y 20-2^a y 3^a de abril, 19-3^a, 20-1^a y 3^a, 26-2^a de mayo, 8-4^a, 20-3^a de junio, 7-1^a de julio y 29-4^a de diciembre de 2005; 27-4^a de enero, 22-1^a y 24-3^a de febrero, 28-4^a de marzo y 6-2^a de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 20 de junio de 1998 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2008.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren

los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de

simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, aunque luego dice que nació el 21 de mayo de 1958, ella por su parte desconoce la fecha de nacimiento de él. El interesado desconoce cuándo se fue a España la interesada ni cuando obtuvo la nacionalidad porque dice que fue hace diez años cuando fue en el año 2008, tampoco recuerda la fecha de la boda, declarando que se casaron porque ella era cristiana. Ambos declaran que tienen cuatro hijos en común pero además él tiene dos hijas extramatrimoniales de ocho y 16 años manifestando que la promotora supo de estas dos hijas pero que no rompieron la relación.

Desconoce el número de viajes que ha realizado ella a su país, así como las fechas, desconoce el tiempo que lleva trabajando ella en su actual trabajo así como el horario; declara que tiene una hermana viviendo en España que consiguió un “asunto” con los cristianos y consiguió irse a España. Ella no da el nombre exacto de una de las hijas del interesado, desconoce los nombres de los hermanos de él ya que da unos distintos a los dados por él.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (88ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Consular de España en Bogotá.

HECHOS

- 1.- Don R. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, presentó en el Consulado de España en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 12 de mayo de 1996 con Doña A-E. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
- 2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. Mediante auto de fecha 5 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular deniega la inscripción del matrimonio.
- 3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
- 4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.
- II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Colombia el 12 de mayo de 1996 entre un dos ciudadanos colombianos, de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2010.
- III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
- IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado

en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un

consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, se trata de inscribir un matrimonio entre dos ciudadanos colombianos, celebrado en Colombia y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que en enero de 1983 y él dice que en marzo de 1982, tampoco coinciden en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que un mes después de conocerse en 1983, mientras que él dice que fue en mayo de 1982. Ninguno de los dos da la fecha exacta de matrimonio ya que ella dice que fue el 12 de mayo de 1994 y él dice que en 1986 cuando la boda se celebró el 12 de mayo de 1996.

Existen discordancias en lo referente a los viajes realizados por el interesado, aficiones y gustos que tienen en común, lo último que hacen al acostarse y lo primero que hacen al levantarse, la interesada declara que no tienen correo electrónico, sin embargo él da la dirección de uno, radio que escuchan, donde vivirán el interesado dice que en Colombia porque tiene piso propio y ella dice que en B., trabajos desempeñados anteriormente, lugares que han visitado juntos, con quien conviven, si practican o no deportes, etc.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (89ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Consular de España en Bogotá.

HECHOS

1.- Don J-A. nacido en Cuba y de nacionalidad española, obtenida por opción según la Ley 52/07 en el año 2009, presentó en el Consulado de España en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 11 de agosto de 1995 con Doña D-B. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. Mediante auto de fecha 6 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Colombia el 11 de agosto de 1995 entre un ciudadano cubano y una ciudadana colombiana, de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por opción en el año 2009.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado

en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un

consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, se trata de inscribir un matrimonio entre un ciudadano cubano y una ciudadana colombiana, celebrado en Colombia y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado se equivoca o desconoce la fecha de la boda ya que dice que fue en 1975 cuando fue en 1995, la interesada desconoce el lugar exacto de nacimiento del interesado. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo lugares que les gustaría visitar, aficiones, equipo de fútbol simpatizante, nombre del mejor amigo del interesado, con quién han convivido antes de matrimonio, con qué banco operan, alergias padecidas, estudios realizados, si son o no supersticiosos, lo que más les irrita, etc. La interesada muestra su deseo de inscribir el matrimonio para obtener la nacionalidad española en menos tiempo. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (90ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña I. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 14 de diciembre de 2010 con Don C-E. nacido en Colombia y de nacionalidad

colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 20 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,

para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana española y un ciudadano colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No contestan a la mayor parte de las preguntas relacionadas con el otro. La interesada desconoce el nombre de la madre y hermanos de él, donde residen. Desconocen los salarios de cada uno, estudios, teléfonos, cuando iniciaron su relación sentimental, tiempo que han convivido, regalos que se han hecho, si se han ayudado o no económicamente, etc. El interesado había solicitado visado para viajar a España en el año 2008 siéndole denegado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (91ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña J-X. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 18 de abril de 2011 con Don Á. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento,

certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo se conocieron ya que ella dice que fue en L. cuando empezó a trabajar en la empresa de él, mientras que él declara que fue en L. porque una hermana suya trabajaba para él. El interesado desconoce la fecha exacta de nacimiento de ella ya que dice que nació en el año 1984 cuando fue en el año 1986. Existen discordancias en las fechas de los viajes realizados por el interesado ya que él dice que fue en agosto-septiembre de 2010 y en abril de 2011, mientras que ella declara que fue en abril de 2010 y en marzo y agosto de 2011. Difieren en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo ingresos mensuales de cada uno, motivo por el que utiliza el interesado gafas, profesión de cada uno ya que ella dice que estudia y él declara que trabajó con él de secretaria, alergias o enfermedades padecidas por el interesado, bebidas favoritas (a esta pregunta el interesado no contesta), lo primero que hacen al despertarse, trabajos de sus padres, etc. Por otro lado y aunque no es determinante, el interesado es 21 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos.

Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (97ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santiago de Chile.

HECHOS

1.- Don F. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Santiago de Chile, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Chile, el 11 de julio de 2011, con Doña L. nacida en Perú y de nacionalidad peruana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y acta de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 3 de octubre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del

matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Chile entre un ciudadano español y una ciudadana peruana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Existen discordancias sobre cómo se conocieron ya que el interesado declara que el padre de un amigo suyo le habló de la interesada diciéndole que era buena para él y que por eso viajó a Chile, no coincidiendo el número de viajes realizados a este país con lo señalado en la audiencia reservada, sin embargo ella declara que reside en Chile y que un amigo que reside en L. le dijo que si quería conocer una persona residente en España. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella, contradiciéndose en varias ocasiones, declara primero que tiene una hermana para luego decir que tiene seis, también declara primero que conoce a su suegra para luego decir que no había llegado a verla, primero dice que es perito agrónomo para luego decir que es jardinero y que no tiene estudios, desconoce la dirección de la interesada en Chile, tampoco recordaba donde se había casado, recurriendo, según informes de Consulado, a una libreta donde llevaba información escrita. Por otro lado la interesada manifiesta que no sabe los nombres de los hermanos del interesado, desconoce todo sobre la situación laboral del interesado declarando que no hablan de esas cosas. Desconocen gustos, aficiones, costumbres personales del otro. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 20 años mayor que la interesada. No presentan prueba alguna de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santiago de Chile.

IV.4.1.2.- Se inscribe-no puede deducirse ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (56ª)

IV.4.1.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don J-J. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 6 de abril de 2011, con Doña J. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 20 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando el certificado de nacimiento de la hija que han tenido en común.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª

y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones; los interesados presentan el certificado de nacimiento de la hija que han tenido en común nacida en fecha... de... de 2011. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, "ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa". Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 6 de abril de 2011 entre J-J. y J.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (161ª)

IV.4.1.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- El 3 de septiembre de 2009 Doña M. de nacionalidad colombiana, nacida en C. (Colombia) el 11 de marzo de 1977, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso de declaración de datos para la trascipción de matrimonio civil celebrado el día 25 de agosto de 2009 en Colombia, según la ley local, con la Don G. de nacionalidad española, nacido en M. el 8 de abril de 1982. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja de declaración de datos en la que ambos se declaran solteros y certificado de matrimonio local; de la promotora; registro de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios con registros en 2005 y 2006 con destino y procedencia a A. y C; y, del interesado; certificación literal de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un solo registro el 28 de julio de 2009.

2.- Se celebran las audiencias reservadas, a la promotora el 8 de septiembre siguiente en el propio Consulado de Bogotá y al interesado, al parecer, el 16 de noviembre de 2009 en el Registro Civil de Cuenca, no obstante esta no consta en el expediente por no haber podido ser localizada. Como consecuencia de lo anterior y tras sendos escritos del interesado se llevó a cabo una nueva entrevista al Sr. R. con fecha 16 de junio de 2011.

3.-El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio, y el 20 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá, dictó auto acordando denegar la solicitud de inscripción del matrimonio.

4.- Notificada la resolución a ambos, interpusieron por separado recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado pero con un mismo contenido, alegando que su relación existe y reiterando lo solicitado, aportando documentación como fotos de la boda, otras fotos de los contrayentes, pasaporte completo del interesado y documentos acreditativos de envíos de dinero.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que motivaron la decisión recurrida, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia

de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006 y las Resoluciones entre otras, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero de 2008, 6-1ª de marzo y 15-3ª de diciembre de 2009 y 2-1ª de febrero y 7-4ª de noviembre de 2011 y 14-14ª de septiembre de 2012.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio a través fundamentalmente del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC). Para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

IV.- En este caso concreto, en el que se solicita la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el día 25 de agosto de 2009 entre un nacional español y una ciudadana colombiana, los hechos comprobados por medio de las declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores como para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de simulación. Las audiencias reservadas practicadas, con la circunstancia añadida de la diferencia temporal entre las entrevistas por motivos ajenos a los interesados, no ponen de manifiesto contradicciones sustanciales ni desconocimiento por cada uno de los datos personales y familiares del otro por los que se les ha preguntado.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace.

Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de Octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa”. “Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso interpuesto y revocar el auto apelado.

2º.- Disponer que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio civil celebrado el día 25 de agosto de 2009 en la Notaría Segunda de Cali, Valle (Colombia) entre Don G. y Doña M.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (67ª)

IV.4.1.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

1.- Doña M^a-E. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Santo Domingo (República Dominicana) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 18 de mayo de 2010 en Santo Domingo (República de Dominicana) con Don J-I. nacido en S-D. (República Dominicana) y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sra. P.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana) dictó acuerdo con fecha 07 de marzo de 2011, denegando la inscripción del matrimonio por presumirse como matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe desfavorable a la inscripción del matrimonio. El Encargado del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, "ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa". Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto".

V.- En el caso actual, de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas aportadas por los interesados, no da lugar a la existencia de una duda razonable que permita considerar que estamos ante un matrimonio donde el consentimiento prestado no lo es a los fines previstos para la Institución del matrimonio por la normativa vigente, habiendo informado con fecha 26 de Julio de 2011 tanto el Encargado

del Registro Consular como el Fiscal que con la presentación de las nuevas pruebas no se oponen a la inscripción del citado matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en la República Dominicana el 18 de mayo de 2010 entre Don J-I. y Doña M^a-E.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

IV.4.1.3.- Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (47^a)

IV.4.1.3- Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre un marroquí y una española, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo del Encargado del Registro Civil del Consulado de España en Nador (Marruecos).

HECHOS

1.- Don M., nacido el 2 de abril de 1980 en O. (Marruecos) y de nacionalidad marroquí, y Doña H., nacida el 24 de agosto de 1986 en M. y de nacionalidad española, obtenida por opción con fecha 31 de enero de 1996 presentaron solicitud para la inscripción del matrimonio coránico que habían celebrado el 19 de julio de 2007 en Marruecos, según la ley local. Acompañaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio en la que se hace constar que la promotora “es marroquí, de nacionalidad española, según partida de nacimiento expedida por la Comuna de Farkhana”, y del promotor; certificado de nacimiento, pasaporte marroquí y certificado de residencia en B., y de la promotora; certificado de inscripción en el Registro Civil español, documento nacional de identidad español, volante de empadronamiento en M., declaración notarial de la concordancia de nombre entre su certificado de nacimiento y el acta de matrimonio y certificado de inscripción en el Registro Civil español del nacimiento de un hijo en común de los promotores, producido en M. el 3 de marzo de 2009 y copia de Libro de Familia expedido por las autoridades marroquíes en el que fue inscrito con anterioridad el precitado menor.

2.- El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente la solicitud ante la falta de certificado de capacidad matrimonial de la contrayente española. El Encargado del Registro Civil Consular

mediante auto de fecha 26 de abril de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendido ya que la interesada, ciudadana española desde 1996, contrae matrimonio como nacional marroquí, sin aportar el certificado de capacidad matrimonio que se exige en estos casos.

3.- Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, añadiendo que no es cierto la necesidad del certificado de capacidad ya que el matrimonio se celebró y fue autorizado sin él.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto apelado. La Juez Encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 19 de julio de 2007 entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española que lo es por opción desde el 31 de enero de 1996 y de origen marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos

extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Nador (Marruecos)

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (55ª)

IV.4.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se retrotraen las actuaciones para que se practique audiencia reservada a los solicitantes.

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá.

HECHOS

1.- Don J-L. nacido en España y de nacionalidad española, presentó hoja declaratoria de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 19 de febrero de 2010 con Doña C. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, el encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 27 de enero de 2011 deniega la inscripción de matrimonio. En el auto se señala que los interesados presentaron una solicitud de inscripción de matrimonio el 1 de marzo de 2010, la cual se denegó por parte de ese Registro Civil; posteriormente el 5 de agosto de 2010, los interesados presentaron una nueva solicitud de inscripción de su matrimonio, denegada por el presente auto, fundamentando tal decisión en que se practicaron las audiencias reservadas a los contrayentes, en las que se apreciaron inconsistencias que probaban la existencia de un consentimiento matrimonial simulado.

3.- Notificada la resolución, los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se ratifica en su anterior informe. El Juez Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC.); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de

2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Habida cuenta de que en este expediente de inscripción de un matrimonio civil celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español, no se encontraron las audiencias reservadas, éstas fueron reclamadas al Consulado español en Bogotá, mediante correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2011, con respuesta por la misma vía se dio que no se han practicado nuevas audiencias ya que como era una segunda solicitud de inscripción, no se aportaban hechos nuevos, que desvirtuaran la primera denegación. En vía de calificación se reiteró, al Consulado español en Bogotá, mediante correo electrónico de fecha 1 de julio de 2013, que se aportaran las audiencias reservadas, sin que hasta la fecha se haya tenido contestación alguna.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que sean oídos en audiencia reservada los interesados y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (14ª)

IV.4.1.-Inscripción de matrimonio.

Se retrotraen las actuaciones para que se practique audiencia reservada a los solicitantes.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado, contra auto de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido en República Dominicana y de nacionalidad dominicana, y Doña M-L. nacida en República Dominicana y de nacionalidad española, presentaron en el Registro Civil solicitud para la inscripción de matrimonio celebrado en República Dominicana el 19 de diciembre de 2003. Acompañaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declarativa de datos, certificados de nacimiento y certificado de empadronamiento de los interesados y certificado de matrimonio local.

2.- El Ministerio Fiscal, informa desfavorablemente. La Encargada del Registro Civil mediante Auto de fecha 07 de junio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio ante la imposibilidad de realizar las audiencias reservadas.

3.- Notificada la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC.); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II.- En el expediente es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Habida cuenta de que en este expediente de un matrimonio entre una ciudadana española y un ciudadano de nacionalidad dominicana, no se han practicado las oportunas audiencias reservadas según consta en el auto de la Encargada del Registro Civil Central ante la imposibilidad de comunicación con los promotores del expediente habiendo sido citados en dos ocasiones y el imposible contacto telefónico, se procedió o a la denegación de la inscripción del matrimonio celebrado en República Dominicana por los interesados con fecha 19 de diciembre de 2003. A la vista de las alegaciones de los interesados y de la propia documentación incorporada al expediente consta al menos que por parte de los promotores han realizado actuaciones en la sede del Registro Civil Central sin que en ningún momento se les haya dado conocimiento de la situación de imposibilidad de comunicación para la celebración de las audiencias reservadas requisito necesario e imprescindible para poder continuar la tramitación del expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y retrotraer las actuaciones para que sean oídos en audiencia reservada los interesados y se dicte Auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (76ª)

IV.4.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se retrotraen las actuaciones para que se practique audiencia reservada a los solicitantes.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Consular de Quito.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña L-J. nacida en Ecuador y de nacionalidad española obtenida el 25 de enero de 2007 y Don M-J. nacido en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, iniciaban expediente en solicitud de inscripción de matrimonio celebrado en Ecuador el 07 de marzo de 2007. Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declarativa de datos, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio local.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 16 de Noviembre de 2010 deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC.); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Habida cuenta de que en este expediente de la inscripción de un matrimonio civil celebrado en el extranjero entre una ciudadana española y un ciudadano ecuatoriano, no consta en el expediente el contenido de todas las audiencias reservadas para las que fueron citados los promotores, no es posible apreciar el grado de conocimiento recíproco que hay entre ellos y, en definitiva, formar la convicción de la existencia o no de consentimiento matrimonial válido, por lo que procede dejar sin efecto el auto dictado y retrotraer las actuaciones para que los promotores del expediente sean oídos nuevamente, reservada y separadamente, a los efectos señalados en el artículo 246 del RRC, y continuar con la tramitación reglamentaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que aporten o sean oídos en audiencia reservada los interesados y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Quito (Ecuador).

IV.4.2.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (58ª)

IV.4.2.-Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros

No es inscribible el matrimonio celebrado en el extranjero, por quien luego ha adquirido la nacionalidad española porque no hay documentación acreditativa suficiente, por lo no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Con fecha 5 de noviembre de 2010 y, mediante representante, Doña F. nacida el día 10 de junio de 1953 en K el K. (Marruecos) y de nacionalidad española obtenida por residencia el 2 de noviembre de 2000, presentó hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio con Don B. nacido el día 15 de marzo de 1933 en K el K. y de nacionalidad española obtenida por residencia el 17 de noviembre de 1993 y fallecido en B. el día 9 de noviembre de 2009: Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos en la que no se menciona fecha de matrimonio sino que estaba inscrito el 22 de agosto de 1973, acta de continuidad de matrimonio en la que aparece la interesada con otra fecha de nacimiento y otros datos de su padre, acta de rectificación de acta de constatación de matrimonio, cambiando fecha de nacimiento y datos del padre, haciéndose referencia a un acta de constitución de matrimonio de fecha 9 de agosto de 1973 registrada en el Tribunal Notarial de A.; y de la promotora; inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, volante de empadronamiento en B. con fecha 16 de abril de 2007 y documento nacional de identidad y, del interesado fallecido; inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificado de defunción acaecida en B. el 9 de noviembre de 2009 y documento nacional de identidad.

2.-Con posterioridad la promotora presenta sendos escritos solicitando la pronta resolución de su pretensión, por serle necesario para el proceso que se estaba desarrollando en el Juzgado de lo Social nº 12 de B. en procedimiento de viudedad y orfandad. Con fecha 8 de julio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio porque no hay constancia documental, ya que lo que se ha presentado es un acta de continuidad del matrimonio basado en testimonios personales, por lo que hay serias dudas sobre que el hecho a inscribir se haya celebrado conforme a la legalidad establecida, que permita su inscripción en el Registro español.

3.- Notificada la promotora, esta interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando acta de confirmación de matrimonio basada en declaración de testigos y levantada con fecha 9 de agosto de 1973 y en la que refiere la existencia de un matrimonio entre ambos dos años antes, es decir 1971, fecha antes no mencionada.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesa la confirmación del auto recurrido. El Encargado informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. Con fecha 7 de noviembre de 2012 la promotora aporta sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ksar el Kebir que confirma el matrimonio que se pretende inscribir, basándose en declaraciones testimoniales de convivencia, desde el año 1971 hasta el fallecimiento del cónyuge en el año 2009, y en la existencia de hijos en común.

5.- Durante la tramitación del recurso este Centro Directivo ha tenido conocimiento y consta documentalmente que la promotora y el Sr. K. ya español, contrajeron matrimonio en el Registro Civil de Barcelona el día 22 de julio de 1998, sobre el que posteriormente, con fecha 4 de febrero de 2005, se dictó sentencia de separación por el Juzgado de 1ª Instancia nº 18 de Barcelona, que fue inscrita en mayo de 2006. Consta asimismo certificado de defunción del SR. K. en el que se menciona que el estado civil a la fecha de fallecimiento era de separado legal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9, 55 y 65 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256, 257 y 258 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC) siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Las inscripciones podrán practicarse por certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española (art. 23 LRC).

III.- Al estar el promotor domiciliado en España, la competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central (cfr. art. 68,II RRC) y el asiento ha de practicarse, bien a partir de certificación del registro extranjero expedida por autoridad o funcionario del lugar de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien mediante el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento, “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

IV.- En el presente caso la promotora, de nacionalidad española adquirida por residencia, pretende inscribir un matrimonio celebrado que en un principio manifestó que se celebró el 22 de agosto de 1973 en Marruecos, posteriormente se refiere documentalmente que el 9

de agosto de 1973 se levantó en base a declaraciones testificales un acta de continuidad de matrimonio de dos años antes y posteriormente una sentencia de confirmación de ese matrimonio, habiendo fallecido ya uno de los cónyuges, que igualmente por testimonios declara una convivencia desde el año 1971 hasta el año 2009 en que se produjo el fallecimiento, no constando que desde el año 1993, fecha en que se nacionalizó español el Sr. K. se instara la inscripción de matrimonio anterior alguno y sí en cambio se celebró matrimonio civil en España con arreglo a la legislación española, en 1198, sobre el que existe una sentencia de separación dictada por tribunal español en el año 2005 e inscrita en el Registro Civil, lo que desvirtúa la declaración que consta en el último documento aportado por la promotora de que existió convivencia con su cónyuge hasta el fallecimiento de éste, además los documentos nacionales de identidad aportados acreditan que los interesados tenían domicilios diferentes en B.

Por todo lo anterior son serias las dudas sobre la existencia y circunstancias del hecho a inscribir, lo que impediría acceder a lo solicitado, al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (132ª)

IV.4.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero

Si el matrimonio se ha contraído cuando los dos contrayentes eran colombianos y uno de ellos ha adquirido después la nacionalidad española, es inscribible la certificación colombiana porque no hay puntos de conexión que justifiquen la aplicación de las leyes españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña E. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 30 de septiembre de 2006, con Don J-C. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y pasaporte y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 20 de septiembre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando como pruebas los certificados de nacimiento de sus dos hijas.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 26-1ª de noviembre de 2001 y 24-1ª de mayo, 29-3ª de junio y 11-2ª, 11-3ª y 11-4ª de septiembre de 2002 y 26-3ª de febrero, 10-4ª de octubre, 13-1ª y 2ª de noviembre de 2003 y 4ª de 2 de junio de 2004.

II.- El matrimonio anterior subsistente celebrado en el extranjero de quien ha adquirido después la nacionalidad española debe inscribirse en el Registro Civil español competente, siendo la vía normal para obtener la inscripción el certificado expedido por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.).

III.- Como en este caso los dos contrayentes eran colombianos cuando se celebró el matrimonio (30 de septiembre de 2006), el interesado obtuvo la nacionalidad española por residencia en el año 2008, por lo que, su capacidad para contraer matrimonio se rige por su ley nacional (cfr. art. 9-1 C.c.) y, no habiendo dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley colombiana, la certificación de este país ha de inscribirse, siendo improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2º.- Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Central el matrimonio contraído en la Colombia el 30 de septiembre de 2006 entre Don J-C. y Doña E.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (60ª)

IV.4.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero

1º.- *No es inscribible el matrimonio consuetudinario celebrado en Guinea por quien luego se hizo español, porque en el expediente del art. 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.*

2º.- *Características del matrimonio consuetudinario en Guinea Ecuatorial.*

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido en Guinea Ecuatorial y de nacionalidad guineana, presentó ante el Registro Civil Central, hoja declaratoria de datos a fin de inscribir el matrimonio consuetudinario celebrado en Guinea Ecuatorial el 4 de agosto de 2002 con Doña E. nacida en Guinea Ecuatorial y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2002. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio civil consuetudinario, expedido por el Registro Civil Guineano y certificado de nacimiento de la interesada y tarjeta de régimen comunitario del interesado.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2011, deniega la inscripción del matrimonio ya que a la vista de las características del matrimonio que se pretende inscribir (consuetudinario) la conclusión ha de ser negativa, toda vez que esa forma de matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El Encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II.- En el presente caso, la interesada, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2002, pretende inscribir un matrimonio consuetudinario que se celebró en Guinea Ecuatorial el 4 de agosto de 2002 y se inscribió en el Registro Civil Local de Malabo el 11 de marzo de 2005;

La inscripción es denegada por el Juez Encargado porque dicho matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país, ya que es una forma de matrimonio poligámico que permite la subsistencia de otros vínculos matrimoniales anteriores o posteriores al mismo. Sus efectos se producen con independencia de su inscripción la cual es discrecional y puede efectuarse por medio de una simple declaración.

III.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L.R.C. y 66 R..C.C.), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Guinea Ecuatorial en 2002.

IV.- La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar los promotores domiciliados en España. (cfr. Art. 68, II R.R.C.) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 L.R.C. y 85 y 256-3º R.R.C.), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento "en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos".

V.- En el caso actual, los interesados presentan un certificado de matrimonio civil consuetudinario, celebrado el 4 de agosto de 2002, donde a la interesada no se le consigna nacionalidad, los

autorizantes son los cofamiliares de los contrayentes y se inscribió en el Registro Local de Malabo el 14 de marzo de 2005. Posteriormente con el recurso presentan como prueba un certificado de continuidad matrimonial expedido en el año 2011 y otro certificado de matrimonio consuetudinario donde a la interesada se le consigna la nacionalidad ecuatoguineana y figura en el apartado “se practica la inscripción en virtud de acto celebrado por el señor juez comarcal de B”, dicho juez es Don Sin.... dicha certificación se hizo en 2010, cuando en el primero certificado el juez era de M. y se llamaba Sev.... y la inscripción se practicó en 2005. Por todo ello no es susceptible de inscripción, ni tampoco de la anotación prevista en el artículo 271 del Reglamento o, a través de un expediente con valor de presunción (cfr. art. 38-2º L.R.C.) de la regulada por los artículos 335, 339 y 340 del propio Reglamento.

VI.- Por otra parte y en relación con los matrimonios consuetudinarios, de conformidad con la información oficial facilitada por el Consulado General de España en Bata, el denominado matrimonio consuetudinario de Guinea Ecuatorial admite, con plena eficacia civil, varios matrimonios celebrados por la misma persona sin disolución del vínculo previo (poligamia); permite la unión de niñas a partir de los doce años; y acepta la falta de consentimiento de una de las partes (la mujer es entregada por su familia al marido a cambio de una dote). Sin perjuicio del sometimiento de la capacidad matrimonial al estatuto personal determinado por la nacionalidad de la persona, la aplicación de la Ley extranjera puede y debe ser rechazada cuando su aplicación resulte contraria al orden público internacional español. En concreto, se rechaza la aplicación de la Ley extranjera cuando tal aplicación redundaría en vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables del Derecho español.

La cláusula del orden público internacional ha sido aplicada con frecuencia en nuestro Derecho, y en particular en la doctrina de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, que ha entrado a examinar la validez de estos matrimonios considerando la Ley española como “lex fori”. Los matrimonios celebrados en cualquiera de los tres supuestos enumerados, todos ellos concurrentes en el consuetudinario ecuatoguineano, son nulos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 73 del Código civil y, en consecuencia, el aducido por los interesados, aunque resultara fehacientemente acreditado, no puede tener acceso al Registro Civil español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (74ª)

IV.4.2.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

1º. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña D. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí presentó ante el Registro Civil Central hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 17 de diciembre de 1971 en Marruecos con Don M. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida en el año 1987 y que falleció el 22 de septiembre de 2007, Aporta como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, certificación local de confirmación del matrimonio, certificados de nacimiento volante de empadronamiento de los interesados ,certificados de nacimiento de hijos de la pareja y certificado de defunción Sr. M.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante auto de fecha 26 de marzo de 2009 el Encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción de matrimonio ante la imposibilidad de practicar las audiencias reservadas a ambos cónyuges al haber fallecido el esposo en M. el 22 de septiembre de 2007 y en que la promotora no aporta un certificado de matrimonio sino un acta de confirmación de matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Marruecos el 17 de diciembre de 1971 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española, en el año 1987.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente

previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige

para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, se trata de un matrimonio entre dos ciudadanos marroquíes, celebrado en Marruecos en el que uno de los cónyuges adquiere la nacionalidad española en el año 1987 pero que fallece el 22 de septiembre de 2007, la esposa superviviente y de nacionalidad marroquí solicita la inscripción del matrimonio siéndole denegado en base a la imposibilidad de poder realizar las audiencias reservadas a ambos conyugues al haber fallecido uno de ellos, pero además se deniega por no aporta un certificado matrimonial sino acta de confirmación de matrimonio.

Dicho acta no ha acredita la celebración en forma del matrimonio con los requisitos de validez que exige la legislación vigente (arts. 44 y ss. CC., arts. 73 y ss. CC. y arts. 256 y ss. del R.R.C).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (25ª)

IV.4.2.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Si los dos contrayentes son extranjeros cuando se celebra el matrimonio y uno de ellos adquiere posteriormente la nacionalidad española, el matrimonio, que se rige por la ley extranjera, es inscribible en el Registro competente por transcripción de la certificación extranjera, sin que haya puntos de conexión que justifiquen la aplicación de la ley española sobre ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- El 20 de junio de 2011 Don P., de nacionalidad colombiana, nacido en S., B., (Colombia) el 26 de noviembre de 1951, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso de declaración de datos para la trasccripción de matrimonio civil celebrado el día 19 de mayo de 2004 en G., Sn. (Colombia), según la ley local, con Doña A., nacida en E., V., (Colombia) el 13 de julio de 1946 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 10 de febrero de 2011. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local, reiterado posteriormente con la rectificación, por el propio Registro local, de la fecha del matrimonio; del promotor, certificación literal de nacimiento, pasaporte y negativa de inscripción de matrimonio y testimonio de DNI y de pasaporte españoles y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas en el que consta un registro de 27 de enero de 2007; y de la interesada; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificado de matrimonio anterior, de fecha 22 de junio de 1963, certificado de defunción de su anterior cónyuge con fecha 7 de noviembre de 1999, declaración de estado civil, viuda, realizada ante notario en España con posterioridad al matrimonio, pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas.

2.- El 5 de julio de 2011 se celebró la entrevista en audiencia reservada con el promotor en el Consulado español en Bogotá y con fecha 16 de agosto siguiente con la interesada en el Registro Civil de su domicilio, Alicante.

3.- El Ministerio Fiscal informó que estima procede denegar la inscripción del matrimonio y el 30 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular apreciando que, a su juicio, existen datos de los que razonablemente deducir que el consentimiento matrimonial es simulado, dictó auto acordando denegar la inscripción de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su relación como pareja es de hace 30 años, que han convivido como pareja de hecho hasta que la interesada vino a España a trabajar en el año 2004, que él obtuvo en noviembre de 2006 visado de reagrupación familiar por su hijastra y residió en España hasta el año 2009, aportando numerosa documentación en apoyo de su pretensión.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se tuvo por notificado, y el Encargado del Registro Consular informó que a su entender no han cambiado las circunstancias y hechos que motivaron la denegación anterior y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil; 15, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil; 66, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 26-1ª de noviembre de 2001; 24-1ª de mayo, 29-5ª de junio y 11-2ª, 3ª y 4ª de septiembre de 2002; 14-1ª de enero de 2003, 31-4ª de enero y 28-2ª de junio de 2006, 29-10ª de marzo y 24-7ª de abril de 2007, 1-8ª de diciembre de 2008 y 3-3ª de julio de 2009.

II.- Se solicita la inscripción en el Registro Civil español de matrimonio civil celebrado por poder en Ecuador el día 14 de septiembre de 2009 entre dos ciudadanos ecuatorianos, uno de los cuales ha adquirido la nacionalidad española por residencia en fecha 20 de septiembre de 2010. La petición no es atendida por la Encargada del Registro Civil Consular, que el 10 de junio de 2011 acuerda denegar la trasccripción, por estimar, visto el resultado de las

audiencias reservadas practicadas, que el consentimiento matrimonial es simulado. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- Dispone al respecto el artículo 66 RRC que “en el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales”. En el presente caso el hecho inscribible -el matrimonio- afecta a una española, acaeció antes de que adquiriese la nacionalidad española por residencia y, conforme al artículo 15 LRC y al reglamentario transcrito, puede tener acceso al Registro Civil español siempre, claro es, que se cumplan los requisitos exigidos. La inscripción se pretende sobre la base de una certificación de Registro extranjero. El artículo 85 RRC dispone al respecto que “para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se requiere que este sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española”. El acta de matrimonio aportada ha de considerarse válida y eficaz, por no apreciarse defecto formal o material que pudiera invalidarla, y ha de estimarse que en ella concurren los requisitos que señala el citado artículo 85 RRC y que, en consecuencia, constituye título válido para la inscripción.

IV.- En estos supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero por dos extranjeros y en los que, subsistiendo tal matrimonio, uno al menos de los cónyuges adquiere la nacionalidad española pasando el Registro Civil español a ser sobrevenidamente competente para la inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que no procede que se apliquen las normas españolas sobre consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, porque la capacidad de los contrayentes a la fecha de celebración del matrimonio, que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 Cc). Siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones en la materia de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos competentes extranjeros que autorizaron la formalización del matrimonio y lo inscribieron.

V.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso sino que, en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse cuando llegue a concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. No sucediendo así en este matrimonio civil entre dos ciudadanos colombianos formalizado en el extranjero e inscrito en el Registro Civil correspondiente y no habiendo razones objetivas para dudar de la validez del mismo, procede su inscripción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

2º.- Instar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el día 19 de mayo de 2004 en Girón, Santander (Colombia) entre Don P. y Doña A.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá

IV.7.- Competencia

IV.7.1.- Competencia en expedientes de matrimonio

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (134ª)

IV.7.1-Competencia del Registro Civil en autorización de matrimonio

La competencia del Registro Civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del RRC) por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la juez encargada del Registro Civil de Talavera de la Reina

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Talavera de la Reina, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña Z. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil, en la localidad de P. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado notarial de soltería y certificado de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que no existe impedimento legal alguno para la celebración del matrimonio proyectado. Mediante providencia de fecha 28 de septiembre de 2010, el encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina, interesa a la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Pueblanueva se proceda a averiguar el domicilio de los interesados, dado que el empadronamiento de la interesada data de fechas muy inmediatas a la presentación de la solicitud de matrimonio. Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil se emitió informe diciendo " que de las gestiones oportunas, se ha podido averiguar que en el domicilio de P. sito en la calle Á. 4_, reside de forma ocasional, algún fin de semana y épocas de vacaciones de verano, Semana Santa o Navidad, una pareja formada por un hombre y una mujer, sin poder confirmar que la mujer sea la señora O".

3.- Mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2010, el Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina declara la incompetencia territorial de dicho Registro Civil para la tramitación del expediente matrimonial solicitado

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio, alegando que ellos residen en P. habitualmente.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que no hay nada que oponer a la declaración de incompetencia territorial del Registro Civil de Talavera. El juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 40, 51 y 57 del Código Civil y los artículos 238 y 247 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 11-4ª y 12-1ª de enero y 12-4ª de diciembre de 2007; 14-6ª de octubre de 2008; y 30-9ª de abril de 2009.

II.- Pretenden los solicitantes, español y colombiana, obtener autorización para contraer matrimonio civil en la localidad de P. para lo cual presentan, entre otra documentación, el volante de empadronamiento en la calle Á. de dicha localidad toledana. El encargado del registro declara la incompetencia territorial del Registro Civil de Talavera de la Reina para la tramitación del expediente

III.- De acuerdo con el artículo 238 RRC, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del registro civil correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. En este sentido, hay que señalar que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil en general y por el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC., conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual”, esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. En consecuencia, corresponde al encargado del Registro Civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados y de las circunstancias acreditadas, como, por ejemplo, tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia – no de mera estancia - respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (cfr. art. 40 CC.) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (cfr. art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

Por ello, el juez encargado puede y debe examinar de oficio su propia competencia (cfr. arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal respecto de la persona que promueve expediente registral.

IV.- En el caso actual, según la documentación aportada con la solicitud para contraer matrimonio, presentada con fecha 15 de julio de 2010, la interesada está empadronada en P. desde el 20 de abril de 2010, y el volante de empadronamiento del interesado es de la localidad madrileña de T-de- A. La prueba de certificación de empadronamiento que se aporta queda desvirtuada por el informe del puesto de la guardia civil de P. que manifiesta que la interesada no vive en el citado domicilio.

V.- A la vista de estas circunstancias no se considera acreditada la residencia efectiva de la interesada y en consecuencia, cabe confirmar que el empadronamiento en la localidad de P. se realizó con la única finalidad de obtener un fuero distinto del que realmente corresponde.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (138ª)

IV.7.1-Competencia del Registro Civil en autorización de matrimonio

La competencia del Registro Civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del RRC) por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.

En las actuaciones sobre competencia del registro para la instrucción de un expediente de autorización de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto de la Encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Barcelona, Doña A. y Don F. iniciaban expediente para contraer matrimonio en dicha localidad. Aportaban la siguiente documentación: certificaciones de nacimiento certificado de soltería Sr. F. volante de empadronamiento en Barcelona Sra. L. y certificado de residencia en P. (Italia) del interesado.

2.- La encargada del Registro Civil de Barcelona dictó auto el 05 de octubre de 2011, declarándose incompetente para la instrucción del expediente conforme al artículo 238 del Reglamento del Registro Civil (RRC) porque ambos contrayentes tienen actualmente su domicilio real y efectivo en P. (Italia).

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 238 y 240 del Reglamento del Registro Civil y la resolución 4-4ª de marzo de 1998.

II.- Los solicitantes, iniciaron expediente para contraer matrimonio ante el Registro Civil de Barcelona, para lo cual presentaron, entre otros documentos, el certificado de empadronamiento en Barcelona de la Sra. L. y certificado de residencia en P. (Italia) Sr. F.. La encargada del Registro Civil se declaró incompetente por razón del territorio, ya que de las indagaciones realizadas de oficio ambos contrayentes residen en P. (Italia).

III.- La encargada del registro puede y debe examinar de oficio su propia competencia (cfr. arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación registral cuando llegue a la convicción de que los interesados no residen en su ámbito territorial. De acuerdo con el artículo 238 RRC, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del Registro Civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes, entendiéndose que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es al que se refiere la legislación del Registro Civil en general y el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC., conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual”, esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. Si bien es cierto que el domicilio puede fijarse arbitrariamente por los interesados y que ocasionalmente puede dar

lugar a supuestos de fraude de ley facilitados por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración, lo cierto es que en este caso se aprecia y así consta en el expediente en la diligencia de fecha 20 de septiembre de 2011 en la que se recoge lo manifestado por la madre de la recurrente, el informe de la policía municipal y de la propia documentación aportada que le fue solicitada a los interesados, que ambos tienen la residencia real y efectiva en P. (Italia), habiendo sido declarado por la propia madre de la Sra. L. que para más abundamiento realizó ella personalmente todas las gestiones para la tramitación del expediente ante el Registro Civil de Barcelona, todo ello sin perjuicio que la interesada resida en sus vacaciones o descansos laborales en Barcelona.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (37ª)

IV.7.1-Competencia del Registro Civil en autorización de matrimonio

La competencia del Registro Civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del RRC) por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.

En las actuaciones sobre competencia del registro para la instrucción de un expediente de autorización de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2011 en el Registro Civil de Talavera de la Reina, Don A-A. y Doña N-L-Mª. iniciaban expediente para contraer matrimonio en dicha localidad. Aportaban la siguiente documentación: certificaciones de nacimiento, certificado de soltería Sr. P. y certificado de empadronamiento de ambos interesados en Talavera de la Reina.

2.- El encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina dictó auto el 23 de mayo de 2011, declarándose incompetente para la instrucción del expediente conforme a los artículos 50 L.E.C y 49 CC porque ambos contrayentes no tienen su domicilio real y efectivo en Talavera de la Reina.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 238 y 240 del Reglamento del Registro Civil y la resolución 4-4ª de marzo de 1998.

II.- Los solicitantes, iniciaron expediente para contraer matrimonio ante el Registro Civil de Talavera de la Reina, para lo cual presentaron, entre otros documentos, el certificado de empadronamiento de dicha localidad de ambos interesados. El encargado del Registro Civil se declaró incompetente por razón del territorio, ya que de las indagaciones realizadas de oficio ambos contrayentes no residen en dicha localidad

III.- El encargado del registro puede y debe examinar de oficio su propia competencia (cfr. arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación registral cuando llegue a la convicción de que el interesado no reside en su ámbito territorial. De acuerdo con el artículo 238 RRC, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del Registro Civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes, entendiéndose que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es al que se refiere la legislación del Registro Civil en general y el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC., conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual”, esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. Si bien es cierto que el domicilio puede fijarse arbitrariamente por los interesados y que ocasionalmente puede dar lugar a supuestos de fraude de ley facilitados por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración, lo cierto es que en este caso y de las propias averiguaciones realizadas por el encargado del Registro Civil que solicitó la colaboración de la Brigada local de extranjería de Talavera de la Reina la cual constató la falta de residencia real, habitual y efectiva en la localidad de ambos interesados en el domicilio por ellos declarado, mediante la verificación de la ausencia de datos como sus nombres en los buzones del inmueble donde dicen residen así como el desconocimiento por parte de los vecinos de el Sr. P. y la Sra. B. y la imposibilidad pese a los numerosos intentos de contactar con ellos en el domicilio que dicen residir habitualmente en Talavera de la Reina.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina.

V. DEFUNCIÓN

V.1.- Inscripción de la defunción

V.1.1.- Inscripción de la defunción fuera de plazo

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (68ª)

V.1.1.-Inscripción fuera de plazo de defunción

Para que pueda decidirse en expediente gubernativo la inscripción de la defunción de una persona cuando su cadáver ha desaparecido o ha sido inhumado es preciso que en las actuaciones llegue a probarse la certeza de la muerte en grado tal que se excluya cualquier duda racional y, en este caso, solo consta la fama de muerte.

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de defunción remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Murcia en fecha 21 de abril de 2009 Doña C., mayor de edad y domiciliada en dicha población, expone que su bisabuela D. nacida el 21 de enero de 1877 en San P del P. (M), falleció durante la guerra civil, en concreto durante el año 1939, y solicita que por el Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena se incoe el pertinente expediente de inscripción de defunción. Acompaña certificación literal de nacimiento, nota del Registro Civil de Cartagena informando de que con los datos facilitados no se ha hallado en 1940 la inscripción de defunción recabada y certificado del párroco de la iglesia de San N. sobre no aparición de inscripción de defunción, que estima que pudo omitirse por ocurrida en los años de la República o de la Guerra Civil.

2.- Tras una primera citación fallida, la promotora ratificó la solicitud el 22 de octubre de 2009, manifestando que el fallecimiento acaeció en C. entre los años 1939 y 1940 y que personas con interés legítimo en el expediente son los nietos de la difunta, cuyos nombres y poblaciones de residencia facilita. Visto que de lo actuado aparece que el hecho cuya inscripción se solicita ocurrió en L del B. el Encargado dispuso que el Ministerio Fiscal se pronuncie sobre inhibición en favor del Registro Civil de Cartagena, el Fiscal se mostró conforme con la inhibición y seguidamente el Encargado dispuso la remisión del expediente a dicho Registro Civil, en el que tuvo entrada el 27 de noviembre de 2009.

3.- El 15 de diciembre de 2009 el Encargado recibió declaración testifical de dos conocidos de la promotora, que manifestaron que la han oído hablar de que su abuela falleció en su casa de L del B. y una nieta de la difunta, que declaró que sabe directamente, porque se encontraba en el domicilio, que murió con 67 años cuando ella [nacida en 1927] tenía 15. Al mismo fin se libró exhorto al Registro Civil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde el 23 de febrero de 2010 compareció otro nieto de la finada, nacido en 1930, que manifestó que tuvo conocimiento directo del fallecimiento, ya que por entonces todos vivían en la misma casa, que no sabe la fecha exacta pero que él tendría unos seis o siete años.

4.- El Ministerio Fiscal, habida cuenta de que las contradicciones de los testigos propuestos dan un margen de error considerable respecto a la fecha de fallecimiento, se opuso a lo

solicitado y el 31 de mayo de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena dictó auto dispuso no autorizar por el mero testimonio, además discordante, de dos personas la inscripción de defunción fuera de plazo instada.

5.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso mediante representante ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los testigos han aportado información bastante precisa y que existen pruebas y presunciones que inducen inexorablemente a concluir que la persona objeto del expediente ha fallecido hace muchos años.

6.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la resolución impugnada por sus correctos y razonados fundamentos, y el Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 193 a 197 del Código Civil (CC.), 2042 a 2044 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 (LEC); 16, 18, 26, 81, 86, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 68, 278 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13 de marzo y 10 de mayo de 1967, 2 de mayo de 1972, 10 de septiembre de 1979, 6 de octubre de 1995, 2-7ª de septiembre y 29-2ª de octubre de 1996, 16-2ª de abril de 1998, 18 de junio de 1999, 14 de febrero de 2000, 7-1ª de noviembre de 2001, 4 de junio de 2002, 18-3ª de septiembre de 2003, 28-2ª de octubre de 2005; 23-3ª de febrero, 29-9ª de marzo y 14 de abril de 2007; 14-10ª de noviembre y 2-5ª de diciembre de 2008; 24-1ª de mayo, 22-3ª de junio y 13-6ª de diciembre de 2010 y 26-5ª de julio de 2012.

II.- Se pretende por la promotora la inscripción de la defunción de quien declara su bisabuela, exponiendo que falleció durante la guerra civil, “en concreto” en el año 1939. El Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena, dispuso no autorizar por el mero testimonio, además discordante, de dos personas la inscripción de defunción fuera de plazo instada mediante auto de 31 de mayo de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- Dispone el artículo 86 LRC que “será necesaria sentencia firme, expediente gubernativo u orden de la autoridad judicial que instruya las diligencias seguidas por muerte violenta, que afirmen sin duda alguna el fallecimiento, para inscribir éste cuando el cadáver hubiere desaparecido o se hubiere inhumado antes de la inscripción”. Por su parte, el artículo 278, I RRC establece que “cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado, no basta para la inscripción la fama de muerte, sino que se requiere certeza que excluya cualquier duda racional”. Los preceptos transcritos suscitan cuestión acerca del sentido y alcance de las locuciones “sin duda alguna” y “certeza que excluya cualquier duda racional” que obviamente no abarcan los supuestos de presunción de muerte, en los que no cabe sino instar la correspondiente resolución judicial declarativa de la ausencia o del fallecimiento, ni las situaciones en las que hay dudas fundadas o razonables de la ocurrencia del óbito y resultan tan solo probadas la fama, la posibilidad o incluso la probabilidad de la muerte; pero que tampoco han de ser interpretadas en forma tal que quede impedida su aplicación práctica, pues la ausencia de toda duda solo se produciría en presencia del cadáver, incurriendo la norma en contradicción por partir del presupuesto de la desaparición o inhumación de aquel.

IV.- La certeza, así entendida, acerca del hecho mismo del fallecimiento y del momento, siquiera aproximado, en que acaeció, no ha llegado a justificarse en este caso con datos objetivos: la promotora manifiesta que el fallecimiento ocurrió “en concreto” durante 1939, solicita no obstante certificación de inscripción de defunción a lo largo del año 1940 que, con los escasos datos facilitados, no es hallada; los testigos propuestos, aunque directos, se contradicen sobre la fecha del deceso que, en términos vagos y tomando como referencia

la propia edad y la de la difunta, uno data en 1936 o 1937 y el otro entre 1942 y 1944; no aportada certificación negativa de inscripción de defunción, no queda acreditado que no se practicara en su día y, en suma, de las pruebas presentadas lo único que puede estimarse justificado, habida cuenta de que en la actualidad la finada tendría 132 años, es la fama de muerte que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 278, I del Reglamento del Registro Civil, no es suficiente para que la inscripción de fallecimiento pretendida pueda ser autorizada por expediente gubernativo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

VII. RECTIFICACION, CANCELACION Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES

VII.1.- Rectificación de errores

VII.1.1.- Rectificación de errores art 93 y 94 LRC

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (1ª)

VII.1.1.- Rectificación de error en inscripción de nacimiento

No prospera el expediente para rectificar el segundo apellido de la inscrita en una inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 23 de enero de 2009 en el Registro Civil Central, Dª V. Furai solicitaba la rectificación de su segundo apellido en la inscripción de nacimiento practicada como consecuencia de su adquisición de la nacionalidad española en el sentido de hacer constar que el correcto es Furdui y no el que figura consignado. Consta en el expediente la siguiente documentación: impreso de declaración de datos para la inscripción, acta de juramento o promesa para adquirir la nacionalidad española suscrita por la interesada el 16 de julio de 2008, oficio de comunicación de la concesión de la nacionalidad española por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado y certificados rumanos de nacimiento de la solicitante (original y traducido al español) y de su madre (original manuscrito y sin traducir).

2.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil Central dictó auto el 10 de febrero de 2009 denegando la rectificación por no resultar acreditado el error, en tanto que el apellido consignado en el asiento es el mismo que figura en la inscripción de nacimiento de la madre aportada al expediente, y por existir oposición del ministerio fiscal.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso reiterando su pretensión y aportando traducción legalizada en letra de imprenta del certificado de nacimiento de su madre donde consta que el apellido de soltera de esta es Furdui.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que confirmó la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.

II.- Pretende la promotora la rectificación de su segundo apellido en la inscripción de nacimiento practicada en España como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española alegando que, según consta en la inscripción de nacimiento de su madre, el apellido de soltera de esta es Furdui y no Furauí, como erróneamente se consignó. La encargada dictó auto denegando la rectificación por no considerar acreditado el error invocado y porque existe oposición del ministerio fiscal.

III.- En materia de errores registrales la regla general es la de que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC) y en todo caso, para que pueda rectificarse por expediente un error del registro, es necesario que quede acreditada su existencia. Por otra parte, el artículo 94.1º LRC admite la rectificación, con dictamen favorable del ministerio fiscal, de los errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se practicó la inscripción. No obstante, sin necesidad de entrar en la valoración de este extremo, la premisa para poder efectuar tal rectificación mediante expediente gubernativo, como se ha dicho, es la existencia de informe favorable del ministerio fiscal y en este caso el dictamen emitido es desfavorable.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (108ª)

VII.1.1.-Rectificación de apellido en inscripción de matrimonio

No acreditado el error invocado, no prospera el expediente de rectificación en inscripción de matrimonio del segundo apellido del contrayente.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil Central en fecha 5 de noviembre de 2009 Don A. G. B., de nacionalidad española adquirida por residencia el 22 de septiembre de 2006, expone que en la inscripción de su matrimonio, practicada en el Registro Civil Central el 9 de octubre de 2009, se incurrió en el error de consignar como segundo apellido del contrayente el arriba indicado en lugar de Bo., que es lo correcto, y solicita que se incoe expediente de rectificación de esa mención, acompañando la inscripción de matrimonio que aduce errónea.

2.- El Ministerio Fiscal, a la vista de la certificación de nacimiento que obra en los antecedentes, se opuso a lo interesado y el 12 de mayo de 2010 la Juez Encargada, razonando que los apellidos del contrayente no son los que expresa el certificado marroquí de matrimonio sino los que, ya español, constan en su inscripción de nacimiento, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación interesada.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la rectificación se solicita tanto en la

partida de nacimiento como en la inscripción de matrimonio y que hay error en los dos apellidos, debiendo ser el primero G-Bo. y el segundo B.-H. y aportando, como prueba documental, copia simple de certificado literal de nacimiento marroquí expedido en septiembre de 2002.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, tras interesar que se una al expediente el certificado de nacimiento del Registro Civil español, impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, y la Juez Encargada informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 69, 92, 93 y 94 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 3-2ª de octubre de 1996, 23-1ª de diciembre de 1998, 13-1ª de septiembre de 1999, 19-1ª de noviembre de 2001, 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 30-5ª de diciembre de 2005, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Pretende el solicitante que sea rectificado el segundo apellido, B., que consta en su inscripción de matrimonio, practicada en octubre de 2009 una vez adquirida la nacionalidad española, exponiendo que se incurrió en error y que el correcto es Bo. La Juez Encargada, razonando que los apellidos del contrayente no son los que expresa el certificado marroquí de matrimonio sino los que, ya español, constan en su inscripción de nacimiento, dispuso que no ha lugar a la rectificación interesada mediante auto de 12 mayo de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el Registro del error denunciado.

IV.- Los apellidos de una persona son en su inscripción de matrimonio menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral de modo que, si se demuestra que han sido erróneamente consignados, cabe su rectificación por expediente gubernativo, con apoyo en el artículo 93-1º de la Ley. En este caso no ha sido probada la existencia del error denunciado ya que consta que la inscripción del matrimonio, celebrado en Marruecos en agosto de 1995, se practicó en virtud de transcripción del certificado del Registro extranjero salvo en lo que respecta a los apellidos del contrayente, que ya no son los que ese documento expresa sino los inscritos en su inscripción de nacimiento, practicada el 28 de mayo de 2008, cuya fuerza legitimadora y probatoria impone que las menciones de identidad en ella consignadas trasciendan a la de matrimonio. A mayor abundamiento, el interesado aduce en el recurso que la rectificación se solicita no solo en la inscripción de matrimonio sino también en la de nacimiento y que hay error en los dos apellidos, debiendo ser el primero G-Bo., que en el escrito inicial declaraba primero y segundo, y el segundo B.-H. planteando una serie de cuestiones nuevas cuyo examen no procede, toda vez que en el recurso solo pueden ser dilucidadas las directas e inmediatamente relacionadas con la decisión recurrida (cfr. art. 358, II RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (142ª)

VII.1.1.-Rectificación de errores en inscripción de nacimiento

En principio hay que acudir a la vía judicial para rectificar el estado civil de los padres en la inscripción de nacimiento del hijo.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gandía (Valencia).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Gandía en fecha 7 de mayo de 2010 el Sr. D. y la Sra. S. de nacionalidad búlgara, mayores de edad y domiciliados en O. (V), exponen que en la inscripción de nacimiento de su hijo D. nacido en O. el... de... de 2002, consta por error que los padres son casados y datos del matrimonio cuando lo correcto es que son solteros y que el matrimonio entre ellos es inexistente. Para acreditar lo expuesto acompañan certificación literal de la inscripción de nacimiento que contiene los errores aducidos y pasaporte búlgaro del menor, pasaporte búlgaro, certificado de registro en España como ciudadano de la Unión Europea y certificado búlgaro de estado civil de ambos progenitores y certificado de empadronamiento en O.

2.- Ratificados los promotores, el Juez Encargado dispuso librar exhorto al Registro Civil de Oliva, a fin de que se remita testimonio del legajo correspondiente al nacimiento del menor y, recibido que fue, se tuvo por promovido expediente gubernativo para la rectificación de errores.

3.- El Ministerio Fiscal, examinados los documentos aportados, se opuso a la solicitud y el 27 de septiembre de 2010 la Juez Encargada dictó auto disponiendo que, constando que los promotores manifestaron en el cuestionario para la declaración de nacimiento que su estado civil era el de casados, con indicación de la fecha y el lugar de celebración del matrimonio, no existe error alguno cuya rectificación proceda.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los solicitantes, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los datos consignados en el cuestionario para la declaración de nacimiento lo fueron por error, ya que su falta de conocimiento del idioma español en aquellas fechas les llevó a entender que el apartado del impreso se refería a la relación de convivencia que venían manteniendo, que su hijo no es matrimonial sino de madre soltera, sin el correspondiente reconocimiento paterno, que han sido conscientes de ello al tratar de declarar la filiación ante las autoridades de su país y que en los certificados de estado civil aportados consta que ambos son solteros.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, considerando que de lo detallado de la declaración no puede desprenderse el desconocimiento del idioma aducido, que habría afectado únicamente a parte de lo expuesto, se opuso a la estimación del recurso y la Juez Encargada, ratificándose plenamente en los argumentos contenidos en los fundamentos jurídicos de la resolución impugnada, informó que considera que procede confirmarla y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 16-2ª de febrero de 2002; 21 de

marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006, 24-2ª de abril y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009, 11-1ª de noviembre de 2010, 13-2ª de enero de 2011 y 25-17ª de enero, 10-11ª de febrero, 5-21ª de septiembre y 2-1ª de noviembre de 2012.

II.- Pretenden los promotores la rectificación en la inscripción de nacimiento de su hijo de los datos relativos al estado civil de los padres y, consiguientemente, al matrimonio entre ellos celebrado y a la filiación matrimonial del nacido. La Juez Encargada, visto que consta en las actuaciones que los promotores manifestaron en el cuestionario para la declaración de nacimiento su estado civil de casados, con indicación de la fecha y el lugar de celebración del matrimonio y que, por tanto, no existen los errores aducidos, dispuso que no procede la rectificación interesada mediante auto de 27 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La regla general en materia de rectificación de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que es posible obtenerla por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre, claro es, que quede acreditada la existencia en el Registro de los errores cuya rectificación se pretende. La cuestión aquí planteada se refiere a la prueba de un hecho negativo (cfr. artículo 96.1º LRC), que no existe el matrimonio entre los padres que consta en la inscripción de nacimiento del hijo común, practicada a partir del cuestionario para la declaración de nacimiento cumplimentada en su momento por el padre, que consignó en los apartados correspondientes al estado del padre y de la madre que uno y otro son casados y que existe entre ellos matrimonio celebrado el 11 de junio de 1999 en K. (Bulgaria). A esta constancia los promotores oponen sendos certificados de estado civil, expedidos no por el Registro Civil búlgaro sino por la mencionada municipalidad, que no permiten tener por acreditado, sin ningún género de dudas, su estado civil de solteros, habida cuenta, además, de que la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. art. 316), de aplicación supletoria en los expedientes registrales (cfr. art. 16 RRC), dispone que se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido, si intervino personalmente en ellos y no los contradice el resultado de las demás pruebas.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gandía (Valencia).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (143ª)

VII.1.1.-Rectificación de errores en inscripción de nacimiento

No acreditados los errores invocados, no prospera el expediente de rectificación del segundo apellido del inscrito y único de su madre y del nombre del padre de esta en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Puertollano (Ciudad Real) en fecha 14 de abril de 2008 Don T. R. Cha., nacido el 10 de noviembre de 1975 en Marruecos y domiciliado en P. expone que en su inscripción de nacimiento se aprecian errores en su segundo apellido y único de su madre, que es Che., y en el nombre de su abuelo materno, que aparece como M. cuando debería figurar como H. y promueve expediente gubernativo a fin de que se rectifiquen dichos datos. Acompaña copia de DNI, inscripción de nacimiento practicada el 22 de diciembre de 2004 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia y sentencia marroquí declaratoria de nacimiento en el año 1963 de H. Che., hija de H. Ratificada la solicitud por el promotor, el Ministerio Fiscal no se opuso a lo interesado y la Juez Encargada del Registro Civil de Puertollano informó que se han probado cumplidamente los hechos en que se apoya la solicitud y dispuso la remisión del expediente al Central, en el que tuvo entrada el 26 de junio de 2008.

2.- El 23 de febrero de 2009 el Registro Civil Central acordó requerir al promotor a fin de que aporte certificación literal de nacimiento de la madre en el que conste el contenido de la sentencia declaratoria en la que fundamenta su solicitud y este presentó traducción, sin el preceptivo original, de ejemplar más reciente de la misma sentencia en el que se ha añadido que la inscrita falleció el 25 de marzo de 2009, un documento relativo a la madre, sin la correspondiente traducción, y partida de nacimiento propia acompañada de traducción.

3.- El Ministerio Fiscal, a la vista de los antecedentes y de que no se ha aportado la documentación requerida, se opuso a lo interesado y el 11 de enero de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil Central, apreciando que los errores no resultan de la confrontación con los documentos en cuya virtud se ha practicado la inscripción, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación instada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ha aportado al expediente documentos públicos relevantes que revelan con claridad y exactitud los errores que pretende rectificar y aportando como prueba copia simple de traducción de acta de subsanación levantada el 13 de abril de 2009 en la sección de asuntos notariales del juzgado de primera instancia de F. (Marruecos), ante la que comparece el promotor a fin de declarar que en el acta de su matrimonio, celebrado el 28 de mayo de 2003, hay un error en el nombre de su abuelo materno que es H. en vez de M.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron a la Encargada dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Pretende el solicitante que en su inscripción de nacimiento, practicada en diciembre de 2004 tras adquirir la nacionalidad española por residencia, se consigne como segundo apellido propio y único de su madre Che. y como nombre de su abuelo materno H. alegando que se padeció error al inscribir los que constan, Cha. y M. El Juez Encargado del Registro Civil Central, visto que los errores no resultan de la confrontación con los documentos en

cuya virtud se practicó la inscripción, dispuso que no ha lugar a rectificarlos mediante auto de 11 de enero de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por expediente gubernativo (cfr. art. 93 y 94 LRC), siempre, claro es, que quede acreditada la existencia de los errores denunciados.

IV.- El nombre y los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) de modo que, si se demuestra que contienen error, cabe rectificarlos por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso no han quedado probados los errores aducidos puesto que el apellido materno, Cha., y el nombre del abuelo materno, M. consignados en la inscripción de nacimiento son exactamente los que figuran en los documentos que sirvieron de título para la práctica del asiento y los aportados al expediente de rectificación, obtenidos en fecha posterior, no desvirtúan lo que consta en los iniciales ya que no acreditan que estos contuviera errores que después han sido rectificadas por autoridad competente del Registro extranjero. Además una y otra documentación se contradicen no solo en los datos que el promotor pretende que se rectifiquen, de modo que no es posible establecer la identidad de persona entre la madre del inscrito, H. Cha., hija de M. nacida en 1957, casada el 13 de mayo de 1972 y fallecida en la fecha, 30 de abril de 2004, en que el promotor firma la declaración de datos para la inscripción de su nacimiento y H. Che., hija de H. nacida en 1963 y que, según la partida de nacimiento marroquí ahora aportada, habría sido madre del promotor en 1975 y habría fallecido el 25 de marzo de 2009. Así pues, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente, no cabe considerar acreditados los errores alegados en el segundo apellido del inscrito y único de su madre y en el nombre de su abuelo materno y queda impedida su rectificación en vía gubernativa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (144ª)

VII.1.1.-Rectificación de error en inscripción de nacimiento

La rectificación en una inscripción de nacimiento de datos de los que hace fe requiere, en principio, acudir a la vía judicial.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Melilla en fecha 8 de mayo de 2009 Doña H. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita que se modifique el año de su nacimiento en la correspondiente inscripción, exponiendo que consta que nació el 19 de marzo de 1958 cuando en realidad lo hizo en 1970, que ello se debió a que, por error

material en el Libro de Familia de su padre y por descuido, ese es el año que hasta la fecha consta en todos sus documentos oficiales, que actualmente se está tramitando la corrección del mencionado documento marroquí y que, una vez rectificado y traducido, se aportará al expediente si fuera necesario. Acompaña copia de DNI, inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil Central el 17 de septiembre de 1987, una vez obtenida la nacionalidad española por residencia, volante de empadronamiento/convivencia en M. y acta testifical levantada el 11 de junio de 2007 en la sección notarial del tribunal de primera instancia de N. (Marruecos) para constancia de que el año de su nacimiento es 1970 y no 1958, como por error material expresa el Libro de Familia de su padre.

2.- Ratificada la solicitud, el Ministerio Fiscal interesó, antes de emitir informe, que por el médico forense se examine a la promotora tomando en consideración que, según su pretensión, su madre tendría 46 años al nacer ella con el resultado de que, realizada exploración física y observada prueba radiológica, la informada tiene una edad aproximada de 40 años. Pasadas nuevamente las actuaciones al Ministerio Fiscal, este, no obstante el informe médico, se opuso a la rectificación interesada ya que no hay declaración de testigos y en toda la documentación aportada consta el año 1958 y la Juez Encargada del Registro Civil de Melilla dispuso la remisión del expediente al Central, en el que tuvo entrada el 18 de febrero de 2010.

3.- El Ministerio Fiscal, a la vista de los antecedentes, se opuso a lo interesado y el 9 de septiembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil Central dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación del error denunciado, toda vez que no se ha presentado certificación alguna contradictoria con la que sirvió de base para practicar la inscripción.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que considera que el informe del médico forense y el acta testifical realizada en el Reino de Marruecos pueden llevar a determinar que la fecha de nacimiento es la que declara.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron al Encargado dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006, 24-2ª de abril y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009, 15-5ª de julio y 6-16ª de septiembre de 2010, 18-3ª de noviembre y 1-3ª de diciembre de 2011 y 19-56ª de diciembre de 2012.

II.- Pretende la promotora la rectificación en la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, practicada en septiembre de 1987 tras adquirir la nacionalidad española por residencia, de la fecha de nacimiento exponiendo que la correcta es el 19 de marzo de 1970 y no del año 1958, como erróneamente se ha consignado. El Juez Encargado del Registro Civil Central, visto que no se ha presentado certificación alguna contradictoria con la que sirvió de base para la práctica de la inscripción, dispuso que no ha lugar a la rectificación del error denunciado mediante auto de 9 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La fecha de nacimiento de una persona no es en su inscripción de nacimiento una simple mención de identidad (cfr. art. 12 del Reglamento del Registro Civil) susceptible de rectificación, si se demuestra errónea, por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1º de la Ley de Registro Civil, sino un dato esencial de la inscripción, del que esta hace fe (cfr. art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria, conforme al criterio general establecido en el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. En este caso, aunque el informe forense resulta compatible con el año de nacimiento que la interesada alega correcto, lo cierto es que la inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central se practicó a partir de certificación del Registro local cuyo examen pone de manifiesto, de una parte, que en ella consta, primero en número y después en letra, la fecha -19 de marzo de 1958- que se consignó en la inscripción española y, de otra, que el nacimiento fue inscrito en 1964, seis años antes de que, según aduce la promotora, acaeciera el hecho. A estas evidencias opone la solicitante un acta testifical, levantada el 11 de junio de 2007 en la sección notarial del tribunal de primera instancia de Nador (Marruecos), en la que ni siquiera constan identificadas las personas que declaran saber por razón de trato y vecindad que el año de nacimiento es 1970 y no el que por error material consta en el Libro de Familia de su padre. Debe tenerse en cuenta, además, que la rectificación mediante expediente gubernativo de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se practicó la inscripción” (cfr. art. 94.1 LRC) requiere dictamen favorable del Ministerio Fiscal y, en este caso, los emitidos primero en el Registro Civil del domicilio y después en el Central, uno antes de la resolución y otro tras la presentación del recurso, son desfavorables.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (71ª)

VII.1.1.-Rectificación de error en inscripción de matrimonio.

Establecida indudablemente la identidad de la contrayente por las demás circunstancias de la inscripción, prospera el expediente de rectificación de la fecha de nacimiento en inscripción de matrimonio.

En las actuaciones sobre rectificación de error en inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en fecha 1 de julio de 2009 Don H. y la Sra. C. mayores de edad y domiciliados en dicha población, exponen que han advertido que en la inscripción de su matrimonio, practicada en el Registro Civil Central el 2 de marzo de 2009, consta erróneamente que la contrayente nació el 12 de junio de 1974 en vez del día 22, que es lo correcto, y promueven expediente a fin de que se proceda a la rectificación de ese dato. Acompañan copia de DNI del promotor y de NIE de la promotora, copia literal de acta de nacimiento de esta con traducción en la que consta

la fecha que se aduce correcta y volante colectivo de residencia en H. El Ministerio Fiscal informó que entiende que debe accederse a lo solicitado y la Juez Encargada del Registro Civil de Hospitalet de Llobregat dispuso la remisión de lo actuado al Central, en el que tuvo entrada el 3 de febrero de 2010.

2.- Unidos los antecedentes que sirvieron de base para la práctica de la inscripción, el Ministerio Fiscal informó que, no constando rectificación alguna en la certificación de nacimiento aportada, se opone a lo interesado y el 14 de abril de 2010 la Juez Encargada del Registro Civil Central, razonando que se consignó la fecha de nacimiento que reflejaba la correspondiente certificación de nacimiento del Registro extranjero y que contra esta prueba no puede prevalecer la ahora presentada, en la que aparece otra fecha sin constancia de que la primera contuviera error ni de que la inscripción haya sido objeto de ulterior rectificación, dictó auto disponiendo que no ha lugar a rectificar el error denunciado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los solicitantes, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el error no está en la inscripción de nacimiento sino en la traducción de dicho documento aportada al expediente matrimonial.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron a la Encargada dictar la resolución impugnada, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 41, 69, 92, 93 y 94 de la Ley del Registro Civil; 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 13-2ª de mayo de 1998, 4-1ª de abril de 2001, 27-2ª de abril de 2002, 19-3ª de septiembre de 2003, 1-8ª de julio de 2008, 20-1ª de abril de 2009 y 18-1ª de octubre de 2012.

II.- Solicitan los promotores la rectificación en su inscripción de matrimonio, practicada en marzo de 2009 tras adquirir el contrayente la nacionalidad española por residencia, de la fecha de nacimiento de la contrayente, exponiendo que nació el 22 de junio de 1974 y no el día 12, como por error consta. La Juez Encargada del Registro Civil Central, razonando que se consignó la fecha que reflejaba la correspondiente certificación de nacimiento del Registro extranjero y que contra esta prueba no puede prevalecer la ahora aportada, en la que aparece otra fecha sin constancia de que la primera contuviera error ni de que la inscripción haya sido objeto de ulterior rectificación, dispuso que no ha lugar a rectificar el error denunciado mediante auto de 14 de abril de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia del error denunciado.

IV.- La fecha de nacimiento de una persona es en su inscripción de matrimonio una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubierta por la fe pública registral de modo que, si se demuestra que ha sido erróneamente consignada, cabe su rectificación por expediente gubernativo, con apoyo en el artículo 93-1º de la Ley, si la identidad queda indudablemente establecida por las demás circunstancias de la inscripción. En este caso, de la confrontación de las inscripciones de nacimiento y de matrimonio de la interesada en el Registro marroquí

resulta evidente que se trata de la misma persona y, por tanto, que el error denunciado y comprobado no afecta a la identidad; en toda la documentación, española y marroquí, aportada ahora al expediente de rectificación de errores y antes al matrimonial, salvo en la traducción de la inscripción de nacimiento, consta que este acaeció el 22 de junio de 1974; la propia acta de matrimonio del Registro extranjero, que expresa las cifras en caracteres latinos, permite apreciar, sin necesidad de recurrir a la traducción, que esa es la fecha de nacimiento de la interesada, cuyas menciones de identidad, entre ellas que nació el 22 de junio de 1974, ya constan en el Registro español en la inscripciones de nacimiento de sus dos hijos, nacidos en España en 1996 y en 2002. Todo ello permite estimar la alegación de que las dos inscripciones del Registro local expresan la fecha correcta, pese a que haya un error material en la traducción del acta de nacimiento, y apreciar que concurren las circunstancias necesarias para la rectificación de este dato en la inscripción de matrimonio, no debiendo importar el informe desfavorable del Ministerio Fiscal, cuyo dictamen favorable se impone como requisito en los supuestos distintos regulados en el artículo 94 de la Ley.

Al respecto conviene recordar que la necesidad de acudir al juicio declarativo para rectificar la fecha de nacimiento viene siendo exigida por la doctrina de este Centro Directivo, conforme a los artículos 41 y 92 de la Ley, en los supuestos en que el error se denuncia en la propia inscripción de nacimiento y no, en cambio, cuando la equivocación aparece en las inscripciones de matrimonio, defunción u otras relativas al nacido.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

2º.- Disponer que se rectifique la inscripción de matrimonio debatida para hacer constar que la fecha de nacimiento de la contrayente es el 22 de junio de 1974.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (74ª)

VII.1.1.- Rectificación de inscripción de nacimiento.

La introducción de una nueva causa petendi en el recurso no planteada en la solicitud inicial requiere un pronunciamiento previo por parte del encargado del registro.

En el expediente sobre rectificación de inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los interesados contra auto de la encargada del Registro Civil de Puerto de la Cruz (Tenerife).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 30 de abril de 2010 en el Registro Civil de Puerto de la Cruz, Don O. y Doña C. mayores de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaban la ampliación de datos en la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad para hacer constar los correspondientes a su filiación materna, omitidos por el registro al practicar el asiento a pesar de haber sido declarados por los promotores en su momento. Adjuntaban a su solicitud la siguiente documentación: inscripción de nacimiento en S-C de T. el 2 de

mayo de 2008 de C. hija de O. y sin datos de filiación materna, aunque sí se mencionan los de matrimonio de los progenitores; inscripción de matrimonio de los promotores celebrado el 7 de octubre de 2006; inscripción de nacimiento de la solicitante con nota marginal de matrimonio y cuestionario de datos para la inscripción presentado en su día.

2.- Ratificados los interesados y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 29 de junio de 2010 ordenando completar mediante inscripción marginal los datos de filiación materna omitidos.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en cuanto a la forma de practicar la rectificación acordada, alegando que la omisión se debió a un error del registro del que los recurrentes no son responsables, por lo que solicitan la cancelación del asiento y su traslado a un nuevo folio donde conste la doble filiación de la inscrita en el cuerpo principal de la inscripción y no mediante una marginal.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Puerto de la Cruz remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 93 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 305 a 307 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 23 de diciembre de 2000, 30 de junio de 2001, 14-1ª de mayo de 2004, 10-2ª de julio de 2008 y 29-3ª de noviembre de 2011.

II.- Los promotores solicitaron la ampliación de datos en la inscripción de nacimiento de su hija para hacer constar los correspondientes a la filiación materna, omitidos por un error del registro cuando se practicó la inscripción. Una vez dictado auto ordenando la práctica de inscripción marginal con los datos solicitados, los interesados interpusieron recurso en disconformidad con la forma en que se había acordado la rectificación y solicitando que la ampliación se practicara no mediante una marginal sino en el cuerpo principal de una nueva inscripción previa cancelación del asiento anterior.

III.- En realidad, los promotores introducen en el recurso una nueva causa petendi que no figuraba en la solicitud inicial, pues esta solo contenía la pretensión, recogida y autorizada en el auto, de hacer constar los datos omitidos de filiación materna. De acuerdo con el contenido de los artículos 305 y 306 RRC, la inscripción de una resolución de rectificación ha de practicarse en el folio registral al que se refiere dicha resolución y determinará la expresión o concepto que se modifica con referencia a la inscripción rectificada. Por otra parte, el artículo 307 RRC prevé la posibilidad de que la propia resolución de rectificación ordene la cancelación del asiento original y su sustitución por otro nuevo. En este caso la resolución no contempla dicha posibilidad, sino que, al contrario, declara expresamente que la rectificación se practicará marginalmente en la inscripción principal. Por tanto, la resolución de la nueva cuestión introducida en el recurso requiere un pronunciamiento previo del encargado del registro sobre ese punto, debiendo limitarse la resolución por parte de este centro a la pretensión objeto de la solicitud inicial que, como se ha visto, ha sido atendida en todos sus términos por el auto emitido.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: que no procede admitir el recurso.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil del Puerto de la Cruz (Tenerife).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (46ª)

VII.1.1.- Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

Prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento del nombre del padre de la inscrita al quedar acreditado el error invocado.

En las actuaciones sobre rectificación del nombre del padre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto del encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado 30 de septiembre de 2010 en el Registro Civil de Madrid, Don Jhon-G. mayor de edad y con domicilio en M. solicitaba la rectificación de su nombre en la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad, donde, por error, se consignó Jhon. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento de H-E. nacida en M. el ... de ... de 2002, hija de Jhon-G. y de J-N. con marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción; DNI e inscripción de nacimiento de Jhon-G. con marginal de nacionalidad española por residencia practicada en 2009.

2.- Ratificados ambos progenitores y previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 27 de octubre de 2010 denegando la rectificación pretendida porque, si bien es cierto que el nombre reflejado en la inscripción de nacimiento de la menor no se corresponde con el que figura en la de su padre practicada en el Registro Civil Central, considera el encargado que esta última inscripción no se practicó correctamente, pues no debió ser admitido el nombre del inscrito en la grafía que se ha hecho constar, de modo que debe corregirse el error en la inscripción de nacimiento de la menor pero para hacer constar que el nombre de su progenitor es John y no el pretendido Jhon.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre pretendido es el que consta en la inscripción de nacimiento del padre practicada en España, el que ha utilizado durante toda su vida y el mismo que figura en toda su documentación española, por lo que un cambio obligatorio en estos momentos le ocasionaría muchos trastornos.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, en esta ocasión emitió informe interesando su desestimación. El encargado del Registro Civil de Madrid se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 8-2ª de octubre de 2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de noviembre de 2005; 3-4ª de mayo de 2006; 2-5ª de abril, 27-8ª de septiembre y 28-1ª de noviembre de 2007; 9-7ª de julio y 9-8ª de mayo de 2008 y 27-8ª de febrero de 2009.

II.- Solicita el interesado la rectificación de su nombre en la inscripción de nacimiento de su hija y el encargado, aun admitiendo la existencia de error, acordó la rectificación pero no en el sentido pretendido por el solicitante, pues considera que la grafía del nombre que figura en la inscripción de nacimiento de este es incorrecta y no debió ser admitida por el Registro Civil Central, donde se practicó la inscripción.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC. Concretamente, el artículo 93.3º prevé la rectificación del error cuya evidencia resulte de la confrontación con otra inscripción que haga fe del hecho correspondiente. En este caso resulta acreditada la existencia del error invocado en tanto que el nombre del padre que figura en su inscripción de nacimiento en España es el mismo que se pretende hacer constar en la de su hija, independientemente de la consideración que merezca al encargado la grafía de dicho nombre según fue admitida por el Registro Civil Central al practicar la inscripción. Ello podría ser, si así se considera conveniente, objeto de un nuevo expediente de rectificación de la inscripción del padre pero no debe afectar en este momento a la rectificación que aquí interesa en tanto que, como el propio encargado admite, es evidente la existencia del error invocado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y ordenar que se proceda a la rectificación del nombre del padre de la inscrita en su inscripción de nacimiento para hacer constar que lo que procede consignar es Jhon en lugar de Johon.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (47ª)

VII.1.1.- Rectificación de error en inscripción de nacimiento

Prospera parcialmente el expediente de rectificación del nombre del padre de la inscrita al quedar acreditado error en su consignación en la inscripción de nacimiento de la promotora.

En las actuaciones sobre rectificación del nombre del padre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Vitoria Doña N-B. solicitaba la rectificación del nombre de su padre en su inscripción de nacimiento para hacer constar que el correcto es R-Medardo y no Wedardo, como por error se consignó. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento de la promotora en el Registro Civil español con marginal de nacionalidad española por residencia practicada en 2006, certificación local de nacimiento y DNI.

2.- Ratificada la promotora, el expediente fue remitido al Registro Civil Central, competente para su resolución. El encargado del registro dictó auto el 1 de febrero de 2010 denegando la rectificación pretendida por no considerar acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la pretensión.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 8-2ª de octubre de 2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de noviembre de 2005; 3-4ª de mayo de 2006; 2-5ª de abril, 27-8ª de septiembre y 28-1ª de noviembre de 2007; 9-7ª de julio y 9-8ª de mayo de 2008 y 27-8ª de febrero de 2009.

II.- Solicita la interesada la rectificación del nombre de su padre en su inscripción de nacimiento alegando que el correcto es R-Medardo y no Wedardo, como se hizo constar. El encargado del registro denegó la pretensión por no considerar acreditado el error invocado.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC. Concretamente, el artículo 93.3º prevé la rectificación del error cuya evidencia resulte de la confrontación con otra inscripción que haga fe del hecho correspondiente. En este caso constan dos certificaciones de nacimiento ecuatorianas de la promotora, expedidas con un mes de diferencia, en una de las cuales figura claramente que la inscrita es hija de R-Medardo. Sin embargo, tal certificación no puede tenerse en cuenta porque el ejemplar incorporado al expediente es una simple copia sin compulsar y sin legalizar. Por lo que se refiere a la segunda certificación, original y convenientemente legalizada y que, presumiblemente, es la misma que se aportó para la tramitación del expediente de nacionalidad por residencia, resulta que el nombre del padre que en ella consta es uno solo, dándose además la circunstancia de que sus dos primeras letras quedaron superpuestas encima de una de una de las palabras preimpresas del modelo normalizado en el que se extiende la certificación, de modo que, en efecto, puede dar lugar a confusión acerca de si la primera letra es una W o una M. No obstante, una vez examinado el documento, parece razonable concluir que en realidad se trata de una M, tanto por la comparación con la tipografía de otras emes mayúsculas (todas ellas impresas en caracteres de imprenta) también presentes en la misma inscripción como por el resultado del nombre en cuestión según la atribución de una u otra letra, dado que Medardo sí es un nombre propio de varón mientras que Wedardo no lo parece y remitiría más bien, en su caso, a la existencia de un error gráfico cometido al practicar la inscripción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso y ordenar que se proceda a la rectificación del nombre del padre de la inscrita en su inscripción de nacimiento para hacer constar que el correcto es Medardo.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (49ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de matrimonio y de nacimiento de los hijos.

Prospera el expediente de rectificación del apellido paterno de la interesada al quedar acreditado error en su consignación en la inscripción de matrimonio de la promotora y en las de nacimiento de sus hijos.

En las actuaciones sobre rectificación de apellido en inscripciones de matrimonio y de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2010 ante el Registro Civil de Melilla Doña M^a-J. C. L. solicitaba la rectificación de su primer apellido en la inscripción de matrimonio y en las de nacimiento de sus hijos para hacer constar que el correcto es Cav. y no Cab., como por error se consignó. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de matrimonio de M. y M^a-J. Cab. L., inscripciones de nacimiento de Y y A. P. Cab., volantes de empadronamiento, DNI e inscripción de nacimiento de M^a-J. Cab. L.. (Según el cuerpo principal del asiento) con marginal de rectificación practicada en 2004 del apellido paterno de la inscrita por Cav.

2.- Ratificada la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 21 de abril de 2010 denegando la rectificación pretendida por no resultar acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso reiterando la pretensión y solicitando la revisión del expediente.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal y examinado la documentación aportada, interesó su estimación. El encargado del Registro Civil de Melilla remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 8-2^a de octubre de 2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de noviembre de 2005; 3-4^a de mayo de 2006; 2-5^a de abril, 27-8^a de septiembre y 28-1^a de noviembre de 2007; 9-7^a de julio y 9-8^a de mayo de 2008 y 27-8^a de febrero de 2009.

II.- Solicita la interesada la rectificación de su primer apellido en su inscripción de matrimonio y en las de nacimiento de dos de sus hijos alegando que el correcto, tal como figura en su inscripción de nacimiento, es Cav. y no Cab., como se hizo constar erróneamente en las inscripciones que ahora pretende rectificar.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC.

El nombre y apellidos son menciones de identidad, por lo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente en una inscripción, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley del Registro Civil. Concretamente, el artículo 93.1^o prevé la rectificación de las menciones erróneas de identidad siempre que esta quede indudablemente establecida por las demás circunstancias de la inscripción, lo que sucede en este caso toda vez que el apellido paterno de la recurrente ya consta rectificado en su inscripción de nacimiento por resolución de 1 de junio de 2004.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y ordenar que se proceda a la rectificación del primer apellido de la interesada en su inscripción de matrimonio y del apellido materno en las de nacimiento de sus hijos Y. y A. para hacer constar que el correcto es Cav.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (50ª)

VII.1.1.- Rectificación de error en inscripción de nacimiento

Prospera parcialmente el expediente de rectificación del nombre del abuelo materno de la inscrita al quedar acreditado error en su consignación en la inscripción de nacimiento.

En las actuaciones sobre rectificación del nombre del abuelo materno en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Vitoria, Doña N-B. solicitaba la rectificación del segundo apellido de su hija menor de edad, K-G. en la inscripción de nacimiento de esta para hacer constar que el correcto es Yanes y no Ortiz (segundo apellido paterno), como se ha hecho constar, así como la rectificación del nombre del abuelo materno, que es R-Medardo y no Wedardo, como por error se consignó. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento de K-G. F. Ortiz en el Registro Civil español con marginal de opción a la nacionalidad española en febrero de 2008, tarjeta de residencia en España de K-G. F. Yanes, DNI de la promotora e inscripciones de nacimiento de esta en el Registro Civil español y en el ecuatoriano.

2.- Ratificada la promotora, el expediente fue remitido al Registro Civil Central, competente para su resolución. El encargado del registro dictó auto el 18 de marzo de 2010 autorizando la rectificación relativa al segundo apellido de la menor y denegando la correspondiente al nombre del abuelo paterno por no considerar en este caso acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la pretensión respecto al nombre del abuelo paterno.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 8-2ª de octubre de 2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de noviembre de 2005; 3-4ª de mayo de 2006; 2-5ª de abril, 27-8ª de septiembre y 28-1ª de noviembre de 2007; 9-7ª de julio y 9-8ª de mayo de 2008 y 27-8ª de febrero de 2009.

II.- La promotora solicitó la rectificación del segundo apellido de su hija menor de edad en la inscripción de nacimiento de esta practicada en España, ya que se le habían atribuido los dos apellidos paternos omitiendo el materno, así como la rectificación del nombre del abuelo materno alegando que el correcto es R-Medardo y no Wedardo, como se hizo constar. El encargado del registro autorizó la rectificación relativa al segundo apellido de la inscrita pero denegó la del nombre del abuelo paterno por no considerar acreditado en este caso el error invocado.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC. El nombre es una mención de identidad susceptible

de rectificación, si fuera errónea, en virtud de lo que establece el artículo 93.1º RRC. En la inscripción de nacimiento de la menor en su país de origen, a diferencia de las que se practican en España, no figuran las menciones de identidad relativas a los abuelos, por lo que la prueba a tener en cuenta en este caso para verificar la existencia o no del error invocado es la inscripción de nacimiento de la madre y, según la que se practicó en España tras adquirir esta la nacionalidad española por residencia, resulta que el nombre del padre es el mismo que se ha hecho constar en la de la hija como abuelo materno. Sin embargo, se da la circunstancia de que la madre instó al mismo tiempo la rectificación de ese dato en ambas inscripciones, siendo denegada en los dos casos y recurridas las dos resoluciones de denegación. El recurso interpuesto sobre la rectificación de la inscripción de la madre ha sido estimado parcialmente admitiendo la existencia de error en la consignación del nombre de Wedardo, que, a juicio de este centro, debe ser rectificado por Medardo, si bien no ha quedado acreditado que el nombre completo del progenitor de la madre y abuelo de la menor interesada sea R-Medardo. En consecuencia, una vez reconocido el error en la inscripción de la madre, debe procederse también a la rectificación de ese dato en la inscripción de la hija.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso y ordenar que se proceda a la rectificación del nombre del abuelo materno de la inscrita en su inscripción de nacimiento para hacer constar que el correcto es Medardo.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (51ª)

VII.1.1-Rectificación de errores en inscripción de nacimiento

1º.- Por exigencia del principio de concordancia entre el Registro y la realidad deben rectificarse todos los errores acreditados, hayan sido puestos de manifiesto por los promotores o comprobados de oficio en el curso de las actuaciones, y no ha de importar el desistimiento del interesado al expediente de rectificación por él promovido.

2º.- Dado que el escrito ampliando la solicitud, íntimamente relacionado con el inicial, ha sido presentado antes de que se acuerde la incoación de expediente, procede retrotraer las actuaciones a fin de que, previos los trámites que procedan, se dicte auto resolviendo las cuestiones en él planteadas.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil Central en fecha 30 de septiembre de 2009 Don J-P. mayor de edad y domiciliado en M. expone que, revisando su acta de nacimiento, ha comprobado que están mal los datos relativos al lugar de su nacimiento, que es Grandris [Francia] y no Grandis, al nombre y fecha de nacimiento de su madre, que son Mercedes y el 19 de octubre de 1943 y no Mª-J. y 21 de diciembre de 1943, y al domicilio de sus padres, que es el que consta en el libro de familia, y solicita que sean rectificadas los errores enumerados. Acompaña duplicado para el Registro Civil Central de acta de nacimiento, acaecido el 26 de

mayo de 1965 e inscrito en el Registro Civil Consular de Lyon (Francia) el 26 de noviembre de 1965, de J-P. con marginal practicada en el Registro Civil Central el 25 de marzo de 1980 para hacer constar que por resolución dictada en expediente registral el primer apellido del inscrito es G-C. y no el que por error aparece; acta de nacimiento de su madre con marginal de cambio de nombre practicada el 2 de octubre de 1991 y copia de DNI de ambos progenitores y del libro de familia de estos.

2.- El 11 de diciembre de 2009 el promotor presenta un segundo escrito ampliando los errores observados al segundo apellido de ambos progenitores, que deben ser M-C. en vez de M. el del padre y R. en vez de V. el de la madre, y aportando copia de certificado plurilingüe de nacimiento del padre expedido el 4 de agosto de 2006 por el Registro Civil de Daimiel (Ciudad Real); en un tercer escrito recibido el 24 de febrero de 2010 solicita un adelantamiento, debido a que se propone contraer matrimonio y necesita partida de nacimiento correcta; el 31 de marzo de 2010 la Encargada acuerda librar exhorto al Registro Civil Consular de Lyon (Francia) a fin de que remita testimonio del expediente de inscripción de nacimiento del promotor y, recibida la anterior documentación en fecha 28 de julio de 2010, se incoa expediente gubernativo.

3.- El Ministerio Fiscal nada opone a lo interesado y el 24 de agosto de 2010 el Juez Encargado, considerando que los errores denunciados se evidencian de la confrontación con la inscripción de nacimiento de la madre del interesado y con los documentos en cuya virtud se practicó la inscripción de nacimiento de este, dictó auto acordando la rectificación en el sentido de que conste como nombre de la madre Mercedes, como fecha de nacimiento de esta el 19 de octubre de 1943 y como lugar de nacimiento del inscrito Grandris (R, Francia).

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y remitida certificación literal de nacimiento con marginal de rectificación de esos tres datos al interesado, este dirigió escrito al Registro Civil Central exponiendo que de lo solicitado en el escrito inicial queda pendiente de rectificación lo relativo al segundo apellido de su padre y de su madre, solicita que, si se tratara de una omisión, sea subsanada y por la Juez Encargada se tuvo por interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, considerando que el auto es congruente con la petición del promotor que consta en su solicitud de 30 de septiembre de 2009, interesó, sin perjuicio de la promoción de un nuevo expediente de rectificación de errores, la desestimación del recurso; el 14 de diciembre de 2010 el promotor presentó en el Registro Civil Central certificación literal de nacimiento de su padre, reiterando que no se ha corregido el segundo apellido de sus dos progenitores y exponiendo como hecho nuevo que, si bien su población natal, Grandris, ya consta correctamente, en el apartado correspondiente al Registro local en el que se halla inscrito el acto continúa figurando Grandis; y el 27 de diciembre de 2010 el Juez Encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

6.- En escrito recibido en este Centro Directivo en fecha 19 de abril de 2012 el interesado expone que desiste de la solicitud de rectificación de apellidos formulada en el expediente pendiente de resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 24, 26, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 94, 170, 342, 347 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de septiembre de 1995, 12 de abril y 18-2ª de septiembre de 1997, 8 de mayo y 19-4ª de octubre de 1999, 11-3ª de abril de 2000 y 12-2ª de febrero, 15-2ª de abril y 17-3ª de septiembre de 2002.

II.- El interesado promueve expediente a fin de que en su inscripción de nacimiento se rectifiquen errores relativos al lugar de su nacimiento y al nombre y fecha de nacimiento de su madre y en un segundo escrito, presentado antes de que se acuerde la incoación de expediente, amplía el inicial, en el sentido de solicitar también la rectificación del segundo apellido de sus dos progenitores. El Juez Encargado, considerando que los errores denunciados se evidencian de la confrontación con la inscripción de nacimiento de la madre del interesado y con los documentos en cuya virtud se practicó la inscripción de nacimiento de este, acordó rectificarla, en el sentido de que conste como nombre de la madre Mercedes, como fecha de nacimiento de esta el 19 de octubre de 1943 y como lugar de nacimiento del inscrito Grandris (R, Francia), mediante auto de 24 de agosto de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el interesado no contra lo resuelto, que ya consta marginalmente inscrito, sino por los errores denunciados sobre los que no ha habido pronunciamiento registral. Posteriormente, en fecha 19 de abril de 2012, el interesado presenta en este Centro Directivo escrito de desistimiento de la solicitud de rectificación de apellidos.

III.- Por exigencia del principio de concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. arts. 24 y 26 LRC. y 94 RRC) en un expediente se deben rectificar todos los errores acreditados, hayan sido puestos de manifiesto por los promotores o comprobados de oficio en el curso de las actuaciones, y persistiendo este interés superior, no ha de importar el desistimiento del interesado al expediente de rectificación por él promovido y este debe proseguir hasta su resolución definitiva.

IV.- En este caso ha sucedido que, formulada la petición de rectificación de errores en inscripción de nacimiento en dos fases, el escrito inicial y otro de ampliación presentado antes de que se acuerde la incoación de expediente, la resolución dictada se circunscribe al primero, cuyo sentido el promotor no discute, y el recurso versa sobre los hechos expuestos en el segundo escrito, que no han sido examinados. Habida cuenta de que el presupuesto de todo recurso es un pronunciamiento previo del Encargado que en esta ocasión no se ha producido, han de retrotraerse las actuaciones a fin de que, previos los trámites pertinentes, se dicte un segundo auto motivado resolviendo en el sentido que proceda sobre las cuestiones no abordadas en el primero y así poner fin al expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que, previos los trámites que se estimen pertinentes, se dicte la resolución motivada que proceda respecto a la rectificación de los errores en inscripción de nacimiento denunciados por el promotor en su escrito de fecha 11 de diciembre de 2009.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (52ª)

VII.1.1.-Rectificación de error en inscripción de nacimiento

La rectificación en una inscripción de nacimiento de datos de los que hace fe requiere, en principio, acudir a la vía judicial.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de El Vendrell (Tarragona) en fecha 4 de junio de 2009 Don M. menor de edad y domiciliado en C. (T), expone que acaba de recibir su certificado de nacimiento y ha observado que existe un error en el año, ya que nació en 1990 y no en 1991, como por error consta, y solicita que se rectifique el dato lo antes posible, para poder hacerse el DNI y el pasaporte. Acompaña inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil Central el 22 de mayo de 2009, tras obtener el 31 de julio de 2008 la nacionalidad española por opción, y fotocopia de traducción de libro de familia marroquí de su padre. El Juez Encargado del Registro Civil de El Vendrell levantó acta de la comparecencia y dispuso la remisión de lo actuado al Central, en el que tuvo entrada el 24 de noviembre de 2009.

2.- Unida al expediente copia de la partida de nacimiento marroquí que sirvió de base para la práctica de la inscripción, el ministerio fiscal informó que no se opone a que se acceda a lo solicitado y el 25 de agosto de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil Central, visto que el año de nacimiento consignado es el que reflejan la certificación de nacimiento del Registro civil marroquí y el acta de opción a la nacionalidad española levantada en el Registro Civil de El Vendrell y firmada por el interesado asistido de sus padres, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación del error denunciado.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se trata claramente de un error de transcripción del traductor y aportando, como prueba documental, certificaciones de nacimiento marroquíes recientes, literal y en extracto, que expresan que el año de nacimiento es el que aduce correcto.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, y la Juez Encargada del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron al Encargado dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006, 24-2ª de abril y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009, 15-5ª de julio y 6-16ª de septiembre de 2010, 18-3ª de noviembre y 1-3ª de diciembre de 2011 y 19-56ª de diciembre de 2012.

II.- Pretende el promotor la rectificación en la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, practicada en mayo de 2009 tras adquirir la nacionalidad española por opción, del año en que acaeció el hecho, exponiendo que lo correcto es 1990 y no 1991, como erróneamente se ha consignado. El Juez Encargado del Registro Civil Central, visto que el año de nacimiento inscrito es el que reflejan la certificación de nacimiento del Registro civil marroquí y el acta de opción por la nacionalidad española firmada por el interesado asistido de sus padres, dispuso que no ha lugar a la rectificación solicitada mediante auto de 25 de agosto de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La fecha de nacimiento de una persona no es en su inscripción de nacimiento una simple mención de identidad (cfr. art. 12 del Reglamento del Registro Civil) susceptible de rectificación, si se demuestra errónea, por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 93.1º de la Ley de Registro Civil, sino un dato esencial de la inscripción, del que esta hace fe (cfr. art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria, conforme al criterio general establecido en el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. En este caso, aunque de la documental aportada pudieran resultar indicios de que el año correcto de nacimiento es el que el interesado alega, lo cierto es que la inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central se practicó a partir de certificación del Registro local, en la que consta la fecha -20 de diciembre de 1991- que se consignó; con el escrito de recurso se presentan, en prueba del error aducido, una nueva copia literal del acta de nacimiento marroquí y una certificación en extracto en las que consta que el inscrito nació en 1990; y de ello resultan inscripciones referidas a la misma persona contradictorias en ese dato -también en el año de nacimiento del padre-, contradicción que hubiera tenido que salvarse con una certificación del registro local en la que conste expresamente la rectificación del error invocado a través del procedimiento legal correspondiente (art. 295 RRC). Debe tenerse en cuenta, además, que la rectificación mediante expediente gubernativo de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción” (cfr. art. 94.1 LRC) requiere dictamen favorable del ministerio fiscal y, en este caso, el emitido tras la presentación del recurso es desfavorable.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (53ª)

VII.1.1.-Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

La rectificación consistente en hacer constar el primer apellido de la madre del inscrito, omitido al practicar la inscripción, no alcanza al nacido ya que ni resulta error en su apellido de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción (cfr. art. 94.1º LRC) ni queda acreditado en el expediente que, conforme a su ley personal, hayan de anteponerse al apellido paterno del nacido los dos maternos.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por uno de los representantes legales de un menor contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

1.- En escrito fechado el 12 de marzo de 2010 y dirigido al Registro Civil Único de Madrid la Sra. P-C. D. da S. de nacionalidad portuguesa, mayor de edad y domiciliada en M. pone en conocimiento del órgano registral la existencia de error en la inscripción de nacimiento de su hijo P-M-J. da S. S. nacido en M. el ... de ... de 2009, consistente en la omisión del primer apellido de la madre del inscrito, que es D. En el mismo día, 12 de marzo de 2010, la promotora, que se identifica con pasaporte portugués, ratificó el escrito presentado y por el Juez Encargado se acordó la incoación de expediente gubernativo de rectificación de errores y que se una al mismo testimonio del expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, a fin de constatar el error alegado.

2.- El ministerio fiscal, examinado el expediente, se mostró conforme con la rectificación interesada al amparo de lo establecido en el artículo 94.1º de la Ley del Registro Civil y el 9 de abril de 2010 la Juez Encargada, estimando comprobada la realidad del error denunciado por confrontación de la inscripción con los documentos en cuya sola virtud se practicó, dictó auto acordando la rectificación de las menciones relativas al único apellido del inscrito y de su madre, que para ambos es D. da S. S. y no lo que indebidamente consta, resolución registral que fue marginalmente inscrita en la de nacimiento del menor en fecha 20 de abril de 2010.

3.- El 19 de noviembre de 2010 comparece en el Registro Civil el padre del nacido, S- A. J. S. que acredita su personalidad mediante pasaporte británico, a fin de manifestar su disconformidad con el auto dictado, ya que el apellido del inscrito es el inicialmente consignado y no el que consta en la marginal practicada, y se tuvo por interpuesto recurso de apelación.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, razonando que, si se hace constar en la inscripción el primer apellido de la madre, lógicamente el hijo también ha de llevar dicho apellido, impugnó el recurso e informó que procede la confirmación del auto impugnado por sus propios fundamentos y el Juez Encargado informó que la rectificación instada por la madre se apoyó en una prueba documental, mientras que la petición del recurrente no se justifica en dato alguno, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 del Código civil (CC.); 2, 15, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 152, 219, 296 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Solicita la promotora la rectificación de la inscripción de nacimiento de su hijo menor de edad en el sentido de que conste que el primer apellido de la madre del nacido, cuya consignación se ha omitido, es D. La Juez Encargada, estimando comprobada la realidad del error por la confrontación de la inscripción con la correspondiente documentación, acordó la rectificación solicitada y también la del apellido único del inscrito, que es D. da S. S. y no el que consta, mediante auto de 9 de abril de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el padre del menor respecto a lo sobre él acordado y asentado marginalmente en la inscripción de nacimiento antes de que la resolución adquiriera firmeza.

III.- El nombre y los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 y 258 RRC) no cubiertas por la fe pública registral de modo que cabe su rectificación por expediente gubernativo, si la identidad queda indudablemente establecida por las demás circunstancias de la inscripción (cfr. art. 93.1º LRC) o la evidencia de los errores resulta de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción (cfr. art. 94.1º LRC).

IV.- En este caso, comprobada la existencia del error denunciado, la omisión del primer apellido de la madre del inscrito, procedía acordar la rectificación pero de la confrontación de la inscripción con los documentos en cuya sola virtud se practicó no resulta la existencia de error en las menciones de identidad del menor, no consta que la rectificación del apellido de la madre afecte automáticamente al nacido, habida cuenta de que los apellidos de un extranjero se rigen por su Ley personal, hasta donde esta Dirección General ha podido saber, las ciudadanas portuguesas transmiten a sus hijos como primer apellido el segundo propio, en el expediente no queda acreditado que el menor haya de ostentar los dos apellidos maternos antepuestos al paterno y, en definitiva, han resultado modificados por los órganos registrales españoles, que carecen de competencia para ello, los apellidos de un extranjero sin petición en tal sentido de la madre y sin intervención del padre. Por todo ello procede la revocación,

en lo que afecta al menor, del auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Madrid y la rectificación de la inscripción marginal practicada, en el sentido de que conste que la rectificación acordada afecta única y exclusivamente a los apellidos de la madre del inscrito,

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado en lo que afecta al apellido del nacido.

2º.- Disponer que la inscripción marginal practicada en la de nacimiento sea rectificadas a fin de que conste que la rectificación se ha acordado únicamente respecto a los apellidos de la madre del inscrito.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Único de Madrid.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (73ª)

VII.1.1.-Rectificación del apellido y de la nacionalidad de uno de los contrayentes en inscripción de matrimonio

No cabe por expediente gubernativo cuando los errores son múltiples y existe un problema previo respecto a la identidad de la persona.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el ministerio fiscal contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Logroño (La Rioja).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Araba) en fecha 23 de octubre de 2009 el Sr. M. mayor de edad y domiciliado en dicha población, expone que, habiendo nacido él en F. (Sierra Leona) y siendo su padre biológico de Nigeria, es su deseo tener el apellido y la nacionalidad de este y solicita la modificación de estos datos. Acompaña pasaporte nigeriano en vigor y volante de empadronamiento en V. con las menciones indicadas, pasaporte sierraleonés caducado, libro de familia español y volante de empadronamiento en V. a nombre de M. declaraciones juradas de cambio de nombre y estatutaria de edad realizadas por el padre en A. (Nigeria) el 19 de junio de 2009, certificado de la comisión nacional de población del estado de A. (Nigeria) dando validez a la declaración de edad efectuada por aquel y carta de identificación nigeriana en la que se certifica que el promotor es natural de U, ciudad de U, A-N. (Nigeria).

2.- El 6 de noviembre de 2009 el promotor ratificó la solicitud y por la Juez Encargada se acordó incoar expediente de rectificación y notificarlo a la cónyuge, la cual compareció en calidad de interesada el 19 de noviembre de 2009, manifestando que su marido ha sido reconocido por su padre y ha arreglado sus papeles en Nigeria, que ahora es nigeriano y que ha cambiado el nombre de J. por el de M. el ministerio fiscal informó favorablemente la solicitud de rectificación de errores realizada por M. y la Juez Encargada, considerando que de las diligencias practicadas resulta que en la inscripción de matrimonio del promotor son erróneos los datos relativos al apellido y a la nacionalidad, por haberse producido una modificación de la filiación y, por tanto, del apellido y de la nacionalidad, informó

favorablemente la rectificación y dispuso la remisión de las actuaciones al Registro Civil de Logroño, competente para resolver el expediente.

3.- El 17 de febrero de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Logroño, razonando que el posible cambio de nombre del contrayente después del matrimonio no constituye un error y que esta circunstancia, en su caso, deberá reflejarse en la inscripción de nacimiento pero no en la de matrimonio, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación interesada.

4.- Notificada la resolución al promotor y al ministerio fiscal, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado argumentando que la determinación de la filiación paterna y el apellido y la nueva nacionalidad resultantes son circunstancias relevantes, han quedado suficientemente acreditadas y deben anotarse marginalmente en la inscripción de matrimonio del interesado, habida cuenta de que, siendo extranjero, no existe en el Registro Civil español inscripción de nacimiento.

5.- De la interposición se dio traslado al promotor el 12 de enero de 2011 en el Registro Civil del domicilio, manifestando que no ha comparecido antes porque, por cambio de dirección que comunicó, no ha recibido las citaciones y que se adhiere al recurso, dados los enormes perjuicios que le causa que los datos de su inscripción de matrimonio y su libro de familia no coincidan con los de su pasaporte y su NIE; y el Juez Encargado del Registro Civil de Logroño informó que de la confrontación con las certificaciones aportadas no se desprenden con evidencia los errores denunciados y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 69 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 31-2ª de marzo, 12 de abril, 29-1ª de octubre y 4-5ª de noviembre de 2003; 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Pretende el solicitante que en la inscripción de su matrimonio, celebrado en L. en julio de 2004, se rectifiquen su apellido y su nacionalidad, exponiendo que es su deseo tener los de su padre. El Juez Encargado, razonando que el posible cambio de nombre del contrayente después del matrimonio no constituye un error y que esta circunstancia, en su caso, deberá reflejarse en la inscripción de nacimiento pero no en la de matrimonio, dispuso que no ha lugar a la rectificación interesada mediante auto de 17 de febrero de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el ministerio fiscal.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por expediente gubernativo (cfr. art. 93 y 94 LRC), siempre, claro es, que quede acreditada la existencia de los errores denunciados.

IV.- El apellido y la nacionalidad de una persona son en su inscripción de matrimonio menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 69 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido erróneamente consignados, cabe su rectificación por expediente gubernativo, con apoyo en el artículo 93-1º de la Ley. En este caso la documentación aportada no solo no prueba los errores invocados sino que pone de manifiesto discrepancias no denunciadas respecto a datos tan relevantes como el lugar de nacimiento del promotor, población y país, y el nombre de su madre; el reconocimiento paterno que habría conllevado la adopción del apellido N. y la adquisición de la nacionalidad nigeriana solo consta por manifestación de su cónyuge, que comparece como testigo, la documentación nigeriana aportada para acreditar la edad y el cambio de nombre ha sido expedida en junio de 2009 y, no obstante, en octubre de 2005 el promotor ya es titular de un

pasaporte nigeriano a nombre de N. cuya firma es ostensiblemente distinta de la que consta en el pasaporte sierraleonés caducado de J. que, por otra parte, continúa empadronado en V. en octubre de 2009. Todo ello suscita un problema previo de identidad entre la persona a la que se refiere la inscripción de matrimonio que se aduce errónea y el promotor que no puede ser resuelto en expediente gubernativo (cfr. art. 93-1º L.R.C), de modo que la rectificación habrá de instarse en la vía judicial ordinaria, conforme a la regla general establecida en el artículo 92 de la Ley.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Logroño (La Rioja).

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (74ª)

VII.1.1.-Rectificación de errores en inscripción de nacimiento

No acreditados los errores denunciados, no prospera el expediente de rectificación de los apellidos de la inscrita en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) en fecha 21 de septiembre de 2009 Doña F. M. A., nacida en F. el 26 de diciembre de 1973 y domiciliada en S-L. (Las P), promueve expediente de rectificación de errores en su inscripción de nacimiento, exponiendo que sus apellidos correctos son L. El H. y que supone que de entre las menciones de identidad que sus padres consignaron en la hoja de datos le fueron atribuidos por error como primer apellido el apodo de su padre y como segundo el nombre de su abuelo materno. Acompaña inscripción de nacimiento practicada el 31 de diciembre de 1973, certificado de empadronamiento en S-L de T. y fotocopia compulsada de DNI propios; inscripción de nacimiento de su madre, L. El H. El M. practicada el 29 de marzo de 2006, y extracto de acta de nacimiento marroquí de su padre B. L.

2.- El 9 de febrero de 2010 la promotora ratificó la solicitud y se tuvo por promovido expediente gubernativo de rectificación de error, el ministerio fiscal dijo que, acreditados los errores denunciados por la prueba presentada, procede que se acceda a subsanarlos y la Juez Encargada del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana informó que a su juicio se ha probado el error y las circunstancias esenciales del mismo y dispuso la remisión del expediente al de Fuengirola, en el que tuvo entrada el 15 de abril de 2010.

3.- El ministerio fiscal informó que no se opone al dictado de una resolución en la que se acuerde la rectificación interesada y el 8 de noviembre de 2010 la Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola, apreciando que la identidad de los progenitores que consta en el Registro Civil no coincide con la que se pretende modificar y que, por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley del Registro Civil, dispuso que no ha lugar a la rectificación de errores solicitada.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que B. M. M. y B. L. son la misma persona, como también L-A. M. y L. El A. El M., y aportado, como prueba documental, fotocopia de libro de familia marroquí del padre y sendos certificados de identidad de persona expedidos por el Consulado General del Reino de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, apreciando que la documentación aportada por la promotora deja claro que existió un error en la transcripción de los apellidos de sus padres en su partida de nacimiento, interesó que se admita el recurso y se proceda a la rectificación solicitada y la Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Interesa la solicitante, que en su inscripción de nacimiento, practicada dentro de plazo en diciembre de 1973, se consignen los apellidos L. El H. en lugar de los que por error constan, M. A. exponiendo que supone que entre las menciones de identidad que sus padres consignaron en la hoja de datos se le atribuyeron como primer apellido el apodo de su padre y como segundo el nombre de su abuelo materno. La Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola, apreciando que la identidad de los progenitores que consta en el Registro Civil no coincide con la que se pretende modificar, dispuso que no ha lugar a la rectificación de errores solicitada mediante auto de 8 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por expediente gubernativo (cfr. art. 93 y 94 LRC), siempre, claro es, que quede acreditada la existencia de los errores denunciados.

IV.- Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido erróneamente consignados, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso el error en los apellidos que constan en la inscripción de nacimiento no ha quedado probado con la documentación aportada al expediente que, por el contrario, pone de manifiesto discrepancias en otras menciones de identidad de los progenitores, de modo que no es posible establecer la identidad de persona, de una parte, entre la madre de la inscrita, L-A. M., de nacionalidad española y nacida en M. el 10 de mayo de 1955, y L. El H. El M., nacida en F. Marruecos el 1 de enero de 1955 y de nacionalidad española adquirida por residencia el 29 de marzo de 2006, y, de otra, entre el padre de la inscrita, B. M. M., de nacionalidad española y nacido en M. el 14 de octubre de 1945, y B. L., de nacionalidad marroquí, nacido en M. (Marruecos) el 8 de octubre de 1945. Así pues, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente, no cabe considerar acreditados los errores alegados en los apellidos de la inscrita y queda impedida su rectificación en vía gubernativa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

VII.2.- Cancelación

VII.2.1.- Cancelación de inscripción de nacimiento

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (4ª)

VII.2.1.- Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima parcialmente el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del Apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

En las actuaciones sobre cancelación de la inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 5 de octubre de 2009, Don O. nacido el 15 de septiembre de 1948 en Cuba, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por ser hijo de padre originariamente español. Aportaba, entre otra, la siguiente documentación: certificado local de nacimiento, registrado 14 años después de haberse producido; certificación literal de nacimiento del padre, Don I-P. en la que consta su nacimiento en Cuba en 1934 y la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 el 16 de febrero de 2009; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición de la nacionalidad cubana del abuelo paterno del interesado, Don V. certificado de nacimiento cubano del padre, en el que consta la ciudadanía cubana del abuelo paterno del interesado; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, según el cual el abuelo paterno del promotor adquirió la nacionalidad cubana el 12 de abril de 1944; y fotocopia del documento de identidad del interesado.

2.- Por auto de 10 de junio de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana estimó la pretensión del promotor, procediendo a la inscripción de nacimiento y marginal de nacionalidad española de origen por opción, conforme a la Ley 52/2007 el 12 de agosto de 2010. Posteriormente, el 18 de julio de 2012 procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar la inscripción de nacimiento del interesado, y que había tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de título manifiestamente ilegal.

3.- Con fecha 19 de julio de 2012 se notifica el inicio del expediente de cancelación al interesado, no compareciendo en la fecha indicada al efecto, por lo que se procede a la publicación mediante edictos, dando por finalizado el proceso de publicación el 7 de agosto de 2012.

4.- El Ministerio Fiscal informó que, examinados los documentos, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 10 de agosto de 2012 procedió a cancelar totalmente la inscripción de nacimiento del interesado por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil), dado que se han detectado una serie de incongruencias en los documentos presentados para acreditar la nacionalidad española del

abuelo paterno del promotor, que hacen presumir la existencia de falsedad documental y, por tanto, no ha quedado establecido que el padre del interesado haya sido originariamente español.

5.- Notificado el interesado, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado y aportando nuevo certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición cubana del abuelo paterno.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil; los artículos 20 del Código civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II.- El recurrente, nacido en Cuba en 1948, solicitó la inscripción en el Registro Civil Consular en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". Posteriormente se dictó Auto de 10 de junio de 2010 estimando la opción a la nacionalidad española y ordenando la inscripción. El 10 de agosto de 2012, tras tramitar expediente al efecto, el Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto por el que procedió a cancelar la inscripción de nacimiento del recurrente por haber tenido acceso al Registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida en cuanto a la cancelación del asiento marginal de opción a la nacionalidad española de origen. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, no resulta acreditado que el padre del interesado ostentase la nacionalidad española de origen, ya que se observan discrepancias en relación con los certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano aportados, en relación con la nacionalidad del abuelo del promotor, lo que permitiría conocer si el padre del mismo es español de origen. Así, en uno de ellos, se consigna que el abuelo paterno se naturalizó cubano en el año 1944, existiendo dudas sobre la autenticidad en la firma del funcionario

que lo expidió, tal y como señala el Encargado del Registro Civil Consular en su informe. Por otra parte, obra en el expediente otro certificado del mismo organismo en el que se indica que no consta que el abuelo paterno adquiriera la nacionalidad cubana. Adicionalmente, el solicitante aporta en su escrito de apelación nuevos documentos emitidos por la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, donde se señala que el abuelo no consta inscrito en los registros de extranjería ni ciudadanía. Todo ello resultaría contradictorio con la mención a la nacionalidad cubana del abuelo paterno que consta en el certificado de nacimiento cubano del Sr. I-P. padre del interesado.

En cuanto al certificado de nacimiento cubano del promotor, consta que el mismo se registró 14 años después de haberse producido. En esta situación, se constata la falta de garantías de la documentación aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23 LRC).

V.- No obstante lo anterior, procede indicar que, habida cuenta de la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por parte del padre del interesado, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

VI.- Finalmente, en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento del promotor, no procedería la misma ya que según el artículo 15 de la Ley de Registro Civil y 66 del Reglamento del Registro Civil, en el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, no siendo la duda sobre la nacionalidad del sujeto obstáculo para la inscripción del hecho. En todo caso, en las inscripciones de nacimiento que hayan de practicarse en los Registros Consulares, sin que esté acreditada conforme a la Ley la nacionalidad española del nacido, se hará constar expresamente esta circunstancia. Habida cuenta de la constancia de la nacionalidad española del padre, adquirida por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 con fecha 16 de febrero de 2009, no procedería la cancelación de la inscripción de nacimiento del interesado, teniendo en cuenta que la misma no prejuzga la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso interpuesto, con los siguientes efectos legales:

1º.- Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado en lo relativo a la cancelación de la declaración de la nacionalidad española de origen por opción, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

2º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento del promotor, sin que la misma prejuzgue la nacionalidad española del interesado, haciéndose constar expresamente esta circunstancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (5ª)

VII.2.1.- Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima parcialmente el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del Apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

En las actuaciones sobre cancelación de la inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 6 de octubre de 2009, Don C. nacido el 16 de agosto de 1959 en Cuba, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por ser hijo de padre originariamente español. Aportaba, entre otra, la siguiente documentación: certificado local de nacimiento, registrado 14 años después de haberse producido; certificación literal de nacimiento del padre, Don I-P. en la que consta su nacimiento en Cuba en 1934 y la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 el 16 de febrero de 2009; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición de la nacionalidad cubana del abuelo paterno del interesado, Don V. certificado de nacimiento cubano del padre, en el que consta la ciudadanía cubana del abuelo paterno del interesado; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, según el cual el abuelo paterno del promotor adquirió la nacionalidad cubana el 12 de abril de 1944; y fotocopia del documento de identidad del interesado.

2.- Por auto de 10 de junio de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana estimó la pretensión del promotor, procediendo a la inscripción de nacimiento y marginal de nacionalidad española de origen por opción, conforme a la Ley 52/2007 el 12 de agosto de 2010. Posteriormente, el 18 de julio de 2012 procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar la inscripción de nacimiento del interesado, y que había tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de título manifiestamente ilegal.

3.- Con fecha 19 de julio de 2012 se notifica el inicio del expediente de cancelación al interesado, que se niega a firmar el justificante de notificación, por lo que se procede a la publicación mediante edictos, dando por finalizado el proceso de publicación el 7 de agosto de 2012.

4.- El Ministerio Fiscal informó que, examinados los documentos, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 10 de agosto de 2012 procedió a cancelar totalmente la inscripción de nacimiento del interesado por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil), dado que se han detectado una serie de incongruencias en los documentos presentados para acreditar la nacionalidad española del abuelo paterno del promotor, que hacen presumir la existencia de falsedad documental y, por tanto, no ha quedado establecido que el padre del interesado haya sido originariamente español.

5.- Notificado el interesado, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado y aportando nuevo certificado de la

Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición cubana del abuelo paterno.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil; los artículos 20 del Código civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II.- El recurrente, nacido en Cuba en 1959, solicitó la inscripción en el Registro Civil Consular en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". Posteriormente se dictó Auto de 10 de junio de 2010 estimando la opción a la nacionalidad española y ordenando la inscripción. El 10 de agosto de 2012, tras tramitar expediente al efecto, el Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto por el que procedió a cancelar la inscripción de nacimiento del recurrente por haber tenido acceso al Registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida en cuanto a la cancelación del asiento marginal de opción a la nacionalidad española de origen. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. En el presente caso, no resulta acreditado que el padre del interesado ostentase la nacionalidad española de origen, ya que se observan discrepancias en relación con los certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano aportados, en relación con la nacionalidad del abuelo del promotor, lo que permitiría conocer si el padre del mismo es español de origen. Así, en uno de ellos, se consigna que el abuelo paterno se naturalizó cubano en el año 1944, existiendo dudas sobre la autenticidad en la firma del funcionario que lo expidió, tal y como señala el Encargado del Registro Civil Consular en su informe. Por otra parte, obra en el expediente otro certificado del mismo organismo en el que se indica que no consta que el abuelo paterno adquiriera la nacionalidad cubana. Adicionalmente, el solicitante aporta en su escrito de apelación nuevos documentos emitidos por la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, donde se señala que el abuelo no consta inscrito en los registros de extranjería ni ciudadanía. Todo ello resultaría

contradictorio con la mención a la nacionalidad cubana del abuelo paterno que consta en el certificado de nacimiento cubano del Sr. I-P. padre del interesado.

En cuanto al certificado de nacimiento cubano del promotor, consta que el mismo se registró 14 años después de haberse producido. En esta situación, se constata la falta de garantías de la documentación aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23 LRC).

V.- No obstante lo anterior, procede indicar que, habida cuenta de la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por parte del padre del interesado, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad.

En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

VI.- Finalmente, en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento del promotor, no procedería la misma ya que según el artículo 15 de la Ley de Registro Civil y 66 del Reglamento del Registro Civil, en el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, no siendo la duda sobre la nacionalidad del sujeto obstáculo para la inscripción del hecho.

En todo caso, en las inscripciones de nacimiento que hayan de practicarse en los Registros Consulares, sin que esté acreditada conforme a la Ley la nacionalidad española del nacido, se hará constar expresamente esta circunstancia. Habida cuenta de la constancia de la nacionalidad española del padre, adquirida por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 con fecha 16 de febrero de 2009, no procedería la cancelación de la inscripción de nacimiento del interesado, teniendo en cuenta que la misma no prejuzga la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso interpuesto, con los siguientes efectos legales:

1º.- Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado en lo relativo a la cancelación de la declaración de la nacionalidad española de origen por opción, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

2º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento del promotor, sin que la misma prejuzgue la nacionalidad española del interesado, haciéndose constar expresamente esta circunstancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (22ª)

VII.2.1.- Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del artículo 26 del Código Civil.

En las actuaciones sobre cancelación del asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 16 de febrero de 2007, Doña A-E. nacida el 10 de mayo de 1943 en Cuba, solicitaba la nacionalidad española por opción en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil. Con fecha 26 de febrero de 2007 se levanta acta de opción a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil. Por auto del Encargado del Registro Civil Consular de fecha 26 de febrero de 2007, se procede a la inscripción de la nacionalidad española por opción, por entender que se cumplían los requisitos correspondientes.

2.- Posteriormente, la interesada solicita la recuperación de la nacionalidad española, en virtud del artículo 26 del Código Civil, por ser hija de padre español, levantándose acta de recuperación el 7 de marzo de 2011. Aportaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la interesada, en el que consta que su padre, Don B. nació en España; certificación literal de nacimiento del padre, en el que consta como nacido en España de padres nacidos también en España; certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba sobre la no inscripción del padre en el registro de Extranjeros ni en el de Ciudadanía; certificado de matrimonio de los padres; certificado de defunción del padre; y fotocopia del documento de identidad de la interesada.

3.- Por auto de 7 de marzo de 2011, el Encargado del Registro Civil Consular estimó la pretensión de la interesada, procediendo a la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española. El 16 de mayo de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad de la interesada, ya que había tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de título manifiestamente ilegal, al haberse observado contradicciones en la documentación aportada por la interesada y su hijo, en relación con la inscripción o no del padre de la promotora en el Registro de Extranjeros del Ministerio del Interior de Cuba

4.- Se notifica el inicio del expediente a la interesada con fecha 17 de mayo de 2012, formulando las alegaciones que estima convenientes. El Ministerio Fiscal informó que examinados los documentos, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 21 de mayo de 2012 procedió a cancelar el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española de la interesada por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil).

5.- Notificada la interesada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17 del Código Civil (CC.), en su redacción originaria; 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 226 a 229 y 297 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones entre otras, de 3-4ª y 5ª de febrero, 1-1ª de marzo, 19-2ª de abril, 3-4ª y 23-1ª y 2ª de junio, 4-2ª de julio de 2003; 22-1ª de julio de 2004 y 19-5ª de junio de 2006; 17-1ª de enero y 4-5ª de Junio de 2007; 23-8ª de Mayo y 10-6ª de septiembre de 2008; 19-6ª de Febrero de 2009; 7-9ª de Abril, 22-1ª de Julio, 25-6ª de Noviembre de 2010; 25-2ª de Mayo y 5-13ª de Septiembre de 2011.

II.- La recurrente, nacida en Cuba en 1943, solicitó en el Registro Civil Consular la recuperación de la nacionalidad española que habría recibido de su padre español. Posteriormente se dictó Auto de 7 de marzo de 2011 estimando la pretensión de la interesada y ordenando la inscripción. El 21 de mayo de 2012, tras tramitar expediente al efecto, el Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto por el que procedió a cancelar el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española de la recurrente por haber tenido acceso al Registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que aparecen contradicciones en los certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, aportados por la interesada y su hijo, acerca de si el padre de la promotora, Don B. se encontraba o no inscrito en el Registro de Extranjeros de ese país, a pesar de estar expedidos por la misma autoridad, por lo que no resultaría suficientemente acreditado el momento en el que el padre de la interesada adquirió la nacionalidad cubana y perdió la nacionalidad española.

Es obvio que para recuperar la nacionalidad española es preciso probar suficientemente que en un momento anterior se ha ostentado *de iure* dicha nacionalidad y que, posteriormente, se ha perdido y no ha quedado acreditado que la interesada hubiese ostentado en algún momento anterior la nacionalidad española de origen. En efecto, según el certificado que aportó inicialmente la interesada, su padre no constaba inscrito en el Registro de Extranjeros, sin embargo, en el certificado aportado por el hijo de la interesada, emitido por la misma autoridad, aparece que el padre de la promotora consta inscrito en el Registro de Extranjeros cuando contaba con 31 años de edad. Todo lo anterior, pone de manifiesto la existencia de dudas razonables sobre la veracidad de la información contenida en los certificados y, por tanto, si el padre ostentaba la nacionalidad española en el momento del nacimiento de la interesada.

En esta situación, cabe presumir que ni el certificado aportado ni el Registro que lo expidió reúnen las condiciones y garantías exigidas por la legislación española y hay que concluir que no ha resultado suficientemente acreditado que la promotora ostentara la nacionalidad española desde su nacimiento y posteriormente la perdiera, por lo que procedería la cancelación del asiento marginal de recuperación a la nacionalidad española de la interesada, al haber tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de "título manifiestamente ilegal" (arts. 95.2º LRC y 297.3º RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (24ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 6 de mayo de 2009, Don N- R. y Doña G-M. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, R. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 13 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 26 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 22 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 15 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que no se cancele la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 27 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del auto.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, R. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido el menor en territorio español.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea

y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de los recurrentes y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la cancelación, de modo que los recurrentes han podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 10 de Diciembre de 2013 (25ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 2 de junio de 2009, Don M-H. y Doña C-L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, F. nacido en Madrid el ...de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 10 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada.

Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 17 de junio de 2010, que no presentan escrito de alegaciones. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 2 de agosto de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando que se mantenga la nacionalidad española de origen de su hijo.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, F. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo

que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (52ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 30 de abril de 2009, Don J. S. y Doña L. B., solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, M. S. B., nacido en M. el. de de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 13 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del Cc, procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 26 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 22 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 9 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que no se proceda a la cancelación

de la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 17 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, éstos presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del auto.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, M. S. B. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la

anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores puedan instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) Cc) al haber nacido el menor en territorio español.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de los recurrentes y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la cancelación, de modo que los recurrentes han podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (74ª)

VII.2.1.- Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima parcialmente el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del Apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

En las actuaciones sobre cancelación de la inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 11 de diciembre de 2009, Doña M.-M. nacida el 12 de noviembre de 1950 en Cuba, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición

Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por ser hija de padre originariamente español. Aportaba, entre otra, la siguiente documentación: certificado local de nacimiento, registrado 15 años después de haberse producido; certificación literal de nacimiento del padre, Don I-P. en la que consta su nacimiento en Cuba en 1934 y la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 el 16 de febrero de 2009; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición de la nacionalidad cubana del abuelo paterno de la interesada, Don V. certificado de nacimiento cubano del padre, en el que consta la ciudadanía cubana del abuelo paterno de la interesada; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, según el cual el abuelo paterno de la promotora adquirió la nacionalidad cubana el 12 de abril de 1944; y fotocopia del documento de identidad de la interesada.

2.- Por auto de 10 de junio de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana estimó la pretensión de la promotora, procediendo a la inscripción de nacimiento y marginal de nacionalidad española de origen por opción, conforme a la Ley 52/2007 el 11 de diciembre de 2009. Posteriormente, el 18 de julio de 2012 procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar la inscripción de nacimiento de la interesada, y que había tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de título manifiestamente ilegal.

3.- Con fecha 19 de julio de 2012 se notifica el inicio del expediente de cancelación a la interesada, que se niega a firmar el justificante de la notificación, por lo que se procede a la publicación mediante edictos, dando por finalizado el proceso de publicación el 7 de agosto de 2012.

4.- El Ministerio Fiscal informó que, examinados los documentos, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 10 de agosto de 2012 procedió a cancelar totalmente la inscripción de nacimiento de la interesada por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil), dado que se han detectado una serie de incongruencias en los documentos presentados para acreditar la nacionalidad española del abuelo paterno de la promotora, que hacen presumir la existencia de falsedad documental y, por tanto, no ha quedado establecido que el padre de la interesada haya sido originariamente español.

5.- Notificada la interesada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado y aportando nuevo certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición cubana del abuelo paterno.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil; los artículos 20 del Código civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II.- La recurrente, nacida en Cuba en 1950, solicitó la inscripción en el Registro Civil Consular en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". Posteriormente se dictó Auto de 10 de junio de 2010 estimando la opción a la nacionalidad española y ordenando la inscripción. El 10 de agosto de 2012, tras tramitar expediente al efecto, el Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto por el que procedió a cancelar la inscripción de nacimiento de la recurrente por haber tenido acceso al Registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida en cuanto a la cancelación del asiento marginal de opción a la nacionalidad española de origen. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. En el presente caso, no resulta acreditado que el padre de la interesada ostentase la nacionalidad española de origen, ya que se observan discrepancias en relación con los certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano aportados, en relación con la nacionalidad del abuelo de la promotora, lo que permitiría conocer si el padre de la misma es español de origen.

Así, en uno de ellos, se consigna que el abuelo paterno se naturalizó cubano en el año 1944, existiendo dudas sobre la autenticidad en la firma del funcionario que lo expidió, tal y como señala el Encargado del Registro Civil Consular en su informe. Por otra parte, obra en el expediente otro certificado del mismo organismo en el que se indica que no consta que el abuelo paterno adquiriera la nacionalidad cubana. Adicionalmente, la solicitante aporta en su escrito de apelación nuevos documentos emitidos por la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, donde se señala que el abuelo no consta inscrito en los registros de extranjería ni ciudadanía. Todo ello resultaría contradictorio con la mención a la nacionalidad cubana del abuelo paterno que consta en el certificado de nacimiento cubano del Sr. I-P. padre de la interesada. En cuanto al certificado de nacimiento cubano de la promotora, consta que el mismo se registró 15 años después de haberse producido. En esta situación, se constata la falta de garantías de la documentación aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23 LRC).

V.- No obstante lo anterior, procede indicar que, habida cuenta de la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por parte del padre de la interesada, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del

Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

VI.- Finalmente, en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la promotora, no procedería la misma ya que según el artículo 15 de la Ley de Registro Civil y 66 del Reglamento del Registro Civil, en el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, no siendo la duda sobre la nacionalidad del sujeto obstáculo para la inscripción del hecho. En todo caso, en las inscripciones de nacimiento que hayan de practicarse en los Registros Consulares, sin que esté acreditada conforme a la Ley la nacionalidad española del nacido, se hará constar expresamente esta circunstancia. Habida cuenta de la constancia de la nacionalidad española del padre, adquirida por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 con fecha 16 de febrero de 2009, no procedería la cancelación de la inscripción de nacimiento de la interesada, teniendo en cuenta que la misma no prejuzga la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso interpuesto, con los siguientes efectos legales:

1º.- Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado en lo relativo a la cancelación de la declaración de la nacionalidad española de origen por opción, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

2º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la promotora, sin que la misma prejuzgue la nacionalidad española de la interesada, haciéndose constar expresamente esta circunstancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (75ª)

VII.2.1.- Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima parcialmente el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del Apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

En las actuaciones sobre cancelación de la inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 5 de octubre de 2009, Doña O. nacida el 20 de enero de 1952 en Cuba, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por ser hija de padre originariamente español. Aportaba, entre otra, la siguiente documentación: certificado local de nacimiento, registrado 13 años después de haberse producido; certificación literal de nacimiento del padre, Don I-P. en la que consta su nacimiento en Cuba en 1934 y la adquisición de la nacionalidad española de

origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 el 16 de febrero de 2009; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición de la nacionalidad cubana del abuelo paterno de la interesada, Don V. certificado de nacimiento cubano del padre, en el que consta la ciudadanía cubana del abuelo paterno de la interesada; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, según el cual el abuelo paterno de la promotora adquirió la nacionalidad cubana el 12 de abril de 1944; y fotocopia del documento de identidad de la interesada.

2.- Por auto de 10 de junio de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana estimó la pretensión de la promotora, procediendo a la inscripción de nacimiento y marginal de nacionalidad española de origen por opción, conforme a la Ley 52/2007 el 12 de agosto de 2010. Posteriormente, el 18 de julio de 2012 procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar la inscripción de nacimiento de la interesada, y que había tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de título manifiestamente ilegal.

3.- Con fecha 19 de julio de 2012 se notifica el inicio del expediente de cancelación a la interesada, que se niega a firmar el justificante de la notificación, por lo que se procede a la publicación mediante edictos, dando por finalizado el proceso de publicación el 7 de agosto de 2012.

4.- El Ministerio Fiscal informó que, examinados los documentos, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 10 de agosto de 2012 procedió a cancelar totalmente la inscripción de nacimiento de la interesada por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil), dado que se han detectado una serie de incongruencias en los documentos presentados para acreditar la nacionalidad española del abuelo paterno de la promotora, que hacen presumir la existencia de falsedad documental y, por tanto, no ha quedado establecido que el padre de la interesada haya sido originariamente español.

5.- Notificada la interesada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado y aportando nuevo certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición cubana del abuelo paterno.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil; los artículos 20 del Código civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II.- La recurrente, nacida en Cuba en 1952, solicitó la inscripción en el Registro Civil Consular en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo

padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". Posteriormente se dictó Auto de 10 de junio de 2010 estimando la opción a la nacionalidad española y ordenando la inscripción. El 10 de agosto de 2012, tras tramitar expediente al efecto, el Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto por el que procedió a cancelar la inscripción de nacimiento de la recurrente por haber tenido acceso al Registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida en cuanto a la cancelación del asiento marginal de opción a la nacionalidad española de origen. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, no resulta acreditado que el padre de la interesada ostentase la nacionalidad española de origen, ya que se observan discrepancias en relación con los certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano aportados, en relación con la nacionalidad del abuelo de la promotora, lo que permitiría conocer si el padre de la misma es español de origen. Así, en uno de ellos, se consigna que el abuelo paterno se naturalizó cubano en el año 1944, existiendo dudas sobre la autenticidad en la firma del funcionario que lo expidió, tal y como señala el Encargado del Registro Civil Consular en su informe. Por otra parte, obra en el expediente otro certificado del mismo organismo en el que se indica que no consta que el abuelo paterno adquiriera la nacionalidad cubana. Adicionalmente, la solicitante aporta en su escrito de apelación nuevos documentos emitidos por la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, donde se señala que el abuelo no consta inscrito en los registros de extranjería ni ciudadanía. Todo ello resultaría contradictorio con la mención a la nacionalidad cubana del abuelo paterno que consta en el certificado de nacimiento cubano del Sr. I-P. padre de la interesada. En cuanto al certificado de nacimiento cubano de la promotora, consta que el mismo se registró 13 años después de haberse producido. En esta situación, se constata la falta de garantías de la documentación aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23 LRC).

V.- No obstante lo anterior, procede indicar que, habida cuenta de la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por parte del padre de la interesada, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

VI.- Finalmente, en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la promotora, no procedería la misma ya que según el artículo 15 de la Ley de Registro Civil y 66 del Reglamento del Registro Civil, en el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, no siendo la duda sobre la nacionalidad del sujeto obstáculo para la inscripción del hecho. En todo caso, en las inscripciones de nacimiento que hayan de practicarse en los Registros Consulares, sin que esté acreditada conforme a la Ley la nacionalidad española del nacido, se hará constar expresamente esta circunstancia. Habida cuenta de la constancia de la nacionalidad española del padre, adquirida por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 con fecha 16 de febrero de 2009, no procedería la cancelación de la inscripción de nacimiento de la interesada, teniendo en cuenta que la misma no prejuzga la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso interpuesto, con los siguientes efectos legales:

1º.- Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado en lo relativo a la cancelación de la declaración de la nacionalidad española de origen por opción, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

2º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la promotora, sin que la misma prejuzgue la nacionalidad española de la interesada, haciéndose constar expresamente esta circunstancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (76ª)

VII.2.1.- Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima parcialmente el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del Apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

En las actuaciones sobre cancelación de la inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 5 de octubre de 2009, Doña A-C. nacida el 9 de abril de 1957 en Cuba, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por ser hija de padre originariamente español. Aportaba, entre otra, la siguiente documentación: certificado local de nacimiento, registrado 18 años después de haberse producido; certificación literal de nacimiento del padre, Don I-P. en la que consta su nacimiento en Cuba en 1934 y la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del Apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 el 16 de febrero de 2009; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición de la nacionalidad cubana del abuelo paterno de la interesada,

Don V. certificado de nacimiento cubano del padre, en el que consta la ciudadanía cubana del abuelo paterno de la interesada; certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, según el cual el abuelo paterno de la promotora adquirió la nacionalidad cubana el 12 de abril de 1944; y fotocopia del documento de identidad de la interesada.

2.- Por auto de 10 de junio de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana estimó la pretensión de la promotora, procediendo a la inscripción de nacimiento y marginal de nacionalidad española de origen por opción, conforme a la Ley 52/2007 el 12 de agosto de 2010. Posteriormente, el 18 de julio de 2012 procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar la inscripción de nacimiento de la interesada, y que había tenido acceso al Registro Civil Consular en virtud de título manifiestamente ilegal.

3.- Con fecha 19 de julio de 2012 se notifica el inicio del expediente de cancelación a la interesada, que no comparece en la fecha en la que fue citada al efecto, por lo que se procede a la publicación mediante edictos, dando por finalizado el proceso de publicación el 7 de agosto de 2012.

4.- El Ministerio Fiscal informó que, examinados los documentos, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 10 de agosto de 2012 procedió a cancelar totalmente la inscripción de nacimiento de la interesada por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil), dado que se han detectado una serie de incongruencias en los documentos presentados para acreditar la nacionalidad española del abuelo paterno de la promotora, que hacen presumir la existencia de falsedad documental y, por tanto, no ha quedado establecido que el padre de la interesada haya sido originariamente español.

5.- Notificada la interesada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado y aportando nuevo certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería sobre la no constancia de la adquisición cubana del abuelo paterno.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil; los artículos 20 del Código civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II.- La recurrente, nacida en Cuba en 1957, solicitó la inscripción en el Registro Civil Consular en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". Posteriormente se dictó Auto de 10 de junio de 2010

estimando la opción a la nacionalidad española y ordenando la inscripción. El 10 de agosto de 2012, tras tramitar expediente al efecto, el Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto por el que procedió a cancelar la inscripción de nacimiento de la recurrente por haber tenido acceso al Registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida en cuanto a la cancelación del asiento marginal de opción a la nacionalidad española de origen. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, no resulta acreditado que el padre de la interesada ostentase la nacionalidad española de origen, ya que se observan discrepancias en relación con los certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano aportados, en relación con la nacionalidad del abuelo de la promotora, lo que permitiría conocer si el padre de la misma es español de origen. Así, en uno de ellos, se consigna que el abuelo paterno se naturalizó cubano en el año 1944, existiendo dudas sobre la autenticidad en la firma del funcionario que lo expidió, tal y como señala el Encargado del Registro Civil Consular en su informe. Por otra parte, obra en el expediente otro certificado del mismo organismo en el que se indica que no consta que el abuelo paterno adquiriera la nacionalidad cubana. Adicionalmente, la solicitante aporta en su escrito de apelación nuevos documentos emitidos por la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, donde se señala que el abuelo no consta inscrito en los registros de extranjería ni ciudadanía. Todo ello resultaría contradictorio con la mención a la nacionalidad cubana del abuelo paterno que consta en el certificado de nacimiento cubano del Sr. I-P. padre de la interesada.

En cuanto al certificado de nacimiento cubano de la promotora, consta que el mismo se registró 18 años después de haberse producido. En esta situación, se constata la falta de garantías de la documentación aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23 LRC).

V.- No obstante lo anterior, procede indicar que, habida cuenta de la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por parte del padre de la interesada, conforme a la doctrina de esta Dirección General, no es posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por la norma controvertida. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, no pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

En efecto, esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008, distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

VI.- Finalmente, en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la promotora, no procedería la misma ya que según el artículo 15 de la Ley de Registro Civil y 66 del Reglamento del Registro Civil, en el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, no siendo la duda sobre la nacionalidad del sujeto obstáculo para la inscripción del hecho. En todo caso, en las inscripciones de nacimiento que hayan de practicarse en los Registros Consulares, sin que esté acreditada conforme a la Ley la nacionalidad española del nacido, se hará constar expresamente esta circunstancia. Habida cuenta de la constancia de la nacionalidad española del padre, adquirida por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 con fecha 16 de febrero de 2009, no procedería la cancelación de la inscripción de nacimiento de la interesada, teniendo en cuenta que la misma no prejuzga la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso interpuesto, con los siguientes efectos legales:

1º.- Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado en lo relativo a la cancelación de la declaración de la nacionalidad española de origen por opción, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

2º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado en cuanto a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la promotora, sin que la misma prejuzgue la nacionalidad española de la interesada, haciéndose constar expresamente esta circunstancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (120ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 24 de abril de 2009, Don H-C. y Doña L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, P-E. nacida en M. el ...de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 5 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 19 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 12 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que no se proceda a la cancelación de la nacionalidad española de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 24 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, éstos presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, P-E. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento,

la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (121ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 29 de abril de 2009, Don J. y Doña I-M. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, D-Á. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 20 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 26 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 22 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 7 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que no se proceda a la cancelación de la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 17 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, éstos presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del auto.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, D-Á. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *iure sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación

del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido el menor en territorio español.

VI.-Finalmente, en cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de los recurrentes y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la cancelación, de modo que los recurrentes han podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (122ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de madre boliviana y padre desconocido, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 26 de mayo de 2009, Doña D. solicitó que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, A. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 8 de junio de 2009 estimando la pretensión de la interesada, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 6 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 15 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a la promotora el 25 de mayo de 2010, que presenta escrito de alegaciones en el que solicita que se mantenga la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 21 de junio de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a la promotora, presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración

de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, A. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por su madre, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, la promotora intentó que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de madre boliviana nacida en Bolivia y padre desconocido. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que la promotora pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (123ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 3 de junio de 2009, Don F. y Doña E. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, E-F. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 10 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 17 de junio de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que no se proceda a la cancelación de la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 22 de julio de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, éstos presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, E-F. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (124ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de madre boliviana y padre desconocido, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 4 de junio de 2009, Doña Z-R. solicitó que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, C-M. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 16 de junio de 2009 estimando la pretensión de la interesada, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a la promotora el 17 de mayo de 2010, que presenta escrito de alegaciones en el que solicita que se mantenga la nacionalidad española de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 7 de julio de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a la promotora, presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración

de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, C-M. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por su madre, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, la promotora intentó que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de madre boliviana nacida en Bolivia y padre desconocido. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que la promotora pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (125ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 8 de junio de 2009, Don R. y Doña J-S. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, J. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 16 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 10 de junio de 2010, que no presentan alegaciones. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 2 de agosto de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, la Sra. L. presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que no se cancele la nacionalidad española de su hijo.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, J. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (126ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 28 de abril de 2009, Don H. y Doña P. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, A-V. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 11 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 19 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 7 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que se mantenga la nacionalidad española de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 5 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, A-V. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacido en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (2ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 16 de abril de 2009, Don E. y Doña C-R. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, A-N. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 30 de abril de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 19 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 6 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 17 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, A-N. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (4ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de madre boliviana, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 23 de abril de 2009, Doña S. solicitó que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, L. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 5 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 19 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a la promotora el 22 de abril de 2010, que presenta escrito de alegaciones en el que solicita que no se proceda a la cancelación de la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 17 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a la promotora, ésta presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del acuerdo.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, L. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por su madre, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, la promotora intentó que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2009, hijo de madres boliviana nacida en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que la promotora pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido el menor en territorio español.

VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea

y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la cancelación, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (111ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

No procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de nacimiento del interesado, hijo de padres argentinos, una vez acreditado que resulta de aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto del Encargado del Registro Civil de Marbella (Málaga).

HECHOS

1.- Con fecha 7 de enero de 2009, Don L-M. nacido el 17 de agosto de 1990 en M. remite escrito al Registro Civil Consular de Buenos Aires solicitando la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Aporta, entre otra, la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento; certificado de fecha 19 de marzo de 2010, sobre la no inscripción en el Registro Nacional de Electores de Argentina, en el que figuran los ciudadanos argentinos mayores de 18 años; fotocopias del documento de identidad de extranjero del interesado, expedido por las autoridades argentinas y del pasaporte de su madre.

2.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina) dicta acuerdo de fecha 6 de marzo de 2009, por el que declara con valor de simple presunción la nacionalidad española del interesado, en base al artículo 1 de la Ley 346 sobre Ciudadanía, que establece que son argentinos “los hijos de argentinos que habiendo nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen”.

3.- Una vez remitidas las actuaciones al Registro Civil de Marbella, por providencia de 12 de agosto de 2009, el Encargado del Registro Civil acuerda practicar el asiento marginal de declaración con valor de simple presunción en la inscripción de nacimiento, así como poner tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, toda vez que el Encargado entiende que no procedería la aplicación del artículo 17.1.c), por estar el interesado documentado como ciudadano argentino.

4.- Posteriormente, el Ministerio Fiscal, insta expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española con valor de simple presunción y se notifica el interesado el inicio del procedimiento el 23 de septiembre de 2009, alegando que el documento que obra en el expediente corresponde no a nacionales argentinos, sino a extranjeros. Con fecha 29 de octubre de 2009, el Encargado del Registro Civil de Marbella dicta auto estimando la solicitud del Ministerio Fiscal, acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración de nacionalidad del interesado, por entender que estaba documentado como ciudadano argentino y no producirse, por tanto, la situación de apatridia originaria que justificaría la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.

5.- Notificada la resolución al promotor, presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su pretensión y aportando documentación diversa.

6.- El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el auto y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

7.- Con fecha 1 de julio de 2013 se oficia al Registro Civil Consular de Buenos Aires para que requiera al interesado la aportación al expediente de documento de identidad que se encuentre vigente en la actualidad, habida cuenta que el que consta en el expediente fue expedido con fecha 5 de febrero de 1995. El interesado remite a esta Dirección General documento de identidad de extranjero que corresponde al promotor emitido por las autoridades argentinas con fecha de expedición el 10 de abril de 2013 y de vencimiento el 10 de abril de 2028.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil; 66, 94, 163, 164, 297, 335, 338, 340, 342 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de la DGRN de fecha 28 de marzo de 2007; y las Resoluciones de 15 de febrero de 1994, 17-2ª de noviembre de 2001; 5-4ª de febrero, 17-2ª de abril, 20-5ª de mayo, 3-1ª, 10-4ª y 5ª de junio, 16-7ª y 23-1ª de septiembre y 19-1ª de diciembre de 2002; 1-3ª de febrero, 26-4ª de marzo y 3-2ª, 11-3ª y 28-2ª de junio de 2003; 13-2ª de febrero y 30-3ª de noviembre de 2004; y 15-4ª de enero de 2007.

II.- Se pretende por el promotor, que se deje sin efecto el auto que acuerda la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en su inscripción de nacimiento. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Ministerio Fiscal para cancelar dicha anotación, al estimar que no es de aplicación en el presente caso el artículo 17.1.c) del Código civil actual, por encontrarse documentado como ciudadano argentino; expediente que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, el promotor solicitó que se declarara con valor de simple presunción su nacionalidad española al haber nacido en España en el año 1990, hijo de padres argentinos nacidos en Argentina. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- De acuerdo con el conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación argentina, los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de sus padres, sino que para ello es preciso un acto posterior, ya que el artículo 1 de la Ley 346 sobre Ciudadanía establece que son argentinos "los hijos de argentinos nativos que habiendo nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen".

Por lo que hay que concluir que, de acuerdo con lo anteriormente señalado y la documentación obrante en el expediente, en la que consta el promotor como ciudadano extranjero ante las

autoridades argentinas, el interesado no habría adquirido la nacionalidad argentina, entrando en juego el citado precepto del Código Civil, pues se produce una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución de la nacionalidad española.

V.- Por último, en cuanto a la inscripción de pérdida de la nacionalidad española de origen por utilización exclusiva de la nacionalidad que ostenta, que consta en la certificación literal de nacimiento del interesado, en principio, y de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, no se observa que el promotor hubiera incurrido en ninguno de los supuestos establecidos por el Código Civil que conllevan la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y anular y dejar sin efectos la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil de Marbella (Málaga).

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (142ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 4 de junio de 2009, Don R. y Doña M-L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, N-M. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 16 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que "son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano", por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 17 de junio de 2010, que

presentan escrito de alegaciones, por el que solicitan que se mantenga la nacionalidad española de la menor. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 9 de julio de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, N-M. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo

que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (143ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 28 de abril de 2009, Don J-L. y Doña L-X., solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, K-M. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 11 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 19 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que "son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano", por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 7 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones, por el que solicitan que se mantenga la nacionalidad

española de la menor. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 17 de mayo de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, K-M. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (144ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 28 de mayo de 2009, Don H. y Doña C. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, M-I. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 10 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 13 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 19 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 26 de mayo de 2010, que no presentan escrito de alegaciones alguno. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 23 de julio de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la

cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, M-I. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (145ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 8 de junio de 2009, Don P-D. y Doña C. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, M. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 16 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 30 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 5 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 17 de junio de 2010, que no presentan escrito de alegaciones alguno. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 2 de agosto de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la

cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, M. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (57ª)

VII.2.1.- Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de la promotora porque el asiento se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia).

HECHOS

1.- El 13 de junio de 2005, la Sra. B. mayor de edad y de nacionalidad boliviana, suscribió acta de opción a la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia) basada en la nacionalidad española de su padre. Consta en el expediente la siguiente documentación: hoja de declaración de datos para la inscripción, certificado boliviano de nacimiento de la interesada el 9 de octubre de 1984, hija de A. y de C. certificado de bautismo e inscripción de nacimiento de A. con marginal de recuperación de la nacionalidad española el 11 de junio de 2002.

2.- La encargada del registro civil consular inició actuaciones en 2010 para cancelar la inscripción al tener noticia de que la certificación boliviana de nacimiento presentada por la interesada para la obtención de la inscripción pudo estar falsificada. Recabada información al respecto a la Dirección General de Registro Civil de Bolivia, dicho organismo remitió informe elaborado por el Registro Civil de Beni (Bolivia) fechado el 3 de mayo de 2010, donde figura que, entre otras, la partida de nacimiento aportada por la promotora para obtener su inscripción en el Registro Civil español contiene datos falsos y se recomienda iniciar las acciones legales que correspondan. Notificada la interesada, aportó a su vez un informe fechado el 8 de julio de 2010 y emitido también por el jefe de archivos del Registro Civil de Beni donde se notifica que la partida de nacimiento practicada en 1985 que contiene los datos que figuran en la certificación que sirvió de base para la inscripción en España existió, aunque resultó destruida y se procedió a reponerla en 2007 con el mismo contenido en un nuevo libro.

3.- Previo informe favorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 12 de septiembre de 2010 acordando la cancelación de la inscripción por haberse practicado basándose en un documento manifiestamente ilegal.

4.- Notificada la resolución, se presentó recurso alegando que la certificación aportada no era falsa sino que correspondía a la original practicada en 1985, si bien esta resultó posteriormente destruida y se procedió a reconstruirla, con el mismo contenido, en 2007, lo que explica las diferencias observadas en el primer informe del Registro Civil local en cuanto a la consignación del libro, número de partida y folio.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia) se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 95.2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de 2009.

II.- La promotora instó en 2005 su inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española por ser hija de padre español que había recuperado la nacionalidad en 2002. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro consular inició en 2010 el procedimiento de cancelación por considerar que el acceso al Registro se basó en un título manifiestamente ilegal al haber tenido conocimiento de que la certificación boliviana de nacimiento presentada en su día era falsa. Dicha cancelación constituye el objeto del presente recurso.

III.- Aunque la recurrente aporta en su escrito de alegaciones un nuevo informe emitido dos meses después del primero donde se reconoce que la inscripción a la que corresponden los datos que figuran en el certificado aportado por la interesada para obtener la inscripción en España existió pero que resultó destruida y se procedió a reconstruirla en 2007 en un nuevo libro, lo cierto es que el primer informe, que procede del mismo órgano, advierte claramente de la existencia de datos falsos, por lo que nos encontramos ante documentos contradictorios y sin que uno u otro haya sido corroborado con las debidas garantías como el correcto por una autoridad superior, de modo que, teniendo en cuenta toda la documentación disponible y atendiendo también, por razones puramente objetivas, a la información obtenida en primer lugar tras la investigación impulsada por el propio consulado, cabe considerar correcta la actuación de la encargada procediendo a la cancelación de una inscripción sobre la que recaen fundadas sospechas de que se ha basado en un título manifiestamente ilegal.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia).

VIII. PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

VIII.4.- Otras cuestiones

VIII.4.2.- Recursos en los que ha decaído el objeto

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (62ª)

VIII.4.2.-Autorización de matrimonio civil.

Fallecido uno de los solicitantes durante la pendencia del recurso, se acuerda el archivo del expediente por pérdida sobrevinida de objeto.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid, Don J. nacido el 2 de junio de 1917 en L de D. (S) y de nacionalidad española, y Doña Z. nacida el 21 de febrero de 1946 en B. (Polonia) y de nacionalidad polaca, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Aportaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificado del anterior matrimonio y certificado de defunción de la primera esposa, volante de empadronamiento en M. y declaración jurada de estado civil, viudo, y de la interesada; certificado plurilingüe de nacimiento y de matrimonio anterior con anotación de divorcio, permiso de residencia en España para ciudadano de régimen comunitario, volante de empadronamiento en M. y declaración jurada de estado civil, divorciada.

2.- Ratificados los interesados, con fecha 7 de noviembre de 2011 comparece un hijo del promotor para poner de manifiesto ante el Encargado del Registro que el matrimonio que pretende su padre es de mera conveniencia, para que la interesada sea beneficiaria en su momento de la pensión de viudedad, añadiendo que ya lo solicitaron en ese mismo Registro en el año 2010, aunque luego desistieron. Con fecha 8 de noviembre de 2011 se llevan a cabo las audiencias reservadas a los promotores y con fecha 18 del mismo mes se presenta nuevo escrito, esta vez por parte de los 3 hijos del promotor, relatando los hechos y circunstancias que consideran evidencian la manipulación que sufre su padre, solicitando el examen del mismo por el médico forense del Registro Civil.

3.- El Ministerio Fiscal propone la realización del examen forense y el Encargado dicta providencia accediendo a lo solicitado. Con fecha 11 de enero comparecen de nuevo los hijos del promotor y el día 16 del mismo mes se lleva a cabo la entrevista al Sr. A. por parte del médico forense, concluido la cual informa que considera que tiene capacidad suficiente para discernir y comprender lo que significa el matrimonio civil. El Ministerio Fiscal no se opone a la autorización del matrimonio. El Encargado del Registro Civil dictó auto el 31 de enero de 2012, denegando la solicitud de autorización del matrimonio por falta de verdadero consentimiento matrimonial, apreciada en el resultado de las

audiencias por él practicadas, que indican que los fines perseguidos no son los propios de la institución.

4.- Notificada la resolución al Ministerio fiscal y a los promotores, el Sr. A. a través de representante legal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto. De este recurso se dio traslado a la interesada que no formuló alegación alguna.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se adhirió al mismo. El Encargado del Registro Civil se ratificó en su resolución y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

6.- En el momento de examinar el expediente instruido, la resolución dictada y las alegaciones formuladas ha sido conocido por este Centro Directivo que durante la tramitación de la apelación el promotor ha fallecido, con fecha 25 de julio de 2013, constando la inscripción del hecho en el Registro Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 44, 45, 55, 56, 57 y 73 del Código civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras de 13-3ª de octubre de 2006, 30-1ª de marzo y 12-1ª de junio de 2007, 2-1ª de junio de 2009, 26-6ª de octubre de 2010 y 13-5ª de junio de 2011.

II.- En el presente caso el Sr. A. y la Sra. Z. ciudadano español y polaca respectivamente promueven expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Tras la tramitación correspondiente el Encargado del Registro Civil de Madrid acuerda no autorizar la celebración del matrimonio mediante auto que constituye el objeto del presente recurso, en el momento de cuya resolución ha sido conocido por este Centro Directivo que i después de la interposición de la apelación uno de los promotores, concretamente el ciudadano español, falleció.

III.- Por este hecho no se considera necesario entrar a examinar en esta instancia las circunstancias y hechos concretos en los que el Encargado ha fundamentado su decisión denegatoria ya que, fallecido uno de los futuros contrayentes, el recurso ha perdido sobrevenidamente su objeto sin que, por lo demás, se haya de someter la decisión de dar por concluido el expediente sin dictar resolución sobre el fondo al trámite de conformidad del otro promotor dado que, aun cuando el recurso prosperara, su objeto ha devenido jurídicamente imposible.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: archivar el recurso interpuesto por pérdida sobrevenida de objeto.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (72ª)

VIII.4.2.-Archivo de expediente de rectificación de error en inscripción de nacimiento

Satisfecha la pretensión del interesado al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC), procede acordar el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

1.- En oficio con entrada en el Registro Civil de Zaragoza en fecha 9 de marzo de 2010 la Sección Consular de la Embajada de España en Riad (Arabia Saudí) expone que en la inscripción de nacimiento del Sr. A. El-S. fue consignado al nacido un solo apellido y solicita que, de considerarse oportuno, se tramite expediente de rectificación de errores y se haga constar que su segundo apellido es Y. dato indispensable para la renovación de su pasaporte. Acompaña fotocopia compulsada de inscripción de nacimiento del interesado, nacido en Z. el 22 de junio de 1977, con nota marginal, practicada el 3 de diciembre de 1980, de opción por su padre a la nacionalidad española, y certificación literal de nacimiento de su madre, Mª del P. Y. Por la Juez Encargada se dispuso instruir expediente y que se una al mismo testimonio de los documentos obrantes en el expediente de nacionalidad en el que trae causa la nota marginal.

2.- El ministerio fiscal, visto que en lo actuado se pone de manifiesto la omisión del segundo apellido del inscrito en su inscripción de nacimiento, informó que nada tiene que oponer a la subsanación del error y el 29 de abril de 2010 la Juez Encargada, teniendo en cuenta que el Código Civil aplicable en la fecha del nacimiento determinó su inscripción siguiendo la nacionalidad siria del padre, dictó auto disponiendo que, no acreditado el error alegado, no ha lugar a la rectificación solicitada.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el año 1998 sus dos hermanas y él fueron citados por la Embajada de España en Riad para fijar su nacionalidad española, que por entonces él estaba estudiando en Jordania, cuya Embajada no lo llamó y que ahora, pasados los años, se le comunica que su nombre no figura entre las personas que poseen la nacionalidad española, siendo que no tiene ninguna otra, se considera español, nació en Z. su madre es española de origen y su padre nacionalizado español y él está casado con una española y tiene dos hijos inscritos en la Embajada de España en Damasco [Siria] y libro de familia español; y aportando, como prueba documental, fotocopia de inscripción de matrimonio y de libro de familia que expresan que es español y que su segundo apellido es Y.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió al recurso, y la Juez Encargada informó en el sentido de dar por reproducidos los fundamentos jurídicos del auto dictado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

5.- En el momento de examinar el expediente instruido, la resolución dictada y las alegaciones formuladas ha sido conocido por este Centro Directivo que durante la tramitación de la apelación el interesado ha recuperado la nacionalidad española y que en la inscripción marginal practicada en la de nacimiento consta que, según la ley española, el nombre y los apellidos del inscrito son en adelante A. El-S. Y.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de octubre de 2006; 25-1ª de febrero, 1-2ª de julio y 24-10ª de noviembre de 2008; 11-3ª de noviembre de 2009, 26-26ª de julio de 2011 y 6-20ª de julio de 2012.

II.- Se pretende mediante este expediente la rectificación en la inscripción de nacimiento de A. El-S. del error que se estima cometido por haberse omitido su segundo apellido, Y. La Juez Encargada, teniendo en cuenta que el Código Civil aplicable en la fecha del nacimiento determinó su inscripción siguiendo la nacionalidad siria del padre, dispuso que no ha lugar a la rectificación solicitada mediante auto de 29 de abril de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el interesado y al que se adhiere el ministerio fiscal. En el momento de examinar el expediente instruido, la resolución dictada y las alegaciones formuladas ha sido conocido por este Centro Directivo que durante la tramitación de la apelación al recurrente, previa recuperación de la nacionalidad española, le ha sido inscrito Y. como segundo apellido.

III.- Hay que concluir por tanto que, ya obtenida su pretensión por el interesado, no resulta necesario ni pertinente entrar a examinar en esta instancia las circunstancias y los razonamientos concretos en los que la Juez Encargada ha fundamentado su decisión denegatoria, el recurso ha perdido su objeto y procede tenerlo por decaído.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: archivar el recurso interpuesto por pérdida sobrevenida de objeto.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

VIII.4.4.- Otras cuestiones

Resolución de 05 de Diciembre de 2013 (2ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 11 de mayo de 2009, D. B.y Dª. G., solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, M., nacida en M. el.. de de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 27 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República

de Bolivia y el artículo 17.1.c) del Cc, procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 16 de febrero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 19 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 3 de mayo de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 19 de mayo de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 19 de febrero de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres de la menor interesada, nacida en M. el. de ... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 27 de mayo de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano la menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 19 de febrero de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 19 de mayo de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que los promotores indicaran que se trataba de un recurso, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra

parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 05 de Diciembre de 2013

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (11ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 4 de junio de 2009, Don H-O. y Doña I-M. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, I-E. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 16 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que "son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano", por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 10 de junio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que

consideren convenientes. Presentan las mismas el 1 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 30 de abril de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres de la menor interesada, nacida en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 16 de junio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano la menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 30 de abril de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 1 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que los promotores indicaran que se trataba de un recurso de alzada, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (12ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra providencia del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 30 de abril de 2009, Don J-D. y Doña D-R. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, N-D. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 13 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 26 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 22 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 5 de julio de 2010, que presentan escrito de alegaciones en el que solicitan que no se proceda a la cancelación de la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que el menor no tiene la nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 22 de febrero de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 13 de mayo de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano la menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 22 de febrero de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 19 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, el Encargado del Registro ha entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (13ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 15 de junio de 2009, Don A. y Doña M-R. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, D. nacido en M el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil.

Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 19 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 30 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 5 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 1 de junio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 15 de junio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 5 de mayo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el ... de ... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 19 de junio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 5 de mayo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 15 de junio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección

General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (14ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 22 de mayo de 2009, Don R. y Doña S. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, R-A. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 6 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que "son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano", por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 15 de abril de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 19 de mayo de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 2 de junio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que el menor no tiene la nacionalidad al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 15 de abril de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M: el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de junio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 15 de abril de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 2 de junio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (15ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 18 de junio de 2009, Don M. y Doña M. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, M-D. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de julio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 12 de mayo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que "son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano", por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 28 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 29 de junio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 14 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 28 de mayo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras,

de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de julio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 28 de mayo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 14 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que los promotores indicaran que se trataba de un recurso, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (16ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 22 de mayo de 2009, Don J. y Doña A-V. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, J. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 12 de marzo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 22 de marzo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 7 de julio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 14 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que el menor no tiene la nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 22 de marzo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de junio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 22 de marzo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción

que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 14 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, el Encargado del Registro ha entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que los promotores indicaran que se trataba de un recurso, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (17ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 22 de mayo de 2009, Don C-L. y Doña Mª-L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, N-T. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de julio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 12 de mayo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado

estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 28 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 8 de julio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 21 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que el menor no tiene la nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 28 de mayo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de julio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 28 de mayo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 21 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, el Encargado del Registro ha entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección

General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (18ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 19 de junio de 2009, Don M. y Doña P-S. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, T-P. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de julio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 12 de mayo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 28 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 2 de julio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 14 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que la menor no tiene la nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c)

del Código Civil. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 28 de mayo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres de la menor interesada, nacida en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de julio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 28 de mayo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 14 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, el Encargado del Registro ha entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 12 de Diciembre de 2013 (118ª)

VIII.4.4.-Nueva solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española por patria potestad.

1º.- Las decisiones del Encargado del Registro son recurribles en vía gubernativa. Una vez firmes solo cabe acudir, cuando corresponda, a la vía judicial ordinaria.

2º.- En los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que sería posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida, pero sólo si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta antes.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil Central, Doña O. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hija, M-O. nacida en la República Dominicana el ... de ... de 1993, por haber estado sujeta a la patria potestad de una española, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: acta de nacimiento inextensa de la interesada; certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 3 de marzo de 2005; certificado de empadronamiento; y fotocopia del DNI de la promotora.

2.- El Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 26 de octubre de 2012, indicando que la misma solicitud fue denegada por resolución de fecha 21 de diciembre de 2007 en el marco de otro expediente, acuerdo que fue recurrido por la promotora y desestimado por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado en fecha 3 de marzo de 2009 al entender que las certificaciones dominicanas acompañadas no reunían las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su reglamento para dar fe de la filiación materna alegada. Posteriormente, se vuelve a solicitar la inscripción de nacimiento fuera de plazo y opción a la nacionalidad española de la menor interesada sin que se aporte ningún tipo de prueba que pudiera desvirtuar, a juicio del Encargado, los fundamentos referidos en la resolución recaída en el año 2007 y confirmada por la DGRN, por lo que entiende que procede desestimar la solicitud realizada.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y aportando dictamen pericial de investigación biológica de la maternidad.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, este interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo recurrido y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 y 22 del Código civil (CC.); 15, 16, 23, 26 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de

2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- La promotora ha intentado la inscripción de nacimiento en el Registro Civil de su hija, M-O. nacida el ... de ... de 1993 en la República Dominicana, previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil, alegando su nacionalidad española, que adquirió por residencia el 3 de marzo de 2005. El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de 26 de octubre de 2012, se ratificó en el auto emitido el 21 de diciembre de 2007 sobre el mismo asunto, al no existir nuevas pruebas que puedan rectificar la denegación señalada. Contra este acuerdo interpuso la promotora el recurso objeto de la presente resolución.

III.- En primer lugar, cabe señalar que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión.

IV.- En el presente caso, con anterioridad a este expediente se había formulado idéntica petición de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad por parte de la promotora ante el mismo Registro Civil, siguiéndose la tramitación de un expediente gubernativo que concluyó con auto del Encargado del Registro Civil Central de fecha 21 de diciembre de 2007. Nuevamente se ha incoado expediente por la promotora con la misma finalidad, sin que se aporten documentos nuevos que no pudieran haberse tenido en cuenta en el expediente anterior, y que concluyó por acuerdo del Encargado del Registro Civil Central de 26 de octubre de 2012. Consta que la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado con respecto del primer auto, recurso que fue desestimado por resolución de este Centro Directivo de fecha 3 de marzo de 2009.

Con esta manera de proceder la solicitante pretende que vuelva a considerarse su petición por la vía de un segundo expediente, soslayando los hechos que resultaron comprobados y motivaron la denegación del primero y contraviniendo las reglas establecidas y el régimen de recursos legal y reglamentariamente previsto. En cuanto al dictamen pericial de investigación biológica de la maternidad aportado en trámite de recurso, sobre este tipo de prueba, tiene reiteradamente señalado este Centro Directivo, que su valor podría ser suficiente en el ámbito de un procedimiento judicial por las garantías procesales que dicha vía proporciona, pero no en esta del expediente gubernativo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (79ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 19 de junio de 2009, Don E-I. y Doña A-L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, A-I. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de julio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 12 de mayo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 28 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 16 de julio de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 30 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 28 de mayo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres de la menor interesada, nacida en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de julio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano la menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 28 de mayo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción

que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 30 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que los promotores indicaran que se trataba de un recurso, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (80ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 12 de mayo de 2009, Don I-E. y Doña L-E. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, I-D. nacido en M el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 25 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 16 de febrero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado

estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 19 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 6 de septiembre de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 15 de septiembre de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 19 de febrero de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 25 de mayo de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 19 de febrero de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 15 de septiembre de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado

no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (20ª)

VIII.4.4.- Nueva solicitud de autorización de matrimonio civil.

1º.- Las decisiones del Encargado del Registro son recurribles en vía gubernativa sin que quepa ulterior recurso, a salvo, cuando corresponda, la vía judicial ordinaria.

2º.- En los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el Ministerio Fiscal contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Santa Eulalia del Rio (Balears)

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Santa Eulalia del Río el día 19 de agosto de 2011 Don P.T., de nacionalidad española, nacido en S. el 1 de diciembre de 1950 iniciaba expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil con Doña M. M., de nacionalidad paraguaya, nacida en L. (Paraguay) el 5 de junio de 1984. Acompañaba la siguiente documentación: del promotor, documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, celebrado el 28 de abril de 1973, con anotación de sentencia de divorcio de fecha 27 de enero de 1983, declaración jurada de estado civil, divorciado y certificado de empadronamiento en Sa., y de la promotora; pasaporte, certificado de empadronamiento en Sa. desde 04 de marzo de 2010, certificado de nacimiento y certificado de soltería.

2.- En el mismo día los promotores comparecieron a fin de ratificar la solicitud, son oídos en audiencia reservada y con fecha 22 de agosto de 2011 prestan su testimonio dos personas que conocen a los interesados y consideran que no existen impedimentos para la celebración del matrimonio. Consta unido al expediente la documentación correspondiente al otro procedimiento que instaron en el mismo Registro Civil los propios promotores el 15 de julio de 2011, que concluyó con resolución del Encargado denegando la autorización de matrimonio solicitada, habida cuenta que en las audiencias realizadas se apreciaban discrepancias que permitían deducir junto a otras circunstancias, diferencia de edad, situación irregular de la promotora extranjera, que no existía verdadero consentimiento matrimonial. Este auto no fue recurrido por los promotores, además al día siguiente de la notificación, 11 de agosto de 2011, el Sr. T. manifestó en el propio Registro que no iba a presentar recurso y solicitó

la devolución de la documentación aportada al expediente, con la que presentó la nueva solicitud 7 días después.

3.- El Ministerio Fiscal, apreciando que la duplicidad de expedientes, sin que hubiera transcurrido el plazo legal de recurso, incluyendo reiteración de la entrevista entre uno y otro y las diferentes contestaciones harían presumir vicios de consentimiento, se opuso a la celebración del matrimonio. El 20 de septiembre de 2011 el Encargado, estimando que tras la segunda entrevista su convencimiento sobre el fondo del asunto, consentimiento auténtico o viciado, ha variado dictó auto disponiendo autorizar el matrimonio solicitado.

4.- Notificada la resolución a los promotores y al Ministerio Fiscal, aquellos muestran su conformidad con el mismo y éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la segunda solicitud fue presentada y admitida cuando no había transcurrido el plazo de recurso, que la intención de no recurrir fue sólo manifestada por el promotor, no por la promotora, y no por el propio Ministerio Fiscal, que se han reiterado las cuestiones planteadas en la audiencia reservada lo que desvirtúa su finalidad, reiterando las circunstancias de diferencia de edad y de la situación de la promotora en España, solicitando por fin se deje sin efecto la autorización concedida. De la interposición se dio traslado a los interesados que no formularon alegación alguna en el plazo que les fue concedido y seguidamente la Juez Encargada emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 27, 29 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 238, 245, 246, 247, 341 y siguientes, 355 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 14-4ª de noviembre de 2005, 6-2ª de abril, 24-2ª de mayo, 12-3ª y 16-3ª de junio, 12-3ª y 27-1ª de diciembre de 2006; 23-8ª de marzo de 2009, 15-3ª de junio de 2010 y 27-9ª de enero de 2011.

II.- En el caso actual se solicita por los promotores, de nacionalidad española y paraguaya, autorización para la celebración de matrimonio civil mediante comparecencia en el Registro Civil de Santa Eulalia del Río, en el que una semana antes les había sido denegada la misma petición sin que interpusieran el recurso correspondiente contra la resolución. Consta unido al expediente testimonio de las actuaciones realizadas en el anterior. A la vista la documentación aportada y de las nuevas diligencias practicadas el Encargado del Registro Civil de Santa Eulalia del Río dictó resolución autorizando la solicitud con el razonamiento jurídico de que había llegado al convencimiento de que la relación es real y el consentimiento para el matrimonio no busca una intencionalidad distinta a la propia de la institución. Este auto de fecha 20 de septiembre de 2011 constituye el objeto del presente recurso presentado por el Ministerio Fiscal.

III.- En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión.

IV.- El 15 de julio de 2011, los interesados promueven en el Registro Civil de Santa Eulalia del Río expediente matrimonial que concluye con auto denegatorio notificado el 11 de agosto de 2011, y aún no declarado firme se inicia por las mismas personas en el mismo Registro un nuevo expediente. Si estaban en desacuerdo con el mencionado auto, los solicitantes hubieran podido impugnarlo en la vía correspondiente pero el promotor manifiesta expresamente ante el Registro que no se va interponer recurso y solicita la devolución de la documentación y, prácticamente sin solución de continuidad y sin justificar la concurrencia de nuevos hechos que no hubieran podido tenerse en cuenta al tomar la decisión (cfr. art. 358 RRC), presentan una nueva solicitud con idéntica finalidad, que es tramitada mediante el correspondiente expediente.

Este nuevo procedimiento es un calco del llevado a cabo un mes y medio antes, incluso respecto de las audiencias realizadas, mostrando diferentes contestaciones a las mismas preguntas y aún algún desconocimiento o vaguedad en la contestación, así el promotor contesta con un “al poco de conocerse” a la pregunta sobre cuando iniciaron su relación sentimental, cuando la promotora precisa que en octubre de 2009, es decir en un mes ella llegó a España, empezó a trabajar en casa del hermano del promotor e iniciaron su relación, cuando un mes antes el promotor desconocía lugar y fecha de nacimiento de su pareja, los nombres de sus padres e incluso el trabajo que ella realizaba, no obstante sigue desconociendo los nombres de los hermanos de la Sra. M. porque son poco frecuentes para él, dos de esos nombres son D. y R., igualmente la promotora menciona que conoce a los 8 hermanos del Sr. T., no obstante solo menciona 2 nombres y ninguno de ellos es el del hermano fallecido en cuya casa ella trabajaba, al que se refiere como que un hermano ya falleció, es evidente que con esta reiteración en la entrevista, no una ampliación de la misa, no se consigue su finalidad, que es llevar al convencimiento de que el consentimiento prestado no está viciado con motivaciones diferentes a las de la propia institución. Con esta manera de proceder los solicitantes pretendieron que volviera a considerarse su petición por la vía de un segundo expediente, soslayando los hechos que resultaron suficientes para motivar la denegación del primero, sin acudir a la vía de recurso legalmente establecida.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y revocar el auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Santa Eulalia del Rio

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (45ª)

VIII.4.4.-Solicitud presentada fuera de plazo. Sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.

Se deniega porque la solicitud ha sido presentada fuera del plazo legalmente establecido.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra resolución del Encargado del Registro Civil Consular en San Juan de Puerto Rico

HECHOS

1.- Doña C. presentó con fecha 17 de enero de 2013 solicitud de opción a la nacionalidad española, según lo previsto en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, presentando en apoyo de su solicitud la documentación pertinente que obra en el expediente de referencia.

2.- Con fecha 05 de junio 2013 el Encargado del Registro Civil Consular, deniega la solicitud de la interesada por entender que ha sido presentada fuera de plazo ya que tuvo entrada con posterioridad al día 27 de diciembre de 2011, último día posible para presentar dicha solicitud de acuerdo con el plazo establecido al efecto en la Ley citada.

3.- Notificada la resolución a la promotora, y no estando conforme con dicha resolución, en fecha 26 de junio de 2013 se presentó escrito de recurso ante esta Dirección General.

4.- El Ministerio Fiscal emite el correspondiente informe, haciéndolo igualmente el Encargado del Registro Civil Consular, que remite del expediente a este Centro Directivo para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vista la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica y visto el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el que se prorroga un año el plazo para solicitar la nacionalidad española por opción, previsto en la Disposición antes citada.

II.- El interesado presentó solicitud ante el Registro Civil Consular pretendiendo el reconocimiento de la nacionalidad española de conformidad con lo establecido en la ley 52/2007 de Memoria Histórica. Con fecha 05 de junio de 2013, el Encargado del Registro Civil Consular denegó la admisión de la solicitud de la nacionalidad española al haber sido presentada fuera del plazo legalmente previsto.

III.- La Disposición Adicional Séptima de la Ley antes citada fijó un plazo de dos años para que, aquellos interesados que reunieran los requisitos previstos en la misma, pudieran solicitar la nacionalidad española de origen. Añadiendo que el plazo de los dos años para presentar la correspondiente solicitud habría de computarse desde la entrada en vigor de dicha Disposición Adicional, es decir que el plazo se fijó hasta el día 27 de diciembre de 2010. No obstante, la propia Disposición citada estableció la posibilidad de que, como máximo, se pudiese prorrogar dicho plazo un año más, si así lo acordaba el Consejo de Ministros. En tal sentido, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2010, el Consejo de Ministros decidió acogerse a dicha posibilidad prorrogando el citado plazo hasta el día 27 de diciembre de 2011.

IV.- Como ya se ha señalado, la interesada presentó su solicitud el día 17 de enero de 2013 mediante escrito dirigido al Registro Civil de Consular en San Juan de Puerto Rico, presentación que resulta extemporánea al plazo máximo fijado. Asimismo tal sentido lo recoge el Ministerio Fiscal en el informe que realiza de contestación al mismo, manifestando su acuerdo con la decisión adoptada por el Encargado del Registro Civil Consular.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: la no admisión de la solicitud por estar presentada fuera de plazo y la confirmación del auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San Juan de Puerto Rico.

Resolución de 20 de Diciembre de 2013 (46ª)

VIII.4.4.-Solicitud presentada fuera de plazo. Sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.

Se deniega porque la solicitud ha sido presentada fuera del plazo legalmente establecido.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra resolución del Juez Encargado del Registro Civil Central

HECHOS

- 1.- Don C-M. presentó con fecha 20 de junio de 2012 solicitud de opción a la nacionalidad española, según lo previsto en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, presentando en apoyo de su solicitud la documentación pertinente que obra en el expediente de referencia.
- 2.- Con fecha 07 de mayo de 2013 el Juez Encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo denegando la solicitud del interesado por entender que ha sido presentada fuera de plazo ya que tuvo entrada con posterioridad al día 27 de diciembre de 2011, último día posible para presentar dicha solicitud de acuerdo con el plazo establecido al efecto en la Ley citada.
- 3.- Notificada la resolución al promotor, y no estando conforme con dicha resolución, en fecha 17 de julio de 2013 se presentó escrito de recurso ante el Registro Civil Central.
- 4.- El Ministerio Fiscal emite el correspondiente informe, haciéndolo igualmente el Juez Encargado del Registro Civil Central, que remite del expediente a este Centro Directivo para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vista la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica y visto el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el que se prorroga un año el plazo para solicitar la nacionalidad española por opción, previsto en la Disposición antes citada.

II.- El interesado presentó solicitud ante el Registro Civil Central pretendiendo el reconocimiento de la nacionalidad española de conformidad con lo establecido en la ley 52/2007 de Memoria Histórica. Con fecha 07 de mayo de 2013, el Juez Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo por la que decidía denegar la práctica de la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española.

III.- La Disposición Adicional Séptima de la Ley antes citada fijó un plazo de dos años para que, aquellos interesados que reunieran los requisitos previstos en la misma, pudieran solicitar la nacionalidad española de origen. Añadiendo que el plazo de los dos años para presentar la correspondiente solicitud habría de computarse desde la entrada en vigor de dicha Disposición Adicional, es decir que el plazo se fijó hasta el día 27 de diciembre de 2010. No obstante, la propia Disposición citada estableció la posibilidad de que, como máximo, se pudiese prorrogar dicho plazo un año más, si así lo acordaba el Consejo de Ministros.

En tal sentido, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2010, el Consejo de Ministros decidió acogerse a dicha posibilidad prorrogando el citado plazo hasta el día 27 de diciembre de 2011.

IV.- Como ya se ha señalado, el interesado presentó su solicitud el día 20 de junio de 2012 mediante escrito dirigido al Registro Civil de Sabadell, presentación que resulta extemporánea al plazo máximo fijado. Asimismo tal sentido lo recoge el Ministerio Fiscal en el informe que realiza de contestación al mismo, manifestando su acuerdo con la decisión adoptada por el Encargado del Registro Civil Central.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: la no admisión de la solicitud por estar presentada fuera de plazo y la confirmación del auto apelado.

Madrid, 20 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

IX. PUBLICIDAD

IX.1.- Publicidad formal-acceso de los interesados al contenido del RC

IX.1.1.- Publicidad formal-expedición de certificaciones y consulta libros del registro

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (155ª)

IX.1.1.- Publicidad formal

Se confirma la denegación para acceder a la consulta de los libros del Registro Civil de Mascaraque (Toledo) desde su creación para la elaboración de un árbol genealógico porque el examen directo de los libros es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada por razones preferentes del servicio y para preservar la publicidad restringida de determinados asientos.

En el expediente sobre consulta de libros del Registro Civil remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Orgaz (Toledo).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Orgaz (Toledo) el 1 de noviembre de 2010, Don J-P. mayor de edad y con domicilio en M. solicitaba autorización para consultar los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones del registro de la población de M. (T) desde su creación, alegando que está realizando el árbol genealógico del abuelo de su esposa, nacido en dicha localidad en diciembre de 1900. Acompañaban a la solicitud copias del DNI del promotor y de su esposa y un cuadro genealógico de los ascendientes de esta última.

2.- La encargada dictó acuerdo el 10 de noviembre de 2010 denegando la pretensión por falta de interés legítimo, en tanto que no se trata de un estudio histórico o académico, y porque el examen directo de los libros del registro es una posibilidad excepcional limitada, por razones del derecho a la intimidad personal y familiar, a determinados supuestos.

3.- El interesado interpuso recurso contra la resolución anterior alegando que, dada la antigüedad de los datos que se pretenden consultar, no parece que pueda vulnerarse el derecho a la intimidad y que el interés legítimo está acreditado, aunque sea un interés particular, en tanto que se trata de una investigación genealógica sobre los ancestros de su esposa.

4.- Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, emitió informe desfavorable a su estimación. La encargada del Registro Civil de Orgaz remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil (LRC); 17, 21, 22, 46, 47 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de enero de 1987 y las resoluciones de 8 de junio de 1995; 7 de enero de 1997; 10 de abril de 2002; 28 de marzo y 25-2ª de junio de 2003; 1-1ª de junio de 2004; 6-1ª de julio de 2005; 28-2ª de febrero de 2006; 25-2ª de septiembre de 2007 y 2-3ª de julio de 2008.

II.- El Registro Civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por esto, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho, en principio, a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC), sin perjuicio, claro está, de los supuestos de publicidad restringida a que se refieren los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Civil. Ello significa, en principio, que el interesado en obtener una certificación o consultar un asiento del Registro Civil no tiene que acreditar el interés especial, porque este se le presume por el hecho de solicitarlo. Pero esta regla general, como recordó la Instrucción de este centro directivo de 9 de enero de 1987, no debe hacer olvidar, sin embargo, de un lado, que hay casos de publicidad restringida porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que el servicio público se resentiría si el particular, legitimado para obtener una certificación, pudiera a su capricho solicitar el número de certificaciones o consultas que juzgara oportuno. Por ello, la pretensión del recurrente, tal como ha sido formulada, no puede ser estimada en tanto que la autorización para la consulta directa de los libros del registro es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada a la manifestación de determinados asientos, una vez localizados, pero que no puede extenderse al examen de cualquier libro a elección del consultante.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Orgaz (Toledo).

Resolución de 13 de Diciembre de 2013 (56ª)

IX.1.1.- Publicidad formal.

Se confirma la denegación de expedición de sucesivas certificaciones registrales, en aplicación de los criterios de la Instrucción de 9 de enero de 1987, porque el interés del promotor no le legitima al efecto.

En el expediente sobre solicitud reiterada de expedición de certificaciones del Registro Civil por parte del mismo interesado remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Noia (A Coruña).

HECHOS

1.- El 28 de abril de 2010 la encargada del Registro Civil de Noia dictó providencia por medio de la cual, ante la solicitud de una certificación literal de nacimiento remitida por Don D. y a la vista de las numerosas peticiones anteriores realizadas por el mismo interesado, se requería a este para que aclarara y acreditara la finalidad de la pretensión de expedición de un número tan elevado de certificaciones.

2.- Por medio de escrito de 5 de mayo de 2010 presentado en el registro, el interesado, mayor de edad y con domicilio en M. manifestó que es aficionado a la genealogía y que hace años que está investigando sus antecedentes familiares procedentes de N. por vía de su bisabuelo, de modo que la información hasta ahora obtenida a través del Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela y del Registro Civil de Noia ha supuesto una expansión del árbol genealógico hasta unos cinco mil miembros de familias emparentadas con el interesado.

3.- La encargada del Registro Civil de Noia dictó providencia el 8 de julio de 2010 denegando la expedición de las certificaciones literales solicitadas porque la función básica del Registro Civil es probar el estado civil de las personas, sin estar supeditado a otros fines particulares que podrían suponer una utilización indebida de los datos registrales.

4.- El interesado interpuso recurso de reposición contra la resolución anterior alegando que el Registro Civil es público para quienes tengan interés en conocer los asientos salvo en los supuestos sometidos a publicidad restringida y que las solicitudes planteadas por el recurrente se han realizado espaciadamente en el tiempo y su expedición puede ser atendida por el registro como mejor convenga atendiendo a la carga de trabajo de dicho órgano, de modo que no tienen por qué suponer un entorpecimiento del servicio.

5.- La encargada dictó auto el 11 de octubre de 2010 desestimando el recurso porque la publicidad del Registro Civil no es absoluta, sino que está limitada a quienes tengan interés en conocer los asientos y se entiende que las 131 certificaciones solicitadas por el recurrente exceden del interés que podría justificar su expedición ya que pueden contener datos que afecten a la intimidad personal y familiar y su obtención no tiene por objeto probar el contenido del Registro o del estado civil de las personas.

6.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando que la Instrucción de 20 de marzo de 2002 de la DGRN alude a los posibles abusos derivados de las solicitudes múltiples de los particulares referidas a un mismo asiento o documento y que la última certificación solicitada no había sido objeto de petición anterior. Por otro lado, el recurrente insiste en que todas las solicitudes se refieren a personas con él emparentadas, que no existe afectación a la intimidad de las personas, que se le habían venido expidiendo hasta el momento sin ningún problema y que las peticiones se realizaron siempre sin carácter de urgencia. Al escrito de recurso se adjuntaba una relación de 109 certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción expedidas por el registro al interesado entre el 18 de febrero de 2008 y el 7 de enero de 2010.

7.- Trasladada la interposición del recurso al ministerio fiscal, emitió informe desfavorable a su estimación. La encargada del Registro Civil de Noia se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil (LRC); 17, 21, 22 y 30 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de enero de 1987 y las resoluciones de 8 de junio de 1995; 7 de enero de 1997; 10 de abril de 2002; 28 de marzo y 25-2ª de junio de 2003; 1-1ª de junio de 2004; 6-1ª de julio de 2005; 28-2ª de febrero de 2006 y 26-2ª de marzo de 2008.

II.- El Registro Civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por esto, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho, en principio, a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC), sin perjuicio, claro está, de los supuestos de publicidad restringida a que se refieren los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Civil. Ello significa, en principio, que el interesado en obtener una certificación o consultar un asiento del Registro Civil no tiene que acreditar el interés especial, porque este se le presume por el hecho de solicitarlo. Pero esta regla general, como recordó la Instrucción de este centro directivo de 9 de enero de 1987, no debe hacer olvidar, sin embargo, de un lado, que hay casos de publicidad restringida porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que el servicio público se resentiría si el particular, legitimado para obtener una certificación, pudiera a su

capricho solicitar el número de certificaciones o consultas que juzgara oportuno. En esta última razón se basa la encargada para denegar la expedición de la certificación solicitada, puesto que, según consta en la documentación contenida en el expediente, el interesado se ha servido ya en numerosas ocasiones de la publicidad del Registro, habiendo sido suficientemente atendido respecto de sus anteriores solicitudes.

III.- Del conjunto de disposiciones citadas en el fundamento primero aplicables a estos casos se desprenden las siguientes reglas:

1º) Las certificaciones que contengan alguno de los datos reservados enumerados en el artículo 21 RRC únicamente pueden ser expedidas, sin autorización especial, a las personas que menciona en cada caso el artículo 22 RRC. Este precepto, cuando habla de ascendientes o descendientes, no establece limitación de grado de parentesco ninguno, por lo que, en principio, no se debe interpretar en un sentido restrictivo estableciendo un límite que no contempla la citada norma.

2º) Si la certificación la solicita otra persona, es imprescindible que ésta obtenga la autorización expresa del encargado una vez justificado su interés legítimo y razón fundada para la petición. Se trata de una función de calificación sobre la concurrencia del interés legítimo en la que el encargado deberá aplicar el criterio sentado por este centro directivo en su instrucción, ya citada, de 9 de enero de 1987, en el sentido de que el interés que legitima para obtener certificaciones ha de estar relacionado directamente con la prueba del estado civil de las personas o del contenido del Registro. Si el interés se refiere a cuestiones distintas, el encargado puede y debe denegar la certificación. Con carácter general se puede decir que sobre esta cuestión la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado es bastante restrictiva. Así, aparte de simples motivos comerciales que no legitiman para obtener listas indiscriminadas de nacimientos y matrimonios (Resolución de 25 de mayo de 1988), se ha rechazado la publicidad en supuestos en que se alegaba un parentesco no probado (Resolución de 8 de junio de 1995), criterio extrapolable al presente caso, en el que el eventual interés alegado en la elaboración de un árbol genealógico se debe entender ya suficientemente satisfecho con la publicidad formal obtenida hasta el momento por el solicitante.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada

Madrid, 13 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Noia (A Coruña).

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (60ª)

IX.1.1.- Publicidad formal.

Se autoriza la expedición de las certificaciones de nacimiento de los padres, ya fallecidos, del interesado porque el Registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos y dicho interés concurre, incluso en los supuestos sometidos a publicidad restringida, en los descendientes o herederos.

En el expediente sobre solicitud de expedición de certificaciones literales de inscripción de nacimiento en el Registro Civil remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Santander.

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el Registro Civil de Santander el 20 de octubre de 2010, Don M. mayor de edad y con domicilio en La S de I. (C), solicitaba la expedición de certificación literal de nacimiento de sus padres alegando un interés personal y familiar.

2.- La encargada dictó resolución el mismo día denegando la pretensión por falta de interés legítimo, en tanto que, a su juicio, la expedición de certificados debe estar relacionada con la prueba administrativa o judicial del estado civil.

3.- El interesado interpuso recurso contra la resolución anterior alegando que existe un interés personal y familiar con objeto de comprobar las fechas y lugares de nacimiento de sus padres así como la filiación de los inscritos. Con el recurso se adjuntaban las certificaciones de defunción de M^a del C. (fallecida el 15 de junio de 1999) y de L. (5 de abril de 1992).

4.- Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, emitió informe desfavorable a su estimación. La encargada del Registro Civil de Santander se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 6 de la Ley del Registro Civil (LRC); 17, 21 y 22, del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de enero de 1987 y las resoluciones 5-4^a de marzo de 1994, 14 de junio de 2000 y 19-2^a de octubre de 2001.

II.- El Registro Civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por esto, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho, en principio, a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC), sin perjuicio, claro está, de los supuestos de publicidad restringida a que se refieren los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Civil. Ello significa que el interesado en obtener una certificación o consultar un asiento del Registro Civil no tiene que acreditar el interés especial, porque este se le presume por el hecho de solicitarlo, si bien esta regla general, como recordó la Instrucción de este centro directivo de 9 de enero de 1987, no debe hacer olvidar, sin embargo, de un lado, que hay casos de publicidad restringida porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que el servicio público se resentiría si el particular, legitimado para obtener una certificación, pudiera a su capricho solicitar el número de certificaciones o consultas que juzgara oportuno. En este caso, se trata tan solo de la expedición de dos certificaciones de nacimiento correspondientes a los padres del interesado, concurriendo un interés legítimo que, como descendiente, se extiende incluso a supuestos sometidos a publicidad restringida (art. 22 RRC) de modo que, obviamente, la petición ha de estimarse comprendida dentro de la regla general de publicidad amplia que recoge la legislación del Registro Civil (arts. 6 LRC y 17 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander.

X. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

X.1.- Organización y funcionamiento

X.1.1.- Organización y funcionamiento en el registro civil

Resolución de 11 de Diciembre de 2013 (153ª)

X.1.1.- Organización y funcionamiento. Apertura de libros en lenguas oficiales.

No procede practicar inscripciones en euskera en los registros civiles no informatizados conforme a la Disposición Transitoria de la Ley 12/2005, de 22 de junio, y no procede extender las inscripciones en libros distintos de los previstos en la Ley.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento íntegramente en euskera remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Bergara (Gipuzkoa).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Bergara (Gipuzkoa) el 5 de noviembre de 2009, Doña S. y Don U. con domicilio en A. solicitaban que la inscripción de nacimiento de su segundo hijo, que estaban esperando en ese momento, se practicara íntegramente en euskera en el registro de su domicilio, tal como ya se había hecho con su primer hijo tras la emisión de un auto del encargado del Registro Civil de Bergara ordenando habilitar un libro especial en tanto no estuviera disponible la aplicación INFOREG en virtud del artículo 106 del Reglamento del Registro Civil, si bien en esta ocasión los promotores consideraban que se disponía de tiempo suficiente para que cuando se produjera el nacimiento ya estuviera implementada la aplicación INFOREG en el Registro Civil de Aretxabaleta para poder practicar la inscripción en el libro oficial. Subsidiariamente, para el caso de que no estuviera disponible todavía INFOREG, solicitaban que la inscripción se practicara entonces, como la de su hijo mayor, en el libro especial de nacimientos habilitado en euskera en dicho registro. Adjuntaban copias de varias consultas y comunicaciones entre distintos órganos de la Administración estatal y autonómica acerca de la implantación de la aplicación INFOREG y de la habilitación de libros en euskera.

2.- Mediante un nuevo escrito dirigido al Registro Civil de Bergara, los promotores comunicaban el nacimiento de su hijo O. el... de... de 2009.

3.- Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Bergara dictó auto el 22 de diciembre de 2009 denegando la pretensión formulada porque, si bien es cierto que el mismo registro había dictado anteriormente varias resoluciones en las que se acordó la apertura de libros especiales para la inscripción en euskera en tanto no se hubiera implementado la aplicación informática correspondiente, la misma encargada había advertido, posteriormente, la omisión de la preceptiva solicitud de autorización previa a la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante DGRN), por lo que se dirigió consulta a la referida DGRN dando cuenta de las resoluciones dictadas y solicitando la autorización omitida así como, en caso de no ser esta otorgada, indicaciones sobre cómo proceder respecto de las inscripciones ya realizadas en los libros especiales abiertos, sin que en el momento de dictarse la resolución se hubiera obtenido respuesta. No obstante, señalaba también la encargada en apoyo de su decisión que sí constaba una resolución de

la DGRN desestimatoria del recurso de apelación en un expediente idéntico al presente en el que el encargado del registro había denegado, por carencia de medios materiales, la solicitud de inscripción de nacimiento en euskera.

4.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, estando reconocido legalmente el derecho de los promotores de elegir la lengua oficial en la que desean que se realice la inscripción de nacimiento, no es admisible que tal derecho se vea menoscabado por la ausencia de implementación de un sistema informático cuando, además, la aplicación ya existe y está implantada en otros registros civiles. Por otro lado, consideran los recurrentes que, en tanto se pronuncia la DGRN sobre la consulta planteada en relación a los libros ya abiertos, lo procedente es que se sigan practicando inscripciones en ellos, pues otras instancias administrativas han reconocido su validez, como demuestra la expedición de DNI a su primer hijo, cuya inscripción abrió el libro especial del Registro Civil de Aretxabaleta en el que ya constan seis inscripciones más practicadas entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Por último, manifestaban los promotores que, aunque ante la denegación recurrida y para evitar otros perjuicios, iban a instar la inscripción de su hijo en el libro oficial en castellano, si bien con el contenido en euskera, no renunciaban a su derecho a que, una vez resuelto el recurso, si este fuera estimado, se cancele dicha inscripción y se sustituya por otra íntegramente en euskera.

5.- Al expediente se incorporó la inscripción de nacimiento del menor interesado practicado en el Registro Civil de Aretxabaleta en soporte en lengua castellana y con contenido en euskera. Asimismo, tuvo entrada en el registro escrito de los promotores solicitando que se hiciera constar marginalmente en dicha inscripción la interposición de recurso pendiente de resolución y que los promotores no han renunciado a que la inscripción se practique finalmente íntegramente en euskera.

6.- Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, emitió informe desfavorable a su estimación. La encargada del Registro Civil de Bergara remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

7.- Posteriormente, tuvo entrada en la DGRN un nuevo escrito presentado por los promotores en noviembre de 2011 en el que comunicaban que desde marzo de 2011 se encuentra implementada en el Registro Civil de Aretxabaleta la aplicación INFOREG y ya es posible la práctica de inscripciones tanto en euskera como en castellano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 3, 14 y 149 de la Constitución; el artículo 23 de la Ley del Registro Civil en la redacción dada por la Ley 12/2005, de 22 de junio; los artículos 16, 86, 194, 198, 298, 300, 347, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil; las órdenes ministeriales de 26 de mayo de 1988, 20 de julio de 1989 y 21 de enero de 1993; las sentencias del Tribunal Constitucional 82, 83 y 84/1986, 74/1989, 56/1990, 337/1994 y 87/1997; la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 26 de enero de 1993; las circulares de 26 de noviembre de 1980 y de 1 de marzo de 1984; y las resoluciones de 6 de noviembre de 1980, 22 de noviembre de 1985, 20 de octubre de 1987, 27 de junio de 1988, 16 de agosto de 1993, 15 de febrero de 1994, 26 (2ª) de octubre de 1996, 10 de enero y 2 de julio de 1997, 5 de septiembre de 1998, 28 de octubre de 1999, 22 (5ª) de febrero de 2007, 3 (3ª) y 30 (1ª, 2ª, 3ª y 4ª) de abril de 2009 y 28 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª), 29 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª) y 30 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª) de julio de 2011.

II.- El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Al amparo de dicha

norma constitucional, diferentes estatutos de Autonomía, entre ellos el del País Vasco, han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las comunidades autónomas que les corresponden. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha declarado que el artículo 3 de la Constitución supone una habilitación de las comunidades autónomas con lengua propia para que, en el marco establecido en sus estatutos de Autonomía, puedan regular el alcance del concepto de oficialidad (STC 82/1986, de 26 de junio, y 56/1990, de 29 de marzo), lo cual supone establecer el contenido básico de dicha oficialidad (STC 337/1994, de 23 de diciembre) y, además, determinar las medidas que sean precisas para el fomento o la normalización de su lengua propia (STC 74/1989, de 24 de abril, y 337/1994, de 23 de diciembre). El Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado han procurado, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacer efectivo dentro del Registro Civil el principio constitucional de cooficialidad o doble oficialidad del castellano y del idioma oficial propio en el territorio de determinadas comunidades autónomas. Así, el Real Decreto 628/1987, de 8 de Mayo, dio nueva redacción al artículo 86 del Reglamento del Registro Civil a fin de permitir que, dentro del territorio de estas comunidades, pudieran presentarse al Registro Civil documentos redactados en su idioma oficial propio sin traducción al castellano; las órdenes ministeriales de 26 de mayo de 1988, 20 de julio de 1989 y 21 de enero de 1993 aprobaron los correspondientes modelos oficiales bilingües para todos los impresos relacionados con el Registro Civil y la Circular de 1 de marzo de 1984 aprobó también un modelo bilingüe para la expedición de certificaciones literales del Registro. Más recientemente la Orden JUS/268/2006, de 8 de febrero, por la que se modifican los modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del libro de familia, aclarada por la posterior Orden JUS/644/2006, de 6 de marzo, incorpora las distintas versiones de dichos modelos en todas las lenguas cooficiales existentes en España, además del castellano.

III.- La Ley 12/2005, de 22 de junio, que modifica el artículo 23 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, regula por primera vez la redacción de las inscripciones y demás asientos propios del Registro Civil en lengua distinta del castellano. Así, la falta de previsión se subsanó en la nueva redacción dada al citado precepto, conforme a la cual "Los asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que radique el Registro Civil, según la lengua en que esté redactado el documento o en que se realice la manifestación. Si el documento es bilingüe, se realizarán en la lengua indicada por quien lo presente al Registro. Todo ello, siempre que la legislación lingüística de la Comunidad Autónoma prevea la posibilidad de redacción de los asientos de los registros públicos en idioma cooficial distinto del castellano". En desarrollo y aplicación práctica de esta nueva norma legal se han llevado a cabo actuaciones de adaptación del aplicativo INFOREG (vid. Resolución de 25 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre aprobación de la versión 2.0 del programa INFOREG y nuevos modelos de asientos para los registros civiles informatizados) para incorporar al mismo todos los modelos de asientos existentes en las distintas lenguas oficiales existentes en España. Normativamente estas iniciativas culminaron en la aprobación de la Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre impulso a la informatización de los registros civiles y digitalización de sus archivos que, además de aprobar la versión 4.0 del aplicativo INFOREG, contiene, en su disposición adicional segunda, una regulación relativa al idioma en que se redactarán los modelos de diligencias de apertura y cierre y asientos de los libros registrales, en los siguientes términos:

1. Los modelos de diligencias de apertura y cierre incorporados al Anexo III de esta Orden ministerial serán bilingües en los Registros Civiles de las Comunidades Autónomas con idioma oficial propio, además del castellano, conforme a las traducciones que aprobará la Dirección General de los Registros y del Notariado, a propuesta de los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas.

2. Los asientos registrales que se hayan de redactar en lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que radique el Registro Civil distinta del castellano, en los casos en que proceda legalmente de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 23 de la

Ley del Registro Civil, se ajustarán a los modelos en cada momento vigentes con arreglo a la traducción oficial que de los mismos se apruebe, las cuales serán incorporadas a la aplicación Inforeg por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, inmediatamente después de producida su aprobación”.

IV.- No obstante, ha de recordarse que la nueva regulación contenida en el párrafo final agregado al artículo 23 de la Ley del Registro Civil por la Ley 12/2005, de 22 de junio, está vinculada, por razones operativas y funcionales, en cuanto a su aplicación práctica, a la progresiva informatización de los registros civiles, según se desprende de la Disposición Transitoria única de la citada ley, conforme a la cual “A los Registros Civiles que no estuvieran informatizados a la entrada en vigor de esta Ley, les será de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 23 de la Ley del Registro Civil, según su incorporación efectiva al proceso de informatización”. Este aplazamiento de la aplicación práctica del párrafo final del artículo 23 de la ley registral a la informatización de los registros, viene justificada e impuesta por el hecho de que los libros oficiales de los registros no informatizados contienen preimpresos los textos fijos de los respectivos modelos de asientos redactados en castellano, lo cual sin embargo no es impedimento para que las menciones y datos que se han de consignar en los espacios libres de tales modelos puedan ser redactados en lengua oficial distinta del castellano (Resolución de 8 de junio de 2007), pero sí para otras fórmulas alternativas de elaboración de libros registrales ad hoc confeccionados por el propio encargado y carentes del adecuado respaldo legal, que no se puede encontrar en el artículo 106 del Reglamento del Registro Civil, cuyo supuesto habilitante, consistente en la falta de libros editados oficialmente, es distinto y ajeno al caso debatido en el presente recurso.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de Diciembre de 2013.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Bergara (Gipuzkoa).

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

**RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
(De 1 de enero de 2014 a 31 de enero de 2014)**

SUMARIO

I. NACIMIENTO, FILIACIÓN, ADOPCION

I.1.- Nacimiento

I.1.1.- Inscripción de nacimiento fuera de plazo.....	5
-------------------------------------------------------	---

I.2.- Filiación

I.2.1.- Inscripción de filiación	18
----------------------------------------	----

I.3.- Adopción

I.3.2.- Inscripción adopción internacional	25
--------------------------------------------------	----

II. NOMBRES Y APELLIDOS

II.1.- Imposición nombre propio

II.1.2.- Nombre propio del extranjero naturalizado	32
----------------------------------------------------------	----

II.2.- Cambio de nombre

II.2.1.- Cambio nombre-prueba uso habitual.....	33
-------------------------------------------------	----

II.2.2.- Cambio nombre-justa causa	36
------------------------------------------	----

II.3.- Atribución apellidos

II.3.1.- Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados	52
-----------------------------------------------------------------------	----

II.3.2.- Régimen de apellidos de los españoles.....	54
-----------------------------------------------------	----

II.4.- Cambio de apellidos

II.4.1.- Modificación de apellidos	60
------------------------------------------	----

II.5.- Competencia

II.5.1.- Competencia cambio nombre propio	70
-------------------------------------------------	----

III. NACIONALIDAD

III.1.- Adquisición originaria de la nacionalidad española

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen iure soli	75
--------------------------------------------------------------	----

III.1.2.- Adquisición nacionalidad de origen iure sanguinis.....	117
------------------------------------------------------------------	-----

III.1.3.- Adquisición nacionalidad de origen por Ley 52/2007 de memoria historica	
-----------------------------------------------------------------------------------	--

III.1.3.1.- Adquisición nacionalidad española de origen- anexo I Ley 52/2007	154
------------------------------------------------------------------------------------	-----

III.1.3.2.- Adquisición nacionalidad española de origen-anexo II ley 52/2007	160
------------------------------------------------------------------------------------	-----

III.3.- Adquisición nacionalidad española por Opción

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad-art 20-1a cc.....	594
-----------------------------------------------------------------------------------	-----

III.3.2.- Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen-art 20-1b cc	648
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

III.5.- Conservación/pérdida/renuncia a la nacionalidad	
III.5.1.-Conservación/pérdida/renuncia a la nacionalidad española.....	650

III.8.- Competencia en exp nacionalidad

III.8.1.- Competencia exp. de nacionalidad por residencia	658
III.8.2.- Competencia en exp. de nacionalidad por motivos distintos de la residencia	661
III.8.3.- Exp. De nacionalidad-alcance de la calificación-art 27 Irc.....	920

III.9.- Otras cuestiones en expedientes nacionalidad

III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad española	665
-----------------------------------------------------------------------	-----

IV. MATRIMONIO

IV.1.- Inscripción matrimonio religioso

IV.1.1.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.....	667
IV.1.2.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero	674

IV.2.- Expediente previo para la celebración del matrimonio civil

IV.2.1.- Autorización del matrimonio. Falta de capacidad. Recursos	681
IV.2.2.- Expedición de certificado de capacidad matrimonial	798

IV.3.- Impedimento de ligamen

IV.3.2.- Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio	813
--------------------------------------------------------------------	-----

IV.4.- Matrimonio celebrado en el extranjero

IV.4.1.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero natularizado	
<i>IV.4.1.1.- Se deniega inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial.....</i>	814
<i>IV.4.1.2.- Se inscribe-no puede deducirse ausencia de consentimiento matrimonial.....</i>	1013
<i>IV.4.1.3.- Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad.....</i>	1027
IV.4.2.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros.....	1039

IV.7.- Competencia

IV.7.1.- Competencia en expedientes de matrimonio.....	1066
--------------------------------------------------------	------

V. DEFUNCIÓN

V.1.- Inscripción de la defunción

V.1.1.- Inscripción de la defunción fuera de plazo.....	1070
---------------------------------------------------------	------

VI. TUTELAS

VI.1.- Tutela, patria potestad y emancipacion

VI.1.1.- Recursos sobre tutela, patria potestad y emancipacion	1073
----------------------------------------------------------------------	------

VII. RECTIFICACION, CANCELACION Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES

VII.1.- Rectificación de errores

VII.1.1.- Rectificación de errores art 93 y 94 LRC	1075
----------------------------------------------------------	------

VII.1.2.- Rectificación de errores art 95 LRC.....	1111
----------------------------------------------------	------

VII.2.- Cancelación

VII.2.1.- Cancelación de inscripción de nacimiento.....	1112
---------------------------------------------------------	------

VIII. PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

VIII.2.- Representación

VIII.2.1.- Recurso interpuesto por medio de representante	1139
-----------------------------------------------------------------	------

VIII.2.2.- Representación y/o intervención del menor interesado.....	1140
----------------------------------------------------------------------	------

VIII.3.- Caducidad del expediente

VIII.3.1.- Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 rrc.....	1143
----------------------------------------------------------------------	------

VIII.4.- Otras cuestiones

VIII.4.1.- Recursos en los que se aprecia vicio de incongruencia.....	1150
-----------------------------------------------------------------------	------

VIII.4.2.- Recursos en los que ha decaído el objeto	1154
-----------------------------------------------------------	------

VIII.4.3.- Validez de sentencias extranjeras	1161
----------------------------------------------------	------

VIII.4.4.- Otras cuestiones.....	1162
----------------------------------	------

IX. PUBLICIDAD

IX.1.- Publicidad formal-acceso de los interesados al contenido del RC

IX.1.1.- Publicidad formal-expedición de certificaciones y consulta libros del registro	1183
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------

IX.2.- Publicidad material-efectos de la Publicidad registral

IX.2.1.- Publicidad material	1184
------------------------------------	------

I. NACIMIENTO, FILIACIÓN, ADOPCION

I.1.- Nacimiento

I.1.1- Inscripción de nacimiento fuera de plazo

Resolución de 10 de Enero de 2014 (35ª)

I.1.1-Inscripción de nacimiento.

Es inscribible un nacimiento que tuvo lugar en Venezuela en 1971, practicado inicialmente solo con filiación materna, porque el reconocimiento paterno de la inscrita por parte de un ciudadano español ha sido otorgado en forma y con todos sus requisitos.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el en el consulado español en Caracas (Venezuela) el 13 de enero de 2010, la Sra. M^a-L. mayor de edad y de nacionalidad venezolana, solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español por ser hija de un ciudadano español. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, cédula de identidad venezolana, inscripción de nacimiento de la promotora en Venezuela el 14 de agosto de 1971 con reconocimiento paterno realizado el 20 de octubre de 2009 por N. acta del reconocimiento realizado ante el Registro Civil venezolano, inscripción de nacimiento española de N. nacido en S-C de T. el 12 de agosto de 1945, pasaporte español de este último, cédula de identidad venezolana, ficha de identidad expedida por las autoridades venezolanas relativa al Sr. C. donde consta su entrada en Venezuela el 4 de febrero de 1959 y su nacionalidad española, partida de nacimiento de la madre de la promotora, A-M^a. y acta de matrimonio de esta última con un ciudadano venezolano el 30 de octubre de 1975 donde consta su estado civil anterior de soltera.

2.- El encargado del registro dictó auto el 17 de junio de 2010 denegando la inscripción por no considerar acreditada la relación de filiación de la solicitante con respecto del ciudadano español.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, a pesar de que el reconocimiento paterno fue tardío por motivos de discordia entre los progenitores, la relación de filiación está correctamente acreditada y siempre fue tenida por hija del Sr. C. tal como prueban las declaraciones testificales que aporta del propio interesado y de varios familiares de este, entre los que se incluye otra hija suya.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Venezuela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 120 y 124 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 28 y 49 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones 24-1ª de enero; 9 de octubre, 11-2ª de noviembre y 28 de diciembre de 2002; 15-3ª de enero y 12-2ª de noviembre de 2004; 24-1ª y 2ª de noviembre de 2005 y 9-2ª de marzo de 2009 y 16-1ª de diciembre de 2010.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento en España de una hija no matrimonial nacida en Venezuela en 1971 de madre venezolana, que fue inscrita en el Registro Civil inicialmente sólo con la filiación materna, si bien en 2009 se practicó la inscripción del reconocimiento paterno por parte de un ciudadano español de origen que emigró a Venezuela en 1959. La inscripción en España, sin embargo, fue denegada por estimar que no resulta acreditada la relación de filiación con el ciudadano español.

III.- La filiación paterna no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento efectuado ante el encargado del Registro Civil de quien afirme ser padre del reconocido (art. 120.1 CC. y 49 LRC) y, si éste es mayor de edad, el reconocimiento no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito (art. 123 CC.).

IV.- Estas condiciones concurren en el reconocimiento discutido y, si bien es cierto que, aun así, estos reconocimientos no serían inscribibles si hay datos objetivos que permitan estimarlos como reconocimientos de complacencia que no se ajustan a la realidad a la vista de que el principio de veracidad biológica es el inspirador de la regulación del Código civil en materia de filiación, también es cierto que las simples dudas o sospechas de que el reconocimiento no responde a la verdad escapan a la calificación del encargado, que sólo puede denegar la inscripción cuando de las manifestaciones solemnes de los interesados se deduce, sin lugar a dudas, la falta de veracidad de tal reconocimiento. En el presente caso, a la vista de la documentación presentada y del contenido del informe del encargado del registro, cuya denegación se basa exclusivamente en apreciaciones personales no sustentadas documentalmente, no se aprecian elementos objetivos que permitan excluir de manera absoluta la veracidad del reconocimiento efectuado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º.- Practicar la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de María-Luisa Castilla Cáceres.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (45ª)

I.1.1-Inscripción fuera de plazo de nacimiento.

No procede la inscripción de nacimiento solicitada porque no queda acreditado que el hecho acaeciera en Ceuta, siendo insuficientes las pruebas presentadas.

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Cartagena (Murcia) en fecha 20 de mayo de 2010 la Sra. R., mayor de edad y domiciliada en dicha población, promueve expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, exponiendo que nació a las doce horas del día 20 de octubre de 1961 en el domicilio familiar de C. hija de españoles nacidos en C. Acompaña la siguiente documentación: certificaciones literal de nacimiento y negativa de defunción de su madre, H-B. nacida en C. el 11 de enero de 1942; y, propia, certificación negativa de nacimiento, volante individual de empadronamiento en C. y fotocopia de libro de familia.

2.- En el mismo día, 20 de mayo de 2010, la promotora, que se identifica con NIF, ratificó la solicitud, la médico forense informó que la ha reconocido y comprobado que es mujer y que tiene una edad aproximada de 48 años y comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la solicitante y les consta que son ciertos los hechos que se expresan en el escrito de iniciación del expediente. El ministerio fiscal se opuso a la inscripción de nacimiento, por no estar acreditado el hecho, y el Juez Encargado del Registro Civil de Cartagena dispuso la remisión del expediente al de Ceuta, en el que tuvo entrada el 19 de agosto de 2010.

3.- El ministerio fiscal se opuso a la solicitud formulada con los argumentos ya expuestos por el de C. su informe fue notificado en el Registro Civil del domicilio a la interesada, que manifestó que la inscripción de nacimiento le permitiría insertarse en la vida laboral y en el sistema administrativo de España, que es donde ha hecho su vida y tenido a sus hijos, y que la regularización en cuestiones de extranjería la hubiera podido obtener casándose con el padre de su hijo, de nacionalidad española; y el 26 de noviembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta, visto que en la documentación aportada al expediente consta como lugar de nacimiento F. (Marruecos) y que no se ha probado que el hecho ocurriera en C. dictó auto disponiendo denegar la pretensión deducida.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que si existiera documentación para demostrar que el lugar de nacimiento es C. se hubiera practicado la inscripción hace bastante tiempo, que el acta de nacimiento de su madre ahonda en la idea de que la hija también haya nacido en España, que en el momento de su nacimiento se daba poca importancia a la concordancia entre la realidad de los hechos y su soporte documental, que no dispone de DNI por no estar inscrita ni de permiso de residencia por no ser extranjera y que tiene un hijo de trece años, fruto de su convivencia desde hace más de dieciocho con un español; y aportando, como prueba documental, certificación literal de nacimiento del menor que expresa que la madre es de nacionalidad marroquí.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, reiterando su anterior informe, impugnó el recurso ya que, en contra de lo que postula la actora, la acreditación del lugar donde efectivamente haya ocurrido el hecho, pese a las dificultades que conlleva, le compete a ella y no al Registro, y el Juez Encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16, 23, 24, 41, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68, 311 a 316 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1980 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) sobre el expediente de inscripción fuera de plazo de nacimiento, la Instrucción de 7 de octubre de 1988 y las resoluciones, entre otras, de 2-2ª de marzo y 6-4ª de junio de 2001, 14-1ª de octubre de 2003; 27-2ª de enero, 22-1ª de marzo y 23-3ª y 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero y 25-4ª de julio de 2006; 19-2ª de febrero y 15-2ª de junio de 2007, 10-4ª de octubre de 2008 y 1-5ª de septiembre de 2010.

II.- Pretende la promotora que se inscriba fuera de plazo su nacimiento exponiendo que acaeció a las doce horas del día 20 de octubre de 1961 en el domicilio familiar de C. y que sus padres son españoles nacidos en C. El Juez Encargado, visto que en la documentación aportada al expediente consta como lugar de nacimiento F. (Marruecos) y que no se ha probado que el hecho ocurriera en C. dispuso denegar la pretensión deducida mediante auto de 26 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- Un nacimiento acaecido en territorio español y/o que afecta a españoles ha de ser inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando ha transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que alude el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del Reglamento.

IV.- En este tipo de expedientes la prueba del lugar de nacimiento está muy facilitada, pues basta la información de dos personas a quienes les conste dicho lugar por ciencia propia o por notoriedad (cfr. art. 313, II, RRC). Sin embargo esta amplitud, explicable por la dificultad inherente a la justificación de los hechos con el transcurso del tiempo, no ha de impedir la investigación de oficio que el encargado estime oportuno realizar y para la que está facultado con arreglo a los artículos 312 y 316 del Reglamento del Registro Civil (cfr. Instrucción de 7 de octubre de 1988). Tal investigación cobra, además, especial importancia cuando llegue a sospecharse que la inscripción en el Registro Civil español se intenta como paso previo para la adquisición de la nacionalidad española, bien directamente, bien por el plazo abreviado de un año de residencia en España (cfr. arts. 17 y 22 CC.).

V.- En este caso la información testifical para acreditar el lugar de nacimiento resulta insuficiente pues no procede de personas que tengan un conocimiento directo, de ciencia propia o por notoriedad, del hecho que se trata de probar -nacieron en la península en fecha posterior- sino noticia indirecta o por referencias de la propia interesada; conforme a la documentación que obra en el expediente, nació en Marruecos y eso consta también, con indicación de que es de nacionalidad marroquí, en la inscripción de nacimiento de su hijo. Por todo ello hay que concluir que el nacimiento acaeció en el extranjero de modo que no solo es incompetente el Registro Civil de Ceuta para practicar la inscripción instada, sino que, no probada la nacionalidad española de los padres, tampoco afecta a españoles y no puede acceder al Registro Civil español (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (17ª)

I.1.1-Inscripción de nacimiento con filiación paterna no matrimonial.

Es inscribible el nacimiento de una menor nacida en Guatemala e inscrita inicialmente solo con filiación materna cuyo reconocimiento paterno por parte de un ciudadano español ha sido otorgado en forma y con todos sus requisitos.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento de una menor remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central el 23 de octubre de 2002, Don B. mayor de edad y de nacionalidad española, solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hija menor de edad R-M. L. Z., nacida en Guatemala el 27 de mayo de 1997. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, DNI, inscripción de nacimiento y certificado de empadronamiento del promotor, certificación guatemalteca de nacimiento de R-M. Z. Z. nacida en Guatemala el 27 de mayo de 1997 e hija de B. Z. Z., escritura notarial de poder de autorización y representación otorgada el 27 de agosto de 2002 por la señora B. Z. Z. a favor de Don B. L. M. para realizar la inscripción de la hija de ambos, R-M. L. Z., nacida el 27 de mayo de 1997 y reconocida por su padre el 26 de agosto de 2002 según quedó inscrito en el Registro Civil de Guatemala (consta identificación del número de partida, folio y libro de registro del reconocimiento), en los correspondientes registros españoles, así como para cualquier otro asunto relacionado con la menor.

2.- Desde el Registro Civil Central se solicitó al de Águilas (Murcia), correspondiente al domicilio del interesado, la realización de audiencia separada a los padres de la menor acerca del hecho que se pretende inscribir. El promotor, en comparecencia el 27 de diciembre de 2002, declaró que conoció a la madre de su hija en Á. en el mes de agosto seis años atrás y que es el padre biológico de la menor. Al propio tiempo, aportó la dirección postal y el teléfono de la madre en Guatemala. Desde el Registro Civil Central se remitió requerimiento al Consulado General de España en Guatemala para que se tomara declaración a la ciudadana guatemalteca.

3.- En diciembre de 2005 el promotor solicita información sobre el expediente y las causas del archivo, si es que se hubiera producido. El Registro Civil Central contesta que el procedimiento está pendiente de la comparecencia de la madre en Guatemala y solicita al interesado la aportación de datos de nuevo domicilio y teléfono, reiterando el interesado el mismo domicilio facilitado anteriormente. Remitido nuevamente oficio al consulado español en Guatemala, este informó que los Sres. B. L. M. y B. Z. Z. habían iniciado un expediente de reconocimiento paterno de la menor R-M. Z. Z. con motivo del cual se requirió la aportación de prueba de estancia en España de la señora Z. Z. en 1996, sin que hasta la fecha se hubiera recibido la documentación solicitada. Al mismo tiempo, el interesado presentó escrito en el registro reiterando su solicitud y declarando que su hija se encuentra residiendo en su domicilio en España, debidamente escolarizada e integrada en el núcleo familiar.

4.- Al expediente se incorporó nuevo certificado de empadronamiento del promotor, en cuyo domicilio no figura R-M. L. Z. y el Registro Civil Central reiteró oficio al consulado en Guatemala requiriendo la comparecencia de la Sra. Z. Z.

5.- El 27 de octubre de 2009 tiene entrada en el Registro Civil Central nuevo escrito del promotor reiterando la solicitud de inscripción y aportando copia de la documentación ya presentada cuando se inició el expediente.

6.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 18 de febrero de 2010 denegando la inscripción por no considerar acreditada la relación de filiación de la menor con respecto al ciudadano español.

7.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que cuando el solicitante se enteró en 2002 de la existencia de su hija, se desplazó a Guatemala para formalizar el reconocimiento y la inscripción de la menor en el registro guatemalteco, tal como se reflejó en el acta notarial aportada al expediente con la conformidad de la madre y su autorización para que se realizaran los trámites oportunos en España. Alegaba asimismo, que la no comparecencia de la madre en el registro consular de Guatemala se debe a la excesiva demora en la tramitación del expediente, pues, una vez que

la interesada abandonó España por problemas de salud, estuvo localizada en la dirección aportada en su día por el recurrente, si bien actualmente se desconoce su paradero. Por último, el escrito de recurso apelaba al perjuicio ocasionado durante todo este tiempo a la menor, quien lleva ocho años de convivencia en España con su padre, convenientemente escolarizada e integrada en su entorno familiar y social.

8.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 120 y 124 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 28 y 49 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones 24-1ª de enero; 9 de octubre, 11-2ª de noviembre y 28 de diciembre de 2002; 15-3ª de enero y 12-2ª de noviembre de 2004; 24-1ª y 2ª de noviembre de 2005 y 9-2ª de marzo de 2009 y 16-1ª de diciembre de 2010.

II.- Se pretende por este expediente la inscripción de nacimiento en España de una hija no matrimonial nacida en Guatemala en 1997 de madre guatemalteca, que fue inscrita en el Registro Civil guatemalteco en 2002 sólo con la filiación materna. No obstante, el reconocimiento paterno, según consta en escritura notarial suscrita por ambos progenitores, se efectuó en comparecencia de 26 de agosto de 2002 ante el Registro Civil guatemalteco, donde quedó inscrito en el libro correspondiente de Reconocimientos, con el consentimiento de la madre de la menor. La inscripción en España, sin embargo, fue denegada por la encargada por estimar que no resulta acreditada la relación de filiación con un ciudadano español.

III.- La filiación paterna no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento efectuado ante el encargado del Registro Civil de quien afirme ser padre del reconocido (art. 120.1 CC. y 49 LRC) y, si éste es menor de edad, el reconocimiento es eficaz si presta consentimiento expreso la madre y representante legal del menor (art. 124.1 CC.).

IV.- Estas condiciones concurren en el reconocimiento discutido y, si bien es cierto que, aun así, estos reconocimientos no serían inscribibles si hay datos objetivos que permitan estimarlos como reconocimientos de complacencia que no se ajustan a la realidad a la vista de que el principio de veracidad biológica es el inspirador de la regulación del Código civil en materia de filiación, también es cierto que las simples dudas o sospechas de que el reconocimiento no responde a la verdad escapan a la calificación del encargado, que sólo puede denegar la inscripción cuando de las manifestaciones solemnes de los interesados se deduce, sin lugar a dudas, la falta de veracidad de tal reconocimiento. En el presente caso, las apreciaciones de la encargada no pueden tenerse como determinantes para excluir de manera absoluta la veracidad del reconocimiento efectuado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º.- Practicar la inscripción de nacimiento en España de R-M. L. Z.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (22ª)

I.1.1-Inscripción de nacimiento.

No es inscribible, por exigencias de los principios de veracidad biológica y de concordancia del Registro con la realidad, un nacimiento acaecido en 1999 en Bolivia con filiación española cuando hay datos suficientes para deducir que la pretendida filiación de la menor no se ajusta a la realidad.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado el 27 de abril de 2009 en el Registro Civil del Consulado General de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Doña T. de nacionalidad boliviana y con domicilio en Bolivia, solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, por transcripción del correspondiente certificado boliviano, de su hija menor de edad por ser esta hija de padre español. Aportaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; cédula de identidad e inscripción de nacimiento boliviana practicada el 2 de diciembre de 2002 por orden judicial de 23 de octubre del mismo año de A. nacida en S-C. (Bolivia) el... de... de 1999 e hija de M-Á. y de T. DNI e inscripción de nacimiento en A. el 9 de octubre de 1951 de M-Á. con marginal de matrimonio con T. celebrado en La P. (Bolivia) el 24 de marzo de 1977; cédula de identidad de T. y libreta de familia boliviana del matrimonio donde constan tres hijos de la pareja: M-Á. (nacido e inscrito en 1978), A-E. (nacida e inscrita en 1979) y A. nacida en 1999 e inscrita en 2002.

2.- El encargado del registro consular dictó auto el 28 de enero de 2011 denegando la inscripción solicitada por no considerar acreditada la filiación de la menor, dado que su inscripción en el registro se practicó tres años después de su nacimiento mientras que sus hermanos mayores, nacidos en 1978 y 1979, fueron inscritos en plazo. Por otro lado, según la resolución, en una entrevista celebrada con los presuntos progenitores (cuyo testimonio no figura entre la documentación incorporada al expediente), estos declararon que se habían divorciado en 1982, si bien en 1999, cuando la madre contaba con 50 años de edad, tuvieron a su hija menor, a la que ahora pretenden inscribir en España.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, tal como figura en la inscripción de nacimiento local, la menor, independientemente del momento en que se produjo el nacimiento y se realizó la inscripción, es hija de los promotores, quienes, a pesar de estar separados, mantienen una excelente relación. Con el escrito de recurso se aportaban, entre otros documentos, partida de bautismo de la menor en 2004, documentos escolares, pasaporte y varias fotografías familiares tomadas tanto en Bolivia como en España, estas últimas con motivo de un viaje realizado por la no inscrita en 2004 para visitar a su familia española.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del registro consular se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 21-1ª de abril de 1999; 18-1ª de abril, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de noviembre de

2005; 24-4ª de enero de 2006; 3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de 2007; 20-4ª de abril de 2009; 21-10ª de diciembre de 2011 y 10-14ª de febrero y 23-40ª de agosto de 2012.

II.- Los promotores solicitan la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hija, nacida en Bolivia en 1999, si bien la inscripción de nacimiento local no se practicó hasta 2002. El encargado del registro dictó resolución denegando la inscripción por no considerar acreditada la filiación respecto de un español.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC) pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, segundo párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85, párrafo primero, RRC).

IV.- Por otra parte, la regulación de la filiación en el Código civil se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que la declarada no podrá ser inscrita cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal filiación no se ajusta a la realidad. Así ocurre en este caso, a la vista del conjunto de documentos que figuran en el expediente, pues es significativo que los supuestos padres, cuyo matrimonio se celebró en 1977 y que tuvieron dos hijos en 1978 y 1979 cuya inscripción se realizó poco después de nacer, tardaran tres años en inscribir el nacimiento de su hija menor, nacida en 1999. Por otra parte, consta en la propia inscripción registral que esta se practicó por orden judicial de 23 de octubre de 2002, sin que dicho documento haya sido incorporado al expediente ni los promotores hayan ofrecido explicación alguna, por lo que se desconocen las circunstancias concretas que determinaron la inscripción. Así las cosas, se plantean fundadas dudas sobre la realidad del hecho que se pretende inscribir y los documentos aportados no se consideran suficientes para dar fe de la verdadera naturaleza de la filiación de la menor, por lo que, en aras del principio de concordancia del Registro con la realidad, no puede darse por acreditada la filiación biológica respecto de los supuestos progenitores, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse, bien a través de las garantías que ofrece un expediente de inscripción fuera de plazo o bien, en su caso, en uno de inscripción de adopción, pues los indicios anteriormente mencionados impiden que la inscripción pueda basarse exclusivamente en el contenido de la certificación de nacimiento boliviana presentada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (18ª)

I.1.1-Inscripción de nacimiento en el extranjero.

Procede la inscripción de un nacimiento ocurrido en Colombia en 2006 al estar acreditada la filiación de la nacida respecto de un español.

En las actuaciones sobre inscripción en el Registro Civil español de un nacimiento que tuvo lugar en Colombia en 2006 remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá el 23 de junio de 2010, Don V-A-G. mayor de edad y de nacionalidad española, solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hija, nacida en Colombia el ... de ... de 2006. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento colombiana practicada el 8 de abril de 2006 de L-J. hija de M^a-E. cuestionario de declaración de datos para la inscripción; cédula de ciudadanía colombiana de la madre; inscripción de nacimiento en el Registro Civil de E. (A); pasaporte español del promotor y certificados colombianos de movimientos migratorios de ambos progenitores.

2.- Ratificados en comparecencia ante el consulado ambos progenitores, se practicó audiencia reservada por separado a cada uno de ellos con la finalidad de verificar datos para la práctica de la inscripción.

3.- El encargado del registro civil consular dictó acuerdo el 1 de febrero de 2011 por el que se denegaba la inscripción por no considerar acreditada la filiación de la menor respecto de un ciudadano español.

4.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que la menor es su hija y adjuntando la inscripción de nacimiento colombiana practicada el 13 de diciembre de 2006 donde consta su filiación paterna, una escritura pública de reconocimiento paterno otorgada en Colombia el 10 de septiembre de 2010 y un estudio genético sobre paternidad elaborado por un laboratorio colombiano.

5.- La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 120 y 124 del Código Civil; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 358 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones 16-3^a de enero, 15-2^a de febrero y 14-9^a de mayo de 2002, 8-1^a de julio de 2003, 24-2^a de junio de 2004 y 1-1^a de septiembre de 2008.

II.- Un nacimiento acaecido en el extranjero y que afecte a españoles debe inscribirse en el Registro Civil español, pudiendo prescindirse de la tramitación de expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española” (art. 23, 2^o párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española”(art. 85 RRC).

III.- En este caso, el nacimiento que se pretende inscribir tuvo lugar en Colombia el ... de ... de 2006, si bien el reconocimiento paterno no se inscribió hasta unos meses después, y no hay motivos para dudar de la legalidad y autenticidad de las certificaciones colombianas de nacimiento acompañadas, de las que resulta que la inscripción, inicialmente practicada solo con filiación materna, se extendió en fecha muy próxima al nacimiento y que ocho meses después se realizó el reconocimiento paterno. No puede basarse la denegación en supuestas inconsistencias observadas en las manifestaciones vertidas por los progenitores en las audiencias practicadas por cuanto su contenido (del que resulta,

por otra parte, que ambos comparecientes afirmaron que la menor es hija biológica del recurrente, no apreciándose evidencia alguna que permita determinar la falta de veracidad del reconocimiento efectuado) no afecta en absoluto a la validez de los documentos del Registro Civil colombiano, donde consta claramente la filiación de la inscrita como hija no matrimonial de un ciudadano español. Todo ello con independencia de la prueba biológica cuya copia se aporta al recurso y que, fuera de un procedimiento judicial, no puede ser tenida en cuenta por este centro.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2º.- Practicar la inscripción de nacimiento de L-J. en el Registro Civil español por transcripción de la certificación de nacimiento colombiana.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (49ª)

I.1.1-Inscripción fuera de plazo de nacimiento

No es inscribible el acaecido en Venezuela en 1954 por no resultar acreditada la filiación de la nacida respecto de un español.

En las actuaciones sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- El 12 de agosto de 2010 la Sra. M de la S. de nacionalidad venezolana, nacida en , C.(Venezuela) el 6 de mayo de 1954, presentó en el Registro Civil Consular de Caracas impreso de declaración de datos para la inscripción de su nacimiento, aduciendo que es hija de un ciudadano español. Acompañaba la siguiente documentación: propia, cédula de identidad y acta de nacimiento inscrita en fecha 16 de enero de 1961 por declaración de M. con marginal de rectificación, practicada el 11 de mayo de 2010, en el sentido de que donde dice "M de la S. quien es hija natural de I." debe decir "M de la S. quien es su hija y de I". que es lo correcto y verdadero; de M. inscripción de nacimiento en S-C de T. el 26 de mayo de 1921, copia simple de cédula de identidad venezolana expedida el 13 de febrero de 1980 que expresa que es de nacionalidad española y de partida de defunción, acaecida en , A. (Venezuela) el 9 de marzo de 1998, declarada por M de la S. sin constancia de la calidad en que lo hace, y con nota marginal de rectificación, practicada el 12 de julio de 2010, en el sentido de que el nombre de la hija del difunto que fue omitido en su momento es M de la S. y copia simple de cédula de identidad y de actas de nacimiento y de matrimonio (en 1986) de I-M. y de defunción de su cónyuge, A-A. en fecha 26 de enero de 1990.

2.- El 13 de septiembre de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas, visto que la declaración de nacimiento por el ciudadano español nada acredita respecto

a la filiación, que no consta reconocimiento paterno en la forma legalmente prevista y que la promotora pretende el acceso a la nacionalidad española en virtud de una marginal de rectificación practicada después del fallecimiento del presunto padre, dictó auto acordando denegar la inscripción de nacimiento interesada.

3.- Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su inscripción de nacimiento no contiene mención alguna que excluya que el declarante es el padre y que, por error material cometido en el momento de levantarla, la partida de nacimiento adolecía de un defecto de forma que ha sido rectificado por sentencia recaída en juicio ordinario y aportando, como prueba documental, copia simple de causa de rectificación de partida de nacimiento iniciada por la interesada ante el Juzgado Décimo Quinto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas y concluida con sentencia de 30 de noviembre de 2009, por la que se ordena la rectificación instada por la promotora.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a la inscripción de nacimiento pretendida, y el Encargado del Registro Civil Consular, visto que la sentencia extranjera en virtud de la cual desde abril de 2010 en la inscripción de nacimiento de la interesada aparece citado como progenitor el ciudadano español no ha obtenido el correspondiente exequátur, informó negativamente sobre el recurso presentado y dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 120 del Código civil (CC.); 15, 16, 23, 85 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 11-3^a de marzo de 2002, 23-2^a de mayo de 2007, 13-3^a de octubre de 2008, 20-4^a de abril de 2009 y 27-2^a de enero de 2010.

II.- Pretende la promotora, de nacionalidad venezolana, la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español alegando ser hija de un español fallecido en Venezuela en 1998. A tal efecto presenta ante el Registro Civil de su domicilio en fecha 12 de agosto de 2010 escrito de solicitud y aporta como título certificación local de la inscripción de su nacimiento, declarado por el ciudadano español M. en la que se ha practicado en mayo de 2010 marginal de rectificación en el sentido de que donde dice "hija natural de I" debe decir "su hija y de I". El Encargado del Registro Civil Consular de Caracas, apreciando que no existe reconocimiento, que la marginal es posterior al fallecimiento del supuesto padre y que precisamente esa filiación paterna es la que determinaría el acceso de la interesada al Registro Civil español, dispuso denegar la inscripción solicitada mediante auto de 13 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a un español (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), pudiéndose prescindir de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en el Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23,II LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" (art. 85,I RRC).

IV.- En el presente caso se pretende la inscripción de un nacimiento, acaecido en Venezuela el 6 de mayo de 1954 y declarado en 1961 por un ciudadano español, con el argumento de que el acta de nacimiento levantada no contiene ninguna mención que excluya la paternidad del declarante. Sin prejuzgar el contenido del Derecho venezolano sobre las formas o títulos mediante los que el reconocimiento de los hijos por sus padres

surte efectos legales, se comprueba que la filiación no ha quedado establecida por procedimiento dirigido a tal fin sino que por decisión administrativa dictada el 26 de abril de 2010 se practica en la inscripción de nacimiento marginal de rectificación consistente en insertar un “su” entre “es” e “hija” y de la que, según la promotora, se infiere que el declarante y el padre son la misma persona. Sin embargo tal marginal no puede ser tenida en cuenta a los efectos pretendidos, máxime cuando no concurre como presupuesto de fondo ni escrito indubitado del padre reconociendo expresamente la filiación ni posesión continua por la promotora del estado de hija del ciudadano español que alega (cfr. art. 113 CC.).

V.- En efecto, la inscripción en el Registro Civil español de un nacimiento acaecido en el extranjero está condicionada a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación de nacimiento en el Registro local, cuya eficacia registral en España está a su vez supeditada a la equivalencia de garantías de autenticidad y veracidad, conforme establecen los artículos 23 LRC y 85 RRC. Habida cuenta de que la inscripción de la certificación extranjera en el Registro Civil español está llamada a surtir importantes efectos jurídicos, es razonable que, a través de la calificación registral, su práctica se subordine al control de la equivalencia de los requisitos y garantías para la inscripción en el Registro extranjero con los que se imponen para la inscripción en el Registro Civil español. En definitiva, como puso de manifiesto este Centro Directivo en su Resolución de 23 de abril de 1993 «el hecho de que los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento permitan practicar sin expediente inscripciones por certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros, no implica que el Encargado haya de asumir una actitud pasiva ante la presentación de tales certificaciones, limitándose a la transcripción automática de los datos en ellas consignados. Por el contrario, ha de cerciorarse de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española». Traslada esta doctrina al presente caso, la desestimación aparece obligada, dado que en la inscripción de nacimiento del Registro local el ciudadano español está identificado única y exclusivamente como declarante del hecho, sin que conste mención alguna acerca de su relación con la inscrita o con su madre.

VI.- Con el escrito de recurso se aporta extemporáneamente y sin las mínimas garantías de autenticidad (cfr. art. 88 y 90 RRC) fotocopia no compulsada ni legalizada de procedimiento de rectificación de defecto de forma instado por la promotora en un Juzgado Municipal de Venezuela y concluido con sentencia de fecha 30 de noviembre de 2009 en la que, al parecer, trae causa la decisión administrativa de practicar el asiento marginal que consta en la partida de nacimiento. Pero, aun cuando se salvaran estos obstáculos formales y quedara acreditada la autenticidad del documento, no puede reconocerse eficacia a los efectos del ordenamiento jurídico registral español a dicha sentencia en tanto no obtenga fuerza en España por medio del correspondiente exequátur, exigido a tales efectos por el artículo 83 del Reglamento del Registro Civil, que ha de obtenerse a través del tribunal español competente, conforme a los fueros señalados por el artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por Ley 62/2003, de 30 de diciembre. No acreditada la filiación paterna de la promotora ni, por tanto, que su nacimiento sea hecho inscribible por afectar a un español, no es posible acceder a lo solicitado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (55ª)

I.1.1-Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

No procede realizar una inscripción de nacimiento ocurrido en 1892 por no resultar acreditados los datos necesarios para practicarla.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Arzúa (A Coruña).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en Buenos Aires (Argentina), la Sra. R. de nacionalidad argentina y con domicilio en B-A. solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su abuelo, A. nacido, según la solicitante, el 3 de abril de 1892 en M. (C). Aportaba la siguiente documentación: certificación negativa de inscripción de nacimiento expedida por el Registro Civil de Melide, certificación negativa de partida de bautismo del no inscrito expedida por el párroco de San P de M. ficha de inscripción de A. en el consulado de España en Buenos Aires, cédulas de identidad, libro de familia, certificación de matrimonio en Argentina, certificación de nacimiento y defunción de uno de los hijos (padre de la promotora) del no inscrito, certificado de las autoridades argentinas en el que se indica que A. no se nacionalizó argentino, certificación de nacimiento de la promotora y certificación argentina de defunción del no inscrito.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil de Arzúa, competente para su resolución, la encargada dictó auto el 22 de octubre de 2010 denegando la inscripción solicitada por no resultar suficientemente acreditados los hechos alegados.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado aportando datos complementarios referidos a la historia familiar.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que no consideró relevantes, a efectos de practicar la inscripción pretendida, los datos aportados en el recurso. La encargada del Registro Civil de Arzúa remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 15, 16, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1.980, la Instrucción de 7 de octubre de 1.988, y las resoluciones, entre otras, 19-1ª de febrero de 1999, 30-2ª de mayo y 20-1ª de julio de y 3-2a de enero de 2008.

II.- Se pretende mediante el presente expediente la inscripción de nacimiento fuera de plazo del abuelo de la promotora, nacido, según ella, en M. (C) en 1892.

III.- Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el registro civil español competente (art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que alude el artículo 95.5º LRC, desarrollado en los artículos 311 a 316 RRC.

IV.- La obligación, que podría alcanzar incluso al ministerio fiscal, de promover la inscripción omitida e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente limitada a aquellos supuestos en que persista el interés público primordial de

lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que permitiría también subsanar defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC).

V. Por el contrario cuando, como ocurre en este caso, lo que se pretende es lograr la inscripción de nacimiento de una persona nacida en el siglo XIX y hoy fallecida, la cuestión afecta únicamente al interés privado y es entonces forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, tal interés legítimo particular para la incoación del expediente (arts. 97 LRC y 346 RRC).

VI.- No se ha invocado en este caso cuál es ese interés legítimo particular, aunque, siendo la recurrente de nacionalidad argentina y nieta del no inscrito, cabría apreciar, presumiblemente, que es de su interés a efectos de la posible adquisición de la nacionalidad española acreditar el hecho del nacimiento en España y la nacionalidad española de su abuelo, de modo que es pertinente entrar a examinar el fondo de la pretensión.

VII.- La interesada, sin embargo, no ha logrado obtener constancia del bautismo del no inscrito, no siendo posible investigar tampoco, dado el tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho inscribible, las circunstancias que deben figurar en la inscripción de nacimiento. En realidad, todas las pruebas aportadas para hacer valer la existencia e identidad del no inscrito proceden de Argentina, sin que conste rastro alguno de su presencia en España en algún momento, no siendo posible pues determinar de forma cierta que el nacimiento tuvo lugar en la localidad coruñesa de M. siendo esta una circunstancia esencial de la que la inscripción hace fe y que, además, determina la competencia del registro donde debe practicarse el asiento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la denegación de inscripción.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Arzúa (A Coruña).

I.2.- Filiación

I.2.1.- Inscripción de filiación

Resolución de 10 de Enero de 2014 (34ª)

I.2.1-Inscripción de filiación paterna.

Prospera el expediente del art. 49 de la Ley del Registro Civil para inscribir la filiación paterna porque, a falta de otros medios legales de determinación, está probada suficientemente la posesión de estado y no hay oposición del ministerio fiscal ni de parte interesada.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Oviedo.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2010 en el Registro Civil de Oviedo, Don J-M. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba que se hiciera constar en su inscripción de nacimiento su filiación paterna respecto del marido de su madre, ya fallecido, alegando que, aunque el matrimonio se celebró unos años después del nacimiento del promotor y en su inscripción solo figura la filiación materna, lo cierto es que el fallecido

ejerció como padre del solicitante a todos los efectos y este siempre lo tuvo por tal. Aportaba la siguiente documentación: inscripción de nacimiento del promotor, nacido el 26 de febrero de 1952 e hijo de C. libro de familia, inscripción de matrimonio celebrado el 16 de diciembre de 1961 entre J. y C. inscripciones de defunción de la madre del promotor –el 17 de agosto de 1992– y de J. –el 30 de junio de 2010–; varias pólizas de seguro fechadas entre 1962 y 1999 suscritas por el anterior en las que figuran como beneficiarios el promotor y su madre, un justificante de cuenta bancaria conjunta y DNI del interesado, de su esposa y de J.

2.- Ratificado el solicitante y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 23 de noviembre de 2010 denegando la pretensión por no considerar acreditada la filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la posesión de estado del recurrente como hijo de Don J. desde que este contrajo matrimonio con su madre, también fallecida.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, dicho órgano se adhirió a la pretensión del recurrente. La encargada del Registro Civil de Oviedo remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 120 del Código civil (CC.); 49 de la Ley del Registro Civil (LRC); 189 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 30 de enero de 1999, 13-3ª de junio de 2001, 3-1ª de marzo de 2004 y 3-1ª de octubre de 2007.

II.- El interesado pretende la inscripción de su filiación paterna respecto de quien fue el marido de su madre –ambos ya fallecidos– alegando, a falta de reconocimiento expreso, la posesión de estado, dado que aquél ejerció a todos los efectos como su padre desde la celebración del matrimonio en 1961 hasta que falleció en 2010. La encargada del registro denegó la pretensión por no considerar acreditada la veracidad de la filiación pretendida.

III.- En ausencia de reconocimiento formal de la paternidad no matrimonial puede inscribirse esta en el Registro Civil por medio del expediente registral al que alude el artículo 120.2º del Código civil y que regulan los artículos 49 de la Ley del Registro Civil y 189 de su reglamento. Para ello es imprescindible que haya un documento indubitado del padre en que expresamente reconozca su filiación o que exista posesión continua del estado de hijo no matrimonial del padre, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. Además, para que prospere el expediente ha de notificarse personalmente a todos los interesados y que no se oponga a la petición ninguna de estos ni el ministerio fiscal.

IV.- Las circunstancias mencionadas concurren en este caso, pues, a pesar de que no consta escrito indubitado del padre o de la madre (ambos fallecidos) reconociendo la filiación, sí resulta acreditada la posesión de estado y no hay oposición de parte interesada ni del ministerio fiscal, que tanto en el informe previo a la resolución como en el posterior a la interposición del recurso, se ha mostrado favorable a la pretensión planteada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2.- Inscribir la filiación paterna del interesado como hijo de Don J.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Oviedo.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (8ª)

I.2.1-Inscripción de filiación paterna.

El expediente para la inscripción de un reconocimiento paterno ha de decidirlo el encargado del registro donde deba practicarse dicha inscripción, no el del domicilio del declarante, que solo es competente para la instrucción.

En las actuaciones sobre inscripción de reconocimiento paterno en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Santoña (Cantabria).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 20 de marzo de 2009 en el Registro Civil de Santoña Don J. mayor de edad y con domicilio en A. (C), suscribió acta de reconocimiento paterno del menor M. nacido en S. el 5 de octubre de 2008 e hijo de A-L. de nacionalidad rumana. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento del menor, DNI, inscripción de nacimiento y certificado de empadronamiento del promotor y certificado de empadronamiento y acta notarial otorgada por la madre en la que esta declara que J. es el padre de su hijo M.

2.- Requerida la notificación y, en su caso, ratificación por parte de la madre del inscrito, en comparecencia ante el registro el 13 de mayo de 2009 la interesada declaró que el menor fue entregado en el momento del nacimiento a los servicios sociales del Gobierno de Cantabria, encontrándose en trámite de adopción. Al mismo tiempo, en su condición de madre biológica, expresó su consentimiento al reconocimiento efectuado por el Sr. P.

3.- Puestos los hechos en conocimiento del Servicio de Atención a la Infancia del Gobierno de Cantabria, se incorporó al expediente testimonio del que se tramitó en su momento para asumir la tutela por parte de la Administración donde se incluyen varios informes acerca de la madre biológica y del presunto padre y de evaluación de la situación del menor, así como las resoluciones de declaración de desamparo y tutela por parte de la Dirección General de Servicios Sociales y de formalización de acogimiento familiar. Por último, se incluye un informe del órgano tutelar denegando el consentimiento, como representante legal del menor, para el reconocimiento paterno pretendido "por ignorarse las circunstancias de la concepción, sin que [ello] suponga negar la paternidad".

4.- A la vista de la documentación anterior y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 9 de febrero de 2010 desestimando la solicitud de reconocimiento paterno del promotor por existir oposición del representante legal del menor.

5.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, tal como ha reconocido en varias ocasiones la madre del menor y no niega el órgano de representación de los servicios sociales, el Sr. P. es el padre biológico de M. Con el escrito de recurso se aportó correspondencia privada de la madre dirigida al recurrente y documentación complementaria relativa a la solicitud por parte del promotor del establecimiento de un régimen de visitas.

6.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil de Santoña se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 16, 342 y 348 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de

23 y 25 de febrero, 3-1ª de marzo, 11-1ª de mayo y 22 de septiembre de 1998, 4-2ª de abril de 2000, 28-2ª de junio de 2005 y 24-1ª de septiembre de 2010.

II.- La competencia para decidir en primera instancia el expediente para inscribir una filiación no matrimonial (cfr. art. 120 CC. y 49 LRC) corresponde al encargado del registro civil donde deba inscribirse la resolución pretendida (art. 342 RRC), en este caso S. por ser aquí donde consta la inscripción de nacimiento del menor interesado. El encargado del registro civil del domicilio del promotor carece de facultades decisorias, de modo que, realizada la declaración de paternidad, dicho registro ha de limitarse a instruir "las diligencias oportunas con intervención del Ministerio Fiscal, quien emitirá informe y, en unión del suyo propio, dará al expediente el curso reglamentario" (art. 348, párrafo tercero, RRC).

III. Por lo tanto, habiendo resuelto, indebidamente, el encargado del registro civil del domicilio, lo procedente es declarar la nulidad de actuaciones por incompetencia, conforme permiten los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicables a este ámbito en virtud de la remisión contenida en el artículo 16 del Reglamento del Registro Civil. Al mismo tiempo se ordena el envío de lo actuado al registro competente (art. 348 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º) Declarar la nulidad del auto dictado por el encargado del Registro Civil de Santoña.

2º) Retrotraer las actuaciones al momento en el que el expediente debió ser remitido para su resolución al Registro Civil de Santander.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santoña (Cantabria).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (9ª)

I.2.1.- Inscripción de filiación paterna.

No procede la inscripción con filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de la madre en el momento del nacimiento por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto al cónyuge, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el registro civil del consulado de España en La Habana el 19 de febrero de 2010, la Sra. O-L. (según su certificación de nacimiento cubana), mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española por opción en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos

para la inscripción, carné de identidad y certificación literal de nacimiento cubana de O-L. nacida en Cuba el 31 de enero de 1962, hija de J-F. y de G-E. inscripción de nacimiento española de esta última con marginal de recuperación de nacionalidad el 13 de septiembre de 2007 y certificación cubana de nacimiento con marginal de matrimonio contraído el 22 de junio (no consta el año) con A. divorcio de este por sentencia de 31 de mayo de 1961 y matrimonio posterior con J-F. en 1967.

2.- El encargado del registro consular dictó auto el 25 de agosto de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente con los apellidos maternos, B.G. por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su padre es el que consta como tal en la certificación cubana de nacimiento.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 113 y 116 del Código civil (CC.); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II.- Pretende la promotora la inscripción en el Registro Civil español de su filiación paterna respecto de quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana, un ciudadano cubano distinto de quien era el marido de su madre en el momento del nacimiento, según consta marginalmente en la certificación local de nacimiento de esta incorporada al expediente. El encargado del registro ordenó practicar la inscripción únicamente con los apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna que se pretende en tanto que, como se ha dicho, en la fecha de nacimiento subsistía el matrimonio anterior de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III.- La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de la promotora practicada en el Registro Civil español cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio después del nacimiento de la inscrita, se declara que el padre de esta no es el exmarido sino el cónyuge posterior, que es quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC.) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV.- A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el

requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (arts. 113 CC. y 2 LRC).

V.- En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de la madre y de su cónyuge antes de la sentencia de divorcio, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de la interesada no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla la recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (57ª)

I.2.1-Inscripción de filiación paterna no matrimonial.

Es inscribible el reconocimiento de un menor otorgado en forma y con todos sus requisitos, sin que importe la sola sospecha o duda de que el reconocimiento no se ajusta a la veracidad biológica.

En las actuaciones sobre inscripción del reconocimiento de filiación paterna no matrimonial de una menor remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra providencia dictada por la encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Madrid el 2 de noviembre de 2009, la Sra. S. mayor de edad y de nacionalidad boliviana, solicitó la inscripción del reconocimiento de filiación paterna de su hija menor de edad efectuado por el Sr. F. también de nacionalidad boliviana. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento en M. el... de... de 2006 de A. con marginal de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, testimonio de reconocimiento paterno ante el Registro Civil boliviano realizado por el Sr. F., cédula de identidad y certificado de nacimiento del anterior, libro de familia y pasaporte de la Sra. S.

2.- A requerimiento del registro, la promotora declaró que en septiembre de 2006 residía en C. (Bolivia) y que el día 13 de ese mismo mes llegó a M. En cuanto al Sr. C. residía también en dicha localidad en esas mismas fechas y continúa residiendo allí.

3.- La encargada del registro dictó providencia el 25 de noviembre de 2009 acordando no practicar la inscripción registral de filiación paterna no matrimonial por entender que se trata de un reconocimiento dudoso, en tanto que un ciudadano extranjero reconoce a una menor

española, lo que puede implicar la existencia de una situación de fraude con la intención de obtener beneficios administrativos para el progenitor.

4.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la menor está a cargo de su padre en Bolivia, y que la inscripción del reconocimiento es necesaria para poder ejercitar su derecho legal de paternidad.

5.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Madrid remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 120 y 124 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 28, 46 y 49 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 24-1ª de enero, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre y 28 de diciembre de 2002; 15-3ª de enero y 12-2ª de noviembre de 2004; 24-1ª y 2ª de noviembre de 2005 y 9-2ª de marzo de 2009 y 16-1ª de diciembre de 2010.

II.- Se pretende por este expediente la inscripción del reconocimiento paterno de una hija no matrimonial nacida en M. en 2006, de madre boliviana, que fue inscrita en el Registro Civil español sólo con la filiación materna. El reconocimiento se efectuó en comparecencia de 1 de septiembre de 2009 ante el Registro Civil boliviano y consta el consentimiento de la madre de la menor, pero la inscripción fue denegada mediante providencia de la encargada por estimar que se trata de un reconocimiento dudoso.

III.- La filiación paterna no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento efectuado ante el encargado del Registro Civil de quien afirme ser padre del reconocido (art. 120.1 CC. y 49 LRC) y, si éste es menor de edad, el reconocimiento es eficaz si presta consentimiento expreso la madre y representante legal del menor (art. 124.1 CC.).

IV.- Estas condiciones concurren en el reconocimiento discutido y, si bien es cierto que, aun así, estos reconocimientos no serían inscribibles si hay datos objetivos que permitan estimarlos como reconocimientos de complacencia que no se ajustan a la realidad a la vista de que el principio de veracidad biológica es el inspirador de la regulación del Código civil en materia de filiación, también es cierto que las simples dudas o sospechas de que el reconocimiento no responde a la verdad escapan a la calificación del encargado, que sólo puede denegar la inscripción cuando de las manifestaciones solemnes de los interesados se deduce, sin lugar a dudas, la falta de veracidad del reconocimiento. En el presente caso, las apreciaciones de la encargada no pueden tenerse como determinantes para excluir de manera absoluta la veracidad del reconocimiento efectuado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º.- Practicar la inscripción marginal del reconocimiento de la filiación paterna no matrimonial.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

I.3.- Adopción

I.3.2.- Inscripción adopción internacional

Resolución de 3 de enero de 2014 (77ª)

I.3.2.- Inscripción de adopción internacional.

1º.- No es inscribible en el Registro Civil español la adopción constituida en Perú respecto de un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad, por incurrir en la prohibición prevista en el artículo 175.3.2º del Código Civil.

2º.- Asimismo, la adopción requiere, si los adoptantes ya entonces estaban domiciliados en España, que se acompañe la declaración de idoneidad otorgada previamente por la entidad pública española competente.

En las actuaciones sobre inscripción de adopción internacional remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil Consular de Lima el 20 de mayo de 2011, Don R de J. de nacionalidad peruana y Doña Y-A. que ostenta la doble nacionalidad española y peruana, manifiestan que adoptaron a H-B. nacida en Perú el ... de ... de 1997, y solicitan la inscripción de nacimiento de su hija en el Registro Civil de Madrid, donde tienen su residencia. Aportan, entre otra, la siguiente documentación: actas de nacimiento de la menor interesada; certificación literal de nacimiento de la Sra. M. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 7 de noviembre de 2006; certificado de matrimonio de los promotores; sentencia de adopción de fecha 5 de diciembre de 2008 de la Corte Superior de Justicia de Callao-Juzgado especializado en familia; certificado de empadronamiento; y fotocopias del documento de identidad de los promotores.

2.- Posteriormente, el 5 de octubre de 2011, se vuelve a presentar solicitud en el Registro Civil de Madrid. El Encargado, por providencia de fecha 10 de noviembre de 2011, remite el expediente al Registro Civil Consular de Lima por entender que es incompetente, al tener la interesada menos de 14 años y residir en Perú, que a su vez, devuelve las actuaciones nuevamente al Registro Civil de Madrid con toda la documentación aportada, por entender que es el órgano competente para la inscripción de la adopción.

3.- En comparecencia de los promotores ante el Registro Civil de Madrid de fecha 27 de abril de 2012, los mismos manifiestan que vivían en España en el momento de la adopción y reconocen que no obtuvieron el correspondiente certificado de idoneidad.

4.- El Encargado del Registro Civil de Madrid mediante providencia de fecha 8 de mayo de 2012, deniega la inscripción de nacimiento solicitada ya que los promotores no han presentado el certificado de idoneidad exigido, ya que la adoptante era española y residente en España, de acuerdo con los artículos 9.5 del Código Civil; 26.3 de la Ley de Adopción internacional; el apartado II.5 de la Resolución-Circular de 15 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento e inscripción en el Registro Civil española de adopciones internacionales; y además, parece ser que la adoptada es hermana de doble vínculo de la adoptante, incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 175.3.2º del Código Civil, prohibición expresa que constituye una cuestión de orden público internacional

español, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 54/2007, por lo que en ningún caso procederá la aplicación de una ley extranjera cuando resulte manifiestamente contraria al orden público internacional español.

5.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

6.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso presentado. El Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 y 175 del Código civil; 25 y disposiciones adicional 2ª y final 22ª de la Ley Orgánica del Menor 1/1996, de 15 de enero; 23, 26.3 y 27 de la Ley de Adopción Internacional; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil; apartado II.5 de la Resolución-Circular de 15 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento e inscripción en el Registro Civil española de adopciones internacionales; y las Resoluciones de 19-2ª de noviembre de 1998; 21-1ª de diciembre de 2001; 17-6ª de septiembre de 2007; y 15-3ª de junio de 2009.

II.- Se pretende por los interesados la inscripción de la adopción de una menor nacida en 1997 en Perú, constituida en dicho país por sentencia dictada el 5 de diciembre de 2008 por la Corte Superior de Justicia de Callao-Juzgado especializado en familia. Los adoptantes, unidos en matrimonio ostentan, el marido, la nacionalidad peruana y, la mujer, la doble nacionalidad española y peruana. De otro lado, según resulta de las certificaciones de empadronamiento incorporadas al expediente y sus propias manifestaciones en comparecencia ante el Encargado del Registro Civil de Madrid el 27 de abril de 2012, la residencia habitual del matrimonio se encontraba en M. tanto en el momento de la adopción como en el de las manifestaciones. Por el Encargado del Registro Civil de Madrid se dictó providencia el 8 de mayo de 2012 denegando la inscripción de la adopción por ser el adoptante español y estar domiciliado en España al tiempo de la adopción y no haber aportado el certificado de declaración de idoneidad a que estaba obligado por no hallarse incurso en ninguna de las excepciones que eximen de dicha aportación; y, asimismo, dado que la adoptada es hermana por doble vínculo de la adoptante, por lo que estaría incurriendo en la prohibición prevista en el artículo 175.3.2º del Código Civil. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- Tratándose de adopción constituida en el extranjero, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, en su disposición adicional 2ª dispone que “para la inscripción en el Registro español de las adopciones constituidas en el extranjero, el encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 9.5 del Código Civil” y, según este artículo, modificado por la Disposición Final primera de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, redacción vigente en el caso de referencia, “la adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional”. Pues bien, el artículo 26 de la mencionada Ley, relativo a los requisitos para la validez en España de adopciones constituidas por autoridades extranjeras en defecto de normas internacionales, en su apartado 3º dispone que “cuando el adoptante sea español y residente en España, la Entidad Pública española competente deberá declarar su idoneidad previamente a la constitución de la adopción por el órgano competente extranjero”.

En este caso, como se ha indicado anteriormente, la entidad pública competente (la de la residencia habitual de los adoptantes) no ha emitido la declaración de idoneidad de los adoptantes españoles previamente a que se constituyese la adopción.

IV.- Por tanto, dado que, según resulta acreditado en las actuaciones, cuando se constituyó la adopción en Perú los adoptantes estaban domiciliados en España, no puede prescindirse para la inscripción de la adopción solicitada, de la declaración española de idoneidad. El certificado de idoneidad debe acreditar la capacidad jurídica del solicitante, siempre con arreglo a la Ley material española (art. 9 nº 1 y nº 5-I C.C.). El objetivo y finalidad de este requisito es el de evitar que personas no idóneas para ser adoptantes acudan a países que no controlan con rigor la idoneidad de los adoptantes e insten en tales países una adopción que, posteriormente, intentan que sea reconocida en España. En ausencia de este requisito se debe denegar el reconocimiento y, en consecuencia, la inscripción en el Registro Civil español (Resoluciones de 16-2ª de febrero de 1998 y 16-3ª de febrero de 1998). En la exigencia de este requisito esta Dirección General ha sido rigurosa, aplicándolo incluso respecto de adopciones constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que lo introdujo, pero cuya inscripción se solicitaba después de su vigencia (vid. Resoluciones de 25-3ª de junio de 1999 y 21-1ª de diciembre de 2001).

V.- Por otra parte, tal y como señala el Encargado del Registro Civil en el auto recurrido, conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley 54/2007, de adopción internacional, y el artículo 9.5 del Código Civil, para el reconocimiento en España de una adopción constituida por autoridad extranjera, cuando el adoptante o el adoptado sea español, los efectos jurídicos de la adopción internacional se han de corresponder, de modo sustancial, con los efectos de la adopción regulada en el derecho español. En el presente supuesto, la adoptada es hermana de doble vínculo de la adoptante, por lo que se incurre en la prohibición prevista en el artículo 175.3.2º del Código Civil, según el cual no puede adoptarse “a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad”, prohibición expresa que constituye una cuestión de orden público internacional, no procediendo en ningún caso la aplicación de una ley extranjera cuando resulte manifiestamente contraria al orden público internacional español (art. 23 de la Ley 54/2007, de adopción internacional).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Madrid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (78ª)

I.3.2.- Adopción internacional.

No es posible modificar el lugar real de nacimiento de la adoptada cuando, por haberse acogido los adoptantes a la posibilidad autorizada por la Instrucción de 15 de febrero de 1999, ya se ha extendido, además de la inscripción de nacimiento inicial y la marginal de adopción, otra posterior en la que se han reflejado, además de los datos del nacimiento y de la nacida, los de la filiación adoptiva constituida, y se ha trasladado ya previamente el historial registral de la adoptada al Registro Civil del domicilio al amparo de la nueva redacción dada en 2005 al artículo 20 nº 1 de la Ley del Registro Civil.

En las actuaciones sobre cambio de lugar de nacimiento en inscripción de adopción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra el auto del Encargado del Registro Civil de Parla (Madrid).

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Parla el 9 de marzo de 2012, Don P-A. y Doña M^a-O. manifestaron que son padres en virtud de adopción de la menor O. nacida en Ucrania el ... de ... de 1998, y que solicitaban se extendiese nueva inscripción de nacimiento en la que constase como lugar de nacimiento el domicilio de los adoptantes. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor interesada; certificado de empadronamiento; fotocopias del libro de familia, DNI de los promotores y de la menor.

2.- Una vez ratificados los promotores en su solicitud, previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil dictó auto el 4 de mayo de 2012 denegando la solicitud, al entender que conforme a la Instrucción de 1 de julio de 2004, la posibilidad de solicitar el cambio del lugar real de nacimiento por el del domicilio de los padres adoptantes tiene su momento, cual es, el de la nueva inscripción. Si ésta ya se ha practicado, como es el caso, ya no cabría solicitar dicho cambio porque su autorización provocaría la cancelación de la inscripción anterior y la extensión de otra nueva, lo que no está previsto en las Instrucciones de 15 de febrero de 1999 ni en la de 1 de julio de 2004, además ya había quedado consolidada una situación jurídico-registral.

3.- Notificados los promotores, presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud, alegando el desconocimiento de la regulación al respecto del tema y que solicitaron “desde el primer momento el cambio del lugar de nacimiento de la menor”, sin embargo, no aportan ningún documento en prueba de su manifestación.

4.- Se procede a la notificación del recurso al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16, 18, 23 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); Disposición final segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código civil; los artículos 68 y 76 a 78, y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); el Real Decreto 820/2005, de 8 de julio por el que modifica los artículos 77 y 307 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1999, de 1 de julio de 2004 y de 28 de febrero de 2006, la Resolución-Circular de 31 de octubre de 2005 y la Resoluciones de 27-6^a y 29-3^a de octubre de 2005; 2-2^a de marzo, 22-1^a de mayo de 2006; 20-4^a de marzo, 15-4^a y 16-2^a de noviembre de 2007; 1 de marzo, 14-5^a y 6^a de julio, 20-6^a Noviembre de 2008; 12-2^a y 20-5^a de Enero de 2009.

II.- Se pretende por los interesados un cambio del lugar del nacimiento de su hija adoptiva con el fin de que en la inscripción de nacimiento de esta se haga constar, no el lugar real en que aquel acaeció, sino el correspondiente al del domicilio de los padres. La inscripción de nacimiento y de adopción se practicó en el Registro Civil Central, extendiéndose el asiento principal con la filiación biológica y el marginal con la filiación adoptiva. Igualmente, por traslado, se practicó la nueva inscripción en el Registro Civil de Parla (domicilio de los interesados) en la que constan solo los datos de la filiación adoptiva. El Encargado del Registro Civil de Parla acordó mediante Auto de 4 de mayo de 2012 denegar la solicitud de cambio del lugar de nacimiento de la menor. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- La adopción da lugar en el Registro Civil español a una inscripción marginal en el asiento de nacimiento del adoptado (cfr. artículo 46 de la Ley del Registro Civil). Ello supone que en

el mismo folio registral aparece reflejada la filiación anterior, o la ausencia de filiación, del adoptado, carente ya de relevancia jurídica, y la nueva filiación adoptiva dotada legalmente de plenitud de efectos jurídicos. Ciertamente esta superposición de filiaciones, como puso de manifiesto la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1999, puede dar origen a molestas confusiones y a que irregularmente se dé publicidad a través de una certificación literal a datos que afectan a la intimidad familiar. Con la finalidad de eliminar estos inconvenientes la citada Instrucción, en aplicación del mecanismo previsto por el artículo 307 del Reglamento del Registro Civil, autorizó con carácter general que la filiación adoptiva fuera objeto de una inscripción principal de nacimiento que reflejara sólo los datos sobrevenidos por la adopción, con referencia a la inscripción previa de nacimiento y adopción en la que se comprende todo el historial jurídico del adoptado.

Una de las circunstancias reveladora de una filiación adoptiva puede ser la relativa al lugar del nacimiento, especialmente cuando éste ha acaecido en un país remoto. Por ello, es conveniente que la publicidad de este dato quede limitada y sujeta a la autorización especial que el citado artículo 21 del Reglamento establece. A tal fin, y complementariamente a lo anterior, la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de julio de 2004, guiada de la misma finalidad de evitar la posibilidad de la publicidad irregular de las adopciones, y especialmente respecto de las adopciones internacionales que tan notable incremento han experimentado en los últimos años, autorizó que en la nueva inscripción de nacimiento y adopción que, a solicitud de los adoptantes, se practique -con inclusión exclusivamente de los datos del nacimiento y del nacido y de las circunstancias de los padres adoptivos- conste como lugar de nacimiento del adoptado el del domicilio de los adoptantes, y no el lugar real de su nacimiento, reconociendo así en tales casos una facultad similar a la que el artículo 16 párrafo segundo de la Ley del Registro Civil otorga a los padres biológicos. Con ello se hace efectivo, también en este ámbito, el principio constitucional de equiparación entre los hijos con independencia del origen de su filiación (cfr. arts. 14 y 39 de la Constitución).

IV.- Ahora bien, la necesidad de dotar a esta materia de la mayor seguridad jurídica posible y de reforzar los citados principios constitucionales de protección de la intimidad personal y familiar y de igualdad jurídica y equiparación entre los hijos con independencia de su filiación, dotando a la regulación de la materia del adecuado rango normativo legal, así como la conveniencia de extender las finalidades antes expresadas a otros supuestos anteriormente no cubiertos por las Instrucciones citadas, han determinado la reciente reforma del artículo 20 nº1 de la Ley del Registro Civil, introducida por la Disposición final segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. La reforma ha consistido en añadir un nuevo párrafo al número 1º del artículo 20, relativo al traslado de las inscripciones principales de nacimiento al Registro del domicilio del nacido o sus representantes legales, adición del siguiente tenor literal: "En caso de adopción internacional, el adoptante o adoptantes de común acuerdo podrán solicitar que en la nueva inscripción conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del adoptado. A las inscripciones así practicadas les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16".

V.- La introducción de esta modificación en la Ley del Registro Civil tiende sin duda a satisfacer la finalidad a que responde el párrafo segundo de la regla 1ª añadido a la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de enero de 1999 por la más reciente de 1 de julio de 2004, dotando a la materia, como antes se dijo, de una adecuada cobertura legal en atención a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las situaciones y asientos registrales practicados al amparo de aquellas Instrucciones.

La citada reforma legal fue objeto de rápido desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, que, entre otros extremos, da nueva redacción a los artículos 77 y 307 del citado Reglamento. En cuanto al primero se añade un nuevo párrafo

que permite omitir los datos de la filiación originaria en la nueva inscripción de nacimiento practicada como consecuencia del traslado en los casos de adopción. En concreto se establece que “En caso de adopción, si los solicitantes del traslado así lo piden, en la nueva inscripción de nacimiento constarán solamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos y, en su caso, la oportuna referencia al matrimonio de estos”. Se trata de una norma complementaria del artículo 20 nº1 de la Ley del Registro Civil que, de forma conjunta con éste, vienen a sustituir en su finalidad a la Instrucción de 15 de febrero de 1999, en su redacción modificada por la de 1 de julio de 2004. En consecuencia, estas últimas Instrucciones se han de entender derogadas a partir de la entrada en vigor de la citada reforma legal y reglamentaria. La posibilidad de modificar el lugar del nacimiento del nacido queda circunscrita, como ya lo estaba, a las adopciones internacionales y en todo caso a través del mecanismo registral del traslado del folio al Registro Civil del domicilio de los promotores.

Pero la regulación hubiese quedado incompleta si no se hubiese atendido también, a efectos de evitar la acumulación en un único folio registral de la doble filiación originaria o biológica y adoptiva, a los supuestos de las adopciones nacionales, en cuyo caso no siempre será posible ni deseable el traslado del folio registral en que conste inscrito el nacimiento, pues éste puede coincidir con el propio Registro Civil del domicilio de los padres adoptivos. Para atender a tal supuesto se procedió a dar nueva redacción al primer párrafo del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil. Este precepto viene a cubrir, como se ha dicho, los supuestos de traslado sin alteración del Registro Civil competente (esto es, las nuevas inscripciones se practicarían en el folio registral que corresponda en el momento de extenderse en el propio Registro Civil en que constaban las iniciales que están llamadas a cancelarse). Por su parte, la reforma del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil prevé la misma finalidad pero para los casos en que, además de responder el traslado a la evitación de la superposición de filiaciones en un único folio registral, responda igualmente al deseo de contar con la proximidad del Registro Civil en que consta el historial jurídico del estado civil de la persona respecto del domicilio de la misma o de sus representantes legales. De esta forma se aplican criterios de economía procedimental, ya que para lograr esta última finalidad, posible en términos legales antes de la reciente reforma, resultaba preciso acudir a un doble traslado del folio registral, primero en ejercicio de las facultades reconocidas por la Instrucción de 9 de enero de 1999 y, después, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 nº 1 de la Ley del Registro Civil, por este orden o en orden inverso.

VI.- Explicado el alcance de las reformas legal y reglamentaria operadas en este campo, puede pasarse a analizar la pretensión planteada en el presente caso, que es la de obtener el cambio del lugar de nacimiento *tr ex novo* as haber obtenido ya el traslado del folio registral al Registro Civil de su domicilio, con supresión de los datos de la filiación biológica. Pues bien, conforme a la reseñada reforma legal de 2005 la posibilidad de solicitar el cambio del lugar real de nacimiento por el del domicilio de los padres adoptantes tiene su momento, cual es, el de la nueva inscripción que se practica por traslado al Registro Civil del domicilio de los adoptantes. Este criterio también se desprende de la nueva redacción que el Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, ha dado al artículo 77 del Reglamento del Registro Civil. Es decir, según esta norma, el posible cambio del lugar de nacimiento, si se solicita, deberá efectuarse “en la nueva inscripción”, entendiéndose por tal la que se practica después de la principal de nacimiento y marginal de adopción, para hacer constar sólo la filiación adoptiva, con ocasión de su traslado, pero no en otras posteriores.

Ahora bien, todo lo anterior se ha de entender sin perjuicio de la aplicación de la nueva norma contenida en el artículo 20 nº 1 de la Ley registral civil, reformado por la Ley 15/2005, cuando habiéndose acogido los interesados a la Instrucción de 15 de febrero de 1999, y extendida una nueva inscripción de nacimiento con inclusión exclusiva de los datos de la filiación adoptiva pero sin cambio de lugar de nacimiento, se solicite el traslado de tal inscripción al Registro Civil del domicilio de los padres adoptivos. Es decir, aunque la reforma legal de 8

de julio de 2005 presupone, en conexión con la reforma reglamentaria de la misma fecha, que una sola operación registral, la inscripción de traslado, cumplirá la triple finalidad de desagregar los datos de la filiación natural u originaria del adoptado de su nueva inscripción de nacimiento, modificar el lugar de nacimiento del adoptado y, tercero, trasladar el historial registral civil de la persona al Registro Civil del domicilio, nada impide que para los supuestos en que la primera de estas tres operaciones ya esté consumada de forma autónoma a través de la aplicación de la Instrucción de 15 de febrero de 1999, las otras dos operaciones, esto es, el traslado y la modificación del lugar de nacimiento, puedan ejecutarse conjuntamente en un momento subsiguiente, bajo la vigencia de las nuevas normas legales, normas que, no cabe cuestión sobre ello, son aplicables también a los casos de adopciones constituidas con anterioridad a su entrada en vigor, y ello no sólo porque la llamada “retroactividad tácita” se ha predicado por la doctrina civilística moderna respecto de las normas organizativas, en las que cabe encuadrar las de mecánica u organización registral, sino también por el valor que, ante el silencio de la Ley, se debe reconocer en la labor interpretativa a las orientaciones que se desprenden de las Disposiciones transitorias del Código civil, añadidas a su segunda edición para regular la transición entre éste y el Derecho anterior. Y en este sentido debe hacerse en esta materia aplicación analógica de la Disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, ya que siendo así que el derecho al traslado de la inscripción de nacimiento y marginal de adopción, con simultánea modificación del lugar de nacimiento del adoptado, se introduce *ex novo* en nuestro Ordenamiento jurídico, con norma de rango legal, por la Ley 15/2005, por referencia a la situación legislativa inmediatamente anterior, ello supone que, aplicando analógicamente la citada Disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, tal derecho «tendrá efecto desde luego», aunque el hecho –en este caso el nacimiento y la adopción– que lo origine se verificara bajo la legislación anterior, aplicación analógica que ya había sostenido este Centro Directivo en otras materias vinculadas al estado civil de las personas, en concreto con ocasión de la interpretación del alcance retroactivo de la reforma del Código civil en materia de nacionalidad operada por Ley 36/2002, de 8 de octubre (cfr. Resolución de 25-2.ª de abril de 2005) y de la más reciente reforma en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo introducida por la Ley 13/2005, de 1 de julio (cfr. Resolución-Circular de 29 de julio de 2005). Sin embargo, tampoco esta opción cabe en el presente caso en el que los interesados ya habían obtenido el traslado del historial registral civil de su hija al Registro Civil de su domicilio, consolidando con ello una situación jurídico-registral cuya modificación queda ya fuera del alcance de las previsiones del reformado artículo 20 nº 1 de la Ley del Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Parla (Madrid).

II. NOMBRES Y APELLIDOS

II.1.- Imposición nombre propio

II.1.2.- Nombre propio del extranjero naturalizado

Resolución de 27 de Enero de 2014 (18ª)

II.1.2.-Nombre propio del extranjero nacionalizado.

No es admisible el nombre de grafía incorrecta "Jhon".

En las actuaciones sobre atribución de nombre en inscripción de nacimiento de un menor extranjero naturalizado español remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra calificación del encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de diciembre de 2008, se concedió la nacionalidad española por residencia al menor Jhon-H. nacido en Ecuador el ... de ... de 1998 y domiciliado en M.

2.- Una vez suscrita por los padres, en representación del interesado, acta de juramento o promesa para adquirir la nacionalidad española, el encargado del Registro Civil Único de Madrid dictó providencia el 25 de mayo de 2009 por la que dejaba en suspenso la extensión del acta de nacimiento del menor, haciendo saber a sus representantes legales que la grafía correcta del primer nombre de su hijo es John y no Jhon, como figura en la certificación de nacimiento ecuatoriana.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su deseo de que el menor sea inscrito con el mismo nombre que figura en su partida de nacimiento ecuatoriana.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó la confirmación de la providencia recurrida. El encargado del Registro Civil de Madrid se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192, 193, 212 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 5-4ª de noviembre de 2003; 24 de julio de 2004; 30-3ª de enero de 2006; 20-9ª y 28-3ª de noviembre de 2008 y 20-9ª de abril de 2010.

II.- El interesado, nacido en Ecuador en 1998, adquirió la nacionalidad española por residencia y el encargado del registro, en trámite de calificación, dictó providencia dejando en suspenso la extensión del acta de nacimiento y advirtiendo a los padres del menor que la grafía correcta de su primer nombre es "John" y no "Jhon", como figura en su inscripción ecuatoriana. Dicha providencia constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español el nombre propio que aparezca en la

certificación extranjera de nacimiento que sirva de título para la inscripción, a no ser que se pruebe la utilización de hecho de otro nombre diferente (art. 213.1º RRC). Y, en todo caso, si este nombre infringe las normas establecidas sobre imposición del nombre propio (art. 213.2º RRC), ha de ser sustituido por otro ajustado conforme a los criterios que señala el artículo 212 del Reglamento del Registro Civil.

IV.- No se aprecia en este caso justa causa para permitir que se haga constar en la inscripción de nacimiento en el Registro español un nombre incorrectamente escrito que viene a constituir una variante caprichosa de un antropónimo inglés. Cabe recordar al respecto, aun cuando no se trate del mismo supuesto, que la reiterada doctrina de este centro en materia de cambio de nombres propios en el sentido de no admitir los propuestos cuando suponen una mínima variación del nombre oficial se viene exceptuando, precisamente, en aquellos supuestos en los que la modificación, a pesar de ser insignificante, persigue la corrección ortográfica de un nombre incorrectamente inscrito. Mutatis mutandis, eso es lo que sucede en este caso, en el que se advierte la improcedencia de mantener un nombre con una grafía incorrecta aunque así conste en el registro extranjero de procedencia.

V.- Por otro lado, cabe recordar también que cuando el encargado del registro no considere admisible el nombre elegido por los progenitores, requerirá a estos para que elijan otro y, en cualquier caso, pasados tres días sin haberlo hecho, debe procederse a practicar la inscripción de nacimiento con el nombre impuesto por el encargado, pudiendo los representantes legales del menor, en caso de desacuerdo, recurrir la calificación realizada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

II.2.- Cambio de nombre

II.2.1.- Cambio nombre-prueba uso habitual

Resolución de 30 de Enero de 2014 (45ª)

II.2.1-Cambio de nombre.

No puede autorizarlo el encargado si no se acredita suficientemente la habitualidad en el uso del nombre pedido, pero lo concede la DGRN por economía procesal y por delegación.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Santa María de Guía (Gran Canaria).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2010 en el Registro Civil de Santa María de Guía, Don Virgilio-J. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de su nombre por Vili, por ser éste el que habitualmente utiliza. Aportaba los siguientes documentos: DNI, inscripción de nacimiento del interesado,

partida de bautismo, certificado de empadronamiento, certificado de ausencia de antecedentes penales, dos diplomas de cursos realizados en 2007 y 2008 en diferentes centros formativos a nombre de Vili. carné de conducir, mensaje de correo electrónico y dos documentos oficiales, junto con otro diploma de formación en los que figura la firma del interesado como "Vili".

2.- Ratificado el promotor y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 25 de enero de 2011 denegando el cambio propuesto por no considerar acreditado el uso habitual del nombre pretendido.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso reiterando la petición e insistiendo en que el interesado es conocido desde pequeño con el nombre de Vili.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil de Santa María de Guía se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley de Registro Civil; 206, 209, 210 y 365 del Reglamento de Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, 21-1ª de junio de 2001; 18-1ª de mayo y 17-5ª de septiembre de 2002; 3-3ª de diciembre de 2004; 10-3ª de marzo y 27-2ª de diciembre de 2005; 13-4ª y 20-1ª de febrero de 2006; 4-3ª y 4-7ª de mayo de 2011.

II.- Pretende el promotor el cambio de su nombre actual por Vili alegando que es este el que utiliza habitualmente. El encargado del registro denegó la solicitud por no considerar acreditado dicho uso. Contra esta resolución se presentó el recurso analizado.

III.- El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado.

IV.- En este caso las pruebas presentadas no llegan a justificar de forma suficiente la habitualidad en el uso del nombre pretendido, de modo que la competencia para aprobar el cambio excede de la atribuida al encargado y entra dentro de la general atribuida al Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 7 de febrero), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V.- Conviene pues en este punto examinar la cuestión desde este centro directivo por si el cambio intentado pudiera ser acogido por esta otra vía. Se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio ante el Registro Civil del domicilio (art. 365 RRC) y razones de economía procesal aconsejan ese examen (art. 354 RRC), ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI.- Desde esta perspectiva, el cambio solicitado no perjudica a terceros y cabe apreciar la concurrencia de justa causa (art. 60 LRC y 206, apartado último, RRC) en tanto que, aunque no se justifica convenientemente un uso habitual y consolidado en el tiempo, sí hay indicios de que el interesado es conocido en su entorno por ese nombre, sin que, por otro lado, incurra en ninguna de las prohibiciones del artículo 54 LRC.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º) Desestimar el recurso y confirmar el auto dictado.

2º) Autorizar, por economía procesal y por delegación, el cambio de nombre del interesado por Vili, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santa María de Guía (Gran Canaria).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (47ª)

II.2.1-Cambio de nombre. Uso habitual.

Hay justa causa para autorizar el cambio de nombre de María del Rocío por Rocío, que es el usado habitualmente.

En las actuaciones sobre cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Torrijos (Toledo).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2010 en el Registro Civil de Torrijos, Doña María del Rocío. mayor de edad y con domicilio en El C de T. (T) solicitaba el cambio de nombre en su inscripción de nacimiento por Rocío, alegando que es este el que utiliza habitualmente. Adjuntaba la siguiente documentación: inscripciones de nacimiento y de matrimonio, inscripción de nacimiento de una hija, certificado de empadronamiento, DNI, tarjeta sanitaria, permiso de conducir, tarjeta de los servicios sociales de Castilla-La Mancha y partida de bautismo.

2.- Ratificada la interesada y previo informe desfavorable del ministerio fiscal por entender que no concurría justa causa, el encargado del registro dictó auto denegando la pretensión por no considerar acreditado el uso habitual.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso reiterando que el solicitado es el nombre que la promotora utiliza en todos los ámbitos sociales y aportando, como pruebas complementarias, varios documentos expedidos por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en los que se identifica a la promotora con el nombre solicitado.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación reiterando la no concurrencia de justa causa. El encargado del Registro Civil de Torrijos se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 218 y 365 del Reglamento de Registro Civil y las resoluciones, entre otras, de 28 de febrero y 26-1ª de abril

de 2003, 26-2ª de octubre de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008, 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009, 18-4ª de marzo y 18-4ª de junio de 2010.

II.- La interesada solicita cambiar el nombre que consta en su inscripción de nacimiento, María del Rocío, por el simple Rocío, que es el que utiliza habitualmente. El encargado del registro denegó la pretensión por no considerar acreditado el uso habitual, si bien el ministerio fiscal se había opuesto por un motivo distinto, cual es el no considerar acreditada la concurrencia de justa causa para el cambio.

III.- El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (art. 209.4º RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio para tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre propio solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre propio que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV.- Pues bien, de las pruebas aportadas al expediente se desprende claramente la existencia de uso habitual del nombre pretendido, que es el que figura incluso en documentos oficiales de la promotora como el DNI y el certificado de empadronamiento. Y en lo que se refiere a la concurrencia o no de justa causa, ciertamente es doctrina reiterada de este centro directivo que la justa causa no se aprecia cuando la modificación solicitada, por su escasa entidad, es objetivamente considerada como mínima o intrascendente, pero tal doctrina no es de aplicación a este caso en tanto que se solicita la modificación de un nombre compuesto para convertirlo en uno simple que, además, como se ha visto, es el que la interesada utiliza en todas sus relaciones sociales. Por lo demás, el cambio no perjudica a tercero y, en definitiva, resultan cumplidos los requisitos necesarios para autorizarlo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y autorizar el cambio de nombre de María del Rocío por Rocío.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrijos (Toledo).

II.2.2.- Cambio nombre-justa causa

Resolución de 10 de Enero de 2014 (40ª)

II.2.2-Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar “Anna-Tere” por “Annatere” que, en esa forma, supone una desviación de las reglas registrales y de la ortografía de las lenguas españolas.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Terrassa (Barcelona).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Terrassa en fecha 30 de marzo de 2010 Don J. mayor de edad y domiciliado en dicha población, promueve expediente en solicitud de autorización de cambio de nombre de su hija menor de edad Anna-Tere. nacida en T. el ... de ...de 2009, por "Annatere", exponiendo que este último es equivalente al inscrito en el español que se habla en México, país del que la menor también es nacional, que el inscrito y el usado son completamente distintos, lo que induce a confusión en la identificación, y que ciertos programas informáticos de las administraciones públicas no admiten guión entre nombres o entre apellidos. Acompaña fotocopia del DNI de ambos progenitores, escritura pública otorgada por los padres ante notario mexicano declarando que "Annatere" es nombre usual en dicho país, volante colectivo de empadronamiento en T. y, de la menor, certificación literal de nacimiento y fotocopia de DNI con el nombre inscrito y documental en la que aparece con el nombre propuesto. El 23 de abril de 2010 el promotor ratificó la solicitud, se acordó formar el oportuno expediente y notificar la incoación a la madre de la menor, que mostró su conformidad con el mismo, y comparecieron dos testigos, que manifestaron que saben a ciencia cierta que, aunque en el Registro Civil el nombre consta con guión porque les dijeron que no estaba admitido sin él, la niña se llama "Annatere", y ese es el nombre que utiliza en su vida familiar y social y con el que fue bautizada en México.

2.- El ministerio fiscal se opuso a que se autorice, por intranscendente, el cambio de nombre interesado y el 17 de junio de 2010 la Juez Encargada, no apreciando justa causa para modificación de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo que no ha lugar a autorizarla.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, este interpuso recurso mediante representante ante la Dirección General de los Registros alegando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Registro Civil, en la inscripción inicial debió hacerse constar, y no se hizo, el nombre impuesto por los padres, que el guión no es de anotación obligada en este caso porque "Tere" no es un nombre sino un apócope de "Teresa", que sin guión consta en el certificado de empadronamiento ya que al Ayuntamiento de Terrassa le resulta de imposible consignación y que, en este caso, debe exceptuarse la doctrina normalmente aplicada porque que el nombre está incorrectamente escrito; y aportando, como prueba documental, acta de nacimiento mexicana y volante de empadronamiento en Terrassa de la menor con el nombre que para ella se pretende.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la estimación del recurso interesando la confirmación de la resolución impugnada por sus propios fundamentos, y la Juez Encargada informó que estima que procede ratificar el auto dictado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 26-1ª de octubre de 1998; 1-2ª de julio y 4-6ª de octubre de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 30-2ª de julio, 6-3ª de septiembre, 28-2ª de octubre y 27-1ª de noviembre de 2003; 3 de enero, 2-2ª de marzo, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 24-4ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 17-1ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo, 11-5ª de junio y 4-6ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009, 25-2ª de junio y 14-17ª de diciembre de 2010, 20-3ª de enero de 2011 y 18-2ª de febrero de 2013.

II.- Se pretende por el promotor, con la conformidad del otro progenitor, el cambio del nombre, Anna-Tere, que consta en la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad, por "Annater", exponiendo que este último, equivalente al inscrito en el español que se habla en México, es el que la menor usa y que ciertos programas informáticos de las administraciones públicas no admiten guión entre nombres o entre apellidos. La Juez Encargada, no apreciando justa causa para cambio de tan escasa entidad, dispuso que no ha lugar a autorizarlo mediante auto de 17 de junio de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Juez Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el uso habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV.- Respecto a la justa causa (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC), es doctrina constante de este Centro Directivo que no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

V.- Siendo evidentemente una modificación mínima la supresión del guión que une los dos nombres simples impuestos, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar "Anna-Tere" por "Annater", y no puede estimarse la alegación de que el nombre está incorrectamente escrito porque el artículo 192 del Reglamento del Registro Civil establece, como regla de práctica registral, que cuando se impongan dos nombres propios simples, estos se unirán por un guión y ambos se escribirán con mayúscula inicial. Habida cuenta de que, tanto en la percepción social como por aplicación de las reglas gramaticales españolas, "Anna" y, una vez permitidos los diminutivos y variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, también "Tere" son dos nombres propios independientes, cualesquiera que sean las razones de la solicitud no es admisible la pretensión de que se inscriban en la forma "Annater", que supone una desviación de las reglas registrales y de la ortografía de las lenguas españolas.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Terrassa (Barcelona).

Resolución de 27 de Enero de 2014 (16ª)

II.2.2-Cambio de nombre.

Hay justa causa para cambiar "Josefina-Lourdes" por "Lourdes" ya que es modificación sustancial la supresión de uno de los dos nombres inscritos.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el ministerio fiscal contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Elda (Alicante).

HECHOS

- 1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Elda en fecha 9 de julio de 2009 Doña Josefina Lourdes. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por “Lourdes”, exponiendo que este último es el que usa habitualmente tanto en la vida privada como en la pública. Acompaña testimonio de DNI y certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito y certificado de empadronamiento en E. como “Josefa-Lourdes”.
- 2.- En el mismo día, 9 de julio de 2009, la promotora ratificó la solicitud y comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la solicitante hace más de quince años, que siempre la han llamado “Lourdes” y que tardaron en enterarse de que su nombre es Josefina-Lourdes.
- 3.- El ministerio fiscal no se opuso y el 16 de octubre de 2009 el Juez Encargado, razonando que, pese a haberse acreditado la habitualidad, no concurre justa causa para una variación que solo supone la abreviación del nombre inscrito, dictó auto disponiendo no autorizar el cambio instado.
- 4.- Notificada la resolución a la promotora y al ministerio fiscal, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado argumentando que entiende que existe justa causa para el cambio solicitado, ya que es modificación sustancial la supresión de uno de los nombres inscritos.
- 5.- De la interposición del recurso se dio traslado a la promotora y el Juez Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil) y las resoluciones, entre otras, de 15 y 28-1ª de febrero y 24-1ª de marzo de 2001, 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 22-3ª de abril, 26-2ª de octubre y 2-5ª de noviembre de 2004; 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005, 7-4ª de marzo, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006; 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008, 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009, 15-7ª de marzo de 2010, 25-7ª de enero y 10-6ª de junio de 2011 y 17-59ª de abril de 2012.
- II.- Se pretende por la promotora el cambio del nombre, “Josefina-Lourdes”, que consta en su inscripción de nacimiento por “Lourdes”, exponiendo que este último es el que usa habitualmente tanto en la vida privada como en la pública. El Juez Encargado, no apreciando la concurrencia de justa causa para una variación que solo supone la abreviación del nombre inscrito, dispuso no autorizar el cambio instado mediante auto de 16 de octubre de 2009 que constituye el objeto del presente recurso, formulado por el ministerio fiscal.
- III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio de nombre propio por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.
- IV.- Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar “Josefina-Lourdes” por “Lourdes”. La reiterada doctrina de este Centro Directivo de que la justa causa no concurre cuando la modificación solicitada, por su escasa entidad, debe estimarse objetivamente

mínima o intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que llegue a ser conocida familiar y socialmente con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial, no es de aplicación a este caso, ya que no puede mantenerse que la supresión de uno de dos nombres simples sea un cambio mínimo, ha de considerarse que constituye una alteración sustancial y, por tanto, apreciarse justa causa para el cambio solicitado, este no perjudica a tercero, y, en definitiva, han de estimarse cumplidos los requisitos específicos necesarios para la modificación (cfr. art. 206.III, RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y revocar el auto apelado. Conforme dispone el artículo 218 RRC la autorización de cambio de nombre no surtirá efectos mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la peticionaria y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado Reglamento.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Elda.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (17ª)

II.2.2-Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar “Ekiñe” por “Ekhiñe”, variante gráfica de un nombre correctamente inscrito.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Donostia-San Sebastián en fecha 2 de noviembre de 2010 Doña Ekiñe, mayor de edad y domiciliada en P. (G). solicita el cambio del nombre inscrito por “Ekhiñe”, exponiendo que este último es el que viene usando desde la infancia y con el que se identifica en todos los órdenes de la vida. Acompaña fotocopia de DNI, certificado de empadronamiento en P. y certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito y alguna documental de uso del propuesto. A fin de que se practique información testifical por la Juez Encargada se dispuso librar exhorto al Registro Civil de Pasaia, donde el 20 de diciembre de 2010 comparecieron dos testigos que manifestaron que conocen a la promotora del expediente con el nombre de “Hekiñe” (sic).

2.- El ministerio fiscal, considerando que no hay motivos legales para oponerse al cambio de nombre propuesto, informó favorablemente la solicitud y el 28 de enero de 2011 el Juez Encargado del Registro Civil de Donostia, no apreciando justa causa para cambio de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo denegarlo.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que considera que la forma en que su nombre aparece en el Registro Civil contiene error ortográfico y que la consonante H tiene sus funciones dentro del vocablo e introduce un cambio fonético.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se adhirió al recurso por fundamentarse la petición de cambio de nombre en que el inscrito no cumple los requisitos ortográficos de la lengua oficial correspondiente, y el Juez Encargado del Registro Civil de Donostia informó que no han quedado desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución dictada y, por tanto, estima que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 26-1ª de octubre de 1998; 1-2ª de julio y 4-6ª de octubre de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 30-2ª de julio, 6-3ª de septiembre, 28-2ª de octubre y 27-1ª de noviembre de 2003; 3 de enero, 2-2ª de marzo, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 24-4ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 17-1ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo, 11-5ª de junio y 4-6ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009, 25-2ª de junio y 14-17ª de diciembre de 2010, 20-3ª de enero de 2011 y 18-2ª de febrero y 21-22ª de junio de 2013.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la intercalación a efectos meramente gráficos de una hache muda en las lenguas españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar “Ekiñe” por “Ekhiñe”, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que la forma en que este nombre vasco consta inscrito es la correcta conforme a las reglas gramaticales de dicho idioma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Donostia-San Sebastian.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (19ª)

II.2.2-Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar Aitana por Aythana.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2010 en el Registro Civil de Telde, Don J-A. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de nombre de su hija menor de edad, Aitana. en su inscripción de nacimiento sustituyéndolo por Aythana, por ser éste el que habitualmente utiliza. Aportaba los siguientes documentos: inscripción de nacimiento de la interesada el 18 de abril de 2006, certificado de un centro escolar acreditando el uso por parte de la menor del nombre solicitado, contrato de seguro, varios recibos, justificantes bancarios, DNI de padres e hija y volante de empadronamiento.

2.- Ratificados ambos progenitores y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 17 de febrero de 2011 denegando el cambio propuesto por no concurrir justa causa al tratarse de una modificación mínima.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso reiterando la petición inicial y alegando que el nombre ahora solicitado es el que los padres pretendieron imponer a su hija cuando nació pero el registro no lo admitió, que es el que la menor utiliza habitualmente y que, una vez realizada la inscripción con el nombre actual, han tenido conocimiento de que hay personas registradas con la forma solicitada. Con el escrito de recurso se aportaron varios trabajos escolares firmados por la interesada, un boletín de evaluación y varias relaciones nominales obtenidas de distintos organismos donde aparecen dos personas identificadas con el nombre de Aythana.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su estimación. El encargado del Registro Civil de Telde se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley de Registro Civil; 206, 209, 210 y 365 del Reglamento de Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, 1-2ª de julio y 4-6ª de octubre de 1999; 30-2ª de julio, 28-2ª de octubre y 27-1ª de noviembre de 2003; 14-5ª de junio de 2006; 3-3ª de octubre y 20-3ª de noviembre de 2007; 27-4ª de febrero y 7-3ª de abril de 2008; 11-3ª de febrero, 3-3ª de marzo y 3-4ª de junio de 2009.

II.- Pretenden los promotores el cambio de nombre de su hija Aitana por Aythana. El encargado del registro denegó la solicitud al considerar que se trata de una modificación mínima, por lo que no concurre justa causa. Contra dicha resolución se presentó el recurso analizado.

III.- El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC). Por otra parte, uno de los requisitos exigidos para autorizar cualquier cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del encargado del registro civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206, último párrafo, y 210 del RRC). A estos efectos, es doctrina constante de este centro directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente, de que llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con una pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito. Al margen de la existencia de otras personas que puedan figurar inscritas en el Registro Civil con la variante solicitada, el hecho es que la doctrina anterior es de directa aplicación a este caso, en el que se solicita el cambio de Aitana por Aythana, modificación que solo supone la

sustitución gráfica de una letra y la adición de una hache intercalada sin que ello implique variación fonética alguna en la pronunciación respecto del nombre actual correctamente inscrito según el uso social más extendido.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto dictado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (34ª)

II.2.2-Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar “Judit” por “Judith”.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo (Bizkaia).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Gernika-Lumo en fecha 21 de septiembre de 2010 Doña Judit. mayor de edad y domiciliada en M. (B), solicita el cambio del nombre inscrito por “Judith”, exponiendo que por este último es conocida e identificada en todos los órdenes de la vida. Acompaña certificación literal de nacimiento y DNI vigente con el nombre inscrito y certificado de empadronamiento en M. DNI caducado y otra documental acreditativa del uso del nombre propuesto. En el mismo día, 21 de septiembre de 2010, la promotora ratificó la solicitud y comparecieron como testigos sus suegros, que manifestaron que conocen a la interesada desde hace más de cinco años y que les consta que utiliza habitualmente el nombre de “Judith”.

2.- El Ministerio Fiscal, a la vista de la documentación aportada y de la información testifical ofrecida, nada opuso a la autorización solicitada y el 4 de octubre de 2010 la Juez Encargada, no apreciando justa causa para modificación de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta presentó escrito en el Registro Civil, exponiendo que “Judith” es el nombre con el que se identifica desde que tiene uso de razón y que cree conveniente el cambio para evitar problemas en el futuro y aportando prueba documental adicional, y se tuvo por interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, entendiéndolo suficientemente acreditado que el nombre solicitado es el utilizado no solo a nivel doméstico sino también en documentos oficiales y que concurre justa causa en la pretensión, interesó que se dicte resolución de conformidad con lo interesado y la Juez Encargada informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución impugnada, estima que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 2-1ª y 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo y 15-2ª de septiembre de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero, 14-1ª de abril, 16-2ª de mayo, 3 de septiembre y 20-5ª de octubre de 1998; 27-1ª de febrero y 15-4ª de julio de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 26-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 16-2ª de marzo, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 15-3ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la consistente en adicionar una hache final, que ni siquiera implica alteración fonética, a un nombre correctamente escrito, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Judit por "Judith", tal como expresan respecto a este mismo nombre algunas de las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gernika-Lumo (Bizkaia).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (35ª)**II.2.2- Cambio de nombre**

No hay justa causa para cambiar "Eliana" por "Elianna", variante gráfica de un nombre correctamente inscrito.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Valdemoro (Madrid).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Valdemoro en fecha 7 de enero de 2010 Doña M^a-T. y Don J. junto con su hija menor de edad Eliana. nacida en M. el ... de ... de 1992, solicitan el cambio del nombre de esta última por "Elianna", exponiendo que este es el que eligieron sus padres y por el que es conocida en todos los actos de su vida cotidiana, pública y privada. Acompañan certificación literal de nacimiento y DNI con el nombre inscrito, certificado de empadronamiento en V. (M). Certificación de partida de bautismo y documentación escolar con el nombre propuesto.

2.- Ratificada la solicitud por la interesada, asistida de sus padres, el Ministerio Fiscal, estimando que concurren los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, no se opone al cambio de nombre interesado y el 19 de mayo de 2010 la Juez Encargada dictó auto disponiendo no autorizarlo por entender que, aun cuando resulte acreditado que la menor viene utilizando de forma habitual el nombre de "Elianna", no concurre justa causa para modificación tan mínima.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ya mayor de edad, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se siente identificada con el nombre "Elianna" que sus padres eligieron para ella, que al hacer el DNI fue cuando se enteró de que estaba inscrita como Eliana y que es más fácil añadir una ene en la partida de nacimiento que cambiar toda la documentación.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, cuyos fundamentos comparte, y la Juez Encargada informó que considera que para modificación tan mínima no estaría justificado el cambio de nombre solicitado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 9-4^a de octubre de 1994, 14-1^a de marzo de 1995, 10-2^a de octubre de 1996; 4-1^a de enero, 10-5^a de febrero y 30-2^a de mayo de 1997; 27-3^a de marzo, 8-4^a de mayo y 14-7^a de septiembre de 2000; 17-2^a de febrero, 6-2^a y 21-2^a de abril, 7-2^a de julio de 2001; 8-2^a, 14-4^a y 22-2^a de octubre de 2003; 3 y 21-3^a de enero, 13-1^a de abril, 9-3^a y 4^a de noviembre y 10-1^a de diciembre de 2004; 10-1^a y 2^a de junio, 18-3^a de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5^a de marzo, 7-5^a de julio, 24-1^a de octubre y 16-3^a de noviembre de 2006; 3-7^a de julio, 3-3^a y 17-1^a de octubre, 11-5^a, 17-1^a y 20-1^a de diciembre de 2007; 21-1^a de febrero, 23-6^a y 7^a de mayo y 16-5^a de septiembre de 2008; 11-3^a de febrero de 2009 y 14-17^a de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente mínima la modificación consistente en duplicar la grafía de una consonante intervocálica, con variación fonética apenas perceptible, la doctrina es de directa

aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar “Eliana” por “Elianna”, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que “Eliana” es la grafía correcta y, por tanto, habitual de dicho nombre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Valdemoro.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (36ª)

II.2.2-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar “Sara-Lucía” por “Sarah-Lucía”.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife en fecha 15 de octubre de 2009 Doña Sara-Lucía. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por “Sarah-Lucía”, exponiendo que este último es el que usa habitualmente en todos los actos de su vida social. Acompaña la siguiente documentación: DNI y certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito, certificado de empadronamiento en S-C de T. y alguna otra documental con el nombre propuesto y otros documentos en los que es identificada como “Sarah”. Ratificada la solicitud por la promotora, comparecen como testigos su madre y una amiga, que manifiesta que les consta que la solicitante siempre escribe su nombre con hache final.

2.- El Ministerio Fiscal, entendiéndolo acreditado el uso, informó favorablemente y el 20 de noviembre de 2009 el Juez Encargado, no apreciando justa causa, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que desde su nacimiento viene usando el nombre germánico que sus padres le intentaron poner y ella quiere llevar y que en cualquier momento se puede producir un conflicto de identificación susceptible de causarle producir problemas graves, incluso irreparables, por cuanto toda su documentación personal se encuentra a nombre de “Sarah”.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se adhirió al recurso, y el Juez Encargado informó que estima que la resolución impugnada debe confirmarse por los mismos hechos y fundamentos jurídicos que obran en ella y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo

de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo de 1997; 18-3ª de julio de 2000; 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la consistente en adicionar una hache final, que ni siquiera implica alteración fonética, a un nombre correctamente escrito, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Sara-Lucía por "Sarah-Lucía" tal como expresan, concretamente respecto a Sara, las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (37ª)

II.2.2- Cambio de nombre

Siendo las dos grafías del nombre correctas en las lenguas españolas, no hay justa causa para cambiar "Iban" por "Iván".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Balaguer (Lleida).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Agramunt (Lleida) el 23 de febrero de 2010 Don Iban. mayor de edad, solicita el cambio del nombre inscrito por "Iván", exponiendo que siempre ha considerado que se escribe en la forma propuesta. Acompaña la siguiente documentación: DNI y copia simple de certificación literal de nacimiento, del libro de familia de sus padres y de documental de uso del nombre interesado. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil de Balaguer en fecha 26 de febrero de 2010, la Encargada

dispuso librar exhorto al de procedencia a fin de que se requiera al promotor para que aporte certificación de empadronamiento que acredite la competencia de ese Registro Civil y certificación literal de la inscripción de su nacimiento, documentos que presentó el 29 de marzo de 2010.

2.- Remitada la anterior documentación al Registro Civil de Balaguer, el ministerio fiscal no se opuso al cambio de nombre interesado y el 3 de mayo de 2010 la Juez Encargada, no apreciando justa causa para cambio de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo que procede desestimar la petición.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que su nombre de toda la vida es "Iván", que así le consta en algunos documentos oficiales como el Graduado Escolar y que "Iban" le causa un daño moral difícilmente cuantificable por el hecho de que no se siente identificado con tal nombre.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, considerando que conforme a la nueva redacción dada al segundo párrafo del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la petición es estimable, se adhirió al recurso y la Juez Encargada informó que considera que deberían darse por buenos los razonamientos jurídicos de la resolución dictada y confirmarla en su totalidad y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 16-3ª de abril y 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 30-2ª de mayo de 1997; 14-4ª de diciembre de 1999, 19-3ª y 4ª y 27-2ª de junio 2001, 15-1ª de marzo, 24-2ª de abril, 10-4ª de mayo, 14-1ª y 2ª de octubre y 18-3ª de diciembre de 2002; 28-2ª de enero y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 3-3ª de junio, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 9-1ª de marzo, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la sustitución gráfica de una consonante intervocálica por otra de igual fonética, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar "Iban" por "Iván", y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que tanto el inscrito "Iban" como el solicitado "Iván", son nombres

correctamente escritos en las lenguas españolas, tal como expresan respecto a este mismo nombre las resoluciones de esta Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Balaguer.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (38ª)

II.2.2-Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar "Itxaso" por "Itsaso".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo (Bizkaia).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Mundaka (Bizkaia) en fecha 9 de diciembre de 2009 Doña Itxaso. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por "Itsaso", exponiendo que por este último viene siendo llamada desde la infancia por familiares, amigos y vecinos y que incluso resulta desconocida con el nombre que consta en el Registro Civil. Acompaña la siguiente documentación: DNI y certificación literal de nacimiento con el nombre inscrito y certificado de empadronamiento en M. certificado de bautismo y diversa documental con el nombre interesado. En el mismo día, 9 de diciembre de 2009, la promotora ratificó la solicitud y comparecieron como testigos su madre y una tía, que manifestaron que les consta que son ciertos los hechos consignados en el escrito inicial, y seguidamente el Juez Encargado del Registro Civil de Mundaka dispuso la remisión del expediente al de Gernika-Lumo, en el que tuvo entrada el 20 de enero de 2010.

2.- El Ministerio Fiscal, entendiendo que concurren los presupuestos legales, informó favorablemente y el 15 de abril de 2010 la Juez Encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo, no apreciando justa causa para modificación de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre solicitado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros alegando que es la segunda vez que intenta la corrección de su nombre en el registro civil con idéntico resultado en ambas, que, aunque Euskaltzaindia admite las dos formas, Itxaso e Itsaso, ella siempre ha utilizado esta última, porque así lo siente, y que el cambio que solicita no es solo gráfico sino también fonético, ya que en euskera los grupos consonánticos TS y TX se vocalizan de forma diferente, y aportando, como prueba documental, un segundo certificado de bautismo.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se tuvo por notificado, y la Juez Encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución impugnada, estima que debe confirmarse y

seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo de 1997; 18-3ª de julio de 2000; 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª y 25-5ª de octubre, 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Consta resolución de 27 de enero de 1997 (1ª), dictada por este Centro Directivo en expediente de rectificación de errores promovido por los representantes legales de la promotora, a la sazón menor de edad, por la que se dispone desestimar el recurso interpuesto contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Gernika-Lumo que no reconoce la existencia de error a rectificar, y se acuerda simultáneamente, por economía procesal y por delegación, no autorizar, por falta de justa causa, el cambio del nombre inscrito por "Itsaso". En estas actuaciones se reformula la solicitud por la vía del expediente distinto de cambio de apellidos y por la propia interesada, que expone que "Itsaso" viene siendo llamada desde la infancia por familiares, amigos y vecinos y que incluso resulta desconocida con el nombre inscrito. La Juez Encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo, no apreciando justa causa para modificación de tan escasa entidad, dispuso denegar la solicitud mediante auto de 15 de abril de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

IV.- Siendo evidentemente una modificación mínima la consistente en sustituir una consonante por otra muy similar, sin alteración fonética apreciable, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar "Itxaso" por "Itsaso", y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica, puesto que en el expediente consta que se trata de variantes del mismo nombre admitidas y correctas conforme a las reglas de la lengua española correspondiente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gernika-Lumo.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (39ª)

II.2.2- Cambio de nombre.

No hay justa causa para cambiar “Jael” por “Yael”.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Zaragoza de fecha 30 de junio de 2010 Don J-M. y Doña Mª-J. mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan el cambio de nombre de su hija menor de edad Jael. nacida en Z. el ... de ... de 1992, por “Yael”, exponiendo que existe una discordancia entre el nombre inscrito y el modo en que se pronuncia. Acompañan certificación literal de nacimiento de la menor y volante familiar de empadronamiento en Z. y copia simple de otros documentos en los que la menor figura con el nombre que para ella se pretende. En el mismo día, 30 de junio de 2010, comparecieron dos testigos, que manifestaron que les consta que son ciertos los hechos expuestos en la solicitud por los promotores y que a su hija se la conoce por el nombre de Yael en su entorno familiar y social, y la propia interesada que, notificada de la incoación del expediente, muestra su conformidad con el cambio de nombre para ella instado.

2.- El Ministerio Fiscal no se opuso a la constancia del nombre usado habitualmente y el 4 de agosto de 2010 el Juez Encargado, no apreciando justa causa para modificación de tan escasa entidad, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre interesado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que desde que inscribieron a su hija en el Registro Civil han querido que el nombre sonara Yael, que mucha gente lo lee tal como está escrito provocando situaciones jocosas por parte de los compañeros de los distintos colegios en los que la menor ha estudiado y que, aunque los dos nombres están admitidos, es más correcto Yael, que procede del hebreo; y aportando, como prueba documental, un diálogo en inglés tomado de Internet entre un rabino y una persona así llamada, interesada en conocer el significado del nombre.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, entendiendo que se ha acreditado el uso habitual de Yael y que también existe justa causa, pues la pronunciación completamente diferente de la i griega y de la jota puede conllevar problemas en la vida diaria, se adhirió al recurso y la Juez Encargada informó que se debe confirmar en todos sus extremos la resolución impugnada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo y 15-3ª de septiembre de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 20-5ª de octubre de 1998, 18-2ª de febrero de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 26-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y

22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 15-3ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III.- Siendo evidentemente una modificación mínima la sustitución de la consonante inicial de un nombre correctamente inscrito, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Jael por "Yael", y la discordancia entre la grafía del nombre y la forma en que se pronuncia que aducen los promotores no ha de imponer que se modifique aquella, común a muchas lenguas, aunque la fonética varíe en función de las reglas gramaticales de cada una de ellas. Cuanto antecede impide apreciar que concorra justa causa para el cambio de nombre solicitado y, en definitiva, que resulten cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

II.3.- Atribución apellidos

II.3.1.- Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados

Resolución de 3 de enero de 2014 (55ª)

II.3.1.- Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados

Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª, RRC): primero del padre y primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera (art. 194 RRC).

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento tras la obtención de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra providencia dictada por el encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

1.- Una vez concedida la nacionalidad española por residencia mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de julio de 2010, el Sr. A. M-T. con nacionalidad de origen marroquí y domiciliado en M. (S), compareció ante el registro civil para suscribir la correspondiente acta de juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes españolas. Consta en el expediente la documentación relativa al procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia.

2.- El encargado del Registro Civil de Sevilla, competente para la inscripción, dictó providencia el 14 de diciembre de 2010 acordando la práctica del asiento de nacimiento de A. (nombre) M. (primer apellido) T. (segundo apellido).

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso alegando que M-T. constituye un solo apellido con el cual aparece identificado en todos sus documentos oficiales por lo que solicita que en su inscripción de nacimiento en España se le atribuya dicho apellido en primer lugar y seguidamente el apellido materno, K. Con el escrito de recurso aportaba las inscripciones de nacimiento de su hijo menor de edad S. M-T. C. y de su hermana M. M-T. K. ambos de nacionalidad española.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su estimación al entender que se había producido un error de transcripción en la providencia recurrida al desdoblar en dos apellidos el que en realidad es uno solo. El encargado del Registro Civil de Sevilla se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil; 23, 53 y 55 de la Ley del Registro Civil; 85, 194, 199, 213 y 358 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español y las resoluciones de 18-2ª de noviembre de 2002, 27-6ª de mayo de 2003, 11-2ª de febrero de 2004, 6-4ª de marzo de 2008, 9-1ª de marzo de 2009 y 6-27ª de mayo de 2013.

II.- El interesado, marroquí de origen que adquirió la nacionalidad española por residencia, interpuso recurso contra la calificación realizada por el encargado del registro alegando que los dos apellidos que se le atribuyen en la providencia recurrida son en realidad uno solo.

III.- En principio, para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española, han de consignarse, según las leyes españolas, dos apellidos que serán los fijados por tal filiación (primero del padre y primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera) y que se sobreponen a los meramente usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1ª, RRC). En este caso, según la documentación que consta en el expediente, el interesado solo acredita la utilización de un apellido compuesto de dos vocablos: M-T. Así consta identificado tanto en la documentación marroquí como en la española, incluyendo en esta la inscripción de su matrimonio con una ciudadana española y la de nacimiento de su hijo. De modo que resulta probado, a salvo la opción prevista en el art. 55 LRC en relación con el 109 CC., que el primer apellido del recurrente debe ser el pretendido M-T. No sucede lo mismo en relación con el segundo, sin que pueda determinarse en esta instancia cuál deba ser ese segundo apellido en tanto no

se acredite mediante los pertinentes certificados registrales literales de nacimiento del promotor y de su madre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso y atribuir al interesado como primer apellido, a falta de determinación del segundo, M-T.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

II.3.2.- Régimen de apellidos de los españoles

Resolución de 10 de Enero de 2014 (37ª)

II.3.2.-Régimen de apellidos de los españoles.

La introducción de una nueva causa petendi en el recurso no planteada en la solicitud inicial requiere un pronunciamiento previo por parte del encargado del registro.

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra la resolución del encargado del Registro Civil de Verín (Orense).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 19 de octubre de 2010 en el Registro Civil de Verín, quien se identifica como E-Á. da S-R. inscrita en el Registro Civil de Oímbra (Orense) como E-Á. F. solicitaba la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en España de padres portugueses alegando que la legislación portuguesa no otorga de forma automática dicha nacionalidad. Aportaba la siguiente documentación: inscripción de nacimiento en R. (O) el 28 de abril de 1987 de E-Á. F. hija de L. F. da R. y de M das D D. ambos de nacionalidad portuguesa, certificado de empadronamiento en V. tarjeta de residente en España (donde consta su nacionalidad portuguesa), tarjeta de identidad e inscripción consular portuguesa, documentos todos ellos a nombre de E-Á. da S. R.

2.- Previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 23 de noviembre de 2010 declarando con valor de simple presunción la nacionalidad española de E-Á. F. y ordenando la práctica de las anotaciones oportunas en el Registro Civil de Oímbra.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en la resolución de concesión no se hace referencia a su apellido materno, Da S. por lo que solicita que en su inscripción se le atribuyan los apellidos F. da S.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación por considerar que el primer apellido de la madre, tal como aparece en la tarjeta de inscripción consular portuguesa de la promotora, es G. y no el solicitado Da S. El encargado del Registro Civil de Verín remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 109 del Código civil (CC.), 55 de la Ley del Registro Civil (LRC), 194 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 30 de junio de 2001, 30-2ª de mayo de 2002, 21-1ª de enero de 2004, 16-2ª de marzo de 2005 y 29-3ª de noviembre de 2011.

II.- La promotora, de nacionalidad portuguesa según se deduce de la documentación aportada, solicitó la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en España de padres portugueses cuya ley personal, según se alega, no atribuye automáticamente la nacionalidad portuguesa a los nacidos fuera de Portugal. Se basaba la petición en el artículo 17 CC., cuyo apartado tercero en la redacción vigente en el momento del nacimiento de la interesada e igualmente la letra c) del nº 1 en su redacción actual, prevé que son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros “si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”. El encargado del registro consideró aplicable dicho precepto y declaró la nacionalidad española de la promotora con valor de simple presunción. La interesada, no obstante, interpuso recurso contra la resolución dictada porque no le atribuye como segundo apellido el materno Da S.

III.- La petición inicial de la promotora se dirigía únicamente a la obtención de la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, sin referencia alguna a los apellidos que, en caso de prosperar la solicitud, debían hacerse constar en su inscripción, de modo que, en realidad, se introduce en el recurso una nueva causa petendi cuya resolución requiere un pronunciamiento previo del encargado del registro, quien, en el auto recurrido, se limita a declarar la nacionalidad española de la promotora con valor de simple presunción. Ciertamente, se da la circunstancia de que el asiento de nacimiento practicado en España solo atribuye a la inscrita un apellido, cuando, en efecto, según la legislación aplicable, los españoles ostentan dos apellidos y, si la filiación está determinada por ambas líneas, a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC., primer apellido es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. Si se tiene en cuenta, además, que la interesada se identifica en toda la documentación aportada conforme a su ley personal portuguesa (y cabe resaltar, por otro lado, que esta es la nacionalidad que ya ostenta, según se desprende de tales documentos) con unos apellidos completamente distintos de los que solicita en su escrito de recurso, razón de más para que este centro se abstenga por el momento de emitir un juicio en tanto no exista un pronunciamiento previo del encargado sobre la cuestión planteada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: que no procede admitir el recurso.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Verín (Orense).

Resolución de 27 de Enero de 2014 (3ª)

II.3.2- Atribución de apellidos.

Los apellidos de un español son los determinados por su filiación según la ley española, primero del padre y primero de los personales de la madre. No cabe, pues, atribuir al nacido como segundo apellido el segundo de la madre cuya ley personal, distinta de la española, no puede condicionar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Registro Civil.

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil de Gavà (Barcelona).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Gavà el 27 de septiembre de 2010 Don J-R. R. T., de nacionalidad española, mayor de edad y domiciliado en dicha población, manifiesta que en esa misma fecha han inscrito a su hijo M. nacido en G. el ... de ... de 2010, con los apellidos R. D. y que, siendo su esposa de nacionalidad portuguesa, solicitan que, por ley personal de la madre, el niño tenga como segundo apellido el segundo de esta, que es F. Acompaña copia de su DNI, certificación literal de nacimiento del menor y borrador de asiento registral, fechado el 21 de septiembre de 2010 y firmado por el padre en calidad de declarante, en el que figuran los apellidos R. D. Al día siguiente, 28 de septiembre de 2010 comparece nuevamente el padre a fin de aportar certificado del Consulado General de Portugal en Barcelona sobre el régimen de apellidos de los ciudadanos portugueses.

2.- El 29 de septiembre de 2010 el Juez Encargado dictó providencia declarando que no ha lugar a inscribir al nacido con los apellidos solicitados, dado que, nacido en España hijo de español, rige la Ley Española en la atribución de apellidos. El promotor interpuso recurso de reposición aduciendo que en Portugal los hijos llevan como primer apellido el de la madre y como segundo el del padre y que este último es el que transmiten cuando tienen descendencia, que su hijo ya está empadronado con el apellido F. y que, por tanto, le corre muchísima prisa obtener una respuesta a su solicitud. El ministerio fiscal, considerando que la providencia recurrida es plenamente concordante con el ordenamiento jurídico, en el que no encuentra cobertura la pretensión de que a un nacido le sea impuesto el segundo apellido de la madre, impugnó el recurso y el 12 de noviembre de 2010 el Juez Encargado dictó auto desestimándolo, por cuanto el menor es español y, por tanto, no se le aplica la legislación lusa.

3.- Notificada la resolución a ambos progenitores, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que sería de su agrado que se pudiera resolver en G. para que no se demore el proceso en perjuicio de su hijo, cuya nacionalidad portuguesa están tramitando y que se inscribirá en Portugal como M. R. F. y aportando, como prueba documental, certificado de fecha 15 de diciembre de 2010 del Consulado General de Portugal en Barcelona sobre comparecencia de la madre la víspera a fin de iniciar la inscripción en el registro civil portugués de su hijo "M. R. D." (sic) y la instrucción de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, reiterando lo ya manifestado al impugnar el recurso de reposición, dijo que no cabe inscribir como segundo apellido del nacido el segundo de la madre y el Juez Encargado informó que estima que debe confirmarse la resolución impugnada, en cuyos fundamentos jurídicos se ratifica, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

5.- El 24 de marzo de 2011, por conducto del Registro Civil del domicilio, se recibe en este Centro Directivo escrito del promotor acompañando fotocopia de certificado de nacimiento portugués del menor, al parecer inscrito en Portugal con los apellidos R. F. con los que se pretende inscribirlo en el Registro Civil español.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil (CC.); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 137, 194 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007 y las resoluciones, entre otras, de 9-1ª de octubre de 2000, 25-3ª de enero de 2002, 17-2ª de marzo de 2004, 20-5ª de octubre de 2006, 28-4ª de noviembre de 2007, 6-4ª de marzo de 2008, 28-2ª de noviembre de 2011 y 6-22ª y 9-20ª de mayo de 2013.

II.- Pretende el promotor que en la inscripción de nacimiento de su hijo se consigne como segundo apellido el segundo de la madre, exponiendo que esta es portuguesa y que en ese país se transmite a los descendientes el segundo apellido, que es el paterno. El Juez Encargado, razonando que en la atribución de apellidos a un nacido en España hijo de español no se aplica la legislación lusa sino que rige la Ley Española, dispuso que no ha lugar a inscribir al nacido con los apellidos solicitados, primero mediante providencia de 29 de septiembre de 2010 y, después, resolviendo recurso de reposición, mediante auto de 12 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El artículo 194 RRC, que dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC., el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera, es una norma de Derecho interno referida a la composición de los apellidos de las personas de nacionalidad española, de aplicación al hijo español de madre extranjera y, por tanto, no cabe, como pretende el recurrente basándose en las normas de Portugal, hacer constar como segundo apellido del nacido el segundo de su madre.

IV.- La interpretación finalista del citado precepto que hace el promotor no se estima conforme con la evolución y las modificaciones habidas en materia de atribución de apellidos y no puede ser aceptada: basta pensar en la facultad que tienen los padres de invertir el orden de los apellidos de sus hijos (art. 109 CC.) para descartar que el artículo 194 RRC pueda interpretarse actualmente en el sentido de que sean los apellidos paternos de los progenitores los que hayan de transmitirse e inscribirse en el Registro Civil español a extranjeros que adquieren la nacionalidad española o a nacidos con doble nacionalidad.

V.- Ciertamente lo anterior plantea el inconveniente de que el menor al que se refiere este expediente, que al parecer tiene doble nacionalidad española y portuguesa, puede verse abocado a una situación en la que sea identificado con apellidos distintos en los dos países de los que es nacional. Tal situación, que dificulta la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, fue abordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en sentencia de 2 octubre 2003, en el asunto García-Avello, falló en el sentido de estimar contraria al derecho comunitario (arts. 17 y 18 TCE) la normativa del Estado belga que establecía que en caso de doble nacionalidad de un belga debía prevalecer, siempre, la nacionalidad belga a efectos de imposición de los apellidos (coincidente pues, en este punto, con la ley española) cuando el interesado está inscrito en otro Registro Civil extranjero con otros apellidos. La legislación española admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, sea objeto de anotación registral, conforme al artículo 38.3 de la Ley del Registro Civil, a fin de poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y disipar dudas en cuanto a la identidad del interesado, máxime si como resultado de la anotación se expide el certificado plurilingüe de diversidad de apellidos previsto en el Convenio nº 21 de la Comisión Internacional de Estado Civil (CIEC) hecho en La Haya en 1982. Y, en el caso de los ciudadanos comunitarios, admite además la posibilidad de promover un expediente de cambio de apellidos a fin de obtener los deseados, habida cuenta de que, llegado el caso, las normas que rigen estos expedientes registrales (arts. 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil) deben interpretarse en forma tal que en ningún supuesto cabrá denegar el cambio pretendido cuando ello se oponga a la doctrina sentada por la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

VI.- El derecho de los interesados plurinacionales o de sus representantes legales a elegir una de las leyes nacionales concurrentes se ha de canalizar, por tanto, a través del expediente registral regulado en los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil, que se instruye en el Registro Civil del domicilio de los promotores y cuya resolución compete al Ministerio de Justicia y hoy, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Así se expone en la instrucción de este Centro Directivo de 23 de mayo de 2007, que ha generado una práctica administrativa por la que, una vez acreditada la legalidad en el país de que se trate de la atribución de

apellidos en la forma deseada, se viene concediendo sin dificultad la autorización para la modificación de los apellidos de binacionales de dos Estados miembros de la Unión Europea, habiéndose resuelto a fecha de hoy numerosos expedientes de cambio de apellidos, que afectan a menores que ostentan doble nacionalidad española y portuguesa, promovidos por sus representantes legales.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández".

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gavà.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (48ª)

II.3.2-Atribución de apellidos.

1º) En supuestos de doble nacionalidad, la ley personal distinta de la española de uno de los progenitores no puede condicionar la aplicación del artículo 194 del Reglamento del Registro Civil, sin perjuicio, en caso de ciudadanos comunitarios, de la posibilidad de instar un expediente de cambio de apellidos para adaptarlos a la ley aplicable en el país de la nacionalidad del progenitor extranjero.

2º) Se examina, por economía procesal y por delegación, el cambio de apellidos y se autoriza por concurrir los requisitos exigidos.

En el expediente sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra la calificación realizada por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2009 en el Registro Civil Central, Don F-D. P. Y. de nacionalidad española, y Doña K. P. Y. (cuyo apellido de soltera es T), de nacionalidad alemana, ambos residentes en M. solicitaron la inscripción de nacimiento de su hijo F-N. nacido en Alemania el ... de ... de 2009, con los mismos apellidos, P. Y. con los que figura inscrito en el registro del lugar de su nacimiento. Aportaban la siguiente documentación: hoja de declaración de datos para la inscripción, DNI y pasaportes de los interesados, certificado de inscripción de nacimiento del menor en B. (Alemania), inscripción de nacimiento del promotor con marginal de adquisición de nacionalidad española por residencia en 1994, inscripción de matrimonio de los progenitores en el Registro Civil español, libro de familia y certificado de empadronamiento en V. (I-B).

2.- El encargado del registro practicó la inscripción del menor atribuyéndole los apellidos P. (primero del padre) T. (primero de los personales de la madre).

3.- Notificada la inscripción, se interpuso recurso contra la calificación realizada alegando que, tras el matrimonio de los progenitores, la madre del inscrito, de nacionalidad alemana, adoptó los apellidos de su marido y que estos, a su vez, fueron los atribuidos al menor como un solo apellido familiar en la inscripción de nacimiento local, por lo que, al amparo de lo establecido por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de octubre de 2003, solicitan la

conservación en España de los apellidos atribuidos en Alemania y, subsidiariamente, el cambio de apellidos consignados en España por los que figuran en la inscripción alemana.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que confirmó la inscripción practicada. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la calificación realizada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 109 del Código civil (CC.); 57 y 59 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 195, 205, 209 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007 y las resoluciones de 31 de marzo de 1995, 30-6ª de mayo y 23-5ª de octubre de 2006, 13-2ª de abril de 2009, 28-4ª de diciembre de 2010 y 4-7ª de febrero de 2011.

II.- Pretenden los promotores que en la inscripción de nacimiento de su hijo en el Registro Civil español se le atribuyan los apellidos tal como constan en la inscripción de nacimiento local practicada en Alemania, donde se le han atribuido los apellidos paternos. Alegan que la madre, de nacionalidad alemana, adoptó los apellidos de su marido al contraer matrimonio y, del mismo modo, se le han atribuido a su hijo como apellido familiar.

III.- El artículo 194 RRC dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC., primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera, de modo que la inscripción practicada en España es correcta.

IV.- Es cierto que este criterio presenta el inconveniente de que el menor, que tiene doble nacionalidad española y alemana, puede verse abocado a una situación en la que sea identificado con apellidos distintos en los dos países de los que ostenta la nacionalidad. En este sentido, se ha afirmado que los inconvenientes derivados de tal situación dificultan la libertad de circulación de los individuos que poseen la ciudadanía de la Unión Europea y así, este criterio ha sido abordado en sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 octubre 2003, en el asunto García-Avello, en el que el tribunal falló en el sentido de estimar contraria al derecho comunitario (arts. 17 y 18 TCE) la normativa del Estado belga que establecía que en caso de doble nacionalidad de un belga debía prevalecer, siempre, la nacionalidad belga a efectos de imposición de los apellidos (coincidente pues, en este punto, con la ley española). Sin embargo, la legislación española, cuando el interesado está inscrito en otro Registro Civil extranjero con otros apellidos, admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, pueda ser objeto de anotación registral conforme al artículo 38.3 de la Ley del Registro Civil. Esta anotación sirve para poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y para disipar dudas en cuanto a la identidad del interesado, máxime si como resultado de la anotación se expide el certificado plurilingüe de diversidad de apellidos previsto en el Convenio nº 21 de la Comisión Internacional de Estado Civil (CIEC) hecho en La Haya en 1982. Pero, sobre todo, en el caso de los ciudadanos comunitarios, la normativa española admite la posibilidad de que el interesado promueva un expediente de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia que le permitirá, por esta vía, obtenerlos en la forma deseada, habida cuenta de que, llegado el caso, deben interpretarse las normas que rigen los expedientes registrales de cambio de apellidos en España (arts. 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil) en forma tal que en ningún supuesto cabrá denegar el cambio pretendido cuando ello se oponga a la doctrina sentada por la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, incluyendo la posibilidad de que como resultado de dicho cambio el interesado pase a ostentar un único apellido.

V.- La libertad de elección para los ciudadanos comunitarios se ha de canalizar, por tanto, a través del expediente registral regulado por los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil que se instruye en el registro civil del domicilio del promotor y cuya competencia resolutoria corresponde al Ministerio de Justicia y hoy, por delegación (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado. De esta manera se salvan los inconvenientes, antes apuntados, derivados de la aplicación de diferentes criterios a ciudadanos comunitarios que tienen doble nacionalidad.

De hecho, esta es la interpretación oficial de la Dirección General de los Registros y del Notariado, expuesta en la Instrucción de este centro directivo de 23 de mayo de 2007, y que ha generado una práctica administrativa por la que, una vez acreditada la legalidad en el país de que se trate de la atribución de apellidos en la forma deseada, se viene concediendo sin dificultad alguna la autorización para la modificación de los apellidos en casos de binacionalidad (siempre que, como se ha dicho, se trate de personas con ciudadanía de la Unión Europea).

VI.- Es pues esta posibilidad de cambio la que debe ser examinada en el presente caso y razones de economía procesal así lo aconsejan, dado que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente que conduciría al mismo fin práctico. El resultado de tal examen, a la vista de la documentación aportada y, singularmente, la certificación plurilingüe de nacimiento del menor expedido en Alemania, es que concurren en el presente expediente todos los requisitos necesarios para autorizar el cambio pretendido de acuerdo con los criterios establecidos por la instrucción antes mencionada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Confirmar la calificación realizada.

2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de octubre) el cambio de apellidos del menor F-N. P. T. por la unión de P-Y. como único apellido, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento del interesado y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que establece el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el artículo 217 RRC.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

II.4.- Cambio de apellidos

II.4.1.- Modificación de apellidos

Resolución de 3 de enero de 2014 (57ª)

II.4.1.-Modificación de apellidos

Todo cambio de apellidos, incluida la inversión del mayor de edad, alcanza automáticamente a los hijos menores de edad sujetos a la patria potestad.

En el expediente sobre conservación de apellidos de dos menores remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la madre de los inscritos contra resolución de la encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Madrid el 17 de junio de 2010, Don F. A. R. mayor de edad y con domicilio en M., solicitó la inversión del orden de sus apellidos. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento del interesado en el Registro Civil de Bilbao, inscripciones de nacimiento de sus hijos menores de edad A. y A. A. A. volante de empadronamiento, libro de familia correspondiente a su actual matrimonio con Doña C. S. F. y al hijo de ambos N. A. S. y DNI.

2.- Remitidas las actuaciones al Registro Civil de Bilbao, donde consta inscrito el nacimiento del promotor, la ex esposa de este, Doña N. A. C., presentó alegaciones oponiéndose al cambio de apellidos de sus hijos derivado de la inversión instada por el padre. A la vista de la declaración anterior, el expediente fue devuelto para audiencia del promotor con informe del ministerio fiscal del Registro Civil de Bilbao oponiéndose a practicar la modificación de apellidos de los menores por no contar con el consentimiento de la madre. El solicitante, en nueva comparecencia ante el registro, manifestó que él no ha pedido el cambio de apellidos para sus hijos, sino únicamente la inversión para sí mismo, reiterando su voluntad de que este cambio sea recogido en las inscripciones de los menores.

3.- La encargada del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 18 de agosto de 2010 estimando que el interesado ha ejercido la facultad legal que corresponde a los mayores de edad para invertir el orden de sus apellidos cumpliendo los requisitos legales y que, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 61 de la Ley del Registro Civil y 217 de su reglamento, una vez modificados los apellidos del padre, dicho cambio ha de trascender, pese a la oposición de la madre, a los hijos sometidos a la patria potestad del promotor.

4.- Notificada la resolución, la madre de los menores interesados interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su oposición al cambio alegando que el cambio pretendido responde a una decisión unilateral del padre que, sin embargo, tiene consecuencias sobre sus hijos y que, siendo estos todavía menores de edad, no debería afectarles la mera declaración de voluntad de uno solo de los progenitores sin el acuerdo del otro.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil Único de Madrid se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 55 y 61 de la Ley del Registro Civil (LRC); 217, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 14-7ª de mayo y 10-4ª de junio de 2002, 25-6ª de febrero de 2008 y 20-3ª de abril de 2009.

II.- Todo cambio de apellidos alcanza automáticamente a los hijos menores de edad sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan (arts. 61 LRC y 217 RRC). Por ello, tratándose en este caso de dos menores de edad, una vez invertidos los apellidos por parte del padre en uso de la facultad que concede a todos los mayores de edad el artículo 55 LRC, dicho cambio ha de trascender, pese a la petición de conservación de la madre, a los sujetos a la patria potestad de quien ha ejercido la facultad de inversión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (41ª)

II.4.1-Modificación de apellido regularizado ortográficamente al catalán

Regularizado ortográficamente el apellido a la correspondiente lengua española, la estabilidad que han de tener los apellidos, signos de identificación e individualización de las personas, impide recuperar la grafía inicialmente inscrita por simple petición del interesado al encargado.

En las actuaciones sobre adecuación ortográfica de apellido en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra providencia dictada por la Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Torredembarra (Tarragona) en fecha 27 de diciembre de 2010 Don S. S. Maia, mayor de edad, nacido en B. el 18 de junio de 1980 y domiciliado en T. solicita recuperar la grafía originaria -Maya- de su segundo apellido exponiendo que la actualmente inscrita le ha ocasionado dificultades y acompañando fotocopia de su DNI y certificación literal de nacimiento en la que consta practicada el 1 de septiembre de 2004 inscripción marginal para hacer constar que, en virtud de lo solicitado en comparecencia en el Registro Civil de Torredembarra en fecha 26 de abril de 2004, se modifica el apellido Maya del inscrito por el de "Maia".

2.- Recibida la anterior petición en el Registro Civil de Barcelona, el 5 de enero de 2011 la Juez Encargada, razonando que, habiendo hecho uso el interesado de la facultad de regularizar ortográficamente su segundo apellido a la forma normativamente correcta en catalán, cualquier modificación posterior requiere acudir a la vía del expediente registral de cambio de apellidos, dictó providencia acordando denegar la petición.

3.- Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que "Maia" es una adaptación ortográfica arbitraria, carente de fundamento histórico y que le ocasiona molestias, porque en todos los documentos oficiales figura con el apellido castellanizado Maya.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la estimación del recurso e interesó la confirmación de la providencia dictada, y el Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona informó que, sin perjuicio del derecho del interesado a modificar su apellido por uso mediante expediente gubernativo, no puede accederse al cambio de grafía por simple solicitud; y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y la resolución de 23-2ª de octubre de 2007.

II.- Se pretende por el interesado la castellanización del apellido "Maia" que, según resulta de la inscripción marginal practicada en la de nacimiento, instó y obtuvo por adecuación a la gramática y fonética de la lengua catalana de apellido catalán el 26 de abril de 2004. La solicitud ahora formulada para recuperar el apellido en la forma "Maya" inicialmente inscrita es denegada por la Juez Encargada mediante providencia de 5 de enero de 2011 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- Conforme al artículo 55 de la Ley del Registro Civil, “el encargado del registro, a petición del interesado o su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente”. Esta norma debe interpretarse en el sentido de que es posible realizar la corrección de los apellidos propios de una lengua española que consten incorrectamente inscritos de acuerdo con las directrices ortográficas de dicha lengua sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado y que no cabe dejar sin efecto tal declaración de voluntad con otra de signo contrario, de modo que el restablecimiento de la grafía castellana con la que inicialmente fue inscrito un apellido propio de la lengua catalana ha de instarse por la vía del expediente gubernativo de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 LRC y 205 RRC. No hay que olvidar que los apellidos, signos de identificación e individualización de las personas, han de gozar de estabilidad y, por ello, su modificación queda sustraída de la autonomía de voluntad de los particulares y circunscrita a los supuestos legalmente previstos, con la concurrencia de los requisitos exigidos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (10ª)

II.4.1.- Modificación de apellidos

Transcurrido el plazo fijado para que el encargado del registro pueda autorizar la conservación de apellidos anteriores a la inscripción de la filiación paterna, la Dirección General de los Registros y del Notariado, por economía procesal y por delegación, puede aprobar el expediente pero es necesario acreditar el uso de los apellidos pretendidos.

En el expediente sobre recuperación de los apellidos inscritos originalmente remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra resolución de la encargada del Registro Civil de Ferrol.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Fene (A Coruña) el 20 de diciembre de 2010, Doña M.-R. I. F., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitó la recuperación de los apellidos con los que fue inscrita inicialmente alegando que a pesar de haber sido reconocida como hija por Don J. I. C., este no es en realidad su padre biológico. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI, libro de familia, volante de empadronamiento y certificación de nacimiento de la interesada el 29 de diciembre de 1979, inscrita inicialmente solo con filiación materna con los apellidos F. G. y con marginales de reconocimiento paterno por parte J. I. C. realizado el 12 de junio de 1985, y de matrimonio de los padres de la inscrita el 12 de noviembre de 2004.

2.- Remitidas las actuaciones al Registro Civil de Ferrol, competente para su resolución, y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada dictó auto el 17 de enero de 2011 denegando la pretensión por entender que el cambio de apellidos planteado no encaja en ninguno de los supuestos legales de los artículos 57, 58 y 59 de la Ley del Registro Civil

y que la petición contiene en realidad una impugnación de la paternidad que requiere acudir a la vía judicial.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que cuando se produjo el reconocimiento paterno con el consiguiente cambio de apellidos la interesada tenía seis años y que al alcanzar la mayoría de edad e interesarse acerca de los trámites necesarios para modificar su filiación, desistió de tal propósito ante la negativa a colaborar por parte del Sr. I. C. pero que posteriormente ha sabido que los trámites que ella creía necesarios en realidad no lo son, motivo por el cual decidió iniciar el presente expediente.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Ferrol remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 55, 57, 58 y 59 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205 y 209 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de diciembre de 1999, 6 de julio de 2002, 4-5ª de diciembre de 2007, 9-2ª de octubre y 14-8ª de noviembre de 2008.

II.- La promotora pretende recuperar los apellidos maternos con los que fue inscrita inicialmente y que ostentó hasta que se inscribió su filiación paterna por reconocimiento realizado cuando la inscrita contaba con seis años de edad. Alega como base de su petición que quien realizó el mencionado reconocimiento no es en realidad su padre biológico y que no mantiene relación con él.

III.- El encargado del registro civil del domicilio tiene facultad para autorizar en expediente la conservación por el hijo de los apellidos que viniera usando siempre que el procedimiento se inste dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la filiación o, en su caso, a la mayoría de edad (art. 209.3º RRC). Como en este caso el plazo ha transcurrido sobradamente, la conservación ya no puede ser autorizada por la encargada del registro, correspondiendo la competencia para aprobar el expediente, directamente y sin limitación de plazo, al Ministerio de Justicia (art.209, último párrafo, RRC) y hoy, por delegación, a la Dirección General de los Registros y del Notariado (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre).

IV.- Habiéndose completado la fase de instrucción del expediente, procede pues, por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), entrar a examinar si es posible la autorización de la conservación de apellidos solicitada en este caso y la respuesta ha de ser negativa en tanto que la interesada no acredita que haya venido utilizando, después de la determinación de su filiación paterna, los apellidos que ahora reclama, dado que la finalidad que subyace en el art. 209.3º RRC es proteger el bien de la identidad de la persona que durante un largo periodo de tiempo de su vida ha venido identificándose, familiar, social y registralmente, mediante unos apellidos distintos de los que correspondían a la verdadera filiación biológica y que, determinada tardíamente dicha filiación, se ve afectada por un cambio imperativo en los apellidos con la consecuente alteración en su principal signo identificador, consecuencia cuyos efectos negativos trata de paliar nuestro ordenamiento jurídico por medio del expediente de conservación de apellidos. En este caso, sin embargo, la interesada ha utilizado durante la mayor parte de su vida los apellidos atribuidos tras la inscripción del reconocimiento paterno, por lo que no es posible autorizar la petición de conservación.

V.- Cosa distinta es que se pretenda impugnar la paternidad determinada legalmente, lo que, de prosperar el correspondiente procedimiento, conllevaría en efecto un cambio de apellidos pero, evidentemente, ello requiere acudir a una vía distinta a la del presente expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º) Desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

2º) Denegar, por economía procesal y por delegación, el cambio de apellidos solicitado por Doña M-R. I. F.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil del Ferrol.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (1ª)

II.4.1.- Cambio de apellido

1º) El encargado del registro civil del domicilio carece de facultades para autorizar expedientes de cambio de apellidos fuera de los casos taxativos de los artículos 59 LRC y 209 RRC.

2º) Por economía procesal y por delegación, la Dirección General de los Registros y del Notariado, deniega el cambio solicitado.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de apellido en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Donostia-San Sebastián.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de San Sebastián el 20 de mayo de 2010, Doña E. Izagirre V., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de su primer apellido por Izagirre, que es el que se le atribuyó en el momento del nacimiento, si bien fue modificado posteriormente a instancia de la propia interesada. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI, volante de empadronamiento e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de E. Izagirre V. con marginal de cambio del primer apellido por Izagirre en virtud de resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de septiembre de 1999.

2.- Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó providencia el 29 de noviembre de 2010 declarándose incompetente para autorizar el cambio solicitado y dejando a salvo la posibilidad de que la interesada instara un nuevo expediente de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la petición formulada no se enmarca en el ámbito de los artículos 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205 de su reglamento (RRC) sino que se basa en el artículo 55 LRC y 198 RRC, no debiendo ser obstáculo para el cambio que ya se haya realizado una modificación anterior para adaptar el apellido a la grafía vasca puesto que en Guipúzcoa son lenguas oficiales tanto el castellano como el euskera.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Donostia-San Sebastián ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 48 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial; 57 y 59 de la Ley del Registro Civil; 16, 205, 206, 209, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones, entre otras, de 16 de enero de 1996; 3-1ª, 23 y 25 de febrero y 3-1ª de marzo y 11-1ª de mayo de 1998, 27-1ª de enero de 2001; 30-3ª de noviembre de 2002; 28-7ª de mayo y 13-1ª de octubre de 2003; 30-5ª de noviembre de 2004; 31-3ª de enero de 2005; 3-3ª de octubre de 2006; 19-2ª y 20-3ª de abril de 2007; 27-5ª de marzo y 20-10ª de noviembre de 2008.

II.- Pretende la interesada el cambio de su primer apellido, que ya fue modificado en 1999, para adaptarlo a la grafía euskera, de manera que vuelva a figurar en la forma original con grafía castellana. La encargada del registro denegó el cambio solicitado por exceder de sus competencias.

III.- La legislación vigente permite, en efecto, sin necesidad de expediente y por simple declaración ante el encargado del registro, la regularización ortográfica de los apellidos cuando la forma inscrita no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. Pero en este caso se da la circunstancia de que la interesada ya adaptó su apellido, originalmente consignado según la grafía castellana, para adecuarlo a la vasca. Los apellidos de una persona son signos de identificación y diferenciación que deben estar dotados de estabilidad y sustraídos del juego de la autonomía de la voluntad de los particulares, lo que explica que su modificación esté subordinada al cumplimiento de una serie de requisitos. Por ello, una nueva modificación como la planteada en este caso no puede ya ser considerada como una regularización ortográfica sino que obliga a tramitar un expediente de cambio de apellido para cuya autorización han de concurrir los presupuestos que señala la legislación sobre el Registro Civil.

IV.- El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para decidir en primera instancia un expediente de cambio de apellidos en los supuestos taxativos que señalan los artículos 59 de la Ley del Registro Civil y 209 de su reglamento. Como en este caso no se trata de ninguno de los supuestos a que dicho artículo se refiere, la conclusión es que el expediente, una vez instruido ante el registro civil del domicilio (art. 365 RRC), ha de ser resuelto por el Ministerio de Justicia, de acuerdo con la competencia general atribuida en la materia por el artículo 57 de la Ley del Registro Civil. Consiguientemente, una vez que la encargada concluyó que no era competente para autorizar el cambio solicitado, en lugar de limitarse a declarar su incompetencia y señalar el recurso correspondiente contra la resolución adoptada, debió haber remitido el expediente al órgano competente para su resolución, esto es, la Dirección General de los Registros y del Notariado según la vigente orden de delegación JUS/2225/2012, de 5 de octubre.

V.- Así las cosas, razones de economía procesal aconsejan examinar ahora si el cambio solicitado puede ser autorizado por este centro directivo, ya que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente ante el registro civil del domicilio (art. 365 RRC) y resultaría superfluo y desproporcionado con la causa (art. 354 RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico. Pues bien, uno de los requisitos que exige la legislación sobre el Registro Civil para que sea posible dicha autorización (arts. 57.1 LRC y 205.1 RRC), es que el apellido en la forma propuesta (Izaguirre, en este caso) constituya una situación de hecho no creada por los interesados, es decir, ha de probarse, de un lado, que la persona afectada por el cambio usa y es conocida por los apellidos que solicita y de otro, que dicho uso y conocimiento no ha sido provocado a propósito para conseguir la modificación

pretendida. Pues bien, no se aporta ninguna prueba documental que permita apreciar la existencia de la referida situación de hecho consolidada en el tiempo, por lo que no cabe autorizar el cambio solicitado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Confirmar la resolución dictada.

2º.- Denegar el cambio solicitado.

Madrid, 30 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de San Sebastián

Resolución de 30 de Enero de 2014 (44ª)

II.4.1-Inversión de apellidos.

La inversión de los apellidos del inscrito dentro de plazo requiere que la decisión sea adoptada por los padres, de común acuerdo, “antes de la inscripción”.

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Picassent (Valencia).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Alcàsser (Valencia) en fecha 19 de mayo de 2010 Doña J. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 55 de la Ley del Registro Civil y en el 198 de su Reglamento, sea invertido el orden de los apellidos de su hijo D. Q. S. nacido en A. el ... de ... de 2004, exponiendo que su padre, cuyo paradero en estos momentos desconoce, nunca se ha hecho cargo de él y se ha desentendido completamente de su educación, que el menor es conocido como D. S. ya que se ha criado con la familia materna que es muy conocida en el pueblo, y que ella ha sido víctima de violencia de género por parte de su exmarido y padre del niño. Acompaña copia simple del DNI del menor y del suyo propio, certificaciones literales de nacimiento del menor y de matrimonio propia, informe de convivencia entre madre e hijo expedido por el ayuntamiento de A. informe sobre el menor emitido por el psicólogo del citado ayuntamiento con motivo de la solicitud de inversión de apellidos y copia de alguna documental en la que aparece designado como D. S. y del padre, copia de orden de búsqueda en vigor entre el 13 de noviembre de 2007 y el 11 de noviembre de 2011 y de sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2006 por el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia condenándole en concepto de autor de un delito de violencia de género contra la promotora con prohibición de aproximarse a ella durante cuatro años que concluyeron el 14 de diciembre de 2009. Ratificada la solicitud por la peticionaria, la Juez Encargada del Registro Civil de Alcàsser dispuso la remisión de lo actuado al de Picassent, en el que tuvo entrada el 18 de agosto de 2010.

2.- El Ministerio Fiscal se opuso a lo interesado, ya que la inversión por los preceptos que se invocan deberá instarse por el propio interesado, si es su voluntad, en el momento en que cumpla la mayoría de edad y tampoco se da el supuesto excepcional del artículo 58 LRC,

porque quien ha sido objeto de violencia de género ha sido la madre del menor y no este; y el 19 de noviembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Picassent dictó auto acordando no autorizar la alteración de los apellidos del menor, por no reunir los requisitos legalmente exigidos.

3.- Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, como en su familia el apellido S. tiene renombre tanto internacional como mundial, su hijo, que no mantiene ningún vínculo con su padre y ni siquiera lo conoce, es conocido como D. S. y aportando, como prueba documental, información relativa a los miembros de su familia que han alcanzado notoriedad por su actividad profesional.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la estimación del recurso por los motivos ya alegados en su escrito anterior y el Juez Encargado del Registro Civil de Picassent informó que mantiene en todos sus extremos los fundamentos del auto apelado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos los artículos 109 del Código Civil (CC.), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 1-1ª de abril y 17-3ª de octubre de 2003; 20-4ª de enero, 10-1ª de febrero, 6-2ª de abril y 21-3ª de mayo de 2004; 8-3ª de julio y 19-5ª de diciembre de 2005, 4-4ª de septiembre de 2006; 31-2ª de enero, 11-2ª de abril y 14-10ª de septiembre de 2007; 17-6ª de noviembre de 2008 y 22-9ª de febrero y 12-3ª y 31-7ª de mayo de 2010.

II.- La decisión de atribuir al mayor de los hijos como primer apellido el materno y como segundo el paterno ha de ser adoptada por los padres, de común acuerdo, “antes de la inscripción” (cfr. art. 109 CC.). No ejercitada la opción en ese momento y, por tanto, no manifestada expresa y conjuntamente por ambos progenitores la voluntad de invertir el orden, el nacido ha de ser inscrito con el primer apellido paterno como primero y con el primero materno como segundo (cfr. art. 109 CC., 53 y 55 LRC y 194 RRC).

III.- Así pues, la inversión del orden de los apellidos del hijo nacido el... de... de 2004 instada años después de practicarse la inscripción y por uno solo de los progenitores ha de ser desestimada. Tendrá que ser el propio interesado quien, alcanzada la mayoría de edad, pueda obtener la inversión, extemporáneamente pretendida por la madre sin intervención del padre, mediante simple declaración ante el Encargado del Registro Civil de su domicilio. Si antes de ese momento concurrieran los requisitos exigibles (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC), podrían ambos progenitores o, en su caso, el que acredite que tiene atribuida en exclusiva la patria potestad del menor, obtener el mismo resultado a través de un expediente de cambio de apellidos, que se tramita e instruye en el Registro Civil del domicilio y se resuelve por el Ministro de Justicia y, por delegación, (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), por la Dirección General.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Picassent (Valencia).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (46ª)

II.4.1-Modificación de apellidos.

No cabe, por simple petición, adecuar el apellido castellano “Martínez” a la forma en catalán “Martines”.

En el expediente sobre adecuación gráfica de apellido en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra resolución del encargado del Registro Civil de Alcoy (Alicante).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Alcoy el 25 de noviembre de 2009, Don F-X. M. Martínez, mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la adecuación gráfica de su segundo apellido a la lengua catalana, de modo que pase a ser Martines. Consta en el expediente la siguiente documentación: nota informativa del Institut d'Estudis Catalans según la cual la forma en catalán que corresponde al apellido Martínez es Martines e inscripción de nacimiento del promotor practicada en el Registro Civil de Cocentaina (Alicante).

2.- Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó resolución el 11 de noviembre de 2010, denegando la adaptación solicitada por entender que no se corresponde con el supuesto previsto en el artículo 55 de la Ley del Registro Civil, dado que no se trata de un apellido originariamente catalán que ha sido castellanizado, sino que, por el contrario, Martínez es un apellido de uso generalizado en todo el territorio español.

3.- Notificado el interesado, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Alcoy emitió informe desfavorable y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 22-1ª de enero, 1-3ª de junio, 6-4ª de septiembre, 11-2ª de diciembre de 2002; 18-1ª y 16-5ª de febrero de 2005; 20-3ª de diciembre de 2006 y 30-1ª de noviembre de 2007.

II.- Conforme al artículo 55 de la Ley del Registro Civil “el encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente”. En virtud de esta norma un apellido catalán, inscrito incorrectamente, puede ser sustituido, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado, por su forma correcta en lengua catalana.

III.- Es doctrina reiterada de este centro directivo que solo es posible realizar la corrección gramatical de los apellidos propios de una lengua española que consten incorrectamente inscritos de acuerdo con las directrices ortográficas de dicha lengua, pero que, en cambio, no puede realizarse por dicha vía una adaptación de apellidos que sean del acervo nacional, como es el caso de “Martínez”, puesto que para ello existe, siempre que se cumplan los

requisitos previstos, el expediente de cambio de apellidos conforme a los artículos 57 LRC y 205 RRC. Es decir, que la premisa para realizar la sustitución de los apellidos inscritos por su correcta forma en catalán es que dichos apellidos sean catalanes, requisito que no concurre en el presente caso.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcoy (Alicante).

II.5.- Competencia

II.5.1.- Competencia cambio nombre propio

Resolución de 3 de enero de 2014 (52ª)

II.5.1.-Competencia en expediente de cambio de nombre

El Encargado no puede autorizar el cambio de nombre si, como en este caso, no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la Dirección General examina la pretensión y no la concede, por no concurrir la justa causa requerida.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Sevilla en fecha 20 de octubre de 2010 Don E de J. y Doña S-M. mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan el cambio del nombre de su hija menor de edad María, nacida en S. el ... de ... de 2004, por "May" exponiendo que este último es el que habitualmente viene usando y por el que es conocida en todos los actos de su vida. Acompañan certificación literal de nacimiento y certificado de empadronamiento en S. con el nombre inscrito y certificación de partida de bautismo y una orla y un diploma escolares con el nombre pretendido.

2.- Ratificado el escrito inicial por los promotores, el ministerio fiscal, ante la escasez de prueba aportada, se opuso a lo solicitado y el 5 de noviembre de 2010 el Juez Encargado, visto que no se ha demostrado el uso habitual alegado, dictó auto disponiendo que no ha lugar a estimar la pretensión de cambio de nombre por uso.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, desestimada la pretensión por entenderse que no se acredita uso prolongado en el tiempo y en diversos ámbitos del nombre propuesto, aportan prueba adicional consistente en certificados del pediatra, del colegio y de un centro hípico.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, a la vista de la nueva documentación aportada, nada opone a lo interesado y el Juez Encargado informó

desfavorablemente el recurso, dado que no le es posible valorar en esta fase las pruebas presentadas fuera del plazo legal, y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012 y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 4-1ª de enero de 1996, 10-5ª de febrero y 17-1ª y 30-2ª de mayo y 15-3ª de septiembre de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 20-5ª de octubre de 1998, 18-2ª de febrero de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001; 26-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 4-3ª de abril, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª de septiembre, 7-1ª, 15-3ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009 y 14-17ª de diciembre de 2010.

II.- Se pretende por los promotores cambiar el nombre, "María", que consta en la inscripción de nacimiento de su hija por "May", exponiendo que este último es el que habitualmente viene usando y por el que es conocida en todos los actos de su vida. El Juez Encargado, visto que no se ha demostrado el uso habitual alegado, dispuso que no ha lugar a estimar la pretensión de cambio de nombre por uso mediante auto de 5 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Juez Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC).

IV.- En este caso, no justificado el uso habitual del nombre propuesto, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al Encargado sino al Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V.- Conviene, por tanto, entrar a examinar si la pretensión deducida puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el Registro Civil del domicilio y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI.- A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa porque, en el presente caso, no está acreditada la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 60 LRC y su correlativo reglamentario (206 RRC, último apartado): los promotores, no obstante fundamentar la solicitud de cambio de nombre en el uso habitual por su hija del propuesto, no justifican dicho uso con la escasa prueba aportada al expediente; con el escrito de recurso presentan, a fin de acreditar el uso prolongado en el tiempo y en ámbitos muy diversos, prueba adicional que, sobre no consistir en documentos pertenecientes a la menor sino en certificados, es preconstituida -ha sido obtenida entre el 24 y el 29 de noviembre de 2010 y la resolución denegatoria se notificó el 23 de noviembre de 2010- y,

no formulada ninguna otra alegación, no cabe apreciar la existencia de justa causa para el cambio solicitado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Desestimar el recurso

2º.- Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), no autorizar el cambio del nombre inscrito, María, por "May".

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 3 de enero de 2014 (54ª)

II.5.1.-Competencia para cambio de nombre.

1º.- El Encargado no puede autorizar el cambio de nombre si en el expediente no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la Dirección General examina la pretensión.

2º.- Sin vicio de incongruencia se aprueba no el nombre solicitado, "Mábel", sino "Mabel" que, sobre ser más correcto conforme a las reglas gramaticales de las lenguas españolas, es la forma en la que en fase de recurso se justifica el uso habitual alegado.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Terrassa (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Terrassa en fecha 6 de mayo de 2010 Doña Isabel. mayor de edad y domiciliada en V. (B), solicita el cambio del nombre inscrito por "Mábel", exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en sus relaciones tanto familiares como sociales. Acompaña certificación literal de nacimiento, certificado de inscripción en el padrón de V. copia de DNI y de libro de familia y documental, mayoritariamente muy reciente, en la que aparece identificada preferentemente como "Mabel" y en ocasiones como "Mábel".

2.- El 10 de mayo de 2010 la promotora ratificó la solicitud en presencia de su cónyuge, que manifestó que nada opone a la incoación del expediente y se muestra conforme con el mismo, el ministerio fiscal se opuso a lo interesado por entender que, atendiendo a las fechas de la documentación aportada, no queda acreditado que el nombre solicitado sea el usado habitualmente y el 17 de junio de 2010 la Juez Encargada dictó auto disponiendo que no ha lugar a la autorización de cambio de nombre pretendida.

3.- Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, desconociendo el periodo de uso que debía justificar, recopiló la documentación más reciente pero que ahora aporta, como efectivamente hace, prueba más antigua.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, habida cuenta de que de la documental presentada queda acreditado el uso habitual, interesó la estimación del recurso y la Juez Encargada emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012 y las resoluciones, entre otras, de 23-1ª de mayo de 1998, 7-5ª de junio de 1999, 22-5ª de enero de 2002, 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 26-2ª de octubre de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005; 28-5º de junio, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008, 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009 y 15-7ª de marzo de 2010.

II.- Se pretende por la interesada el cambio del nombre, "Isabel", que consta en su inscripción de nacimiento, por "Mábel", exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en sus relaciones tanto familiares como sociales. La Juez Encargada, considerando que, atendiendo a las fechas de la documentación aportada, no queda acreditado el uso alegado, dispuso que no ha lugar a la autorización de cambio de nombre pretendida mediante auto de 17 de junio de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC).

IV.- En este caso, no justificado en el expediente el uso habitual del nombre propuesto, la competencia excede de la atribuida al Juez Encargado y corresponde al ámbito general del ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden ministerial JUS/2225 de 5 de octubre de 2012), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V.- Conviene, por tanto, entrar a examinar si la pretensión de la recurrente pudiera ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido ante el Registro Civil del domicilio la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio de Justicia (cfr. art. 365 RRC) y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI.- A la cuestión planteada hay que darle una respuesta afirmativa, aunque matizada: las pruebas aportadas en fase de recurso acreditan el uso habitual no del nombre pretendido, "Mábel", que aparece esporádicamente seguido de los apellidos, a menudo sin sus respectivas tildes, sino de "Mabel" que, a mayor abundamiento es forma más correcta conforme a las reglas gramaticales de las lenguas españolas. Demostrado que la recurrente viene siendo conocida con el nombre de "Mabel", se estiman cumplidos los requisitos específicos exigidos para el cambio de nombre (cfr. art. 206, III RRC) y no hay inconveniente en autorizar este último. No importa que la solicitud de la promotora no haya sido exactamente esa ni con ello se incurre en vicio de incongruencia por desviación de la pretensión del particular porque, dados los términos de la autorización, la peticionaria tiene la posibilidad de dejarla caducar.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Desestimar el recurso.

2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre) el cambio del nombre inscrito, "Isabel", por "Mabel", no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado Reglamento.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Terrassa (Barcelona).

III. NACIONALIDAD

III.1.- Adquisición originaria de la nacionalidad española

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen iure soli

Resolución de 3 de enero de 2014 (86ª)

III.1.1.-Adquisición nacionalidad de origen iure soli.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Vélez-Málaga (Málaga).

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Vélez-Málaga el 24 de septiembre de 2009, los ciudadanos bolivianos Don E. y Doña M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, R. nacida en V-M. el ... de ... de 2007. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Madrid sobre la inscripción consular de los promotores y la no inscripción de la menor; fotocopias de los pasaportes de los padres.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal por el que se opone a lo solicitado, el Encargado del Registro Civil de Vélez-Málaga dictó auto el 7 de enero de 2010 desestimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que según la legislación boliviana se le otorga dicha nacionalidad a los nacidos de padres bolivianos, incluso en el extranjero.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que la modificación de la Constitución Boliviana entró en vigor con posterioridad al nacimiento de su hija.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009

y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2007, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Velez-Malaga.

Resolución de 3 de enero de 2014 (87ª)

III.1.1.-Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España hijo de padres argentinos nacidos en Argentina.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Salamanca el 3 de noviembre de 2010, los ciudadanos argentinos Don J-L. y Doña V-A. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, D-I. nacido en S. el ... de ... de 2010. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado negativo de nacionalidad del interesado y sobre la legislación de nacionalidad, emitido por el Consulado General de la República Argentina en Madrid; certificado de empadronamiento; y fotocopias de los NIE de los promotores.

2.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil dictó auto el 25 de junio de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que no resultaría de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil en el presente caso.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando, tanto lo dispuesto en la Instrucción de la DGRN de fecha 28 de marzo de 2007, como que la legislación de su país no otorga automáticamente la nacionalidad argentina a su hijo.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la estimación del recurso interpuesto y el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 3-1ª de junio, 23-1ª de septiembre y 19-1ª de diciembre de 2002 y 1-3ª de febrero, 26-4ª de marzo y 3-2ª, 11-3ª y 28-2ª de junio de 2003 y 13-2ª de febrero de 2004, 5-7ª de Noviembre de 2008; 6-4ª y 9-1ª de Julio de 2010; 6-12ª y 28-17ª de Septiembre de 2011.

II.- La petición de los promotores de que se reconozca la nacionalidad española a su hijo, nacido en España en 2010, tiene como vía registral el expediente para declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2º L.R.C. y 338 R.R.C.) que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 R.R.C).

III.- Conforme al artículo 17-1-c del Código civil son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

De acuerdo con el conocimiento adquirido de la ley argentina, no hay duda de que esa norma beneficia al nacido en España, hijo de padres argentinos nacidos en Argentina, porque los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de sus padres, sino que para ello es preciso un acto posterior. Se da, pues, una situación de apatridia originaria en la que la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 3 de enero de 2014 (90ª)

III.1.1.- Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España hija de padres uruguayos nacidos en Uruguay.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Alicante.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Alicante el 2 de diciembre de 2010, los ciudadanos uruguayos Don W-R. y Doña Mª-I. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad S-E. nacida en S-J D'A. (A). el 14 de octubre de 2010. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificado del Consulado General de Uruguay en Valencia acerca de la normativa sobre nacionalidad y no inscripción consular de la menor; y fotocopias de los NIE y pasaporte de los padres.

2.- El mismo día se ratifican los interesados en su solicitud. Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Alicante dictó auto el 5 de enero de 2011 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la Ley Uruguaya 16.021, de 13 de abril de 1989 dice en su artículo 1º que "tienen la calidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República" y en el 2º que "tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior". De tal modo que, en el presente supuesto, el Encargado deduce que la menor nacida en España, hija de padres uruguayos, es de nacionalidad uruguaya, no concurriendo la situación de apatridia que fundamentaría la atribución de la nacionalidad española *iure soli*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Una vez trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado se ratifica en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y la resolución 13-32ª de septiembre de 2013.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el 14 de octubre de 2010, hija de padres uruguayos nacidos en Uruguay. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- En relación con la legislación uruguaya, según el más reciente conocimiento que este Centro Directivo ha tenido del Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 13.021, de 13 de abril de 1989). Igualmente son ciudadanos naturales de la República Oriental de Uruguay los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico (vid. Artículo 74 de la Constitución uruguaya). Por lo que, al ser los padres del menor uruguayos nacidos en Uruguay le correspondería a la misma *iure sanguinis* la nacionalidad uruguaya de los padres, según el artículo 2 de la Ley 13.021 antes señalada.

IV.- Consiguientemente, no se da, pues, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española conforme al citado artículo 17.1.c) del Código civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no tenga otra nacionalidad *iure sanguinis*, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alicante.

Resolución de 3 de enero de 2014 (93ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Murcia, el 14 de octubre de 2008, los ciudadanos bolivianos Don A. y Doña L-V. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre la no inscripción de la menor y la inscripción consular de los promotores; fotocopia los pasaportes de los padres.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 15 de octubre de 2009 desestimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que resultaría de aplicación el artículo 141 de la nueva Constitución de Bolivia.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que la entrada en vigor del artículo 141 de la nueva Constitución de Bolivia se produjo con posterioridad al nacimiento de su hija.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2008, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a

adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 3 de enero de 2014 (94ª)

III.1.1.- Declaración sobre nacionalidad española.

No es española iure soli la nacida en España hija no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana.

En las actuaciones sobre declaración la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana el 15 de diciembre de 2009, el ciudadano marroquí Don S. y la ciudadana ecuatoriana Doña D-H. solicitaban la adquisición de la nacionalidad española de su hija, L. nacida en Las P de G-C. el ... de ... de 2004. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados del Consulado de Ecuador en las Islas Canarias y del Consulado de Marruecos en Gran Canaria sobre la no inscripción consular de la menor; fotocopias del NIE de los promotores.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana el 30 de junio de 2010 dictó auto denegando la declaración de la nacionalidad española por considerar que a la nacida le correspondía la nacionalidad marroquí de su padre.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando que, al no estar los padres casados, la menor no ostenta ninguna nacionalidad.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 12-1ª, 15-1ª y 22-2ª de septiembre, 17-3ª y 28 de octubre, 18-1ª y 27 de diciembre de 2000; 27-2ª de marzo, 5-1ª y 11 de abril y 5-1ª de mayo de 2001; 10-2ª de mayo y 23-2ª de octubre de 2003; 26-1ª de enero de 2004; 7-2ª de noviembre de 2005; 17-1ª de enero, 25 y 27-1ª de marzo y 7 de diciembre de 2006; 10-6ª de Diciembre de 2008.

II.- Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2 L.R.C.) que tiene la nacionalidad española de origen la nacida en España en el año 2004, hija no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana, ambos nacidos fuera de España.

III.- Es necesario, pues, determinar el contenido y alcance de la legislación marroquí en orden a la atribución de esta nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padres marroquíes (cfr. art. 12 nº6 C.c.), lo que presupone la siempre compleja tarea previa de valorar la prueba del Derecho extranjero aplicable y de interpretar sus mandatos. Es esta complejidad, que explica alguno de los matices y variaciones que la doctrina de este Centro Directivo ha experimentado en la materia, junto con la conveniencia de reexaminar el tema a la luz de las modificaciones introducidas en el Código de Familia de Marruecos (Mudawana) en virtud del Dahir nº1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley nº 70.03, y que entró en vigor el 5 de febrero de 2004, dada la trascendencia que para el régimen de transmisión de la nacionalidad marroquí por vía de *ius sanguinis* presenta la cuestión previa de la determinación de la filiación paterna del hijo, lo que aconseja su revisión sistemática y general.

IV.- Este Centro Directivo había mantenido hasta su Resolución de 27 de octubre de 1998 que el artículo 17-1-c del Código civil no era aplicable a los hijos de padre marroquí, porque por aplicación de la ley marroquí, los hijos de padre marroquí ostentaban *de iure* la nacionalidad marroquí por nacimiento, siendo indiferente el dato del carácter matrimonial o no de tal filiación a la hora de valorar la adquisición, o falta de adquisición, de la nacionalidad española *iure soli*. Esta doctrina estaba basada en el conocimiento entonces adquirido de la legislación marroquí en la materia, y en concreto en el artículo 6 del Dahir nº 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de nacionalidad marroquí, el cual establece que tiene la nacionalidad marroquí de origen por filiación: "1º el niño nacido de un padre marroquí; y 2º el niño nacido de una madre marroquí y de un padre desconocido", y ello sin exigencias adicionales relativas al lugar de nacimiento y, por tanto, también en el caso de que el mismo tenga lugar en el extranjero. Tampoco condiciona el precepto mencionado la atribución de la nacionalidad marroquí originaria a que el nacimiento del niño haya tenido lugar dentro de un matrimonio, lo que había permitido a esta Dirección General extraer la consecuencia de que dicha nacionalidad se transmitía al hijo con independencia del tipo de filiación y del estado civil del padre.

V.- La doctrina anterior sufre una primera inflexión con la Resolución de 15-5ª de febrero de 1999, en la que el Centro Directivo a la vista de la prueba del Derecho extranjero aportada por los promotores junto a su escrito de recurso, alcanza una conclusión distinta de la hasta entonces mantenida. Con arreglo a la citada prueba de la legislación marroquí, el hijo nacido en el extranjero de ciudadanos marroquíes, únicamente puede ser considerado de esta nacionalidad si ha nacido dentro de un matrimonio que sea válido conforme a la legislación marroquí. Por lo tanto, el matrimonio contraído en el extranjero debe hacerse con arreglo a las normas que correspondan según el estatuto personal del contrayente marroquí. En consecuencia los hijos nacidos de una relación no matrimonial o ilegítima no pueden ser considerados marroquíes,

conclusión que se extendía al matrimonio civil celebrado en España, matrimonio que, se afirmaba, carece de validez según la legislación personal del padre y por tanto, y de acuerdo con la misma, los hijos habidos de tal matrimonio no pueden ser considerados como marroquíes, dando con ello lugar a la estimación del recurso. La tesis, paralela a la anterior, de que es necesario para la atribución de la nacionalidad marroquí por filiación paterna no matrimonial que esta determinación de la filiación no matrimonial sea válida para el Ordenamiento marroquí, en combinación con la no aplicación por el Derecho marroquí en esta materia de la regla *locus regit actum*, dando lugar a que la determinación de la filiación paterna de acuerdo con las leyes españolas carece de eficacia en Marruecos, fue acogida por esta Dirección General, en línea con la Resolución anterior, como causa impeditiva de la adquisición por nacimiento *iure sanguinis* de la nacionalidad marroquí del padre a pesar de mediar un reconocimiento formalizado conforme al Derecho español (cfr. Resolución de 16-1ª de enero de 2002). Además, el hecho de que el padre fuese conocido, a pesar de no entenderse establecido legalmente para el Derecho marroquí el vínculo de la filiación, suponía excluir la nacionalidad marroquí del nacido por vía de filiación materna, la cual está condicionada a la circunstancia de ser desconocido el padre. Con ello se venía a aplicar una misma y única solución a los casos de filiación paterna no matrimonial, cuando el reconocimiento por parte del padre no fuese considerado válido por el Derecho marroquí, y a los supuestos de filiación matrimonial, cuando fuese el propio vínculo matrimonial el no reconocido por tal Derecho.

VI.- Sin embargo, este Centro Directivo en su Resolución de 5-4ª de febrero de 2002 vuelve sobre sus pasos y, para los supuestos de filiación matrimonial, recupera de nuevo su doctrina anterior a 1999, afirmando que no obstante la conclusión contraria a la que llegó la mencionada Resolución, “se impone ahora, de acuerdo con el conocimiento más exacto adquirido de la legislación marroquí, confirmar la doctrina anterior de la Dirección General, en el sentido de que el nacido fuera de Marruecos de padre marroquí, siendo su filiación matrimonial, tiene *de iure* desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre, con independencia de las dificultades *de facto* con que se encuentre (el interesado) en el Consulado marroquí para documentarse como nacional de este país y para que sea reconocido el matrimonio de su padre. No hay, por otra parte, dificultades insuperables en este caso para que sea reconocida en Marruecos la validez de un matrimonio civil celebrado en España entre un marroquí musulmán y una cristiana”. Pero nuevamente esta conclusión es matizada respecto de los casos en que el matrimonio civil se haya celebrado entre dos marroquíes en España, al admitir la falta de eficacia del mismo para Marruecos (cfr. Resolución de 16-8ª de septiembre de 2002). Alineándose con la citada Resolución de 5-4ª de febrero de 2002, y extendiendo sus conclusiones al ámbito de la filiación paterna no matrimonial, la más próxima de 26-1ª de enero de 2004, niega la condición de español *iure soli* al nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana. Esta misma doctrina debe ser ahora confirmada para el caso presente relativo a un niño nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y de madre colombiana, doctrina que se reafirma a la vista de las modificaciones que ha introducido en el Código de Familia marroquí (Mudawana) en materia de filiación el Dahir nº1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley nº 70.03, norma que necesariamente se ha de tomar en cuenta por razón de lo dispuesto por el artículo 9 nº1 y 4 del Código civil que remiten la regulación de la determinación y contenido de la filiación al estatuto personal del hijo.

Ahora bien, dado que, a su vez, al tratar de aplicar el artículo 17-1-c del Código civil se parte de una situación de potencial intervención subsidiaria de la nacionalidad española a fin de evitar la, en su defecto, apatridia del menor, surge una situación paradójica caracterizada por un efecto de “doble espejo” entre los artículos 17-1-c y 9 nº1 y 4 del Código civil, en la que la nacionalidad y la filiación del menor son respectivamente cuestiones previas la una respecto de la otra, sin que ninguna de las dos se pueda definir sin determinar antes la otra: el hijo es nacional marroquí si se establece su filiación respecto de un padre marroquí, pero para determinar esta filiación ha de hacerse aplicación del estatuto personal del hijo que, a su vez, se determina por la nacionalidad del mismo, nacionalidad que no puede afirmarse sin el *prius* de la filiación.

VII.- En una primera aproximación al tema, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, se observa que el artículo 9 nº 4 del Código civil adolece de una laguna legal por referirse sólo al carácter y contenido de la filiación pero no a su “determinación”. Para subvenir a tal laguna, descartada la tesis de la *lex fori* por falta de soporte legal, la mayoría de la doctrina científica y la oficial de este Centro Directivo ha abogado por una aplicación analógica del propio artículo 9 nº 4 citado (cfr. Resoluciones de 29 de abril de 1992 y 18 de septiembre de 1993, entre otras), tesis a la que más recientemente se ha sumado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de marzo de 2000, lo cual supone acudir a la ley nacional del hijo, sometiendo a la misma los títulos de determinación y acreditación de la filiación, la regulación de los medios de prueba y de las acciones de impugnación y reclamación de la filiación.

VIII.- Ciertamente es que estando en cuestión la determinación sobre el efecto de transmisión de la nacionalidad en función del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación, en atención a las diferencias sustantivas entre ambos tipos que al respecto se desprenden de la legislación marroquí (conforme al art. 148 de la Mudawana la filiación ilegítima no produce ninguno de los efectos de la filiación legítima respecto al padre), y a la vista del principio de igualdad jurídica y proscripción de toda discriminación por razón de filiación que establecen los artículos 14 y 39 de nuestra Constitución, principios desarrollados legalmente en nuestro Ordenamiento desde la Ley 11/1981, de 13 de mayo, el reenvío que el artículo 9 nº 4 del Código hace a aquella legislación puede ser excepcionado aplicando el filtro constitucional a través de la cláusula del orden público internacional español, en línea con la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29 de mayo, en la que se afirma que “el estatuto jurídico del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos” (Fundamento jurídico 5º). El mismo Tribunal Constitucional ha hecho aplicación práctica de esta idea para rechazar la intervención de la ley extranjera que prohíbe las acciones de filiación del hijo, aplicando en su lugar sustitutivamente la ley española, activando así la previsión del artículo 12 nº 3 del Código civil (vid. Sentencia 7/1994, de 17 de enero). Igualmente actúa en tal dirección la existencia de normas materiales imperativas en el Derecho español que limitan el alcance de las normas de conflicto antes vistas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 1 declara aplicable la Ley a todo menor de dieciocho años que se encuentre en España, sea nacional o extranjero.

La ley española, como ley del foro, es también la que resulta aplicable si se parte de la idea de que, por ser la filiación una cuestión previa y condicionante de la de la nacionalidad del menor, la cuestión del establecimiento del vínculo filial se ha de resolver partiendo como premisa previa del carácter indeterminado de la nacionalidad del hijo, lo que supone aplicar como punto de conexión la residencia habitual de éste (cfr. arts. 9 nº4 y nº10 C.c.), lo cual remite en el presente caso, como se ha dicho, a la ley española, que es la más estrechamente vinculada al supuesto de hecho (ley del foro, ley del nacimiento y de la residencia habitual de padres e hijo). Finalmente en este complejo proceso interpretativo, abundando en la solución apuntada, se ha de ponderar de forma decisiva el principio del “favor filiationis”, que igualmente aconseja aplicar la ley que reconoce el vínculo de filiación como vínculo jurídico resultante del hecho biológico de la procreación (ley española), descartando la ley que niega tal vínculo (ley marroquí).

IX.- Las conclusiones anteriores no quedarían desvirtuadas incluso si se considerase que la anterior aproximación metodológica al tema puede no ser la correcta cuando de lo que se trata es de examinar la cuestión de la determinación de la filiación como cuestión previa a la aplicación del artículo 17-1-c del Código civil, pues si el resultado de la exclusión de la legislación extranjera fuera la de admitir el nexo filial a los efectos del Derecho español, arrastrando con ello la consecuencia lógica desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento de la afirmación de la nacionalidad marroquí del hijo, el resultado final sería el del incumplimiento de la finalidad de aquel precepto, esta es, la evitación de la apatridia, si paralelamente la

misma conclusión sobre la nacionalidad del menor no fuese alcanzada, como obviamente no lo será por partir de la premisa de su inaplicación, por la legislación marroquí. Con ello se daría precisamente la situación de apatridia que se trataba de evitar. Desde esta perspectiva, para lograr la finalidad a que propende la norma se impondría admitir la excepción de la excepción, esto es, la inaplicación al caso de la cláusula del orden público, razón por la que procede el análisis del tema de la filiación del menor desde la exclusiva perspectiva del Derecho marroquí. Pues bien, resulta incuestionable que el Derecho marroquí asume el criterio de la transmisión de la nacionalidad *iure sanguinis* como regla preferente (vid. artículo 6 del Dahir nº250-58-1 de 6 de septiembre de 1958), si bien ello lo hace asumiendo el principio básico propio del Derecho de familia islámico de que el parentesco se transmite por línea masculina, razón por la cual la transmisión de la nacionalidad por vía materna se condiciona a que el padre sea desconocido. La legitimidad de la filiación presupone, en consecuencia, la prueba de la consanguinidad del padre respecto del hijo. La filiación se presume “*iuris tantum*” por la ley cuando el hijo nace durante el matrimonio o en un determinado periodo de tiempo posterior a su disolución compatible con la presunción de que la concepción fue matrimonial (cfr. arts. 152 a 154 de la Mudawana). Esto viene a coincidir con el contenido de la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos en nota verbal del año 1994, que vincula la prueba de la paternidad a la existencia de un matrimonio válido conforme a la legislación marroquí.

Pero tal afirmación, aislada de su contexto jurídico, supone a fecha actual incurrir en una suerte de “sinécdoque jurídica”, tomando la parte por el todo, pues son medios legales para la determinación de la filiación paterna no sólo la presunción legal que se deriva del matrimonio, sino también el reconocimiento y la cohabitación (cfr. art. 152 de la Mudawana reformada), produciendo ésta los mismos efectos de prueba que el matrimonio, y ostentando el hijo reconocido los mismos derechos y deberes que los hijos matrimoniales (cfr. arts. 157 de la Mudawana reformada). Esta nueva situación legal obliga a extender la solución dada al caso de la filiación paterna matrimonial a los casos de matrimonios civiles contraídos en el extranjero (matrimonio que en España presupone la cohabitación: art. 68 C.c.), y a los supuestos de filiación no matrimonial cuando quede acreditado el reconocimiento válido para Marruecos o la cohabitación. Hay que subrayar, en cuanto a los matrimonios contraídos por ciudadanos marroquíes fuera de Marruecos, que el nuevo Código de Familia marroquí admite su celebración en la forma local propia del país de la residencia habitual de aquellos, admitiendo, pues, el Derecho marroquí en la actualidad en esta materia la regla *locus regit actum*, sin perjuicio de la obligación de depositar una copia del acta matrimonial en el Consulado de Marruecos correspondiente al lugar de celebración (cfr. arts. 14 y 15). Además, el artículo 157 del nuevo Código admite el establecimiento de la filiación también en los casos de matrimonios viciados o impugnables o incluso en el supuestos de las denominadas “relaciones por error” (vid. art. 152 nº3).

X.- En cuanto a estos efectos probatorios de la filiación no matrimonial, no puede obviarse el hecho de que la propia inscripción del nacimiento en el Registro Civil español constituye prueba de la filiación (cfr. arts. 113 C.c., y 2 y 41 L.R.C.), de especial importancia cuando la inscripción ha sido promovida por el padre conjuntamente con la madre, como sucede en el presente caso, y practicada dentro del plazo legal (cfr. arts. 120 nº1 y 124 C.c.), siempre que no se aprecie imposibilidad biológica para la paternidad y que no haya otra distinta acreditada (cfr. art. 113 “in fine” C.c.), y siempre que no pueda dudarse de la autenticidad del reconocimiento. La invocación en este punto de los citados preceptos del Ordenamiento español se hacen no en calidad de reguladores del fondo del reconocimiento (al no haber cuestión en este caso sobre la necesidad de consentimientos complementarios o de otros posibles obstáculos legales), aspecto en el que hay algunos antecedentes en la jurisprudencia registral no pacíficos desde el punto de vista de su aceptación por parte de la doctrina científica, sino en tanto que relativos a la “forma” del reconocimiento, y por tanto amparados en su pertinencia *in casu* por las reglas del artículo 11 del Código civil (cfr. Resolución de 25 de marzo de 1985). Finalmente ha de destacarse en esta materia la asunción del principio

del “favor filiationis” por el Derecho marroquí, que sienta la presunción de que “la filiación es legítima respecto del padre y de la madre salvo prueba en contrario” (vid. art. 143). Admitida, pues, la existencia de un vínculo filial entre el padre marroquí y su hija, ésta adquiere *de iure* por filiación desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre.

XI.- Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17-1-c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se produce, no es posible declarar que la nacida ostenta la nacionalidad española, al estar basada la pretensión y el posterior recurso en un certificado consular que en modo alguno puede servir para fundamentarla, ya que tan sólo recoge la no inscripción de la menor en el Registro Consular, y sin que esta conclusión quede alterada por el hecho de que la legislación ecuatoriana no atribuya a la nacida la nacionalidad de su madre, al no producirse en este caso situación alguna de apatridia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Resolución de 3 de enero de 2014 (96ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Granollers (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Granollers, el 6 de octubre de 2009, los ciudadanos bolivianos Don L-J. y Doña S-E. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A-M. nacida en S-M de P. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Barcelona sobre la no inscripción de la menor; fotocopia del NIE del padre y pasaporte de la madre.

2.- Una vez ratificados los promotores y previo informe del Ministerio Fiscal por el que se opone a lo solicitado, el Encargado del Registro Civil de Granollers dictó auto el 21 de octubre de 2009 desestimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que resultaría de aplicación el artículo 141 de la nueva Constitución de Bolivia.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo emitido y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Granollers (Barcelona).

Resolución de 3 de enero de 2014 (98ª)

III.1.1.- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España de padres colombianos.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Salamanca el 24 de noviembre de 2010, Don A. y Doña S-A. ambos de nacionalidad colombiana, solicitaron que se declarase, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de su hijo A. nacido en S. el ... de ... de 2010. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: certificación literal de nacimiento del menor interesado; certificado de empadronamiento; certificado del Consulado General de Colombia en Madrid, sobre la legislación relativa a la nacionalidad y la no inscripción consular del menor; y fotocopias de los NIE de los promotores.

2.- Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal informó que no se oponía a lo interesado. El Encargado del Registro Civil de Salamanca, con fecha 14 de diciembre de 2009, dictó auto denegando la solicitud de los promotores, por entender que no resulta de aplicación al presente supuesto el artículo 17 del Código Civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se declarase con valor de simple presunción que el menor era español de origen, alegando que resultaría de aplicación el apartado 1-b del Anexo de la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

4.- Notificada la interposición del recurso al Ministerio Fiscal, interesa la estimación del recurso. El Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989; y las Resoluciones, entre otras, de 11-2ª de abril de 2002, 13-5ª, 14-1ª, 26-5ª y 27-1ª y 2ª de enero, 13-3ª y 4ª y 16-4ª de febrero y 10-3ª, 13-1ª de marzo, 7-2ª y 19-3ª de abril, 17-1ª, 28-3ª de mayo y 23-1ª de julio de 2004.

II.- Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen un niño nacido en España el... de... de 2010, hijo de padres colombianos nacidos en Colombia. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (cfr. Artículo 17.1.c) del Código Civil.

III.- Reiteradamente tiene establecido esta Dirección General, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación colombiana, que en casos como el presente, los hijos de nacionales de dicho país nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho

del nacimiento la nacionalidad correspondiente a sus padres, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior. Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone. No ha de importarse que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados Partes velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 3 de enero de 2014 (101ª)

III.1.1- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España de padres ecuatorianos, antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana el 20 de octubre de 2008, si su estancia en España no puede considerarse transitoria.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Huércal Overa (Almería).

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Albox (Almería) el 3 de diciembre de 2008, los ciudadanos ecuatorianos Don V-H. y Doña Mª del C. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad H-D. nacido en H. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; actas de nacimiento locales de los promotores; certificados emitidos por el Consulado General de Ecuador en Murcia sobre la legislación relativa a la nacionalidad, no inscripción del menor, e inscripción consular de los progenitores; certificado de empadronamiento de los padres; y fotocopias de los pasaportes de los promotores.

2.- Una vez ratificados los promotores, se remiten las actuaciones al Registro Civil de Huércal Overa. Previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, el Encargado del Registro Civil dictó auto el 28 de junio de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de

declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, por corresponderle al menor la nacionalidad de sus progenitores *iure sanguinis*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, la modificación de la Constitución de la República de Ecuador entró en vigor el 20 de octubre de 2008, por lo que no resultaría de aplicación en el presente caso, al haber nacido el menor interesado con anterioridad.

4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa su desestimación y el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, 4-4ª y 13-4ª de febrero, 13-1ª de mayo, 28-1ª y 3ª de junio y 5-2ª de diciembre de 2003; 14-4ª de enero y 5-3ª de noviembre de 2004; 30-1ª de mayo, 30-3ª de junio y 12-2ª de julio de 2005; 12-4ª y 20-2ª de septiembre, 15-4ª de noviembre y 27-5ª de diciembre de 2006; 3-8ª de abril, 21-5ª y 27-10ª de junio de 2007; 22-3ª de mayo, 3-2ª de septiembre y 19-3ª de diciembre de 2008; 18-7ª de Mayo de 2009.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el 10 de agosto de 2008, hijo de padres ecuatorianos nacidos en Ecuador. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil), por lo cual resulta necesario precisar el alcance de la leyes ecuatorianas respecto de la atribución de la nacionalidad ecuatoriana a los nacidos fuera de Ecuador.

III.- Conforme al conocimiento adquirido por este Centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o "transitoriamente ausentes del país por cualquier causa"; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiriría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero. El caso actual está comprendido en estas últimas hipótesis. El nacido no tenía cuando nació, el 10 de agosto de 2008, por tanto todavía bajo la vigencia de la Constitución ecuatoriana de 1998, la nacionalidad ecuatoriana de sus padres porque este no estaban al servicio de Ecuador o de un organismo internacional y porque su estancia fuera de Ecuador no puede calificarse de transitoria, a la vista de que su domicilio en España está acreditado por lo que se desprende del padrón municipal.

IV.- Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria del nacido en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que el interesado pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad ecuatoriana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

V.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Huércal-Overa (Almería).

Resolución de 3 de enero de 2014 (104ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España de padres ecuatorianos, antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana el 20 de octubre de 2008, si su estancia en España no puede considerarse transitoria.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Murcia el 5 de marzo de 2009, los ciudadanos ecuatorianos Don J-S. y Doña A-M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad I-S. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificados emitidos por el Consulado General de Ecuador en Murcia sobre la legislación relativa a la nacionalidad, no inscripción de la menor, e inscripción consular de los progenitores; certificado de empadronamiento de los padres, en los que consta su número de NIE; y fotocopia de los pasaportes de los progenitores.

2.- Una vez ratificados los promotores, previo informe del Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado, el Encargado del Registro Civil dictó auto el 15 de abril de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, por corresponderle a la menor la nacionalidad de sus progenitores *iure sanguinis*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la modificación de la Constitución de la República de Ecuador entró en vigor el 20 de octubre de 2008, por lo que no resultaría de aplicación en el presente caso, al haber nacido la menor interesada con anterioridad.

4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa su desestimación y el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, 4-4ª y 13-4ª de febrero, 13-1ª de mayo, 28-1ª y 3ª de junio y 5-2ª de diciembre de 2003; 14-4ª de enero y 5-3ª de noviembre de 2004; 30-1ª de mayo, 30-3ª de junio y 12-2ª de julio de 2005; 12-4ª y 20-2ª de septiembre, 15-4ª de noviembre y 27-5ª de diciembre de 2006; 3-8ª de abril, 21-5ª y 27-10ª de junio de 2007; 22-3ª de mayo, 3-2ª de septiembre y 19-3ª de diciembre de 2008; 18-7ª de Mayo de 2009.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacido en España el... de... de 2008, hija de padres ecuatorianos nacidos en Ecuador. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil), por lo cual resulta necesario precisar el alcance de la leyes ecuatorianas respecto de la atribución de la nacionalidad ecuatoriana a los nacidos fuera de Ecuador.

III.- Conforme al conocimiento adquirido por este Centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o "transitoriamente ausentes del país por cualquier causa"; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiriría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero.

El caso actual está comprendido en estas últimas hipótesis. La nacida no tenía cuando nació, el... de... de 2008, por tanto todavía bajo la vigencia de la Constitución ecuatoriana de 1998, la nacionalidad ecuatoriana de sus padres porque estos no estaban al servicio de Ecuador o de un organismo internacional y porque su estancia fuera de Ecuador no puede calificarse de transitoria, a la vista de que su domicilio en España está acreditado por lo que se desprende del padrón municipal.

IV.- Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria del nacido en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que el interesado pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad ecuatoriana de sus progenitores, pues este

hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

V.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 3 de enero de 2014 (111ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es español iure soli el nacido en España hijo de padres peruanos.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Salamanca el 23 de noviembre de 2010, los ciudadanos peruanos Don F. y Doña A-E. promueven expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española de su hijo menor de edad, B. nacido en S. el ... de 2010. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: certificación literal de nacimiento del menor; certificado negativo de la nacionalidad peruana del interesado, expedido por el Consulado de Perú en Salamanca; certificado de empadronamiento; fotocopias de los NIE de los promotores.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 9 de diciembre de 2010 desestimando la petición formulada en el expediente sobre la adquisición por simple presunción de la nacionalidad española del menor.

3.- Notificada la resolución a los promotores, éstos interponen recurso contra la resolución indicando que la legislación de los padres, no atribuye automáticamente la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero y alegan lo dispuesto por la Instrucción de 28 de marzo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del mismo y el Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y las Resoluciones de 10 de diciembre de 1996, 11-3ª de abril, 22-1ª de mayo y 13 y 27-1ª de diciembre de 2001 y 2-4ª de febrero, y 8-2ª de mayo de 2002 y 19-3ª de marzo de 2004 y 10-1ª de abril del 2004.

II.- La cuestión que plantea este recurso es si puede declararse con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen el nacido en España hijo de padres peruanos nacidos fuera de España.

III.- El artículo 17-1-c del Código civil establece que son españoles de origen “los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”, por lo cual resulta necesario precisar el alcance de las leyes peruanas respecto de la atribución de la nacionalidad peruana a los nacidos fuera del Perú.

IV.- El caso actual está comprendido en esta hipótesis. En efecto, el nacido no tenía, en el momento de su nacimiento la nacionalidad peruana de sus progenitores ya que es necesario el hecho de la inscripción consular que no ha producido. Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria del nacido en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad peruana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (17ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Murcia el 22 de septiembre de 2008, los ciudadanos bolivianos Don J-L. y Doña D. solicitaban la declaración de la nacionalidad

española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, A. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción de la menor; fotocopias de los NIE, pasaportes de los promotores y libro de familia.

2.- Una vez ratificados los interesados y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 19 de agosto de 2009, desestimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que resultaría de aplicación el artículo 141 de la nueva Constitución de Bolivia, según el cual “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano”.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que en el momento del nacimiento de su hija se encontraba vigente el artículo 36 de la Constitución, anterior a la modificación de 2009, y que resulta de aplicación al presente caso, no el artículo 141 de la nueva Constitución de Bolivia.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2008, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (21ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Murcia el 15 de septiembre de 2008, los ciudadanos bolivianos Don D. y Doña A-I. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, D. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Valencia sobre la nacionalidad de los padres y la no inscripción de la menor; fotocopias de los NIE y pasaportes de los promotores.

2.- Una vez ratificados los interesados y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 17 de septiembre de 2009, desestimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que resultaría de aplicación el artículo 141 de la nueva Constitución de Bolivia, según el cual "son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano".

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2008, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (62ª)

III.1.1-Declaración de nacionalidad española iure soli.

Es español iure soli el nacido en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil Exclusivo de Murcia el 22 de Septiembre de 2008 los ciudadanos bolivianos V. y J-M. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad F-V. nacido en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado de nacimiento del menor; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Madrid sobre no inscripción del menor e inscripción de los padres; certificados de empadronamiento.

2.- Una vez ratificados los padres, que aportaron fotocopias de los pasaportes, y oídos los testigos, se requirió a los promotores para que aportasen certificado de empadronamiento del menor con fecha de alta y fotocopias de los pasaportes. Aportada que fue la documentación y previo informe del Ministerio Fiscal que se mostró conforme, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 19 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar, teniendo en cuenta las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y 21 de Mayo de 2009 y el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño, que al menor le correspondía la nacionalidad boliviana tras la reforma efectuada por la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, sin que para ese pronunciamiento fuese obstáculo el hecho de estar el nacido inscrito o no en el correspondiente Consulado de Bolivia.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el menor había nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana, en un momento en que se interpretaba que los nacidos en España de padres bolivianos no adquirían la nacionalidad de estos, por lo que le correspondía adquirir la nacionalidad conforme al artículo 17.1 c) del Código Civil. Apoyaban esta argumentación en la Resolución de 20-3ª de Septiembre de 2007 y 29-2ª de Febrero de 2008. Finalmente señalaban que se producía una situación jurídica injusta en la medida en que en función del Registro Civil donde se presentase la solicitud se podían obtener soluciones dispares, ya que el Registro Civil de Murcia había tardado más de un año en resolver el expediente, mientras que en otro podría haberse resuelto antes con una solución distinta.

4.- Recibido el escrito, el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia remitió el recurso al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación del Auto recurrido en base a su fundamentación. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la

nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en ... de 2008, hijo de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que el menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (63ª)

III.1.1-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España de padre ecuatoriano y madre boliviana antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana el 20 de octubre de 2008 y de la nueva Constitución boliviana de 7 de Febrero de 2009.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al el Registro Civil Exclusivo de Murcia el 9 de Enero de 2009 el ciudadano ecuatoriano C-R. y la ciudadana boliviana A. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad C-N. nacida en M. el ... de ... de 2007. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la menor; certificados de empadronamiento de esta y de su padre; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción de la menor e inscripción de la progenitora; certificados emitidos por el Consulado de Ecuador en Murcia sobre nacionalidad ecuatoriana del progenitor y no inscripción de la menor.

2.- Una vez ratificados los padres, que sobre requerimiento aportaron el certificado de empadronamiento de la madre y los pasaportes de los dos, oídos los testigos y previo informe del Ministerio Fiscal que se declaró conforme con la tramitación, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 2 de Noviembre de 2009 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar, teniendo en cuenta las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y 21 de Mayo de 2009 y el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño, que a la menor le correspondía la nacionalidad boliviana tras la reforma efectuada por la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, sin que para ese pronunciamiento fuese obstáculo el hecho de estar la nacida inscrita o no en el correspondiente Consulado de Bolivia.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la irretroactividad de las leyes, puesto que la menor había nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana y las Circulares adoptadas por esta Dirección General, en un momento en que se interpretaba que los nacidos en España de padres bolivianos no adquirían la nacionalidad de estos. Alegaban también insuficiente motivación del auto dictado, debido a que el Encargado no especificaba porqué denegaba la declaración, incluso si había recogido en la resolución la fecha de nacimiento anterior a la aprobación de la Constitución, y por qué razón aplicaba esta norma. Continuaba arguyendo la prohibición de las resoluciones arbitrarias y el principio de igualdad, con referencia al artículo 14 de la Constitución. Argumentaba también que la vigente Constitución boliviana establece en el artículo 141 el derecho a la nacionalidad boliviana para los menores nacidos en el extranjero, que es un derecho que debe ser ejercido a través de la inscripción y puede ser rechazado o pospuesto ejerciendo únicamente el derecho que la ley de extranjería española otorga de inscribirlos como nacionales por territorio, con lo que la atribución de la nacionalidad boliviana queda a la discrecionalidad de los padres para su ejercicio, siendo que en el caso presente los promotores decidieron que obtuviera la española; en fin, decía que la menor tampoco recibió la nacionalidad ecuatoriana, ya que nació antes de la entrada en vigor de la Constitución de 20 de Octubre de 2008.

4.- Recibido el escrito, el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia remitió el recurso al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación del Auto recurrido por sus propios fundamentos. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008 y de 21 de Mayo de 2009, y las resoluciones, entre otras, 4-4ª y 13-4ª

de febrero, 13-1ª de mayo, 28-1ª y 3ª de junio y 5-2ª de diciembre de 2003; 14-4ª de enero y 5-3ª de noviembre de 2004; 30-1ª de mayo, 30-3ª de junio y 16-3ª de septiembre de 2005; 15-4ª de noviembre y 27-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 3-5ª de enero, 3-8ª de abril, 21-5ª de junio de 2007; 29-2ª de febrero, 3-2ª de septiembre y 19-3ª de diciembre de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero y 18-7ª de Mayo de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010; 15-18ª de septiembre de 2011.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en... de 2007, hija de padre ecuatoriano y madre boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- Respecto a la nacionalidad ecuatoriana, de acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la reciente publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o "transitoriamente ausentes del país por cualquier causa"; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero. El caso actual está comprendido en estas últimas hipótesis. La nacida no tenía cuando nació, el 18 de Febrero de 2007, por tanto todavía bajo la vigencia de la Constitución ecuatoriana de 1998, la nacionalidad ecuatoriana de su padre porque este no estaba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional y porque su estancia fuera de Ecuador no puede calificarse de transitoria, a la vista de que su domicilio en España está acreditado por lo que se desprende del padrón municipal (donde consta que se encontraba en España desde al menos el año 2002).

IV.- En lo tocante a la madre, de acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana no adquirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior.

V.- Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria de la nacida en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que la interesada pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad ecuatoriana o boliviana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

VI.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (67ª)

III.1.1-Declaración de nacionalidad española *iure soli*.

No es española iure soli la nacida en España hija de madre uruguaya nacida en Uruguay.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Liria (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido en el Registro Civil de Liria el 21 de abril de 2010, la ciudadana uruguaya Doña S-V. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad D-F. nacida en V. el ... de ... de 2008. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados del Consulado General de Uruguay en Valencia acerca de la normativa sobre nacionalidad y sobre la inscripción consular de la promotora; fotocopias del pasaporte y documento de identidad de la madre.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Liria dictó auto el 13 de julio de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que la Ley Uruguaya 16.021, de 13 de abril de 1989 dice en su artículo 1º que “tienen la calidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República” y en el 2º que “tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior”. De tal modo que, en el presente supuesto, el Encargado deduce que la menor nacida en España, hija de madre uruguaya nacida en Uruguay, es de nacionalidad uruguaya, no concurriendo la situación de apatridia que fundamentaría la atribución de la nacionalidad española *iure soli*.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del recurso y el Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y la resolución, 13-32ª de septiembre de 2013.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2008, hija de madre uruguaya nacida en Uruguay. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- En relación con la legislación uruguaya, según el más reciente conocimiento que este Centro Directivo ha tenido del Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de

nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 13.021, de 13 de abril de 1989). Igualmente son ciudadanos naturales de la República Oriental de Uruguay los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico (vid. Artículo 74 de la Constitución uruguaya). Por lo que, al ser la madre de la menor uruguaya nacida en Uruguay le correspondería a la misma *iure sanguinis* la nacionalidad uruguaya de la madre, según el artículo 2 de la Ley 13.021 antes señalada.

IV.- Consiguientemente, no se da, pues, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española conforme al citado artículo 17.1.c) del Código civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no tenga otra nacionalidad *iure sanguinis*, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Liria (Valencia).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (70ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de madre boliviana nacida en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Ciutadella de Menorca (Islas Baleares).

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Ciutadella de Menorca, la ciudadana boliviana Doña A. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, B-G. nacida en V. (A) el 3 de febrero de 2006. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor; certificado de empadronamiento; certificados emitidos por el Consulado de Bolivia en Barcelona, sobre la no inscripción de la menor y la inscripción consular de la promotora; fotocopia del pasaporte de la madre.

2.- Una vez ratificada la promotora en su solicitud y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Ciutadella de Menorca dictó auto el 31 de mayo de 2010 desestimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, por considerar que en el supuesto de referencia no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) del Código civil.

3.- Notificada la resolución a la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que la entrada en vigor de la nueva Constitución de Bolivia se produjo con posterioridad al nacimiento de su hija y que, por tanto, no resultaría de aplicación.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2006, hija de madre boliviana. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la reciente Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, para los menores nacidos con posterioridad a la modificación señalada, no concurriría ya la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ciutadella de Menorca (Islas Baleares).

Resolución de 13 de Enero de 2014 (1ª)

III.1.1-Declaración de nacionalidad española iure soli.

Es española iure soli la nacida en España antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito dirigido al Registro Civil Exclusivo de Murcia y recibido el 22 de Septiembre de 2008 los ciudadanos bolivianos Y. y R-A. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad A-Y. nacida en M. el ... de ... de 2008. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la menor; certificados de empadronamiento; certificados emitido por el Consulado de Bolivia en Murcia sobre no inscripción de la menor e inscripción de los progenitores; fotocopias de sus pasaportes.

2.- Una vez ratificados los padres, oídos los testigos y previo informe del Ministerio Fiscal que se mostró conforme, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 19 de Agosto de 2009 denegando la solicitud de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar, teniendo en cuenta las Circulares de 16 de Diciembre de 2008 y 21 de Mayo de 2009 y el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño, que a la menor le correspondía la nacionalidad boliviana tras la reforma efectuada por la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, sin que para ese pronunciamiento fuese obstáculo el hecho de estar la nacida inscrita o no en el correspondiente Consulado de Bolivia.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la irretroactividad de las leyes, puesto que la menor había nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución boliviana y las Circulares adoptadas por esta Dirección General, en un momento en que se interpretaba que los nacidos en España de padres bolivianos no adquirirían la nacionalidad de estos. Alegaban también insuficiente motivación del auto dictado, debido a que el Encargado no especificaba porqué denegaba la declaración, incluso si había recogido en la resolución la fecha de nacimiento anterior a la aprobación de la Constitución, y por qué razón aplicaba esta norma. Continuaba arguyendo la prohibición de las resoluciones arbitrarias y el principio de igualdad, con referencia al artículo 14 de la Constitución y argumentaba, en fin, que la vigente Constitución boliviana establece en el artículo 141 el derecho a la nacionalidad boliviana para los menores nacidos en el extranjero, que es un derecho que debe ser ejercido a través de la inscripción y puede ser rechazado o pospuesto ejerciendo únicamente el derecho que la ley de extranjería española otorga de inscribirlos como nacionales por territorio, con lo que la atribución de la nacionalidad boliviana queda a la discrecionalidad de los padres para su ejercicio, que en el caso presente decidieron que obtuviera la española.

4.- Recibido el escrito, el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia remitió el recurso al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación del Auto recurrido al entender que el mismo era plenamente ajustado a Derecho. Seguidamente, el Juez Encargado remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 21 de Mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en... de 2008, hija de padres bolivianos. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III.- De acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009, no adquirirían automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Se daba pues una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No ha de importar que la menor pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV.- Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

V.- Hay que advertir, no obstante, que la nueva regulación contenida en la Constitución boliviana afecta necesariamente al criterio acuñado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, toda vez que la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano. De este modo, no concurre la situación de apatridia que fundamentó, hasta la mencionada reforma, la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a los hijos de bolivianos nacidos en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso.

2º.- Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 R.R.C).

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (4ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen iure soli.

No es española la nacida en Barcelona en 1976 hija de padres colombianos nacidos en Colombia, que adquirió la nacionalidad colombiana, independientemente de la adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre en el año 2007.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá.

HECHOS

1.- Por medio de escrito remitido al Registro Civil Consular de Bogotá el 18 de noviembre de 2008, Doña I. nacida en B. el 21 de octubre de 1976, solicitaba que se declarara con valor de simple presunción que ostentaba la nacionalidad española, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Aportaba la siguiente documentación: registro de nacimiento de la interesada, inscrito en el Registro Civil de Colombia el 6 de noviembre de 1980; certificación literal de nacimiento, en la que consta que ambos padres ostentaban en el momento del nacimiento la nacionalidad colombiana y habían nacido en Colombia; certificado de residencia de la promotora en Colombia; fotocopias del pasaporte español y DNI del padre, Don R-A. que adquirió la nacionalidad española por residencia el 24 de julio de 2007.

2.- Una vez ratificada la interesada, previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, con fecha 10 de febrero de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dicta acuerdo mediante el cual deniega la solicitud de la interesada, por considerar que el precepto invocado no se encontraba todavía vigente en el momento del nacimiento de la promotora.

3.- Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de simple presunción y alegando que su padre es ciudadano español en la actualidad.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, el Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 del Código civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 17. 1-3º del Código civil en su redacción de la Ley de 13 de Julio de 1982, 17. 1 c) y 18 del Código civil en su redacción actual; 46, 64 y 96 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229, 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 24 de Enero y 3-4ª de Marzo de 2009.

II.- Se discute en el presente recurso si le corresponde o no la nacionalidad española a una mujer nacida M. en 1976, hija de padres colombianos nacidos en Colombia. Seguido expediente registral para la declaración de dicha nacionalidad con valor de simple presunción ante el Registro Civil Consular de su domicilio en Bogotá, el mismo concluyó con auto denegatorio, por no corresponderle la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 17.1.c) del Código Civil, por no encontrarse todavía vigente en el momento del nacimiento de la promotora. Dicho acuerdo es el objeto del presente recurso.

III.- A diferencia de lo que ocurre en los Registros Consulares y en el Central, en los que puede constar la advertencia de que la inscripción de nacimiento no acredita la nacionalidad española del titular (cfr. art. 66 "fine" R.R.C.), en los Registros municipales situados en España, donde deben ser inscritos todos los nacimientos en ella acaecidos (cfr. art. 15 L.R.C), no es tarea fácil, sin una adecuada investigación, saber con certeza si al nacido le corresponde o no la nacionalidad española de origen. Piénsese que, aparte de los casos en que haya sobrevenido pérdida de la nacionalidad española y la misma haya sido inscrita, el Encargado no puede tener la seguridad, por el solo examen de la inscripción de nacimiento, que al nacido le haya correspondido *ex lege* la nacionalidad española, dados los múltiples factores que han de ser analizados (*iure sanguinis* la nacionalidad española del progenitor consta por simple declaración no contrastada; *iure soli* habría que probar que uno de los progenitores ha nacido en España, que la legislación de los progenitores extranjeros no atribuye al hijo su nacionalidad o que, respecto del inscrito sin filiación, no está determinada y atribuida la nacionalidad de los progenitores, etc.), aparte de que en ocasiones habrá que tener en cuenta las normas sobre nacionalidad española anteriores a las hoy vigentes.

IV.- En el momento del nacimiento de la promotora, el nacimiento en España no era por sí solo causa de atribución de la nacionalidad española, sino que requería el previo ejercicio del derecho de opción concedido para tales supuestos, siendo así que no consta que sus padres, durante la menor edad de la hija y antes de la reforma que tuvo lugar en materia de nacionalidad en 1982 y que hizo desaparecer ésta posibilidad, ejercieran el derecho que tenía a optar a la nacionalidad española (cfr. art. 18 CC., redacción de 1954), sino que más bien optaron por la nacionalidad colombiana, ya que consta su nacimiento en el Registro Civil de ese país en 1980.

V.- Por lo demás, es cierto que la atribución de la nacionalidad colombiana respecto de los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no se produce automáticamente, sino que es necesario que se domicilien en territorio colombiano o se registren en una oficina consular de la República, ambos requisitos se cumplieron en el presente caso, ya que, según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la interesada se encuentra domiciliada en Colombia y, como se ha dicho, se inscribió su nacimiento en el Registro Civil colombiano. Por lo tanto, no resultaría de aplicación el artículo 17 del Código civil que, a partir de la Ley de 13 de julio de 1982, considera españoles de origen *iure soli* a los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

En efecto, la indicada forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española no aparece en nuestro Derecho hasta la citada reforma del Código civil de 1982 y si puede entenderse, de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo, que la nueva norma tiene eficacia retroactiva respecto de nacimientos acaecidos en España antes de su entrada en vigor - recuérdese que en este caso el nacimiento se produjo en 1976 -, es claro, atendiendo a la finalidad de la norma que es la de evitar situaciones de apatridia, que la repetida atribución de la nacionalidad española pudo beneficiar en su caso a los nacidos en España que, cuando entró en vigor la Ley de 1982, carecían de nacionalidad, mientras que es a todas luces excesivo forzar esa eficacia retroactiva en casos como el actual en los que, en el momento de entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, la nacida en España ya tenía *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, en este caso la colombiana.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández".

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (6ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen iure soli.

No es español iure soli el nacido en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Catarroja (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Benetusser (Valencia) el 25 de septiembre de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don A-J. y Doña R. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, J. nacido en B. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados de empadronamiento; certificados del Consulado General de Bolivia en Madrid sobre la legislación de nacionalidad, no inscripción del menor e inscripción consular de los promotores; y fotocopia de los pasaportes de los promotores.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Catarroja dictó auto el 24 de enero de 2011 estimando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, por considerar que resulta de aplicación al presente caso el artículo 17.1.c) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, a la vista de que la reforma de la Constitución de Bolivia entró en vigor el 7 de febrero de 2009 y que establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” y que, conforme a la Circular de 21 de mayo de 2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, no se dan los requisitos para su adquisición por el menor, ya que en el momento del nacimiento se encontraba vigente la norma referida.

4.- Una vez notificado el recurso a los promotores, el Encargado del Registro Civil dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de

la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido en España ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Catarroja (Valencia).

Resolución de 27 de Enero de 2014 (9ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen iure soli.

No es española iure soli la nacida en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Murcia el 24 de junio de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don W. y Doña P. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, D. nacida en M. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la menor interesada; certificados del Consulado de Bolivia en Murcia sobre la legislación de nacionalidad, no inscripción de la menor e inscripción consular de los promotores; certificado de empadronamiento; fotocopias del libro de familia, pasaportes y NIE de los progenitores.

2.- Una vez ratificados los promotores en su solicitud, previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó auto el 5 de abril de 2010 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable a la hija de los solicitantes, por nacer esta en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del auto emitido.

4.- El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacido en España el...de... de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que la nacida en España ostenta la nacionalidad española.

IV.- Finalmente, en cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que los interesados hayan podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000).

En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de los recurrentes y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la procedencia de la denegación, de modo que los recurrentes han podido alegar cuanto ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (43ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen iure soli.

No es español iure soli el nacido en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana en 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia, por corresponderle la nacionalidad boliviana de estos.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante solicitud dirigida al Registro Civil de Murcia el 26 de mayo de 2009, los ciudadanos bolivianos, Don F. y Doña A-Mª. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, J-F. nacido en M. el ... de ... de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados del Consulado de Bolivia en Murcia sobre la legislación boliviana relativa a la nacionalidad, la no inscripción del menor en los libros de nacimiento de esa Oficina Consular y sobre inscripción consular de los padres; fotocopias de los pasaportes de los promotores y del libro de familia.

2.- Una vez ratificados los interesados en su solicitud el 26 de febrero de 2010 y previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Murcia dictó

auto de fecha 27 de mayo de 2010, por el que deniega la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre boliviano, por lo que no ha lugar a lo solicitado, habida cuenta que la reforma es plenamente aplicable al hijo de los solicitantes por nacer éste en fecha posterior a la entrada en vigor de la misma.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo emitido y dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido en España ostente la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (80ª)

III.1.1-Adquisición nacionalidad de origen iure soli.

No es española la nacida en Madrid en 1979 hija de padres colombianos nacidos en Colombia, que adquirió la nacionalidad colombiana.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá.

HECHOS

1.- Por medio de escrito remitido al Registro Civil Consular de Bogotá el 4 de agosto de 2010, Doña M^a-I. nacida en M. el 15 de septiembre de 1979, solicitaba que se declarara con valor de simple presunción que ostentaba la nacionalidad española, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Aportaba la siguiente documentación: certificado emitido por el Consulado General de Colombia sobre la legislación relativa a la nacionalidad; registro de nacimiento de la interesada, inscrito en el Registro Civil de Colombia el 30 de abril de 1981, realizado en virtud de acta consular debidamente autenticada; certificación literal de nacimiento, en la que consta que ambos padres ostentaban en el momento del nacimiento la nacionalidad colombiana y habían nacido en Colombia; acta notarial en la que se identifica a la interesada por medio de cédula de ciudadanía colombiana; fotocopia de los documentos de identidad de sus padres.

2.- Una vez ratificada la interesada, previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, con fecha 14 de septiembre de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dicta acuerdo mediante el cual deniega la solicitud de la interesada, por considerar que el precepto invocado no se encontraba todavía vigente en el momento del nacimiento de la promotora.

3.- Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de simple presunción.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, el Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 del Código civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 17. 1-3º del Código civil en su redacción de la Ley de 13 de Julio de 1982, 17. 1 c) y 18 del Código civil en su redacción actual; 46, 64 y 96 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229, 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 24 de Enero y 3-4ª de Marzo de 2009.

II.- Se discute en el presente recurso si le corresponde o no la nacionalidad española a una mujer nacida M. en 1979, hija de padres colombianos nacidos en Colombia. Seguido expediente registral para la declaración de dicha nacionalidad con valor de simple presunción ante el Registro Civil Consular de su domicilio en Bogotá, el mismo concluyó con auto denegatorio, por no corresponderle la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 17.1.c) del Código Civil, por no encontrarse todavía vigente en el momento del nacimiento de la promotora. Dicho acuerdo es el objeto del presente recurso.

III.- A diferencia de lo que ocurre en los Registros Consulares y en el Central, en los que puede constar la advertencia de que la inscripción de nacimiento no acredita la nacionalidad española del titular (cfr. art. 66 "fine" R.R.C.), en los Registros municipales situados en España, donde deben ser inscritos todos los nacimientos en ella acaecidos (cfr. art. 15 L.R.C), no es tarea fácil, sin una adecuada investigación, saber con certeza si al nacido le corresponde o no la nacionalidad española de origen. Piénsese que, aparte de los casos en que haya sobrevenido pérdida de la nacionalidad española y la misma haya sido inscrita, el Encargado no puede tener la seguridad, por el solo examen de la inscripción de nacimiento, que al nacido le haya correspondido *ex lege* la nacionalidad española, dados los múltiples factores que han de ser analizados (*iure sanguinis* la nacionalidad española del progenitor consta por simple declaración no contrastada; *iure soli* habría que probar que uno de los progenitores ha nacido en España, que la legislación de los progenitores extranjeros no atribuye al hijo su nacionalidad o que, respecto del inscrito sin filiación, no está determinada y atribuida la nacionalidad de los progenitores, etc.), aparte de que en ocasiones habrá que tener en cuenta las normas sobre nacionalidad española anteriores a las hoy vigentes.

IV.- En el momento del nacimiento de la promotora, el nacimiento en España no era por sí solo causa de atribución de la nacionalidad española, sino que requería el previo ejercicio del derecho de opción concedido para tales supuestos, siendo así que no consta que sus padres, durante la menor edad de la hija y antes de la reforma que tuvo lugar en materia de nacionalidad en 1982 y que hizo desaparecer ésta posibilidad, ejercieran el derecho que tenía a optar a la nacionalidad española (cfr. art. 18 CC., redacción de 1954), sino que más bien optaron por la nacionalidad colombiana, ya que consta su nacimiento en el Registro Civil de ese país en 1981.

V.- Por lo demás, es cierto que la atribución de la nacionalidad colombiana respecto de los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no se produce automáticamente, sino que es necesario que se domicilien en territorio colombiano o se registren en una oficina consular de la República, ambos requisitos se cumplieron en el presente caso, ya que, según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la interesada se encuentra domiciliada en Colombia y, como se ha dicho, se inscribió su nacimiento en el Registro Civil colombiano. Por lo tanto, no resultaría de aplicación el artículo 17 del Código civil que, a partir de la Ley de 13 de julio de 1982, considera españoles de origen *iure soli* a los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

En efecto, la indicada forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española no aparece en nuestro Derecho hasta la citada reforma del Código civil de 1982 y si puede entenderse, de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo, que la nueva norma tiene eficacia retroactiva respecto de nacimientos acaecidos en España antes de su entrada en vigor -recuérdese que en este caso el nacimiento se produjo en 1979 -, es claro, atendiendo a la finalidad de la norma que es la de evitar situaciones de apatridia, que la repetida atribución de la nacionalidad española pudo beneficiar en su caso a los nacidos en España que, cuando entró en vigor la Ley de 1982, carecían de nacionalidad, mientras que es a todas luces excesivo forzar esa eficacia retroactiva en casos como el actual en los que, en el momento de entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, la nacida en España ya tenía *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, en este caso la colombiana.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (7ª)

III.1.1- Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

No es español iure soli el nacido en España después de la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana en 2008, hijo de madre ecuatoriana nacida en Ecuador, por corresponderle la nacionalidad ecuatoriana de esta.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora del expediente contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Cornellá de Llobregat (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Cornellá de Llobregat el 6 de mayo de 2011, la ciudadana ecuatoriana, Doña R., solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad, B., nacido en E. el 2 de febrero de 2009. Adjuntaban la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificados del Consulado de Ecuador en Barcelona sobre la no inscripción del menor en los libros de nacimiento de esa Oficina Consular; fotocopias del NIE de la promotora y del libro de familia.

2.- Una vez ratificada la interesada en su solicitud el mismo día y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Cornellá del Lobregat dictó auto de fecha 26 de julio de 2011, por el que deniega la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que conforme a la Nueva Constitución de Ecuador, vigente en el momento del nacimiento del menor, el menor ostenta la nacionalidad ecuatoriana de la madre.

3.- Notificada la resolución a la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- El Ministerio Fiscal, emite informe por el que interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo emitido y dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 16 de diciembre de 2008; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el 2 de febrero de 2009, hijo de madre ecuatoriana nacida en Ecuador. La petición se basa en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1c del Código civil).

III.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 16 de diciembre de 2008, la reciente entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana (publicada en el Diario Oficial de 20 de octubre de 2008), amplía la atribución de la nacionalidad ecuatoriana a las personas nacidas fuera de Ecuador, ya que conforme al nuevo artículo 7 nº2 del texto constitucional son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento “las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en Ecuador, y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad”. Por lo que ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de ecuatorianos nacidos en España.

En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad ecuatoriana, la cual solo podía adquirirse por un acto posterior, salvo que concurriesen los supuestos de excepción previstos en la propia norma (que el padre o madre estuviese al servicio del Ecuador o de un Organismo internacional o transitoriamente ausente de Ecuador por cualquier causa, o que expresamente manifestase la voluntad de que el hijo o hija no adquiriera la nacionalidad ecuatoriana). Fuera de estas situaciones de excepción, se daba, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se imponía. No obstante, ahora sólo serán españoles *iure soli* los hijos de ecuatorianos nacidos en España cuando ni el padre ni la madre hubieren nacidos en el Ecuador, ya que concurriendo esta última condición tales hijos son ecuatorianos y no apátridas.

Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido en España ostente la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Cornellá de Llobregat (Barcelona)

III.1.2.- Adquisición nacionalidad de origen iure sanguinis

Resolución de 3 de enero de 2014 (95ª)

III.1.2.- Declaración de nacionalidad española de origen.

No es posible porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo del nacimiento de la promotora.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2010, Doña Mª-D. nacida en Colombia el 24 de julio de 1993, solicita la nacionalidad española, alegando haber nacido de padre español. Adjunta como documentación: certificado local de nacimiento de la interesada, registrado en el año 2005 y en el que aparecen sus progenitores con nacionalidad colombiana; certificación

literal de nacimiento del padre, Don C-A. en la que consta su nacimiento en España en el año 1954, de padres colombianos nacidos en Colombia; escritura pública de reconocimiento paterno de fecha 4 de febrero de 2005; y fotocopia de pasaporte español del Sr. V.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá, mediante Auto de fecha 26 de octubre de 2010 deniega la inscripción de nacimiento de la interesada ya que no se ha acreditado que su padre haya adquirido la nacionalidad española.

3.- Notificado el Ministerio Fiscal y la interesada, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de nacimiento y nacionalidad española para su hija, alegando que tiene pasaporte español.

4.- De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en la decisión adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17 del Código civil (CC.) en la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954; 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006; 5-2ª de marzo de 2007, 21-5ª de mayo, 28-3ª de septiembre de 2007; 5-2ª de Febrero 6-5ª de junio y 7-6ª de noviembre de 2008, 27-4ª de Marzo 2009.

II.- La interesada, por escrito de 23 de septiembre de 2010 presentado en el Registro Civil Consular de Bogotá, solicitó la declaración de la nacionalidad española, al haber nacido de padre español de origen. El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto de 26 de octubre de 2010 denegando la petición, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La posibilidad de que a la interesada le sea reconocida la nacionalidad española de origen que solicita, está en función de que resulte acreditado que, al tiempo de su nacimiento, el padre era español y le transmitió esta nacionalidad. A este respecto, hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en los Registros Consulares y en el Central, en los que puede constar la advertencia de que la inscripción de nacimiento no acredita la nacionalidad española del titular (cfr. art. 66 "fine" R.R.C.), en los Registros municipales situados en España, donde deben ser inscritos todos los nacimientos en ella acaecidos (cfr. art. 15 L.R.C), no es tarea fácil, sin una adecuada investigación, saber con certeza si al nacido le corresponde o no la nacionalidad española de origen. Piénsese que, aparte de los casos en que haya sobrevenido pérdida de la nacionalidad española y la misma haya sido inscrita, el Encargado no puede tener la seguridad, por el solo examen de la inscripción de nacimiento, que al nacido le haya correspondido *ex lege* la nacionalidad española, dados los múltiples factores que han de ser analizados (*iure sanguinis* la nacionalidad española del progenitor consta por simple declaración no contrastada; *iure soli* habría que probar que uno de los progenitores ha nacido en España, que la legislación de los progenitores extranjeros no atribuye al hijo su nacionalidad o que, respecto del inscrito sin filiación, no está determinada y atribuida la nacionalidad de los progenitores, etc.), aparte de que en ocasiones habrá que tener en cuenta las normas sobre nacionalidad española anteriores a las hoy vigentes.

IV.- En este sentido y de acuerdo con los datos que constan en la certificación de nacimiento del Sr. V. el padre de la interesada nació en España el 29 de agosto de 1954, hijo de padres colombianos nacidos en Colombia. Por lo que, de acuerdo con el artículo 17 del Código

Civil, según la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, vigente en el momento del nacimiento, al mismo no le correspondería la nacionalidad española, ya que el apartado 3 del mencionado artículo disponía que eran españoles “los nacidos en España de padres extranjeros, si éstos hubieren nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento”, no siendo el caso del promotor, ya que sus padres no nacieron en España sino en Colombia.

V.- En cuanto a la alegación relativa a la tenencia de pasaporte por parte del Sr. V. hay que recordar que el hecho de estar incluido en el Registro de Matrícula o de estar en posesión de pasaporte y de Documento Nacional de Identidad son errores de la Administración que podrán surtir otros efectos, pero no bastan para probar legalmente la nacionalidad española. Es cierto que el DNI sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del titular (cfr. art. 1 nº 2 del R.D. 1553/2005, de 23 de diciembre), pero, como viene reiterando este Centro Directivo a partir de la Resolución de 18 de mayo de 1990 (vid. v.gr. Resolución de 6-1ª de noviembre de 2002), esa presunción no es absoluta pues su ámbito se ciñe exclusivamente al de los expedientes administrativos e, incluso en éstos, puede ser desvirtuada por otros documentos o datos que consten en el mismo expediente (cfr. art. 2 L.R.C. e Instrucción D.G.R.N. de 7 de febrero de 2007 sobre los requisitos registrales para expedir la certificación literal de la inscripción de nacimiento para la obtención del D.N.I.) y, en cualquier caso, no rige en el ámbito del Registro Civil por afectar a materias de Derecho Privado en cuya tramitación se aplican supletoriamente las leyes procesales (cfr. arts. 16 y 349 R.R.C.).

VI.- En consecuencia, al no poderse dar por acreditada la nacionalidad española del padre en el momento del nacimiento de la interesada, no procede la declaración de nacionalidad española de origen pretendida, en virtud del artículo 17 del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (11ª)

III.1.2-Declaración sobre nacionalidad española.

No nació español el nacido en Puerto Rico en 1974 hijo de padre norteamericano.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito recibido por el Registro Civil de Santiago de Compostela el 25 de noviembre de 2008, Don J-M. nacido el 15 de abril de 1974 en Puerto Rico, solicitaba la declaración de la nacionalidad española sobre la base de que su madre había nacido en España y era española de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por

opción el 13 de junio de 1994; certificado de empadronamiento y fotocopia del DNI del promotor.

2.- Con informe favorable en Encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 28 de diciembre de 2010 denegando la solicitud de la declaración de la nacionalidad española de origen, ya que la norma del artículo 17 del Código Civil es aplicable a los hijos de madre española nacidos a partir del 29 de diciembre de 1978, de conformidad con la doctrina sentada por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Por tanto, se considera que el interesado siguió la nacionalidad norteamericana del padre.

3.- Notificada la resolución, la solicitante interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando nuevamente la nacionalidad española de origen.

4.- Una vez trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso presentado y el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 18 y 20 del Código civil (CC.), en su redacción originaria, 22 y 23 en la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 226 a 229, 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 3-4^a y 5^a de febrero, 1-1^a de marzo, 19-2^a de abril, 3-4^a y 23-1^a y 2^a de junio de 2003, 4-2^a de julio de 2003, 22-1^a de julio de 2004 y 19-5^a de junio de 2006; 14-2^a de Marzo de 2007; 7-1^a de Mayo, 10-6^a de Septiembre y 21-4^a de Octubre de 2008.

II.- Se pretende por el interesado que se declare que ostenta la nacionalidad española de origen, se basa para ello en que su madre nació en España y le habría transmitido la nacionalidad española. El Encargado del Registro Civil Central denegó dicha solicitud por auto de 28 de diciembre de 2010. Este acuerdo denegatorio es el que constituye el objeto del recurso.

III.- En el presente caso, según la certificación literal de nacimiento del promotor que obra en el expediente, consta que el mismo nació en Puerto Rico en 1974 de padre norteamericano y madre española, por lo que resultaría de aplicación el artículo 17 del Código Civil, según la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, vigente en el momento del nacimiento del interesado, que establece en su apartado 2^o que son españoles: “los hijos de madre española, aunque el padre sea extranjero, cuando no sigan la nacionalidad del padre”, quedando pues patente la regla general de transmisión de la nacionalidad española únicamente a través del padre, que en este caso ostentaba la nacionalidad norteamericana. Por tanto, puede afirmarse que el promotor no adquirió al nacer la nacionalidad española porque, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, adquirió *iure sanguinis* la nacionalidad norteamericana del padre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

III.1.3.- Adquisición nacionalidad de origen por Ley 52/2007 de memoria historica

III.1.3.1.- Adquisición nacionalidad española de origen- anexo I Ley 52/2007

Resolución de 10 de Enero de 2014 (36ª)

III.1.3.1-Adquisición de la nacionalidad española de origen. Anexo I - Ley 52/2007.

No es posible la inscripción, previa opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, porque no resulta acreditado que la interesada sea hija de padre español de origen, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 28 de agosto de 2009, Doña N. mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba su inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por ser hija de español de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: modelo de solicitud correspondiente al anexo I de la Ley; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; carné de identidad cubano; certificación literal de nacimiento de la interesada, nacida en Cuba el 12 de junio de 1975 e hija de A-A. y de E-C. inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de A-A. nacido en Cuba el 19 de octubre de 1938, con marginal de recuperación de la nacionalidad española el 31 de octubre de 2001; certificación literal de nacimiento de E-C. con marginales de matrimonio el 29 de junio de 1953, divorcio el 21 de febrero de 1961 y nuevo matrimonio formalizado el 4 de noviembre de 1964 con J de los Á. certificado cubano de soltería de A-A. expedido el 27 de abril de 2009 y diligencia de autenticación según modelo del anexo IV de la Ley 52/2007.

2.- El encargado del registro civil consular dictó auto el 11 de agosto de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación española de la interesada.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que la promotora es hija de un ciudadano español de origen y aportando una declaración de este en la que reconoce a la promotora como hija suya, fruto de su relación no matrimonial con la Sra. E-C. ya fallecida.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el

artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, los artículos 20, 113 y 116 del Código civil (CC.); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de la DGRN de 4 de noviembre de 2008 y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española de una ciudadana cubana que alega ser hija de un español de origen nacido en Cuba. La petición se basa en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, siempre que formalicen su declaración en el plazo establecido por la propia disposición. El encargado del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- La inscripción de nacimiento de la promotora en el Registro Civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada, como se ha dicho, en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, si la madre está casada en el momento del nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC.), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, según se desprende de la documentación aportada, cuando se produjo el nacimiento de la interesada, su madre continuaba casada con un ciudadano cubano distinto de quien aparece como padre en la certificación de nacimiento aportada, por lo que, no habiéndose acreditado la existencia de divorcio o separación previa y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado que la recurrente sea hija de un español de origen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (72ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

- 1.- Doña C-M^a. presenta escrito en el Consulado de España en Boston para La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación certificado local, literal, de nacimiento propio y de su madre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, con fecha 29 de noviembre de 2011 notifica a la interesada la denegación de lo solicitado en base a lo establecido en el apartado I de la Disposición 7^a de la Ley 52/2007.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, aportando nueva documentación
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4^a), 23 de marzo de 2010 (5^a), 23 de marzo 2010 (6^a), 24 de marzo de 2010 (5^a), 28 de abril de 2010 (5^a), 6 de octubre de 2010 (10^a), 15 de noviembre de 2010 (5^a), 1 de diciembre de 2010 (4^a), 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011 (3^a), 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011 (4^a), 10 de febrero 2012 (42^a), 17 de febrero 2012 (30^a), 22 de febrero 2012 (53^a), 6 de julio 2012 (5^o), 6 de julio 2012 (16^a), 14 de septiembre de 2012 (32^a) y 30 de enero 2013 (28^a).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba el 4 de noviembre de 1956, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de junio de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se notificó lo acordado, el 29 de noviembre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, al haber aportado documentación apócrifa, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de

originaria. Examinado este recurso a la luz de la nueva documentación incorporada al mismo, se observa que, a fin de facilitar la acreditación del citado requisito –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y, aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil competente para ello, que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre ha quedado acreditada por la aportación de la documentación relativa a su padre. De dicha certificación, resulta que el abuelo materno nació en España de padres españoles y se naturalizó cubano con fecha 19 de abril de 1948, con posterioridad al nacimiento de su hija el 10 de junio de 1929, por lo que cabe afirmar que la madre de la recurrente nació española de origen, perdiendo su nacionalidad española por matrimonio, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1953. Circunstancia que impidió la transmisión de la ciudadanía española a la recurrente, nacida en 1956, al seguir esta la nacionalidad del padre en base al principio de unidad familiar.

V.- Así pues, en el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados en vía de recurso y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución del mismo – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que la progenitora de la optante ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo que se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto por Doña C-Mª. y revoca el auto apelado por ser la solicitud conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ordenando su inscripción como española en el Registro Civil correspondiente.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (74ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio, así como los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia)

HECHOS

- 1.- Doña S-M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado, en el que no debate que este sea conforme a derecho, sino que aporta una nueva solicitud de nacionalidad conforme a lo previsto en el apartado 1 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007, es decir como hija de madre originariamente española.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.
- II.- A la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería confirmar la resolución recurrida. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante presenta nueva solicitud, alegando error en la elección del formulario presentado en su día, y alega la condición de española de su madre, procede por economía procedimental y, no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dicha cuestión.
- III.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Colombia el 16 de mayo de 1948, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
- IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de

procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña S-M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (75ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio, así como los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia)

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado, en el que no debate que este sea conforme a derecho, sino que aporta una nueva solicitud de nacionalidad conforme a lo previsto en el apartado 1 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007, es decir como hija de madre originariamente española.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- A la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería confirmar la resolución recurrida. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante presenta nueva solicitud, alegando error en la elección del formulario presentado en su día, y alega la condición de española de su madre, procede por economía procedimental y, no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dicha cuestión.

III.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Colombia el 3 de abril de 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la "certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante" debiendo "proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o Municipal". Exigencia que se conecta con la consideración

del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (76ª)

III.1.3.1.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador)

HECHOS

1.- Doña B-A. presenta escrito en el Consulado de España en Guayaquil a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 30 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Ecuador el 29 de marzo de 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 30 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se

encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.).

Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la nacionalidad española del abuelo de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña B-A. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (133ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

- 1.- Don J-M. presenta escrito en el Registro Civil de Castellón para el Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2012 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en México el 8 de mayo de 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 30 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en México el 4 de junio de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad. El hecho de que el padre del interesado presentara solicitud de nacionalidad de origen en base a lo previsto en la Ley 52/2007, sin que recayera resolución al respecto, por haber acaecido su fallecimiento, no acredita la nacionalidad española de origen del mismo en este recurso.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008

al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 5 de diciembre de 2012, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,

es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.º1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

VII.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otras personas que, la recurrente, considera que reúnen sus mismos méritos para haber obtenido la nacionalidad española, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia de los mismos, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor de la interesada en atención a las circunstancias de hecho que en ella concurren y a los preceptos jurídicos por ella invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-M. y confirma la resolución apelada, dictada conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (134ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.º1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

- 1.- Doña P. presenta escrito en el Registro Civil de Castellón para el Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2012 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como española de origen a la nacida en México el 28 de abril de 1987, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 30 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en México el 4 de junio de 2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad. El hecho de que el padre de la interesada presentara solicitud de nacionalidad de origen en base a lo previsto en la Ley 52/2007, sin que recayera resolución al respecto, por haber acaecido su fallecimiento, no acredita la nacionalidad española de origen del mismo en este recurso.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 5 de diciembre de 2012, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal en su informe.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.º2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.º3 de la Constitución española y 24 del Código civil. Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.º2 y 19.º2 del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.º1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

VII.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otras personas que, la recurrente, considera que reúnen sus mismos méritos para haber obtenido la nacionalidad española, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia de los mismos, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor de la interesada en atención a las circunstancias de hecho que en ella concurren y a los preceptos jurídicos por ella invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña P. y confirma la resolución apelada, dictada conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 13 de Enero de 2014 (6ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española..

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Don J-R. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 18 de octubre de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, se ha acreditado en el expediente que tiene la condición de española de origen por haberla adquirido, posteriormente, en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 16 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de septiembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 18 de octubre de 2011, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por

el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008. Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de junio de 2009 inscrita con fecha 29 de septiembre de 2009, el ahora optante, nacido el 1 de abril de 1964, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario

para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales,

comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) ha de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone

que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial

recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.).

Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J-R. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 13 de Enero de 2014 (7ª)

III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don V-S. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 18 de octubre de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso el padre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, se ha acreditado en el expediente que tiene la condición de español de origen por haberla adquirido, posteriormente, en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 15 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de septiembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 18 de octubre de 2011, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen por no haber acreditado suficientemente los hechos a los que se refiere en su solicitud posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de

este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de junio de 2009 inscrita con fecha 29 de septiembre de 2009, el ahora optante, nacido el 1 de abril de 1964, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.

V.- El apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución

del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria 3ª. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y

1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la

Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código civil).

XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta

Dirección General. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II R.R.C.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don V-S. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (3ª)

III.1.3.1-Adquisición de la nacionalidad española de origen. Anexo I - Ley 52/2007.

No es posible la inscripción, previa opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, porque no resulta acreditado que la interesada sea hija de padre español de origen, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 28 de agosto de 2009, Doña W-L. mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba su inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por ser hija de español de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: modelo de solicitud correspondiente al

anexo I de la Ley; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; carné de identidad cubano; certificación literal de nacimiento de la interesada, nacida en Cuba el 17 de enero de 1957 e hija de O-F. y de C. certificación de nacimiento el 5 de diciembre de 1917 de O-F. hijo de T. y de R. inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Ortigueira (A C) de T. certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano donde se declara la expedición de carta de ciudadanía a favor de T. en 1937; inscripción de defunción de O-F. el 23 de enero de 1995; certificación literal de nacimiento de T-C. con marginal practicada en 1938 de matrimonio con J las N; certificación de defunción de este último el 27 de agosto de 1858 y diligencia de autenticación según modelo del anexo IV de la Ley 52/2007.

2.- La encargada del registro civil consular dictó auto el 26 de abril de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación española de la interesada.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que sus padres no contrajeron matrimonio entre sí y que su madre estuvo casada con el Sr. J. si bien este falleció en agosto de 1954 aunque en su inscripción de defunción figure que el fallecimiento se produjo en 1958, de modo que cuando la recurrente nació su madre era ya viuda.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, los artículos 20, 113 y 116 del Código civil (CC.); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de la DGRN de 4 de noviembre de 2008 y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española de una ciudadana cubana que alega ser hija de un español de origen nacido en Cuba. La petición se basa en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, siempre que formalicen su declaración en el plazo establecido por la propia disposición. El encargado del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- La inscripción de nacimiento de la promotora en el Registro Civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada, como se ha dicho, en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, si la madre está casada en el momento del

nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC.), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, según se desprende de la documentación aportada, cuando se produjo el nacimiento de la interesada, su madre continuaba casada con un ciudadano distinto de quien aparece como padre en la certificación de nacimiento aportada. Aunque la recurrente alega que existe un error en la inscripción de defunción del marido de su madre y que el fallecimiento se produjo en realidad en 1954 (más de dos años antes del nacimiento de la solicitante), lo cierto es que la fecha de defunción oficial según la inscripción en el Registro Civil es el 27 de agosto de 1958, por lo que, no habiéndose acreditado la existencia error en dicha inscripción ni de divorcio o separación previa al nacimiento de la interesada y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado que la recurrente sea hija de un español de origen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (4ª)

III.1.3.1-Adquisición de la nacionalidad española de origen. Anexo I - Ley 52/2007.

No es posible la inscripción, previa opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, porque no resulta acreditado que el interesado sea hijo de padre español de origen, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 19 de mayo de 2009, Don M. mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba su inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por ser hijo de español de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: modelo de solicitud correspondiente al anexo I de la Ley; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; carné de identidad cubano; certificación literal de nacimiento del interesado, nacido en Cuba el 12 de septiembre de 1956 e hijo de M. y de L. inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de M. nacido en Cuba el 23 de diciembre de 1926, con marginal de recuperación de la nacionalidad española el 12 de abril de 2007; certificación literal de nacimiento de L. con marginales de matrimonio con R. el 22 de abril de 1946 y divorcio el

24 de mayo de 1956 y diligencia de autenticación según modelo del anexo IV de la Ley 52/2007.

2.- La encargada del registro civil consular dictó auto el 19 de abril de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación española del interesado.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que el promotor es hijo de un ciudadano español de origen, al igual que sus hermanos A. nacido en 1953 y cuya inscripción de nacimiento se adjunta al escrito de recurso, y R. nacido en 1963

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, los artículos 20, 113 y 116 del Código civil (CC.); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de la DGRN de 4 de noviembre de 2008 y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española de un ciudadano cubano que alega ser hijo de un español de origen nacido en Cuba. La petición se basa en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, siempre que formalicen su declaración en el plazo establecido por la propia disposición. La encargada del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- La inscripción de nacimiento del promotor en el Registro Civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada, como se ha dicho, en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, lo que le atribuiría la condición de español. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges (art. 116 CC.). Por tanto, para desvirtuar la eficacia probatoria de tal presunción de filiación matrimonial, presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, según se desprende de la documentación aportada, cuando se produjo el nacimiento del interesado no habían transcurrido los mencionados 300 días desde la disolución del matrimonio por sentencia de 24 de mayo de 1956, por lo que, no habiéndose acreditado la existencia de separación previa (sin que quepa admitir a

estos efectos la certificación de nacimiento cubana del hermano mayor, dado que, según lo expuesto y de acuerdo con la legislación española, estaría afectada por la misma presunción) y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado que el recurrente sea hijo de un español de origen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (6ª)

III.1.3.1-Adquisición de la nacionalidad española de origen. Anexo I - Ley 52/2007.

No es posible la inscripción, previa opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, porque no resulta acreditado que el interesado sea hijo de padre español de origen, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 7 de agosto de 2009, Don J-A. mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba su inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por ser hijo de español de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: modelo de solicitud correspondiente al anexo I de la Ley; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; carné de identidad cubano; certificación literal de nacimiento del interesado, nacido en Cuba el 5 de abril de 1971 e hijo de A. y de E. inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de A. nacido en Cuba el 24 de abril de 1947, con marginal de recuperación de la nacionalidad española el 27 de febrero de 2007; certificación de matrimonio celebrado el 12 de diciembre de 1972 entre A. y E. certificación de nacimiento de esta última con marginales de matrimonio con R-L. el 24 de diciembre de 1960, divorcio por sentencia de 28 de septiembre de 1970 y nuevo matrimonio con A. el 12 de diciembre de 1972 y diligencia de autenticación según modelo del anexo IV de la Ley 52/2007.

2.- El encargado del registro civil consular dictó auto el 23 de agosto de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación española del interesado.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que el promotor es hijo de un ciudadano español de origen aunque su madre hubiera estado casada anteriormente con otro ciudadano cubano y no hubiera contraído matrimonio con su padre hasta después del nacimiento del solicitante.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, los artículos 20, 113 y 116 del Código civil (CC.); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de la DGRN de 4 de noviembre de 2008 y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española de un ciudadano cubano que alega ser hijo de un español de origen nacido en Cuba. La petición se basa en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, siempre que formalicen su declaración en el plazo establecido por la propia disposición. El encargado del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- La inscripción de nacimiento del promotor en el Registro Civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada, como se ha dicho, en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, lo que le atribuiría la condición de español. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges (art. 116 CC.). Por tanto, para desvirtuar la eficacia probatoria de tal presunción de filiación matrimonial, presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, según se desprende de la documentación aportada, cuando se produjo el nacimiento del interesado no habían transcurrido los mencionados 300 días desde la disolución del matrimonio por sentencia de 28 de septiembre de 1970, por lo que, no habiéndose acreditado la existencia de separación previa y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente en esta instancia porque no se considera probado que el recurrente sea hijo de un español de origen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (58ª)

III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre españoles de origen, ni por el apartado segundo de la misma disposición los nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña C. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento local de la interesada, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la D. Tª 2ª de la Ley 18/1990, y el artículo 15 del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela, certificado de matrimonio de su abuela con ciudadano colombiano en el año 1933, y pasaporte colombiano con el que su abuela abandonó España.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 15 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Colombia) el 20 de diciembre de 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los hijos de españoles de origen y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada conforme a lo previsto por la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 15 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por no acreditar los requisitos exigidos por el referido precepto.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1909, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del

principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)

Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española, no puede entenderse probada la condición de exilada de la referida abuela. Aunque existen en el expediente pruebas de que la abuela de la interesada abandonó España entre los años 1941 y 1942 (lapso comprendido dentro del período de presunción de exilio por razones políticas), existe también constancia de que la mencionada abuela contrajo matrimonio en España con ciudadano colombiano en el año 1933. En consecuencia, se verifica que cuando la abuela de la parte interesada abandonó España, lo hizo ya como ciudadana colombiana, no española, no cumpliéndose en consecuencia la premisa exigida por la normativa rectora de que perdiese su nacionalidad española de origen con carácter posterior al exilio, y en su consecuencia. En consecuencia, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición de exilada con pérdida subsiguiente de nacionalidad española, conforme a lo anteriormente reseñado, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- El mismo pronunciamiento negativo procede realizar en lo que se refiere a la vía del apartado 1º de la misma Disposición, por razones directamente vinculadas con lo expuesto en el fundamento precedente. En el presente expediente, no ha sido posible verificar que la madre de la solicitante, nacida en Colombia en 1944, hija de ciudadano colombiano - ostentase la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 30 de Enero de 2014 (22ª)

III.1.3.1-Adquisición de la nacionalidad española de origen. Anexo I - Ley 52/2007.

No es posible la inscripción, previa opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, porque no resulta acreditado que la interesada sea hija de padre español de origen, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante formulario presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 20 de agosto de 2009, Doña S. mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba su inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por ser hija de español de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: modelo de solicitud correspondiente al anexo I de la Ley; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; carné de identidad cubano; certificación literal de nacimiento de la interesada, nacida en Cuba el 28 de mayo de 1957 e hija de J-F. y de C. certificación de nacimiento el 28 de junio de 1931 de J-F. hijo de J. y de J del P. certificación literal de matrimonio celebrado el 10 de febrero de 1961 entre J-F. y C. certificación de defunción el 22 de marzo de 1997 de J-F. inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Santa Brígida (C) de J. certificación cubana de matrimonio del anterior con J del P. certificación literal de nacimiento de C. con marginales de matrimonio con E-F. celebrado el 20 de agosto de 1952, divorcio del anterior el 5 de septiembre de 1956 y nuevo matrimonio celebrado el 10 de febrero de 1961 con J-F. certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano donde se declara que J. no obtuvo la ciudadanía cubana, así como su inscripción en el registro de extranjeros, y diligencia de autenticación según modelo del anexo IV de la Ley 52/2007.

2.- El encargado del registro civil consular dictó auto el 23 de agosto de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación española de la solicitante.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que sus padres contrajeron matrimonio en 1952 pero que por un error del registro se hizo constar como contrayente a E-F. (hermano de su padre), error que no fue advertido hasta 1956 y que se solventó con un procedimiento de divorcio ese mismo año, contrayendo la madre nuevo matrimonio con el padre en 1961, si bien ambos permanecían unidos desde antes del nacimiento de la interesada, ocurrido en 1957.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el

artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, los artículos 20, 113 y 116 del Código civil (CC.); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de la DGRN de 4 de noviembre de 2008 y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II.- Se pretende la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española de una ciudadana cubana que alega ser hija de un español de origen nacido en Cuba. La petición se basa en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, siempre que formalicen su declaración en el plazo establecido por la propia disposición. El encargado del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- La inscripción de nacimiento de la promotora en el Registro Civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada, como se ha dicho, en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que la madre había contraído matrimonio en 1952 con otra persona distinta de quien la promotora alega que es su padre y, según la legislación española, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC.) -presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario- es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, según la documentación aportada, cuando se produjo el nacimiento de la interesada no habían transcurrido aún los mencionados 300 días desde la fecha del divorcio. Y aunque la recurrente alega que se produjo un error en la primera inscripción de matrimonio de su madre al hacer constar como nombre del contrayente el del hermano de su padre en el lugar correspondiente a este último, que fue, según sostiene la interesada, el verdadero contrayente, lo cierto es que, de haberse producido tal error, lo adecuado habría sido instar un procedimiento de rectificación de la inscripción, no uno de divorcio y, en cualquier caso, el nuevo matrimonio no se celebró inmediatamente después del divorcio sino en 1961.

Por otra parte, la inscripción de nacimiento de la interesada se practicó en 1962, a pesar de haberse producido el hecho inscribible en 1957. Por todo ello no puede considerarse acreditada la existencia del error alegado y, no habiéndose probado tampoco la existencia de separación del cónyuge anterior de la madre previa a la fecha del divorcio, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado que la recurrente sea hija de un ciudadano español de origen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

III.1.3.2.- Adquisición nacionalidad española de origen-anexo II ley 52/2007

Resolución de 3 de enero de 2014 (60ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

HECHOS

1.-,Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en Tetuán (Marruecos) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y aporta al expediente certificado de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), de la que se deduce la recuperación de la nacionalidad española por parte de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 22 de abril de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en T. (Marruecos) el 25 de mayo de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Resolución el 22 de abril de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

V.- En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han incorporado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, de la que se deduce la recuperación de la nacionalidad española de origen por parte de su abuela. En consecuencia, no dudándose de la condición de la interesada como nieta de abuela española, correspondería analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija (y madre de la solicitante), siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del

Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola

el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española, no podría considerarse probado que la referida abuela hubiese sufrido exilio como consecuencia de la Guerra Civil, ya que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Tetuán (Marruecos).

Resolución de 3 de enero de 2014 (61ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña Mª E. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional

séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en E. (Argentina) el 21 de agosto de 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 18 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en 1903, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme

a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27,

29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 3 de enero de 2014 (62ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña A-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y del que se deduce el matrimonio de los abuelos de la interesada en Buenos Aires en 1935, y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 19 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 4 de febrero de 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en 1908, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la

abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición".

De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece

para el ejercicio de derecho de opción. A estos efectos, lo único que resulta probado es que la abuela materna de la interesada ya se encontraba en Argentina antes del inicio de la Guerra Civil, concretamente en el año 1934, fecha en la que nació su hija y madre de la interesada, quien seguiría de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 3 de enero de 2014 (63ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don M-J. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y certificado de nacimiento de su abuela, nacida en España, hija de padre natural de Colombia.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 9 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en P. C. (Colombia) el 9 de octubre de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 9 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, por la que se da fe del nacimiento de su abuela en España en 1927, de padre natural de Colombia. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela

hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia

a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la parte interesada nació en España, hija de ciudadano natural de Colombia del que no se conoce nacionalidad al momento del nacimiento de su hija ni filiación, por lo que, en primer lugar, no queda probado que la abuela del interesado adquiriese nacionalidad española de origen. Con carácter posterior, la referida abuela abandonó España - el consulado colombiano en Barcelona certifica que lo hizo como ciudadana colombiana - y contrajo matrimonio en Colombia con súbdito colombiano en el año 1947, de lo que se deduce que, en cualquier caso, la madre del interesado, nacida en el año 1955, adquirió ya, de origen, la nacionalidad colombiana de su propio progenitor. Pero, por lo que aquí interesa, no ha podido quedar comprobado que la abuela del solicitante ostentase nacionalidad española cuando dejó el país y la perdiera con carácter subsiguiente a su salida de España. En consecuencia, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima

de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (64ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don S. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y certificado de nacimiento de su abuela, nacida en España, hija de padre natural de Colombia.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 15 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en P. C. (Colombia) el 8 de noviembre de 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 15 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, por la que se da fe del nacimiento de su abuela en España en 1927, de padre natural de Colombia. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición

de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y

formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la parte interesada nació en España, hija de ciudadano natural de Colombia del que no se conoce nacionalidad al momento del nacimiento de su hija ni filiación, por lo que, en primer lugar, no queda probado que la abuela del interesado adquiriese

nacionalidad española de origen. Con carácter posterior, la referida abuela abandonó España - el consulado colombiano en Barcelona certifica que lo hizo como ciudadana colombiana - y contrajo matrimonio en Colombia con súbdito colombiano en el año 1947, de lo que se deduce que, en cualquier caso, la madre del interesado, nacida en el año 1961, adquirió ya, de origen, la nacionalidad colombiana de su propio progenitor. Pero, por lo que aquí interesa, no ha podido quedar comprobado que la abuela del solicitante ostentase nacionalidad española cuando dejó el país y la perdiera con carácter subsiguiente a su salida de España. En consecuencia, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (65ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

- 1.- Doña L. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuela, nacida en España, hija de padre natural de Uruguay, y pasaporte uruguayo con el que la familia de su abuela abandonó España en el año 1937.
- 2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 28 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en G. (Uruguay) el 9 de julio de 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil Consular se dictó Resolución de 28 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V

de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, por la que se da fe del nacimiento de su abuela en España en 1936, de padre natural de Uruguay. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio

en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de

opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la parte interesada nació en España, hija de ciudadano natural de Uruguay del que no se conoce a ciencia cierta nacionalidad al momento del nacimiento de su hija (se podría presumir que era uruguaya, puesto que al referido ciudadano le fue expedido pasaporte por ese país el año siguiente), por lo que, en primer lugar, no queda probado que la abuela del interesado adquiriese nacionalidad española de origen.

Con carácter posterior, la referida abuela abandonó España con el pasaporte uruguayo de su padre y contrajo matrimonio en Colombia con súbdito uruguayo en el año 1962, de lo que se deduce que, en cualquier caso, la madre de la interesada, nacida en el año 1965, adquirió ya, de origen, la nacionalidad uruguaya de su propio progenitor. Pero, por lo que aquí interesa, no ha podido quedar comprobado que la abuela de la solicitante ostentase nacionalidad española cuando dejó el país y la perdiera con carácter subsiguiente a su salida de España. En consecuencia, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 3 de enero de 2014 (66ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don G-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil) y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 16 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 8 de junio de 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 16 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1912, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley

52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada

la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. M. ya se encontraba en Argentina antes de la Guerra Civil, concretamente en 1932, fecha en la que nació su hijo, y padre del interesado, quien seguiría, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 3 de enero de 2014 (67ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don H-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela, y certificado de matrimonio de sus abuelos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 7 de enero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en I. M. (Argentina) el 21 de diciembre de 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 7 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de aquella en España en el año 1921, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos

la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilado de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Por lo demás, lo único que puede entenderse probado es que la abuela del interesado dio a luz al menos a un hijo (el padre del solicitante), en Argentina, en 1939, quien seguiría de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 3 de enero de 2014 (68ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don T-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela, y certificado de emigración de su abuela de España en el año 1935.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 23 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de

noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 8 de julio de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 23 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en el año 1928, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela española de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española,

no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. R. salió de España antes de la Guerra Civil, concretamente en 1935, fecha que su propio nieto confirma expresamente en su escrito de recurso. Por lo demás, sólo puede entenderse acreditado que la abuela del interesado contrajo matrimonio en Argentina con ciudadano argentino, en 1949, y que su hijo y padre del solicitante, nacido en 1950, habría seguido, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España - entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20

de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 3 de enero de 2014 (69ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en San José de Costa Rica.

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito ante el Consulado de España en San José de Costa Rica a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, y certificado español de nacimiento de su abuela, natural de Costa Rica, hija de padre español, que recuperó nacionalidad española de origen en el año 2008.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 27 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. San José de Costa Rica el 20 de abril de 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Acuerdo el 27 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro civil español, de la que se deduce su nacimiento en Costa Rica, en el año 1925, de padre natural de España, así como la recuperación de su nacionalidad española de origen en el año 2008. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si

bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio

en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil. Lo único que queda constatado respecto a la abuela de la parte interesada es que nació ya fuera de España, en el año 1925, hija de padre español de origen, y que dio a luz al menos a un hijo (el padre de la solicitante), en el año 1945, que seguiría de origen la nacionalidad costarricense de su propio progenitor. Por lo demás, la abuela de la interesada recuperó la nacionalidad española de origen en el año 2008, pero se reitera que no resulta acreditada su condición de exiliada, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Por último, no procede hacer referencia en la presente resolución a las apreciaciones realizadas por la parte interesada en su escrito de recurso respecto a otras vías diferentes a la prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por no constituir la vía de recurso el momento procedimental oportuno para hacer valer nuevas solicitudes distintas a la consignada en la instancia original que dio lugar al acto impugnado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San José De Costa Rica.

Resolución de 3 de enero de 2014 (70ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña S-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado literal de nacimiento de la interesada, certificado de nacimiento de su madre, certificado español de nacimiento de su abuela y certificado de matrimonio de sus abuelos.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Auto de 9 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Venezuela) el 3 de febrero de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil del Consulado se dictó Auto el 9 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1927, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela

hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia

a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de española, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela del solicitante contrajo matrimonio en España con ciudadano natural de Cuba y residente en Venezuela, el día 2 de abril de 1951, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, en 1953, se produjo su salida de España, con destino Venezuela. Por otra parte, su hija y madre de la solicitante, nació en el año 1954, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquella siguió ya la nacionalidad extranjera de su padre. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la referida abuela había perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma

- que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 3 de enero de 2014 (71ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña F-Y. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado literal de nacimiento de la interesada, certificado de nacimiento de su madre, certificado español de nacimiento de su abuela y certificado de matrimonio de sus abuelos.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Auto de 9 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Venezuela) el 1 de enero de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil del Consulado se dictó Auto el 9 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1927, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la

abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y

por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de española, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela del solicitante contrajo matrimonio en España con ciudadano natural de Cuba y residente en Venezuela, el día 2 de abril de 1951, y que, con carácter posterior a ese matrimonio y por tanto a la pérdida de su nacionalidad española, en 1953, se produjo su salida de España, con destino Venezuela. Por otra parte, su hija y madre de la solicitante, nació en el año 1954, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquella siguió ya la nacionalidad extranjera de su padre. Al no resultar acreditado que la abuela de la parte solicitante perdiese la nacionalidad

española con posterioridad a su salida de España, y como consecuencia de exilio (la referida abuela había perdido ya la nacionalidad española y adquirido una extranjera antes de dejar España), no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela):

Resolución de 3 de enero de 2014 (72ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña P-V. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de

identidad, certificado literal de nacimiento de la interesada, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y del que se deduce además el matrimonio de los abuelos de la interesada en España, en 1962, y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- Completada la tramitación del expediente, el Encargado del Registro Civil Consular, mediante su Auto de 4 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en P-R. G. (Venezuela) el 5 de octubre de 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende se presentó en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil del Consulado se dictó Auto el 4 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedido por el Registro Civil municipal español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1937, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad

española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de española, no ha quedado verificado el hecho de que la referida abuela hubiese perdido su nacionalidad como consecuencia del exilio, puesto que ha podido comprobarse que la abuela del solicitante aún estaba en España en el año 1962, fecha en la que contrajo matrimonio en territorio español, con ciudadano venezolano, y que, con carácter posterior a ese matrimonio, se produjo su salida de España, con destino Venezuela.

Por otra parte, su hijo y padre de la solicitante, nació en el año 1967, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que ha de entenderse que aquel siguió ya la nacionalidad extranjera de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliada de la abuela paterna de la solicitante, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 3 de enero de 2014 (73ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don D. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y certificado de nacimiento de su abuela, nacida en España, hija de padre natural de Colombia.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 19 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B. (Colombia) el 17 de enero de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del

Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, por la que se da fe del nacimiento de su abuela en España en 1927, de padre natural de Colombia. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la

nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse

acreditado que la referida abuela perdiese la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la parte interesada nació en España, hija de ciudadano natural de Colombia del que no se conoce con exactitud la nacionalidad que ostentaba al momento del nacimiento de su hija ni su filiación, por lo que, en primer lugar, no queda probado que la abuela del interesado adquiriese nacionalidad española de origen.

Con carácter posterior, aunque en fecha que ha resultado imposible determinar con exactitud, la referida abuela abandonó España – el pasaporte diplomático colombiano de su padre (bisabuelo del solicitante) registra varios viajes a diversos países realizados en distintos momentos en la década de 1930, y la Policía colombiana certifica entrada en Colombia de la abuela materna de la interesada en 1937, pero sin que quede constancia de la fecha exacta de salida de España - y contrajo matrimonio en Colombia con súbdito colombiano en el año 1949, de lo que se deduce que, en cualquier caso, la madre del interesado, nacida en el año 1950, adquirió ya, de origen, la nacionalidad colombiana de su propio progenitor. Pero, por lo que aquí interesa, y con independencia de que se admita o no la salida de la abuela del interesado en el período de presunción de exilio, no ha podido quedar acreditado que dicha abuela ostentase nacionalidad española cuando dejó el país y que la perdiera con carácter subsiguiente a su salida de España. En consecuencia, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (74ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña L. presenta escrito ante el Consulado de España en Barcelona, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento de la interesada emitido por el Registro Civil argentino, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código

Civil), partida de bautismo de su abuela, certificado de nacimiento de su abuela basado en la referida partida de bautismo (por haber quedado los libros registrales correspondientes destruidos por causa de un incendio), libro de familia de los abuelos de la interesada y salvoconducto con el que, supuestamente, la abuela de la parte actora habría salido de España en el año 1938.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante Acuerdo de 3 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 14 de junio de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se dictó Acuerdo el 3 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español - en la que se hace constar que el dato certificado procede a su vez de una partida de bautismo, por haber quedado destruidos en un incendio los libros registrales del Juzgado correspondiente - de la que se deduce su nacimiento en España, en 1924, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de

opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. F. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar, el salvoconducto de la Jefatura española de Seguridad Interior expedido a nombre de la abuela de la interesada en 1938 para que abandonase España, vía frontera portuguesa con destino a la Argentina; aunque no puede inferirse directamente del mismo que la abuela de la interesada dejase España efectivamente ese año, el libro de familia aportado confirma que la abuela de la solicitante se encontraba ya en Argentina en 1949, fecha en la que contrajo matrimonio con el que fue su marido, ciudadano argentino, y que sigue encuadrándose dentro del período de presunción de exilio.

En segundo lugar, se tiene constancia de que la abuela de la interesada pudo adquirir años más tarde ciudadanía argentina, por naturalización (en el año 1974); debe considerarse, por tanto, que la fecha de matrimonio con ciudadano extranjero corresponde también al momento en que habría perdido la nacionalidad española de origen, que, en cualquier caso, no pudo transmitir ya a su hija, y madre de la solicitante, nacida en el año 1953, por tener que seguir ésta, necesaria e ineludiblemente, la nacionalidad extranjera de su propio progenitor varón, en consideración al hecho de que, al haber casado los abuelos de la ahora solicitante antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954, la legislación vigente determinaba que el matrimonio, en todo caso, acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española. En consecuencia, pueden entenderse cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley 52/2007 para el acceso al derecho de opción pretendido por la parte actora,

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de la Sra. L. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (75ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en San Pablo/ São Paulo (Brasil).

HECHOS

- 1.- Don A-C. presenta escrito ante el Consulado de España en Río de Janeiro (Brasil) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, certificado español de nacimiento de su abuela, certificado de matrimonio de sus abuelos y certificado del desembarco de su abuela en Brasil en 1912.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular en San Pablo, competente por corresponder al lugar de nacimiento del interesado, mediante su Acuerdo de 11 de junio de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S-P. (Brasil) el 16 de abril de 1951, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 11 de junio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1906, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio

en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de

opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. M. ya se encontraba en Brasil muchos años antes de la Guerra Civil, concretamente en 1912, fecha en la que llegó a dicho país, siendo menor de edad, acompañada de su familia.

Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 3 de enero de 2014 (76ª)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña F-B. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la D. Tª Primera de la Ley 29/1995), certificado de nacimiento de su abuela, certificado de matrimonio de sus abuelos, y pasaporte venezolano con el que su abuela abandonó España en 1953).

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 4 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Venezuela) el 4 de febrero de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 4 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el

Registro municipal español, por la que se da fe del nacimiento de su abuela en España en 1932, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad

al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española de origen, se colige que la referida abuela no perdió la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la interesada contrajo matrimonio en España, mediante poder, con ciudadano

venezolano, en febrero de 1952 (fecha en la que, por tanto, habría perdido su nacionalidad española de origen).

En consecuencia, se constata que cuando la abuela de la Sra. S. abandonó España definitivamente unos meses después de su matrimonio (enero de 1953), lo hizo ya sin dicha nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple la premisa de que perdiera la misma con carácter posterior al exilio y en su consecuencia. Se constata igualmente, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida en Colombia en 1954, después del matrimonio de su madre, siguió ya de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor. En todo caso, no resultando acreditado que la abuela de la interesada perdiese su nacionalidad española como consecuencia del exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 3 de enero de 2014 (125ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña S-F. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo y documentación que prueba la naturalización venezolana de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 10 de febrero 2011, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Colombia) el 27 de agosto de 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 10 de febrero de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1916, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. A este respecto, no existe constancia documental alguna de la fecha concreta en la que se produjo la salida de España del abuelo de la solicitante, sí por el contrario de su entrada en territorio venezolano. Lo único que queda acreditado es que el referido abuelo adquirió más tarde la ciudadanía venezolana, y que, cuando el padre del interesado nació en Venezuela en 1953, éste siguió ya, de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría probada la condición de exiliado del abuelo

en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 3 de enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (48ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud de los entablados por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

1.- Doña I. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjuntan, especialmente, en apoyo de sus solicitudes como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 13 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 13 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no han acreditado que su abuelo materno hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que el abuelo era nacido en España en 1913. Así mismo consta en el expediente que se naturalizó cubano el 29 de agosto de 1946, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la recurrente, nacida en 1947. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo o la abuela hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando este hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española, sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida

o renuncia a la nacionalidad española, por parte del abuelo, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana en el año 1946, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1947, madre de la solicitante, sin embargo es imposible acreditar la condición de exiliado del abuelo al no aportar documentación alguna al respecto y toda vez que, en 1935 ya residía en Cuba, circunstancia avalada por la copia del certificado de su inscripción en el Registro de Extranjeros y que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia recurrente en su escrito de recurso manifiesta "Que efectivamente mi abuelo perdió la nacionalidad española, pero no fue a consecuencia del exilio, sino por razones de índole laboral..." Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña I. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (49ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela)

HECHOS

- 1.- Doña R-Y. presenta escrito en el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 21 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Venezuela en 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de julio de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 21 de julio 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1920, de padres españoles. Así mismo, consta en el expediente numerosa documentación expedida a partir de 1937 en la que aparece con nacionalidad cubana, por lo que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la recurrente, nacida en 1947.

En este sentido interesa resaltar el contenido de la siguiente documentación obrante en el expediente, a fin de rebatir la afirmación de la recurrente sobre la nacionalidad española de su abuelo, la cual ostentó en el momento de su nacimiento, apareciendo como cubano a partir de 1937 y hasta el momento de su defunción, por lo que no es posible considerar el error alegado:

- Documento de identificación de la época, expedido por las autoridades venezolanas.
- Pasaporte expedido por la Legación de la República de Cuba en Caracas.
- Inscripción de nacimiento de la madre de la interesada expedido por el Registro Civil Consular de España en Caracas, donde aparecen sus datos de filiación.
- Tarjeta de residente en Venezuela y sucesivas renovaciones de la misma.
- Certificado de defunción.

Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia

del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana con anterioridad al 13 de agosto de 1937, fecha de su ingreso en Venezuela como cubano, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo previamente a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña R-Y. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (50ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don D. presenta escrito en el Registro Civil de Consular de Córdoba, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 21 de julio de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en Argentina en 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 21 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1897, de padres españoles. Así mismo consta en el expediente copia del Registro Nacional de Electores argentino, en el que aparece el abuelo del interesado como argentino en fecha 15 de febrero de 1927, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española al padre del recurrente nacido en 1935. Por todo ello se puede afirmar que no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil

y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1935, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1 a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la

Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

IX.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don D. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (51ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M. presenta escrito en el Registro Civil de Consular de Córdoba, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 21 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como española de origen a la nacida en Argentina en 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 21 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1897, de padres españoles. Así mismo consta en el expediente copia del Registro Nacional de Electores argentino, en el que aparece el abuelo del interesado como argentino en fecha 15 de febrero de 1927, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española al padre de la recurrente nacido en 1935.

Por todo ello se puede afirmar que no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1935, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de

España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

IX.- Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M.y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (52ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don R-D. presenta escrito en el Registro Civil de Consular de Buenos Aires, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en Argentina en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 17 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro español de su padre, constando en esta última que su abuelo era nacido en España en 1903, y que se naturalizó argentino en fecha 5 de mayo de 1927, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española al padre del recurrente nacido en 1950. Por todo ello se puede afirmar que no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se

presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1950, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, el propio interesado reconoce en el escrito de recurso que su abuelo llegó a Argentina con 16 años, es decir en 1919. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don R-D. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (53ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña P-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quién optó a la nacionalidad española no originaria en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 del Código Civil, en el año 2008), y certificado de nacimiento español de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero de la solicitante y, la de la su padre y su abuelo paterno expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1908, de padres naturales de España. Consta, así mismo, en el expediente, copia del certificado expedido por el Registro General de Cartas de Ciudadanía, a favor del abuelo, en el que consta que adquirió la nacionalidad argentina el 22 de diciembre de 1938. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio

español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 22 de diciembre de 1938, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en Argentina en 1947, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, ya que consta en el expediente documentación acreditativa de su emigración a Argentina en 1927, circunstancia ratificada por el propio interesado en su escrito de recurso. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción, es decir, acreditar la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña P-A. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (54ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don O-H. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española no originaria en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 del Código Civil, en el año 2008), y certificado de nacimiento español de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1974, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero del solicitante y, la de la su padre y su abuelo paterno expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento

en España en el año 1908, de padres naturales de España. Consta, así mismo, en el expediente, copia del certificado expedido por el Registro General de Cartas de Ciudadanía, a favor del abuelo, en el que consta que adquirió la nacionalidad argentina el 22 de diciembre de 1938. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 22 de diciembre de 1938, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en Argentina en 1947, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, ya que consta

en el expediente documentación acreditativa de su emigración a Argentina en 1927, circunstancia ratificada por el propio interesado en su escrito de recurso. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción, es decir, acreditar la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don O-H. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (55ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

- 1.- Doña N. presenta escrito en el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 10 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Venezuela) en 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 10 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen o que su abuela aunque haya quedado acreditada la condición de exiliada hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”. Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de

nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1925 de padres naturales de España. Igualmente se ha aportado al expediente la documentación justificativa de la salida de España y entrada en Venezuela de la abuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, ni su condición de exiliada únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto a dicho requisito, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España hasta

la entrada en vigor de la Constitución por la derogación del artículo 17.2 del Código Civil como consecuencia de la eficacia inmediata de la misma _ cfr. arts. 14, 39, disposiciones derogatoria y final de la Constitución, según Resolución de 13 de Octubre de 2001 (3ª)).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar que tal circunstancia se habrá producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose por la resolución consular acreditado en el expediente la condición de la solicitante de nieta de española, así como la condición de exiliada de la abuela por su salida de España y entrada en Venezuela entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante y que la abuela, aunque no hubiera perdido ni renunciado a su nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en el momento del nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1955, no pudo transmitírsela por seguir éste, en virtud del principio jurídico de unidad familiar, la nacionalidad extranjera del padre, no puede sino entenderse conforme a lo expresado en el fundamento de derecho anterior cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el auto dictado con fecha 10 de febrero de 2010, por el Cónsul General de España en Caracas, y reconociendo a Doña N. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (56ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

- 1.- Don N-F. presenta escrito en el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 10 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en C. (Venezuela) en 1986, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 10 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuera español de origen o que su abuela aunque haya quedado acreditada la condición de exiliada hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1925 de padres naturales de España. Igualmente se ha aportado al expediente la documentación justificativa de la salida de España y entrada en Venezuela de la abuela. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, ni su condición de exiliada únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho

de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto a dicho requisito, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España hasta la entrada en vigor de la Constitución por la derogación del artículo 17.2 del Código Civil como consecuencia de la eficacia inmediata de la misma _ cfr. arts. 14, 39, disposiciones derogatoria y final de la Constitución, según Resolución de 13 de Octubre de 2001 (3ª)).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad

y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar que tal circunstancia se habrá producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose por la resolución consular acreditado en el expediente la condición del solicitante de nieto de española, así como la condición de exiliada de la abuela por su salida de España y entrada en Venezuela entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante y que la abuela, aunque no hubiera perdido ni renunciado a su nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en el momento del nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en el año 1955, no pudo transmitírsela por seguir éste, en virtud del principio jurídico de unidad familiar, la nacionalidad extranjera del padre, no puede sino entenderse conforme a lo expresado en el fundamento de derecho anterior cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el auto dictado con fecha 10 de febrero de 2010, por el Cónsul General de España en Caracas, y reconociendo a Don N-F. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela):

Resolución de 10 de Enero de 2014 (57ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1.- Don B. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de sus abuelos paternos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 26 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 26 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero del solicitante y, la de la su padre y sus abuelos paternos expedidas por el registro civil español, resultando de estas últimas su nacimiento en España, ambos en el año 1895, de padres naturales de España. Consta, así mismo, en el expediente, copia de la carta de ciudadanía expedida en Uruguay, a favor del abuelo, de fecha 2 de octubre de 1918 y certificado de matrimonio de los abuelos con fecha 15 de mayo de 1926. Del examen de esta documentación se deduce que el abuelo tiene la nacionalidad uruguaya desde 1918 y que la abuela perdió la nacionalidad española por matrimonio en el año 1926, por lo que ninguno de los dos pudo transmitir dicha nacionalidad a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1929. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieto de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad uruguaya el 2 de octubre de 1918, y que la abuela también perdió la nacionalidad española por matrimonio celebrado el 15 de mayo de 1926, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en Argentina en 1929, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don B. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (58ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1.- Don M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de sus abuelos paternos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 26 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 26 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero del solicitante y, la de la su padre y sus abuelos paternos expedidas por el registro civil español, resultando de estas últimas su nacimiento en España, ambos en el año 1895, de padres naturales de España. Consta, así mismo, en el expediente, copia de

la carta de ciudadanía expedida en Uruguay, a favor del abuelo, de fecha 2 de octubre de 1918 y certificado de matrimonio de los abuelos con fecha 15 de mayo de 1926.

Del examen de esta documentación se deduce que el abuelo tiene la nacionalidad uruguaya desde 1918 y que la abuela perdió la nacionalidad española por matrimonio en el año 1926, por lo que ninguno de los dos pudo transmitir dicha nacionalidad a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1929. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieto de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad uruguaya el 2 de octubre de 1918,

y que la abuela también perdió la nacionalidad española por matrimonio celebrado el 15 de mayo de 1926, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en Argentina en 1929, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (59ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don P. presenta escrito en el Registro Civil de Blanes (Girona), para el Central, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en Rusia en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 2 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y de su padre y la del Registro español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1909, de padres españoles. Consta, así mismo en el expediente, gran cantidad de documentación administrativa y académica del abuelo del recurrente, expedida en Rusia, en la que aparece a lo largo de los años, desde 1939 hasta su regreso a España en 1978, como español. A mayor abundamiento, en el momento de su regreso a España, como español, reingresa en el cuerpo de docentes hasta la fecha de su jubilación. Por otra parte, en la partida de nacimiento del padre del interesado y en la suya propia, en el apartado nacionalidad del padre del inscrito, aparece en ambas “español”. Por todo ello se puede afirmar que el abuelo del recurrente, aun siendo exiliado, nunca perdió la nacionalidad española y no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Respecto del interesado cabe informar que, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 puede acceder a la

nacionalidad española como nieto nacido fuera de España, de abuelo que originariamente fue español, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don P. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (60ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Doña A-C. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 22 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1987, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 22 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1912, de padres españoles. Así mismo consta en el expediente carta de ciudadanía cubana expedida a favor del abuelo de la interesada de fecha 11 de septiembre de 1941, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido en 1944. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida

o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana en el año 1941, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1944, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La documentación incorporada al expediente podía acreditar la condición de exiliada de la bisabuela pero no la del abuelo, que es lo que requiere la normativa aplicable al caso. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-C. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (61ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

- 1.- Doña A-Mª. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales de nacimiento propio, y de su padre.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 29 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 29 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro Civil español de su padre, constando en esta última que el abuelo era nacido en España en 1904. No consta, expresamente, que el abuelo renunciara a lo largo de su vida a la nacionalidad española. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo o la abuela hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando estos hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española, por parte de los abuelos, por cualquiera de aquellas circunstancias, será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia

en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español, sin embargo no es imposible acreditar la condición de exiliado del abuelo al no aportar documentación alguna al respecto y toda vez que, en 1935 ya residía en Cuba según consta en la cartilla de Registro de Extranjeros presentada, y que el exilio se presume para los españoles que tuvieron que salir de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-Mª y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (66ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Doña Mª-R. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como

documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 24 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M. (Uruguay) el 11 de enero de 1962, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Resolución de 24 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1896 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelo español de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de

1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936

y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. No existe tampoco prueba alguna de la pérdida de la nacionalidad española de origen por parte de la abuela con carácter posterior a su salida de territorio español.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 , ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (73ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español, así como los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don M-F. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 16 de julio de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto denegatorio de su solicitud antes citado, en el que no debate que este sea conforme a derecho, sino que aporta una nueva solicitud de nacionalidad conforme a lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007, es decir como nieto de abuelo de nacionalidad española.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- A la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería confirmar la resolución recurrida. Ahora bien dado que en vía de recurso el solicitante presenta nueva solicitud, alegando error en la elección del formulario presentado en su día, y alega la condición de español de su abuelo, procede por economía procedimental y, no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dicha cuestión.

III.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Cuba en 1949, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y de su madre y la del Registro español de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1875, de padres españoles. Así mismo, consta en certificado expedido por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, que el abuelo se naturalizó cubano el 21 de febrero de 1910. Por ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la recurrente, nacida en 1915. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera

podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad cubana en el año 1910, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante, ocurrido en el año 1915, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M-F. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (77ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1.- Doña S-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) en 1960, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 17 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero de la solicitante y la de la su madre y la del abuelo expedidas por el registro civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1892 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando

dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 27 de mayo de 1927, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en Argentina en 1935, tal como se hace constar en la propia certificación de nacimiento de la hija, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña S-M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (78ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don C-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de enero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1913 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art. 18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente un certificado expedido por la División de Información de Antecedentes de Argentina en la que se manifiesta que la abuela del interesado ingresó en Argentina el 18 de septiembre de 1929, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don C-M. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (79ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don M-R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1974, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 17 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán

también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 27 de febrero de 1932 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en el libro de familia aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1933, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad

extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela del interesado perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- En cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso, sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad, ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M-R. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (80ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don M-E. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 16 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 16 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1909 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.-A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,

inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 3 de junio de 1939 en Argentina con ciudadano argentino y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1943, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela del interesado perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, hecho reconocido por el optante en su escrito de recurso al manifestar “Mi Sra. abuela, Doña A. no ha perdido su nacionalidad española como consecuencia del exilio. Mi abuela junto con sus padres españoles... ingresaron al país Argentino en 1912...” Así pues, no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M-E. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (81ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1.- Doña J-I. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de sus abuelos maternos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 26 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 26 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero de la solicitante y, la de la su madre y sus abuelos maternos expedidas por el registro civil español, resultando de estas últimas su nacimiento en España en el año 1900 y 1908, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieta de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 30 de diciembre de 1927, y que cuando contrajeron matrimonio el 10 de agosto de 1929 la abuela también perdió la nacionalidad española por seguir la nacionalidad de su marido, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en Argentina en 1939, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña J-I. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (82ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1.- Don C-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificados de nacimiento de sus abuelos maternos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 19 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1958, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 19 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero del solicitante y, la de la su madre y sus abuelos maternos expedidas por el registro civil español, resultando de estas últimas su nacimiento en España en el año 1905 y 1912, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieto de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren

los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 20 de marzo de 1930, y que cuando contrajeron matrimonio el 23 de junio de 1932 la abuela también perdió la nacionalidad española por seguir la nacionalidad de su marido, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante ocurrido en Argentina en 1937, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado

acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don C-M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (83ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1.- Doña L-B. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de sus abuelos maternos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 24 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1945, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 24 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero de la solicitante y, la de la su madre y sus abuelos maternos expedidas por el registro civil español, resultando de estas últimas su nacimiento en España en el año 1892 y 1900, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieta de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas

circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 11 de septiembre de 1917 fecha en la que la abuela también perdió la nacionalidad española por seguir la nacionalidad de su marido, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en Argentina en 1918, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L-B. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (84ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña Mª-J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su padre y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 21 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 21 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1902, de padres españoles. Así mismo consta en el certificado de nacimiento del padre de la interesada que el abuelo se naturalizó argentino el 24 de enero de 1927. Por ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido en 1940. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1927, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1940, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada en su escrito de recurso manifiesta que su abuelo “vino a Argentina, en el año 1924, como exiliado económico...” Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M^a-J. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (85^a)

III.1.3.2.-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

- 1.- Don F. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 10 de junio de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen al nacido en Argentina en 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 26 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 10 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud:

“...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1931 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española

por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de

dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don F-A. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (104ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra las resoluciones del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña J-C. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento de la interesada, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de la abuela de la interesada y pasaporte con el que la referida abuela salió de España y llegó a Venezuela en el año 1955.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 21 de enero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5.- Con fecha posterior (julio de 2011), la interesada presenta nueva instancia, solicitando la aplicación a su caso de la Disposición Final Sexta de la Ley 20/11, de 21 de julio, del Registro Civil, según el cual, el derecho de opción previsto por la Ley 52/2007 pueden ejercerlo también, “los nietos de exiladas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre”.

6.- Con fecha 7 de septiembre de 2011, el Encargado del Registro Civil Consular de España en Caracas (Venezuela), deniega la nueva solicitud de la interesada.

7.- Notificada esta nueva Resolución, la parte actora interpone un segundo recurso contra la misma.

8.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente del nuevo recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

Dada la identidad del recurrente y el objeto de los dos actos impugnados, se estima procedente la acumulación y la resolución conjunta de los recursos interpuestos contra los mismos (artículo 347 del Reglamento del Registro Civil).

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Venezuela) el 18 de enero de 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Posteriormente, se trató de acceder mediante nueva solicitud, a la extensión del ámbito subjetivo de la norma rectora llevada a efecto por la Disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela) se dictaron sendas resoluciones el 21 de enero de 2010 y el 7 de septiembre de 2011, denegando lo solicitado.

III.- Los Acuerdos apelados basan en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte. Del mismo modo, se expresa a la interesada que no procede considerarla comprendida en la extensión prevista por la mencionada Ley 20/2011, habida cuenta de que la misma se refería a nietos de abuelas que conservaron la nacionalidad española de origen

después de haber contraído matrimonio con ciudadano extranjero, sin mencionar a las que permanecieron siempre solteras, como era el caso de la abuela de la parte actora.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en 1933, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese

implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello

de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. D. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, como puede deducirse fehacientemente de la documentación incorporada al expediente, y, aunque efectivamente no consta que la Sra. D. llegara alguna vez a perder su nacionalidad española de origen, lo cierto es que no pudo transmitirla a su hija, y madre de la interesada, cuando se produjo su nacimiento en 1960, por seguir ésta, necesaria e ineludiblemente, la nacionalidad venezolana de su propio progenitor. Se cumplen por tanto las condiciones exigidas para el acceso a la opción pretendida de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos precedentes.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de la Sra. V. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (105ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

HECHOS

1.- Doña L-G. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional

séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española de origen en virtud de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), certificado español de nacimiento de su abuelo, y documentación que permite inferir el otorgamiento de pasaporte venezolano al abuelo de la interesada en 1950.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 17 de junio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en C. (Venezuela) el 14 de octubre de 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Auto el 17 de junio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;

b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1932, de padre natural de Venezuela y madre natural de España, así como la recuperación de su nacionalidad española de origen en 2005. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de

opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe prueba fehaciente alguna de la fecha concreta en la que se produjo la salida de España del abuelo de la solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que al referido abuelo le fue otorgado pasaporte venezolano por el Consulado de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife en enero de 1950, por lo que puede colegirse, en consecuencia, que cuando el abuelo de la parte actora dejó España, lo hizo ya con nacionalidad extranjera, y, por lo tanto, habiendo perdido ya su nacionalidad española de origen. No pueden entenderse cumplidos, en consecuencia, los requisitos establecidos por la norma rectora del procedimiento, que exige que la pérdida de la nacionalidad española del abuelo causante se hubiera producido con carácter subsiguiente al exilio, y como consecuencia del mismo.

Por lo demás, queda igualmente constatado que, cuando nació la madre de la parte actora, en el año 1961, ésta siguió de origen la nacionalidad venezolana de su propio progenitor. Y, en consecuencia, no existiría tampoco discriminación alguna de la solicitante respecto a otros miembros de su familia que accedieron a la nacionalidad española por otras vías diferentes a la prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, como pretende la Sra. C. Se recuerda que para que exista discriminación en el sentido previsto por el artículo 14 de la Constitución Española, los supuestos de referencia deben ser sustancialmente iguales, realidad que en modo alguno concurre en el presente supuesto, en el que los presupuestos fácticos que dan lugar a uno y otro pronunciamiento, son esencialmente diversos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (106ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña J-N. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuelo y certificado de naturalización argentina de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 4 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en S-M. B-A. (Argentina) el 14 de abril de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 4 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud:

“2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1913, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuelo español de origen, no puede entenderse probado que el referido abuelo sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. En primer lugar, no existe constancia alguna de la fecha concreta en la que se produjo la salida de España del abuelo de la solicitante, y, en segundo, obra en el expediente constancia de que el referido abuelo adquirió la ciudadanía argentina, por naturalización antes del inicio de la Guerra Civil, concretamente el 4 de julio de 1936.

Puede colegirse, en consecuencia, que la madre de la interesada, nacida en Argentina en el año 1943, siguió ya de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor. En cualquier caso, se insiste en que nunca resultaría acreditada la condición de exiliado del abuelo en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (107ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1.- Doña D del C. presenta escrito ante el Consulado de España en São Paulo (Brasil) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de

identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento de la interesada, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), certificados de nacimiento y de matrimonio de la abuela de la interesada y certificado de llegada a Brasil de la abuela de la interesada en 1955.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 29 de diciembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en S-P. (Brasil) el 20 de diciembre de 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de São Paulo (Brasil) se dictó Acuerdo el 29 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en 1936, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad

española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”.

De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. S., fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, como puede deducirse fehacientemente de la documentación incorporada al expediente, y, aunque efectivamente no consta que la Sra. S. llegara alguna vez a perder su nacionalidad española de origen, lo cierto es que no pudo transmitirla a su hija, y madre de la interesada, cuando se produjo su nacimiento en 1967, por seguir ésta, necesaria e ineludiblemente, la nacionalidad brasileña de su propio progenitor. Se cumplen por tanto las condiciones exigidas para el acceso a la opción pretendida de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos precedentes.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de la Sra. F. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (108ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña F-F. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 4 de diciembre de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 14 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en 1929, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos

la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Por lo demás, de la documentación obrante en el expediente sólo se infiere el matrimonio de la abuela referida con ciudadano argentino en 1947, de lo que se colige que, al nacer

la madre de la interesada en 1952, ésta siguió de origen la nacionalidad argentina de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (109ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don G-E. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y del que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1925.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 25 de agosto de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S-M. (Argentina) el 27 de agosto de 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 25 de agosto de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, de la que se deduce, además, el nacimiento de su abuela en España en el año 1925. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir

en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad

familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 (el propio interesado reconoce en su escrito de recurso que la salida de su abuela de España se produjo antes del inicio de la Guerra Civil, en 1935), por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (110ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los que no acrediten ser nietos de abuelos de nacionalidad española que perdieran o tuvieran que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña C-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, certificado español de nacimiento de su abuela, certificado de naturalización argentina de su abuelo en 1930, y certificado de matrimonio de sus abuelos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 18 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 5 de 11 de agosto de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 18 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como documentación de la que se deduce el nacimiento de sus abuelos en España, respectivamente en los años 1895 y 1906. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelos nacidos en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que los abuelos hubiesen perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ellos no hayan podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir, y respecto a las abuelas, el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con

extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello

de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliados de dichos abuelos. Ello así, puesto que existe constancia de que el abuelo de la solicitante obtuvo la nacionalidad argentina, por naturalización, algunos años antes de la Guerra Civil, en concreto en 1930, y de que contrajo matrimonio con la abuela de la solicitante antes de salir de territorio español, por lo que puede colegirse, en primer lugar, que cuando la abuela materna de la interesada salió de España, había perdido ya su nacionalidad española de origen, y, en segundo término que, al nacer la madre de la recurrente en el año 1934, ésta habría adquirido ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (111ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña. S-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuela, certificado de matrimonio de sus abuelos, y cartera de identidad con la que su abuela abandonó España en 1926.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 7 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S-N. B-A. (Argentina) el 21 de octubre de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 7 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V

de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de su abuela en España en 1905, sin que quede acreditada la filiación. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación

de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada

a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela de la Sra. M. ya se encontraba en Argentina mucho antes de la Guerra Civil, concretamente en 1926. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Y, en consecuencia, no existe tampoco discriminación alguna de la solicitante respecto a otros miembros de su familia que accedieron a la nacionalidad española por otras vías diferentes a la prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, como pretende la Sra. M. Se recuerda que para que exista discriminación en el sentido previsto por el artículo 14 de la Constitución Española, los supuestos de referencia deben ser sustancialmente iguales, realidad que en modo alguno concurre en el presente supuesto, en el que los procedimientos que dan lugar a uno y otro pronunciamiento son esencialmente diversos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (112ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña B. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento de la interesada emitido por el Registro Civil argentino, certificado español de nacimiento de su madre, Doña L. (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado de matrimonio de los abuelos de la interesada, y pasaporte con el que la abuela de la interesada salió de España en 1951.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 4 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.
- II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 22 de abril de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina) se dictó Acuerdo el 4 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.
- III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.
- IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en 1933, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de

acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. G. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar, el pasaporte español con visado argentino por el que se infiere la salida de España de la abuela de la interesada en 1951, y su entrada en Argentina en el mismo año, así como el certificado de matrimonio de la referida abuela con súbdito paraguayo en el año 1955 (fecha correspondiente a la pérdida de nacionalidad de la abuela tras el exilio).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de la Sra. G. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (113ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los que no acrediten ser nietos de abuelos de nacionalidad española que perdieran o tuvieran que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña Mª-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quién optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), certificados españoles de nacimiento

de sus abuelos, certificado de naturalización argentina de su abuelo, y carteras de identidad con las que sus abuelos entraron en Argentina.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 12 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 11 de agosto de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 12 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que sus abuelos hubieran perdido o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de sus abuelos, de las que se deduce el nacimiento de éstos en España, respectivamente en los años 1909 y 1921, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose

en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que los abuelos hubiesen perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ellos no hayan podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir, y respecto a las abuelas, el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y

formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuelos españoles de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliados de dichos abuelos. Ello así, puesto que existe constancia de que los abuelos de la solicitante llegaron a Argentina muchos años antes de la Guerra Civil, en concreto en 1925 y 1928. Por lo demás, se constata igualmente la naturalización argentina del abuelo de la interesada en el año 1940, según consta en la documentación integrante del expediente, por lo que puede colegirse que, al nacer la madre de la recurrente

en el año 1945, ésta habría adquirido ya, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor; sin embargo, se reitera que no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (114ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don G. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil) y del que se deduce nacimiento de su abuela en España en 1917, así como certificado de la Dirección Nacional de Migraciones, que prueba llegada de su abuela a Argentina en 1926.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 27 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S-N. B-A. (Argentina) el 21 de octubre de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 27 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, de la que se deduce, además, el nacimiento de su abuela en España en 1917. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que

la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto

no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. S. ya se encontraba en Argentina mucho antes de la Guerra Civil, concretamente en 1926, fecha en la que llegó a aquel país, y que su propio nieto confirma expresamente en su escrito de recurso. Por lo demás, sólo puede entenderse acreditado que la abuela del interesado contrajo matrimonio en Argentina con ciudadano argentino, y que su hijo y padre del solicitante, nacido en 1952, habría seguido, de origen, la nacionalidad argentina de su propio progenitor. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (115ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña P-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil) y del que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1915.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 14 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B-A. (Argentina) el 20 de noviembre de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 14 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, de la que se deduce, además, el nacimiento de

su abuela en España en el año 1915. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre

que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España-

entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. No existe tampoco prueba alguna de la pérdida de la nacionalidad española de origen por parte de la abuela con carácter posterior a su salida de territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (116ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Don Ó-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado emitido por el Registro Civil uruguayo, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de la opción prevista por el apartado 20.1 b) del Código Civil) - y del que se deduce, además, el nacimiento de su abuela en España en el año 1928, así como el matrimonio de ésta con ciudadano uruguayo en el año 1956 - y pasaporte español con el que su abuela abandonó España en el año 1950, en buque con origen en el puerto de B.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 12 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 28 de noviembre de 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular citado se dictó Resolución el 12 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, de la que resulta, además, el nacimiento de su abuela en España en el año 1928; Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional

segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se verifica que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. Macho Lera, fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar, el pasaporte español con visado uruguayo, en el que constan tanto la salida de la abuela del solicitante de territorio español, como su entrada en Uruguay en el año 1950, así como la constancia de su matrimonio con ciudadano uruguayo en el año 1956, que habría determinado la necesidad de que su hija y madre del interesado, nacida en 1964, siguiese de origen la nacionalidad uruguaya de su propio progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. González Cáceres a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho,

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (117ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don C-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), certificado español de nacimiento de su abuela, y libro de familia de sus abuelos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 10 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 15 de septiembre de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 10 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1908, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que

perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrearía para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de

la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuela española de origen, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela del Sr. F. ya se encontraba en Argentina antes de la Guerra Civil, concretamente en 1931, fecha en la que contrajo matrimonio con el que fue su marido, ciudadano italiano en aquel momento, perdiendo su nacionalidad española de origen.

Por lo demás, de la documentación integrante del expediente, puede colegirse que el padre del interesado, nacido en el año 1948, y de filiación matrimonial, siguió ya, de origen, la nacionalidad extranjera de su propio progenitor. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (118ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña N-E del P. presenta escrito ante el Consulado de España en Bogotá (Colombia) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la D. Tª 2ª de la Ley 18/1990, y el artículo 13 del Código Civil), certificado de nacimiento de su abuela, libro de familia de sus abuelos, y certificado del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano por el que se da fe de la entrada de su abuela en territorio colombiano en buque procedente de Vigo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 4 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en B. (Colombia) el 29 de junio de 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de

origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 4 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela, expedida por el Registro municipal español, por la que se da fe del nacimiento de su abuela en España en 1922, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios

de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela española de origen, se colige que la referida abuela no perdió la nacionalidad española como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio. En efecto, obra en el expediente documentación que permite constatar que la abuela de la interesada contrajo matrimonio en España con súbdito colombiano en junio de 1951 (fecha en la que, por tanto, habría perdido su nacionalidad española de origen).

En consecuencia, se constata que cuando la abuela de la Sra. R. abandonó España definitivamente unos meses después de su matrimonio, lo hizo ya sin dicha nacionalidad española de origen, por lo que no se cumple la premisa de que perdiera la misma con carácter posterior al exilio y en su consecuencia. Se constata igualmente, que su hija, y madre de la parte interesada, nacida en Colombia en 1952, después del matrimonio de su madre, siguió ya de origen la nacionalidad colombiana de su propio progenitor. En todo caso, no resultando acreditado que la abuela de la interesada perdiese su nacionalidad española como consecuencia del exilio, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (119ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- Don J-I. presenta escrito ante el Consulado de España en Montevideo (Uruguay) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto por el apartado 1º de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), y del que se deduce nacimiento de su abuela en España en 1929.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Resolución de 23 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en M. (Uruguay) el 5 de septiembre de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro Civil se dictó Resolución de 23 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, de la que se deduce además el nacimiento de su abuela en España en 1929. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieto de abuela nacida en España, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad

familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y

protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (120ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña M^a de los Á. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1b) del Código Civil), certificado español de nacimiento de su abuela y certificado de matrimonio de sus abuelos.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 26 de noviembre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en La P. (Argentina) el 14 de marzo de 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular se dictó Acuerdo el 26 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre

de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1908, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la interesada como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación

de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la

condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieta de abuela nacida en España, no puede entenderse probado que la referida abuela sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que la abuela de la Sra. B. ya se encontraba en Argentina antes de la Guerra Civil, concretamente en 1934, fecha del nacimiento de su hijo y padre de la solicitante. Dado que no se ha probado la condición de exilada de Guerra de la indicada abuela, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. En cualquier caso, tampoco se conoce con exactitud qué nacionalidad tenía el abuelo paterno de la solicitante (nacido en Argentina, hijo de españoles de origen) cuando contrajo matrimonio en España con la que fue su esposa (y abuela de la interesada), por lo que tampoco se puede determinar a ciencia cierta cuándo perdió la referida abuela la nacionalidad española de origen, si antes o después de su salida de España.

VIII.- En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, "lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve" (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente (en concreto el hecho de que no se pueda entender acreditada la condición de la abuela de la solicitante como exiliada en los términos previstos por la Instrucción rectora), por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

IX.- Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación a su caso de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que

conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (1ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña Mª-G. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre en el que consta que optó a la nacionalidad española el 27 de mayo de 2008 en base al art. 20.1.b del Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 7 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1981 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 7 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y la de su madre expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última que su madre, abuela de la recurrente, nació en España en el año 1915. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si

bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya

podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, con anterioridad al nacimiento de la madre de la solicitante, ocurrido el 5 de marzo 1947 en Argentina, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. A mayor abundamiento, la propia recurrente en su escrito de recurso manifiesta que el exilio padecido por su abuela "no se encuadra en lo establecido por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007" por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin que puedan entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M^a-G. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (2ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña F-S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre en el que consta que optó a la nacionalidad española el 2 de marzo de 2007 en base al art. 20.1.b del Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1967 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008

al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 1 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y la de su padre expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última que su madre, abuela de la recurrente, nació en España en el año 1900. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad

familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país

de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, con anterioridad al nacimiento del padre de la solicitante, ocurrido el 21 de noviembre 1943 en Argentina, y que éste siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. A mayor abundamiento, la propia recurrente en su escrito de recurso manifiesta que su abuela “llegó junto a sus padres y hermanos a Argentina el año 1912” por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin que puedan entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña F-S. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (3ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don D-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española el 3 de julio de 2008 en aplicación del art. 20.1.b del Código Civil y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 3 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1957, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 3 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del

solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1910 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor

de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela no haya perdido su nacionalidad española, pero que no haya transmitido dicha nacionalidad a su hija en el momento de su nacimiento por seguir ésta la de su padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del recurrente, dado

que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente documentación acreditativa del ingreso de la Sra. L. en Argentina el año 1928, encontrándose en dicho país en el año 1933, fecha del nacimiento de su hija, madre del interesado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don D-M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (4ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña M-E. contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular Caracas (Venezuela)

HECHOS

1.- Con fecha 15 de abril de 2010, Doña M-E. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documento de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento de la interesada y de su padre emitido por el Registro Civil venezolano y, certificado de nacimiento español de su abuela que acredita su nacimiento en España en 1932, de padres naturales de España, y pasaporte español de la misma en el que consta su ingreso en Venezuela en el año 1950.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de 16 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Venezuela el 5 de abril de 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de abril de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas se dictó acuerdo el 16 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, la de su padre y la de su abuela que prueba su nacimiento en España en el año 1932, de padres españoles. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si

bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, nacida en España en 1932, de padres españoles, sino también que su abuela, Sra. F. fue exiliada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, el pasaporte español presentado, en el que consta que la abuela de la recurrente salió de España el 7 de mayo de 1950 en el vapor H. y entró en Venezuela, a través del puerto de La G. el 15 de mayo de 1950. Así mismo, consta en el expediente como año de celebración del matrimonio

de la abuela 1952, fecha en la que perdió la nacionalidad española y no pudo transmitírsela a su hijo, padre de la interesada, nacido en 1961, quien siguió la nacionalidad venezolana de su progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de la Sra. L. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (5ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña A-G. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre y de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 23 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones,

entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1976 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 23 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, así como las de su padre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1910 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo

caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en Argentina con extranjero, en fecha 18 de julio de 1932, según consta en el libro de familia presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento del padre de la solicitante, ocurrido el 17 de marzo de 1944, y que éste siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. Circunstancia avalada por el pasaporte de la Sra. M. en el que consta un permiso para emigrar a Argentina con fecha 21 de agosto de 1929 y un sello de entrada en dicho país de fecha 18 de septiembre de 1929. Por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin que puedan entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-G. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (6ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don A-C. contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Don A-C. presenta escrito ante el Consulado de España en Lima (Perú) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificados de nacimiento del interesado y de su madre emitidos por el Registro Civil peruano, certificado español de nacimiento de su abuela, que data del año 1937, diversa documentación que acredita la salida de España de ésta en el año 1938 y copia de la resolución dictada por la Dirección General de Ordenación de las Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España por la que se le reconoce el derecho a una prestación económica como ciudadana de origen español que durante su minoría de edad, se vio obligada a desplazarse al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de 8 de noviembre de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada. Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Perú el 26 de junio de 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen

“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de febrero de 2009, en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 8 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que comparte el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como de su abuela, nacida en España en el año 1937. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probada la condición de exilada de la abuela del interesado, al haber sido aportada constancia de que la abuela del Sr. C. fue beneficiaria de una prestación económica otorgada por la Administración española a ciudadanos de origen español que durante su minoría de edad, se vieron obligados a desplazarse al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil.

Del mismo modo, ha podido verificarse que la abuela del solicitante no pudo transmitir su nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la nacionalidad peruana de su padre en virtud del principio de unidad familiar, como consecuencia de su matrimonio con ciudadano peruano en el año 1956, ya después de cumplida su mayoría de edad, y, por tanto, después también de su salida de España. Se cumplen, en consecuencia, los requisitos exigidos por la Instrucción rectora del procedimiento para el acceso a la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de Don A-C. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (7ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña J-R. contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Doña J-R. presenta escrito ante el Consulado de España en Lima (Perú) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado local de nacimiento de la interesada y el de su madre emitido por el Registro Civil Consular español en Perú, en el que consta que accedió a la nacionalidad española por opción, conforme a lo previsto en el art. 20 del Código Civil; certificado español de nacimiento de su abuela, que data del año 1937, diversa documentación que acredita la salida de España de ésta en el año 1938 y copia de la resolución dictada por la Dirección General de Ordenación de las Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España por la que se le reconoce el derecho a una prestación económica como ciudadana de origen español que durante su minoría de edad, se vio obligada a desplazarse al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de 10 de noviembre de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada. Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Perú el 25 de marzo de 1985, en virtud del ejercicio de

la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de agosto de 2009, en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 10 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la parte solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que comparte el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como de su abuela, nacida en España en el año 1937. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significaría hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probada la condición de exiliada de la abuela de la interesada, al haber sido aportada constancia de que la abuela del Sr. C. fue beneficiaria de una prestación económica otorgada por la Administración española a ciudadanos de origen español que durante su minoría de edad, se vieron obligados a desplazarse al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil.

Del mismo modo, ha podido verificarse que la abuela del solicitante no pudo transmitir su nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la nacionalidad peruana de su padre en virtud del principio de unidad familiar, como consecuencia de su matrimonio con ciudadano peruano en el año 1956, ya después de cumplida su mayoría de edad, y, por tanto, después también de su salida de España. Se cumplen, en consecuencia, los requisitos exigidos por la Instrucción rectora del procedimiento para el acceso a la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de Doña J-R. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (8ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don D-J. contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don D-J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado argentino de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su madre (que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la Ley 29/95) y documentación que acredita el nacimiento como española de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de fecha 5 de abril de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) el 26 de octubre de 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008

al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina) se dictó acuerdo de 5 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local del solicitante y, la de su madre, expedida por el Registro Civil consular español, en el que consta la nacionalidad española de la abuela. Así mismo se aporta la documentación por la que se autoriza su salida de España como emigrante en 1932, en la que se acredita que nació en C. (S), el 26 de marzo de 1919. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados

de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil, toda vez que ésta salió de España en noviembre de 1932, sin que conste la fecha de su arribada a Argentina. De lo único que queda constancia es de que la abuela del interesado tuvo al menos una hija en Argentina en el año 1946 (la madre del solicitante), de la que no consta la filiación matrimonial, ni por la inscripción de nacimiento de la madre del solicitante en el registro español ni por la documentación aportada al presente expediente por el interesado.

No existe, por tanto tampoco, una prueba de que la abuela del solicitante llegase nunca a perder su nacionalidad española de origen; en cualquier caso, se insiste en que, con independencia de que la referida abuela llegase alguna vez a perder dicha nacionalidad, no resultaría nunca acreditada la condición de exilada de la abuela en cuestión, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por haber resultado acreditada la salida de España en 1932 - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don D-J. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (9ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña M^a-S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de sus abuelos paternos.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 10 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008

al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 10 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero de la solicitante y, la de la su padre y sus abuelos paternos expedidas por el registro civil español, resultando de estas últimas su nacimiento en España, en el año 1906 y 1908 respectivamente, de padres naturales de España. Consta, así mismo, en el expediente que el abuelo se naturalizó argentino el 2 de julio de 1928, circunstancia que viene a determinar que en dicha fecha ya residía en Argentina. Del examen de esta documentación se deduce que el abuelo tiene la nacionalidad argentina desde 1928 y que la abuela perdió la nacionalidad española por matrimonio, por lo que ninguno de los dos pudo transmitir dicha nacionalidad a su hijo, padre de la recurrente, nacido en 1934 en Argentina. Así pues, no cuestionándose en el recurso la condición de nieta de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos de la solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes

expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 2 de julio de 1928, y que la abuela también perdió la nacionalidad española por matrimonio, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en Argentina en 1934, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

VIII.-Por lo que se refiere a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente

cita [y transcripción], por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

IX.- En cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1. a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Mª-S. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (10ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña C-L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio; certificado de nacimiento de su padre expedido por el Registro Civil Consular español en Buenos Aires, en el que consta que optó, con fecha 19 de noviembre de 2009, a la nacionalidad española en base a la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 y certificado de nacimiento de su abuelo paterno, expedido por el correspondiente Registro Civil español y, certificado de bautismo de su abuela paterna expedido en España..

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 3 de julio de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende

fue formalizada el 2 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 3 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que ninguno de sus abuelos hubieran perdido o tuvieran que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelos españoles se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento, del registro civil extranjero de la solicitante y, la de la su padre y su abuelo paterno expedidas por el registro civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1890, de padres naturales de España. Así mismo aporta la partida de bautismo de su abuela paterna en la que consta como nacida en España en 1892. También consta en la partida de nacimiento del padre de la interesada, que su abuelo se nacionalizó argentino el día 7 de febrero de 1929 y certificado de matrimonio de los abuelos, celebrado en Argentina, con fecha 3 de enero de 1914. Del examen de esta documentación se deduce que el abuelo tiene la nacionalidad argentina desde 1929 y que la abuela perdió la nacionalidad española por matrimonio en ese mismo año, por lo que ninguno de los dos pudo transmitir dicha nacionalidad a su hijo, padre del recurrente, nacido en 1934. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de nieto de abuelos españoles, únicamente corresponde analizar si concurren los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que los abuelos hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que los abuelos del solicitante hubieren perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando hubiesen adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de los abuelos por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliados de los abuelos, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los

exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de españoles; y que el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina el 7 de febrero de 1929, y que la abuela también perdió la nacionalidad española por matrimonio, conforme a lo previsto en la legislación vigente en ese momento en España, todo ello con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del solicitante ocurrido en Argentina en 1934, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliados de los abuelos con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña C-L. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (11ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña S-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre en el que consta que obtuvo la nacionalidad española por opción, en virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 b del Código Civil. Así mismo consta en dicha certificación que la abuela de la recurrente nació en España en 1916. Pasaporte de la abuela expedido en 1935.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 5 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1979 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 5 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y la de su madre expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última el nacimiento de la abuela en España en el año 1916. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente

en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado

español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 28 de octubre de 1944, según consta en el libro de familia presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la madre de la solicitante, ocurrido el 18 de noviembre 1954, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. Circunstancia avalada por el pasaporte de la Sra. G. en el que consta un sello, del Departamento Nacional de Higiene argentino, que confirma su ingreso en el país el día 29 de noviembre de 1935. Así pues no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin que puedan entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VIII.- Por lo que se refiere a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

IX. En cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida

la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña S-A. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (12ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña Z-E. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre en el que consta que obtuvo la nacionalidad española por opción, en virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 b del Código Civil; certificados de nacimiento y matrimonio de su abuela, expedidos por el Registro Civil español, en los que consta su nacimiento en B. en 1925 y su matrimonio el 8 de mayo de 1950 con ciudadano argentino. Así mismo aporta certificado de la Dirección Nacional de Migraciones argentina en el que se acredita su ingreso en Argentina el día 25 de diciembre de 1952.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 19 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1983 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de junio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 19 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud:

“2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y la de su madre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última el nacimiento de la abuela en España en el año 1925. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el

derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española, se da la circunstancia de que la abuela perdió su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 8 de mayo de 1950 en España, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en

el año 1955, el cual siguió la nacionalidad extranjera del padre. Así pues la pérdida de la nacionalidad española de la abuela no se produjo como consecuencia de su exilio, que tuvo lugar en 1952, acreditado mediante certificación expedida por la Dirección General de Migraciones argentina, por lo que no se cumplen los requisitos exigidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Z-E. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (13ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña C-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre y de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1976 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 17 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1930 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la

citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 22 de enero de 1953, según consta en el libro de familia presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la madre de la solicitante, ocurrido el 3 de septiembre 1953, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. Circunstancia avalada por la certificación expedida por la Dirección General de Migraciones argentina en la que consta que la Sra. H. ingresó en el país el día 20 de marzo de 1931. A mayor abundamiento, la propia recurrente en su escrito de recurso manifiesta que su abuela "ingresó a la República Argentina el 20 de Marzo de 1931 con solo 4 meses y 6 días de edad junto con sus padres..." por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin que puedan entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña C-A. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (14ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don M-E. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre y de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1982 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 17 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1930 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 22 de enero de 1953, según consta en el libro de familia presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la madre del solicitante, ocurrido el 3 de septiembre 1953, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. Circunstancia avalada por la certificación expedida por la Dirección General de Migraciones argentina en la que consta que la Sra. Heras ingresó en el país el día 20 de marzo de 1931. A mayor abundamiento, el propio recurrente en su escrito de recurso manifiesta que su abuela “ingresó a la República Argentina el 20 de Marzo de 1931 con solo 4 meses y 6 días de edad junto con sus padres...” por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, así que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don M-E. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (15ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don H-D. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1958, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 1 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1905 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad

española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en 1925 con argentino, en Argentina, según consta en la correspondiente certificación de matrimonio, y que el padre del interesado nacido en 1930 en Argentina, siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado

acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don H-D. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (16ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don J-I. contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Con fecha 24 de abril de 2009, Don J-I. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documento de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado emitido por el Registro Civil argentino, certificado español de nacimiento de su padre, y certificado de nacimiento español de su abuela que acredita su nacimiento en España en 1932, de padres naturales de España, y certificado de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina que acredita su ingreso en ese país en 1953.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 22 de abril de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina el 27 de septiembre de 1986, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de abril de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires se dictó acuerdo el 22 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, la de su padre y la de su abuela que prueba su nacimiento en España en el año 1932, de padres españoles. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer

de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. A. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar el certificado argentino de inmigración, que acredita la entrada efectiva y no temporal de la Sra. A. en ese país en 1953, así como la partida de nacimiento y el resto de los documentos de identidad de la abuela del solicitante, que dan fe de su nacimiento en España en 1932, de padres españoles, y el certificado de matrimonio de los abuelos del solicitante, que indica la fecha de matrimonio de la Sra. A. con súbdito argentino en junio de 1955 (fecha correspondiente a la pérdida de nacionalidad de la abuela tras el exilio).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. G. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (17ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don J-N. contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela)

HECHOS

1.- Con fecha 9 de diciembre de 2009, Don J-N. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documento de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado emitido por el Registro Civil venezolano, certificado español de nacimiento de su padre, Don J-J. y certificado de nacimiento español de su abuela que acredita su nacimiento en España en 1903, de padres naturales de España, y certificado de la Dirección Nacional de Migraciones y Zonas Fronterizas de Venezuela que acredita su ingreso en ese país, a través del puerto de La G. en 1938.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 18 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Venezuela el 12 de enero de 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende

fue formalizada el 9 de diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela) se dictó Auto el 18 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, la de su padre y la de su abuela que prueba su nacimiento en España en el año 1903, de padres españoles. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,

bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. Q. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, en primer lugar el certificado venezolano de inmigración, que acredita la entrada efectiva y no temporal de la Sra. Q. en ese país en 1938, así como la partida de nacimiento y el resto de los documentos de identidad de la abuela del solicitante, que dan fe de su nacimiento en España en 1903, de padres españoles, y el certificado de matrimonio de los abuelos del solicitante, que indica la fecha de matrimonio de la Sra. Q. con súbdito venezolano en diciembre de 1950 (fecha correspondiente a la pérdida de nacionalidad de la abuela tras el exilio).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. D. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 21 de Enero de 2014 (18ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Doña R-A. contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela)

HECHOS

- 1.- Con fecha 9 de diciembre de 2009, Doña R-A. presenta escrito ante el Consulado de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documento de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento de la interesada emitido por el Registro Civil venezolano, certificado español de nacimiento de su padre, Don J-J. y certificado de nacimiento español de su abuela que acredita su nacimiento en España en 1903, de padres naturales de España, certificado de la Dirección Nacional de Migraciones y Zonas Fronterizas de Venezuela que acredita su ingreso en ese país, a través del puerto de La G. en 1938, y certificado de matrimonio con súbdito venezolano en 1950.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Auto de 18 de febrero de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Venezuela el 21 de septiembre de 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas (Venezuela) se dictó Auto el 18 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española

como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante, la de su padre y la de su abuela que prueba su nacimiento en España en el año 1903, de padres españoles. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda.

Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significa hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país

de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, sino también que su abuela, Sra. Q. fue exilada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España.

Dan fe de estos hechos, en primer lugar el certificado venezolano de inmigración, que acredita la entrada efectiva y no temporal de la Sra. Q. en ese país en 1938, así como la partida de nacimiento y el resto de los documentos de identidad de la abuela de la solicitante, que dan fe de su nacimiento en España en 1903, de padres españoles, y el certificado de matrimonio de los abuelos de la solicitante, que indica la fecha de matrimonio de la Sra. Q. con súbdito venezolano en diciembre de 1950 (fecha correspondiente a la pérdida de nacionalidad de la abuela tras el exilio).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr D. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Caracas.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (2ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don I-T. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional

séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, y certificado español de nacimiento de su madre (quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por el artículo 20.1 b) del Código Civil), y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 1 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en R-M. B-A. (Argentina) el 27 de octubre de 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 1 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del

padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce el nacimiento de aquel en España en el año 1911, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuelo español únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada

a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. Por lo demás, lo único que puede entenderse probado es que el abuelo del interesado obtuvo la ciudadanía argentina, por naturalización, en el año 1946, por lo que, al nacer la madre del interesado en 1958, ésta siguió ya, de origen, la nacionalidad extranjera de su propio progenitor.

VIII. Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a todos los nietos de españoles que en algún momento emigraron a otros países, fuese cual fuese la causa de tal emigración, ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad de aquella - conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor, concretamente, de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20 de abril "a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional" por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (13ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don R. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado cubano de nacimiento de su madre y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central, mediante Acuerdo de 22 de julio de 2009 deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en La H. (Cuba) el 7 de octubre de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se dictó Acuerdo el 22 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la parte solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España en el año 1902, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del interesado como nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011 y de 25 de octubre de 2011).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral

y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la parte solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse probado, en primer lugar, que el referido abuelo, Sr. Del V. sufriese exilio como consecuencia de la Guerra Civil. De hecho, lo único que queda constatado es que el abuelo del Sr. C. ya se encontraba en Cuba en 1937, fecha en la que contrajo matrimonio. Pero se insiste en que no se ha probado la condición de exilado de Guerra del indicado abuelo, puesto que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (15ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que no pudo transmitir su nacionalidad española como consecuencia del exilio que se presume acreditado por la salida de España de 1936 a 1955.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

- 1.- Doña R. presenta escrito en el Registro Civil Consular de La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, de su madre y de su abuelo.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 20 de octubre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular, como española de origen, a la nacida en Cuba en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 20 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo, hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud. Por un lado y a los efectos de acreditar la condición de nietos de española : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre

o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". Y por otro lado a fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y de su madre y la expedida por el Registro Civil español de su abuelo, resultando de esta última su nacimiento en B. en el año 1927 de padres naturales de España, si bien el padre nacido en Cuba con anterioridad a 1889. Igualmente se ha aportado al expediente certificado del Archivo Nacional de la República de Cuba en el que consta la entrada en el país del abuelo de la recurrente, de 15 años de edad, nacionalidad española, procedente de B. en el vapor español M. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuelo español ni su condición de exiliado únicamente corresponde analizar si concurre el otro requisito al que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

V.- Respecto de dicho requisito, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significaría hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no

obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocer a los nietos de aquellos abuelos que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, entendiéndose acreditada la condición de la solicitante de nieta de español, queda así mismo acreditada la condición de exiliado del abuelo por su salida de España en el año 1942, teniendo que adoptar la nacionalidad cubana en 1961, con posterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante. Por todo cuanto antecede deben entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecido por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, revocando el Acuerdo dictado con fecha 20 de octubre de 2009, por el encargado del Registro Civil Consular de La Habana, y reconociendo a Doña R. la opción a la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (40ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución de la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don J-M. presenta escrito ante el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado español de nacimiento de su padre, quien optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y certificado español de nacimiento de su abuela, nacida en La H. hija de madre española, con filiación paterna desconocida.

2.- La Encargada del Registro Civil Consular, mediante Acuerdo de 13 de julio de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en H. (Cuba) el 4 de septiembre de 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó Acuerdo el 13 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela, expedida por el Registro Consular español en La Habana (Cuba), de la que se deduce su nacimiento en la referida ciudad en 1922, de madre española de origen y de filiación paterna desconocida.

Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría en todo caso hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma condicionado a que la mujer siguiese la nacionalidad de su marido) o aun conservándola (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído después de la entrada en vigor de la Ley de 16 de julio de 1954 éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración

en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que igualmente deben quedar incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 - y por ello no se incluyen en la disposición final sexta de la Ley 20/2011 - los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, bien porque el matrimonio fue contraído antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 15 de julio de 1954 - en cuyo caso y conforme a la legislación vigente el matrimonio en todo caso acarrea para la mujer la pérdida de la nacionalidad española -, bien porque aunque contraído con posterioridad la ley del marido les atribuía su nacionalidad y por tanto no pudieron conservarla, o bien porque aun no habiendo matrimonio, y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieta de abuela española de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exilada de la referida abuela, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18

de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (41ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña G. presenta escrito ante el Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, certificado español de nacimiento de su abuelo, certificado de acceso a la nacionalidad cubana de su abuelo, y certificado de matrimonio de sus abuelos en 1932.

2.- El Magistrado-Juez-Encargado del Registro Civil Central, mediante Acuerdo de 13 de octubre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del

Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en La H. (Cuba) el 16 de septiembre de 1962, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se dictó Acuerdo el 13 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1904, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir

en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción. De hecho, lo único que queda acreditado en las presentes actuaciones es que el abuelo de la interesada ya se encontraba físicamente en Cuba en el año 1932, fecha en la que contrajo matrimonio en aquel país, sin que exista constancia alguna de su regreso a España antes del inicio de la Guerra.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (42ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora contra la resolución del Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña M-S. presenta escrito ante el Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, apartado segundo, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: documentos de identidad, certificado de nacimiento propio, certificado argentino de nacimiento de su padre y certificado español de nacimiento de su abuelo.

2.- El Magistrado-Juez-Encargado del Registro Civil Central, mediante Acuerdo de 30 de noviembre de 2009, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en M-P. (Argentina) el 6 de agosto de 1960, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto

en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se dictó Acuerdo el 30 de noviembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El Acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuelo, expedida por el Registro municipal español, de la que se deduce su nacimiento en España, en 1900, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante como nieta de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que el abuelo hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que él no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la parte solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo significarla hacer de peor condición al descendiente del abuelo que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de

la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante como nieto de abuelo español de origen, no puede entenderse acreditada la condición de exiliado del referido abuelo, como consecuencia de la Guerra Civil por no haber sido aportados los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, sin que la misma pueda tampoco presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Del mismo modo respecto a algunas de las manifestaciones realizadas en el escrito de recurso, que permiten deducir una solicitud acerca del acceso a la nacionalidad española por una vía diferente a la inicialmente consignada del apartado 2º de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 (en concreto la vía del apartado 1º de la misma Disposición), no procede realizar pronunciamiento dispositivo alguno en la presente resolución, habida cuenta de que la solicitud en su momento formulada por la parte actora no quedaba referida a tal vía, sin que sea el cauce de recurso el oportuno para hacer valer nuevas solicitudes diferentes a la que dio lugar a la resolución ahora recurrida.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (48ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al art. 20.1.b del Código Civil y, posteriormente en base a la Ley 52/2007, certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al

amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante, así como las de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1914 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad

familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello

de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 30 de septiembre de 1944, en Argentina con extranjero, según consta en la certificación de matrimonio aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1945, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, toda vez que no queda acreditado en el expediente, la fecha exacta de su salida de España y su ingreso en Argentina. Queda claro que en el año 1935 la Sra. A. obtuvo parte de la documentación necesaria para emigrar, pero sin que se pueda concretar la fecha exacta en la que tuvo lugar su salida de España, existiendo un vacío documental insalvable entre el último documento emitido por una autoridad española, Acta Cédula Personal de Identidad emitida por la Diputación Provincial de Lugo, en marzo de 1936, y la primera documentación que consta en el expediente, emitida por la Policía Federal de la República Argentina en 1939. En consecuencia, no se ha podido demostrar uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española en base al exilio de los abuelos, la salida de España con posterioridad al día 18 de julio de 1936.

VIII.- En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha

sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (49ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al art. 20.1.b del Código Civil y, posteriormente en base a la Ley 52/2007, certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de febrero de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de diciembre de 2009, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local del solicitante, así como las de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1914 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido

transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento (art.22 del Código Civil), hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 30 de septiembre de 1944, en Argentina con extranjero, según consta en la certificación de matrimonio aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1945, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, toda vez que no queda acreditado en el expediente, la fecha exacta de su salida de España y su ingreso en Argentina. Queda claro que en el año 1935 la Sra. A. obtuvo parte de la documentación necesaria para emigrar, pero sin que se pueda concretar la fecha exacta en la que tuvo lugar su salida de España, existiendo un vacío documental insalvable entre el último documento emitido por una autoridad española, Acta Cédula Personal de Identidad emitida por la Diputación Provincial de Lugo, en marzo de 1936, y la primera documentación que consta en el expediente, emitida por la Policía Federal de la República Argentina en 1939. En consecuencia, no se ha podido demostrar uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española en base al exilio de los abuelos, la salida de España con posterioridad al día 18 de julio de 1936.

VIII.- En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don S. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular e Buenos Aires.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (50ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña F. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al art. 20.1.b del Código Civil y, certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 29 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del

Registro Civil local de la solicitante, así como las de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1923 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no

transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 6 de marzo de 1943 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en la certificación de matrimonio y libro de familia aportados y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1949, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente

reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, toda vez que queda acreditado, en el expediente, su salida de España el 1 de febrero de 1936 y su ingreso en Argentina, en el buque S-T. el 23 de febrero de 1936, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- Respecto a la afirmación vertida en el escrito de recurso, en relación con el trato discriminatorio recibido por las mujeres españolas casadas con extranjeros, respecto de los hombres que no perdían la nacionalidad española por matrimonio, tan solo cabe aducir que en este caso, el tratamiento jurídico sería igual para el supuesto de que la recurrente fuera nieta de abuelo ya que, la condición que no se cumple es la del exilio, lo cual reza igual para la abuela de la recurrente como para su hermano que la acompañaba en ese viaje, que tuvo lugar con anterioridad al día 18 de julio de 1936, fecha a partir de la cual se computa el exilio, tal y como ya se ha expuesto en el párrafo anterior.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña F. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (51ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña V. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al art. 20.1.b del Código Civil y, certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 29 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante, así como las de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1923

de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente

disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 6 de marzo de 1943 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en la certificación de matrimonio y libro de familia aportados y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1949, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el

31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, toda vez que queda acreditado, en el expediente, su salida de España el 1 de febrero de 1936 y su ingreso en Argentina, en el buque S-T, el 23 de febrero de 1936, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- Respecto a la afirmación vertida en el escrito de recurso, en relación con el trato discriminatorio recibido por las mujeres españolas casadas con extranjeros, respecto de los hombres que no perdían la nacionalidad española por matrimonio, tan solo cabe aducir que en este caso, el tratamiento jurídico sería igual para el supuesto de que la recurrente fuera nieta de abuelo ya que, la condición que no se cumple es la del exilio, lo cual reza igual para la abuela de la recurrente como para su hermano que la acompañaba en ese viaje, que tuvo lugar con anterioridad al día 18 de julio de 1936, fecha a partir de la cual se computa el exilio, tal y como ya se ha expuesto en el párrafo anterior.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña V. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 27 de Enero de 2014 (52ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al art. 20.1.b del Código Civil y, certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 29 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante, así como las de su madre y de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1923

de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente

disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 6 de marzo de 1943 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en la certificación de matrimonio y libro de familia aportados y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1949, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el

31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, toda vez que queda acreditado, en el expediente, su salida de España el 1 de febrero de 1936 y su ingreso en Argentina, en el buque S-T, el 23 de febrero de 1936, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- Respecto a la afirmación vertida en el escrito de recurso, en relación con el trato discriminatorio recibido por las mujeres españolas casadas con extranjeros, respecto de los hombres que no perdían la nacionalidad española por matrimonio, tan solo cabe aducir que en este caso, el tratamiento jurídico sería igual para el supuesto de que la recurrente fuera nieta de abuelo ya que, la condición que no se cumple es la del exilio, lo cual reza igual para la abuela de la recurrente como para su hermano que la acompañaba en ese viaje, que tuvo lugar con anterioridad al día 18 de julio de 1936, fecha a partir de la cual se computa el exilio, tal y como ya se ha expuesto en el párrafo anterior.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña R. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 27 de Enero de 2014 (53ª)

III.1. 3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú)

HECHOS

1.- Doña A., presenta escrito en el Consulado de España en Lima a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre en el que consta que obtuvo la nacionalidad española por opción, en virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 b del Código Civil; certificados de nacimiento y matrimonio de su abuela expedidos por el Registro Civil español, en los que consta su nacimiento en España en 1925 con anotación marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 10 de agosto de 2005. Así mismo aporta pasaporte español de la abuela en el que se acredita su salida de España el 8 de agosto de 1954 y su ingreso en Argentina el día 24 de agosto de 1954.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 26 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Perú en 1988 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 26 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y el de su padre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última el nacimiento de la abuela en España en el año 1925 de padres españoles. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad

española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española, se da la circunstancia de que la abuela perdió su nacionalidad española, conforme a lo previsto en el art. 22 del Código Civil en su primera redacción, según Real Decreto de 24 de julio de 1889, por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 5 de julio de 1954 en España, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1957, el cual siguió la nacionalidad extranjera del padre. Así

pues la pérdida de la nacionalidad española de la abuela no se produjo como consecuencia de su exilio, que se inició el 8 de agosto 1954 con su salida de España, según consta en el pasaporte expedido por el Gobierno Civil de la Coruña, si no por matrimonio como ha quedado acreditado. Por lo expuesto no se cumplen los requisitos exigidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- Respecto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre el hecho de que la Sra. P. viajara en el año 1954 con pasaporte español expedido el 21 de julio de 1954, no acredita su nacionalidad española, que había perdido 18 días antes de su expedición, por haber contraído matrimonio con extranjero. La concesión de dicho pasaporte constituye un error administrativo que no puede prevalecer sobre el imperio de la Ley, en concreto, como ya se ha expresado, sobre lo dispuesto en el art. 22 del Código Civil en su primera redacción, según Real Decreto de 24 de julio de 1889.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Lima

Resolución de 27 de Enero de 2014 (54ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú)

HECHOS

1.- Doña C., presenta escrito en el Consulado de España en Lima a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre en el que consta que obtuvo la nacionalidad española por opción, en virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 b del Código Civil; certificados de nacimiento y matrimonio de su abuela expedidos por el Registro Civil español, en los que consta su nacimiento en España en 1925 con anotación marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 10 de agosto de 2005. Así mismo aporta pasaporte español de la abuela en el que se acredita su salida de España el 8 de agosto de 1954 y su ingreso en Argentina el día 24 de agosto de 1954.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 26 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Perú en 1991 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 26 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y el de su padre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última el nacimiento de la abuela en España en el año 1925 de padres españoles. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad

española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española, se da la circunstancia de que la abuela perdió su nacionalidad española, conforme a lo previsto en el art. 22 del Código Civil en su primera redacción, según Real Decreto de 24 de julio de 1889, por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 5 de julio de 1954 en España, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1957, el cual siguió la nacionalidad extranjera del padre. Así

pues la pérdida de la nacionalidad española de la abuela no se produjo como consecuencia de su exilio, que se inició el 8 de agosto 1954 con su salida de España, según consta en el pasaporte expedido por el Gobierno Civil de la Coruña, si no por matrimonio como ha quedado acreditado. Por lo expuesto no se cumplen los requisitos exigidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- La alegación formulada sobre el hecho de que la Sra. P. viajara en el año 1954 con pasaporte español expedido el 21 de julio de 1954, no acredita su nacionalidad española, que había perdido 18 días antes de su expedición, por haber contraído matrimonio con extranjero. La concesión de dicho pasaporte constituye un error administrativo que no puede prevalecer sobre el imperio de la Ley, en concreto, como ya se ha expresado, sobre lo dispuesto en el art. 22 del Código Civil en su primera redacción, según Real Decreto de 24 de julio de 1889.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Lima

Resolución de 27 de Enero de 2014 (55ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú)

HECHOS

1.- Doña E., presenta escrito en el Consulado de España en Lima a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre en el que consta que obtuvo la nacionalidad española por opción, en virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 b del Código Civil; certificados de nacimiento y matrimonio de su abuela expedidos por el Registro Civil español, en los que consta su nacimiento en España en 1925 con anotación marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 10 de agosto de 2005. Así mismo aporta pasaporte español de la abuela en el que se acredita su salida de España el 8 de agosto de 1954 y su ingreso en Argentina el día 24 de agosto de 1954.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 26 de julio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Perú en 1979 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 26 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil local de la solicitante y el de su padre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última el nacimiento de la abuela en España en el año 1925 de padres españoles. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007

condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber

contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española, se da la circunstancia de que la abuela perdió su nacionalidad española, conforme a lo previsto en el art. 22 del Código Civil en su primera redacción, según Real Decreto de 24 de julio de 1889, por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 5 de julio de 1954 en España, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1957, el cual siguió la nacionalidad extranjera del padre. Así pues la pérdida de la nacionalidad española de la abuela no se produjo como consecuencia de su exilio, que se inició el 8 de agosto 1954 con su salida de España, según consta en el pasaporte expedido por el Gobierno Civil de la Coruña, si no por matrimonio como ha quedado acreditado. Por lo expuesto no se cumplen los requisitos exigidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- La alegación formulada sobre el hecho de que la Sra. P. viajara en el año 1954 con pasaporte español expedido el 21 de julio de 1954, no acredita su nacionalidad española, que

había perdido 18 días antes de su expedición, por haber contraído matrimonio con extranjero. La concesión de dicho pasaporte constituye un error administrativo que no puede prevalecer sobre el imperio de la Ley, en concreto, como ya se ha expresado, sobre lo dispuesto en el art. 22 del Código Civil en su primera redacción, según Real Decreto de 24 de julio de 1889.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña E. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Lima

Resolución de 27 de Enero de 2014 (56ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Don R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1956, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 13 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1903 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la

citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela haya perdido su nacionalidad española por matrimonio con extranjero, celebrado en Argentina el 10 de enero de 1920, con anterioridad al nacimiento de su hijo el 24 de noviembre de 1929, razón por la que no pudo transmitirle la nacionalidad española, sin embargo no puede acreditarse la condición de exiliada de la abuela con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del recurrente, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don R. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 27 de Enero de 2014 (57ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

1.- Don L-G. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 31 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 31 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La Resolución apelada basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, así como la de su madre y de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1909 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art. 18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 22 de diciembre de 1928 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en la certificación de matrimonio y libro de familia aportados y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1940, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela del interesado perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don L-G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. Encargado del Registro Civil Consular de Córdoba (Argentina).

Resolución de 27 de Enero de 2014 (59ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por Don M. G. contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Con fecha 23 de noviembre de 2009, Don M. G. presenta escrito ante el Encargado del Registro Civil Central a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007

Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documento de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificado de nacimiento del interesado y de su padre emitido por el Registro Civil mexicano y, documentación de su abuela que acredita su nacimiento en España en 1925, de padres naturales de España, y documentación en la que consta su ingreso en México en el año 1939.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de 27 de octubre de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en México el 11 de junio de 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Caracas se dictó acuerdo el 27 de octubre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela sea española, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda

a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil mexicano del solicitante, la de su padre y las de los hijos y nietos de su abuela, expedidos por el Registro Civil Consular en México que acreditan el nacimiento de Doña M. en España en el año 1925, de padres españoles.

Si bien es cierto que el recurrente no ha podido aportar certificación de nacimiento de su abuela, no es menos cierto que de la numerosa documentación obrante en el expediente relativa a la Sra. A. y sus descendientes, se puede afirmar que nació en M. el 14 de febrero de 1925. Lugar y fecha de nacimiento que aparece en las partidas de nacimiento expedidas a sus descendientes por el Registro Civil Consular español en México, su partida de matrimonio, así como en la documentación que acredita su exilio y posterior residencia, ininterrumpida, en México. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país

de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieto de ciudadana española de origen, nacida en España en 1925, de padres españoles, sino también que su abuela, Sra. A., fue exiliada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España. Dan fe de estos hechos, la documentación obrante en el expediente expedida por las autoridades de emigración francesa y mexicana, que acredita que la abuela del recurrente se desplazó a México vía Francia en julio de 1939, en el vapor M. y entró en México, a través del puerto de V., el 27 de julio de 1939. Así mismo, consta en el expediente certificado de celebración del matrimonio de los abuelos del recurrente el 13 de abril de 1942, fecha en la que la abuela perdió la nacionalidad española y no pudo transmitírsela a su hijo, padre del interesado, nacido en 1944, quien siguió la nacionalidad mexicana de su progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho del Sr. G. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (58ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña Y. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento

propio y certificados de nacimiento, expedidos por el Registro Civil español, de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b del Código Civil, y de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 26 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1969 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 26 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que e la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y las expedidas por el Registro Civil español de su madre y de su abuela, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1916 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 16 de mayo de 1938, según consta en el certificado de matrimonio presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la madre de la solicitante, ocurrido el 22 de junio de 1940, y

que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. A mayor abundamiento, la propia recurrente en su escrito de recurso manifiesta “si bien mi abuela no acredita el exilio por las fechas que exige lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007...” por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, tal y como exige la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VIII.- Finalmente, por lo que se refiere a la alegación formulada en el escrito de recurso relativa a la discriminación de los nietos de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que históricamente hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española *iure sanguinis* en función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede acogerse como motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el Tribunal Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley, puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico [STC 119/1987]. La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”. En cualquier caso, en este supuesto, lo que condiciona la no concesión de la nacionalidad española es la inexistencia de exilio y no la condición femenina de su abuela.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Y. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (59ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

- 1.- Doña M^a-F. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b del Código Civil, y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 23 de febrero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17^a), 25 de octubre de 2011 (3^a), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de julio de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 23 de febrero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la

documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y de su padre y la de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significaría hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada

la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 4 de junio de 1938 en Argentina con ciudadano extranjero, según consta en el certificado de matrimonio aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento del hijo el 21 de junio de 1942, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por el contrario, consta en el expediente certificado de arribo a América, a nombre de la abuela de la recurrente, que refleja como fecha de entrada en B-A. procedente de V. en el buque C-A. el 22 de julio de 1929 circunstancia ratificada por la propia interesada en su escrito de recurso al afirmar "Mi abuela, Doña M^a-S. llegó a Argentina en el año 1929 con dos de sus hermano...".

Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7^a de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M^a-F. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (60^a)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.).

HECHOS

1.- Doña M^a-N. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad

española en base a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 26 de enero de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1986, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 26 de enero de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y de su madre y la de su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1912 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir, el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad

española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 5 de abril de 1939 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en el certificado de matrimonio aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la hija el 30 de julio de 1943, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado

los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada en su escrito de recurso firma que la abuela, "tuvo entrada en la República Argentina en el año 1926 aproximadamente, con 13 años de edad..."

Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Mª-N. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (61ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina.)

HECHOS

1.- Doña M-B. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b del Código Civil y, posteriormente en base a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y certificado de bautismo de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 26 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 26 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y la de su padre expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última el nacimiento de su madre, abuela de la recurrente, en España en el año 1900. Se acompaña, así mismo, certificado de bautismo de la abuela en la que consta como nacida en 1900, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción

por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad

centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en Argentina con ciudadano extranjero, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

VIII.- Por lo que se refiere a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige

una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa

IX.-En cuanto a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-B. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (62ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Don A-J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificados de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b de Código Civil, y de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 6 de abril de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 6 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro Civil español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1905, de padres españoles. Así mismo consta en el certificado de nacimiento de la madre del interesado que el abuelo se naturalizó argentino el 19 de agosto de 1935. Por ello no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del recurrente, nacida en 1942. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de

viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1935, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante ocurrido en el año 1942, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, el propio interesado en su escrito de recurso manifiesta que “Aunque mi abuelo no acreditase ser exiliado, el gobierno argentino instaba a los empleados públicos que fuesen extranjeros a naturalizarse...” Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don A-J. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado de Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (63ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires Argentina.

HECHOS

- 1.- Doña A-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre

-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre constando en esta última que su padre, abuelo de la recurrente, era nacido en España en 1898. Así mismo consta en dicha certificación que el abuelo se naturalizó argentino el día 26 de julio de 1929, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido el 28 de mayo de 1930. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1929,

con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1930, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, la propia interesada en su escrito de recurso manifiesta “Si bien mi abuelo paterno –español de origen-, emigró a la Argentina antes de la Guerra Civil...”. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII.- En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que la recurrente haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión de la recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

IX.- Por lo que se refiere a la alegación formulada en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que supondría el diferente trato del que son objeto los hijos menores de edad y los hijos que ya han alcanzado la mayoría de edad ha de tenerse en cuenta que en la medida en que el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece un derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española de origen a favor de las personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” sin establecer distinción alguna en relación con tales hijos, dicha alegación no puede ser estimada en relación con la solicitud del derecho de opción al amparo de dicha norma que motiva el recurso. Y ello con independencia del diferente trato legal del que son objeto los hijos de quien adquiere de manera sobrevenida la nacionalidad española según sean menores o mayores de edad cuando tal adquisición se produce en orden a la posibilidad de ejercicio del derecho de opción previsto en el Art. 20.1.a Código civil. Posibilidad que precisamente para evitar dicha discriminación también se reconoce a favor de los hijos menores de edad de quienes adquieran la nacionalidad española de origen pero de forma sobrevenida al amparo del derecho de opción previsto en dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 por la regla Sexta de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008. Debiéndose tener en cuenta por tanto que el diferente trato de los hijos menores o mayores de edad en cuanto a la posibilidad del ejercicio del derecho de opción del art.20.1.a del Código civil no es el resultado de una determinada interpretación de la Administración sino que el mismo surge de la misma Ley a cuya aplicación está obligada esta Dirección General sin que le corresponda a la misma poner en duda la constitucionalidad de ese diferente trato legal por implicar el mismo una posible discriminación en el tratamiento de los hijos ,tal como se alega en el escrito de recurso, más aun cuando tal diferente trato puede tener una justificación razonable como consecuencia de las múltiples diferencias que se aprecian entre las situaciones de minoría

y mayoría de edad en los ámbitos personal y familiar y que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-M. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (64ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

1.- Doña A-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b de Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1962, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 31 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y la del Registro Civil español de su padre en la que consta que su madre, abuela de la recurrente, nació en España en el año 1903. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o

paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario

acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con ciudadano argentino, con anterioridad al nacimiento del hijo el 25 de marzo de 1929, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A-A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (65ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Bahía Blanca (Argentina).

HECHOS

1.- Con fecha 29 de enero de 2009, Doña L-E. presenta escrito ante el Encargado del Registro Civil Consular de Bahía Blanca a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta, especialmente, en apoyo de su solicitud como documentación: documento de identidad, hoja declaratoria de datos para la inscripción, certificados de nacimiento de la interesada emitido por el Registro Civil argentino, el de su madre emitido por el Registro Civil Central español en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b del Código Civil y, documentación de su abuela que acredita su nacimiento en España en 1930, de padres españoles y, pasaporte en el que consta su ingreso en Argentina, procedente de España en el año 1942.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de 18 de mayo de 2010, deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen a la nacida en Argentina el 19 de noviembre de 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley

52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Bahía Blanca se dictó acuerdo el 18 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela fuera exiliada y que perdiera la nacionalidad española como consecuencia del exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante, la de su madre y su abuela, expedidas por el Registro Civil español que acreditan el nacimiento de esta última en España en el año 1930, de padres españoles. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante como nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de al solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio.

Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes del abuelo que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.

VII.- En el presente expediente de recurso, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento, se considera probado, en contra de lo apreciado por el Registro actuante, que la parte interesada no sólo prueba su condición de nieta de ciudadana española de origen, nacida en España en 1930, de padres españoles, sino también que su abuela, Sra. R. fue exiliada, por haber abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y que perdió su nacionalidad española con posterioridad a su salida de España por matrimonio.

Dan fe de estos hechos, la documentación obrante en el expediente expedida por las autoridades de emigración españolas y argentinas, que acredita que la abuela de la recurrente se desplazó a Argentina vía C. el 17 de febrero de 1942, en el buque B-E. y entró en Argentina, a través del puerto de B-A. el 27 de marzo de 1942. Así mismo, consta en el expediente como fecha de celebración del matrimonio de los abuelos de la recurrente el 6 de agosto de 1949, fecha en la que la abuela perdió la nacionalidad española y no pudo transmitírsela a su hija, madre de la interesada, nacida en 1952, quien siguió la nacionalidad argentina de su progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso planteado y declarar el derecho de Doña L-E. a optar a la nacionalidad española de origen en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bahía Blanca (Argentina).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (66ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don A-M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificados de nacimiento, expedidos por el Registro Civil español, de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base a la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, y de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1976 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 26 de enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al

amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 29 de julio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino del solicitante y las expedidas por el Registro Civil español de su madre y de su abuela, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1912 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad

familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello

de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 6 de septiembre de 1941, según consta en el libro de familia presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la madre del solicitante, ocurrido el 20 de agosto de 1942, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. A mayor abundamiento, el propio recurrente en su escrito de recurso manifiesta que su abuela “vino a Argentina con sus padres... cuando contaba con tan solo 10 años”, de modo que si nació en 1912, ingresó en Argentina en el año 1922, por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, tal y como exige la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VIII.- Finalmente, por lo que se refiere a la alegación formulada en el escrito de recurso relativa a la discriminación de los nietos de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que históricamente hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española *iure sanguinis* en función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede acogerse como motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el Tribunal Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley, puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico [STC 119/1987]. La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”. En cualquier caso, en este supuesto, lo que condiciona la no concesión de la nacionalidad española es la inexistencia de exilio y no la condición femenina de su abuela.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don A-M. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (67ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

- 1.- Doña C-S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1987, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y de su padre y la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1920 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d). A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 14 de junio de 1945 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en la certificación de matrimonio aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento del hijo en 1950, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña C-S. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (68ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

1.- Doña L-R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y de su padre y la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1920 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española

tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 14 de junio de 1945 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en la certificación de matrimonio aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento del hijo en 1950, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por

no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L-R. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (69ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

- 1.- Doña P-A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 16 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1958, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 16 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y de su padre y la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1903 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido

transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma "el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 27 de marzo de 1926 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en el libro de familia aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento del hijo el 10 de diciembre de 1926, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, circunstancia ratificada por la propia recurrente en su escrito de recurso, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña P-A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (70ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

1.- Doña M^a-C. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 16 de abril de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 16 de abril de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y de su padre y la de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1903 de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al

mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d). A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio el 27 de marzo de 1926 en Argentina con ciudadano argentino, según consta en el libro de familia aportado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento del hijo el 10 de diciembre de 1926, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Así pues, conforme a lo descrito, la abuela de la interesada perdió la nacionalidad española por matrimonio y no como consecuencia del exilio, circunstancia ratificada por la propia recurrente en su escrito de recurso, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestima el recurso interpuesto por Doña Mª-C. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (71ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio, así como los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don E. presenta escrito (Anexo II) en el Registro Civil de Madrid, para el Central, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 apartado segundo de la

Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados de nacimiento, expedidos por la autoridad Cubana, propio y de su madre y certificado de nacimiento español de su abuelo.

2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 4 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por el interesado en base a que no ha quedado acreditado que su abuelo perdiera la nacionalidad española como consecuencia del exilio, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado conformándose con la resolución denegatoria de su solicitud, reconociendo que su abuelo nunca perdió la nacionalidad española, y formula una nueva solicitud, alegando que su madre fue española de origen y acompaña al recurso un nuevo formulario Anexo I.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª), 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª), 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª), 10 de febrero 2012 (42ª), 17 de febrero 2012 (30ª), 22 de febrero 2012 (53ª), 6 de julio 2012 (5º), 6 de julio 2012 (16ª), 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II.-A la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería, únicamente, confirmar la resolución recurrida. Ahora bien dado que en vía de recurso el solicitante presenta nueva solicitud, sin incorporar nueva documentación, procede, por economía procedimental, y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil analizar dicha solicitud.

III.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en Cuba el 1 de octubre de 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de abril de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda.

IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia Disposición. A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del

apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-. En el presente caso, la certificación que se acompaña, expedida por la autoridad cubana, refleja el nacimiento de la madre del interesado en SC. del S. provincia de C. el 8 octubre de 1949, de padres nacidos en España, certificación que no acredita, conforme a lo expuesto en el párrafo anterior la nacionalidad española de origen de la madre del solicitante

V.- Así pues, en el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don E. y confirmar el acuerdo dictado el 4 de marzo de 2011, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (72ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en México D.F. (México)

HECHOS

1.- Doña M-C. presenta escrito en el Consulado de España en México D.F. a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil, así como certificado de nacimiento de su abuelo expedido por el Registro Civil Consular español.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 9 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en México en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 9 de marzo de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en México en 1918, de padres españoles. Así mismo

consta documentación en el expediente que acredita que el abuelo se naturalizó mexicano el 11 de marzo de 1947, recuperando su nacionalidad española el día 3 de septiembre de 2002, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española en el momento de su nacimiento, a su hija, madre de la recurrente, nacida el 27 de febrero de 1955. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad mexicana en el año 1947, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1955, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente

la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil de México.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (73ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en México D.F. (México)

HECHOS

1.- Don A-F. presenta escrito en el Consulado de España en México D.F. a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil, así como certificado de nacimiento de su abuelo expedido por el Registro Civil Consular español.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 9 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en México en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 9 de marzo de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en México en 1918, de padres españoles. Así mismo consta documentación en el expediente que acredita que el abuelo se naturalizó mexicano el 11 de marzo de 1947, recuperando su nacionalidad española el día 3 de septiembre de 2002, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española en el momento de su nacimiento, a su hija, madre del recurrente, nacida el 27 de febrero de 1955. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia

del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad mexicana en el año 1947, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante ocurrido en el año 1955, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don A-F. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Mexico.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (74ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil, así como certificado de nacimiento de su abuelo expedido por el Registro Civil español.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 24 de agosto de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 24 de agosto de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero del solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1909 de padres españoles. Así mismo consta documentación en el expediente que acredita que el abuelo se naturalizó argentino el día 8 de julio de 1938, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del recurrente, nacido el 12 de julio de 1947. Al propio tiempo y, en contradicción con lo expresado, también consta en el expediente documentación expedida por los Consulados de España en Buenos Aires y Mendoza en los años 1938, 1943 y 1969, en los que se certifica la nacionalidad española del abuelo del interesado. Así pues, dando por buena la condición de nieto de español del recurrente, corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se

presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1938, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del interesado ocurrido en el año 1947, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

A mayor abundamiento, consta en el expediente un certificado expedido el 7 de febrero de 1938, por el Cónsul General de España en Buenos Aires en el que se certifica que el abuelo del recurrente “reside en el país desde 1912”. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don S. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires..

Resolución de 30 de Enero de 2014 (75ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

- 1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil, así como certificado de nacimiento de su abuelo expedido por el Registro Civil español.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 24 de agosto de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 24 de agosto de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud:

“2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1909 de padres españoles. Así mismo consta documentación en el expediente que acredita que el abuelo se naturalizó argentino el día 8 de julio de 1938, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido el 12 de julio de 1947. Al propio tiempo y, en contradicción con lo expresado, también consta en el expediente documentación expedida por los Consulados de España en Buenos Aires y Mendoza en los años 1938, 1943 y 1969, en los que se certifica la nacionalidad española del abuelo de la interesada. Así pues, dando por buena la condición de nieta de español de la recurrente, corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de

julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1938, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1947, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente un certificado expedido el 7 de febrero de 1938, por el Cónsul General de España en Buenos Aires en el que se certifica que el abuelo del recurrente “reside en el país desde 1912”. Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (76ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Doña A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil, así como certificado de nacimiento de su abuelo expedido por el Registro Civil español.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 24 de agosto de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1974, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 24 de agosto de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su padre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1909 de padres españoles. Así mismo consta documentación en el expediente que acredita

que el abuelo se naturalizó argentino el día 8 de julio de 1938, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la recurrente, nacido el 12 de julio de 1947. Al propio tiempo y, en contradicción con lo expresado, también consta en el expediente documentación expedida por los Consulados de España en Buenos Aires y Mendoza en los años 1938, 1943 y 1969, en los que se certifica la nacionalidad española del abuelo de la interesada. Así pues, dando por buena la condición de nieta de español de la recurrente, corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1938, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1947, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de

la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente un certificado expedido el 7 de febrero de 1938, por el Cónsul General de España en Buenos Aires en el que se certifica que el abuelo del recurrente "reside en el país desde 1912". Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (77ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

1.- Don M-D. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b del Código Civil y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 3 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1981, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 3 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino del solicitante y las de su madre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1929, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí

deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII. - En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en Argentina con ciudadano extranjero el día 23 de diciembre de 1952, según consta en el libro de familia aportado, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1961, madre del interesado, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente copia del Documento Nacional de Identidad, expedido por las autoridades argentinas, el 7 de marzo de 2008, a nombre de la abuela del interesado, en el que se refleja como fecha de entrada en Argentina el 13 de septiembre de 1930, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por M-D. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (78ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina.)

HECHOS

1.- Doña V. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b del Código Civil y certificado de nacimiento de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 3 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 3 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino de la solicitante y las de su madre y su abuela expedidas por el Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1929, de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al

mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en Argentina con ciudadano extranjero el día 23 de diciembre de 1952, según consta en el libro de familia aportado, con anterioridad al nacimiento de la hija en 1961, madre de la interesada, y que esta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente copia del Documento Nacional de Identidad, expedido por las autoridades argentinas, el 7 de marzo de 2008, a nombre de la abuela de la interesada, en el que se refleja como fecha de entrada en Argentina el 13 de septiembre de 1930, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña V-S. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (79ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador)

HECHOS

1.- Doña Mª-B. presenta escrito en el Consulado de España en Guayaquil a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y certificado de nacimiento de su abuela. Así mismo presenta numerosa documentación que acredita el asentamiento de la familia Riera en Ecuador desde finales del siglo XIX

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 3 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Ecuador en 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 3 de marzo de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante;

c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil ecuatoriano de la solicitante y su abuela, así como la de su padre, expedida por el Registro Civil español, resultando de estas últimas el nacimiento de la abuela de la recurrente, en Ecuador en el año 1905, de padre español. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que

conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con ciudadano extranjero, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no

únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española. A mayor abundamiento, valorada en su conjunto la numerosa documentación obrante en el expediente, sobre el asentamiento de la familia R. en Ecuador desde finales del siglo XIX, se puede afirmar que ya los bisabuelos de la recurrente residían en Ecuador, si bien es cierto que manteniendo vínculos muy estrechos de relación con España, pero que la abuela de la interesada ni nació ni vivió en España, razón por la que no puede ser calificada de exiliada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Mª-B. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (80ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador)

HECHOS

1.- Don B-S. presenta escrito en el Consulado de España en Guayaquil a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y certificado de nacimiento de su abuela. Así mismo presenta numerosa documentación que acredita el asentamiento de la familia Riera en Ecuador desde finales del siglo XIX.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 3 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Ecuador en 1962, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 3 de marzo de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil ecuatoriano del solicitante y su abuela, así como la de su padre, expedida por el Registro Civil español, resultando de estas últimas el nacimiento de la abuela del recurrente, en Ecuador en el año 1905, de padre español. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o

paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con ciudadano extranjero, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del interesado, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española. A mayor abundamiento, valorada en su conjunto la numerosa documentación obrante en el expediente, sobre el asentamiento de la familia R. en Ecuador desde finales del siglo XIX, se puede afirmar que ya los bisabuelos de la recurrente residían en Ecuador, si bien es cierto que manteniendo vínculos muy estrechos de relación con España, pero que la abuela de la interesada ni nació ni vivió en España, razón por la que no puede ser calificada de exiliada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don B-S. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (81ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador)

HECHOS

1.- Don F-T. presenta escrito en el Consulado de España en Guayaquil a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y certificado de nacimiento de su abuela. Así mismo presenta numerosa documentación que acredita el asentamiento de la familia Riera en Ecuador desde finales del siglo XIX

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 3 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Ecuador en 1960, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al

amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 3 de marzo de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ". En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil ecuatoriano del solicitante y su abuela, así como la de su padre, expedida por el Registro Civil español, resultando de estas últimas el nacimiento de la abuela del recurrente, en Ecuador en el año 1905, de padre español. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de

lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al

mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con ciudadano extranjero, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre del interesado, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española. A mayor abundamiento, valorada en su conjunto la numerosa documentación obrante en el expediente, sobre el asentamiento de la familia R. en Ecuador desde finales del siglo XIX, se puede afirmar que ya los bisabuelos de la recurrente residían en Ecuador, si bien es cierto que manteniendo vínculos muy estrechos de relación con España, pero que la abuela de la interesada ni nació ni vivió en España, razón por la que no puede ser calificada de exiliada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don F-T. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (82ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador)

HECHOS

1.- Doña Mª de L. presenta escrito en el Consulado de España en Guayaquil a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, certificado de nacimiento de su padre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y certificado de nacimiento de su abuela. Así mismo presenta numerosa documentación que acredita el asentamiento de la familia Riera en Ecuador desde finales del siglo XIX

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 3 de marzo de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Ecuador en 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó auto el 3 de marzo de 2011, denegando lo solicitado.

III.- El Auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del

solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil ecuatoriano de la solicitante y su abuela, así como la de su padre, expedida por el Registro Civil español, resultando de estas últimas el nacimiento de la abuela de la recurrente, en Ecuador en el año 1905, de padre español. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también

ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española; que la abuela, conforme a la legislación vigente en España en ese momento, hubiera perdido su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con ciudadano extranjero, con anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la interesada, y que este siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no

únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española. A mayor abundamiento, valorada en su conjunto la numerosa documentación obrante en el expediente, sobre el asentamiento de la familia R. en Ecuador desde finales del siglo XIX, se puede afirmar que ya los bisabuelos de la recurrente residían en Ecuador, si bien es cierto que manteniendo vínculos muy estrechos de relación con España, pero que la abuela de la interesada ni nació ni vivió en España, razón por la que no puede ser calificada de exiliada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña Mª de L. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (83ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña L-N. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de octubre de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado admitiendo el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado, y formulando una nueva petición en base a que su abuelo paterno también era español. Acompaña a su nueva petición certificado de defunción de su abuelo paterno y certificado del Registro General de Cartas de Ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. A la vista de la solicitud inicial, la documentación aportada, y la conformidad que manifiesta la recurrente con dicho acuerdo, procede confirmar el acuerdo recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante alega la condición de español de su abuelo paterno procede, por economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dichas cuestiones.

III.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”. En el expediente que motiva esta petición y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se ha aportado la certificación de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y certificado de defunción de su abuelo paterno, así como certificado del registro General de cartas de ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951. Así pues, no se aporta la documentación requerida, según lo expuesto en el apartado anterior, para acreditar la condición de nieta de abuelo español. Dado que la interesada no acredita ser nieta de abuelo español por la vía paterna, no procede entrar a analizar si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de los nietos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L-N. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (84ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña L-R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de octubre de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado admitiendo el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado, y formulando una nueva petición en base a que su abuelo paterno también era español. Acompaña a su nueva petición certificado de defunción de su abuelo paterno y certificado del Registro General de Cartas de Ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". A la vista de la solicitud inicial, la documentación aportada, y la

conformidad que manifiesta la recurrente con dicho acuerdo, procede confirmar el acuerdo recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante alega la condición de español de su abuelo paterno procede, por economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dichas cuestiones.

III.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva esta petición y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se ha aportado la certificación de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y certificado de defunción de su abuelo paterno, así como certificado del registro General de cartas de ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951. Así pues, no se aporta la documentación requerida, según lo expuesto en el apartado anterior, para acreditar la condición de nieta de abuelo español. Dado que la interesada no acredita ser nieta de abuelo español por la vía paterna, no procede entrar a analizar si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de los nietos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña L-R. y confirma el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (85ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña M-B. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de octubre de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado admitiendo el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado, y formulando una nueva petición en base a que su abuelo paterno también era español. Acompaña a su nueva petición certificado de defunción de su abuelo paterno y certificado del Registro General de Cartas de Ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1956, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". A la vista de la solicitud inicial, la documentación aportada, y la conformidad que manifiesta la recurrente con dicho acuerdo, procede confirmar el acuerdo recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante alega la condición de español de su abuelo paterno procede, por economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dichas cuestiones.

III.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;

b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva esta petición y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se ha aportado la certificación de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y certificado de defunción de su abuelo paterno, así como certificado del registro General de cartas de ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951. Así pues, no se aporta la documentación requerida, según lo expuesto en el apartado anterior, para acreditar la condición de nieta de abuelo español. Dado que la interesada no acredita ser nieta de abuelo español por la vía paterna, no procede entrar a analizar si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de los nietos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-B. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (86ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

HECHOS

1.- Doña M-C. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de octubre de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado admitiendo el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado, y formulando una nueva petición en base a que su abuelo paterno también era español. Acompaña a su nueva petición certificado de defunción de su abuelo paterno y certificado del Registro General de Cartas de Ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. A la vista de la solicitud inicial, la documentación aportada, y la conformidad que manifiesta la recurrente con dicho acuerdo, procede confirmar el acuerdo recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante alega la condición de español de su abuelo paterno procede, por economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del Registro Civil, analizar dichas cuestiones.

III.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva esta petición y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se ha aportado la certificación de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y certificado de defunción de su abuelo paterno, así como certificado del registro General de cartas de ciudadanía en el que consta que este se naturalizó argentino el día 7 de junio de 1951. Así pues, no se aporta la documentación requerida, según lo expuesto en el apartado anterior, para acreditar la condición de nieta de abuelo español. Dado que la interesada no acredita ser nieta de abuelo español por la vía paterna, no procede entrar a analizar si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición

Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de los nietos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña M-C. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (87ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

HECHOS

1.- Doña A. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima y, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio, y certificado de nacimiento de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b del Código Civil, y posteriormente en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, así como certificado de nacimiento de su abuelo expedido por el Registro Civil español.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 8 de junio de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre;

la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida en Argentina en 1982, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de abril de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2009 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó resolución el 8 de junio de 2010, denegando lo solicitado.

III.- La resolución apelada basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y la del Registro español de su madre y de su abuelo, constando en esta última que era nacido en España en 1917. Así mismo consta documentación en el expediente que acredita que el abuelo se naturalizó argentino el día 21 de noviembre de 1947, razón por la que no pudo transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la recurrente, nacida el 10 de julio de 1960. Corresponde analizar, así mismo, si concurren en este caso los dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo, hubiera podido perder su nacionalidad española por haber adquirido la nacionalidad argentina en el año 1947, con anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1960, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo reseñado en el párrafo anterior, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, consta en el expediente copia del pasaporte de salida de España del abuelo de la interesada, en el que se refleja como fecha de salida septiembre de 1932 y, la propia interesada, en su escrito de recurso manifiesta que su abuelo "A la edad de 15 años aproximadamente (1932), a punto de estallar la Guerra Civil española, incitado por sus padres y su abuela, tuvo que venir a este país..." (Argentina). Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Doña A. y confirmar el acuerdo apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (88ª)

III.1.3.2-Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Don V-G. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado local de nacimiento, propio y de su madre, así como el de su abuela expedido por el Registro Civil español.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 1 de noviembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1963 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de mayo de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 1 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela".

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino del solicitante y de su madre, y la expedida por el Registro Civil español de su abuela, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1902 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta

reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art. 18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la

época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d). A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio en Argentina, con extranjero, en fecha 1 de agosto de 1921, según consta en la certificación de matrimonio presentada y, por tanto, con anterioridad al nacimiento en B-A. de la madre del solicitante, ocurrido el 9 de septiembre de 1930, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. Circunstancia absolutamente indemostrable aunque el recurrente tuviera en su poder la documentación acreditativa de la arribada de su abuela a Argentina ya que, para acreditar el exilio, como exige la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es preciso haber salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y no únicamente la residencia fuera de España en ese periodo de tiempo. Del conjunto de la documentación incorporada al expediente se pone de manifiesto que la abuela del recurrente ya residía en Argentina en 1921, por lo menos quince años antes del inicio de la Guerra Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don V-G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (89ª)

III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Bahía Blanca (Argentina).

HECHOS

1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en Bahía Blanca a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta

especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y certificados de nacimiento, expedidos por el Registro Civil español, de su madre, en el que consta que optó a la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b del Código Civil, y de su abuela.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3.- Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en Argentina en 1978 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de julio de 2010 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 8 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado.

III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.

IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: "2.1 Certificación literal de su nacimiento; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La

documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicho regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil argentino del solicitante y las expedidas por el Registro Civil español de su madre y de su abuela, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1925 de padres naturales de España. Por lo que pudiendo no cuestionarse en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, corresponde analizar, además, si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, madre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor

de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición". De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior".

VII.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entendiera acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 16 de febrero de 1951, según consta en el libro de familia presentado y, por tanto, con anterioridad al nacimiento de la madre del solicitante, ocurrido el 4 de diciembre de 1954, y que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada

de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio. Consta en el expediente certificado de Arribo a América, a nombre de la abuela del recurrente en el que se certifica que llegó a B-A. el 29 de noviembre de 1928, procedente de B. en el buque C-V. A mayor abundamiento, el propio interesado, en su escrito de recurso, manifiesta que su abuela "... el 16 de noviembre de 1928... debieron salir de España como consecuencia directa de la Dictadura instaurada por C-G. M-P de R..." por lo que no queda acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, tal y como exige la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto por Don J. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bahía Blanca (Argentina).

III.3.- Adquisición nacionalidad española por Opción

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad-art 20-1a cc

Resolución de 3 de enero de 2014 (85ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si la interesada ejercita la opción fuera de plazo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Córdoba (Argentina).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Córdoba el 25 de abril de 2012, Don P. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hija, P. nacida en Argentina el 23 de febrero de 1989, por haber estado sometida a la patria potestad de un español. Aporta certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta que adquirió la nacionalidad española de origen por opción el 15 de octubre de 2009.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo de fecha 23 de mayo de 2012, por el que deniega la opción a la nacionalidad española de la interesada, por tener 23 años cumplidos en el momento en el que se realiza la solicitud, estando la misma fuera de plazo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20.2.d) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, el promotor y la interesada presentaron conjuntamente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reconociendo que si bien cuando manifestó su voluntad de optar a la nacionalidad española había transcurrido el plazo de dos años establecido en el artículo 20 del Código Civil, dicho retraso no se debió a causa imputable a la promotora.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 y 22 del Código civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 4-2ª de julio de 2006; 16-5ª de marzo, 21-9ª de junio, 8-5ª y 21-2ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio y 2-4ª de julio de 2008; 3-4ª de febrero, 4-6ª de marzo, 2-6ª de Julio y 8-2ª de abril de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española una ciudadana argentina nacida el 23 de febrero de 1989, alegando que su padre adquirió la nacionalidad española por opción el 15 de octubre de 2009, siendo la interesada menor de edad conforme a su estatuto personal.

La petición se basa en el artículo 20.1.a) del Código civil, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó resolución denegando la solicitud por estimar que la interesada había presentado su solicitud una vez caducado el plazo establecido para ello (artículo 20.2.c CC.).

III.- Dispone el artículo 20 en su apartado 2.c) que “la opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación”. Pues bien, se presentó solicitud de opción a la nacionalidad española, como ya se ha dicho y expresamente reconocieron los interesados en el escrito de recurso, el 25 de abril de 2012, es decir una vez que la interesada ya había cumplido los 23 años, y sin que conste que no estuviera emancipada al llegar a los 18 años según su estatuto personal, por lo que tal derecho había caducado por el transcurso del plazo previsto en el precepto citado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).

Resolución de 3 de enero de 2014 (89ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere la nacionalidad española de origen por opción, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Bogotá el 26 de octubre de 2010, el ciudadano colombiano Don L.-J. nacido en Colombia el 20 de febrero de 1990, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo de español y haber estado bajo su patria potestad, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: registro de nacimiento del interesado; certificaciones literales de nacimiento de la abuela paterna y del padre, Don L.-J. en la que consta la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción el 17 de marzo de 2009; y fotocopia del pasaporte español del padre.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular, con fecha 7 de diciembre de 2010, dictó auto denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que el interesado nunca estuvo bajo la patria potestad de un español, pues en la fecha de adquisición de la nacionalidad española de su padre, él contaba con 18 años de edad cumplidos, no concurriendo los requisitos que establece el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Una vez notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el auto y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- El interesado, nacido en Colombia el 20 de febrero de 1990, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre, que adquirió por opción, inscribiéndose la misma el 17 de mayo de 2009. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por considerar que el interesado no había estado sujeto en ningún momento a la patria potestad de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.

III.- Dado que el interesado cumplió los 18 años el 20 de febrero de 2008, y que, por tanto, en la fecha en que el padre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, hay que concluir que el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto, con independencia de las razones técnicas u organizativas que hayan podido llevar al retraso en la tramitación del expediente de su progenitor.

IV.- Por otra parte, dispone el artículo 20 en su apartado 2.c) que “la opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación”. Pues bien, el promotor solicitó la opción a la nacionalidad

española, como ya se ha dicho, el 26 de octubre de 2010, es decir después de cumplidos, el 20 de febrero de este mismo año, los veinte años de edad y sin que conste que no estuviera emancipado al llegar a los 18 años según su estatuto personal, por lo que tal derecho había caducado por el transcurso del plazo previsto en el precepto citado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 3 de enero de 2014 (92ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible por razón de patria potestad alegando que la madre obtuvo la nacionalidad española por residencia en 2009, por no resultar acreditada la filiación materna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento y declaración de la nacionalidad española por opción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

HECHOS

1.- Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Torrelavega el 24 de noviembre de 2009, Doña A de J. solicitaba la nacionalidad española para su hijo, R-A. nacido en la República Dominicana el 19 de octubre de 2001, por haber estado sometido a la patria potestad de una ciudadana española. Adjuntaba, entre otra, la siguiente documentación: fotocopia del certificado de declaración de nacimiento del interesado sin legalizar; certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 29 de abril de 2009; certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI de la promotora, NIE y pasaporte del menor interesado.

2.- Una vez ratificada la promotora, el Encargado del Registro Civil requiere a la Sra. De J. para que aporte inscripción de nacimiento del menor interesado, debidamente legalizado y, asimismo, se libre exhorto al Registro Civil Consular del lugar de domicilio del padre del menor para que autorice la opción a la nacionalidad española. La interesada, con fecha 9 de febrero de 2010, aporta extracto del acta de nacimiento del menor, sin que la misma se encuentre debidamente legalizada.

3.- Una vez recibida la comparecencia del padre del menor, Don R-E. en la que manifiesta su conformidad con la solicitud de opción a la nacionalidad española de su hijo; con fecha 21 de mayo de 2010 se vuelve a requerir nuevamente a la promotora para que aporte inscripción extensa de nacimiento del menor, ya que la que presentó anteriormente es un extracto en la que no se puede comprobar la identidad de los progenitores, por faltar las menciones de identidad de los mismos y además, no está legalizada. En esta ocasión, la promotora aporta acta inextensa de nacimiento, pero sin la oportuna legalización.

4.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Torrelavega dictó auto con fecha 11 de octubre de 2010 en el que deniega la autorización a la

promotora para optar a la nacionalidad española en nombre del menor interesado, debido a que las certificaciones de nacimiento aportadas no ofrecen suficientes garantías, no se aporta una certificación literal como se ha requerido, y existen discrepancias entre el nombre de la promotora y el que aparece en la acta inextensa del menor; toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil, el documento podrá inscribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española. Todo ello, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse del correspondiente procedimiento declarativo sobre filiación, si a su derecho conviniese.

5.- Notificada la resolución a la promotora, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

6.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por la promotora la inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española de su hijo menor de edad, R-A., nacido en la República Dominicana el 19 de octubre de 2001, alegando la nacionalidad española de su madre que fue adquirida por residencia en el año 2009. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) Código Civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil de Torrelavega dictó acuerdo de 11 de octubre de 2010 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación materna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, L.R.C.) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, R.R.C.).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento del ahora recurrente habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) CC., lo que le habría atribuido la condición de español, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación materna del interesado. En efecto, se observan discrepancias en cuanto a los apellidos de la madre que constan su propia certificación literal de nacimiento y en el acta inextensa de nacimiento del menor. Por otra parte, inicialmente se aportó una fotocopia de un certificado de declaración de nacimiento y, pese a haber sido requerido a la promotora que aportara inscripción extensa de nacimiento del interesado debidamente legalizada en la que constara la mención completa a los datos identificativos de los progenitores, no se atendió al requerimiento, ya que se aportaron

extracto de acta de nacimiento y acta inextensa de nacimiento, en ambos casos sin legalizar. Por ello, cabe presumir que ni el certificado aportado ni el Registro que lo expidió reúnen las condiciones y garantías exigidas por los artículos 23 de la Ley de Registro Civil y 85 del Reglamento del Registro Civil.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, L.R.C.). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el actual optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de una española (cfr. art. 20 C.c.). Sin perjuicio de lo que pueda derivarse del correspondiente procedimiento declarativo sobre filiación que puedan iniciar los interesados en caso de considerarlo conveniente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

Resolución de 3 de enero de 2014 (105ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere por opción la nacionalidad española, era mayor de edad según su estatuto personal, no habiendo quedado acreditada la incapacidad del mismo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Miami, el 12 de noviembre de 2010, Don C-D. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hijo, S-E. nacido en Argentina el 1 de julio de 1991, por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: certificado de nacimiento del interesado; inscripción de matrimonio de los padres; certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción el 3 de febrero de 2010; fotocopias de los pasaportes de los padres y del interesado.

2.- Una vez suscrita el acta de opción a la nacionalidad el 29 de noviembre de 2010, con la intervención de los representantes legales del interesado, se remiten las actuaciones al Registro Civil Consular de Buenos Aires. El Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires dictó auto el 25 de enero de 2011 denegando la solicitud del interesado, por entender que no cumple los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, ya que en la fecha en la que el padre adquiere la nacionalidad española, su hijo tenía ya 18 años y era, por tanto, mayor de edad.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, rechazando los argumentos de la denegación y alegando que su hijo cumple los requisitos establecidos para adquirir la nacionalidad española por opción al padecer una incapacidad mental.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- Se ha intentado por el promotor inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil, de su hijo, nacido en Argentina el 1 de julio de 1991, alegando su nacionalidad española, que adquirió por opción, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 23 CC con fecha 3 de febrero de 2010. El Encargado del Registro Civil Central, mediante auto de 25 de enero de 2011, denegó la solicitud del interesado, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al ser mayor de edad en el momento de la adquisición de la nacionalidad española por su padre.

III.- En efecto, cuando el padre da cumplimiento a los citados requisitos y adquiere validez la nacionalidad española, el hijo, que había cumplido 18 años, y ya era mayor de edad según su estatuto personal, por tanto hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

IV.- En cuanto a la alegación que hace el promotor en el escrito del recurso acerca de que su hijo padece una incapacidad mental, cabe destacar que únicamente se ha presentado como prueba de lo mismo copias escaneadas de poder de representación que los padres se otorgan a sí mismos, en relación con el interesado y de otra documentación médica y escolar; no obrando en el expediente sentencia de incapacitación, con la consiguiente prórroga de la patria potestad de sus progenitores sobre el solicitante, que acredite suficientemente la incapacidad del interesado.

Por tanto, ha de concluirse que no concurren los requisitos necesarios para que pueda tener lugar la opción a la nacionalidad española pretendida, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 3 de enero de 2014 (106ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que la madre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2005, por no resultar acreditada la filiación materna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Alcobendas (Madrid) el 2 de julio de 2009, Doña M. nacida el 22 de diciembre de 1990 en la República Dominicana, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sometida a la patria potestad de una española, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: acta de nacimiento inextensa de la interesada; certificación literal de nacimiento de la madre, Doña S de la C. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 28 de noviembre de 2005; y fotocopia del DNI de la Sra. De la C.

2.- Con fecha 12 de agosto de 2009, se levanta el acta de opción a la nacionalidad española por el Encargado del Registro Civil de Alcobendas y se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia de la madre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención a la interesada en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 1 de marzo de 2011 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado la madre a la interesada en modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligada, ya que a la fecha de la declaración efectuada por la madre, esta era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción y alegando que su madre no la mencionó en su expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia debido a un error.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- En el presente expediente, se ha intentado la inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española de la interesada, nacida en República Dominicana el 22 de diciembre de 1990, alegando la nacionalidad española de su madre, que ésta adquirió por residencia en el año 2005. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 1 de marzo de 2011 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación materna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" (art. 85, I, RRC).

IV.- En primer lugar, antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de española, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación materna de la interesada. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Doña S de la C. no aparece que ésta declarase a la ahora interesada, pese a que era menor de edad, constando en la comparecencia de fecha 28 de noviembre de 2005 realizada ante el Encargado del Registro Civil de Guadalajara, que la Sra. De la C. manifestó que tenía dos hijos menores de edad, no mencionando el nombre de la interesada, constando dicho documento unido al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (19ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que la madre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2008, por no resultar acreditada la filiación materna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Torremolinos (Málaga), el 12 de mayo de 2010, Doña P. nacida en República Dominicana el 20 de marzo de 1992, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sometida a la patria potestad de una española. Adjuntaba la siguiente documentación: acta de nacimiento inextensa de la interesada; fotocopias del DNI de su madre, Doña M^a-I. del pasaporte y NIE de la promotora.

2.- El mismo día se levanta acta de opción a la nacionalidad española y, posteriormente, se trasladaron las actuaciones al Registro Civil de Central. El Encargado, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia de la madre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención a la solicitante en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 26 de abril de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado la madre a la interesada en modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligada, ya que a la fecha de la declaración efectuada por la madre, esta era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando de nuevo la inscripción y alegando que su madre no la mencionó por error.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1^a de julio y 13-1^a de septiembre de 2004; 20-3^a de enero 13-1^a de junio de 2005; 3-5^a de mayo, 23-6^a de junio, 17-3^a de julio y 20-2^a de noviembre de 2006; 23-2^a de mayo, 7-4^a de noviembre de 2007; 21-1^a de mayo, 16-7^a de julio, 14-3^a de octubre y 13-1^a de noviembre de 2008; 27-7^a de Enero de 2009, 11-3^a de Marzo y 8-1^a de Abril de 2009.

II.- En el presente expediente, se ha intentado la inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española de la promotora, nacida en República Dominicana el 20 de marzo de 1992, alegando la nacionalidad española de su madre, que ésta adquirió por residencia en el año 2008, según consta en su certificación literal de nacimiento. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 26 de abril de 2012 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación materna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley

española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

IV.- En primer lugar, antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de española, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación materna de la interesada. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Doña M^a-I. no aparece que ésta declarase a la ahora interesada, pese a que era menor de edad, constando en la solicitud de fecha 3 de octubre de 2005 realizada ante el Encargado del Registro Civil de Benalmádena, que la Sra. G. no manifestó que tuviera hijos menores de edad, y por tanto, no mencionó el nombre de la interesada, constando dicho documento unido al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (22^a)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1^a) CC.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere por residencia la nacionalidad española, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Olot (Girona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Olot el 2 de marzo de 2011, Don M. nacido en Gambia el 8 de enero de 1992, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo de ciudadano español. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento del interesado, registrado en el año 2009; certificación literal de nacimiento del padre, Don M. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 26 de enero de 2010; certificado de empadronamiento; fotocopias del pasaporte del interesado y del DNI del padre.

2.- El mismo día se levantó acta de opción a la nacionalidad española. El Encargado del Registro Civil de Olot dictó auto el 2 de marzo de 2011 denegando la solicitud de inscripción

de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que el interesado nunca había estado bajo la patria potestad de un español y por tanto, no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 20.1.a) del Código civil.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que el retraso en la resolución del expediente de nacionalidad por residencia de su padre no le puede perjudicar.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23, 64 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 19-5ª de Abril, 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo, 22-6ª de Septiembre y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- El promotor, nacido en Gambia el 8 de enero de 1992, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre que éste adquirió por residencia, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 23 del Código civil con fecha de 26 de enero de 2010. Por Auto de 2 de marzo de 2011 el Encargado del Registro Civil de Olot denegó esta opción, considerando que el interesado había alcanzado la mayoría de edad antes de que el padre cumpliera los requisitos del artículo precitado. Contra este Auto se interpuso el presente recurso.

III.- En el presente caso, el promotor plantea en su recurso que la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su padre debería retrotraer sus efectos una vez inscrita. De la documentación obrante en el expediente se observa que, el 26 de enero de 2010, cuando el padre del promotor da cumplimiento a los citados requisitos del artículo 23 del Código Civil, el interesado, ya había cumplido 18 años, y era mayor de edad según su estatuto personal, ya que según el más reciente conocimiento de la legislación de Gambia, obtenido por informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la mayoría de edad en el mencionado país se alcanza al cumplir los 18 años. A la vista de la argumentación anterior, conviene interrogarse previamente a analizar las circunstancias del caso concreto sobre la verdadera naturaleza jurídica de la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

IV.- Pues bien, remontándonos a los orígenes históricos de este título de adquisición de la nacionalidad española, ha de recordarse que a diferencia de lo que sucedía en nuestro Derecho histórico (desde la "moranza de diez años" de las Partidas y después en la Novísima Recopilación) y en la Constitución española de 1812, en que la vecindad era causa de que al extranjero domiciliado se le impusiera la condición de vasallo o súbdito, *status* que se diferenciaban de los de natural o ciudadano, la Constitución de 1837, según resulta de la interpretación dada por la Circular de 28 de mayo de 1837, suprime la antigua sumisión del extranjero avecindado, y en su lugar le concede una facultad y derecho a adquirir la condición de nacional español. Esta concepción pasa al Código civil de 1889 que declara en su artículo 17 nº 4 la nacionalidad española de los extranjeros que, sin carta de naturaleza, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía. Por su parte, un Decreto de 29 de abril de 1931, al que dotó de fuerza legal la posterior Ley de 30 de diciembre del mismo año, reguló la forma de justificar la vecindad adquirida, de manera que ganada la vecindad

y acreditada en forma, la Administración desarrollaba una función meramente “declaratoria” de tal circunstancia (cfr. art. 9). Esta facultad del extranjero determinante de un cambio de estado presentaba el carácter personal propio de toda facultad de estado. Su ejercicio tenía lugar, según la doctrina más autorizada, mediante la presentación de la instancia que inicia el expediente destinado a justificar la concurrencia de los presupuestos legales de la vecindad y en la acción de cumplir activamente los requisitos que imponía el artículo 25 del Código civil (básicamente coincidente con el actual artículo 23 del mismo Cuerpo legal, esto es, renuncia a la nacionalidad anterior, juramento o promesa e inscripción). En definitiva la vecindad, para devenir eficaz, requería una actuación pública de constancia y de declaración oficial, pero la mera concurrencia de aquellos presupuestos legales originaba *ex lege* la “facultad” de obtener la condición y estado de español.

V.- Esta concepción histórica de la naturalización por residencia se proyecta en el tiempo hasta llegar a la situación actual en la que la naturaleza jurídica de la actividad respectiva del interesado y de la Administración en el *iter* adquisitivo de la nacionalidad por residencia ha sido sometido al contraste de la jurisprudencia que se ha pronunciado de forma reiterada en un sentido coincide con los antecedentes históricos antes reseñados. En efecto, nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) ha declarado en numerosas ocasiones, entre otras en sus Sentencias de 24 de abril de 1999, 19 de junio de 1999, 25 de octubre de 1999 y 7 de octubre de 2000, que “la nacionalidad española es un auténtico estado civil, decisivo de la posición jurídica de la persona, si bien aquella tiene una doble dimensión, al ser un título para formar parte de la organización del Estado y además una cualidad de la persona como perteneciente a una comunidad, configurando el primero su aspecto público y la segunda el privado, sin que, no obstante, quepa escindir su verdadera naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no de causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurren las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión *stricto sensu* sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles, aunque pueda denegarse por motivos de orden público o de interés nacional suficientemente razonados”, sobre cuya concurrencia y valoración se proyecta también el principio de tutela judicial efectiva, por considerarse aquellas nociones como “conceptos judicialmente asequibles” (cfr. S.T.S. de 30 de junio de 2004). Todo ello supone ratificar la idea de que en los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia el papel asignado a los Registros civiles que llevan a cabo su tramitación y al Ministerio de Justicia, a través de esta Dirección General de los Registros y del Notariado que lo resuelve, integra una función de “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales y de las *condictio facti* exigidos legalmente, de carácter meramente declarativo, por la que la Administración “reconoce” la existencia de la facultad de adquirir la nacionalidad española por parte del interesado, siendo la “causa jurídica” de tal adquisición no una “concesión” de las autoridades públicas, sino la voluntad declarada con tal finalidad por el interesado, voluntad que se instrumenta y exterioriza en la presentación de la instancia que inicia el expediente para “justificar” su vecindad y en cumplir los requisitos impuestos por el artículo 25 del Código civil, como manifestación de una facultad o “poder jurídico” que encaja sin dificultad en la categoría de los derechos potestativos.

VI.- Agotado el anterior análisis, procede ahora reinterpretar a su luz el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil y las referencias que hace a “las declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad”, entendiéndose por tales aquellas declaraciones a través de las cuales un ciudadano extranjero ejercita el derecho potestativo o facultad jurídica que, presupuesta la concurrencia de los requisitos legales previstos en cada caso, tiene para conservar, adquirir o recuperar la nacionalidad española, derecho o facultad que se puede ostentar bien *ex lege*, bien mediante concesión, integrando la “causa jurídica” de la adquisición en el primer caso “la declaración de voluntad” del interesado, siendo en esta categoría y no en la de “concesión” en la que ha de subsumirse el supuesto

de las adquisiciones de la nacionalidad por residencia según lo antes razonado, si bien con la particularidad de que en este caso tal “declaración” de la voluntad se desdobra en dos momentos distintos, el de la solicitud inicial de la tramitación del expediente y el de la formalización del obligado trámite del juramento o promesa, siendo este segundo momento y no el primero el determinante para fijar el hito temporal a que se podrá retrotraer la eficacia de la inscripción registral posterior, no sólo porque la solicitud inicial está pendiente de la “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales, sino además porque aquella solicitud, como manifestación de la voluntad finalista de adquirir la nacionalidad española, carece de firmeza al quedar sometida al plazo de caducidad de ciento ochenta días por inactividad del solicitante que establece el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil. En definitiva, la solicitud inicial, una vez notificada la concesión de la nacionalidad, o se confirma en el indicado plazo por medio del cumplimiento del requisito del juramento o promesa que impone el artículo 23 del Código civil, o da lugar a la caducidad de la concesión todavía en una fase de mera formación del derecho a la nacionalidad.

VII.- Dado que en la fecha en que el padre dio cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 23 del Código Civil y adquirió validez la nacionalidad española, es decir, el 26 de enero de 2010, el hijo era mayor de edad según su estatuto personal (cumplió los dieciocho años el 8 de enero de 2010), hay que concluir que el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto, con independencia de las razones técnicas u organizativas que hayan podido llevar al retraso en la tramitación del expediente de su progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Olot (Girona).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (23ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si la interesada ejercita la opción fuera de plazo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Cáceres el 17 de mayo de 2006, Don A., solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hija, en ese momento menor de edad, A-I. nacida en la República Dominicana el 25 de julio de 1988, por haber estado sometida a la patria potestad de un español. Aporta la siguiente documentación: certificado local de nacimiento de la interesada; certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 27 de octubre de 2003; acta de matrimonio de los padres; certificado de empadronamiento; fotocopias del documento de identidad y pasaporte de la interesada y su madre; DNI y pasaporte del promotor.

2.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil, pese a ser innecesario de acuerdo con el artículo 20.2.b) del Código Civil, dicta auto de fecha de 25

de mayo de 2006, autorizando al promotor para que formule la declaración de opción a la nacionalidad española. El 3 de abril de 2009, se levanta el acta de opción a la nacionalidad española por la interesada, por ser en ese momento mayor de edad. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Cáceres remite las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 18 de junio de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que la solicitud había sido presentada una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 20 del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reconociendo que si bien cuando manifestó su voluntad de optar a la nacionalidad española había transcurrido el plazo de dos años establecido en el artículo 20 del Código Civil, dicho retraso no se debió a causa imputable a la promotora.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 y 22 del Código civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 4-2ª de julio de 2006; 16-5ª de marzo, 21-9ª de junio, 8-5ª y 21-2ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio y 2-4ª de julio de 2008; 3-4ª de febrero, 4-6ª de marzo, 2-6ª de Julio y 8-2ª de abril de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española una ciudadana dominicana nacida el 25 de julio de 1988, alegando que su padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 27 de octubre de 2003, siendo la interesada menor de edad conforme a su estatuto personal. La petición se basa en el artículo 20.1.a) del Código civil, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó resolución denegando la solicitud por estimar que la interesada había presentado su solicitud una vez caducado el plazo establecido para ello (artículo 20.2.c CC.).

III.- Dispone el artículo 20 en su apartado 2.c) que “la opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación”. Pues bien, la promotora suscribió el acta de opción a la nacionalidad española, como ya se ha dicho, el 3 de abril de 2009, es decir después de cumplidos, el 25 de julio de 2008, los veinte años de edad y sin que conste que no estuviera emancipada al llegar a los 18 años según su estatuto personal, por lo que tal derecho había caducado por el transcurso del plazo previsto en el precepto citado. En cuanto a la alegación contenida en el escrito de recurso, en relación con que la solicitud se presentó en el año 2006, cabe destacar que la misma fue presentada por el padre sin intervención de la interesada, por lo que no se puede equiparar a lo dispuesto por el artículo 20.2.b) del Código Civil, ya que no se formuló declaración de opción, sino simplemente solicitud y, en segundo lugar, no compareció la propia interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (26ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Art.20.1.a) CC.

No es posible la opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad alegando que la madre adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2007, por no resultar acreditada la filiación materna y porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de dicha filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia efectuada ante el Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid), Doña N. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hija menor de edad, Y. nacida en la República Dominicana el 11 de noviembre de 1999, por haber estado sometida a la patria potestad de una española. Adjuntaba la siguiente documentación: acta de nacimiento inextensa de la interesada, registrada en el año 2004; certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 26 de junio de 2007; certificado de empadronamiento; y fotocopia del DNI de la promotora.

2.- Con fecha 26 de mayo de 2008, el Encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares dicta auto por el que autoriza a la promotora para optar a la nacionalidad española en nombre de su hija, levantándose acta de opción el 9 de marzo de 2009. Posteriormente, se trasladaron las actuaciones al Registro Civil de Central. El Encargado, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia de la madre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención a la interesada en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 27 de agosto de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, al no haber mencionado la madre a la interesada en modo alguno durante su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligada, ya que a la fecha de la declaración efectuada por la madre, esta era menor de edad, anomalía que imposibilita la inscripción de nacimiento y opción toda vez que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Registro Civil, el nacimiento podrá transcribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley Española.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción y alegando que dejó de mencionar a su hija debido a un error.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero

13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- En el presente expediente, se ha intentado la inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española de la menor interesada, nacida en República Dominicana el 11 de noviembre de 1999, alegando la nacionalidad española de su madre, que ésta adquirió por residencia en el año 2007. Su petición está basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, según el cual pueden optar por la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto de 27 de agosto de 2010 denegando la solicitud por entender que no estaba acreditada en este caso la filiación materna. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

IV.- En primer lugar, antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada basada en el artículo 20.1-a) del Código civil, lo que le habría atribuido la condición de española, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil Central, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación materna de la interesada. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Doña N. no aparece que ésta declarase a la ahora interesada, pese a que era menor de edad, constando en la solicitud de fecha 5 de julio de 2005 realizada ante el Encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares, que la Sra. M. no manifestó que tuviera hijos menores de edad, y por tanto, no mencionó el nombre de la interesada, asimismo, durante la ratificación de su solicitud, realizada el mismo día ante el Encargado, manifiesta que su estado civil es el de soltera y que no tiene hijos, constando dichos documentos unidos al presente recurso.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación aportada, constando que el nacimiento se registró 5 años después de haberse producido. Por otra parte, como se ha dicho, existen dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un ciudadano español (cfr. art. 20 CC.).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (64ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española. Art. 20.1a) CC.

No procede la inscripción de una menor nacida en Cuba en 2003 en nombre de la cual se ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1a) del Código Civil porque no resulta acreditado que la menor interesada sea hija de padre español, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 3 de febrero de 2010, Don E. mayor de edad y de nacionalidad española y cubana solicitaba la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de su hija menor de edad N. nacida en Cuba el 31 de mayo de 2003. Adjuntaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, certificación de nacimiento cubana de la menor, inscripción de nacimiento del promotor con marginal de nacionalidad española por opción al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, certificación de nacimiento de I. (madre de la menor interesada), certificación de matrimonio celebrado el 3 de abril de 2009 entre el promotor y la Sra. G. y certificación de divorcio del matrimonio anterior de esta última por sentencia de 21 de julio de 2003.

2.- Una vez suscrita el acta de opción correspondiente, el encargado del registro civil consular dictó auto el 15 de octubre de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación española de la menor.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, tal como figura en la inscripción de nacimiento aportada, el recurrente es el padre legal de la menor interesada.

4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código civil (CC.); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II.- Se pretende la inscripción del nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de una menor nacida en Cuba en 2003 alegando la nacionalidad española de su padre, adquirida al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La petición se basa en el artículo 20.1a) CC., según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El encargado del registro

consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III.- La inscripción de nacimiento de la menor en el Registro Civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1a) CC., lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, si la madre es casada en el momento del nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC.), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la madre de la menor estaba casada con otro ciudadano cubano cuando se produjo el nacimiento, por lo que, no habiéndose acreditado la existencia de separación previa y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC.) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (65ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española. Art. 20.1a) CC.

No es posible la inscripción de un nacimiento ocurrido en Guinea Ecuatorial en 1989, previa opción a la nacionalidad española, alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2005, porque la certificación ecuatoguineana aportada, por falta de garantías, no da fe de la filiación pretendida.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 11 de marzo de 2009 en el Registro Civil de Zaragoza, la Sra. M^a-C-O. de nacionalidad ecuatoguineana y con domicilio en Z. suscribió acta de opción a la nacionalidad española y solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil al amparo del artículo 20.1a) del Código Civil por ser hija de padre español. Aportaba la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de L. con marginal de nacionalidad española por residencia adquirida en 2005, pasaporte ecuatoguineano e inscripción de nacimiento en Guinea Ecuatorial de la promotora, practicada en octubre de 2007, donde consta que nació el 2 de septiembre de 1989 y que es hija de L. y de F. volante de empadronamiento y cuestionario de declaración de datos para la inscripción.

2.- Ratificada la solicitante, la documentación se remitió al Registro Civil Central, competente para la inscripción. Incorporado al expediente testimonio del que sirvió de base para la inscripción en España de Don L-N. la encargada del registro dictó acuerdo el 8 de septiembre de 2010 denegando la pretensión por no considerar acreditada la relación de filiación de la promotora respecto de un español

3.- Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el hecho de que su inscripción de nacimiento se practicara fuera de plazo no es suficiente para cuestionar la veracidad del vínculo paterno-filial que en ella consta.

4.- La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 del Código civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 4-1ª y 21-3ª de enero y 8-2ª de febrero y 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 15-1ª de noviembre de 2005; 17-4ª de enero, 30-5ª de junio de 2006; 21-5ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 16-7ª de mayo, 6-2ª de junio, 16-5ª y 7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 28-4ª de enero y 8-1ª y 4ª de abril de 2009.

II.- La promotora intenta inscribir su nacimiento en el Registro Civil español por medio de una certificación ecuatoguineana del asiento practicado en 2007 en el registro local, habiendo tenido lugar el hecho inscribible en 1989. La petición se basa en la filiación de la interesada respecto de un ciudadano originariamente ecuatoguineano que adquirió la nacionalidad española en 2005, lo que justificaría el ejercicio del derecho de opción del art. 20.1a) CC. La encargada del registro, no obstante, a la vista de la documentación disponible, no considera acreditada la filiación invocada y deniega la inscripción.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23 LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85 RRC).

IV.- La certificación ecuatoguineana aportada al expediente no reúne las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su reglamento para dar fe de la filiación paterna alegada, pues, aunque la interesada nació en 1989, la inscripción de nacimiento se realizó 2007 y lo cierto es que, según consta en el expediente de adquisición de la nacionalidad española del presunto padre, este declaró en 2003, en comparecencia ante el registro con motivo de su solicitud de nacionalidad española por residencia finalmente concedida en 2005, que era soltero y que tenía una hija llamada Mª-L. nacida en B. (Guinea Ecuatorial) el ... de ... de 1996. En la discutida certificación de nacimiento local figura, además, que los padres de la inscrita estaban casados y que ambos residían en Z. Estas circunstancias, aparte de no haber sido tampoco probadas documentalmente, presumiblemente se refieren al momento en que se practicó la inscripción, cuando los datos que debían haberse hecho constar son los que correspondían al momento en que se produjo el nacimiento. De todo ello

resulta que no puede considerarse acreditado que la optante cuyo nacimiento se pretende inscribir en España sea hija y haya estado sometida durante su minoría de edad a la patria potestad de un español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (1ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible la opción solicitada, porque la certificación acompañada, por falta de garantías, no da fe de la filiación.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento y declaración de la nacionalidad española por opción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Móstoles el 25 de mayo de 2009, Don F-J. nacido en Guinea Ecuatorial el 26 de febrero de 1968, solicitaba la nacionalidad española. Adjuntaba, entre otra, la siguiente documentación: certificado de nacimiento expedido por la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en España; certificación literal de nacimiento de la madre del interesado, Doña G. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 5 de marzo de 1996; certificado de empadronamiento; certificado de defunción de Don J. fotocopias del DNI de la Sra. T. y pasaporte del interesado.

2.- Una vez ratificado el promotor, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado requiere al interesado para que aporte certificado de nacimiento original, expedido por el Registro Civil de Guinea Ecuatorial, debidamente legalizado y que contenga los datos esenciales para la práctica de la inscripción. El interesado aporta certificado literal de inscripción de nacimiento, en la que consta como padre Don J. a efectos identificadores del artículo 191 del Reglamento del Registro Civil y que la inscripción se realizó por declaración de un primo del inscrito en el año 2005.

3.- El Encargado del Registro Civil Central dictó auto con fecha 3 de febrero de 2011 en el que deniega la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española del promotor, debido a que las certificaciones de nacimiento aportadas no ofrecen suficientes garantías; toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil, el documento podrá inscribirse siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española. Todo ello, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse del correspondiente procedimiento declarativo sobre filiación, si a su derecho conviniese.

4.- Notificada la resolución al promotor, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de Enero de 2009, 11-3ª de Marzo y 8-1ª de Abril de 2009.

II.- Se pretende por el promotor su inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de sus padres. El Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo de 3 de febrero de 2011 denegando la solicitud por entender que la documentación aportada no reunía las garantías suficientes. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, L.R.C.) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, R.R.C.).

IV.- Antes de que pudiese ser estimada la solicitud de inscripción de nacimiento del ahora recurrente habría sido necesario que hubiese prosperado la opción ejercitada, lo que le habría atribuido la condición de español, pero en este caso surge un problema previo al ejercicio de la opción, detectado ya por el Registro Civil, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación del interesado. En efecto, se observan discrepancias en cuanto al número de tomo y folio que consta en el certificado de nacimiento aportado inicialmente y la certificación literal de nacimiento requerida. Por otra parte, en ese documento aparece el nombre del padre únicamente a efectos identificadores y consta que se realizó la inscripción en el año 2005 por declaración de un primo del promotor. Por ello, cabe presumir que ni el certificado aportado ni el Registro que lo expidió reúnen las condiciones y garantías exigidas por los artículos 23 de la Ley de Registro Civil y 85 del Reglamento del Registro Civil.

V.- En esta situación no puede prosperar el expediente, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada, ya que el nacimiento se inscribió 37 años después de haberse producido, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad de los hechos inscritos y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, L.R.C.). Todo ello, sin perjuicio de lo que pueda derivarse del correspondiente procedimiento declarativo sobre filiación que puedan iniciar los interesados en caso de considerarlo conveniente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (2ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si la interesada, cuando el padre adquiere la nacionalidad española de origen por opción, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Miami el 12 de noviembre de 2010, Don C-D. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hija, V-M. nacida el 16 de julio de 1990 en Argentina, por ser hija de español y haber estado bajo su patria potestad, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado local de nacimiento de la interesada; certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta la opción a la nacionalidad española de origen en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 el 3 de febrero de 2010; certificado de nacimiento de la madre de la interesada, Doña V-M. certificado de matrimonio de los padres; fotocopias de los pasaportes del padre y la interesada.

2.- Con fecha 29 de noviembre de 2010 se levanta el acta de declaración de opción a la nacionalidad española y se remiten las actuaciones al Registro Civil Consular de Buenos Aires. Con fecha 25 de enero de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dictó auto denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que la interesada nunca estuvo bajo la patria potestad de un español, pues en la fecha de adquisición de la nacionalidad española de su padre, ella ya era mayor de edad, según su estatuto personal, no concurriendo los requisitos que establece el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Una vez notificado el Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso por entender que la resolución impugnada era conforme a Derecho, el Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en el auto y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- La interesada, nacida en Argentina el 16 de julio de 1990, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su padre, que adquirió por opción, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 3 de febrero de 2010. El Encargado

del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por considerar que la interesada no había estado sujeta en ningún momento a la patria potestad de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.

III.- No hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina, que la inscripción en el Registro Civil es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española, conforme resulta espacialmente de lo dispuesto en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo. Este precepto, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito *sine qua non* de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el artículo 23 del Código civil, que subordina “la validez de la adquisición de la nacionalidad española” por opción, carta de naturaleza y residencia, entre otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español. En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.

IV.- Siendo el caso del padre de la interesada una adquisición por opción, sólo se podría entender que la eficacia de la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la voluntad de optar o a la de formalización del juramento o promesa, por ser éste el momento en el que el adquirente ha agotado la actividad fundamental a él exigida, como ha sostenido parte de nuestra doctrina científica y también algunos antecedentes de la doctrina oficial de este Centro Directivo (retroactividad que este mismo Centro ha negado que pueda operar *in peius*, esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado: cfr. resolución de 14-2ª de junio de 2005), y criterio incontrovertido para los supuestos de opción y recuperación.

V.- Ciertamente, el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, para los supuestos de declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de quién es el funcionario competente para recibir y documentar en acta tales declaraciones, añade que “se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento”. Pero este precepto no puede entenderse aplicable de forma universal para todos los supuestos de adquisiciones sobrevenidas o derivativas de la nacionalidad española, sino en relación con aquellas en que no medie una “concesión” por parte de la autoridad, esto es, en que la voluntad del interesado “declarada” en la forma solemne prevista por la legislación del Registro Civil constituye la verdadera causa jurídica de la adquisición del *status* de nacional español. Este planteamiento nos lleva a considerar como incluido en el ámbito del párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, sin esfuerzo interpretativo alguno, los supuestos de las declaraciones de opción, recuperación y conservación, como es el supuesto de referencia.

VI.- Atendiendo a la legislación argentina sobre mayoría de edad, aplicable al presente supuesto, en la fecha en que el padre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el 3 de febrero de 2010, la hija ya era mayor de edad según su estatuto personal, por tanto, hay que concluir que la interesada no ha estado nunca sujeta a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (7ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere por residencia la nacionalidad española, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Móstoles el 20 de octubre de 2009, el ciudadano peruano, Don M-J-C. nacido en Perú el 28 de julio de 1989, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: acta de nacimiento; certificación literal de nacimiento del padre, Don C-H. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 25 de agosto de 2009; volante de empadronamiento; y fotocopia del DNI del padre.

2.- Una vez ratificado el interesado en su solicitud, se levanta acta de opción a la nacionalidad española el mismo día y se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 25 de marzo de 2011 denegando la solicitud del promotor, por considerar que cuando el padre adquiere la nacionalidad española el interesado ya tenía 18 años y era, por tanto, mayor de edad según las legislaciones española y peruana, por lo que no cabe, en consecuencia, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española de la forma pretendida.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud, alegando que sufre una discapacidad psíquica del 53%.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación. El Encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- El interesado, nacido en Perú el 28 de julio de 1989, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil, alegando la nacionalidad española de su padre, que este adquirió por residencia, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 23 CC. con fecha 25 de agosto de 2009. El Encargado del Registro Civil Central,

mediante auto de 25 de marzo de 2011, denegó la solicitud del promotor, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al ser el interesado mayor de edad en el momento de la adquisición de la nacionalidad española por su padre.

III.- En el presente caso, conviene interrogarse previamente a analizar las circunstancias del caso concreto sobre la verdadera naturaleza jurídica de la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Pues bien, remontándonos a los orígenes históricos de este título de adquisición de la nacionalidad española, ha de recordarse que a diferencia de lo que sucedía en nuestro Derecho histórico (desde la “moranza de diez años” de las Partidas y después en la Novísima Recopilación) y en la Constitución española de 1812, en que la vecindad era causa de que al extranjero domiciliado se le impusiera la condición de vasallo o súbdito, *status* que se diferenciaban de los de natural o ciudadano, la Constitución de 1837, según resulta de la interpretación dada por la Circular de 28 de mayo de 1837, suprime la antigua sumisión del extranjero avecindado, y en su lugar le concede una facultad y derecho a adquirir la condición de nacional español. Esta concepción pasa al Código civil de 1889 que declara en su artículo 17 nº 4 la nacionalidad española de los extranjeros que, sin carta de naturaleza, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía. Por su parte, un Decreto de 29 de abril de 1931, al que dotó de fuerza legal la posterior Ley de 30 de diciembre del mismo año, reguló la forma de justificar la vecindad adquirida, de manera que ganada la vecindad y acreditada en forma, la Administración desarrollaba una función meramente “declaratoria” de tal circunstancia (cfr. art. 9). Esta facultad del extranjero determinante de un cambio de estado presentaba el carácter personal propio de toda facultad de estado. Su ejercicio tenía lugar, según la doctrina más autorizada, mediante la presentación de la instancia que inicia el expediente destinado a justificar la concurrencia de los presupuestos legales de la vecindad y en la acción de cumplir activamente los requisitos que imponía el artículo 25 del Código civil (básicamente coincidente con el actual artículo 23 del mismo Cuerpo legal, esto es, renuncia a la nacionalidad anterior, juramento o promesa e inscripción). En definitiva la vecindad, para devenir eficaz, requería una actuación pública de constancia y de declaración oficial, pero la mera concurrencia de aquellos presupuestos legales originaba *ex lege* la “facultad” de obtener la condición y estado de español.

IV.- Esta concepción histórica de la naturalización por residencia se proyecta en el tiempo hasta llegar a la situación actual en la que la naturaleza jurídica de la actividad respectiva del interesado y de la Administración en el *iter* adquisitivo de la nacionalidad por residencia ha sido sometido al contraste de la jurisprudencia que se ha pronunciado de forma reiterada en un sentido coincide con los antecedentes históricos antes reseñados. En efecto, nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) ha declarado en numerosas ocasiones, entre otras en sus Sentencias de 24 de abril de 1999, 19 de junio de 1999, 25 de octubre de 1999 y 7 de octubre de 2000, que “la nacionalidad española es un auténtico estado civil, decisivo de la posición jurídica de la persona, si bien aquella tiene una doble dimensión, al ser un título para formar parte de la organización del Estado y además una cualidad de la persona como perteneciente a una comunidad, configurando el primero su aspecto público y la segunda el privado, sin que, no obstante, quepa escindir su verdadera naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no de causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurren las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión *stricto sensu* sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles, aunque pueda denegarse por motivos de orden público o de interés nacional suficientemente razonados”, sobre cuya concurrencia y valoración se proyecta también el principio de tutela judicial efectiva, por considerarse aquellas nociones como “conceptos judicialmente asequibles” (cfr. S.T.S. de 30 de junio de 2004). Todo ello supone ratificar la idea de que en los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia

el papel asignado a los Registros civiles que llevan a cabo su tramitación y al Ministerio de Justicia, a través de esta Dirección General de los Registros y del Notariado que lo resuelve, integra una función de “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales y de las *condictio facti* exigidos legalmente, de carácter meramente declarativo, por la que la Administración “reconoce” la existencia de la facultad de adquirir la nacionalidad española por parte del interesado, siendo la “causa jurídica” de tal adquisición no una “concesión” de las autoridades públicas, sino la voluntad declarada con tal finalidad por el interesado, voluntad que se instrumenta y exterioriza en la presentación de la instancia que inicia el expediente para “justificar” su vecindad y en cumplir los requisitos impuestos por el artículo 25 del Código civil, como manifestación de una facultad o “poder jurídico” que encaja sin dificultad en la categoría de los derechos potestativos.

V.- Agotado el anterior análisis, procede ahora reinterpretar a su luz el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil y las referencias que hace a “las declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad”, entendiéndose por tales aquellas declaraciones a través de las cuales un ciudadano extranjero ejercita el derecho potestativo o facultad jurídica que, presupuesta la concurrencia de los requisitos legales previstos en cada caso, tiene para conservar, adquirir o recuperar la nacionalidad española, derecho o facultad que se puede ostentar bien *ex lege*, bien mediante concesión, integrando la “causa jurídica” de la adquisición en el primer caso “la declaración de voluntad” del interesado, siendo en esta categoría y no en la de “concesión” en la que ha de subsumirse el supuesto de las adquisiciones de la nacionalidad por residencia según lo antes razonado, si bien con la particularidad de que en este caso tal “declaración” de la voluntad se desdobra en dos momentos distintos, el de la solicitud inicial de la tramitación del expediente y el de la formalización del obligado trámite del juramento o promesa, siendo este segundo momento y no el primero el determinante para fijar el hito temporal a que se podrá retrotraer la eficacia de la inscripción registral posterior, no sólo porque la solicitud inicial está pendiente de la “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales, sino además porque aquella solicitud, como manifestación de la voluntad finalista de adquirir la nacionalidad española, carece de firmeza al quedar sometida al plazo de caducidad de ciento ochenta días por inactividad del solicitante que establece el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil. En definitiva, la solicitud inicial, una vez notificada la concesión de la nacionalidad, o se confirma en el indicado plazo por medio del cumplimiento del requisito del juramento o promesa que impone el artículo 23 del Código civil, o da lugar a la caducidad de la concesión todavía en una fase de mera formación del derecho a la nacionalidad.

VI.- Por todo lo anterior, dado que en la fecha en que el padre dio cumplimiento a los citados requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez la nacionalidad española, es decir, el 25 de agosto de 2009, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, puesto que cumplió los 18 años el 28 de julio de 2007, hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

En cuanto a la alegación que realiza el interesado en el escrito de recurso, cabe destacar que no se ha aportado documentación alguna en prueba de lo manifestado y que en caso de que el interesado fuera declarado incapaz, resultaría de aplicación el artículo 20.2.a) del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (8ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere por residencia la nacionalidad española, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Móstoles el 20 de octubre de 2009, el ciudadano peruano, Don H. nacido en Perú el 19 de junio de 1991, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: acta de nacimiento; certificación literal de nacimiento del padre, Don C-H. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 25 de agosto de 2009; volante de empadronamiento; y fotocopia del DNI del padre.

2.- Una vez ratificado el interesado en su solicitud, se levanta acta de opción a la nacionalidad española el mismo día y se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 6 de abril de 2011 denegando la solicitud del promotor, por considerar que cuando el padre adquiere la nacionalidad española el interesado ya tenía 18 años y era, por tanto, mayor de edad según las legislaciones española y peruana, por lo que no cabe, en consecuencia, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española de la forma pretendida.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación. El Encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- El interesado, nacido en Perú el 19 de junio de 1991, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil, alegando la nacionalidad española de su padre, que este adquirió por residencia, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 23 CC. con fecha 25 de agosto de 2009. El Encargado del Registro Civil Central, mediante auto de 6 de abril de 2011, denegó la solicitud del promotor, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al ser el interesado mayor de edad en el momento de la adquisición de la nacionalidad española por su padre.

III.- En el presente caso, conviene interrogarse previamente a analizar las circunstancias del caso concreto sobre la verdadera naturaleza jurídica de la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Pues bien, remontándonos a los orígenes históricos de este título de adquisición de la nacionalidad española, ha de recordarse que a diferencia de lo que sucedía en nuestro Derecho histórico (desde la “moranza de diez años” de las Partidas y después en la Novísima Recopilación) y en la Constitución española de 1812, en que la vecindad era causa de que al extranjero domiciliado se le impusiera la condición de vasallo o súbdito, *status* que se diferenciaban de los de natural o ciudadano, la Constitución de 1837, según resulta de la interpretación dada por la Circular de 28 de mayo de 1837, suprime la antigua sumisión del extranjero avecindado, y en su lugar le concede una facultad y derecho a adquirir la condición de nacional español. Esta concepción pasa al Código civil de 1889 que declara en su artículo 17 nº 4 la nacionalidad española de los extranjeros que, sin carta de naturaleza, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía. Por su parte, un Decreto de 29 de abril de 1931, al que dotó de fuerza legal la posterior Ley de 30 de diciembre del mismo año, reguló la forma de justificar la vecindad adquirida, de manera que ganada la vecindad y acreditada en forma, la Administración desarrollaba una función meramente “declaratoria” de tal circunstancia (cfr. art. 9). Esta facultad del extranjero determinante de un cambio de estado presentaba el carácter personal propio de toda facultad de estado. Su ejercicio tenía lugar, según la doctrina más autorizada, mediante la presentación de la instancia que inicia el expediente destinado a justificar la concurrencia de los presupuestos legales de la vecindad y en la acción de cumplir activamente los requisitos que imponía el artículo 25 del Código civil (básicamente coincidente con el actual artículo 23 del mismo Cuerpo legal, esto es, renuncia a la nacionalidad anterior, juramento o promesa e inscripción). En definitiva la vecindad, para devenir eficaz, requería una actuación pública de constancia y de declaración oficial, pero la mera concurrencia de aquellos presupuestos legales originaba *ex lege* la “facultad” de obtener la condición y estado de español.

IV.- Esta concepción histórica de la naturalización por residencia se proyecta en el tiempo hasta llegar a la situación actual en la que la naturaleza jurídica de la actividad respectiva del interesado y de la Administración en el *iter* adquisitivo de la nacionalidad por residencia ha sido sometido al contraste de la jurisprudencia que se ha pronunciado de forma reiterada en un sentido coincide con los antecedentes históricos antes reseñados. En efecto, nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) ha declarado en numerosas ocasiones, entre otras en sus Sentencias de 24 de abril de 1999, 19 de junio de 1999, 25 de octubre de 1999 y 7 de octubre de 2000, que “la nacionalidad española es un auténtico estado civil, decisivo de la posición jurídica de la persona, si bien aquella tiene una doble dimensión, al ser un título para formar parte de la organización del Estado y además una cualidad de la persona como perteneciente a una comunidad, configurando el primero su aspecto público y la segunda el privado, sin que, no obstante, quepa escindir su verdadera naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no de causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurren las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión *stricto sensu* sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles, aunque pueda denegarse por motivos de orden público o de interés nacional suficientemente razonados”, sobre cuya concurrencia y valoración se proyecta también el principio de tutela judicial efectiva, por considerarse aquellas nociones como “conceptos judicialmente asequibles” (cfr. S.T.S. de 30 de junio de 2004). Todo ello supone ratificar la idea de que en los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia el papel asignado a los Registros civiles que llevan a cabo su tramitación y al Ministerio de Justicia, a través de esta Dirección General de los Registros y del Notariado que lo resuelve, integra una función de “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales y de las *condictio facti* exigidos legalmente, de carácter meramente declarativo, por la que la Administración “reconoce” la existencia de la facultad de adquirir la nacionalidad española por parte del interesado, siendo la “causa jurídica” de tal adquisición no una “concesión”

de las autoridades públicas, sino la voluntad declarada con tal finalidad por el interesado, voluntad que se instrumenta y exterioriza en la presentación de la instancia que inicia el expediente para “justificar” su vecindad y en cumplir los requisitos impuestos por el artículo 25 del Código civil, como manifestación de una facultad o “poder jurídico” que encaja sin dificultad en la categoría de los derechos potestativos.

V.- Agotado el anterior análisis, procede ahora reinterpretar a su luz el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil y las referencias que hace a “las declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad”, entendiéndose por tales aquellas declaraciones a través de las cuales un ciudadano extranjero ejercita el derecho potestativo o facultad jurídica que, presupuesta la concurrencia de los requisitos legales previstos en cada caso, tiene para conservar, adquirir o recuperar la nacionalidad española, derecho o facultad que se puede ostentar bien *ex lege*, bien mediante concesión, integrando la “causa jurídica” de la adquisición en el primer caso “la declaración de voluntad” del interesado, siendo en esta categoría y no en la de “concesión” en la que ha de subsumirse el supuesto de las adquisiciones de la nacionalidad por residencia según lo antes razonado, si bien con la particularidad de que en este caso tal “declaración” de la voluntad se desdobra en dos momentos distintos, el de la solicitud inicial de la tramitación del expediente y el de la formalización del obligado trámite del juramento o promesa, siendo este segundo momento y no el primero el determinante para fijar el hito temporal a que se podrá retrotraer la eficacia de la inscripción registral posterior, no sólo porque la solicitud inicial está pendiente de la “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales, sino además porque aquella solicitud, como manifestación de la voluntad finalista de adquirir la nacionalidad española, carece de firmeza al quedar sometida al plazo de caducidad de ciento ochenta días por inactividad del solicitante que establece el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil. En definitiva, la solicitud inicial, una vez notificada la concesión de la nacionalidad, o se confirma en el indicado plazo por medio del cumplimiento del requisito del juramento o promesa que impone el artículo 23 del Código civil, o da lugar a la caducidad de la concesión todavía en una fase de mera formación del derecho a la nacionalidad.

VI.- Por todo lo anterior, dado que en la fecha en que el padre dio cumplimiento a los citados requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez la nacionalidad española, es decir, el 25 de agosto de 2009, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, puesto que cumplió los 18 años el 19 de junio de ese mismo año, hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (10ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si la interesada, cuando la madre adquiere por residencia la nacionalidad española, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Reus (Tarragona) el 3 de abril de 2007, la ciudadana colombiana, Doña L. nacida en Colombia el 6 de agosto de 1987, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeta a la patria potestad de una española, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: registro de nacimiento; certificación literal de nacimiento de su madre, Doña G-C. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 23 de agosto de 2006; certificado de empadronamiento; certificado del Consulado General de Colombia en Barcelona sobre inscripción consular de la interesada; fotocopias del DNI de la madre y del pasaporte y NIE de la promotora.

2.- El mismo día se levanta acta de opción a la nacionalidad española y se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 14 de noviembre de 2007 denegando la solicitud de la promotora, por considerar que cuando la madre adquiere la nacionalidad española la interesada ya tenía 18 años y era, por tanto, mayor de edad según las legislaciones española y colombiana, por lo que no cabe, en consecuencia, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española de la forma pretendida.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación. El Encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- La interesada, nacida en Colombia el 6 de agosto de 1987, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil, alegando la nacionalidad española de su madre, que esta adquirió por residencia, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 23 CC. con fecha 23 de agosto de 2006. El Encargado del Registro Civil Central, mediante auto de 14 de noviembre de 2007, denegó la solicitud de la promotora, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al ser la interesada mayor de edad en el momento de la adquisición de la nacionalidad española por su madre.

III.- En el presente caso, conviene interrogarse previamente a analizar las circunstancias del caso concreto sobre la verdadera naturaleza jurídica de la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Pues bien, remontándonos a los orígenes históricos de este título de adquisición de la nacionalidad española, ha de recordarse que a diferencia de lo que sucedía en nuestro Derecho histórico (desde la “moranza de diez años” de las Partidas y después en la Novísima Recopilación) y en la Constitución española de 1812, en que la vecindad era causa de que al extranjero domiciliado se le impusiera la condición de vasallo o

súbdito, *status* que se diferenciaban de los de natural o ciudadano, la Constitución de 1837, según resulta de la interpretación dada por la Circular de 28 de mayo de 1837, suprime la antigua sumisión del extranjero vecindado, y en su lugar le concede una facultad y derecho a adquirir la condición de nacional español. Esta concepción pasa al Código civil de 1889 que declara en su artículo 17 nº 4 la nacionalidad española de los extranjeros que, sin carta de naturaleza, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía. Por su parte, un Decreto de 29 de abril de 1931, al que dotó de fuerza legal la posterior Ley de 30 de diciembre del mismo año, reguló la forma de justificar la vecindad adquirida, de manera que ganada la vecindad y acreditada en forma, la Administración desarrollaba una función meramente “declaratoria” de tal circunstancia (cfr. art. 9).

Esta facultad del extranjero determinante de un cambio de estado presentaba el carácter personal propio de toda facultad de estado. Su ejercicio tenía lugar, según la doctrina más autorizada, mediante la presentación de la instancia que inicia el expediente destinado a justificar la concurrencia de los presupuestos legales de la vecindad y en la acción de cumplir activamente los requisitos que imponía el artículo 25 del Código civil (básicamente coincidente con el actual artículo 23 del mismo Cuerpo legal, esto es, renuncia a la nacionalidad anterior, juramento o promesa e inscripción). En definitiva la vecindad, para devenir eficaz, requería una actuación pública de constancia y de declaración oficial, pero la mera concurrencia de aquellos presupuestos legales originaba *ex lege* la “facultad” de obtener la condición y estado de español.

IV.- Esta concepción histórica de la naturalización por residencia se proyecta en el tiempo hasta llegar a la situación actual en la que la naturaleza jurídica de la actividad respectiva del interesado y de la Administración en el *iter* adquisitivo de la nacionalidad por residencia ha sido sometido al contraste de la jurisprudencia que se ha pronunciado de forma reiterada en un sentido coincide con los antecedentes históricos antes reseñados. En efecto, nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) ha declarado en numerosas ocasiones, entre otras en sus Sentencias de 24 de abril de 1999, 19 de junio de 1999, 25 de octubre de 1999 y 7 de octubre de 2000, que “la nacionalidad española es un auténtico estado civil, decisivo de la posición jurídica de la persona, si bien aquella tiene una doble dimensión, al ser un título para formar parte de la organización del Estado y además una cualidad de la persona como perteneciente a una comunidad, configurando el primero su aspecto público y la segunda el privado, sin que, no obstante, quepa escindir su verdadera naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no de causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurren las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión *stricto sensu* sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles, aunque pueda denegarse por motivos de orden público o de interés nacional suficientemente razonados”, sobre cuya concurrencia y valoración se proyecta también el principio de tutela judicial efectiva, por considerarse aquellas nociones como “conceptos judicialmente asequibles” (cfr. S.T.S. de 30 de junio de 2004).

Todo ello supone ratificar la idea de que en los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia el papel asignado a los Registros civiles que llevan a cabo su tramitación y al Ministerio de Justicia, a través de esta Dirección General de los Registros y del Notariado que lo resuelve, integra una función de “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales y de las *condictio facti* exigidos legalmente, de carácter meramente declarativo, por la que la Administración “reconoce” la existencia de la facultad de adquirir la nacionalidad española por parte del interesado, siendo la “causa jurídica” de tal adquisición no una “concesión” de las autoridades públicas, sino la voluntad declarada con tal finalidad por el interesado, voluntad que se instrumenta y exterioriza en la presentación de la instancia que inicia el expediente para “justificar” su vecindad y en cumplir los requisitos impuestos

por el artículo 25 del Código civil, como manifestación de una facultad o “poder jurídico” que encaja sin dificultad en la categoría de los derechos potestativos.

V.- Agotado el anterior análisis, procede ahora reinterpretar a su luz el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil y las referencias que hace a “las declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad”, entendiéndose por tales aquellas declaraciones a través de las cuales un ciudadano extranjero ejercita el derecho potestativo o facultad jurídica que, presupuesta la concurrencia de los requisitos legales previstos en cada caso, tiene para conservar, adquirir o recuperar la nacionalidad española, derecho o facultad que se puede ostentar bien *ex lege*, bien mediante concesión, integrando la “causa jurídica” de la adquisición en el primer caso “la declaración de voluntad” del interesado, siendo en esta categoría y no en la de “concesión” en la que ha de subsumirse el supuesto de las adquisiciones de la nacionalidad por residencia según lo antes razonado, si bien con la particularidad de que en este caso tal “declaración” de la voluntad se desdobra en dos momentos distintos, el de la solicitud inicial de la tramitación del expediente y el de la formalización del obligado trámite del juramento o promesa, siendo este segundo momento y no el primero el determinante para fijar el hito temporal a que se podrá retrotraer la eficacia de la inscripción registral posterior, no sólo porque la solicitud inicial está pendiente de la “constatación oficial” de la concurrencia de los presupuestos legales, sino además porque aquella solicitud, como manifestación de la voluntad finalista de adquirir la nacionalidad española, carece de firmeza al quedar sometida al plazo de caducidad de ciento ochenta días por inactividad del solicitante que establece el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil. En definitiva, la solicitud inicial, una vez notificada la concesión de la nacionalidad, o se confirma en el indicado plazo por medio del cumplimiento del requisito del juramento o promesa que impone el artículo 23 del Código civil, o da lugar a la caducidad de la concesión todavía en una fase de mera formación del derecho a la nacionalidad.

VI.- Por todo lo anterior, dado que en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los citados requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez la nacionalidad española, es decir, el 23 de agosto de 2006, la hija ya era mayor de edad según su estatuto personal, puesto que cumplió los 18 años el 6 de agosto de 2005, hay que concluir que no ha estado nunca sujeta a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (13ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si la interesada, cuando la madre adquiere la nacionalidad española de origen por opción, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 10 de mayo de 2010, la ciudadana colombiana Doña A-I. nacida en Colombia el 15 de febrero de 1991, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hija de española y haber estado bajo su patria potestad, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado local de nacimiento de la interesada; certificación literal de nacimiento de la madre de la interesada, Doña B-M. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 el 27 de octubre de 2009; fotocopias del documento de identidad de la interesada y de los pasaportes propio y de su madre.

2.- Con fecha 16 de mayo de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dictó auto denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que la interesada nunca estuvo bajo la patria potestad de un español, pues en la fecha de adquisición de la nacionalidad española de su madre, ella contaba con 18 años de edad cumplidos, no concurriendo los requisitos que establece el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando que no le es imputable la demora en la resolución del expediente de nacionalidad de su madre.

4.- Una vez notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- La interesada, nacida en Colombia, el 15 de febrero de 1991, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su madre, que adquirió por opción, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 27 de octubre de 2009. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por considerar que la interesada no había estado sujeta en ningún momento a la patria potestad de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.

III.- No hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina, que la inscripción en el Registro Civil es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española, conforme resulta espacialmente de lo dispuesto en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo. Este precepto, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito *sine qua non* de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el artículo 23 del Código civil, que subordina "la validez de la adquisición de la nacionalidad española" por opción, carta de naturaleza y residencia, entre otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español.

En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.

IV.- Siendo el caso de la madre de la interesada una adquisición por opción, sólo se podría entender que la eficacia de la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la voluntad de optar o a la de formalización del juramento o promesa, por ser éste el momento en el que el adquirente ha agotado la actividad fundamental a él exigida, como ha sostenido parte de nuestra doctrina científica y también algunos antecedentes de la doctrina oficial de este Centro Directivo (retroactividad que este mismo Centro ha negado que pueda operar *in peius*, esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado: cfr. resolución de 14-2ª de junio de 2005), y criterio incontrovertido para los supuestos de opción y recuperación.

V.- Ciertamente, el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, para los supuestos de declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de quién es el funcionario competente para recibir y documentar en acta tales declaraciones, añade que “se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento”. Pero este precepto no puede entenderse aplicable de forma universal para todos los supuestos de adquisiciones sobrevenidas o derivativas de la nacionalidad española, sino en relación con aquellas en que no medie una “concesión” por parte de la autoridad, esto es, en que la voluntad del interesado “declarada” en la forma solemne prevista por la legislación del Registro Civil constituye la verdadera causa jurídica de la adquisición del *status* de nacional español. Este planteamiento nos lleva a considerar como incluido en el ámbito del párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, sin esfuerzo interpretativo alguno, los supuestos de las declaraciones de opción, recuperación y conservación, como es el supuesto de referencia.

VI.- Dado que la interesada cumple los 18 años el 15 de febrero de 2009, y que, por tanto, en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el 27 de octubre del mismo año, la hija ya era mayor de edad según su estatuto personal, hay que concluir que la interesada no ha estado nunca sujeta a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto, con independencia de las razones técnicas u organizativas que hayan podido llevar al retraso en la tramitación del expediente de su progenitor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (46ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado ejercita la opción fuera de plazo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

- 1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Bogotá el 10 de septiembre de 2010, Don M-A. nacido el 15 de febrero de 1990 en Colombia, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción, por haber estado sometido a la patria potestad de un español. Aporta la siguiente documentación: certificado local de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento del padre, Don V-M. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 9 de enero de 2008; acta de matrimonio de los padres; fotocopias del documento de identidad y pasaporte del interesado y del padre.
- 2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular, dicta acuerdo de fecha de 17 de septiembre de 2010, denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que la solicitud había sido presentada una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 20 del Código Civil.
- 3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.
- 4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 y 22 del Código civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 4-2ª de julio de 2006; 16-5ª de marzo, 21-9ª de junio, 8-5ª y 21-2ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio y 2-4ª de julio de 2008; 3-4ª de febrero, 4-6ª de marzo, 2-6ª de Julio y 8-2ª de abril de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano colombiano nacido el 15 de febrero de 1990, alegando que su padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 9 de enero de 2008, siendo el interesado menor de edad conforme a su estatuto personal. La petición se basa en el artículo 20.1.a) del Código civil, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por estimar que el interesado había presentado su solicitud una vez caducado el plazo establecido para ello (artículo 20.2.c CC.).

III.- Dispone el artículo 20 en su apartado 2.c) que “la opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación”. Pues bien, el promotor presentó solicitud de opción a la nacionalidad española, como ya se ha dicho, el 10 de septiembre de 2010, es decir después de cumplidos, el 15 de febrero del mismo año, los veinte años de edad y sin que conste que no estuviera emancipado al llegar a los 18 años según su estatuto personal, por lo que tal derecho había caducado por el transcurso del plazo previsto en el precepto citado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (60ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española.

No es posible si el interesado ejercita la opción fuera de plazo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el 15 de junio de 2004, Don J., nacido en M. el 14 de diciembre de 1977 solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción en virtud del artículo 18.1º del Código Civil, según la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954. Aporta, entre otra, la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento, en la que consta que sus padres ostentaban en el momento de su nacimiento la nacionalidad colombiana; certificado de empadronamiento; y fotocopia del pasaporte del promotor.

2.- El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de 2 de agosto de 2004, ante la ausencia de acta de opción expresa y formal del interesado, le informa de la procedencia, en su caso, de solicitar que se inicie expediente para declarar que ostenta la nacionalidad española con valor de simple presunción, en base al artículo 96.2 de la Ley del Registro Civil, procediéndose al archivo de las actuaciones el 18 de octubre de 2005.

3.- Con fecha 28 de junio de 2010, se vuelve a presentar por el interesado escrito y documentos solicitando nuevamente y en los mismos términos que en el escrito inicial, la inscripción marginal de la adquisición de la nacionalidad española por opción. El Encargado del Registro Civil dicta acuerdo de fecha 26 de julio de 2010, por el que deniega la opción a la nacionalidad española del interesado, por no estar acreditado documentalmente que el mismo haya ejercitado expresa y formalmente ante el Encargado del Registro Civil Consular o el Encargado del Registro Civil de su domicilio el derecho de opción. La inexistencia de dicha acta formal extendida ante el Encargado del Registro Civil competente impide la inscripción solicitada ya que dicha acta constituiría, en su caso, el único título para practicar la inscripción marginal con carácter constitutivo de adquisición de la nacionalidad española por opción. Por otra parte, no se observa que se hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de la nacionalidad española.

4.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

5.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 y 19 del Código Civil en la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954; 20 y 22 del Código civil en su redacción actual; 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 4-2ª de julio de 2006; 16-5ª de marzo, 21-9ª de junio,

8-5ª y 21-2ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio y 2-4ª de julio de 2008; 3-4ª de febrero, 4-6ª de marzo, 2-6ª de Julio y 8-2ª de abril de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano colombiano nacido en España el 14 de diciembre de 1977. La petición se basa en el artículo 18.1º del Código Civil, según la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad los nacidos en territorio español de padres extranjeros que no se hallen comprendidos en el artículo 17.3. El Encargado del Registro Civil Central dictó resolución denegando la solicitud por no resultar acreditado documentalmente que el interesado haya ejercitado, de manera expresa y formalmente, el derecho de opción ante el Encargado del Registro Civil competente, en el plazo previsto en el artículo señalado.

III.- En el presente caso, tal y como se ha señalado anteriormente, el artículo 18 del Código Civil, según la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, vigente en el momento del nacimiento del promotor, disponía que podían adquirir la nacionalidad española por opción “1º Los nacidos en territorio español de padres extranjeros que no se hallen comprendidos en el número 3º del artículo 17”, estableciendo que los interesados podrán hacer la declaración de opción, dentro del año siguiente a su mayor edad o emancipación, ante el encargado del Registro del Estado Civil de pueblo en que residieren para los que se hallen en el Reino, o ante uno de los Agentes consulares o diplomáticos del Gobierno español, si residen en el extranjero.

Pues bien, tal y como indica el Encargado del Registro Civil en el auto recurrido, no obra en el expediente documento alguno referente a la solicitud de opción y su ejercicio ante el Encargado competente, en el plazo previsto, por lo que no ha resultado acreditado que el interesado realizara la mencionada declaración de opción.

Por otra parte, tampoco resulta de aplicación el artículo 19 del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 51/1982, de 13 de julio, por no haber estado sometido el interesado a la patria potestad de un español, ni se encuentra en ninguno de los supuestos del vigente artículo 20 del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid

Resolución de 27 de Enero de 2014 (81ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado ejercita la opción fuera de plazo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central el 16 de junio de 2009, Don C-M. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hijo, Don

R-C. nacido en Ecuador el 10 de febrero de 1984, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Aporta la siguiente documentación: copia íntegra de la inscripción de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento del promotor, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 16 de octubre de 2007; inscripción de matrimonio de los padres; certificado de empadronamiento; y fotocopia del DNI del promotor.

2.- El Encargado del Registro Civil Central dictó auto el 19 de julio de 2010 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que la solicitud había sido presentada una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 20 del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, el padre del solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando que su hijo presenta cierta discapacidad. Aporta fotocopia del Dictamen técnico facultativo de incapacidad de la Comunidad de Madrid de fecha 11 de agosto de 2009, con fecha de validez hasta el 12 de junio de 2013.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20 y 22 del Código civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 4-2ª de julio de 2006; 16-5ª de marzo, 21-9ª de junio, 8-5ª y 21-2ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio y 2-4ª de julio de 2008; 3-4ª de febrero, 4-6ª de marzo, 2-6ª de Julio y 8-2ª de abril de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano ecuatoriano nacido el 10 de febrero de 1984, alegando que su padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 16 de octubre de 2007, siendo el interesado menor de edad conforme a su estatuto personal. La petición se basa en el artículo 20.1.a) del Código civil, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Central dictó resolución denegando la solicitud por estimar que el interesado había presentado su solicitud una vez caducado el plazo establecido para ello (artículo 20.2.c CC.).

III.- Dispone el artículo 20 en su apartado 2.c) que “la opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación”. Pues bien, el promotor solicitó la nacionalidad española por opción para su hijo, como ya se ha dicho, el 16 de junio de 2009, es decir después de cumplidos, el 10 de febrero de 2004, los veinte años de edad y sin que conste que no estuviera emancipado al llegar a los 18 años según su estatuto personal, por lo que tal derecho había caducado por el transcurso del plazo previsto en el precepto citado.

En cuanto a la alegación contenida en el escrito de recurso, en relación con que el interesado sufre una discapacidad del 76%, cabe destacar que únicamente se ha presentado como prueba de lo mismo una fotocopia del Dictamen técnico facultativo de la Comunidad de Madrid de fecha 11 de agosto de 2009 (con fecha de validez hasta el 12 de junio de 2013) y, que en caso de que resultara suficientemente acreditada la incapacidad del interesado, la declaración de opción se debería haber formulado de acuerdo a lo dispuesto en los apartados a) o b) del artículo 20.2 del Código Civil, dependiendo de lo que disponga la sentencia de incapacitación.

Por tanto, ha de concluirse que no concurren los requisitos necesarios para que pueda tener lugar la opción a la nacionalidad española pretendida, al haberse ejercitado la opción fuera del plazo establecido en el artículo 20 del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (2ª)

III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

Se estima la opción por razón de patria potestad formulada por el interesado, al considerarse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra Auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Zaragoza el 13 de enero de 2010, Don O. D., nacido el 5 de noviembre de 1990 en Senegal, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un ciudadano español. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento del padre, Don M. D., en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 10 de abril de 1996; certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI del padre y NIE del interesado.

2.- El mismo día, se levanta acta de opción a la nacionalidad española por el interesado ante el Encargado del Registro Civil de Zaragoza y se remiten las actuaciones al Registro Civil Central. El Magistrado Encargado, tras obtener una copia del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre, para comprobar si durante la tramitación hizo mención al interesado en cumplimiento del artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto el 12 de abril de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española, por considerar que el certificado local de nacimiento aportado no reunía las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley de Registro Civil y 85 de su Reglamento, a la vista de que, el que decía ser su padre, no hizo mención del interesado durante la tramitación del expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia, pese a venir obligado a declarar a los hijos menores de edad.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y aportando documentación diversa entre la que se encuentra un extracto del libro de familia donde aparece el interesado y su hermano gemelo, que si ha sido inscrito como español en el Registro Civil.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste consideró conforme a Derecho el Auto recurrido. El Encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23, 315 y 330 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo, 28-7ª de noviembre y 4-6ª de diciembre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2009.

II.- El promotor, nacido el 5 de noviembre de 1990, intentó su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, alegando la nacionalidad española de su padre, que adquirió por residencia cumpliendo los requisitos del artículo 23 del Código Civil el 10 de abril de 1996. La solicitud del promotor se desestimó por Auto de 12 de abril de 2012 del Encargado del Registro Civil Central al considerar que no estaba acreditada en este caso la filiación paterna. Contra este Auto se interpuso el recurso objeto de la presente resolución.

III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española" (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero "sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" (art. 85, I, RRC).

IV.- Como señala el auto recurrido, durante la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia incoado por Don M. D., no aparece que éste declarase al ahora interesado, pese a que era menor de edad. Sin embargo, cabe admitir la alegación realizada por el promotor en el escrito de recurso, ya que se observa que en el procedimiento de nacionalidad española por residencia, parece que el Sr. D. se refería a que no tenía hijos con la que era su pareja en el momento de la solicitud, que no se corresponde con la madre del interesado; lo indicado justificaría que el Sr. D. no hiciera referencia al interesado, al no ser preguntado expresamente por los hijos menores de edad que tenía. Asimismo, se observa que en trámite de recurso se aporta extracto del libro de familia, en el que aparece el interesado y su hermano gemelo, que sí que ha optado a la nacionalidad española.

V.- Por lo anteriormente expuesto, en el caso presente no hay motivos para dudar de la legalidad y autenticidad de la certificación senegalesa de nacimiento acompañada en el recurso, cuyo valor probatorio debe apreciarse ahora por ser de interés público su admisión (cfr. art. 358, II, R.R.C). Por otra parte, de la documentación obrante en el expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil para que el interesado opte a la nacionalidad española por patria potestad.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º- Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2º- Instar que se proceda a la inscripción de nacimiento del interesado y a la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 30 de Enero de 2014 (8ª)

III.3.1- Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si no resulta acreditado que el interesado haya estado sometido a la patria potestad de un español.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 8 de abril de 2008, el ciudadano colombiano Don J. A., nacido en Colombia el 16 de octubre de 1990, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: registro civil de nacimiento propio y de su padre, Don G. A., constando en este último su nacionalidad colombiana; certificación literal de nacimiento del abuelo paterno del interesado, Don E. A., en la que consta la recuperación de la nacionalidad española el 16 de noviembre de 2001; registro de matrimonio de los abuelos paternos; registro de defunción del padre del promotor; fotocopias del pasaporte español del abuelo paterno y del documento de identidad del interesado.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 17 de agosto de 2011 denegando la solicitud del promotor por entender que de la documentación aportada se desprende que el solicitante no estuvo nunca bajo la patria potestad de un español, ya que su padre no obtuvo nunca la nacionalidad española.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud, alegando que su abuelo paterno asumió su patria potestad y la de sus hermanos tras la muerte de su padre y solicitando que se le conceda la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- El interesado, nacido en Colombia el 16 de octubre de 1990, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil. El Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias, mediante auto de 17 de agosto de 2011, denegó

la solicitud del promotor, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al no constar que el padre del interesado adquiriera la nacionalidad española.

III.- En primer lugar, en cuanto a la alegación que hace el interesado en su escrito de recurso, en la que solicita acogerse a la opción de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, se observa que el promotor modifica en el recurso la causa petendi respecto de la inicial y la resolución de la cuestión basada en esta disposición requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Por tanto, dado que el acuerdo emitido se refiere a la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española por opción propuesta en la solicitud inicial del interesado, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la opción a la nacionalidad en base al artículo 20 del Código Civil.

IV.- En el presente caso, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente no parece que el padre del interesado, Don G. A., adquiriera en el momento de su nacimiento la nacionalidad española, al nacer en Colombia, hijo de padres de nacionalidad colombiana, y tampoco consta que la adquiriera con posterioridad. En cuanto a la alegación del promotor referente a que estuvo sujeto a la patria potestad de su abuelo paterno, Don E. A., con respecto al cual sí que consta la recuperación de la nacionalidad española en el año 2001, no obra en el expediente documento alguno en el que aparezca que el promotor estuviera sometido a su patria potestad.

Por tanto, hay que concluir que no ha resultado acreditado que el interesado haya estado sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 30 de Enero de 2014 (9ª)

III.3.1- Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si no resulta acreditado que el interesado haya estado sometido a la patria potestad de un español.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 8 de abril de 2008, el ciudadano colombiano Don G. A. S., nacido en Colombia el 18 de septiembre de 1987, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: registro civil de nacimiento propio y de su padre, Don G.

A. C., constando en este último su nacionalidad colombiana; certificación literal de nacimiento del abuelo paterno del interesado, Don E. A. S., en la que consta la recuperación de la nacionalidad española el 16 de noviembre de 2001; registro de matrimonio de los abuelos paternos; registro de defunción del padre del promotor; fotocopias del pasaporte español del abuelo paterno y del documento de identidad del interesado.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 17 de agosto de 2011 denegando la solicitud del promotor por entender que de la documentación aportada se desprende que el solicitante no estuvo nunca bajo la patria potestad de un español, ya que su padre no obtuvo nunca la nacionalidad española.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud, alegando que su abuelo paterno asumió su patria potestad y la de sus hermanos tras la muerte de su padre y solicitando que se le conceda la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª, 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- El interesado, nacido en Colombia el 18 de septiembre de 1987, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil. El Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias, mediante auto de 17 de agosto de 2011, denegó la solicitud del promotor, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al no constar que el padre del interesado adquiriera la nacionalidad española.

III.- En primer lugar, en cuanto a la alegación que hace el interesado en su escrito de recurso, en la que solicita acogerse a la opción de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, se observa que el promotor modifica en el recurso la causa petendi respecto de la inicial y la resolución de la cuestión basada en esta disposición requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Por tanto, dado que el acuerdo emitido se refiere a la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española por opción propuesta en la solicitud inicial del interesado, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la opción a la nacionalidad en base al artículo 20 del Código Civil.

IV.- En el presente caso, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente no parece que el padre del interesado, Don G. A. C., adquiriera en el momento de su nacimiento la nacionalidad española, al nacer en Colombia, hijo de padres de nacionalidad colombiana, y tampoco consta que la adquiriera con posterioridad. En cuanto a la alegación del promotor

referente a que estuvo sujeto a la patria potestad de su abuelo paterno, Don E. A. S., con respecto al cual sí que consta la recuperación de la nacionalidad española en el año 2001, no obra en el expediente documento alguno en el que aparezca que el promotor estuviera sometido a su patria potestad.

Por tanto, hay que concluir que no ha resultado acreditado que el interesado haya estado sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (10ª)

III.3.1- Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

No es posible la opción por razón de patria potestad si no resulta acreditado que el interesado haya estado sometido a la patria potestad de un español.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 8 de abril de 2008, el ciudadano colombiano Don F., nacido en Colombia el 18 de septiembre de 1987, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba diversa documentación: registro civil de nacimiento propio y de su padre, Don G., constando en este último su nacionalidad colombiana; certificación literal de nacimiento del abuelo paterno del interesado, Don E., en la que consta la recuperación de la nacionalidad española el 16 de noviembre de 2001; registro de matrimonio de los abuelos paternos; registro de defunción del padre del promotor; fotocopias del pasaporte español del abuelo paterno y del documento de identidad del interesado.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 16 de noviembre de 2011 denegando la solicitud del promotor por entender que de la documentación aportada se desprende que el solicitante no estuvo nunca bajo la patria potestad de un español, ya que su padre no obtuvo nunca la nacionalidad española.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud, alegando que su abuelo paterno asumió su patria potestad y la de sus hermanos tras la muerte de su padre y solicitando que se le conceda la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 19, 20 y 22 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 85, 226 a 229, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6ª de noviembre de 2001; 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo, 23-2ª de julio y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 2-2ª, 4-2ª y 17-3ª de julio, 20-2ª de noviembre de 2006; 16-5ª de marzo, 16-6ª de mayo, 21-9ª de junio, 8-5ª 21-2ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 21-2ª de enero, 11-4ª de Marzo, 10-2ª de mayo, 6-6ª de junio, 2-4ª de julio y 22-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª y 25-10ª de Febrero, 4-6ª y 11-4ª de marzo y 8-2ª de abril de 2009.

II.- El interesado, nacido en Colombia el 18 de septiembre de 1987, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad en base al artículo 20.1.a) del Código civil. El Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias, mediante auto de 16 de noviembre de 2011, denegó la solicitud del promotor, por entender que no se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil, al no constar que el padre del interesado adquiriera la nacionalidad española.

III.- En primer lugar, en cuanto a la alegación que hace el interesado en su escrito de recurso, en la que solicita acogerse a la opción de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, se observa que el promotor modifica en el recurso la causa petendi respecto de la inicial y la resolución de la cuestión basada en esta disposición requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Por tanto, dado que el acuerdo emitido se refiere a la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española por opción propuesta en la solicitud inicial del interesado, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la opción a la nacionalidad en base al artículo 20 del Código Civil.

IV.- En el presente caso, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente no parece que el padre del interesado, Don G., adquiriera en el momento de su nacimiento la nacionalidad española, al nacer en Colombia, hijo de padres de nacionalidad colombiana, y tampoco consta que la adquiriera con posterioridad. En cuanto a la alegación del promotor referente a que estuvo sujeto a la patria potestad de su abuelo paterno, Don E., con respecto al cual sí que consta la recuperación de la nacionalidad española en el año 2001, no obra en el expediente documento alguno en el que aparezca que el promotor estuviera sometido a su patria potestad.

Por tanto, hay que concluir que no ha resultado acreditado que el interesado haya estado sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 30 de Enero de 2014 (12ª)

III.3.1- Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando la madre adquiere la nacionalidad española de origen por opción, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 24 de mayo de 2011, Don M., nacido en Colombia el 9 de agosto de 1988, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo de española y haber estado bajo su patria potestad, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: registro local de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento de la madre, Doña V., constando la opción a la nacionalidad española de origen en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 el 7 de abril de 2009; fotocopias del pasaporte español de la madre y el documento de identidad del interesado.

2.- Con fecha 17 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dictó auto denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que el interesado era mayor de edad al tiempo del ejercicio de la opción por parte de su madre, no concurriendo los requisitos que establece el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del acuerdo.

4.- Una vez notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular se remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- El interesado, nacido en Colombia el 9 de agosto de 1988, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su madre, que adquirió por opción, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 7 de abril de 2009. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por considerar que el interesado no había estado sujeto en ningún momento a la patria potestad de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.

III.- No hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina, que la inscripción en el Registro Civil es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española, conforme resulta espacialmente de lo dispuesto en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo. Este precepto, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito *sine qua non* de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el artículo 23 del Código civil, que subordina “la validez de la adquisición de la nacionalidad española” por opción, carta de naturaleza y residencia, entre otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español. En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.

IV.- Siendo el caso de la madre del interesado una adquisición por opción, sólo se podría entender que la eficacia de la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la voluntad de optar o a la de formalización del juramento o promesa, por ser éste el momento en el que el adquirente ha agotado la actividad fundamental a él exigida, como ha sostenido parte de nuestra doctrina científica y también algunos antecedentes de la doctrina oficial de este Centro Directivo (retroactividad que este mismo Centro ha negado que pueda operar *in peius*, esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado: cfr. resolución de 14-2ª de junio de 2005), y criterio incontrovertido para los supuestos de opción y recuperación.

V.- Ciertamente, el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, para los supuestos de declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de quién es el funcionario competente para recibir y documentar en acta tales declaraciones, añade que “se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento”. Pero este precepto no puede entenderse aplicable de forma universal para todos los supuestos de adquisiciones sobrevenidas o derivativas de la nacionalidad española, sino en relación con aquellas en que no medie una “concesión” por parte de la autoridad, esto es, en que la voluntad del interesado “declarada” en la forma solemne prevista por la legislación del Registro Civil constituye la verdadera causa jurídica de la adquisición del *status* de nacional español. Este planteamiento nos lleva a considerar como incluido en el ámbito del párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, sin esfuerzo interpretativo alguno, los supuestos de las declaraciones de opción, recuperación y conservación, como es el supuesto de referencia.

VI.- Atendiendo a la legislación colombiana sobre mayoría de edad, aplicable al presente supuesto, en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el 7 de abril de 2009, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, por tanto, hay que concluir que el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

VII.- Finalmente, en cuanto a la alegación del recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr.

Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión del recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 30 de Enero de 2014 (13ª)

III.3.1- Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando la madre adquiere la nacionalidad española de origen por opción, era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 24 de mayo de 2011, Don S., nacido en Colombia el 19 de enero de 1988, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo de española y haber estado bajo su patria potestad, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: registro local de nacimiento del interesado; registro local y certificación literal de nacimiento de la madre, Doña C., constando en esta última la opción a la nacionalidad española de origen en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 el 17 de abril de 2009; fotocopias del pasaporte español de la madre y los documentos de identidad de madre e hijo.

2.- Con fecha 17 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dictó auto denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que el interesado era mayor de edad al tiempo del ejercicio de la opción por parte de su madre, no concurriendo los requisitos que establece el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando falta de motivación del acuerdo.

4.- Una vez notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular se remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3^a de febrero de 2003; 7-1^a de julio y 13-1^a de septiembre de 2004; y 20-3^a de enero y 11-3^a de octubre de 2005; 3-5^a de mayo, 23-6^a de junio, 17-3^a de julio, 2-2^a de julio y 20-2^a de noviembre de 2006; 16-6^a de mayo y 28-5^a de noviembre de 2007; 27-2^a de mayo y 22-4^a de Octubre de 2008; 25-10^a de Febrero, 11-4^a de Marzo y 22-4^a de Octubre de 2008; 25-10^a de Febrero, 11-4^a de Marzo de 2009.

II.- El interesado, nacido en Colombia el 19 de enero de 1988, ha intentado su inscripción de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad española de su madre, que adquirió por opción, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 17 de abril de 2009. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por considerar que el interesado no había estado sujeto en ningún momento a la patria potestad de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.

III.- No hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina, que la inscripción en el Registro Civil es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española, conforme resulta espacialmente de lo dispuesto en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo. Este precepto, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito *sine qua non* de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el artículo 23 del Código civil, que subordina “la validez de la adquisición de la nacionalidad española” por opción, carta de naturaleza y residencia, entre otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español. En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.

IV.- Siendo el caso de la madre del interesado una adquisición por opción, sólo se podría entender que la eficacia de la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la voluntad de optar o a la de formalización del juramento o promesa, por ser éste el momento en el que el adquirente ha agotado la actividad fundamental a él exigida, como ha sostenido parte de nuestra doctrina científica y también algunos antecedentes de la doctrina oficial de este Centro Directivo (retroactividad que este mismo Centro ha negado que pueda operar *in peius*, esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado: cfr. resolución de 14-2^a de junio de 2005), y criterio incontrovertido para los supuestos de opción y recuperación.

V.- Ciertamente, el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, para los supuestos de declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de quién es el funcionario competente para recibir y documentar en acta tales declaraciones, añade que “se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento”. Pero este precepto no puede entenderse aplicable de forma universal para todos los supuestos de adquisiciones sobrevenidas o derivativas de la nacionalidad española, sino en relación con aquellas en que no medie una “concesión” por parte de la autoridad, esto es, en que la voluntad del interesado “declarada” en la forma solemne prevista por la legislación del Registro Civil constituye la verdadera causa jurídica de la adquisición del *status* de nacional español. Este planteamiento nos lleva a considerar como incluido en el ámbito del párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, sin esfuerzo interpretativo alguno, los supuestos de las declaraciones de opción, recuperación y conservación, como es el supuesto de referencia.

VI.- Atendiendo a la legislación colombiana sobre mayoría de edad, aplicable al presente supuesto, en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el 17 de abril de 2009, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, por tanto, hay que concluir que el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

VII.- Finalmente, en cuanto a la alegación del recurrente relativa a la falta de motivación de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto resulte pertinente para defender su pretensión, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso, el Encargado del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión del recurrente y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita, por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 30 de Enero de 2014 (15ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española por patria potestad.

Se estima la opción por razón de patria potestad formulada por el interesado que, cuando la madre adquiere por opción la nacionalidad española, no había alcanzado todavía la mayoría de edad de acuerdo a su estatuto personal y ejercita la opción en plazo.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra Auto dictado por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Játiva (Valencia) el 14 de diciembre de 2010, Don N-E. nacido el 9 de agosto de 1990 en Argentina, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por haber estado sujeto a la patria potestad de un

ciudadano español. Adjuntaba la siguiente documentación: acta de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento de la madre, Doña M-B. en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por opción el 16 de marzo de 2009; acta de nacimiento del padre, Don J-L. acta de matrimonio de los padres; certificado de empadronamiento; fotocopias del DNI de la madre y pasaportes del padre y del interesado.

2.- Una vez ratificado el promotor, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el 25 de febrero de 2011 se levanta acta de opción a la nacionalidad española. El Encargado del Registro Civil de Játiva dicta auto el 25 de febrero de 2011, estimando que procedería la opción solicitada y remite las actuaciones al Registro Civil Central. El Encargado del Registro dictó auto el 14 de junio de 2011 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que con la documentación aportada, no queda acreditado que el solicitante haya estado sujeto a la patria potestad de un español conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código Civil, apartado 1.a), en el que fundamenta su solicitud.

3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alega que según la legislación argentina aplicable a su caso, fue menor de edad hasta el 2010.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 20, 23, 315 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo, 28-7ª de noviembre y 4-6ª de diciembre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2009.

II.- El interesado, nacido en Argentina el 9 de agosto de 1990, intentó su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, alegando la nacionalidad española de su madre, que ésta adquirió por opción cumpliendo los requisitos del artículo 23 del Código Civil el 16 de marzo de 2009. La solicitud del interesado se desestimó por Auto de 14 de junio de 2011 del Encargado del Registro Civil Central considerar que el promotor no cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 20.1.a) del CC. Contra este Auto se interpuso el recurso objeto de la presente resolución.

III.- En este caso, de acuerdo con el conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación argentina, se desprende que antes de la entrada en vigor de la modificación del Código Civil argentino por la Ley 26.579, la mayoría de edad estaba fijada en 21 años. Con ocasión de la entrada en vigor de la mencionada modificación en el año 2010, el promotor dejó de ser menor de edad, ya que en ese momento tenía cumplidos los 19 años, por lo que debe concluirse que el optante estuvo sometido a la patria potestad de un español, ya que la adquisición de la nacionalidad española de la madre del interesado tuvo lugar el 16 de marzo de 2009 y que, por tanto, la naturalización surtió efectos desde esa fecha (artículo 330 del Código Civil), es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la legislación argentina antes mencionada que conllevó la mayoría de edad el promotor.

Asimismo, en cuanto a la cuestión sobre si el interesado ejerció la opción dentro del plazo establecido en el artículo 20.2 del Código civil, se observa que el mencionado artículo dispone en su apartado c) que la declaración de opción se formulará por el interesado si está emancipado o es mayor de dieciocho años, indicando que la opción caducará a los veinte años de edad, con la salvedad de si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, como en el presente supuesto, en el que la mayoría de edad conforme a su estatuto personal está fijada en los 21 años, en cuyo caso el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación. Por tanto, al no constar la emancipación del interesado y atendiendo al momento en el que cumplió la mayoría de edad según su estatuto personal, cabe concluir que no habría caducado la opción.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º- Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2º- Instar que se proceda a la inscripción de nacimiento del recurrente y a la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (17ª)

III.3.1-Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si no se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 20.1.a) del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias el 20 de junio de 2011, Doña Mª-L. solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para su hijo, Don A-J. nacido en Colombia el 24 de noviembre de 1976, por haber estado sometido a la patria potestad de una española, en virtud del artículo 20.1.a) del Código Civil. Aporta la siguiente documentación: registro de nacimiento del interesado; certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción, conforme a lo establecido por el apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 el 8 de junio de 2009; fotocopias del acuerdo del Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, de fecha 14 de diciembre de 2010, por el que se declara la “interdicción definitiva por causa de discapacidad mental” del interesado, nombrándose como guardadora a la promotora del presente expediente; del pasaporte español de la Sra. C. y del documento de identidad del interesado.

2.- El Encargado de dicho Registro Civil Consular dictó auto el 17 de agosto de 2011 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad

española por considerar que el interesado era mayor de edad al tiempo del ejercicio de la opción por parte de su madre, por lo que no concurren los requisitos establecidos por el artículo 20.1.a) del Código Civil.

3.- Notificada la resolución, la madre del interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17, 20, 23 y 330 del Código civil (CC.); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano colombiano nacido el 24 de noviembre de 1976, alegando que su madre adquirió la nacionalidad española de origen por opción el 8 de junio de 2009. La petición se basa en el artículo 20.1.a) del Código civil, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por estimar que no concurrían en el presente caso los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil.

III.- No hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina, que la inscripción en el Registro Civil es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española, conforme resulta espacialmente de lo dispuesto en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo. Este precepto, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito *sine qua non* de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el artículo 23 del Código civil, que subordina “la validez de la adquisición de la nacionalidad española” por opción, carta de naturaleza y residencia, entre otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español. En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.

IV.- Siendo el caso de la madre del interesado una adquisición por opción, sólo se podría entender que la eficacia de la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la voluntad de optar o a la de formalización del juramento o promesa, por ser éste el momento en el que el adquirente ha agotado la actividad fundamental a él exigida, como ha sostenido parte de nuestra doctrina científica y también algunos antecedentes de la doctrina oficial de este Centro Directivo (retroactividad que este mismo Centro ha negado que pueda operar *in peius*, esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado: cfr. resolución de 14-2ª de junio de 2005), y criterio incontrovertido para los supuestos de opción y recuperación.

V.- Ciertamente, el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, para los supuestos de declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de quién es el funcionario competente para recibir y documentar en acta tales

declaraciones, añade que “se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento”. Pero este precepto no puede entenderse aplicable de forma universal para todos los supuestos de adquisiciones sobrevenidas o derivativas de la nacionalidad española, sino en relación con aquellas en que no medie una “concesión” por parte de la autoridad, esto es, en que la voluntad del interesado “declarada” en la forma solemne prevista por la legislación del Registro Civil constituye la verdadera causa jurídica de la adquisición del *status* de nacional español. Este planteamiento nos lleva a considerar como incluido en el ámbito del párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, sin esfuerzo interpretativo alguno, los supuestos de las declaraciones de opción, recuperación y conservación, como es el supuesto de referencia.

VI.- Atendiendo a la legislación colombiana sobre mayoría de edad, aplicable al presente supuesto, en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código Civil y adquirió validez su nacionalidad española, el 8 de junio de 2009, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, ya que cumplió los 18 años el 24 de noviembre de 1994, por tanto, hay que concluir que el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto.

Por otra parte, en cuanto a la alegación relativa a la posible incapacidad del interesado, en el expediente tan sólo obra fotocopia de un acuerdo judicial al respecto de fecha 14 de diciembre de 2010, 16 años después de cumplir el interesado la mayoría de edad, sin la correspondiente legalización.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

III.3.2.- Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen-art 20-1b cc

Resolución de 3 de enero de 2014 (88ª)

III.3.2.- Opción a la nacionalidad española.

No es posible la opción si la interesada no acredita su situación conforme al supuesto contemplado por el artículo 20.1.b) del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil de Estepona (Málaga).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Estepona el 18 de marzo de 2009, Doña Mª do C. nacida el 24 de octubre de 1952 en Marruecos, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil, por ser hija de madre española de origen nacida en España. Adjuntaba, entre otra, la siguiente documentación: traducción de su acta de nacimiento, en la que consta que los progenitores tienen nacionalidad portuguesa y aparece su madre con los apellidos T. R. certificación literal de nacimiento de Doña F. T. G. fotocopias del pasaporte y NIE de la interesada y DNI de la madre, en el que aparece con los apellidos T. G. sentencia de divorcio e inscripción de matrimonio de la interesada.

2.- Con fecha 7 de abril de 2010, se levanta acta de opción a la nacionalidad española ante el Encargado del Registro Civil de Estepona. Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil dictó providencia denegatoria de fecha 13 de septiembre de 2010.

3.- Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud y alegando que ha realizado la opción dentro de plazo por ser de aplicación el artículo 20.3 del Código Civil.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste consideró que procede su desestimación y el Encargado del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17 y 18 del Código civil en su redacción originaria, 20 de la redacción vigente del CC.; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9ª de septiembre y 5-2ª de diciembre de 2001; 21-5ª de enero, 5 de mayo y 6-3ª de noviembre de 2003; 20-1ª de julio de 2004; 20-3ª de septiembre de 2005; 20-5ª de noviembre de 2006; 2-4ª de junio y 4-7ª de diciembre de 2008 y 21-4ª de abril de 2009; 16-2ª de Febrero y 6-2ª de Abril de 2010.

II.- La interesada, nacida en Marruecos el 24 de octubre de 1952, ha pretendido optar a la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el vigente artículo 20.1.b) del Código Civil, basándose en que es hija de madre originariamente española y nacida en España. El Encargado del Registro Civil Consular desestimó la petición de la interesada, contra el acuerdo de denegación se interpuso el recurso actual.

III.- El artículo 20.1.b) del Código civil dispone que tienen derecho a optar a la nacionalidad española “aquellas [personas] cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”. Asimismo, el artículo 20.3 del Código Civil establece que “el ejercicio del derecho de opción previsto en el apartado 1.b de este artículo no estará sujeto a límite alguno de edad”, por lo que se debe entender realizada la opción dentro de plazo, de acuerdo a lo anteriormente señalado. En el presente caso, si bien consta que Doña F. T. G. nació en España en 1922 de padres nacidos en España, se observa una discrepancia en el segundo apellido de la madre. Así, en el acta de nacimiento de la promotora aparece como Doña F. T. R. y en su certificación literal de nacimiento y en la fotocopia del DNI consta con el apellido G. no obrando en el expediente documento alguno que justifique el cambio de apellido.

En este sentido cabe concluir que, por ahora, no ha quedado acreditada la filiación de la interesada con respecto de Doña F. T. G. debido a las discrepancias señaladas, por lo que no es posible estimar el recurso, al no resultar probado que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20.1.b) del Código civil. Todo ello, sin perjuicio de se pueda reiterar el expediente, siempre que con la correspondiente petición se aporte documentación nueva suficiente para acreditar, tanto la filiación materna de la interesada, como el cumplimiento de los requisitos del artículo 20.1.b) del Código Civil; ya que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, siempre que persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Estepona (Málaga).

III.5.- Conservación/pérdida/renuncia a la nacionalidad

III.5.1.-Conservación/pérdida/renuncia a la nacionalidad española

Resolución de 3 de enero de 2014 (107ª)

III.5.1.- Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Con ocasión de la renovación del pasaporte de la interesada, se advierte por el Encargado del Registro Civil de Bogotá que no consta anotación marginal de conservación de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la interesada, Doña N. nacida el 26 de abril de 1987 en Colombia, por lo que con fecha 26 de abril de 2010 se comunicó a la interesada la incoación de expediente de pérdida de la nacionalidad española, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.3 del Código Civil, según redacción de la Ley 36/2002.

2.- Una vez recibidas las alegaciones de la interesada en el Registro Civil Consular y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo el 8 de junio de 2010, por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud del artículo 24.3 del Código Civil, dado que la interesada ostenta la nacionalidad española por ser hija de padre español, también nacido en el extranjero, teniendo la misma atribuida la nacionalidad colombiana y residiendo en Colombia; no constando que durante los 3 años siguientes a llegar a la mayoría de edad la promotora declarara ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad española.

3.- Notificado el acuerdo a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la recuperación española y reconociendo no haber realizado, por desconocimiento, la declaración de conservación en el plazo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil.

4.- El Encargado del Registro Civil Consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (CC.); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II.- Se pretende por la interesada, nacida en Colombia el 26 de abril de 1987, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su padre, español nacido en el extranjero. El Encargado del Registro Civil Consular dirigió escrito a la interesada el 8 de junio de 2010 comunicándole dicha pérdida. Esta comunicación constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el escrito de recurso, la interesada solicita la recuperación de la nacionalidad española, versando el presente expediente sobre la pérdida de la nacionalidad de acuerdo con el artículo 24.3 del Código Civil. Por tanto, la resolución de la cuestión basada en el artículo 26 del Código Civil requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Dado que el acuerdo emitido se refiere a la pérdida de la nacionalidad, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro Directivo debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la anotación correspondiente.

IV.- Dispone el apartado III del artículo 24 CC., que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”. Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Colombia) y su padre también nació en el extranjero, en este caso en Egipto. Alcanzó la mayoría de edad el 26 de abril de 2005, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (69ª)

III.5.1-Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Con ocasión de la renovación del pasaporte de la interesada, se advierte por el Encargado del Registro Civil de Bogotá que no consta anotación marginal de conservación de la

nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la interesada, Doña L-M^a. nacida el 19 de noviembre de 1985 en Colombia, por lo que con fecha 14 de septiembre de 2010 se comunicó a la interesada la incoación de expediente de pérdida de la nacionalidad española, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.3 del Código Civil, según redacción de la Ley 36/2002.

2.- Una vez recibidas las alegaciones de la interesada en el Registro Civil Consular y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo el 29 de octubre de 2010, por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud del artículo 24.3 del Código Civil, dado que la interesada ostenta la nacionalidad española por ser hija de padre español, también nacido en el extranjero, teniendo la misma atribuida la nacionalidad colombiana y residiendo en Colombia; no constando que durante los 3 años siguientes a llegar a la mayoría de edad la promotora declarara ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad española.

3.- Notificado el acuerdo a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la recuperación española y reconociendo no haber realizado la declaración de conservación en el plazo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil.

4.- El Encargado del Registro Civil Consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (CC.); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2^a de septiembre, 4-1^a de diciembre de 2000; y 8-6^a de noviembre de 2006.

II.- Se pretende por la interesada, nacida en Colombia el 19 de noviembre de 1985, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su padre, español nacido también en Colombia. El Encargado del Registro Civil Consular dirigió escrito a la interesada el 29 de octubre de 2010 comunicándole dicha pérdida. Esta comunicación constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el escrito de recurso, la interesada solicita la recuperación de la nacionalidad española, versando el presente expediente sobre la pérdida de la nacionalidad de acuerdo con el artículo 24.3 del Código Civil. Por tanto, la resolución de la cuestión basada en el artículo 26 del Código Civil requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Dado que el acuerdo emitido se refiere a la pérdida de la nacionalidad, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro Directivo debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la anotación correspondiente.

IV.- Dispone el apartado III del artículo 24 CC., que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”. Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Colombia) y su padre también nació en Colombia. Alcanzó la mayoría de edad el 19 de noviembre de 2003, o sea, después de que

entrarse en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (82ª)

III.5.1-Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Con fecha 13 de julio de 2010, Doña M. nacida en Colombia el 7 de junio de 1988, solicitó ante el Consulado General de España en Bogotá la renovación de su pasaporte español. Por el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá que se advirtió que no constaba anotación marginal de conservación de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la interesada, por lo que conforme al artículo 24.3 del Código Civil, según redacción de la Ley 36/2002, se habría producido la pérdida de la nacionalidad española.

2.- El 2 agosto de 2010, el Encargado del Registro Civil Consular dicta providencia de inicio del expediente para declarar la pérdida de la nacionalidad española de la interesada, produciéndose la notificación a la promotora el mismo día. En la comparecencia de la Sra. S. alega que desconocía el contenido del artículo 24.3 del Código Civil, por lo que no realizó declaración de conservación alguna.

3.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo el 23 de agosto de 2010 por el que acuerda la inscripción de la pérdida de la nacionalidad española en el acta de nacimiento de la interesada, en virtud del artículo 24.3 del Código Civil.

4.- Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando mantener la nacionalidad española.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (CC.); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II.- Se pretende por la interesada, nacida en Colombia el 7 de junio de 1988, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su padre, español nacido también en Colombia.

El Encargado del Registro Consular dirigió escrito a la interesada el 23 de agosto de 2010 comunicándole dicha pérdida. Esta comunicación constituye el objeto del presente recurso.

III.- Dispone el apartado III del artículo 24 CC., que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residen les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Colombia) y su padre también nació en Colombia. Alcanzó la mayoría de edad el 7 de junio de 2006, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (4ª)

III.5.1- Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Con ocasión de la renovación del pasaporte de la interesada, se advierte por el Encargado del Registro Civil de Bogotá que no consta anotación marginal de conservación de la

nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la promotora, Doña A., nacida el 10 de junio de 1986 en Colombia, por lo que con fecha 9 de junio de 2011 se comunicó a la interesada la incoación de expediente de pérdida de la nacionalidad española, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.3 del Código Civil, según redacción de la Ley 36/2002. La misma presenta el 30 de junio de 2011 escrito de alegaciones, en el que manifiesta que pesa a ser mayor de edad, no considera que se haya emancipado y, por tanto, no procede la pérdida de la nacionalidad.

2.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo el 13 de julio de 2011, por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud del artículo 24.3 del Código Civil, dado que la interesada ostenta la nacionalidad española por ser hija de madre española, también nacida en Colombia, teniendo la misma atribuida la nacionalidad colombiana y residiendo en Colombia; no constando que durante los 3 años siguientes a llegar a la mayoría de edad la promotora declarara ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad española.

3.- Notificado el acuerdo a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga su nacionalidad española o la recuperación de la misma.

4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (Cc); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II.- Se pretende por la interesada, nacida en Colombia el 10 de junio de 1986, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su madre, española nacido en el extranjero. El Encargado del Registro Civil Consular dirigió escrito a la interesada el 13 de julio de 2011 comunicándole dicha pérdida. Esta comunicación constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el escrito de recurso, la interesada solicita la recuperación de la nacionalidad española, versando el presente expediente sobre la pérdida de la nacionalidad de acuerdo con el artículo 24.3 del Código Civil. Por tanto, la resolución de la cuestión basada en el artículo 26 del Código Civil requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Dado que el acuerdo emitido se refiere a la pérdida de la nacionalidad, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro Directivo debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la anotación correspondiente.

IV.- Dispone el apartado III del artículo 24 Cc, que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Colombia) y su madre también nació en Colombia. Alcanzó la mayoría de edad el 10 de junio de 2004, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 30 de Enero de 2014 (16ª)

III.5.1-Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando el interesado alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Con ocasión de la renovación del pasaporte del interesado, se advierte por el Encargado del Registro Civil de Bogotá que no consta anotación marginal de conservación de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento del interesado, Don D. nacido el 11 de diciembre de 1989 en Colombia, por lo que con fecha 9 de junio de 2011 se comunicó al interesado la incoación de expediente de pérdida de la nacionalidad española, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.3 del Código Civil, según redacción de la Ley 36/2002. El mismo presenta el 30 de junio de 2011 escrito de alegaciones, en el que manifiesta que pese a ser mayor de edad, no considera que se haya emancipado y, por tanto, no procedería la pérdida de la nacionalidad.

2.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular dicta acuerdo el 13 de julio de 2011, por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud del artículo 24.3 del Código Civil, dado que el interesado ostenta la nacionalidad española por ser hijo de padre español, también nacido en Colombia, teniendo el mismo atribuida la nacionalidad colombiana y residiendo en Colombia; no constando que durante los 3 años siguientes a llegar a la mayoría de edad el promotor declarara ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad española.

3.- Notificado el acuerdo al interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga su nacionalidad española o la recuperación de la misma.

4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (CC.); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II.- Se pretende por el interesado, nacido en Colombia el 11 de diciembre de 1989, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su padre, español nacido en el extranjero. El Encargado del Registro Civil Consular dirigió escrito al interesado el 13 de julio de 2011 comunicándole dicha pérdida. Esta comunicación constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el escrito de recurso, el interesado solicita la recuperación de la nacionalidad española, versando el presente expediente sobre la pérdida de la nacionalidad de acuerdo con el artículo 24.3 del Código Civil. Por tanto, la resolución de la cuestión basada en el artículo 26 del Código Civil requiere un pronunciamiento previo del Encargado del Registro sobre ese punto. Dado que el acuerdo emitido se refiere a la pérdida de la nacionalidad, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este Centro Directivo debe encaminarse únicamente a dilucidar si procede o no la anotación correspondiente.

IV.- Dispone el apartado III del artículo 24 CC., que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

Examinados los datos del interesado resulta que éste nació y reside en el extranjero (Colombia) y su padre también nació en Colombia. Alcanzó la mayoría de edad el 11 de diciembre de 2007, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

III.8.- Competencia en exp nacionalidad

III.8.1.- Competencia exp. de nacionalidad por residencia

Resolución de 13 de Enero de 2014 (12ª)

III.8.1-Incompetencia del Registro Civil para resolver un expediente de nacionalidad por residencia.

Se declara la nulidad de la resolución del encargado que declara la caducidad de una solicitud de nacionalidad española por residencia sin previa remisión del expediente a la DGRN, para lo que carece de competencia.

En las actuaciones sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Pontevedra.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Poio (Pontevedra) el 9 de septiembre de 2010, la Sra. J de F. mayor de edad y de nacionalidad brasileña, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Aportaba, entre otros, los siguientes documentos: certificado de nacimiento, pasaporte, volante de empadronamiento, tarjeta de residencia, contrato de alquiler de vivienda y justificantes de percepción de renta activa de inserción.

2.- Ratificada la interesada, el expediente se remitió al Registro Civil de Pontevedra, competente para su tramitación, desde donde se requirió la aportación de certificado de antecedentes penales de su país de origen. Concedidas dos prórrogas a solicitud de la interesada y transcurrida la última de ellas sin que se hubiera aportado la documentación requerida, el expediente se trasladó al ministerio fiscal, que emitió informe interesando su archivo. La encargada del Registro Civil de Pontevedra dictó auto el 13 de abril de 2012 declarando la caducidad del expediente por paralización durante más de tres meses por causa imputable a la promotora.

3.- Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso alegando su falta de recursos económicos para la obtención de documentación complementaria y solicitando la exención de presentación de los documentos requeridos atendiendo a sus especiales circunstancias como víctima de maltrato por parte del padre de sus hijos.

4.- Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Pontevedra remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 63 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3ª de enero de 2002; 17-3ª de mayo de 2004; 30-1ª de noviembre de 2006; 27-1ª y 2ª de marzo y 15-3ª de octubre de 2008; 24-6ª de 2009; 13-1ª de enero y 25-8ª de noviembre de 2010.

II.- En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia el encargado del registro civil del domicilio carece de facultad decisoria porque la competencia para la concesión corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 21 y 22 CC.). Por lo tanto, si el encargado que ha de instruir la primera fase del expediente (art. 365 RRC) estima que no se cumplen los requisitos legales para la concesión, ha de limitarse a elevar dicho expediente a este centro directivo, una vez tramitado conforme a las reglas generales, con el correspondiente informe-propuesta desfavorable.

III.- No se ha hecho así en este caso, de modo que procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por incompetencia del órgano que resolvió. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil.

IV.- Por lo demás, no habiéndose completado la tramitación del expediente, es oportuno devolver las actuaciones al Registro Civil de Pontevedra para que se completen los trámites necesarios cerrando la instrucción del expediente con el informe del ministerio fiscal y elevándolo a esta dirección general con la propuesta del propio encargado en el sentido que estime adecuado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y declarar la nulidad de la resolución recurrida.

2º.- Retrotraer las actuaciones devolviendo el expediente al Registro Civil de Pontevedra para que se complete la tramitación de la instrucción y se remita todo lo actuado a este centro para la resolución de la solicitud.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Pontevedra.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (3ª)

III.8.1- Competencia en expedientes de nacionalidad por residencia

Se declara la nulidad del auto de la encargada que deniega la concesión de la nacionalidad española por residencia, para lo que carece de competencia.

En las actuaciones sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Sepúlveda (Segovia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Sepúlveda el 5 de noviembre de 2009, la Sra. C., mayor de edad y de nacionalidad colombiana, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Aportaba, entre otros, los siguientes documentos: inscripción de nacimiento, certificado de ausencia de antecedentes penales en su país de origen, certificado de empadronamiento, pasaporte, tarjeta de residencia en España y contrato de trabajo.

2.- Ratificada la promotora, se practicó la audiencia reservada prevista en el artículo 221 RRC. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Sepúlveda dictó auto el 18 de marzo de 2009 denegando la solicitud de adquisición de la nacionalidad por considerar que no se cumplía el tiempo de residencia legal y continuada de dos años en España.

3.- Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que cumple el tiempo de residencia necesario, en prueba de lo cual aporta varios certificados de empadronamiento en diferentes localidades, informe de vida laboral, contrato de trabajo y justificantes de cuenta en una entidad bancaria.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió a la solicitud. La encargada del Registro Civil de Sepúlveda remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 63 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones, entre otras, 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3ª de enero de 2002; 17-3ª de mayo de 2004; 30-1ª de noviembre de 2006; 27-1ª y 2ª de marzo y 15-3ª de octubre de 2008.

II.- En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia el encargado del registro civil del domicilio carece de facultad decisoria porque la competencia para la concesión corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 21 y 22 Cc). Por lo tanto, si el encargado que ha de instruir la primera fase del expediente (art. 365 RRC) estima que no se cumplen los requisitos legales para la concesión, ha de limitarse a elevar dicho expediente a este centro directivo, una vez tramitado conforme a las reglas generales, con el correspondiente informe-propuesta desfavorable.

III.- No se ha hecho así en este caso, en el que la encargada denegó directamente la concesión, por lo que procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por incompetencia del órgano que resolvió. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil.

IV.- A la vista de lo anterior y dado que se considera completada la fase de instrucción del expediente que corresponde realizar al registro civil del domicilio de la promotora, procede ahora continuar con su tramitación desde el punto en que se interrumpió por causa del archivo ordenado por el auto recurrido.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Declarar la nulidad por incompetencia del auto dictado por la encargada del Registro Civil de Sepúlveda el 18 de marzo de 2009.

2º.- Ordenar la continuación del procedimiento de nacionalidad por residencia por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Sepúlveda.

III.8.2.- Competencia en exp. de nacionalidad por motivos distintos de la residencia

Resolución de 22 de Enero de 2014 (1ª)

III.8.2-Opción a la nacionalidad española.

Se declara la incompetencia del Registro Consular correspondiente al lugar de domicilio del interesado, que ha resuelto sobre la solicitud formulada al amparo de lo dispuesto en el apartado II de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y se retrotraen las actuaciones al Registro consular correspondiente al lugar de nacimiento del interesado, que es el verdaderamente competente para resolver.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la parte actora, contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular de España en San Francisco, California (EE.UU.).

HECHOS

- 1.- Don J-R. presenta escrito ante el Registro Civil Consular de San Francisco, California (EE. UU) (correspondiente a su lugar de domicilio) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, Disposición adicional séptima.
- 2.- El Encargado del Registro Civil Consular deniega lo solicitado por la parte interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
- 3.- Notificada la parte interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
- 4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Municipal como español de origen al nacido en S de C. (Cuba) el 16 de diciembre de 1954, en virtud del ejercicio de la opción prevista por los apartados primero y segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, o los nietos de abuelos que hubiesen perdido su nacionalidad española como consecuencia del exilio debido a la Guerra Civil.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada en los modelos normalizados de los Anexos I y II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Consular de San Francisco se dictó Auto denegando lo solicitado.

III.- En el presente expediente no procede entrar a conocer sobre el fondo de la cuestión controvertida (procedencia de la denegación de la opción solicitada por la parte actora), habida cuenta de que, examinado el conjunto de las actuaciones, ha podido verificarse que el Órgano que ha resuelto la solicitud del Sr. F. (Registro Civil Consular de San Francisco) era manifiestamente incompetente para pronunciarse al respecto. Se trata de una conclusión indubitada del examen conjunto del criterio IV de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado con los artículos 16 y 46 del Reglamento del Registro Civil. De acuerdo con el criterio puesto de manifiesto, “es Registro competente para practicar la inscripción de la opción el que corresponda al lugar de nacimiento del optante; cuando esté en otro término municipal o demarcación consular el registro competente para practicar la inscripción – como en el supuesto presente -, el Encargado ante el que se formule debidamente declaración de opción levantará acta por duplicado con las circunstancias de la opción y las de identidad del sujeto; uno de los ejemplares, con los documentos acreditativos de los supuestos legales, se remitirá al Registro competente para, en su virtud, practicar la inscripción”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: declarar la nulidad del Auto del Encargado del Registro Civil Consular de San Francisco (EE.UU), que deniega la opción a la nacionalidad española solicitada por Don J-R. al amparo de lo dispuesto por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por manifiesta incompetencia para resolver, declarando la retroacción de las actuaciones al momento en que el Registro Civil indicado debió practicar la remisión de las actuaciones al Registro Civil competente, esto es, el consular correspondiente al lugar de nacimiento del interesado (S de C. Cuba), para que sea efectuada tal remisión y se instruya el resto del procedimiento de acuerdo con los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Procediendo la Resolución impugnada de un Órgano incompetente para resolver, desde esta Dirección General no es posible realizar, en consecuencia, apreciación alguna sobre el resto de las alegaciones formuladas por el interesado en su escrito de recurso, debiendo la parte interesada esperar a que se produzca el pronunciamiento del Registro consular correspondiente a su lugar de nacimiento, que le será notificado por el cauce ordinario.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en San Francisco (EE.UU).

III.8.3.- Exp. De nacionalidad-alcance de la calificación-art 27 lrc

Resolución 30 de Enero de 2014 (5ª)

III.8.3-Calificación.

El Encargado del Registro Civil no puede volver a enjuiciar el fondo del asunto relativo a la cancelación de una inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada, encontrándose pendiente de resolución por parte de esta Dirección General el recurso interpuesto por su representante en tiempo y forma.

En el expediente sobre cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular en Buenos Aires, Doña M^a-T. nacida en M. el 7 de agosto de 1917, de padre uruguayo y madre originariamente española, solicitó la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Por auto de fecha 30 de abril de 2004, el Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires estima la pretensión de la interesada, remitiendo las actuaciones al Registro Civil de Madrid, competente para practicar la correspondiente inscripción.

2.- Por providencia de fecha 5 de mayo de 2005, la Encargada del Registro Civil de Madrid deniega la inscripción, al entender que la interesada al nacer sólo adquirió la nacionalidad uruguaya de su padre, de acuerdo con la legislación vigente en el momento del nacimiento de la interesada. La mencionada providencia es recurrida y este Centro Directivo por Resolución 23-5^a de marzo de 2006, estima el recurso interpuesto y ordena que se anote la declaración con valor de simple presunción, sin perjuicio, de la posibilidad de iniciar el correspondiente expediente de cancelación en caso de estimarse procedente.

3.- Una vez practicada la anotación de la declaración de nacionalidad de la interesada, marginalmente a su inscripción de nacimiento; por escrito del Ministerio Fiscal de fecha 15 de diciembre de 2006, se interesa el inicio de procedimiento de cancelación de la declaración de nacionalidad, por entender que el artículo 17.3 del Código Civil, según la redacción dada por la Ley de 13 de julio de 1982, no se podía aplicar retroactivamente a nacimientos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954 y, por otra parte, de acuerdo con los artículos 17.1º y 18 del Código Civil en su redacción original, vigente en el momento del nacimiento de la interesada, no le correspondería a la misma la nacionalidad española. Por providencia de la Encargada del Registro de fecha 16 de enero de 2007 se inicia el expediente, produciéndose la notificación al representante de la interesada el 4 de julio de 2007 por comparecencia en el Registro Civil Consular de Buenos Aires. En dicha comparecencia, el representante, hijo de la interesada, pone de manifiesto que se ha producido su fallecimiento, aportando como prueba certificado de defunción.

4.- La Encargada del Registro Civil de Madrid el 23 de abril de 2010, dicta auto por el que cancela la anotación de nacionalidad española practicada al margen de la inscripción de nacimiento de la interesada. Notificada la resolución al representante de la interesada, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del mismo.

5.- Posteriormente, el 23 de febrero de 2011, la Encargada del Registro Civil de Madrid dicta nuevo auto, por el que se acuerda dejar sin efecto el recurso interpuesto por el promotor y practicar la cancelación de la anotación marginal de la declaración con valor de simple presunción. Notificado el nuevo auto al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso por el que interesa la revocación del auto y la continuación del trámite del recurso interpuesto contra el auto de fecha 23 de julio de 2010. Notificado el promotor, vuelve a solicitar la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción para su madre. Finalmente, el Encargado del Registro Civil de Madrid emite informe por el que interesa que se proceda a la estimación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y remite las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 24, 26, 27, 29, 92, 93 y 95 de la Ley del Registro Civil; 16, 94, 96, 147 355 y 359 del Reglamento del Registro Civil (RRC) la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las Resoluciones de 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 20-3ª y 23-5ª de marzo de 2006; 23-3ª de Septiembre y 21-4ª de Octubre de 2008; 14-5ª y 18-4ª de Abril, 22-5ª de Mayo, 17-10ª y 22-3ª de Junio, 1-8ª de Septiembre de 2009; 24-7ª de Febrero de 2011.

II.- La interesada, nacida en España en el año 1917, hija de padre uruguayo y madre española de origen, mediante escrito presentado ante el Registro Civil Consular de Buenos Aires solicitó la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Una vez estimada su pretensión y practicada la correspondiente anotación marginal a su inscripción de nacimiento, la Encargada del Registro Civil de Madrid inició expediente para cancelar declarar con valor de simple presunción que a la interesada no le correspondía la nacionalidad española, dictando auto de fecha 23 de abril de 2010 en ese sentido. Una vez presentado recurso contra el acuerdo, la Encargada del Registro Civil vuelve a dictar auto el 23 de febrero de 2011, acordando dejar sin efecto el recurso interpuesto por el representante de la interesada. Contra este auto, el Ministerio Fiscal interpuso el recurso ahora examinado.

III.- Conviene comenzar analizando el segundo auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Madrid. Es constante la doctrina de este Centro Directivo relativa a que una vez dictado un auto y notificado a los interesados la competencia pasa a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que habrá de resolver el recurso sobre la procedencia o no de atender a lo solicitado por aquellos (art. 355 y 359 RRC). Por tanto, durante la pendencia ante este Centro Directivo de un recurso interpuesto conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Registro Civil contra una calificación o actuación, el Encargado carece de competencia para revocar la decisión recurrida, al corresponder la adopción de tal resolución en su caso a este Centro Directivo, de manera que la documentación presentada en trámite de recurso deberá ser simplemente incorporada al expediente para su valoración a la hora de resolver el recurso.

Por lo tanto, la Encargada del Registro Civil no puede volver a entrar a conocer del fondo del asunto sobre el que ya ha dictado anteriormente un auto, el cuál ha sido recurrido ante este Centro Directivo; tampoco, como se ha señalado anteriormente, sería competente para no admitir a trámite el recurso presentado, ya que la competencia para resolver el mismo es de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto, anular la resolución apelada y admitir a trámite el recurso presentado por el interesado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

III.9.- Otras cuestiones en expedientes nacionalidad

III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad española

Resolución de 13 de Enero de 2014 (11ª)

III.9.3-Caducidad de la concesión de la nacionalidad española.

Dictada la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el plazo, de caducidad, para cumplir los requisitos del artículo 23 del Código civil es de seis meses contados desde la notificación de dicha resolución (art. 21.4 CC.).

En las actuaciones sobre caducidad de la concesión de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil de Leganés (Madrid).

HECHOS

1.- Tras la solicitud presentada en el Registro Civil de Leganés en 2009 por los representantes legales de M. entonces menor de edad, y una vez realizados los trámites necesarios, la Dirección General de los Registros y del Notariado, con fecha de 11 de abril de 2011, dictó resolución de concesión al interesado de la nacionalidad española por residencia.

2.- Notificada la resolución, los interesados fueron citados en el mismo acto para comparecer ante el registro el 16 de junio de 2011 y completar los trámites necesarios para la adquisición de la nacionalidad.

3.- En abril de 2012, se acordó dar traslado de las actuaciones al ministerio fiscal por si procedía instar la declaración de caducidad y, previo informe favorable de dicho órgano, la encargada del registro dictó auto el 14 de mayo de 2012 acordando la caducidad y archivo del expediente.

4.- Notificada la resolución, el interesado, ya mayor de edad, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que compareció acompañado de sus padres en el registro en la fecha indicada y que se firmaron las actas correspondientes, si bien, a pesar de haberlo solicitado, no se les facilitó copia alguna de dicha documentación ni acreditación de haber comparecido, por lo que solicita que se consulte a los funcionarios que ese día se encontraban en el registro y si, como supone el recurrente, lo que ocurrió es que se extraviaron las actas en las que constaba su acatamiento a las leyes españolas, se retrotraigan las actuaciones para que se repita el acto de jura y fidelidad a la Constitución y el ordenamiento jurídico español.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Leganés se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 21 del Código Civil (CC.); 224 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 27-3ª de marzo, 9-4ª de junio y 17-2ª de diciembre de 2008; 9-4ª de junio de 2009; 25-3ª de junio de 2010 y 11-3ª de abril de 2011.

II.- Solicita el recurrente la continuación de las actuaciones derivadas de la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, que se declararon caducadas mediante auto de la encargada del registro correspondiente porque, habiendo sido correctamente notificada la resolución de concesión, el interesado no compareció en la fecha señalada. El interesado afirma que sí compareció, acompañado de sus padres por ser entonces todavía menor de edad, y que se firmaron las actas de sometimiento a las leyes españolas, por lo que deduce que el registro ha debido de extravíarlas.

III.- Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que “Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 224 RRC. En este caso consta la notificación efectiva al interesado de la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia y la citación para la continuación de los trámites. Pero, a pesar de las alegaciones del recurrente, lo cierto es que no figura en el expediente indicio alguno de que dicha comparecencia existiera, de modo que, transcurridos más de seis meses desde la notificación, la concesión de la nacionalidad española por residencia ha de tenerse por caducada, si bien no por incumplimiento del plazo del artículo 354 RRC, como figura en la resolución recurrida, sino por el transcurso de los 180 días señalados en el 224 RRC.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la caducidad declarada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Leganés (Madrid).

IV. MATRIMONIO

IV.1.- Inscripción matrimonio religioso

IV.1.1.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en España

Resolución de 3 de enero de 2014 (48ª)

IV.1.1.-Matrimonio islámico celebrado en España.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Don H. nacido en España y de nacionalidad española, obtenida por matrimonio en el año 1986, presentó en el Registro Civil hoja declaratoria de datos a fin de inscribir el matrimonio celebrado en C. por el rito coránico el 22 de abril de 2011 con Doña H. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio expedido por la Comunidad Islámica Al Bujari de C. certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y pasaporte, copia literal de acta nacimiento, inscripción de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.-Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen pleno convencimiento de que el matrimonio que se ha celebrado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal no se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 3 de noviembre de 2011, el encargado del Registro Civil deniega la inscripción del matrimonio.

3.-Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de

España; la Instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 24-2ª, 25-4ª de enero, 3-3ª, 9-1ª de febrero, 2-1ª, 3-4ª, 17-1ª, 23-4ª de marzo, 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio y 19-2ª de julio y 9-3ª de septiembre de 2005; 24-5ª de mayo de 2006, 4-4ª de marzo y 11-9ª y 24-6ª de noviembre de 2008 y 9-1ª de agosto de 2010.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I CC. y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado Español legalmente prevista como suficiente por la ley española (art. 256-2º RRC). El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC.) y esta comprobación requiere que por medio de la calificación de la certificación expedida y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su Reglamento. El citado artículo 256 remite al 63 CC. que, con referencia a los matrimonios celebrados en España en forma religiosa, dispone en su párrafo II que “Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título” y uno de esos requisitos, esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (cfr. art. 45 y 73.1º CC.).

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se pretende inscribir un matrimonio islámico celebrado en España el día 22 de abril de 2011 entre un ciudadano español, de origen marroquí y una nacional marroquí, inscripción que es denegada por el encargado, por estimar que el matrimonio no se ha celebrado con los fines propios de la institución matrimonial. El auto no suscita cuestión acerca de determinadas formalidades y requisitos que derivan del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, como la acreditación de la pertenencia del Imam autorizante a una de las Comunidades Islámicas enunciadas en el artículo 1.1 del Acuerdo de Cooperación (cfr. art. 7.1, en relación con el art. 3.1). Respecto al fondo del asunto, si los contrayentes deseaban inscribir el matrimonio en el Registro Civil español

para obtener el pleno reconocimiento de sus efectos civiles, deberían haber acreditado previamente su capacidad matrimonial mediante certificación expedida por el Registro Civil correspondiente (cfr. art. 7.2 del Acuerdo). No constando la obtención en su momento del mencionado documento, por el juez encargado se ha procedido a comprobar la posterior concurrencia de los requisitos exigidos por el Código Civil. Los interesados habían contraído matrimonio entre sí en el año 2007, siendo inscrito en el Registro español en junio de 2008, se divorciaron por sentencia de 24 de junio de 2009, y ahora se vuelven a casar en abril de 2011. La interesada dice que se casaron en 1995 cuando fue en 2007, dice que tuvieron problemas y que él la denunció, y a raíz de ello, él y su hija fueron a una casa de acogida de C. que se han casado de nuevo porque en el fondo él no es malo, sino que puso una denuncia en prevención de que ella le denunciara antes. Por su parte él declara que se casaron por primera vez en el año 2004, fue en 2007, que tuvieron un percance y ella le agredió y fueron a juicio donde ella salió absuelta, y a raíz de ello se divorciaron, que se han vuelto a casar hace ocho meses.

VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Civil de Ceuta que, por su inmediación a los hechos, es quien más fácilmente ha podido apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (125ª)

IV.1.1-Matrimonio religioso celebrado en España.

Se retrotraen las actuaciones para que sea oído el promotor y nuevamente oída la promotora de la inscripción y se dicte nueva resolución motivada tomando en consideración el resultado de las audiencias reservadas practicadas.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

HECHOS

1.- El 24 de febrero de 2011 Don H. de nacionalidad marroquí, nacido en C. (Marruecos) el 14 de marzo de 1976 y Doña B. nacida en L. (Marruecos) el día 15 de abril de 1990 y de nacionalidad española obtenida por opción con fecha 10 de noviembre de 2004, presentaron en el Registro Civil de Algeciras, domicilio de la promotora, solicitud para la inscripción de su matrimonio celebrado, según la ley islámica, en F. el día 16 de febrero de 2011. Aportaban como

documentación acreditativa de su pretensión: contrato de matrimonio y certificado expedido por el Presidente de la Comunidad Islámica Suhail, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y con sede en F. y del promotor; extracto de certificado de nacimiento, permiso de residencia en España, volante de empadronamiento en Z. desde 19 de febrero de 2004, certificado de estado civil, divorciado y sentencia definitiva de divorcio de matrimonio anterior, con fecha 25 de septiembre de 2009, y de la promotora; volante de empadronamiento en A. documento nacional de identidad, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y fe de vida y estado, soltera.

2.- Con la misma fecha se ratificaron los promotores y se remitió el expediente al Registro Civil de Fuengirola, competente, en su caso, para la inscripción. El 29 de abril de 2011 se celebró la entrevista en audiencia reservada con la promotora en el Registro Civil de Algeciras y se remitió citación, a través del Registro Civil de Zaragoza, al promotor para que compareciera con fecha 6 de julio siguiente, sin que conste fehacientemente su recepción y sin que se personara el Sr. M. El Ministerio Fiscal informó que consideraba que procedía un acuerdo denegatorio por la incomparecencia de uno de los interesados y, el día 6 de septiembre de 2011 la Encargada del Registro Civil de Fuengirola dictó auto en el que acordaba denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por no haber podido realizarse las diligencias precisas para determinar el cumplimiento de los requisitos de validez para la inscripción.

3.- Notificada la resolución, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no compareció porque no recibió notificación alguna, que su pareja y él conviven en Z. y solicitan la inscripción y, en su caso, ser citado nuevamente para realizar la audiencia reservada previa.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa favorablemente que se proceda a una nueva citación y la Encargada del Registro Civil dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Con posterioridad, los promotores presentaron nuevo escrito, comunicando su nuevo domicilio en Z. y el nacimiento, con fecha... de... de 2012, de un hijo común inscrito en el Registro Civil de esa localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC.); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 10-3ª y 15-3ª de febrero de 2005, 1 de julio y 27-1ª de septiembre de 2006, 29-1ª de enero y 19-1ª de marzo de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero y 22-1ª de septiembre de 2009.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.). En el mismo sentido, a fin de evitar que los matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, las Instrucciones de esta Dirección General de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006 recuerdan la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, como medio para apreciar si existen obstáculos o impedimentos para el enlace (cfr. arts. 56, I, C. c. y 245 y 247 R. R. C.), entre ellos la ausencia de consentimiento matrimonial. Análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en un Registro Civil Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe

comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C. c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R. R. C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256, apartado último, del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.- Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General, a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones arriba citadas, el trámite de audiencia es fundamental, y de importancia creciente en los últimos tiempos, en cuanto que permite en ocasiones descubrir el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por este u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- En este caso, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado según la confesión islámica, el día 16 de febrero de 2011 entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí, el recurso no puede ser resuelto por falta de los elementos de hecho necesarios. Constando en el expediente la transcripción de la audiencia practicada a la promotora pero no al promotor ya que éste no compareció en el Registro en la fecha fijada, según manifiesta en su recurso porque no recibió la citación, y, efectivamente consta en la documentación del expediente copia del envío pero no la acreditación de su recepción, si se produjo, o los motivos de la no notificación.

En consecuencia, es necesario que las actuaciones se retrotraigan al momento de tramitación oportuno para que sea oído por primera vez el promotor y, habida cuenta el tiempo transcurrido y las circunstancias puestas de manifiesto es el escrito presentado con posterioridad, se entreviste de nuevo a la promotora, de manera que sea posible contrastar si incurren en contradicciones, apreciar el grado de conocimiento recíproco, formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido y, en definitiva, disponer tanto en una primera instancia como en vía de recurso, si hubiere lugar, de los elementos necesarios para que pueda dictarse una resolución debidamente fundamentada acerca de la pretensión deducida, y posteriormente sea oído el Ministerio Fiscal y se dicte por el Encargado nuevo auto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Dejar sin efecto el auto dictado.

2º.-Retrotraer las actuaciones a fin de que se practique el trámite de audiencia personal, reservada y por separado a cada promotor y, una vez cumplido este trámite se dé vista del expediente al Ministerio Fiscal para su informe definitivo, como última actuación previa al auto que, debidamente fundamentado acerca de la pretensión deducida, debe dictar el Encargado del Registro Civil.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (20ª)

IV.1.1-Matrimonio islámico celebrado en España.

No es inscribible porque no queda acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, sobre Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, contra auto del Encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2011 Don H. nacido en Marruecos el 21 de agosto de 1951 y de nacionalidad española obtenida el 05 de febrero de 1990, y Doña D. nacida en Marruecos el 18 de diciembre de 1974 y de nacionalidad marroquí, solicitaron en el Registro Civil de Ceuta la inscripción del matrimonio que habían contraído el 03 de diciembre de 2010 en el Centro de la Comunidad Islámica de Estudios Árabes e Islámicos de Ceuta. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado del matrimonio islámico; certificados de nacimiento, volante de empadronamiento del interesado, certificado de matrimonio y defunción esposa y fe de vida y estado Sr. H. y acta de divorcio Sra. D.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la audiencia reservada. El Ministerio Fiscal no se opone a la inscripción del matrimonio. El Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de diciembre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificadas la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España; la Instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 24-2ª, 25-4ª de enero, 3-3ª, 9-1ª de febrero, 2-1ª, 3-4ª, 17-1ª, 23-4ª de marzo, 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio y 19-2ª de julio y 9-3ª de septiembre de 2005 y 24-5ª de mayo de 2006.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho, por falta de verdadero consentimiento (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su día la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada

en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio que permite apreciar obstáculos o impedimentos para el enlace (cfr. arts. 56, I, C. c. y 245 y 247 R.R.C.) y, fundamentalmente, la ausencia de consentimiento matrimonial. Análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado Español, considerada suficiente por la legislación española (art. 256-2º R. R. C.). El Encargado debe comprobar que concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C. c.) y esta comprobación requiere que por medio de la calificación de la certificación expedida y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la normativa española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. El citado artículo 256 remite al 63 C. c. que, con respecto a los matrimonios celebrados en España en forma religiosa, dispone en su párrafo II que “se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”, uno de los cuales, esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (cfr. art. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de Mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L. E. C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En el presente caso se trata de inscribir un matrimonio islámico celebrado en 2010 en España entre una marroquí y un español de origen marroquí, solicitud que es denegada por el Encargado del Registro Civil. Si los contrayentes pretendían que su matrimonio tuviera efectos civiles, deberían haber acreditado previamente su capacidad matrimonial, mediante certificación expedida por el Registro (cfr. art. 7.2 del Acuerdo). No consta que, en su momento, se solicitase, de modo que el Encargado del Registro ha realizado a posteriori los trámites tendentes a comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos por el Código Civil. Así el Sr. H. declara que ignora la fecha de nacimiento de su pareja al igual que ella y que se conocen muy poco, que él no ha ido a la tierra de su mujer ni ella a la suya, que conoce solo a los parientes varones y no a las mujeres, que se conocieron el 02 de diciembre mientras que ella dice en julio de 2010 y que decidieron casarse en septiembre de 2010, y según el interesado se casaron dos meses después de conocerse. Según el interesado la Sra. D. estuvo casada y se divorció porque su marido quería que pusiese unos terrenos de ella a su nombre y la familia no quiso mientras que ella dice que fue porque la maltrataba, el interesado declara que vive a hora del subsidio de mayores de 55 años y en la audiencia reservada manifiesta que es albañil y que en ese momento trabaja vigilando la playa , mientras que ella declara que su marido trabaja en la obra y ahora es vigilante de guardería y que tiene unos ingresos de 900 euros , manifiesta la interesada que no le hace regalos porque no está trabajando cuando en la misma audiencia manifiesta lo contrario

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar

su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

IV.1.2.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero

Resolución de 3 de enero de 2014 (4ª)

IV.1.2.- Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre un marroquí y una española, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña R. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1998, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 10 de octubre de 2008 en Marruecos, según la ley local, con Don H. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificación de nacimiento, certificado de matrimonio y acta de divorcio revocable de la interesada y copia en extracto de acta de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, el Juez Encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 29 de junio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que la interesada, súbdita española, desde el 22 de octubre de 1998, contrae matrimonio sin embargo como súbdita marroquí, al ser considerada como tal por las autoridades marroquíes y no reconocer la validez y eficacia de la renuncia a la nacionalidad marroquí que realizó en su día la interesada. La interesada no ha aportado el certificado de capacidad matrimonial que en estos casos se exige.

3.- Notificada la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. El Juez Encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 10 de octubre de 2008 entre un marroquí y una ciudadana española de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española en el año 1998, renunciando a su anterior nacionalidad marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, la contrayente española se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 3 de enero de 2014 (5ª)

IV.1.2.- Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don R., nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2004, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 27 de julio de 2009 en Marruecos, según la ley local, con Doña N. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificación de nacimiento, copia de acta de matrimonio y acta de divorcio revocable del interesado y copia literal de acta de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, el Juez Encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 20 de junio de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que el interesado, súbdito español, desde el 9 de enero de 2004, contrae matrimonio sin embargo como súbdito marroquí, al ser considerado como tal por las autoridades marroquíes y no reconocer la validez y eficacia de la renuncia a la nacionalidad marroquí que realizó en su día el interesado. El interesado no ha aportado el certificado de capacidad matrimonial que en estos casos se exige.

3.- Notificada la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El Juez Encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16

mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 27 de julio de 2009 entre una marroquí y un ciudadano español de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española en el año 2004, renunciando a su anterior nacionalidad marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 10 de Enero de 2014 (13ª)

IV.1.2-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don K. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, adquirida por opción el 28 de agosto de 2000, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 08 de agosto de 2005 en Marruecos, según la ley local, con Doña M. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, volante empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El encargado del Registro Civil Central mediante acuerdo de fecha 19 de enero de 2012, deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que el matrimonio se contrajo en Marruecos sin haber obtenido previamente la interesada el certificado de capacidad matrimonial en el Registro Civil español, pese a que el mismo había prestado juramento de adquisición de nacionalidad española y haber sido inscrita como español en el Registro Civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el recurso e interesa la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.),

comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) En las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 08 de agosto de 2005 entre un ciudadano español de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española por opción con fecha 28 de agosto de 2000 y una ciudadana de nacionalidad marroquí, por lo que ha sucedido que el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (64ª)

IV.1.2- Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don H., nacido en Marruecos y de nacionalidad española, adquirida por residencia el 16 de noviembre de 2004, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 22 de agosto de 2005 en Marruecos, según la ley local, con Doña N. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El encargado del Registro Civil Central mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2011, deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que el matrimonio se contrajo en Marruecos sin haber obtenido previamente el interesado el certificado de capacidad matrimonial en el Registro Civil español, pese a que el mismo había prestado juramento de adquisición de nacionalidad española y haber sido inscrita como español en el Registro Civil.

3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el recurso e interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C.) En las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 22 de agosto de 2005 entre un ciudadano español de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española por residencia con fecha 16 de noviembre de 2004 y una ciudadana de nacionalidad marroquí, por lo que ha sucedido que el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por

parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 n° 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central.

IV.2.- Expediente previo para la celebración del matrimonio civil

IV.2.1.- Autorización del matrimonio. Falta de capacidad. Recursos

Resolución de 3 de enero de 2014 (3ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Torre Pacheco.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en España y de nacionalidad española y Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de partida de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la autorización del matrimonio. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 26 de octubre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la desestimación del mismo. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, en la entrevista que se le hizo al interesado, se precisó de intérprete, ya que aunque ellos digan que se comunican en español, lo cierto es que él desconoce el español y ella el marroquí, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. El interesado desconoce el nombre de la madre de ella, declarando que murió, sin precisar más, desconoce el nombre de uno de los hermanos de ella, declarando que sólo conoce a Á., ella desconoce los nombres de los hermanos de él y declara que se casan para que él pueda trabajar además de porque se quieren. No presentan prueba alguna

de su relación. Aunque declaran que viven juntos en la calle del C., sin embargo el volante de empadronamiento aportado por el interesado, revela que vive en la calle S. de T. desde el 23 de junio de 2010 y ella en la calle P. de T. desde el 1 de mayo de 1996, domicilios que también aparecen en los certificados de fe de vida y estado aportados por los interesados.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Torre Pacheco

Resolución de 3 de enero de 2014 (9ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Vitoria.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña F., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: permiso de residencia, copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, copia literal de partida de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que no conoce ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de diciembre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, interesa la ratificación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de

diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del "consentimiento matrimonial", no debe escapar a la consideración del intérprete que el

citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretenda atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre dos ciudadanos marroquíes, residentes en España, y de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se hicieron novios ya que él dice que hace dos años (la entrevista se celebró en 2011, luego en 2009), mientras que ella dice que son novios desde 2010. El interesado declara que hace un año decidieron casarse, sin embargo ella dice que lo decidieron el primer día de salir juntos; desconocen los estudios que tienen. Existen discordancias en lo referente a la ayuda social que percibe el interesado ya que ella primero dice que no tiene ningún tipo de ayuda pero luego dice que tiene una ayuda con la que el interesado paga el alquiler y tiene comedor social, el interesado indica que tiene una ayuda concedida que cobrará el mes que viene de renta básica. Declara la interesada que viven juntos desde junio de 2011, sin embargo según un informe de la policía local vasca, el 21 de noviembre de 2011, se personaron en el domicilio donde dicen

que conviven en la calle A., contactando con el promotor, declarando que la interesada no se encontraba en el domicilio porque estaba estudiando, volvieron a personarse en el domicilio el 26 de noviembre y el interesado les manifestó que la interesada estaba en el domicilio de su madre porque estaba enferma. Así mismo el interesado tiene una orden de expulsión en vigor. No aportan prueba alguna de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Vitoria

Resolución de 3 de enero de 2014 (10ª)

IV.2.1.- Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto de la encargada del Registro Civil de Zamora.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña T. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, extracto de acta de nacimiento, transcripción de sentencia de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 6 de marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre

de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada desconoce el segundo apellido del interesado ya que dice que se apellida D., cuando es C., tampoco sabe su fecha de nacimiento, los estudios que tiene, los apellidos de su madre, etc. El interesado desconoce donde trabajaban los padres de ella en Marruecos, dice que tiene tres hermanas y un hermano cuando son cuatro hermanas y un hermano, declara que cuando vivía en Marruecos ella no trabajaba, mientras que ella dice que trabajaba en un restaurante de cocinera, no sabe los nombres de los hijos de ella ya que dice que se llaman C. y S. cuando son Ch. y D., desconocen los teléfonos, los que da uno y otro no coinciden, etc. Discrepan en el tiempo que hace que viven juntos ya que ella dice que ocho meses y él dice que siete meses, el interesado declara ella que lleva divorciada medio año, mientras que ella dice que dos años; existen discordancias en gustos, aficiones, colores favoritos, regalos que se han hecho ya que él dice que no se han regalado nada y ella dice que se han regalado colonia, zapatos, abrigo, ropa de vestir, etc. No aportan pruebas de su relación. Por otro lado la interesada está en una situación irregular en España y tiene una orden de expulsión del territorio nacional y prohibición de entrada por tres años, notificada a la interesada el 3 de mayo de 2011, esto contrasta con la respuesta dada por los interesados cuando declaran que ella no ha sido requerida para que regrese a su país por estar ilegal en España. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Zamora

Resolución de 3 de enero de 2014 (22ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Tarragona.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don R-G. nacido en Italia y de nacionalidad italiana y Doña R-G. nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimientos, certificados de empadronamiento, sentencia de divorcio Sr. R. y certificado de matrimonio con anotación de divorcio Sra. V.

2.- Ratificados los interesados, comparece dos testigos que manifiesta que no conoce ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 26 de Enero de 2012 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes,

que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del "consentimiento matrimonial", no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al "estado civil" y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretenda atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de

los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole.

Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano italiano y una ciudadana ecuatoriana residentes en España, de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones e imprecisiones como que el interesado declara que él toma café y ella no porque es diabética mientras que ella manifiesta que toma café para acompañarle a él, la interesada dice que él tiene una cicatriz en la frente pero el declara que no tiene cicatrices, dice la Sra. V. que paga una hipoteca de 720 euros mientras que él dice que son 800 euros y que lo paga el hijo de ella, el Sr. R. declara que las paredes de la vivienda de la interesada son de color blancas y tierra mientras que ella dice que son de color melocotón.

Por otra parte manifiesta el interesado que no conoce a la familia de su pareja cuando declara convivir en diferentes periodos al menos de vacaciones con la interesada y el mismo interesado declara que tres hijos viven con ella. Manifiesta el Sr P. que cuando se casen vivirá en A. pero declara la interesada que su pareja está en el paro y que busca trabajo en Italia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Tarragona.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (26ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Torrevieja.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en España y de nacionalidad española y Doña S-S. nacida en Brasil y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con anotación de separación y defunción y volante de empadronamiento de la interesada y DNI, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal no se opone a la celebración del matrimonio. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2010 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso interpuesto. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que en el año 2009 y él dice que hace tres años (2007), también difieren en el tiempo de convivencia ya que ella dice que hace ocho meses y él dice que desde 2007, el interesado declara que los dos propusieron el matrimonio y ella dice que lo propuso él. La interesada se equivoca al dar el segundo apellido del interesado, desconoce el nombre del padre del interesado, declara que están fallecidos, sin embargo él no dice nada de esto, desconoce la fecha exacta de su nacimiento y lugar donde nació, salario, etc. Por otro lado el interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella, los nombres de sus padres, declara que ella tiene hijos de relaciones anteriores pero no dice nombres ni edades, tampoco sabe el número y los nombres de los hermanos de la interesada, etc. Las respuestas dadas por ambos son muy escuetas y con monosílabos, sin entrar en profundidad. Por otra parte, el interesado es 21 años mayor que la interesada. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torre Vieja.

Resolución de 3 de enero de 2014 (27ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A-A. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana y Doña B. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, extracto de acta de nacimiento, declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se

celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. La Juez encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 1 de febrero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto apelado, la Juez encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Las respuestas dadas por el interesado son escuetas, con monosílabos y a veces incongruentes, el interesado desconoce los estudios de la interesada, declara que trabaja en un bar pero

desconoce el nombre y el lugar donde se encuentra. El interesado se encuentra en situación irregular en nuestro país, y a la pregunta de por qué no ha solicitado la residencia legal, ella contesta que han decidido casarse primero y él dice que no se había preocupado de ese tema, y que piensa regularizarse para obtener la residencia casándose. Ella declara que él tuvo un accidente de tráfico muy grave, sin embargo él no dice nada de esto. Ella dice que su comida favorita es la pasta y él dice que a ella le gustan los bocatas, a la pregunta de cuál es su bebida favorita, ella dice Coca-Cola y él declara "los niños". La mayor contradicción se produce cuando se les pregunta lo que han hecho el día anterior y él dice que se levantó a las diez, ella a las once y veinte para ir a trabajar, preparó café y le invitó a él pero él lo rechazó y se volvió a la cama, ella llegó a las cuatro y media, él salió a dar una vuelta, el hijo de ella estaba arreglando un ordenador, él se volvió a acostar de nuevo, ella volvió al trabajo a las siete y media, cuando llegó, de madrugada (a la una o dos), él no estaba en casa, razón por la cual ella le llamó exigiéndole regresar a casa porque es muy celosa.

La versión de ella difiere bastante ya que dice que se levantó a las once, se fue a trabajar porque entra a las doce, no hizo café, él se quedó durmiendo, él comió con su hijo en casa, volvió a las cuatro de la tarde y estuvieron viendo la tele hasta que ella volvió al trabajo a las siete y media, él se quedó en casa (cree que no lo llamaron para una mudanza), ella regresó a las tres de la madrugada y como él ya dormía no hablaron. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 3 de enero de 2014 (28ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Alcañiz.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don El M. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña A-C. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. B. y certificado de residencia y soltería Sr. F.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del

Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Enero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así como consta en el expediente de las averiguaciones realizadas por la Policía local de la localidad de A. frente a las declaraciones de los interesados donde manifiestan que viven juntos, no ha podido comprobarse que en el domicilio declarado por ellos vive el Sr. F. asimismo los interesados no han respondido a las preguntas sobre los números de teléfonos

móviles o si los padres de la pareja viven o no, pese a manifestar que llevan conviviendo cinco meses y que declaran conocerse hace un año. También ignora el interesado las edades de los hijos de su pareja dice 17 y 14 años y ella declara 16 y 15 años, los estudios realizados y manifiesta que no trabaja pero cuando lo ha hecho ha sido de jardinero mientras que ella dice recogiendo melocotón

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 19 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcañiz (Teruel).

Resolución de 3 de enero de 2014 (32ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

1.-Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2.- No es válido el poder otorgado por un marroquí residente en su país para celebrar matrimonio en España en contra de la legislación nacional que rige su estado civil y la normativa que regula las relaciones internacionales de carácter consular

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Albuñol (Granada).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña G. nacida en España y de nacionalidad española y Don H. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España por poderes. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de la interesada y certificado de residencia y soltería Sr H.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España por poderes entre un ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así en el interesado declara que se conocieron en abril de 2010 y que iniciaron su relación sentimental tres meses después de conocerse mientras que ella dice que fue en el mismo momento de conocerse, que mantienen comunicación diariamente por Internet y teléfono mientras que ella declara una o dos veces por semana y cartas cada 15 días o un mes, que su pareja le ha visitado unas doce veces aunque no aporta prueba y que decidieron casarse en noviembre de 2010, que trabajara en una finca agrícola de la familia en España y que el matrimonio lo celebrara por poderes en A. (G). Por otra parte al hacerle la observación que el matrimonio celebrado en España no tendrá validez ni producirá efectos para un nacional marroquí en su país, responde que el principal objetivo es residir en España con la contrayente.

Finalmente y como ha puesto de manifiesto el Cónsul General de España en Tetuán sobre la validez del poder otorgado por un nacional marroquí, residente en Marruecos para contraer matrimonio en España, el Código de la Familia marroquí únicamente contempla la posibilidad

de celebración del matrimonio en la forma religiosa establecida en la ley islámica, teniendo que por lo tanto prestar consentimiento ante un dirigente islámico y al menos dos testigos mayores de edad y musulmanes.

Por lo que en base a la legislación personal del Sr. Z. y de conformidad con el artículo 5 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, no se puede dar validez al otorgamiento de poder para contraer matrimonio en España de un nacional marroquí residente en Marruecos, porque se estaría dando validez por parte de autoridades consulares española a un acto contrario a la legislación marroquí sobre un nacional marroquí residente en su país.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar ambos recursos interpuestos y confirmar las resoluciones apeladas.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Albuñol (Granada).

Resolución de 3 de enero de 2014 (34ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Alzira.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña A-R. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. A. certificado de empadronamiento de los interesados y fe de vida y estado Sra. S.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 12 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así el interesado declara que ahora no trabaja pero que antes trabajaba en el mercado, que le han quitado el carnet de conducir y ya no puede ir a trabajar, que tenía una furgoneta azul marino y la ha vendido, mientras que ella manifiesta que trabaja en el mercado que vende ropa y que tiene una furgoneta blanca, según el interesado su pareja trabaja cuidando abuelos que cree que es por la noche mientras ella declara que tiene tres turnos rotatorios, dice el Sr L. que vive solo con su hermano pero que actualmente se ha ido a Z. y ahora está solo en casa mientras que ella manifiesta que vive con un amigo que no sabe cómo se llama, que cuando se casen vivirán en la casa donde reside el Sr. L según ella con el chico que no conoce. Declara la interesada que no se regalan nada ni en sus cumpleaños, que conoció a su pareja hace dos años, que nunca le ha presentado a algún amigo, que no viven juntos y que a su madre la conoce de vista e ignora si su pareja tiene tarjetas de crédito.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alzira (Valencia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (37ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Torre-Pacheco.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en España y de nacionalidad española y Doña D. nacida en Paraguay y de nacionalidad paraguaya, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. P.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 28 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la estimación del recurso interpuesto. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana paraguaya y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara la interesada que no se acuerda cuando conoció a su pareja, pero que fue en el pub musical donde ella trabajaba "D." mientras que el interesado manifiesta otro pub "el C", que viven juntos y que quieren casarse porque ella quiere estar con él que se siente bien a su lado y para que le den los papeles ignora la interesada los datos básicos personales y familiares de los padres y hermanos de su pareja asimismo el Sr. P. desconoce el número de hermanos de la Sra. F. declara nueve o diez mientras que ella dice doce también ignora sus datos básicos personales en lo que se refiere a los nombres, apellidos, edades.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 28 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torre-Pacheco (Murcia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (38ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Jerez de la Frontera.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña J. nacida en España y de nacionalidad española y Don B. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa, iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. B. certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada, volante de empadronamiento de los interesados y fe de vida y estado Sra. M.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones e inexactitudes como que ambos en su declaración dicen que él tiene 34 años cuando son 32 años, ambos reconocen que la interesada tiene un hijo de 32 años y que por lo tanto es de la misma edad que su pareja y que debió tenerlo con tan solo 15 años. Declara ella que es pensionista pero él dice que trabaja como cocinera, manifiesta ella que ninguno de los dos hace deporte mientras que él dice que los dos natación, ignora el interesado si la vivienda donde viven es propiedad o alquiler declara que es de la familia de su pareja mientras que ella dice que es de propiedad y que vive con ellos un hermano circunstancia no manifestada por el interesado. Declara el interesado que el abogado ya ha arreglado el tema de la orden de expulsión que tenía mientras que ella señala que esta en vía de recurso, no coinciden respecto del ultimo regalo ella dice unos zapatos a él y él una flor y un bolso y él dice que a ella una flor y a él un perfume

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 15 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución de 3 de enero de 2014 (39ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Santander.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña A. nacida en Paraguay y de nacionalidad paraguaya, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 09 de Febrero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadana paraguaya y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento e imprecisiones en lo que se refiere a las aficiones y preferencias como que él declara el fútbol como afición para los dos mientras que ella dice caminar para ambos, respecto de las comidas preferidas declara arroz con pollo para él y espagueti con tomate para ella mientras que la interesada dice filete empanado y pescado para ella y espagueti y pasta para él, no coinciden respecto de los regalos siendo muy relevante la imprecisión o ignorancia en relación al anillo de compromiso él declara que le regalo a ella unos zapatos y no recuerda cual fue el último que ella le hizo a él mientras que ella dice un perfume y a ella el anillo de compromiso. Por otra parte declara el interesado desconocer si su pareja tiene problemas

relacionados con la ley de extranjería e ignora ella los estudios del Sr. F. se contradicen respecto del último restaurante donde han estado ella dice "La R. "y él "El L."

Finalmente y sin que sea determinante la interesada tiene decretada orden de expulsión con salida obligatoria del territorio nacional, incoada en agosto de 2011 no muy anterior a la solicitud de autorización para contraer matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander.

Resolución de 3 de enero de 2014 (40ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en España y de nacionalidad española y Doña L. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento del interesado, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. E. y certificado de residencia y soltería Sra. B.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 18 de Septiembre de 2009 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de

1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en Marruecos entre un ciudadano español de origen marroquí y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así el Sr. E. ignora si su pareja tiene o no hermanos, los estudios que ha realizado la interesada mientras que ella declara derecho aunque no la ha terminado manifiesta el interesado que se conocieron el 15 de agosto de 2007 en Marruecos mientras que ella declara que fue el 08 de agosto de 2007, que mantienen su relación por teléfono y que fue en Marruecos donde decidieron contraer matrimonio. Declaran los dos testigos ser amigos del Sr. E. pero solo conocen a su pareja por foto y del conocimiento a través del interesado sin que puedan aportar elementos que permitan probar la existencia de una relación afectiva y continuada. Finalmente declara la interesada que él ha venido dos veces a Marruecos y su estancia ha sido de aproximadamente 15 días cada vez. No coinciden respecto de los ingresos de la pareja así como de los gustos sobre las comidas él declara pescado y pollo para ambos y ella manifiesta pollo para ella y pescado para él.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 16 años

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 3 de enero de 2014 (44ª)

IV.2.1.-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la encargada del Registro Civil de Cieza.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J.-J. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña S. nacida y domiciliado en Marruecos con nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento del interesado y certificado de soltería Sra. S

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 18 de Enero de 2012 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y solicita la confirmación de la resolución recurrida. La encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada

contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así no existe un idioma común de comunicación de la pareja que les permita mantener una relación continuada y fluida, teniendo además que considerar que residen en localidades diferentes. Declara la interesada que se conocieron el 24 de diciembre de 2009 en Marruecos y que el 29 de diciembre celebraron la fiesta tradicional del compromiso, que desde esa día el interesado ha regresado en cinco ocasiones pero que no recuerda las fechas, que solo conoce como datos personales y familiares el nombre de los hermanos de él y que ella no trabaja. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 41 años.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de intermediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Cieza (Murcia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (45ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil de Almazora.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña N. nacida en España y de nacionalidad española y Don L. nacido en Argelia y de nacionalidad argelina, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: pasaporte, partida de nacimiento, certificado de no matrimonio y no segundas nupcias y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de enero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano argelino y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada desconoce el nombre del interesado y el lugar de nacimiento, declarando que nació en Argelia pero desconociendo el nombre del lugar exacto, desconoce el nombre de la hermana del interesado, éste por su parte desconoce el segundo apellido de la interesada y los nombres de sus hermanas. Discrepan en el tiempo que hace que se conocen ya que él dice que hace cuatro meses y ella dice que hace seis meses, así mismo la interesada declara que viven, desde hace seis meses, en el mismo domicilio es decir en la calle L. XIII, en A. sin embargo en el volante de empadronamiento que aportan, se puede ver que los interesados se empadronaron en ese domicilio el 27 de octubre de 2011, y en noviembre de 2011, solicitaron la autorización para contraer matrimonio. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Almazora (Castellón).

Resolución de 3 de enero de 2014 (80ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el día 25 de enero de 2012 Don MD-S. nacional de Bangla Desh, nacido en N. (Bangla Desh) el 1 de enero de 1967, y Doña Mª-C. nacida en S-M de T.(Argentina) el 5 de mayo de 1953 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 3 de noviembre de 2009, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte, certificado de soltería, declaración jurada de estado civil, soltero, certificación de nacimiento y volante de empadronamiento en M. desde el 24 de marzo de 2008 y, de la promotora, documento nacional de identidad, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y volante de empadronamiento en M. desde el 15 de marzo de 2011 y certificado de empadronamiento en M. (M) desde el 23 de septiembre de 2005.

2.- Con la misma fecha fue oído el testigo presentado y el día 7 de febrero de 2012 se llevaron a cabo las audiencias reservadas en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal,

no se opone a la concesión de lo solicitado y el 9 de marzo de 2012 la Encargada del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias principales apreciadas, añadiendo que su relación es auténtica y que conviven. Aportando documentación registral correspondiente a un inmueble propiedad de la promotora en Alicante.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que reiteró su no oposición a la concesión de la autorización solicitada y la Encargada por su parte se reafirma en la denegación impugnada, disponiendo la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española de origen argentino y un ciudadano de Bangla Desh, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe

deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Así coinciden en que se conocieron en la frutería en la que trabaja el promotor, según la promotora lleva 2 años en M. y según su pareja lleva 4, lo cierto es que documentalmente sólo consta que la Sra. G. reside en M. desde marzo de 2011, es decir menos de un año. También declara el promotor que su pareja hace 9 años que se vino de A. no consta documento de empadronamiento de la interesada en esa localidad y si en M. desde el año 2005 hasta 2011 en que se trasladó a M. La promotora declara que no trabaja y que sus ingresos provienen del alquiler de su piso de M. sin embargo su pareja cree que el piso alquilado está en A. esta discrepancia intenta ser justificada en recurso por el hecho de que la Sra. G. también es propietaria de un piso allí, pero esto no desvirtúa el error del promotor ya que éste no menciona la existencia de dos inmuebles y confunde el que está alquilado sino que sólo menciona el de A.

En las audiencias ambos dicen que últimamente viven juntos en el domicilio de la promotora y con el hijo de ésta, sin embargo los documentos de empadronamiento, que han sido expedidos un mes antes de la solicitud, acreditan domicilios diferentes aunque en el mismo distrito de M. Por último, aunque no es determinante, la diferencia de edad entre los promotores es de 14 años. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (81ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla Don A. de nacionalidad marroquí, nacido en F. (Marruecos) el día 21 de abril de 1984 y Doña Y. nacida en M. el 7 de febrero de 1988 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 13 de marzo de 1988, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; permiso de residencia válido hasta julio de 2011, extracto de acta de nacimiento, certificación de soltería, fe de vida y estado, soltero y volante de empadronamiento en M. desde el 20 de febrero de 2009, y de la promotora; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltera y volante de empadronamiento en M. desde el 6 de septiembre de 1999.

2.- Con fecha 24 de junio de 2011 los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos que manifiestan que estos no incurrir en prohibición alguna con el matrimonio que

pretenden, y el día 22 de septiembre siguiente los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente de estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 5 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias puestas de manifiesto y alegando que el promotor ya tiene permiso de residencia en España desde hace más de 10 años y también, por tanto, tendría el tiempo de residencia necesario para acceder a la nacionalidad española, aportando fotografías de ambos y de ellos con familiares.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre una ciudadana española, de origen marroquí, y un ciudadano marroquí, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Difieren al describir como se inició su relación, según la promotora 2 o 3 días después de conocerse quedaron en la puerta de la piscina municipal, en cambio el promotor sitúa esa primera cita 2 semanas después de conocerse y quedaron en el barrio de ella, en la calle de detrás de su casa. Actualmente según la Sra. El M. se ven a diario, según el promotor los fines de semana, no obstante también difieren absolutamente en lo que han hecho el domingo anterior a la entrevista. Discrepan en las personas asistentes a la celebración familiar de su compromiso, la promotora dice que fueron los padres de él y 3 hermanas y de la familia de ella, sus padres, su abuela, dos tías, sus hermanas y su prima, según el promotor, que además no recuerda la fecha de la celebración, asistió su madre, no su padre y todos sus hermanos y de ella fueron sus padres y todos sus hermanos menos una que no vive en M. También discrepan en dónde celebrarán la boda. Respecto a datos personales y familiares, el promotor desconoce los segundos apellidos de los padres de ella, desconoce el nombre de la testigo que compareció en el expediente, desconoce cuál fue el último trabajo de ella, y ésta por su parte parece desconocer el trabajo de su pareja, según ella trabaja en un locutorio y tiene como socio a un primo, según el Sr. El M. tiene una tienda, es autónomo, trabaja solo y no tiene ni empleados ni socios, ella tampoco conoce el horario de trabajo de él, la promotora dice que él vive en M. desde que tenía 8 años y él que desde 1991, en cambio según su documento de empadronamiento en M. este se produjo en el año 2009 y según el permiso de residencia aportado con la solicitud su domicilio estaba en P de M. y es en el permiso prorrogado y aportado con el recurso en el que aparece el domicilio de M. En relación con otros temas ambos discrepan cuando describen la casa del otro, y el promotor dice que ella vive con sus padres, abuela y hermanos menos el mayor que vive independiente aunque no conoce la dirección, en cambio ella menciona que vive con todos sus hermanos, también difieren en el último regalo que ella ha recibido de su pareja, dice que fue una cámara de fotos, Samsung, y según el promotor la regaló un teléfono móvil Nokia. Por último el promotor dice que su pareja no suele viajar, que el último viaje fue el año anterior con él a M. una semana de vacaciones, en cambio la propia interesada dice que suele viajar y que el último viaje fue en febrero del propio año y con las hermanas de él a T. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 3 de enero de 2014 (82ª)

IV.2.1.-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla Don C. de nacionalidad española, nacido en B. el día 4 de octubre de 1954 y Doña H. nacida en O. (Marruecos) el 22 de noviembre de 1984 y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificación de matrimonio anterior, de fecha 23 de diciembre de 1976, con anotación de sentencia de divorcio de 15 de noviembre de 2010, fe de vida y estado, divorciado y volante de empadronamiento en M. desde el 4 de diciembre de 2002, y de la promotora; pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de residencia en Marruecos, certificado de soltería y sentencia penal condenatoria de fecha 5 de abril de 2011 y sentencia que ejecuta la misma con fecha 14 de abril siguiente.

2.- Con fecha 4 de julio de 2011 los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos que manifiestan que estos no incurrían en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 16 de noviembre siguiente los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, considerando que del contenido de dicho trámite se extrae prueba suficiente para estimar que se trata de un matrimonio cuya intencionalidad es distinta a la propia de la institución, se opone a la autorización y el 16 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que las posibles discrepancias no son suficientes para denegar la autorización de matrimonio e intentando justificar el hecho de que la solicitante no conozca a los testigos presentados en base a que fueron buscados por el promotor.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Respecto a datos personales y familiares, la promotora desconoce los apellidos de los padres de él, sabe que su estado civil es de divorciado en el año 2010 pero desconoce cuándo se casó, pese a que cuando iniciaron su relación, según manifestación de ambos, él todavía estaba casado, difieren al declarar sobre algo tan importante como la situación de prisión de la promotora, que manifiesta que saldrá de prisión el 21 de julio de 2013 y su pareja dice que saldrá con libertad condicional en enero o febrero, sin mencionar el año. Según la promotora su pareja vive en M. desde el año 2000, según él y según los documentos de empadronamiento reside desde el año 2002. Difieren en los idiomas que ella habla, según el interesado el añade uno que la promotora no menciona. De otro lado el auto impugnado hace especial hincapié en el hecho de que la promotora reconozca que no conoce a los testigos presentados y sólo sabe que son compañeros de trabajo de su pareja, resultando esta circunstancia, como refleja el Encargado del Registro, importante a la hora de calificar la existencia o no de verdadero consentimiento matrimonial, ya que prestan testimonio de su convencimiento personal de que el matrimonio proyectado no incurre en ningún tipo de prohibición, algo que no se corresponde con el desconocimiento de la persona de uno de los futuros contrayentes.

Por último, aunque no sean determinantes por sí mismas, en el presente caso existe una diferencia de edad entre los promotores de 30 años y consta en el expediente informe de las autoridades competentes de que, con fecha 28 de junio de 2011, se incoó a la Sra. A. expediente con base en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es decir para su expulsión del territorio nacional como consecuencia de su condena penal de privación de libertad superior a un año. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. / Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 3 de enero de 2014 (113ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla el día 29 de julio de 2011, Don A. nacido en N. (Marruecos) el día 15 de mayo de 1964 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 20 de enero de 1988 y Doña T. de nacionalidad marroquí, nacida en B-C. (Marruecos) el 29 de diciembre de 1977, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificación de matrimonio anterior, celebrado en España con una ciudadana marroquí de fecha 21 de enero de 1995, con anotación de separación en el año 1999 y con sentencia de divorcio de fecha 26 de enero de 2001, fe de vida y estado, divorciado, y certificado de empadronamiento en M. desde el 1 de mayo de 1996, y de la promotora; documento de identidad y permiso de residencia en España, pasaporte, certificado administrativo que declara que no ha contraído matrimonio desde su divorcio y certificado de nacimiento de una hija en común con el promotor, con fecha 18 de junio de 1998 en M.

2.- Con la misma fecha los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos, que manifiestan que estos no incurrían en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 25 de octubre de 2011 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal, no se opone a la autorización y el 13 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos no justificados y, por propia declaración de los interesados, consta que aportaron dos testigos que no eran conocidos en absoluto por la promotora y sólo conocidos por el promotor, por lo que su testimonio sobre la veracidad de la relación y la no existencia de impedimentos legales queda absolutamente en precario, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando lo solicitado, aportando certificado de inscripción del nacimiento de una segunda hija en común, certificado de divorcio de mutuo acuerdo dictado por el Tribunal de Primera Instancia de Nador, de fecha 5 de julio de 2011, que hace referencia a un matrimonio entre los promotores de fecha 1 de julio de 1997, documentación acreditativa de que la promotora tiene en trámite expediente para obtener la nacionalidad española por residencia por lo que no hay otra intencionalidad en el matrimonio pretendido.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Con posterioridad la promotora presenta documentación acreditativa de su residencia en España.

5.-Consta en el expediente que, con fecha 23 de noviembre de 2007 la Sra. A. solicitó la nacionalidad española por causa de residencia en España, declarando que estaba casada con el ahora promotor, Sr. M. desde el 1 de julio de 1997 mediante un matrimonio religioso

islámico registrado por el tribunal de primera instancia de Nador, si bien no aportó el documento acreditativo de tal matrimonio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. En su comparecencia la promotora declara que vive con su pareja desde hace 15 años, que se casaron en Marruecos en el año 1997 y se han divorciado hace unos meses, realmente según la documentación son unos días, y ahora se quieren volver a casar civilmente en España, reconociendo que siempre han vivido juntos y que cuando el promotor se casó con ella la primera vez era divorciado. El promotor manifiesta que él se casó hace 20 años en M. que se divorció al poco tiempo, se casó con actual pareja por el rito islámico, se han divorciado hace unos meses y ahora pretenden un matrimonio civil en España, añadiendo que siempre han compartido casa, pese al divorcio, de hecho un mes y medio después nació su hija,

Examinada la documentación del expediente, la aportada por los promotores y la información obtenida por esta Dirección General, cabe considerar que lo manifestado por los interesados

adolece de datos alterados, como mínimos no acreditados e incluso inciertos. Así el promotor, ya español, efectivamente se casó en M. con una ciudadana marroquí, en el año 1995 de la que se separó en 1999 y se divorció en el año 2001, es decir que cuando supuestamente se casó en Marruecos por el rito islámico, en 1997, para lo que debería haber obtenido un certificado de capacidad del registro civil español por cuanto ya tenía esta nacionalidad y había renunciado a la suya de origen, ya estaba casado en España por lo que no podía legalmente contraer nuevo matrimonio, según el derecho español ya que no había sido disuelto el vínculo anterior. De otro lado, efectivamente la promotora tiene en trámite un expediente para obtener la nacionalidad española por residencia, en dicho procedimiento le fue requerido en más de una ocasión, año 2009 en adelante, la acreditación de su matrimonio con el Sr. M. ciudadano español, no constando que la aportara, presentando actualmente un certificado de divorcio de dicho matrimonio, fechado a principios de julio de 2011, es decir un mes escaso antes de la solicitud de matrimonio civil, por tanto en todo caso su divorcio ha durado 24 días, sin que además hubiera separación de hecho según reconocen ambos.

Además de lo anterior, que siembra suficientes dudas respecto a la verdadera intencionalidad de los promotores, con un matrimonio previo que resultaría nulo para el derecho español y un divorcio formal y no real, los interesados reconocen en sus declaraciones que aportan al expediente el testimonio de dos personas poco conocidas de uno y desconocidas para el otro, en acreditación de su conocimiento, verdadera relación, y la no concurrencia en el matrimonio de prohibición alguna. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución. No obstante lo anterior debe significarse que en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que sería posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida, pero solo si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta antes.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 3 de enero de 2014 (114ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio civil remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por el Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Don S. nacido en L. (C) el 12 de marzo de 1929 y de nacionalidad española, y Doña G. nacida el 4 de abril de 1964 en S-C. (Bolivia) y de nacionalidad boliviana, solicitaban mediante escrito presentado en el Registro Civil de Barcelona autorización para contraer matrimonio civil. Aportando como documentación acreditativa: del promotor; certificado de nacimiento, volante de empadronamiento en B. declaración jurada de estado civil, viudo,

documento nacional de identidad, certificado de matrimonio anterior de fecha 27 de abril de 1953 y certificado de defunción del cónyuge anterior, de fecha 16 de febrero de 2000, y de la promotora, permiso de residencia con vencimiento en abril de 2012, declaración jurada de estado civil, divorciada, certificado de matrimonio anterior de fecha 6 de abril de 1991 con anotación de divorcio de fecha de fecha 1 de junio de 2001, certificado consular de estado de divorciada, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento en B. desde diciembre de 2007 y en el mismo domicilio del promotor, desde 20 de julio de 2011.

2.- Con fecha 28 de noviembre de 2011 se ratifican los interesados, declara como testigo la hija del promotor que manifiestan que no conocen circunstancia alguna que impida el matrimonio y se celebra trámite de audiencia reservada por separado con ambos promotores. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente respecto a la autorización del matrimonio al considerar que no existe un verdadero consentimiento matrimonial. El Encargado del Registro Civil deniega, mediante auto de fecha 18 de enero de 2012, la autorización para contraer matrimonio por considerar, tras las audiencias reservadas, que el desconocimiento de datos esenciales muestra una ausencia de consentimiento matrimonial válido por parte de los solicitantes.

3.- Notificada la resolución a los promotores, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias y desconocimientos mostrados en las audiencias y poniendo de manifiesto las respuestas que han sido coincidentes.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del mismo. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido, se reafirma en el contenido de la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007.

II.-En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.-La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuando que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C.c.).

IV.-Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

V.-En el caso actual, en el que se pretende contraer un matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana boliviana, de los respectivos trámites de audiencia practicados a los interesados, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que la finalidad perseguida con el matrimonio proyectado no es la propia de esta institución y que, por esa causa, no puede ser autorizado: se aprecia un desconocimiento de datos personales importantes, así difieren en el tiempo que hace que se conocen, según el promotor 2 años y según su pareja medio año más, tampoco coinciden en el tiempo que llevan viviendo juntos en ninguno de los dos momentos de la entrevista en que se les pregunta, según la promotora hace más o menos 1 año y 9 meses, camino de 2 años y, según el promotor es 1 año y, según los datos de empadronamiento documentados serían unos pocos meses. Respecto a datos personales y familiares, la promotora declara que ella tiene un hijo y que su pareja una hija, M. según el Sr. S. tiene 2 hijos, S. y M.

El promotor no declara conocer que su pareja padece o ha padecido una infección sanguínea de origen tropical, por su parte la promotora desconoce los estudios de su pareja, según ella están relacionados con la medicina o la farmacia y según el promotor tiene el bachiller. Difieren en el idioma en que hablan, según el promotor en castellano y catalán y según la promotora en castellano, ya que no declara hablar catalán aunque el Sr. S. dice que ella habla un poco de catalán. En relación con otros datos, difieren en el último regalo que el promotor le hizo, ella declara que una blusa y según él fue un reloj, también difieren en las bebidas preferidas, y respecto a si saben hacer bricolaje, según ella sí, según el promotor él sabe hacer algo pero ella no. Por último, aunque no es determinante, la diferencia de edad entre los promotores es de 35 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 3 de enero de 2014 (116ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Alaquàs (Valencia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Alaquàs el día 5 de diciembre de 2011 Don M. nacional de Pakistán, nacido en G. (Pakistán) el día 12 de julio 1979, y Doña R. nacida

en V. el 23 de enero de 1970 y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, declaración jurada de su padre de que su estado civil es soltero y de que aprueba el matrimonio que se pretende, certificación de nacimiento y certificado de empadronamiento en A. a fecha 8 de noviembre de 2011 y certificado histórico de empadronamientos en V. y, de la promotora, documento nacional de identidad, fe de vida y estado, divorciada, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior de fecha 13 de abril de 1989 con anotación de sentencia de divorcio de fecha 20 de abril de 2010 y certificado de empadronamiento en A. a fecha 8 de noviembre de 2011 y certificado histórico de empadronamiento en V.

2.- Con la misma fecha fueron oídos los testigos presentados y se llevaron a cabo las audiencias reservadas. Consta informe de las autoridades competentes en materia de extranjería y fronteras de fecha 24 de enero de 2012. El Ministerio Fiscal se opone a la concesión de lo solicitado, y el 1 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil, apreciando que concurre desconocimiento mutuo en datos que permiten apreciar la falta de consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se conocen desde hace 3 años, que conviven y que no hay ningún otro interés ni por parte de él ni suya.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que solicitó su desestimación y el Encargado por su parte dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní, resultan del trámite de audiencia, pese a su brevedad, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. De principio no tienen un idioma común ya que, salvo acreditación en contrario, la promotora no consta que hable el idioma del promotor y este reconoce en entrevista que no entiende bien el español ni lo habla, pese a llevar 8 años residiendo en España, esta circunstancia de no tener un idioma común es uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Difieren en el tiempo que hace que decidieron casarse, según el promotor hace casi un año, según su pareja 9 o 10 meses, precisando que ella no quería pero que quería estar con él, con lo que parece que el promotor extranjero es el más interesado en celebrar el matrimonio. Aunque ambos manifiestan que llevan como un año conviviendo en V. y actualmente en A., lo cierto es que según los documentos de empadronamiento aportados el único domicilio común es el de esta última localidad, en el que llevan unos pocos meses, mientras que en los domicilios en V. mencionados por el promotor no consta que hayan coincidido. En cuanto a otros datos personales, el promotor declara que su pareja tiene 3 hijos, cuando según su sentencia de divorcio son 4, también discrepan respecto a si trabajan o no, según el promotor ninguno de los dos lo hace, mientras que la Sra. P. dice que ella trabaja por horas en un Bar de V.

Por último el promotor al ser preguntado por los fines del matrimonio no entiende a qué se refiere la pregunta ni contesta sobre ello, tampoco entiende las cuestiones relativas a los posibles beneficios legales respecto a residencia que pueden conllevar los matrimonios de conveniencia, y, aunque no es determinante el promotor está en España en situación irregular, según el propio Sr. B. nunca ha solicitado la residencia legal en España en cambio su pareja dice que sí y, efectivamente, según informe de las autoridades correspondientes, el promotor solicitó unos meses antes del expediente de matrimonio un permiso de residencia temporal por causas excepcionales, cuya denegación le fue notificada en junio de 2011

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alaquàs (Valencia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (118ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Castellón.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Castellón el día 28 de junio de 2011, Don J.-J. de nacionalidad colombiana, nacido en C, V. (Colombia) el día 9 de diciembre de 1985 y Doña J. de nacionalidad española, nacida en C de la P. el 13 de abril de 1991, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; permiso de residencia caducado en el año 2008, pasaporte, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltero, certificado de inscripción consular, declaración testifical ante notario realizada en Colombia del estado civil del promotor y volante de empadronamiento en C. desde el 17 de julio de 2003, y de la promotora; certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil, soltera, y volante de empadronamiento en C.

2.- Con la misma fecha los interesados ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos, que manifiestan que estos no incurrían en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 24 de enero de 2012 los promotores fueron oídos en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal no se opone a la autorización y el 13 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar alguna de las discrepancias y alegando que ambos llevan tiempo conviviendo y que están esperando un hijo en común.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que se adhiere al recurso y la Encargada ratificándose en el auto apelado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a

la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre una ciudadana española y un ciudadano colombiano, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Ambos coinciden en el tiempo y forma de conocerse aunque difieren en las personas que les acompañaban en esas circunstancias, tampoco coinciden al referirse a la relación de pareja anterior del promotor según él, cuando conoció a la Sra. L. estaba en trámites de separación, según la promotora él llevaba separado de su anterior pareja, una ciudadana colombiana, 3 años. Ambos declaran que como consecuencia de las denuncias de la anterior pareja al Sr. C. este no pudo renovar su permiso de residencia que venció en el año 2008. Tampoco coinciden en cuando iniciaron su relación estable, según la promotora al mes de conocerse, según el promotor a las 2 semanas, y discrepan en el tiempo que llevan viviendo juntos, 2 meses según la promotora 1 mes según su pareja.

Hay discrepancias respecto a otras circunstancias de la relación de los promotores, ambos coinciden en que el Sr. C. no trabaja al menos desde 2 años atrás, pero este dice que sus ingresos provienen de sus padres y demás familiares en España, según la promotora los ingresos de su pareja provienen de su madre y de ella misma, teniendo el promotor disponible una tarjeta de débito vinculada con una cuenta bancaria de ella, añadiendo que también le paga por eje el gimnasio. Difieren en donde piensan vivir una vez casados, según el promotor seguirá en casa de su madre como hasta ahora, según la promotora tienen pensado ir a vivir a Suiza si él no encuentra trabajo en España.

Tampoco se muestran de acuerdo al relatar el último viaje que han realizado juntos, según el promotor no han realizado ningún viaje juntos y esperan ir a Colombia en las Navidades de 2012, según la promotora viajaron a A. en el coche de la Sra. L. y se alojaron en casa de la novia de un primo y, efectivamente, quieren viajar a Colombia cuando puedan pero no tienen fecha. También discrepan al declarar sobre la actividad deportiva del promotor, este dice que juega al fútbol aunque no con regularidad y que la última vez fue el viernes anterior a la entrevista, según su pareja ese partido fue el domingo anterior por la tarde, aunque luego en otra respuesta ambos dicen que el domingo anterior estuvieron viendo una película después de comer y no salieron y, por último el promotor no recuerda el número de teléfono de su pareja, equivoca la dirección de correo electrónico y tampoco conoce la matrícula del coche de su pareja con la que convive. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución, no obstante debe significarse que en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Castellón.

Resolución de 3 de enero de 2014 (121ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio civil.

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Toledo.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Toledo el 26 de noviembre de 2009, Doña I. nacida el 25 de agosto de 1986 en S. (Marruecos) y de nacionalidad española, obtenida por opción con fecha 14 de marzo de 2000, iniciaba expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil con Don S. de nacionalidad marroquí, nacido el 24 de noviembre de 1983 en D-B, B. (Marruecos). Acompañaban la siguiente documentación: de la promotora, certificación de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificado de empadronamiento en T. desde el 12 de febrero de 2009 y desde el 27 de abril de 2006 en S. (T), documento nacional de identidad, fe de vida y estado, soltera, y, del interesado, extracto de acta de nacimiento, documento de identidad marroquí, pasaporte, certificado de estado civil, soltero, certificado de residencia en B. poder notarial a favor de un ciudadano español, de origen marroquí, para representarle en el matrimonio.

2.- Con la misma fecha se ratifica la promotora, comparece el apoderado del interesado y dos testigos, la tía y la abuela de la promotora, que manifestaron que les constaba que los solicitantes a su entender poseen todos los requisitos para contraer matrimonio. El día 21 de abril de 2010 el interesado fue oído en audiencia reservada en el Consulado General de España en Nador y el 23 de noviembre siguiente la promotora en el Registro Civil de Toledo.

3.- El Ministerio Fiscal se opone a la concesión de la autorización y con fecha 29 de marzo de 2011 el Encargado del Registro Civil de Toledo estimando, que a la vista de las audiencias y fundamentalmente del informe del Cónsul español en Nador, respecto a la validez del matrimonio civil español en Marruecos y el hecho de que no hubieran optado los solicitantes por un matrimonio religioso islámico, siendo ambos de dicha confesión, se podía considerar que se trataba de un matrimonio de complacencia, sin que hubiera un verdadero consentimiento matrimonial, dictó auto denegando la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificada la resolución a los promotores y al Ministerio Fiscal, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la razón de no contraer matrimonio en Marruecos era que allí no podría casarse con el interesado, como era su deseo, ya que su familia había concertado un matrimonio con otra persona, no siéndole posible en su país de origen la libre elección de su pareja, motivo por el que también vino hace unos años a España a vivir con su abuela materna española, según manifiesta, interesando que se autorizara el matrimonio.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita su desestimación. Seguidamente el Encargado informó en el sentido de ratificarse en la denegación acordada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 16-1ª de octubre, 3-1ª de noviembre, 21-2ª y 3ª y 28-2ª de diciembre de 2006; 6-3ª y 14-3ª de febrero, 30-4ª de abril, 10-2ª, 28-5ª de mayo, 9-4ª de julio, 28-6ª de septiembre, 1-3ª de octubre y 18-1ª de diciembre de 2007; y 31-3ª de enero de 2008.

II.- Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos - especialmente en los matrimonios entre español y extranjero - en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. e. c.).

V.- En este proyectado matrimonio entre una nacional española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores como para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de simulación. Las entrevistas realizadas a los promotores no fueron lo suficientemente exhaustivas, ni por la extensión ni por la materia de las preguntas, y sus respuestas resultaron conformes con las cuestiones que se les formularon, el examen conjunto y global de ambas audiencias no revela contradicciones ni desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia para alcanzar la plena convicción de que existe una utilización fraudulenta de la institución matrimonial, y en el recurso la promotora ha expuesto sus motivos personales para optar por un matrimonio civil en España, donde reside y cuya nacionalidad ostenta con renuncia a la marroquí anterior, en lugar de un matrimonio religioso en su país de origen en el que su voluntad, respecto de la persona a la que se uniría, no sería debidamente respetada.

VI.- Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de Octubre

de 1993, “ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

2º.- Declarar que no hay obstáculos para la celebración del matrimonio.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Toledo.

Resolución de 3 de enero de 2014 (123ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ceuta el día 18 de julio de 2011, Don J-M. de nacionalidad española, nacido en C. el día 19 de marzo de 1981 y Doña S., de nacionalidad marroquí, nacida en T. (Marruecos) el 14 de marzo de 1977, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero y certificado de empadronamiento en C. desde su nacimiento y de la promotora; pasaporte, acta de nacimiento, certificado de soltería, fe de vida y certificado de vecindad.

2.- Con la misma fecha el promotor ratificó la solicitud, presentó un testigo que manifiesta que los solicitantes no incurrían en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 31 de octubre de 2011 la promotora fue oída en audiencia reservada en el Consulado General de España en Tetuán y con fecha 12 de enero de 2012 el promotor en el Registro Civil de Ceuta. El Ministerio Fiscal no se opone a la autorización y el 23 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que han sido sinceros en sus declaraciones y que pese a manifestar el auto que se produjeron discrepancias en ellas no se detalla su contenido, volviendo a solicitar la autorización.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado se muestra conforme con la resolución apelada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Según la promotora se conocen desde hace un año y cinco meses y según su pareja desde hace más de un año y medio, coinciden en manifestar que su relación como pareja comenzó dos semanas después y desde entonces tienen contacto telefónico diario y personal, en este caso según ella 3 o 4 veces por semana y según el promotor los fines de semana que es cuando ambos tienen libre. En relación con su convivencia futura la promotora declara que piensan fijar su residencia en C. donde alquilarán una vivienda, sin embargo el promotor en su entrevista manifiesta que iban a vivir en C. pero que lo harán en Marruecos porque los alquileres son más baratos e irán a trabajar a C. situación que ahora vive la promotora ya que su situación en España es de irregularidad, según se informa por el Consulado en el que se le entrevistó. Respecto a datos personales y familiares, la promotora desconoce el 2º apellido de su pareja y su año de nacimiento, este por su parte desconoce el lugar de nacimiento de la promotora, dice genéricamente que fue en las afueras de F. tampoco conoce los nombres de la mitad de los hermanos de la Sra. El K. En relación con otros temas, el promotor dice que su pareja trabaja cuidando personas mayores y ella dice que es empleada del hogar, este trabajo motiva que según ella de lunes a viernes vive en la casa en la que trabaja y los fines de

semana en otra localidad en casa de su hermana, cuñado y sobrinos, esta circunstancia no parece ser conocida por el promotor que dice que ella vive en la casa donde trabaja, aunque no tiene claro el lugar exacto de la casa, ella no sabe los estudios de él y éste no responde respecto a los estudios de ella.

También difieren en las aficiones del promotor, en el tratamiento médico que sigue para el asma y que la promotora no menciona, tampoco coinciden en el motivo del último regalo que la promotora ha recibido, así ella dice que fue por el ramadán y según el promotor fue porque ella las vio y le gustaron. Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 3 de enero de 2014 (124ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla el día 15 de julio de 2011, Don M. de nacionalidad española, nacido en M. el día 7 de septiembre de 1980 y Doña K. de nacionalidad marroquí, nacida en B-C. (Marruecos) el 28 de julio de 1989, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero y volante de empadronamiento en M. y de la promotora; pasaporte, acta literal y en extracto de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia.

2.- Con la misma fecha los promotores ratificaron la solicitud, presentaron dos testigos que manifiesta que los solicitantes no incurrían en prohibición alguna con el matrimonio que pretenden, y el día 18 de octubre de 2011 los promotores son oídos en audiencia reservada en el Registro Civil de Melilla. El Ministerio Fiscal se opone a la autorización y el 11 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil apreciando que concurren desconocimientos mutuos no justificados, dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

3.-Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor a través de su padre, por causa de su minusvalía, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manifestando que el matrimonio fue concertado por las familias de los promotores ya que no querían que el Sr. M. se quedara sólo si sus padres faltaban, justificando el desconocimiento de datos en que sólo se veían una vez a la semana cuando

la promotora era recogida en casa de su familia y llevada a M. Adjuntando documentación acreditativa de la minusvalía del promotor como consecuencia de sus problema auditivos.

4.-De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la desestimación del recurso y el Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Según el promotor se conocen desde pequeños porque sus padres son primos, en cambio la promotora dice que no se conocían de pequeños, dice también que su relación es de hace un año y medio pero no recuerda el tiempo que llevan comprometidos, según el promotor 3 meses, la relación que mantienen es de verse cada semana o cada 15 días según la promotora o cada 2 semanas según su pareja, también difieren en dónde se ven, según ella en M. y según el promotor unas veces en Marruecos y otras en M. como ejemplo de esa discrepancia ella declara que la última vez que se vieron fue el sábado anterior en la casa de los padres de él en M. en cambio el promotor dice que fue hace 2 sábados en Marruecos y que comieron en casa de ella.

La promotora desconoce cuándo se casarán, dice que celebrarán la boda cada uno en su casa, mientras que el promotor dice que se celebrará en su casa, cerrará la azotea para las mujeres y en un salón de abajo los hombres, también añade que no irán de viaje de novios porque la luna de miel es una cuestión de los cristianos, ella contesta que no sabe si irán. En relación con su convivencia posterior al matrimonio, la promotora declara que vivirán en M. pero no sabe dónde, según su pareja en una casa enfrente de la de sus padres. Cabe añadir que según el promotor se entienden en tamarigh y un poco de árabe en cambio la promotora dice que ella habla en tamarigh y él en español pero se entienden, precisamente esta falta de idioma común es uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Respecto a datos personales y familiares, la promotora desconoce la fecha de nacimiento y el domicilio de él en M. no sabe los estudios que tiene y manifiesta que trabaja de jardinero aunque no sabe desde cuánto tiempo lleva, según el promotor no trabaja y para dar el nombre de ella tiene que mirar la citación del Registro Civil, tampoco sabe su lugar ni fecha de nacimiento. Por su parte la Sra. L. manifiesta no conocer a las personas que han comparecido como testigos, y tampoco conoce el último viaje de su pareja, que fue a M. aunque en ese tiempo ya mantenían su relación. Si coinciden en manifestar expresamente que una vez que se casen la promotora solicitará la nacionalidad española. Todo ello, unido a lo declarado en el recurso presentado, se considera base suficiente para entender que no existe verdadero consentimiento matrimonial ni voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (2ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don H. nacido en España y de nacionalidad española con valor de simple presunción desde el año 1993 y Doña I. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento, certificado administrativo de estado civil y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 18 de enero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio civil.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a la celebración del matrimonio. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que mientras que ella dice que se conocieron hace dos años en una boda en N. él declara que fue hace tres o cuatro años en

una boda en I. El interesado declara que son familia política y ella dice que son familia lejana. El interesado declara que ahora vive en M. pero antes vivía con su madre en G. ella dice que vivía con su madre y hermano. El interesado es militar y declara que M. es el primero destino que ha tenido, no ha tenido otro, sin embargo ella dice que antes del destino de M. estuvo destinado en G. El pertenece al arma de Infantería ligera, ella lo desconoce, tampoco sabe el horario que tiene. El interesado declara que el último día que se vieron fue el fin de semana en casa de su novia, sin embargo ella dice que fue el día anterior a la entrevista y que la recogió en N. y fueron a M. Desconocen a los testigos del expediente, el interesado conoce a F. y al otro no lo conoce, sin embargo ella declara que conoce a J-M. que es amigo de su novio y al otro testigo no lo conoce. La interesada declara que cuando se casen él pedirá destino a la península, sin embargo él dice que se quedarán a vivir en M. Ella dice que cuando se casen pedirá la nacionalidad española, sin embargo él dice que ella pedirá la residencia pero no la nacionalidad. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (3ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Amposta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don Y. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa y Doña Mª-J. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. M. y certificado de soltería Sr. S.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Enero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara el interesado que se conocen hace un año y tres meses mientras que ella dice once meses y que conviven desde hace tres, ignora el interesado datos básicos personales y familiares como los nombres y edades de los hermanos de la Sra. M. asimismo la interesada sabe que él tiene un hermano en la misma localidad donde residen pero no le conoce, manifiesta el Sr. S. que su pareja es pensionista y ella dice que es enfermera aunque ahora está de baja médica, ignora la Sra. M. el número de teléfono del Sr. S. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 25 años

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Amposta.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (10ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil A Coruña.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-C. nacido en España y de nacionalidad española y Don A. nacido en Costa Rica y de nacionalidad costarricense, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadano costarricense y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declaran que se conocieron en febrero por Internet y que personalmente y físicamente hace dos meses que fue cuando el Sr. M. vino a España, concretamente según información de la policía el 15 de junio de 2011, que desde que se conocieron declaran que hablaban todos los días, circunstancia que implicaría al menos un conocimiento de datos básicos personales y familiares de ambos no habiendo quedado plasmado en la audiencia reservada ese conocimiento, y así lo ha expresado el informe de fiscal y el auto del encargado. Conviven desde la llegada a España del Sr. M. y en el escaso tiempo ya han solicitado la autorización para la celebración del matrimonio. Por otra parte el Sr. M. ha declarado que tiene intención de solicitar la nacionalidad española mientras que el Sr. B. ha manifestado la posibilidad de trasladarse definitivamente a Costa Rica. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 11 años y el Sr. M. se encuentra en situación ilegal por carecer de permiso de residencia.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de A Coruña.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (30ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez encargada del Registro Civil de Manresa.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Don J-F. nacido y domiciliado en F. y de nacionalidad filipina, iniciaban expediente

en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poderes. Se acompañaba la siguiente documentación: declaración jurada de estado civil del contrayente español y pasaporte, partida de nacimiento del contrayente filipino.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, la Juez encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por en España entre un ciudadano español y un ciudadano filipino y de las audiencias reservadas

se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que el contrayente filipino dice que en junio de 2008 y el español dice que en junio de 2010. El contrayente filipino dice que su pareja nació en B. cuando fue en M. tampoco sabe con exactitud su domicilio ya que dice que vive en C. de D`A. cuando es P. de D`A. El contrayente filipino dice que su pareja no trabaja cuando éste dice trabajar en un almacén en A. por el contrario el contrayente español dice que su pareja es “amo de casa” cuando éste dice trabajar como “F-A”, dibujando comics para la revista P-B. y además cuida de su abuelo. El contrayente filipino había solicitado un visado para viajar a España. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Manresa.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (88ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Torremolinos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don S. nacido en Nigeria y de nacionalidad nigeriana y Doña H. nacida en Nigeria y de nacionalidad nigeriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: permiso de residencia, certificado nacional de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, certificado nacional de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que no conoce ningún impedimento para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y 4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de 2007.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que, mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.

IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 L. R. C.), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 C. c.) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

V.- La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento

matrimoniales, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 C. c.), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 C. c.), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.

VI.- Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C. c.), en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes.

Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 C. c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C. c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 R. R. C.), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.

VII.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre dos ciudadanos nigerianos, residentes en España, y de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce los nombres de los padres de ella, de sus hermanos, ella por su parte desconoce el nombre de la hermana de él, salario, regalos que se han hecho, ya que ella dice que cree que le regaló al interesado unas botas para su cumpleaños, mientras que él dice que ella no le regaló nada porque no tiene trabajo. Por otro lado la interesada tiene una orden de expulsión por infracción de la

Ley de extranjería y según el informe de la policía la interesada figura con cuatro identidades relacionadas distintas entre las que constan antecedentes en M. por robo con violencia y por falsificación de documentos públicos oficiales.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torremolinos.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (89ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado contra auto de la Juez encargada del Registro Civil de Guadix.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña V. nacida en España y de nacionalidad española, y Don J. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y copia en extracto de acta de nacimiento, certificado administrativo de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 10 de junio de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio civil.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición de recurso, la Juez encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45,

73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Probablemente no tengan idioma común, ya que él habla muy poco español y ella no habla otro idioma que no sea español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. El interesado no entiende la pregunta de desde cuando mantienen relación afectiva. Discrepan en el tiempo que hace que conviven ya que él dice que hace seis meses (la entrevista se celebró en marzo de 2011, luego desde septiembre), y ella dice que desde febrero de 2010; el interesado desconoce la edad del hijo de la interesada ya que dice que tiene cuatro años cuando son seis, así mismo desconoce su teléfono, en este sentido ella dice que él no tiene teléfono. El interesado dice que hace cuatro meses que decidieron casarse, mientras que ella dice que hace seis meses. El interesado desconoce que ella está desempleada y cobra el desempleo ya que declara que trabaja, los fines de semana, en un bar del que no recuerda el nombre, por su parte ella dice que él trabaja a veces en el campo, mientras que él dice estar en el paro. Desconocen el número y los nombres de los hermanos de cada uno, los estudios que tienen, aficiones, comidas favoritas, etc. No presentan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Guadix (Granada).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (91ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña M^a-A. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de defunción de la primera esposa del interesado y volante de empadronamiento del mismo y pasaporte, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 8 de marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste emite un informe desfavorable, la Juez encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La mayoría de las respuestas dadas por el interesado son incongruentes y casi ilegibles. De las entrevistas se deduce que aunque ellos digan lo contrario, los interesados no viven juntos, ya que ella vive y trabaja en Colombia y él vive en España, la interesada vivió en Colombia desde octubre de 2009 hasta junio de 2011, y se empadronó en el domicilio del interesado el 25 de mayo de 2011, el 30 de agosto de 2011 solicitaron la autorización para contraer matrimonio. Además declaran que una vez casados ella seguirá viviendo en Colombia y él irá allí durante el buen tiempo. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que a finales de 2004 en el Club T-S. mientras que él declara que se conocieron en B. en diciembre de 2006. La interesada declara que son pareja de hecho desde 2008 y que en el último año han pensado en formalizar la relación, sin embargo él dice que tomaron la decisión de casarse hace cuatro años. El interesado declara que tiene estudios secundarios, sin embargo ella dice que él tiene un peritaje industrial y se graduó como profesor de tenis. El interesado declara que tienen carnet de conducir, sin embargo ella dice que él no lo tiene. Por otro lado el interesado es 31 años mayor que la interesada. Las pruebas presentadas no revelan consentimiento matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (94ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Marbella.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en La España y de nacionalidad española y Doña S-N. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: acta inextensa de nacimiento, declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento de la interesada y certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal no se opone a la celebración del matrimonio. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 26 de octubre de 2011 deniega la autorización del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste no se opone al recurso de apelación. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. A tenor de lo manifestado por los interesados éstos se conocieron cuando la interesada vivía todavía en la República Dominicana, declaran que los presentó por teléfono un amigo común llamado M. en una entrevista anterior que se les realizó en O. dicen que M. es primo y no amigo. Manifiestan que hasta que ella vino a España la relación se estableció por teléfono. La interesada desconoce la calle donde supuestamente vive con el interesado y los padres de éste, afirma que en un principio vivió en casa de su primo en E. durante un mes, y que nunca ha compartido piso con el promotor, ya que una vez que deja de vivir con su primo se traslada con el interesado a casa de sus padres, esto contrasta con lo declarado por el interesado al manifestar que la interesada llegó a España en abril y que ambos compartieron piso de alquiler en O. durante unos quince días, pero al quedar sin trabajo tuvieron que dejar el piso. La interesada desconoce el nombre de una de las hermanas del interesado al declarar que se llama L. cuando es E. por su parte el interesado desconoce el número y los nombres de los hermanos de la interesada. El interesado dice que ella sufrió una operación cuando era pequeña y que cree que se la hicieron en Estados Unidos, sin embargo ella afirma que se la operaron en S-D. El interesado dice que ella es soltera, sin embargo ella afirma estar divorciada desde hace muchos años, lo cierto es que no queda claro el estado civil de la interesada ya que con la solicitud para contraer matrimonio aporta una declaración jurada de soltería donde se dice que no ha contraído matrimonio civil ni canónico alguno. Por otro lado, la interesada es 18 años mayor que el interesado. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Marbella.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (96ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don S. nacido en España y de nacionalidad española y Doña N. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la

siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento del interesado, certificado de residencia y soltería Sra. N. y fe de vida y estado Sr. F.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el

matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento de datos básicos personales y familiares como que la Sra. N. ignora la fecha de nacimiento de su pareja , declara que conoció a su novio hace dos años y que nada más conocerse le hicieron la pedida de mano en casa de sus padres, que ella no trabaja ni estudia y que su pareja lleva seis meses trabajando en los planes de empleo mientras que él dice once meses e igualmente ignora el Sr. S. datos básicos personales de su pareja como es la fecha de nacimiento. Por otra parte declara ella que no harán viaje de novios mientras él dice que viajaran a Marruecos y que cuando se casen vivirán en casa del novio, mientras que él dice que vivirán en el mismo edificio que sus padres manifiesta que el sábado último anterior a la audiencia reservada su novio fue a casa y salieron por la tarde a pasear y que el domingo lo pasaron en casa de ella en Marruecos mientras que él dice que pasearon y estuvieron en M.

Finalmente la interesada declara que solicitara la nacionalidad española si su pareja le hace los papeles y él manifiesta que su novia los solicitara cuando se casen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (98ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Reinosa.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña D. nacida en España y de nacionalidad española y Don M. nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados, certificado soltería Sr. A.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 27 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así la interesada declara conocerse desde el 04 de diciembre de 2009 y que decidieron contraer matrimonio en el verano mientras que el Sr. A. dice que se conocieron el 01 de enero de 2009, que carece de ingresos y que les ayuda económicamente un hermano de su pareja y que también tienen los ingresos de ella, mientras que ella declara que no tiene ingresos del trabajo. Dice el Sr. A. que ella tiene un hijo de una relación anterior mientras que ella no lo ha manifestado. Por otra parte y como consta en el expediente ambos se dieron de alta en el mismo domicilio en el padrón municipal el 23 de agosto de 2010 y como refleja

la encargada en el auto los testigos no han aportado datos relevantes sobre la relación contestando con monosílabos lo que parece indicar un desconocimiento real de los datos de los interesados.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 10 años y el Sr. A. se encuentra en situación ilegal por carecer de permiso de residencia con orden de expulsión ordenada el 26 de abril de 2011.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Reinosa.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (99ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don C. nacido en Guinea Ecuatorial y de nacionalidad española y Doña A-M. nacida en Guinea Ecuatorial y de nacionalidad guineana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana guineana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declara el interesado que conoció a la Sra. A. en Guinea Ecuatorial sobre el año 1998 y que convivieron dos años que luego se separaron y que se volvieron a reencontrar en el año 2009 en España en una discoteca y que al poco tiempo se fueron a vivir juntos, mientras que la interesada dice que no se conocían en Guinea y por lo tanto no han convivido en el periodo que dice el Sr. M. que se conocieron en España en una discoteca y que viven juntos desde hace dos años. Por otra parte el Sr. M. dice que su pareja tiene dos hijos de 4 y 3 años que viven con las hermanas de su pareja en Guinea mientras que la Sra. A. declara que sus hijos tienen 6 y 5 años y que viven con su madre en Guinea, finalmente ambos declaran que el interesado no conoce a la familia de su pareja.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (102ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ciutadella de Menorca.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña H-M. nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados y Fe de vida y estado Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 27 de Octubre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadana ecuatoriana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento de datos básicos personales y familiares como que el interesado ignora la fecha de nacimiento, el nombre de los padres y hermanos, el número de teléfono de su pareja asimismo la interesada ignora la fecha de nacimiento de su pareja. Declara el Sr C. que se conocieron e iniciaron la relación sentimental hace 4 ó 5 años mientras que la interesada manifiesta que fue en septiembre de 2007. En relación a los gustos, costumbres y aficiones el Sr. C. ignora la colonia o perfume que usa su pareja, cuál es su color favorito, el último libro que ha leído, si escucha o no la radio, la música que le gusta asimismo la interesada desconoce cuál es el color favorito del Sr. C. dice que escucha de radio la cadena C. y él dice radio M.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 32 años y manifiesta el interesado que no acudirán familiares a la boda de ninguno de los dos mientras que ella dice que acudirán su hermana y su madre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ciutadella de Menorca.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (130ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña H. nacida en España y de nacionalidad española y Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia del interesado y certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto considerando la resolución impugnada ajustada a derecho. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado, declara que él sabe español, cuando en la entrevista que se le practicó necesitó de traductor, dice que él no tiene ingresos fijos porque trabaja por su cuenta, sin embargo él dice que gana como mínimo 600 euros, sabe que vive en T. pero desconoce su dirección, declara que se han viajado muchas veces para verse pero no puede concretar fechas, no recuerda los regalos que se han hecho. Por su parte el interesado desconoce si ella es española de nacimiento o adquirió posteriormente la nacionalidad. Declara que sabe que inscribiendo el matrimonio en el Registro Civil español, podrá salir de Marruecos y residir en España legalmente, y que podrá solicitar un visado de residencia por reagrupación familiar, declara que no saben dónde vivirán después del matrimonio cuando ella dice que vivirán C. porque allí tiene a su familia. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 15 años mayor que ella. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (132ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de La Coruña.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña Y de la C. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poder. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste solicita la confirmación del auto recurrido. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana cubana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo se conocieron ya que mientras que ella declara que se conocieron en 2009 en su casa a través de una amiga, él manifiesta que se conocieron en la terraza del hotel donde él se alojaba. Desde entonces no han vuelto a verse personalmente, estuvieron juntos tan sólo una semana y no continuada porque según el interesado ella trabajaba, por lo que la relación ha sido telefónica. Desconoce el interesado la edad de ella, no sabe su fecha de nacimiento, nombres de su hermana y de sus padres, gustos, aficiones, deportes

practicados, etc. La interesada desconoce donde trabaja el interesado al manifestar que en la construcción cuando él dice trabajar en una fábrica de elaboración de cajas llamada I. así mismo desconoce que estudios ha realizado o si tiene algún tratamiento médico. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de A Coruña.

Resolución de 13 de Enero de 2014 (8ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Mungia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en España y de nacionalidad española y Don J. nacido en Brasil y de nacionalidad brasileña, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 15 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York

de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadano brasileño y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así el Sr N. se encuentra en situación irregular por carecer de permiso de residencia legal en España y en el trámite de audiencia declaró que las razones por las que contraía matrimonio “era para estar tranquilo”, asimismo ignora datos básicos personales y familiares como nombres, apellidos de los padres o el segundo apellido de su pareja, ni el nombre de los hermanos del Sr. R. respecto de la fecha de nacimiento manifestó que creía que era 23 de septiembre de 1979. Por otra parte declaran conocerse hace unos seis o siete meses y hace dos decidieron contraer matrimonio. Finalmente a pesar de residir en la misma localidad no conoce a los padres de su pareja

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Mungia (Vizcaya):

Resolución de 13 de Enero de 2014 (9ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de A Coruña.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, J.nacido en Brasil y de nacionalidad brasileña y Don J-L. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. S. volantes de empadronamiento de los interesados y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 21 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadano brasileño y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declaran conocerse en mayo de 2010 en una discoteca en S-C. (A C). y que inician su relación a los dos meses de conocerse siendo que según su propia documentación el Sr. S. reside en G. hasta septiembre de 2010. Declara el Sr. S. que llegó a España en el año 2008 y que nunca ha tenido su situación de residencia regularizada, pero que todos los años vuelve a Brasil y está alrededor de dos meses salvo la última vez que ha estado 4 meses ya que su madre está enferma. Que es peluquero a domicilio y gana de 2000 a 3000 euros mensuales mientras que a la policía declara unos ingresos entre 500 ó 800 euros, que su pareja está en el paro desde que le conoció. Ignora el Sr. S. lo que cobra su pareja y declara que no convive habitualmente con él porque tiene dos hijas pequeñas pero que cuando se case vivirán en su casa, sin embargo sea verificado por la policía que las hijas menores del Sr. C. viven con sus madres. El Sr. C. declara que ambos comparten la vivienda con otras personas, que ignora los estudios de su pareja y las ciudades en las que ha residido en España, asimismo el Sr. S. desconoce los estudios de su pareja.

Finalmente y como consta en la documentación la comisaría provincial de A Coruña informa que ambos viven en diferentes domicilios con otras personas habiendo declarado que no convivirán ellos juntos hasta la celebración del matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de A Coruña.

Resolución de 17 de Febrero de 2014 (6ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Balaguer (Lleida).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-M. nacido en España y de nacionalidad española y Doña Á del R. nacida en República Dominicana y de nacionalidad española iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio Sr. C. certificado de matrimonio y acta de divorcio local Sra. G. y certificado de empadronamiento ambos interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 04 de Mayo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos

demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano español, de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así de la documentación aportada constan los interesados empadronados en dos domicilios diferentes pese a que según la interesada llevan conviviendo seis meses en el domicilio donde ella consta como empadronada, él declara que llevan conviviendo catorce años es decir desde la fecha que declaran conocerse año 1998. Ignora el interesado cuánto gana su pareja, el nombre de los padres y como pone de manifiesto el Fiscal no coinciden en la mayoría de las respuestas sobre la vida cotidiana diaria a pesar de conocerse desde 1998. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad es aproximadamente 29 años y en la documentación consta el certificado de divorcio de la Sra. G. registrado en República Dominicana el 21 de noviembre de 2011, sin que de la documentación aportada conste que dicho divorcio ha sido objeto de inscripción en el registro civil español donde figura como vigente el matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de Febrero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Balaguer (Lleida).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (22ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Campillos (Málaga).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don V. nacido en España y de nacionalidad española y Doña P-Mª. nacida en Venezuela y de nacionalidad venezolana, iniciaban expediente de solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificados de empadronamiento de los interesados y Fe de vida y estado y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. N.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y un ciudadana venezolana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento sobre datos personales y familiares básicos como que el interesado ignora la fecha nacimiento de su pareja, con quien vive la hija de ella así como la intervención médica que tuvo la Sra. V. mientras que ella no sabe de quién es el piso donde viven, los ingresos de su pareja, las edades y fecha de nacimiento de los hijos del Sr. N.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 10 años y es significativo que los testigos propuestos han conocido a la Sra. V. dos días antes de la comparecencia en el Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Campillos (Málaga).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (24ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Tarancon.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don S. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña A. nacida en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente de solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de la interesada, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. G. y certificado de residencia y soltería Sr. B.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 01 de Diciembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse

en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así el Sr. B. ignora el lugar y fecha de nacimiento de su pareja así como los datos básicos referidos a los padres de la interesada, desconoce los estudios que ha realizado y los ingresos que percibe, no sabe la dirección del domicilio de la interesada cuando declara haber convivido dos años con ella mientras que la interesada dice que han convivido 7 o 8 meses, ni su número de teléfono cuando manifiesta que la llama todos los días, vive en Marruecos en casa de los padres y no trabaja mientras que la interesada dice que trabaja en el campo, según el interesado vive de los envíos de la Sra. G. y de los ingresos de sus padres. Manifiesta el interesado que a Sra. G. le ha visitado 3 veces pero que no recuerda las fechas ni los días, ella dice que ha estado en Marruecos cuatro días en cada viaje. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 23 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Tarancon (Cuenca).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (26ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Amposta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña A. nacida en España y de nacionalidad española y Don S. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. S. certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. C. y volantes de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 18 de Enero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones como cuando se conocen el interesado dice nueve meses y que conviven hace siete mientras que ella declara que se conocen hace cuatro meses y conviven desde hace tres, asimismo no coinciden sobre los apelativos o apodosos que usan ella dice que a él "n" y él a ella "m" mientras que el Sr. S. dice que a ella "p" y a él "n" o "c". Por otra parte existe un desconocimiento de ambos sobre datos básicos personales y familiares respecto de sus padres y hermanos e hijos de la interesada, en relación a sus nombres, edades, fecha de nacimiento y demás circunstancias.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 21 años y declaran haberse casado por rito religioso musulmán sin que exista ninguna prueba documental.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Amposta (Tarragona).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (28ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Amposta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña S. nacida en España y de nacionalidad española y Don M. nacido en Senegal y de nacionalidad senegalés, iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. M. volante de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano senegalés y de las audiencias

reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declaran conocerse el 28 de mayo de 2011 y solicitan la autorización para contraer matrimonio el 16 de septiembre de 2011, manifiestan que llevan conviviendo tres meses ellos y la hija de Sra. G. y declara la interesada que cuando pueden van a pescar y él no lo menciona pero dice que van a tomar el té a casa de su amigo P. que ella no lo manifiesta.

En el trámite de alegaciones declara el interesado que convive desde junio además de con la interesada y su hija con una hermana "Y." siendo que en el momento de la audiencia reservada manifestó que su pareja tenía solo un hermano y no menciona esta circunstancia. Por otra parte únicamente han presentado unas fotografías donde dice que contrajeron matrimonio en ceremonia musulmana sin que exista ningún documento de dicha celebración. Finalmente declaran conocerse en casa de unos amigos que igualmente han presentado solicitud autorización para la celebración de matrimonio entre una española y un senegalés y que ha sido denegado igualmente, argumentando la misma circunstancia hechos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro civil de Amposta (Tarragona).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (29ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Premià de Mar (Barcelona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en España y de nacionalidad española y Don M. nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de divorcio Sra. B. volante de empadronamiento de los interesados y certificado de soltería Sr. J.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 29 de Febrero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así declaran conocerse hace tres años y que conviven hace un año junto con una hija de la Sra. B. no obstante en la misma audiencia el interesado a la pregunta de cuánto tiempo han vivido juntos responde “ tres años, que residen en la actualidad en P de M. mientras que ella dice que viven en B. manifiesta el interesado que cuando se casen vivirán en B. lugar donde la interesada dice que ya viven, que tomaron la decisión de casarse hace un año en B. mientras ella dice que fue hace cinco meses en su casa. Ignora la interesada los estudios que ha cursado su pareja, los programas de televisión que le gustan, manifiesta ella que está en el paro mientras él declara que ella sigue trabajando en una panadería

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 16 años y manifiesta la Sra. B. que casándose regularizaran su situación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Premià de Mar (Barcelona).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (30ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Pont De Molins (Girona).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en España y de nacionalidad española y Doña M^a-L. nacida en Bolivia y de nacionalidad boliviana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de divorcio Sr. E. certificado de empadronamiento y fe de vida y estado ambos interesados y certificado de matrimonio con sentencia de divorcio Sra. L.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 09 de Marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45,

73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana boliviana y un ciudadano español y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen determinadas contradicciones como que el interesado declara que solo conviven en vacaciones y fines de semana mientras que ella dice que llevan conviviendo cuatro años, ignoran ambos la fecha de nacimiento de su pareja asimismo en relación a los gustos, costumbres y aficiones manifiesta el interesado que las comidas que les gustan a ambos es "todo" y preferiblemente la comida española a la boliviana mientras que ella manifiesta que lo que realmente le gusta a los dos son las lentejas, en lo que se refiere a los últimos regalos se contradicen ya que el interesado declara él a ella unos zapatos y ella a él una faja mientras que ella dice que a él unos perfumes y él a ella dinero para comprar ropa. Declara el interesado que no conoce a ningún miembro de la familia de la Sra. L.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 17 años.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Pont de Molins (Girona).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (34ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Algeciras.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en España y de nacionalidad española y Don M. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería Sr. El O. volantes de empadronamiento de los interesados y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. O.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 28 de Noviembre de 2011 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen contradicciones de la pareja como cuál fue la fecha en que se conoció él dice a últimos del año 2009 y ella declara en noviembre de 2010 igualmente declaran convivir juntos en un piso según él alquilado y ella manifiesta que es de propiedad. Por otra parte existe un desconocimiento mutuo respecto de datos básicos personales y familiares respecto de los padres y hermanos de ambos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Algeciras.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (35ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Castellón de la Plana.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña R. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Don J-F. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, acta de divorcio Sra. R. y certificado de empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 02 de Febrero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.

Así existe una serie de desconocimiento y contradicciones como que el interesado ignora como llegó la Sra. R. a España, la fecha de su nacimiento, con quien vive la hija de esta en Marruecos, ella dice que con un hermano en la localidad de C. y él manifiesta que con los abuelos en la localidad de M, discrepan en los nombres de los familiares, las actividades de fin de semana ella declara que va sola a la playa con amigas y que él nunca va mientras que él declara que ella nunca quiere salir de casa por lo que nunca han salido ni viajado. En relación a los regalos ella manifiesta que solo le ha regalado un cordero en el año 2009 que fue cuando se conocieron.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 21 años y la interesada tiene orden de ingreso en prisión que se encuentra en la actualidad suspendida por la que se la condena a un año o 10 años de expulsión del territorio nacional.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Castellón de la Plana.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (36ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la encargada del Registro Civil de Torreveja.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en España y de nacionalidad española y Don J. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de empadronamiento de los interesados y certificado de soltería Sr. J.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiesta que le consta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 02 de Febrero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. La encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento y contradicciones de datos básicos personales y familiares como que el interesado ignora la fecha y lugar de nacimiento, de su pareja, los nombres de los padres y hermanos de ella y manifiesta que no conoce a sus suegros que residen en la misma localidad que los interesados. Manifiesta la interesada que su pareja tiene un hermano pero él no lo declara. Respecto de los gustos de comidas y bebidas no coinciden en lo manifestado por cada uno de los interesados declara ella entre otras, que él siempre come con mahonesa y él no lo menciona y él declara carne picada para ella y la interesada menciona huevos con patatas y dulces.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 12 años y el interesado se encuentra en situación irregular en España por carecer de permiso de residencia legal.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torreveja.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (24ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Ciempozuelos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don F. y Doña M^a-T. ambos de nacionalidad española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Aportaban la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado y DNI, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados.

3.- El Ministerio Fiscal se opuso a la autorización, a la vista del informe forense emitido respecto del interesado en el que pone de manifiesto el trastorno psicológico que padece que altera su afectividad y emotividad y ante los indicios de que el matrimonio pueda ser buscado por el interesado como un modo de evitar la institucionalización. El Encargado del Registro Civil dictó auto el 27 de julio de 2011 denegando la solicitud de autorización del matrimonio ya que los interesados no tienen la capacidad requerida para contraer matrimonio al existir un trastorno psiquiátrico crónico e irreversible del interesado, según se pone de manifiesto en el informe forense emitido en fecha 21 de diciembre de 2010, del médico del juzgado de 1ª instancia e instrucción nº1 de Valdemoro, que obstaculiza su celebración.

4.- Notificados los promotores, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil se ratificó en su resolución y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,

11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que el matrimonio proporciona al extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C. c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L. E. C.).

V.- En el caso presente se trata de una solicitud de autorización para la celebración de un matrimonio civil en España entre dos ciudadanos españoles. El interesado está internado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos hace dos años; a petición del Ministerio Fiscal se solicitaron sendos informes forenses de ambos contrayentes por hallarse afectados por anomalías psíquicas. En dicho informe se concluye que el interesado sufre un trastorno psiquiátrico de tipo esquizofrénico, tal enfermedad es crónica e irreversible y puede cursar con periodos de actividad delirante, que el nivel de inteligencia del interesado puede sugerir que el matrimonio sea tenido como un medio rentable de evitar la institucionalización; por otro lado la interesada con la que pretende contraer matrimonio está diagnosticada de trastorno bipolar, una condición altamente inestable y con similares requerimientos terapéuticos. Por otro lado de las audiencias practicadas se revelan bastantes contradicciones como por ejemplo mes en el que se conocieron, salario de cada uno, número de hermanos de la interesada, familiares de la interesada que conoce el interesado, gustos culinarios, parejas que ha tenido cada uno, etc.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ciempozuelos.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (29ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Alhama de Aragón.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña M^a-A nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y acta inextensa de nacimiento, declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 23 de marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto e interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2^a de diciembre de 2005; 31-3^a de mayo, 27-3^a y 4^a de junio, 10-4^a, 13-1^a y 20-3^a de julio, 1-4^a, 7-3^a y 9-2^a de septiembre, 9-1^a, 3^a y 5^a de octubre, 14-2^a, 5^a y 6^a de noviembre y 13-4^a y 5^a de diciembre de 2006; 25-1^a, 3^a y 4^a de enero, 2-1^a, 22-2^a, 27-3^a y 28-4^a de febrero, 30-5^a de abril, 28-6^a y 30-4^a de mayo, 11-3^a y 4^a, 12-3^a de septiembre, 29-4^a y 6^a de noviembre, 14-1^a y 4^a y 26-5^a de diciembre de 2007, 24-4^a de abril y 19-2^a de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que él dice que por teléfono en el año 2002, mientras que ella dice que en noviembre de 2009. Desconocen aspectos de su vida y gustos, aficiones, gustos, etc. por ejemplo la interesada desconoce el lugar y la fecha de nacimiento del interesado, el nombre de uno de sus hermanos, declarando que vive en Alh. cuando vive en Ate. desconoce así mismo su profesión (está en paro), dice que tiene un sueldo de 1.500 euros cuando él dice que gana el sueldo base, desconoce que el interesado ha sido intervenido quirúrgicamente de hernia y úlcera, su comida favorita, declarando que es la tortilla de patata y el pescado cuando él dice que le gustan las judía blancas, dice que él bebe agua cuando es vino. Por su parte el interesado desconoce el segundo apellido de ella, donde nació ya que dice que fue en S-D. cuando fue en C. declara que tiene tres hijos de los que desconoce la edad, y el nombre de alguna hija, afirmando que viven en S-D. cuando en realidad la interesada tiene cinco hijos y una de ellas vive en Alemania; así mismo desconoce el nombre y número de hermanos de ella declarando que sólo conoce a uno que se llama "Corpus" cuando se llama Corpín, desconoce su profesión, horario de trabajo, desconoce su teléfono, manifiesta que tiene permiso de residencia cuando no es cierto, también desconoce su comida favorita ya que dice que es el arroz cuando es el plátano con carne, tampoco sabe cuando llegó la interesada a España ya que dice que hace cuatro años cuando ella declara haber vivido en Alemania y S-D. los dos últimos años. Discrepan en los regalos que se han hecho mutuamente, los motivos por los que se lo hicieron, también difieren en lo que hicieron el último fin de semana. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Alhama de Aragón (Zaragoza).

Resolución de 27 de Enero de 2014 (34ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Vilafant.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña Mª-T. nacida en España y de nacionalidad española y Don M. nacido en Georgia y de nacionalidad georgiana, iniciaban

expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 5 de marzo de 2012 autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados y el Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, interesando la revocación del auto y la no autorización del matrimonio.

4.-Notificados los interesados, el Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española y un ciudadano georgiano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. A pesar de que la interesada declara que no sabe lo que son los “matrimonios blancos”, ella contrajo matrimonio con un ciudadano georgiano en octubre de 2006 (era ya divorciada) y se divorció mediante sentencia el 30 de julio de 2010, y el 15 de noviembre de 2011 solicita la autorización para contraer matrimonio con el promotor del expediente. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, discrepan en gustos y aficiones así por ejemplo la interesada declara que a él le gusta pasear, jugar al tenis e ir al cine y a ella leer, la música, ver la tele e ir de compras, mientras que él afirma que le gusta el deporte y el gimnasio y a ella pasear, tenis, jugar a las cartas y la playa. La interesada desconoce cuando vino él a España, dice que vino en autobús. Por otro lado, la interesada es 22 años mayor que el interesado. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y revocar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vilafant.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (36ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto de la encargada del Registro Civil de Hellín.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. nacido en España y de nacionalidad española y Doña A. nacida en Marruecos, y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y certificado literal de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. La encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 7 de febrero de 2012 deniega la celebración del matrimonio, por no existir consentimiento matrimonial.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Como indica la interesada prácticamente no habla español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado, su segundo apellido, los apellidos de su madre, etc. El interesado desconoce las edades de los hijos de la interesada al declarar que tiene ocho y doce años cuando tienen diez y doce años, dice que ella tiene tres hermanas de las que sólo conoce a una que vive en C. cuando en realidad la interesada tiene ocho hermanos, dice el interesado que ella trabaja en la limpieza y labores del campo, sin embargo ella afirma estar parada; ambos desconocen los teléfonos del otro. La interesada declara que viven en

S-T. en una casa propiedad del padre del interesado y que conviven los dos con su padre, sin embargo el interesado declara que conviven en la calle G-V. con su madre. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Hellín.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (71ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña F. nacida en Marruecos y de nacionalidad española obtenida por residencia en el año 1987 y Don M. nacido en Marruecos, y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y extracto de la partida de nacimiento y certificado de residencia del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 13 de enero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio, por no existir consentimiento matrimonial.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra

los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española, de origen marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados habían solicitado autorización para matrimonio en 2010, que les fue denegado. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado. Aunque coinciden en señalar que se conocieron en el paseo marítimo de N. sin embargo la interesada declara que iba paseando con su hija, mientras que él dice que iba sola. El interesado declara que se van a casar en la carpa y que el expediente que tramitaron en 2010, también era para casarse en la carpa (es decir en la A-B) sin embargo ella declara que se casarán en el juzgado. Discrepan en el tiempo que llevan viviendo juntos ya que ella dice que desde enero de 2010 mientras que él dice que desde el mes de agosto de 2010. También difieren en lo que hicieron el día anterior a la entrevista ya que él dice que comieron juntos en su casa, mientras que ella dice que él comió fuera, desconoce el sitio donde comió, y luego volvió a casa por la tarde. El interesado declara que ella no ha viajado a más sitios que a N. sin embargo ella declara que fue de viaje a V. El interesado declara que irán de viaje a Marruecos y ella dice que no sabe si irán de viaje. No presentan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (72ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante legal, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Hondarribia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don E-E. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana y Doña M-C. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento con inscripción de divorcio del interesado y certificado de soltería del mismo y certificado de nacimiento y sentencia de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 3 de abril de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados éstos, mediante representante legal, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso interpuesto por ser la resolución recurrida conforme a Derecho. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar

el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado aporta un certificado de soltería en el que se especifica que el interesado no ha contraído matrimonio ni civil, ni por religión católica, ni por otro rito religioso, ni en su registro de nacimiento no aparece ninguna nota marginal de matrimonio, sin embargo en el certificado de nacimiento que aporta, sí aparece una nota de inscripción de divorcio del matrimonio católico celebrado por el interesado, del año 2006. El interesado reside en España sin la documentación exigida por la legislación de extranjería. Los presentó una hermana de la interesada que comparte piso con el interesado. Según los interesados se conocen desde el año 2008, sin embargo no es hasta que la interesada consigue la nacionalidad española cuando deciden solicitar la autorización para contraer matrimonio. La interesada desconoce los nombres de los hermanos del interesado que viven en Colombia. Por otro lado y aunque no es determinante la interesada es 12 años mayor que el interesado. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Hondarribia.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (75ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Roquetas de Mar.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don Á. nacido en España y de nacionalidad española, iniciaba expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poder con Doña S. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento, certificado administrativo de estado civil y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 28 de marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio civil.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario

acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio por poder en España entre un ciudadano español, y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Como ellos mismos declaran no se conocen personalmente, ya que el interesado no ha viajado nunca a Marruecos y tampoco tienen idioma común, ya que la interesada no habla español como ella misma declara en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y no tengan lengua común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en el tiempo que hace que se conocen ya que él dice que hace diez meses y ella dice que hace un año. El interesado desconoce el apellido de la interesada, fecha de nacimiento, nombres de sus padres y donde viven ya que dice que viven en Marruecos, cuando ella dice que viven en T. así mismo desconoce sus aficiones ya que dice que le gusta la bici y pasear al perro, cuando ella declara que le gusta la piscina, desconoce los nombres de sus hermanos. Por otro lado la interesada desconoce el lugar de nacimiento del interesado, nombre del padre y apellidos de la madre, donde viven, ella dice que los padres del interesado están separados, pero él no menciona este aspecto, así mismo desconoce sus estudios, donde trabaja ya que dice que trabaja de camarero y que antes trabajaba en la construcción, mientras que él declara que no trabaja pero que trabajó como maître en un hotel, tampoco sabe el nombre de una de sus hermanas y el nombre del hijo del interesado ya que dice que se llama "K. o algo así" cuando se llama H. Por otro lado y aunque no es determinante, el interesado es 14 años mayor que ella. No presentan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Roquetas de Mar.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (31ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante legal, contra auto del encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-Mª. nacido en España y de nacionalidad española y Doña F. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación:

certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, copia literal de nacimiento, acta de matrimonio, certificado administrativo de estado civil (viuda) y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe favorable. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 17 de febrero de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. De las audiencias reservadas se desprende que la interesada denunció al promotor con fecha 27 de marzo de 2010 por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, posteriormente recayó sentencia absolutoria tras acogerse la interesada a su derecho a no declarar, manifestando el interesado que ella se autolesionó y luego retiró la denuncia manifestando la interesada que sólo tuvo problemas con el interesado un día cuando salieron a tomar copas y se puso un poco agresivo pero sin llegar a pegarle, esto contrasta con lo declarado por ella en la comisaría de policía de C. el 27 de marzo de 2010 que han sido varias las ocasiones en que el interesado la ha pegado, insultado, amenazado y echado a la calle. Todo ello lleva a la conclusión de que existe un vicio de consentimiento que daría lugar a que el matrimonio proyectado tiene otro fin distinto al propio de esta institución.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (32ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí y Doña S. nacida en C. y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, copia literal de acta de nacimiento, certificado de fe de vida y certificado de soltería del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe favorable. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. En una primera entrevista los interesados declaran que decidieron contraer matrimonio hace cinco meses, sin embargo después él dice que hace seis meses y medio y ella que a los dos meses de estar juntos. La interesada declara que el piso donde vive es alquilado mientras que él dice que es propiedad del padre de ella, no coinciden los números de teléfono de la interesada. El interesado dice que le gusta ver la tele y ella dice que salir con los amigos, dice que le gusta todo tipo de comida y ella dice que le gusta la paella; por su parte ella dice que le gusta ver la tele y él dice que a ella le gusta pasear, ella dice que le gustan las patatas fritas y las lentejas y él dice que a ella le gusta todo, declara que tiene un tratamiento de alergia y él dice que ninguno de los dos sigue tratamiento médico. Tampoco coinciden en los regalos que se han hecho y el motivo. No presentan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Ceuta.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (33ª)

IV.2.1-Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M^a-T. nacida en Cabo Verde y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010 y Don O. nacido en Guinea y de nacionalidad guineana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El Juez encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 16 de abril de 2012 autoriza la celebración del matrimonio proyectado.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida. El Juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España entre una ciudadana española, de origen caboverdiano y un ciudadano guineano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Ambos desconocen las fechas de nacimiento del otro, la interesada desconoce el nombre de los hermanos de él y él desconoce la edad del hijo de ella, tampoco sabe la ayuda del paro que cobra, aficiones, etc. Por otro lado y aunque ellos declaran que viven juntos en la avenida I-C. Nº3_, sin embargo el informe de la policía local revela que según sus averiguaciones el interesado frecuenta dicho domicilio pero no saben si residen en dicho piso, y sobre la interesada nadie da razón sobre su residencia en el inmueble ni de su relación sentimental con el interesado. Por otro lado el interesado se encuentra en situación irregular en España y consta iniciado un procedimiento de expulsión por infracción de la Ley de Extranjería y una detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Santa Cruz De Tenerife.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (40ª)

IV.2.1- Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Torreveija.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en Sáhara y de nacionalidad marroquí y Doña Mª del C. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación:

certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de marzo de 2012 no autoriza la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso. El encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.e.c.).

V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se

desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, su estado civil ya que dice que es soltera cuando es divorciada, los nombres y apellidos de sus padres, etc. Ella desconoce los nombres de los hermanos del interesado. La interesada declara que no tienen vehículo sin embargo él dice que utilizan la furgoneta del hermano de ella, los teléfonos que dan no coinciden, discrepan en gustos, aficiones, comidas favoritas por ejemplo ella dice que le gusta leer y el arroz y él tiene como afición la gimnasia y le gusta toda la comida, sin embargo él dice que practica fútbol y que le gusta la paella y a ella le gusta la carne con ciruela y no tiene aficiones. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torre Vieja.

IV.2.2.- Expedición de certificado de capacidad matrimonial

Resolución de 3 de enero de 2014 (16ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J-J. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña B. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería y residencia de Sra. B. volante de empadronamiento del interesado y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. H.

2.- Ratificados los interesados, comparecen los testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 24 de Enero de 2012 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y solicita la confirmación de la resolución recurrida. La encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así no existe lengua común entre ambos contrayentes para el mantenimiento de una relación afectiva real y continuada. Por otra parte y como han dejado constancia en el expediente el Cónsul General de España en Rabat se trata claramente de un matrimonio concertado por familiares marroquíes residentes en la misma localidad que el interesado acordando el matrimonio entre un español y una joven marroquí que obtendrá con la boda fácilmente visado, residencia y la nacionalidad española entre otras ventajas y en la que no existe una relación afectiva y continuada en el tiempo que queda justificada porque se conocen presencialmente en julio den 2011 en un viaje y en ese mismo momento conciertan el matrimonio, cuando ni si quiera pueden comunicarse directamente pues carecen de un lenguaje común. Asimismo se aprecia una falta de conocimiento de datos personales y familiares como que la interesada manifiesta que conoce por foto e ignora donde vive a la madre del Sr. H. cuando este declara que ha

fallecido, se contradicen respectos de los familiares de la interesada que residen en M. ella dice que tiene dos tías una que vive con su futuro esposo y este habla solo de una. Declara la interesada que cuando e case se dedicara a la labores de ama de casa mientras que él dice que le ayudara hasta que encuentre trabajo. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 24 años.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y La Encargada del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gernika-Lumo.

Resolución de 3 de enero de 2014 (43ª)

IV.2.2.-Capacidad matrimonial.

Se acuerda a la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la existencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la encargada del Registro Civil de Moguer.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña N. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, acta de divorcio de los interesados y volante de empadronamiento Sr. A.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 20 de Diciembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y solicita la confirmación de la resolución recurrida. La encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español de origen marroquí y una ciudadana marroquí. Así en el examen del expediente y vistas las motivaciones en las que se fundamenta tanto el informe del fiscal como el auto de la encargada del registro civil para denegar la autorización del certificado de capacidad matrimonial, y una vez analizadas las alegaciones formuladas por los interesados. No tienen suficiente consistencia como para denegar la expedición del certificado de capacidad matrimonial, así si tenemos en cuenta los hechos y circunstancias el interesado quiere contraer matrimonio con la hermana de la que fue su esposa y que falleció y con la que los tres hijos que tuvo en su primer matrimonio conviven en Marruecos desde el fallecimiento de su hermana. Por otra parte los interesados contrajeron matrimonio islámico en Marruecos pero al no haber solicitado el conyugue de nacionalidad española con anterioridad a la celebración el certificado de capacidad matrimonial le fue denegada la inscripción, con lo que procedieron a tramitar divorcio de mutuo acuerdo ante las autoridades marroquíes para

iniciar el presente expediente conforme a la legislación española. Finalmente no existen en el expediente contradicciones o desconocimiento suficientes para poder denegar la concesión del certificado de capacidad matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y acordar la autorización del certificado de capacidad matrimonial a Don A. para la celebración del matrimonio con Doña N.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Moguer (Huelva).

Resolución de 3 de enero de 2014 (122ª)

IV.2.2-Certificado de capacidad matrimonial.

Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Arganda del Rey (Madrid).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Arganda del Rey el día 22 de julio de 2011, Don A. de nacionalidad española, nacido en T de la A. (M) el 25 de julio de 1969, solicitaba certificado de capacidad para contraer matrimonio en Marruecos con Doña L., de nacionalidad marroquí, nacida en A-O-O. (Marruecos) el 1 de enero de 1982. Acompañaba la siguiente documentación: propia, documento nacional de identidad, certificación literal de nacimiento, volante de empadronamiento en N-B. (M) desde el año 2003, fe de vida y estado, soltero, y declaración jurada de estado civil, soltero y de la interesada; acta de nacimiento, certificado de residencia en K.(Marruecos) y certificado de soltería.

2.- El mismo día el promotor ratificó la solicitud y fue oído en audiencia reservada en el Registro Civil de Arganda del Rey. La interesada, por su parte, se ratificó y fue oída reservadamente en el Registro Civil Consular de Rabat (Marruecos) el 5 de enero de 2012.

3.- El Ministerio Fiscal, informó que no procedía conceder lo solicitado y el 13 de marzo de 2012 la Encargada del Registro Civil, a la vista de la audiencia practicada, dictó auto acordando denegar el certificado de capacidad solicitado.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se le impide su derecho a contraer matrimonio y volviendo a solicitar la expedición del certificado de capacidad.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó que se proceda a la desestimación del recurso y a la confirmación de la resolución apelada y la Encargada informó en sentido desfavorable a la pretensión del recurrente y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª, 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio, 21-8ª de septiembre, 13-5ª, 22 y 29 de diciembre de 2007 y 7-5ª de julio de 2010.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, VII. b), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar -ni contribuir, como en este caso, a la autorización- un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En este proyectado matrimonio entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe razonablemente deducir que la finalidad perseguida no es la propia de la institución matrimonial, de principio uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia es la inexistencia de una lengua común que posibilite la comunicación y, en este caso, parece que no la hay, ya que la interesada dice en su entrevista que él habla un poquito de árabe y ella un poquito de español, aunque según el recurrente desde entonces ella lo está estudiando.

Difieren en el momento y forma en que se conocieron, así el promotor dice que fue hace 3 o 4 años, un poco después de la boda de su padre y la madre de ella, en la alambrada que separa la ciudad de C. de la frontera de Marruecos, sin embargo según la interesada la boda de sus respectivos padres se produjo hace 7 años y en realidad, según la documentación aportada, fue en el año 2008, la interesada declara que se conocieron hace 2 años, es decir año 2010 o finales del 2009 cuando él fue a su casa con su padre y la esposa de éste, la madre de ella. A partir de ese momento según el promotor ella empezó a interesarse por él a través de su madre, se vieron otra vez a través de la alambrada y una tercera a finales de junio o principios

de julio de 2011 en la casa en que ella vivía con sus tíos en M. Según la interesada fue él el que cuando se fue la primera vez que se conocieron empezó a llamarla y a contactar por internet, aunque según la respuesta a otra pregunta ninguno de los dos tiene dirección de correo electrónico, y el volvió por segunda y última vez en julio de 2011, momento en el que según la Sra. A. decidieron casarse aunque según el promotor lo habían decidido a primeros del año 2011. Respecto a su relación posterior al matrimonio, según la interesada vivirá en casa de él, cerca de M. sin embargo el promotor dice que no han decidido donde vivirán aunque por el trabajo de él, venta ambulante, piensa que seguirán viviendo cada uno en su país y se verán cuando puedan en España o en Marruecos. Respecto a datos personales y familiares, la interesada desconoce la fecha de nacimiento de su pareja, cuando falleció la madre del Sr. G. el domicilio de él, ni siquiera la localidad sólo menciona que está cerca de M. tampoco conoce los nombres de la mitad de los hermanos de él. Por su parte el promotor sabe que ella tiene 3 hermanos pero sólo conoce el nombre correcto del mayor. En relación con otros temas, ambos desconocen los estudios del otro, y el promotor tampoco sabe si la interesada ha trabajado antes pero sí que declara que en el tiempo del expediente no trabaja, se encarga de la casa de sus tíos con los que vive, sin embargo la interesada dice que su profesión es costurera, que de hecho fue a vivir a M. porque su madre quería que trabajara allí en una empresa textil y que ahora cose en casa e incluso menciona la cantidad que tiene como ingresos mensuales.

VI.- A la vista de cuanto antecede es razonable deducir que el matrimonio que se pretende contraer es nulo por simulación. Así lo estimó el Encargado del Registro Civil competente, y a la misma conclusión había llegado previamente el Encargado del Registro Civil Consular en el que se practicó la audiencia a la interesada, ambos, por su inmediación a los hechos, en mejor situación de apreciarlos y de formar su convicción sobre ellos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Arganda del Rey (Madrid).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (1ª)

IV.2.2-Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Mogán.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don V-C. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña H. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y certificado de empadronamiento del interesado y pasaporte, certificación literal de nacimiento, fe de soltería y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 2 de diciembre de 2012 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste interesa la estimación del recurso. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos

objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, la interesada necesitó de un traductor porque desconoce el español, a pesar de declarar el interesado que primero se comunicaban en inglés pero que ahora ella está aprendiendo español, lo cierto, según lo declarado por ella es que no sabe otro idioma además del propio, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que desde octubre de 2010, mientras que él declara que desde el momento en que se conocieron en 2009, manifestando que se comunican por teléfono y chat, sin embargo desconoce los correos electrónicos del otro y los teléfonos dados no coinciden. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado y desde cuando está divorciado; el interesado desconoce el apellido de la madre de ella, así como la profesión de su padre ya que dice que es administrativo en un hospital cuando es enfermero. Ella desconoce la edad de la hija del interesado y con quien vive pues dice que vive sola cuando vive con su madre, así mismo desconoce el domicilio del interesado, desconoce así mismo los ingresos mensuales que tiene, declara que él le envía 200 euros al mes, sin embargo él dice que le envía una cantidad variable, tampoco sabe que él sufrió hepatitis; desconocen gustos, aficiones, etc. Por otro lado, el interesado es 35 años mayor que la interesada.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de intermediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Mogán (Las Palmas).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (6ª)

IV.2.2-Certificado de capacidad matrimonial.

Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Andorra La Vella.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Consulado General de España en Andorra La Vella, Don M-Á. residente en ese país, de nacionalidad española y nacido en S del R- H. (C) el 3 de julio de 1948, solicitaba certificado de capacidad para contraer matrimonio en Marruecos con Doña S. de nacionalidad marroquí, nacida en A. (Marruecos) el 10 de abril de 1981.

Acompañaba la documentación pertinente en acreditación de sus circunstancias personales y de estado civil, según se recoge en la documentación del Consulado.

2.- Con fecha 10 de octubre de 2011 el promotor fue oído en audiencia reservada en el propio Consulado. La interesada, por su parte, se ratificó y fue oída reservadamente en el Registro Civil Consular de Larache (Marruecos) el 30 de noviembre de 2011.

3.- El Ministerio Fiscal, informó que no procedía conceder lo solicitado y el 18 de julio de 2011 la Encargada del Registro Civil, a la vista de la audiencia practicada, dictó auto acordando denegar el certificado de capacidad solicitado al entender que existían vicios de consentimiento.

4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado haciendo un relato de la relación mantenida con su pareja, que en algunos puntos difiere de lo manifestado en las audiencias, alega falta de motivación en la resolución, aportando numerosa documentación relacionada con sus viajes a Marruecos, cambios de moneda y los gastos allí realizados y facturas telefónicas y añadiendo que la única forma de mantener dicha relación en aquel país es mediante el matrimonio.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó que se proceda a la desestimación del recurso y a la confirmación de la resolución apelada vistas las discrepancias apreciadas, y la Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 3-3^a de marzo, 26-4^a de octubre, 3-5^a de noviembre de 2005; 26-5^a de mayo, 13-4^a y 26-4^a de junio, 18-2^a y 3^a y 25-2^a de diciembre de 2006; 26-4^a de enero, 9-5^a de febrero, 30-3^a de abril, 10-6^a, 29-4^a de mayo y 22-6^a de junio, 21-8^a de septiembre, 13-5^a, 22 y 29 de diciembre de 2007 y 7-5^a de julio de 2010.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5^a e Instrucción de 31 de enero de 2006, VII. b), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar -ni contribuir, como en este caso, a la autorización- un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o CC.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En este proyectado matrimonio entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los que cabe razonablemente deducir que la finalidad perseguida no es la propia de la institución matrimonial, de principio uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia es la inexistencia de una lengua común que posibilite la comunicación y, en este caso, parece que no la hay, aunque en la entrevista el promotor dice que ella está estudiando español y si se le habla despacio pueden entenderse, lo cierto es que la interesada realizó su entrevista en el Consulado mediante traductor y que la interesada manifiesta en su entrevista que no habla ningún idioma además del propio, no sabe si él habla algún otro idioma y pese a manifestar que se han comunicado por teléfono y correos electrónicos ella dice que no habla español y él no habla marroquí. Difieren en el momento en que se conocieron, así el promotor dice que fue en febrero de 2011 cuando fue de viaje a Marruecos con un amigo y éste conocía a la interesada y se la presentó, en cambio la Sra. B. dice que fue el 7 de marzo de 2011, que se lo presentó en una cafetería un conocido suyo, que a él le gustó y le dijo que quería casarse con ella porque “había ido a ese país para casarse con una marroquí”. Desde entonces según el promotor han mantenido una comunicación constante por teléfono y e-mails, sin embargo como ha quedado reflejado no hay idioma común y además la interesada manifiesta que no sabe el número de teléfono de su pareja. También declara el Sr. F. que en dos meses viajó 5 veces a Marruecos con estancias entre 10 y 15 días, por su parte la interesada coincide en esas 5 visitas pero dice que se producían cada mes o mes y medio y, en su recurso el promotor relata los viajes realizados que no fueron en 2 meses y el segundo de ellos dice que duró 3 semanas. Respecto a datos personales y familiares, el promotor equivoca el mes de nacimiento de su pareja, y ésta desconoce el lugar de nacimiento de él dice que fue en M. cuando es en una localidad de C. Ambos sólo mencionan los nombres de los padres del otro no los apellidos, además la interesada menciona que su pareja tiene tres hijos pero desconoce las edades de los mismos, tampoco sabe si tiene hermanos. La interesada menciona la profesión de su pareja pero no sabe en qué actividad trabaja ahora ni en qué empresa, ni los estudios que ha realizado.

En relación con otros datos, el promotor no menciona ninguna afición de su pareja, genéricamente dice que no tiene muchas aficiones, sin embargo ella dice que le gusta viajar, pero contesta que no sabe a la pregunta sobre si el promotor practica algún deporte o qué aficiones tiene. La interesada declara que tiene familiares en España, que en alguna ocasión solicitó visado y se le denegó, conoce cuales son los efectos legales que tendría su matrimonio con un ciudadano español respecto a residir en España y obtener la nacionalidad española, aunque responde que no es ese el fin de querer contraer matrimonio y, por último, aunque no es determinante la diferencia de edad entre el promotor y su pareja es de 33 años.

VI.- A la vista de cuanto antecede es razonable deducir que el matrimonio que se pretende contraer es nulo por simulación. Así lo estimó el Encargado del Registro Civil competente, y a la misma conclusión había llegado previamente el Encargado del Registro Civil Consular en el que se practicó la audiencia a la interesada, ambos, por su intermediación a los hechos, en mejor situación de apreciarlos y de formar su convicción sobre ellos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Andorra La Vella.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (86ª)

IV.2.2-Capacidad matrimonial.

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de Motilla del Palancar.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don G-J. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña H. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado copia literal de acta de nacimiento, fe de soltería y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 5 de marzo de 2012 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, la Juez Encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero

de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, la entrevista en audiencia reservada que se le practicó a la interesada en el Consulado de España en Casablanca, se hizo en idioma árabe porque ella no habla español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron por mediación de un hermano de ella residente en España el cual le mostró una foto de ella al promotor, ella declara que fue en enero de 2010 cuando le conoció personalmente al viajar el interesado con otro de sus hermanos a Marruecos concertando en ese momento el matrimonio dice que desde entonces no le ha vuelto a ver, sin embargo el interesado declara que se conocieron por vía telefónica en septiembre de 2010 y en octubre del mismo año comenzaron su relación sentimental. Desconocen las edades del otro ya que ella dice que él tiene 54 años cuando son 57 y él dice que ella tiene 30 cuando son 27. El interesado declara que ella trabaja en trabajos domésticos cuando ella dice no trabajar, ella dice que él está jubilado hace dos años, cuando él declara que no trabaja y tiene una ayuda de 425 euros mensuales. Ella sabe que él tiene dos hijos pero desconoce la edad del hijo mayor y el nombre y la edad de la hija menor. El interesado dice que ella tiene tres hermanos viviendo en España uno en H. otro en F. y otro en V. sin embargo ella dice que sus tres hermanos viven en M. Por otro lado el interesado es 30 años mayor que ella. No aportan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediatez, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Motilla del Palancar (Cuenca).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (103ª)

IV.2.2- Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de El Vendrell.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don M-Á. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña K. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, copia literal de acta de nacimiento, fe de soltería y certificado de residencia de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 2 de diciembre de 2011 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste emite un informe desfavorable. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II.- Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de Enero

de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).

III.- La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.).

IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, aunque la interesada declara que está estudiando español, el interesado dice que cuando hablan por internet ella habla un poco de español, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada desconoce lugar y fecha de nacimiento del interesado, su segundo apellido, nombres de los padres y donde residen, así mismo tampoco sabe dónde reside el interesado y con quién ya que primero dice que vive con sus padres y luego dice que vive solo, desconoce sus estudios, en que trabaja (dice que es comerciante cuando él señala que ayuda en una pescadería) salario, etc. La interesada desconoce el teléfono y la dirección de correo electrónico del interesado a pesar de que declara que se comunican por esta vía, desconoce así mismo que el interesado tiene una minusvalía cognitiva del 71%, declarando que no tiene ninguna enfermedad ni toma ningún tratamiento. El interesado por su parte contesta a todas las preguntas relacionadas con la interesada con un "no sé", así no sabe sus apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nombres de sus padres y residencia de estos, aunque declara que cuando ha ido a Marruecos se ha alojado en su casa, desconoce estudios, gustos, teléfono, correo electrónico, no puede precisar cuándo ni cómo se conocieron, etc. No aportan pruebas de su relación.

VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández".

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de El Vendrell.

IV.3.- Impedimento de ligamen

IV.3.2.- Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio

Resolución de 30 de Enero de 2014 (41ª)

IV.3.2- Matrimonio celebrado en el extranjero

No procede la denegación de la inscripción del matrimonio por no concurrir impedimento de ligamen, ya que por error se ha considerado como fecha de divorcio el 24 de octubre de 1991, fecha de la emisión del acta de divorcio..

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en 1989, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio civil celebrado el 23 de enero de 1989 en Marruecos con Doña Z. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio, certificados de nacimiento, volantes de empadronamiento, acta de divorcio Sr. M. y certificados de nacimiento de hijos comunes de los interesados.

2.- Remitida la documentación al Registro Civil Central, la encargada de este Registro Civil mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2008 deniega la inscripción del matrimonio ya que considero que en el momento de dicho matrimonio el interesado estaba casado con Doña H.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y 31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002; 20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de 2007 y 8-2ª de enero de 2009.

II.- Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. R. C.), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...”. Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el Registro Civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV.- En el caso actual, el Encargado del Registro Civil Central tomo por error como fecha de divorcio el 24 de Octubre de 1991, siendo que esta fecha es la de emisión del acta de divorcio. Como consta expresamente en la documentación el interesado se divorció el 01 de marzo de 1971, por lo que no existe impedimento alguno de ligamen cuando se celebró matrimonio en Marruecos entre Don M. español de origen marroquí y Doña Z. ciudadana marroquí, con fecha 23 de enero de 1989. Por tanto el interesado no estaba casado cuando contrajo matrimonio con la segunda esposa ya que este se había divorciado de la primera esposa con fecha 01 de marzo de 1971.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Marruecos el 23 de enero de 1989 entre Don M. y Doña Z.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

IV.4.- Matrimonio celebrado en el extranjero

IV.4.1.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero natularizado

IV.4.1.1.- Se deniega inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 3 de enero de 2014 (1ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don A., nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 29 de abril de 2011 con Doña B. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de

nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento con inscripción de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 5 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en los familiares que fueron a la boda, trabajos de sus respectivos hermanos, también difieren en cuando decidieron contraer matrimonio ya que ella dice que fue en septiembre de 2010 en el Hotel D., mientras que él dice que fue en diciembre de 2010 en P. Existen discordancias en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo colores favoritos, cosas que tienen en común los dos, países que ha visitado y donde han vivido, trabajos realizados por los interesados, tallas de zapatos, salario y horario de trabajo, enfermedades padecidas, etc. No presentan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 3 de enero de 2014 (2ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1.-Don J. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 23 diciembre de 2009 con Doña L.

nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1997. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y acta inextensa de nacimiento y declaración de soltería del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 24 de octubre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue

a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano dominicano y una ciudadana española, de origen dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían personalmente antes del matrimonio, éste se celebró en diciembre de 2009 y la interesada viajó a su país en noviembre de 2009 y permaneció hasta febrero de 2010, no constando que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en lo referente al tiempo de convivencia ya que ella dice que han convivido dos años y más en casa de su madre, mientras que él declara que lo han hecho durante tres meses. El interesado declara que deciden contraer matrimonio a propuesta de la interesada en noviembre de 2010 en V., sin embargo ella declara que deciden contraer matrimonio en 2009 y estaban en S. El interesado no recuerda la fecha del matrimonio afirmando que fue en diciembre de 2010 manifestando que no saben quiénes fueron los padrinos de la boda y además que no fue ningún familiar, sin embargo ella dice que se casaron en diciembre de 2009 y que a la boda fue su padre. El interesado desconoce la fecha exacta de nacimiento de la interesada declarando que nació en octubre cuando fue en septiembre, así mismo desconoce el tiempo que estuvo casada la interesada, cuanto tiempo hace que se divorció, nombres y edades de sus hijos, sólo conoce a tres de los siete hijos de la interesada, desconoce si tiene o no nietos, declara que tiene cuatro hermanos cuando son cinco, desconoce estudios, donde trabaja ya que declara que dice que estuvo de empleada de hogar y limpiadora de oficinas, mientras que ella dice que trabaja cuidando ancianos y en hostelería. El interesado muestra su deseo de casarse para emigrar legalmente a España. Por otro lado, la interesada es 24 años mayor que el interesado. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Central en Santo Domingo.

Resolución de 3 de enero de 2014 (6ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña E., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 28 de enero de 2011 con Don R. nacido en Chile y de nacionalidad española, la cual recuperó en el año 1994. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 5 de octubre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían físicamente antes de la boda, el interesado llegó a Colombia en diciembre de 2010 y contrajo matrimonio en enero de 2011, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues él dice que en febrero de 2010, mientras que ella dice que en febrero de 2009, el interesado desconoce o no recuerda la fecha de la boda ya que dice que fue el 28 de enero de 2010 cuando fue en 2011. Discrepan en los familiares que fueron a la boda, en los que más les irrita, como atenderán los gastos familiares, ya que ella dice que será él el que corra con ellos, mientras que él declara que en un principio será él hasta que ella encuentre trabajo; difieren en lugares donde ha vivido el interesados, horarios laborales, etc.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 10 de Enero de 2014 (7ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don K-A. nacido en T. (República Dominicana) el día 12 de marzo de 1984 y de nacionalidad española, adquirida por opción con fecha 7 de noviembre de 2001, presentó en el Registro Civil de Alcobendas impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en La República Dominicana el 18 de abril de 2008, con Doña M. nacida en S-D. (República Dominicana) el día 2 de agosto de 1981 y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja de datos y acta inextensa de matrimonio local, y del promotor; documento nacional de identidad, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y certificado de empadronamiento en San A de G. desde el año 1997, no consta documento alguno de la interesada.

2.-Ratificado el promotor, el Registro Civil remitió el expediente al Registro Civil Central para que si lo estimaba pertinente procediera a la inscripción. Con fecha 17 de mayo de 2010 se solicita que se lleve a cabo la audiencia reservada con el promotor en el Registro Civil de su domicilio, lo que sucedió el 23 de septiembre siguiente, y con la interesada en junio del año 2011 en el Consulado de España en Santo Domingo. Con fecha 21 de octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio por entender que no hay verdadero consentimiento matrimonial.

3.-Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informa en el sentido de que procede su desestimación. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de

mayo, 1-4^a de junio, 10-4^a, 5^a y 6^a y 11-1^a de septiembre; 30-6^a de noviembre y 27-1^a y 2^a de diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español de origen dominicano, que obtuvo la nacionalidad con fecha 7 de noviembre de 2001 y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocieron el 27 de febrero de 2008 cuando el promotor, amigo de un hermano de la interesada, fue a entregarle a ésta un envío de su familia que reside en M. en la misma localidad del promotor, según ambos en ese momento iniciaron su relación y un mes y medio después se casaron, para 9 días después volver el Sr. R. a España y no volver a su país de origen durante 3 años. En ese tiempo según manifiestan convivieron 9 días después del matrimonio, según el promotor en casa de ella, según esta en su casa y en casa de una tía de su pareja. Desde entonces han mantenido relación telefónica 4 o 5 veces por semana según la interesada aunque no sabe el número de teléfono de su pareja. Respecto a datos personales y familiares, ella no conoce ni sabe las edades de los hermanos de su pareja, no sabe cuándo éste adquirió la nacionalidad española, no sabe la dirección del domicilio de su pareja en España pese a que en la misma localidad vive prácticamente toda la familia de la interesada, su padre y sus hermanos, las únicas que permanecen en La República Dominicana son ella y su madre, declarando que en el año 2006 o 2007 solicitó visado para viajar a España y que le fue denegado, circunstancia

que desconoce el promotor según su declaración. La interesada por su parte desconoce los ingresos de él. Debiendo significarse, además, que no consta documentación alguna de la interesada, ni de identidad, salvo la cédula de identidad aportada en el momento de la entrevista, ni de su nacimiento ni de su estado civil.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (7ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña I., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 23 de febrero de 2011 con Don I., nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 22 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían físicamente antes de la boda, el interesado llegó a Colombia el 14 de febrero y contrajo

matrimonio el día 23, al día siguiente regresó a España y no consta que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo donde pasaron las Navidades, trabajos anteriores al que tienen, como toman el café, regalos que les hicieron en la boda, etc., desconocen el salario del otro, residencia de sus padres. Declara el interesado que los gastos familiares los harán como un matrimonio normal, sin embargo ella declara que él se hará cargo de sus gastos y de los de su madre. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 3 de enero de 2014 (8ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se retrotraen las actuaciones para que se practique audiencia reservada a la promotora.

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de Caracas.

HECHOS

1.- Doña O. nacida en Colombia y de nacionalidad venezolana, presentó hoja declaratoria de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Venezuela el 6 de noviembre de 2009 con Don J., nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción de la primera esposa del interesado y acta de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con el interesado. El encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2011 deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificada la resolución, los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, el Juez Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC.); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II.- En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R. R. C.).

III.- Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º C. c.).

IV.- Habida cuenta de que en este expediente de inscripción de un matrimonio civil celebrado en Venezuela entre una ciudadana venezolana y un ciudadano español, no se encontró la audiencia reservada referida a la promotora, ésta fue reclamada por la Dirección General de los Registros y del Notariado mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2012; mediante oficio de fecha 3 de septiembre de 2012 ese Consulado contestó que la entrevista de la interesada se practicó de forma oral por lo que no se puede remitir el acta.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que sea oída en audiencia reservada la interesada, que dicha audiencia sea remitida por escrito y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Caracas

Resolución de 3 de enero de 2014 (11ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1.- Doña M. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado español en La Habana impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 9 de junio de 2011 con Don P. nacido en Cuba y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido previo en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Civil Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren

los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre un ciudadano español, de origen cubano y una ciudadana cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado contrajo matrimonio con una ciudadana española a la que conoció a través de una prima del interesado y físicamente el mismo día de la boda, como él manifiesta ella ya traía los papeles del matrimonio, este matrimonio se celebró el 21 de octubre de 1997 (el interesado declara que conoció a la ciudadana española en el año 1998, cosa imposible si se casaron en 1997), se divorciaron en el año 2001, el interesado, según sus propias declaraciones se quedó en España porque encontró trabajo, y obtuvo la nacionalidad por residencia en el año 2010 y el 9 de junio de 2011 contrajo matrimonio con la promotora. Discrepan en cuando se conocieron ya que él dice que se conocen desde el año 1990, mientras que ella dice que se conocen desde 1993 ó 1994. También difieren en cuando iniciaron la relación sentimental pues él dice que hace tres años y ella dice que hace cuatro, lo cierto es que según sus declaraciones, los volvió a poner en contacto un primo de la interesada, el interesado no volvió a Cuba hasta el año 2011 para contraer matrimonio, el contacto de los interesados se hizo por teléfono y correo. Desconocen aspectos de su vida por ejemplo, la interesada desconoce la empresa para la que trabaja el interesado, desconocen gustos y aficiones mutuas, el interesado desconoce el nombre del tercer hermano de la interesada así como el nombre de la mejor amiga de ella, tampoco puede precisar el lado de la cama donde duerme, etc. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 13 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 3 de enero de 2014 (12ª)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don T., nacido en Guinea Conakry presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Guinea Conakry el 24 de diciembre de 2009 entre Don A., nacido en Guinea Conakry y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2007 y Doña C., nacida en Guinea Conakry y de nacionalidad guineana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: extracto de partida de matrimonio local; certificado de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Guinea Conakry entre un ciudadano español, de origen guineano y una ciudadana guineana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado no aporta DNI porque dice que se lo ha perdido en Suiza, declara que no ha denunciado su pérdida, su residencia habitual la tiene en Suiza, declarando que no piensa vivir en España; manifiesta que no ha renunciado al derecho de poligamia, también dice que solicitó la inscripción de su matrimonio en Guinea pero que como el trámite es largo decidió solicitarlo en el Registro Central. Por su parte la interesada declara que no puede acreditar su identidad porque le han robado el pasaporte en Suiza, no habla español, no ha estado nunca en España, declara que el interesado está con ella pero que tiene derecho a la poligamia con dos mujeres, dice que lleva viviendo en España dos días, en casa de unos amigos en M. desconociendo la dirección. Existen discordancias en lo referente a la petición de matrimonio ya que mientras que ella dice que lo decidieron en Guinea en casa de su familia, pidiéndoselo al padre de ella, la interesada dice que lo decidieron en el año 2006 cuando él le entregó un anillo en la playa de T.; también difieren en si han convivido o no ya que ella dice que han convivido dos años antes de casarse en casa de su madre, el interesado dice que no han convivido. La interesada desconoce el teléfono del interesado, el trabajo y la empresa para la que ha trabajado en España, tampoco sabe el trabajo que desempeña en Suiza ni la empresa donde trabaja. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales, etc. Por otro lado los interesados presentan un primer extracto de partida de matrimonio expedido el 16 de febrero de 2009, en el que figura que la boda se celebró el 24 de diciembre de 2009 y posteriormente un extracto de partida de matrimonio donde figura que la boda se celebró el 14 de febrero de 2009. Es de destacar que según información del Consulado de España en Guinea Conakry, la práctica de la poligamia está prohibida y permanece proscrita en todo el territorio con excepción de los matrimonios celebrados con anterioridad a enero de 1968.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 3 de enero de 2014 (14^a)

IV.4.1.1.- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Nueva Delhi (India).

HECHOS

1.- Don S. de nacionalidad española y Doña A. de nacionalidad nepalí presentan en el Registro Consular de España en Nueva Delhi (India) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Nepal 29 de enero de 2012. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sr. S., certificado de matrimonio y defunción del esposo de la Sra. A.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 20 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Nueva Delhi (India) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Nueva Delhi (India), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción.

Así existe un desconocimiento de datos personales y familiares básicos como que la interesada ignora la dirección y el teléfono de su esposo en España, los nombres y edades de los hermanos de su pareja y en que trabajan. Asimismo el interesado ignora la fecha de nacimiento de la Sra. A. y las edades de los padres. Por otra parte en relación a las visitas realizadas a Nepal el interesado dice que viajó hace tres años pero a ella no la conocía y ella

reconoce que no ha habido visitas anteriores al día de la celebración del matrimonio, existe un desacuerdo en relación al día de llegada para la boda él dice el día 17 y ella el día 16 de enero así como respecto de los familiares que acudieron a la celebración, ignoran los gustos, aficiones y costumbres de la pareja ya que reconocen no ha existido ningún conocimiento previo de estos al no existir relación afectiva previa a la boda.

Finalmente declaran los interesados que el matrimonio fue arreglado a través de la abuela del Sr. S. que inician su relación en el mismo momento de la celebración del matrimonio, que nunca han vivido juntos, ni se conocían con anterioridad.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Nueva Delhi (India), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Nueva Delhi.

Resolución de 3 de enero de 2014 (15ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña R-E. de nacionalidad colombiana y Don T-P. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 04 de Diciembre de 2007. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y fe de vida y estado Sr. P.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 04 de noviembre de 2011 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen contradicciones e imprecisiones como que la Sra. P. declara que conocía físicamente a su pareja antes de la celebración del matrimonio y él dice que no, manifiesta el interesado que se conocen en junio de 2007 y que desde ese momento inician su relación mientras que la interesada declara que inician la relación en julio de 2007 contrayendo matrimonio en diciembre de 2007. El Sr. P. contrajo con anterioridad matrimonio en Cuba el 28 de diciembre de 2004 divorciándose según sentencia en mayo de 2007. Por otra parte el interesado ignora la actividad profesional de su pareja así como si es una persona puntual, manifiesta que comienza a trabajar según lo que tenga que hacer mientras que ella dice a las 6 de la mañana.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 22 años y como consta en el expediente ya le fue desestimado recurso sobre el mismo matrimonio por Resolución de 04 de mayo de 2010 de la Directora General de los Registros y del Notariado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (18ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña L. de nacionalidad colombiana y Don C-A. nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) , expediente para la

inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Colombia el 20 de Junio de 2011. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado del interesado, certificado de matrimonio local y divorcio del primer matrimonio de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 26 de diciembre de 2011 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias

oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen determinadas contradicciones e imprecisiones como que el Sr. O. dice que contrajeron matrimonio el 18 de septiembre de 2011 pero ella dice 18 de diciembre de 1989, declara la interesada que no fueron a ningún lugar de viaje de novios mientras que él dice que fueron a una isla llamada La B. Por otra parte la interesada ignora el domicilio de su pareja en España y ninguno de los dos declara las edades de sus tres hijos. No coinciden respecto de los gustos, costumbres y aficiones así manifiesta el interesado que les gusta a ambos salir a comprar ropa y ella dice a él relojes y a ella lociones, dice él que les gusta las plantas a los dos y ella dice que a los dos muy poco, declara el interesado que les gusta a los dos el café con leche y ella dice que negro a los dos, manifiesta él que ambos escuchan la radio y ella dice que no, no coinciden respecto de los invitados a la boda y no recuerda el interesado los regalos, y ella dice que ninguno

Finalmente debemos tener en consideración que declaran conocerse hace 14 años que se casaron en el año 1989, y que se divorciaron en el año 2004, volviéndose a casar el 20 de junio de 2011. Declara el Sr. O. que no volvió a Colombia desde el 2005 y que ha regresado en el 2011 y que se casaron por poderes, manifestando la interesada que ella quiere irse a España con él y que decidieron casarse porque quieren venir a España junto con su hija menor

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (20ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

1.- Doña E. de nacionalidad española y Don F-G. de nacionalidad dominicana presentan en el Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 28 de Octubre de 2009. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sra. D. y sentencia de divorcio Sr. R.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de enero de 2012 el Encargado del Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana) de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así los interesados declaran que se conocen en el año 2008 a través de Internet aunque el interesado dice el mes de octubre y ella julio, manifiestan que no han convivido antes del matrimonio y que la Sra. D. ha viajado una sola vez a República Dominicana el 16 de octubre de 2009 para contraer matrimonio el 28 de octubre de 2009, en dicho viaje se conocen personalmente y regresa a los cinco días de haber contraído matrimonio a España. Declaran los interesados que por razones económicas no ha podido volver a viajar pero manifiesta la Sra. D. que le envía 100 euros mensualmente a su pareja y se observa en la documentación que existen envíos adicionales de hasta 300 euros. Por otra parte existe una serie de desconocimiento y contradicciones como que el interesado declara que su pareja trabaja en una empresa de limpieza pero desconoce el nombre de la empresa y dice que trabaja mañana y tarde aunque no sabe el horario exacto mientras que ella declara que trabaja por las mañanas y dos tardes, asimismo no coinciden en los ingresos que declara obtiene el Sr R. él dice unos 8.600 pesos y ella 9.900 pesos, tampoco coinciden en los estudios realizados él dice su esposa bachiller y él ha terminado también bachiller mientras que ella declara secundaria y primero de formación profesional administrativa y su esposo primaria.

Finalmente el interesado facilitó la dirección de la interesada en España erróneamente, teniendo que realizarse nuevas gestiones para poder realizar la audiencia reservada a la interesada

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), quien por su intermediación a los

hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 3 de enero de 2014 (21ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña L-D. de nacionalidad colombiana y Don J-J. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Colombia el 28 de Abril de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de divorcio del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de

1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara el interesado que se conocen desde el año 2003 y que iniciaron su relación sentimental en el año 2006, que no recuerda el mes y que ha viajado tres veces a Colombia, en el año 2006 en enero o febrero, en el 2008 en marzo y en el 2010 en diciembre y en cada viaje ha permanecido mes y medio. Según la documentación del Gobierno Colombiano viajó el 05 de marzo de 2006 hasta el 18 de abril de 2006, y del 19 de enero de 2009 hasta el 06 de marzo de 2009. Por otra parte como consta en la documentación el Sr. S. contrajo matrimonio con otra persona el 17 de abril de 2006 que coincidiría con el primer

viaje según la documentación del gobierno Colombiano, que dicho matrimonio se disolvería según consta en la documentación en diciembre de 2008, que según la Sra. M. conoció al interesado en agosto de 2003 iniciando la relación en diciembre de 2003, que ha viajado tres veces para visitarla pero no recuerda las fechas, que decidieron contraer matrimonio en enero de 2010 por Internet, mientras que el interesado declara marzo de 2010 pero no recuerda donde lo decidieron. En lo que se refiere a los gustos, costumbres y aficiones la interesada declara que ambos son trasnochadores mientras que él dice que es madrugador cuando se debe, dice la interesada que él tiene fobia a las alturas y él dice que no tiene fobias, declara el interesado que a ambos les gustan "los Simpson" pero ella dice que él no tiene programa favorito, manifiesta el interesado que su actividad laboral es transportista y ella recepcionista de Hotel mientras que ella dice que se dedica al mercadeo y él conductor distribuidor

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 18 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 3 de enero de 2014 (24ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña A-T. nacionalidad colombiana y Don M. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 11 de diciembre de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen determinadas contradicciones como que el interesado declara que iniciaron la relación sentimental en septiembre de 2010 mientras que ella dice diciembre de 2009, no coinciden en los lugares que han vivido o trabajado manifiesta el interesado que su pareja ha vivido y trabajado en P. y A. mientras que ella declara solo P. no coinciden en si usan o no apodos ella dice que si "Papi y mami" mientras que él dice que no. Declara el interesado que contrajeron matrimonio el día 16 de diciembre de 2010 cuando fue el 11 de diciembre de 2010, ignora la marca de perfume que utiliza su esposa. La Sra. V. en relación a diferentes preguntas de la audiencia reservada desconoce las respuestas y no contesta, como si su pareja toca algún instrumento musical, los lugares en los que ha vivido o trabajado, si fuma o no.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (25ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1.- Doña D. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 8 enero de 2011 con Don J. nacido en Francia y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, acta de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 3 de febrero de 2012 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren

los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana dominicana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían físicamente antes de la boda ya que el interesado viajó una sola vez a la isla el 29 de diciembre de 2010 y contrajo matrimonio el 8 de enero de 2011, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron por internet a través de una cuñada de la interesada que vive en España, según el interesado pareja de un amigo suyo. Discrepan en el tiempo que hace que se conocen ya que mientras que él dice que desde hace tres años (2008), la interesada declara que desde hace dos años y algo, mes de julio de 2009. Existen discordancias en lo referente al viaje de novios ya que mientras que él declara que no hubo viaje de novios, ella dice que fueron a las T. al otro día de la boda. El interesado desconoce el nombre de la madre de ella al decir que se llama “B” cuando es B. así mismo desconoce sus estudios y el nombre del banco donde ella trabaja (el banco se llama B-S), el tiempo que lleva allí trabajando (lleva cuatro años); por otro lado la interesada declara que él nació en M. cuando fue en Francia, dice que no tiene estudios y que no habla idiomas, cuando él declara que estudió hasta 6º de EGB, y que habla inglés, manifiesta que él tuvo una pareja llamada M. (es G), que tiene cuatro hermanos de los que desconoce los nombres (son tres hermanos), dice que lleva tres años en la misma empresa (son ocho años), declara que vive en una casa alquilada por la que paga 350 euros (vive con sus padres en M. en una casa propiedad de su madre). Difieren en lo que se refieren a los envíos de dinero, ya que él declara que le envía entre 300 y 400 euros mensuales, mientras que ella dice que le envía 140 euros. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo el interesado dice que le gusta andar, el beisbol, balonmano, golf, futbol, las carreras de coches y motos, y a ella le gusta estar en casa y ayudar a su madre, y su comida favorita son los gandules, sin embargo ella declara que le gusta caminar por las mañanas, chatear y su comida favorita es el locrio, y al interesado le gusta chatear, baloncesto, ir de compras y hablar por teléfono con ella. También difieren en lo referente a enfermedades padecidas ya que él declara que tuvo leucemia, sin embargo ella dice que él no ha tenido enfermedades; en lo referente a las creencias religiosas ya que él dice que ambos son católicos y no van a misa y ella dice que ella es evangélica y que a veces va a la iglesia. El interesado es 20 años mayor que la interesada. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular,

quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 3 de enero de 2014 (29ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña L-M. de nacionalidad colombiana y Don F-X. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en (República de Colombia el 21 de Enero de 2011. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 18 de enero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de

1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así el interesado declara que inician su relación sentimental en diciembre del 2005 mientras que la Sra. J. dice diciembre de 2004, no coinciden en relación a los viajes que ha realizado el interesado para visitar a su pareja, ella dice que viaja cada seis meses pero no da los datos de las fechas mientras que el declara que desde diciembre de 2005 nueve veces, no coinciden la localidad de nacimiento del Sr. C. él dice P-A. Brasil y ella S-P. Brasil.

Por otra parte y en relación a los gustos, costumbres y aficiones declara el interesado que sus aficiones son hacer deporte, bicicleta, patines, tenis, atletismo y tocar el piano mientras que ella dice que él tiene como aficiones las plantas y animales. Finalmente manifiesta el Sr. C. que ambos han tenido cuatro parejas con anterioridad mientras que ella declara que ella dos y él una.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos.

Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (30ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña M-Mª. de nacionalidad española y Don E-G. de nacionalidad colombiana presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Colombia el 04 de Agosto de 2011. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio con anotación de divorcio de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de enero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen determinados desconocimiento e imprecisiones de datos básicos personales y familiares como que la interesada no responde a las preguntas relacionadas con su pareja como que familiares fueron a la boda o si ha tenido alguna enfermedad, si sabe conducir, si es alérgico alguna comida o medicamento, a la pregunta de cuándo decidieron casarse ella declara que en casa después de tener el segundo hijo mientras que él dice que siempre lo habían tenido en cuenta pero no habían fijado la fecha, ignora el interesado la localidad de residencia de sus suegros. Finalmente cuando se le pregunto al interesado porque solicitan la inscripción de matrimonio declara que por los papeles y que la esposa quieren que estén todos en España.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos.

Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (33ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña D. de nacionalidad española y Don J-D. nacionalidad colombiana presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Colombia el 05 de Julio de 2007. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 21 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen una serie de desconocimiento e imprecisiones de datos básicos personales y familiares como que el Sr. V. ignora la localidad de nacimiento de su pareja, declara el interesado que inician la relación sentimental en enero de 2002 mientras que ella manifiesta diciembre de 2001, declara el Sr. V. que no acudieron familiares suyos a la boda mientras que ella dice que sí, no coinciden en las fechas en que la interesada vino a visitarle a Colombia, ni el tiempo que estuvo su pareja residiendo en España ella dice desde el 2001 al 2006 y él declara 2001 hasta 2003,. Manifiesta el interesado que no se ayudan económicamente y ella dice que si dos veces al mes más o menos 100 euros. Respecto a la canción favorita de los dos él declara "Perdón" y ella dice que ninguna, en relación a los actores favoritos el manifiesta "L" y "A" y ella dice que no tienen ninguno y de su pareja no lo sabe, declara el Sr. V. que tienen apodos "Nene" y "Negra" y ella dice que no pero que a él sus amigos le llaman "Gordo ". Finalmente los interesados contrajeron matrimonio el 05 de julio de 2007 y la interesada visito Colombia la última vez en mayo de 2008.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 3 de enero de 2014 (35ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don E. de nacionalidad española y Doña M-I. de nacionalidad dominicana presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 26 de Diciembre de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio. Con fecha 21 de Noviembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la

calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara la interesada que se conocieron por vía telefónica a través de una amiga que está casada con él hermano del Sr H. mientras que el interesado solo dice que es una amiga y no su cuñada, manifiesta que el interesado viajó en agosto de 2009 para conocerla y estuvo 19 días y que volvió en diciembre de 2009 para contraer matrimonio permaneciendo en el país 18 días, que ha realizado un tercer y cuarto viaje en julio de 2010 y julio de 2011, mientras él dice que el tercer viaje fue agosto de 2010, que mensualmente según la interesada le remite entre 400 a 500 euros mensuales aunque ella trabaja desde hace dos años como comerciante con ingresos mensuales de aproximadamente 20.0000 pesos. Según la Sra. H. se comunican por teléfono y computadora hasta dos veces al día.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 17 años y la interesada solicitó el Visado de entrada y le ha sido denegado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (36ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

- 1.- Don M. de nacionalidad dominicana y Doña M. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 09 de Agosto de 2007. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento.
- 2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio. Con fecha 01 de Junio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.
- 3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
- 4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la

calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así el interesado ignora la fecha en la que su pareja adquirió la nacionalidad española y declara que se conocen en el año 2007 y que contraen matrimonio en agosto del mismo año, comenzando su relación sentimental a los quince días de conocerse. Según la interesada ha viajado dos veces a República Dominicana y mantiene la relación afectiva por teléfono unas dos veces por semana pero no es capaz de facilitar el número. Declara el Sr. C. que ha solicitado el visado de entrada en el Consulado de Suiza y le fue denegado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (41ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña Y. de nacionalidad colombiana y Don J. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 16 de Mayo de 2011. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, sentencia de divorcio y fe de vida y estado Sr. Q.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 31 de enero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del

matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declaran conocerse en marzo de 2010 por Internet a través de una página de contactos, que su relación sentimental se inicia en el verano de 2010 y que el interesado ha viajado una vez solo a Colombia para contraer matrimonio el 16 de mayo de 2011 permaneciendo 15 días. Por otra parte existe una serie de desconocimiento y contradicciones como que el interesado declara que no escuchan la radio mientras que ella dice que él sí, que no tiene cicatrices ni tatuajes mientras que ella dice que él tiene una cicatriz en la barbilla, que los fines de semana él madruga y ella se levanta tarde mientras que ella dice que los dos tarde, que la profesión de su pareja es comerciante y ella dice que no tiene profesión. Asimismo la interesada ignora si su pareja tiene o no miedo a viajar, la bebida preferida, él dice cerveza y ella coca cola, la comida que no le gusta.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 10 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (42ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don R. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 25 de marzo de 2011 con Doña M. nacida en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 18 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano colombiano y una ciudadana española y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados se conocieron en enero de 2011 y en marzo del mismo año contrajeron matrimonio. Discrepan en cómo se conocieron ya que mientras que ella dice que se conocieron en M. por medio de la hermana del interesado, el interesado dice que fue en una visita turística a la catedral de M. también difieren en cuando decidieron contraer matrimonio ya que él dice que fue cuando se separaron y ella regresó a España, hablando por teléfono, mientras que ella dice que lo decidieron en febrero de 2011 cuando estaban separados. Existen discordancias en lo referente a gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo idiomas que hablan además del propio, tiempo que han convivido, lugar donde han ido de luna de miel, ayuda económica que percibe la interesada, último libro que han leído, programas de televisión favoritos, lugares donde han ido juntos, etc. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos.

Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este

camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (46ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña M^a-I. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 29 de abril de 2011 con Don P. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de

31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían físicamente antes de la boda, el interesado viajó por primera vez a Colombia el 12 de abril de 2011 y contrajo matrimonio el 29 de abril, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que en enero de 2008 y él dice que en diciembre de 2008, también difieren en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que en enero de 2008 y él dice que en enero de 2009. El interesado desconoce el lugar donde nació la interesada. Existen discordancias en lo referente a con quien han convivido antes de casarse ya que él dice que en casa de sus padres con ella y ella con los padres aunque están separados, mientras que ella dice que ella ha convivido con su hijo, del interesado no dice nada; también difieren en lo referente a las mascotas, ya que él

declara que tiene una pata llamada S. y que ella no tiene mascotas, sin embargo ella declara que él tiene una gata no indicando nombres.

El interesado declara que ambos entran a trabajar a las ocho, sin embargo ella dice que ella entra a trabajar a las nueve, del interesado no indica nada. El interesado declara que ella es asistenta de casas sin embargo ella dice que es ama de casa; la interesada desconoce que el interesado es alérgico a la penicilina, también discrepan en lo primero que hacen al levantarse, actividades de los padres de cada uno, etc. No presentan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (47ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña M^a-A. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 30 de diciembre de 2010 con Don J. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento con inscripción de matrimonio y divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían personalmente antes de la boda ya que el interesado viajó a Colombia una sola vez el 27 de noviembre de 2010 y un mes después contrajo matrimonio con la promotora, no constando que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. A la pregunta de cómo se conocieron ella dice que en B. a su llegada, y él responde que primero telefónicamente, luego por fotografía y después físicamente, cuando llegó a Colombia para casarse. El interesado estuvo casado con una ciudadana boliviana desde el 4 de febrero de 2005 hasta el 30 de enero de 2009 fecha en la que se divorciaron. Discrepan en cuando se conocieron ya que mientras que él dice que hace tres años, un año casados y otros dos de contacto, la interesada dice que se conocieron en noviembre de 2010.

El interesado desconoce el lugar donde nació la interesada limitándose a decir que nació en Colombia y vive en B. tampoco sabe los nombres de los padres de la interesada. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo colonia que utilizan, parejas que han tenido ambos, estudios realizados, países visitados, operaciones quirúrgicas sufridas, si son o no supersticiosos, si roncan o no. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (49ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Don J-L. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 14 de enero de 2012 con Doña T-E. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento con inscripción de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 29 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe

comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano español el 7 de diciembre de 2010, solicitando su inscripción en el Registro Civil español y al que como en el caso que nos ocupa, conoció en una página de internet, en este caso el ciudadano español, mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2011, solicita la no inscripción del matrimonio ya que se considera manipulado y engañado, obtuvieron el divorcio en noviembre de 2011. En este caso los interesados también se conocen por internet, según ellos por medio de amigos comunes y a tenor de lo declarado por los interesados, no se conocían físicamente antes del matrimonio ya que el interesado llegó a Colombia el 7 de enero de 2012 y contrajo matrimonio el 14 de enero de 2012. A la pregunta de cómo habían preparado esta prueba, el interesado contesta “conociéndonos por internet” y ella dice “juntos en casa por el pc”. Discrepan en gustos, aficiones, como por ejemplo emisora de radio que escuchan, si utilizan gafas, si madrugan o no los fines de semana, países que les gustaría visitar, etc. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 3 de enero de 2014 (50ª)

IV.4.1.1.-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña L-B. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 19 de enero de 2011 con Don J-D. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 18 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

5.- Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2012, el interesado desiste del recurso interpuesto. Mediante oficio de fecha 16 de julio 2012, la Dirección General de los Registros y del Notariado, informa al interesado que el desistimiento no puede ser admitido por evidentes razones del principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral, según los artículos 15 y 26 de la Ley del Registro Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª

y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español, de origen colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo y cuándo se conocieron ya que él dice que fue en enero de 2009 cuando se la presentaron en un parque, mientras que ella dice que se conocieron en enero de 2010 en una discoteca. La interesada desconoce o se equivoca en la fecha del matrimonio ya que dice que fue el 9 de enero cuando fue el 19 de enero. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo lo que desayunan, bebidas favoritas, comidas que no les gusten, si son o no supersticiosos, emisora de radio que escuchan, si tienen cicatrices o tatuajes, enfermedades del hijo de la interesada, con quien ha vivido antes de contraer matrimonio, si les gusta o no salir de compras, países que han visitado, etc. No aportan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente

más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (100ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don D-A. nacido en Bogotá (Colombia) el día 10 de enero de 1985 y de nacionalidad española, obtenida por opción con fecha 21 de junio de 1999, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso, celebrado en Colombia el 20 de agosto de 2011 e inscrito en el Registro Civil local con fecha 23 del mismo mes, con Doña Y-C. nacida en Bogotá el día 25 de marzo de 1984 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local y del promotor, pasaporte español, declaración notarial de estado civil, soltero, realizada con posterioridad al matrimonio y certificación de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 4 registros, el primero de salida del país con fecha 5 de marzo de 2009 y el último la entrada el 6 de agosto de 2011, y de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades españolas colombianas sin registros.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con la interesada con fecha 13 de septiembre de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y el día 10 de noviembre siguiente al promotor en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 10 de agosto de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, manteniendo que su relación ya existía durante 5 años antes de que él viajara a España a ver a su padre y se estableciera aquí, aportando documentación relativa a envíos de dinero, a viajes realizados, gastos relacionados con la boda y acta del matrimonio religioso.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Declaran que se conocen de toda la vida porque sus familias eran vecinas, que iniciaron su relación sentimental en el año 2004 y la mantuvieron por vía telefónica e internet desde el año 2009 cuando el promotor estaba en España, pese a ello difieren y desconocen algunos datos familiares y personales, la interesada declara los años de nacimiento de ambos cambiados, el promotor desconoce el segundo apellido del padre de su pareja, difieren al manifestar con quién han vivido antes del matrimonio, según el promotor él ha vivido sólo y su pareja con sus padres, sin embargo la Sra. P. dice que ella ha vivido con su madre, su hermano, su cuñada y 2 sobrinas y que su pareja ha vivido con una familia con la que parece guardar un parentesco lejano, también difieren en las marcas corporales de la interesada. En relación con otros datos, difieren al responder sobre los países que les gustaría visitar, coincidiendo sólo en Francia e Italia, y discrepan absolutamente respecto a las aficiones mutuas, a las entidades bancarias con las que trabajan, a si la interesada es o no supersticiosa y en lo que más la irrita, ambos manifiestan que les gusta el cine pero mientras la interesada menciona una película como la última que han visto juntos el promotor no la menciona y, por último difieren en los motivos para residir en España cuando se casen.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. No obstante debe significarse que en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 3 de enero de 2014 (115ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don S-A. nacido en C, C. (Colombia) el día 1 de enero de 1979 y de nacionalidad colombiana, y Doña Y-E. nacida en I, A. (Colombia) el día 6 de mayo de 1979, presentaron en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso, celebrado en Colombia el 21 de julio de 2001 e inscrito en el Registro Civil local con fecha 17 de diciembre de 2007. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor; certificado de nacimiento, declaración notarial de estado civil, soltero, realizada con posterioridad al matrimonio, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 3 registros, el primero de salida del país con fecha 18 de diciembre de 2001, entrada el 14 de diciembre de 2005 y nueva salida, destino C. el 3 de octubre de 2006 y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración notarial de estado civil, soltera, posterior al matrimonio, pasaporte, documento nacional de identidad y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 3 registros el primero de salida del país de 26 de agosto de 2001, entrada el 7 de diciembre de 2007 y nueva salida el 18 de marzo de 2008.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, al promotor el 6 de septiembre de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y a la promotora el 15 de noviembre siguiente en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 5 de septiembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la motivación de la resolución es insuficiente, adjuntando documentación de empadronamiento del promotor y de la interesada en M. fotografías de la boda y partida de matrimonio religioso.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de

31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana española, de origen colombiano, y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron en el año 1998 aunque difieren en el mes en el que iniciaron su relación sentimental y pese al tiempo transcurrido, incluso desde el matrimonio, discrepan respecto a los viajes que han hecho para verse, según la interesada ella viajó en diciembre de 2007, fecha que coincide con la inscripción del matrimonio en el Registro Civil local, y que él nunca pudo venir, sin embargo el promotor dice que viajó a España en diciembre de 2001, unos meses después de la boda religiosa, estando 4 años, lo que se corrobora con el documento de movimientos migratorios y con su documento de empadronamiento en M. aportado en fase de recurso, si bien durante ese tiempo no constan empadronados en el mismo domicilio, si en el mismo distrito, volvió a Colombia por su situación de irregularidad en España. Difieren en las personas asistentes a la boda y el promotor no contesta cuando se le pregunta por los padrinos de la misma. Respecto a datos personales y familiares también existen discrepancias, pese a una relación de 13 años, así el promotor no menciona que vivió en Venezuela en el año 2006, lo que si declara ella y además consta una salida hacia ese país en la información sobre movimientos migratorios, difieren en las personas con las que han convivido la interesada hasta el matrimonio, según el promotor con sus padres, según la propia Sra. Q. con un hermano y una hermana, tampoco coinciden en las personas con las que conviven en el momento de la audiencia, según la interesada vive con una amiga y su pareja con vive con nadie, según el promotor ella comparte piso con 2 amigos y él vive con sus suegros, lo que parece difícil que desconozca su esposa como hija de ellos. Ambos coinciden en que antes del matrimonio convivieron 3 años aunque no en la localidad en que vivían. En relación con otros datos, el promotor dice que ella antes de su trabajo actual ha cuidado personas mayores y ha trabajado en publicidad, según la interesada siempre ha estado de dependienta y cajera. Difieren en las comidas que no le gustan al promotor, en lo que le gusta

desayunar, en los licores que les gustan, en si ambos son o no madrugadores y aunque ambos manifiestan que vivirán en M., el promotor no da ningún motivo para ello.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 3 de enero de 2014 (117ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña L-C. nacida en S, V. (Colombia) el día 16 de noviembre de 1973 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 3 de junio de 2011, con Don J-A. nacido en Las P de G-C. el día 26 de mayo de 1964 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada en Colombia y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 8 registros, el primero de 15 de abril de 2008 y el último de 28 de julio de 2009 y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado civil, soltero, pasaporte y certificado de movimientos migratorios con 3 registros, el primero de 9 de julio de 2010 y el último el 29 de mayo 2011, 5 días antes de la boda.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados, el 19 de julio de 2011 en el Consulado español en Bogotá a la promotora y el 1 de septiembre siguiente al interesado en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 31 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias puestas de manifiesto en el auto y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada

practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron por internet, según el interesado hace 4 años, es decir en el año 2007 y personalmente el año 2008 en un viaje de la promotora para visitar a su madre también residente en Las P. la promotora menciona que se conocían por internet antes del año 2008, pero no dice cuanto tiempo antes. En relación con la celebración del matrimonio difieren en las personas asistentes, todas ellas de la familia de la promotora, así el interesado no menciona a la cuñada de ésta ni a uno de sus amigos. Respecto a otros datos personales, difieren en el nombre del padre de la promotora, se llama Je-Mª. sin embargo el interesado afirma que es Jo-Mª. también discrepan respecto a si la promotora es alérgica a alguna comida o no, según ella no y según su pareja si, a la lactosa de la leche, no obstante en el recurso la Sra. R. reconoce ese problema aunque no le da la categoría de alergia, también difieren en los tatuajes que tiene el interesado, la promotora no menciona el piercing de su pareja y si tres tatuajes, uno en la pierna que no coincide con los dos que menciona el Sr. H. No coinciden en lo que hacen antes de acostarse, el interesado menciona además de otras cosas que ambos toman café, circunstancia que no menciona su pareja. En relación con otras cuestiones difieren en si se han ayudado económicamente, según la promotora sí para los gastos del viaje y de la celebración del matrimonio y según su pareja no, también discrepan en los viajes que le gustaría hacer al interesado, él manifiesta que le gustaría visitar P. sin embargo su pareja cree que le gustaría conocer la España peninsular, sobre todo M. también sufren errores ambos al mencionar los correos electrónicos mutuos y, por último al ser preguntada la promotora sobre si conoce los efectos legales que la inscripción del matrimonio tendría sobre la posibilidad de salir de su país y residir en España dice que sí, anticipándose a otra pregunta al añadir que ese no ha sido el motivo del matrimonio.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 3 de enero de 2014 (119ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don A. nacido en C de F. (G) el día 8 de octubre de 1961 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil, celebrado en Colombia el 29 de julio de 2011, con Doña E. nacida en C, V. (Colombia) el día 16 de abril de 1968 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, del promotor; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con un registro, 9 de julio de 2011 y, de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios con 2 registros, salida del país con fecha 23 de septiembre de 2009 y vuelta con fecha 22 de diciembre de 2010.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la interesada el día 6 de septiembre de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y con el promotor el día 30 del mismo mes en el Registro Civil de Las Gabias (Granada). El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias apreciadas y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y

por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos manifiestan que se conocieron por internet en mayo de 2010, según el promotor y la documentación aportada, cuando ella estaba en Brasil en casa de unos amigos, sin embargo luego declara que su pareja no ha residido fuera de Colombia. No se conocieron personalmente hasta el viaje del promotor a Colombia para el matrimonio, 20 días antes de la celebración, esta circunstancia, que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio, es uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia. Respecto a la boda en sí, difieren respecto a las personas que acudieron, según el promotor fueron la madre de ella y unas amigas, según la interesada fueron su madre, su sobrina, su tía y una prima, discrepancia que se mantiene al ser preguntados por los padrinos de boda, el Sr. B. reitera que los que asistieron a la celebración, su madre y unas amigas, y su pareja dice que no hubo padrinos al ser un matrimonio civil. Respecto a datos personales, la interesada desconoce los trabajos que realizó su pareja antes del actual como transportista, y éste no contesta en relación con los trabajos anteriores de su pareja. Discrepan en relación con el lado de la cama en que duermen, en si son madrugadores o no, en lo que la Sra. M. desayuna, en el color de ojos que ella tiene, en las personas con las que han vivido antes del matrimonio, según la interesada ella vive con su madre, en cambio el promotor dice que su pareja vive con su madre y su hermano. También difieren en el color de ojos de la interesada, en su color preferido, en los motivos del último regalo que se hicieron, según el promotor ella le regaló una piedra de cuarzo por su despedida, según la interesada fue por la boda, y según ella él por el mismo motivo le regaló un teléfono, según el promotor le regaló un teléfono porque el otro se le había roto. Por último discrepan respecto a si ambos han vivido fuera de sus países, los dos dicen que el otro no, cuando en los dos casos es que sí, el promotor hace años en Francia y la interesada en el año 2010 en Brasil, de hecho se encontraba allí cuando se conocieron por internet.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar

su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (120ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña I-D. nacida en La V. (República Dominicana) el día 6 de julio de 1982 y de nacionalidad española, adquirida por opción con fecha 13 de marzo de 2001, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en La República Dominicana el 30 de enero de 2008, con Don A-A. nacido en La V. (República Dominicana) el día 29 de mayo de 1980 y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja de datos y acta inextensa de matrimonio local, y de la promotora; pasaporte español, inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, volante de empadronamiento en M. desde el año 2001 y documento nacional de identidad español, y del interesado; cédula de identidad dominicana no constando documento alguno de nacimiento ni declaración sobre su estado civil.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora, tras varios intentos de citación, el 17 de noviembre de 2009 en el Registro Civil Central y con el interesado en el mes de noviembre del año 2011, en el Consulado de España en Santo Domingo. Con fecha 22 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio por entender que no hay verdadero consentimiento matrimonial.

3.-Notificados los interesados, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informa en el sentido de que procede su desestimación. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española de origen dominicano y un ciudadano dominicano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocen desde pequeños

porque sus abuelas eran vecinas, posteriormente ella viajó a España y comenzaron su relación sentimental en el año 2006, en un viaje de ella a su país de origen, efectivamente según el pasaporte de la Sra. E. viajó a República Dominicana en abril del año 2006 y volvió el 27 de diciembre de 2007 para la boda que tuvo lugar un mes después, según el interesado desde que se conocen ella viajó en dos ocasiones aunque no recuerda las fechas, y después del matrimonio ha viajado otra vez. En ese tiempo han mantenido relación telefónica, según la promotora todos los días y según su pareja “hasta 5 o 6 veces por semana” pese a lo cual él desconoce el número de teléfono de ella. Respecto a datos personales y familiares, el interesado equivoca el mes de nacimiento de su pareja, desconoce en qué fecha obtuvo la nacionalidad española y dice que el estado civil de su pareja antes de su matrimonio era el de casada, parece desconocer que se divorció por sentencia dominicana de 6 de abril de 2005, de su matrimonio del año 2001 con un ciudadano dominicano que obtuvo la nacionalidad española en el año 2006, dicha sentencia obtuvo el exequátur en España en el año 2007 e inscrita en el Registro Civil español en noviembre del año 2010. El interesado desconoce el domicilio de su pareja en España sólo sabe que es en M. desconoce su horario de trabajo y el lugar en que trabaja, por su parte la promotora dice que él trabaja en una imprenta cuando el interesado dice que trabaja en un Bar de la localidad de La V. y, por último el interesado dice que tiene 2 hermanos en cambio la promotora dice que él tiene 3.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (126ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

HECHOS

1.- Don H-Y. nacido en El E, G. (Ecuador) el 3 de agosto de 1976, de nacionalidad ecuatoriana presentó en el Consulado español en Guayaquil impreso de declaración de datos para la

inscripción de su matrimonio, celebrado en Ecuador el 14 de febrero de 2011, con, Doña L-A. nacida en G. el 25 de octubre de 1974 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 28 de septiembre de 2009. Adjuntan como documentación acta de matrimonio local, y del promotor; certificado de nacimiento, pasaporte, documento de identidad ecuatoriano y certificado de movimientos migratorios, sin registros, y de la interesada; documento nacional de identidad, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificado de matrimonio anterior con un ciudadano español, celebrado en Ecuador el 26 de enero de 2004 e inscrito en el Registro Civil del Consulado de España en Quito con fecha 20 de febrero de 2004, con anotación de divorcio en ambos por sentencia en España de 26 de noviembre de 2008 y resolución notarial de 11 de enero de 2011 en Ecuador, certificado negativo de inscripción de matrimonio en el Registro Civil español, inscripción de nacimiento, con fecha 15 de febrero de 2008, de un hijo con filiación de ambos interesados nacido el 22 de marzo de 1991 y certificado de movimientos migratorios con registros desde el año 2006 a 2011.

2.- Con fecha 5 de agosto de 2011 se celebran la entrevista en audiencia reservada con el promotor en el Consulado de España en Guayaquil y el 11 de octubre siguiente con la interesada en el Registro Civil de Lloret de Mar. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 24 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio habida cuenta las contradicciones advertidas.

3.- Notificados los interesados, la Sra. T. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias producidas en el hecho de vivir separados, reiterando su relación, reiterando que decidieron casarse en el año 2009 pero que no pudo divorciarse hasta el año 2011, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y aportando documentación, fundamentalmente fotografías y correos electrónicos.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se reafirma en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ecuador entre una ciudadana española de origen ecuatoriano y un ciudadano ecuatoriano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Difieren en cuando se conocieron, según el promotor fue en 1989 e iniciaron su relación sentimental en 1990, vivieron juntos hasta 1992, según documento aportado tuvieron un hijo en 1991, aunque no fue inscrito hasta el año 2008, debiendo significarse que en ese momento el promotor tenía 14 años y su pareja 16, posteriormente dejaron la relación y la retomaron en el año 2006. Según la interesada se conoció en 1990 e iniciaron su relación en el año 2006, que coincide con el momento en que ella se va a España, desde este momento mantuvieron una comunicación habitual cada 2 o 3 días, según el promotor la comunicación era poco frecuente, una vez al mes. En ese tiempo la interesada estaba casada con un ciudadano español desde el año 2004. Según el promotor decidieron casarse en el año 2011, sin embargo la interesada dice que fue en el año 2009, reiterándolo en su recurso y argumentando que no pudo divorciarse de su anterior pareja hasta el año 2011, sin embargo sí estaba divorciada en España a finales del año 2008.

Respecto a datos personales y familiares, al hablar de sus padres respectivos y donde residen hay respuestas poco claras respecto a si alguno de ellos ha fallecido, por su parte el promotor menciona que la nacionalidad de su pareja es ecuatoriana, pese a que tiene doble nacionalidad, desconoce quién es el mejor amigo/a de su pareja, ésta por su parte discrepa en la persona del mejor amigo del promotor, discrepan respecto a si han hablado de tener hijos en común, según el promotor no, según su pareja si han pensado tener uno, tampoco están de acuerdo en donde residirán según el promotor no lo han decidido en cambio la Sra. T. dice que en España, por los estudios de sus dos hijos que viven con ella. También difieren en las personas que asistieron a la boda, según la interesada no fueron familiares del promotor en cambio él menciona que asistió su hermano, difieren en quienes fueron los testigos. También muestras desconocimiento en relación con asuntos laborales, el promotor desconoce los estudios realizados por su pareja, sabe que trabaja en un restaurante pero no el nombre, discrepa en los ingresos mensuales de ella, en si se ayudaban o no económicamente antes

del matrimonio. Difieren en otros temas como las aficiones mutuas, las comidas preferidas de la interesada, el último regalo que ésta le hizo, las flores favoritas de ambos y también el promotor desconoce la dirección del domicilio de su pareja en España, sólo la localidad.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (128ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña S-C. nacida en M. (Colombia) el día 5 de julio de 1976 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Colombia el 20 de abril de 2011, con Don M-G. nacido en S-R. (Ecuador) el día 10 de julio de 1984 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 19 de marzo de 2010. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del interesado; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, pasaporte español, fe de vida y estado, soltero, y certificación de movimientos migratorios expedido con fecha 17 de mayo de 2011 por las autoridades colombianas, sin registro alguno, y de la promotora; certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, celebrado en forma religiosa con fecha 15 de noviembre de 1997, con anotación de cesación de efectos civiles por resolución de fecha 10 de enero de 2008, pasaporte colombiano y certificación de movimientos migratorios, expedido con fecha 10 de junio de 2011 por las autoridades colombianas, sin registros anotados.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con la promotora el 19 de julio de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y con el interesado el 7 de octubre siguiente en el Registro Civil de Terrassa (Barcelona). El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 15 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, ambos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias apreciadas en las entrevistas, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio o en su defecto nuevas audiencias.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre un ciudadano español, de origen ecuatoriano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Cuestionados los interesados sobre si se conocían físicamente antes del matrimonio, contestan que sí, pero ese conocimiento no fue personal sino por internet, siendo esta circunstancia, no haberse encontrado antes del matrimonio, uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Efectivamente según los certificados de movimientos migratorios, la promotora no ha salido de Colombia al menos hasta el 10 de junio de 2011 y el interesado no ha entrado en ese país al menos hasta el 17 de mayo de 2011, lo que supone que el matrimonio debió celebrarse por poder, como reconoce la promotora, sin que conste el poder otorgado por el contrayente español y, también es dudosa la afirmación de la promotora de que se vieron en Ecuador, en mayo de 2011, después del matrimonio, con motivo del fallecimiento del padre del interesado, salvo que haya salido de Colombia sin que le conste a sus autoridades.

Según manifiestan se conocieron en el año 2010, en febrero según el promotor o en mayo según la interesada que luego añade que fue mucho antes, desde entonces mantienen contacto telefónico y por internet aunque difieren al dar sus correos electrónicos. Respecto a datos personales y familiares, el Sr. H. al ser preguntado por el lugar de nacimiento de su pareja contesta con los datos del registro donde está inscrita, equivoca el mes de nacimiento, equivoca la fecha del matrimonio, no contesta respecto a si su pareja sigue algún tratamiento médico, ni sobre si ella fuma, no sabe el Banco con el que ella trabaja. Por su parte la promotora no sabe los nombres de los hermanos del interesado ni la edad de sus padres, no sabe si él habla algún otro idioma además del propio, si su pareja sigue o no un tratamiento médico aunque luego menciona uno que no es declarado por el propio interesado, no recuerda si su pareja ha hecho o no el servicio militar. Respecto a otros temas también difieren respecto a los países que les gustaría visitar, a las bebidas preferidas, a si el interesado escucha o no la radio, si practica o no algún deporte con regularidad. Por último la promotora manifiesta que tiene familiares en España, su madre, 3 hermanos y 2 sobrinos, y al ser preguntada sobre si conoce los efectos legales de la inscripción en España de su matrimonio, respecto a salida de su país, tiempo de residencia para nacionalizarse, dice que sí, igual que al ser preguntada si ese es el motivo del matrimonio aunque añade que por la salud emocional de la familia deben estar juntos.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (4ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

HECHOS

1.- Doña P de las M. en calidad de madre de uno de los contrayentes, presentó en el Consulado español en La Habana impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio, celebrado en Cuba el 13 de enero de 2011, entre su hijo Don R. nacido el 16 de febrero de 1984 en B. C-H. (Cuba) y de nacionalidad cubana y Doña J. nacida el 24 de diciembre de 1967 en G-C. y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos y certificación literal de matrimonio local y, del interesado; certificado de nacimiento y carnet de identidad y de la interesada; certificado de nacimiento, fe de vida y estado civil, soltera, realizado con posterioridad a la celebración del matrimonio, pasaporte, documento nacional de identidad y certificado de movimientos migratorios extendido por las autoridades cubanas con 3 registros, una entrada en el país el 24 de septiembre de 2010 con salida el día 6 de octubre siguiente y nueva entrada el 12 de enero de 2011, un día antes del matrimonio.

2.- Con fecha 5 de diciembre de 2011 se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, estos por separado interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que su relación es auténtica, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y adjuntando documentación, fundamentalmente correos electrónicos remitidos desde una dirección cuya denominación, en principio, no tiene que ver con el nombre del interesado.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informa que se han guardado en su tramitación las prescripciones legales, y en consecuencia, el auto que se recurre resulta conforma a Derecho, y se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Civil Consular también se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de

31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre un ciudadano cubano y una ciudadana española, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos difieren en la forma en que se conocieron, según el interesado fue a través de correos electrónicos y por su madre que tenía contacto con la Sra. L. por razón de la santería que practicaba, y ellas previamente se habían puesto en contacto a través de un primo de él que vivía en España desde 3 o 4 años antes, según la interesada conoció a su pareja el día 24 de septiembre de 2010 en el primer viaje que hizo a Cuba con motivo de la santería, antes "había oído hablar de él" a un compañero de trabajo que era primo del Sr. H. y que vivía en España desde al menos 7 años atrás. Respecto a datos personales y familiares, ella parece desconocer al hablar de la familia de su pareja que sus padres están divorciados, no sabe en que trabaja el padre de su pareja, ni la edad de su hermano ni de la hermana más pequeña, que sólo lo es de padre. Coincide con el interesado en que este tiene a una hermana y a su primo viviendo en España pero añade que también vive una prima en V. que el interesado no menciona. También discrepan en relación con los posibles problemas médicos del interesado, según

la Sra. L. su pareja dejó su trabajo porque le producía dolores de cabeza y fue dado de baja, luego manifiesta que no recuerda cual fue la enfermedad que le provocó la baja, como tampoco la medicación que toma, sin embargo el interesado dice que dejó su trabajo para cambiar pero que no le dieron la licencia para la actividad, añadiendo la interesada que su pareja tiene un problema médico que el Sr. H. niega. También difieren en relación con la situación laboral de la interesada, ambos coinciden en afirmar que trabaja cuidando a una persona, pero difieren en el motivo del cambio de trabajo por parte de la Sra. L., ella dice que fue porque tenía unos fuertes dolores de espalda, según su pareja porque se le acababa el contrato, añadiendo que ella no tiene otro trabajo ni estudios, en cambio la interesada dice que además del trabajo estudia para T-S. Por último y, aunque no es determinante, la diferencia de edad entre los interesados es de 17 años,

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (8ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don F-J. nacido en C. el día 2 de mayo de 1979 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio canónico, celebrado en Colombia el 25 de junio de 2011, inscrito en el Registro Civil colombiano con fecha 28 de junio, con Doña G-E. nacida B. (Colombia) el día 19 de diciembre de 1991 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, del promotor; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero y pasaporte español y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 3 registros, entrada en el país el 11 de julio de 2010, salida el 19 de agosto y nueva entrada el 12 de mayo de 2011, y de la interesada;

certificado de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de movimientos migratorios sin anotación de registros.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con la interesada el 11 de julio de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el promotor el 21 de septiembre siguiente en el Registro Civil de Córdoba. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 30 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, estos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado intentando justificar las discrepancias, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y adjuntando documentación relativa al matrimonio religioso, a la situación laboral de la familia de la interesada.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue

a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron en julio de 2010, en el primer viaje del promotor, en una fiesta de bienvenida, la estancia duró hasta el 19 de agosto, siendo el siguiente viaje el 12 de mayo de 2011 hasta después de celebrado el matrimonio. Durante ese tiempo según el promotor convivieron un mes antes del matrimonio y según la interesada un mes y medio. Respecto a los datos personales y familiares, según la interesada hasta el matrimonio ella vivía con sus padres, aunque la documentación aportada con el recurso incluye referencias a “la pareja de su madre”, y su pareja vivía con su madre y un hermano, en cambio según el promotor vivía con sus padres, respuesta que se contradice con la facilitada en otra pregunta en la que declaraba que no tenía padre. También responden de forma diferente cuando son cuestionados sobre si han pensado en tener hijos, el promotor de forma genérica dice que sí, algún día pero no saben cuántos, en cambio la interesada dice que 2 hijos aunque todavía no han pensado los nombres. Al ser preguntados sobre si durante la relación que han mantenido se han ayudado económicamente, la interesada dice que ella no ha ayudado a su pareja sin embargo esta dice que se ayudaban mutuamente. También difieren respecto a si disponen de vivienda, según el promotor si, una vivienda alquilada, según la interesada no. En relación con otros temas, difieren de forma absoluta al mencionar el vehículo que tiene el promotor, tanto en marca, modelo y color, también difieren en lo que hacen por la mañana al levantarse y en cambio coinciden en que ambos duermen en el mismo lado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (9ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña Y. de nacionalidad colombiana y Don F-A. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 14 de enero de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y defunción esposa del Sr. Del M. y fe de vida y estado del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de enero de 2012 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencia reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existe una serie de desconocimiento y contradicciones de la pareja como que el interesado declara que su pareja es alérgica y ella dice que no, él manifiesta que ninguno tiene fobias y ella dice que a los gusanos, Sra. S. declara que ninguno tiene vehículo y él dice que sí. Manifiesta el interesado que su pareja tiene dos hijos de dos relaciones pero que no ha estado casada mientras que ella dice que ha estado casada y que es divorciada, declaran que se conocen en julio de 2010 por Internet y que inician su relación en octubre de ese mismo año, que el Sr. Del M. viaja a Colombia por cinco meses y contrae matrimonio el 14 de enero de 2011, volviendo en julio de 2011 mientras que ella solo declara que su pareja regreso a España el 18 de febrero de 2011 y volvió a Colombia en Julio de 2011. Respecto de los gustos, costumbres y aficiones ella dice que su pareja y ella no tienen ninguna preferencia televisiva y que ella no ve la televisión pero él manifiesta que le gustan los documentales y noticias y a ella novelas y películas, asimismo declara ella que no tienen preferencias musicales y él dice que “pop” y “vallenato”, en relación a las bebidas ella no declara ninguna de su pareja y él dice cerveza y vino. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 27 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del

Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (11ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don J-P. de nacionalidad dominicana y Doña Mª-V. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 02 de Julio de 2008. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. R. y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de Junio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,

257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la Sra. R. declara que decidieron la boda por teléfono y que solo asistieron dos familiares de él porque no estaban de acuerdo la familia dada la diferencia de edad, y que su esposo nació el 10 de mayo de 1982, que tiene ella un hijo de otra relación nacido el 21 de junio de 1982 y que solo han convivido aproximadamente 60 días. Por otra parte existe un desconocimiento de datos básicos personales y familiares el Sr. H. ignora el lugar y fecha de nacimiento de su esposa ni cuando adquirió la nacionalidad española así como los datos básicos referidos al hijo de ella, los ingresos que percibe la Sra. R. por su trabajo, manifestando el Sr. H. que empiezan la relación afectiva en el año 2008 en el mes de agosto siendo que la boda se celebró en julio de 2008, en otra pregunta de la audiencia reservada declara que la relación afectiva se inicia en diciembre de 2004 mientras que ella declara en agosto de 2004. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 26 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (12ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción por no quedar debidamente acreditada la celebración del matrimonio al carecer del oportuno certificado matrimonio expedido por el Registro Civil local.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M-A. de nacionalidad española y Doña J. de nacionalidad argelina presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio celebrado en T. (Sahara) el 15 de Febrero de 1979. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, volante de empadronamiento, certificados de nacimiento y acta de matrimonio.

2.- El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 13 de Julio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La competencia para resolver el presente expediente, ordenando la inscripción de matrimonio solicitada, corresponde al Registro Civil Central, en virtud de lo establecido en el art. 16 de la L.R.C y arts. 68, 342 y 343 del R.R.C, al darse la circunstancia de que la parte

promotora se halla domiciliada en España y la inscripción pretendida se encuentra dentro de los supuestos previstos en los arts. 1 y 15 de la L.R.C y art. 66 de su Reglamento, en relación con los arts. 17 y ss. del CC.

II.- En el presente supuesto al no existir el oportuno certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil local del lugar de celebración, con los requisitos legales que hubiera permitido su transcripción en el Registro español, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la L.R.C., procede conforme a lo dispuesto en los arts. 73 y 95.5º de la L.R.C y arts. 256 y 257 del R.R.C y con los trámites establecidos en el art. 238 y ss. R.R.C., tramitar expediente gubernativo como medio legal establecido para la práctica de la inscripción.

III.- En el presente caso de matrimonio celebrado en T. (Sahara) el 15 de febrero de 1979, no ha quedado suficientemente acreditado la celebración del matrimonio, la localidad y la fecha en que tuvo lugar el mismo, ni la Autoridad competente ante la cual se celebró el matrimonio, así como que se haya celebrado en la forma conforme lo prevenido en el art. 49 CC. y 257 del R.R.C. al no haberse aportado la certificación literal de matrimonio con los requisitos necesarios establecidos legalmente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (14ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don A-R. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 23 de mayo de 2011 con Doña K. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Aunque ellos manifiestan que se conocían físicamente antes del matrimonio, lo cierto es que, según sus declaraciones, el interesado llegó a Colombia, según ella el 18 de mayo y según él el 18 de junio, y no consta que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en si han hablado de cómo atenderán los gastos en el futuro, ya que él dice que no han pactado nada mientras que ella dice que seguirá trabajando para W. empresa para la que trabaja. El interesado desconoce el nombre de la mejor amiga de la interesada, desconocen los horarios de trabajo del otro; discrepan en si tienen o no apodos ya que la interesada dice que él le dice t. y ella le dice c. mientras que él dice que no utilizan apodos. El interesado declara que después de casarse con la promotora reconoció la paternidad de un hijo nacido en Cuba, sin embargo ella no menciona nada al respecto declarando que él tiene un hijo que está estudiando Administración y Derecho. Por otro lado y aunque no es determinante, el interesado es 18 años mayor que la interesada.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (15ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don J-F. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en

Nigeria el 6 de agosto de 2008, con Doña A. nacida en Nigeria y de nacionalidad nigeriana. Adjuntan como documentación: fotocopia del certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,

para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Nigeria entre un ciudadano español y una ciudadana nigeriana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada declara que se conocieron en M. en el año 2001 en la tienda de una hermana suya, sin embargo el interesado declara que se conocieron hace ocho años en M. (la entrevista se celebró en 2011, por lo que sería en 2003). Deportaron a la interesada y según el interesado decidió contraer matrimonio un año antes de casarse, viajó una sola vez a Nigeria el 3 de agosto de 2008, contrajo matrimonio el 6 de agosto y no consta que haya vuelto. La interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado, tampoco sabe el nombre de su hermano, sabe que trabaja de soldador pero desconoce el nombre de la empresa, etc. El interesado no está seguro del número de hermanos que tiene la interesada, ya que dice que "cree" que tiene dos hermanos y una hermana, desconociendo sus nombres. El interesado declara que ella sólo tiene una prima en España que vive en E. a la que conoce desconociendo su dirección, esto se contradice con lo declarado por ella al manifestar que se conocieron en M. en la tienda de una hermana suya.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (27ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña R del P. nacida en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 2 de febrero de 2009 en Ecuador, según la ley local, con Don D-J. nacido en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 5 de octubre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren

los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ecuador entre una ciudadana española, de origen ecuatoriano y un ciudadano ecuatoriano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que fue hace dos años (2008) mientras que él dice que fue hace mucho porque los dos vivían en el mismo barrio, tampoco coinciden en cuando iniciaron su relación sentimental pues él dice que en marzo de 2007 y ella dice que en 2008. El interesado desconoce los nombres de los padres de ella, la dirección de éstos, el teléfono y domicilio de ella en España. Por otro lado ella desconoce la fecha de nacimiento de él y su domicilio en Ecuador. La interesada desconoce el trabajo que desempeña el interesado ya que dice que trabaja como profesor de matemáticas e italiano cuando él declara que trabaja en un taller mecánico con su padre. No coinciden en el número de viajes que ha realizado la interesada a su país ya que él dice que ha ido dos veces y ella dice que va cada año y medio. La interesada declara que él tiene cuatro hermanos cuando son tres, conociendo tan sólo el nombre de uno, por su parte él dice que ella tiene cinco hermanos cuando son cuatro, desconociendo los nombres de los mismos.

La interesada dice que han convivido medio año y él dice que un año. Por otro lado la interesada es 31 años mayor que el interesado. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (28ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña R. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1997, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 9 de enero de 2009 en La República Dominicana según la ley local, con Don R-E. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio local; certificado de nacimiento de la interesada y acta de nacimiento inextensa del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2011 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado declara que se conocieron en el año 1990 en un establo de caballos y ya directamente hablaron de noviazgo, dejaron de verse y en 2005 se volvieron a ver en M. volviendo a retomar la relación, la interesada se limita a decir que se conocieron en P-P. en el año 1990, él por su parte “cree” que ella tiene 51 años, desconoce cuando obtuvo la nacionalidad española, los nombres de varios de los hijos de la interesada así como sus edades, los nombres de sus hermanos, salario que percibe, estudios, teléfono, se contradice él mismo al declarar primero que conoce a los padres de ella para luego decir que no porque han muerto; discrepan en el tiempo que han convivido y cuando, fechas de los viajes realizados por la interesada, ésta desconoce los nombres de varios de los hermanos de él, etc. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediatez a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (29ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1.-Don C. de nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 28 enero de 2011 con Doña M. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de estado civil de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de febrero de 2012 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el

Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana dominicana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían personalmente antes del matrimonio, éste se celebró el 28 enero de 2011 y el interesado viajó a la isla el 22 de enero y permaneció quince días no constando que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron a través de una hermana de la interesada que vive en España y que trabajó en el servicio doméstico en casa del padre del interesado, de hecho una de las causas que señala el interesado para contraer matrimonio es "para que M. ayude a cuidar de mi padre", ella sin embargo afirma que vivirán en España por el trabajo de él. La interesada desconoce la edad exacta de él y tampoco sabe el lugar donde nació aunque sabe que vive en C. así mismo desconoce el teléfono aunque declara que se comunican por esta vía, también desconoce que al interesado le realizaron una vasectomía.

Discrepan en cuando se conocieron ya que él dice que desde mediados de 2007, sin embargo ella dice que desde marzo de 2006. Existen discordancias en lo referente al trabajo y los salarios ya que él dice que es autónomo de la construcción y que tiene un salario de 2.500 euros y ella trabaja de administrativa, sin embargo ella dice que es arquitecto técnico y que su salario varía mucho y ella trabaja de secretaria en una oficina de cerámica. También difieren en la ayuda económica que él le presta a ella, ya que él dice que le envía dinero 600 euros cada mes o dos meses, sin embargo ella dice que le envía dinero cada mes y la cantidad que le envía es variable oscilando entre 300 y 600 euros. Discrepan en gustos, aficiones,

costumbres personales como por ejemplo el interesado declara que le gusta leer, pasear y a ella lo mismo y dormir, sin embargo ella dice que a ella le gusta dormir y a él leer y cocinar. Por otro lado el interesado es 26 años mayor que la interesada. Las pruebas presentadas no son concluyentes de un verdadero consentimiento matrimonial.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (31ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Don J.-M. nacido en T. el día 20 de junio de 1978 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 5 de agosto de 2011, e inscrito en el Registro Civil local con fecha 9 del mismo mes, con Doña E.-P. nacida C. B. (Colombia) el día 3 de agosto de 1987 y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, en la que no consta día del matrimonio sólo mes y acta de matrimonio local en el que se hace constar la fecha y, del promotor; certificado de nacimiento, pasaporte, fe de vida y estado, soltero, y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 3 registros, el primero una entrada en el país el 10 de enero de 2011 y el último otra entrada el 4 de agosto del mismo año y de la interesada; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios con 2 registros, salida del país el 2 de noviembre de 2010 con destino Panamá y vuelta el día 8 del mismo mes.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con fecha 25 de octubre de 2011, al promotor en el Registro Civil de Valls (Tarragona) y a la interesada en el Consulado de España en Cartagena de Indias. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 29 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no conoce en qué tipo de preguntas se han producido las discrepancias, manifestando que conoció a su pareja en enero de 2010 y aportando como documentación copia de un pasaporte que acredita su viaje a Panamá y su primer viaje a Colombia, este es diferente al aportado con la solicitud de inscripción que a su vez era un duplicado de un tercer pasaporte, añade facturas telefónicas y fotografías, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron a través de una página de internet el día 18 de julio de 2010, sin embargo en su recurso el promotor dice que se conocieron por la misma vía en enero del mismo año. Según el Sr. C. iniciaron su relación sentimental el 22 de septiembre de 2010 y según su pareja el 23 de octubre del mismo año. Se conocieron personalmente en Panamá durante 6 días del mes de noviembre de ese año porque el promotor estaba allí trabajando, posteriormente viajó a Colombia en enero de 2011, según él durante 15 días, según la documentación de las autoridades colombianas durante 9 y por último viajó un día antes de la boda, el 4 de agosto de 2011. Según la interesada la boda se celebró el 6 de agosto aunque textualmente “quedó registrado para el 5 de agosto” al respecto el promotor al ser preguntado por la fecha dice “el 5 de agosto de 2011, según consta en la inscripción” expresión que no refleja un convencimiento absoluto sobre tal día, de hecho al ser preguntados por cómo han preparado la entrevista la Sra. P. dice que preguntándose y conviviendo y según el promotor ha repasado las fechas que no recordaba, lo que sorprende habida cuenta que sólo había transcurrido un poco más de un año de su conocimiento y relación y 2 meses y medio de la boda, y difieren en si han hablado o no de que harán si el matrimonio no se inscribe, según el promotor no han hablado y según su pareja sí. Respecto a otros datos personales difieren al mencionar con quien vive la interesada, según ella con sus padres y según el promotor también con su hija, su hermano y un primo, también respecto a si madrugan o no los fines de semana, según la interesada ella se levanta tarde y según su pareja madrugan los dos, en lo que hacen al levantarse. La interesada desconoce los ingresos mensuales de él, y respecto de los suyos dice que depende de lo que él le mande, pero no manifiesta una cantidad, según el promotor le envía mensualmente entre 150 y 200 euros, desconoce el número de teléfono de él. Por otra parte discrepan respecto a los idiomas que hablan además del propio, según ella él habla catalán y ella ninguno, según el promotor él no habla ningún otro y ella un poco de alemán e inglés, también respecto a si ella lleva gafas, que dice que lleva y su pareja dice que usa lentillas y, por último difieren en temas como el tipo de cine que le gusta al promotor y su actor favorito,

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (32ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña J. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 21 de junio de 2011, con Don F. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando el certificado de nacimiento del hijo que tienen en común, facturas de llamadas telefónicas, etc.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones. Presentan el certificado de nacimiento del hijo que tienen en común, nacido en Colombia en el año 2013, así como su pasaporte. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 21 de junio de 2011 entre F. y J.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (33ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A. nacido en K-Y. (Senegal) el día 28 de febrero de 1954 y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 19 de octubre de 2006, presentó en el Registro Civil de Pamplona (Navarra) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil celebrado en Senegal de 9 de enero de 1987 con Doña A. nacida en K-Y. (Senegal) el día 10 de abril de 1967 y de nacionalidad senegalesa. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local inscrito con fecha 24 de enero de 2005 con una referencia a la fecha de 1987, en el mismo se hace constar que se opta por el matrimonio poligámico y, del promotor; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, documento nacional de identidad y volante de empadronamiento en P. desde el 19 de junio de 2006, y de la interesada no consta documentación alguna. El Registro Civil de Pamplona remite el expediente al Registro Civil Central, competente, en su caso, para la inscripción.

2.- Con fecha 9 de marzo de 2010 y 9 de marzo de 2011 se requiere que se cite a los interesados para que se celebran las entrevistas en audiencia reservada, mientras tanto tiene entrada nuevo documento aportado por el promotor, concretamente acta del Tribunal Departamental de Mbour que autoriza, con fecha 23 de marzo de 2011, previa petición del Sr. F. el cambio en el acta de matrimonio del año 2005 del régimen de poligamia a la monogamia. Con fecha 12 de mayo de 2011 se lleva a cabo la audiencia al promotor en el Registro Civil de Pamplona y con fecha 29 de agosto siguiente a la Sra. G. en el Consulado General de España en Dakar. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 14 de diciembre de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, basando la existencia de verdadera consentimiento matrimonial en los hijos habidos en común.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que propone su desestimación y la Encargada del Registro Civil Central se ratifica en la procedencia de la denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los

matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Senegal entre un ciudadano español, de origen senegalés y una ciudadana senegalesa, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según el promotor el matrimonio data de 9 de febrero de 1988, es decir un año después de lo que manifestó en un primer momento y de la fecha recogida en el acta del año 2005, en su recurso se menciona que el matrimonio es de 24 de enero de 2005 y la interesada en su entrevista no recuerda cuando se casó, cuantos años hace de ello, sólo recuerda que se casó en la mezquita de K-Y. y luego en un ayuntamiento pero no sabe dónde, todo lo cual suscita bastantes dudas respecto al propio hecho que se pretende inscribir.

Respecto a datos personales y familiares, el promotor manifiesta que tiene 7 hijos de su matrimonio, algunos inscritos en el Registro Civil español, otros no, efectivamente se ha podido

constatar 4 inscripciones, 3 llevadas a cabo en el Registro Civil Central durante la tramitación del presente expediente, el 23 de septiembre de 2010, y otra en el Consulado de España en Dakar con fecha 21 de marzo de 2012, pero además declara que tiene 8 hijos de otra relación, comprobado el Registro español, efectivamente constan inscritos, con fecha 24 de septiembre de 2010, 4 hijos del promotor con otra ciudadana senegalesa cuyas fechas de nacimiento se intercalan con los hijos, el mayor del año 1993 y el menor del año 2006, habidos de su matrimonio. De esta situación la interesada declara en su entrevista que su pareja tiene 1 hijo de una relación anterior que vive con ella y sus hijos. La interesada desconoce prácticamente todo de su pareja pese al tiempo transcurrido de su matrimonio, no sabe su fecha de nacimiento, ni su edad, ni cuánto tiempo lleva en España, ni en qué ciudad vive en España, ni cuando ha obtenido la nacionalidad española, ni siquiera dice saber las edades y fechas de nacimiento de sus 7 hijos, tampoco sabe en que trabaja su pareja en España, ni si tiene familiares aquí, según el promotor tiene hermanos en España y según el recurso tiene alguno de sus hijos. Según el promotor realizaba un viaje al año a Senegal desde que está en España, según su pareja va cada uno o dos años y se queda un mes o mes y medio. Por último la interesada declara que “no sabe porque su marido quiere inscribir ese matrimonio en un Registro Civil español”

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (87ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don D-D. presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 10 de marzo de 2011 con Doña Mª del C. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano colombiano y una ciudadana española, de origen colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en desde cuando se conocen ya que ella dice que desde septiembre de 2008, mientras que él dice que se conocen de toda la vida. La interesada declara que los presentó su hija por internet, sin embargo él se limita a decir que fue por medio de la hija de ella pero que hace mucho tiempo residían los dos en la misma ciudad. El interesado declara que la relación sentimental comenzó en 2008, sin embargo ella dice que comenzó en noviembre de 2009. Existen discordancias en el número de viajes y fechas de los mismos que realizó la interesada a su país, en los invitados que fueron a la boda, sin son o no supersticiosos, lugar de la cama donde duerme cada uno, talla de zapatos que utiliza la interesada, si poseen o no vivienda, color de la moto que tiene la interesada, si piensan tener hijos, si los hijos de ella han padecido algún problema de salud, si siguen tratamiento médico, libros que han leído, lo primero que hacen al despertarse, banco con el que operan, regalos de boda recibidos, con quien han vivido antes del matrimonio, emisora de radio que escuchan, etc. Por otro lado, la interesada es 28 años mayor que la interesada. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (90ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña K. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 12 de mayo de 2011 con Don J-A. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 31 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65

C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español, de origen colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que en noviembre de 2010, mientras que él dice que en octubre de 2010. Desconocen los correos electrónicos respectivos, la edad de los padres de cada uno; difieren en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo marca y cantidad de cigarrillos que fuma el interesado, banco con el que operan, emisora de radio escuchada, etc. Las respuestas dadas referidas al otro son muy escuetas. Las pruebas aportadas no son concluyentes de una verdadera relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (92ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña S. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2002, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 23 de mayo de 2008 en La República Dominicana según la ley local, con Don V. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. La juez encargada del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 22 de febrero de 2012 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del mismo. La encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65

C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo se conocieron ya que ella dice que fue en una discoteca en A. en el tercer viaje que realizó la interesada comenzó la relación sentimental y en un viaje que hizo en 2008 decidió casarse, declarando que tan sólo han convivido un mes, sin embargo el interesado declara que se conocían desde niños, luego dice que se conocieron en el río A. cuando él habló con ella, dice que la relación comenzó a los tres meses de conocerse y que han convivido cuatro o cinco años. Desconocen las fechas y lugares de nacimiento del otro. El interesado dice que no tienen hijos en común, sin embargo ella dice que tienen una hija en común de 12 años llamada M. de la que desconoce la fecha de nacimiento y no la tiene registrada. El interesado desconoce la dirección de ella en M. el teléfono(a pesar de declarar que se comunican por esta vía), desconoce la fecha de la boda, aunque luego dice que fue el 23 de mayo, desconoce el trabajo que desempeña y el salario ya que dice que trabaja en limpieza de casas y gana 900 euros cuando ella declara que trabaja en una empresa de limpieza y gana 800 euros, desconoce el número y los nombres de los hermanos de ella, cuando obtuvo la nacionalidad española. Por su parte la interesada desconoce el número y los nombres de los hermanos de él y las edades de sus hijos. Discrepan en el número de viajes que ha realizado la interesada ya que él dice que va todos los años y se queda un mes, mientras que ella dice que ha ido cuatro o cinco veces. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su intermediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (93ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Doña C. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 23 de julio de 2009 con Don J. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 29 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El matrimonio se celebró por poderes y los interesados no se habían visto físicamente antes de la boda, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. El interesado contrajo matrimonio en tres ocasiones las dos primeras con ciudadanas españolas, con la primera contrajo matrimonio en 1989 (aquí consta ya como divorciado) y se divorció en noviembre de 1992, con la segunda contrajo matrimonio en septiembre de 1993 y se divorció en abril de 1995, y con la tercera una ciudadana cubana contrajo matrimonio en mayo de 1995, recién divorciado de la anterior, y de la que se divorció mediante sentencia dictada por el juzgado de primera instancia nº1 de Logroño, del 4 de julio de 2008. Se conocieron a finales de julio de 2008 por medio de una página de internet. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental ya que ella dice que fue a finales de julio y él dice que en agosto de 2008. La interesada desconoce la fecha real de la boda ya que dice que fue el 23 de julio de 2008 cuando fue en el año 2009. El interesado es 23 años mayor que la interesada. No presentan pruebas concluyentes de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por

razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (95ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú).

HECHOS

1.- Don J. nacido en M. el día 16 de junio de 1984 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Lima impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil con Doña M-E. nacida en L. el día 21 de agosto de 1976 y de nacionalidad peruana, celebrado en Perú, según la ley local, el 11 de mayo de 2011. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor, certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, documento nacional de identidad y pasaporte en el que constan un viaje a Perú del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2010, otro de 4 a 12 de mayo de 2011 y el último de 18 de febrero al 5 de marzo de 2012, y de la interesada, inscripción de nacimiento, certificado de soltería, y documento de identidad peruano

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, por partida doble, al promotor la primera con fecha 8 de noviembre de 2011 en el Registro Civil de Madrid y la segunda el 22 de febrero de 2012 en el Consulado de Lima y, a la interesada, las dos se celebraron en el Consulado con una semana de diferencia, el 14 y 22 de febrero de 2012. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción y con fecha 9 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.-Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, intentando justificar las discrepancias y contradicciones apreciadas, no solo entre los solicitantes sino cada uno en sus dos entrevistas, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa que considera improcedente la inscripción y en el mismo sentido informa el Encargado del Registro Civil Consular y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3. 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4a de diciembre de 2005; 23-3a y 5a de junio, 3-1a, 21-1a y 5a, 25-2a de julio, 1-4a y 5-4a de septiembre, 29-2a y 5a de diciembre de 2006; 29-2a y 26-5a de enero, 28-5a de febrero, 31 de marzo, 28-2a de abril, 30-1a de mayo, 1-4a de junio, 10-4a, 5a y 6a y 11-1a de septiembre; 30-6a de noviembre y 27-1a y 2a de diciembre de 2007; 29-7a de abril, 27-1a de junio, 16-1a y 17-3a de julio, 30-2a de septiembre y 28-2a de noviembre de 2008; 19-6a y 8a de enero y 25-8a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1° Ce). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Ce. y 245 y 247 R.R.C), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Ce.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3° R.R.C), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23. II. de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre un ciudadano español y una ciudadana peruana, y del trámite de audiencia reservada

practicada a los contrayentes, en este caso por duplicado, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Cada uno de los interesados ha variado las respuestas en muchos temas de la primera a la segunda entrevista, así el promotor en su primera declaración dijo que se conocieron en octubre de 2010 a través de unos amigos peruanos de él que eran familia de ella, en su segunda comparecencia dice que se conocieron en noviembre de 2010 y la interesada dice que fue en octubre, fecha que además coincide con su primera llegada a Perú. Según el promotor iniciaron su relación sentimental cuando se vieron por primera vez en noviembre de 2010 y según ella fue en marzo de 2011 o en octubre de 2010 en su primera visita, depende de la entrevista. En ese tiempo él ha viajado en dos ocasiones, la primera de 3 semanas en octubre de 2010, cuando se conocieron personalmente, la segunda una semana antes de la boda volviendo al día siguiente de la misma y una última para la segunda entrevista. Discrepan en cómo se desarrolló la decisión de casarse, variando la interesada su declaración de una a otra entrevista. Respecto a la relación mantenida el promotor dice en su segunda declaración que han convivido juntos en cambio la interesada dice que no en ambas declaraciones, añadiendo en la última que han convivido que ese último viaje, febrero de 2012, en casa de su abuela. En cuanto a la celebración de la boda el promotor varía las personas asistentes en sus dos declaraciones y la interesada también.

Respecto a los datos personales y familiares, en la primera entrevista el promotor dice que ella tiene 2 hijos pero no menciona a su hija de una relación anterior, si lo hace en la segunda pero omite que la madre de la menor es familia de su pareja actual, primas, dato que proporciona la interesada en su primera entrevista pero omite en la segunda. El promotor en su primera declaración dice que vive con unos amigos sin embargo en la segunda dice que no vive con nadie, y que su pareja vive con su madre y en la segunda ocasión añade a sus hijos, según la interesada él vive con su hija si bien no sabe la dirección de su domicilio sólo que es en M. En la primera declaración el promotor dice que sólo conoce a la madre de su pareja porque el padre falleció, en la segunda y en las declaraciones de su pareja no se menciona tal circunstancia, también varía el número y nombres de los hermanos de la Sra. M. y ésta por su parte en la primera declaración dice no saber los datos de los hermanos de su pareja y una semana después si los conoce. Por último ella no menciona sus ingresos mensuales pero su pareja sí.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Lima.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (97ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A. de nacionalidad dominicana y Doña A del C. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 14 de Marzo de 2007. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio. Con fecha 21 de Octubre de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara la interesada que llegó a España en el año 1996 que desde entonces ha viajado unas cinco o seis veces a su país, que conoció a su pareja hace seis años y que inició la relación afectiva en el año 2004 mientras que él declara que la conoció en el año 2005 y que le ha visitado tres veces más o menos pero no recuerda las fechas, que contrajo matrimonio 14 de marzo de 2007, manifiesta la interesada que han convivido juntos las veces que ella ha viajado a República Dominicana y que decidieron casarse en marzo de 2007 que lo decidieron ambos, mientras que él dice que se lo propuso ella en el año 2006 por teléfono, declara la interesada que los últimos regalos que se han realizado son los correspondientes al día de la boda, es decir de marzo de 2007 y él declara los mismo aunque no recuerda el momento en que se los hicieron. Ignora la interesada la fecha de nacimiento de su pareja así como datos básicos personales referidos tanto a los padres, hermanos y los hijos de otras relaciones en lo que se refiere a la edad, nombres completos y manifiesta que ambos tienen estudios medios mientras que el interesado dice que solo sabe que ella sabe leer y escribir y que él cursó estudios hasta octavo de primaria, asimismo desconoce el interesado datos básicos personales y familiares referidos a los hermanos e hijos de su pareja. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 11 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente

posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (100ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Nairobi (Kenia).

HECHOS

1.- Don A-F. de nacionalidad española y Doña S-W. de nacionalidad keniana presentan en el Registro Consular de España en Nairobi (Kenia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Kenia el 21 de Septiembre de 2011. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sr. G.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de diciembre de 2011 la Encargada del Registro Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54,

85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Nairobi (Kenia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existe una serie de desconocimiento de datos personales y profesionales como que el interesado dice que su pareja es estudiante y ella dice que es madre. Por otra parte declara la interesada que él le envía una cantidad de semanal de dinero mientras que él dice mensual, asimismo confunde la interesada la dirección de su pareja en España e ignora sus aficiones él dice la fotografía y ella las películas y el esquí, y desconoce como el Sr. M. declara que tiene alergia a los tomates. El Sr. M. conoció a la interesada cuando era una niña en agosto de 2001 y le ayudaba con entregas de dinero para el material escolar. Según su propia declaración, retoman el contacto en septiembre de 2011 cuando se casaron, porque la interesada fue abandonada embarazada por el padre de la

hija de la Sra. M. nacida en agosto de 2010 y por la madre, por lo que solicitó ayuda al interesado. Como expresa el propio Sr M. desea ayudarla y en caso de que fuera a España le conseguiría trabajo entrando claramente en contradicción la finalidad de la ayuda laboral con la finalidad que debe existir en el presente supuesto en la que existe un matrimonio entre ambos.

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 30 años y la interesada solicitó un visado de entrada en España que le fue denegado.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Nairobi (Kenia).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (121ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña L. nacida en P, V del C. (Colombia) el día 9 de septiembre de 1973 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio con Don J. nacido en C-R. el día 4 de junio de 1966 y de nacionalidad española, celebrado en Colombia el 1 de julio de 2011. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, soltero, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 2 registros de entrada en el país el 17 de junio de 2011 y salida el 17 de julio siguiente.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, a la promotora el 13 de septiembre de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y al interesado el 21 de octubre siguiente en el

Registro Civil de Argamasilla de Calatrava (C-R). El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 21 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que las contradicciones en las audiencias se produjeron porque la Sra. C. estaba afectada por la enfermedad y fallecimiento de su hijo, adjuntando documentación relativa a envíos de dinero desde febrero de 2011 a marzo de 2012, copia de documentos del expediente y documento relativo a la inhumación del hijo de la promotora, con fecha 15 de enero de 2012 y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de

su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron a través de una prima de la promotora que vive en P. (C-R), en diciembre del año 2009 e iniciaron su relación sentimental en marzo de 2010, al ser preguntados sobre si se conocían físicamente antes del matrimonio, él dice que sí por internet y fotos y la promotora que por internet y teléfono. Se conocieron personalmente en el primer y único viaje del interesado 15 días antes del matrimonio, siendo esta circunstancia, que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio, uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia.

En relación a otros datos personales y familiares la promotora contesta con los domicilios cuando se le pregunta por los lugares de nacimiento de ambos, igualmente cuando se la cuestiona sobre las profesiones los padres de los interesados sólo responde que su madre es ama de casa, tampoco responde cuando se le pregunta donde piensan fijar su residencia. También difieren respecto a con quien vivía la promotora antes del matrimonio, según ella con su madre y según su pareja con su madre y sus tres hijos, respecto de estos ella dice que estudian en cambio el interesado dice que están parados. Respecto a otras circunstancias, la promotora no contesta sobre los países que le gustaría visitar a su pareja, si al Sr. C. le gusta el cine, no sabe el nombre del Banco con el que trabaja su pareja. Difieren cuando se les pregunta si en el tiempo que han estado juntos han frecuentado algún lugar en especial, el interesado manifiesta que estaban en la casa de ella porque un hijo estaba enfermo e ingresado en el hospital sin embargo la promotora no menciona tal hecho y si el nombre de un centro comercial, resulta significativa la diferencia por cuanto en su recurso el interesado invoca esta circunstancia familiar para justificar las discrepancias en las audiencias, debiendo significarse que según el documento aportado con el escrito de recurso el fallecimiento del hijo de la Sra. C. debió producirse 4 meses después de las entrevistas. Por último, preguntada la promotora sobre los efectos legales de la inscripción del matrimonio en España, para salir de su país y residir en el mismo y obtener, en su caso, la nacionalidad española en menos tiempo, manifiesta que los conoce.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Debiendo significarse, no obstante, que

en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (123ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña G-I. nacida en M, C. (Colombia) el día 22 de junio de 1963 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso celebrado en Colombia el 14 de mayo de 2011, e inscrito en el Registro Civil local con fecha 17 del mismo mes, con Don S. nacido en T de M.(G) el día 21 de abril de 1952 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, acta de matrimonio local, fotografías de la ceremonia religiosa y, de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas sin registros y del interesado; certificado de nacimiento, fe de vida y estado civil, soltero, pasaporte y certificado de movimientos migratorios con 5 registros, el primero de entrada en el país el 4 de octubre de 2007 y el último también de entrada el 6 de mayo de 2011, una semana antes de la boda.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con la promotora el 20 de julio de 2011 en el Consulado español en Bogotá y con el interesado el 12 de agosto siguiente en el Registro Civil de Tossa de Mar. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 31 de enero de 2012 la Encargada del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, explicando algunas de las discrepancias apreciadas en las entrevistas, fundamentalmente respecto al momento en que se conocieron, aportando correos electrónicos intercambiados con su pareja y fotos de la ceremonia religiosa y la celebración posterior, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en que se conocieron a través de una tercera persona a la que el interesado conoció por razones profesionales y que era familia de la promotora, surgen dudas respecto a las respuestas sobre cuando se conocieron, según la Sra. H. fue en febrero de 2007 e iniciaron su relación sentimental en marzo, según el interesado se conocieron personalmente e iniciaron su relación sentimental el 4 de octubre de 2007, fecha en la que él llega a Colombia por vez primera, en su recurso el Sr. M. explica estas diferencias por la forma de estar formuladas las preguntas, aportando correos electrónicos de su relación anterior al viaje mencionado. Respecto a la celebración del matrimonio difieren en los asistentes al mismo, concretamente el hijo de la promotora, que es mencionado por el interesado pero no por su madre.

Respecto a otros datos personales difieren al mencionar la profesión de la madre del interesado, motivado por un diferente entendimiento de la pregunta según el recurrente, preguntados sobre sus relaciones anteriores, el interesado dice que las han tenido los dos aunque sin compromiso y la promotora dice que ambos han tenido relaciones y que el interesado convivió con otra pareja, difieren en los licores que les gusta beber, discrepan respecto a si hay algún lugar especialmente frecuentado por ambos cuando han estado juntos, la promotora dice que "no hay ningún lugar especial" en cambio el interesado menciona uno en cada una de las 3 ciudades colombianas que ha visitado. También discrepan respecto a los países que el interesado ha visitado, coinciden en que ha visitado gran parte de Europa pero la promotora menciona que su pareja ha estado en la República Dominicana cuando él menciona China y lo mismo sucede al ser preguntados sobre los países que les gustaría visitar, según el interesado quiere conocer mejor Colombia y su cónyuge España, según ésta ella quiere visitar varios países europeos, Francia, Italia y él ninguno en especial. Por último la promotora no contesta respecto a si su pareja tiene o no mascota ni sobre el último libro que ha leído y preguntada la promotora sobre los efectos legales de la inscripción del matrimonio respecto a residir en España y obtener la nacionalidad en menos tiempo manifiesta que si los conoce.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Debiendo significarse, no obstante, que en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (124ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Doña Y. nacida en T. (Colombia) el día 19 de enero de 1975 y de nacionalidad colombiana, y Don F.-J. nacido en R. (Colombia) el día 21 de julio de 1975 y de nacionalidad española, adquirida por residencia mediante resolución de 5 de noviembre de 2007 e inscrita con fecha 16 de septiembre de 2008, presentaron en el Consulado español en Bogotá, el día 21 de febrero de 2011, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio religioso, celebrado en Colombia el 15 de marzo de 2008 e inscrito en el Registro Civil local con fecha 25 del mismo mes. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y certificado de matrimonio local; y del promotor; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, declaración notarial de estado civil, soltero, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 15 registros desde el 28 de julio de 2001 al 1 de julio de 2010 y de la promotora; certificado de nacimiento, declaración notarial de estado civil, soltera, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 2 registros, salida del país con fecha 6 de septiembre de 2008 y entrada el 22 de febrero de 2009.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, tras sucesivas notificaciones de cambio de residencia temporal, a la promotora el 16 de agosto de 2011 en el Consulado de España en Bogotá y al promotor, tras varios intentos de notificación, el 15 de noviembre siguiente en el Registro Civil de Madrid. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 15 de febrero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manifestando que las contradicciones apreciadas no tienen entidad suficiente, aportando documentación acreditativa de la inscripción del hijo en común en el Registro Civil Consular de Bogotá y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,

257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre un ciudadano español, de origen colombiano, y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Difieren en la fecha en que se conocieron, según la promotora fue en el año 1990 y según su pareja fue en 1987, coinciden en que iniciaron su relación sentimental en agosto del año 2007, aunque ese año según el certificado de movimientos migratorios del Sr. V. no estuvo en Colombia. Desde entonces según la promotora su pareja viajó en tres ocasiones para verla y ella fue a España una vez, de septiembre de 2008 a febrero de 2009 fecha en que regresó con él a Colombia, sin embargo el promotor no menciona este viaje, si señala que ha viajado en 4 ocasiones para verla, sin embargo las fechas y duración de la estancia no coincide con las entradas y salidas del documento expedido por las autoridades colombianas. Respecto a la celebración del matrimonio difieren en los asistentes al mismo, concretamente el promotor menciona entre ellos a su hija y la hija de su pareja, sin embargo la Sra. D. no las menciona.

En relación a otros datos personales y familiares también existen discrepancias, así el promotor declara que vive con una hermana, sin embargo su pareja dice que él vive con unos amigos, difieren en la edad de la hija de la promotora, en los ingresos mensuales del Sr. V. en la hora en que éste comienza su jornada laboral, en los lugares de España en que ha trabajado, en la bebida preferida de ella, en si esta tiene o no miedo a volar. El promotor no contesta respecto a si su pareja tiene o no mascota, responde con algo que no tiene nada que ver cuando se le pregunta por los actores favoritos de ambos. Por último la promotora no responde cuando se pregunta si conoce las obligaciones que contrae al casarse, y manifiesta respecto a la posibilidad que le da la inscripción del matrimonio en España para salir de su país y residir aquí, que le gustaría y que conoce que también le permitiría acceder a la nacionalidad española en menos tiempo.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Debiendo significarse, no obstante, que en los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 13 de Enero de 2014 (2ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se retrotraen actuaciones tras comprobarse que concurren vicios procedimentales que invalidan el pronunciamiento recurrido.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la parte interesada contra resolución del Encargado del Registro Civil Consular de Teherán (Irán).

HECHOS

1.- Don F. de nacionalidad española, nacido el 17 de abril de 1981 en I. (Irán), presentó ante el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio que había celebrado el 18 de enero de 2007, con Doña N. de nacionalidad iraní, nacida el 27 de agosto de 1983 en G. (Irán).

2.- Instruido el expediente por el Consulado General de España en Teherán (Irán), y practicada audiencia únicamente a la contrayente (Doña N), por el Cónsul Encargado del Registro Civil se dictó Resolución de 18 de septiembre de 2007, por la que se denegaba la inscripción solicitada en virtud de lo estipulado por el artículo 47 del Código civil, relativo a los impedimentos matrimoniales derivados de la relación de parentesco de los contrayentes.

3.- Notificada la parte interesada, ésta interpuso recurso, solicitando nuevamente la inscripción del matrimonio declarado.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, y el Encargado del Registro Civil Consular dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 29-4^a de diciembre de 2005; 23-3^a y 5^a de junio, 3-1^a, 21-1^a y 5^a, 25-2^a de julio, 1-4^a y 5-4^a de septiembre, 29-2^a y 5^a de diciembre de 2006; 29-2^a de enero, 28-5^a de febrero, 31 de marzo, 28-2^a de abril, 30-1^a de mayo y 1-4^a de junio, 10-4^a, 11-1^a de septiembre, 30-6^a de noviembre y 27-1^a y 2^a de diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; y 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- En el presente supuesto, la inscripción del matrimonio celebrado por los interesados en el extranjero ha sido denegada, por estimar el Encargado del Registro instructor que concurría el impedimento contemplado por el artículo 47 del Código civil (imposibilidad de contraer matrimonio de los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción y de los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado). No se indica la relación de parentesco concreta que se ha apreciado entre los dos contrayentes.

III.- Examinado el expediente de recurso, se verifican en el mismo defecto que por sí mismos invalidan el pronunciamiento del Consulado General. En primer lugar, se observa que la resolución no se halla debidamente motivada, por no poder deducirse de la fundamentación incorporada al acto impugnado el parentesco concreto que el encargado del Registro Civil consular advierte entre los cónyuges, ni tampoco el origen de tal conclusión en base a documentos o pruebas determinadas, quedando entendido que la no alusión a estos aspectos ha impedido a la parte actora alcanzar conocimiento pleno de las circunstancias en las que se ha fundado la denegación impugnada, y formular su recurso conforme a las mismas, y a esta Dirección General comprobar la realidad y regularidad de las circunstancias aludidas. Se observa igualmente que no ha sido tampoco evacuado el debido traslado al Ministerio Fiscal antes de ser dictada la resolución que da lugar al recurso.

IV.- Por tanto, de acuerdo a lo señalado, procede dejar sin efecto el auto dictado, a efectos de que se valore nuevamente toda la documentación integrante del expediente y se motive debidamente el pronunciamiento que se adopte, debiendo quedar expresada claramente el mismo la causa concreta en que se funde la resolución (quedando determinado, por ejemplo, el parentesco concreto que se aprecie entre los contrayentes), así como los documentos o los hechos concretos de los que deriven las conclusiones que sean puestas de manifiesto. En

caso de ser adoptada posición diferente a la que se refiere a la concurrencia del impedimento al que hacía referencia el acto anulado - y visto que en el expediente sólo obra una incompleta audiencia reservada a la Sra. D. - se recuerda que, antes de ser dictada la nueva resolución, deberá ser practicada también audiencia reservada al contrayente, y completada debidamente la que en su día se realizó a la interesada, a efectos de que exista un conjunto de respuestas que permitan contrastar la información y formar un convencimiento firme e indubitado sobre la posible ausencia o concurrencia de vicios del consentimiento matrimonial. Instruido el resto del procedimiento de acuerdo con la normativa de aplicación, habrá de ser trasladada al Ministerio Fiscal la propuesta de resolución que se emita, a efectos de éste que formule las alegaciones que estime oportunas antes de la definitiva adopción de aquella.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar parcialmente el recurso planteado en los términos expuestos en los fundamentos de derecho.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Teherán (Irán).

Resolución de 13 de Enero de 2014 (3ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

1.- Por exigencia del principio de concordancia entre el Registro y la realidad no puede admitirse el desistimiento del interesado a la inscripción del matrimonio.

2.- El Encargado no ha de limitarse a examinar el desistimiento del promotor a la inscripción del matrimonio sino que, precisamente porque no ha lugar al mismo, debe entrar a calificar el fondo del asunto.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (La República Dominicana).

HECHOS

1.- Don J. nacido en L. (A). el día 20 de agosto de 1986 y de nacionalidad española, presentó en el Consulado de España en Santo Domingo impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en La República Dominicana el 17 de diciembre de 2010, con Doña F-Mª. nacida en P las C.(La República Dominicana) el día 25 de febrero de 1985 y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos, acta inextensa de matrimonio local y, del promotor; certificado de nacimiento, fe de vida y estado, documento nacional de identidad y pasaporte, y de la interesada; acta inextensa de nacimiento, cédula de identidad, declaración jurada de estado civil, realizada ante notario con posterioridad al matrimonio, pasaporte y documentación médica relativa a su situación de embarazo.

2.- Posteriormente se llevan a cabo las audiencias reservadas a los interesados, con fecha 2 de junio de 2011 a la Sra. F. en el propio Consulado y al Sr. R. en el Registro Civil de su domicilio, La C. con fecha 7 de julio siguiente. Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2011, calificado como urgente por el promotor y dirigido al Consulado de Santo Domingo, aquél manifiesta que desea renunciar a la inscripción de su matrimonio con la interesada en

el Registro Civil porque ha sabido que ha sido víctima de un engaño, y que la interesada, por su parte, no está dispuesta a renunciar a la inscripción.

3.- El Sr. F. el día 1 de octubre siguiente presentó nuevo escrito retractándose de su renuncia a la inscripción del matrimonio, solicitando la resolución del expediente, lo mismo hizo en otras ocasiones. En ese mismo mes de octubre, mediante auto notificado el día 18 del mismo mes, el Encargado del Registro Civil Consular deniega la inscripción del matrimonio por el desistimiento del contrayente.

4.- Notificados los interesados, el promotor interpone recurso en el que manifiesta que efectivamente en un momento puntual renunció a la inscripción, pero que en varias ocasiones posteriores se ha retractado de esa petición y que existe un hijo en común del matrimonio, nacido el... de... de 2011 e inscrito por el Registro Civil Central con fecha 23 de noviembre del mismo año.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal éste se opone a la inscripción visto el desarrollo del expediente, en el mismo sentido el Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1ª y 2-2ª de septiembre y 27-4ª de diciembre de 2005; 19-1ª de enero, 9-3ª y 21-2ª de febrero, 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio y 5-2ª de septiembre de 2006; y las de 26-2ª de octubre de 2001 y 13-4ª de octubre de 2003, referidas al desistimiento.

II.- En el presente caso se solicitó por el promotor, de nacionalidad española, la inscripción de su matrimonio celebrado *lex loci* en La República Dominicana con una ciudadana dominicana el 17 de diciembre de 2010. Posteriormente se celebra el trámite de audiencia reservada y por separado a los contrayentes, y a continuación mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2011, el promotor desiste del expediente de inscripción de matrimonio, posteriormente presenta nuevos escritos en sentido contrario. Este desistimiento fue admitido por el Encargado del Registro Civil Consular que basó en él su auto denegatorio de la inscripción solicitada. Este auto es objeto de recurso por parte del interesado que en el mismo solicita la inscripción del matrimonio.

III.- No cabe admitir el desistimiento formulado por el recurrente, porque lo impide el principio de concordancia entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 L. R. C.), principio superior sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el Registro Civil a aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes en el caso del matrimonio (cfr. arts. 24 y 71 L. R. C.). Por lo demás, no ha de olvidarse que, conforme a los artículos 61 del Código civil y 70 de la Ley del Registro Civil, los efectos civiles del matrimonio se producen desde su celebración.

IV.- La decisión del Encargado reflejada en el acuerdo denegatorio está basada en una circunstancia, el desistimiento del promotor a que se continuara el expediente y se inscribiera el matrimonio en el Registro Civil español, que no debió ser tenido en cuenta sino que debió resolverse sobre la procedencia o no de inscribir el hecho acaecido y que afectaba a un español, por lo que parece apropiado que las actuaciones se retrotraigan al momento de tramitación oportuno a fin de que por el Encargado se examine lo aportado, se ordenen las diligencias que estime oportunas para disponer de los elementos necesarios y dicte una nueva resolución al respecto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Revocar el auto apelado.

2º.- Retrotraer las actuaciones a fin de que el Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo, a la vista de lo ya actuado y de las nuevas diligencias que, en su caso, estime oportunas se dicte resolución en orden a decidir si procede o no la inscripción de matrimonio solicitada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 13 de Enero de 2014 (4ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia).

HECHOS

1.- Doña A-M. nacida en C, La P. (Bolivia) el 24 de septiembre de 1980, presentó en el Consulado español en La Paz impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Bolivia el 1 de marzo de 2011 con Don J-A. nacido en B. el 7 de abril de 1970 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, de la promotora; certificado de nacimiento, certificado negativo de inscripción de matrimonios anteriores, declaración jurada de estado civil, soltera, y cédula de identidad boliviana, y del interesado; certificado de nacimiento, documento nacional de identidad, declaración jurada de estado civil, divorciado, fe de vida y estado y certificado de matrimonio anterior de fecha 11 de febrero de 1995, disuelto por sentencia de divorcio de 15 de diciembre de 2008.

2.-Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados, primero con la Sra. F. el día 27 de mayo de 2011 en la Sección Consular de la Embajada de España en La Paz y después, con fecha 31 de agosto siguiente, al Sr. S. en el Registro Civil de Sant Cugat del Vallés. Con fecha 30 de septiembre de 2009 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no existen contradicciones en lo declarado y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, adjuntando documentación como fotografías y justificantes de 3 envíos de dinero por parte del recurrente, 1 un mes antes del matrimonio y dos posteriores, así como resguardos de locutorio telefónico el más antiguo de noviembre de 2010.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opone a la inscripción por considerar que el matrimonio tiene fines distintos a los que le son propios. El Encargado del Registro Civil Consular informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Bolivia entre un ciudadano español y una ciudadana boliviana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocieron por internet mediante un hermano de la promotora en el año 2008, y por ese medio mantuvieron la relación además de por vía telefónica, sin conocerse personalmente hasta que el interesado viajó a Bolivia, según propio manifestación, 6 días antes del matrimonio, esta circunstancia es precisamente uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia.

Respecto a datos personales y familiares, el interesado dice que los padres de su pareja viven en La P. sin embargo ella dice que sus padres viven en C. su lugar de nacimiento, y a veces van a La P. según el Sr. S. su pareja no ha tenido ninguna enfermedad ni accidente grave, sin embargo la promotora manifiesta que se rompió un pie, asimismo discrepan respecto a los estudios que ha realizado el interesado, hasta primero de formación profesional, sin embargo ella dice que bachiller y un año en la marina, también difieren en los idiomas hablados por el interesado, su pareja menciona que solo habla español y él añade que también habla catalán. En relación con sus circunstancias económicas, según el interesado ella no tiene ingresos mensuales, sin embargo según dice la Sra. F. sus padres la ayudan económicamente, y también lo hace el interesado aunque él dice que mensualmente sin cantidades fijas y la promotora dice que cada dos meses o 3 veces, se supone que al año, según necesita. Muestran discrepancias respecto a aficiones y gustos, así el interesado manifiesta que no practica ningún deporte con regularidad porque no tiene tiempo y que sus aficiones son el fútbol y la natación, en cambio su pareja dice que él sale a caminar y que le encanta cocinar y bailar, a la inversa la promotora dice que sus aficiones son ver la televisión y cocinar y su pareja dice que a ella le gusta el baloncesto, la natación, la música y bailar y, por último discrepan al mencionar lo que a cada uno le gusta más y menos del otro.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia).

Resolución de 13 de Enero de 2014 (10ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. de nacionalidad española y Doña Y-C. de nacionalidad dominicana presentó en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 01 de Septiembre de 2004. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. F. y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio. Con fecha 10 de Junio de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declara el interesado que conoció a su mujer en octubre del año 2002 por teléfono, que desde entonces mantuvo una relación continuada según la interesada de amistad, que viajó en septiembre de 2004 donde se conocieron físicamente y se casaron el 03 de septiembre, que lo habían decidido al año de conocerse y que la decisión fue de los dos, mientras que ella dice que se casaron el 01 de septiembre que lo decidieron el mismo fin de semana que se conocen físicamente y se casan. El interesado no ha vuelto visitarla a su país hasta julio de 2007 mientras que ella declara junio. Según manifiesta la interesada ella quiere vivir en República Dominicana y él en España y pregunta en la audiencia reservada si es obligatorio con la inscripción del matrimonio vivir en España. Por otra parte existen una serie de desconocimiento y contradicciones como que el interesado declara que su mujer ha tenido un par de operaciones pero que no recuerda el motivo, ignora asimismo datos básicos personales y familiares de los padres, hermanos e hijos de ella en relación a sus nombres y edades, declara que su pareja ha estudiado contabilidad y él estudios primarios mientras que ella manifiesta que es licenciada y él ha estudiado bachillerato

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 11 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente

más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (5ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña Y. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 14 de enero de 2011, con Don G. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 28 de abril de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la

Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso.

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 14 de enero de 2011 entre G. y Y.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (14ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Doña L-N. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 7 de octubre de 2010 con Don V. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 18 de enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en los invitados que fueron a la boda, en gustos, aficiones, hábitos personales como por ejemplo lo que más les irrita, banco con el que operan, bebidas favoritas, libros que han leído, tipo de películas que más les gusta, si han sufrido o no operaciones quirúrgicas, tallas de ropa, si los fines de semana madrugan o no, parejas que han tenido anteriormente, profesión de cada uno, viajes realizados, lo que desayunan, canción con algún significado para los dos, etc. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (16ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Doña L-H. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 27 de agosto de 2010, con Don P-J. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 18 de abril de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías, comprobantes de envíos de dinero, correos electrónicos ,etc.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones. El interesado presenta fotografías, comprobantes de vuelo a Colombia, comprobantes de envíos de dinero, etc. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso.

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 27 de agosto de 2010 entre P-J. y L-H.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (19ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (República de Cuba).

HECHOS

1.- Don R. de nacionalidad española y Doña N. de nacionalidad cubana presentan en el Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en la República de Cuba el 13 de Octubre de 2010. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio con anotación de divorcio Sr. C.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en La Habana (República de Cuba), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen una serie de contradicciones como que el interesado declara que se conocen el 25 de marzo de 2009 mientras que ella dice 25 de noviembre de 2009, porque ella estaba intentado tramitar la nacionalidad española por nieta de español que finalmente le fue denegada y el Sr. C. le ayudo, que ese mismo día inician su relación sentimental pero que no se fueron a vivir juntos hasta febrero de 2011 aunque ya estaban casados desde 13 de octubre de 2010, que él era casado cuando la conoció y se divorció el 14 de junio de 2010. Declaran vivir en una casa de una amiga de la Sra. D. ya que en casa del interesado según este viven 16 personas mientras que ella dice 12.

Por otra parte declara el interesado que tiene la nacionalidad española, que quiere inscribir el matrimonio porque quiere viajar a España y vivir con su hijo allí y que ese es el objetivo principal mientras que ella dice que quiere legalizar el matrimonio para viajar a España por reunificación familiar con uno de los hijos de su pareja que vive en España. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 22 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del

matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (21ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (República de Cuba).

HECHOS

1.- Doña Y. de nacionalidad cubana y Don F. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Cuba el 23 de Marzo de 2011. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio local con inscripción de divorcio Sr. S.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de diciembre de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los

matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en La Habana (República de Cuba), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así el interesado obtiene la nacionalidad española por opción el 23 de octubre de 2009 siendo inscrita en el Consulado de la Habana el 25 de junio de 2010, declara que conoce a su esposa el 24 de diciembre de 2007 y que formalizaron su relación 15 días después, según la interesada se van a convivir un año después de que se conocen. Manifiestan ambos que no han convivido continuamente aunque suelen dormir juntos en casas diferentes, declara el interesado que duerme en pijama de color blanco y su esposa duerme en bata de color amarillo o azul mientras que ella dice que él duerme en camiseta y short y ella en pijama, que es un conjunto de

short y camiseta azul de color claro, el Sr S. manifiesta que se levanta sobre las 8 ya que trabaja de noche y que su turno es de dos días de 7 a 7 y descansa uno mientras que ella dice que es de 9 a 9 del día siguiente y que trabaja uno y descansa dos. Manifiesta la interesada que su pareja tiene tres hermanos aunque desconoce los datos básicos personales de nombre, edad Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 23 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en La Habana (República de Cuba), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (25ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción por no quedar debidamente acreditada la celebración del matrimonio al carecer del oportuno certificado matrimonio expedido por el Registro Civil local.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don B. de nacionalidad española y Doña Z. de nacionalidad marroquí presentó en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio celebrado en Marruecos el 09 de Abril de 1996. Adjuntan como documentación: certificados de nacimiento, acta de confirmación y continuidad del matrimonio.

2.- El Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2011 denegando la inscripción.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La competencia para resolver el presente expediente, ordenando la inscripción de matrimonio solicitada, corresponde al Registro Civil Central, en virtud de lo establecido en el art. 16 de la L.R.C y arts. 68, 342 y 343 del R.R.C, al darse la circunstancia de que la parte promotora se halla domiciliada en España y la inscripción pretendida se encuentra dentro de los supuestos previstos en los arts. 1 y 15 de la L.R.C y art. 66 de su Reglamento, en relación con los arts. 17 y ss del C.c.

II.- En el presente supuesto al no existir el oportuno certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil local del lugar de celebración, que hubiera permitido su transcripción en el Registro español, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la L.R.C. Procede conforme a lo dispuesto en los arts. 73 y 95.5º de la L.R.C y arts. 256 y 257 del R.R.C y con los trámites establecidos en el art. 238 y ss. R.R.C. tramitar expediente gubernativo como medio legal establecido para la práctica de la inscripción.

III.- En el presente caso de matrimonio celebrado en Marruecos el 09 de abril de 1996, no ha quedado suficientemente acreditado la celebración del matrimonio, la localidad y la fecha en que tuvo lugar el mismo, ni la Autoridad competente ante la cual se celebró el matrimonio, así como que se haya celebrado en la forma conforme lo prevenido en el art. 49 CC. y 257 del R.R.C.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (32ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Miami.

HECHOS

1.- Doña Y. de nacionalidad española y Don Á-A. de nacionalidad cubana presentan en el Registro Consular de España en Miami, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en M. el 27 de Febrero de 2012. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, sentencia de divorcio Sr P.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 20 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Consular de España en Miami dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las

que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Miami, de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen determinadas contradicciones e imprecisiones como que ambos interesados ignoran la fecha correcta del nacimiento de su pareja él dice que ella nace el "09 de noviembre de 1981" y la fecha correcta es "11 de septiembre de 1981", ella dice que su esposo nació el "31 de marzo de 1971" y la fecha correcta es "31 de mayo de 1972". Declara el interesado que su pareja no trabaja mientras que ella dice que sí, no coinciden en la dirección que dan del domicilio donde conviven. Por otra parte en relación con sus costumbres el Sr. P. declara que ambos fuman mientras que ella dice que ninguno fuma. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 9 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Miami, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (33ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don J-C. de nacionalidad dominicana y Doña N-B. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República Dominicana el 16 de Enero de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento, Certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. M.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio.

Con fecha 31 de Enero de 2012 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo

denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la interesada reside en España desde el año 2001, declara que contrajo matrimonio en República Dominicana en el año 2002 divorciándose en el año 2008, sin embargo figura matrimonio inscrito en el Registro Civil Central celebrado el 22 de Diciembre de 2003 y disuelto en Diciembre de 2008. Que a su actual esposo lo conoció en el año 2007 y que cuando volvió a España siguieron en contacto por teléfono y en octubre de 2009 decidieron casarse por teléfono, celebrando la boda el 16 de Enero de 2010. Que cuando se casaron estaba embarazada de su hija nacida en M. el... de... de 2010 cuyo padre no es su actual esposo y que está reconocida por el padre biológico. Que solo ha convivido con su esposo durante el mes que fue a casarse según él la estancia fue quince días. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 9 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (39ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña G-A. de nacionalidad colombiana y Don J-Á. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en República de Colombia el 04 de Mayo de 2010. Adjuntan

como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y fe de vida y estado Sr. E.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 14 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así el interesado ignora la fecha de nacimiento de su pareja así como las personas concretas con las que convive solo sabe que vive con familiares, declara que se conocen en marzo de 2007 por Internet y desde ese momento inician su relación sentimental, que se conocen físicamente antes del matrimonio mientras que la interesada declara que inician su relación sentimental al año de conocerse y que se conocen físicamente el 30 de abril de 2010, habiendo manifestado ella que el Sr. E. viajó por primera vez en marzo de 2010 y que estuvo un segundo viaje en mayo de 2010 que es cuando se casan. En relación con los viajes el interesado manifiesta que ha viajado dos veces a Colombia la primera en mayo de 2010 para contraer matrimonio y la segunda en agosto de 2011 con una estancia de 10 y 20 días respectivamente. Por otra parte declara el interesado que como aficiones tienen él la pesca y el submarinismo y ella la música y pasear mientras que la interesada declara para ambos trabajar, manifiesta la interesada que a él le gusta comprar ropa y electrodomésticos mientras que él dice que no le gusta salir a comprar. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 15 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (27ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción por no quedar debidamente acreditada la celebración del matrimonio al carecer del oportuno certificado matrimonio expedido por el Registro Civil local

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don F. de nacionalidad española y Doña H. de nacionalidad marroquí presentó en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio celebrado en Marruecos el 05 de Febrero de 2004. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento del interesado, auto del Juzgado de primera Instancia número 16 de M. otorgando exequátur a sentencia del Tribunal de primera Instancia de N. sobre legitimidad vínculo matrimonial entre los interesados.

2.- El Encargado del Registro Civil Central remite exhorto al Juzgado de primera Instancia número 16 de M. a fin de requerir a los promotores para que aporten certificado de matrimonio o datos registrales del Consulado si estuviese inscrito o en su defecto inicien el correspondiente expediente gubernativo de inscripción de matrimonio.

3.- Se recibe contestación por parte de letrado de la parte promotora solicitando “la inscripción de los Autos de legitimidad del vínculo matrimonial, siendo innecesaria e inadecuada la diligencia de iniciar un expediente gubernativo “.

4.- El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 27 de Diciembre de 2010 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

5.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La competencia para resolver el presente expediente, ordenando la inscripción de matrimonio solicitada, corresponde al Registro Civil Central, en virtud de lo establecido en el art. 16 de la L.R.C y arts. 68, 342 y 343 del R.R.C, al darse la circunstancia de que la parte promotora se halla domiciliada en España y la inscripción pretendida se encuentra dentro de los supuestos previstos en los arts. 1 y 15 de la L.R.C y art. 66 de su Reglamento, en relación con los arts. 17 y ss. del C.c.

II.- En el presente supuesto al no existir el oportuno certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil local del lugar de celebración, que hubiera permitido su transcripción en el Registro español, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la L.R.C. Procede conforme a lo dispuesto en los arts. 73 y 95.5º de la L.R.C y arts. 256 y 257 del R.R.C y con los trámites establecidos en el art. 238 y ss. R.R.C. tramitar expediente gubernativo como medio legal establecido para la práctica de la inscripción.

III.- En el presente caso de matrimonio celebrado en N. el 05 de febrero de 2004, no ha quedado suficientemente acreditado la celebración del matrimonio, la localidad y la fecha en que tuvo lugar el mismo, ni la Autoridad competente ante la cual se celebró el matrimonio, así como que se haya celebrado en la forma conforme lo prevenido en el art. 49 CC. y 257 del R.R.C.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (28ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Si el matrimonio se ha contraído cuando los dos contrayentes eran dominicanos y uno de ellos ha adquirido después la nacionalidad española, es inscribible la certificación dominicana porque no hay puntos de conexión que justifiquen la aplicación de las leyes españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña M^a-F. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 15 de enero de 2005 con Don F-M. nacido en La Republica Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio inextensa, certificado de nacimiento de la interesada y permiso de residencia y acta de nacimiento inextensa del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 29 de julio de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se adhiere al mismo. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 26-1ª de noviembre de 2001 y 24-1ª de mayo, 29-3ª de junio y 11-2ª, 11-3ª y 11-4ª de septiembre de 2002 y 26-3ª de febrero, 10-4ª de octubre, 13-1ª y 2ª de noviembre de 2003 y 4ª de 2 de junio de 2004.

II.- El matrimonio anterior subsistente celebrado en el extranjero de quien ha adquirido después la nacionalidad española debe inscribirse en el Registro Civil español competente, siendo la vía normal para obtener la inscripción el certificado expedido por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.).

III.- Como en este caso los dos contrayentes eran dominicanos cuando se celebró el matrimonio (2005), la interesada obtuvo la nacionalidad española por residencia en el año 2008, por lo que, su capacidad para contraer matrimonio se rige por su ley nacional (cfr. art. 9-1 C.c.) y, no habiendo dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley dominicana, la certificación de este país ha de inscribirse, siendo improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación.

Por otro lado los interesados tienen dos hijos en común, y el interesado tiene permiso de residencia para residir en España

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2º.- Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Central el matrimonio contraído en La República Dominicana el 15 de enero de 2005 entre Don F-M. y Doña Mª-F.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (30ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo.

HECHOS

1.- Don C. nacido en Brasil y de nacionalidad brasileña, presentó en el Consulado español en Sao Paulo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Brasil, el 4 de abril de 2012, con Doña M. nacida en Brasil y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 27 de abril de 2012 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Brasil entre una ciudadana española, de origen brasileño y un ciudadano brasileño y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados dan una versión completamente distinta sobre cómo y dónde se conocieron, así el interesado declara que se conocieron en un bar en España entre noviembre y diciembre de 2006, mientras que ella declara que se conocieron en S-P. en una fiesta fin de año a finales de 2006. El interesado manifiesta que no sabe de quién es la empresa en la que trabaja la interesada cuando ella dice que la empresa de limpieza en la que trabaja es suya, aunque no tiene nombre y que trabaja ella y su hermana. Los nombres de los hermanos de

ella que da el interesado no coinciden con los reales dados por ella. El interesado declara que se han casado para poder vivir en España legalmente. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (32ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña P. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 23 de abril de 2008 presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 7 de febrero de 2008 con Don N-C. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio inextensa, certificado de nacimiento, acta de matrimonio inextensa, acta de divorcio inextensa de la interesada y extracto de acta de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 5 de abril de 2011 el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesa la desestimación del mismo. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 7 de febrero de 2008 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia el 23 de abril de 2008.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba

de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes,

resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce cuando adquirió la interesada la nacionalidad española, sabe que vive en B. pero desconoce la dirección y el teléfono a pesar de indicar que se comunican por esta vía. Desconoce qué cantidad cobra ella del paro, dice que no ha tenido trabajo fijo y que hace horas como doméstica cuando ella declara que trabajó en hostelería.

La interesada declara que él es militar, sin embargo el interesado dice que está retirado del Ejército Nacional y que aparte trabaja como obrero en una empresa dedicada a la minería. El interesado declara que los dos eran solteros cuando se casaron, desconoce que la interesada estuvo casada y es divorciado. No aportan pruebas de su relación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández".

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (33ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

HECHOS

1.- Doña M-J. nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, presentó en el Consulado español en Guayaquil, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Ecuador, el 12 de agosto de 2010, con Don L-E. nacido en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 23 de febrero de 2010, Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 21 de marzo de 2012 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ecuador entre un ciudadano español, de origen ecuatoriano y una ciudadana ecuatoriana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado obtuvo la nacionalidad española en febrero de 2010 y en

agosto del mismo año contrae matrimonio con la promotora. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental ya que él dice que fue en septiembre de 2010, mientras que ella dice que fue en septiembre de 2008, difieren en cuando decidieron contraer matrimonio ya que él dice que fue cuando se conocieron en septiembre de 2010 y ella dice que en septiembre de 2008, también discrepan en el número de viajes que ha realizado el interesado a su país así el interesado dice que ha ido en tres o cuatro ocasiones y ella dice que dos. Existen discordancias en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo desconocen los nombres de los mejores amigos de cada uno, color de ojos del interesado, si saben o no conducir, salario del interesado, estudios, idiomas que habla el interesado, empresa para la que trabaja cada uno, propiedad del piso donde vive la interesada, regalos que se han hecho y motivo de los mismos, canciones favoritas, familiares que fueron a la boda, posibilidad de tener hijos, etc. Por otro lado, el interesado es 28 años mayor que ella. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (35ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

El Encargado no ha de limitarse a examinar el desistimiento del promotor a la inscripción del matrimonio sino que, precisamente porque declara que no ha lugar al mismo debe seguidamente entrar a calificar el fondo del asunto.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don F-A. nacido en Argentina y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2009, presentó en el Registro Civil impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en Brasil el 13 de octubre de 1990, con Doña P. nacida en Brasil y de nacionalidad brasileña. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio local y certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2010, dirigido al Registro Civil Central, el interesado manifiesta que ha solicitado la tramitación de inscripción de su matrimonio en el Consulado de España en Brasil, por lo que desea la cancelación de dicho trámite solicitado en el Registro Civil Central el 15 de febrero de 2010.

3.- El Ministerio Fiscal se opone al desistimiento. Mediante auto de fecha 10 de enero de 2012, el encargado del Registro Civil, deniega la admisión de desistimiento de la inscripción del matrimonio promovida.

4.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso alegando que solicitó la inscripción de su matrimonio en el Registro Civil del Prat de Llobregat donde le contestaron que dicho trámite se demoraría unos tres años, por lo que se decantó por efectuar dicha inscripción en Consulado de España en Sao Paulo- Brasil, y en menos de un mes consiguió inscribir su matrimonio, con fecha 10 de noviembre de 2010, de lo que presenta prueba.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal éste impugna el recurso interpuesto e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1ª y 2-2ª de septiembre y 27-4ª de diciembre de 2005; 19-1ª de enero, 9-3ª y 21-2ª de febrero, 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio y 5-2ª de septiembre de 2006.; y las de 26-2ª de octubre de 2001 y 13-4ª de octubre de 2003, referidas al desistimiento.

II.- En el presente caso se solicitó por el interesado, de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2009, la inscripción de su matrimonio celebrado *lex loci* en Brasil con una ciudadana brasileña el 13 de octubre de 1990. Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2010, el interesado desiste del expediente de inscripción de matrimonio, ya que había iniciado la solicitud de inscripción en el Consulado de España en Sao Paulo. Este desistimiento que fue informado desfavorablemente por el Ministerio Fiscal, se rechazó por el Juez Encargado que dictó auto denegatorio porque considera que en el Registro Civil han de hacerse constar los hechos inscribibles que afecten a los españoles y que el Registro debe coincidir con la realidad. Este auto es objeto de recurso por parte del interesado, alegando que en Consulado de España en Sao Paulo le han inscrito el matrimonio, de lo que presenta prueba además del libro de familia.

III.- Esta decisión se ha de mantener, ya que por evidentes razones del principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 L.R.C.) es acertado el acuerdo del magistrado Juez Encargado de no admitir el desistimiento, ya que este principio superior está sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el Registro civil a aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes en el caso del matrimonio (cfr. arts. 24 y 71 L.R.C.). Por lo demás,

no ha de olvidarse que, conforme a los artículos 61 del Código civil y 70 de la Ley del Registro Civil, los efectos civiles del matrimonio se producen desde su celebración.

IV.- La decisión del Juez Encargado, que es correcta y ha de mantenerse, debe sin embargo completarse, ya que la propia declaración de que no ha lugar al desistimiento comporta necesariamente entrar a examinar el fondo del asunto y calificar si procede la inscripción solicitada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Desestimar el recurso.

2º.- Instar que por el Encargado del Registro Civil Central se califique lo actuado en orden a decidir si procede o no la caducidad del expediente a la vista de que el matrimonio ya está inscrito en el Registro Civil Consular de España en Sao Paulo.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (39ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña A. de nacionalidad española y Don L-A. de nacionalidad senegalesa presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Senegal el 01 de Julio de 2009. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada a los interesados. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente a la inscripción de matrimonio. Con fecha 18 de Agosto de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de la audiencia reservada realizada, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así existen una serie de desconocimientos y contradicciones como que la interesada ignora la fecha correcta de nacimiento de su pareja

dice 14 de marzo de 1975 mientras que él declara 14 de marzo de 1974, no coinciden en la actividad que realizaba el interesado cuando se conocieron ella dice que era interprete y guía turístico mientras que él manifiesta que trabajaba en un bar. Ignora el interesado los ingresos que obtiene su pareja de su actividad profesional, la dirección del domicilio en España, los nombres y demás circunstancias personales de los hermanos de su pareja

Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 15 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Civil Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (62ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña B. L. de nacionalidad española y Don J. S. de nacionalidad colombiana presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 28 de Julio de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sra. L.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 29 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas,

se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción.

Así existen desconocimientos y contradicciones como que el Sr. S. no contesta a la pregunta de cuándo contrajeron matrimonio y la interesada contesta que no lo recuerda, ignora la Sra. L. si su pareja monta en bicicleta, si ha contraído con anterioridad matrimonio, si tiene algún apodo dice que no mientras que él declara que le llaman “porro” igualmente el interesado desconoce la dirección de correo electrónico de su pareja, si ha contraído o no matrimonio con anterioridad, si es o no supersticiosa. Por otra parte el interesado manifiesta que su pareja ha venido seis veces a Colombia para verle y ella dice que tres asimismo, no coinciden respecto de los familiares que fueron la boda. En relación a las ayudas económicas el interesado declara que su esposa le ayuda económicamente para mantener unos gastos del cuidado de animales mientras que ella dice que no le ayuda. El Sr. S. dice que tiene una furgoneta azul mientras que ella dice que él tiene una moto.

Finalmente ambos interesados declaran expresamente que desean contraer matrimonio a los fines de obtener la residencia legal en España y la nacionalidad española en el menor tiempo posible.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (63ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Don L. M. de nacionalidad española y Doña A. de nacionalidad colombiana presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 28 de Enero de 2011. Adjuntan

como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento,

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de marzo de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,

para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas, se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción.

Así declaran los interesados que iniciaron su relación sentimental en julio del año 2000 y que la han mantenido, que el Sr. M. ha viajado en cinco ocasiones a Colombia, julio 2005, junio de 2008, agosto de 2009, diciembre de 2010, diciembre de 2011. Sin embargo de la documentación existente en el expediente se deduce que el interesado tiene dos hijos de otra relación de tres y siete años, por lo que implicaría que el interesado ha simultaneado en su caso ambas relaciones afectivas al menos hasta fecha reciente, ya que la propia sentencia de fecha 08 de junio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bilbao aportada en el expediente sobre modificación de medidas para los hijos menores del Sr. M. , recoge en su apartado primero párrafo penúltimo que el hijo menor de la pareja es fruto del intento de reconciliación del Sr. M. con su anterior pareja. Por otra parte declara el interesado que no pudieron celebrar la boda porque tuvo que regresar a trabajar a B., cuando el mismo manifiesta que la media de días de estancia en sus viajes es de 35 días. Declaran ambos interesados que se comprometieron por teléfono en julio de 2010 aunque él dice que estaba en Colombia.

Finalmente declara la interesada de manera expresa que desea contraer matrimonio a los fines de obtener la residencia legal en España y la nacionalidad en el menos tiempo posible, indicando que eso le permite convivir con su esposo

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá

Resolución de 27 de Enero de 2014 (66ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña L-M. de nacionalidad española y Don J-F. de nacionalidad colombiana presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Colombia el 22 de julio de 2011. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificada de matrimonio local, certificados de nacimiento.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de enero de 2012 la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declaran conocerse en el año 1999 pero inician la relación sentimental en agosto de 2002, que en febrero de 2003 y hasta febrero de 2008 la Sra. C. reside en España donde adquiere la nacionalidad española con fecha 24 de octubre de 2007, que durante el periodo de residencia en España ha viajado a Colombia cuatro veces, la primera noviembre de 2004 por un periodo de un mes, la segunda septiembre de 2006 por un periodo de 20 días, la tercera mayo de 2007 por un periodo de 10 días y el cuarto viaje en febrero de 2008, donde desde entonces reside en Colombia, mientras que el interesado declara tres o cuatro viajes pero no recuerda las fechas. Contraen matrimonio el 22 de julio de 2011 y aunque ambos declaran trabajar en Colombia manifiestan que desean homologar sus títulos Universitarios de Derecho y residir en España, ambos contrayentes son de origen Colombiano. Por otra parte existe una serie de desconocimiento e imprecisiones como que aunque ambos contrayentes son de origen colombiano ella dice que no acude ningún familiar suyo a la boda y de su pareja no contesta, asimismo el interesado dice que no acudieron familiares suyos a la boda e igualmente no contesta respecto de su cónyuge, declara la interesada que decidieron casarse en el año 2008 mientras que él dice año 2010, que el último viaje que han realizado de vacaciones ha sido a C de I. mientras que él menciona el viaje a Estados Unidos que según la interesada fue el de luna de miel.

Según la interesada hizo un viaje de luna de miel de forma anticipada en el mes de noviembre de 2010 a Estados Unidos circunstancia no mencionada por el Sr. C. declara la interesada unos ingresos suyos y de su pareja diferentes a los manifestados por él. En relación a los gustos, costumbres y aficiones ella declara como licor que le gusta el vino y a él aguardiente mientras él dice a ambos aguardiente y tequila, el interesado no contesta sobre si su pareja

es o no supersticiosa o si tiene o no alguna alergia, no contesta el interesado a la pregunta si escuchan o no la radio mientras que ella dice que algunas veces.

Finalmente en la audiencia reservada no queda acreditado la relación afectiva continuada como declaran los interesados si tenemos en consideración que de la documentación aportada la Sra. C. tiene un hijo menor que no es del Sr. C. y que este no menciona en la audiencia reservada, con lo que implicaría que de sus propias manifestaciones teniendo en consideración el tiempo que declaran en que mantienen la relación afectiva habría tenido que simultanear la Sra. C. al menos durante un periodo dos relaciones.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (67ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

El desistimiento de un recurso o la renuncia a la inscripción de un matrimonio ya celebrado aunque este fuera en el extranjero no puede ser admitido conforme a la legislación española., en base al principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don L. de nacionalidad cubana y Doña B. S. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en Cuba el 27 de Octubre de 2006. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio ambos interesados.

2.- Con fecha 17 de febrero de 2011 mediante providencia se solicita se practiquen las oportunas audiencias reservados a los promotores en el registro civil del domicilio donde residen cada uno de los interesados.

3.-Con fecha 01 de agosto de 2011 la Sra. S. solicita se anule el expediente de inscripción de matrimonio.

4.- El Fiscal se opone la desestimación de la inscripción del matrimonio. El encargado dicta auto de 23 de septiembre de 2011 en el que resuelve que no es posible la desestimación de la inscripción del matrimonio y se le requiere para la realización de las audiencias reservadas ,y una vez recibidas estas se procederá a acordar o no la inscripción dl matrimonio.

5.- Notificada la interesada, interpone el correspondiente recurso en relación a la procedencia de la desestimación de la inscripción del matrimonio.

6.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, pero con carácter previo, al trámite de las audiencias reservadas la interesada de nacionalidad española pretende con su desestimación no continuar con la tramitación del expediente y por lo tanto no proceder a la inscripción del matrimonio celebrado en Cuba.

III.- Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de este recurso, debe ceñirse a si es posible que el promotor de un expediente de matrimonio celebrado en el extranjero pueda desestimarlo con anterioridad a que el encargado mediante auto haya adoptado la decisión de inscribir o no un matrimonio. Conforme a la doctrina oficial de este Centro directivo no es posible ni el desistimiento de un recurso o la renuncia, en base al el principio de concordancia del Registro Civil con la realidad extrarregistral artículos 15 y 26 Ley de Registro Civil, reforzado por los artículos 24 y 71 de la misma ley que impone la obligación de promover la inscripción a aquellos a que se refieren los hechos No olvidando que el artículo 61 del Código Civil y artículo 70 de la ley de Registro Civil, dicta que los efectos civiles del matrimonio son desde la celebración.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/ del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (69ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don Y de J. nacido en, La V. (República Dominicana) el día 18 de noviembre de 1987 y de nacionalidad española, adquirida por opción con fecha 1 de febrero de 2001, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio, celebrado en La República Dominicana el 24 de junio de 2009, con Doña A-A. nacida en, La V. (República Dominicana) el día 1 de diciembre de 1978 y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: hoja de datos y acta inextensa de matrimonio local, y del promotor; inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, volante de empadronamiento en M. desde el año 1999 y documento nacional de identidad español, y de la interesada; certificado de nacimiento y cédula de identidad dominicana.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, con el promotor el 17 de mayo de 2011 en el Registro Civil Central y con la interesada en noviembre del mismo año en el Consulado de España en Santo Domingo. Con fecha 7 de marzo de 2012 la Encargada del Registro Civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio por entender que no ha existido verdadera relación y por tanto existe vicio en el consentimiento prestado.

3.- Notificados los interesados, los solicitantes interpone recurso, mediante representante legal, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, argumentando que la relación sentimental existía desde unos años antes del matrimonio y que las posibles discrepancias no pueden motivar la denegación de la inscripción.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informa en el sentido de que procede su desestimación. El Encargado del Registro Civil informa en el mismo sentido y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1^o C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3^o R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocen desde el año 2006, en uno de los viajes del promotor, ya español, a su país de origen, pero en cuanto a su relación sentimental, según la interesada se inició en el propio año 2009, antes sólo se conocían desde el año 2006, cuando el Sr. G. viajó en mayo a la República Dominicana y se casaron el 24 de junio, ambos coinciden en que decidieron casarse por teléfono antes de que él viajara. Tras la boda el promotor permaneció unos meses en su país de origen, hasta noviembre, y no ha vuelto hasta el momento de tramitarse el expediente que ahora se examina, si viajó sin embargo a Argentina en febrero del año 2010 aunque por poco tiempo, según copia de parte del pasaporte que aporta con el recurso.

Respecto a algunos datos personales y familiares, la interesada desconoce desde cuando es español su pareja, declara que más o menos 2 años, es decir 2009 cuando es español desde el año 2001, antes de conocerse. Discrepan en si han convivido antes de contraer matrimonio, según el promotor sí cuando él viajaba a República Dominicana residía en casa de ella y en la suya, según la interesada no. Según la interesada la madre de su pareja vive en M. con él, sin embargo en el volante de empadronamiento presentado con la solicitud de

inscripción la madre del Sr. G. no estaba incluida entre las 8 personas que residían en el domicilio, si lo está en el aportado con el recurso, ya que pese a residir en M. desde el año 1998 el empadronamiento en el domicilio de su hijo es de 13 de mayo de 2011, durante la tramitación del expediente. Por otro lado el promotor manifiesta que conoció a su pareja en el año 2006 en la Universidad, que ella se graduó allí un año antes de la entrevista, es decir 2010, aunque desconoce en qué materia.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central y esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (70ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias (Colombia).

HECHOS

1.- Doña C. nacida en, M. (Colombia) el día 31 de enero de 1988 y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio civil, celebrado en Colombia el 16 de febrero de 2012, con Don O. nacido en M. el día 9 de octubre de 1979 y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos y acta de matrimonio local y, de la promotora; certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas con 6 registros, y del interesado; certificado de nacimiento, pasaporte, fe de vida y estado, soltero, y certificado de movimientos migratorios con 15 registros, desde 28 de febrero de 2005, primera vez que llegó a Colombia a 8 de febrero de 2012, una semana antes de la boda.

2.- Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, el día 20 de marzo de 2012 en el Consulado de España en Cartagena de Indias. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 26 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el Sr. D. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando falta de motivación en la resolución recibida, que además se refiere en uno de sus párrafos a un ciudadano ecuatoriano, que no es el caso, y relatando la relación mantenida con su pareja tanto en Colombia como en viajes a Estados Unidos y Argentina, aportando documentación relativa a esos viajes, fotografías y correos electrónicos.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular informa que procede la desestimación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la

doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Las discrepancias afectan al propio relato del comienzo de la relación, así el interesado declara que se conocieron en noviembre de 2008 en un viaje de vacaciones que él hizo con un amigo, según la promotora se conocían desde hace tres años, lo que teniendo en cuenta la fecha de la entrevista sería marzo del año 2008. También difieren respecto a cuando iniciaron su relación sentimental, según el interesado fue en febrero del año 2009 y según su pareja en noviembre de 2008. Desde entonces el interesado ha viajado en varias ocasiones para ver a su pareja, detallando las fechas, sin embargo la promotora dice genéricamente cuando se le pregunta por las fechas de los viajes que más o menos cada tres meses.

Respecto a datos personales, el interesado no recuerda el segundo apellido de la madre de su pareja, tampoco contesta a la pregunta sobre los hermanos que tiene la Sra. Q. 4, pese a que según declaran toda la familia cercana estuvo presente en la boda. Difieren en con quien convive la promotora ésta dice que con su madre y su pareja dice que ella vive con su madre, su hermana, su cuñado y dos sobrinos, tampoco muestran coincidencia respecto a lo primero que hace la promotora al levantarse, en las películas que a él le gustan y, también discrepan respecto a si han preparado o no la entrevista a realizar en el Consulado, según el interesado apenas la han preparado, según la promotora la han preparado preguntándose cosas para repasar. Por último cuando a la promotora se le cuestiona sobre si conoce los efectos legales de la inscripción del matrimonio en el Registro español, respecto a residir en España y obtener la nacionalidad española responde “claro que sí” y lo mismo cuando se le pregunta si contrajo matrimonio con esos fines, aunque añade que “la idea es vivir con su esposo”. Debiendo significarse respecto a lo alegado por el interesado, en relación con la referencia que en la resolución denegatoria se hace a que el expediente afecta a un ciudadano ecuatoriano, que éste es un error material perfectamente subsanable y, como tal, debe entenderse corregido.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (73ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don N. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 15 de julio de 2011 con Doña I. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, fe de vida y estado de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 13 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros

obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce la fecha del matrimonio ya que dice que se casaron el 15 de agosto de 2011 cuando fue el 15 de julio. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo lado de la cama donde duermen, edades de los padres de la interesada, cómo toman el café, si disponen de vivienda propia, emisora de radio que escuchan, cicatrices que tiene la interesada, nombres de los hermanos de cada uno, etc. No presentan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (74ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

HECHOS

1.- Doña H-I. nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, presentó en el Consulado español en Guayaquil, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Ecuador, el 30 de marzo de 2011, con Don M-E. nacido en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de marzo de 2012 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ecuador entre un ciudadano español, de origen ecuatoriano y una ciudadana ecuatoriana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada no contesta a las preguntas referentes a cómo, dónde y cuándo se conocieron, según el encargado del registro civil consular en la entrevista oral y después de insistir mucho declara que iniciaron su relación sentimental en 2004, sin embargo el interesado declara que fue en 2008. Es de destacar que el interesado se divorcia de su anterior esposa cuatro meses después de obtener la nacionalidad española en el año 2008, fecha en la que según él inicia la relación con la promotora del expediente. La interesada declara que el interesado viaja a su país cada año y concretamente ha estado en los años 2010 y 2012, sin embargo él dice que ha viajado a su país en 2008, 2009, 2010 y 2011, tampoco coinciden en el tiempo que ha estado el interesado en cada viaje. Discrepan en donde decidieron contraer matrimonio ya que ella dice que fuera del Registro Civil y él dice que en P. Ella desconoce todo lo relacionado con la boda, incluso desconoce el menú que se sirvió; así mismo desconoce la fecha de nacimiento del interesado, sus estudios y el colegio donde estudió, salario, domicilio en España, con quien vive, etc.

Por otro lado el interesado desconoce el lugar de nacimiento de la interesada. Desconocen gustos, aficiones y costumbres personales como por ejemplo si practican o no deportes, así ella dice que sí y él dice que ella no practica deporte, y él dice practicar atletismo, mientras que ella dice que él no practica deporte; el interesado dice que le gusta hablar por teléfono con ella y ésta dice que no le gusta, el interesado dice que a ella le han operado de vesícula y ella dice que no le han operado de nada, ella declara que sus comidas favoritas son la guatita y el caldo de bola y él dice que a ella le gusta la carne, los dos dicen que duermen en el lado derecho de la cama, etc. La interesada muestra su deseo de contraer matrimonio para

obtener la nacionalidad española. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 27 años mayor que ella. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (76ª)

IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Don M. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2005, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 27 de mayo de 2011 con Doña I., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado del anterior matrimonio y certificado de defunción de la primera esposa del interesado y certificado de nacimiento con inscripción de divorcio de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de abril de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español, de origen colombiano y una ciudadana colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce la fecha del matrimonio ya que dice que se

casaron el 30 de abril de 2011 cuando fue el 27 de mayo. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo como toman el café, si los hijos de la interesada han tenido algún problema de salud (ella dice que no y él dice que el hijo de ella sufre de ataques epilépticos), habitaciones de la casa donde viven, lo que desayunan, quien propuso el matrimonio, etc. La interesada declara que tenía una oferta de trabajo para viajar a España, la cual le fue denegada. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias

Resolución de 27 de Enero de 2014 (77ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña E. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2000, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 16 de febrero de 2004 en La República Dominicana según la ley local, con Don J-I. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta inextensa de matrimonio local; certificado de nacimiento de la interesada y acta de nacimiento inextensa del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2010 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos desconocen las fechas de nacimiento exactas del otro, el interesado desconoce el lugar de nacimiento de ella declarando que nació en S-C. cuando fue en S-D. tampoco sabe la fecha en que se celebró el matrimonio, cuando adquirió la interesada la nacionalidad española, dirección, declara que trabaja en una casa de familia desconociendo horarios e ingresos, cuando ella dice estar en paro, los nombres que da de los hermanos de ella no coinciden con los que da ella. Discrepan en el tiempo que han convivido ya que él dice que cinco años y ella dice que un año. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (78ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Paz.

HECHOS

1.- Don A-R. nacido en Bolivia y de nacionalidad boliviana, presentó en el Consulado español en La Paz, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Bolivia, el 25 de febrero de 2011, con Doña Mª-L. nacida en Bolivia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2004. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 31 de octubre de 2011 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009. Artículos 15 y 26 de la Ley del Registro Civil.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Bolivia entre una ciudadana española, de origen boliviano y un ciudadano boliviano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano español en el año 1998, se separa legalmente en junio de 2004, obtiene la nacionalidad en junio de 2004 y se divorcia en el año 2010. Declaran que se conocen desde pequeños ya que eran compañeros de colegio, la interesada se traslada a España a los diez años. En 2010 se reencuentran a través de un hermano de él que los vuelve a poner en contacto. El interesado solicitó en 2011 un visado a través de una carta de invitación que le envía ella, dicho visado le fue denegado en enero de 2011, por lo que la interesada viaja a Bolivia el 22 de febrero de 2011 y contraen matrimonio el 25 de febrero. El interesado desconoce la fecha completa de nacimiento de ella, el tiempo que hace que se divorció, teléfono, salario, etc. Ella desconoce la edad del hijo del interesado, el trabajo que tiene ya que dice que tiene una empresa de seguridad cuando trabaja en un taller de mecánica, la empresa para la que trabaja, salario, dirección del interesado, dice que el piso es de su propiedad cuando es alquilado, declara que vive con su hermano cuando él afirma vivir con el dueño del piso, etc. Discrepan en los familiares que fueron a la boda, aficiones de cada uno, etc.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Paz.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (26ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1.- Don Y.H. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia el 24 de junio de 2011 con Doña K. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2009. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 22 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65

C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano colombiano y una ciudadana española, de origen colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños de la interesada (cuando cumplía diez años) y desde entonces, según ella ha viajado dos veces y según él una vez. Discrepan en cuando iniciaron su relación sentimental pues ella dice que al mes de haberse conocido y él dice que el 3 de junio de 2010, también difieren en si han mantenido una relación continuada o no ya que él dice que sí pero ella dice que no que la han mantenido a intervalos. La interesada desconoce la fecha exacta de nacimiento del interesado. Existen discordancias en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo lo que más les irrita, gustos personales, banco con el que operan, películas favoritas, canción favorita de ambos, regalos que sean hecho y motivo, salario de ambos, estudios realizados, así el interesado dice que ambos han estudiado bachiller, mientras que ella contesta que ella ha hecho un curso de cocina, secretariado, comercio y marketing, contabilidad y finanzas, y él dice que bachiller y técnico en informática. El interesado declara que tiene familiares en España concretamente padres, hermanos, tíos y primos, sin embargo ella dice que él le ha dicho que vendría a España en casa de unos tíos, él desconoce donde vive la interesada ya que duda entre B. o T. No aportan pruebas de su relación.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (28ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña L-D. de nacionalidad colombiana y Don L-M. de nacionalidad española presentan en el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en C-S. (República de Colombia) el 20 de noviembre de 2010. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. H.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 01 de abril de 2011 el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia), de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, y que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así declaran que se conocen en septiembre u octubre de 2006 ya que la Sra. P. cuidaba de una tía de su esposo, pero según sus manifestaciones la relación sentimental comienza en agosto de 2008 donde él le pidió matrimonio paseando por la playa. La Sra. P. tuvo que regresar a su país el 15 de septiembre de 2009 por haber sido expulsada por su situación irregular visitándola el Sr. H. el 02 de noviembre de 2010 con intención de casarse, celebrando la boda el 20 de noviembre de 2010 sin que acudiera familiares de ninguno de los contrayentes. Él se ha divorciado con fecha 20 de noviembre de 2009 aunque según sus declaraciones vivía ya separado de hecho hace tiempo y ha convivido esporádicamente con la Sra. P. en casa de su tía mientras que ella dice que ha convivido dos años con él, lo que implicaría que según su declaración han mantenido la convivencia con anterioridad a el inicio de la relación sentimental lo que contradice lo manifestado por el Sr. H. La Sra. P. ha vivido nueve años irregularmente en España hasta su expulsión. Finalmente y sin que sea determinante existe una diferencia de edad de aproximadamente 10 años.

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia), quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal

(cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (30ª)

IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña A. de nacionalidad dominicana y Don J. de nacionalidad española presentan en el Registro Civil Central, expediente para la inscripción de matrimonio civil celebrado en S-D. (República Dominicana) el 26 de Noviembre de 2004. Adjuntan como documentación: hoja declarativa de datos, certificado de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. R.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 27 de Septiembre de 2010 el Encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,

257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.- En este caso se trata de inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero, en el Registro Civil Central, de las audiencias reservadas realizadas se desprende claramente indicios razonables de matrimonio de conveniencia, ya que hay una serie de hechos acreditados en el expediente que justifica la denegación de la inscripción. Así la Sra. S. declara que su pareja emigra a España en 1987 mientras que él dice 1998, que mantiene una relación afectiva desde 2002, mientras que el Sr. H. dice desde el año 2000; que su pareja ha viajado a República Dominicana en dos ocasiones pero no recuerda las fechas. El Sr. H. manifiesta que ha viajado una vez cuando se casó el 26 de noviembre de 2004 y la otra en 6 de enero de 2008 y con una estancia de 15 días cada vez. Por otra parte desconoce la Sra. S. el lugar concreto y la dirección donde reside su pareja en España declarando que él no le ha contado nada, ignora cuánto gana y los estudios que tiene solo sabe que ha estudiado algo en España

VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central,

quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

IV.4.1.2.- Se inscribe-no puede deducirse ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 3 de enero de 2014 (13ª)

IV.4.1.2.- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado de la Registro Civil Consular en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña M. nacida en Colombia y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá (República de Colombia) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 17 de septiembre de 2010 en Colombia con Don J. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. La Encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia) dictó acuerdo con fecha 17 de enero de 2012, denegando la inscripción del matrimonio por presumirse como matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe desfavorable a la inscripción del matrimonio. La Encargada del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

5.- Con fecha 03 de diciembre de 2012 se remite certificación literal de nacimiento de un hijo común de los interesados nacido el 04 de Julio de 2011 en España y reconocido por ambos interesados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

V.- En el caso actual, de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas aportadas por los interesados, no da lugar a la existencia de una duda razonable que permita considerar que estamos ante un matrimonio donde el consentimiento prestado no lo es a los fines previstos para la Institución del matrimonio por

la normativa vigente. Debiendo tener muy especialmente en consideración que con fecha 04 de julio de 2011 y como consta en el registro Civil de Molina de Segura se encuentra inscrito el nacimiento de un hijo de la pareja reconocido por ambos interesados

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 17 de Septiembre de 2010 entre Don J. y Doña M.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 3 de enero de 2014 (23ª)

IV.4.1.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña D-E. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá (República de Colombia) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 3 de enero de 2011 en Colombia con Don M. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado Sr. O.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. La Encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia) dictó auto con fecha 31 de enero de 2012, denegando la inscripción del matrimonio por presumirse como matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe desfavorable a la inscripción del matrimonio. La Encargada del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la

Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

V.- En el caso actual, de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas aportadas por los interesados, no da lugar a la existencia de una duda razonable que permita considerar que estamos ante un matrimonio donde el consentimiento prestado no lo es a los fines previstos para la Institución del matrimonio por la normativa vigente. Sin que se aprecien contradicciones e imprecisiones que puedan fundamentar la denegación de la inscripción, quedando demostrado el mantenimiento de una relación afectiva y continuada en el tiempo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: propone estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 3 de enero de 2011 entre Don M. y Doña D-E.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (23ª)

IV.4.1.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

1.- Doña A. nacida en República Dominicana y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Santo Domingo (República Dominicana) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 13 de marzo de 2009 en S-D. (República de Dominicana) con Don T. nacido en S-D. (República Dominicana) y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y divorcio Sr. M. y Fe de vida y estado Sra. M.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana) dictó acuerdo con fecha 16 de enero de 2012, denegando la inscripción del matrimonio por presumir sé cómo matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe desfavorable a la inscripción del matrimonio. El Encargado del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

5.- Con fecha 15 de noviembre de 2012 tanto el Fiscal como el Encargado del Registro Civil Consular informan que en atención a las nuevas pruebas presentadas no se oponen a la inscripción del matrimonio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª

y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España.

El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace.

Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

V.- En el caso actual, de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas aportadas por los interesados, no da lugar a la existencia de una duda razonable que permita considerar que estamos ante un matrimonio donde el consentimiento prestado no lo es a los fines previstos para la Institución del matrimonio por la normativa vigente, habiendo informado con fecha 15 de noviembre de 2012 tanto el Encargado del Registro Consular como el Fiscal que con la presentación de las nuevas pruebas, no se oponen a la inscripción del citado matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en La República Dominicana el 13 de Marzo de 2009 entre Don T. y Doña A.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (40ª)

IV.4.1.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña M. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá (República de Colombia) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 06 de julio de 2011 en Colombia con Don J-H. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento, fe de vida y estado y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sra. T.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. La Encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (República de Colombia) dictó acuerdo con fecha 18 de enero de 2012, denegando la inscripción del matrimonio por presumir sé cómo matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe desfavorable a la inscripción del matrimonio. La Encargada del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art.

256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

V.- En el caso actual, de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas aportadas por los interesados, no da lugar a la existencia de una duda razonable que permita considerar que estamos ante un matrimonio donde el consentimiento prestado no lo es a los fines previstos para la Institución del matrimonio por la normativa vigente. Así queda acreditada la convivencia desde el año 2004 y su condición de pareja de hecho registrada en Colombia en septiembre de 2006. Documento que permite tener los mismos derechos que adjudica la legislación Colombina a los esposos. Habiendo quedado demostrado en el expediente la relación continuada y afectiva de la pareja.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 06 de Julio de 2011 entre Don J. y Doña M.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (31ª)

IV.4.1.2-Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Don A. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 2 de marzo de 2012, con Doña M-P. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 26 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando numerosas pruebas.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones. Los interesados presentan numerosas pruebas de su relación. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.- Estimar el recurso.
- 2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 2 de marzo de 2012 entre A. y M-P.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (37ª)

IV.4.1.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- Don A-M. nacido en Cuba y de nacionalidad española obtenida el 02 de diciembre de 1994, presentó en el Consulado español en La Habana (Cuba) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 06 de Enero de 2011 en Cuba con

Doña T. de nacionalidad cubana. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio Sr. F.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba) dictó acuerdo con fecha 23 de febrero de 2012, denegando la inscripción del matrimonio por presumir sé cómo matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe desfavorable a la inscripción del matrimonio. El Encargado del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas presentadas ha quedado demostrada la existencia de una relación continuada y afectiva, no pudiendo deducirse que no haya concurrido un verdadero consentimiento matrimonial y más si tenemos en consideración que el matrimonio mantiene una convivencia presencial efectiva y continuada desde septiembre de 2011 en L, residiendo legalmente ambos interesados en dicha localidad.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Cuba el 06 de Enero de 2011 entre Don A-M. y Doña T.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (27ª)

IV.4.1.2- Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

HECHOS

1.- Doña S. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Cartagena de Indias, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 6 de enero de 2012, con Don J-L. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de abril de 2012 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando fotografías, comprobantes de vuelo, etc.

4.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, existen escasas contradicciones. Los interesados presentan pruebas suficientes como fotografías, comprobantes de vuelo, pruebas testificales, etc. Por tanto, aunque como informa el Encargado del Registro Consular es posible la falta de intención de contraer matrimonio a

los fines propios de dicha institución, lo cierto es que no existen elementos de juicio para afirmarlo con suficiente grado de certeza.

V.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.- Estimar el recurso.

2.- Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 6 de enero de 2012 entre J-L. y S.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Cartagena de Indias.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (29ª)

IV.4.1.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

1.- Doña L-J. de nacionalidad española obtenida en el año 2009, presentó en el Consulado español en Santo Domingo (República Dominicana) impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 16 de octubre de 2008 en S-D. (República de Dominicana) con Don M-A. nacido en S-D. (República Dominicana) y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: certificación de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sra. M.

2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana) dictó acuerdo con fecha 03 de mayo de 2011, denegando la inscripción del matrimonio por presumir sé cómo matrimonio de complacencia.

3- Notificado a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal éste emite un informe favorable a la inscripción del matrimonio. El Encargado del Registro Civil Consular remite toda la documentación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

II.- No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 R.R.C.), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º R.R.C.), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 R.R.C.), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.).

IV.- Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

V.- En el caso actual, de los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones y pruebas aportadas por los interesados, no da lugar a la existencia de una duda razonable que permita considerar que estamos ante un matrimonio donde el consentimiento prestado no lo es a los fines previstos para la Institución del matrimonio por la normativa vigente, habiendo informado con fecha 08 de septiembre de 2011 tanto el Encargado del Registro Consular como el Fiscal que con la presentación de las nuevas prueba consideran probada una relación de tracto sucesivo tanto previa como posterior a la celebración del matrimonio, no oponiéndose a la inscripción del citado matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en La República Dominicana el 16 de Octubre de 2008 entre Don M-Á. y Doña L-J.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

IV.4.1.3.- Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad

Resolución de 10 de Enero de 2014 (122ª)

IV.4.1.3-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre un marroquí y una española, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo de la Magistrado Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Doña R. nacida el 1 de enero de 1960 en T, O-B-Y. (Marruecos) y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 17 de julio de 2007, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 5 de enero de 2009 en Marruecos, según la ley local, con Don H. nacido el 8 de diciembre de 1953 en S.(Marruecos) y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, fotocopia de traducción de certificado de divorcio revocable de fecha 1 de octubre de 1997, respecto a un matrimonio anterior de fecha 9 de noviembre de 1994, documento nacional de identidad y certificado de empadronamiento en C-V. (M) desde el 17 de marzo de 2000 y del interesado; no se aporta documentación alguna, ni personal, ni de nacimiento, ni de estado civil.

2.- El Registro Civil Central mediante providencia de fecha 11 de febrero de 2010, a través del Registro Civil de Collado Villalba, requiere a la interesada la aportación del certificado de capacidad matrimonial y que se le entreviste en audiencia reservada. La promotora comparece en el Registro Civil con fecha 10 de marzo siguiente, manifestando las circunstancias de su matrimonio, de su estado civil anterior y de la relación con su actual pareja. Igualmente se persona en el Registro Civil de su domicilio el día 15 de marzo facilitando el domicilio de su pareja, y el 26 del mismo mes para manifestar que no tiene en su poder certificado de capacidad alguno ya que se ha casado en Marruecos por el rito coránico. La Encargada del Registro Civil Central mediante auto de fecha 24 de mayo de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendido ya que la interesada, ciudadana española por resolución de 13 de septiembre de 2005 e inscrita en el año 2007, contrae matrimonio como nacional marroquí, sin aportar el certificado de capacidad matrimonial que se exige en estos casos.

3.- Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando lo que estima pertinente en apoyo de su pretensión y volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto apelado. La Encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 5 de enero de 2009 entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española de origen marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, la contrayente española se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro

Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español.

Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*. Debiendo significarse, además, que en este caso no ha quedado debidamente acreditada la inexistencia de impedimentos previos a la celebración del matrimonio que se pretende inscribir, así el acta de divorcio presentada por la promotora, además de tratarse una copia de la traducción y no el original, refleja que el mismo es revocable durante un periodo de tiempo sin que conste el divorcio definitivo, y con mayor motivo no queda acreditado en el caso del cónyuge extranjero, también divorciado, del que no hay constancia de documentación alguna.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (127ª)

IV.4.1.3-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración “pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º.- Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre una marroquí y un español, cuya nacionalidad anterior era la marroquí.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo de la Magistrado Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don M. nacido el 5 de mayo de 1966 en T. (Argelia) y de nacionalidad española, adquirida por residencia con fecha 7 de mayo de 2004, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 4 de marzo de 2008 en Marruecos, según la ley local, con Doña K. nacida el 3 de febrero de 1989 en D-B-M. (Marruecos) y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, y del promotor; certificado de inscripción

de nacimiento en el Registro Civil español, documento nacional de identidad y certificado de empadronamiento en C. y de la interesada; pasaporte y documento de identidad marroquí, no consta documento alguno de nacimiento ni declaración de estado civil previo.

2.- El Registro Civil Central mediante providencia de fecha 17 de abril de 2009, a través del Registro Civil de Cartagena, requiere la comparecencia de los interesados para llevar a cabo las audiencias reservadas. El promotor comparece en el Registro Civil de su domicilio y aporta copia de acta notarial de divorcio irrevocable, de fecha 25 de diciembre de 2007, respecto de otra anterior no definitiva de 16 de agosto de 2000 y es oído en audiencia reservada. Con fecha 12 de noviembre es requerida la interesada mediante notificación al domicilio del promotor, añadiendo que el cónyuge español deberá aportar el certificado de capacidad matrimonial, expedido por el registro civil de su domicilio y previo a la celebración del matrimonio, la notificación es recibida el 18 de enero de 2010 sin que comparezca ninguno de los interesados. Posteriormente con fecha 22 de septiembre comparece el Sr. B. para poner en conocimiento del Registro Civil Central que su pareja reside en Marruecos, facilitando su domicilio en ese país y solicitando que se tramiten las diligencias a ella dirigidas a través del Consulado General de España en Nador, sin que aporte el documento de capacidad propio que fue requerido. Tras un intento de notificación erróneo por parte del Registro Civil, con fecha 17 de enero de 2011 se solicita del Consulado precitado que requiera a la Sra. K. para que comparezca, lo que hace tras dos intentos previos, con fecha 6 de junio siguiente, y se lleva a cabo la audiencia reservada, que es remitida al Registro Civil Central. La Encargada del mismo mediante auto de fecha 24 de agosto de 2011 deniega la inscripción del matrimonio pretendido ya que el promotor, ciudadano español inscrito como tal el 7 de mayo de 2004, contrae matrimonio como nacional marroquí, sin aportar el certificado de capacidad matrimonial que se exige en estos casos.

3.- Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no es responsabilidad suya la no obtención del certificado porque las autoridades marroquíes no se lo exigieron al seguir considerándolo de esa nacionalidad, solicitando de nuevo la inscripción del matrimonio para posteriormente inscribir a su hija, nacida en el año 2010.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto apelado. La Encargada del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II C. c.) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 C. c.), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 R. R. C) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 4 de marzo de 2008 entre una ciudadana marroquí y un ciudadano español, nacido en Argelia y cuya nacionalidad anterior era la marroquí y como tal consta en el certificado de matrimonio local, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, la contrayente española se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 C. c.). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*. Debiendo significarse respecto a lo alegado por el Sr. B. en su recurso, sobre la situación creada por la no inscripción del matrimonio respecto a la hija en común de los interesados, que para la inscripción de la menor como hija del promotor español no es requisito previo ni vinculante la inscripción del matrimonio entre los progenitores del menor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (31ª)

IV.4.1.3-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

No procede la inscripción porque, no habiendo comparecido la contrayente para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, presentó escrito en el registro Civil de Calahorra a fin de inscribir su matrimonio celebrado en Marruecos el 04 de abril de 2004 con Doña A. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaban como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Recibida toda la documentación el Registro Civil Central, por ser el competente, con fecha 31 de marzo de 2009, se dictó providencia a fin de que se oyera a la interesada en audiencia reservada conforme a lo previsto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil.

3.- El 11 de diciembre de 2011 la Encargada del Registro Civil Central dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción del matrimonio con el razonamiento jurídico de que, no practicada a la Sra. S. la audiencia a que se refiere el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos.

4.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo recurrido. La encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 9, 45, 49, 65 y 73 del Código civil (CC.); 15, 23, 26, 29, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 256, 257, 354 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 4-2ª de junio de 2001, 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002, 13-3ª de octubre de 2003, 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005, 7-1ª de febrero y 13-1ª de noviembre de 2006, 30-2ª de enero de 2007, 24-3ª de abril de 2008 y 3-8ª de octubre de 2011.

II.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I CC. y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.- Mediante este expediente se pretende la inscripción de un matrimonio celebrado en Marruecos el día 04 de abril de 2004 entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí. La solicitud es denegada por el Registro Civil Central el 01 de diciembre de 2011 con el razonamiento jurídico de que, no oído a los dos promotores, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

IV.- Como ha quedado dicho en el fundamento II, el título para practicar la inscripción del matrimonio ha de ser en este caso la certificación expedida por la autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. art. 256.3º RRC) y las declaraciones complementarias oportunas (cfr. art. 256, II RRC). El Registro Civil Central exhorto a fin de que comparecieran los interesados para oírlos en audiencia reservada, Citada la esposa informa el Consulado General de España en Casablanca, esta no compareció por haber sido devuelta la citación por el servicio de correo y además no atiende al número de teléfono que facilitaron los promotores. La audiencia reservada solo puede cumplir su finalidad primordial de formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo comparecido la promotora ni en primera instancia ni en fase de recurso, queda imposibilitada la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su inscripción. Lo anterior no ha de impedir que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), sea factible reiterar el expediente y obtener una resolución sobre el fondo del asunto, siempre que se haya completado la tramitación legalmente prevista.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (79ª)

IV.4.1.3-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero..

No es inscribible el matrimonio hindú celebrado en Bangladesh por una ciudadana española porque no hay certificación del Registro local y porque en el expediente del art. 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Dhaka (Bangladesh)

HECHOS

1.- El 14 de septiembre de 2011 Doña M. de nacionalidad española y nacida en A-C. el 25 de noviembre de 1992, presentó en el Consulado de España en Dhaka impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio hindú que había celebrado en C. (Bangladesh) el 17 de enero de 2011, con Don M. nacional de Bangladesh, nacido en C. el 12 de octubre de 1986. Acompañaba la siguiente documentación: certificado de matrimonio religioso celebrado por el rito hindú, declaración jurada ante notario local de la promotora de que contrajo el

matrimonio que se pretende inscribir, haciendo constar que en Bangladesh no está previsto el registro de los matrimonios hindús y no existe ninguna autoridad que emita certificados de matrimonio, de la promotora; declaración jurada de su conversión a la religión hindú un día antes del matrimonio, y del interesado, certificado de nacimiento y certificado de antecedentes penales. Debe significarse que todos los documentos extranjeros se han aportado traducidos pero sin la debida legalización.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular instruyó expediente, fueron oídos ambos solicitantes en audiencia reservada, al interesado con fecha 17 de octubre de 2011 en el propio Consulado español y a la promotora el 14 de diciembre siguiente en el Registro Civil de A Coruña. El Ministerio Fiscal emitió informe oponiéndose a la inscripción y el 6 de marzo de 2012 el Encargado del Registro Civil consular dictó acuerdo denegando la inscripción del matrimonio, habida cuenta que de las entrevistas cabía deducir que el mismo no se había celebrado de acuerdo con los fines de la propia institución.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación, por sus propios fundamentos, del acuerdo recurrido y el Encargado del Registro Civil se reafirmaba en la denegación acordada por no existir verdadero consentimiento matrimonial y ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005, 8-6ª de junio de 2006 y 17-3ª de mayo y 1-3ª de octubre de 2008.

II.- En el presente caso, la promotora, de nacionalidad española solicita la inscripción en el Registro Civil español del matrimonio que celebró por el rito hindú en Bangladesh el 17 de enero de 2011, inscripción que es denegada por el Registro Civil del Consulado General de España en Dhaka por entender que existen en el mismo vicios de consentimiento y sus fines no son los propios de la institución, habida cuenta las declaraciones de los interesados en las respectivas audiencias reservadas.

III.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. C. C.), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, al parecer, en el año 2011 en Bangladesh.

IV.- La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Consular por haber acaecido el matrimonio en su demarcación y tener el promotor su domicilio en dicho país (cfr. art. 68,II R. R. C.) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 L. R. C. y 85 y 256-3º R. R. C.), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V.- En el caso actual, con carácter previo a la convicción del Encargado sobre el consentimiento matrimonial prestado, debe examinarse la documentación aportada para acreditar el hecho que se pretende inscribir, y se aprecia que no hay certificación del Registro Civil local, sino una mera certificación notarial local que recoge el hecho del matrimonio religioso celebrado

por el rito hindú, otra certificación notarial local de conocimiento del interesado, nacional de Bangladesh y, por último una declaración jurada de la promotora española sobre la existencia de su propio matrimonio hindú y reconociendo que no existe registro de dichos matrimonios y por tanto no hay ninguna autoridad en Bangladesh que certifique la existencia de los mismos. Esta documentación, aportada sin legalizar, en la que ni siquiera constan los datos de los que la inscripción da fe, no se considera por la legislación española título válido para practicar la inscripción, ni tampoco la anotación prevista en el art. 271 del Reglamento o a través de un expediente con valor de presunción (cfr. art. 38-2º L.R.C.). Lo anterior no ha de impedir que, si llega a obtenerse una verdadera certificación registral expedida por el Registro Civil de Bangladesh o si se suministran pruebas fehacientes, sea factible reiterar el expediente y obtener, bien la inscripción, bien la anotación del matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Dhaka (Bangladesh).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (5ª)

IV.4.1.3-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

Se retrotraen las actuaciones para que se practique audiencia reservada al promotor.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio civil remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En fecha 14 de diciembre de 2008, Don A. nacido en M. (Marruecos) el 7 de abril de 1967, de nacionalidad española adquirida por residencia con fecha 21 de junio de 2006, solicitó mediante escrito presentado en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria) la inscripción de su matrimonio celebrado en M. el 16 de marzo de 2005 con Doña Z. nacida el 25 de enero de 1980 en J. (Marruecos), de nacionalidad marroquí. Aportando como documentación acreditativa: acta de matrimonio local y, del promotor; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, certificado de empadronamiento en San Bartolomé de Tirajana y documento nacional de identidad, y de la interesada; extracto de certificado de nacimiento.

2.- Ratificado el promotor el Registro Civil remite lo actuado al Registro Civil Central competente para llevar a cabo, en su caso, la inscripción solicitada. Con fecha 9 de octubre de 2009 el Registro Civil acuerda practicar las audiencias, por separado, con los interesados, con la intervención del Registro de San Bartolomé de Tirajana que, con fecha 23 de febrero de 2010, entrevistó al Sr. M. y lo mismo intentó el Consulado General de España en Agadir con la Sra. O. sin que pudiera llevarse a cabo ya que no pudo notificarse la citación correspondiente, que fue devuelta al Consulado tras no ser reclamada en el servicio de correos marroquí, sin que conste el motivo de la no entrega.

3.- El Encargado del Registro Civil deniega, mediante auto de fecha 11 de abril de 2011, la práctica de la inscripción de matrimonio solicitada al no haberse acreditado la concurrencia de verdadero consentimiento matrimonial al no comparecer la interesada.

4.- Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que la interesada no compareció porque no recibió la notificación, solicitando que se proceda a la audiencia personal como paso previo a la inscripción, designando domicilio a efectos de notificaciones.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicita la confirmación del Acuerdo impugnado. El Encargado del Registro Civil Central confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 49 y 56 del Código Civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008.

II.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 L.E.C.) que el matrimonio es nulo por simulación.

IV.- Visto lo anterior y, habida cuenta que en el caso presente sólo se ha llevado a cabo el trámite de audiencia reservada respecto de uno de los contrayentes, el Sr. M. y de forma excesivamente breve e insuficiente, no constando que se haya realizado a la Sra. O. por no haber comparecido, según la interesada por no haber sido notificada de su citación, y no constando fehacientemente los motivos de la imposibilidad de notificación, es por lo que procede dejar sin efecto el auto dictado y retrotraer las actuaciones para que sean oídos tanto el promotor, de nuevo y de forma más amplia, como la interesada, ambos de reservada

y separada, a los efectos señalados en el artículo 246 del RRC y continuar con la tramitación reglamentaria.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2. Retrotraer las actuaciones para que sean oídos separada y reservadamente el Sr. M. de nuevo, y la Sra. O. con notificación al Ministerio Fiscal, y posteriormente se dicte nuevo Auto por el Encargado del Registro Civil Central.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (129ª)

IV.4.1.3-Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Ecuador por una ciudadana ecuatoriana que luego adquirió la nacionalidad española, porque, aunque sea válido para el ordenamiento extranjero y en materia de capacidad matrimonial rija el estatuto personal de los contrayentes, ambos ecuatorianos en el momento del hecho, es claro que la ley extranjera, aplicable como regla según nuestras normas de conflicto, ha de quedar excluida por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC.).

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Guayaquil (Ecuador)

HECHOS

1.- El 8 de septiembre de 2011 Doña N-C. nacida en C, A. (Ecuador) el 1 de mayo de 1967 y de nacionalidad española adquirida por residencia con fecha 2 de marzo de 2011, presentó en el Consulado General de España en Guayaquil impreso de declaración de datos para la transcripción de matrimonio celebrado el día 19 de febrero de 1981 en Q. (Ecuador) según la ley local, con Don A-A. de nacionalidad ecuatoriana, nacido en Q. el 5 de agosto de 1954. Acompañaba, como documentación acreditativa de su pretensión, certificado de matrimonio local y, del interesado; certificado de nacimiento, cédula de ciudadanía y certificado de movimientos migratorios con 7 registros desde el año 2005 a 2009, y de la promotora; certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, documento nacional de identidad, certificado de movimientos migratorios con 9 registros desde el año 2005 al 2011.

2.- Con fecha 26 de enero de 2012 se realizaron las audiencias reservadas a los interesados. El Ministerio Fiscal informa en el sentido de denegar la inscripción y el 2 de febrero siguiente el Encargado del Registro Civil Consular dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción del matrimonio habida cuenta que las discrepancias apreciadas en las entrevistas generan suficientes dudas sobre los verdaderos fines de lo solicitado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que su matrimonio se celebró hace 31 años y que tienen hijos en común por lo que no es un matrimonio de complacencia, solicitando de nuevo la inscripción. y aportando declaración de que renuncia a

la poligamia, añadiendo que respecto a otras cuestiones que se le formularon en la entrevista que no son importantes.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil Consular informó que entiende que debe confirmarse la resolución apelada y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 8, 9, 12, 43, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC.); 15, 16, 23 y 35 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 66, 68, 256, 257 y 258 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones, entre otras, de 8 de abril, 30 de septiembre y 2-2ª de noviembre de 1999, 14 de diciembre de 2000, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002, 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004; 19-3ª de marzo, 30-4ª de septiembre y 11-1ª de diciembre de 2008; 23-4ª de marzo y 18-2ª de septiembre de 2009, 27-4ª de abril de 2010 y 3-2ª de enero de 2011.

II.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, han de inscribirse, en principio, en el Registro Civil español (cfr. art. 66, I, RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. La inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero y subsistente cuando uno de los contrayentes adquiere la nacionalidad española requiere, además del título documental oportuno o de un expediente (cfr. arts. 256 y 257 RRC), que el enlace sea válido para el ordenamiento español, lo que supone ante todo que no esté incurso en alguna de las causas que impiden su celebración.

III.- En el presente caso la promotora, nacida el 1 de mayo de 1967, de nacionalidad española adquirida por residencia el 2 de marzo de 2011 y ecuatoriana de origen, solicita la inscripción en el Registro Civil español de matrimonio celebrado el día 19 de febrero de 1981 en Ecuador. La inscripción es denegada por el Registro Civil del Consulado General de España en Guayaquil porque del contenido de las audiencias practicadas y documentación del expediente llega al convencimiento de que los fines de dicho matrimonio no eran los propios de la institución.

IV.- El artículo 46 del Código Civil establece que no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados, estableciendo el artículo 48 que dicho impedimento puede ser dispensado, a instancia de parte, a partir de los 14 años por el Juez de Primera Instancia siempre que exista justa causa. En el caso presente, salvo error en la documentación aportada y en lo declarado por la promotora, la Sra. B. nació el 1 de mayo de 1967, por tanto a la fecha del matrimonio 19 de febrero de 1981 era no sólo menor de edad, sino menor de 14 años, estando por tanto plenamente incurso en el impedimento contemplado en la norma. Por ello, aun cuando el matrimonio pueda ser válido para el ordenamiento ecuatoriano y, en principio, rija el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC.) que impide la inscripción de un matrimonio que no puede ser celebrado por estar afectado por impedimento contemplado en el Código Civil español, afectado por tanto de nulidad de acuerdo con el artículo 73 del mismo Código, y que atenta contra la concepción española del matrimonio y afecta directamente a la organización social.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

IV.4.2.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros

Resolución de 3 de enero de 2014 (19ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Don J. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida el 23 de febrero de 2011, presentó ante el Registro Civil Consular de España en Bogotá hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 21 de mayo de 2010 en Colombia con Doña R-Mª. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento, acta de divorcio Sr. M.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante auto de fecha 31 de enero de 2012 la Encargada del Registro Civil Consular deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. La Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en la República de Colombia el 21 de mayo de 2010 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere inmediatamente después la nacionalidad española, con fecha 23 de febrero 2011.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio

habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público. Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos colombianos, celebrado en la República de Colombia, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así declara el interesado conocerse en el año 1985 o 1986 y que desde entonces inician una relación afectiva, que ha viajado a Colombia para ver a su pareja cinco veces mientras que ella solo declara abril de 2011, según la propia documentación aportada por el interesado contrajo matrimonio en Colombia con otra pareja el 21 de junio de 2006 divorciándose el 08 de septiembre de 2008.

Dice el interesado que normalmente él viaja en abril o mayo cuando tiene vacaciones y que en un viaje contrajo matrimonio el 21 de mayo de 2010, que tiene dos hijos en común de 20 y 19 años que residen con él en España mientras que ella dice que residen con ella. Por otra parte el interesado ignora el domicilio de su pareja, los nombres de los mejores amigos de ella, la emisora de radio que escucha o si hace deporte, asimismo no coinciden en los familiares que fueron a la boda o las gafas que utilizan cada uno, igualmente ella dice que ninguno ronca y él dice que él cree que sí.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (27ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

No se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir que ha existido un consentimiento valido en el momento de la celebración del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Encargado del Registro Consular General de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Don H. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida el 06 de octubre de 2008, presentó ante el Registro Consular General de España en Bogotá (República de Colombia) hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 21 de diciembre de 1996 en Colombia con Doña N. de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y certificado de nacimiento hijo de la pareja.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante auto de fecha 18 de enero de 2012 el Encargado del Registro Consular General de España en Bogotá (República de Colombia) deniega la inscripción de matrimonio ya que de los hechos concretos expuestos han de considerarse elementos objetivos suficientes de los que razonablemente cabe deducir la falta de consentimiento válido para la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. El Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Colombia el 21 de diciembre de 1996 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española, con fecha 06 de octubre de 2008.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido inmediatamente después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados Estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos colombianos, celebrado en Colombia, del trámite de audiencia reservada, de las pruebas y alegaciones realizadas cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado lo fue a los fines propios de esta institución. Así aunque en la audiencia reservada existieron pequeñas contradicciones de fechas concretas, de cuando se conocen y cuando iniciaron su relación en lo que se refiere a la confusión del mes pero no del año. Debemos considerar que los interesados han mantenido una relación continuada, fruto de la cual tiene un hijo nacido en España el... de... de 2003 y de nacionalidad española que fue reconocido por ambos cuando residían ambos en España y el Sr. V. no había iniciado su expediente para la concesión de la nacionalidad española por residencia. Que si bien han existido periodos a lo largo de estos 14 años en lo que por diversas razones no han tenido una convivencia física, si han mantenido la relación continuada en el tiempo y que en base a lo anterior, se puede considerar que existió un consentimiento real y efectiva por parte de los interesados para la celebración del matrimonio.

Por lo que teniendo en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, "ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa". Siempre quedará a salvo la posibilidad

de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en B. (República de Colombia) el 21 de Diciembre de 1996 entre Don H. y Doña N.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (31ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en España en el Consulado de Marruecos en Algeciras.

Procede la inscripción por quedar debidamente acreditada la celebración del matrimonio

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Encargada del Registro Civil de Algeciras.

HECHOS

1.- Doña A. nacida en Marruecos y de nacionalidad española obtenida el 17 de mayo de 2008, presentó ante el Registro Civil de Don Benito documentación para la inscripción de su matrimonio celebrado el 07 de noviembre de 2003 en el Consulado de Marruecos en A. (C) con Don I. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de continuidad de matrimonio del Consulado General del Reino de Marruecos en Sevilla, certificado de nacimiento de la interesada, certificado de empadronamiento de ambos interesados, acta de matrimonio del Consulado del Reino de Marruecos en Algeciras.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. La Encargada mediante auto de fecha 02 de febrero de 2012 deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, interponen recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de

diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en España en el Consulado del Reino de Marruecos en Algeciras (C) el 07 de noviembre de 2003 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española, con fecha 17 de mayo 2008.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en

el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos marroquíes, celebrado en España en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras (C), en el trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, no existen contradicciones o desconocimientos de los interesados de datos personales y familiares básicos, debiendo tener además en consideración que la pareja como consta en la documentación aportada tienen dos hijos nacidos en España en el año 2005 y 2009 de los cuales uno al menos ya ostenta la nacionalidad española, quedando por tanto acreditada la relación continuada y afectiva de la pareja y sin que se pueda apreciar la ausencia de un consentimiento válido del matrimonio que se celebró. No obstante el objeto de recurso como ha quedado reflejado en el auto denegatorio de fecha 02 de febrero de 2012 no es la existencia de un vicio en el consentimiento para la celebración del matrimonio, sino es que a juicio de la encargada

del Registro Civil de Algeciras considera que no está debidamente acreditado que sea cumplido los requisitos legales para contraer matrimonio religioso según la legislación marroquí aplicable a los contrayentes al ostentar ambos dicha nacionalidad en el momento de la celebración del matrimonio, entendiéndose la encargada que no consta la intervención del padre o tutor matrimonial de la esposa, ni su presencia física o que este haya expedido autorización en forma válida mediante la intervención de un notario o fedatario público, y existiendo dudas sobre el estado civil de soltera o divorciada de la Sra. M. en el momento de la celebración del matrimonio. Sin entrar a valorar la competencia o no de poder examinar los requisitos legales exigidos para el matrimonio religioso por la legislación marroquí. Las alegaciones y documentación presentada confirman que estuvo presente el padre y tutor matrimonial que además firmó el acta, y que como consta también en la documentación presentada la condición previa a la celebración del matrimonio es de divorciada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en España en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras el 07 de Noviembre de 2003 entre Don I. y Doña A.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Algeciras.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (37ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Procede la inscripción del matrimonio porque hay datos objetivos bastantes para deducir la existencia de un consentimiento matrimonial válido en el momento de la celebración del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Doña A. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida el 22 de febrero de 2011, presentó ante el Registro Civil Consular de España en Bogotá hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 07 de diciembre de 1974 en la República de Colombia con Don H-J. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sra. M.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante auto de fecha 31 de enero de 2012 la Encargada del Registro Civil Consular deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. La Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en la República de Colombia el 07 de diciembre de 1974 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere muchos años después la nacionalidad española, con fecha 22 de febrero 2011.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba

de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En este caso, los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas, las alegaciones de los interesados, así como de las pruebas presentadas, tienen entidad

suficiente como para deducir que ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial en el momento de la celebración del matrimonio. Así consta en el expediente que los interesados tienen dos hijos de comunes nacidos en 1976 y 1983, habiendo quedado demostrado la existencia de una relación continuada en el tiempo y subsistiendo vigente el matrimonio celebrado 07 de diciembre de 1974, sin que puede ser determinante que la interesada lleve residiendo en España los últimos 10 años, habiendo quedado justificado en el expediente que ha viajado al menos a Colombia en el año 2005 y 2008, y que mantienen la relación continuada a través de las comunicaciones telefónicas.

IX.- Por lo que teniendo en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y ordenar que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 07 de Diciembre de 1974 entre Don H. y Doña A.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (25ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1.- Don C-H. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida el 27 de febrero de 2010, presentó ante el Registro Civil Consular hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 29 de mayo de 1982 en Colombia con Doña C. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento,

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante auto de fecha 03 de mayo de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular deniega la inscripción de matrimonio ya que de los hechos concretos expuestos han de considerarse elementos objetivos suficientes de los que razonablemente cabe deducir la falta de consentimiento válido para la celebración del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Cuba el 5 de diciembre de 2008 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere inmediatamente después la nacionalidad española, con fecha 07 de julio 2009.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,

para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación

de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos colombianos, celebrado en Colombia del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución.

Así e Sr. P. declara tener la nacionalidad española desde febrero de 2011 circunstancia desconocida por su esposa, dice que viajó por primera vez a España en el año 2001 y que no regresó a Colombia hasta el 2005 mientras que ella declara que viajó por primera vez en el 2006 y la segunda en el 2008 mientras que él dice 2007. Declara que se comunica con su esposa a la 1.00 am que son 5.00 am en Colombia mientras que ella dice que no tiene hora fija, en relación a los gastos familiares él señala que no han pactado como los atenderán y ella dice que sí. Respecto de los gustos, costumbres y aficiones él declara que toma café solo y no contesta respecto de su pareja mientras que ella dice que ambos café con leche, declara él que no existe ningún lugar que hayan ido juntos con frecuencia y ella dice El P de la C en C.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (26ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.- Nueva documentación

Se retrotraen las actuaciones a fin de que se proceda a emitir un nuevo Acuerdo por el Encargado del Registro Civil Central por haberse aportado documentos esenciales que no pudieron ser tenidos en consideración por éste en el momento de la emisión del Acuerdo de 27 de septiembre de 2010.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don F-E. nacido en Perú y de nacionalidad española, obtenida el 29 de septiembre de 2010, presentó ante el Registro Civil Central hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 19 de marzo de 1993 en Rusia con Doña O-M. nacida Georgia y de nacionalidad española obtenida el 22 de marzo de 2013. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento extranjeros.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2010 el Encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción de matrimonio ya que de la documentación aportada ambos promotores no tienen en ese momento la nacionalidad española y el matrimonio no ha sido celebrado ante ninguna autoridad española sino ante autoridades Rusas celebrando el matrimonio en R. (Rusia)

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa desfavorablemente el recurso. El Encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5.- Con fecha 22 de julio de 2013 y en el trámite de resolución del recurso, se remitan por parte de los interesados certificados de nacimiento de ambos donde consta su nacionalidad española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Rusia el 19 de marzo de 1993 entre dos ciudadanos extranjeros en ese momento de los cuales a fecha actual ambos tienen la nacionalidad española.

III.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

IV.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de

aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

V.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos extranjeros, celebrado en Rusia, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, en el momento de la emisión del Acuerdo del encargado del Registro Civil Central no se acredita documentalmente la condición de nacional español de ninguno de los promotores, dado que cuando iniciaron el expediente y en el momento de la resolución de este uno ostentaba la nacionalidad peruana y otro la rusa, y el matrimonio que se pretendía inscribir se celebró en Rusia ante autoridades de dicho país. En base a lo anterior el encargado del Registro Civil Central dictaminó debidamente que el matrimonio que se pretendía inscribir no se hallaba comprendido en los arts. 1 y 15 e la L.R.C en relación con los arts. 17 y ss. Del CC. al tratarse de nacionales extranjeros y haberse celebrado en el extranjero ante autoridades extranjeras.

VI.- Dado que en materia de Registro Civil no existe el principio de cosa juzgada como ya ha dictaminado este Centro Directivo en sus puestos anteriores y teniendo en consideración los certificados de nacimiento expedidos por el Registro Civil del Puerto de la Cruz donde queda acreditada la condición de nacionales españoles de ambos y en atención al principio de competencia que rige esta materia al tratarse de un matrimonio celebrado en el extranjero en que los interesados están domiciliados en España, procede remitir para el examen nuevamente del expediente al Registro Civil Central. Todo ello teniendo en consideración además el principio de economía procesal

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones al momento previo a la emisión del Acuerdo de 27 de septiembre de 2010 a fin de que se emita uno nuevo donde se considere o no la procedencia de la inscripción del matrimonio solicitado por los promotores en atención a la nueva documentación presentada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (38ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero.

Procede la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir que ha existido un consentimiento matrimonial válido en el momento de la celebración del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don I. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida el 05 de febrero de 2009, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 12 de octubre de 2001 en Senegal con Doña N. de nacionalidad senegalesa. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, certificados de nacimiento, volante de empadronamiento de los interesados y certificados de nacimiento hijos de la pareja.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante acuerdo de fecha 18 de agosto de 2011 la Encargada del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. La Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Senegal el 12 de octubre de 2001 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española, con fecha 05 de febrero de 2009.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de

1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido inmediatamente después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral.

Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español,

deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público. Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados

Estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos senegaleses, celebrado en Senegal, del trámite de audiencia reservada, de las pruebas y alegaciones realizadas cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado lo fue a los fines propios de esta institución. Así ha quedado demostrada la existencia de una relación afectiva directa y continuada en el tiempo, fruto de la cual en la actualidad tienen cinco hijos comunes de los cuales dos han nacido en España y tienen la nacionalidad española.

Por lo que teniendo en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 C.C.) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Senegal el 12 de Octubre de 2001 entre Don I y Doña N.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (61ª)

IV.4.2-Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Don A., nacido en Argelia y de nacionalidad española, obtenida el 06 de Octubre de 2006, presentó ante el Registro Civil Central hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 14 de junio de 2006 en Argelia con Doña H. nacida en Argelia y de nacionalidad argelina. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. Mediante auto de fecha 11 de abril de 2011 el Encargado del Registro Civil deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. El Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Argelia el 14 de junio de 2006 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere inmediatamente después la nacionalidad española, con fecha 06 de octubre 2006.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público. Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos argelinos celebrado en Argelia, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así la interesada declara que vive en Argelia y que no tienen hijos en común mientras que el interesado declara que tuvieron una niña que falleció a las pocas horas de nacer circunstancia no mencionada por ella. Manifiesta la interesada que se conocieron por vecindad en el año 1992 ó 1993, mientras que él declara que vive en España desde el año 1991 y que viaja cada año permaneciendo en Argelia entre 15 días y un mes y que iniciaron su relación sentimental en el año 2001. Declara la interesada que decidieron casarse a los cinco años de noviazgo en su casa, que ella no trabaja y que él tiene una peluquería mientras que él dice que ha trabajado de repartidor pero que ahora está en el paro. Por otra parte manifiesta la interesada que tiene 11 hermanos y que él tiene 9 mientras que él dice que ella tiene 8 hermanos y él también tiene 8 hermanos.

Finalmente en el trámite de audiencia reservada el interesado da una dirección del domicilio de su pareja y al día siguiente comparece para dar una nueva dirección rectificando la anterior.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 27 de Enero de 2014 (65ª)

IV.4.2- Matrimonio celebrado en el extranjero.

1º. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Encargada del Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia).

HECHOS

1.- Don D-A. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida el 05 de Octubre de 2010, presentó ante el Registro Consular de España en Bogotá (República de Colombia) hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 05 de mayo de 2010 en Colombia con Doña A. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta inextensa de matrimonio local, certificados de nacimiento y fe de vida y estado Sr. H.

2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. Mediante auto de fecha 27 de febrero de 2012 la Encargada del Registro Consular deniega la inscripción de matrimonio.

3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugna el mismo e interesa la confirmación del auto apelado. La Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Colombia el 05 de mayo de 2010 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere inmediatamente después la nacionalidad española, con fecha 05 de octubre 2010.

III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). Para evitar en

la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI.- Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el Registro Civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 L.R.C.), la doctrina oficial de este Centro Directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 C.c.), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de esta Dirección General en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII.- Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español,

deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 C.c.) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 C.c.), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 C.c.), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos colombianos celebrado en Colombia, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así existen una serie de desconocimiento e imprecisiones de datos básicos personales y familiares como que la interesada no contesta a la pregunta de si su pareja ha contraído con anterioridad matrimonio, declara que no recibieron ningún regalo de boda mientras que él dice flores y ropa, no coinciden en los apodos que usan él dice “gordo” y “bebe” y ella manifiesta que a él “flaco, amor, gordo” y a ella “amor y gorda”.

Por otra parte declaran conocerse e iniciar su relación en el año 2008, siendo que el interesado reside en M. desde el año 2004, que ha viajado en cuatro ocasiones a visitarla septiembre de 2008 permaneciendo un mes y quince días, enero de 2009 permaneciendo un mes, diciembre de 2010 permaneciendo un mes y enero de 2012 permaneciendo 19 días, la interesada dice como segundo viaje enero de 2010. Contraen matrimonio por poderes en mayo de 2010 y acuden familiares solo del interesado y este no contesta a la pregunta de los familiares de su pareja que fueron a la boda ella dice que ninguno. La interesada no contesta a la pregunta de si su pareja tiene vehículo, declara que ha viajado a Ecuador y él no lo menciona, dice que vive con su madre el esposo y sus hermanos mientras que él solo dice que con su madre. El Sr. H. no contesta a muchas de las preguntas sobre su cónyuge como a qué hora empieza a trabajar, qué licor le gusta, si ha sufrido alguna operación, si tiene vehículo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

IV.7.- Competencia

IV.7.1.- Competencia en expedientes de matrimonio

Resolución de 10 de Enero de 2014 (131ª)

IV.7.1-Competencia del Registro Civil en autorización de matrimonio

La competencia del Registro Civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del RRC) por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del juez encargado del Registro Civil Único de Madrid

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el 21 de octubre de 2011, Don R y Doña S. ambos nacidos en Bolivia y de nacionalidad boliviana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil, en la localidad de A. Se acompañaba la siguiente documentación: permiso de residencia, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento en el municipio de T. de la interesada y pasaporte, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran sucintas entrevistas con los interesados. El Ministerio Fiscal dice que habiendo manifestado el interesado que vive en B. por motivos de trabajo y que reside con su pareja en T. deviene imposible por razones de incompetencia territorial conocer del expediente, procediendo la inhibición a favor del Registro Civil de Torrelodones. Mediante auto de fecha 4 de enero de 2012, el encargado del Registro Civil se declara incompetente para la instrucción del expediente ya que en el trámite de audiencia reservada la interesada manifiesta que vive en T. hace siete años, añadiendo que viven juntos desde hace siete años, aunque el interesado se desplaza a B. por razones de trabajo, y el interesado por su parte, ha confirmado que vive con su pareja en T. aunque esté empadronado en M. en casa de su padre.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio alegando que el interesado vive en M. en la calle A. nº_ en casa de sus padres.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, de la interposición del recurso, éste interesa la desestimación del mismo. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 40, 51 y 57 del Código Civil y los artículos 238 y 247 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 11-4ª y 12-1ª de enero y 12-4ª de diciembre de 2007; 14-6ª de octubre de 2008; y 30-9ª de abril de 2009.

II.- Pretenden los solicitantes, ambos de nacionalidad boliviana, obtener autorización para contraer matrimonio civil en la localidad de Madrid, cuando los interesados viven según los certificados de empadronamiento y sus propias declaraciones en T. El interesado alega en el recurso que su verdadero domicilio en M. en la calle A. nº_, casa de sus padres. Sin embargo según la documentación obrante en el expediente el interesado ha estado empadronado en B. desde noviembre de 2009 hasta un mes antes de empezar el expediente matrimonial.

III.- De acuerdo con el artículo 238 RRC, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del registro civil correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. En este sentido, hay que señalar que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil en general y por el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC., conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual”, esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. En consecuencia, corresponde al encargado del Registro Civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados y de las circunstancias acreditadas, como, por ejemplo, tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia – no de mera estancia - respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (cfr. art. 40 CC.) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (cfr. art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

Por ello, el juez encargado puede y debe examinar de oficio su propia competencia (cfr. arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal respecto de la persona que promueve expediente registral.

IV.- A la vista de estas circunstancias, y de todo lo expuesto anteriormente, no se considera acreditada la residencia efectiva de los interesados ya que a tenor de los certificados de empadronamiento aportados y sus propias declaraciones los interesados viven en T. el interesado vivió en B. desde el año 2009 y se empadrona en M. un mes antes de iniciar el expediente matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto, por los interesados y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Único de Madrid.

Resolución de 13 de Enero de 2014 (13ª)

IV.7.1-Competencia del Registro Civil en autorización de matrimonio.

La competencia del Registro Civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del RRC) por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del juez encargado del Registro Civil Único de Madrid

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el 18 de abril de 2011, Don P-M-Á. nacido en España y de nacionalidad española y Doña G. nacida en Nigeria y de nacionalidad nigeriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado donde figura como residente en N de I. (C), hasta el 30 de marzo de 2011, fecha en la que se empadrona en M. y pasaporte, partida de nacimiento, declaración de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada donde figura como residente en V de la S. desde el 8 de febrero de 2010.

2.- Se requiere al promotor a fin de que aportara certificación actualizada de empadronamiento en N de I. y a la interesada a fin de que justificara su domicilio desde abril de 2009 hasta febrero de 2010. Los interesados aportan la documentación requerida. Se celebran sucintas entrevistas en audiencia reservada con los interesados donde manifiestan que viven en N de I. El Ministerio Fiscal informa favorablemente. Mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2011, el encargado del Registro Civil se declara incompetente para continuar con la tramitación del expediente al no tener ninguno de los interesados domicilio en M.

3.- Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio alegando que el interesado vive en Madrid.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, de la interposición del recurso, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 40, 51 y 57 del Código Civil y los artículos 238 y 247 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 11-4ª y 12-1ª de enero y 12-4ª de diciembre de 2007; 14-6ª de octubre de 2008; y 30-9ª de abril de 2009.

II.- Pretenden los solicitantes, español y nigeriana, obtener autorización para contraer matrimonio civil en la localidad de M. cuando los interesados viven según los certificados de empadronamiento y sus propias declaraciones en N de I. El interesado se empadrona en M. apenas quince días antes de iniciar el expediente de matrimonio.

III.- De acuerdo con el artículo 238 RRC, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del registro civil

correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. En este sentido, hay que señalar que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil en general y por el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC., conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual”, esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. En consecuencia, corresponde al encargado del Registro Civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados y de las circunstancias acreditadas, como, por ejemplo, tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia – no de mera estancia - respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (cfr. art. 40 CC.) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (cfr. art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local). Por ello, el juez encargado puede y debe examinar de oficio su propia competencia (cfr. arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal respecto de la persona que promueve expediente registral.

IV.- A la vista de estas circunstancias, y de todo lo expuesto anteriormente, no se considera acreditada la residencia efectiva de los interesados ya que a tenor de los certificados de empadronamiento aportados y sus propias declaraciones los interesados viven en N de I. el interesado se empadrona en M. apenas quince días antes de iniciar el expediente matrimonial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto, por los interesados y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Único de Madrid.

V. DEFUNCIÓN

V.1.- Inscripción de la defunción

V.1.1.- Inscripción de la defunción fuera de plazo

Resolución de 30 de Enero de 2014 (24ª)

V.1.1- Inscripción fuera de plazo de defunción.

Para que pueda decidirse en expediente gubernativo la inscripción de la defunción de una persona cuando su cadáver ha desaparecido o ha sido inhumado es preciso que en las actuaciones llegue a probarse la certeza de la muerte en grado tal que se excluya cualquier duda racional.

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de defunción remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el ministerio fiscal contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Ourense.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Ourense en fecha 19 de noviembre de 2009 Doña R-Mª. mayor de edad y domiciliada en O P de A. (O). promueve expediente de inscripción fuera de plazo de la defunción de D. exponiendo que falleció el 29 de julio de 1947, día siguiente al de nacimiento, en el lugar del alumbramiento, sito en P-S-M. que la defunción no fue inscrita dentro del plazo legal por motivos que desconoce, que el párroco del lugar de enterramiento manifestó que, como no llegó a ser bautizada, no figura registro del hecho, que el médico que la asistió falleció, también sin dejar registros, y que el único familiar directo de la difunta con interés legítimo en el expediente es su cónyuge. Acompaña libro de familia y certificados en extracto de defunción de los progenitores de la no inscrita y testamento otorgado por el padre en 1994 en el que manifiesta que tiene un hijo llamado V. y al expediente se unen inscripciones de nacimiento de los hermanos D. A. y V. nacidos, respectivamente, el 28 de julio de 1947, el 15 de junio de 1956 y el 28 de marzo de 1959, e inscripción de defunción del mediano, fallecido el 19 de mayo de 1958.

2.- El 25 de noviembre de 2009, comparecieron el hermano, que tras mostrar su conformidad con la solicitud formulada por su cónyuge y promotora del expediente, manifestó que renuncia al trámite de alegaciones que pudiera corresponderle; y dos testigos que declararon que, por razones de vecindad y por haber asistido al entierro en S-M. les consta que V. y M. tuvieron en julio de 1947 una hija a la que pusieron por nombre D. y que falleció al día siguiente.

3.- El Ministerio Fiscal se opuso a la inscripción de defunción instada ya que no consta certificado médico que acredite la realidad del hecho y este no puede ser sustituido por el testimonio de dos personas, previsto para las inscripciones fuera de plazo de nacimientos pero no de defunciones, y el 30 de diciembre de 2010 la Juez Encargada, apreciando que las pruebas aportadas acreditan sin lugar a dudas la defunción y cuantas circunstancias deben constar en la inscripción, dictó auto acordando inscribir el fallecimiento de una mujer de nombre D. ocurrido en S-M. O P de A. (O). en hora que no consta del día 29 de julio de 1947, hija de V. y de M. de estado civil soltera, nacida en O P de A. (O) el 28 de julio de 1947 e inscrita en el Registro Civil de O P de A. (O) al Tomo 49, Página 162.

4.- Notificada la resolución a la promotora y al ministerio fiscal, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, argumentando que no hay certeza absoluta del hecho del fallecimiento, ya que para acreditarlo se cuenta solamente con el testimonio de dos personas que no declaran que presenciaron la existencia del cadáver sino que asistieron al entierro, que según la promotora la interesada falleció el mismo día en que su padre fue al Registro Civil a inscribir el nacimiento y que, dada la fecha de este, la pretendida difunta pudiera seguir viviendo.

5- De la interposición se dio traslado a la promotora, que impugnó el recurso haciendo suyos los razonamientos expuestos en la resolución apelada, y la Juez Encargada informó que entiende que se han aportado pruebas suficientes del fallecimiento, es especial la declaración de los testigos cuya declaración, como vecinos del lugar que son, excede la "fama" de muerte y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 193 a 197 del Código Civil (CC.), 2042 a 2044 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 (LEC); 16, 18, 26, 42, 81, 86, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 68, 278 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13 de marzo y 10 de mayo de 1967, 2 de mayo de 1972, 10 de septiembre de 1979, 6 de octubre de 1995, 2-7ª de septiembre y 29-2ª de octubre de 1996, 16-2ª de abril de 1998, 18 de junio de 1999, 14 de febrero de 2000, 7-1ª de noviembre de 2001, 4 de junio de 2002, 18-3ª de septiembre de 2003, 28-2ª de octubre de 2005; 23-3ª de febrero, 29-9ª de marzo y 14 de abril de 2007; 14-10ª de noviembre y 2-5ª de diciembre de 2008; 24-1ª de mayo, 22-3ª de junio y 13-6ª de diciembre de 2010, 26-5ª de julio de 2012 y 10-3ª de junio de 2013.

II.- Se pretende por la promotora la inscripción de la defunción de la hermana de su cónyuge exponiendo que falleció el 29 de julio de 1947 en el lugar del alumbramiento, acaecido el día anterior en P-S-M. (O). La Juez Encargada del Registro Civil de Ourense, apreciando que las pruebas aportadas acreditan sin lugar a dudas la defunción y cuantas circunstancias deben constar en el asiento, acordó la práctica de la inscripción mediante auto de 30 de diciembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, formulado por el ministerio fiscal.

III.- Para que pueda decidirse en expediente gubernativo la inscripción de la defunción de una persona cuyo cadáver ha desaparecido o ha sido inhumado es preciso que en las actuaciones llegue a probarse la certeza de la muerte en grado tal que excluya cualquier duda racional. Dispone el artículo 86 LRC que "será necesaria sentencia firme, expediente gubernativo u orden de la autoridad judicial que instruya las diligencias seguidas por muerte violenta, que afirmen sin duda alguna el fallecimiento, para inscribir éste cuando el cadáver hubiere desaparecido o se hubiere inhumado antes de la inscripción". Por su parte, el artículo 278, I RRC establece que "cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado, no basta para la inscripción la fama de muerte, sino que se requiere certeza que excluya cualquier duda racional". La primera cuestión que suscitan los preceptos transcritos es el sentido y alcance de las locuciones "sin duda alguna" y "certeza que excluya cualquier duda racional" y es evidente que tales expresiones no incluyen los supuestos de presunción, aun calificada, de muerte en los que no cabe sino instar la correspondiente resolución judicial declarativa de la ausencia o del fallecimiento. Quedan asimismo fuera del precepto las situaciones en las que hay dudas fundadas o razonables de la ocurrencia del óbito y resultan tan solo probadas la fama, la posibilidad o incluso la probabilidad de la muerte. Pero tampoco cabe interpretar la expresión "certeza indudable", que recogía la norma reglamentaria en su redacción original, en forma tal que imposibilite su aplicación práctica, pues la ausencia de toda duda solo se produciría en presencia del cadáver, incurriendo la norma en contradicción al fijar como presupuesto la desaparición

de aquel. De ahí que la reforma operada en el Reglamento del Registro Civil por el Decreto 1138/1969, de 22 de mayo, modificara la redacción del art. 278 sustituyendo la expresión “certeza indudable” por la de “certeza que excluya cualquier duda racional”. El sentido de esta reforma ya había sido adelantado por la resolución de 10 de mayo de 1967 de este Centro Directivo, que explica que la certeza requerida para que en estos casos prospere el expediente registral no ha de ser absoluta, en el sentido de que excluya toda duda sobre la realidad del hecho y la inexistencia del hecho contrario, pues tal clase de certeza nunca podría formarse en el ánimo del juzgador. Por tanto, ha de tratarse de la llamada certeza moral, caracterizada en su lado positivo por la exclusión de toda duda racional y en el negativo por no cerrar en términos absolutos la posibilidad contraria y basada en motivos objetivos y no en el sentimiento o en la opinión meramente subjetiva del juzgador.

IV.- En este caso, de las diligencias practicadas no se ha obtenido testimonio de personas que vieran el cadáver o tuvieran noticia cierta y directa del fallecimiento y de las circunstancias en las que se produjo -se cuenta únicamente con la declaración de dos vecinas del lugar que manifiestan que asistieron al entierro-; el hermano de la presunta difunta, que comparece en el expediente a fin de mostrar su conformidad con lo solicitado por su cónyuge, renuncia expresamente al trámite de alegaciones que pudiera corresponderle; no se aporta parte facultativo -según la peticionaria, el médico que la atendió también falleció- ni registro eclesiástico -al parecer el párroco del lugar de enterramiento manifestó a la promotora que no figura en dicho registro porque no llegó a ser bautizada-; se aduce que falleció, al día siguiente de nacer, el 29 de julio de 1947 -consta que el 29 de julio de 1947 es el día en que el padre fue al Registro Civil a inscribir el nacimiento-; la defunción de un hermano, fallecido antes de cumplir los dos años, fue inscrita al día siguiente de acaecer, no parece que, a raíz de la expedición a los progenitores de duplicado de libro de familia en julio de 1987, se promoviera expediente para la inscripción de defunción no practicada dentro de plazo legal y ni siquiera puede estimarse justificada la fama de la muerte, habida cuenta de que en la actualidad la pretendida finada tendría 66 años.

V.- Así pues, lo actuado impide alcanzar el grado de certeza necesario para excluir “sin duda alguna” el hecho de la muerte y el lugar y el momento en que aconteció y no permite obtener la certeza moral de lo manifestado por la promotora que es imprescindible para que la inscripción de fallecimiento pretendida pueda ser autorizada en expediente gubernativo.

VI.- Como este Centro Directivo viene declarando a partir de la resolución de 26 de febrero de 1980, la posibilidad que abre el artículo 86 de la Ley del Registro Civil de inscribir la defunción cuando el cadáver hubiese desaparecido o se hubiese inhumado no pretende, como se señala en la Exposición de Motivos, “desvirtuar los preceptos del Código sobre la declaración de fallecimiento” ya que, en los supuestos contemplados en la Ley, se sabe “sin duda alguna” que la persona ha fallecido y, para los casos en los que lo que desaparece no es el cadáver sino la persona viva, sigue vigente el régimen especial de la declaración de fallecimiento al amparo de los artículos 193 y siguientes del Código Civil y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. arts. 2042 a 2044 LEC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: a salvo el derecho de la promotora de solicitar la declaración de fallecimiento de la hermana de su cónyuge en el procedimiento oportuno, estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Ourense.

VI. TUTELAS

VI.1.- Tutela, patria potestad y emancipación

VI.1.1.- Recursos sobre tutela, patria potestad y emancipación

Resolución de 30 de Enero de 2014 (52ª)

VI.1.1-Administración de bienes de menores de edad.

Procede la inscripción de la designación de administrador de bienes dispuesta en testamento respecto de los bienes hereditarios de los hijos de la testadora durante la minoría de edad de estos.

En el expediente sobre inscripción de nombramiento de administrador de bienes de menores remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra providencia de la encargada del Registro Civil de Pontevedra.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2006 en el Registro Civil de Pontevedra, Doña M^a-J. solicitaba la inscripción marginal de su nombramiento como administradora de bienes de los menores F-J. y L-M^a. en virtud del nombramiento efectuado en testamento por la madre de aquellos, Doña M^a-L. Aportaba la siguiente documentación: copia del testamento otorgado ante notario el 23 de diciembre de 2003 donde se contiene la designación de la promotora como administradora de bienes de los hijos de la testadora mientras sean menores de edad, inscripciones de nacimiento de F-J. (nacido el ... de ... de 1990) y L-M^a. (nacida el ... de ... de 1996) con marginal indicativa de la existencia de escritura pública autorizada por notario el 23 de diciembre de 2003 e inscripción de defunción de M^a-L. el 25 de abril de 2005.

2.- La encargada del Registro Civil de Pontevedra dictó providencia el 13 de noviembre de 2006 denegando la inscripción solicitada porque no es inscribible el cargo de administrador mientras subsista, como ocurre en este caso, la patria potestad del padre, siendo subsidiarios de esta los cargos tutelares y constando ya en las respectivas inscripciones de nacimiento de los menores las anotaciones marginales procedentes según lo dispuesto en el artículo 223 CC.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso alegando que, según los artículos 283 a 286 del Reglamento del Registro Civil, el cargo de administrador designado en documento público para salvaguardar el patrimonio de los menores es inscribible en el Registro Civil con independencia de la patria potestad que corresponde al padre, pues dichos menores son titulares de un patrimonio hereditario en virtud del fallecimiento de su madre distinto del patrimonio del progenitor, dado que existía separación de bienes entre los cónyuges.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Pontevedra remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 164, 223 y 227 del Código Civil (CC.); 1, 39, 46, 46 bis, 46 ter y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 283, 284 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II.- Otorgado testamento en el que la testadora dispuso que durante la minoría de edad de sus dos hijos “la administración de los bienes objeto de la herencia no corresponderá en ningún caso a su padre, sino que se ejercerá con sujeción a las reglas de la tutela por Doña M^a-J”, esta última, mediante escrito dirigido al registro correspondiente, interesó la constancia registral de su designación como administradora. La encargada dictó providencia declarando no haber lugar a lo solicitado porque subsistía la patria potestad del padre y los cargos tutelares son subsidiarios de esta, señalando también que en las inscripciones de nacimiento de los hijos ya constaban “las anotaciones marginales procedentes, según lo dispuesto en el artículo 223 del CC.”. Dicha providencia constituye el objeto del recurso.

III.- La testadora, como se ha dicho, dispuso de determinados bienes en favor de sus hijos y designó a la persona que debía administrarlos mientras fueran menores de edad (art. 227 CC.) privando de tal administración al padre, titular de la patria potestad. Esta cláusula testamentaria es compatible con lo que dispone el artículo 223 CC. sobre la facultad de los padres de ordenar cualquier disposición sobre los bienes de sus hijos menores de edad. De otro lado, en relación con los bienes de los hijos, la regla general es que su administración corresponde a los padres (art. 164 CC.), pero el propio Código establece tres excepciones, la primera de las cuales se refiere a “los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos” (art. 164. 1º CC.).

IV.- A la vista de estos preceptos no puede prevalecer el criterio de que, subsistiendo la patria potestad, no cabe la constancia registral del cargo de un tercero como administrador designado en testamento por ser el titular de la patria potestad representante legal de sus hijos no emancipados y, en consecuencia, administrador de los bienes de los mismos, puesto que el caso expuesto es subsumible en la primera de las excepciones establecidas en el citado artículo 164 CC.

V.- De otro lado, el artículo 283 RRC, declara inscribibles los cargos de cualquier representante que tenga nombramiento especial y asuma la administración y guarda de un patrimonio y el 284 RRC declara no inscribible la patria potestad, pero deja a salvo (art. 284.1º RRC) “la inscripción de administradores nombrados para los menores”, en clara referencia a los supuestos contemplados en los números 1 y 2 del artículo 164 CC.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso y dejar sin efecto la providencia apelada.
2. Inscribir la designación de la recurrente como administradora de los bienes hereditarios de los menores en la Sección IV del Registro Civil, conforme a lo dispuesto por la madre en la cláusula testamentaria antes mencionada y que se extienda nota marginal de referencia en las inscripciones de nacimiento de los interesados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 39 LRC.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Pontevedra.

VII. RECTIFICACION, CANCELACION Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES

VII.1.- Rectificación de errores

VII.1.1.- Rectificación de errores art 93 y 94 LRC

Resolución de 3 de enero de 2014 (51ª)

VII.1.1.-Rectificación de apellido en inscripción de nacimiento.

No acreditado el error denunciado, no prospera el expediente de rectificación del primer apellido del inscrito en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Sevilla en fecha 18 de octubre de 2010 Don A. Jiménez, mayor de edad y domiciliado en V de la C. (S), solicita la rectificación en su inscripción de nacimiento del primer apellido inscrito a fin de que conste "C." o, subsidiariamente, "C.-Giménez" exponiendo que esta es la grafía originaria del apellido inscrito y que "C." le pertenece legítimamente. Acompaña certificaciones literales de nacimiento de su padre y propia, en las que el apellido consta en la forma "Jiménez" que aduce errónea, y de su abuelo y su bisabuelo paternos, inscritos con el apellido "Giménez", y partidas eclesiásticas de nacimiento de otros ascendientes.

2.- Ratificada la solicitud por el promotor, el ministerio fiscal nada opuso a que se rectifique el apellido "Jiménez" por "Giménez", el Encargado dispuso que se una a lo actuado testimonio de la resolución recaída en el expediente gubernativo núm. 37/10, con el resultado de que con fecha 6 de septiembre de 2010 la Dirección General, por delegación del Ministro de Justicia, denegó en expediente de cambio de apellidos idéntica petición: primer apellido "C." o, subsidiariamente, "C.-Giménez"; y el 7 de diciembre de 2010 el Juez Encargado, visto que las inscripciones de nacimiento de los ascendientes evidencian error en la grafía del apellido "Jiménez" pero no respecto al apellido "C.", dictó auto disponiendo estimar parcialmente la solicitud y rectificar en la inscripción de nacimiento el apellido "Jiménez", que pasa a ser "Giménez".

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la rectificación se solicita con el fin de recuperar un apellido que siempre ha pertenecido a la familia, se perdió por las circunstancias registrales de la época y hoy tienen interés sentimental en recuperar y que de la documentación aportada se deduce que se produjo un error en la inscripción de nacimiento de su bisabuelo y que A. Giménez. A. Ch./C. y A. Giménez, son la misma persona y solicitando nuevamente que se rectifique su primer apellido, Jiménez, en el sentido de que conste que es "C." o, subsidiariamente, "C.-Giménez".

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que nada opuso a lo interesado, y el Juez Encargado, dando por reproducidos los hechos y los fundamentos de derecho del auto impugnado, informó desfavorablemente el recurso y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003; 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Consta en las actuaciones que el interesado promueve expediente de cambio de apellidos, a fin de que se sustituya el primero de los inscritos, Jiménez, por “C.” o, subsidiariamente, por “C.-Giménez”, que concluye con resolución de la Dirección General, dictada con fecha 6 septiembre de 2010 por delegación del Ministro de Justicia, denegando la solicitud. El promotor, en vez de impugnar la mencionada resolución en la vía correspondiente, inicia el 18 de octubre de 2010, prácticamente sin solución de continuidad, un segundo expediente a fin de que vuelva a considerarse su petición, en esta ocasión por la vía del expediente de rectificación de errores, contraviniendo las reglas de competencia y el régimen de recursos legalmente establecido. El Juez Encargado, visto que las inscripciones de nacimiento de los ascendientes evidencian error en la grafía del apellido “Jiménez” pero no respecto al apellido “C.” y que lo que está pidiendo el promotor no es una rectificación sino un cambio de apellidos, dispuso estimar parcialmente la solicitud y rectificar la inscripción de nacimiento en lo que se refiere al apellido “Jiménez”, que pasa a ser “Giménez”, mediante auto de 7 de diciembre de 2010 que, respecto a la rectificación no acordada, constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia del error denunciado.

IV.- Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso, la existencia de error registral queda en entredicho en el propio escrito inicial, en el que se solicita una determinada rectificación y subsidiariamente otra, y no ha llegado a probarse ya que en ninguna de las inscripciones registrales de nacimiento aportadas, del año 1884 en adelante, consta el apellido “C.” que se aduce correcto y, aunque constara, sería irrelevante porque la finalidad del expediente de rectificación de errores es lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. arts. 24 y 26 LRC. y 94 RRC) y no la recuperación de apellidos perdidos en las familias por el transcurso del tiempo.

Acreditado que el primer apellido del bisabuelo paterno y del padre y el abuelo paterno del inscrito es “Giménez” o “Jiménez”, ese es el apellido que, con una u otra grafía, ha trascendido a la inscripción de nacimiento del abuelo paterno del interesado y sucesivamente a su padre, a él mismo y a sus hijos. Aunque la inscripción de nacimiento no dé fe de los apellidos, el valor legitimador y probatorio de toda inscripción (art. 2 LRC) impone que la debatida haya de estimarse correcta y carente de error, salvo en lo referente al apellido “Jiménez”, cuya rectificación a “Giménez” ha sido decidida por el encargado en el auto apelado, que procede confirmar.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 3 de enero de 2014 (53ª)

VII.1.1.-Rectificación de error en inscripción de nacimiento

No acreditado el error invocado, no prospera el expediente de rectificación en una inscripción de nacimiento del nombre de la madre de la inscrita.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Sabadell (Barcelona) en fecha 18 de febrero de 2009 Doña E. de doble nacionalidad española y boliviana, nacida en A-I. (Bolivia) el 9 de junio de 1973, solicita la rectificación de su inscripción de nacimiento exponiendo que su madre se llama "Dorilda" y no "Dora", como por error consta. Acompaña fotocopia de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, practicada el 4 de diciembre de 2008 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 9 de mayo de 2008; de certificado de nacimiento boliviano, de hoja de declaración de datos para la inscripción, de comparecencia en el Registro Civil de Sabadell para hacer efectiva la nacionalidad española, de NIE caducado y de pasaporte boliviano. El Juez Encargado del Registro Civil de Sabadell levantó acta de la comparecencia por duplicado y dispuso la remisión de uno de sus ejemplares, junto con las copias de documentos aportadas, al Central, en el que tuvo entrada el 30 de junio de 2009.

2.- El Ministerio Fiscal, visto que de la documentación aportada al expediente no se ha acreditado el error alegado, se opuso a lo solicitado y el 14 de abril de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil Central dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación instada, toda vez que al practicarse la inscripción se ha consignado como nombre de la madre de la inscrita el que consta en el certificado de nacimiento boliviano.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y, en comparecencia en fecha 8 de septiembre de 2010 en el Registro Civil del domicilio, a la promotora, esta manifestó su disconformidad y su voluntad de recurrir y se tuvo por interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Pretende la solicitante que en su inscripción de nacimiento, practicada en diciembre de 2008 tras adquirir la nacionalidad española por residencia, se rectifique el nombre de su madre alegando que se llama "Dorilda" y no "Dora", como por error consta. El Juez Encargado del Registro Civil Central, toda vez que al practicarse la inscripción se ha consignado como

nombre de la madre de la inscrita el que consta en el certificado de nacimiento boliviano aportado, dispuso que no ha lugar a la rectificación instada mediante auto de 14 de abril de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el Registro del error denunciado.

IV.- El nombre de la madre de una persona es en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubierta por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso no ha sido probado el error denunciado ya que el nombre consignado a la madre en la inscripción de nacimiento es el que consta en el certificado del Registro local aportado al expediente de nacionalidad y lo acreditado en este documento no queda desvirtuado por la simple declaración de la inscrita que, sin aportar certificado del Registro extranjero que rectifique en debida forma el que sirvió de base para la práctica del asiento, manifiesta que el dato es erróneo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de enero de 2014 (56ª)

VII.1.1.- Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

No prospera el expediente para rectificar el primer apellido de la promotora y, en consecuencia, el segundo de su hijo en sus respectivas inscripciones de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripciones de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil de Barakaldo (Bizkaia).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 6 de septiembre de 2010 en el Registro Civil de Pamplona, Doña M^a-I. H. D. solicitaba la rectificación de su primer apellido en la inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil de Barakaldo para hacer constar que el correcto es "H de S" y no el que figura consignado. Adjuntaba la siguiente documentación: volante de empadronamiento; libro de familia; inscripción de nacimiento de R-M^a. H. H. (prima de la interesada, según declaración de esta misma en su escrito de solicitud) con marginal de rectificación de error practicada en octubre de 1972 para hacer constar que el apellido paterno de la inscrita es H de S. cuadro genealógico; inscripción de nacimiento de la promotora, de su padre, J. H. V., y de su abuelo, R. H. A. y varias partidas de bautismo, prácticamente ilegibles, de otros ascendientes acompañadas de sus correspondientes fichas de solicitud al Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia.

2.- Al expediente se incorporó acta suscrita por el hijo de la promotora para solicitar que en su inscripción de nacimiento se practique la misma rectificación instada por su madre. Consta DNI, inscripción de nacimiento de F de B. N. H. y volante de empadronamiento.

3.- Remitido el expediente, con informe desfavorable, al Registro Civil de Barakaldo, competente para su resolución, la encargada de este dictó auto el 25 de octubre de 2010 denegando la rectificación por no resultar acreditado el error invocado en tanto que no se ha probado la cadena sucesoria desde el último ascendiente que ostentó el apellido solicitado, nacido en 1741, ya que los documentos presentados son prácticamente ilegibles y, en cualquier caso, sostiene el auto que no procede rectificar el supuesto error remitiéndose a la sexta o séptima generación cuando en el tiempo del que datan los documentos probatorios aportados no existían normas sobre la imposición de apellidos.

4.- Notificada la resolución, la interesada presentó recurso alegando, entre otras cosas, que los documentos presentados cuentan con el certificado de autenticidad del Obispado de Bizkaia, que de tales documentos resulta acreditado que sus antepasados ostentaron el apellido en la forma pretendida hasta F-E. H de S. y A. y L. nacido en 1741, quedando el primer apellido solo en "H" a partir del hijo de este, F. H. L. nacido en 1770, y que, con independencia de la existencia o no de una regulación legal en épocas pasadas, el uso y costumbre impedían modificar los apellidos de forma arbitraria, cumpliendo entonces los registros eclesiásticos la función hoy atribuida a los registros civiles. Por último, argumentaba la recurrente que varios de sus familiares han obtenido ya la rectificación solicitada, como demostró con la aportación al inicio del expediente de la inscripción de nacimiento de R-M^a. H de S. H. Al escrito de recurso se adjuntaron, entre otros documentos ya reseñados, copias literales expedidas por el Obispado de Bilbao con las transcripciones del texto de las partidas de nacimiento de los ascendientes de la interesada hasta F-E. U de S. A. nacido en 1741.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación considerando ajustada a derecho la resolución recurrida y reiterando que tanto la interesada como su padre y su abuelo figuran inscritos con el apellido H. no siendo admisible remontarse a la sexta o séptima generación para acreditar el pretendido error. La encargada del Registro Civil de Barakaldo se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 19-1^a de febrero de 2001, 21-2^a de octubre de 2004, 27-4^a de junio de 2006, 25-5^a de noviembre de 2008, 23-3^a de febrero, 10-3^a de junio y 8-3^a de julio de 2009 y 3-16^a de septiembre de 2010.

II.- Pretende la promotora la rectificación de su primer apellido en su inscripción de nacimiento para hacer constar que el correcto es H de S. y no H. como actualmente figura, alegando que el apellido completo pertenece a sus antepasados y figuró en las partidas de bautismo de estos hasta 1741. La encargada denegó la rectificación por no considerar acreditada la existencia de error.

III.- En materia de errores registrales la regla general es la de que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC) aunque los arts. 93 y 94 admiten la rectificación por expediente si concurren determinadas circunstancias. Pero para ello, en todo caso, es necesario que quede acreditada la existencia del error que se denuncia y esto no ha sido probado en el presente caso. El error invocado recae sobre el primer apellido de la recurrente, que, según ella, es H de S. y no H. como consta en su inscripción de nacimiento y en las de su padre y su abuelo. Como documentos probatorios aporta varias partidas de

bautismo correspondientes a algunos de sus ascendientes que se remontan hasta el llamado F-E. U de S. A. nacido en 1741 y último de los que fueron inscritos, según la interesada, con el apellido en la forma supuestamente correcta pero, en tal caso, la rectificación supondría sustituir el actual H. por U de S. y no el que la promotora pretende. Por otra parte, es razonable admitir inscripciones de nacimiento de ascendientes de dos o tres generaciones anteriores, aunque se trate de partidas de bautismo previas a la existencia de los registros civiles, para probar la existencia de errores por contraste con los datos que figuran en el asiento que se trata de rectificar pero, según ha declarado en otras ocasiones este centro directivo, no tiene sentido remontarse a la sexta generación, como en el caso presente, para intentar demostrar que se cometió un error al inscribir un nacimiento en un tiempo en el que no existía ningún tipo de norma en relación con la imposición de apellidos.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Barakaldo (Bizkaia).

Resolución de 3 de enero de 2014 (58ª)

VII.1.1.-Rectificación de error en inscripción de matrimonio.

Prospera el expediente de rectificación del apellido de la interesada en su inscripción de matrimonio al quedar acreditado el error invocado.

En las actuaciones sobre rectificación de apellido en inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2010 ante el Registro Civil de Telde la Sra. O. L. de nacionalidad ucraniana, solicitaba la rectificación de su apellido en la inscripción de matrimonio practicada en España, donde se ha hecho constar su anterior apellido de casada, S. en lugar del apellido de soltera, que es L. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de matrimonio celebrado en A. el 9 de julio de 2000 entre el ciudadano italiano G-M. y O. S. de nacionalidad ucraniana, certificado de nacimiento ucraniano de O. L. certificado de empadronamiento, pasaporte y tarjetas de residencia en España de ambos cónyuges.

2.- Ratificada la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 16 de abril de 2010 denegando la rectificación pretendida por no considerar acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso reiterando la pretensión y aportando certificado ucraniano del cambio de apellido registrado el 20 de marzo de 2004 de O. S. por O. L. y certificado de divorcio el 16 de junio de 1998 donde consta la atribución a la interesada a partir de ese momento del apellido L.

4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, consideró acreditado el error e interesó su estimación. El encargado del Registro Civil de Telde remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 8-2ª de octubre de 2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de noviembre de 2005; 3-4ª de mayo de 2006; 2-5ª de abril, 27-8ª de septiembre y 28-1ª de noviembre de 2007; 9-7ª de julio y 9-8ª de mayo de 2008 y 27-8ª de febrero de 2009.

II.- Solicita la interesada la rectificación de su apellido en la inscripción de matrimonio practicada en España alegando que el que se hizo constar es el que adoptó con motivo de su primer matrimonio y no el de soltera, que es el que en realidad le correspondía cuando contrajo matrimonio en España por segunda vez.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo.

Los apellidos son menciones de identidad, por lo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente en una inscripción, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley del Registro Civil. Concretamente, el artículo 93.1º prevé la rectificación de las menciones erróneas de identidad siempre que esta quede indudablemente establecida por las demás circunstancias de la inscripción, lo que sucede en este caso toda vez que constan en el expediente la certificación de nacimiento local, la de divorcio del matrimonio anterior de la recurrente con atribución de nuevo apellido y la de la formalización de recuperación del apellido de soltera que, según tales documentos, es el solicitado L.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y ordenar que se proceda a la rectificación del apellido de la interesada en su inscripción de matrimonio para hacer constar que el correcto es L.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

Resolución de 3 de enero de 2014 (59ª)

VII.1.1.- Rectificación de error

No prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento al no quedar acreditado error en la consignación del primer nombre de la inscrita.

En el expediente sobre rectificación del nombre de la inscrita en una inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Telde el 17 de marzo de 2010, Doña A-G. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la rectificación del nombre de su hija Zeila-Nadiusca en la inscripción de nacimiento de esta alegando que el correcto es Sheila-Nadiuska y no el que, por error, se ha hecho constar. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Telde de Zeila-Nadiusca. nacida el ... de ... de 1993, DNI y certificado de empadronamiento familiar.

2.- Al expediente se incorporó el cuestionario de declaración de datos para la inscripción cumplimentado en su día y, una vez ratificada la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 15 de junio de 2010 estimando parcialmente la pretensión en cuanto al segundo nombre, que debe ser Nadiuska, tal como figura en la hoja declaratoria de datos, y denegando la rectificación correspondiente al primero por no resultar acreditado en este caso el error alegado.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso reiterando que la grafía correcta del primer nombre de la inscrita es Sheila y no Zeila.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su estimación. El encargado del Registro Civil de Telde remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil; 12 y 206 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 14-1ª y 2ª de octubre y 11-1ª de noviembre de 2002; 13-1ª, 3ª y 5ª y 22-2ª de enero, 12-1ª y 5ª y 28 de febrero, 1-2ª, 16-1ª y 26-1ª de abril y 9-1ª, 29-1ª y 2ª de mayo y 3-3ª y 7-4ª de junio de 2003; 24 de julio de 2004; 14-2ª de marzo de 2005; 18-3ª de abril y 11-7ª de diciembre 2008 y 30-4ª de septiembre de 2010.

II.- El nombre propio de una persona es una mención de identidad en su inscripción de nacimiento (art. 12 RRC) por lo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la ley. En este caso ha quedado acreditado, y así lo reconoce el encargado en la resolución recurrida, el error relativo al segundo nombre de la interesada, pero no ocurre lo mismo respecto al primero, pues el que se ha hecho constar es el mismo que figura en el cuestionario de declaración de datos para la inscripción cumplimentado en su momento y firmado por la declarante, madre de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (38ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

1º.- No acreditado el error por la documentación en cuya virtud se practicó la inscripción, no prospera el expediente de rectificación del nombre de la inscrita en su inscripción de nacimiento.

2º.- Por economía procesal y por delegación, la Dirección General de los Registros y del Notariado examina si la pretensión deducida pudiera ser acogida por la vía distinta del expediente de cambio de nombre y la deniega, porque no hay justa causa para cambiar "Ariadna" por "Ariadne".

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Telde en fecha 22 de enero de 2010 Doña E. mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito a su hija Ariadna. nacida en T. el ... de ... de 2007, por "Ariadne", exponiendo que este último es el usado habitualmente por la menor en todos los actos de su vida social y privada. Acompaña certificación literal de nacimiento y un par de documentos a fin de acreditar el uso por la inscrita del nombre propuesto y se une testimonio del cuestionario para la declaración de nacimiento. En el mismo día, 22 de enero de 2010, los dos representantes legales de la menor ratificaron la solicitud, manifestando la promotora que en su día se hizo constar como nombre el de Ariadna sin saber exactamente como se escribía, que se enteraron apenas una semana después y que quiere que se corrija antes de que se formalicen más documentos en los que figure el nombre de forma incorrecta; y por el Juez Encargado se tuvo por promovido expediente gubernativo de cambio de nombre y se acordó requerir a la solicitante a fin de que aporte certificado de empadronamiento y la prueba que considere oportuna, presentando el 26 de enero de 2010 el documento pedido, certificado de bautismo y una página de Internet donde consta el nombre en la forma que, proveniente del griego, aduce correcta.

2.- El Ministerio Fiscal, estimando que, apareciendo la menor inscrita con el nombre que consta en el documento a cuya virtud se practicó la inscripción, no se ha acreditado el error que se pretende rectificar, se opuso a lo solicitado y el 19 de marzo de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo denegar la subsanación del error alegado.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la niña asume como suyo el nombre "Ariadne" y muestra rechazo si la llaman Ariadna y que un pedagogo les recomienda intentar subsanar el error a fin de evitar problemas durante su desarrollo.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informó que, acreditados los errores por la prueba practicada, procede que se acceda a subsanarlos y el Juez Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 41, 59.4º, 60 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 206, 209, 210, 342, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la Orden ministerial

JUS/2225 de 5 de octubre de 2012, y las resoluciones, entre otras, de 4-1ª de enero de 1996, 27-1ª de enero de 1997, 2-1ª de julio y 3-2ª de noviembre de 1999, 8-4ª de marzo y 4-2ª y 5ª de octubre de 2000; 10-7ª de mayo y 3-1ª y 7-2ª de diciembre de 2001; 24-2ª de abril, 10-4ª de mayo y 18-3ª de diciembre 2002; 6-2ª de junio y 22-3ª de septiembre de 2003, 4-1ª de junio de 2004, 27-5ª de febrero de 2007, 11-3ª de febrero y 3-4ª de junio de 2009, 1-6ª de septiembre y 4-1ª de octubre de 2010, 29-2ª de noviembre de 2011 y 28-33ª de junio de 2013.

II.- Solicita la promotora la rectificación en la inscripción de nacimiento de su hija del nombre que consta, Ariadna, exponiendo que en el momento de la declaración del nacimiento no sabían cómo se escribía pero que apenas una semana después se enteraron de que la forma correcta es Ariadne. El Juez Encargado, considerando que el nombre inscrito no contiene error, pues así consta en el documento a cuya virtud se practicó el asiento, dispuso denegar la subsanación instada mediante auto de 19 de marzo de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, el artículo 94.1º de la Ley del Registro Civil admite la rectificación por expediente, con dictamen favorable del Ministerio Fiscal, de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción” y, en este caso, no ha llegado a probarse el error denunciado, puesto que el cuestionario para la declaración de nacimiento unido al expediente acredita que el nombre fue inscrito tal como había sido propuesto por las personas facultadas para elegirlo.

IV.- Conviene no obstante examinar si la pretensión deducida pudiera ser acogida por la vía distinta del expediente de cambio de nombre de la competencia general del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC. y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), de esta Dirección General, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y que razones de economía procesal aconsejan dicho examen (cfr. art. 354 RRC), dado que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la incoación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V.- La solicitud de la promotora tampoco puede ser estimada por esta vía ya que uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

VI.- La antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso ya que evidentemente es variación mínima la sustitución de la “a” final de Ariadna, nombre correctamente escrito conforme a las reglas ortográficas de las lenguas españolas, por una “e”.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

2º.- Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), no autorizar el cambio del nombre inscrito, Ariadna, por “Ariadne”.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (39ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de nacimiento

La rectificación en una inscripción de nacimiento de datos de los que hace fe requiere, en principio, acudir a la vía judicial. En este caso, además, no está acreditado el error denunciado.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil Central en fecha 28 de septiembre de 2009 Don S. de nacionalidad española adquirida por residencia el 17 de febrero de 2005, expone que en la inscripción de su nacimiento, practicada en el Registro Civil Central el 19 de julio de 2006, se incurrió en el error de hacer constar como lugar de nacimiento B-B. en vez de A-B. que es lo correcto. Al escrito se unió certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación se pretende y el 12 de abril de 2010 la Juez Encargada dispuso requerir al promotor certificado literal de nacimiento expedido por el Registro Civil de su país de origen, debidamente legalizado, que contenga los datos esenciales de la inscripción y el 24 de mayo de 2010 aportó copia literal de acta de nacimiento y sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Alhucemas (Marruecos) de 10 de mayo de 2010 por la que, a solicitud del interesado, se completa la fecha de nacimiento, año 1958, con la indicación del día y el mes, 1 de enero.

2.- El ministerio fiscal, a la vista de los antecedentes, se opuso a lo interesado y el 10 de noviembre de 2010 la Juez Encargada dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación del error denunciado, no evidenciado de la confrontación con la certificación de nacimiento que sirvió de base para la práctica de la inscripción.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que considera necesario rectificar el error y poner el lugar correcto de nacimiento y aportando, como prueba documental, copia simple de traducción de acta de nacimiento fechada el 29 de agosto de 2007.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso, por cuanto el acuerdo apelado es plenamente ajustado a derecho y, unida a las actuaciones traducción de la partida que sirvió de base para la práctica de la inscripción de nacimiento, la Juez Encargada informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 137, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 18-1ª de marzo de 1999, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª y 19-3ª de mayo de 2004, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 31-5ª de enero, 24-2ª de abril y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo y 28-1ª de septiembre de 2009; 15-5ª de julio y 6-16ª y 24-2ª de septiembre de 2010, 18-3ª de noviembre y 1-3ª de diciembre de 2011 y 19-56ª de diciembre de 2012.

II.- Pretende el promotor la rectificación en la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, practicada en julio de 2006 tras adquirir la nacionalidad española por residencia, del lugar en el que acaeció el hecho, exponiendo que lo correcto es A-B. y no B-B. como erróneamente consta. La Juez Encargada, visto que el error denunciado no se evidencia de la confrontación con la certificación de nacimiento que sirvió de base para la práctica de la inscripción, dispuso que no ha lugar a la rectificación solicitada mediante auto de 10 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El lugar de nacimiento de una persona no es en su inscripción de nacimiento una simple mención de identidad (cfr. art. 12 del Reglamento del Registro Civil) susceptible de rectificación, si se demuestra errónea, por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1º de la Ley de Registro Civil, sino un dato esencial de la inscripción, del que esta hace fe (cfr. art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria, conforme al criterio general establecido en el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. En este caso se comprueba que, conforme al artículo 137, regla 4ª, RRC, en la inscripción de nacimiento se han consignado el término municipal -B-B-, la provincia -A- y el país -Marruecos- que la certificación del Registro local expresa y, no prevista reglamentariamente la constancia de entidades administrativas menores, no cabe apreciar error en la no inscripción de la cabila, la fracción y finalmente el aduar de B. que el promotor aduce como lugar de nacimiento porque, pese a constar en el Registro extranjero, no es dato inscribible conforme a las reglas registrales españolas y, por tanto, su omisión no es un error susceptible de rectificación. Debe tenerse en cuenta, además, que la rectificación mediante expediente gubernativo de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción” (cfr. art. 94.1 LRC) requiere dictamen favorable del ministerio fiscal y, en este caso, los emitidos tanto antes del dictado de la resolución como tras la presentación del recurso son desfavorables.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (42ª)

VII.1.1-Rectificación de apellido en inscripción de nacimiento

No acreditado el error denunciado, no prospera el expediente de rectificación del primer apellido del inscrito en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Jerez de la Frontera (Cádiz).

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil de Jerez de la Frontera en fecha 3 de febrero de 2010 un Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don A-J. L. B. mayor de edad y domiciliado en J. insta expediente gubernativo de rectificación de apellidos, a fin de que su mandante ostente como primero “de L”, exponiendo que este era el apellido del

abuelo paterno del inscrito y que, por error, no apareció en la inscripción de nacimiento de su hijo y padre de su representado ni en las de sucesivos descendientes. Acompaña copia de escritura de poder para pleitos otorgado por varias personas, entre ellas el interesado, al actuante, a otro procurador y a un letrado; y fotocopia del libro de familia del interesado y de certificación literal de defunción de su abuelo paterno, A. de L. M. La Juez Encargada dispuso citar al promotor a fin de que se ratifique en la solicitud y aporte certificaciones literales de nacimiento de su abuelo, de sus hijos y propia y de matrimonio propia.

2.- El 11 de marzo de 2010 el interesado ratificó la solicitud, manifestando en su comparecencia que pretende la rectificación de error en sus inscripciones de nacimiento y de matrimonio y en las de nacimiento de sus tres hijos, y por la Juez Encargada se acordó incoar expediente de rectificación. En el mismo día, 11 de marzo de 2010, el representante legal presentó certificación literal de nacimiento del interesado, constancia de empadronamiento en J. y copia de su DNI y del libro de familia de sus padres; el 20 de mayo de 2010 certificación literal de partida de bautismo del abuelo paterno y el 14 de junio de 2010 certificaciones literales de nacimiento del abuelo y de los hijos de su representado. El ministerio fiscal dijo que, acreditado el error por la documentación obrante en el expediente, ha lugar a la rectificación del asiento, y el 26 de julio de 2010 la Juez Encargada del Registro Civil de Jerez de la Frontera informó que no comparte los criterios del ministerio fiscal y acordó remitir el expediente al Registro Civil de Sevilla, por ser de su competencia la continuación y resolución del mismo.

3.- Recibidas las actuaciones en el Registro Civil de Sevilla el 9 de agosto de 2010, el Juez Encargado dispuso pasarlas al ministerio fiscal, a fin de que emita informe sobre la competencia, este informó que, producido el error en inscripciones practicadas en el Registro Civil de Sevilla, su Encargado es el competente para resolver el expediente; y el 24 de septiembre de 2010 el Encargado, habida cuenta de que la rectificación que se solicita en el escrito inicial es la de la partida de nacimiento que obra en el Registro Civil de Jerez de la Frontera y que, rectificadas estas, basta exhorto para que en el de Sevilla se extiendan las notas que corresponda, dictó auto declarando la falta de competencia de ese Registro Civil.

4.- Una vez notificada la resolución al representante legal del interesado y declarada firme, el Encargado del Registro Civil de Sevilla dispuso la remisión del expediente al de Jerez de la Frontera cuya Encargada, visto que el solicitante no ha aportado certificación de nacimiento de su padre y que de las pruebas presentadas no se acredita que exista un error de los regulados en los artículos 93 y 94 LRC, dictó en fecha 1 de diciembre de 2010 auto disponiendo denegar la solicitud de rectificación de error instada.

5.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al representante del promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la denegación se basa en los apellidos inscritos al padre de su representado cuando desde el primer momento han expuesto que el error se produjo precisamente al inscribirse el nacimiento del padre, que tal vez al dictarse el auto haya ocasionado confusión el hecho de que el padre del interesado se llamara A. L. M. y su abuelo A. de L. M. y que lo único que solicitan es que el interesado pase a llevar el apellido del abuelo, por error modificado al inscribir al padre.

6.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, entendiendo que el error resulta evidente de la confrontación con la inscripción de nacimiento del abuelo y que cabe deducir que en la inscripción de nacimiento no aportada del padre existe el mismo error, se adhirió al recurso de apelación y la Juez Encargada del Registro Civil de Jerez de la Frontera dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras de 12 de abril y 4-5^a

de noviembre de 2003; 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- El interesado promueve expediente a fin de que en su inscripción de nacimiento se rectifique el error advertido en su primer apellido, L. exponiendo que lo correcto es “de L.” La Juez Encargada del Registro Civil de Jerez de la Frontera, visto que el solicitante no ha aportado certificación de nacimiento de su padre y que de las pruebas presentadas no se acredita que exista un error de los regulados en los artículos 93 y 94 LRC, dispuso denegar la rectificación instada mediante auto de 1 de diciembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el representante legal del interesado y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia del error denunciado.

IV.- Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso no ha llegado a probarse el error denunciado porque, aun cuando la inscripción de nacimiento del abuelo paterno del interesado expresa que su padre y su abuelo paterno se apellidan “de L.” el nacido consta identificado como A. L. M. e, inscrito en su nacimiento con el apellido “L”. “L.” es el apellido que debe trascender, como así ha sido, a la inscripción de nacimiento del padre del interesado, después a las del interesado y sus hermanas y finalmente a las de los hijos del interesado.

Aunque la inscripción de nacimiento no dé fe de los apellidos el valor legitimador y probatorio de toda inscripción (art. 2 LRC) impone que haya de estimarse correcta la inscripción debatida y, en consecuencia, deba confirmarse el auto apelado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Jerez de la Frontera (Cadiz).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (43ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de nacimiento

No evidenciado el error por confrontación con los documentos en cuya virtud se practicó la inscripción, no prospera el expediente de rectificación del nombre de la inscrita en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Almendralejo (Badajoz).

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Almendralejo en fecha 16 de junio de 2010 Don F. y Doña R. mayores de edad y domiciliados en dicha población, exponen que en la inscripción de nacimiento de su hija Yisela nacida en A. el ... de ... de 2009, existe error en el nombre de la inscrita y solicitan que se disponga la rectificación de la inscripción, en el sentido de que conste que su nombre es "Gisela". Acompañan fotocopia de sus respectivos DNI, volante colectivo de empadronamiento en A. y copia de certificación de partida de bautismo y de solicitud de emisión de tarjeta sanitaria en las que el nombre de la menor figura en la forma que los padres aducen correcta. Ratificado el escrito inicial por los promotores, el ministerio fiscal interesó que se aporte certificado de la inscripción cuya rectificación se pretende y, sucesivamente, el expediente por el que se acordó la inscripción.

2.- Recibida la anterior documentación, el ministerio fiscal, dado que la menor tiene el nombre interesado por los padres, se opuso a lo solicitado y el 22 de noviembre de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo denegar la rectificación de error pretendida.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que está acreditado el error denunciado, ya que en documentos públicos y oficiales el nombre que le consta a la menor no es Yisela sino Gisela, y aportando como prueba documentación sanitaria.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, visto que los nuevos documentos presentados acreditan la pretensión de los promotores, se adhirió al recurso y el Juez Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Los representantes legales de una menor promueven expediente a fin de que en la inscripción de nacimiento de esta se rectifique el error consistente en que se consignó como nombre Yisela en vez de "Gisela". El Juez Encargado, visto que la menor tiene el nombre interesado por los padres, dispuso denegar la rectificación de error solicitada mediante auto de 22 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por los promotores y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III.- El nombre de una persona es en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubierta por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley. En este caso no ha quedado probada la existencia en el Registro del error denunciado puesto que, aportado al expediente testimonio de la declaración de nacimiento firmada por el padre en cuya virtud se practicó la inscripción, resulta que en ella consta que el nombre elegido es Yisela.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Almendralejo (Badajoz).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (46ª)

VII.1.1-Rectificación de apellido en inscripciones registrales

No acreditado el error denunciado, no prospera el expediente de rectificación del primer apellido del interesado en su inscripción de nacimiento y demás inscripciones en las que constan sus menciones de identidad.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripciones registrales remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Valladolid.

HECHOS

1.- Mediante escrito con entrada en el Registro Civil de Valdepeñas (Ciudad Real) en fecha 13 de mayo de 2010 Don J. H. G. mayor de edad y domiciliado en dicha población, promueve expediente gubernativo de rectificación de los asientos del Registro Civil en los que constan sus menciones de identidad, a fin de que se suprima la divergencia entre el primer apellido inscrito y el familiar, que es "H de M". Acompaña la siguiente documentación: fotocopia de DNI y certificado de empadronamiento en V. certificaciones literales de las inscripciones de nacimiento y matrimonio propias y de nacimiento de su hija cuya rectificación interesa; inscripción de nacimiento de un hermano con marginal practicada el 13 de enero de 2010 para dar constancia de que, en virtud de resolución registral dictada el 4 de diciembre de 2009 por el encargado del Registro Civil de Valdepeñas, el primer apellido del inscrito es H de M. y no el que consta por error; certificaciones literales de nacimiento de su padre y de su abuelo paterno, ambos apellidados H. y extractos de partidas eclesiásticas de bautismo en 1868 y de matrimonio en 1892 de M-M. H de M.

2.- Ratificada la solicitud por el promotor, el ministerio fiscal, estimando acreditado el error, interesó que en la inscripción de nacimiento figure que su primer apellido es H de M. y no H. como indebidamente figura, y la Juez Encargada del Registro Civil de Valdepeñas dispuso la remisión del expediente al de Valladolid, en el que tuvo entrada el 21 de octubre de 2010.

3.- El ministerio fiscal emitió informe favorable a la rectificación interesada y el 8 de noviembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Valladolid, entendiendo que no se trataría de una rectificación de error, ya que el primer apellido del promotor y de su padre concuerdan en las respectivas inscripciones de nacimiento, sino más bien de un expediente sobre cambio de apellidos, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación instada.

4.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los mismos fundamentos que él ha argüido han sido admitidos a dos hermanos suyos por el Registro Civil de Valdepeñas, que ha procedido a la rectificación del error existente, y aportando, como prueba documental, fotocopia de las inscripciones de nacimiento de ambos hermanos con sendas marginales de rectificación de error.

5.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que dijo que, siendo cierto lo que alega el Encargado en el auto combatido, procede estimar el recurso porque la función del Registro debe ser reflejar la realidad y esta es que el promotor lleva razón; y el Juez Encargado del Registro Civil de Valladolid informó que entiende que las argumentaciones expuestas en el recurso de apelación no desvirtúan los fundamentos expuestos en la resolución impugnada, que ahora ratifica, y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras de 12 de abril y 4-5ª

de noviembre de 2003; 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- El interesado promueve expediente a fin de que en las inscripciones registrales en las que constan sus menciones de identidad -de nacimiento y de matrimonio propias y de nacimiento de su hija- se rectifique su primer apellido a fin de suprimir la divergencia entre el apellido inscrito, H. y el apellido familiar, "H de M". El Juez Encargado del Registro Civil de Valladolid, entendiendo que, dado que el primer apellido del promotor y de su padre concuerdan en las respectivas inscripciones de nacimiento, no se trataría de una rectificación de error sino más bien de un cambio de apellidos, dispuso que no ha lugar a la rectificación instada mediante auto de 8 de noviembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia del error denunciado.

IV.- Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso no ha llegado a probarse el error denunciado porque la primera de las inscripciones registrales de nacimiento aportadas, la del abuelo paterno del promotor practicada en 1893, expresa que el primer apellido del inscrito, de su padre y de su abuelo paterno es "H." y ese es el apellido que ha trascendido a la inscripción de nacimiento del padre del interesado, después a la del interesado y finalmente a la de la hija de este. Aunque la inscripción de nacimiento no dé fe de los apellidos el valor legitimador y probatorio de toda inscripción (art. 2 LRC) impone que hayan de estimarse correctas y carentes de error las debatidas y, en consecuencia, debe confirmarse el auto apelado, sin perjuicio del derecho que pueda asistir al interesado, si concurrieran los requisitos exigidos (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) de promover el expediente distinto de cambio de apellidos, que se tramita e instruye en el Registro Civil del domicilio y se resuelve por el ministro de Justicia y, por delegación (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), por la Dirección General, a fin de recuperar la parte del apellido compuesto que se habría perdido hace más de un siglo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Valladolid.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (12ª)

VII.1.1-Rectificación de errores en inscripción de matrimonio.

En principio, hay que acudir a la vía judicial para rectificar, en una inscripción de matrimonio, la fecha de su celebración.

En el expediente sobre rectificación de la fecha de celebración del matrimonio en una inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil Central el 11 de junio de 2004, el Sr. M. de nacionalidad española adquirida por residencia en 2002, solicitaba la rectificación en la inscripción de matrimonio practicada en España, de la fecha de celebración de su matrimonio con Doña A. alegando que dicho matrimonio se contrajo en T. el 22 de octubre de 1979 y no el 24 de enero de 1981, como por error consta, dado que, aunque su esposa interpuso al año de estar casados una reclamación para la separación, lo cierto es que al mes siguiente retiró la denuncia y la separación no se produjo. Por la misma razón solicita que se rectifique el estado civil de los esposos, que figuran como divorciados en la inscripción que se pretende rectificar. El expediente iba acompañado, entre otros, de los siguientes documentos: acta marroquí de matrimonio celebrado en T. el 19 de octubre de 1979, acta de divorcio revocable de 17 de diciembre de 1980 y acta de nuevas nupcias de 24 de enero de 1981.

2.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Central dictó auto el 7 de julio de 2004 denegando la rectificación solicitada por no resultar acreditado el error alegado, toda vez que la inscripción de matrimonio se realizó por transcripción de la certificación expedida por el Registro Civil del país de origen del reclamante relativa a un matrimonio celebrado el 24 de enero de 1981.

3.- Notificada la resolución, los interesados presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no hubo disolución de su matrimonio, sino tan solo una separación, que su estado civil es el de casados y que la fecha de matrimonio que debe constar en el Registro español es el 22 de octubre de 1979. Por otro lado, el promotor solicitaba, además, la rectificación de su nombre en la misma inscripción, en el sentido de que el correcto es Mu. y no Mo. como por error consta, en prueba de lo cual aportaba su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español con marginal de concesión de la nacionalidad española por residencia, así como las inscripciones de nacimiento de tres hijos y el libro de familia.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 69 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.

II.- Pretende el promotor la rectificación en su inscripción de matrimonio del dato correspondiente a la fecha de celebración en Marruecos del acto inscrito alegando que la que se ha hecho constar es la del acta de nuevas nupcias de 24 de enero de 1981, firmada tras una declaración de divorcio revocable en diciembre de 1980, pero que, en realidad, el matrimonio se celebró el 22 de octubre de 1979 y que la figura del divorcio revocable en Marruecos no es más que una separación temporal. El encargado del registro denegó la rectificación solicitada por no considerar acreditado el error invocado.

III.- El dato sobre la fecha de celebración consignada en una inscripción de matrimonio es una circunstancia esencial de la inscripción de la que esta hace fe (art. 69 LRC), por lo que su rectificación ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria conforme al criterio general que proclama el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. Además, la resolución

en este caso depende de la interpretación que deba hacerse en España acerca del contenido y efectos de una figura jurídica ajena a nuestra legislación, cual es el llamado en Marruecos divorcio revisable. Y, por otro lado, tampoco está claro cuál es la fecha exacta de celebración del primer matrimonio, pues aunque el recurrente insiste en que se haga constar el 22 de octubre de 1979, a la vista de las certificaciones aportadas al expediente, parece que el acto se celebró en realidad el día 19, existiendo cierta confusión sobre la fecha de redacción del acta correspondiente, ya que, aparte del mencionado día 22, figura consignado también el día 20. A la vista de lo expuesto no cabe, por tanto, realizar rectificación alguna mediante expediente gubernativo y, si los interesados persisten en su solicitud, deberán acudir a la vía judicial para obtenerla.

IV.- Por último, en lo que se refiere a la pretensión de rectificación del nombre del contrayente, hay que decir que se trata de una nueva cuestión introducida en el recurso cuya resolución por parte de este centro requiere un pronunciamiento previo del encargado del registro sobre ese punto, debiendo limitarse la presente resolución al objeto de la reclamación inicial.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (18ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

No prospera el expediente de rectificación en cuanto al sexo del inscrito en una inscripción de nacimiento por no resultar suficientemente acreditado el error invocado.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra resolución de la encargada del Registro Civil de Bilbao.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en 2009 en el Registro Civil del Consulado General de España en Caracas (Venezuela), Don Maite, mayor de edad y con domicilio en Venezuela, solicitó la rectificación de su inscripción de nacimiento en España para hacer constar que su nombre es Maite, no María del Pilar, y que el sexo del inscrito es hombre y no mujer, como erróneamente se consta. Adjuntaba al expediente los siguientes documentos: inscripción de nacimiento en B. el 18 de diciembre de 1933 de una hembra inscrita inicialmente con el nombre de Maite y con marginal de cambio de nombre por María del Pilar por Orden del Ministerio de Justicia de 9 de febrero de 1939; partida de bautismo el 25 de diciembre de 1933 de Maite (M. del A-H.). certificado de estudios de electricidad cursados por Maite expedido el 5 de julio de 1950 por la Escuela Técnica Industrial de C. publicación en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela de la declaración de voluntad de adquirir la nacionalidad venezolana realizada por B. (padre del promotor) en 1947; acta de matrimonio celebrado en Venezuela el 8 de agosto de 1983 entre Don Maite y Doña O. certificado de aceptación de declaración de voluntad de ser venezolano del ciudadano Maite. expedido el 16 de octubre de 1961 por el Ministerio de Relaciones Interiores de la República de Venezuela; inscripciones de

nacimiento en B. de V. de F-B. y de D. (hermano y padres del promotor, respectivamente); pasaporte venezolano, cédula de identidad y tarjeta de identificación como jubilado de Maite. certificado de prestación de servicios en la compañía La Electricidad de Caracas por parte de Maite. entre el 11 de octubre de 1948 y el 1 de enero de 1994 y certificado médico expedido por una clínica venezolana el 25 de junio de 2007 en el que se hace constar que el Sr. Maite es de género masculino.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil de Bilbao, competente para su resolución, y previo informe del ministerio fiscal favorable a la rectificación en cuanto al nombre pero no en cuanto al sexo, la encargada del registro dictó auto el 13 de julio de 2009 acordando la cancelación de la nota marginal de cambio de nombre por M^a del P. realizado por la Orden de 9 de febrero de 1939 que establecía la obligación de cambio de nombres considerados exóticos o extravagantes, manteniendo el nombre original de Maite y denegando la rectificación en cuanto al sexo por no resultar suficientemente acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que nació en B. en 1933 pero que, como consecuencia de la Guerra Civil, la familia se trasladó a Venezuela en calidad de refugiados en 1939 adquiriendo posteriormente la nacionalidad venezolana, si bien es su intención recuperar la nacionalidad española, razón por la cual ha instado el expediente de rectificación de error y se muestra dispuesto a trasladarse a España con el fin de corroborar que pertenece al sexo masculino.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Bilbao se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41, 59, 60, 92 y 93 de la Ley del Registro Civil (LRC); 209, 210, 294 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 18 de febrero de 2003, 16-3^a de noviembre de 2007 y 18-6^a de septiembre de 2008.

II.- Solicita el promotor, español de origen nacionalizado venezolano, la rectificación del nombre que consta en su inscripción de nacimiento en España ("Maite" en lugar de "María del Pilar") y de la mención relativa al sexo (masculino en lugar de femenino). La petición fue aceptada en cuanto al cambio de nombre y denegada en lo relativo al sexo por no resultar suficientemente acreditado el error, razón por la cual la resolución fue recurrida por el interesado.

III.- En materia de rectificación de errores hay que tener presente que la regla general es la de que éstos deben ser rectificadas por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). Sin embargo, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo (arts. 93 y 94 LRC) por razón de concordancia del Registro con la realidad. Concretamente, el artículo 93-2º de la Ley del Registro Civil permite rectificar en expediente gubernativo la indicación equivocada del sexo cuando no haya duda de la identidad del nacido por las demás circunstancias de la inscripción. A su vez, desarrollando este precepto, el artículo 294 del Reglamento establece que "Para rectificar en la inscripción de nacimiento la indicación del sexo se investigará: 1º.- Si la identidad queda establecida por las demás circunstancias de la inscripción; 2º.- Si no existe o ha existido otra persona con tales circunstancias y del sexo indicado; 3º.- Si la persona a que afecta la rectificación no está correctamente inscrita en otro asiento y 4º.- El sexo del inscrito por dictamen del Médico del Registro Civil o su sustituto". Pues bien, en este caso se da la circunstancia de a la persona afectada se le han atribuido, en diferentes momentos, nombres inequívocamente femeninos,

lo que genera dudas razonables acerca de la identidad de la persona inscrita, sin que los documentos probatorios venezolanos aportados al expediente hayan podido ser contrastados con otras inscripciones referentes a la misma persona en el Registro Civil español, y, por último, no se ha realizado tampoco el examen correspondiente por parte del médico forense del registro, de modo que no es posible autorizar por el momento la rectificación pretendida.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Bilbao.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (15ª)

VII.1.1-Rectificación de errores en inscripción de nacimiento.

La rectificación en una inscripción de nacimiento de datos de los que hace fe requiere, en principio, acudir a la vía judicial. En este caso, además, no quedan acreditados los errores denunciados.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil Central el día 3 de octubre de 2009 Don A. de nacionalidad española adquirida por residencia el 23 de mayo de 2000, solicita que en la inscripción de su nacimiento, practicada en el Registro Civil Central en virtud de resolución firme dictada por ese mismo Registro Civil en fecha 18 de septiembre de 2000, se modifiquen los datos incompletos e inexactos consignados a fin de que conste que su segundo apellido es "Ma"., primero de su madre, que nació en V. (España) y no en M. (Irak) y que los nombres de sus padres –K. y K. a efectos identificadores- se completen con los datos de que el padre se apellida I. la madre Ma. y ambos nacieron en N. (Irak). Acompaña copia simple de la inscripción de nacimiento cuya rectificación solicita y de su DNI y traducción del alemán al español de acta de nacionalidad iraquí expedida en lengua árabe el 17 de julio de 2007.

2.- El 12 de abril de 2010 el Encargado acordó la incoación de expediente gubernativo de rectificación de error, notificada esta providencia al representante del Ministerio Fiscal, este solicitó que se requiera al solicitante a fin de que aporte certificado de nacimiento de sus padres y el 2 septiembre de 2010 el promotor presentó documentos de identidad iraquíes de aquellos, expedidos el 1 de julio de 1991 y traducidos del árabe al alemán y, sucesivamente, del alemán al español, y escrito en el que expone que la imposibilidad de acceso a los Registros Civiles de Irak le impide obtener los documentos solicitados.

3.- El ministerio fiscal, razonando que, no acreditada la filiación del solicitante en el expediente para la inscripción de nacimiento fuera de plazo, no procede completarla con las menciones de identidad de quienes manifiesta que son sus padres y que tampoco está acreditado su nacimiento en España, informó que no proceden las rectificaciones instadas y el 14 de diciembre de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo que no ha lugar a la

rectificación de los errores denunciados, cuya evidencia no resulta de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se practicó en su momento la inscripción.

4.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los documentos públicos extranjeros aportados al expediente acreditan la filiación y el lugar de nacimiento correcto.

5.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, a las actuaciones se unieron el expediente promovido por el interesado en marzo de 2009 a fin de que se rectifique error advertido en el lugar de su nacimiento y concluido con auto de 1 de junio de 2009 que deniega la solicitud y el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo instruido en 2000, dado que el interesado no aporta ningún documento respecto a su nacimiento alegando que su condición de asilado le impide obtenerlo en su país; y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 137, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 18-1ª de marzo de 1999, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª y 19-3ª de mayo de 2004, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 31-5ª de enero, 24-2ª de abril y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo y 28-1ª de septiembre de 2009; 15-5ª de julio y 6-16ª y 24-2ª de septiembre de 2010, 18-3ª de noviembre y 1-3ª de diciembre de 2011 y 19-56ª de diciembre de 2012.

II.- Pretende el promotor que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil Central en octubre de 2000 tras adquirir la nacionalidad española por residencia, se rectifiquen su segundo apellido y el lugar en que acaeció el hecho, exponiendo que aquel es "Ma". primero de su madre, y no Ko. y que no nació en M. (Irak) sino en V. (España) y que se completen los nombres de los padres, consignados a efectos identificadores, con la indicación de que se apellidan I. el padre y M. la madre y de que ambos nacieron en N. (Irak). El Juez Encargado, visto que la evidencia de los errores denunciados no resulta de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se practicó en su día la inscripción y que el fiscal se opone a la modificación, dispuso que no ha lugar a las rectificaciones instadas mediante auto de 14 de diciembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La filiación de una persona y su lugar de nacimiento no son en su inscripción de nacimiento simples menciones de identidad (cfr. art. 12 del Reglamento del Registro Civil) susceptibles de rectificación, si se demuestran erróneas, por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1º de la Ley de Registro Civil, sino datos esenciales de la inscripción, de los que esta hace fe (cfr. art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria, conforme al criterio general establecido en el artículo 92 de la Ley del Registro Civil.

IV.- En este caso se comprueba que el asiento de nacimiento se practicó en virtud de expediente y, no suficientemente acreditada en el mismo la filiación, se consigna el nombre de los padres a los solos efectos de identificar a la persona y a esta se le asignan el nombre y los apellidos que expresamente solicita y que en lo actuado consta que son los que viene usando. Así pues, para completar la inscripción con los datos relativos al apellido y al lugar de nacimiento de quienes aduce progenitores habría tenido que justificar la filiación alegada

con documentación fehaciente del Registro extranjero. Tampoco se acredita el nacimiento en V. que tendría que constar inscrito en el Registro Civil de dicha población (cfr. arts. 15 y 16 LRC) desde el momento en que acaeció, de modo que la adquisición de la nacionalidad española habría dado lugar a la práctica de una inscripción marginal de este hecho que afecta al estado civil y no a una inscripción *ex novo* en el Registro Civil Central, competente cuando el hecho inscribible ha ocurrido en el extranjero, practicada en virtud de expediente ya que, requerido el interesado a fin de que aporte certificado literal de nacimiento expedido por el Registro Civil de su país de origen, manifiesta que, por su condición de asilado, no puede obtener en su país ningún documento de nacimiento.

No probados los errores denunciados y teniendo en cuenta, además, que la rectificación mediante expediente gubernativo de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción” (cfr. art. 94.1 LRC) requiere dictamen favorable del ministerio fiscal y, en este caso, los emitidos tanto antes del dictado de la resolución como tras la presentación del recurso son desfavorables, queda impedida la rectificación en esta vía, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (21ª)

VII.1.1-Rectificación de errores en inscripciones de matrimonio y de nacimiento.

No prospera el expediente de rectificación en inscripciones de matrimonio y de nacimiento del hijo al no quedar acreditado error en la consignación del apellido de la promotora.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripciones de matrimonio y de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la encargada del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 4 de mayo de 2010 en el Registro Civil de Cabezón de la Sal (Cantabria), Don J-A. y Doña E. Tichtchenko solicitaban la rectificación en su inscripción de matrimonio y en la de nacimiento de su hijo menor de edad del apellido de la promotora para hacer constar que el correcto es Tishchenko y no lo que, por error, consta. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado de nacimiento traducido del ruso de E-N. Tishchenko, pasaporte y tarjeta de residencia, libro de familia, inscripción de matrimonio celebrado en España el 4 de julio de 2003 e inscripción de nacimiento el 12 de agosto de 2005 de D. L. Tichtchenko.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil de Torrelavega y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro solicitó la incorporación del acta de matrimonio civil en cuya virtud se practicó la inscripción y del expediente de matrimonio tramitado en su día.

3.- A la vista de la documentación anterior, la encargada del registro dictó auto el 17 de diciembre de 2010 denegando la rectificación solicitada por no resultar acreditado el error invocado en tanto que la discrepancia sobre la correcta consignación del apellido cuya rectificación se pretende, se deriva en realidad del sistema elegido para la transliteración de los caracteres cirílicos al castellano, de modo que la letra “Лl” puede aparecer transcrita al alfabeto latino como “šč” (forma científica), “chtch” (forma francesa), “schtsch” (forma alemana) o “shch” (forma inglesa), sin que exista una forma específica para transcribirlo al español, de modo que tan correcto es el apellido en la forma que se ha hecho constar en las inscripciones de matrimonio y nacimiento como el que se pretende obtener por medio del expediente iniciado.

4.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, en efecto, el error invocado se deriva del sistema de transliteración elegido pero que la legislación rusa adoptó oficialmente en 2003 el sistema “Passport 2003”, que adopta la grafía inglesa, de modo que todos los documentos emitidos a partir de entonces se transliteran siguiendo este criterio, lo que puede ocasionar problemas al hijo de la promotora, que no está inscrito en el Registro Civil ruso, en las relaciones con el país de origen de su madre.

Con el escrito de recurso se aportaba una nueva copia traducida del certificado de nacimiento de la recurrente con una nota al pie del traductor jurado según la cual el apellido de la inscrita ha sido transliterado utilizando el sistema “Passport 2003”, aprobado en el año 2003 por el Ministerio del Interior de la Federación Rusa para su uso en documentos de identidad, así como una lista de transliteración de caracteres cirílicos según el nuevo sistema adoptado y la forma de cumplimentar los pasaportes rusos.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Torrelavega se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.

II.- Pretenden los promotores la rectificación del apellido de la contrayente, de nacionalidad rusa, en su inscripción de matrimonio así como en la inscripción de nacimiento del hijo de ambos alegando que el que se hizo constar en su momento no se corresponde con el sistema oficial actualmente vigente en la Federación Rusa de transliteración de los caracteres cirílicos al alfabeto latino. La encargada dictó auto denegando la rectificación solicitada por no considerar acreditado el error invocado, dado que en España no existe una norma específica al respecto, de modo que ambas formas de transliteración son igualmente correctas.

III.- En materia de errores registrales la regla general es la de que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC) y, de todos modos, para que pueda rectificarse por expediente un error del registro, es necesario que quede acreditada su existencia. No ocurre así en este caso en el que, a la vista de la documentación disponible, resulta que el apellido que actualmente consta en las inscripciones que se pretenden rectificar es el mismo que figuraba en todos los documentos que sirvieron de base para aprobar el expediente de matrimonio tramitado en su día y para practicar la inscripción de nacimiento

del hijo de la pareja. Según se desprende de las actuaciones, el problema parte de que la Federación Rusa adoptó en 2003 un sistema unificado de transliteración de los caracteres cirílicos al alfabeto latino que difiere en algunos aspectos del que se utilizó en los certificados registrales aportados para obtener la autorización de residencia inicial de la promotora y la de matrimonio en España, dándose la circunstancia de que los documentos, tanto rusos como españoles, expedidos posteriormente atribuyen a la interesada el apellido en forma distinta de la que aparece en su documentación anterior, pero ello no significa que se cometiera un error al practicar las inscripciones en su momento. No obstante, conviene advertir que en el Derecho español no existe una regla expresa para determinar cuál es la grafía que debe utilizarse en España para inscribir un apellido extranjero escrito originalmente en caracteres propios de un alfabeto distinto del latino, como es el caso del cirílico, si bien el procedimiento ordinario es el de la transliteración, esto es, la asignación de un carácter gráfico latino a cada carácter gráfico no latino.

Por otra parte, la determinación de los apellidos y la forma en que han de quedar reflejados en el Registro Civil español está sometida a la ley personal de la persona (art. 9.1º del Código Civil), de modo que, siendo la interesada de nacionalidad rusa, si se acredita convenientemente por medio de certificado de las autoridades de su país que se ha producido un cambio en las normas oficiales de transliteración utilizadas en la Federación Rusa que a su vez ha supuesto, en definitiva, un cambio de apellido de la interesada según su ley personal, no habría inconveniente para que tal cambio se reflejara también en las inscripciones practicadas en España que se refieran a la ahora recurrente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Torrelavega.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (23ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de matrimonio.

En principio, hay que acudir a la vía judicial para rectificar la fecha de celebración en una inscripción de matrimonio.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto de la encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2011 en el Registro Civil de Cuarte de Huerva, Don P-J. mayor de edad y con domicilio en la citada localidad, solicitaba la rectificación de la fecha de celebración que figura en su inscripción de matrimonio para hacer constar que la correcta es el 29 de diciembre de 2010 y no el 22 de diciembre, como erróneamente se consignó. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción practicada en el Registro Civil de Cuarte de Huerva del matrimonio celebrado el 22 de diciembre de 2010 en el ayuntamiento de dicha localidad entre el promotor y Doña E. acta de celebración de matrimonio el 22 de diciembre de 2010 firmada por la concejal autorizante, los contrayentes y

los testigos y comparecencia ante el registro de Doña E. concejal del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, en la que declara que el matrimonio por ella autorizado se celebró en realidad el 29 de diciembre y no el día 22, como por error se ha hecho constar.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil de Zaragoza, competente para su resolución, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 25 de febrero de 2011 denegando la rectificación solicitada por no considerar acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que la fecha correcta es el 29 de diciembre, tal como ha reconocido la concejal que autorizó el matrimonio, y que los interesados no son responsables del error producido. Al escrito de recurso se adjuntaba un certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva según el cual el matrimonio del promotor se celebró el 29 de diciembre de 2010.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que, a la vista del nuevo documento aportado, interesó su estimación. La encargada del Registro Civil de Zaragoza se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 69 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.

II.- Pretende el promotor la rectificación en la inscripción practicada en el Registro Civil de la fecha de celebración de su matrimonio. La encargada del registro dictó auto denegando la solicitud por no considerar acreditado el error invocado. Dicho auto constituye el objeto del recurso.

III.- Es doctrina constante de este centro directivo que el dato sobre la fecha de celebración del matrimonio consignada en el Registro Civil es una circunstancia esencial de la que la inscripción hace fe (art. 69 LRC), por lo que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria conforme al criterio general que proclama el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. Además, tampoco resulta acreditado el error alegado, en prueba del cual solo se aporta la declaración testifical de la concejal autorizante y un certificado expedido por el ayuntamiento que se contradice con el contenido del acta de matrimonio civil firmada por todos los intervinientes (concejal, contrayentes y testigos) también incorporada al expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (23ª)

VII.1.1- Rectificación de errores en inscripción de nacimiento.

No acreditados los errores invocados, no prospera el expediente de rectificación del nombre y del primer apellido del inscrito en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil Central en fecha 23 de febrero de 2010 Don C. N. N. O. nacido el 10 de abril de 1967 en Guinea Ecuatorial y domiciliado en M. expone que al practicar la inscripción de su nacimiento se consignaron los dos nombres y los dos apellidos que constan en lugar de C. como nombre y N-N. como primer apellido compuesto, que es lo correcto, y solicita que, previos los trámites legalmente establecidos, se acuerde la rectificación de dichos errores. Acompaña copia de inscripción de nacimiento practicada el 22 de junio de 2004 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia y certificación literal de inscripción de nacimiento ecuatoguineana.

2.- Incoado expediente gubernativo, el ministerio fiscal, no apreciando la existencia de los errores denunciados, informó que no procede lo solicitado y el 2 de diciembre de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación de errores no evidenciados de la confrontación con la certificación de nacimiento que sirvió de base para la práctica de la inscripción.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que con el escrito inicial aportó certificado de nacimiento original procedente del Registro extranjero en el que consta rectificado el error aducido.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado y, unidas las actuaciones seguidas en 2003 para la inscripción del nacimiento, el Juez Encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Pretende el solicitante que en su inscripción de nacimiento, practicada en junio de 2004 tras adquirir la nacionalidad española por residencia, se consigne como parte de un primer apellido compuesto, modificando una letra, lo que consta como segundo nombre simple. El Juez Encargado, visto que los errores no resultan de la confrontación con la certificación de nacimiento que sirvió de base para la práctica de la inscripción, dispuso que no ha lugar a rectificarlos mediante auto de 2 de diciembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia del error denunciado.

IV.- El nombre y los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) de modo que, si se demuestra que contienen error, cabe rectificarlos por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso no han quedado probados los errores aducidos puesto que el nombre y los apellidos consignados en la inscripción de nacimiento son exactamente los que figuran en la certificación del Registro local que sirvió de título para la práctica del asiento, que expresa claramente que el nombre es C-N. el primer apellido N. y el segundo apellido O. y la aportada al expediente de rectificación, obtenida en fecha posterior, no desvirtúa lo que la primera acredita ya que, sobre no constar en ella que la primitiva contuviera error que después ha sido rectificado por autoridad competente del Registro extranjero, se trata de una inscripción no relacionada con la anterior, asentada en tomo, hoja y folio distintos y practicada fuera de plazo legal, en virtud de expediente, el mismo día en que se expide la certificación. Así pues, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente, no cabe considerar acreditados los errores alegados en el nombre y en el primer apellido del inscrito y queda impedida su rectificación en vía gubernativa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (25ª)

VII.1.1- Rectificación de apellido en inscripción de nacimiento.

No acreditado el error invocado, no prospera el expediente de rectificación del segundo apellido del inscrito y único de su madre en inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- En escrito con entrada en el Registro Civil Central en fecha 17 de julio de 2008 Don R-A. expone que al practicar la inscripción de nacimiento de su hijo J-R. nacido en San F de P-P. (República Dominicana) el 24 de octubre de 1987, se hizo constar que su madre se llama A. G. en vez de lo correcto, que es A. de la C.G. y solicita que se proceda a rectificar el error lo antes posible, ya que necesita el pasaporte para poder "entrar" a ver a su padre, que recientemente sufrió un ataque al corazón. Acompaña certificación literal de la inscripción de nacimiento del interesado, practicada en el Registro Civil Central el 7 de octubre de 2002, con marginal de opción por la nacionalidad española ante el Encargado del Registro Civil de Santo Domingo en fecha 26 de marzo de 2006, y acta inextensa de nacimiento dominicana,

expedida el 20 de julio de 2008, con anotación de rectificación por sentencia de 31 de marzo de 2008 para que en adelante la madre del declarado figure como A. de la C. G. por ser el nombre y apellido correctos.

2.- El 3 de marzo de 2009 el Juez Encargado acordó requerir al promotor a través del Registro Civil de su domicilio para que aporte certificado de nacimiento de la madre del inscrito, debidamente legalizado, a fin de comprobar la existencia del error denunciado, y el 8 de mayo de 2009 presentó acta de inextensa de nacimiento de A. hija de J. de la C. y M. G. nacida en El J. (República Dominicana) el 15 de mayo de 1953.

3.- Recibido dicho documento en el Registro Civil Central, el ministerio fiscal, a la vista de los antecedentes y de las contradicciones en las certificaciones del Registro local respecto a los apellidos y la fecha de nacimiento de la madre del inscrito, se opuso a lo interesado y el 11 de enero de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación del error denunciado, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado para iniciar el procedimiento declarativo correspondiente.

4.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y librado exhorto a esos mismos efectos al Registro Civil del domicilio del promotor, este compareció y manifestó que su hijo se encuentra residiendo de forma permanente en la República Dominicana, en la ciudad de P-P. Notificado en ese país a través del Registro Civil Consular de Santo Domingo, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que cuando su padre solicitó para él la nacionalidad española sus apellidos eran R. G. que después su madre, que siempre había figurado por error como A. G. pasó a hacer uso del apellido de su padre, se hizo la rectificación por sentencia de 31 de marzo de 2008, a partir de ese momento se llama A. de la C. G. y, por consiguiente, J-R. (sic) R. de la C. y J-R. R. G. son la misma persona; y aportando, como prueba documental, dos extractos de su acta de nacimiento, expedidos el 21 de febrero de 2011, en uno de los cuales su madre consta identificada como de la C. G. A. y en el otro como G. A. copia de dos cédulas de identidad propias y otras dos de su madre, en las que constan identificados él como J-R-R. R. de la C. y J-R-R. R. G. y su madre como R. de la C. G. y R. G. y la sentencia arriba citada, en la que se ordena rectificar las actas de nacimiento de J-R-R. y de R-A. para que en adelante figure como nombre y apellido de la madre de los declarados A. de la C. G.

5.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso formulado y, unidas las actuaciones que en 2002, año en que el promotor reconoce al interesado, se siguieron para la inscripción de los nacimientos de este y de una hermana por línea paterna nacida dos meses después, el Juez Encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución combatida, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Pretende el solicitante que en la inscripción de nacimiento de su hijo, practicada en octubre de 2002 tras adquirir él la nacionalidad española por residencia y reconocer al entonces menor, se proceda a rectificar las menciones de identidad consignadas a la madre del inscrito, A.G. toda vez que las correctas son A. de la C. G. El Juez Encargado, a la vista de los antecedentes y de las contradicciones apreciadas en las certificaciones del Registro local aportadas, no solo en los apellidos de la madre del inscrito sino también en el mes de

nacimiento de esta, dispuso que no ha lugar a la rectificación del error denunciado mediante auto de 11 de enero de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia del error denunciado.

IV.- Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 RRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso, requerido el promotor a fin de que aporte certificado de nacimiento de la madre de su hijo debidamente legalizado, presenta acta inextensa de nacimiento de A. hija de J. de la C. y M. G. nacida en El J. (República Dominicana), cuya identidad de persona con A-G. que, sin más menciones de identidad que su estado de soltera y su nacionalidad dominicana, consta como madre en la inscripción de nacimiento del interesado no queda establecida.

Además, las certificaciones del Registro local se contradicen no solo en el dato del apellido de la madre que el promotor pretende que se rectifique sino también en la fecha de nacimiento de esta y, aunque el recurrente alega que en 2008, después de la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, fueron rectificadas los apellidos de su madre mediante sentencia firme dominicana que se acompaña, lo cierto es que la documentación registral que aporta como prueba de lo aducido no ofrece garantías análogas a las exigidas por la ley española y sigue siendo contradictoria, toda vez que se trata de dos extractos de su acta de nacimiento, expedidos ambos el 21 de febrero de 2011, que expresan uno que su madre se llama de la C. G. A. y el otro que se llama G. A. Así pues, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente, no puede considerarse probado el error denunciado y queda impedida su rectificación en vía gubernativa.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (42ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de defunción.

Prospera el expediente de rectificación en inscripción de defunción para hacer constar, con valor de simple presunción, que el fallecido tuvo siete hijos y no ocho.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de defunción remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto de la encargada del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2008 en el Registro Civil de Madrid, Don Á. por medio de su representante legal, solicitaba la rectificación de la inscripción de defunción

de su padre, Don S. para hacer constar que el número correcto de hijos del fallecido es siete y no ocho, debiendo suprimirse la mención correspondiente a "C." quien, en realidad, es nieto y no hijo del difunto. Se adjuntaba como documentación acreditativa de la pretensión: documento notarial de apoderamiento; inscripción de matrimonio celebrado el 14 de junio de 1924 entre S. y C. inscripciones de nacimiento de los hijos de la pareja: C. S. D. Á. V. P. y L. inscripciones de defunción de S. V. y L. de S. y de M^a del C. certificaciones de últimas voluntades de los dos últimos y libro de familia. A dicha documentación se unió de oficio la inscripción de nacimiento de C. nacido el 8 de junio de 1945, hijo de C. y de "C" a efectos de identificación.

2.- La encargada del Registro Civil de Madrid dictó auto el 17 de junio de 2008 denegando la rectificación solicitada por tratarse de datos de los que la inscripción de defunción no hace fe y por no resultar acreditados los errores invocados.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que C. de quien no consta su filiación paterna, es en realidad hijo de C. y nieto, por tanto, de S. y que mientras no se rectifique el dato erróneo no puede procederse a la declaración de herederos del fallecido.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación porque en la legislación actual no está previsto que figure en la inscripción de defunción el nombre de los hijos del fallecido. La encargada del Registro Civil de Madrid ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 81 y 92 a 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 280 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II.- Pretende el promotor, por medio de su representante, la rectificación en la inscripción de defunción de su padre del dato relativo al número de hijos del difunto, que no son ocho sino siete, así como la supresión de la mención relativa a "C." como uno de los citados hijos por ser este en realidad nieto del inscrito, nacido de su hija mayor y con filiación paterna desconocida. El auto denegatorio se basa en que el dato que se pretende rectificar es una circunstancia de la que la inscripción de defunción no hace fe y en que no está comprobada la realidad del error denunciado.

III.- En primer lugar hay que decir que el hecho de que los datos que se pretenden rectificar no constituyan circunstancias de las que la inscripción de defunción hace fe no solo no constituye un obstáculo para que prospere la rectificación de un error a través del expediente previsto al efecto, sino que favorece la posible rectificación puesto que, cuando se trata de datos de los que la inscripción hace fe, según reiterada doctrina de este centro, la rectificación habría de obtenerse, en principio, a través de sentencia firme recaída en juicio ordinario por muy evidente que parezca el error (art. 92 LRC). Otra cosa es la evidencia del escaso valor que tienen los datos que se pretenden modificar en este caso teniendo en cuenta, precisamente, que no quedan cubiertos por la fe que proporciona la inscripción de defunción y que los nombres y la filiación de los interesados resultan probados por sus respectivas inscripciones de nacimiento.

IV.- Por otro lado, aunque es cierto, como señala el fiscal, que los datos relativos a los hijos del fallecido son circunstancias cuya constancia en la inscripción no está hoy prevista legal ni reglamentariamente (cfr. arts. 35 y 81 LRC y 280 y 282 RRC), no puede descartarse su rectificación en tanto que sí eran hechos inscribibles al amparo de la legislación vigente al tiempo del fallecimiento.

V.- El auto recurrido alude, como un elemento más para la denegación, al hecho de que en la inscripción de nacimiento del hijo cuya mención se cuestiona no figura la filiación paterna, lo que constituye un impedimento más para la rectificación por la dificultad que entraña la prueba de un hecho negativo que, en este caso, supondría acreditar, bien que el fallecido no era el padre del mencionado C. a pesar de que así se hizo constar en su inscripción de defunción, o bien que aquél no tuvo otro hijo con ese nombre. En referencia a la prueba de hechos negativos, la exposición de motivos de la Ley del Registro Civil, apartado XI, señala que "(...) El Registro Civil no goza de la presunción de integridad y, por tanto, no constituye prueba de los hechos negativos. Sin embargo, en la vida jurídica se necesita una prueba de estos hechos. A proporcionarla, con el alcance reducido que es posible, y también a constituir la prueba misma de los hechos inscribibles, cuando el Registro no puede proporcionarla, está encaminado un especial expediente que termina con una declaración de valor simplemente presuntivo. (...)". Este expediente es el previsto en el artículo 96.1º LRC.

VI.- Es cierto que el presente expediente, de rectificación de error, no es el previsto en el mencionado artículo 96.1º pero al analizar los trámites y requisitos de uno y otro se observa que, esencialmente, son coincidentes (legitimación, intervención del ministerio fiscal, régimen de pruebas, delimitación del ámbito subjetivo de los intereses, etc.). Así, a la vista de la documentación disponible, hay datos suficientes para declarar que, presumiblemente, el fallecido S. tuvo en realidad siete hijos y que a ninguno de ellos se le impuso como nombre C.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y hacer constar marginalmente en la inscripción de defunción de S. la declaración, con valor de simple presunción, de que el número de hijos del fallecido es siete y que el llamado C. no es ninguno de ellos.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (50ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

No evidenciado el error denunciado por confrontación con los documentos en cuya sola virtud se practicó la inscripción, no prospera el expediente de rectificación del nombre de la inscrita en su inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de León.

HECHOS

1.- En escrito presentado en el Registro Civil de Carrión de los Condes (Palencia) en fecha 16 de marzo de 2010 Doña N-Yane. de nacionalidad española adquirida por residencia el 3 de marzo de 2006, nacida en L. el 16 de julio de 1986 y domiciliada en C de los M. (P), expone que en su inscripción de nacimiento se consignó por error el segundo nombre que consta, en lugar de "Jane", que es lo correcto, y solicita que, previos los trámites legales que procedan, se acuerde la rectificación de dicho error. Acompaña testimonio de

DNI, certificado individual de empadronamiento en C de los M. certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa y testimonio de tarjeta de identidad portuguesa y extracto de cuenta corriente en los que figura con el nombre que aduce correcto. Ratificada la solicitud por la interesada, se tuvo por promovido expediente de rectificación de error informando el ministerio fiscal que, aun cuando la competencia para resolver en primera instancia corresponde al Registro Civil de León, por la documentación aportada se comprueba el error invocado.

2.- El 27 de septiembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de León, apreciando que de la copia del cuestionario para la declaración de nacimiento incorporada al expediente se deduce claramente que no ha existido error alguno en la inscripción, dictó auto disponiendo denegar la rectificación solicitada.

3.- Notificada la a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que aportó documentos que prueban que "N-Jane" es el nombre que ella utiliza y con el que los demás se dirigen habitualmente a ella y que el nombre, en cuanto signo estable de individualización de la persona, debe ser respetado, en su caso mediante la corrección del consignado en el libro del Registro.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación del auto impugnado, y seguidamente la Juez Encargada del Registro Civil de León dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- La interesada promueve expediente a fin de que en su inscripción de nacimiento se rectifique el segundo de los nombres inscritos, Yane, a fin de que conste "Jane", que es lo correcto. El Juez Encargado del Registro Civil de León, apreciando que del cuestionario para la declaración de nacimiento se deduce claramente que no ha existido error alguno en la inscripción, dispuso denegar la rectificación solicitada mediante auto de 27 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- El nombre de una persona es en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC) de modo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley. En este caso no ha quedado probada la existencia en el Registro del error denunciado puesto que, incorporada al expediente copia del cuestionario para la declaración de nacimiento en cuya virtud se practicó la inscripción, se comprueba que el nombre elegido para la nacida es "N Yane".

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de León.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (51ª)

VII.1.1- Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

No acreditado el error invocado, no prospera el expediente de rectificación del apellido único del inscrito y de su padre en inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los representantes legales del menor contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Gavà (Barcelona).

HECHOS

1.- En comparecencia en el Registro Civil de Gavà en fecha 8 de octubre de 2010 el Sr. A. B-Ayad, de nacionalidad marroquí, mayor de edad y domiciliado en C. (B), manifiesta que ha advertido que en la inscripción de nacimiento de su hijo A. B-Ayad, nacido en C. el... de... de 2004, aparece como apellido del menor y de su padre el que consta cuando en realidad debe decir "B-Aayad". A fin de acreditar lo expuesto acompaña certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, extracto de acta de nacimiento marroquí propia que expresa que su apellido es "B-Aâyad", volantes individuales de empadronamiento en C. de padre, madre e hijo y copia simple de los respectivos NIE, en los que el promotor figura como B-Ayad, su cónyuge como reagrupada por B-Ayad y el menor como "B-Aayad". En el mismo acto compareció la madre del inscrito, que se dio por enterada y conforme con la petición formulada por su marido.

2.- Promovido expediente de rectificación de error, el ministerio fiscal informó que no se opone a su resolución de conformidad con lo interesado por el promotor, por el Juez Encargado se acordó requerir al Registro Civil de Castelldefels copia compulsada de la hoja declarativa de datos sobre el nacimiento, recibida esta se pasaron nuevamente las actuaciones al ministerio fiscal, este informó que se opone a lo solicitado, habida cuenta de que, si se toma en consideración el permiso de residencia del padre, el pretendido error no ha quedado debidamente acreditado, y el 21 de diciembre de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil de Gavà, a la vista de que la prueba obrante en el expediente no justifica la existencia de error y de conformidad con el dictamen del ministerio fiscal, dictó auto disponiendo desestimar la solicitud de rectificación.

3.- Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, los dos representantes legales del menor interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el apellido correcto de padre e hijo es el que expresa el NIE del menor.

4.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando su anterior informe -de la confrontación de los documentos aportados no se deduce la existencia de error alguno y, por tanto, no tiene cabida la rectificación-, impugnó el recurso, interesando que se confirme en todos sus términos la resolución apelada, y el Juez Encargado del Registro Civil de Gavà informó que se ratifica en los fundamentos jurídicos del auto impugnado y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 1-26ª y 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011 y 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012.

II.- Solicita el promotor, de nacionalidad marroquí, la rectificación en la inscripción de nacimiento de su hijo, nacido en C. el... de... de 2004, del único apellido que, conforme a su ley personal, les consta al inscrito y a su padre. El Juez Encargado del Registro Civil de Gavà, a la vista de que la prueba obrante en el expediente no justifica la existencia de error y de conformidad con el dictamen del ministerio fiscal, dispuso denegar la rectificación solicitada mediante auto de 21 de diciembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el Registro de los errores denunciados.

IV.- Los apellidos de una persona -el apellido en este caso- son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (cfr. art. 12 y 258 RRC) no cubiertas por la fe pública registral de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso no ha quedado probado el error denunciado puesto que toda la documentación administrativa, propia y de su cónyuge, que el promotor presenta expresa que el apellido es B-Ayad, únicamente en el NIE del menor aparece el apellido "B-Aayad" que se aduce correcto, el acta de nacimiento marroquí del padre y promotor, sobre ser en extracto, da constancia de que el apellido no es ninguno de los dos anteriores sino "B-Aâyad" e, incorporado al expediente a requerimiento del Encargado el cuestionario para la declaración de nacimiento que el padre cumplimentó y suscribió en su momento, se comprueba que el declarante consignó que su apellido es B-Ayad y que B-Ayad es el apellido que a padre e hijo les consta en la inscripción de nacimiento cuya rectificación se interesa. Así pues, no verificada la existencia del error denunciado de la confrontación de los documentos aportados por el solicitante y emitido dictamen desfavorable por el ministerio fiscal (cfr. art. 94.1 LRC), queda impedida la rectificación por expediente gubernativo, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gava.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (53ª)

VII.1.1-Rectificación de error en inscripción de nacimiento.

No prospera el expediente para rectificar el primer apellido de la inscrita en una inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2010 en el Registro Civil Central, Don M-F. solicitaba la rectificación del primer apellido de su hija en la inscripción de nacimiento de esta para hacer constar que el correcto es M-Moulud y no M-Lamin, como figura consignado.

Adjuntaba la siguiente documentación: inscripción de nacimiento del promotor con marginales de nacionalidad española con valor de simple presunción, de uso habitual de los apellidos M-Moulud y de rectificación del nombre del padre del inscrito e inscripción practicada en el Registro Civil Central del nacimiento en Italia el 30 de noviembre de 2001 de S. M-Lamin. hija de M-F. M-Lamin, casado (no figuran otros datos del progenitor), y de N. (de esta sí consta filiación, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad española), con marginal de que la inscrita figura en el registro civil local como S. M-Fadel. M-Lamin.

2.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 16 de diciembre de 2010 denegando la rectificación por no resultar acreditado el error invocado.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la petición inicial.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.

II.- Pretende el promotor la rectificación del primer apellido en la inscripción de nacimiento de quien afirma que es su hija alegando que el consignado difiere del que figura en su propia inscripción de nacimiento. La encargada denegó la rectificación por no considerar acreditada la existencia de error.

III.- En materia de errores registrales la regla general es la de que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC) y, en todo caso, para que pueda rectificarse por expediente un error del registro, es necesario que quede acreditada su existencia, lo que no ha sido probado en este caso. El error que se denuncia recae sobre el primer apellido de una menor que, según su inscripción de nacimiento, es hija de M-Fadel (nombre del padre) M-Lamin (apellidos) y la petición se basa en el supuesto previsto en el art. 93.3º LRC según el cual es posible la rectificación mediante expediente gubernativo del error cuya evidencia resulte de la confrontación con otra u otras inscripciones que hagan fe del hecho correspondiente. Así, para acreditar el error invocado, se aporta la inscripción de nacimiento del promotor, pero resulta que en la que se pretende rectificar no figuran más datos del padre de la inscrita que su nombre y apellidos y el estado civil de casado, de modo que no es posible verificar que se trata de la misma persona cuya inscripción se pretende hacer valer para probar el error. Además, según esta inscripción, el promotor es conocido por unos apellidos distintos de los atribuidos en el asiento principal: M-A. M-Moulud, sin que conste referencia alguna al apellido "Lamin" atribuido a la menor, con lo que tampoco por esta vía se aprecia un punto de conexión entre ambos que pudiera servir para estimar la pretensión.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

VII.1.2.- Rectificación de errores art 95 LRC

Resolución de 10 de Enero de 2014 (44ª)

VII.1.2.-Marginal de modificación de apellido en inscripción de nacimiento.

1º.- Cuando constan por documentos oficiales auténticos la nacionalidad y el hecho concerniente al estado civil que motiva la modificación puede anotarse sin expediente el cambio de apellidos de un extranjero según su ley personal.

2º.- Dado que, en este caso, la certificación consular se limita a declarar que el apellido actual de la menor es otro y no acredita desde cuándo ni por qué causa, no prospera la solicitud.

En las actuaciones sobre práctica de marginal en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de Gijón (Asturias).

HECHOS

1.- En fecha 27 de agosto de 2010 la Sra. R. de nacionalidad nigeriana, mayor de edad y domiciliada en M., comparece en el Registro Civil de Madrid al objeto de instar que en la inscripción de nacimiento de su hija D. T. E. nacida en G. el... de... de 2008 con filiación determinada por una línea, se practique nota en el sentido de que el apellido de la inscrita es "E" y su nombre "D-T". Acompaña, volante individual de empadronamiento en M. y pasaporte nigeriano propios, certificación literal de la inscripción cuya modificación pretende y certificado de la Embajada de Nigeria en España para hacer constar que el apellido actual de la menor D. T. es El.

2.- A fin de que se practique la correspondiente nota se remitió exhorto al Registro Civil de Gijón y el 27 de septiembre de 2010 la Encargada dictó auto disponiendo denegar la petición por entender que no se aporta documentación suficiente para acordar la anotación marginal y que la aportada no acredita lo que se interesa.

3.- Devuelto el exhorto a su procedencia y notificada la resolución al ministerio fiscal, la promotora compareció a esos mismos efectos el 3 de noviembre de 2010, manifestando su total disconformidad e interponiendo seguidamente recurso, alegando que los cambios que solicita para su hija no son porque se hayan cometido errores sino en base a su ley personal. Remitido lo actuado a G. a los efectos oportunos, la Encargada dispuso su reenvío, a fin de que por el órgano competente se resuelva el recurso formulado, el Encargado del Registro Civil de Madrid, por economía procesal, tuvo por interpuesto recurso en tiempo y forma y el ministerio fiscal dijo que, puesto que la resolución apelada se ha dictado por el Registro Civil de Gijón, procede trasladar el recurso a dicho órgano, competente para su tramitación.

4.- Recibido lo anterior en Gijón, el ministerio fiscal se adhirió al recurso ya que, según el certificado consular, el apellido se corresponde con lo solicitado y la Encargada emitió el preceptivo informe y acordó la remisión del expediente al Registro Civil de Madrid, cuya Encargada, por su parte, informó que, acreditada la nacionalidad nigeriana de la solicitante y de su hija y que el nombre y los apellidos cuya anotación marginal se pretende son los que corresponden a la inscrita según su ley personal, considera que debe estimarse el recurso interpuesto, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 9 del Código Civil; 2, 15, 23 y 41 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 152, 219, 296 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2ª de abril, 26-1ª de septiembre y 7-4ª de diciembre de 2001, 14-2ª de enero de 2005 y 28-6ª de noviembre de 2007 y 19-12ª de abril de 2013.

II.- El 27 de agosto de 2010 la madre de una menor extranjera nacida en G. el... de... de 2008, filiada por una línea y llamada conforme a su ley personal D. T. E. solicita que en la inscripción de nacimiento de su hija se practique nota en el sentido de que su apellido es "E" y su nombre "D-T" y, a fin de acreditar lo expuesto, aporta certificado de la Embajada de Nigeria en España fechado el 26 de agosto de 2010. La Juez Encargada del Registro Civil de Gijón, entendiendo que no se aporta documentación suficiente para acordar la anotación marginal y que la aportada no acredita lo que se interesa, dispuso denegar la petición mediante auto de 27 de septiembre de 2010 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la promotora y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III.- Sin necesidad de expediente (arts. 23 LRC y 296 RRC), puede hacerse constar en el registro el cambio de nombre y apellidos de un extranjero conforme a su estatuto personal siempre que con documentos oficiales auténticos se justifiquen tanto la nacionalidad como que, en efecto, el nombre y los apellidos que se pretende que consten son los que corresponden por aplicación de dicha ley nacional. En este caso la promotora, a quien incumbe la carga de la prueba, no ha llegado a justificar la pertinencia del nombre y del apellido que solicita para su hija, toda vez que el único documento que aporta es un certificado de la Embajada de Nigeria en España que, sobre estar firmado por poder y carecer de legalización, nada dice acerca de la modificación del nombre y, respecto al apellido, se limita a expresar que el actual es "E", sin dar constancia de cuándo se operó la sustitución ni acreditar el hecho concerniente a su estado civil que conforme a su ley personal ha determinado que "E", inscrito en aplicación de esa misma ley personal, haya dejado de ser su apellido (art. 152 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Gijón (Asturias).

VII.2.- Cancelación

VII.2.1.- Cancelación de inscripción de nacimiento

Resolución de 3 de enero de 2014 (91ª)

VII.2.1.- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 11 de mayo de 2009, Don M. y Doña V. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, M-A. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 25 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 16 de febrero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 19 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 8 de abril de 2010, que no presentan escrito de alegaciones. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 11 de junio de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, M-A. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el... de... de 2009, hijo de

padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (102ª)

VII.2.1- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padres ecuatorianos, una vez acreditado que no se cumplan los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 11 de noviembre de 2006, los ciudadanos ecuatorianos Don F-E. y Doña L-G. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, E. nacida en M. el ... de ... de 2006, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 17 de noviembre de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 7.2 de la Constitución Política de Ecuador y que la menor no se había domiciliado junto a sus padres en Ecuador, ni que éstos no estén al servicio de tal país o de organismo internacional alguno, sólo restando resolver el apartado referido a si la estancia de los padres en España debe considerarse transitoria o habitual, entendiendo el Encargado que la misma es habitual.

2.- El 16 de marzo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada, según se deduce de la propia inscripción de nacimiento y de la documentación unida al expediente, el padre de la nacida estaba domiciliado en Ecuador, por tanto, la interesada ostenta por nacimiento la nacionalidad ecuatoriana de sus padres, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política de Ecuador, sin que se haya producido una situación de apatridia originaria para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de marzo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 2 de junio de 2010, que presentan alegaciones por la que solicitan que se mantenga la nacionalidad española para su hija. Posteriormente, el Encargado del Registro Civil dicta auto de fecha 4 de agosto de 2010, acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija y reconocen expresamente que el Sr. G. residió desde el año 2003 a octubre de 2006 en Ecuador

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008; y las resoluciones de 5-3^a de abril y 3-3^a de mayo de 2001; y 10-4^a de septiembre de 2002.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, E. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad colombiana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2006, hija de padres ecuatorianos nacidos en Ecuador. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Conforme al conocimiento adquirido por este Centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o "transitoriamente ausentes del país por cualquier causa"; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiriría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero.

El caso actual se singulariza porque el padre estaba domiciliado en Ecuador cuando nació la hija, según resulta de la propia inscripción de nacimiento, realizada en virtud de declaración de la madre, y también de acuerdo con el propio escrito de recurso en el que se reconoce por los promotores que, debido a diversas circunstancias el Sr. G. tuvo su residencia en Ecuador desde 2003 a octubre de 2006, naciendo la interesada en febrero de ese mismo año.

Este dato concuerda con el certificado de movimientos migratorios aportado por los promotores, en que además consta la salida del padre hacia Ecuador de nuevo en noviembre de 2006 (estando en España tan solo un mes), y el certificado de empadronamiento del padre aportado, en el que aparece fecha de alta en octubre de 2006. Si a ello se une que no consta en el expediente certificado de empadronamiento en España de la madre y que ésta, a pesar de estar autorizada para ello, no ha manifestado su voluntad contraria a la atribución a la hija de la nacionalidad ecuatoriana, hay que concluir que la estancia en España de los progenitores es meramente transitoria y que, por ende, le corresponde a la hija la nacionalidad ecuatoriana de origen, sin que se haya producido una situación de apátrida originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (109ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 2 de junio de 2009, los ciudadanos bolivianos Don C-A. y Doña M-J. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, S. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 10 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 27 de abril de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 30 de abril de 2010, acuerda la incoación de expediente registral para declarar con valor de simple presunción que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 17 de junio de 2010, que presentan escrito de alegaciones fuera de plazo, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe desfavorable y el 14 de febrero de 2011, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, S. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija

de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (110ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de San Sebastián (Guipúzcoa).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado ante el Registro Civil de San Sebastián el 14 de abril de 2009, los ciudadanos bolivianos Don P-F. y Doña R. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija menor de edad, A. nacida en San S. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de San Sebastián dictó auto de fecha 21 de julio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- Por providencia del Encargado del Registro Civil de fecha 25 de febrero de 2010, se inicia del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 27 de abril de 2010, que presentan escrito de alegaciones, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 7 de enero de 2011, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, A. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Donostia-San Sebastián.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (18ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 16 de junio de 2009, Don S. y Doña L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de

su hija, J-J. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 19 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 6 de mayo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 17 de mayo de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 8 de julio de 2010, que no presentan escrito de alegaciones alguno. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 18 de octubre de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, J-J. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España en 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición. No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (68ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

No procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de la interesada, nacida en 1919 en España hija de padres colombianos, por no resultar acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.3 del Código Civil, según la redacción de la Ley 51/82, de 13 de julio.

En el expediente sobre cancelación de anotación de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2004 del Encargado del Registro Civil Consular de España en Buenos Aires (Argentina), se declaraba española con valor de simple

presunción a Doña E-D. nacida en M. el 30 de abril de 1919. Recibida toda la documentación en el Registro Civil de Madrid, el Encargado de este Registro acuerda extender asiento marginal, pero al mismo tiempo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal dicho asiento a la vista de que la interesada podría haber adquirido la nacionalidad colombiana de sus padres. El Ministerio Fiscal el 15 de febrero de 2005 solicita que se cancele la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada. Por providencia de 24 de febrero de 2005, el Encargado del Registro Civil inicia el expediente de cancelación correspondiente.

2.- Notificado el hijo de la interesada, habida cuenta del fallecimiento de la misma en 2001, interpuso recurso contra el contenido de la providencia señalada. Dicho recurso dio lugar a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2007 (5ª), que confirmó la providencia apelada y acuerda la continuación del procedimiento de cancelación, hasta que se dicte acuerdo en el sentido que proceda.

3.- Con fecha 29 de julio de 2010, el Encargado del Registro Civil de Madrid dicta auto mediante el cual se declaraba con valor de simple presunción que la interesada no adquirió al nacer la nacionalidad española de origen y se acordaba cancelación total del asiento marginal extendido en el acta de nacimiento de la misma, en primer lugar, porque la promotora no habría adquirido la nacionalidad española en aplicación de los artículos 17 y 18 del Código Civil en la redacción aplicable entonces y, en segundo lugar, dado que la retroactividad declarada en algunos casos por la Dirección General de los Registros y del Notariado respecto a la Ley de reforma del Código Civil, de 13 de Julio de 1982, quedaba excluida en el supuesto examinado, entendiéndose que la Sra. S. adquirió al nacer la nacionalidad colombiana de sus padres y que en el momento de su fallecimiento ostentaba la nacionalidad argentina.

4.- Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad española.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, interesa la confirmación del auto apelado. El Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 del Código civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 17. 1-3º del Código civil en su redacción de la Ley de 13 de Julio de 1982, 17. 1 c) y 18 del Código civil en su redacción actual; 46, 64 y 96 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229, 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 22-3ª de Abril de 2005; 11-2ª y 13 de Enero de 2007; 24 de Enero y 3-4ª de Marzo de 2009.

II.- Se discute en el presente recurso si le corresponde o no la nacionalidad española a una mujer nacida M. en 1919, hija de padre colombiano nacido en Colombia y madre colombiana, nacida en España. Seguido expediente registral para la declaración de dicha nacionalidad con valor de simple presunción ante el Registro Civil Consular de su domicilio en Buenos Aires, el mismo concluyó con auto favorable basado en la redacción dada al artículo 17 1. c) del Código civil por la Ley de 17 de diciembre de 1990, conforme al cual son españoles de origen “los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”.

III.- Remitido dicho auto al Registro Civil de Madrid a fin de practicar la correspondiente anotación marginal (cfr. art. 38 L.R.C.) en la inscripción de nacimiento de la nacida, se acordó practicar la citada anotación marginal y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por entender que el auto del Registro Civil Consular de Buenos Aires no se ajustaba a la legalidad, por no corresponder la nacionalidad española a la inscrita.

Se dictó providencia iniciando el expediente de cancelación, recurrida por el hijo de la interesada y confirmada por esta Dirección General, declarando que debía continuar el procedimiento para que se dictase el acuerdo que el Encargado competente estimara oportuno. Posteriormente, el Encargado del Registro Civil de Madrid, por auto de 29 de julio de 2010, cancela la anotación de la nacionalidad, este auto es objeto del presente recurso.

IV.- A diferencia de lo que ocurre en los Registros Consulares y en el Central, en los que puede constar la advertencia de que la inscripción de nacimiento no acredita la nacionalidad española del titular (cfr. art. 66 "fine" R.R.C.), en los Registros municipales situados en España, donde deben ser inscritos todos los nacimientos en ella acaecidos (cfr. art. 15 L.R.C), no es tarea fácil, sin una adecuada investigación, saber con certeza si al nacido le corresponde o no la nacionalidad española de origen. Piénsese que, aparte de los casos en que haya sobrevenido pérdida de la nacionalidad española y la misma haya sido inscrita, el Encargado no puede tener la seguridad, por el solo examen de la inscripción de nacimiento, que al nacido le haya correspondido *ex lege* la nacionalidad española, dados los múltiples factores que han de ser analizados (*iure sanguinis* la nacionalidad española del progenitor consta por simple declaración no contrastada; *iure soli* habría que probar que uno de los progenitores ha nacido en España, que la legislación de los progenitores extranjeros no atribuye al hijo su nacionalidad o que, respecto del inscrito sin filiación, no está determinada y atribuida la nacionalidad de los progenitores, etc.), aparte de que en ocasiones habrá que tener en cuenta las normas sobre nacionalidad española anteriores a las hoy vigentes.

V.- En el presente caso a la interesada nacida en M. en 1919 e hija de padres colombianos, le correspondía la nacionalidad colombiana del padre dado el principio de unidad familiar vigente en materia de nacionalidad en la redacción originaria del Código civil, en la cual el hijo menor de edad seguía la condición del padre titular de la patria potestad (cfr. Art. 18 y 154 C.c. originarios). Además, el nacimiento en España no era entonces por sí solo causa de atribución de la nacionalidad española, sino que requería el previo ejercicio del derecho de opción concedido para tales supuestos, siendo así que ni sus padres, durante la menor edad de la hija, ni ésta al llegar a la mayoría de edad, ejercieron el derecho que tenía a optar a la nacionalidad española (cfr. arts. 18 y 19 C.c. originarios y art. 18 CC., redacción de 1954).

VI.- Por lo demás, es cierto que, en el momento del nacimiento de la interesada, la atribución de la nacionalidad colombiana respecto de los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no se producía automáticamente, sino que era necesario un acto posterior, por lo que el hijo de la interesada solicita para la misma, la declaración de la nacionalidad española que habría adquirido de conformidad con el vigente artículo 17.1, c) CC., según el cual, son españoles de origen "los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad". La respuesta, conforme a la doctrina de este Centro Directivo, ha de ser en este caso afirmativa. En efecto, a partir de la Resolución de 7 de diciembre de 1988 viene declarando que la indicada forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española, que aparece en nuestro derecho en la reforma del Código civil introducida por Ley 51/1982, de 13 de julio, tiene eficacia retroactiva respecto de nacimientos acaecidos en España antes de su entrada en vigor, por razón de su finalidad de evitación de la apatridia. El principio del "favor nationalitatis" basta para fundamentar este resultado, sin necesidad de acudir a la aplicación de lo previsto en la disposición transitoria 1ª de las originales del Código civil, lo que llevaría, además, a idéntica conclusión, al tratarse de un derecho declarado por primera vez en la nueva legislación y que no perjudica, si el interesado no tiene ninguna nacionalidad, otro derecho adquirido de igual origen. Aunque la propia Dirección General ha entendido que sería excesivamente forzado aplicar la referida eficacia retroactiva en casos en los que, en el momento de entrar en vigor la ley 51/1982, de 13 de julio, el nacido

en España ya tenía *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores, no consta que esto concorra en el presente caso, al contrario, el promotor en el escrito del primer recurso aportó certificado del Consulado de Colombia en Buenos Aires en relación con la no inscripción de la interesada en el Registro Civil de Nacimientos colombiano y sobre que la misma no posee cédula de ciudadanía colombiana. Asimismo, en cuanto a la nacionalidad argentina, aporta certificado del Poder Judicial de la Nación Argentina acerca de la no constancia de la Sra. S. en el Registro Nacional de Electores, en el que figuran inscritos todos los ciudadanos argentinos mayores de 18 años; y diversa documentación en la que la interesada aparece con nacionalidad española, como su acta de matrimonio y certificado de defunción. De acuerdo con lo anterior, cabe presumir que mantuvo la condición de extranjera en los mencionados países, al no obrar en el expediente documento alguno en sentido contrario, por lo que no procedería la cancelación de la anotación de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (135ª)

VII.2.1-Cancelación de inscripción de nacimiento

Procede cancelar, a petición de la promotora, una inscripción de nacimiento acordándose la extensión de otra nueva en la que consten los datos correspondientes tras la inscripción de la filiación paterna adoptiva.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y extensión de una nueva remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil de Marín (Pontevedra).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 13 de abril de 2010 en el Registro Civil de Marín (Pontevedra), Doña N-E. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la cancelación de su inscripción de nacimiento y la extensión de una nueva para hacer constar su actual filiación sin referencia a la adopción. Adjuntaba su inscripción de nacimiento -ocurrido en Perú el 13 de octubre de 1985- practicada en España en 2007, en cuyo cuerpo principal constan los datos de filiación biológica y marginalmente la adopción en 2006 por parte de un ciudadano español que contrajo matrimonio con su madre en 2002.

2.- Ratificada la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 28 de septiembre de 2010 denegando la pretensión porque la inscripción practicada es conforme con la legislación vigente en el momento en que se practicó.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la nueva redacción del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil, operada a través del Real Decreto 820/2005, y la Resolución-Circular de 31 de octubre de la Dirección General de los Registros y del Notariado, permiten la cancelación y traslado

de la inscripción a un nuevo folio a petición del interesado o de sus representantes legales en caso de adopción, siendo esta regulación, precisamente, la que estaba vigente en el momento en que se practicó la inscripción.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Marín se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 77, 163, 164, 306, 307 y 342 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 8-5ª de abril, 13-1ª de abril de 2011 y 26-10ª de noviembre de 2012.

II.- Pretende la promotora, invocando el artículo 307 RRC, la cancelación de su inscripción de nacimiento, en la que consta una marginal de adopción, y su traslado a una nueva donde filiación y apellidos actuales figuren en el cuerpo principal. Alega para ello razones de preservación de la intimidad y de mayor claridad de los datos. La encargada del registro dictó auto denegatorio basándose en que la inscripción se practicó de acuerdo con la legislación aplicable en ese momento.

III.- La regla general en materia de inscripción de resoluciones firmes de rectificación o corrección y de las que completen un asiento principal es la contenida en el artículo 306 RRC, en virtud del cual la inscripción ha de practicarse en el folio registral al que se refiere la resolución determinando las expresiones que se cancelan y las que las sustituyen o las circunstancias que se agregan y fue así como se practicó la inscripción cuya cancelación se solicita. El artículo 307 RRC permite excepcionalmente, para mayor claridad del asiento y mayor seguridad de los datos reservados, que se cancele totalmente el antiguo asiento y se extienda otro nuevo si la resolución así lo ordena, cosa que no ha sucedido en este caso, pero también contempla la posibilidad de traslado total del asiento a petición del interesado mayor de edad o de los representantes legales del menor en caso de rectificación o modificación de sexo o de filiación, añadiendo, además, que en caso de adopción ni siquiera es necesario expediente para proceder al traslado. Es evidente que la pretensión de la promotora entra de lleno en este último supuesto, sin necesidad de ir más allá en la justificación, puesto se ha producido una modificación de filiación por adopción, pero, en cualquier caso, no cabría tampoco invocar la legislación aplicable en el momento en que se practicó la inscripción porque el asiento se realizó en 2007 y la redacción actual del precepto citado se introdujo a partir del RD 820/2005, de 8 de julio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º.- Proceder, según lo establecido por los artículos 77 y 307 RRC, a la cancelación de la inscripción principal de nacimiento junto con la marginal de adopción, practicándose una nueva, con una referencia a la antigua, en la que figuren los datos actuales relativos a la filiación paterna y apellidos de la inscrita.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Marín (Pontevedra).

Resolución de 22 de Enero de 2014 (7ª)

VII.2.1-Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de inscripción de recuperación de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento del promotor al no resultar acreditado que el inscrito hubiera ostentado dicha nacionalidad anteriormente.

En el expediente sobre cancelación de recuperación de nacionalidad en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1.- El 2 de noviembre de 1998, Don L-A. mayor de edad y de nacionalidad cubana, suscribió acta de recuperación de la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil del consulado de La Habana basada en la nacionalidad española de origen de su madre, quien, según el promotor, la seguía ostentando en el momento del nacimiento del hijo. Consta en el expediente la siguiente documentación: hoja de declaración de datos para la inscripción, certificación de nacimiento del interesado en Cuba el 6 de agosto de 1938, inscripción de nacimiento de su madre en el Registro Civil español, certificación cubana del matrimonio de los progenitores celebrado en 1937, acta de recuperación y auto del encargado del registro consular ordenando la práctica del asiento de recuperación de la nacionalidad española al margen de la inscripción de nacimiento del interesado.

2.- El encargado del Registro Civil en La Habana, previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, acordó iniciar expediente gubernativo para cancelar el dato referido a la nacionalidad de la madre (que figuraba como española en la inscripción de nacimiento de su hijo) y la inscripción marginal de recuperación de nacionalidad del inscrito, expediente que concluyó con auto de 31 de agosto de 2009 acordando la cancelación de la mención de nacionalidad española de la madre del inscrito y de la inscripción marginal de recuperación de nacionalidad.

3.- Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la legislación aplicada por el consulado para cancelar su inscripción se basa en normas preconstitucionales y discriminatorias respecto a la mujer

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

5.- Por otra parte, mediante escrito presentado en el mismo registro civil consular el 25 de agosto de 2009, el interesado solicitó la adquisición de la nacionalidad española por opción al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. El encargado del registro dictó auto el 1 de septiembre de 2009 apreciando la concurrencia de los requisitos necesarios y ordenando la práctica de la inscripción de nacionalidad española de origen del promotor que se llevó a cabo finalmente el 22 de noviembre de 2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17.2º y 22 en su redacción originaria y 26 del Código civil (CC.); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC);

y las resoluciones, entre otras, 17-1ª de junio de 2003; 21-1ª de abril de 2004; 24-1ª de mayo de 2005; 9-2ª de febrero de 2006; 29-1ª de junio de 2007; 11-3ª de abril de 2008; 19-6ª de febrero y 27-6ª de mayo de 2009.

II.- El promotor, nacido en Cuba en 1938, instó en 1998 la recuperación de la nacionalidad española por ser hijo de madre española nacida en España. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de recuperación, el encargado del Registro inició en 2009 el procedimiento de cancelación de dicha recuperación al considerar que no resulta acreditado que el inscrito hubiera poseído alguna vez la nacionalidad española transmitida por su madre, dado que, según documentación incluida en el expediente, ninguno de los progenitores era español en el momento del nacimiento de su hijo. Dicha cancelación constituye el objeto del presente recurso.

III.- Si bien no hay constancia de que la madre del recurrente, española de origen, adquiriera la ciudadanía cubana, lo cierto es que en el momento del nacimiento del promotor (1938) estaba vigente el artículo 17.2 del Código Civil en su redacción originaria, según la cual la madre únicamente transmitía la nacionalidad en defecto del padre, de modo que el interesado nunca pudo ostentar la nacionalidad española. Por otro lado, el artículo 22 CC, también en la redacción originaria entonces vigente, establecía que “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, por lo que la esposa perdió la nacionalidad española cuando se casó con un ciudadano cubano.

IV.- La nacionalidad española de la madre no podía pues servir de base para que el hijo recuperara una nacionalidad que aquella nunca le transmitió, pero sí constituía el presupuesto para ejercer el derecho de opción a dicha nacionalidad, si bien ello requería la tramitación de un expediente distinto que, tal como se desprende de la documentación aportada, el interesado efectivamente promovió en agosto de 2009 y que finalizó con resultado favorable, de modo que el recurrente ostenta actualmente la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (5ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de la interesada, nacida en Madrid en 1939, hija de argentino y española nacida en España, al no resultar acreditado que se cumplan los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante acuerdo de fecha 27 de julio de 2009 el Encargado del Registro Civil Consular de España en Buenos Aires declaraba española con valor de simple presunción a Doña Mª-

D. nacida en M. el 9 de abril de 1939; aportaba como prueba certificación literal de nacimiento y fotocopia de documento de identidad argentino, en el que no consta la fecha de validez. Recibida la documentación en el Registro Civil de Madrid, el Ministerio Fiscal por informe de 15 de marzo de 2010, interesa que se inicie procedimiento de cancelación del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción cuando se practique. Por providencia del Encargado del Registro Civil de Madrid de fecha 23 de marzo de 2010, se acuerda la extensión del asiento marginal correspondiente y la incoación del oportuno expediente para su cancelación, a la vista de que la normativa en vigor en el momento de su nacimiento no atribuyó la nacionalidad española a la interesada.

2.- Notificada la providencia a la interesada, ésta manifestó su disconformidad con el procedimiento de cancelación iniciado.

3.- Con fecha 23 de septiembre de 2010 el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto mediante el cual se acordaba declarar con valor de simple presunción que la interesada no adquirió al nacer la nacionalidad española de origen y la cancelación total del asiento marginal extendido en el acta de nacimiento de la misma, a la vista de que la interesada había nacido en M. hija de padre argentino y madre española en el año 1939, y la redacción originaria del Código Civil vigente en aquel momento, no atribuía a la nacida la nacionalidad española. Por otra parte, no cabía la aplicación retroactiva del artículo 17.1 c) del Código Civil, conforme a la redacción dada por la Ley de 13 de julio de 1982.

4.- Notificada la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que le corresponde la nacionalidad española de origen y que su situación en Argentina es de extranjera residente.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso éste interesó la confirmación del auto apelado. El Encargado del Registro Civil se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 y 19 del Código civil en su redacción originaria; 18 del Código civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 26 del Código civil en su redacción actual; 46 y 64 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 4-2ª, 18-1ª, 21-4ª y 27-2ª y 3ª de enero, 4-1ª de febrero, 1-1ª y 18-3ª y 5ª de marzo, 4-3ª, 15-1ª y 2ª y 19-2ª de abril y 10-1ª de mayo de 2003 y 2-3ª de febrero de 2004; 21-4ª de Octubre de 2008; 3-4ª de Marzo de 2009.

II.- Se discute en el presente recurso si le corresponde o no la nacionalidad española a la interesada, nacida en M. en 1939 hija de padre argentino y madre española. Seguido expediente registral para la declaración de dicha nacionalidad con valor de simple presunción ante el Registro Civil Consular de su domicilio en Buenos Aires, el mismo concluyó con auto favorable basado en la redacción dada al artículo 17.1, c) del Código civil por la Ley de 13 de julio de 1982, conforme al cual son españoles de origen "Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad".

III.- Remitido dicho auto al Registro Civil de Madrid a fin de practicar la correspondiente anotación marginal (cfr. art. 38 L.R.C.), se acordó practicar la citada anotación marginal y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por entender que el auto del Registro Civil Consular de Buenos Aires no se ajustaba a la legalidad, al no corresponder la nacionalidad española a la inscrita. Incoado nuevo expediente, con fecha 23 de septiembre de 2010 el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto acordando declarar con valor de simple presunción que la interesada no adquirió al nacer la nacionalidad española de origen

y la cancelación total del asiento marginal extendido en su inscripción de nacimiento. Contra dicho Auto interpuso la promotora el presente recurso.

IV.- A diferencia de lo que ocurre en los Registros Consulares y en el Central, en los que puede constar la advertencia de que la inscripción de nacimiento no acredita la nacionalidad española del titular (cfr. art. 66 "fine" R.R.C.), en los Registros municipales situados en España, donde deben ser inscritos todos los nacimientos en ella acaecidos (cfr. art. 15 L.R.C), no es tarea fácil, sin una adecuada investigación, saber con certeza si al nacido le corresponde o no la nacionalidad española de origen. Piénsese que, aparte de los casos en que haya sobrevenido pérdida de la nacionalidad española y la misma haya sido inscrita, el Encargado no puede tener la seguridad, por el solo examen de la inscripción de nacimiento, que al nacido le haya correspondido *ex lege* la nacionalidad española, dados los múltiples factores que han de ser analizados (*iure sanguinis* la nacionalidad española del progenitor consta por simple declaración no contrastada; *iure soli* habría que probar que uno de los progenitores ha nacido en España, que la legislación de los progenitores extranjeros no atribuye al hijo su nacionalidad o que, respecto del inscrito sin filiación, no está determinada y atribuida la nacionalidad de los progenitores, etc.), aparte de que en ocasiones habrá que tener en cuenta las normas sobre nacionalidad española anteriores a las hoy vigentes.

V.- En el presente caso a la interesada nacida en M. en 1939 e hija de padre argentino y madre originariamente española le correspondía la nacionalidad argentina que el padre ostentaba en el momento del nacimiento, dado el principio de unidad familiar vigente en materia de nacionalidad en la redacción originaria del Código civil, en la cual el hijo menor de edad seguía la condición del padre titular de la patria potestad (cfr. Art. 18 y 154 C.c. originarios). Además, el nacimiento en España no era entonces por sí solo causa de atribución de la nacionalidad española, sino que requería el previo ejercicio del derecho de opción concedido para tales supuestos, siendo así que ni sus padres, durante la menor edad de la hija, ni ésta al llegar a la mayoría de edad, ejercieron el derecho que tenía a optar a la nacionalidad española (cfr. arts. 18 y 19 C.c. originarios y art. 18 CC., redacción de 1954).

VI.- Es cierto que la atribución de la nacionalidad argentina respecto de los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no se produce automáticamente, sino en base al ejercicio del derecho de opción que les corresponde, lo que no consta en este caso. Pero, aún en tal hipótesis de ausencia de opción no puede servir de fundamento para la petición de la interesada la norma invocada por el auto del Registro Civil Consular de Buenos Aires, esto es, el artículo 17 del Código civil que, a partir de la Ley de 13 de julio de 1982, considera españoles de origen *iure soli* a los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

En efecto, la indicada forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española no aparece en nuestro Derecho hasta la citada reforma del Código civil de 1982 y si puede entenderse, de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo, que la nueva norma tiene eficacia retroactiva respecto de nacimientos acaecidos en España antes de su entrada en vigor - recuérdese que en este caso el nacimiento se produjo en 1939 -, es claro, atendiendo a la finalidad de la norma que es la de evitar situaciones de apatridia, que la repetida atribución de la nacionalidad española pudo beneficiar en su caso a los nacidos en España que, cuando entró en vigor la Ley de 1982, carecían de nacionalidad, mientras que es a todas luces excesivo forzar esa eficacia retroactiva en casos como el actual, en el que la interesada, en prueba de su posible apatridia sólo ha aportado fotocopias de su documento nacional de identidad argentino en el que no consta la fecha de validez, por lo que no resultaría, por ahora, suficientemente acreditado que la promotora no ostente nacionalidad alguna en la actualidad, no constando en el expediente ninguna otra documentación acreditativa de su afirmación.

Todo ello, sin perjuicio, de la posibilidad de la interesada de poder optar por la nacionalidad española en base al artículo 20.1.b) del Código Civil, al ser hija de madre originariamente española y nacida en España.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (12ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de una menor nacida de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid, los ciudadanos bolivianos Don M. y Doña D. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, M. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 27 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 16 de febrero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 19 de febrero de 2010, acuerda la incoación de expediente registral para declarar con valor de simple presunción que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 2 de agosto de 2010, que no presentan escrito de alegaciones alguno. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 14 de diciembre de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hija, M. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar la menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el... de... de 2009, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hija, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido la menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid

Resolución de 27 de Enero de 2014 (79ª)

VII.2.1-Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre nicaragüense y madre paraguaya, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Inca (Islas Baleares).

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Inca, el ciudadano nicaragüense Don J-A. y la ciudadana paraguaya Doña G-R. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, B-A. nacido en P de M. el ... de ... de 2010, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil de Inca dictó auto de fecha 15 de octubre de 2010 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 23 de mayo de 2011, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que no concurren los requisitos establecidos en el artículo 17 del Código Civil, por cuanto no son españoles *iure soli* los nicaragüenses nacidos en España, por corresponderles *iure sanguinis* la nacionalidad de uno de los progenitores, de conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 28 de marzo de 2007. El Encargado del Registro Civil de Inca, por providencia de fecha 13 de junio de 2011, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 1 de julio de 2011, que presentan alegaciones por las que solicitan que no se proceda a la cancelación de la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 10 de agosto de 2011, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, éstos presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción; y las resoluciones de 16-2ª de enero, 15-2ª de febrero, 3-6ª de julio, 7-9ª de septiembre, 29-1ª de noviembre, 5-1ª de diciembre de 2002; y 5-5ª de noviembre de 2004.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, B-A. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad nicaragüense de su padre, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España en 2010, hijo de padre nicaragüense nacido en Nicaragua y madre paraguaya. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Lo cierto es que, de acuerdo con el conocimiento que esta Dirección General tiene de la legislación de Nicaragua, el hijo tenía al nacer la nacionalidad nicaragüense del padre. En efecto, la Constitución de Nicaragua establece sin ningún tipo de restricción que son nicaragüenses los nacidos de padre o madre nicaragüense (cfr. art. 16 nº 2). En consecuencia, el hijo de los promotores ostenta *iure sanguinis* la nacionalidad nicaragüense del padre y no existe la situación de apatridia originaria alegada, que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento del menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) CC.) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Inca (Islas Baleares).

Resolución de 30 de Enero de 2014 (11ª)

VII.2.1- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de nacimiento de dos hermanos nacidos de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid, los ciudadanos bolivianos Don J. B. y Doña P. T., solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de sus hijos, A. y J. J. B.T., nacidos en M. el ... de mayo de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó autos de fecha 16 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del Cc, procediéndose a extender las anotaciones correspondientes en las inscripciones de nacimiento de los menores.

2.- Con fechas 13 de abril y 29 de julio de 2010, respectivamente, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de las anotaciones practicadas, ya que en el momento del nacimiento de los interesados estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencias de fecha 19 de abril y 4 de agosto de 2010, acuerda la incoación de expediente registral para declarar con valor de simple presunción que a los menores interesados no les corresponde la nacionalidad española, con la finalidad de dejar sin efecto las inscripciones marginales realizadas. Se procede a la notificación de los expedientes a los promotores el 18 de agosto de 2010, presentando escritos de alegaciones por los que solicitan que se mantenga la nacionalidad española de sus hijos. Previo informe del Ministerio Fiscal y del Encargado del Registro Civil, se remiten las actuaciones a este Centro Directivo, que con fecha 5 de julio de 2013 dicta resoluciones por las que acuerda retrotraer las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro, que ponga fin al expediente.

3.- Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informes desfavorables y el 29 de agosto de 2013, el Encargado del Registro Civil dicta autos acordando la cancelación total de los asientos marginales de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicados.

4.- Notificada las resoluciones a los promotores, presentan recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de sus hijos.

5.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación de los recursos y el Encargado del Registro Civil se ratifica en las decisiones acordadas y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución de los recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de

marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por los promotores, que se deje sin efecto los autos que establecen la cancelación de las anotaciones marginales de nacionalidad española con valor de simple presunción que constan en las inscripciones de nacimiento de sus hijos, A. y J. J. B. T. Las declaraciones de nacionalidad fueron inscritas en el Registro Civil y, posteriormente, se iniciaron expedientes por el Encargado del Registro para cancelar dichas anotaciones, al ostentar los menores *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizaron con los autos objeto de los recursos. Dada la identidad de objeto y las relaciones entre los interesados, procede la acumulación y la resolución conjunta (art. 347 del Reglamento del Registro Civil).

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de unos niños nacidos en España el ... de mayo de 2009, hijos de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de los menores.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores puedan instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de sus hijos, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) Cc) al haber nacido los menores en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar los recursos interpuestos y confirmar las resoluciones apeladas.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid

Resolución de 30 de Enero de 2014 (14ª)

VII.2.1- Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de un menor nacido de padre y madre bolivianos, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid, los ciudadanos bolivianos Don R. y Doña G. A., solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, J., nacido en M. el .. de mayo de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 19 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del Cc, procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 29 de octubre de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 15 de noviembre de 2010, acuerda la incoación de expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores, presentando la Sra. Á. escrito de alegaciones el 5 de enero de 2011, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emite informe favorable y el 22 de marzo de 2011, el Encargado del Registro Civil dicta auto acordando la cancelación total del asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en su día practicada.

3.- Notificada la resolución a los promotores, la Sra. Á. presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando lo solicitado.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia

de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, las Circulares de 16 de diciembre de 2008 y 21 de mayo de 2009; y las resoluciones de 5-2ª de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de enero de 2009; 1-2ª de febrero de 2010.

II.- Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, J. La declaración de nacionalidad fue inscrita en el Registro Civil y, posteriormente, se inició expediente por el Encargado del Registro para cancelar dicha anotación, al ostentar el menor *ius sanguinis* la nacionalidad boliviana por sus padres, que finalizó con el auto objeto del recurso.

III.- Inicialmente, los promotores intentaron que se declarara, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen de un menor nacido en España el ... de mayo de 2009, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se basaba en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c del Código civil).

IV.- Tal como expone la Circular de este Centro Directivo de 21 de mayo de 2009, desde la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero de 2009, cuyo artículo 141 establece que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano” ha tenido lugar una modificación del criterio de ésta Dirección General en materia de atribución de la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos en España. En efecto, con anterioridad a dicha reforma se consideraba que aquellos no adquirirían automáticamente, por el solo hecho del nacimiento, la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior, y que se daba entonces una situación de apatridia originaria en la que se imponía la atribución de la nacionalidad española *iure soli*. No obstante, ahora la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que pasa a un régimen de atribución de la nacionalidad *ius sanguinis*. Siendo la redacción de este precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición.

No se da, pues en este sentido, una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución *iure soli* de la nacionalidad española, por lo que procedería la cancelación de la anotación sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción de la inscripción de nacimiento de la menor.

V.- Todo ello sin perjuicio, de que los promotores pueda instar la adquisición de la nacionalidad española por residencia de su hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de acuerdo con el artículo 22 del Código civil, teniendo en cuenta el plazo de residencia legal de un año (art. 22.2.a) Cc) al haber nacido el menor en territorio español.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid.

VIII. PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

VIII.2.- Representación

VIII.2.1.- Recurso interpuesto por medio de representante

Resolución de 30 de Enero de 2014 (6ª)

VIII.2.1- Recurso interpuesto por medio de representante.

No es admisible el recurso presentado por la madre de las interesadas sin que conste la representación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de San José (Costa Rica).

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil Consular de San José, Doña M.G., solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción para sus hijas, D. y L. GÜ. G., nacidas en Costa Rica el 21 de junio de 1982 y el 2 de mayo de 1983, respectivamente, por haber estado sometidas a la patria potestad de un ciudadano español. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por opción el 21 de septiembre de 2010; certificación literal de nacimiento del padre de las interesadas, Don G. GÜ., en la que consta su nacimiento en España en 1939, de padre alemán y madre española; registro de nacimiento de las interesadas; fotocopias del dictamen pericial psiquiátrico forense correspondiente a D. GÜ. G. y de los documentos de identidad de las interesadas y la promotora.

2.- El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 19 de mayo de 2011 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española de las interesadas por considerar que no se ha probado suficientemente los hechos que sustentan la solicitud de la promotora, según lo establecido en los artículos 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil.

3.- Notificada la resolución, la Sra. García presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando su solicitud.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

5.- Por oficio de este Centro Directivo de fecha 25 de septiembre de 2012, se solicita al Registro Civil Consular de San José que se requiera a la promotora para que acredite la representación que ostenta respecto de sus hijas mayores de edad. Remitiendo el Registro Civil Consular Oficio de fecha 14 de junio de 2013, en el que se indicaba que, pese a haber sido requerida la promotora en reiteradas ocasiones, no ha aportado documento alguno a ese respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1280 del Código Civil; 97 de la Ley del Registro Civil; 16, 348 y 358 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre

otras, 23-1ª de junio de 1998; 11 de noviembre de 1999, 14-2ª de septiembre de 2004, 23-1ª de mayo de 2005, 16-2ª de junio de 2006, 15-4ª de febrero de 2007 y 22-1ª de septiembre de 2008; 21-3ª de julio de 2009.

II.- Ha pretendido optar a la nacionalidad española dos ciudadanas nacidas en Costa Rica el 21 de junio de 1982 y el 2 de mayo de 1983, respectivamente. La petición se basa en el artículo 20.1.a) del Código civil, según el cual, pueden optar a dicha nacionalidad quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Consular dictó resolución denegando la solicitud por estimar que no había resultado suficientemente acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 20 del Código Civil.

III.- Los interesados, contra las decisiones de los Encargados de los Registros Civiles, pueden interponer el recurso de apelación que resuelve esta Dirección General y que ha de presentarse, según los casos, en los plazos que señala la Ley del Registro Civil. Pero en esta ocasión el recurso fue presentado por la Sra. G., según la firma que aparece al final del recurso, cuando, al ser las interesadas mayores de edad, tenían que actuar por sí mismas u otorgar la representación a un tercero para que lo hiciese en su nombre (cfr. art. 20.2 c) Cc). Pues bien, no consta que al tiempo de presentar el recurso, las interesadas hubiesen otorgado formalmente la representación a su madre para que actuase en su nombre. Por otra parte, no obra en el expediente sentencia de incapacitación de las interesadas, únicamente se ha presentado una fotocopia del dictamen pericial psiquiátrico forense correspondiente a D. Gü. G.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular en San José (Costa rica)

VIII.2.2.- Representación y/o intervención del menor interesado

Resolución de 3 de enero de 2014 (83ª)

VIII.2.2.-Solicitud de inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero e inscripción de nacimiento, formulada mediante representante.

1º.- No se admite la solicitud de inscripción de matrimonio y la inscripción de nacimiento de hijo menor de edad en tanto no se acredite de forma auténtica la veracidad de la firma y la calidad en la que actúa el representante.

2º.- Es inscribible un nacimiento que tuvo lugar en Honduras en 1983, practicado inicialmente solo con filiación materna, porque el reconocimiento paterno del inscrito por parte de un ciudadano español ha sido otorgado en forma y con todos sus requisitos.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio e inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Tegucigalpa (Honduras).

HECHOS

1.- El 15 de octubre de 2009 se presenta solicitud, firmada mediante huella dactilar, al parecer, por Don J. nacido en El T. (C) el 19 de junio de 1920 y de nacionalidad española, acompañada de la de dos testigos identificados, en el Consulado General de España en

Tegucigalpa junto con impreso de declaración de datos, para la transcripción de su matrimonio civil celebrado el día 17 de junio de 1994 en Honduras, según la ley local, con Doña Á-M^a. de nacionalidad hondureña, nacida en S-F, A. (Honduras) el 4 de febrero de 1963. También se presentaba firmada de igual manera solicitud para la inscripción de nacimiento de la hija del matrimonio menor de edad, M^a-J. y la solicitud de inscripción de nacimiento del hijo del matrimonio, mayor de edad, D-F. en este caso firmada por el propio interesado. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; y del Sr. H. certificado de nacimiento en el Registro Civil español, acta de matrimonio anterior, de fecha 1 de agosto de 1949, inscrito en el Registro Civil Hondureño con anotación de divorcio, de fecha 21 de abril de 1994, también inscrito en el mismo Registro Civil, acta de nacimiento del hijo mayor de edad, nacido el 5 de diciembre de 1983 con filiación materna y reconocido por el Sr. H. con fecha 26 de julio del año 2000, acta de nacimiento de la hija menor de edad, nacida el 22 de mayo de 2000, pasaporte español del interesado y de la Sra. N. acta de nacimiento y documento de identidad hondureño.

2.- Visto lo solicitado el Consulado procedió a revisar la documentación existente respecto al Sr. H- constando que el mismo había contraído un matrimonio anterior, aunque en la hoja de declaración de datos se hacía constar que era soltero, con otra ciudadana hondureña, sin que conste inscrito en el Registro Civil español ni su correspondiente divorcio, que al parecer se produjo por sentencia de fecha 21 de abril de 1994.

3.- El 22 de julio de 2011 el Encargado del Registro Civil Consular de Tegucigalpa dictó auto resolviendo denegar las inscripciones solicitadas, en el caso del matrimonio por no constar inscritos ni el anterior matrimonio del ciudadano español ni su divorcio, y respecto de las inscripciones de nacimiento existir dudas razonables sobre la realidad de los hechos inscritos en el Registro Civil local, concretamente sobre la filiación.

4.- Notificada la resolución, fue interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado mediante escrito de fecha 30 de agosto de 2011, firmado por la Sra. N. aportando nueva documentación referente a su hija menor de edad, concretamente documentación de la adopción de la misma en el año 2004 y certificado de la defunción del Sr. H. con fecha 17 de marzo de 2010 en Honduras, e inscrita en el Registro Civil Hondureño con fecha 23 de marzo, mientras se estaba tramitando los expedientes ahora examinados.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informa en el sentido de que la solicitud sobre la inscripción de nacimiento de la hija menor deber ser presentada para inscribir la adopción por la Sra. N. como madre de la misma, y sobre la inscripción de matrimonio entiende que el autor es conforme a derecho, y el Encargado del Registro se ratifica en el auto impugnado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 24, 26 y 95 de la Ley de Registro Civil (LRC) y 16 y 348 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 18-1^a de marzo de 1994, 7 de marzo de 1996, 27-1^a de febrero, 16 de mayo y 11 de julio de 1997, 23-1^a de junio de 1998, 11 de noviembre de 1999, 14-2^a de septiembre de 2004, 23-1^a de mayo y 4-4^a de noviembre de 2005, 27-3^a de noviembre de 2006, 15-4^a de febrero de 2007, 29-2^a de octubre de 2009 y 25-44^a de enero de 2012.

II.- La admisibilidad de la solicitud presentada requiere o acreditación fehaciente de la identidad del firmante y, en su caso, la representación que ostenta quien suscribe o la ratificación de este último por parte de los solicitantes. En el caso presente la solicitud de inscripción del matrimonio está firmada, mediante huella dactilar, por diferentes problemas entre ellos derivados de varias enfermedades, se supone que por el promotor Sr. H. sin

que pueda constatarse dicha identidad y sin que conste que el mismo hubiera otorgado representación legal a las personas que como testigos firman con él, ninguna de las cuales es su esposa, la Sra. N. Si bien los procuradores y abogados pueden asistir a los interesados en los expedientes gubernativos como apoderados o como auxiliares, la persona que actúa en este caso no acredita en cuál de los dos conceptos lo hace, ni la representación que ejerce, ni su condición de letrada y, por tanto no debió darse trámite a la solicitud entablada por un tercero cuyo poder no consta auténticamente (cfr. art. 1280-5º CC.).

III.- La situación anterior se repite en la solicitud de inscripción de nacimiento de la hija del matrimonio, Mª-J. menor de edad, sin que conste además la intervención de su madre, por lo que tampoco debió admitirse la solicitud presentada al no haberlo sido por los representantes legales de la persona afectada por la inscripción, ya que no puede considerarse como tal la firma mediante huella dactilar del padre y no consta que la Sra. N. haya comparecido en ningún momento de la tramitación como madre de la menor, sino que aparecen las firmas de terceras personas a las que no consta que se otorgara representación suficiente por medio admisible en derecho.

IV. Respecto a la solicitud de inscripción en el Registro Civil español del nacimiento de Don D-F. suscrita por él, mayor de edad, que fue denegada por estimar que no resulta acreditada la relación de filiación con un ciudadano español, por ser hijo no matrimonial nacido en Honduras en 1983 de madre hondureña, que fue inscrito en el Registro Civil local inicialmente sólo con la filiación materna, si bien en el año 2000 se practicó la inscripción del reconocimiento paterno por parte de un ciudadano español de origen, Don J. que adquirió la nacionalidad hondureña en 1984. La filiación paterna no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento efectuado ante el encargado del Registro Civil de quien afirme ser padre del reconocido (art. 120.1 CC. y 49 LRC) y, si éste es mayor de edad, el reconocimiento no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito (art. 123 CC.).

V.- Estas condiciones concurren en el reconocimiento discutido y, si bien es cierto que, aun así, estos reconocimientos no serían inscribibles si hay datos objetivos que permitan estimarlos como reconocimientos de complacencia que no se ajustan a la realidad a la vista de que el principio de veracidad biológica es el inspirador de la regulación del Código civil en materia de filiación, también es cierto que las simples dudas o sospechas de que el reconocimiento no responde a la verdad escapan a la calificación del encargado, que sólo puede denegar la inscripción cuando de las manifestaciones solemnes de los interesados se deduce, sin lugar a dudas, la falta de veracidad de tal reconocimiento. En el presente caso, a la vista de la documentación presentada, de la circunstancia vital del padre del solicitante cuya residencia en Honduras se remonta al menos a los años 40, que obtuvo la nacionalidad hondureña en el año 1984 sin perder la española, no se aprecian elementos objetivos que permitan excluir de manera absoluta la veracidad del reconocimiento efectuado.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar el recurso interpuesto, respecto a la solicitud de inscripción del matrimonio celebrado en Honduras en 1994 por Don J. y Doña Á-Mª. y a la solicitud de inscripción de nacimiento de la hija de adoptiva de ambos, Mª-J. ya que ambas resultan inadmisibles al no quedar acreditada de forma auténtica la veracidad de la firma del promotor y la calidad en la que actúan los otros firmantes de los escritos.

2º. Estimar el recurso interpuesto, respecto a la solicitud formulada por Don D-F. para la inscripción de su nacimiento, y por tanto declarar que no hay obstáculo para practicar dicha inscripción en el Registro Civil español.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Tegucigalpa (Honduras).

VIII.3.- Caducidad del expediente

VIII.3.1.- Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 rrc

Resolución de 3 de enero de 2014 (97ª)

VIII.3.1-Caducidad por inactividad del promotor.

Es conforme a derecho la caducidad que se decreta pasados tres meses desde que un expediente se paraliza por culpa del promotor.

En las actuaciones sobre caducidad de un expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el 21 de marzo de 2003, Don L-F. nacido en Colombia el 25 de noviembre de 1956, promovió expediente para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Acompañaba la documentación pertinente en apoyo de su solicitud.

2.- Ratificado el promotor en su solicitud, el Encargado del Registro Civil de Madrid dicta providencia de incoación del expediente el 21 de marzo de 2003, realizándose el mismo día el acta de audiencia al interesado. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil emite informe en el mismo sentido y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su tramitación y resolución.

3.- Por oficio de la Dirección General de fecha 21 de febrero de 2005, se devuelve el expediente al Registro Civil de Madrid ante la imposibilidad de obtener el preceptivo informe previsto en el artículo 222 del Reglamento del Registro Civil, ya que, según comunicación de la Dirección General de la Policía, no se pudo practicar la información reglamentaria por encontrarse el promotor en su país de origen; procediendo que se declarara la caducidad del expediente.

4.- El Ministerio Fiscal emite informe favorable a la declaración de caducidad y el 8 de marzo de 2005 el Encargado del Registro Civil de Madrid dicta providencia por la que declara la caducidad del expediente. Notificado el acuerdo al interesado, el 20 de enero de 2006 éste alega que no pudo comparecer porque en el año 2003 sufrió una enfermedad durante unas vacaciones en Colombia y se vio obligado a guardar reposo; aporta fotocopia de certificado médico.

5.- De nuevo se remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la continuación de la tramitación. Por oficio de este Centro Directivo dirigido al Registro Civil, de fecha 3 de marzo de 2006, se solicita la puesta de manifiesto al promotor del contenido del informe de la Dirección General de Policía, en relación con unas diligencias sobre búsqueda, detención y personación por blanqueo de capitales, así como, que se requiera al interesado para que aporte una serie de documentación, advirtiéndole que si en el plazo de 3 meses no se cumplimentan los trámites señalados y se aporta la documentación requerida, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil.

6.- Notificado el requerimiento al promotor el 27 de marzo de 2006, presenta escrito el 20 de julio de 2006, aportando algunos de los documentos requeridos y solicitando prórroga para la entrega de las diligencias completas, con sentencia o auto de cierre del procedimiento, con ejecución o cumplimiento solicitada.

7.- En el caso del documento pendiente de aportar, se van concediendo prórrogas a petición del interesado hasta la de fecha 20 de agosto de 2010.

8.- Finalmente, el Encargado del Registro Civil de Madrid dicta providencia el 2 de diciembre de 2010, declarando la caducidad del expediente, ya que desde que se inicia el expediente se han ido encadenando prórrogas para la entrega de la documentación antes señalada, por lo que parece excesivo el tiempo transcurrido para atender al requerimiento.

9.- Notificada la providencia al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpone recurso de apelación solicitando que se proceda a la reapertura del expediente, alegando que no ha podido obtener la documentación requerida y que se aportaría en el momento en el que la tuviera en su poder.

10.- Del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, quien no se opuso a la caducidad del expediente por encontrar el acuerdo conforme a Derecho. Seguidamente el Encargado emitió informe reafirmando en el acuerdo recurrido y remitió el mismo a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 13 de julio, 3-5ª y 10-2ª de septiembre de 2001; 12 de marzo y 28 de abril de 2003; 7-1ª de enero y 30 de julio de 2004; 21-2ª de junio de 2005; 24-6ª de noviembre de 2006; 30-4ª de enero y 16-5ª de febrero de 2007; 16-4ª de septiembre y 28-8ª de noviembre de 2008; 14-2ª de Abril de 2009.

II.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor el Ministerio Fiscal y las demás partes, podrán pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor (cfr. art. 354, III RRC). En el presente caso, el promotor fue requerido para que aportase determinada documentación necesaria para resolver la solicitud que presentó. Consta en el expediente la notificación personal del requerimiento y la ausencia de cumplimiento en el plazo de tres meses, habiéndose concedido sucesivas prórrogas para aportar la documentación en cuestión desde que se notificó el requerimiento en el año 2006, hasta el año 2010; siendo la fundamentación de la providencia recurrida que parece excesivo el tiempo transcurrido para atender al requerimiento. Además, en el escrito del recurso se indicaba que el promotor podría disponer de la documentación en un breve espacio de tiempo, sin embargo, no consta que se haya aportado hasta la fecha las diligencias completas, con sentencia o auto de cierre del procedimiento, con ejecución o cumplimiento solicitados. Por ello, como se ha señalado anteriormente, transcurrido dicho plazo, y habida cuenta de la paralización del expediente por causa imputable al promotor, se procedió por el Encargado del Registro Civil a declarar la caducidad del expediente (cfr. art. 354, III RRC), lo cual debe estimarse correcto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (20ª)

VIII.3.1-Caducidad en expediente de opción a la nacionalidad.

La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la previa citación del mismo.

En las actuaciones sobre declaración de caducidad del procedimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra los acuerdos dictados por el Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo.

HECHOS

1.- Mediante escritos presentados en el Registro Civil Consular de Santo Domingo el 27 de diciembre de 2011, los hermanos M-A. y C. nacidos en la República Dominicana el 2 de noviembre de 1957 y el 11 de julio de 1959, respectivamente, solicitaban el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007. Aportaban a las solicitudes los siguientes documentos: certificación literal de nacimiento del padre, Don B. acta inextensa de defunción del padre de los interesados; certificado del Ministerio del Interior y Policía de la República Dominicana sobre la no inscripción del padre como ciudadano dominicano; y fotocopias de los documentos de identidad de los promotores.

2.- El 27 de mayo de 2012, se dictan acuerdos por el Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo, por los que se declaraba la caducidad de los expedientes en virtud de lo dispuesto por el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil, ya que los interesados no presentaron la documentación requerida por ese Consulado General en fecha 27 de diciembre de 2011, dentro de los treinta días legalmente establecidos al efecto.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la lentitud de la Junta Central Electoral Dominicana en entregar los documentos solicitados por los interesados.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. El Encargado del Registro Civil Consular se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de enero, 27-3ª de febrero y 19-4ª de noviembre de 2004; 25-1ª, 2ª, 3ª y 4ª de enero, 8-2ª y 17-3ª de febrero, 27-4ª y 31-1ª de octubre de 2006; 20-6ª de julio de 2007; 16-4ª de septiembre de 2008; 12-3ª de enero y 13-2ª de julio de 2009.

II.- Los interesados promovieron expediente de adquisición de nacionalidad española por opción, en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007. A la vista del tiempo transcurrido sin que los promotores hubieran comparecido para aportar la documentación requerida, el Encargado del Registro Civil Consular dictó acuerdos de fecha 27 de mayo de 2012 declarando la caducidad del expediente. Dichas resoluciones constituyen el objeto del presente recurso. Dado el vínculo del objeto y las relaciones entre los interesados, procede la acumulación y la resolución conjunta (art. 347 del Reglamento del Registro Civil).

III.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el Ministerio Fiscal y las demás partes, podrán pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (cfr. art. 354.3 RRC). En este caso, no parece que, previamente a la declaración de caducidad, los promotores hubieran sido notificados, como exige el artículo 354.3 RRC, razón por la cual procede la estimación del recurso. Asimismo, entre la documentación que obra en el expediente, se encuentra un requerimiento en el que aparece la documentación que debe ser aportada, sin embargo, en el mismo no consta la firma de los interesados. Por lo que cabe entender que el requerimiento no habría sido válidamente notificado, habiendo sido necesario que se hubiera realizado de forma que quedase constancia fehaciente de la notificación, la fecha en la que se realiza, el plazo otorgado para el cumplimiento del mismo y las consecuencias del incumplimiento.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

2º.- Retrotraer las actuaciones para que los promotores sean notificados con carácter previo a la declaración que proceda sobre la caducidad del expediente.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (20ª)

VIII.3.1-Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 RRC.

1º La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la paralización del procedimiento durante más de tres meses y la previa citación del interesado.

2º No habiendo resultado acreditado que la causa de paralización del expediente sea imputable al promotor, procede retrotraer las actuaciones y continuar la tramitación del expediente de nacionalidad por residencia.

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil de Estepona (Málaga).

HECHOS

1.- Por medio de escrito presentado el 10 de agosto de 2007 en el Registro Civil de Estepona, el Sr. D-R. mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. Cumplidos los trámites reglamentarios, el expediente fue remitido para su resolución a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), desde donde se remitió oficio requiriendo al interesado la aportación de un certificado actualizado de ausencia de antecedentes penales en su país de origen.

2.- Intentada infructuosamente en una ocasión, por medio de correo certificado, la notificación de dicho requerimiento y transcurridos más de tres meses desde el mencionado intento de notificación, el ministerio fiscal instó el inicio del procedimiento de caducidad, siendo esta finalmente declarada mediante auto del encargado del registro el 24 de abril de 2012.

3.- Notificada la resolución, el interesado interpuso recurso alegando que no recibió el aviso de llegada correspondiente para recoger la carta certificada en la que se le debió notificar el oficio de la DGRN. Con el escrito de recurso aportaba un nuevo certificado consular de buena conducta y de ausencia de antecedentes penales y una queja presentada ante el servicio de Correos solicitando explicaciones sobre la ausencia de entrega de un aviso de llegada fechado, según el justificante facilitado por el Registro Civil de Estepona, el 20 de septiembre de 2010. Consta asimismo la contestación de la oficina de Correos excusándose por no poder ofrecer datos sobre lo sucedido debido al tiempo transcurrido.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil de Estepona emitió informe ratificándose en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de abril de 2003; 7-1ª de enero y 30 de julio de 2004; 21-2ª de junio de 2005; 24-6ª de noviembre de 2006; 30-4ª de enero, 16-5ª de febrero, 20-6ª de julio de 2007; 16-4ª de septiembre y 28-8ª de noviembre de 2008; 14-2ª de Abril de 2009 y 13-1ª de Junio de 2011.

II.- El promotor solicitó la nacionalidad española por residencia en 2007. Requerido por medio de oficio de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para que aportara un certificado actualizado de ausencia de antecedentes penales en su país de origen cuyo único intento de notificación resultó infructuoso, previa solicitud del ministerio fiscal, el encargado del registro declaró la caducidad del expediente al haber sido paralizado el procedimiento durante más de tres meses por causa imputable al promotor. Contra este auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). No consta en este caso que antes de ser declarada la caducidad, el promotor hubiera sido notificado del inicio de dicho procedimiento, razón por la cual, ya en principio, procedería estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que debió ser citado con carácter previo a la declaración sobre la caducidad del expediente. No obstante, dado el tiempo transcurrido desde la solicitud, se estima oportuno, por razones de economía procedimental y para evitar dilaciones desproporcionadas con la causa (arts. 354, párrafo segundo, y 358, quinto, RRC), entrar a examinar el fondo del asunto y dictar el pronunciamiento correspondiente.

IV.- El interesado fue requerido por medio de oficio de la DGRN para para que aportara un nuevo certificado de antecedentes penales. En la documentación contenida en el expediente figura un único intento fallido, por ausencia del domicilio, de notificación de dicho requerimiento, sin que conste que se realizaran las actuaciones pertinentes para agotar las posibilidades de notificación de forma adecuada (nuevo intento en horario distinto, diligencias de averiguación de domicilio pertinentes y, en su caso, publicación mediante edictos). Por otro lado, el servicio de correos tampoco ha podido confirmar en su respuesta a la queja del interesado que, efectivamente, se hubiera dejado en el domicilio el aviso de llegada correspondiente y en esta misma dirección general consta la entrada de una solicitud de información por parte del promotor acerca del estado de tramitación de su expediente fechada antes de que le fuera notificado el auto de caducidad. A la vista de las anteriores circunstancias, no resulta pues acreditado que la paralización

del expediente se produjera por causa imputable al promotor, de manera que procede continuar ahora con su tramitación desde el punto en que se interrumpió por causa de la declaración de caducidad.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida.

2º.- Retrotraer las actuaciones al momento en que al promotor le fue finalmente notificado el oficio remitido por la DGRN y continuar la tramitación del procedimiento de solicitud de nacionalidad por residencia.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Estepona.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (21ª)

VIII.3.1-Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 RRC.

1º La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la previa citación del interesado.

2º No habiendo resultado acreditado que la causa de paralización del expediente sea imputable a la promotora, procede retrotraer las actuaciones y continuar la tramitación del expediente de nacionalidad por residencia.

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil de Torremolinos.

HECHOS

1.- Por medio de escrito presentado el 23 de octubre de 2008 en el Registro Civil de Benalmádena (Málaga), la Sra. R. mayor de edad y de nacionalidad colombiana, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. Cumplidos los trámites reglamentarios, el expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución, desde donde se remitió oficio solicitando la aportación de determinada documentación necesaria para la valoración del expediente.

2.- Devuelto el expediente a la DGRN sin que se hubiera incorporado la documentación solicitada, las actuaciones se remitieron nuevamente al registro competente con indicación de la procedencia de inicio de los trámites pertinentes para la declaración de caducidad.

3.- Tras el informe favorable del ministerio fiscal, la caducidad fue finalmente declarada mediante auto de la encargada del Registro Civil de Torremolinos el 2 de abril de 2012.

4.- Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que presentó en su día la documentación requerida por la DGRN en el Registro Civil de Torremolinos. Con el escrito de recurso aportaba copia de su

certificado de nacimiento compulsada en Colombia el 30 de noviembre de 2011 y apostilla electrónica fechada el 12 de diciembre de 2011.

5.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Torremolinos remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de abril de 2003; 7-1ª de enero y 30 de julio de 2004; 21-2ª de junio de 2005; 24-6ª de noviembre de 2006; 30-4ª de enero, 16-5ª de febrero, 20-6ª de julio de 2007; 16-4ª de septiembre y 28-8ª de noviembre de 2008; 14-2ª de Abril de 2009 y 13-1ª de Junio de 2011.

II.- La promotora solicitó la nacionalidad española por residencia en 2008. Requerida por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para que aportara un nuevo certificado de nacimiento debidamente legalizado, el expediente se remitió a este centro sin que se hubiera incorporado la documentación requerida, por lo que las actuaciones fueron devueltas al registro de procedencia con indicación de que, previos los trámites pertinentes, se iniciara el procedimiento de caducidad, que fue finalmente declarada en abril de 2012. Contra el auto de caducidad se presentó el recurso ahora examinado alegando que sí se había presentado en el registro el documento solicitado por la DGRN.

III.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). En este caso no consta la citación a la promotora antes de ser declarada la caducidad, razón por la cual, ya en principio, procedería estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que debió ser citada con carácter previo a la declaración sobre la caducidad del expediente. Por otra parte, no resulta acreditado que el procedimiento haya sido paralizado en este caso por causa imputable a la promotora, toda vez que no constan las actuaciones practicadas entre la remisión del expediente para su resolución a la DGRN con el auto-propuesta de la encargada de 15 de diciembre de 2008 y el oficio remitido por este centro el 13 de febrero de 2012 con la indicación de que se iniciara el procedimiento de caducidad, de modo que, aunque la interesada admite en el recurso que se le notificó el oficio en el que se le requería la aportación de un certificado de nacimiento convenientemente legalizado, no hay constancia de cuándo y en qué circunstancias se realizó dicha notificación (especialmente si se advirtió a la interesada sobre las consecuencias de su inactividad) y de si hubo alguna otra actuación (aportación, como se sostiene en el recurso, de la documentación solicitada aunque se hubiera presentado fuera de plazo, posible solicitud de prórroga, etc.) antes de que el expediente fuera remitido de nuevo a la DGRN el 15 de noviembre de 2011, tal como consta en los archivos de este centro.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º.- Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida.

2º.-Retrotraer las actuaciones y ordenar la continuación del procedimiento de nacionalidad por residencia por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Madrid, 30 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torremolinos.

VIII.4.- Otras cuestiones

VIII.4.1.- Recursos en los que se aprecia vicio de incongruencia

Resolución de 10 de Enero de 2014 (24ª)

VIII.4.1-Expedientes en general.

Procede la revocación del auto recurrido cuando ha incurrido en vicio de incongruencia, por resolver sobre cuestión distinta de la solicitada de manera principal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón (Guadalajara).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Molina de Aragón el 6 de noviembre de 2009, Don L-V. y Doña N de J. solicitaban la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en el Registro Civil español para su hijo, E-A. nacido en Ecuador el 29 de noviembre de 1998, por haber estado sometido a la patria potestad de un español. Adjuntaban la siguiente documentación: inscripción de nacimiento del menor interesado; certificación literal de nacimiento de la madre, en la que consta la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 23 de julio de 2007; certificado del Consulado General de Ecuador en Madrid sobre la inscripción consular del menor; certificado de empadronamiento; fotocopias del NIE y pasaporte del interesado.

2.- El mismo día se ratificaron los interesados en su solicitud. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón dictó auto el 16 de abril de 2010, por el que acuerda no haber lugar a la solicitud formulada por los promotores porque al menor le corresponde la nacionalidad ecuatoriana de origen, sin que se haya producido una situación de apatridia.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que la solicitud inicial tenía por objeto la adquisición por opción de la nacionalidad española por patria potestad, en aplicación del artículo 20 del Código Civil.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste informó que no se opone a la adquisición de la nacionalidad española solicitada. El Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 y 20.1 b) del Código civil (Ce); 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 66, 68 y 335 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 3 de abril y 15-2ª de diciembre de 2003; 24-1ª de abril, 17-2ª de julio, 11-5ª de octubre de 2006; 2-5ª y 10-3ª de enero de 2007; 29-4ª de Enero y 28-10 de Noviembre de 2008; 27-4ª de febrero y 13 de Junio de 2009.

II.- Los promotores solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hijo, nacido en Ecuador el 29 de noviembre de 1998, previa opción a la nacionalidad española, al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil. El Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón, mediante auto de fecha 16 de abril de 2010, acuerda denegar la solicitud formulada por los interesados, al constatarse que no se ha producido

una situación de apatridia en el caso del interesado. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- De lo actuado se desprende que la petición de los promotores era la de inscribir fuera de plazo el nacimiento de su hijo en el Registro Civil español, previa opción a la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 20.1.a) del Código Civil. El Registro Civil de Molina de Aragón resolvió sobre la base incorrecta de que los promotores habían solicitado la adquisición de la nacionalidad española en virtud de lo establecido por el artículo 17.1.c) del Código Civil, por lo que se advierte una discordancia entre lo solicitado y lo resuelto. La congruencia supone un ajuste acorde entre la parte dispositiva de la resolución y las pretensiones de las partes y en este caso se aprecia la existencia de una clara desviación entre la causa de pedir y la resolución dictada (cfr. Arts. 16, 358 II RRC y 218 L.E.C.), por lo que procede la revocación del acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón. Al propio tiempo, deben retrotraerse las actuaciones al momento oportuno para dictar un nuevo auto sobre la solicitud de los promotores.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: que procede revocar el acuerdo recurrido y retrotraer las actuaciones para que se dicte nuevo auto en congruencia con lo solicitado por los promotores.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón (Guadalajara).

Resolución de 10 de Enero de 2014 (25ª)

VIII.4.1-Expedientes en general.

Procede la revocación del auto recurrido cuando ha incurrido en vicio de incongruencia, por resolver sobre cuestión distinta de la solicitada de manera principal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Arcos de la Frontera (Cádiz).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Arcos de la Frontera el 11 de enero de 2010, Don W. y Doña I. solicitaban la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en el Registro Civil español para su hijo, W-A. nacido en S. el 21 de enero de 2008, en virtud del artículo 20 del Código Civil.

2.- Previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal, por no resultar acreditado que el interesado se encuentre en ninguno de los supuestos del artículo 20 del Código Civil, el Encargado del Registro Civil de Arcos de la Frontera dictó auto el 14 de mayo de 2010, por el que acuerda denegar la autorización solicitada por los promotores para optar en nombre de su hijo, por entender que al menor le corresponde la nacionalidad boliviana de origen, sin que se haya producido una situación de apatridia.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que según el certificado consular aportado con su solicitud, queda claro que su hijo no tiene asignada ninguna nacionalidad.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 y 20.1 b) del Código civil (Ce); 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 66, 68 y 335 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 3 de abril y 15-2ª de diciembre de 2003; 24-1a de abril, 17-2ª de julio, 11-5ª de octubre de 2006; 2-5ª y 10-3ª de enero de 2007; 29-4ª de Enero y 28-10 de Noviembre de 2008; 27-4ª de febrero y 13 de Junio de 2009.

II.- Los promotores solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hijo, nacido en España el 21 de enero de 2008, previa opción a la nacionalidad española, al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil. El Encargado del Registro Civil de Arcos de la Frontera, mediante auto de fecha 14 de mayo de 2010, acuerda denegar la solicitud formulada por los interesados, al constatarse que no se ha producido una situación de apatridia en el caso del interesado. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- De la solicitud obrante en el expediente se desprende que la petición de los promotores era la de inscribir fuera de plazo el nacimiento de su hijo en el Registro Civil español, previa opción a la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 20 del Código Civil. El Registro Civil de Arcos de la Frontera resolvió sobre la base incorrecta de que los promotores habían solicitado la adquisición de la nacionalidad española en virtud de lo establecido por el artículo 17.1.c) del Código Civil, por lo que se advierte una discordancia entre lo solicitado y lo resuelto. La congruencia supone un ajuste acorde entre la parte dispositiva de la resolución y las pretensiones de las partes y en este caso se aprecia la existencia de una clara desviación entre la causa de pedir y la resolución dictada (cfr. Arts. 16, 358 II RRC y 218 L.E.C.), por lo que procede la revocación del acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil de Arcos de la Frontera. Al propio tiempo, deben retrotraerse las actuaciones al momento oportuno para dictar un nuevo auto sobre la solicitud de los promotores. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de los promotores de solicitar la nacionalidad española para su hijo en virtud de otros artículos del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: revocar el acuerdo recurrido y retrotraer las actuaciones para que se dicte nuevo auto en congruencia con lo solicitado por los promotores

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Arcos de la Frontera (Cadiz).

Resolución de 27 de Enero de 2014 (47ª)

VIII.4.1-Expedientes en general.

Procede la revocación del auto recurrido cuando ha incurrido en vicio de incongruencia, por resolver sobre cuestión distinta de la solicitada de manera principal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón (Guadalajara).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Molina de Aragón el 16 de noviembre de 2009, Don S-E. y Doña D-M. solicitaban la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en el Registro Civil español para su hija, G-P. nacida en Ecuador el ...de ... de 1998, por haber estado sometida a la patria potestad de un español. Adjuntaban la siguiente documentación: inscripción de nacimiento de la menor interesada; certificaciones literales de nacimiento de los promotores, en las que constan la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 5 de junio del 2008, en el caso del Sr. C. y el 21 de abril de 2009 para la Sra. D. certificado de empadronamiento; y fotocopia del pasaporte de la menor.

2.- El mismo día se ratificaron los interesados en su solicitud. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón dictó auto el 16 de abril de 2010, por el que acuerda no haber lugar a la solicitud formulada por los promotores porque a la menor le corresponde la nacionalidad ecuatoriana de origen, sin que se haya producido una situación de apatridia.

3.- Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que la solicitud inicial tenía por objeto la adquisición por opción de la nacionalidad española por patria potestad, en aplicación del artículo 20 del Código Civil.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 18 y 20.1 b) del Código civil (Ce); 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 66, 68 y 335 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 3 de abril y 15-2a de diciembre de 2003; 24-1a de abril, 17-2a de julio, 11-5a de octubre de 2006; 2-5a y 10-3a de enero de 2007; 29-4^a de Enero y 28-10 de Noviembre de 2008; 27-4a de febrero y 13 de Junio de 2009.

II.- Los promotores solicitaron la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su hija, nacida en Ecuador el... de... de 1998, previa opción a la nacionalidad española, al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil. El Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón, mediante auto de fecha 16 de abril de 2010, acuerda denegar la solicitud formulada por los interesados, al constatarse que no se ha producido una situación de apatridia en el caso de la interesada. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III.- De lo actuado se desprende que la petición de los promotores era la de inscribir fuera de plazo el nacimiento de su hija en el Registro Civil español, previa opción a la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 20.1.a) del Código Civil. El Registro Civil de Molina de Aragón resolvió sobre la base incorrecta de que los promotores habían solicitado la adquisición de la nacionalidad española en virtud de lo establecido por el artículo 17.1.c) del Código Civil, por lo que se advierte una discordancia entre lo solicitado y lo resuelto. La congruencia supone un ajuste acorde entre la parte dispositiva de la resolución y las pretensiones de las partes y en este caso se aprecia la existencia de una clara desviación entre la causa de pedir y la resolución dictada (cfr. Arts. 16, 358 II RRC y 218 L.E.C.), por lo que procede la revocación del acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón. Al propio tiempo, deben retrotraerse

las actuaciones al momento oportuno para dictar un nuevo auto sobre la solicitud de los promotores.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: revocar el acuerdo recurrido y retrotraer las actuaciones para que se dicte nuevo auto en congruencia con lo solicitado por los promotores.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Molina de Aragón.

VIII.4.2.- Recursos en los que ha decaído el objeto

Resolución de 3 de enero de 2014 (17ª)

VIII.4.2-Autorización de matrimonio

No ha lugar a su resolución por haber decaído su objeto.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Encargada del Registro Civil de Torremolinos.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Torremolinos, Don J. nacido en Bangladesh y de nacionalidad bangladesh, y Doña M. nacida en Bangladesh y de nacionalidad bangladesh, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento, certificado de soltería y empadronamiento de los interesados.

2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal informa favorablemente a la autorización del matrimonio. La Encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 17 de enero de 2012 deniega la autorización del matrimonio.

3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.

4.-Notificado el Ministerio Fiscal, se opone a la citada autorización. La Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

5.- Con fecha 11 de octubre de 2012 los recurrentes remiten certificado de matrimonio donde consta que han celebrado matrimonio Islámico con fecha 27 de julio de 2012 en la Sede de la Comunidad Islámica Suhail en Fuengirola.

6.- Con fecha 21 de enero de 2013 los interesados remiten certificación literal de nacimiento de un hijo de la pareja, nacido... de... de 2012 e inscrito en el registro civil de Torremolinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y la Resolución de 13-3ª de octubre de 2006.

II.- Los interesados solicitaron autorización para contraer matrimonio mediante escrito dirigido al Registro Civil de Torremolinos. Dicha autorización les fue denegada por la Encargada del Registro Civil de Torremolinos mediante auto de fecha 17 de enero de 2012. Los interesados interponen recurso con fecha 27 de febrero de 2012 ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, para posteriormente con fecha 27 de julio de 2012 contraer matrimonio islámico en la Mezquita de F.

III.- Examinada la tramitación del expediente hay que señalar que, una vez que se dictó el citado auto, se notificó a los interesados y se presentó por estos el recurso, la competencia para conocer y resolver corresponde a la Dirección General, la cual, ahora se encuentra en la situación de resolver un recurso y pronunciarse sobre la procedencia o no de autorizar un matrimonio, constando que los interesados han celebrado un matrimonio islámico aunque este aún pendiente de inscripción.

IV.- No obstante lo que antecede y vista la documentación complementaria aportada al expediente (certificado literal de matrimonio) y en aras del principio de economía procedimental que rige en materia registral que obliga a evitar dilaciones o trámites superfluos o desproporcionados con la causa (cfr. art. 354.II RRC), procede acordar el archivo del expediente por carencia sobrevenida de su objeto.

V.- Que en base al principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral artículos 15 y 26 de la Ley de Registro Civil debe procederse a la tramitación del expediente de inscripción de matrimonio Islámico en España de los interesados con él fin de verificar si cumple el citado matrimonio los requisitos exigidos por el artículo 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre sobre acuerdo de Cooperación del estado con la Comisión Islámica de España. Que a la vista de la documentación es competente para el examen del citado expediente el Registro Civil de la localidad donde se celebró el matrimonio, en el presente caso el Registro Civil de Fuengirola, al que deberá remitírsele la documentación.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: el archivo del recurso interpuesto en relación con la autorización de matrimonio y se dé traslado de la documentación al registro Civil de Fuengirola para que se dicte auto sobre la procedencia o no de inscribir el matrimonio Islámico celebrado en España de Don J. y Doña M.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Torremolinos.

Resolución de 3 de enero de 2014 (84ª)

VIII.4.2.-Archivo de expediente de inscripción de matrimonio e inscripción de nacimiento por pérdida sobrevenida de objeto

1º Procede acordar el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto, al haber obtenido los interesados la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).

2º.- En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la primera decisión.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra Auto del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- El 28 de octubre de 2005 Don V-L. de nacionalidad española, nacido en M. el 10 de abril de 1959, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la transcripción de matrimonio canónico celebrado con Doña X-J. de nacionalidad salvadoreña, nacida en San S. (El Salvador) el 27 de febrero de 1964. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: certificado eclesiástico de matrimonio; propia, certificado de nacimiento, documento nacional de identidad y, de la interesada ya existía documentación aportada en expediente anterior resuelto por el mismo Registro Civil en el año 2002. También solicita la inscripción de nacimiento de los dos hijos comunes del matrimonio, J-L. nacido en San S. el ... de ... de 1993 y X-A. nacida en San S. el ... de ... de 1999.

2.- Con fecha 13 de diciembre siguiente el Registro Civil Central se dirige al promotor para comunicarle que lo solicitado ya fue denegado por resolución del 19 de julio de 2002 que no fue recurrida y por tanto devino firme. El 27 de marzo de 2006 es citada a comparecer ante el Registro un familiar del promotor que actúa en su representación tras lo cual se dictó auto por el Encargado del Registro Civil denegando lo solicitado mientras no se aclaren los problemas de identificación del promotor entre su documentación española y salvadoreña aportada, al parecer el acuerdo no es recibido por el promotor y el expediente queda paralizado hasta que el 5 de noviembre de 2007 el promotor se dirige por escrito al Registro Civil Central reiterando su solicitud y pidiendo la continuación del procedimiento ya iniciado, aportando documentación relativa a sus hijos, a su esposa y declaración jurada realizada por la madre del promotor ante notario, con fecha 25 de octubre de 2004, en la que relata las circunstancias vitales por las que existe discrepancia en datos personales entre la documentación española del Sr. A. y su documentación salvadoreña.

3.- Con fecha 24 de noviembre de 2008 es notificada la resolución precitada al promotor que interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y del nacimiento de sus dos hijos.

4.-El Encargado del Registro Civil Central dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Consta a este Centro Directivo que mientras se tramitaba el recurso precitado, los interesados iniciaron nuevo expediente ante el propio Registro Civil Central aportando documento notarial español que contiene la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de San Salvador el 1 de junio de 2010, en la que el Sr. A. había impugnado el reconocimiento de paternidad llevado a cabo en su día en el Salvador, fallando el órgano judicial a su favor en base a los testimonios de su madre, sus hermanos y la prueba genética aportada, ordenando la cancelación de la inscripción de nacimiento del interesado en el Salvador que era posterior a la existente en el Registro Civil español, declarando a su vez su nacionalidad española y ordenando las rectificaciones pertinentes en las inscripciones de nacimiento de los hijos del interesado, esta nueva solicitud concluyó con la inscripción del matrimonio y del nacimiento de los hijos nacidos del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las Resoluciones de 13-3ª de octubre de 2006 y 25-1ª de febrero de 2008.

II.- Los interesados contrajeron matrimonio canónico en el Salvador y posteriormente instaron su inscripción y la del nacimiento de sus hijos en el Registro Civil Central. El Encargado dictó

en fecha 15 de abril de 2006 auto denegatorio, notificado por diversas circunstancias con fecha 24 de noviembre de 2008, cuya impugnación por el interesado constituye el objeto del presente recurso. No obstante se deduce de la documentación del expediente que con posterioridad, 19 de mayo de 2011, se solicitó la inscripción ante el Registro Civil Central, que tras instruir el correspondiente expediente con examen de los nuevos documentos aportados, procedió a inscribir el nacimiento de los dos hijos menores con fecha 17 de febrero de 2012 y el matrimonio con fecha 11 de junio de 2013.

III.-Una vez dictado el auto, notificado a los interesados y presentado el recurso, la competencia para conocer y resolver corresponde a esta Dirección General, que debe resolver el recurso y pronunciarse sobre la procedencia de inscribir un matrimonio, no obstante los interesados sin esperar a que la resolución anterior fuera firme, procedieron a instar una nueva solicitud de inscripción, de nuevo en el Registro Civil Central, que no debió admitirse puesto que de estimarse al resolver el recurso que procede confirmar la denegación impugnada, ello obligaría a cancelar la inscripción practicada.

IV.- Estas irregularidades en la tramitación no llegan a constituir defectos esenciales que provoquen la nulidad (cfr. art. 73 CC.) o afecten a la validez del matrimonio inscrito y, en consecuencia, no resulta necesario ni pertinente entrar a examinar en esta instancia el conjunto de circunstancias y los hechos concretos que llevaron al Encargado del Registro Civil a la conclusión de que la identidad de al menos uno de los contrayentes no quedaba suficientemente acreditada y en los que ha fundamentado su decisión de denegar la inscripción del matrimonio y la inscripción de los hijos del mismo y procede acordar el archivo del expediente por carencia sobrevenida de objeto, al haber obtenido el recurrente la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: que no ha lugar a resolver el recurso presentado, por haber decaído su objeto, y que procede acordar el archivo de las actuaciones.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 22 de Enero de 2014 (11ª)

VIII.4.2.- Decaimiento del objeto.

Acreditada la práctica de inscripción de adopción internacional antes del inicio de un expediente de rectificación de nombre y apellidos en la inscripción de nacimiento del adoptado, no cabe recurso reclamando la calificación previa de dicha adopción por haber decaído su objeto

En el expediente sobre rectificación de nombre y apellidos en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el ministerio fiscal contra la resolución del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante comparecencia el 28 de noviembre de 2007 en el Registro Civil de Vilanova i la Geltrú, Don P. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la rectificación del nombre y apellidos de su hijo, adoptado en Mali, en la inscripción de nacimiento practicada en España alegando que se han hecho constar su nombre y apellido de origen

(M. D.) y no los que le corresponden como español una vez adoptado (A. B. C.). Aportaba los siguientes documentos: inscripción de nacimiento en B. (Mali) el 28 de agosto de 2001 de M. D. (no consta filiación) practicada en el Registro Civil del Consulado General de España en Nouakchott (Mauritania); pasaporte español de M. B. C. pasaporte maliense de A. B. C. libro de familia del promotor donde consta incluido su hijo M. B. C. partidas de nacimiento en extracto expedidas por autoridades malienses de A. B. G. nacido el ... de ... de 2001 e hijo de P. B. G. y de G. C. D. y de M. D. nacido el ... de ... de 2001 sin constancia de filiación; certificado de las autoridades malienses de que A. C. B. ha sido adoptado mediante sentencia de un tribunal de Bamako de 24 de enero de 2005 por el matrimonio B. C. residente en V. certificado del Tribunal de Apelación de Bamako de no apelación ni oposición a la sentencia de adopción y sentencia del Juzgado de Primera Instancia del distrito V de Bamako (República de Mali) de 24 de enero de 2005 estimando la petición de adopción por parte de P. B. C. del menor M. D. quien pasará a llamarse A. B. C. y se identificará como hijo de P. B. C. y de su pareja G. C. D.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para su resolución, y previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado dictó auto el 8 de mayo de 2009 acordando que se completara la inscripción de nacimiento del menor para hacer constar que su nombre propio a partir de la adopción es A. y sus apellidos B. C.

3.- Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en la inscripción de nacimiento del menor no consta la marginal de adopción ni se determina la filiación que corresponde al inscrito, por lo que, con carácter previo a la rectificación del nombre y apellidos del menor, el encargado debe calificar la inscripción de la adopción constituida en el extranjero y determinar la filiación que corresponde al nacido.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al promotor del expediente, que no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

5.- A requerimiento de la Dirección General de los Registros y del Notariado, el Consulado General de España en Nuakchot remitió, para su incorporación al expediente, testimonio del tramitado en su día con motivo de la adopción realizada en Mali e inscripción de nacimiento practicada en dicho consulado de M. D. con marginal de adopción fechada el 21 de febrero de 2005 por parte del promotor del expediente y atribución al inscrito, además de la nacionalidad española, de los apellidos B. C. Asimismo, se ha incorporado al expediente la correspondiente inscripción realizada en el Registro Civil Central, por notificación del consulado, con el mismo contenido que se acaba de exponer y fechada el 28 de enero de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 13-3ª de octubre de 2006, 25-1ª de febrero, 1-2ª de julio y 24-10ª de noviembre de 2008 y 11-3ª de noviembre de 2009.

II.- El promotor del expediente solicitó la rectificación de la inscripción de nacimiento de su hijo, adoptado en Mali en 2005, para hacer constar el nombre y apellidos actuales alegando que los que figuran en la inscripción practicada en el consulado español en Nuakchot son los que correspondían al menor antes de la adopción. El encargado del registro accedió a completar la inscripción con los datos solicitados pero el ministerio fiscal interpuso recurso por entender que antes de pronunciarse sobre la rectificación solicitada el encargado debería hacerlo sobre la propia adopción y filiación del inscrito, que tampoco constan en el asiento de nacimiento.

III.- No obstante, este centro directivo ha podido constatar que en enero de 2008, antes, por tanto, de que se emitiera el auto recurrido, se realizó la inscripción de la adopción en el Registro Civil Central por transcripción del parte aportado por el Consulado General de España en Nuakchot, por lo que se requirió a dicho consulado para que remitiera testimonio del expediente de adopción y certificación literal del asiento de nacimiento practicado. Recibida la documentación solicitada, se ha comprobado que consta realizada la inscripción de la adopción y la atribución al menor de los apellidos B. C. con fecha de 21 de febrero de 2005, es decir, mucho antes de que se iniciara el presente expediente de rectificación, aunque es cierto que en el documento que sirvió de base al promotor para plantear su solicitud y al ministerio fiscal para recurrir solo constan los datos anteriores a la adopción. Por tanto, el recurso presentado carece de objeto y procede darlo por decaído.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: que no ha lugar a la resolución del recurso presentado por falta de objeto, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento en que se notificó la resolución al interesado y al ministerio fiscal y abriéndose de nuevo el plazo de recurso.

Madrid, 22 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (68ª)

VIII.4.2- Autorización de matrimonio civil.

Habiendo contraído los solicitantes durante la pendencia del recurso, interpuesto por el Ministerio Fiscal, matrimonio civil en el mismo Registro, se acuerda el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el Ministerio Fiscal contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Murcia el 3 de mayo de 2011, Don Á-L. nacido en C-S. B-A.(Argentina) el 1 de noviembre de 1945, y de nacionalidad argentina y Doña A. de nacionalidad española, nacida en S. (M) el 19 de enero de 1948, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, pasaporte, certificado de empadronamiento en A. desde el año 2001, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior de fecha 26 de diciembre de 1968 con anotación de sentencia de divorcio de fecha 5 de abril de 2010, inscripción en el Registro del Consulado de Argentina en Barcelona desde el año 2001; y, de la promotora, certificación de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, de fecha 17 de marzo de 1968, con anotación de sentencia de divorcio de fecha 9 de mayo de 2001 y volante de empadronamiento en M. desde el año 1996.

2.-Con fecha 9 de septiembre de 2011 la promotora se ratifica en su intención de contraer matrimonio y declara bajo juramento su estado civil de divorciada. Con fecha 8 de noviembre siguiente el Ministerio Fiscal informa en el sentido de no oponerse a lo solicitado y el día 25 del mismo mes el Encargado del Registro dicta providencia solicitando diversa documentación a

los promotores, concretamente la acreditación de la autorización de residencia en España del Sr. C. y documentación sobre los ingresos económicos de los interesados, estos comparecen el día 14 de diciembre siguiente, aportando certificado de registro de ciudadano de la unión europea del promotor y documentación de la Seguridad Social sobre pensión reconocida a la promotora y sobre tramitación de pensión de jubilación del promotor.

3.- La providencia anterior es recurrida en reposición por el Ministerio Fiscal, al entender que es innecesario el requerimiento de documentación sobre las circunstancias económicas de los solicitantes, notificados estos del recurso se adhieren al mismo, pese a haber cumplido el requerimiento. Con fecha 27 de enero de 2012 el Encargado del Registro dicta Auto desestimando el recurso de reposición interpuesto al amparo del último inciso del artículo 245 y del artículo 351 del Reglamento del Registro Civil, dejando el expediente dispuesto para dictar resolución sobre la autorización de matrimonio solicitada.

4.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste formula recurso de apelación con fecha 9 de febrero de 2012, alegando que la normativa invocada, artículo 245 precitado, no se refiere a la capacidad económica de los promotores del expediente sino a su capacidad psíquica para prestar el debido consentimiento, por lo que solicita se declare que no había lugar a la petición de documentación que se hizo por providencia de 25 de noviembre de 2011 y se acuerde la celebración del matrimonio de los promotores.

5.- Con fecha 22 de febrero de 2012 el Encargado del Registro dicta Auto aprobando la celebración del matrimonio civil solicitado, debiendo señalarse día y hora para su celebración, que es notificado a los promotores con fecha 7 de marzo siguiente. Consta que con fecha 23 de marzo de 2012 se llevó a cabo el matrimonio en el Ayuntamiento de Murcia y fue inscrito en el Registro Civil de dicha localidad con fecha 13 de abril de 2012. El Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución, en su caso, del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 46, 73 y 74 del Código civil; 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 2, 16, 238, 245, 246, 247, 351 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones de 30-1ª de marzo y 12-1ª de junio de 2007.

II.- Una ciudadana española y un ciudadano argentino, titular de certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, promueven en el Registro Civil de Murcia expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España. El 25 de noviembre de 2011 el Encargado del Registro Civil requiere, durante la tramitación del expediente, documentación a los promotores sobre la residencia del ciudadano extranjero y sobre los ingresos económicos de los promotores, a fin de tener los elementos que entiende necesarios para llegar al convencimiento de que el fin perseguido no es diferente al propio de la institución matrimonial. Esta providencia del Encargado es recurrida en reposición por el Ministerio Fiscal con adhesión de los promotores en primera instancia, dicho recurso es resuelto por el Encargado en sentido desestimatorio, el nuevo Auto es recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal. Posteriormente el Encargado dicta Auto autorizando la celebración de matrimonio solicitada. En el momento de examinar el expediente instruido, las resoluciones dictadas y las alegaciones formuladas ha sido conocido por este Centro Directivo que

efectivamente los recurrentes han contraído entre sí matrimonio civil en el Ayuntamiento de Murcia, localidad en cuyo Registro Civil se ha practicado la correspondiente inscripción.

III.- Por este hecho no resulta necesario ni pertinente analizar en esta instancia las circunstancias y los razonamientos concretos en los que el Juez Encargado ha fundamentado su decisión de requerir determinada documentación con carácter previo a resolver, en sentido estimatorio para los promotores, sobre el fondo del asunto.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: archivar el recurso interpuesto por pérdida sobrevenida de objeto.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

VIII.4.3.- Validez de sentencias extranjeras

Resolución de 30 de Enero de 2014 (20ª)

VIII.4.3.-Validez de sentencias extranjeras.

Una sentencia de divorcio dictada en Bélgica en 1986 no es inscribible en el Registro Civil español mientras no recaiga exequátur, pero sí es susceptible de anotación de acuerdo con lo previsto en el art. 38.4º LRC.

En las actuaciones sobre inscripción de sentencia de divorcio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil de Vigo (Pontevedra).

HECHOS

1.- Por medio de escrito presentado el 20 de octubre de 2010 en el Registro Civil de Vigo, Don J-J. con domicilio en P. (P), solicitó la inscripción de una sentencia de divorcio dictada en Bélgica. Consta en el expediente la siguiente documentación: poder general para pleitos otorgado por el interesado y sentencia de 5 de diciembre de 1986 dictada por la Sala 15ª del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas por la que se autoriza el divorcio del matrimonio celebrado en L. (V. P. España) el 31 de enero de 1962 entre J-J. y Mª de la E.

2.- La encargada del registro dictó providencia el 28 de octubre de 2010 denegando la práctica de la inscripción de divorcio solicitada en la principal de matrimonio por falta de reconocimiento previo de la sentencia mediante el correspondiente exequátur.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, tratándose de países miembros de la Unión Europea, debe reconocerse en España, sin necesidad de exequátur y por aplicación de la vigente normativa comunitaria, la validez de la sentencia dictada en Bélgica.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación porque la sentencia cuya inscripción se pretende fue dictada con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento del Consejo de la Unión Europea nº 2201/03, de 27 de noviembre, vigente desde el 1 de marzo de 2005, que establece expresamente que lo dispuesto en el mismo solo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la citada norma. La encargada del Registro

Civil de Vigo se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 107 del Código Civil; 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 38 y 76 de la Ley del Registro Civil; 83, 145, 153 y 265 del Reglamento del Registro Civil; la consulta de la DGRN de 15 de marzo de 2012 y las resoluciones de 7 de marzo de 1997, 19-2ª de octubre de 1998, 26-2ª de noviembre de 1999, 9-1ª de febrero de 2000 y 27-2ª de junio de 2002.

II.- El interesado pretende inscribir al margen de la principal de matrimonio que consta en el Registro Civil español una sentencia de divorcio dictada por un tribunal de Bruselas en 1986. La encargada del registro denegó dicha inscripción mientras no conste el correspondiente exequátur.

III.- La inscripción de una sentencia extranjera de divorcio requiere para su inscripción en España que haya sido homologada judicialmente a través del procedimiento de exequátur (cfr. arts. 955 LEC, 83 y 265 RRC). Este trámite es necesario, por razón del principio de concordancia y exactitud registral, para las sentencias extranjeras que afecten a ciudadanos españoles o a matrimonios previamente inscritos en el Registro Civil español y en atención a estas circunstancias la providencia apelada denegó la inscripción solicitada. Es cierto que el Reglamento CE 2201/2003, de 27 de noviembre, en vigor desde el 1 de marzo de 2005, prevé un sistema sencillo de reconocimiento y exequátur de resoluciones judiciales que declaren el divorcio, separación o nulidad del matrimonio pero solo es aplicable, según dispone su artículo 64, a las resoluciones dictadas después de la entrada en vigor de dicha norma y la sentencia que aquí se pretende inscribir fue emitida en 1986.

IV.- No obstante, cabe recordar que lo que sí está expresamente establecido por la normativa española vigente es la posibilidad de anotar, a petición del ministerio fiscal o de cualquier interesado, "la sentencia o resolución extranjera que afecte también al estado civil, en tanto no se obtenga el exequátur" (art. 38.4º LRC) y así lo reitera el artículo 153 RRC. Aunque esta anotación, como todas las demás, tiene un valor simplemente informativo y en ningún caso constituye la prueba que proporciona la inscripción, lo que de modo destacado debe hacerse constar en el asiento y en sus certificaciones (arts. 38 LRC y 145 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vigo.

VIII.4.4.- Otras cuestiones

Resolución de 3 de enero de 2014 (99ª)

VIII.4.4- Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 23 de abril de 2009, Don J-W. y Doña S-C. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, A-N. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 5 de mayo de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 19 de enero de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 12 de noviembre de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 25 de noviembre de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 23 de febrero de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres de la menor interesada, nacida en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 5 de mayo de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano la menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 23 de febrero de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple

presunción que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 25 de noviembre de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (103ª)

VIII.4.4- Procedimiento y otras cuestiones.

No constando claramente el desistimiento y habiendo realizado la promotora actos que acreditan su voluntad de no desistir de la pretensión, continua la tramitación del expediente.

En las actuaciones sobre declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora, contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Valladolid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Valladolid el 17 de septiembre de 2007, la ciudadana boliviana Doña M. solicitó que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, D. nacido en V. el ... de ... de 2007, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil.

2.- Con fecha 27 de noviembre de 2007, se requiere a la promotora a fin de que presente certificado o documento acreditativo de su segundo apellido, para poner un segundo apellido al menor, manifestando la interesada que lo aportaría a la mayor brevedad posible. Constando que, el 27 de marzo de 2008, aporta su certificado de nacimiento sin legalizar.

3.- El 20 de mayo de 2008, la promotora comparece ante el Registro Civil de Valladolid solicitando que se desglose la documentación aportada, ya que "solicitará otra de fecha actual en el Consulado, a fin de poder iniciar de nuevo el trámite", informándosele en ese

acto que deberá presentar su certificado de nacimiento, debidamente legalizado, en el que se refleje el reconocimiento efectuado por su padre. Como consecuencia de la anterior comparecencia, por providencia de la misma fecha, el Encargado del Registro Civil procede al archivo del expediente.

4.- Posteriormente, al interesarse la promotora por el expediente de su hijo en el año 2010, la misma tiene conocimiento de que se ha producido el archivo de las actuaciones, interponiendo recurso de reposición contra la providencia anteriormente mencionada, solicitando que se deje sin efecto el acuerdo indicado y se continúe con el procedimiento; aporta junto con el escrito de recurso su certificado de nacimiento y testimonio de reconocimiento de su padre, ambos debidamente legalizados.

5.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil de Valladolid dicta auto el 2 de junio de 2010 desestimando el recurso interpuesto por entender que la interesada desistió del expediente.

6.- Notificado el auto a la promotora, interpone recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud y alegando que en ningún momento desistió del expediente, sino que su intención era, una vez tuviera la documentación necesaria debidamente legalizada, presentarla, es decir, que cumpliría con el trámite requerido.

7.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso y el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos el artículo 353 del Reglamento del Registro Civil.

II.- La promotora, madre del menor interesado, nacido en V. el ... de ... de 2007, solicitó que se declarara su nacionalidad española con valor de simple presunción por aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. Dicho procedimiento fue archivado mediante providencia del Encargado del Registro Civil de Valladolid, por haber manifestado la promotora en comparecencia ante ese Encargado que: "solicitaba el desglose de la documentación aportada, ya que solicitará otra de fecha actual en el Consulado para poder iniciar de nuevo el trámite". Contra dicha providencia se presentó recurso de reposición junto con el cuál aporta la documentación requerida inicialmente; que fue desestimado por auto de fecha 2 de junio de 2010, objeto del presente recurso.

III.- Conforme al artículo 353 del Reglamento del Registro Civil "mientras no recaiga resolución definitiva de un expediente o recurso, los promotores o partes pueden desistir de sus pretensiones por escrito u oralmente mediante comparecencia debidamente diligenciada. El desistimiento de una parte será comunicado a las demás y al Ministerio Fiscal, quienes podrán instar la continuación del expediente dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación".

En el presente caso, en la comparecencia de fecha 20 de mayo de 2008, la interesada solicita copia del expediente para "iniciar de nuevo el trámite"; no obstante, la propia promotora en el escrito de recurso manifiesta que en ningún momento fue su intención desistir del expediente, sino que se refería a continuar con la tramitación mediante la aportación de la documentación requerida y que, de hecho, aporta junto con el escrito de recurso de reposición. Por lo tanto, hay que reconocer que la voluntad de desistir de la pretensión no resulta completamente acreditada, pues la promotora posteriormente realizó actividades dirigidas a continuar con la tramitación, habida cuenta que, si bien, no consta en el expediente notificación de la providencia que declara el archivo, la voluntad de desistir habría quedado desacreditada por los escritos de recurso posteriormente presentados, procediendo considerar que no

se ha producido el desistimiento y que, por economía procesal, se debe continuar con la tramitación del expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: estimar el recurso, revocar el acuerdo apelado y retrotraer las actuaciones para que se continúe con el procedimiento y se dicte auto sobre el fondo del asunto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado de Registro Civil de Valladolid.

Resolución de 3 de enero de 2014 (108ª)

VIII.4.4-Otras cuestiones.

Procede retrotraer las actuaciones para que se continúe con la tramitación del expediente, teniendo en cuenta la documentación aportada por la promotora en trámite de recurso, y dictando auto sobre el fondo del asunto.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil de Leganés (Madrid).

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 15 de junio de 2010 en el Registro Civil de Leganés, la ciudadana colombiana Doña S-M. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil, para su hijo menor de edad, R-T. nacido el ... de ... de 2010 en L. Aportaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor; certificado del Consulado General de Colombia en Madrid sobre la legislación relativa a la nacionalidad y la no inscripción consular del menor; certificado de empadronamiento en el que aparece la promotora; fotocopias del NIE y pasaporte de la madre.

2.- Una vez ratificada la promotora en su solicitud, previo informe desfavorable del Ministerio Fiscal que se opone por no haberse aportado certificado de empadronamiento del menor interesado en el territorio español, siendo éste un requisito imprescindible para la declaración de la nacionalidad española; el Encargado del Registro Civil de Leganés dicta auto de fecha 12 de noviembre de 2010 denegando la solicitud, con idéntica fundamentación a la señalada por el Ministerio Fiscal.

3.- Notificado a la promotora, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que por error en el certificado de empadronamiento que aportó inicialmente no constaba su hijo, remitiendo junto con el escrito de recurso nuevo certificado de empadronamiento.

4.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la estimación del mismo y el Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 227, 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil.

II.- La promotora solicitó que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, nacido en España en el año 2010. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil). El Encargado del Registro Civil dictó auto denegatorio por no obrar en el expediente certificado de empadronamiento del menor interesado en territorio español, por ser éste un requisito imprescindible para la declaración de la nacionalidad; siendo ese acuerdo el objeto del presente recurso.

III.- Dispone el artículo 227 del Reglamento del Registro Civil, sobre declaraciones de voluntad relativas a la nacionalidad, que “si al presentarse las declaraciones a que se refiere el artículo anterior no apareciesen acreditados los requisitos exigidos, el declarante, sin perjuicio de los recursos oportunos, estará obligado a completar la prueba en el plazo prudencial que le señale el Encargado”. En el presente caso, pese a que la promotora aportó junto con la solicitud certificado de empadronamiento en el que no constaba el menor interesado, no se le requirió por parte del Registro Civil para subsanar ese error o aportara un certificado nuevo en el que apareciera su hijo, sino que directamente se dictó auto denegatorio de la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por el mero hecho de la falta de este documento, que, por otra parte, actualmente obra en el expediente, ya que se aportó por la Sra. F. en trámite de recurso. Por lo que, procedería continuar con la tramitación del expediente ya que el documento que motivó la denegación de la solicitud ha sido aportado por la promotora en trámite de recurso.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que, teniendo en cuenta la documentación aportada por la promotora en trámite de recurso, se continúe con la tramitación del expediente por el Registro Civil de Leganés y se dicte auto en el sentido que proceda.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Leganés (Madrid).

Resolución de 3 de enero de 2014 (112ª)

VIII.4.4-Nueva solicitud de inscripción de matrimonio.

1º.- Las decisiones del Encargado del Registro son recurribles en vía gubernativa sin que quepa ulterior recurso, a salvo, cuando corresponda, la vía judicial ordinaria.

2º.- En los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

3º.-Además se aprecia en el expediente que hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto del Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central el día 14 de enero de 2010 Don G-J. nacido en P de V. (V) el 30 de junio de 1945 y de nacionalidad española, iniciaba expediente en solicitud de inscripción de matrimonio civil celebrado con fecha 14 de diciembre de 2006, según la hoja declaratoria de datos y el día 4 de diciembre del mismo año según el acta local, con Doña D. nacida en la República Dominicana el 11 de agosto de 1977 y de nacionalidad dominicana. Acompañaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos, acta inextensa de matrimonio expedida por el registro local, del promotor, documento nacional de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio anterior, de fecha 16 de noviembre de 1975, certificado de defunción del cónyuge anterior con fecha 31 de mayo de 2001 y volante de empadronamiento, y de la interesada pasaporte y certificado de empadronamiento a fecha 15 de julio de 2009 en el mismo domicilio del promotor.

2.-Consta en el expediente que con fecha 29 de enero de 2010 el promotor solicito que se diera de baja en su domicilio a la Sra. F. Con fecha 19 de mayo de 2010 tiene entrada en el Registro Civil Central escrito del promotor, fechado en febrero, en el que manifiesta que desde que la interesada llegó a España no han convivido sino que ella se trasladó a M. facilitando la dirección de ella en dicha localidad, y solicitando que no se inscriba el matrimonio. Con fecha 28 de diciembre de 2010 el Registro Civil requiere, a través del Registro Civil competente por razón del domicilio, de los promotores la aportación de copia de todos los pasaportes que posean con independencia de su caducidad.

3.-Con fecha 30 de mayo de 2011 los interesados no consta que presentaran la documentación requerida pero sí que fueron oído en audiencia reservada, declarando ambos que ya se había intentado la inscripción del matrimonio en el Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana) en el año 2007 y que tras venir a residir a España lo solicitaron ante el Registro Civil Central. Un mes y medio después, con fecha 15 de julio de 2011, se presenta nuevo escrito del promotor manifestado el desistimiento por su parte de la inscripción del matrimonio y que ésta se deniegue, añadiendo que cree que la interesada ha utilizado el matrimonio para obtener la residencia en España.

4.-El 21 de septiembre de 2011 el Registro Civil Central solicitó al Consulado información sobre el expediente anterior, cuya copia le fue remitida y tuvo entrada el día 25 de noviembre siguiente. Con fecha 16 de enero de 2012 el Magistrado Juez Encargado denegó la inscripción solicitada, visto que los interesados ya habían promovido ante el Registro Civil Consular la inscripción de su matrimonio, sin que fuera aceptada mediante auto denegatorio de fecha 8 de noviembre de 2007, que no fue recurrido ante este Dirección General de los Registros y del Notariado.

5.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, éste interpuso mediante representante recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que si había hechos nuevos que tener en cuenta, fundamentalmente que el matrimonio ya residía en España, que un tribunal dominicano había refrendado el acuerdo de los interesados otorgando al Sr. J. la guarda de los 2 hijos menores de la interesada y reiterando su solicitud de inscripción. De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la confirmación de la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos y el Encargado se reafirmó en la resolución recurrida y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 27, 29 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 238, 245, 246, 247, 341 y siguientes, 355 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre

otras, de 14-4^a de noviembre de 2005, 6-2^a de abril, 24-2^a de mayo, 12-3^a y 16-3^a de junio, 12-3^a y 27-1^a de diciembre de 2006; 23-8^a de marzo de 2009, 15-3^a de junio de 2010 y 27-9^a de enero de 2011.

II.- En el caso actual se solicita por el promotor, de nacionalidad española la inscripción de matrimonio celebrado en la República Dominicana con una ciudadana dominicana, mediante comparecencia en el Registro Civil Central que, una vez practicadas las diligencias oportunas, tiene conocimiento de que con los mismos interesados se tramitó expediente en el Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo con idéntica finalidad. A la vista la documentación aportada, el Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central dictó resolución disponiendo denegar la solicitud con el razonamiento jurídico de que ya se ha tramitado el mismo expediente gubernativo por los mismos hechos y entre las mismas personas. Este auto de fecha 16 de enero de 2012 constituye el objeto del presente recurso.

III.- En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión. En el caso presente no se justifica la concurrencia de nuevos hechos que no hubieran podido tenerse en cuenta al tomar la decisión (cfr. art. 358 RRC), sino que los promotores inician un nuevo expediente con idéntica finalidad en otro Registro Civil aportando como hecho nuevo la convivencia del matrimonio en España desde el año 2009, documentado con las certificaciones de empadronamiento, sin embargo también constan en el expediente dos escritos del propio promotor manifestando su voluntad de desistir de la inscripción y solicitando que no se produzca la misma ya que no ha existido convivencia desde que la interesada llegó a España, documento del promotor solicitando la baja de ella en el padrón municipal como residente en su domicilio, e incluso consta que en la comparecencia del promotor ante el Registro Civil de su domicilio para ser notificado del auto denegatorio, manifiesta que la Sra. F. reside en M. facilitando una dirección. Con esta manera de proceder los solicitantes pretenden que vuelva a considerarse su petición por la vía de un segundo expediente, soslayando los hechos que resultaron comprobados y motivaron la denegación del primero.

IV.- Debiendo significarse además que del nuevo trámite de audiencia reservada practicada a los interesados 4 años después del expediente del Registro Civil Consular resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución, ambos desconocen la fecha del matrimonio, 4 de diciembre de 2006 según el acta del registro local, ya que la interesada dice que fue el día 6 del mismo mes y el promotor que fue el 18 de julio del mismo año. También difieren en cuando se conocieron, según la interesada en el verano del año 2004 y decidieron casarse a los 6 o 7 meses, según el promotor se conocieron el mismo año de la boda, 2006, y decidieron casarse a los 3 o 4 meses. Ambos manifiestan que convivieron antes del matrimonio y los dos desconocen y difieren en datos familiares básicos, número de hermanos, nombre de los mismos, etc., todo ello cuando han trascurrido 5 años de matrimonio que, según lo declarado en la entrevista sigue vigente, aunque no según lo manifestado por escrito por el promotor. Todo ello evidencia que el matrimonio examinado en dos ocasiones no tenía la finalidad propia de la institución, viciando por tanto el consentimiento prestado y haciendo nulo el acto consecuencia del mismo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (16ª)

VIII.4.4.-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 20 de mayo de 2009, Doña E. solicitó que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hija, Y-B. nacida en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 1 de junio de 2009 estimando la pretensión de la interesada, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 12 de marzo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento de la interesada estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 22 de marzo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española de la menor interesada, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a la promotora el 12 de julio de 2010 y se le informa de que dispone de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que considere convenientes. Presenta las mismas el 26 de julio de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por la interesada. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 22 de marzo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción

y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- La promotora, madre de la menor interesada, nacida en M. el... de... de 2009, obtuvo la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 1 de junio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano la menor había recibido la nacionalidad boliviana de su madre. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 22 de marzo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción que a la menor interesada no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, la promotora presentó las mismas el 26 de julio de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a la promotora, dándole trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que se señalara que se trataba de un recurso, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por la promotora. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 10 de Enero de 2014 (71ª)

VIII.4.4- Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil de Madrid el 16 de junio de 2009, Don J-R y Doña L. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, S. nacido en M. el ... de ... de 2009, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Madrid dictó auto de fecha 19 de junio de 2009 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 36.2 de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia y el artículo 17.1.c) del CC., procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento.

2.- El 6 de mayo de 2010, el Ministerio Fiscal interesa el inicio del procedimiento de cancelación de la anotación practicada, ya que en el momento del nacimiento del interesado estaba en vigor, desde el 7 de febrero de 2009, la nueva constitución Política de Bolivia que, según su artículo 141, establecía que “son bolivianos y bolivianas por nacimiento [...] las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”, por lo que no procede la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no resultar de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia de origen. El Encargado del Registro Civil de Madrid, por providencia de fecha 17 de mayo de 2010, promueve expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad española del menor interesado, con la finalidad de dejar sin efecto la inscripción marginal realizada. Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 18 de noviembre de 2010 y se les informa de que disponen de un plazo de quince días para realizar las alegaciones que consideren convenientes. Presentan las mismas el 9 de diciembre de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 17 de mayo de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el... de... de 2009, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Madrid de 19 de junio de 2009 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico boliviano el menor había recibido la nacionalidad boliviana de sus padres. El Encargado del Registro Civil de Madrid dictó providencia el 17 de mayo de 2010 acordando incoar el expediente registral para declarar con valor de simple presunción

que al menor interesado no le corresponde la nacionalidad española. Abierto el trámite de alegaciones, los promotores presentaron las mismas el 9 de diciembre de 2010.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, dándoles trámite de alegaciones, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al producirse las mismas, tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro han entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente y además, la providencia notificada no daba pie de recurso alguno, tan solo trámite de alegaciones.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (14ª)

VIII.4.4-Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Mediante escrito remitido al Registro Civil Consular de Bogotá el 2 de marzo de 2010, Don J-G. y Doña M. solicitaron que se declarara con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo, J-N. nacido en M. el ... de ... de 2001, en base al artículo 17.1.c) del Código Civil. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto de fecha 8 de septiembre de 2010 estimando la pretensión de los interesados, por entender que resultaba de aplicación el artículo 17.1.c) del CC.

2.- Trasladas las actuaciones al Registro Civil de Madrid, el 15 de diciembre de 2010, el Encargado del Registro Civil dicta providencia por la que se acuerda practicar el asiento marginal de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española en el acta de nacimiento del menor interesado e incoar el oportuno expediente para la cancelación

de la anotación referida, por residir el menor en Colombia y de acuerdo con el artículo 96.1.b) de la Constitución de la República de Colombia, podría haber adquirido la nacionalidad colombiana. La providencia se notifica al Ministerio Fiscal, que interesa que se acredite la fecha del traslado del domicilio del menor a Colombia y la documentación con la que viajó fuera del territorio español.

3.- Se procede a la notificación del expediente a los promotores el 16 de mayo de 2011, presentando éstos recurso solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo, en el que expresamente se manifiesta que el menor viajó a Colombia con pasaporte colombiano en octubre de 2001.

4.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa la confirmación de la Providencia que entiende recurrida por el escrito presentado por los interesados. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 15 de diciembre de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- Los promotores, padres del menor interesado, nacido en M. el ... de ... de 2001, obtuvieron la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá de 8 de septiembre de 2010 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento del menor, por providencia de fecha 15 de diciembre de 2010 el Encargado del Registro Civil de Madrid instó la cancelación de la misma debido a que conforme al ordenamiento jurídico colombiano el menor había recibido la nacionalidad colombiana al haber trasladado su residencia a Colombia. Notificada la providencia a los promotores, presentaron recurso contra la misma.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, y tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil se debería haber dado trámite de alegaciones a los interesados. Los promotores presentaron un escrito el 14 de junio de 2011, entendiendo tanto el Ministerio Fiscal como el Encargado del Registro que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, y sin perjuicio de que los promotores indicaran que se trataba de un recurso de alzada, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del

menor interesado no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (19ª)

VIII.4.4-Recurso contra providencia no comprendida en el art. 355 RRC.

No es admisible el recurso entablado contra una resolución que interesa la aportación de datos adicionales para localizar una inscripción de nacimiento con el fin de hacer constar en ella la existencia de un poder de representación por no tratarse de una resolución recurrible directamente ante la Dirección General de los Registros y del Notariado según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil.

En las actuaciones sobre solicitud de constancia registral de la existencia de poder de representación remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución del encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

1.- Por medio de escrito dirigido al Registro Civil Único de Madrid el 27 de septiembre de 2010, Don R. notario de la localidad de T. (T), comunicaba, con arreglo a lo previsto en el artículo 46 ter. LRC, la existencia de un poder notarial otorgado por Doña P. nacida en M. el 18 de octubre de 1921. Al escrito se adjuntaba copia simple del poder otorgado.

2.- El encargado del registro devolvió la documentación a la notaría de procedencia el 5 de octubre de 2010 requiriendo la aportación de los datos registrales correspondientes al tomo, página y distrito de nacimiento de la poderdante para poder localizar su inscripción de nacimiento.

3.- Recibido el requerimiento anterior, el notario promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por entender que se había producido una calificación negativa por parte del registro y alegando que no es necesario que los interesados aporten los datos registrales solicitados, los cuales, a juicio del recurrente, pueden ser obtenidos por el registro correspondiente por sus propios medios.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que consideró que no se había efectuado calificación alguna, sino que únicamente se había requerido la aportación de los datos registrales precisos para facilitar la búsqueda de la inscripción de nacimiento de la interesada y proceder así a la anotación de la escritura de apoderamiento, dado que en la fecha de nacimiento de aquella existían en M. dieciocho registros civiles y la digitalización actual solo alcanza a los hechos posteriores a 1950. El encargado del Registro Civil Único de Madrid emitió informe en el mismo sentido que el elaborado por el ministerio fiscal y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 27 y 29 de la Ley del Registro Civil (LRC); 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 1-3ª de diciembre de 2008, 26-2ª de diciembre de 2012 y 19-14ª de abril de 2013.

II.- Se plantea en este expediente recurso contra el requerimiento efectuado por el encargado del registro para la aportación de datos registrales complementarios con el fin de localizar más fácilmente una inscripción de nacimiento y proceder a la anotación de una escritura de apoderamiento. El notario que comunicó la existencia de dicha escritura entendió que se había realizado una calificación negativa por parte del encargado e interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

III.- Dispone el artículo 355, párrafo primero, del Reglamento del Registro Civil que “las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente son recurribles ante la Dirección General durante quince días hábiles, a partir de la notificación”. Pues bien, la resolución recurrida no se encuadra en ninguna de las que el referido artículo determina como recurribles. Tampoco es posible el recurso establecido en el artículo 29 LRC, porque el encargado aún no había procedido a calificar el hecho comunicado en virtud de lo establecido en el art. 46ter. LRC. Debe pues entenderse que el recurso interpuesto se corresponde con la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 356 RRC, conforme al cual “Contra toda decisión, sea o no de oficio, no comprendida en el artículo anterior cabe recurso de reposición” como previo al recurso gubernativo ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, recurso de reposición que ha de ser resuelto, en este caso, por el propio encargado que efectuó el requerimiento de datos complementarios, dada la aplicabilidad supletoria en esta materia de las normas propias de la jurisdicción voluntaria a falta de norma específica al respecto en la legislación del Registro Civil (art. 16 RRC), debiendo formularse el recurso en el plazo de 5 días (cfr. art. 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que el recurso interpuesto, por serlo de reposición, sea resuelto por el encargado del registro civil que dictó la resolución recurrida.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (44ª)

VIII.4.4- Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto por el Encargado del Registro Civil que ponga fin al procedimiento.

En las actuaciones sobre cancelación de inscripción marginal de declaración española con valor de simple presunción, remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora, contra la providencia dictada por el Encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1.- Seguido expediente ante el Registro Civil de Majadahonda (Madrid), Doña R-L. solicitó que se declarara la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija, P-S.

nacida en M. el ... de ... de 2003, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Por auto del Encargado del Registro Civil de Majadahonda de fecha 19 de julio de 2004 se estimó la pretensión de la promotora, procediéndose a extender la anotación correspondiente en la inscripción de nacimiento el 19 de noviembre de 2004. Posteriormente, se inscribe el reconocimiento de filiación paterna realizado por Don H.H. ante el Encargado del Registro Civil de Madrid el 27 de septiembre de 2007.

2.- Por providencia de fecha 30 de julio de 2010, el Encargado del Registro Civil de Madrid inicia expediente de cancelación de la anotación de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento de la menor interesada, visto el contenido de la documental procedente del Registro Civil Consular de Quito, según el cual ha quedado acreditada la residencia del Sr. C. en Ecuador en el momento del nacimiento de su hija, por lo que, de acuerdo con la legislación ecuatoriana en materia de nacionalidad, a la misma le correspondía la nacionalidad ecuatoriana de origen, no existiendo riesgo de apatridia. Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, se procede a la notificación del expediente a los promotores, presentando la Sra. Rivera escrito el 17 de diciembre de 2010, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de la menor.

3.- El Ministerio Fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que la menor no tiene la nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil. El Encargado del Registro Civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 30 de julio de 2010 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- La promotora, madre de la menor interesada, nacida en M. el... de... de 2003, obtuvo la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción mediante auto del Encargado del Registro Civil de Majadahonda de 19 de julio de 2004 por aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil. Una vez practicada la anotación marginal pertinente en la inscripción del nacimiento de la menor, el Encargado del Registro Civil de Madrid por providencia de 30 de julio de 2010 acordó incoar expediente registral para la cancelación de la misma, debido a que conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano, la menor habría recibido la nacionalidad ecuatoriana de su padre. Abierto el trámite de alegaciones, la Sra. R. presentó el 17 de diciembre de 2010 escrito solicitando que se mantuviera la nacionalidad española de su hija.

III.- En el presente caso, se ha producido la notificación de inicio del expediente de cancelación de la anotación señalada a los promotores, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Registro Civil; sin embargo, al remitir escrito la interesada oponiéndose al expediente, el Encargado del Registro ha entendido que se trataba de un recurso contra la providencia de inicio notificada. Dicho lo anterior, esta Dirección General entiende que el escrito presentado correspondería a las alegaciones realizadas por los promotores. Por otra parte, según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, son recurribles ante la Dirección General de

los Registros y del Notariado las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente. En este sentido, la providencia que inicia el expediente para la cancelación de la inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor interesada no resultaría recurrible ante esta Dirección General, ya que, en primer lugar, no se trata de una resolución que inadmita a trámite la solicitud ni pone fin al expediente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el Encargado del Registro Civil, en el sentido que proceda.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 27 de Enero de 2014 (45ª)

VIII.4.4- Procedimiento y otras cuestiones.

Se retrotraen las actuaciones para que sean notificados los interesados del expediente iniciado por el Encargado del Registro Civil.

En las actuaciones sobre cancelación de asiento de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Pamplona.

HECHOS

1.- Con fecha 15 de enero de 2007 se procede a la inscripción en el Registro Civil de Pamplona de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor A-A. nacido el ... de ... de 2006 en P. nacionalidad solicitada por su madre, la ciudadana ecuatoriana Doña H-E. en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil y tramitándose el expediente correspondiente en el Registro Civil de Pamplona. Posteriormente, el 2 de marzo de 2009, se inscribe el reconocimiento paterno de filiación, realizado por el ciudadano ecuatoriano Don K-V. ante el Encargado del Registro Civil con fecha 27 de febrero del mismo año.

2.- Con fecha 25 de junio de 2010 el Consulado General de España en Quito remite Oficio en el que se informa que, habiéndose realizado las comprobaciones oportunas, se ha concluido que el padre del menor, en el momento de su nacimiento del mismo, se encontraba residiendo en Ecuador, por lo que no le correspondería al interesado la nacionalidad española en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil.

3.- Por providencia de 7 de septiembre de 2010, el Encargado del Registro Civil de Pamplona inicia expediente gubernativo para que se proceda a la cancelación de la anotación de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción que consta en la inscripción de nacimiento del interesado.

4.- Previo informe favorable del Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil, una vez visto el contenido de lo actuado, dictó auto el 13 de septiembre de 2010 por el que ordena la total cancelación del asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2º de la Ley del Registro Civil y en relación con los artículos 163 y siguientes de su Reglamento, por corresponderle al

menor la nacionalidad ecuatoriana de su padre según la legislación ecuatoriana al respecto, al haber resultado acreditado en el expediente que el padre del interesado, en el momento de su nacimiento en España tenía su residencia en Ecuador.

5.- Notificada la resolución a la promotora, ésta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando que se mantuviera la nacionalidad española de su hijo.

6.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa su desestimación, el Encargado del Registro Civil se ratifica en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 26, 95, 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2ª de Septiembre de 2003, 16-3ª de septiembre de 2005, 27-4ª de diciembre de 2006, 3-5ª de enero de 2007 y 29-2ª de febrero de 2008; 9-5ª y 12-4ª de Enero, 1-3ª de Abril y 16-5ª de Junio de 2009; 1-2ª de Febrero de 2010.

II.- En el presente expediente el Encargado del Registro Civil de Pamplona inicia expediente para que se cancelara la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor nacido en esa localidad el... de... de 2006, hijo de padres ecuatorianos, por entender que le correspondía la nacionalidad ecuatoriana del padre *iure sanguinis*, al residir éste, en el momento del nacimiento de su hijo, en Ecuador. Con fecha 15 de enero de 2007 se inscribió la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción marginalmente a la inscripción de su nacimiento. El Encargado del Registro Civil de Pamplona dictó auto el 13 de septiembre de 2010 acordando cancelar la anotación de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor interesado. Dicho Auto constituye el objeto del presente recurso.

III.- En primer lugar, el expediente iniciado debería contar con la audiencia de los padres del menor. Sin embargo, no ha sido así, pues una vez iniciado el expediente, el Encargado del Registro Civil de Pamplona lo comunicó únicamente al Ministerio Fiscal, tras lo cual dictó resolución, sin notificar la incoación del procedimiento a los interesados. Si bien mientras subsista el interés público de concordancia del Registro Civil con la realidad extrarregistral (artículos 24 y 26 de la Ley del Registro Civil y 94 del Reglamento) siempre es posible iniciar un nuevo expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, conforme al artículo 147 del Reglamento, en todo caso deberá ser con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 Reglamento del Registro Civil. Por lo tanto, procede retrotraer las actuaciones para que los representantes del menor interesado sean notificados y realicen cuantas alegaciones estimen convenientes, y se prosiga con el procedimiento, resolviendo el Encargado del Registro Civil en el sentido que proceda.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: dejar sin efecto la resolución recurrida y retrotraer las actuaciones para que tenga lugar la notificación a interesados y la apertura de un plazo de alegaciones.

Madrid, 27 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández".

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Pamplona.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (43ª)

VIII.4.4-Recurso en actuaciones sobre anotación en inscripción de nacimiento de una menor extranjera del apellido de casada de la madre.

No es admisible el interpuesto contra una providencia de trámite por la que se interesa la aportación de pasaporte de la madre en el que conste el apellido adquirido por matrimonio porque, conforme al artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, tal acuerdo no es resolución recurrible ante la Dirección General.

En las actuaciones sobre anotación en inscripción de nacimiento del apellido de casada de la madre remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra providencia dictada por la Juez Encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

1.- En fecha 3 de febrero de 2011 el Sr. M. de nacionalidad rumana, mayor de edad y domiciliado en Z. comparece en el Registro Civil de dicha población al objeto de instar que en la inscripción de nacimiento de su hija A-I. nacida en Z. el ... de ... de 2008, se anote que con fecha 26 de febrero de 2010 los padres de la inscrita contrajeron matrimonio en Rumania y que, conforme a su ley personal, la madre, Mª-C. R. ha pasado a ostentar el apellido P. A fin de acreditar lo manifestado acompaña certificación literal de la inscripción de nacimiento de la menor, certificado rumano de matrimonio que expresa que la esposa toma el apellido P. documento rumano de identidad de Mª-C. P. y certificado de registro de esta como ciudadana de la Unión Europea.

2.- Requerido el promotor, mediante providencia de la Juez Encargada de 4 de febrero de 2011, para que aporte pasaporte de su cónyuge en el que conste el nuevo apellido, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que con la documentación presentada ha quedado suficientemente acreditado el nuevo apellido de su mujer, que como ciudadanos de la Unión Europea no necesitan pasaporte para entrar y salir de España, que por eso, y porque les supondría viajar a su país con el consiguiente gasto, no lo renuevan y que la denegación de su solicitud por la Juez Encargada supone un perjuicio grave a la hora de identificar a la menor como hija de su madre.

3.- De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que manifestó su conformidad con que, al amparo del artículo 38 de la Ley del Registro Civil, se proceda a la anotación con valor simplemente informativo de la nueva circunstancia alegada, y seguidamente la Juez Encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 1-3ª de diciembre de 2008, 30-6ª de julio de 2009, 29-20ª de octubre y 26-2ª de diciembre de 2012 y 19-14ª de abril de 2013.

II.- Se solicita por el promotor, de nacionalidad rumana, que en la inscripción de nacimiento de su hija A-I. nacida en Z. el ... de de 2008, se anote que, por razón de matrimonio y conforme a su ley personal, la madre de la inscrita ha pasado a ostentar el apellido P. La Juez Encargada acordó requerirle a fin de que aporte pasaporte de su cónyuge en el que conste el nuevo apellido mediante providencia de 4 de febrero de 2011 que constituye el objeto del presente recurso.

III.- La regulación propia del Registro Civil se contiene en la Ley de 8 de junio de 1957 y en su Reglamento, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, cuyo artículo 16 dispone que en las actuaciones y expedientes sujetos a dichas normas son de aplicación supletoria las de jurisdicción voluntaria (cfr. art. 16 RRC). Esta normativa registral específica prevé, de un lado, un recurso contra la calificación de los hechos inscribibles efectuada por el encargado del Registro con un plazo de interposición de treinta días (cfr. art. 29 LRC) y, de otro, un recurso contra las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente, a entablar en el plazo de quince días hábiles (cfr. art. 355 RRC). En este caso no ha lugar a ninguno de los recursos mencionados -ni hay un hecho inscribible sujeto a calificación ni se ha dictado resolución no admitiendo el escrito inicial o poniendo término a las actuaciones- y, por tanto, es obligado entender que el recurrente se acoge a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 356 RRC, conforme al cual "Contra toda decisión, sea o no de oficio, no comprendida en el artículo anterior cabe recurso de reposición" que, por aplicación supletoria del artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de formularse, como se ha hecho en este caso, en el plazo de cinco días, y resolverse por el Encargado que dictó la providencia recurrida, contra cuyo acuerdo cabe el recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contemplado en el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: retrotraer las actuaciones a fin de que el recurso de reposición interpuesto sea resuelto por el Encargado del Registro Civil que dictó la providencia impugnada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resolución de 30 de Enero de 2014 (56ª)

VIII.4.4-Procedimiento.

No cabe iniciar un nuevo expediente cuando, no habiendo variado las circunstancias de base, existe otro anterior sobre los mismos hechos pendiente de resolución definitiva.

En el expediente sobre rectificación de apellidos en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la encargada del Registro Civil Central.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado el 18 de mayo de 2011 en el Registro Civil de Inca (Illes Balears), Don F-D., de nacionalidad española, y la Sra. K. de nacionalidad alemana, ambos con domicilio en la localidad balear de A. solicitaban la rectificación de la inscripción de nacimiento de su hijo F-N. P. T. para hacer constar que, tal como consta en la inscripción practicada en el lugar de nacimiento del menor, el único apellido que corresponde consignar al inscrito es la unión de los dos apellidos paternos, P-Y. Adjuntaba la siguiente documentación: inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central de F-N. P. T. pasaporte y certificado de nacimiento alemanes de F-N. P. Y. certificado familiar de empadronamiento, DNI del padre, pasaporte alemán de la madre y certificación de matrimonio de los promotores.

2.- Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para su resolución, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro denegó la rectificación solicitada por existir un expediente previo sobre los mismos hechos pendientes de resolución de recurso por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la petición de rectificación y, subsidiariamente, que se deje en suspenso la resolución hasta tanto recaiga la definitiva sobre el expediente anterior.

4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 27, 29 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 341 y siguientes, 355 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones 27-3ª de julio de 2009 y 15-4ª de marzo de 2010.

II.- Las presentes actuaciones se iniciaron el 18 de mayo de 2011, cuando todavía se encontraba pendiente de resolver en este centro un expediente anterior sobre los mismos hechos cuya resolución por parte del encargado del registro también había sido recurrida. No habiendo variado ninguna circunstancia respecto a la situación original, los promotores debieron esperar a la emisión de un pronunciamiento sobre el recurso presentado anteriormente.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

IX. PUBLICIDAD

IX.1.- Publicidad formal-acceso de los interesados al contenido del RC

IX.1.1.- Publicidad formal-expedición de certificaciones y consulta libros del registro

Resolución de 30 de Enero de 2014 (54ª)

IX.1.1-Publicidad formal.

Se confirma la denegación para acceder a la consulta directa de los libros del Registro Civil de Vilagarcia de Arousa desde finales del siglo XIX porque el examen directo de los libros es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada por razones preferentes del servicio y para preservar la publicidad restringida de determinados asientos.

En el expediente sobre consulta de libros del Registro Civil remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Vilagarcia de Arousa.

HECHOS

1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Vilagarcia de Arousa el 22 de noviembre de 2010, Don J-Mª. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba autorización para consultar los libros del registro desde finales del siglo XIX con motivo de un estudio académico que está realizando relacionado con la historia contemporánea del municipio.

2.- La encargada dictó auto el 16 de diciembre de 2010 denegando la pretensión porque el examen directo por los particulares de los libros del registro es una posibilidad excepcional limitada, por razones del servicio y del derecho a la intimidad personal y familiar, a la consulta de determinados asientos.

3.- El interesado interpuso recurso contra la resolución anterior alegando la necesidad académica de la consulta solicitada para la elaboración de la tesis doctoral que está realizando sobre el desarrollo urbano e industrial del núcleo en cuestión desde su constitución como ayuntamiento en 1833.

4.- Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, emitió informe interesando su desestimación. La encargada del Registro Civil de Vilagarcia de Arousa remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil (LRC); 17, 21, 22, 46, 47 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de enero de 1987 y las resoluciones de 8 de junio de 1995; 7 de enero de 1997; 10 de abril de 2002; 28 de marzo y 25-2ª de junio de 2003; 1-1ª de junio de 2004; 6-1ª de julio de 2005; 28-2ª de febrero de 2006; 25-2ª de septiembre de 2007 y 2-3ª de julio de 2008.

II.- El Registro Civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por esto, quienes tengan

interés en conocer los asientos tienen derecho, en principio, a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC), sin perjuicio, claro está, de los supuestos de publicidad restringida a que se refieren los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Civil. Ello significa, en principio, que el interesado en obtener una certificación o consultar un asiento del Registro Civil no tiene que acreditar el interés especial, porque este se le presume por el hecho de solicitarlo. Pero esta regla general, como recordó la Instrucción de este centro directivo de 9 de enero de 1987, no debe hacer olvidar, sin embargo, de un lado, que hay casos de publicidad restringida porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que el servicio público se resentiría si el particular, legitimado para obtener una certificación, pudiera a su capricho solicitar el número de certificaciones o consultas que juzgara oportuno. Por ello, la pretensión del recurrente, tal como ha sido formulada, no puede ser estimada en tanto que, como señalan tanto la encargada en la resolución recurrida como el fiscal en su informe posterior a la presentación del recurso, la consulta directa de los libros del registro es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada a la manifestación de determinados asientos, una vez localizados, pero que no puede extenderse al examen de cualquier libro a elección del consultante.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de Enero de 2014.

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil de Vilagarcía de Arousa.

IX.2.- Publicidad material-efectos de la Publicidad registral

IX.2.1.- Publicidad material

Resolución de 10 de Enero de 2014 (47ª)

IX.2.1-Publicidad material.

No procede la anotación en una inscripción de nacimiento de que la inscrita es conocida por unos apellidos distintos de los que figuran en dicha inscripción al no resultar acreditado el hecho que se pretende hacer constar.

En el expediente sobre anotación marginal en inscripción de nacimiento de los apellidos usados habitualmente remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

1.- Por medio de escrito presentado el 16 de septiembre de 2010 en el Registro Civil de Madrid, Doña M. M. L. mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba que se hiciera constar marginalmente en su inscripción de nacimiento que también es conocida con los apellidos Y. M. Adjuntaba la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento de la promotora, volante de empadronamiento, libro de familia y varios documentos (certificado de un centro educativo, una factura, cartilla del extinto Instituto Nacional de Previsión y correspondencia privada) que identifican a la interesada con los apellidos Y. M.

2.- Ratificada la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 4 de abril de 2010 denegando la solicitud por no considerar acreditado el uso habitual de los apellidos a los que se refiere la solicitud.

3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando que, si bien es cierto que en la actualidad utiliza sus apellidos legítimos, fue conocida como M. Y. M. hasta los veinticinco años, cuando, con motivo de su matrimonio, solicitó un certificado de nacimiento y descubrió la discordancia con los apellidos que figuran en su inscripción, dándose la circunstancia de que actualmente no se le reconoce su actividad laboral anterior a ese momento porque aparece identificada con apellidos distintos.

4.- Comunicada la interposición del recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Único de Madrid remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 38 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 137 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 15-4ª de junio y 23-1ª de diciembre de 2005 y 13-10ª de febrero de 2013.

II.- Solicita la interesada que se haga constar marginalmente en su inscripción de nacimiento que también es conocida por otros apellidos distintos de los que figuran en dicha inscripción. El encargado denegó la solicitud por no considerar acreditado el hecho cuya anotación se pretende.

III.- La posibilidad de hacer constar, como simple dato de hecho en la inscripción de nacimiento, la circunstancia de que la persona inscrita es conocida con unos apellidos distintos de los que figuran en la inscripción está prevista en el artículo 137, regla 1ª, RRC. Pero para practicar la marginal solicitada debe acreditarse debidamente el hecho que se pretende anotar y, a la vista de la documentación aportada, lo cierto es que no cabe tener por probado en esta instancia que la recurrente sea en efecto conocida con los apellidos cuya anotación pide y deberá intentar probar por otros medios que todos los documentos laborales a los que alude en su recurso corresponden a la misma persona.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de Enero de 2014

Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.

Sr. /a. Juez Encargado del Registro Civil Único de Madrid.

